

LAS OTRAS 'AMISTADES PELIGROSAS' DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA LA CÚSPIDE DEL PP

El empresario Gerardo Crespo reconoce a 'Público': "Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas, en el de Romay Beccaría y en el de Carlos Negreira, alcalde de A Coruña". Por su parte, el presidente gallego "dejó de cogerme el teléfono un mes después de que me lo hubiera pinchado la UDEF".

El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el Parlamento autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para que explique los diferentes supuestos de corrupción en los que está inmerso el PPdG. Y que, en muchos casos, implican directamente a amigos o personas cercanas al presidente gallego. Las amistades peligrosas de Feijóo. La mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa.

Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre de su amigo más peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado hace apenas un mes a seis años de cárcel y a pagar 21,5 millones de euros por lavar dinero de la droga. En el decorado de este proceso, celebrado en la Audiencia Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos, pertenecientes a la flotilla que la Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia.

Gerardo Crespo: "Fraga era una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años"

El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las aguas arosanas en 1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el chalet del narco. A bordo del Oratus, el hoy presidente gallego y posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional, disfrutó de la calma de las mareas ibicencas en 1997.

Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa, condenado a 11 años de cárcel por un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportaba en 2003. En aquellos años, Dorado ya había sido portada de los periódicos regionales por su detención en el curso de la Operación Nécora contra el narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la categoría de juez estrella. Y todo el mundo en Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado. Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo.

Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano. Ocupa podio destacado, entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas, apodado El conasegurador por su habilidad al abrir puertas de la administración para facilitar adjudicaciones públicas. Su ex jefe, Gerardo Crespo, lo confirma en conversación telefónica con Público. Crespo y su padre, además, también eran amigos de Feijóo. Y, antes, de Manuel Fraga: "Una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años".

Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de cursos falsos para autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su teléfono la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su facturación con la Xunta pasó de 1.900.000 euros en 2012 a 36.000 euros el año siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber cometido ningún fraude.

Crespo pagaba al conasegurador Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia bancaria. "Yo a Feijóo lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi Lucas lo escogí porque me parecía la persona adecuada. Si luego él se basaba [para conseguir contratos] en sus amistades, es algo que contaré con calma. Pero no es un problema mío", señala tras ser preguntado acerca de si la amistad de Lucas con Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones de la Xunta a su empresa Azetanet.

También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico cuando la investigación era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado: "Feijóo me dejó de coger el teléfono a primeros de febrero de 2012 [un mes después de pinchar la UDEF su teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de coger. Yo me di cuenta de que algo pasaba. Ellos se enteran de que estaba siendo investigado y se desmarcan".

"Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor" De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. "Yo soy consciente de que Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos,

mejor. Son frases de Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a mí, y que han desaparecido de las grabaciones del sumario”. Otra vez documentos desaparecidos. Según estas interesadas fuentes. Había ocurrido ya cuando desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta con el narcotraficante Dorado cuando fueron solicitados por la oposición.

–Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo –dice el periodista–. ¿Financió usted de alguna manera al PP?

–En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di.

–¿Lo hizo por transferencia?

–No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a José Manuel Romay Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de Bárcenas; Romay fue el gran valedor político de Núñez Feijóo, y actualmente preside el Consejo de Estado]. Y, por supuesto, también hice donaciones a Carlos Negreira [alcalde popular de A Coruña].

Feijóo negó conocer al que había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería tras destaparse su implicación en la Gürtel

Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos coincidentes. Si Gerardo está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno de los más rutilantes imputados de la Gürtel: Pablo Crespo era el número dos de Francisco Correa, para ser exactos. Y Pablo Crespo es otro de los grandes amigos peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su nombramiento como conselleiro de Obras Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de Manuel Fraga, Feijóo nombró a Pablo Crespo miembro del consejo de Puertos de Galicia.

Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó conocer a aquel a quien había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería.

En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a Carlos Negreira, actual alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de donaciones ilegales del otro Crespo, Gerardo.

Al banquero venezolano Escotet se le vendió Novacaixagalicia por mil millones tras ser rescatada por el Estado por 9.000

La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un banquero venezolano al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros cuando su rescate le había costado al Estado español 9.000. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) reconoció ese sustancioso décalage de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en sede parlamentaria haber sido uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo con el banquero venezolano. Escotet regresó a la actualidad internacional estos meses porque su nombre figura en la lista Falciani.

“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista gallega Marisol Soneira. “Este hombre tiene amigos muy peculiares”.

De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible cartel electoral en las generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las huestes de Mariano Rajoy. Feijóo tiene tiempo para meditarlo. No está obligado a convocar autonómicas hasta otoño de 2016. Pero hay que pensar en un posible adelanto según lo que ocurra en las municipales, confirman fuentes del PP gallego.

En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso, como los de Feijóo, puedes perder más

<http://www.publico.es/politica/otras-amistades-peligrosas-alberto-nunez.html>

LA OPOSICIÓN EMPLAZA A FEIJÓO A QUE ACUDA YA A LOS TRIBUNALES

Los grupos exigirán de nuevo los contratos con Dorado

La amenaza del presidente de la Xunta de acudir a los tribunales para defenderse de las acusaciones por su vieja relación con el contrabandista Marcial Dorado no parece que haya intimidado a la oposición. Es más, los grupos parlamentarios que no apoyan al Gobierno coincidieron ayer en el emplazar a Alberto Núñez Feijóo a que acuda a los tribunales porque entienden que sería una manera de aclarar las zonas de sombra sobre ese asunto que ni el presidente ni su Gobierno han logrado despejar. La oposición también ha advertido de que volverá a la carga para que se le permita el acceso a los contratos de los hospitales públicos en los años noventa, cuando Feijóo dirigía el Sergas y frecuentaba la compañía de Dorado. “Usaremos todos los recursos parlamentarios” para conseguir esa información, anunció el portavoz socialista, Abel Losada.

El principal destinatario de la amenaza de Feijóo, Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), replicó al presidente con actitud desafiante. “Que nos lleve ya a los tribunales. Así nos hará la próxima campaña electoral”, declaró su viceportavoz, Yolanda Díaz. Lejos de dar un paso atrás, el líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, manifestó que “el que debería estar encausado es Feijóo” y que si es cierto, como dice el presidente, que se han hecho desaparecer los contratos de la Xunta anteriores a 2003, eso constituiría “un delito”. “Es él quien está insultando sistemáticamente a los cientos de miles de ciudadanos que no le votaron, quien está faltando absolutamente a los derechos parlamentarios de la oposición”, concluyó Beiras.

La oposición insiste en las contradicciones de la Xunta, que por un lado deja caer que la documentación ya no existe y por otro alega que no puede enviar los contratos de los hospitales de los años noventa porque la magnitud de esa documentación la hace “inmanejable”. El socialista Losada considerará “absolutamente inexplicable” que se nieguen los papeles al Parlamento, convertido, según el PSdeG, “en un plató de televisión para exhibir los trucos de propaganda” del PP. “Feijóo tiene todo el derecho del mundo a querellarse contra quien considere, pero lo que debe hacer es contestar a las preguntas en el Parlamento”, insistió Losada.

Los socialistas estudiarán la próxima semana los mecanismos legales para intentar que la Xunta se avenga a mostrar los documentos que le han pedido. También el BNG seguirá por ese camino, según apuntó su líder, Xavier Vence, quien además comparte la opinión de que judicializar el asunto contribuiría a que Feijóo tuviese que dar explicaciones. “Sería una buena manera de que el presidente aclare su historia y los ciudadanos tengan más información de las relaciones del PP con el narcotráfico en los años ochenta y noventa”, apuntó Vence. El líder nacionalista coincide además en que la ley no ampara la destrucción de contratos cada diez años, como asegura Feijóo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/galicia/1368814663_611372.html

FEIJÓO REVELA QUE LA XUNTA NO CONSERVA LOS CONTRATOS DE DORADO ANTERIORES A 2003

AGE pregunta al presidente si dio órdenes de que no se le hiciera la autopsia al amigo que le presentó al narco.

Las preguntas al presidente de la Xunta esta mañana en el Parlamento eran claras y directas: ¿a qué cree usted que se dedicaba profesionalmente su íntimo amigo Manuel Cruz, testaferro de Marcial Dorado?; ¿es verdad que en 1999, cuando murió Cruz en un accidente calificado de “extraño” por la prensa, llamó al Sergas para que no se le practicara la autopsia? Alberto Núñez Feijóo no ha osado contestar las cuestiones planteadas por la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz, ni siquiera vagamente. “Habla de un muerto”, se ha limitado a afirmar el líder del PP gallego en referencia a Cruz, el amigo que le presentó a Dorado y que en los años noventa lo introdujo en el círculo de fiestas y vacaciones del afamado contrabandista. “¿Para qué? ¿Para que lo defienda su familia de injurias, calumnias, autopsia...?”.

Díaz ha asegurado que en Ferrol “todos sabían que Cruz se dedicaba al narcotráfico”, que era miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, un grupo parapolicial y ultraderechista que actuó durante el final de la dictadura franquista y los primeros años de la Transición, y que andaba con pistola. Feijóo ha optado por consumir su tiempo de réplica acusando a AGE de decir “barbaridades envuelto en la inmunidad parlamentaria” y de ser una formación “violenta”. “Se puede hablar con el BNG y el PSdeG, pero es imposible hablar con los que no quieren más que

violencia y puñetazos”, ha añadido.

Y al calificar la viceportavoz de AGE de “trapallada” el documento facilitado por la Xunta con un listado de los contratos adjudicados a empresas de Dorado tanto por los gobiernos del PP como por el bipartito, Feijóo ha revelado que se trata simplemente de una enumeración de órdenes de pago porque los expedientes anteriores a 2003 han sido destruidos. El presidente ha explicado ahora que ley solo obliga a las Administraciones a guardar esa documentación durante diez años y que él solo se puede comprometer a facilitar “todos los rastros de pagos” que encuentre su equipo. Díaz le ha pedido que al menos entregue documentos certificados por funcionarios y que no envíe, como hará mañana en una Comisión de Sanidade, a cargos designados por él a dar las explicaciones. “No queremos políticos, sino funcionarios que certifiquen que usted dice la verdad”, ha añadido la diputada de AGE.

El debate sobre el caso Dorado ha vuelto a llevar la tensión al hemiciclo, de nuevo con el protagonismo del líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, quien, cuando Feijóo estaba respondiendo al secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, le ha espetado desde su escaño: “Es usted un chulo de barra americana”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/15/galicia/1368610327_8751110.html

FEIJÓO CULPA A LA OPOSICIÓN DE QUE NO MUESTRE LOS CONTRATOS CON DORADO

El presidente promete detallarlos “de inmediato y céntimo a céntimo”

Han pasado 15 días desde que Alberto Núñez Feijóo reconociese tácitamente ante el Parlamento gallego que empresas de su antiguo amigo contrabandista Marcial Dorado recibieron ayudas y contratos de la Xunta. Desde entonces, el presidente gallego solo ha desvelado una compensación de 120.000 euros que el bipartito otorgó en 2007 a una firma de Dorado, dentro del paquete de indemnizaciones por los daños de los temporales en la comarca de Arousa. Feijóo ha divulgado esos datos en el Parlamento y en comparecencias ante la prensa, pero sigue sin detallar los contratos durante los Gobiernos de Fraga, en los que el actual presidente ocupó diversos altos cargos. Ayer prometió que lo hará “de inmediato” y “céntimo a céntimo”, y justificó el retraso echándole la culpa a la oposición.

Feijóo aseguró que iba a facilitar esos datos en su tormentosa comparecencia parlamentaria del pasado miércoles, en la que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) le preguntaba expresamente por esa cuestión, pero alegó que el incidente con el líder de esa formación, Xosé Manuel Beiras, no se lo permitió. “No me dejaron”, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta. “No pude seguir contestando porque un diputado [Beiras] vino a mi escaño y, además de decirme cosas interesantes, dio puñetazos encima”, se justificó Feijóo. Lo cierto es que el incidente con Beiras fue anterior a la pregunta de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, a la que el presidente se negó a contestar alegando que no lo “merecía” por no haber pedido disculpas ante la actitud de su jefe de filas.

Feijóo tenía otra oportunidad ayer para divulgar esos datos a la prensa en su comparecencia tras el Consello —como, de hecho, hizo dos semanas antes con la indemnización del bipartito— pero tampoco la aprovechó. Y eso que, según aseguró, es “el más interesado” en que se conozcan para probar que él personalmente “ni firmó ni adjudicó” ningún contrato a esas empresas en las que otro amigo suyo, el fallecido chófer de conselleiros de la Xunta y militante del PP Manuel Cruz, figuraba como testaferro del contrabandista y narcotraficante. “Lamento decepcionar a algunos, pero la realidad es lo suficientemente contundente”, señaló.

Que Feijóo no adjudicase personalmente ningún contrato ni ayuda no significa que no los

haya. Ni siquiera en la Consellería de Sanidade a partir de 1995, cuando el actual presidente era secretario general de ese departamento y empezó a pasar su tiempo de ocio con Dorado. Este periódico le preguntó si hubo alguna relación económica de las empresas del contrabandistas con Sanidade durante esa época, y el presidente insistió: “Yo ni firmé ni adjudiqué”. ¿Pero hubo algún contrato de Sanidade aunque él no lo firmara?. “Lo detallaremos consellería por consellería”, se limitó a contestar. ¿Y cuándo?. “Supongo que de forma inmediata, sobre todo si me dejan trabajar con normalidad”. Los datos, explicó, los enviará por escrito al Parlamento y a los medios de comunicación.

Por lo demás, el presidente volvió a extenderse sobre la bronca del pasado miércoles en la Cámara autónoma, de la que responsabilizó en exclusiva a la oposición. Pese a todo, después de los durísimos ataques que dirigió a todos sus rivales en el Parlamento para evitar responder a sus preguntas, ayer adoptó un tono más conciliador e incluso evitó sumarse a la solicitud de dimisión de Beiras planteada por su grupo parlamentario. “Seguro que podemos discrepar. Escucho con frecuencia descalificativos gravísimos que estoy dispuesto a aceptar, pero puños y manotazos, no. Conmigo que no se cuente para esa práctica antiparlamentaria”, comentó. “El Parlamento es el lugar de la palabra. Lo contrario es un debate de puños y manotazos”, insistió.

Un periodista le recordó que cuando él era vicepresidente de Manuel Fraga aplaudía las lágrimas de este, mientras que el pasado miércoles ironizó sobre las de Beiras. Feijóo mostró su respeto por las emociones de la gente, pero argumentó que lo que había hecho el líder de AGE fue “emocionarse y criminalizar”

“Macarra”, “infame” y “provocador”

La bronca continuó ayer, pero ya fuera del hemiciclo. Esta vez los mensajes se intercambiaron a través de los medios y hubo palabras muy duras para Feijóo. La mayor, de la viceportavoz de AGE en el Parlamento, Yolanda Díaz, quien no se anduvo con rodeos y tildó al presidente de la Xunta de “macarra”.

El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, eligió el calificativo “infame”. Es el juicio que le merece, explicó Vázquez, que Feijóo se hubiese dedicado a “ridiculizar la emoción de Beiras”. El dirigente socialista no justificó la reacción del líder de AGE, pero acusó al presidente de acudir al Parlamento con intenciones de “provocación”. “Es de una falta de sensibilidad absoluta poner en evidencia y ridiculizar a una persona que se emociona, o llora, cuando recuerda a un familiar o un amigo que falleció”. Las lágrimas de Beiras, hace 15 días en el Parlamento, fueron cuando evocó a un familiar muerto por la droga. “Eso no se le hace a nadie, no está en el canon del debate político. ¿No se acuerda de que Fraga lloraba cada vez que abría la boca?”, insistió Vázquez, quien señaló que el presidente del Gobierno tiene la “obligación moral y legal de contestar y decir la verdad”. “Pero eso Feijóo lo tiene prohibido”, apostilló.

“Tiene una actitud macarra... Es un macarra”, afirmó, por su parte, Yolanda Díaz. “Cómo trata la gente, cómo la insulta...” . Al igual que los demás dirigentes de la oposición, la viceportavoz de AGE y coordinadora de Esquerda Unida entiende que Feijóo ha pervertido las sesiones parlamentarias de control al presidente porque este las usa para atacar a la oposición. “Él no contesta, no cumple con el rol de esas sesiones”, señaló Díaz, quien interpretó la actitud de Feijóo como un intento de ocultar que no estaba respondiendo a las preguntas sobre sus relaciones con Dorado. “Sabía que le estábamos metiendo el dedo en el ojo”, indicó.

Tras conocer las palabras de Díaz, el presidente de la Xunta ironizó: “La opinión de la

lideresa de AGE es clarificadora sobre el respeto, la medida, la racionalidad y las ideas tan sesudas en las que basa ese grupo su proceder parlamentario”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/25/galicia/1366901970_994439.html

ROMAY BECCARÍA: “YO TAMPOCO CONOCÍA A MARCIAL DORADO, NO SABÍA NI QUE EXISTÍA”

El exministro asegura que “no es una buena noticia” que los extesoreros del PP estén imputados

“Yo tampoco sabía quién era Marcial Dorado, estoy diciendo la verdad, yo tampoco sabía”. A José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado, exministro de Sanidad y mentor político del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incluso se rió esta mañana al asegurar su total desconocimiento, a mediados de la década, de la existencia del que era ya entonces conocido contrabandista de Arousa, luego reconvertido en narcotraficante. Y “tampoco sabía” Romay, insistió, que Feijóo, su segundo en la Consellería de Sanidade, mantenía en aquel momento una estrecha relación con Dorado, con el que acudía a viajes y fiestas.

El presidente del Consejo de Estado, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa de A Coruña, se explayó en defender “la conducta intachable y honradez probadísima” de Feijóo. “Seguro que hizo las cosas como explica, y que en cuanto supo que esa persona pudo tener algún tipo de problema, sin que se lo pidiera rompe con esa relación con absoluta libertad”. Para Romay, toda la polémica tras la publicación de las fotos de Feijóo con Dorado son “insidias” que no afectarán la carrera política del presidente del Gobierno y el PP gallegos. “La gente lo entenderá y permanecerá, sobre estos episodios, su excelente ejecutoria, seguro que no hizo ninguna irregularidad”, remachó.

Fue precisamente de la mano de Romay Beccaría, entonces uno de los principales barones del PP gallego que presidía Manuel Fraga, que el ahora titular de la Xunta inició su trayectoria política, primero como segundo de la Consellería de Sanidade y luego cuando fue ministro, al frente del antiguo Insalud. El responsable del Consejo de Estado, que mantiene intacto su “concepto maravilloso” sobre Feijóo, insistió en no tener “ninguna información” sobre la relación personal y política que tenía su protegido con Marcial Dorado, ahora en prisión por narcotráfico. “Estoy diciendo la verdad” aseguró ante la expresión de sorpresa que causó entre periodistas su afirmación de que “ni siquiera” sabía quién era esa persona ya muy conocida en Galicia por aquel entonces, cuando arreciaban las protestas de madres contra la droga también contra este contrabandista que ya había sido dos veces detenido – aunque luego liberado sin cargo- en el marco de operaciones contra el narcotráfico. Dorado conoció a Feijóo por medio de Manuel Cruz, ya fallecido, que además de chófer de destacados dirigentes del PP gallego, entre ellos Romay cuando era conselleiro, era testaferro del contrabandista-narcotraficante y conocido militante en Ferrol del partido que presidía el ahora presidente del Consejo de Estado.

Feijóo oculta, por el momento, los contratos que la Xunta de Fraga concedió a empresas de Dorado, también durante los años en que Romay era conselleiro y él su segundo. “No tengo ninguna información”, aseguró igualmente Romay al ser preguntado al respecto.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/galicia/1365759496_787239.html

FEIJÓO OCULTA LAS AYUDAS QUE LA XUNTA DE FRAGA CONCEDIÓ A MARCIAL DORADO

El narco cobró 125.000 euros de un programa de indemnizaciones por los daños del temporal en Arousa durante la etapa del bipartito

Feijóo ha optado por la estrategia de la dosificación de datos sobre su relación personal y política con el contrabandista reconvertido en narcotraficante, y actualmente en prisión, Marcial Dorado. Pese a que la conoce, Feijóo no desvela, al menos por el momento, la cantidad de dinero que los gobiernos de la Xunta presidida por Manuel Fraga (en los que él era número dos de la Consellería de Sanidade en la misma época en la que viajaba con Dorado y acudía a las fiestas que este organizaba) pagaron por contratos con sus empresas.

El presidente gallego se presenta como víctima y mientras se aferra al goteo informativo sobre los datos que le conciernen a él, dispara contra la oposición: “La mayor ayuda pública” del Gobierno autónomo que recibieron empresas de Dorado “asciende a 125.000 euros y se corresponde con fondos solidarios por daños producidos en instalaciones de sus empresas”, se defendió ayer con el ataque en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal

del Consello de la Xunta, señalando al bipartito que, en el año de inundaciones en Arousa de 2006, otorgó esa indemnización.

“No pongo en cuestión la legalidad” de las ayudas, precisó Feijóo. Las compensaciones entre las que se incluía la de Dorado fueron concedidas al amparo de un decreto de “medidas urgentes para reparación de los daños” causados por las inundaciones de 2006 que anegaron un aparcamiento subterráneo ubicado en Vilagarcía propiedad de una empresa del narcotraficante.

El conselleiro de Presidencia durante el gobierno del bipartito, el socialista José Luis Méndez Romeu, asegura que estas ayudas se conceden a empresas que están al corriente de sus obligaciones con la Administración “y no se les pide la relación de accionistas”. “Pero no se juzga esto”, matiza Méndez Romeu, sino si en la amistad que Feijóo mantenía con el contrabandista Dorado “había algo más que benevolencia; algo como, por ejemplo, contratos interesados relacionados con las compras de gasóleo a Dorado para los hospitales gallegos”.

Pero mientras tanto, Feijóo dispara contra la oposición y huye del dato de los contratos que la Xunta a la que él pertenecía, en la época de los viajes y las fiestas con el entonces contrabandista, firmó con sus empresas. El presidente ofrece a cambio la cifra de 5.000 euros que, según asegura, la Xunta pagó entre 2009 y 2013 a la empresa de su examigo de ocio “por una contraprestación de servicios” relativos a la compra de efectos navales. “Vamos a dar todas las facturas y datos de subvenciones”, prometió ayer con un pie en el avión que lo llevaba a México, donde respirará durante una semana lejos de la “hipocresía política” de la que acusa a la oposición por exigirle explicaciones.

“Yo nunca puse en duda la legalidad de las ayudas y subvenciones del bipartito” a las empresas de Dorado, preparó el terreno Feijóo para concluir que lo que sí cuestiona es “la hipocresía de PSOE y BNG”, que no le creen. El presidente intentaba evidenciar con la divulgación de esta indemnización que PSdeG y BNG no están legitimados para reprocharle a él que “no supiera” hace 18 años que “Marcial Dorado iba a convertirse en narcotraficante” y que, “cuando ya lo era y estaba condenado y en la cárcel” la “misma oposición” le hubiese concedido la indemnización a su empresa afectada por las inundaciones. Ayer, en la comparecencia ante los periodistas, mostró su malestar con la actitud de PSdeG, AGE y BNG en su comparecencia parlamentaria e instó a los periodistas a que visionen el vídeo de esa sesión para contemplar con claridad “las entrañas de los portavoces de la oposición” en contraposición a las suyas.

“Con tanta hipocresía es comprensible que los ciudadanos no crean en los políticos”, protestó. En su opinión la desafección de los ciudadanos con los representantes públicos “está ganada a pulso por algunos” de ellos, en clara alusión a los portavoces de la oposición y en especial al del PSdeG, Pachi Vázquez. “Cuando un portavoz es capaz de decir que no se reunió conmigo y me propuso un pacto de silencio sobre el caso Campeón, no se puede tomar en serio a esa persona”, acusó.

Feijóo está muy molesto. “No voy a hacer una segunda comparecencia”, replicó cuando en la rueda de prensa de ayer se le formularon preguntas relacionadas con los contratos que la Xunta firmó con empresas del contrabandista-narcotraficante. El presidente quiere dar carpetazo cuanto antes al desgaste que conlleva la política de transparencia informativa y protesta porque se le están requiriendo explicaciones “por unas fotos del siglo XX cuando yo tengo el compromiso de dedicarme a los asuntos del siglo XXI y lo voy a hacer con toda la intensidad con la que lo he venido haciendo hasta ahora”. Mientras tanto se compromete, “como no podía ser de otra forma”, a remitir a la Cámara gallega “todos los datos cuando se nos soliciten”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/11/galicia/1365682382_202173.html

EL JUEZ VÁZQUEZ TAÍN ARREMETE CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR

El magistrado aseguró que fue la policía la que le pidió que hablara de las fotos de Feijóo, algo que desmintió Fernández Díaz

El juez José Antonio Vázquez Taín ha afirmado que "solo" conoce a los policías con los que "todos los días" se enfrenta "a un riesgo" y se juega "la vida por intentar que en este país haya menos narcotráfico", al tiempo que ha asegurado que no conoce ni al ministro de Interior ni al director general de la Policía. Vázquez Taín, quien recordó la reciente desarticulación de una mafia búlgara dedicada al narcotráfico, destacó que "todos los días" habla "muchas horas" con "muchos policías". "Esa Policía con la que yo trabajo, con la que estoy en el frente, es a la que yo le digo la Policía", ha señalado.

"Desde luego no he hablado con el ministro, al que no conozco, ni he hablado con el director general de la Policía, al que no conozco", aseguró, preguntado por las declaraciones del titular de Interior en las que aseguraba que desde su departamento no se pidió a Taín que hablase sobre las fotos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico. El juez, quien defendió ser un "profesional" en su trabajo, destacó que "cualquier persona" que lo conozca "se imaginará que trabaja con Policía". "Ésa es la única Policía que me importa y cuyo pensamiento, forma de vivir y forma de trabajar a mí me preocupa. Los demás no me preocupan porque no tengo contacto con ellos", insistió, al tiempo que, tras incidir en que no conoce al ministro, estimó que la respuesta que éste dio en el Congreso "es lógica".

En cuanto a las fotos de Feijóo y Dorado, mantuvo que no va a decir "nada" sobre ellas y que lo único que ha apuntado al respecto es que, en los registros efectuados en las investigaciones, no se las llevaron porque no se consideraron "relevantes". "Dicho esto cada uno es muy maduro, yo creo en la madurez del espectador, con eso es suficiente y no hay que decirle nada más", concluyó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/galicia/1365794138_630811.html

LA OPOSICIÓN PIDE LOS CONTRATOS

Xavier Vence asegura que si el dinero fue una indemnización por inundaciones es un acto reglado

La ronda de entrevistas, la rueda de prensa abierta a los medios, la comparecencia de dos horas en el Parlamento y en general la "política de transparencia" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre su vieja amistad con el contrabandista Marcial Dorado no han satisfecho las dudas de la oposición. Desde que este diario destapó la relación que Dorado y Feijóo mantuvieron a finales de los años noventa, cuando este último era alto cargo de la Consellería de Sanidade, cada explicación del presidente solo sirve para enredar más las cosas. El anuncio de que fue el bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño el que "más ayudas" dio a las empresas de Dorado llevó a socialistas, AGE y BNG a preguntar ayer sobre las transacciones entre las sociedades del contrabandista con la Xunta de Fraga.

El recién nombrado líder del BNG, Xavier Vence, aseguró que si el dinero que pagó la Xunta de Touriño fue una indemnización por riadas, tal y como desveló Feijóo, este es un acto reglado de la Administración. "Si la empresa es legal, no hay ninguna razón para que puedan ser discriminadas en una orden de este tipo", aseguró el dirigente nacionalista. Vence, el primer dirigente que pidió el cese de Feijóo nada más ver la luz esas polémicas imágenes, lamentó que el presidente tuviese una conducta "inapropiada" y subrayó que el debate sobre su amistad con Dorado versa sobre "la ética y la política". Por eso le instó a aclararlo todo sobre las ayudas y contratos que las sociedades del contrabandista han recibido de la Xunta.

También Alternativa Galega de Esquerdas volvió a reclamar ayer el cese de Feijóo pero después de explicar los contratos y ayudas que la Xunta de Fraga adjudicó a las empresas de Dorado, una información que ayer el jefe del Ejecutivo gallego se negó a facilitar a los medios tras la reunión semanal de su Gobierno. El portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, manifestó "su sorpresa" por que Feijóo conozca "con tanto detalle" las empresas de Dorado para determinar con tanta precisión la época en que recibieron más fondos. El dirigente socialista censuró "el relativismo moral" del presidente y tildó de "arrogante e indigna" su comparecencia parlamentaria. "Anteponer sus intereses a los de los ciudadanos es lo peor que puede hacer un presidente", aseguró Losada.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/11/galicia/1365709604_689860.html

FEIJÓO RECONOCE QUE EMPRESAS DE DORADO TUVIERON CONTRATOS CON LA XUNTA

- El presidente gallego reconoce viajes con el narco a Ibiza, Tenerife, Portugal y Baleares
- Pachi Vázquez ha retado a Feijóo a que denuncie los supuestos chantajes a la policía.
- Jorquera (BNG): "Para que impere la decencia, váyase señor Feijóo"
- Beiras: "Siento una profunda indignación por pertenecer al mismo género que usted"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado caer esta mañana ante el Parlamento autónomo que empresas de su antiguo amigo, el contrabandista ahora condenado por narcotráfico Marcial Dorado, pudieron haber contratado con la Administración gallega. Pero Feijóo no ha

especificado qué tipo de contratos ni su cuantía durante la época en que el actual presidente —a partir de 1995— ocupaba altos cargos en la Xunta y fue invitado por Dorado a viajes y fiestas. El jefe del Ejecutivo gallego se ha limitado a señalar que cuando más “ayudas y subvenciones” recibieron las firmas del contrabandista fue durante el bipartito de socialistas y nacionalistas que gobernó Galicia, entre 2005 y 2009. Feijoo especificó además que se trató de una “ayuda de solidaridad”. Las palabras del presidente cogieron por sorpresa a todos, incluido su propio grupo parlamentario, cuyo portavoz, Pedro Puy, había negado poco antes relaciones económicas entre empresas del narco y la Xunta.

En una intervención plagada de ataques a la oposición y también a EL PAÍS por haber publicado las fotografías y los detalles de la relación personal entre Feijóo y Dorado, el presidente de la Xunta ha dejado sin aclarar varios aspectos por los que fue expresamente interpelado. No contestó quién pagaba los viajes y tampoco pudo aclarar cuándo fue su último contacto con el contrabandista. Y siguió aferrándose a que no sabía quién era Dorado cuando entabló relación con él, pese a que los grupos de la oposición le mostraron numerosas fotocopias de prensa de principios de los años noventa en las que se daba cuenta de la detención del contrabandista y de las sospechas judiciales y policiales sobre su posible dedicación al comercio de drogas. “Si hubiese tenido la más mínima información, no hubiese posado para esas fotos”, ha asegurado. De todas formas el presidente reiteró: “Doy todas las explicaciones sin demora y con transparencia y humildad. Si algún gallego considera que debo disculparme aunque sucediera hace dos décadas, también lo hago”, finalizó el presidente.

Aunque insistió en que su contacto con Dorado se cortó en 1998, cuando supo que la justicia lo investigaba, admitió que pudo haber hablado con él entre 2001 y 2003, conversaciones que, según el juez que encarceló al narco, están recogidas en pinchazos telefónicos. “Puede que me felicitara las Navidades o algún cumpleaños, pero no puedo recordar con toda la gente con la que hablé en esa época”, ha afirmado el presidente.

Feijóo ha admitido viajes con Dorado a Cascais (Portugal), a Baleares, a Tenerife y a los Picos de Europa. Y reveló que este periódico le había preguntado si también estuvo con él en Suiza e Inglaterra y que lo negó. El líder del PP gallego ha mostrado su “repulsa” por el narcotráfico y ha admitido el error de relacionarse con Dorado: “Me equivoqué. No fui prudente. Y si algún gallego lo cree necesario, pido disculpas”. Una vez más, ha insistido en que le intentaron “amedrentar” con las fotos, pero, como viene haciendo desde hace diez días, no ha especificado de quién partieron esas amenazas.

Toda la oposición ha pedido su dimisión, en medio de durísimas críticas. Tanto el PSdeG-PSOE como Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y BNG han evocado a los muertos por la droga y han señalado que en la época en que Feijóo se relacionaba con Dorado el movimiento social de las madres se enfrentaba a los capos de las Rías Baixas. El líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, incluso ha estado a punto del llanto cuando recordó a sus amigos muertos de sida.

El socialista Pachi Vázquez ha retado a Feijóo a que denuncie los supuestos chantajes a la policía. “Sus argumentos son inverosímiles”, ha señalado Vázquez, “usted era de los gallegos que mejor conocían a Dorado, porque estaba todo el día con él”. “Esa es su catadura moral”, ha concluido. “Dimita y no ponga esta carga sobre las espaldas de Galicia”. “Usted es la indecencia hecha persona”, le ha espetado Beiras. “Si usted no sabía lo que ocurría en este país, ¿cómo podía estar en un cargo público”. “Usted se hizo amigo de un delincuente por mediación de otro delincuente”, insistió en referencia a Manuel Cruz, antiguo chófer de la Xunta, testaferro de Dorado y la persona que, según Feijóo, le presentó al capo.

Francisco Jorquera, del BNG, reprochó al presidente que contribuyese al propósito del contrabandista de lograr “respetabilidad social”. “Todo el mundo en 1995 sabía que las redes del contrabando estaban conectadas con el narcotráfico. ¿Pretende que los padres y madres de las víctimas de la droga se crean que usted no sabía quién era Dorado? Es increíble”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/10/galicia/1365579795_684431.html

ROMAY BECCARÍA TAMBIÉN NIEGA HABER NEGOCIADO CON MARCIAL DORADO CUANDO ERA CONSELLEIRO DE SANIDADE

El actual presidente del Consejo de Estado, cuyo chófer en la Xunta fue testaferro del narcotraficante, sale en defensa de Feijóo

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha rechazado hoy que en la época en la que ocupó la Consellería de Sanidad en Galicia, a mediados de los noventa, hubiese negocios con el aousano Marcial Dorado, en prisión en la actualidad por narcotráfico.

"Ya verá cómo no hay nada de eso ni lo puede haber", ha dicho hoy Romay antes de participar en un acto con emprendedores en la Ciudad de la Cultura en Santiago, preguntado por la posible existencia de negocios entre la Consellería y las empresas de Dorado en esa etapa.

La pasada semana se difundieron unas fotografías de Dorado a bordo de un yate con el actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la época en la que éste era número dos de la Consellería de Sanidad, por debajo de Romay Beccaría. A raíz de estas imágenes publicadas por el diario El País, sobre las que Núñez Feijóo asegura que no hay nada más, que conoció a Dorado por otras personas y que cortó relación cuando supo que tenía causas pendientes. Los partidos gallegos en la oposición han pedido su dimisión, así como la relación de contratos de la Consellería de Sanidad con las empresas de Dorado en esos años.

Beccaría asegura que no conoció a Dorado a pesar de la relación de éste con su chófer

Romay Beccaría, cuyo chófer en la Consellería era Manuel Cruz, posteriormente condenado por ser testaferro de Dorado, ha indicado que él no conoció al narcotraficante.

Ha señalado que está "disgustado" por la publicación de las fotos y ha indicado que está convencido de que Núñez Feijóo "no hizo nunca nada en contra de la ley" y también de que no tiene "contaminación con ningún hecho de esa naturaleza", en alusión a las actividades de Dorado.

"Pocos políticos tienen el nivel de compromiso ético con su función como Núñez Feijóo", ha destacado Romay, que ha considerado que "lo mejor que le puede pasar a Galicia" es que el actual presidente "siga trabajando con fuerza", ya que es un "modelo de gestor por competencia técnica y compromiso ético".

También ha dicho que Núñez Feijóo está "tranquilo" porque "no hizo nada que no pueda hacer" y se ha mostrado convencido de que eso es "lo que prevalece, lo que piensa la mayoría de la gente ahora mismo".

<http://www.publico.es/453237/romay-beccaria-tambien-niega-haber-negociado-con-marcial-dorado-cuando-era-conselleiro-de-sanidade>

POLÍTICA

DE

CONTRABANDO

Políticos de la derecha y contrabandistas se reconvirtieron en 'narcos' en los ochenta y noventa. Entretejieron relaciones al calor de una actividad consentida socialmente en Galicia.

Un atribulado consejero de Manuel Fraga llamado Alberto Núñez Feijóo se presentó en 2003 ante el gran patrón de la derecha española, entonces presidente de la Xunta de Galicia, para tratar un asunto delicado. Acababa de saber que en un registro policial de la espectacular mansión del narco Marcial Dorado, en la Ría de Arousa, habían aparecido en un cajón unas fotos suyas con el capo en los años noventa, cuando aún no había dado el salto al negocio de la coca y se dedicaba al contrabando de tabaco. "¿Sabe usted por qué se llamaba Ligero el alcalde de A Guarda?", le preguntó Fraga en referencia a Manuel Díaz González, alias Ligero, regidor de esta localidad pontevedresa por Alianza Popular (AP) en los años ochenta y amigo personal del exministro franquista. "Pues porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal".

Feijóo esgrimió este episodio de su vida política el pasado martes en una entrevista en Onda Cero para, con el amparo póstumo del difunto fundador del Partido Popular (PP), restar importancia a la amistad que mantuvo cuando era un alto cargo del Gobierno gallego con Marcial Dorado, destapada en unas fotos publicadas por este periódico. Las palabras del dirigente popular desentierran una época oscura de la derecha gallega, esas décadas de los ochenta y los noventa en las que política y contrabando compartían en Galicia mantel, despacho y condecoraciones.

En 1983, la primera gran redada contra los contrabandistas acabó con la mayor parte de ellos huidos en Portugal

En los años ochenta, la simbiosis entre los tabaqueros y la clase política de la AP de Fraga era aceptada socialmente en la costa del sur de Galicia en la misma medida que esta actividad ilegal se implantaba en el tejido económico del que vivían sus vecinos. El fenómeno del tráfico ilegal de tabaco en la provincia de Pontevedra no se puede entender sin conocer sus raíces y el momento social y político en el que surgió, mucho antes de que a Vilagarcía de Arousa, su principal centro de operaciones, se le conociese como Villa Winston o Villa Mercedes.

El contrabando que dio paso al narcotráfico es hijo a su vez del estraperlo de los años setenta, un tráfico, penalizado aunque inofensivo de diversos géneros —incluidas las cajetillas— que en aquellos tiempos escaseaban en Galicia y que fluían con facilidad entre los pueblos de las Rías Baixas, fronterizas con Portugal. Así nació un negocio próspero, alimentado por empresarios relacionados con la hostelería, los transportes o la pesca. Según informes policiales, el padrino de este tráfico de bienes con el país vecino fue un amigo personal de Manuel Fraga, un hombre poderoso, carismático y muy respetado por los que supuestamente serían sus pupilos en el negocio: Vicente Otero, Terito o don Vicente, siempre impecablemente trajeado y cuidadoso con su arreglo personal para que no se le asomase una cana. Su mano derecha y protegido se llamaba José Manuel Nené Barral, que desde 1983 fue alcalde del municipio de Ribadumia por AP. Nené caería en desgracia 18 años después truncando su larga carrera política.

El narcotraficante Laureano Oubiña pasó 11 años en la cárcel por la organización de tres entradas de alijos de hachís. Aún tiene pendientes causas por blanqueo de capitales. Compartió mesa con Manuel Fraga en eventos en Portugal.

Con una potente empresa de transportes, Terito se colocó en las altas esferas de las finanzas y del poder. Amigo de Fraga desde que este comenzó a dirigir los destinos de Alianza Popular, Vicente Otero organizaba encuentros multitudinarios para agasajar al entonces jefe de la oposición en España durante sus frecuentes visitas a la Ría de Arousa, una comarca donde el Partido Popular sigue hoy disfrutando de una aplastante mayoría.

El parador de Cambados fue escenario muchas tardes de estas reuniones con las que el presunto contrabandista honraba a Fraga, en las que también se dejaba ver la flor y nata del incipiente tráfico de tabaco americano. Terito movía una enorme cantera de votos y se implicó hasta tal punto en el proyecto de Fraga que don Manuel llegó a condecorarle con la medalla de oro y brillantes del partido. Al igual que el resto de presuntos contrabandistas de la época, don Vicente fue objeto de múltiples informes policiales pero nunca llegó a estar procesado en ningún sumario, pese a que el juez Baltasar Garzón, al igual que le ocurrió a Marcial Dorado, ordenó en 1990 su detención dentro de la Operación Nécora contra el narcotráfico a raíz de un falso testimonio del arrepentido Ricardo Portabales.

Las relaciones entre los contrabandistas y Alianza Popular se estrecharon porque la persecución se intensificó cuando Felipe González alcanzó la presidencia del Gobierno, en 1982. En octubre

de ese año, un juez de Cambados, José Luis Seoane Spiegelberg, ordenaba por escrito a la Policía Judicial que investigase la retención ilegal, apaleamiento y encierro en un camión frigorífico de un industrial de Valladolid, Celestino Suances, que adeudaba al clan de Los Charlines —entonces dedicado al contrabando, después al narcotráfico— unos cuantos millones de pesetas.

Los contrabandistas recurrieron a un letrado de Vilagarcía, Pablo Vioque, que se hizo con la Alianza Popular local

La reconstrucción de los hechos que alarmaron al juez llegó, junto la documentación y pinchazos sobre la actividad de los grupos tabaqueros, al despacho del gobernador civil de Pontevedra, el socialista Virginio Fuentes. Un año después, en diciembre de 1983, se desató la primera y mayor redada contra los contrabandistas, que provocó la estampida de casi todos los jefes y lugartenientes a Portugal, a excepción de alguno como Sito Miñanco —que también acabó en el narcotráfico—, detenido antes de que pudiera huir. De aquel macrosumario por delitos económicos quedaron fuera, sin embargo, Vicente Otero; su mano derecha, el exalcalde popular Nené Barral; y los después condenados por narcotráfico Laureano Oubiña; Luis Falcón, Falconetti; Manuel Carballo Jueguen, El Gavilán; y Los Charlines. Por Arousa se extendió la leyenda de que eran “intocables”. Pero duró poco tiempo: años más tarde todos, a excepción de Terito, pasaron por la cárcel.

La cruzada contra la mafia contrabandista había comenzado. El Gobierno de la época no ocultaba su interés en apretar el acelerador con la esperanza de convertir en votos en Galicia la lucha contra los delincuentes. Pero en las Rías Baixas reinaba la complacencia social con los contrabandistas. Era una práctica extendida con la que muchas familias ganaban y generaba riqueza para el resto de los vecinos, que fueron embargados por el silencio. Si los movimientos de los tabaqueros ya eran favorables a la causa política personalizada en Manuel Fraga, después de la redada de 1983 los apoyos se multiplicaron. Eso sí, las aportaciones de los contrabandistas a las campañas electorales constituían una información tan reservada como la hora o el lugar de una noche de descarga de mercancía.

Sito Miñanco en 1990 en el campo de fútbol que sufragó. De tabaquero a narco, fue el capo más internacional. Contribuyó a las campañas de Manuel Antonio Noriega en Panamá.

Los que consiguieron huir del primer golpe policial al contrabando en Galicia cruzando la frontera con Portugal, entre ellos Marcial Dorado, protagonizaron una anécdota para la historia. Tanto la banda de Dorado como las otras dos grandes del negocio —ROS y Sito Carnicero— se instalaron en un hotel de la localidad lusa de Viana do Castelo, donde recibían la visita de sus familiares. Allí aguardaron varios meses a que las cosas se calmaran. Uno de aquellos días de larga espera, los contrabandistas gallegos observaron con sorpresa la llegada del entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, de viaje oficial a Portugal. El propio Albor recuerda el tumulto que se creó a su alrededor. Saltándose el protocolo, los contrabandistas tuvieron unos minutos para explicarle a su presidente por qué estaban allí, “injustamente perseguidos por la justicia”. La reacción de Albor fue invitarles a que abandonasen el exilio y se entregasen. Un año después de que se produjera esa charla entre los delincuentes y el mandatario gallego, Marcial Dorado decidió volver a Galicia pagando una fianza de 20 millones de pesetas por su libertad. Fue el primero en hacerlo. Después le siguió el resto.

Tras la corta estancia en prisión de los capos del contrabando en Galicia, la entrada del tabaco ilegal, que se había ralentizado durante su exilio en Portugal, experimentó una rápida recuperación. El negocio llegó a su apogeo a mediados de los ochenta y la prosperidad se prolongó durante una década. Las bandas ya fragmentadas se multiplicaron, mientras se reinvertía parte de las ganancias en una especie de I+D que comprendía la construcción de planeadoras más veloces y equipos de comunicación más eficaces. El salto al narcotráfico llegó

como consecuencia de la reforma de la Ley del Contrabando en 1983, con la que se endurecieron las penas para los contrabandistas. A partir de entonces, era más castigado transportar cien cajas de tabaco que cien kilos de hachís.

Mientras la brecha entre los contrabandistas y el PSOE aumentaba por la presión policial, el otro hombre supuestamente clave del tráfico de tabaco en Galicia, Nené Barral, ganaba la alcaldía de Ribadumia, un cargo que ocupó de 1983 hasta que fue detenido en 2001 por una causa que está aún pendiente de juicio. La mano derecha de Terito, intocable en el primer sumario de la historia por contrabando, era, según informes policiales, el hombre que abrió los contactos entre el puerto de embarque del tabaco, Amberes, y Galicia. El joven regidor causaba fascinación entre sus convecinos, que le dieron la mayoría absoluta durante los casi 20 años que permaneció en el cargo.

Nené Barral forjó su propia cantera de seguidores y colocó a su hermano Feliciano Barral en la ejecutiva local de Alianza Popular. De esta escuela salió Rafael Louzán, el actual presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, al que Barral introdujo como socio suyo en algunos negocios. Louzán fue colocado por el presunto alcalde-contrabandista como conserje en el Ayuntamiento de Ribadumia, desde donde dio el salto a la Diputación pontevedresa, que acabó presidiendo. Cuando Nené Barral y su hermano fueron detenidos en 2001 dentro de la operación de contrabando internacional que está pendiente de juicio, Louzán sucedió al hermano del alcalde al frente del partido. Para entonces ya no figuraba en ninguna sociedad junto al que fuera su jefe.

El abogado de los contrabandistas, Pablo Vioque, miembro de AP, manejó los hilos del poder en Ayuntamientos gallegos. Terminó con una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico.

Enredados ya con la ley, los contrabandistas gallegos recurrieron para su defensa a un abogado con despacho en Vilagarcía de Arousa: Pablo Vioque, un extremeño residente en Galicia y militante de Alianza Popular que acabó en prisión por narcotráfico. Vioque combinó la defensa de todos los tabaqueros procesados con la preparación de un asalto al poder en la ejecutiva local del partido fundado por Manuel Fraga. El letrado había llegado a la localidad pontevedresa con grandes pretensiones de dinero y poder y se colocó como secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra que en 1985 le sirvió para destituir a la dirección local de AP consistió en la afiliación en un día de 115 nuevos militantes, algunos presuntamente vinculados al contrabando y luego al narcotráfico. Al golpe de mano se opuso el entonces presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy, que abandonó el cargo a finales de 1986 cuando Vioque ya manejaba los hilos del poder local. El ahora presidente del Gobierno de España y el narco infiltrado en política siempre mantuvieron malas relaciones.

La onda expansiva de la que se conoció como Operación Arousa llegó a Madrid y forzó una visita del propio Fraga y otra del que entonces era su delfín, Jorge Verstrynge, al balneario de la playa Compostela para intentar calmar los encendidos ánimos de los afiliados tradicionales. Fraga se decantó finalmente por la militancia antigolpista y Vioque, arrinconado y ávido de venganza, se fue de AP y se alineó en las filas de Coalición Galega, el partido del exvicepresidente de la Xunta Xosé Luis Barreiro.

Vicente Otero, 'Terito' o 'don Vicente', apadrinó el tráfico de tabaco entre Galicia y Portugal y fue amigo personal de Manuel Fraga, a quien agasajó con encuentros multitudinarios.

El dinero que amasaron los contrabandistas gallegos engordó al calor de otros negocios. En 1984, otro célebre capo del tabaco, Luis Falcón, Falconetti, logró, gracias a las habilidades de su abogado, que el Ayuntamiento de Vilagarcía que presidía por AP José Luis Rivera Mallo —hoy senador y presidente de la Comisión para el Estudio del Problema de las Drogas— le apoyase en

sus proyectos urbanísticos y hosteleros. En aquel envite, el pleno aprobó la construcción del primer bingo de la comarca, en el barrio antiguo del municipio, pese a que el secretario hizo constar que era “una ilegalidad manifiesta”. Tres años después entró en la cárcel por un alijo de hachís.

Otro político controvertido de la derecha fue Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove durante casi dos décadas por Alianza Popular y por partidos independientes. En las causas judiciales en las que se vio inmerso por denuncias de la oposición recurría al narco Vioque como abogado. En 1991, cuando acababa de ganar de nuevo las elecciones por una formación independiente, Bea fue detenido por narcotráfico, mientras el pleno le esperaba para tomar posesión en una esperpéntica sesión de investidura. Finalmente fue condenado por blanqueo.

En 1989 Fraga funda el Partido Popular y gana las elecciones en Galicia. Aclamado por sus éxitos entre la clientela contrabandista, Vioque llegó a multiplicar sus influencias en la Xunta. Se encargaba de organizar mítines y recaudar fondos y se jactaba de que los chóferes de algunos consejeros del Gobierno de Fraga venían expresamente a la ría de Arousa a recoger las gratificaciones que lograba para las campañas electorales.

Marcial Dorado, encarcelado por narcotráfico, acogía en sus fiestas a militantes del PP. Amasó una fortuna con negocios de contrabando.

Las idas y venidas de políticos a la ría de Arousa para reforzar la presencia del partido dejaron de ser un secreto a voces. Existen informes policiales donde se detallan encuentros en lugares públicos entre destacados miembros del PP y contrabandistas a los que los agentes hacían seguimientos. El entonces gobernador civil de Pontevedra, el socialista Jorge Parada, que dio una vuelta de tuerca en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, recibía continuamente información confidencial de sus espías. Parada incluso llegó a enviar algún recado al entorno de determinados políticos para advertirles de que las compañías que frecuentaban vendían algo más que tabaco.

Desde la Cámara de Comercio de Vilagarcía, el joven secretario Vioque seguía extendiendo sus tentáculos. Los actos de promoción empresarial de la entidad le servían de pretexto para invitar al presidente Fraga. En algunos de estos eventos, el fundador del PP llegó a compartir mesa en Portugal con personajes como Laureano Oubiña, otro hombre clave del contrabando y narcotráfico en Galicia. Mientras el astuto letrado se codeaba con la flor y nata de la Xunta, organizaba la llegada de un cargamento de 2.000 kilos de cocaína. En 1991 fue asesinado el tesorero de la cámara: unos sicarios lo mataron porque lo confundieron con Vioque. El narco sobrevivió por un golpe de azar, pero terminó en la cárcel.

José Manuel Barral, 'Nené', alcalde por AP de Ribadumia, fue detenido en 2001 relacionado con el contrabando.

Los traficantes de la Galicia de los noventa siempre se preocuparon de estar rodeados de políticos. Sito Miñanco, otro confeso jefe tabaquero luego convertido en narco, buscó el calor del poder incluso entre políticos extranjeros. Miñanco llegó a financiar el campo de fútbol de Cambados, pagó el altar y demás mobiliario sacro de la iglesia de su pueblo y fue reclutado por Pablo Vioque para satisfacer sus compromisos con el poder. El capo más internacional de la época reconoció que había contribuido económicamente a las campañas del presidente Manuel Antonio Noriega en Panamá y se dejó fotografiar con el embajador de España en el país centroamericano, al que viajaba por “negocios”. Tampoco Marcial Dorado negó sus amistades con el PP y a sus fiestas acudían reconocidos militantes de su pueblo que nunca han renegado de su relación. Fue precisamente un militante del PP de Ferrol, Manuel Cruz, que combinaba su trabajo como chófer de consejeros de la Xunta de Fraga con negocios con Dorado, el que le

presentó a Feijóo. Cruz, que fue chófer del exministro y exconsejero del Gobierno gallego José Manuel Romay Beccaria, solía ir a A Illa de Arousa, donde residía su socio Dorado y también participaba en comidas y reuniones con compañeros del partido en la zona.

Al capo Luis Falcón, 'Falconetti', lo apoyó en sus proyectos urbanísticos el Ayuntamiento de Vilagarcía, cuyo alcalde era José Luis Rivera Mallo, hoy senador y presidente de la comisión de la droga.

En los noventa aterriza en el territorio contrabandista de Arousa uno de los cerebros de la trama Gürtel: Pablo Crespo, colaborador del entonces consejero de Obras Públicas José Cuiña, que llegó a competir con el narco Pablo Vioque por el trono del rey de las intrigas en la ría. El trío que un día acabó con la paciencia de Fraga, el formado por Cuiña, Crespo y Vioque, se confabuló para preparar otra maniobra golpista y descabargar de la cúpula del partido en la comarca al exalcalde Rivera Mallo, que acabó abandonando por un tiempo la militancia. Crespo asumió entonces la presidencia del PP local, de la que se retira en 1995 para dar el salto a Santiago y ocupar hasta 2003 la secretaría de organización de los populares gallegos. Una carrera meteórica que acabó en prisión. Ahora se investiga su participación en la trama ilegal de financiación del PP relacionada con los apuntes del extesorero Luis Bárcenas.

En 1996, Fraga ordenó la fulminante destitución de Pablo Vioque en la Cámara de Comercio de Vilagarcía. La maniobra, orquestada en la sombra por José Cuiña y Pablo Crespo, fue muy oportuna: un año después, el juez Baltasar Garzón detuvo al abogado y lo embarcó en una larga travesía judicial que terminó con su fallecimiento en diciembre de 2008. Vioque se llevó a la tumba los secretos que tantas veces amenazó con desvelar, aunque dejó una sorpresa para el final. Ya en estado terminal por una enfermedad, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía Anticorrupción, que le facilitó una nueva identidad para declarar contra el capo de la mafia rusa Kalashov. Este pacto final con la justicia y el hecho de que no exista certificado de su defunción ha sembrado incluso dudas sobre si Pablo Vioque está vivo o muerto. Años después de hacerlo con el narco, Fraga destituyó a Cuiña y a Crespo de sus cargos en la Xunta y en el partido para abrir paso a Feijóo. Fue entonces, en 2003, cuando el ahora presidente de la Xunta le confesó al patrón el gran secreto: su vieja amistad con un célebre contrabandista llamado Marcial Dorado.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365191629_786463.html

EL JUEZ TAÍN DICE QUE LA POLICÍA LE PIDIÓ QUE HABLARA DE LAS FOTOS

El partido socialista preguntará al ministro del Interior quién dio la orden

El partido socialista preguntará en el próximo pleno al ministro del Interior quién dio la orden a la policía para que pidiera al juez Taín que dijera que las fotografías del narco con Feijóo a las que tuvo acceso durante la investigación no le parecían relevantes. Fue el propio Vázquez Taín quien aseguró ayer que habló sobre las fotos del presidente de la Xunta junto a Marcial Dorado porque se lo pidió la policía con el objeto de despejar cualquier duda sobre el origen de las imágenes publicadas en EL PAÍS, según informa el Faro de Vigo.

Taín acudió a Celanova a presentar su libro sobre el Códice Calixtino y reiteró que las fotografías del narco con Feijóo a las que tuvo acceso durante la investigación no le parecían relevantes, por lo que no fueron incautadas en ninguno de los dos registros de la vivienda. Además, quiso restar valor a las declaraciones que la esposa de Dorado, Otilia Ramos, realizó ayer a Europa Press, en las que afirmó que las polémicas instantáneas "se las llevaron en uno de los registros". El juez insistió en que en ninguno de los registros en los que él participó se incautaron fotos de Feijóo y Dorado, aunque desconoce "si alguien robó algo" en un tercero que se realizó para inventariar los bienes. "Me parece muy extraño porque los registros judiciales son muy rigurosos, la secretaria va tomando nota de todo lo que se hace y nadie, incluso el juez, se puede mover de su vista", añadió. "Yo salí a la palestra porque me lo pidió la policía para despejar cualquier sombra de duda sobre ellos", aseguró el juez al Faro de Vigo.

Por otra parte, el partido socialista ha pedido este viernes copia de la totalidad de los contratos de suministro energético, de combustible e informáticos realizados por la Consellería de Sanidade y de los centros hospitalarios

dependientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) entre los años 1992 y 1998, toda vez que el ahora presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ejerció como secretario general de Sanidade entre 1991 y 1996. El objetivo de esta petición de información, como ha señalado el viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu es conocer si la relación del ahora máximo mandatario autonómico con el narcotraficante Marcial Dorado estaba "exenta de intereses".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/05/galicia/1365158008_579202.html

FEIJÓO TAMBIÉN VIAJÓ A CASCAIS Y A LA ISLA DE IBIZA CON MARCIAL DORADO

El narco sale desde prisión en defensa de la versión del dirigente popular

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no solo se paseó en yate por la ría de Vigo con el contrabandista reconvertido en narcotraficante Marcial Dorado. Feijóo también viajó, según él mismo ha reconocido a este diario, a la localidad portuguesa de Cascais y a Ibiza con el contrabandista a mediados de los años noventa y en compañía de otras personas. Además de viajar frecuentemente a Portugal para controlar varias fincas y plantaciones de albariño al norte del país, Dorado solía organizar fiestas de fin de año con familiares y amigos en un hotel de Cascais a las que Feijóo fue también invitado. El presidente gallego no quiso pronunciarse ayer sobre estas fiestas.

Testigos de aquellas fiestas navideñas recuerdan al ahora presidente entre los comensales, así como en el chalé que Marcial Dorado tiene en la Illa de Arousa, donde se reunían para este tipo de celebraciones festivas. A ellas también asistía el chófer de la Xunta, socio y testaferro de Dorado, Manuel Cruz, el amigo de Feijóo que hizo las presentaciones entre él y el contrabandista. Feijóo también admitió a este diario que había viajado a Ibiza, siempre acompañado de otras personas, donde Dorado solía ir a pasar parte de sus vacaciones de verano con la familia. El entonces número dos de la Consejería de Sanidad de la Xunta se dejó fotografiar a bordo del yate que Dorado tenía permanentemente fondeado en la isla, el Oratus, y que fue intervenido por Aduanas en 2009, a raíz de la operación por blanqueo de dinero que derivó de su implicación en redes de narcotráfico por la que se encuentra actualmente en prisión.

Feijóo se negó ayer de nuevo a aclarar cuándo se produjo su última conversación con Dorado, después de que el juez que lo encarceló por narcotráfico desvelase que la policía pinchó llamadas telefónicas de ambos entre 2001 y 2003. Estas fechas suponen que la relación se prolongó mucho más de lo admitido por Feijóo en un primer momento, ya que el presidente gallego aseguró que cortó los contactos con el célebre contrabandista en 1998, cuando se enteró por la prensa de que tenía una imputación judicial. Ayer fue el propio Dorado quien rebatió la versión del juez que lo mandó a la cárcel y aseguró, a través de su abogado, que "desde el año 98 no ha mantenido" ningún contacto "ni personal ni telefónico" con Feijóo, según informa Europa Press.

El letrado José Antonio Tuero asegura que su cliente le ha confirmado "lo que había manifestado el señor Feijóo", que "no ha tenido una relación personal estrecha", sino que se conocieron por "otra persona". Y añade que es "absolutamente falso" que hablase por teléfono con el presidente gallego entre 2001 y 2003, como ha destapado el juez y admitido Feijóo. Tras la reunión semanal de gobierno, Feijóo se parapetó ayer en el mutismo en una comparecencia ante los medios de comunicación, salvo para asegurar "con rotundidad" que la mujer de Dorado jamás le había chantajeado con difundir las fotos. "Estoy convencido de que hay que estirar este asunto", protestó en la comparecencia de ayer ante los medios, "pero, lamentablemente, los que querían montar una infamia no pueden seguir estirándolo, salvo que prosiga la infamia", resolvió.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/galicia/1365102942_664497.html

EL PRESIDENTE CAMBIA DE ESTRATEGIA Y YA NO DARÁ MÁS DATOS HASTA IR AL PARLAMENTO

El presidente insiste en la coincidencia de sus declaraciones con las del juez

Alberto Núñez Feijóo cambia de estrategia. El presidente de la Xunta de Galicia empieza a echar el freno a su política de transparencia, que incluía su disposición a someterse —en contraposición a los dirigentes nacionales de su partido— a las preguntas de los periodistas, una actitud con la que decidió afrontar el espinoso asunto de su amistad con el contrabandista convertido en narcotraficante Marcial Dorado, convencido de que tendría corto recorrido. Pero la sucesión de declaraciones (suyas y del juez José Antonio Vázquez Taín) de estos días ha comenzado a resquebrajar su propio argumento, y el titular de la Xunta ha optado por no contestar tampoco él a las preguntas de los informadores. Al menos a las

incómodas.

La habitual comparecencia ante los medios de comunicación para informar de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Gobierno gallego se convirtió ayer en una amarga tribuna para el mandatario gallego. Acompañado, inusualmente, de su vicepresidente, Alfonso Rueda, y visiblemente afectado por la continuidad en el tiempo de su indeseado protagonismo desde que EL PAÍS publicara el domingo las fotos en las que aparece disfrutando de un viaje de placer en el yate de Dorado, Feijóo se quitó de encima a los periodistas anunciando que tiene "mucho interés" en responder a todas las cuestiones, pero que solo lo hará "en sede parlamentaria", en la comparecencia fijada para el próximo miércoles.

Aferrado a su versión inicial, el presidente de la Xunta insiste en la coincidencia de sus declaraciones "palabra por palabra" y las del juez Vázquez Taín sobre el punto final de su relación con el narcotraficante. Sin embargo, él la fechó en las declaraciones iniciales a este periódico "alrededor de 1997", mientras que el lunes pasado precisó que "vio" a Dorado por última vez "como consecuencia de la muerte" de Manuel Cruz. El fallecimiento del chófer de conselleiros de la Xunta y testaferro de Dorado sucedió en 1999. Lo que tampoco coincide con lo destapado por el juez: que Feijóo y Dorado mantenían el contacto entre 2001 y 2003.

Feijóo obvia el baile de años. "El juez que consideró que procedía el encarcelamiento de Dorado habló con claridad y la infamia finalizó". Dio por zanjada ayer la cuestión sin explicar por qué sospechó, como dijo, que Manuel Cruz era testaferro del famoso narco.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/galicia/1365103787_929241.html?rel=rosEP

EL PRESIDENTE DE MADRID ABOGA POR VETAR LA PUBLICACIÓN DE FOTOS COMO LAS DE FEIJÓO

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha asegurado en una entrevista en esRadio que es partidario de establecer "límites" a la hora de las publicaciones de los medios de comunicación porque hay que "cuidar" el "daño" que se hace a personas e instituciones. "Estamos en una situación en la que vale todo a efectos de publicación en los medios de comunicación", se ha quejado. Para González, el hecho de que Feijóo hace 20 años tuviera una relación con una persona que luego resultó estar implicada "en operaciones de narcotráfico no aporta nada desde el punto de vista de la legalidad y su actividad política". Sin embargo, ha añadido que "le está produciendo un daño social en medio de la opinión pública" que, en su opinión, "no tiene que ver con sus responsabilidades políticas". "No es aceptable ni admisible, tiene que haber un límite", ha insistido.

Y es que, en su opinión, quien ve ahora esos titulares y las fotografías publicadas piensa que Feijóo ha tenido una relación ahora. "Deberíamos establecer un límite porque el daño que eso produce a las personas y a la institución se tendría que cuidar", ha finalizado. La Asociación de la Prensa de Madrid ha apuntado que la legislación actual ya impone unos límites "suficientemente claros" a la libertad de expresión y al derecho de información y rechazó cualquier intento "de imponer la opacidad".

Horas después de sus llamativas declaraciones, González las puntualizó. "Vaya por delante que la libertad de expresión y la de información son derechos constitucionales que respeto y están ahí. No me refería a eso", se corrigió. "Se me ha preguntado por unas fotos de Feijóo con una persona que muchos años después resultó condenada, y lo que he planteado es que muchas veces eso produce un daño enorme desde el punto de vista de la opinión pública. [Dorado] no ha tenido ninguna relación desde el punto de vista político o de la gestión de Feijóo", argumentó. En el momento de las fotos Marcial Dorado era un conocido contrabandista de tabaco en Galicia.

También la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que se está "atacando" a Alberto Núñez Feijóo por ser un "gran presidente" de la Xunta de Galicia y ha insistido en que "ha explicado todo lo que tiene que explicar" en relación con las fotografías publicadas en las que aparece con el narcotraficante.

En una entrevista concedida a la cadena SER, Pastor ha calificado de "absolutamente injusto lo que se está haciendo, señalando con el dedo a Feijóo" y ha añadido que el presidente gallego "no conocía nada de ese señor que fuera reprochable". "No lo conocía y, cuando conoció que había cosas que podían ser reprocharles o que podía estar en actividades no lícitas, no tuvo más relación con este señor. Como conozco a Feijóo, sé que es una persona honorable, sé que es una persona íntegra. Creo al señor Feijóo en todo lo que ha dicho", ha manifestado. En este sentido, la titular de la cartera de Fomento, ha recordado que tiene "mucha relación" con Núñez Feijóo. "Para mí es un gran presidente de la Xunta de Galicia. A lo mejor precisamente en eso lleva la penitencia, en que es un gran presidente y a lo mejor se

le ataca por eso. Me parece una persona honorable y desde luego que dice la verdad", ha subrayado

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/04/actualidad/1365067516_499917.html?rel=rosEP

FEIJÓO MANTUVO CONTACTOS CON DORADO CUANDO SE LE INVESTIGABA POR NARCOTRÁFICO

Pinchazos policiales revelan conversaciones con el narco entre 2001 y 2003

El presidente aseguró que cortó la relación hacía 1997 cuando supo que el narco era objeto de pesquisas judiciales

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha cansado de repetir esta semana que su relación con el narco Marcial Dorado, destapada por fotografías de sus vacaciones juntos, fue fruto de su "ingenuidad" en los años noventa, cuando desconocía que su compañero de ocio era un contrabandista de tabaco perseguido por la justicia. Sin embargo, el juez que encarceló a Dorado por narcotráfico años después reveló ayer que la policía grabó conversaciones telefónicas de Feijóo y Dorado entre 2001 y 2003, unos contactos que también ha admitido a este periódico el líder del PP gallego a través de un portavoz. Feijóo aseguró a EL PAÍS el pasado fin de semana que cortó la relación cuando se enteró alrededor de 1997 que Dorado estaba siendo investigado por traficar con tabaco y en la rueda de prensa del lunes afirmó que la última vez que "vio" a Dorado fue "como consecuencia de la muerte" de su amigo común, el chófer de consejeros de la Xunta y testaferro del narco Manuel Cruz, en 1999.

La oposición acusa al presidente del Gobierno gallego de mentir, pero Feijóo defiende que no hay contradicción entre las explicaciones que ha dado hasta ahora y sus conversaciones telefónicas con el narco entre 2001 y 2003. Un portavoz del dirigente popular se aferra a la literalidad de sus palabras y sostiene que "como consecuencia de la muerte" de Cruz en 1999 no implica que el último contacto fuera en ese año. ¿Y cuál fue entonces el último año en que habló o vio Feijóo a Dorado? El presidente se niega a aclararlo. Las fotos del presidente de la Xunta y el narco ni fueron intervenidas en los registros a raíz de su implicación en el narcotráfico ni formaron parte de un sumario judicial. Así lo afirmó ayer el juez José Antonio Vázquez Taín, que abrió una investigación a Dorado en 2001, dos años antes de que fuera detenido tras la captura de un barco con 5,4 toneladas de cocaína. Taín explicó que entonces, en presencia del fiscal y el responsable de Aduanas, se hallaron unas fotos en un mueble del salón del chalé de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra) y que después de comentarlas entre ellos las dejaron en el cajón donde estaban. "Las vimos y alguien reconoció a Feijóo; tampoco entonces tenía tanta relevancia política", explica Taín.

El juez que consiguió procesar a Dorado por primera vez por tráfico de drogas no ha podido asegurar que aquellas instantáneas fueron las mismas que EL PAÍS publicó el domingo pero sí recuerda que Feijóo estaba en un barco con el contrabandista y otras personas. "Si no son esas, eran parecidas", comentó. Sobre las intervenciones telefónicas que ordenó en el transcurso de la investigación, Taín puntualiza que fueron muchas y no recuerda cuántas conversaciones entre Feijóo y Dorado se interceptaron: "Es imposible recordar el número, pero carecían de absoluto interés porque eran llamadas en un contexto de ocio o para felicitar las Navidades, algo que encaja con el talante de Marcial, y como esas había cientos que se escucharon pero sin ninguna validez para la causa". Pese a que estas conversaciones se registraron entre 2001 y 2003, Taín afirma con rotundidad que Feijóo —que desde enero de 2003 era consejero de Obras Públicas de Fraga— y el contrabandista nunca se vieron por aquellas fechas, algo que, según el juez, ha quedado acreditado en los continuos seguimientos policiales que se le hicieron a Dorado por ser uno de los sospechosos de la banda que preparaba el transporte de cocaína.

Después de la detención del narco el 5 de noviembre de 2003, otro consejero de la Xunta, Xesús Palmou, le dijo al juez que el entonces presidente gallego, Manuel Fraga, quería preguntarle algo. A continuación, el fundador del PP le llamó y le dijo: "Tengo sobre mi mesa la dimisión de un consejero [por Feijóo] y quiero saber si hubo algo más después de una vieja amistad". Taín recuerda que le contestó tajantemente que no. El juez aclaró además que nunca ha afirmado que EL PAÍS le hubiera mostrado en mayo de 2012 fotos de Feijóo y Dorado como aseguró el diario El Mundo en su edición de ayer.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/galicia/1365012667_4977777.html?rel=rosEP

PACHI VÁZQUEZ CONSIDERA QUE FEIJÓO "MINTIÓ" TRAS LAS REVELACIONES DEL JUEZ TAÍN

El líder de los socialistas gallegos se pregunta, cómo fue investigado Núñez Feijóo para determinar que no hay nada irregular

Taín revela que se relacionó con Feijóo más allá de 2000

El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, ha asegurado hoy que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mintió cuando dijo que cortó relaciones con el ahora narcotraficante condenado Marcial Dorado, según las revelaciones del juez Vázquez Taín al diario El Mundo.

El juez Vázquez Taín, que investigó y ordenó el encarcelamiento de Dorado, sostiene en una entrevista en ese diario que en esa investigación a partir de 2001 y durante dos años más había conversaciones del ahora condenado con mucha gente, entre ellos Núñez Feijóo, pero que no se derivaron responsabilidades, ha indicado. Vázquez entiende, según ha dicho hoy en conferencia de prensa, que con estas declaraciones el presidente gallego "mintió" el pasado lunes a toda España cuando dijo que cortó relación con Dorado en 1998 y que por lo tanto "debe presentar su dimisión". El líder de los socialistas gallegos se pregunta, además, cómo fue investigado Núñez Feijóo para determinar que no hay nada irregular. "¿Hubo diligencias previas, un interrogatorio, un procedimiento abreviado... cómo se llega a la conclusión de que no hay vinculación?", cuestiona Vázquez. Además, pide al presidente gallego que "deje de decir que el PSdeG" es el responsable de la publicación de sus fotografías con Marcial Dorado en EL PAÍS y le recomienda "que busque en su entorno", porque, "recordando la frase de Aznar: los responsables no están en montañas lejanas ni en desiertos remotos", ha concluido.

También ha indicado que "no se le escapa a nadie que hubo elecciones" hace cinco meses en Galicia, por lo que si el PSdeG las hubiera tenido ese hubiera sido el momento para haber hecho un 'uso torticero', como lo haría él, aunque los socialistas, ha dicho, no lo hicieron. Sobre la comparecencia de Feijóo en el Parlamento en próximo 10 de abril, el líder socialista ha asegurado que "si va a decir que no sabía si eran Picos de Europa o Andorra... Se lo voy a recordar yo: era Andorra", ha manifestado el líder del PSdeG, en alusión a uno de los viajes reconocidos de Feijóo con Marcial Dorado en la década de los noventa que, según dijo, no recordaba adónde había sido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/galicia/1364988970_561271.html?rel=rosEP

EL JUEZ QUE DETUVO A DORADO REVELA QUE SE RELACIONÓ CON FEIJÓO MÁS ALLÁ DE 2000

El magistrado José Antonio Vázquez Taín revela ahora que pinchó el teléfono a Dorado en la investigación que arrancó en 2001 y que grabó conversaciones posteriores del narco con el presidente de la Xunta

Feijóo ha asegurado que cortó su relación con Dorado hacia 1997, cuando se enteró de que estaba inmerso en causas judiciales y que le vio por última vez en un funeral en 1999

Desde que unas fotos publicadas por EL PAÍS destaparon la controvertida relación que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y el célebre contrabandista Marcial Dorado en los años noventa, el presidente de la Xunta no ha dejado de insistir en que desconocía las actividades a las que se dedicaba su compañero de vacaciones y que cortó sus contactos con él hacia 1997, cuando se enteró de que estaba inmerso en causas judiciales. Sin embargo, en unas declaraciones publicadas hoy en El Mundo, el juez que detuvo a Dorado en 2003 por narcotráfico, José Antonio Vázquez Taín, revela que durante sus pesquisas, que arrancaron en 2001, pinchó el teléfono del narco y grabó conversaciones entre este y Feijóo. Aunque Taín —titular en aquellos años del juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa— insiste en que las escuchas no destaparon nada delictivo, el dato aportado por el magistrado contradice la versión del presidente de la Xunta, que hasta ahora ha asegurado que dejó de hablar con el narco hacia 1997 y que la última vez que lo vio fue en 1999, en el entierro de su amigo Manuel Cruz, testaferro de Dorado.

La investigación de Taín a Dorado por narcotráfico arrancó en 2001 y se denominó Operación South Sea. Incluyó pinchazos telefónicos y registros en las viviendas de Dorado. En aquel año, con Aznar de presidente del Gobierno, Feijóo era presidente de Correos y en enero de 2003 se incorporó a la Xunta como consejero de Obras Públicas. "Durante la investigación hubo observaciones de las conversaciones telefónicas de Núñez Feijóo y Marcial Dorado. Esas conversaciones no se consideraron en ningún momento delictivas; ni siquiera se detectaron indicios indicativos de nada", señala Taín a El Mundo sobre el sumario que él abrió en 2001. En los registros, dice Taín, se hallaron fotos de Feijóo con Dorado (la

esposa del narco asegura que hay muchas más imágenes). "Cuando hacemos el registro nosotros sabíamos que las fotos estaban allí. Buenos, esas y muchísimas fotos más, porque en esas fechas Dorado era un empresario muy activo y muy dado a sacar fotografías. De hecho, podrían aparecer más fotos del presidente y de mucha gente más... Pero no se incautó ninguna foto porque eran irrelevantes para la investigación", relata el juez.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado esta mañana que "el juez que encarceló a Marcial Dorado ha hablado claro" y considera que, con las palabras de José Antonio Vázquez Taín, "la infamia se acabó". En declaraciones a los medios en Vigo recogidas por Europa Press, el presidente gallego ha reiterado que, desde que se publicaron sus fotos en EL PAÍS con el narcotraficante Marcial Dorado, ha intentado "explicar la verdad de la situación, con la mayor celeridad posible, la mayor sinceridad posible y la mayor transparencia posible". Feijóo no ha hecho alusión a las contradicciones entre la versión del juez y la suya sobre las fechas y duración de su relación con el narco y ha asegurado: "El juez ha concretado que lo que yo estaba contando era cierto". Feijóo ha destacado su disposición a "seguir dando explicaciones", para lo que se ha remitido a su comparecencia, el próximo miércoles, en el Parlamento gallego. "Galicia bien merece la explicación y la verdad", ha concluido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/galicia/1364983698_272996.html

LAS FOTOS DE FEIJÓO CON DORADO ALIENTAN NUEVAS SOSPECHAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Las amistades peligrosas del actual presidente de la Xunta coinciden con la etapa del imputado en la Gürtel Pablo Crespo al frente de la financiación de los populares gallegos. Rajoy fue presidente de AP de Pontevedra y de la Diputación provincial en pleno apogeo del contrabando en el que estuvieron implicados alcaldes y dirigentes conservadores.

El presidente de la Xunta ha luchado siempre por desvincularse de la trama Gürtel y su potente conexión con el PP gallego a través de Pablo Crespo, ex secretario de Organización (1995-2003) y número dos de Francisco Correa hasta la imputación y detención de ambos por corrupción. Alberto Núñez Feijóo, cuando se le pregunta por Crespo como detonante de una presunta financiación ilegal de todo el partido, tal y como indican las últimas investigaciones judiciales, apela a su militancia tardía en el PP y asegura que él responderá de los hechos que se corresponden con su liderazgo del partido en Galicia, al que accedió en 2006.

Sin embargo, el "hecho" que se le ha presentado ahora en forma de fotografías con el narcotraficante Marcial Dorado y aunque sean de "hace casi 20 años" -como él se ha esforzado en recordar una y otra vez en su rueda de prensa de ayer-, se trata de otra vuelta de tuerca de un clásico de la política gallega que comienza ya en la transición: la relación entre el narcotráfico y AP-PP o, lo que es lo mismo, la convivencia -identificación, en muchos casos- de los capos del contrabando de tabaco y el tráfico de drogas con los políticos conservadores liderados por Manuel Fraga antes de ser éste relevado por Feijóo.

La vehemencia con la que Feijóo ha pretendido desentenderse de la etapa de Fraga y los comienzos de AP-PP en Galicia podrían estar pasándole factura, razonan en su partido, más allá de la estrategia de la oposición socialista y nacionalista, que recuerdan ahora al presidente y al PP gallego (sobre todo, al de Ourense de José Manuel Baltar) cómo se ensañaron con el vicepresidente gallego Anxo Quintana (BNG) cuando se publicaron las fotos de éste en el yate de Jacinto Rey, propietario del Grupo San José y adjudicatario entonces de un importante paquete de megavatios en un concurso eólico que generó gran polémica. Precisamente, fue el entonces periódico de Rey, Xornal de Galicia (hoy desaparecido), el que publicó junto a Público la foto de Rajoy en el yate de Os Caneos, el clan de narcotraficantes "más importante de España", según la policía. El PP gallego dio el pistoletazo a las elecciones europeas de 2009, subido en el Moropa.

Fuentes del PP gallego recuerdan a Feijóo que la vinculación AP-PP-narcotráfico "también está en las hemerotecas"

Feijóo insistió en su rueda de prensa y una y otra vez, en su "muy cordial" relación con Quintana, desvinculándolo así de la publicación de sus fotos con el narco Dorado en el yate de éste. El presidente de la Xunta ha recordado implícitamente las advertencias que lleva recibiendo hace diez años sobre la existencia y posible publicación de esas fotos, pero evitó dar los nombres de quienes le habrían advertido. Que el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, había lanzado el aviso en alguna ocasión -ahora se sabe que con conocimiento de causa- sobre el "ahí-ahí" de la relación entre el delfín

de Rajoy y el narcotráfico, está en las hemerotecas; concretamente, en las de febrero de 2011 ("Feijóo y el narcotráfico andan ahí-ahí", dijo exactamente el líder socialista gallego).

Sin embargo, quienes no figuran en los archivos de prensa en los términos del PSdeG -ni se espera que se pronuncien públicamente más que para dar apoyo a su líder- son los miembros del PP con quien el presidente de la Xunta mantiene una lucha soterrada de años por el control del partido y que no aceptan la diferenciación que hacen Feijóo y los suyos -incluidos Rajoy o José Manuel Romay Beccaría- entre un "PP transparente y honesto" (del propio Feijóo en adelante, el antes conocido como PP del birrete) y un "PP oscuro, intrigante y caciquil" (de Feijóo hacia atrás e incluyendo en el mismo saco al condenado Crespo o a los tres barones del llamado PP de la boina, Francisco Cacharro, José Luis Baltar y el difunto Xosé Cuiña)

Nadie en el PP se atreve a desvincular a estos viejos enemigos internos de Feijóo -"Pero recolectores de votos igual que él, de ahí su influencia en el tiempo"- de la circulación y publicación de las fotos. Las fuentes consultadas recuerdan que con Rajoy se intentó hacer lo mismo en idéntica batalla por el control del PPdG, pero las imágenes que decían poseer y que demostrarían una presunta homosexualidad del hoy presidente del Gobierno nunca se publicaron. El propio Rajoy, sin embargo, ha culpado de ese bulo en diversas ocasiones al abogado, narcotraficante y cerebro de narcotraficantes Pablo Vioque, el todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por obra de Fraga, que también lo destituyó en cuanto se enteró de sus actividades ilegales.

Las fuentes consultadas van más allá e interpretan la aparición de las fotos de Feijóo y Dorado como un aviso al presidente, pues se le está recordando con ellas, aunque sea de forma implícita, una serie de datos "que también están en las hemerotecas", añaden. Apuntan más alto, además, al recordar que Rajoy fue un hombre del PP y de AP, con responsabilidades destacadas -diputado autonómico ya desde 1981, con 26 años- en plena gestión del ex tesorero Rosendo Naseiro, involucrado en la presunta financiación ilegal del PP. Precisamente, el caso Naseiro se reveló casualmente en el marco de una investigación por narcotráfico, lo cual llevó, paradójicamente, a invalidar las escuchas que probaban los delitos, pero cuyas transcripciones están en todos los históricos de prensa. Rajoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 1986 y 1991 y líder de AP en esta provincia entre 1987 y 1989. Entonces, ascendió ya a la Ejecutiva nacional del PP de la mano de José María Aznar.

Antes de irse a Madrid, el actual jefe del Ejecutivo ya había frecuentado junto a Fraga el Parador de Cambados o los restaurantes Casa Rosita (Cambados) y el de la mujer del capo Luis Falcón, Falconetti, en compañía del hoy narco protagonista Marcial Dorado, pero también de alcaldes y altos cargos de UCD, AP o PP implicados después en delitos de contrabando y narcotráfico, como Vicente Otero Pérez (Terito), que fue condecorado con la medalla de oro y brillantes de AP; José M. Prado Bugallo (Sito Miñanco), José Ramón Barral (Nené), Manuel Lorenzo (Ferrazo), Alfredo Bea Gondar, Luis Jueguen, José Manuel Vilas, el citado Falconetti, el abogado Vioque o Evaristo Juncal. Éste fue defendido con vehemencia, precisamente, por el actual presidente de la Diputación de Pontevedra y amigo personal de Rajoy, Rafael Louzán, cuando en 2010 se informó de que Juncal había traspasado empresas a varios de los narcos citados en estas líneas. Louzán fue también la mano derecha -y consejero de alguna de sus empresas, sin él saberlo, según dijo- del contrabandista Nené, ex alcalde de Ribadumia (Pontevedra) De momento, sólo Laureano Oubiña, máximo exponente del tráfico de hachís en España, reconoció en una entrevista desde la cárcel a la edición española de Vanity Fair haber financiado a AP y UCD

<http://www.publico.es/452984/las-fotos-de-feijoo-con-dorado-alientan-nuevas-sospechas-de-financiacion-ilegal-del-pp>

CHÓFER, TESTAFERRO Y AMIGO DE FEIJÓO

Manuel Cruz, el hombre que puso en contacto al presidente de la Xunta con Dorado, era conductor de conselleiros de Fraga y socio del contrabandista

Manuel Cruz, chófer de consejeros de la Xunta y amigo del entonces número dos de la Consellería de Sanidade y actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se había introducido en el extenso entramado societario que había vertebrado Marcial Dorado cuando hizo las presentaciones entre el político y el contrabandista en una visita a A Illa de Arousa, la localidad pontevedresa donde reside el popular tabaquero.

Era finales de 1994 y Cruz llevaba una doble vida. Mientras frecuentaba la mansión de Dorado para hablar de negocios, atendía sus ocupaciones más públicas como chófer de destacados políticos gallegos

del PP —como el exconsejero y exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría— y militaba en el partido en Ferrol, la ciudad donde vivía. Cruz era el hombre de los contactos y un aventajado intermediario gracias a sus relaciones personales y de confianza con la élite política del momento. Una de las primeras operaciones que gestionó fue la compra de los Astilleros Hércules, SL, filial de Astafersa, una empresa vinculada al que fuera consejero de la Xunta de Manuel Fraga, Juan Fernández, para el que además trabajó de chófer. El amigo de Feijóo se implicó de lleno en varias de las empresas de Marcial Dorado en el suministro de petróleo a hospitales, como es el caso de Petrogalicia, SL o Xatevín, SL, que gestionaba una gasolinera en Caldas de Reis y otra en A Illa de Arousa, en el puerto deportivo. El testaferro del contrabandista llegó incluso a colocar a varios familiares en este extenso entramado de 40 sociedades que creó Dorado.

A raíz de la condena de Marcial Dorado por narcotráfico, la Agencia Tributaria puso en 2009 al descubierto la inmensa capacidad empresarial del ya narcotraficante a través de la denominada Operación Dourado. La estructura financiera del contrabandista que se relacionó con Núñez Feijóo en los noventa tenía ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos, donde se le embargaron tres millones de euros en cuentas bancarias, además de un patrimonio inmobiliario inmovilizado que supera los 12 millones. En esta causa por blanqueo estaría implicado el propio Manuel Cruz, aunque había fallecido diez años antes en un accidente de tráfico. En la investigación el que fue chófer de consejeros de la Xunta aparece como nexo del holding empresarial del contrabandista. De hecho, su viuda llegó a declarar en la Audiencia Nacional como presunta implicada en los intereses de Marcial Dorado al igual que una sobrina de Cruz, socia fundadora de los Astilleros Hércules. En esta empresa se construyó clandestinamente la lanzadera Nautillus que Dorado vendió al grupo de transportistas a los que se intervino el alijo de cocaína por el que ahora está en prisión.

Cruz también entabló relación en los noventa con otro destacado dirigente del PP en Galicia, Juan Juncal, exalcalde de Ferrol y actual senador, que ejerció de asesor y apoderado de Cruz en la compra de una empresa. Fue en 1995 y, según reconoció el propio Juncal, el chófer de la Xunta, al que ya conocía de verlo por Ferrol, acudió a su asesoría fiscal para que le representara en la compra de una empresa informática “inactiva”. “Anfra Sistemas era una empresa inactiva; las empresas inactivas se compran y se venden”, explicaba hace tres años el senador del PP a este periódico sobre aquella operación. Anfra Sistemas está bajo la lupa de la Audiencia Nacional en la causa contra Dorado por blanqueo. Juncal sostiene que se enteró luego de las estrechas relaciones de su cliente con el entonces contrabandista.

Solo seis después de firmar la compra de Anfra Sistemas con el asesoramiento de Juncal, Cruz inyectó en esa sociedad cinco millones de pesetas (30.000 euros) y adquirió a través de ella otra firma, JF Oil, una sociedad que gestionaba gasolineras en la provincia de Pontevedra. Quien le vendió a Cruz JF Oil era también alguien vinculado al PP: Evaristo Juncal Carreira, un ingeniero de la Xunta que desde los años noventa fue socio de al menos una decena de empresas de explotación de gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios. Con los años, Evaristo Juncal Carreira terminó siendo presidente del partido en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, candidato a la alcaldía por el PP y delegado territorial de Urbanismo en Pontevedra del Gobierno de Feijóo. Cuando este periódico publicó que tres de sus sociedades acabaron en manos de personas muy cercanas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico, el presidente de la Xunta lo destituyó.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/galicia/1364931622_753684.html

UN FRENAZO PARA EL MEJOR COLOCADO

Feijóo era hasta el domingo el más firme candidato a la sucesión de Rajoy

Varios dirigentes del PP creen que este caso le pesará y refuerza a Santamaría

En público, todos los políticos insisten en que solo piensan en el puesto que están ocupando en ese momento. En privado, prácticamente todos los administradores de alto nivel se mueven para preparar su siguiente ascenso en la escalera del poder. Alberto Núñez Feijóo no es una excepción. Nadie en el PP duda de sus legítimas aspiraciones al máximo cetro: ser líder del partido y presidente del Gobierno. Y hasta el domingo, era tal vez el candidato mejor colocado para suceder a Mariano Rajoy si es que este, hundido como está en las encuestas, decidiera no presentarse a la reelección en 2015 o si perdiera. ¿Han acabado las fotos con el entonces capo del contrabando Marcial Dorado con la carrera de Feijóo?

En el PP había este lunes división de opiniones. La mayoría cree que él ha reaccionado rápido y bien, y que podrá seguir sin problemas al frente de la Xunta, entre otras cosas porque acaba de ganar

cómodamente unas elecciones (hace cinco meses), tiene al partido muy controlado y la oposición es muy débil. Pero la mayoría de los consultados cree que a medio plazo este golpe de imagen es muy duro y pesará en su batalla por ser el sucesor de Rajoy.

Feijóo, hasta el domingo, era el mejor colocado por muchos motivos. Primero por sus éxitos electorales, algo básico en política: ganó a la primera y repitió éxito en plena crisis. Segundo por su trayectoria política con largo recorrido de gestor centrado en la sanidad —fue presidente del Insalud—. Tercero por una evidente cercanía a Rajoy, que apostó por él. Cuarto por una cuestión de edad: es de la generación siguiente al líder, mientras Alberto Ruiz-Gallardón, otro candidato, es coetáneo de Rajoy. Y por último, porque siempre se ha movido bien en los círculos del poder no solo regional, sino especialmente madrileño, una ciudad a la que acude cada semana para forjar su agenda nacional. Feijóo lleva muchos años trabajándose el PP, con buenas relaciones con la mayoría de los barones autonómicos, el poder económico y los medios de comunicación. Es un estratega, y aunque siempre dice que su única aspiración es Galicia, todos saben que no es cierto.

“Está tocado pero no hundido”, analizan otros, que ven como pasajera la polémica

A la mayoría les parece bien esa ambición, natural en política, aunque últimamente habían generado resquemor su distanciamiento de la dirección nacional por la gestión del caso Gürtel. Mientras el PP y Rajoy guardaban silencio, él aparecía con frecuencia en los medios de comunicación y respondía a todas las preguntas, siempre muy claro, en su estilo. “El PP tiene que pedir perdón”, “Bárceñas nos ha engañado a todos”, “Bárceñas se ha aprovechado del PP”, eran frases suyas que la dirección del PP no se animaba a pronunciar. Cada vez que comparecía, dejaba en mal lugar, por comparación, tanto a María Dolores de Cospedal como al propio Rajoy. “Creo que él piensa como yo, pero es el presidente del Gobierno, no puede entrar en ciertos temas”, le justificó hace dos semanas en Cuatro.

Esta actitud le ha distanciado de Cospedal, otra aspirante nunca confesada a la sucesión. Tanto que enseguida se dispararon las hipótesis de fuego amigo en la publicación de las fotografías, algo a lo que ninguno de los consultados le otorga mucha fuerza y que el propio Feijóo quiso despejar apuntando indirectamente a la oposición. Este tropiezo del gallego con unas fotos que todos admiten como “muy inoportunas” refuerza en esa carrera por la sucesión, según un análisis muy extendido en el PP, a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta. El deterioro de imagen de Cospedal con el caso Bárceñas —que Santamaría ha evitado tras los Consejos de Ministros para no quemarse— y el tropiezo de Feijóo dejan a la vicepresidenta en mejor posición, aunque todo es temporal y queda mucho todavía para esa disputa. “Feijóo está tocado pero no hundido”, analizaba otro veterano.

Aunque de perfiles distintos —Feijóo tiene más edad y más trayectoria— los tres tienen algo en común: son funcionarios que entraron en política desde la administración, no muy ideologizados. El propio Feijóo ha reconocido que votó al PSOE en el pasado. Los tres empezaron a militar en el PP tarde, en 2000. Santamaría pasó a la política después de trabajar como técnica con Rajoy en Administraciones Públicas y Cospedal hizo lo mismo tras incorporarse al equipo de Javier Arenas en Trabajo. El único pata negra de Alianza Popular en el cuarteto de sucesores en potencia es Gallardón, cuyo perfil político siempre le convierte en protagonista.

Otros veteranos señalan que por mucho que a Feijóo esto le pueda venir muy mal —hasta ahora estaba immaculado— la carrera de la sucesión de Rajoy es mucho más larga de lo que parece. Estos dirigentes están seguros de que el presidente se volverá a presentar en 2015. “¿Tú crees que Rajoy ha pasado todo lo que ha pasado para estar solo cuatro años, en plena crisis, y marcharse justo cuando empieza la recuperación? No tiene sentido. Si la economía mejora un poco, y con el PSOE como está, tiene muchas opciones de volver a ganar en 2015. La sucesión es en 2019, y hacer quinielas para entonces es absurdo”, sentencia un veterano.

Los veteranos creen que Rajoy será el candidato en 2015; la sucesión, en 2019

Otros muchos no ven consistencia a las críticas. La publicación de las fotos llega en un momento en que los políticos, y en especial los del PP, se sienten acosados y tienden a mostrar solidaridad con sus compañeros. “Esto es una muestra de cómo está la política actualmente, del absurdo al que hemos llegado. Si después de toda la vida en política lo único que le pueden sacar a Feijóo es que hace 20 años fue amigo de ese hombre...”, señala un dirigente popular.

En cualquier caso, Feijóo quiso lanzar este lunes un mensaje claro a su partido al contar que Rajoy supo en 2003 que existían estas fotos. Le avisó de nuevo en 2009, y hablaron dos veces este fin de semana. Y siempre le apoyó, según confirman en La Moncloa. Esto es, mensaje para navegantes del PP, para

rivales internos que puedan pensar que Feijóo es ahora un dirigente que está solo: tiene todo el apoyo del líder que decidió apostar por él pese a que sabía que existían esas fotos. Eso sí, quedó por explicar por qué ninguno de los dos dijo nada en público sobre las amenazas y las fotos durante estos años.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/01/actualidad/1364842860_780716.html

EL PSOE PIDE QUE FEIJÓO ACLARE SI LA XUNTA FACTURÓ A EMPRESAS DE DORADO

El líder del PSdeG exige al presidente que enseñe las facturas de cuando era alto cargo de Sanidade porque ve "indicios" de que Dorado se benefició de contratos públicos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá el próximo 10 de abril en el Parlamento gallego para aclarar su relación en los años noventa con el entonces contrabandista Marcial Dorado, en prisión actualmente por narcotráfico. La junta de portavoces de los grupos parlamentarios ha acordado esta mañana la comparecencia, que sustituirá a la habitual sesión de control que incluyen los plenos en la Cámara autonómica. La intervención de Feijóo estará abierta a las preguntas de la oposición que, sin embargo, no podrán plantear las habituales cuestiones sobre otros temas propias de las sesiones de control al presidente.

El PSdeG ya ha adelantado esta mañana algunos de los aspectos que el presidente de la Xunta, a su juicio, debe aclarar en su comparecencia. El secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, ha defendido esta mañana en una entrevista en RNE que hay "indicios" de "relaciones comerciales" entre empresas de Dorado o de sus testaferros y la Consellería de Sanidade, de la que Feijóo era alto cargo en los años de aquella relación. Según ha afirmado Vázquez, el presidente de la Xunta "tiene que comparecer en sede parlamentaria y enseñar las facturas de cuando fue secretario general técnico de la Consellería de Sanidade y luego secretario general del Sergas entre el 92 y el 98. Facturas con los testaferros". "Cuando habla de su amigo Manolo Cruz, hay que decir que este era el testaferro de Marcial Dorado. Compraba gasolineras y las ponía a nombre de Marcial Dorado", ha señalado el socialista.

Vázquez sostiene que "si Galicia supiera de esa relación en tiempo y forma, Feijóo hoy no sería presidente de Galicia". "La droga hacía estragos en la juventud gallega y uno de los máximos representantes del órgano que luchaba contra la drogadicción en Galicia estaba en el yate" de Marcial Dorado, haciendo viajes por Andorra y Portugal que no sabe quién los pagaba", ha concluido el líder socialista.

Los que sí han salido en defensa del presidente gallego han sido sus compañeros del partido popular. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha defendido a Feijóo describiéndolo como "uno de los activos más importantes en el Partido Popular" y ha añadido, "rotundamente", que no debe dimitir tras hacerse públicas las fotografías junto al narcotraficante Marcial Dorado que destapan la relación del ahora líder de los populares gallegos con el entonces célebre contrabandista. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha declarado que la explicación "pública y transparente" que ha ofrecido el presidente de la Xunta le ha convencido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/galicia/1364899988_017486.html?rel=rosEP

QUINTANA: "SI ME PASA A MÍ LO DE FEIJÓO TENGO LA GUARDIA CIVIL EN MI CASA"

El exvicepresidente, molesto con que se equipare su foto con un empresario a la del presidente

Las fotografías publicadas por EL PAÍS del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto al narcotraficante Marcial Dorado ha devuelto a la actualidad otra famosa fotografía, la del exvicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, junto a Jacinto Rey, propietario de la Constructora San José y adjudicatario de concursos de la Administración gallega, en un yate. En aquel momento el PP pidió su dimisión y Feijóo pronunció la famosa frase que ahora muchos le recuerdan: "El Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías".

Quintana ha concedido una entrevista este martes a la cadena SER, en la que ha asegurado: "Si me pasase lo de Feijóo, seguramente tendría una pareja de la Guardia Civil en mi casa". El exvicepresidente se ha mostrado muy molesto con la equiparación de la citada fotografía con la imagen del actual presidente de la Xunta junto al narcotraficante gallego. "No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver", ha recalcado.

Quintana ha afirmado que, en su caso, la situación fue manipulada porque, ha dicho, la imagen de él junto al empresario gallego se realizó un año antes de que él fuese vicepresidente de la Xunta y cinco años antes de que se convocase el concurso eólico. "Ni yo podía pensar que sería vicepresidente, ni que habría un concurso eólico", ha explicado sobre aquella imagen. "Él [Feijóo] sabrá si tiene que dejar el cargo o no, no voy a hacer lo que hicieron conmigo", ha zanjado Quintana.

Sin embargo, el secretario general del PP gallego y vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que la diferencia "fundamental" entre las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el contrabandista y narcotraficante, Marcial Dorado, y las del exvicepresidente gallego recae en el cargo político de los retratados. Rueda ha esgrimido que las imágenes de Feijóo son "de hace 20 años cuando en ningún caso tenía responsabilidades de gobierno como las que tiene ahora" y que las de Quintana "son de un vicepresidente cuando era vicepresidente con un empresario que después recibió importantes contratos de ese gobierno", un extremo que siempre ha sido negado por el portavoz nacional del BNG.

Feijóo era el número dos de la Consellería de Sanidad de Fraga cuando se dejaba fotografiar al lado del narco en barcos y casas de su propiedad. Las imágenes de Quintana fueron tomadas un año antes de ser nombrado vicepresidente de la Xunta y cinco años antes de la adjudicación del concurso eólico en el que ese empresario recibió megavatios.

Rueda no ha querido responder a los medios cuando se le ha preguntado si es peor fotografiarse con un empresario o con un narco. "Me ha preguntado por las diferencias entre ambas fotografías y se las he explicado", ha zanjado. Durante la campaña electoral de las autonómicas de 2009, Rueda y Feijóo no solo pidieron la dimisión de Quintana; también reclamaron al expresidente socialista, Emilio Pérez Touriño, la destitución de su socio en el bipartito que gobernaba Galicia. El secretario general de los populares gallegos también ha alegado que fue Touriño el primero en criticar las fotografías de su propio vicepresidente. Además, ha descartado que las imágenes hayan sido distribuidas ahora por miembros del PP para frenar la carrera política de Feijóo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/galicia/1364892817_494426.html?rel=rosEP

EL CONTRABANDISTA MÁS CÉLEBRE DE GALICIA

Dorado fue el tabaquero gallego que levantó el mayor emporio con el negocio del contrabando

También fue el último en caer en las redes del narcotráfico

A Marcial Dorado, el contrabandista más célebre de Galicia, la tormenta política por su vieja amistad con el presidente de la Xunta le ha cogido entre rejas, cumpliendo una condena de 14 años por narcotráfico. Aunque en su pequeño pueblo natal de A Illa de Arousa (Pontevedra) muchos vecinos que trabajaban para él fueron testigos de aquella relación o habían oído hablar de ella, el famoso traficante de tabaco gallego, siempre reacio a hablar con los medios de comunicación, nunca quiso comentar el asunto, al menos en público. Antes de que Alberto Núñez Feijóo y el contrabandista se conocieran, Dorado llevaba años siendo un permanente objetivo policial y mediático. A finales de los ochenta fundó su propia compañía para introducir en España el tabaco de contrabando que proveía a las tres principales bandas gallegas el delegado de la Reynolds en Europa Michael Haengui, apodado Roberto el Suizo. La denuncia judicial de un distribuidor de tabaco que había sido encerrado en un camión congelador del que milagrosamente salió con vida fue la voz de alarma para que un juez tirara del hilo hasta impulsar la gran redada contra la mafia tabaquera en diciembre de 1983, la primera en la que Dorado fue detenido.

Dorado fue procesado junto a otros 94 contrabandistas, tras una investigación que duró varios años. Pese al interés que el asunto acaparó en la sociedad gallega, la causa fue archivada cuando llegó a la Audiencia Nacional porque los delitos ya habían prescrito 15 años después. En medio de las maniobras dilatorias de los abogados para evitar el juicio, Dorado aparecía involucrado en la primera gran investigación internacional por blanqueo de dinero y era foco de la prensa europea. Precisamente su conexión con el empresario suizo y los continuos viajes a Basilea para contratar los cargamentos de tabaco le situaron en primer plano del proceso judicial franco-suizo llamado Peseta Connection. Corría el año 1989 y el interés de las autoridades helvéticas era llegar al origen de un ingente tráfico de divisas, cuantificado en 26.000 millones de pesetas, una cantidad que habían sido ingresada en la sociedad Porespa de Haengui. Varios años después, Dorado y otros contrabandistas de la época quedaron apartados del caso por falta de pruebas.

En la madrugada del 12 de junio de 1990, Dorado fue uno de los detenidos de la Operación Nécora. Entonces pasó varias semanas en prisión, hasta que al juez Baltasar Garzón no le quedó otra que

dejarle en libertad por la inconsistente retahíla de acusaciones que el arrepentido Ricardo Portabales había firmado contra él como uno de los capos del narcotráfico. Mientras Dorado era recibido en su isla natal entre aplausos de sus convecinos, otros se manifestaban con pancartas contra su excarcelación en localidades del entorno.

En junio de 1992, tres años antes de las fotografías con Feijóo, el Gobierno Civil de Pontevedra había confeccionado su propio archivo de los capos gallegos cuando algunos ya habían dado el salto al tráfico de cocaína y hachís. En un anexo del amplio informe policial y bajo el apéndice de Clave Blanco (individuos sobre los que se realizan investigaciones), aparece Marcial Dorado como uno de los contrabandistas que ya tienen conexiones con el sector de la construcción a través de una inmobiliaria, Ladomar SA, y de la hostelería.

El informe cita las rías gallegas, País Vasco y Santander como el radio de las operaciones de Dorado, mucho más amplias que las de sus colegas, y califica de “muy alta” la capacidad del tráfico marítimo de su compañía. Además, detalla una por una las 12 embarcaciones que utiliza para las descargas de tabaco, algunas construidas en Inglaterra, y menciona a los 35 operarios que el capo tiene en nómina.

Entre los grandes tabaqueros de la época, Dorado es el que más ha sabido rentabilizar el negocio, forjando el mayor emporio en dinero y patrimonio. Hábil y huidizo, ha intentado escapar de su propia repercusión mediática, convencido de que la prensa fue culpable de su vía crucis judicial. Pinchazos telefónicos en los que Dorado negocia la venta de una lanzadera que tenía en el puerto griego de El Pireo propiciaron su implicación en el narcotráfico en octubre de 2003, tras la captura del segundo mayor alijo de cocaína organizado por bandas gallegas. Dorado confesó su actividad como contrabandista, pero siempre ha negado su relación con el tráfico de drogas: “Soy víctima de un montaje y han ido a por mí sin pruebas”, declaró.

Con la sentencia firme por narcotráfico, el Servicio de Vigilancia Aduanera desplegó toda su artillería para poner al descubierto su fortuna. En 2009 todos sus bienes y negocios conocidos fueron embargados y tasados en 12 millones de euros, aunque se estima que entre dinero y propiedades su valor podría duplicarse. Mientras el fallo espera a ser revisado por el Tribunal Constitucional, Dorado está pendiente del escrito de acusación de la fiscalía de la Audiencia Nacional por la causa de blanqueo. También ha solicitado un permiso penitenciario que hasta ahora se le ha denegado.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/01/actualidad/1364843352_787731.html?rel=rosEP

FEIJÓO CREE QUE SE INTENTA TRUNCAR SU CARRERA CON SUS FOTOS CON UN NARCO

El presidente de la Xunta se niega a dimitir porque dice que no ha hecho "nada ilegal"

Alega que las imágenes que destapan su relación con Dorado son "simplemente unas fotos"

Asegura que habló con Rajoy y Cospedal tras la conocer la publicación de las imágenes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha restado importancia a las fotografías publicadas por EL PAÍS que han destapado su relación de amistad con el contrabandista Marcial Dorado en los años noventa, cuando el dirigente popular era número dos de la Consejería de Sanidad del Gobierno gallego. “Son simplemente unas fotografías antiguas y así se ha corroborado en diferentes investigaciones judiciales”, acaba de afirmar Feijóo, que ha aclarado que no piensa dimitir porque, ha señalado, no ha hecho “nada ilegal”. “Si hubiese pensado que esas fotos eran un riesgo [para mi carrera], no me hubiese presentado a las elecciones [gallegas]”, ha añadido sobre su relación con Dorado, que ahora cumple condena por narcotráfico. “Las fotos son lo que son: fotos. No hay nada detrás. Ni contratos con la Xunta o el Insalud, ni financiación del PP porque yo en aquellos ni siquiera militaba en el PP”.

El líder del PP gallego, bien situado en la línea para suceder a Rajoy, se ha escudado en la existencia de una mano negra a la que no pone nombre que, desde 2003, cuando fue nombrado por Manuel Fraga vicepresidente de la Xunta, no ha dejado de amenazarle con sacar a la luz su relación con Marcial Dorado para truncar su carrera política: “Se me ha intentado amedrentar en todo este tiempo y no lo han conseguido. Seguiré diciendo lo que pienso”. Para defenderse, Feijóo ha prometido “transparencia” pero no ha aclarado quién pagaba los viajes que hizo con Marcial Dorado y ha asegurado que entonces desconocía tanto el pasado de su anfitrión en los yates –había sido detenido dos veces por contrabando– como a qué se dedicaba el conocido contrabandista en aquel entonces.

Preguntado por el tren de vida que llevaba Dorado en aquella época entre yates, mansiones y

tototerrenos de lujo, y si no le hizo desconfiar que su poder adquisitivo pudiera proceder del contrabando puesto que ya había sido detenido en la Operación Nécora y toda la prensa le señalaba como uno de los capos de la mafia gallega, Feijóo admitió que sí. "Investigué pero me dijeron que no había sido condenado". Y reveló que desde 2003 o 2004 cuando supo de la existencia de este material comprometedor, lo puso en conocimiento del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga, y también de Mariano Rajoy. Según dejó entrever, ninguno de los dos dirigentes del partido le reprocharon nada. Durante los años de las excursiones junto al capo gallego, Feijóo era alto cargo de la Xunta de Fraga y presidente del Insalud. "Cometí la torpeza de no investigar con más profundidad con mis propios medios", ha reconocido hoy en su comparecencia en el Parlamento gallego. "El grado de ingenuidad de hace 20 años es difícil de justificar hoy".

Uno de los destinos que ha reconocido Feijóo de sus viajes con Dorado era hasta ahora Andorra. Sin embargo, esta mañana el presidente de la Xunta ha reculado. Asegura que se equivocó, que lo que él creía que era Andorra se trataba en realidad de los Picos de Europa. "Había nieve", ha justificado el líder del PP gallego. Sobre si su relación con el contrabandista derivó en adjudicaciones públicas a sus empresas desde la Consejería de Sanidad de la que era el número dos, Feijóo ha subrayado que nunca "firmó ni hizo ningún tipo de contrato" con las sociedades de Dorado. "No pongo la mano en el fuego por todas las personas con las que he comido y viajado en los últimos 20 años", ha añadido.

El presidente de la Xunta y el contrabandista Marcial Dorado.

El presidente de la Xunta se ha visto forzado a comparecer tras la publicación en el diario EL PAÍS de unas fotografías en un yate del contrabandista gallego Marcial Dorado en el año 1995, cuando Dorado ya había sido detenido en dos ocasiones: 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco, y en 1990. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 14 años.

Los grupos de la oposición han exigido esta mañana a Feijóo que presentara su renuncia. El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, ha advertido de que el presidente de la Xunta mantenía una "relación de estabilidad" con una persona "catalogada como narcotraficante" en los propios medios de comunicación y que había sido detenida y "condenada" en los años 80. En este sentido, ha considerado que "nadie puede seguir siendo presidente del Gobierno gallego con esta carga a las espaldas". El BNG ha advertido que esta "relación" es un hecho "de suficiente gravedad" como para que el presidente gallego presente "su dimisión inmediata". Francisco Jorquera, portavoz del partido, ha asegurado que "una persona que mantiene este tipo de relaciones es indigna de ser presidente de Galicia".

La número dos de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Diéz ha advertido de que "no son unas relaciones normales" y se ha preguntado "qué tipo de negocios hacía el señor Feijóo con el señor Dorado" y "qué tipo de viajes a Andorra". "Porque no son normales", ha manifestado. La dirigente política ha recordado que "como con naturalidad" en las listas del PP en los años 90 "concurrían personas vinculadas al narcotráfico", de ahí que haya calificado de "amistades peligrosas" la de Feijóo con Dorado.

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/01/actualidad/1364811168_250855.html

CUANDO EL PRESIDENTE SÍ PEDÍA DIMISIONES POR "MALAS COMPAÑÍAS"

El PP exigió el cese de Quintana (BNG) por una fotografía en un yate con un constructor, cuando este no tenía ningún cargo público

Era "Feij009" quien hablaba entonces. En la descarnada campaña autonómica de 2009, aquella que tumbó al gobierno bipartito y dio a Alberto Núñez Feijóo la presidencia de la Xunta de Galicia, el líder popular, que se presentó ante los gallegos bajo la citada marca comercial, utilizó como arma contra el jefe de filas del BNG, el vicepresidente Anxo Quintana, una vieja foto de este a bordo del yate del poderoso empresario gallego Jacinto Rey, propietario de la Constructora San José y adjudicatario de concursos de la Administración gallega. Una de las frases de Feijóo publicadas entonces en relación a esta imagen, "el Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías", se ha vuelto ahora en su contra. El actual presidente de la Xunta no ha podido esquivar el paralelismo de las fotografías que, en el caso de Quintana, también eran anteriores a su toma de posesión como vicepresidente del Gobierno gallego. Ahora la oposición le pide a Feijóo que sea consecuente con lo dicho, y esta mañana la pregunta de los periodistas ha sido inevitable en su comparecencia en el Parlamento.

Al respecto, Feijóo ha explicado que cuando conoció la fotografía de Quintana y Rey, ya había sido advertido de la existencia de sus instantáneas con Marcial Dorado. A él, según ha relatado, le

amenazaron varias veces desde el año 2003 y también en 2009 con que podrían salir a la luz las imágenes con el narco. Y después de reconocer, como recogen las hemerotecas, que efectivamente hizo declaraciones en aquella campaña electoral relativas a la foto comprometedor de su rival, se ha excusado diciendo que “el primero en hablar” del tema fue quien era socio de Gobierno de Quintana, el socialista Emilio Pérez Touriño.

En la feroz guerra por el poder en Galicia, según Feijóo, el PP criticó aquel retrato a bordo porque hacía poco que una consejería nacionalista del bipartito había beneficiado a Jacinto Rey en el concurso eólico. Pero, dicho esto, Feijóo (esta vez Feijóo 2013, vencedor de sus segundas elecciones hace cinco meses) ha añadido: “Mantengo una relación cordial con el señor Quintana y nunca puse en duda su honorabilidad”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/01/galicia/1364820242_005539.html?rel=rosEP

FEIJÓO Y EL CONTRABANDISTA

El presidente gallego mantuvo en los años noventa una estrecha amistad con Marcial Dorado, entonces capo del tabaco en Galicia y ahora en la cárcel por narcotráfico

Fueron amigos durante unos años, y uno acabó al frente del Gobierno gallego y el otro en la cárcel por narcotráfico. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP, mantuvo a mediados de los años noventa, mientras ocupaba altos cargos en los Gobiernos gallego y central, una estrecha amistad con el histórico contrabandista Marcial Dorado Baúlde. Entonces Dorado ya era muy conocido por sus actividades como uno de los jefes del contrabando de tabaco en Galicia, y Feijóo ocupaba destacados puestos en la Administración sanitaria, primero en la autonómica y luego en la estatal. La relación incluyó invitaciones a Feijóo a la casa y al barco de Dorado, además de viajes que realizaron juntos.

En aquella época el contrabandista había sido detenido dos veces: en 1983, en la primera gran redada contra el negocio ilegal del tabaco en las Rías Baixas, y en 1990, por orden del juez Baltasar Garzón, dentro de la Operación Nécora, aunque luego lo excarcelaron y no llegó a ir juicio. Años después de su relación con Feijóo, Dorado fue arrestado por narcotráfico y ahora mismo se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena a 14 años.

EL PAÍS se reunió con Feijóo el pasado día 20. En esa reunión el presidente de la Xunta pudo ver las fotos a las que había tenido acceso este periódico y ofreció su versión de los hechos. EL PAÍS había obtenido las fotos días antes, pero no contactó con el líder conservador gallego hasta que comprobó la veracidad de las mismas. Feijóo y el contrabandista se conocieron a través del que fuera durante años testaferro de este último en sus múltiples negocios, Manuel Cruz López —luego fallecido en accidente de tráfico—, militante del PP en Ferrol y chófer oficial de consejeros de la Xunta como José Manuel Romay Becaria, principal impulsor de la ascendente trayectoria de Feijóo como gestor en la Administración y de su meteórica carrera política hasta su nombramiento como sucesor de Manuel Fraga en 2004.

Feijóo conoció a Dorado a través de un testaferro de este, chófer en la Xunta

Cuando conoció al contrabandista, Feijóo tenía 34 años, vivía en Santiago y era el número dos de la Consejería de Sanidad que dirigía Romay. Su amistad con Dorado se mantuvo unos meses después de la marcha del actual presidente gallego a Madrid, reclutado por el propio Romay para dirigir el desaparecido Insalud. El entonces prometedor alto cargo empezó a acompañar a Cruz en sus asiduas visitas a la espléndida mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra), donde se celebraban comidas y reuniones a las que asistía personal de confianza del contrabandista, incluso algunos mandos uniformados.

La amistad entre el político y el contrabandista se fue estrechando. Entre 1995 y 1998, Feijóo acudió durante los veranos a otra casa que Dorado tenía en Baiona, cerca de Vigo. En estas escapadas no faltaba el paseo a bordo del yate que el empresario tabaquero tenía atracado en el Club Náutico de esta localidad turística. En algunas de esas excursiones participó también la que era entonces la pareja del que llegaría a ser jefe del Gobierno gallego. La afición de Dorado por los barcos de recreo llevó a Feijóo a pasear a bordo de uno de los yates insignia del contrabandista, el Oratus, que tenía fondeado en Ibiza. Esta embarcación sería intervenida años después en una operación contra el blanqueo de dinero, tras la detención de Dorado en relación con un cargamento de seis toneladas de cocaína, en octubre de 2003.

Feijóo también fue con Dorado a Portugal, donde este tenía negocios, y a Andorra. El Principado era entonces uno de los destinos frecuentes de los contrabandistas para evadir dinero. Personas próximas a

Dorado, algunos exsocios en la importación ilegal de tabaco, recuerdan a Feijóo como una persona discreta pero muy integrado en las fiestas que organizaba su anfitrión. Era el amigo de Cruz, mano derecha del contrabandista, y apenas conocían detalles de su vida profesional. La sorpresa vino años después, cuando alcanzó la presidencia de la Xunta.

En aquella época, Dorado ya había amasado una de las más potentes fortunas a la sombra del negocio tabaquero con varias sociedades inmobiliarias y gasolineras. En Portugal se había introducido en el mercado vinícola con una importante plantación mientras orientaba parte de sus inversiones hacia Marruecos con la producción de aceite.

En esa época el contrabandista ya había sido detenido en dos ocasiones

Feijóo explica que empezó a tratar a Dorado, en torno a 1995, a través de Cruz, con quien había trabado amistad en la Xunta. Su relación, asegura, se limitó al ámbito personal en reuniones en su tiempo de ocio en las que participaban más amigos. Reconoce que estuvo en su barco, en su casa y que al menos hizo un viaje con él, aunque insiste en que siempre había más amigos presentes. El presidente de la Xunta niega tajantemente que tuviera cualquier tipo de lazo económico con Dorado ni que estuviera al tanto de sus negocios ni que su relación con él hubiese tenido la menor influencia en sus decisiones como cargo público. Insiste en que también desconocía que Cruz participase en los negocios del contrabandista.

Según el jefe del Gobierno gallego, en aquel momento confió en la palabra de los amigos comunes, que le aseguraron que Dorado ya no se dedicaba al contrabando de tabaco. Y resalta que, cuando se produjeron los hechos, tampoco había ningún procedimiento judicial abierto contra él. Hacia 1997, en cuanto tuvo noticia de que la Audiencia Nacional había abierto una investigación a Dorado por una supuesta operación de contrabando, el presidente gallego afirma que cortó toda la relación con él y que desde entonces ni se han vuelto a ver ni han hablado nunca.

En conversación con EL PAÍS, Feijóo señala que en 2004 tuvo conocimiento de que fotografías suyas con Dorado habían sido requisadas durante un registro policial en el domicilio de este. Más tarde, durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2009 —en las que alcanzó la presidencia de la Xunta—, asegura que dirigentes del PSOE le amenazaron con difundir esas imágenes si el PP no bajaba el tono de sus ataques. El presidente gallego sostiene que transmitió a los socialistas que no le importaba que se hicieran públicas porque entendía que no le comprometían en nada ilegal. En esos mismos días, el PP hizo circular una imagen del entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, en el yate de un empresario que había recibido contratos de la Xunta. Mariano Rajoy llegó a pedir la dimisión de Quintana por esa foto.

Hicieron viajes juntos y Feijóo fue invitado a la mansión del capo

Desde su implicación en la gran redada contra los tabaqueros gallegos en 1983, Marcial Dorado, uno de los 94 procesados en este macrosumario, es uno de los que más páginas de periódicos ha acaparado. Aunque el asunto fue archivado por la Audiencia Nacional 15 años después, Dorado Baúlde fue objeto de múltiples investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) hasta el punto de que en 1998 la dirección de Aduanas en Madrid ya había diseñado la operación para detenerle bautizada como Cabeza de Vaca, en alusión al conquistador español y su relación con la leyenda de El Dorado. La operación fue desactivada coincidiendo con la fulgurante destitución de la entonces cúpula del SVA. De los históricos del contrabando de tabaco en Galicia, Dorado era el único al que nunca se había podido implicar en el tráfico de drogas.

Cuando su relación con Feijóo ya había concluido, Dorado acabó condenado a tres años por sobornar a dos guardias civiles. En 2003 le detuvieron por primera vez acusado de narcotráfico. Era el último de los históricos en caer y el único que permanecía en pie viviendo de las rentas de la importación de tabaco ilegal.

El presidente de la Xunta afirma que creyó que Dorado ya no era contrabandista

Dorado, que pronto cumplirá 63 años, comenzó en el contrabando como jefe de una de las tres grandes compañías que se formaron en la clandestinidad a finales de los años setenta en la Ría de Arousa, denominadas ROS, Sito Carnicero y Marcial, por los nombres de sus jefes. Parte de su niñez la había pasado a bordo del barco en el que su padre traía y llevaba pasajeros y víveres de la isla de Arousa a tierra. Al igual que sus colegas, Dorado se refugió en Portugal cuando se desató en las Rías Baixas la gran redada de diciembre de 1983. Y fue uno de los que coincidieron en un lujoso hotel de la localidad de Viana do Castelo, donde se alojaban los fugitivos contrabandistas, con el entonces presidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (de Alianza Popular), cuando este asistía a un acto oficial.

Albor accedió a entrevistarse con los fugados, que le pidieron que intermediara para negociar su regreso a España. Meses después, Dorado y el resto de los exiliados se entregaron voluntariamente en la Audiencia Nacional, donde el caso se archivaría años más tarde porque los delitos prescribieron antes de ser juzgados. Durante esa época, históricos contrabandistas gallegos como Vicente Otero Terito eran reconocidos militantes de Alianza Popular

Cuentas en Suiza y en Bahamas

Antes de conocer a Alberto Núñez Feijóo, Marcial Dorado ya era un habitual en los periódicos por asuntos como la llamada peseta connection, una investigación judicial franco-suiza que en 1989 le implicó en una red internacional de blanqueo. La investigación nunca dio fruto y Dorado fue esquivando a la justicia hasta 2003, cuando Aduanas lo vinculó con un gran alijo de cocaína. La Audiencia Nacional le condenó a 17 años de cárcel, que el Supremo rebajó a 14. Dorado llegó a confesar su actividad como contrabandista pero negó que traficase con drogas.

En 2009, el juez Fernando Grande Marlaska ordenó el embargo de sus bienes, valorados en más de 12 millones de euros, incluida su mansión de A Illa de Arousa. Entre su patrimonio figuran tres estaciones de servicio, otras tantas bateas de mejillón, 170 fincas rústicas, 12 plazas de garaje y 16 locales comerciales. En los bancos, la Agencia Tributaria le bloqueó 4,1 millones de euros: 1,8 millones en Suiza, 1,5 en el paraíso fiscal de las Bahamas, 300.000 en Portugal y 500.000 en España. En la causa estaba imputado como testaferro Manuel Cruz (el fallecido amigo de Feijóo), varios abogados y un teniente coronel de la Guardia Civil acusados de blanqueo de dinero. El asunto está ahora en manos del magistrado Javier Gómez Bermúdez, atascado por el volumen de respuestas a las comisiones rogatorias enviadas sobre todo a Suiza que hay que traducir.

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/30/actualidad/1364678135_744979.html

LA OPOSICIÓN EXIGE A FEIJÓO UNA EXPLICACIÓN CONVINCENTE O QUE DIMITA

El presidente gallego, dispuesto a explicar en el Parlamento su relación con un narco

"Un alto cargo no puede estar en malas compañías", dijo en 2009

El pasado atropelló ayer a Alberto Núñez Feijóo. No solo el de 1995, de cuando datan las fotografías del ahora presidente de la Xunta en un yate del contrabandista gallego Marcial Dorado publicadas por el EL PAÍS. A Feijóo le ha golpeado también un pasado más reciente, el de 2009, el de la durísima campaña electoral que le aupó a la Xunta a golpe de denuncia contra la coalición de socialistas y nacionalistas que en aquel momento gobernaba Galicia. Una de las piedras del escándalo que blandieron el PP y Feijóo fue la foto del entonces vicepresidente y líder del BNG, Anxo Quintana, en el yate de uno de los principales empresarios de Galicia, contratista de la Xunta. El líder del PP gallego extrajo una lección moral de aquel episodio: "El Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías". Ayer toda la oposición recuperó el recuerdo de aquella foto para exigirle una explicación convincente de sus años de amistad con quien era uno de los jefes de contrabando en Galicia o, en caso contrario, dimita.

Para hoy, está prevista la comparecencia de NuñezFeijóo, que estará acompañado, precisamente, por el portavoz del PP, Pedro Puy, uno de los que fue más duro y crítico con la foto de Quintana.

De los grupos de la oposición gallega, el BNG fue el más directo. Su líder, Xavier Vence, afirmó: "Galicia no se merece un presidente con ese tipo de relaciones cuando ya era alto cargo del Gobierno de Fraga. Es tremendamente grave y debe dimitir". La número dos de Alternativa Galega de Esquerdas, Yolanda Díaz, optó por una fórmula indirecta: "En países serios, por cosas mucho menores, dimitieron cargos de gran responsabilidad. Estamos hablando de relaciones con uno de los capos de la mafia gallega".

Los socialistas se mostraron más cautelosos y pusieron por delante la necesidad de que el presidente dé una explicación inmediata en el Parlamento gallego. "Si no lo hace, debe dimitir", afirmó el portavoz en la Cámara de los socialistas, Abel Losada. En declaraciones a la SER, Feijóo se mostró ayer dispuesto a explicar en el hemiciclo cómo entabló amistad, a mediados de los años 90, cuando era alto cargo de la Administración sanitaria autonómica y central, con un contrabandista que ya había sido detenido dos veces y cuyo nombre aparecía cada poco en la prensa como objeto de investigaciones policiales.

En la entrevista de la SER, al ser preguntado cómo era posible que no conociese entonces el historial de Dorado —que actualmente cumple condena de 14 años de cárcel por narcotráfico—, Feijóo respondió: "Sorprendentemente, no". La oposición sostiene que son excusas inverosímiles. "El único gallego que no

sabía en el 95 que Dorado se dedicaba al contrabando era Feijóo”, ironizó el socialista Losada. En sus varias entrevistas, el presidente gallego insistió en los argumentos que ya había ofrecido a este periódico cuando le mostró sus fotos con el capo del contrabando de tabaco. Que lo conoció por un amigo común —Manuel Cruz, un chófer de varios consejeros de la Xunta, ya fallecido, y a la vez testaferro de Dorado —, que su relación fue “indirecta” y que nunca influyó en ninguna de las decisiones que tomó como cargo público. También repitió la teoría de que esas imágenes circulaban desde hace tiempo con el propósito de “amedrentar”.

En situaciones de crisis, Feijóo hace justamente lo contrario de Mariano Rajoy. Frente al hermetismo del presidente del Gobierno, el gallego sacó un comunicado en la misma madrugada del sábado, en cuanto empezó a conocerse el contenido de la información de este periódico, en la que se brindaba a atender a todos los medios que lo desearan.

Ayer se multiplicó en las emisoras de radio, incluida la autonómica gallega, que abrió su informativo del mediodía con una entrevista al presidente para que este explicase su versión de las fotos. Feijóo ha anunciado además para hoy una inusual conferencia de prensa en el Parlamento gallego. Y también en contra de lo habitual estará acompañado por el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, uno de los miembros más dialogantes del partido, y no por el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP, Alfonso Rueda, el ariete de la campaña de descalificaciones de 2009.

Feijóo va a poner todo su empeño para intentar que este turbio episodio de su pasado no frene una carrera política en la que había ido ascendiendo peldaño a peldaño hasta situarse en la línea sucesoria de Rajoy.

En las últimas semanas, además, el presidente gallego se había convertido en uno de los barones del PP que con más contundencia ha reclamado medidas enérgicas en el caso Bárcenas. Incluso hace unos días provocó la incomodidad en la cúpula del partido con una entrevista en Abc en la que señalaba que la dirección del PP debe pedir disculpas por la actuación de su extesorero. Ese tipo de declaraciones, así como el compromiso de “regeneración democrática” con que llegó a la Xunta hacen más embarazosa su situación. Ahora es a él a quien le piden explicaciones.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/31/galicia/1364726217_228951.html

FEIJÓO LLEVA TRES AÑOS SIN PUBLICAR SUS DATOS DE IRPF TRAS PRESUMIR DE TRANSPARENCIA CUANDO ESTALLÓ EL ‘CASO BÁRCENAS’

En marzo de 2013 Feijóo publicó su declaración de IRPF correspondiente al año 2011, la última presentada en aquel momento. El presidente gallego calificó como una “exigencia moral” la necesidad de los políticos de ser transparentes. Desde entonces no ha vuelto a publicar su IRPF y la Xunta no explica por qué oculta los datos de las rentas percibidas en los tres últimos años.

“Una exigencia moral”. Así calificó en 2013 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la necesidad de que los dirigentes políticos fuesen transparentes. Meses después del estallido del caso de los papeles de Bárcenas, Feijóo hizo pública su declaración de bienes por segunda vez desde que llegó al poder —en 2011, tanto el presidente como los consejeros de la Xunta también revelaron sus patrimonios—. En ese momento, el dirigente gallego sostenía como máxima que “cuanta más transparencia, más tranquilidad para los ciudadanos”, y de hecho llegó a proponer en el Parlamento de Galicia que todos los diputados hiciesen públicos sus bienes, patrimonio y rentas.

“Voy a seguir dando las explicaciones que me solicite la Cámara y los gallegos. Voy a seguir tomando decisiones y voy a seguir garantizando la gobernabilidad de Galicia”, aseguró entonces Feijóo, que exigió al resto de grupos que diesen ejemplo “por el bien de la política”.

En aquel año 2013, Feijóo llegó a calificar como “una exigencia moral” la necesidad de que los dirigentes políticos fuesen transparentes. Pero esta postura del presidente gallego pronto quedó en agua de borrajas, ya que desde entonces el presidente de la Xunta no ha publicado más datos sobre sus ingresos y su patrimonio.

Los datos de Feijóo entre 2009 y 2012

Actualmente, en la web de la Xunta los ciudadanos pueden acceder a siete documentos relativos a Feijóo: las declaraciones de bienes de los años 2009 y 2012 —los años en los que accedió a su primer y segundo mandato, respectivamente—, las declaraciones de IRPF de entre 2008 y 2011 —ambos años

incluidos— y un documento donde se acreditan las nóminas recibidas por el presidente en el año 2012. Hay que tener en cuenta que, cuando se hizo pública esta documentación en marzo de 2013, la última declaración de IRPF que habían presentado los contribuyentes era la correspondiente al año 2011.

Desde entonces, Feijóo no ha hecho público ningún documento relativo a los siguientes ejercicios y la Xunta, a preguntas de infoLibre, no quiso explicar por qué oculta los datos de las rentas percibidas en los tres últimos años.

En otras palabras: cuando el escándalo de los papeles de Bárcenas estaba en su máximo apogeo, Feijóo se presentó como un abanderado de la transparencia fiscal y patrimonial de los políticos. Desde entonces, no volvió a publicar ningún dato más sobre la evolución de sus rentas y de su patrimonio.

En su declaración de bienes más reciente, con fecha de 2 de noviembre de 2012, Feijóo declaró tener 109.000 euros en un depósito a plazo fijo, otros 11.506 en una cuenta corriente y 82.509 en un plan de pensiones, así como varias propiedades inmobiliarias: dos viviendas, una en Madrid y otra en Vigo, y una plaza de garaje, también en la ciudad pontevedresa. El presidente también declaró poseer una finca rústica en Santiago de Compostela y otra urbana en la localidad de Moaña (Pontevedra), así como un coche de 2011. Todos estos bienes procedían de compraventas.

La declaración de bienes de Feijóo también incluía las rentas que percibió durante ese año: su sueldo como presidente de la Xunta, que ascendió a 76.765 euros, supuso la mayor parte de la retribución del dirigente, si bien los intereses de sus depósitos bancarios le reportaron casi 3.500 euros y con el alquiler de uno de sus inmuebles ganó 10.800 euros más. Feijóo complementó sus ingresos con 114 euros procedentes de los dividendos a los que tuvo derecho como poseedor de 75 acciones de Telefónica.

Las diferencias con respecto a su declaración del año 2009 son palpables, sobre todo a nivel dinerario. Y es que el presidente de la Xunta declaró poseer 45.377 euros en una cuenta corriente, así como un plan de pensiones con un valor de 51.183 euros; lejos, en cualquier caso, de las cifras que sumaba tan sólo tres años después. Sus ingresos también eran mucho más modestos: cobraba 31.040 euros como diputado en el Parlamento de Galicia, a los que se añadieron 839 euros en concepto de intereses por un depósito bancario y otros 149 euros por los dividendos de sus acciones de Telefónica.

Rajoy aún no ha publicado su IRPF de 2014

La falta de transparencia del Gobierno gallego llama la atención por la vehemencia con la que Feijóo defendió la publicación de las declaraciones de bienes e IRPF en 2013. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también hizo públicas en plena tormenta por la aparición de los papeles de Bárcenas sus declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio, así como sus retribuciones anuales desde el año 2003 hasta el 2013. Sin embargo, aún no ha publicado los datos correspondientes a 2014, a pesar de que hace casi dos meses que concluyó el plazo para presentar la declaración.

La publicación de estos datos vino acompañada de un comunicado en el cual Moncloa detallaba que Rajoy percibió entre 2004 y 2011 "su sueldo como diputado por Madrid más la retribución como presidente del PP, abonada en concepto de gastos de representación y declarada en su integridad", una cantidad total que ascendió a casi 1,1 millones de euros. Todo ello, explicaba la nota, sin contar las "rentas adicionales producto de su patrimonio invertido en deuda pública, valores y bienes inmobiliarios", así como las dietas del Congreso, exentas de tributación.

"En los ejercicios fiscales facilitados, el presidente del Gobierno abonó a Hacienda una cantidad total de 840.131 euros en concepto de cuota de su Impuesto de la Renta, y otros 30.161 euros como cuota del Impuesto del Patrimonio", remachaba Moncloa.

De igual forma, para encontrar una declaración de bienes de Rajoy hay que acudir a su ficha en la web del Congreso de los Diputados, cuando en 2011 detalló su patrimonio al tomar posesión de su escaño. En ese momento, el presidente del Gobierno declaraba tener un depósito bancario de 59.909 euros, así como 313.780 euros invertidos en un fondo de inversión, otros 143.181 euros en acciones y 80.572 en seguros de ahorro. En cuanto a sus bienes inmuebles, Rajoy declaró cinco propiedades urbanas: dos en Madrid —un apartamento y su vivienda habitual—, dos en Pontevedra —otro apartamento con plaza de garaje y una oficina— y el 25% de una cuarta vivienda en Canarias.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/08/20/fejoo_lleva_tres_anos_sin_publicar_patrimonio_irpf_pesar_presumir_transparencia_36670_1012.html

UN INFORME DE HACIENDA FRENA EL PROCESAMIENTO DE UN CARGO DE FEIJÓO

El caso por cuatro delitos acumula seis jueces y nueve años de trámites

Rogelio Martínez está acusado de fraude de fondos europeos cuando era alcalde

Tras media docena de jueces y nueve años de interminables trámites en diferentes tribunales, el procesamiento de Rogelio Martínez, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, por la comisión de los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad documental y prevaricación continuada, cuando era alcalde de su pueblo, se ha topado con un nuevo obstáculo. El cierre de la instrucción y su envío a juicio oral permanece nuevamente paralizado, a la espera de un informe que la fiscalía reclamó el pasado mes de febrero a la Agencia Tributaria. Según detallan las fuentes consultadas, el ministerio público —que pidió reiteradamente el archivo de la causa contra Martínez— afirma que, sin ese nuevo informe patrimonial de los técnicos de Hacienda, no puede formular el escrito de calificación, un documento imprescindible para que el juez pueda continuar los trámites previos a la orden de apertura de juicio.

Y es que, en el caso que salpica al superdelegado y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en la tercera ciudad de Galicia, los plazos judiciales se dilatan de forma reiterada desde que en 2006 fue llevado ante los tribunales por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Siete años después de aquella denuncia, en octubre de 2013, la instrucción concluyó (por segunda vez) que había indicios delictivos suficientes para ordenar el procesamiento de Martínez y los otros nueve imputados, por presunto fraude en el uso de fondos públicos concedidos por la Unión Europea para diferentes proyectos de cohesión en los años 1999 y 2000 que, a pesar de haber sido certificados, nunca se materializaron.

La decisión fue inmediatamente paralizada por una oleada de recursos presentada por los imputados, pero también por la fiscalía, que pidió el archivo de la causa porque, en su opinión, los delitos habían prescrito y las cantidades supuestamente defraudadas no alcanzaban la cantidad mínima para ser considerado delito. Hace 10 meses, en junio de 2014, la Audiencia de Ourense tumbó los recursos y avaló la decisión del juez que los situó a un paso del banquillo de los acusados. Era la tercera vez que Martínez reclamaba el sobreseimiento o archivo de una causa que pasó por tres jueces titulares y varios sustitutos.

A pesar de que la investigación concluyó formalmente hace 18 meses y de que la decisión de la Audiencia Provincial de enviar el caso a una vista oral es firme, el juzgado permanece a la espera de que todas las partes personadas califiquen los hechos y la responsabilidad de los imputados.

Este estancamiento es un capítulo más en la cadena de dilaciones que la instrucción acumula desde hace casi una década. Previamente, otros dos jueces intentaron archivar la causa. Nunca pudieron porque la Audiencia siempre ordenó su continuación. En enero de 2013, Martínez estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero la vista oral fue aplazada porque el juez decidió citar a más testigos y porque, además, encomendó el veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia a un jurado popular. El PSOE —también personado en la denuncia— recurrió aquella decisión ya que no le parecía adecuado y su propuesta fue aceptada. Finalmente será un magistrado el que decida. Ahora y a un paso de que se produzca un nuevo cambio de titularidad en el tribunal de Ribadavia, el caso vuelve a estar parado.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez relata la supuesta apropiación de fondos comunitarios concedidos al grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), que el delegado ourensano de la Xunta presidía cuando era alcalde de Arnoia, destinados a la construcción de una planta de biomasa nunca materializada pero que sí fue certificada por Rogelio Martínez, “a pesar de que sabía que no se había ejecutado, sino que se había llevado a cabo la reconstrucción de un galpón”. El juez también detalla ilegalidades en el cobro de subvenciones destinadas a la ejecución de talleres artesanales en los que siguió “estipulaciones similares a las de la planta de biomasa”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/10/galicia/1428682086_463056.html

LAS OTRAS 'AMISTADES PELIGROSAS' DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA LA CÚSPIDE DEL PP

El empresario Gerardo Crespo reconoce a 'Público': “Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas, en el de Romay Beccaría y en el de Carlos Negreira, alcalde de A Coruña”. Por su parte, el presidente gallego “dejó de cogerme el teléfono un mes después de que me lo hubiera

pinchado la UDEF".

El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el Parlamento autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para que explique los diferentes supuestos de corrupción en los que está inmerso el PPdG. Y que, en muchos casos, implican directamente a amigos o personas cercanas al presidente gallego. Las amistades peligrosas de Feijóo. La mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa.

Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre de su amigo más peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado hace apenas un mes a seis años de cárcel y a pagar 21,5 millones de euros por lavar dinero de la droga. En el decorado de este proceso, celebrado en la Audiencia Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos, pertenecientes a la flotilla que la Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia.

Gerardo Crespo: "Fraga era una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años"

El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las aguas arosanas en 1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el chalet del narco. A bordo del Oratus, el hoy presidente gallego y posible aspirante a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional, disfrutó de la calma de las mareas ibicencas en 1997.

Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa, condenado a 11 años de cárcel por un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportaba en 2003. En aquellos años, Dorado ya había sido portada de los periódicos regionales por su detención en el curso de la Operación Nécora contra el narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la categoría de juez estrella. Y todo el mundo en Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado. Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo.

Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano. Ocupa podio destacado, entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas, apodado El conseguidor por su habilidad al abrir puertas de la administración para facilitar adjudicaciones públicas. Su ex jefe, Gerardo Crespo, lo confirma en conversación telefónica con Público. Crespo y su padre, además, también eran amigos de Feijóo. Y, antes, de Manuel Fraga: "Una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP era AP, a los 18 años".

Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de cursos falsos para autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su teléfono la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su facturación con la Xunta pasó de 1.900.000 euros en 2012 a 36.000 euros el año siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber cometido ningún fraude.

Crespo pagaba al conseguidor Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia bancaria. "Yo a Feijóo lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi Lucas lo escogí porque me parecía la persona adecuada. Si luego él se basaba [para conseguir contratos] en sus amistades, es algo que contaré con calma. Pero no es un problema mío", señala tras ser preguntado acerca de si la amistad de Lucas con Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones de la Xunta a su empresa Azetanet.

También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico cuando la investigación era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado: "Feijóo me dejó de coger el teléfono a primeros de febrero de 2012 [un mes después de pinchar la UDEF su teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de coger. Yo me di cuenta de que algo pasaba. Ellos se enteran de que estaba siendo investigado y se desmarcan".

"Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor" De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. "Yo soy consciente de que Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero ganáramos, mejor. Son frases de Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a mí, y que han desaparecido de las grabaciones del sumario". Otra vez documentos desaparecidos. Según estas interesadas fuentes. Había ocurrido ya cuando desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta con el narcotraficante Dorado cuando fueron solicitados por la oposición.

—Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo —dice el

periodista—. ¿Financió usted de alguna manera al PP?

—En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di.

—¿Lo hizo por transferencia?

—No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a José Manuel Romay Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de Bárcenas; Romay fue el gran valedor político de Núñez Feijóo, y actualmente preside el Consejo de Estado]. Y, por supuesto, también hice donaciones a Carlos Negreira [alcalde popular de A Coruña].

Feijóo negó conocer al que había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería tras destaparse su implicación en la Gürtel

Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos coincidentes. Si Gerardo está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno de los más rutilantes imputados de la Gürtel: Pablo Crespo era el número dos de Francisco Correa, para ser exactos. Y Pablo Crespo es otro de los grandes amigos peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su nombramiento como conselleiro de Obras Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de Manuel Fraga, Feijóo nombró a Pablo Crespo miembro del consejo de Puertos de Galicia.

Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó conocer a aquel a quien había nombrado responsable de uno de los departamentos más importantes de su consellería.

En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a Carlos Negreira, actual alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de donaciones ilegales del otro Crespo, Gerardo.

Al banquero venezolano Escotet se le vendió Novacaixagalicia por mil millones tras ser rescatada por el Estado por 9.000

La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un banquero venezolano al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros cuando su rescate le había costado al Estado español 9.000. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) reconoció ese sustancioso décalage de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en sede parlamentaria haber sido uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo con el banquero venezolano. Escotet regresó a la actualidad internacional estos meses porque su nombre figura en la lista Falciani.

“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista gallega Marisol Soneira. “Este hombre tiene amigos muy peculiares”.

De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible cartel electoral en las generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las huestes de Mariano Rajoy. Feijóo tiene tiempo para meditarlo. No está obligado a convocar autonómicas hasta otoño de 2016. Pero hay que pensar en un posible adelanto según lo que ocurra en las municipales, confirman fuentes del PP gallego.

En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso, como los de Feijóo, puedes perder más

<http://www.publico.es/politica/otras-amistades-peligrosas-alberto-nunez.html>

LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP

Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta

La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido

La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese partido y de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas,

cuatro son miembros del órgano de dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar; el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el secretario del PP provincial, Rosendo Luis Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González; el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Castro; el diputado en Cortes Guillermo Collarte; diputados autonómicos, concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que reclama al diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez.

Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último auto dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los gastos electorales del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron facturados a nombre de estos cargos con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación electoral y de financiación de los partidos políticos”.

Publicidad para la campaña electoral

En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis Baltar, la juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte por importe de 12.443,10 —en concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los que figura Mariano Rajoy— y del secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por 9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo año también al PP y, según el auto judicial, en las declaraciones tributarias realizadas por la empresa y el partido no coinciden los importes relativos a su relación comercial.

De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de otros cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O Carballiño Montserrat Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las facturas en concepto de Estudio sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no constando que se haya reclamado su importe judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos facturados se corresponden con un encargo previo realizado por La Región a las empresas Infortécnica, Media Share Europe, SL.

La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la vicesecretaria provincial, senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado provincial Francisco José Fernández y de la diputada nacional Ana Belén Vázquez.

A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos políticos, Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU, Doal y Aquagest. En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial elecciones” que, sostiene la juez, “nada tiene que ver con el objeto social de la empresa”. Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, una por mes, abonadas por Aquagest a lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de las cuales “no tienen correspondencia” en sus respectivas contabilidades.

De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría podido financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de 2003, “al menos” dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de Publicidad y Diseño, SA,) a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se habría añadido Nacher Publicidad.

La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —condenado por prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor, visitó en Ourense, en el curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de 2011, para supuestamente entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de Vigilancia Audanera.

La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia,

Planos facturó 4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense, entonces diputado autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia publicitaria aparece “una facturación correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el secretario general de Emigración, Rodríguez Miranda, con 4.408 euros; la directora general de Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; el vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, con 4.120,32 .

Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el 2 de enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión “parece indicar un pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación realizada en el año 2007 —el mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada uno de ellos y también en efectivo— en la que aparecen como receptores la actual gerente del complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; y otros diez exconcejales. Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/13/galicia/1423852390_763515.html

LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

De Lara, instructora del caso Pokemon, envía una exposición razonada al Supremo para que decida si imputa a Barreiro por el presunto cobro de un soborno y el enchufe de un afín en la empresa que gestó la trama corrupta.

Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex, investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias- que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara -respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar De Lara en una exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro.

El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del presidente del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que la trayectoria de este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido Popular. Si se produce, la imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría en el peor momento para el partido del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus diputados o dirigentes imputados, como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección conservadora.

En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de Vendex, los seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que Barreiro (El Chino o El Oriental para la trama corrupta) cobró de Vendex 5.000 ó 6.000 euros por intermediar para lograr contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente del PP habría enchufado a un conocido de Antas de Ulla (Lugo) en Vendex, según el escrito de De Lara.

La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción núm. 1 de Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro “a título particular”, ya que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación.

<http://www.publico.es/espana/551007/la-jueza-acusa-a-la-mano-derecha-de-rajoy-en-el-senado-de-cohecho-y-trafico-de-influencias>

LA JUEZA VE INDICIOS SUFICIENTES PARA INVESTIGAR A BARREIRO Y ELEVA LAS DILIGENCIAS AL TS

El portavoz del PP en el Senado se reunió, según la jueza, con el delegado de Vendex en Galicia, que le habría entregado 5.000 euros

La magistrada entiende que el senador "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho"

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, señala que hay "indicios suficientes" y "existen motivos" para interrogar al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, e indagar si cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex – eje de la Operación Pokémon–.

En auto judicial con fecha del 15 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada apunta que existen "indicios suficientes" sobre que el también presidente provincial del PP en Lugo "podría haber cometido, al menos indiciariamente, y al margen de otras supuestas infracciones, un presunto delito de cohecho".

Para ello, la instructora se basa en los informes elaborados por Vigilancia Aduanera, la documentación existente, los registros en la sede de la empresa, las intervenciones telefónicas y en las "contradicciones" en las que habrían incurrido algunos de los imputados.

Así, explica que "según los indicios obtenidos" en las diligencias de investigación, Barreiro "se reunió" con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el 20 de mayo de 2011 "siendo objeto de dicha reunión la presunta entrega, por parte del delegado de Vendex en Galicia al (ahora) senador de 5.000 euros".

Además, se apoya en que "tal y como advierte el Ministerio Fiscal", existen "motivos bastantes" para que Barreiro "sea interrogado sobre los encuentros, llamadas y conversaciones que tuvo Tutor en los años 2011 y 2012", así como "sobre la presunta recepción de dinero", algo que, añade, "habrá de serle hecho en calidad de imputado y por el órgano competente", que es el Tribunal Supremo al ser aforado.

De esta manera, la jueza ha ordenado que se forme una pieza separada y que se envíen a la Sala de lo Penal del Supremo la documentación relativa a Barreiro, junto con el informe del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo.

En días pasados, la jueza emitió una providencia en la que pedía que se remitiesen en formato digital todas las conversaciones relativas a Barreiro y las diligencias practicadas para su remisión al Supremo.

El Servicio de Vigilancia Aduanera emitió un informe, según el cual, el portavoz del PP en el Senado habría recibido 5.000 euros de Vendex –principal empresa investigada en la Pokémon– el 20 de mayo de 2011, un supuesto hecho que el propio Barreiro ya ha desmentido. En ese momento, el ahora senador era concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Lugo.

Además, en otro escrito, Vigilancia Aduanera concluye que el PP de Lugo dejó de criticar la concesión de la ORA tras reunirse con Barreiro el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor.

Este informe, que constata al menos dos encuentros entre El Chino –como los investigados se referían a Barreiro– y Tutor en base a pinchazos telefónicos y operativos de vigilancia, concluye que el PP dejó "no volvió a manifestar públicamente sus dudas de la validez" de la concesión de la ORA en Lugo después de la segunda reunión, que tuvo lugar en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, el 13 de julio de 2012.

Las primeras referencias a Barreiro en el informe que Aduanas centra en el portavoz del PP en el Senado se sitúan en mayo de 2011 cuando Tutor le dice a Javier Reguera, el responsable de Doal, filial encargada de gestionar la ORA en la capital lucense, que tiene que "ver al Chino".

Posteriormente, en noviembre del mismo año, Aduanas confirma que "se programa" una reunión entre ambos y en diciembre, según refleja el informe, Tutor envía un mensaje de texto a Barreiro felicitándole por su designación como portavoz del PP en el Senado. "Enhorabuena, el esfuerzo de los años se ha visto recompensado", recoge el texto.

Barreiro ha admitido que conoce al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y que éste fue a verle "en alguna ocasión" para expresarle quejas, pero insistió en que ni esta empresa ni

ninguna otra "jamás" le ha ofrecido "absolutamente nada".

Al margen de las diligencias de Barreiro, la jueza ya ordenó conformar y remitir otra pieza separada, en este caso al respecto de la exportavoz del PP gallego y diputada autonómica, Paula Prado.

Paula Prado acudió el 10 de julio de 2013 al juzgado instructor de la Pokémon a prestar declaración —la cual permanece bajo secreto de sumario— en calidad de testigo, tras lo que había abandonado la sede judicial sin imputación alguna tras cuatro horas y media de comparecencia ante De Lara.

Además, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo investiga a su marido por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).

También se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo 'La Abeja Maya', para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/09/15/la_jueza_indicios_suficientes_para_investigar_barreiro_eleva_las_diligencias_ts_21486_1012.html

EDUCACIÓN AMPLÍA LOS CONCIERTOS CON LOS CENTROS QUE SEGREGAN POR SEXOS

La Xunta apela a la nueva ley educativa, que legalizó las ayudas públicas a este tipo de colegios

Los cinco colegios gallegos de orientación religiosa que separan a niños y niñas vuelven a estar plenamente bajo el paraguas del sistema educativo público. En realidad nunca dejaron de estarlo, pese a que numerosas sentencias judiciales —la última, del Tribunal Supremo, el pasado julio— habían declarado que los conciertos públicos con ese tipo de centros vulneraban la anterior ley educativa. La Consellería de Educación se limitó el pasado curso a someter a los colegios a un leve recorte a la espera de que, como había anunciado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, legalizara las ayudas de la Administración a esos centros. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), más conocida como ley Wert, ya está en vigor y a eso se acogió la Xunta para restablecer en su totalidad los conciertos mediante una orden que este lunes publicó el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Las sucesivas sentencias, entre ellas varias del Tribunal Supremo, habían dictaminado claramente que la anterior ley educativa prohibía la discriminación de los alumnos en función de su sexo. Por tanto, la doctrina jurídica establecida era que los conciertos con los colegios que segregan a niños y niñas, vinculados al Opus Dei, vulneraba la legislación. Tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) señalaron en varias ocasiones que no discutían el derecho de los padres a elegir lo que ellos llaman "educación diferenciada" sino que entendían que la ley no permitía darles amparo económico desde el sistema público.

Pese a los numerosos pronunciamientos judiciales, la Xunta siguió manteniendo los conciertos y ganando tiempo con el argumento de que aún estaban pendientes recursos sin resolver. Educación mantuvo unos conciertos que, según datos aportados en su día por los sindicatos y no desmentidos por el Gobierno gallego, suponían para las arcas públicas unos tres millones de euros al año, en medio de una política de recortes presupuestarios que afectó a toda la comunidad educativa. Hasta que, el curso pasado, la avalancha de sentencias forzó a la Xunta a tomar una medida: el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, anunció que suspendía los conciertos únicamente en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios que impartían ese nivel, Las Acacias y Montecastelo, de Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, de A Coruña. En los demás niveles se mantuvieron ya que, según Vázquez, retirarlos perjudicaría a los padres que ya habían decidido escolarizar a sus hijos con ese modelo educativo.

Entonces, ya el ministro Wert había anunciado que la ley que preparaba eliminaría los obstáculos legales para la subvención pública a la “educación diferenciada”. La Xunta no tuvo más que esperar a que la norma entrara en vigor. Y la orden publicada este lunes en el DOG restablece los conciertos en el primer curso de Primaria a los cuatro colegios citados con el argumento de que así lo permite la disposición transitoria segunda de la Lomce. Con ciertas modificaciones, la Xunta renueva además los conciertos con esos cuatro centros en otros niveles educativos, así como con otro más que separa niños y niñas, el Aloya de Vigo, especializado en Formación Profesional.

La decisión no cogió de sorpresa aunque, como viene siendo habitual, se anunció en el DOG en pleno agosto, en medio de la resolución sobre los demás conciertos educativos con centros privados. Con todo, oposición y sindicatos volvieron a arremeter contra la política del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en esta materia. Para los socialistas, la decisión es una muestra de “sectarismo ideológico radical” del Ejecutivo del PP. El diputado autonómico Vicente Docasar instó además a la Xunta a que “busque la fórmula para que esos cinco colegios vinculados al Opus devuelvan el dinero cobrado indebidamente” durante los últimos años. El también diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez acusó a Educación de “declararse en rebeldía” frente a las sentencias judiciales anteriores a la Lomce.

El sindicato CIG deploró que “se sostenga con fondos públicos una educación que perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres”. Al mismo tiempo, subrayó que, en conjunto, los conciertos con centros privados sumarán el próximo curso 58 unidades más “mientras en la pública se recorta profesorado”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/18/galicia/1408365653_926980.html

ADUANAS ACUSA AL 'NÚMERO UNO' DEL PP EN EL SENADO DE RECIBIR SOBORNOS DE LA TRAMA CORRUPTA POKÉMON

La empresa Vendex, epicentro de los pagos a políticos, habría entregado 5.000 euros a José Manuel Barreiro, según figura en un informe de Vigilancia Aduanera remitido a la jueza De Lara

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, José Manuel Barreiro, habría recibido en mayo de 2011 5.000 euros de la empresa Vendex, epicentro de la trama corrupta Pokémon que investiga la jueza Pilar de Lara. Así lo constata el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Vigilancia Aduanera de Galicia en un informe sobre la participación del número uno de Mariano Rajoy en la Cámara Alta (al que los responsables de Vendex llaman el Chino) al que ha tenido acceso Público y que ha sido remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

En el informe que Vigilancia Aduanera ha hecho llegar a la jueza instructora se hace un análisis pormenorizado de los hechos por los que el departamento dependiente de la Agencia Tributaria concluye que Barreiro cobró, al menos, estos 5.000 euros (al principio, iban a ser 6.000, según figura en el documento) de manos de José María Tutor, máximo responsable de la empresa Vendex e imputado en la operación Pokémon.

La razón por las que Vendex habría pagado este soborno al alto dirigente del PP y hombre de la confianza del presidente del Gobierno serían, según Aduanas, que Barreiro frenara una campaña del PP gallego contra el proyecto de la ORA (cobro por estacionamiento en la calle) en ayuntamientos gobernados por PSOE o BNG y que gestionaba Vendex. Efectivamente, subraya el informe, “a partir de esta reunión [entre Barreiro y Tutor], deja de salir en los medios de comunicación información sobre las dudas del PP sobre la ORA en Lugo”. La entrega del dinero al portavoz conservador se denomina en las conversaciones de los responsables de Vendex - alertados ya de posibles pinchazos en sus teléfonos- como “informe”, “documentación” o “proyecto”.

A las puertas de la imputación

Hace meses que la investigación de la operación Pokemon tiene cercado a José Manuel Barreiro, mano derecha de Rajoy en el Senado y presidente del PP de Lugo, tal y como contó este diario en febrero. Ahora, sin embargo, las fuentes judiciales consultadas creen que Barreiro será imputado por el Tribunal Supremo en su condición de aforado y a requerimiento de la jueza De Lara. El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, que sí está imputado en la trama desde hace meses, había pedido públicamente en varias ocasiones que “a Xustiza sexa igual para todos” y

Barreiro fuese asimismo imputado.

La operación Pokémon, que mantiene imputados a decenas de políticos de todos los partidos que gobiernan administraciones gallegas (PP, PSOE y BNG), ha dado un nuevo giro al conocerse que tanto el alcalde de Ferrol (PP), José Manuel Rey, como el ex presidente de la diputación de Ourense (PP), Xosé Manuel Baltar, y otros cargos de PSOE y BNG habrían recibido diferentes pagos de la empresa Vendex

<http://www.publico.es/politica/529936/aduanas-acusa-al-numero-uno-del-pp-en-el-senado-de-recibir-sobornos-de-la-trama-corrupta-pokemon>

LA CORRUPCIÓN REVIENTA SANTIAGO

- El gobierno de la capital de Galicia agoniza por los escándalos
- En tres años han caído un alcalde y 11 concejales por corrupción

El gobierno de la capital de Galicia ha fallecido. El cadáver empezó a desprenderse de su carne política muerta en primavera de 2012, apenas un año después de que el PP conquistase la anhelada alcaldía, en manos del PSOE desde 1983 (salvo el paso de AP como una exhalación tras una moción de censura). La dimisión del alcalde Gerardo Conde Roa, entonces acusado y luego condenado por defraudar a Hacienda 291.000 euros de IVA por una urbanización de 61 viviendas cuando se metió en el negocio inmobiliario, fue la primera señal, hace dos años. Era el primer aviso de la descomposición en vida de una corporación que acabó agonizando esta semana por la metástasis del caso Pokémon, una investigación judicial que empezó rastreando la corrupción en Lugo y terminó destapando escándalos de mayor calado en Santiago, Ourense y A Coruña, junto a otras localidades gallegas, catalanas y asturianas.

En solo ocho días han renunciado a seguir aferrándose al cargo nueve ediles y ha abandonado la portavocía del PP gallego Paula Prado, otra concejal (por ahora no imputada, pero investigada) que dejó de serlo cuando el gobierno local empezó a hacerse añicos tras la estrepitosa salida de Conde Roa. Todos y cada uno de los que han dimitido son de una u otra forma fichas que se comió la Pokémon. El último imputado, y por partida doble, que ha quedado en pie, resistiéndose a las embestidas que lo abocan al naufragio, reclutando a duras penas una nueva tripulación, es el capitán del barco, el alcalde de reemplazo Ángel Currás. El regidor compostelano intenta recomponer con técnicos (y algún personaje llamativo como el exárbitro García de Loza) el puzzle a partir de los únicos tres concejales sin imputar: la actual teniente de alcalde, Reyes Leis, y dos ediles adscritos que no tenían competencias y cuyos nombres no suenan a los ciudadanos.

La fama de los otros, los que se han ido, era infinitamente mayor. Más por las noticias de los juzgados que por sus obras en beneficio de la ciudad. Pero la crónica de esta muerte adivinada empezó a escribirse incluso antes del día en que el fiscal denunció por fraude a Conde Roa, un jabato de Alianza Popular que se hizo adulto y llegó a diputado del Congreso bajo el paraguas protector de Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. En realidad, el apocalipsis consistorial comenzó a fraguarse tiempo antes de la noche de la victoria electoral.

El primer acto de esta larga función, o defunción, a la que asisten estupefactos los vecinos de Santiago podría ser la foto fija de una joven promesa del PP durmiendo la borrachera sobre el volante de su coche, parado de madrugada ante un semáforo urbano que va cambiando de color. Es Ángel Espadas, entonces concejal en la oposición y hombre de confianza de Conde Roa. Por este desliz (triplicaba la tasa límite de alcohol) tuvo que renunciar a ir en la candidatura. Pero al ganar el PP las elecciones, el flamante alcalde reflató su carrera haciéndolo jefe de gabinete. Según han revelado los pinchazos de la Operación Pokémon, que dirige la juez de Lugo Pilar de Lara, las supuestas actividades ilícitas del equipo de gobierno comenzaron enseguida. Espadas es citado con el alias de Puñales en las charlas en clave de la trama empresarial que presuntamente obtenía contratos y favores a cambio de regalos, enchufes masivos para familiares y amigos, dinero y donativos opacos para campañas electorales.

Puñales, según los investigadores de Aduanas, se convirtió muy pronto en el conseguidor que facilitaba los contactos municipales a las firmas investigadas, principalmente el grupo Vendex y Aquaguest. Después de la dimisión de Conde Roa, llegó la fractura entre bandos enfrentados en el grupo de gobierno. En la guerra interna ganó Currás, y Paula Prado, que también sonaba como alcaldesa, dejó el Ayuntamiento para seguir como diputada autonómica y asumir la portavocía del

PP. También acabó marchando el que era asesor de Conde Roa, Ángel Espadas, que unos meses después fue detenido y enviado a prisión en el marco de la Operación Manga, hija primogénita de la Pokémon.

La célebre noche de fiesta de Espadas está también en el origen de otro de los frentes judiciales del Ayuntamiento. Entre otros, están imputados el alcalde y el exalcalde por urdir un supuesto plan para acosar y sacar del medio al policía local que se negó a destruir el atestado contra el político ebrio.

Cuando Espadas, o Puñales, marginado por Currás se fue, su posición de conseguidor la ocupó supuestamente otro joven concejal, el responsable del área de Deportes, Adrián Varela, apodado Pijolandia por los empresarios de la trama. Varela no dimitió por las graves imputaciones de la Pokémon, sino después de que el sindicato nacionalista CIG lo demandase al saberse (gracias a otra escucha) que exigió a Vendex el despido de una empleada de guardería por el simple hecho de estar casada con un representante de los trabajadores en el consistorio.

En otro de sus momentos de gloria desde que estalló la operación judicial, Varela, ya imputado por varios delitos, reclamó a sus compañeros de gobierno que aprobasen el pago de la minuta de su abogado con cargo a las arcas públicas. Los siete ediles reunidos aquel día cumplieron sus deseos obviando un informe técnico que les advertía de la ilegalidad. Y si no fuese porque una vecina indignada decidió denunciar, el plan habría prosperado.

La condena de un juzgado de Santiago contra los siete cayó esta semana como un alud sobre el PP gallego. Fueron inhabilitados nueve años por prevaricación y esa tarde dimitieron. Al día siguiente, lo hizo la última (sin contar al alcalde) imputada en la Pokémon. Y el esqueleto descarnado del gobierno local, expuesto a la vista de todos, se desmoronó. En la memoria colectiva se han grabado mientras tanto elocuentes frases de los pinchazos: "Vendex hace unos regalos de la hostia" o "lo poco que hace Conde Roa huele a pelotazo urbanístico". Estas dos, concretamente, de la exportavoz del PP gallego.

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/06/actualidad/1402079089_795531.html

EL CASO POKÉMON HACE CAER A LA NÚMERO TRES DE FEIJÓO EN EL PP GALLEGO

Paula Prado dimite de la portavocía de los conservadores en Galicia pero continuará como diputada porque "una cosa es la labor de comunicación y otra, la legislativa".

El varapalo de las europeas y la Justicia provocan una cascada de dimisiones en el partido.

Un juicio, una condena por prevaricación y una caída histórica en las urnas. Han sido las tres llaves que en menos dos semanas han servido para abrir en el PP gallego la puerta de las dimisiones, las mismas que la oposición venía reclamando desde hace meses y para las que los conservadores, al menos en público, no encontraban motivos suficientes. El primero en hacerlo fue el concejal de Deportes de Santiago, tras un año imputado en la Pokémon y cuando sumó una nueva querrela, siguieron los ediles condenados por pretender pagarle el abogado sin cumplir la legalidad, continuó otra concejal incausada por la presunta trama corrupta y este miércoles culminó Paula Prado, portavoz de los populares en Galicia y, por lo tanto, número tres de Alberto Núñez Feijóo en el partido.

En las últimas horas de ausencia del presidente de la Xunta -Feijóo regresa este miércoles de un viaje a Japón que duró casi una semana- Prado convocó a la prensa para, tres meses después de su última comparecencia pública, anunciar su renuncia al puesto en el partido, pero no a su escaño en el Parlamento de Galicia. La que había sido considerada como aspirante natural a la Alcaldía de la capital de Galicia se va porque sus intervenciones ante los periodistas ya "no servían para transmitir el mensaje del PP", toda vez que las preguntas se centraban sistemáticamente en las revelaciones del sumario de la Pokémon que la vinculan con una factura presuntamente "hinchada" y con supuestos enchufes.

"Nunca jamás participé en ese contrato, hinché ninguna factura ni manipulé ningún expediente", asegura, en un contexto en el que su situación procesal "no ha cambiado". Sigue siendo testigo, al menos de momento, aunque la jueza Pilar de Lara haya creado una pieza separada sobre ella al considerar que sus operaciones como concejal en Santiago "podrían ser constitutivas de infracción penal". A juicio de Prado todas estas revelaciones tienen una "dudosa relevancia" y

son, únicamente, "extractos" de su "vida personal". "No contemplo, en ningún caso, la posibilidad de que me imputen", agrega.

En estas circunstancias cabe preguntarse por qué se produce ahora esta dimisión. Ella, asegura, puso su cargo a la disposición de Feijóo y del secretario general, Alfonso Rueda, ya en el mes de febrero y sus jefes de filas respondieron con palabras de "apoyo". Ahora abandona la portavocía de manera "irrevocable" porque "el partido está experimentando cambios en otros niveles" y cree adecuado que las elecciones municipales de 2015 sean afrontadas por "un equipo nuevo".

"Son días de salidas" y, "diez días después de las elecciones europeas" es un buen momento para el relevo en su cargo orgánico pero no así en el institucional. "Soy una diputada muy trabajadora" y por eso va a seguir en el Pazo do Hórreo y aforada. "Una cosa es la labor de comunicación y otra, la de legisladora". A su juicio, sus eventuales implicaciones en la Pokémon "no afectan en absoluto" a su puesto parlamentario.

http://www.eldiario.es/galicia/Pokemon-numero-Feijoo-PP-gallego_0_267373942.html

FEIJÓO PROMETE UN CÓDIGO ÉTICO EN LA XUNTA MIENTRAS MANTIENE A PROCESADOS

El Gobierno gallego "eliminará o restringirá" los regalos a cargos públicos

Un debate más sobre corrupción. El enésimo en el Parlamento desde que las portadas se han plagado de sumarios. Intercambio dialécticos que se saldan sin cirugía ni dimisiones por más que haya corporaciones repletas de imputados, algunas pendientes de meros trámites para sentar a concejales en el banquillo acusados de delitos muy graves.

Ayer los que reclamaron medidas de regeneración democrática y dimisiones fueron el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, y la de AGE, Yolanda Díaz. Salió a relucir la anomalía de Santiago: 10 de 13 ediles imputados en cuatro causas judiciales distintas. Feijóo reprochó al portavoz nacionalista que no impulse gobiernos del PP en Lugo y Ourense donde hay dos alcaldes socialistas imputados: "Con el mismo dedo que solicita responsabilidades en Santiago, mantienen a los alcaldes de Lugo y Ourense. Y dicen que moción de censura en ningún caso".

Llegó a recriminar al BNG incluso que no apoye los presupuestos de Teo, donde el alcalde, Martiño Noriega, se presentó por esas siglas y ahora gobierna como líder de Anova. Pero a continuación aseguró que no pretende contribuir al "y tú más" porque él cree y defiende la política. Y enumeró una lista de 20 políticos imputados que finalmente han resultado absueltos.

Citó de carrerilla cargos de todos los colores y hasta incluyó al exministro de Fomento José Blanco, objeto de duros ataques por su parte cuando estuvo imputado en el caso Campeón. Se preguntó "quién repondría el honor y el cargo democrático" de estos dirigentes juzgados y absueltos si se sigue la doctrina de destituirlos en cuanto son imputados, como reclaman BNG y AGE. "¿Qué le decimos a los alcaldes con causas sobreesidas?. Yo puedo seguir mirando a los ojos a todos".

Jorquera aprovechó para citar al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien hace unas semanas pidió distinguir entre responsabilidades políticas y penales, ahora que la corrupción se erige en la tercera causa de preocupación de los españoles, según el CIS. También la portavoz de AGE, Yolanda Díaz, recordó que la ética no tiene que esperar a las sentencias y le invitó a tomar decisiones en Santiago "donde no hay una manzana podrida, se ha podrido la cesta". "¿Quién gobierna en Santiago?", se preguntó. "Porque la corrupción es una fórmula para que los que no se presentan a las elecciones sigan mandando",

El presidente, que en el pleno de hace dos semanas prometió que haría dimitir a cualquier cargo con medidas judiciales cautelares, dio a entender que no adoptará medida alguna en Santiago hasta que haya una sentencia. Díaz le recordó que en ese mismo hemicycle se sienta una diputada —María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos por el PP— también procesada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le atribuye prevaricación por una contratación desde el Ayuntamiento.

Feijóo obvió el caso de Faraldo —quien ha puesto su cargo a disposición del grupo parlamentario— y aprovechó su último turno para lanzar el anuncio de que promoverá un código ético en la Xunta que impida los regalos a los cargos públicos y llegue a "donde la ley no legisla". Al avanzar cuáles serán sus líneas maestras evidenció su deseo de contrarrestar las bochornosas conversaciones que contiene el sumario del caso Pokémon, donde directivos de subcontratas municipales trazaban planes para convencer a ediles y alcaldes a base de relojes y artículos de

lujo. Ese código, respondió a Díaz, servirá “para concretar la conducta de los cargos institucionales y restringir todo tipo de regalos en la Administración pública”. “Un cargo público no puede tener derechos ni privilegios solo obligaciones, pero como persona también tiene derechos, aunque usted a los del PP no se los reconozca”.

Patinazo del presidente sobre la crisis de Santiago

Empeñado en involucrar a todas las siglas en casos de corrupción, en medio de la gresca, el presidente reprochó ayer a Jorquera que dos concejales del BNG hubiesen aprobado la pasada legislatura desde el bipartito de Santiago “pagar los honorarios de un abogado y una procuradora” al concejal socialista Bernardino Rama, imputado en un caso de corrupción. Feijóo, asesorado desde el escaño por la portavoz del PP, Paula Prado, edil entonces en Santiago, que le entregó papeles, insistió un par de veces en que aquel Gobierno pagó la minuta.

Hasta que el diputado socialista y alcalde de Santiago en aquel momento, Xosé Sánchez Bugallo, pidió la palabra por una cuestión de orden y acusó a Feijóo de “mentir”. Bugallo explicó que lo que hizo su Junta de Gobierno el pasado mandato fue designar abogado pero sin aprobar ningún compromiso de gasto ni abonar factura alguna. Y recordó que elegir abogado para un edil sin cargar su minuta a las arcas públicas no constituye delito alguno. Feijóo volvió a pedir la palabra para desdecirse y asegurar que él no había atribuido pago alguno al Ayuntamiento de Santiago. Bugallo replicó que sí lo había hecho tres veces.

El caso al que aludió el presidente ya fue analizado en el auto de la juez de Santiago Ana López-Suevos que dictó la apertura de juicio oral contra los siete ediles compostelanos por acordar el abono de los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela, “a sabiendas” de que estaba inmerso en un caso de corrupción, lo que inhabilitaba a un gobierno a pagar la minuta. En su auto del pasado 4 de febrero, López-Suevos analiza el precedente del gobierno socialista y concluye: “Tal y como se comprueba, no fue aprobada en aquella ocasión ninguna asunción de gastos u honorarios y fue el alcalde [Sánchez Bugallo] quien designó nominalmente al abogado y al procurador”. La juez establece una diferencia evidente con el acuerdo que motivó las siete imputaciones del gobierno del PP ya que en este caso el acuerdo sí “facultaba al letrado a hacer valer el acuerdo y que sus honorarios se cargasen al presupuesto municipal”

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/galicia/1394652919_781144.html

EL CACIQUISMO GALLEGO SE MODERNIZA

Las políticas individualistas y personalizadas en los tratos de favor que antaño ofrecían Baltar, Cuiña o Cacharro Pardo han dado paso a otras formas formas de gobierno no exentas de corrupción, según los expertos consultados por 'Público'

De la época gloriosa del contrabando y el narcotráfico a la de las tramas corruptas que en los últimos tiempos copan los juzgados gallegos hubo en Galicia otro fenómeno político que a día de hoy aún da sus últimos coletazos. El caciquismo, personalizado en las figuras de Xosé Cuiña, Xosé Luis Baltar o Francisco Cacharro Pardo —entre otros—, sigue presente en las figuras de sus hijos o de muchos familiares y amigos que recogieron su estela y aún ocupan cargos en sus correspondientes diputaciones.

En las décadas de los 80 y de los 90, el sistema político gallego se basaba ampliamente en el clientelismo, es decir, en el “favor por favor”, “hoy por ti, mañana por mí”. Los ciudadanos aplaudían (y votaban) a aquellos que conseguían un trabajo para sus hijos, que acudían a dar el pésame cuando se moría alguien cercano o que se quitaban la chaqueta para tocar el trombón en una fiesta de pueblo. Las mayorías absolutas eran aplastantes y la perpetuidad en el poder estaba a la orden del día.

Para algunos expertos esta situación no es sólo propia de Galicia, sino que se trata de un modo más de corrupción, al estilo del caso Gürtel o los papeles de Bárcenas, pero con ciertas particularidades. Quienes opinan así creen también que, precisamente por ese motivo, el caciquismo no ha terminado, sino que sigue presente en todas las comunidades, en todos los colores, y que se presenta de muchas formas distintas. “Los mismos perros con distintos collares”, dicen.+

Méndez Romeu (PSOE): "Las personas no son corruptas, son corruptibles y a día de hoy no se ha hecho ningún cambio estructural legal que evite la corrupción" Este es el caso del socialista José Luis Méndez Romeu o del nacionalista Bieito Lobeira. El actual portavoz del PSOE en el Parlamento gallego considera que "la situación ha evolucionado en los últimos años como consecuencia de la urbanización". "El caciquismo de los 80, basado en el intercambio de favores, estuvo vigente mientras Galicia era una comunidad agraria; después fue evolucionando con la urbanización, a partir —sobre todo— de la entrada de España en Europa", explica. "Ahora asistimos a los coletazos finales de ese proceso que se unen a asuntos más novedosos que se deben a insuficiencias en el marco legislativo relacionado con la contratación de bienes y servicios, la contratación de personas, las concesiones administrativas y los asuntos urbanísticos", enumera el también exsecretario de Estado en la época de Zapatero.

Para Romeu, "las personas no son corruptas, son corruptibles" y, por ello, aunque se haya modificado la "red clientelar que estaba muy desarrollada por las personas que llevaban gran tiempo en el poder", cree que "hasta ahora no se ha hecho ningún cambio legal estructural que evite la corrupción". Para el secretario de Organización del BNG, ahora en Galicia reinan "los mismos perros pero con distintos collares". Aunque Lobeira lamenta el "tópico del caciquismo gallego, que no son más que prácticas perversas que se dan en otras partes del Estado", cree que hoy en día se ha sustituido el "clientelismo que se verifica con comportamientos individualistas" por "prácticas corruptas de las instituciones", como las privatizaciones de ciertos servicios que giran en torno a "intereses económicos". "Cuiña se movía por intereses empresariales vinculados a la familia; Feijóo utiliza unos mecanismos de control social más sofisticados —sin trato directo, pero utilizando a los medios de comunicación a su antojo, por ejemplo— para que las grandes empresas del 'palco del Bernabeu' (pone el ejemplo de Ferrovial, cuya filial Cespa está inmersa en la operación Patos) se encarguen de las obras públicas de Galicia", ejemplifica.

Bieito Lobeiro (BNG): "El caciquismo no es más que prácticas perversas que se dan en todo el Estado, no sólo en Galicia"

Para Cristina Ares, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, que hasta 2011 fue concejal del PP en Lugo, clientelismo y corrupción son conceptos diferentes y ninguno de los dos exclusivo de Galicia. Sin embargo, cree que ambos problemas se deben a una "falta de cultura política" que todavía pervive en la sociedad. "[Los ciudadanos] no interiorizamos las reglas del juego democrático [dice haciendo alusión a la 'aceptación' social del enchufismo, por ejemplo] y los partidos tampoco avanzan. La gente está acostumbrada a ese modelo en el que se ofrecen favores a determinadas empresas para financiar partidos y así el poder corrupto se perpetúa", concluye.

En la misma línea se expresa el también periodista y escritor gallego Antón Losada, que no cree que la corrupción actual tenga "ninguna conexión" con el antiguo caciquismo. "El cacique usaba mecanismos administrativos para conseguir favores, colocaba a gente en la Administración y gastaba dinero público dentro de lo público; ahora se dedican a las privatizaciones", resume. Aunque reconoce que, de alguna manera, "sigue pasando, porque hay importantes segmentos de población —en toda España— para los que el clientelismo sigue siendo el sistema que más confianza les ofrece para relacionarse con la Administración", también opina que "hay otros segmentos en los que no". Y por este motivo considera que "una ciudadanía que ahora está asustada y desorientada castiga cada vez más los comportamientos de este tipo".

Cristina Ares (PP): "Los ciudadanos no hemos interiorizado las reglas del juego democrático" Para otros expertos, de hecho, aquella época de ofrecer papeletas en mano a las puertas del colegio electoral ya terminó, la corrupción no son los últimos flecos del clientelismo y ahora presenciamos una situación distinta. Quienes opinan así presentan a un Alberto Núñez-Feijóo que ejerció de "limpiador" de su partido, tomando el relevo de Manuel Fraga pero sin la permisividad que éste tenía con los "caciques buenos", como llegó a autodenominarse el propio Baltar.

Este es el caso del excritor y periodista de El Progreso de Lugo Santiago Jaureguizar, que opina que el individualismo propio de la política caciquil, en la que "se vota un nombre y no a un partido, una ideología, unas siglas" terminó a finales de los 90, con la llegada al poder en el PP del actual presidente de la Xunta. "Feijóo —que no me parece un gran político, pero sí un gran técnico— viene de otro mundo, de otro modelo de formación y fue inteligente y práctico: se da cuenta de que la política vieja del tú a tú, de dar la mano ya no funciona o funciona, como mucho, en zonas pequeñas", argumenta. "El PP de Feijóo ya es de las ciudades y no se reconoce en eso."

Sabe que las clases medias gallegas que votan al PP quieren una gestión moderna y por eso él hace limpieza", continúa el autor de Casa Skylab, que cuenta precisamente la historia de un cacique gallego.

"El sistema del clientelismo se da en Galicia —como en todas las sociedades poco desarrolladas económicamente— cuando los ciudadanos, para solucionar su vida, acudían a quienes tienen los recursos económicos, que eran los que tienen el poder político", agrega Jaureguizar. "La gente para subsistir tenía que entregar su dignidad a los políticos, pero el modelo cacique ya se terminó porque la mayor parte de la sociedad gallega vive en ciudades de más de 100.000 habitantes y ya no es posible que se dé la cultura política del intercambio de favores que ha funcionado toda la vida en todo el mundo", concluye

<http://www.publico.es/politica/503539/el-caciquismo-gallego-se-moderniza>

EL 'NÚMERO UNO' DE RAJOY EN EL SENADO, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN GALLEGA

La estrecha relación de Barreiro con los protagonistas de la trama Pokemon mantiene en vilo al PP. El alcalde de Lugo, imputado en esta operación, pide el mismo trato judicial para el dirigente conservador

El protagonismo del portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro, en el sumario de la operación Pokemon, al que ha tenido acceso Público, tiene en vilo al Partido Popular, acosado por los casos de corrupción en Galicia que brotan sin tregua ante los ojos de los estupefactos gallegos. Orquesta, Campeón, Carioca, Pokemon, Pikachu, Patos,... las tramas se suceden y los sumarios e imputaciones se multiplican y relacionan cubriendo a demasiados responsables de PPdG y PSdG de un extenso manto de delitos de corrupción. Presuntos la mayoría, de momento.

La responsabilidad nacional de Barreiro (Lugo, 1957) en la Cámara Alta, sin embargo, supera con mucho la de cualquier alcalde o concejal relacionado o implicado con las distintas tramas gallegas, por lo que la inquietud en las filas conservadoras crece a medida que se conocen detalles de la operación Pokemon y la estrecha vinculación del también presidente del PP lucense con los capos de la trama, recogida en el sumario judicial. Barreiro es gallego, y aunque no pertenece estrictamente al círculo de confianza de Mariano Rajoy, lo acompaña frecuentemente en sus visitas a Galicia y mantienen un trato cercano, que se ha estrechado con el tiempo y el paisanaje.

Crece la inquietud en el PP según se va conociendo la estrecha vinculación de Barreiro con los capos de la Pokemon. El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), imputado en la operación Pokemon por recibir presuntamente dinero de la trama a cambio de adjudicaciones del Ayuntamiento, ha reiterado una y otra vez que espera "que a Xustiza sexa igual para todos" y se pregunta por qué la jueza de Lara no llama a declarar a Barreiro. Pero la investigación, que consta ya de 122 tomos, no está cerrada, según aseguró De Lara. Hay siete páginas del sumario de la operación Pokemon (140-146), particularmente, que instruye la titular del Juzgado núm. 1 de Lugo Pilar de Lara, que han caído como un jarro de agua fría en las filas del PP gallego y la sede central de la calle Génova (Barreiro pertenece a la dirección nacional del partido)

'El Chino' impaciente

El Chino, apodo que la trama adjudica al portavoz del PP en la Cámara Alta, es un habitual de los contactos telefónicos y las reuniones con José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia, y Javier Reguera, responsable de la empresa concesionaria del sistema ORA en Lugo -filial, asimismo, del grupo Vendex-, y ambos representantes del verdadero cerebro de la red, Gervasio Rolando Rodríguez, responsable en el ámbito nacional de esta empresa. Vendex constituye el epicentro de operación Pokemon, desde donde se efectúan los presuntos pagos a cambio de favores y contratos en las administraciones, se hacen los regalos a los benefactores públicos, se enchufa a los recomendados, etc.

Vendex contrató a un trabajador por "enchufe" de BarreiroBarreiro llama y recibe llamadas constantes de Tutor y/o de Requena. Cinco recogidas en esta parte del sumario de De Lara. También se reproducen dos encuentros de Tutor y Barreiro en las siete páginas, uno en la sede del PP de Lugo (6 de julio de 2012: "Barreiro le pregunta [a Tutor] cómo anda, que le dijeron que está en la ciudad amurallada [Lugo]. Tutor le dice que está en la ciudad amurallada. Barreiro le dice que le pidieron que le dejara (a Tutor) un papel con una información. Tutor le dice que lo ve.

Barreiro le dice que va a estar en la sede un rato (...) Tutor se acerca un momento") y otro, en el aparcamiento del aeropuerto de A Coruña, éste documentado con un vídeo de Vigilancia Aduanera (13 de julio de 2012: "Sobre las 17:40 horas, se observa a José Manuel Barreiro Fernández en la salida de pasajeros, quien se dirige hacia las oficinas del parking del aeropuerto, momento en el que permanece por un espacio breve de tiempo hablando con José María Tutor Lemos, para acto seguido, despedirse y dirigirse al sótano -1 del parking, abandonando el mismo en vehículo particular")

'El Chino' habla por teléfono con los responsables de Vendex y mantiene varios encuentros, uno en el parking del aeropuerto de A Coruña

Existen asimismo multitud de referencias al Chino por parte de Tutor y de Requena en sus conversaciones telefónicas recogidas en el sumario analizado, muy crípticas siempre, pues ya desde 2011, Tutor sospechaba que tenían los teléfonos pinchados. Los asuntos que podían traerse entre manos, según el sumario, eran que "el SR BARREIRO influyera en los concejales de LUGO para que dejen de criticar la gestión de DOAL [filial de Vendex] relacionada con la ORA, máxime tras la sentencia del TSJ GALICIA anulando la concesión, debido a las críticas surgidas en diversos medios de comunicación" o en "tratar de influir en la estimación del recurso interpuesto en SANTIAGO en el concurso de la ORA, que habrían obtenido de no haber abandonado la alcaldía GERARDO CONDE ROA".

De las conversaciones que Tutor y Reguera mantiene sobre el Chino, se traduce un trato habitual y confiado con el portavoz del PP en el Senado, hasta el punto de creer que Barreiro debe relajarse: "Reguera dice que él (el Chino), después de ver a Tutor, va a cortar el viento. Tutor dice que debería, que no lo corten de la noche a la mañana, pero que empiece a relajar". En su declaración ante la jueza De Lara, Reguera confesó que Vendex contrató como "vigilante de la ORA" a un trabajador ("Fidel") por "enchufe" de Barreiro, que tenía "interés" en que así fuera. Asimismo, el encargado de la filial DOAL dio por hecho en esa misma comparecencia que su jefe Tutor "pidió" al dirigente del PP que "cesase el acoso mediático" de su partido a la gestión del servicio en Lugo

<http://www.publico.es/espana/503128/el-numero-uno-de-rajoy-en-el-senado-cercado-por-la-corrupcion-gallega>

ESCANDALOSAS ADJUDICACIONES DE FEIJÓO A LA EMPRESA DE SU HERMANA

Eulen ha sido beneficiada durante todo 2013 con contratos de diferentes consejerías de la Xunta y la Televisión Gallega

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantiene sus adjudicaciones millonarias a la empresa Eulen, de la que es apoderada Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente autonómico. Según refleja la web de la Xunta www.contratosdegalicia.es, el citado grupo de empresas ha recibido este año contratos desde diferentes consejerías y de la Televisión gallega.

Cerca de 800.000 euros en enero y marzo

En enero, la empresa de la hermana de Feijóo fue adjudicataria de un contrato de 207.940,00 euros sin IVA de la Conejería de presidencia para el servicio de vigilancia y seguridad en varios edificios judiciales de la Junta. Tres meses después, en marzo consiguió el contrato de servicios de conserjería, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales del Concello de Fene, por 577.025,48 euros sin IVA.

Mayo, un mes de oro

En mayo pasado, la Televisión de Galicia le adjudicó a Eulen el contrato para el servicio de seguridad por cerca de un millón de euros sin IVA, exactamente, de 930.000 euros. No fueron las únicas adjudicaciones de ese mes. También consiguió el servicio de limpieza de edificios y locales municipales del Concello de Sade por 709.061 euros y el contrato de la consellería de Trabajo y Bienestar para la gestión del servicio público denominado Puntos de Encuentro Familiar de Pontevedra y Vigo", por un coste de 357.000 euros.

Más contratos en septiembre

En septiembre, Eulen fue beneficiada con el mantenimiento del edificio administrativo de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), por 41.500 euros y, además, recibió de la Consellería de Trabajo y Bienestar la adjudicación del servicio de control de las instalaciones del

Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil, por 21.340, 80 euros.

Las polémicas adjudicaciones a la sobrina de Romay Beccaría Feijóo ha mantenido las adjudicaciones a la empresa de su hermana después de los contratos millonarios que le concedió en 2012, como informó ELPLURAL.COM.

No son las únicas adjudicaciones cuestionables del presidente gallego, que en enero de este año dio el contrato para el desarrollo del portal de las entidades locales de Galicia, un plan cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la empresa Atos Origin, de la que es apoderada la sobrina de José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Una adjudicación de 455.000 euros.

Una empresa con sede en Madrid
Según denunció Galicia Confidencial, la empresa de la sobrina de Romay Beccaría, con sede en Madrid, recibió casi medio millón de euros por actualizar una web ya existente.

Hace un mes, la misma agencia de la Xunta contraba a Atos para un “servicio complementario de evolución y mantenimiento de sistema de gestión de personal de la Xunta” por 135.755 euros sin IVA. Según comprobó el citado diario, en el Registro Mercantil, Carmen Martín de Pozuelo Romay es la apoderada de esta consultora, que suma 4,6 millones en contratos del Gobierno gallego, 312.000€ mediante encargos adjudicados a dedo.

Colaboradora de Feijóo en Correos
Martín de Pozuelo es sobrina de Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado. Feijóo la fichó para su equipo cuando dirigía Correos y también cuando estuvo como consejero de Política Territorial.

La Xunta de Galicia, cuanto menos, ha dado cinco contratos a Atos Origin a dedo desde que gobierna Alberto Núñez Feijóo. En los últimos cuatro años, la consultora logró en total más de 4.5 millones de la administración autonómica.

<http://www.elplural.com/2013/12/22/escandalosas-adjudicaciones-de-feijoo-a-la-empresa-de-su-hermana/>

LOS ALCALDES HACEN COLA EN LOS JUZGADOS

Una decena de cargos públicos de la provincia de Ourense, en su mayoría del Partido Popular, están pendientes de decisiones judiciales

Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial. El superdelegado está acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero.

Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.

Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la

ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.

Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.

Todo es limbo

No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcalde ourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.

Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido.

En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luís Baltar. Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE.

Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita.

Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario.

Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.

Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/19/galicia/1382209474_735520.html

IMPUTADOS 7 EILES DEL PP SANTIAGUÉS POR APROBAR QUE EL AYUNTAMIENTO PAGASE LA DEFENSA DE OTRO CONCEJAL

Adrián Varela fue imputado en la operación Pokemon, que investiga una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas

Siete ediles del PP de Santiago han sido imputados por un delito de prevaricación por haber aprobado en junta de gobierno local el pasado mes de mayo una resolución para que el ayuntamiento costeara la defensa del edil Adrián Varela, imputado en la operación Pokemon.

Fuentes municipales han explicado que la concejal María Pardo ha hecho público hoy que ha sido imputada, junto a sus compañeros de gobierno municipal Juan de la Fuente, María Castelao, José Luis Bello, Amelia González, Cecilia Sierra y Francisco Noya. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 19 de diciembre en el juzgado número uno de Santiago.

María Pardo, portavoz del grupo de gobierno, ha señalado en conferencia de prensa que su partido respeta las decisiones judiciales y ha llamado la atención sobre la proliferación de casos en los que se imputa a políticos y posteriormente son sobreesidos.

Trama para obtener contratos públicos

La Operación Pokemon, que sigue bajo secreto de sumario, se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en distintas administraciones gallegas, así como en Asturias y Catalunya. Las fuentes consultadas han señalado que la decisión de la junta de gobierno para costear la defensa de su compañero "se ajustó a derecho" y se tomó "avalada por informes de la asesoría jurídica del ayuntamiento".

Han indicado, además, que la defensa de un concejal con cargo a las arcas municipales "es un derecho" que les asiste y que en este caso no se llegó a concretar porque el edil imputado en la Pokemon renunció a ella. De hecho, han señalado, en otros ayuntamientos gallegos, como Corcubión (A Coruña), se han adoptado decisiones similares, así como en el de Santiago "en otras legislaturas" y con otros partidos en el gobierno municipal. La jueza ha tomado esta decisión por la denuncia de un particular.

<http://www.publico.es/474717/imputados-7-ediles-del-pp-santiago-por-aprobar-que-el-ayuntamiento-pagase-la-defensa-de-otro-concejal>

EL CONSELLO DE LA XUNTA MULTIPLICA LOS ACUERDOS SIN VALOR ECONÓMICO NI LEGAL

La última reunión aprueba solo 150.000 euros y seis informes propagandísticos

El Gobierno gallego ha multiplicado por cinco en sus reuniones semanales la divulgación de informes propagandísticos sin valor legal ni inversión real al tiempo que oculta sus decisiones más polémicas, que solo trascienden tras investigaciones periodísticas. Ayer el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo batió su récord por abajo al aprobar apenas tres acuerdos con repercusiones legales, de los que solo uno estaba dotado económicamente para entregar a la Catedral de Santiago 150.000 euros. En la misma sesión divulgó seis informes propagandísticos sin trascendencia jurídica.

Los Consellos de la Xunta pueden aprobar proyectos de ley, decretos o acuerdos, figuras legales con un trabajo jurídico previo y repercusión sobre la vida real de los ciudadanos, ya sea a través de inversiones, subvenciones o regulaciones. Pero también pueden tratar informes, documentos

sin validez legal que no tienen que ser aprobados, que pueden llegar a ser orales y que son usados por el presidente de turno para poner de relieve algún tema sobre el que le interese pronunciarse personalmente, orientando así la agenda política e informativa.

Todos los gobiernos han recurrido a esos informes de autobombo, ya sea para alejar la atención de otras cuestiones conflictivas o para tapar la falta de contenido real de sus reuniones. Pero su uso aumentó desde que la crisis ha estrangulado las cuentas públicas, y los Consellos se suceden sin contenido legal ni inversiones.

Manuel Fraga podía difundir hasta una veintena de informes por reunión. Feijóo se queda lejos, pero ha multiplicado por cinco su uso con respecto al bipartito de PSOE y BNG. Como comparación, Emilio Pérez Touriño presidió en su último año 47 Consellos en los que se divulgaron 29 informes sin valor jurídico, a una media de 0,6. En los cuatro primeros años de Feijóo se celebraron 176 Consellos con 529 informes, a una media de tres por reunión. Y en lo que va de segunda legislatura hubo ya 40 consellos con 135 informes, a 3,37 por reunión. Si Touriño recurría a la propaganda una vez cada dos Consellos, Feijóo lo hace tres veces por reunión.

En la primera legislatura de Feijóo hubo Consellos con hasta ocho informes propagandísticos (25 de marzo de 2010 y 4 y 18 de octubre de 2012) mientras que en esta el récord es siete (16 de mayo y 27 de septiembre de este año).

Ayer fueron seis los informes divulgados, que permitieron a Feijóo anunciar ya medidas de flexibilidad horaria para los funcionarios, financiación para la vendimia o apoyo a las familias desahuciadas, entre otras. Pero lo único que se aprobó realmente fue una modificación urbanística en una calle de Maside (Ourense), los estatutos de la Academia de Enfermería de Galicia y la entrega de 149.828,79 euros a la Catedral de Santiago para acondicionar una sala de exposiciones. Otros ejemplos de bajas inversiones, aunque superiores a las de ayer, se registraron el pasado 19 de septiembre, con 170.000 euros, o el 12 de abril del año pasado, con 750.000, pero en Consellos que aprobaron otras cuestiones relevantes.

Mientras divulga informes propagandísticos y reduce inversión, el Consello ha llegado a aprobar acuerdos con validez legal que ha ocultado. Así sucedió con el perdón de una multa de tres millones de euros al diputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo del 24 de noviembre de 2011 y que no trascendió hasta el 16 de abril de 2012, cuando lo publicó este diario. Similar proceder siguió el Gobierno cuando aprobó en secreto, en su reunión del 4 de agosto de 2011, la recalificación de 173 hectáreas de bosque en Guitiriz para un macrogeriátrico privado. O cuando renunció a llevar a juicio a la empresa Brenntag por el desastre ecológico del río Umia, acuerdo del 8 de marzo de 2012 que aquel día ocultó. En secreto la Xunta también ha regularizado viviendas y piscifactorías ilegales, subido tasas o modificado entes públicos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/03/galicia/1380825052_306122.html

LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP DE SANTIAGO

- El gobierno municipal acumula media docena de imputaciones
- La Pokémon se extiende a Cataluña y Asturias
- Consulte toda la información sobre la Operación Pokémon

Ni una semana sin susto en el Ayuntamiento de Santiago. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera irrumpieron ayer a primera hora en el Pazo de Raxoi después de detener al exjefe de gabinete de la alcaldía Ángel Espadas, al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y a José Luis Míguez, gerente de la concesionaria Aquagest que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. Junto a ellos también fue arrestado un cuñado de este último, Jesús Fuentes, empresario y organizador de eventos.

La investigación nació, otra vez más, en la mesa de la juez de Lugo Pilar de Lara, que instruye el sumario Pokémon sobre supuestas adjudicaciones amañadas en varios ayuntamientos gallegos y que ya supuso la imputación del alcalde compostelano, Ángel Currás, y de su concejala de Educación, Rebeca Domínguez. Al tirar de ese ovillo, surgió la Operación Manga, que propició los arrestos de ayer en Santiago incluidos registros en el Ayuntamiento, en los domicilios familiares

de los detenidos, en la sede de la empresa adjudicataria y también en la vivienda del anterior regidor de la ciudad, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir cuando Hacienda le denunció por un presunto fraude fiscal de 291.000 euros. Espadas era la mano derecha de Conde Roa.

Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los arrestados declaran hoy ante la juez. La policía se incautó de varias cajas de documentación en las viviendas de Conde Roa, Espadas y Vázquez Aldrey y requirió al gobierno municipal documentación sobre los contratos de Aquagest, el servicio de la grúa y hora y la gestión de multas de tráfico, además de revisar los ordenadores en busca de correos electrónicos. Durante casi ocho horas, los agentes peinaron los servidores informáticos del Ayuntamiento en varios departamentos.

Fuentes próximas a la investigación apuntan que la juez indaga sobre las relaciones entre Espadas, hombre fuerte del anterior alcalde, su amigo José Luis Míguez, apodado El Pesetas y que fue ascendido a gerente de Aquagest en Santiago cuando el PP llegó al Gobierno, y las gestiones que ambos tramaban para beneficiar presuntamente a la concesionaria del agua. Según se desprende de los pinchazos telefónicos, los detenidos planearon crear una empresa mixta con capital de Aquagest y del gobierno municipal para que se hiciera cargo del servicio sin tener que depender de la contratación pública. Otra de las fórmulas que manejaban los detenidos, según se desprende de las conversaciones grabadas, pasaba por aumentar el tiempo de concesión a cambio de que Aquagest asumiesen el coste de infraestructuras para la ciudad.

Los investigadores sospechan que el negocio pretendía fraguarse a golpe de comisiones ilegales. Las presuntas negociaciones tuvieron lugar durante el mandato de Conde Roa, que incluso llegó a anunciar en un desayuno informativo su intención de llevar a cabo un ambicioso plan de infraestructuras con financiación público-privada. Cuando este tuvo que dimitir y Espadas fue destituido por su sucesor, Ángel Currás, el negocio se frustró.

Otro de los expedientes bajo la lupa de la juez es la adjudicación del servicio de ORA que el gobierno de Conde Roa otorgó a la empresa Setex Aparki poco después de llegar al poder. El concurso había sido convocado por el bipartito y contaba con un informe técnico que avalaba la adjudicación a la empresa que finalmente resultó concesionaria, ya con el PP en el gobierno, desbancando a su rival del grupo Vendex, que la juez sitúa en el epicentro de la Operación Pokémon. Tras perder el concurso, Vendex denunció irregularidades en el proceso, que acabó recurriendo. El concejal responsable del servicio, Albino Vázquez Aldrey, también pasó la noche en los calabozos.

El nuevo escándalo en el Ayuntamiento de Santiago se produce solo tres semanas después de que otra juez imputase al propio Vázquez Aldrey, a Conde Roa y al actual regidor partiendo de la querrela de un policía municipal que les acusa de degradarlo en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos años mandato, el Ejecutivo del PP acumula media docena de imputaciones.

Conde Roa está acusado de defraudar a Hacienda y de prevaricación al relegar al citado funcionario, el mismo delito que la juez investiga en su sucesor, también encausado en la Operación Pokémon por prorrogar la concesión de una guardería municipal a Vendex, igual que su edil de Educación, Rebeca Domínguez. El jefe de gabinete actual, Francisco Castro, está imputado por el mismo caso. El hombre al que sustituyó, Ángel Espadas, condenado en la precampaña de las municipales por conducir bajo los efectos del alcohol, durmió anoche en comisaría arrestado también en este caso. Y hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que siempre había pedido esperar a la resolución de los distintos sumarios, admitió ayer que lo que pasa en su partido en Santiago "no es normal" y animó al gobierno local a pedir disculpas.

Al presidente se le agota la paciencia

Alberto Núñez Feijóo había mostrado hasta ahora un respaldo sin fisuras al alcalde de Santiago, Ángel Currás. Convencido por las explicaciones de este de que su implicación en el caso Pokémon no tendría finalmente ninguna trascendencia penal, Feijóo expresó en reiteradas ocasiones su apoyo al alcalde. Y ante las fuertes desavenencias en el gobierno local incluso permitió a Currás quitarse de enmedio a su gran rival interna, la concejala Paula Prado, que dimitió del Ayuntamiento tras ser nombrada portavoz del PP gallego.

Pero ayer, sin entrar en alusiones directas a Currás, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia cambió de tono. Ante la nueva ronda de detenciones y la sensación de caos total en la capital de

Galicia, Feijóo tuvo que admitir: "Lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal y a ningún ciudadano le parece normal". El presidente anticipó que este nuevo episodio requerirá de los gobernantes locales "explicaciones amplias y disculpas concretas".

En el gobierno municipal, sin embargo, se empeñan en aparentar normalidad. Con el alcalde de viaje en Madrid, la portavoz del ejecutivo compostelano, María Castela, afirmó a la Cadena SER que la sucesión de detenciones e imputaciones "no interfiere en el gobierno del día a día de la ciudad". "Seguimos trabajando y sacando adelante expedientes", aseguró.

Pero la oposición dio un paso al frente y exigió medidas ante una situación que considera ya insostenible. Hasta ayer los socialistas habían evitado pedir la dimisión de Currás. La postura del PSdeG estaba condicionada por el hecho de que un alcalde suyo, el de Lugo, Xosé López Orozco, también está imputado en la Operación Pokémon. Pero ante la evidencia de que la sospecha de corrupción se ha extendido por el gobierno municipal, los socialistas dieron un giro a su postura y, a través de su portavoz, Francisco Reyes, pidieron la retirada del alcalde ante la situación de "práctica ingobernabilidad" del municipio. Antes, el líder local del BNG, Rubén Cela, había reiterado también su exigencia de que Currás se retire. Los dos partidos de la oposición coincidieron además en apelar a Feijóo para que, más allá de las palabras, tome medidas para normalizar la institución local. Desde fuera del Ayuntamiento, se plantearon soluciones más extremas: Esquerda Unida pidió nuevas elecciones y Compromiso por Galicia, que se disuelva la Corporación Municipal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360873331_732255.html

FEIJÓO PIDE LA CONFIANZA CIUDADANA Y PROTEGE A SU ALTO CARGO PROCESADO

Publicará su renta desde antes de ser presidente y el patrimonio de los conselleiros

Alberto Núñez Feijóo asume que la confianza de la ciudadanía en los dirigentes políticos "se ha visto especialmente minada en los últimos meses" por la proliferación de casos de corrupción y por eso considera que deben hacer un esfuerzo de transparencia, a fin de recobrar crédito. En esa línea va la publicación de su declaración de patrimonio y la del resto de sus conselleiros, información fiscal que se completará con las declaraciones de la renta exclusivamente del presidente gallego desde antes de llegar al cargo hasta la actualidad. Compatibiliza esta apuesta con decisiones como la de mantener en el cargo al delegado de su Gobierno en Ourense, Rogelio Martínez, procesado por malversación, estafa y falsedad en documento público.

El mandatario autonómico aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para publicitar su "política de transparencia" con la decisión de seguir la senda abierta por Mariano Rajoy, con la publicación de los datos sobre su situación económica. Se hará en los próximos días a través del sitio web del Ejecutivo y del Diario Oficial de Galicia, aunque hasta el lunes no precisará desde qué año se podrá conocer su renta. En cuanto a las declaraciones de patrimonio, que ya se difundieron en diciembre de 2011, explicó que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la evolución patrimonial del presidente y de sus conselleiros desde la toma de posesión hasta que cesen en sus funciones.

Apenas unos minutos después de su alegato en pro de la transparencia, que se suma a la contundencia con la que se refirió al caso Bárcenas —"me repugna", dijo en el Parlamento—, obviaba que su hombre fuerte en la provincia ourensana ha pasado de imputado a procesado. Se escudó en que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa. "Por lo que yo sé, entiende que no hay delito", arguyó, cuando en realidad el ministerio fiscal solicitó el archivo por considerar que los supuestos delitos —la certificación y el cobro de una subvención para una obra que nunca se ejecutó— habían prescrito. Así, avanzó que por el momento no va a "cambiar de opinión", es decir, mantiene su confianza en Martínez.

"Si se inicia un procedimiento (que en verdad ya ha comenzado), veremos la situación procesal en la que queda y en función de esto tomaremos una decisión coherente y consecuente con otras que hemos tomado", fue todo lo que concretó. Preguntado sobre si le pediría su dimisión en caso de sentarse en el banquillo de los acusados, como parece que ocurrirá a tenor del último auto del juez, Feijóo desvió el tiro hacia el comportamiento de otros partidos ante casos similares,

deslizando que en la misma situación estas formaciones —no explicitó cuáles— mantendrían a su alto cargo.

Por otra parte, la reunión del Gabinete sirvió para analizar el calendario legislativo para los próximos cuatro años. El Gobierno pretende impulsar unas 40 leyes, la mitad de ellas de carácter económico y la otra mitad reformas y actualizaciones de textos legales con más de una década de vigencia. En este paquete, el presidente confirmó que no estará el Estatuto de Autonomía, una modificación que, a su juicio, no está entre las preocupaciones ciudadanas. Sí se abordará la anunciada reducción de diputados.

En ese marco, abogó por "abrir un periodo de reflexión" sobre el sueldo de los parlamentarios y el sistema de cobro, que en la actualidad deja una parte importante del contante percibido libre de tributación, al consignarse en concepto de dietas. Empaquetó esta reducción de los gastos de la Cámara, así como todo el calendario legislativo analizado, con su ritual alusión a conseguir una Administración "eficiente y austera".

El Consello también aprobó el Plan Galego de Igualdade entre Homes e Mulleres para el período 2013-2015, que aglutina 320 actuaciones con una inversión de 220 millones de euros. Entre todas esas medidas no está la de dejar de subvencionar a los colegios concertados que separan por sexo. Aludió a la libertad de elección de los padres y a que todos los gobiernos autonómicos mantuvieron esos convenios, aunque el bipartito, en sus estertores había decidido suprimirlos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/galicia/1360871119_467520.html

FEIJÓO AVISA AHORA DE QUE GALICIA NO EMPEZARÁ A CRECER HASTA 2015

El presidente consagra la austeridad y pide caminar hacia el déficit cero

Casi a la misma hora que la OCDE pronosticaba para 2013 una caída del PIB que triplica las previsiones del Gobierno, seis millones de parados para el el año próximo y el siguiente, y advertía de que el camino no pasa por más recortes, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP y alumno aventajado de la austeridad, seguía recetando desde la tribuna del parlamento gallego más de lo mismo para los próximos cuatro años. Feijóo -que el sábado será investido presidente por segunda vez- no solo ratificó su compromiso con el rigor presupuestario y el cumplimiento del techo de gasto fijado por el Gobierno. Prometió que Galicia caminará "hacia el déficit cero" en la legislatura que ahora comienza.

Ese es el plan que, según el aún candidato del PP, encarrilará a Galicia en la senda del crecimiento. "Los gallegos podrán vivir de lo que producen sin endeudar a los gallegos de mañana y dedicar el 100% de los recursos a políticas que estimulen el crecimiento y el bienestar". Según esa hoja de ruta, la legislatura del crecimiento que los populares anunciaron en los mítines y el programa electoral hace unas semanas quedará partida a la mitad. Empezará en 2015, tras "dos años de transición hacia ese objetivo". Y todo, según dijo entre grandes aplausos de la bancada popular, porque Galicia es una comunidad "solvente" y a la vez "la más preparada para salir de la crisis". Junto a la contención del gasto que inició ya en 2009, anunció rebajas selectivas de impuestos para futuros emprendedores y su "austeridad bien entendida" anticipa recortes en las subvenciones de los sindicatos, partidos políticos y la patronal, así como en el número de diputados autonómicos, que bajará de 75 a 61. El presidente en funciones no aclaró si intentará pactar la nueva configuración de la Cámara con el resto de partidos o si pretende aplicar el tijeretazo a los escaños primando los territorios que tradicionalmente votan más al PP, tal y como amagó con hacer antes del adelanto electoral.

Su hora y media de discurso tuvo presente al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien responsabilizó sin citarlo por su nombre de la crisis económica pero también puso deberes al Gobierno amigo: pedirá a Rajoy que compense los fondos europeos que autonomías como Galicia perderán a partir de 2014 y un nuevo modelo de financiación que prime la dispersión y el envejecimiento de la población.

Del castillo kafkiano a la torre Eiffel

Se había esmerado el presidente en pedir al resto de partidos con escaño que tomen ejemplo de la sociedad y afronten la legislatura con templanza porque "la mayor división de la oposición no debe traducirse en mayor confrontación". Como si Feijóo temiese lo que se le venía encima. Aunque la respuesta de sus adversarios en el hemiciclo se demorará hasta el jueves, la oposición ya le adelantó ayer, con los micrófonos de por medio, que no comparte la visión de Galicia del presidente en funciones.

Desde el BNG, su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera criticó "el discurso de un candidato carente de la más mínima sensibilidad social" y también sin "ambición nacional". El líder de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas, Xosé Manuel Beiras, fue aún más duro y dudó incluso de que su formación sea "capaz" de plantar cara a la derecha gallega. Si no pueden solos los partidos de la coalición, llamarán a la "rebelión cívica para que los echen del castillo kafkiano". Tampoco el portavoz del PSdeG, Abel Losada, escatimó críticas a Feijóo. Aseguró que las políticas del déficit cero y el recorte selectivo de impuestos "abocan a este país a la pobreza". Como está convencido de que el presidente en funciones reincide en esta segunda legislatura, el dirigente socialista lo comparó con "el mayor estafador del mundo, Victor Lusting, que intentó vender dos veces la torre Eiffel".

Sin llamar por su nombre a los recortes, explicó que "las decisiones, por complejas que pueden resultar, tienen una razón de ser y un fin que es el social". Tras advertir que el cuidado de los servicios públicos no depende "del nombre de un partido" sino de la eficacia de la gestión, lanzó un compromiso para primar a las personas desahuciadas en la adjudicación de viviendas de protección oficial, sin extenderse en los detalles. Su guión de 49 folios ofertó pactos sobre el territorio, el crecimiento, los fondos europeos, el mapa municipal y los servicios públicos. Y reservó unos párrafos para que Feijóo admitiese por primera vez "la incertidumbre" que pesa sobre Novagalicia Banco.

Un grupo de ganaderos que estos días arrojan su producción de leche como protesta contra los bajos precios habían interrumpido antes la solemne sesión con reproches a Feijóo. Fueron desalojados por los servicios de seguridad antes incluso de que lo ordenase la presidenta, Pilar Rojo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/27/galicia/1354047156_246667.html

NOVENA AMONESTACIÓN A LA XUNTA POR PARTE DE LA JUNTA ELECTORAL

El PsdG ha pedido que se traslade a la Fiscalía el reiterado incumplimiento de la Ley electoral por parte del gobierno gallego

La Junta Electoral ha vuelto a exigir a la Xunta, por novena vez desde que se convocaron los comicios, que "se abstenga de la realización de actos prohibidos" por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), después de que el PSdeG denunciase la visita que realizó el pasado día 8 el conselleiro de Medio Ambiente al municipio pontevedrés de A Estrada para anunciar el proyecto de urbanización de la Ciudad del Mueble. En su resolución, el órgano encargado de velar por la limpieza de la campaña electoral, considera que se trata de una "actuación prohibida" por el artículo 50.3 de la Loreg al no tratarse de "un acto estrictamente institucional en los términos del punto tercero de esta Instrucción".

El coordinador de la campaña electoral del PSdeG, Pablo García, ha instado a la Junta Electoral de Galicia el traslado a la Fiscalía de las resoluciones en que consideró que el PPdeG había vulnerado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El representante socialista aporta en su requerimiento la documentación sobre los cinco casos en que, a instancia del PSdeG, la Junta se pronunció contra la participación de miembros del Gobierno en diversos actos o informaciones contenidas en la página web del Gobierno, que considera que demuestran la reiteración en las irregularidades. En su escrito, el PSdeG aporta la documentación referida a la participación de Núñez Feijóo en la firma de unos 'supuestos contratos' con Pemex y en una recepción a nuevos integrantes de la Policía Nacional.

También cita la resolución que obligó a la Xunta a retirar de su página web una noticia sobre acusaciones contra el alcalde de Lugo, y las visitas del conselleiro de Educación a centros de Valdeorras y de la titular de Sanidade a las obras del nuevo hospital de Vigo. El coordinador de la campaña socialista señala en su escrito que estos hechos pueden ser constitutivos de una infracción penal, 'concretamente de un delito electoral, tanto por los hechos mismos como por su reiteración en el uso de instituciones públicas para la venta de logros en

campaña electoral'. Por ello, García le pide a la Junta Electoral de Galicia que traslade la documentación que aporta a la Fiscalía.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/11/galicia/1349973170_513158.html

FEIJÓO CONCEDIÓ CONTRATOS POR MÁS DE 1.2 MILLONES A EMPRESAS DE LAS QUE SU HERMANA ES APODERADA

La mayor parte de las adjudicaciones se realizaron en los últimos nueve meses, justo antes de la convocatoria de elecciones. El PSdeG exige al presidente de la Xunta que dé explicaciones

Micaela Núñez Feijóo ha podido comprobar en apenas nueve meses el privilegio que supone tener a un hermano como presidente de una comunidad autónoma. Las diferentes filiales de la empresa Eulen, de las que ella es apoderada desde hace ocho años, se han beneficiado desde principios de año de nueve contratos de la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo y que, en total, han supuesto a la entidad unos ingresos que alcanzan 900.000 euros.

Si a esa cuantía se le suma la del contrato que se concedió a Eulen S.A. en 2010, apenas unos meses después de que el actual presidente accediera al poder, la cantidad total que han recibido las empresas que gestiona la hermana de Núñez Feijóo desde hace tres años asciende a más de 1,2 millones de euros.

Es especialmente llamativo el número de contratos adjudicados a Eulen en los últimos meses, justo antes de que el presidente gallego convocara elecciones anticipadas y, por tanto, viera peligrar su continuidad al frente de la Xunta. Según la página web oficial que el Gobierno autonómico ha creado para hacer públicas todas sus contrataciones ([seguir este enlace](#)), el Ejecutivo gallego ha contratado con las diferentes empresas del grupo licitaciones que incluso han alcanzado los 432.000 euros, como la que el pasado mes de marzo adjudicó a Eulen S.A. el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas verdes del complejo medioambiental de Cerceda (A Coruña).

Otro de los contratos más jugosos es el que, en febrero, supuso la adjudicación a Eulen Seguridad S.A del servicio de seguridad general del recinto ferial y particular de la Semana verde de Galicia, cuyo gasto asume la Xunta, y que ascendió a 147.500 euros. Así, en total, hasta nueve adjudicaciones a las empresas vinculadas a la hermana de Núñez Feijóo en tan sólo ocho meses, apurando el plazo hasta las elecciones que se celebrarán el próximo día 21.

El PSdeG quiere que Feijóo dé la cara

Según los diferentes documentos de los registros a los que ha tenido acceso *Público*, Micaela Núñez Feijóo figura como apoderada de cuatro empresas. Entre ellas están Eulen Sociedad Anónima, con sede en Bizkaia, Eulen Seguridad S.A. y Eulen Servicios Sanitarios S.A., ambas situadas en Madrid. La figura de apoderada que ostenta la hermana del presidente gallego supone que los propietarios de las empresas le han dado poderes y, por tanto, ella se encarga de administrar algunas de sus gestiones.

El escándalo, que ha sido desvelado esta misma mañana por el diario ourensano *La Región*, entrará de lleno en la campaña electoral del 21-O que comenzó la semana pasada. De hecho, los socialistas gallegos ya tienen pensado poner en marcha diversas iniciativas para que Núñez Feijóo dé la cara. Fuentes del PSdeG consultadas por este diario han exigido al presidente de la Xunta que "explique y aclare" las condiciones en las que se han producido todos esos contratos. Y, en rueda de prensa, el líder de los socialistas coruñeses, Francisco Caamaño, ha instado a Núñez Feijóo a dar "explicaciones" y ha tildado de "inquietante" la noticia que se ha hecho pública este lunes

<http://www.publico.es/espana/443581/fejoo-concedio-contratos-por-mas-de-1-2-millones-a-empresas-de-las-que-su-hermana-es-apoderada>

EL MAQUILLAJE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE GALICIA ESTALLA EN CAMPAÑA

Feijóo se aferra a que cumplió el déficit en 2010

El PSOE ha pedido explicaciones a la secretaria de Estado de Presupuestos

El presidente señala que “es imposible” trasladar 400 millones en facturas

El termómetro de la campaña electoral gallega se disparó este martes después de que EL PAÍS publicara el informe del Consello de Contas que certifica que la Xunta desplazó irregularmente facturas por valor de 411 millones del ejercicio 2010 al 2011, lo que le permitió cumplir con el límite de déficit para ese año (el 2,4%) y no entrar en el grupo de las comunidades incumplidoras por seis décimas.

Varias horas después de conocerse el documento, que está pendiente de las alegaciones de la Xunta para su aprobación definitiva, la Consejería de Hacienda se defendió diciendo que las cuentas públicas ese año fueron “avaladas tanto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como por el Gobierno central socialista”. Sin embargo, el comunicado no entra a analizar los desplazamientos de 223 millones de euros de gastos que varias consejerías endosaron al ejercicio 2011 “sin que existan razones de orden económico, contable o presupuestario que lo justifique”, como señala Contas, y fuera de los supuestos recogidos en la ley.

Tampoco dice nada sobre los 188,2 millones de euros que el Servicio Gallego de Salud trasladó irregularmente de un año a otro. Hacienda, sin embargo, apunta a que actuó siempre “cumpliendo de manera estricta la normativa vigente”, pese a que un análisis aleatorio de facturas realizado por el órgano fiscalizador desvela que el 83% de los pagos comprometidos de ocho departamentos se computasen mal.

El presidente y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a negar la mayor a primera hora de la mañana. “Es imposible”, dijo, trasladar 400 millones de facturas de 2010 a 2011 y cerrar ese ejercicio con un déficit del 1,6%, “el más bajo de España. Sería un gran milagro”, ironizó. Sus palabras chocaron con las del consejero mayor del Consello de Contas, Luciano Fariña, que intentó quitar hierro al asunto asegurando que “no es la primera vez” que el ente fiscalizador detecta estas anomalías y auguró que “habrá gastos que se pasen del ejercicio de 2011 al de 2012”.

El PSOE aprovechó todas las comparecencias públicas de sus candidatos para arremeter contra la gestión de los populares y aprovechó para solicitar en el Congreso la comparecencia de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, que entonces llevaba las riendas de la Hacienda gallega.

El cabeza de lista por A Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró que el informe es “la evidencia palmaria de que Feijóo, que tanto presume de solvencia, consigue esa apariencia haciendo trampas en las cuentas”. El propio Pachi Vázquez, candidato a la presidencia, lo sacó a relucir en el debate televisado por el canal autonómico en el que se medía la pasada noche con el nacionalista Francisco Jorquera. Desde el BNG insistieron en que “Feijóo está montado en la mentira permanente”.

La Xunta no solo desplazó 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 a 2011. También incumplió la propia ley presupuestaria, que en el artículo tres “no permite disminuir los créditos consignados en el programa 312D-Servicios Sociales de atención a personas dependientes”. El documento señala que a lo largo de aquel ejercicio se aprobaron “9.674.865,21 euros de transferencias positivas y 20.853.621,41 euros de transferencias negativas”, para esta partida, por lo que el saldo resultante es “significativamente negativo”.

“Resultan preocupantes las carencias de control”

El informe emitido por el Consello de Contas, organismo fiscalizador de la Xunta de Galicia, no deja lugar a dudas sobre los movimientos irregulares de créditos que se realizaron en el ejercicio 2010 para cuadrar los números.

“El artículo 60.2.b de la Ley de Régimen Presupuestario y Financiero de Galicia permite aplicar a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de la expedición de las órdenes de pago, obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. (...) Sin embargo, la Administración no hace un reconocimiento formal de estas obligaciones, y por lo tanto tampoco realiza su contabilización dentro del ejercicio”.

Según el Consello de Contas, “resultan preocupantes las carencias de control en el seguimiento y validación del gasto desplazado, que no facilita una cuantificación fiable del mismo”. Esta práctica, que afectó a facturas de 411 millones de euros, puede acabar “distorsionando el resultado presupuestario”, y afecta

“negativamente a los presupuestos futuros”, al disminuir la capacidad de maniobra “por las cargas arrastradas”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/09/actualidad/1349811672_395981.html

FEIJÓO ‘CAMUFLÓ’ SUS CUENTAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT EN 2010

El Consello de Contas denuncia el traslado irregular de facturas al año siguiente

La Xunta de Galicia desplazó de forma irregular 411 millones en facturas mal contabilizadas del ejercicio 2010 al 2011. Así lo demuestra una auditoría realizada por el Consello de Contas pendiente de aprobación por el pleno de este organismo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Gracias a esta fórmula, la Xunta logró cumplir con el techo de gasto al reducir en siete décimas el déficit presentado al Ministerio de Hacienda que entonces presidía la socialista Elena Salgado.

Según desvela el informe instruido por un exconselleiro de Economía de Fraga, José Antonio Orza, solo el Servicio Galego de Saude invirtió 188,20 millones de euros como "gasto no contabilizado" en 2010 que trasladó irregularmente a los presupuestos de 2011. A ello se suma un análisis aleatorio sobre una importante bolsa de gasto en varias consellerías que reveló que la mayoría de los pagos se imputaron erróneamente de un año a otro, lo que arroja un aplazamiento de gasto de 223 millones. En el resto de departamentos del Ejecutivo de Feijóo, el Consello de Contas también destapó prácticas dudosas. Se da la circunstancia de que la responsable de las cuentas de la Xunta en aquel momento es la actual secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno central, Marta Fernández Currás, fichada por el ministro Cristóbal Montoro poco después de acceder al cargo.

De los 265,7 millones de obligaciones de gasto trasladadas en 2010 a las cuentas de 2011 por ocho departamentos del Gobierno gallego, el 83,95% (223 millones de euros) se cambiaron de ejercicio de un modo anómalo. El cálculo es una estimación que parte del trabajo de los auditores después de que estos analizaran una a una facturas por importe de 111,3 millones de euros emitidas por consejerías y otros organismos oficiales. En ese exhaustivo repaso el órgano de control de las cuentas de la Xunta detectó 93,4 millones mal computados. El trabajo de campo de los auditores dispuso de una muestra inusitadamente elevada, tras analizar el 41,88% de las obligaciones imputadas en 2010 al ejercicio contable siguiente.

En aquella anualidad —y en las posteriores— Feijóo siempre presumió de que la Xunta bajo su mandato entró en el selecto y reducido grupo de comunidades que hicieron los deberes cumpliendo el objetivo de déficit. El techo marcado por el Gobierno central, del 2,4%, no se llegó a rozar en Galicia por tres centésimas (2,37%), y la autonomía resultó la quinta que mejor cumplió con el rigor presupuestario. Semejante aval sirvió al presidente gallego para sacar pecho e inaugurar el mantra que le ha acompañado hasta el fin de la legislatura. La Xunta "hace más con menos" y Galicia es "una comunidad solvente".

Sin embargo, de la información de Contas se deduce que los números presentados al ministerio deberían haber sido muy distintos. Los 411 millones que se trasladaron al ejercicio posterior (y se fueron pagando a costa de una menor ejecución presupuestaria) obraron el milagro de evitar que el gasto se disparase siete décimas, hasta el 3,09%. Sin esos apaños contables, la realidad habría sido radicalmente opuesta, Galicia ocuparía el puesto número 11, entre Aragón y La Rioja, en el ranking nacional y habría sido la séptima en incumplir el techo de gasto. Todo ello, como indica el Consello de Contas, gracias a que se ampararon desplazamientos de obligaciones "sin que exista razón de orden económico, contable o presupuestaria que lo justifique", y fuera de los supuestos en que legalmente se pueden aplazar. De ahí que el documento deslice gran preocupación por la disciplina interna aplicada en el gasto.

El informe también alerta de otra circunstancia: las facturas que se traspasan se convierten en una bola de nieve cada vez más peligrosa que navega de presupuesto en presupuesto y que en algún momento corre el riesgo de estallar. Eso explicaría la premura con que la Xunta está cerrando sus presupuestos, hasta el punto de que en 2011 se agotó en septiembre.

Como ejemplo está la práctica del Servicio Galego de Saúde, que amplió el crédito en 2010 para financiar la farmacia o el personal. "El recurso a este mecanismo, reiterado a lo largo de los años, deriva en buena medida de la insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, y no incentiva a los gestores para contar con presupuestos realistas", apunta el informe de Contas, plagado de reproches.

"Estamos ante supuestos de gasto que debieron reconocerse en el ejercicio y respecto de los que procederían los ajustes necesarios tanto en la contabilidad presupuestaria como patrimonial. La práctica totalidad del gasto desplazado que resulta de la revisión responde a este supuesto", subraya la auditoría. Los reparos a la contabilidad del Ejecutivo de Feijóo no se paran ahí y el organismo de control avisa: "Cabe advertir que resultan preocupantes las carencias del control interno en el seguimiento y la validación del gasto desplazado, que no facilitan una cuantificación fiable del mismo igualmente resulta preciso prestar atención a la dinámica creciente de las imputaciones de gasto de años anteriores, que se incrementan en este ejercicio y que pueden acabar distorsionando ese resultado presupuestario y también porque, en cualquier caso, afectan negativamente a los presupuestos futuros para atender a las necesidades previstas debido a las cargas arrastradas de ejercicios anteriores".

Por eso, tras analizar los números de 2010, el Consello de Contas a la hora de certificar que Galicia ha cumplido el objetivo de déficit del 2,4% añade la siguiente coletilla: "Con las necesarias reservas de los posibles ajustes que puedan resultar de este informe".

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/08/actualidad/1349726015_660982.html

FEIJÓO ALEGA QUE EL MILLONARIO DUEÑO DEL AVIÓN ERA MILITANTE DEL PP

La Xunta Electoral amonesta al Gobierno gallego por séptima vez por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General

Un ataque a Zapatero como defensa. Con esa estrategia despachó ayer Alberto Núñez Feijóo la fotografía que lo mostraba a punto de subir al avión Paxariño Novo, propiedad del multimillonario de origen gallego José Benito López Carballado. "Yo asisto a todos los actos y mítines del PP con dinero del partido o de militantes del partido, como fue el caso", alegó el presidente de la Xunta, "y no me parece adecuado que otros utilicen aviones del ejército o Falcon para hacerlo". La referencia era al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez, acusado en 2009 por los populares de emplear aeronaves militares para desplazarse a actos del PSOE.

La imagen que provocó la reacción de Feijóo muestra al jefe del Ejecutivo y candidato a la Xunta del PP el pasado 15 de septiembre en el aeropuerto internacional de San Fernando, en Buenos Aires. Junto a él, el embajador español en Argentina, Román Oyarzun, el delegado del Gobierno gallego en la capital de aquel país, Alejandro López Dobarro, o el secretario general de Emigración, Santiago López Camba. El empresario López Carballado, propietario de una firma de servicios de limpieza líder en el sector, los recogió en el Paxariño Novo, que él mismo pilota habitualmente. Durante la campaña electoral de 2009, que llevó a Feijóo a Monte Pío, una foto del entonces vicepresidente Anxo Quintana en el yate del empresario Jacinto Rey sirvió al PP para atacar al bipartito y lanzar insinuaciones sobre los vínculos empresariales del nacionalismo.

La precampaña —oficialmente, la campaña comenzó anoche— hace días que ha aumentado su intensidad. El cartel con el que los populares pedirán el voto para sus candidaturas escondía, en su presentación pública del miércoles, el logotipo del PP. Ayer, Feijóo, en la misma comparecencia posterior al Consello de la Xunta en la que justificó su viaje en el jet del millonario gallego argentino, explicó que el personal de comunicación del partido tapó la parte del "vota PP" para no violar la ley electoral que prohíbe pedir el voto antes del comienzo oficial de la campaña.

Pero la derecha no ha sido siempre tan escrupulosa. De hecho, también ayer recibió su séptima amonestación en el último mes por incumplir el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). En esta ocasión, la Xunta Electoral de Zona de Santiago apercibió a la conselleira de Trabajo y número uno del PP por A Coruña, Beatriz Mato, por una visita al Centro Integral de Recuperación da Muller. La Justicia exige a Mato y a la concejala de Benestar Social de Santiago, Paula Prado —que la acompañaba en la visita— que "se abstengan de participar en actos similares que pueden vulnerar la normativa electoral bajo paercibimiento de incoar el correspondiente procedimiento sancionador". Además del PP, solo el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), ha sido amonestado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/04/galicia/1349376283_329707.html

FEIJÓO ENDURECE SUS ATAQUES A MARIO CONDE

"Votarlo significa avales para que gobierne un cuatripartito"

El candidato del PPdeG a la reelección y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que votar a partidos como el de Mario Conde --Sociedad Civil y Democracia-- "significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". En una entrevista a Punto Radio, Núñez Feijóo ha señalado que "cualquier voto a este tipo de personas que debutan, no se sabe muy bien por qué, significa avales para que gobierne un cuatripartito en Galicia". "Y recordamos todavía el bipartito", ha apostillado. "Me preocupa que personas de buena fe estén entregando el gobierno a organizaciones políticas contra las que se muestran disconformes. Un voto a este tipo de personas es un voto para que gobierne el Partido Socialista y los nacionalistas en todas sus facetas", ha manifestado preguntado por la posible incursión de Mario Conde en la política gallega. "No creo que Galicia se merezca una ración de bipartito ni una ración de cuatripartito", ha agregado.

Sobre la presentación este sábado de su candidatura arropado por el PPdeG, a la que no se prevé la asistencia de miembros del Gobierno central, el candidato popular ha justificado la ausencia de Mariano Rajoy, recordado que "hace una semana" inauguró en Soutomaior (Pontevedra) junto a él el curso político. "Parece razonable que venga todas las veces que quiera durante la campaña electoral. Por nosotros estaría aquí como en la última campaña, en 2009, en la que gracias a él y a todo el partido sacamos mayoría", ha comentado Feijóo, quien ha matizado que Rajoy "ahora es el presidente del Gobierno y las citas del presidente no son las mismas que las del líder de la oposición". "Estoy en política porque el señor Rajoy me lo propuso", ha recordado.

Además, ha diferenciado entre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el actual titular del Gobierno central al ser preguntado sobre si podría repercutir la presencia del líder del PP en la campaña de los populares gallegos. "Son dos personas distintas con dos responsabilidades distintas; Rajoy es el bombero de la economía que ha destrozado el señor Zapatero y el señor Rajoy se encuentra con un gran incendio en su país y no me parece muy justo que de los incendios se les eche la culpa a quien intenta apagarlos", ha argumentado.

Por su parte, ha defendido el trabajo de su gobierno al frente de la Xunta. "No hemos venido aquí a mantenernos en el poder, hemos venido a ser útiles", ha aseverado, para rechazar que las medidas promovidas por el Ejecutivo central repercutan en su campaña. "Las políticas del actual Gobierno vienen condicionadas por el desastre de la economía española", ha puntualizado Feijóo.

"A nadie le gusta recibir noticias malas. Rajoy se ha encontrado con una España enferma desde el punto de vista económico, con todos su órganos vitales afectados", ha comentado, para subrayar que "cuando un médico tiene que dar un diagnóstico tan brutal a un paciente eso genera una enorme desolación". Por ello, ha abogado por "admitir la situación" actual porque hay que "gestionar la realidad" y "decírselo a la gente por muy doloroso que sea". "La gente se irá dando cuenta que es mucho mejor ir atajando los problemas desde el principio que ocultarlos. Lo importante no es como empieza un partido sino como acaba", ha sentenciado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/06/galicia/1346927100_892384.html

UN CARGO DE CAÑETE RECORRE MUNICIPIOS DEL LITORAL PARA PROMETER LA LEGALIZACIÓN DE CASAS

Costas elude compromisos ante las demandas de alcaldes del PP

Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de solucionar el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los núcleos costeros tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de ordenación, los afectados de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de que la reforma en trámite de la Ley de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña y Vilanova de Arousa para transmitir a los afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, acompañado del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde Madrid. La visita dio para poco más que el socorrido "estamos trabajando en ello" y, en el caso de Moaña, para sembrar dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente.

"Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no", señaló Saavedra en la localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente provincial, Rafael Louzán, que había anunciado

que asistiría. El anteproyecto hecho público en julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de 100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”, advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despezó, y apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.

Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la tangente.” “Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/05/galicia/1346878287_691170.html

EL SERGAS PAGÓ 220.000 EUROS POR UN INFORME QUE NO APARECE

El informe no figura en el expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al organismo sanitario

El Sergas pagó 220.000 euros a la consultora PricewaterhouseCoopers por su asesoría para la contratación de la UTE concesionaria del nuevo hospital de Vigo, pero su informe no figura en el expediente completo recabado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al organismo sanitario en la tramitación del contencioso administrativo planteado por la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública, según informaron ayer sus portavoces, “por lo que debemos pensar que no existe”.

Fue la más “anecdótica” de las irregularidades del proceso concesional del nuevo hospital de Vigo señaladas por los portavoces de la asociación, que halla suficientes “incumplimientos importantes del contrato” por parte de la UTE concesionaria para motivar su anulación, como requirieron. Entre ellos, la financiación a riesgo y ventura de la concesionaria, alterada por la solicitud de la Xunta del crédito del Banco Europeo de Inversiones; el volumen y calidad del edificio y de los servicios, o el control y seguimiento del desarrollo y de los plazos de la obra a través de auditorías.

“La construcción está paralizada por la incapacidad de la concesionaria para financiar el proyecto”, aseguraron los portavoces de la asociación, un resultado que la propia asociación ha venido anunciando, recordaron, en sus alegaciones (que el Sergas ignoró) al modelo PFI elegido, en el contencioso administrativo interpuesto contra la concesión y en su denuncia ante el Valedor do Pobo. Incluso citaron un estudio de la misma Pricewaterhouse que, en general, declaraba el modelo “no viable” en 2008 por lo improbable de obtener recursos financieros a tasas comunes antes de 2007. El contrato de la UTE de Vigo las fijó al 8%, “pero ya nadie presta a eso”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/06/galicia/1346959954_317649.html

CARGOS DEL SERGAS VIAJAN A CANCÚN A UN CONGRESO DE FIRMAS SANITARIAS

Las dos directivas permanecerán en México tres días más después de finalizar las jornadas y la Xunta no aclara quién financia la estancia

No todo el mundo padece los efectos de la austeridad en la Administración. La directora técnica del Centro de Transfusión de Galicia, Inmaculada Rodríguez Calvo, y la hematóloga jefa de la entidad, Azucena Castrillo

Fernández, permanecen desde el 6 de julio en un congreso científico sobre transfusión de sangre en Cancún, en un viaje cuya financiación y finalidad la Xunta no ha querido aclarar. Aunque las jornadas dieron comienzo el 7 de julio y finalizaron en el día de ayer, las directivas del Sergas permanecerán en la ciudad mexicana hasta el domingo.

Lo insólito del caso es que, según se explica en el programa del evento, organizado por ISBT —una sociedad internacional cuyos miembros son multinacionales de la industria sanitaria—, las dos directivas del Sergas no intervinieron en ninguna de las ponencias centrales, no formaron parte de los comités científicos ni constan como invitados observadores. En el programa la única referencia que se hace a Inmaculada Rodríguez y Azucena Castrillo tiene que ver con la presentación de dos breves investigaciones, en un tiempo mínimo de 10 minutos cada una.

A la noticia tuvo acceso este diario a través de un supuesto comunicado enviado por correo electrónico desde una cuenta del comité de empresa del Centro de Transfusión de Galicia. En él se aseguraba que el precio del viaje —que incluiría inscripción, avión y hotel— supera los 4.000 euros por persona, cuestión que la Xunta no ha querido aclarar, si bien ha confirmado que las dos directivas estarán de vuelta el domingo, permaneciendo en México tres días más después de finalizar el evento.

En el supuesto comunicado del comité, también se alerta de la posibilidad de que el viaje fuese financiado por empresas médicas “a las que se les hicieron adjudicaciones millonarias” desde el Ejecutivo autónomo. “Esto aún es peor ya que la directora preside las mesas de contratación y la hematóloga que la acompaña es encargada de elaborar los informes técnicos que se tienen en cuenta para las adjudicaciones de compra de los productos de las empresas que patrocinan este tipo de viajes”, añade el comunicado. Asimismo, la nota alude al código de buenas prácticas del sector sanitario y critica que este tipo de eventos tengan lugar en espacios con un perfil marcadamente turístico.

Lo sorprendente es que el presidente del comité de trabajadores, José Ángel Varela, a pesar de tener constancia del viaje de las directivas del Sergas, desconoce quién fue el remitente de la denuncia. “En el comité nadie habló de filtrar esto y por lo menos yo desconozco el coste del viaje”, asegura. Además, añade que “es muy posible” que la estancia fuese financiada por empresas adjudicatarias de la Xunta, una práctica que considera “normal”. “Lo raro sería que pagasen empresas con las que no trabajamos”, finaliza.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/12/galicia/1342119994_546161.html

TRES AÑOS, SEIS MESES Y ONCE DÍAS

El índice de paro casi se ha duplicado en el mandato de Feijóo mientras la Xunta se ponía a la cabeza de las políticas de ajuste del gasto público

A Manuel Fraga se le atribuyó el síndrome de la bicicleta, siempre necesitado de movimiento para no caerse. Los ciclistas, sin embargo, pueden apearse a voluntad. Su heredero conservador en la presidencia gallega, Alberto Núñez Feijóo, tiene el síndrome del surfista. Necesita estar en la cresta de la ola para no acabar descabalgado. Feijóo se subió después de que su antecesor, el socialista Emilio Pérez Touriño, pasara hace cuatro años el mismo verano de dudas, consejos y presiones sobre si adelantar las elecciones para evitar los efectos de la entonces incipiente crisis, o agotar la legislatura. Touriño, que gobernaba en coalición con los nacionalistas, argumentó que los intereses de Galicia estaban por encima y perdió —en realidad perdieron sus socios— el diputado que daba la mayoría.

Hay dos consensos sobre la victoria del PP de Galicia. Uno, que salvó por la campana a un Mariano Rajoy a punto de ser defenestrado por su partido. El otro, que constituyó el primer ejemplo de lo que unos llamaron campaña sucia y otros, empleo de la táctica “no pienses en un elefante”. Al bipartito, el PP les reprochó gastos suntuarios que hoy harían sonreír, como la remodelación de un despacho y compra de sillas, y la sustitución de coches oficiales, por mucho que el propio Feijóo viajase en uno de ellos en su etapa de vicepresidente de Fraga.

Dentro del capítulo de promesas serias, Feijóo aseguró que en 45 días presentaría un plan para recuperar empleo, anularía el concurso eólico recientemente adjudicado, eliminaría las trabas que el bipartito ponía a las piscifactorías y, sobre todo, acabaría con la imposición del idioma gallego, que, según habían alertado oportunamente al PP algunos colectivos, se pretendía hacer aprovechando la normativa aprobada por consenso en tiempos de Fraga. También tendría

remedio otro de los problemas recurrentes, el de los incendios forestales. El bipartito había tenido en 2006 un verano de fuego y muerte, con cuatro fallecidos. "Con nosotros no había muertos", dijo con naturalidad Feijóo.

Grandes proyectos como el desarrollo eólico se han quedado en nada

A la hora de hacer balance de todo aquello hay paro, claro. Mucho. El mayor de la historia de Galicia, del 12,4% en aquel marzo electoral de 2009 se ha llegado al 21,1% el pasado febrero, según la Encuesta de Población Activa. A partir de 2009, Galicia ha perdido el diferencial positivo de crecimiento del PIB que tuvo entre 2005 y 2008. El concurso eólico, efectivamente, se anuló, y se realizó uno nuevo. El problema es que entre una cosa y otra, el Gobierno central decidió dejar de subvencionar a las energías renovables, y los recursos interpuestos por algunos concesionarios beneficiados en el primer reparto prosperaron. Hace pocos días, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia determinó que la anulación del primer decreto fue ilegal. Las concesiones nunca se pusieron en marcha. Y estamos hablando, o eso se dijo, de una inversión de 6.000 millones de euros y de 13.000 puestos de trabajo.

Tampoco se ha instalado ninguna piscifactoría, pero lo de la enseñanza en gallego sí dio que hablar. Una reforma que provocó ríos de tinta, pronunciamientos y grandes manifestaciones, encuestas a los padres cuyos resultados nunca se hicieron públicos, el triturado de cientos de miles de libros de texto porque explicaban que dos y dos eran cuatro en gallego y un decreto que no contentó ni a unos ni a otros. También hubo incendios, dependiendo del calor y de las lluvias. Y, desgraciadamente, hubo muertos.

Del gobernante Fraga se ha pasado al papel de mero administrador

A lo largo de esta legislatura, que cumplirá el 21-O tres años, seis meses y once días, Feijóo ha ido sacando conejos de la chistera. Además del eólico, en las municipales lanzó el globo de un complejo industrial en Ourense para producir un coche eléctrico, una inversión que crearía 1.030 puestos directos, y que acabó pinchando. A primeros de año, anunció también un plan que, con una dotación de 30 millones de euros, crearía nada más y nada menos que 44.000 empleos.

Tampoco ha pasado de los titulares a la realidad. El último unicornio es un contrato con la petrolera mexicana Pemex para construir unos remolcadores. En lo político, el logro prometido — además de atender el clamor popular de reducir el número de diputados, finalmente desatendido por el adelanto electoral— fue el de fusionar dos ayuntamientos de 5.500 habitantes (entre los dos), proceso que ni se ha iniciado.

En el capítulo de lo positivo, PP y PSdeG aprobaron una reforma de la ley de los medios públicos similar a la que regía en RTVE antes de que la cambiara el PP (aunque todavía no la han aplicado).

Feijóo logró evitar la emigración de las dos cajas, y fusionarlas, aunque no asegurar su futuro, obviamente. Y las cuentas de la Xunta arrojan mejores resultados que la mayoría de las comunidades autónomas, aunque sea mediante usos como decretar años contables de siete meses, y aunque esa austeridad no sirva a funcionarios o dependientes para librarse de los mismos recortes aplicados en los territorios donde se despilfarra.

Posiblemente en Madrid, en cuyos medios se prodiga, Feijóo haya ganado puntos con su aspecto de joven obsequioso y eficaz ejecutivo sobre el atrabiliario, un tanto tosco y menos dúctil Fraga Iribarne. En Galicia es al revés. Ha bajado el nivel de gobernante al de mero administrador. Sus alcaldes no están precisamente contentos por la austeridad. Además, tampoco es que sean suyos. A pesar de sus intentos, el PP de Ourense sigue siendo del PP de Ourense, es decir de los Baltar y no suyo. Excepto en A Coruña, donde el mérito es del presidente provincial y alcalde coruñés, Carlos Negreira, en Pontevedra y Lugo no ha logrado nuevas conquistas.

Con ese panorama, o más bien, con esa falta de panorama, ¿para qué esperar seis meses más?

Adiós a la investigación de las cajas

Con la disolución hoy del Parlamento, quedan enterrados varios trabajos y textos legislativos promovidos por el PP y la Xunta. Con tan solo cinco días de vida, se desactiva la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros. El PP, en un gesto ante las protestas de

las víctimas de preferentes, decidió ponerla en marcha el pasado miércoles, pese a que la posibilidad de un adelanto electoral ya estaba encima de la mesa.

También enterrado queda el proyecto promovido para modificar la ley gallega de cajas y la gestión de la obra social de las antiguas entidades de ahorro. Aprobada inicialmente en el último pleno, el 2 de agosto, estaba abierto el plazo de enmiendas para un texto que ahora decae y queda sin vigencia alguna. Igualmente, desaparecen otros cinco proyectos de ley del Gobierno. Tres de estas iniciativas, hasta ahora en trámite, pretendían ser de especial incidencia ya que con ellas la Xunta intentaba un cambio del sistema productivo, como son los textos para el fomento de la investigación y la innovación, el de impulso de las infraestructuras de telecomunicaciones y el de reforma del sistema universitario.

Además de la abortada reforma de la ley electoral, que no llegó a presentarse formalmente, se aplaza el desarrollo de la nueva ley de la Compañía de Radio Televisión de Galicia. Está en vigor, pero los grupos parlamentarios aún negociaban un plan marco para constituir la corporación de los medios públicos con nuevos criterios. La designación, por primera vez, del director general de CRTVG por una mayoría cualificada del Parlamento todavía deberá esperar.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/27/galicia/1346101464_335481.html

FEIJÓO ACEPTA QUE RAJOY APARQUE SU PROMESA DE APLAZAR LA DEUDA DE GALICIA

Ahora admite que Rajoy reconsidere su promesa de aplazar la deuda autonómica

De la firmeza con que cada jueves, desde el atril en el que desgrana los acuerdos de los Consellos de la Xunta, exige al Gobierno que le aplaze la deuda con el Estado, al apaciguamiento con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo hizo frente ayer a las preguntas de los periodistas después de que Javier Arenas, en nombre de los barones autonómicos del PP y tras reunirse con el futuro presidente, anunciase que queda en suspenso el compromiso de ampliar de cinco a 10 años el plazo de devolución del dinero que las comunidades adeudan al Estado, por anticipos efectuados en 2008 y 2009 que no se recaudaron por la crisis. La Xunta mantiene intacta su reclamación, afirmó Feijóo, pero aceptó que el futuro presidente no tome la decisión mientras no conozca "el estado de las cuentas y del Tesoro público".

El futuro jefe del Gobierno prometió en campaña demorar las devoluciones

El aplazamiento de la devolución de esos ingresos a cuenta, que en el caso de Galicia asciende a unos 2.000 millones de euros, era un compromiso asumido y reiterado por el presidente del PP, Mariano Rajoy. La última vez, en la apertura del curso político tras el verano en el castillo de Soutomaior. El jueves, Arenas condicionó el cumplimiento de esa promesa a las cuentas que se encuentre el Partido Popular: "Se abordará desde la mejor voluntad cuando tengamos conocimiento del déficit y la situación de la tesorería". Feijóo se agarró ayer a esas intenciones para aplaudir la "disposición" y "sensibilidad" del futuro presidente.

"Es importante y positivo que el nuevo Gobierno abra una puerta al aplazamiento del pago", se conformó Feijóo, que añadió: "Pero un presidente que aún no es presidente no puede tomar decisiones que afectan a los Presupuestos ni al Tesoro de la Hacienda Pública". Y, en todo caso, Galicia está "en el camino de ese objetivo".

Feijóo incluyó el de la deuda entre los "problemas que se encontrará y tendrá que solucionar" el nuevo Gobierno cuando tome posesión. "Fuimos incapaces de entendernos con el Ejecutivo anterior: que aceptase que las comunidades autónomas no pueden dedicar el 5% de sus presupuestos hasta 2016 [a pagar la deuda] porque el Gobierno socialista hizo unos Presupuestos irrealistas", afirmó.

La comprensión que mostró ayer Feijóo con la inconcreción de Rajoy se produce después de una jornada, la del jueves, que se abrió con las declaraciones del coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, en las que dio por hecho el aplazamiento de la deuda. La Consellería de Facenda se apresuró a aplaudir el anuncio. "Es muy buena noticia para Galicia", afirmaron fuentes del departamento de Marta Fernández Currás, que recordaron que el aplazamiento en los pagos fue una petición que lideró el Gobierno gallego y a la que posteriormente se unieron otras comunidades autónomas. Pero después compareció Arenas con

un jarro de agua fría a las expectativas de la Xunta. El presidente gallego restó importancia a estas contradicciones y a la apresurada reacción de Facenda. Feijóo, que no pudo acudir a la cita con Rajoy en la sede del PP por problemas de agenda, afirmó que aclaró la cuestión por teléfono por la noche con Arenas. "Nos confirmó que el compromiso sigue", zanjó.

En la misma rueda de prensa, Feijóo eludió cualquier responsabilidad en el aumento del paro en noviembre en Galicia, la comunidad autónoma donde más creció el número de desempleados. "¿En qué ha fallado la Xunta?", le preguntó un periodista. El presidente se aferró a los datos de los últimos 11 meses, en los que el incremento fue "un punto inferior" que la media estatal.

En todo caso, depositó toda la responsabilidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y apeló a los datos, "malos sin contemplaciones", para defender como "imprescindibles" algunas de las tareas que tiene por delante Rajoy, como acometer la reforma laboral, rebajar la prima de riesgo, enjugar el déficit y restablecer el sistema financiero. "Está fallando prácticamente todo", afirmó. Feijóo aseguró que el futuro presidente ya está trabajando y tiene "enfocados" todos esos problemas para adoptar decisiones cuando tome las riendas del Ejecutivo.

www.elpais.es 03.12.11

PARADOS SIN PRESTACIÓN LLEVAN DOS MESES PAGANDO SUS MEDICAMENTOS

Los afectados siguen con la tarjeta sanitaria bloqueada pese a la promesa del Sergas de que las reactivaría inmediatamente de oficio

E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas. Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. "Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar", cuenta.

Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes parados que estos días descubren que su tarjeta está desactivada: ha agotado su prestación por desempleo hace más de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a Urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información que recibe del Sergas dice todo lo contrario. "A mí lo que me dijeron es que por urgencias [la única asistencia a la que sigue teniendo derecho] me van a cobrar, que tengo que cubrir un compromiso de pago", relata. El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Ventorrillo a la delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos meses, cuando intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. "Como estoy enferma y tomo mucha medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré". El boticario no pudo acceder a la receta electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada.

En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. "Me dijeron que el Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin Seguridad Social, y que yo estaba en esa lista". Los trabajadores del Sergas le indicaron también qué opciones tenía para recuperar su derecho a la asistencia gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un pariente, no le sirve porque todos sus familiares están empadronados en otras ciudades, por eso se ha decantado por la tarjeta para personas sin recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía no ha recibido nada. El pasado jueves intentó pedir cita para comprobar si su trámite estaba ya completo, porque Farjas afirma que todas las tarjetas bloqueadas se están activando "de oficio". Su nombre sigue sin figurar.

Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin sorpresivo de su derecho a la asistencia sanitaria hace una semana. Parada de larga duración y a tratamiento por una depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis u ocho meses. Por ahora, mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que presentar, como el resto de los afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su única vía para recobrar la asistencia sanitaria es solicitar tarjeta destinada a las personas sin recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de empadronamiento. "¿Qué está pasando

aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este asunto de la tarjeta", le preguntó a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña cuando E., la paciente de O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para recuperar su tarjeta.

"Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico". Luis (nombre ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a este vecino de A Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la Seguridad Social. "Declaro mis impuestos, pero el negocio es un desastre", se lamenta. El cruce de datos que le hizo hace dos semanas una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de su situación reveló el diagnóstico esperado. Su tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita su declaración como PSR y mientras paga sus medicinas.

"Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación", cuenta Marcos Otero, también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan en un ir y venir del centro de salud solo para presentar papeles "y sin cobertura". A diferencia de los casos anteriores, Otero, que actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante de empleo, llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un mes pidió cita para una consulta porque tenía molestias en un pie. No se la pudieron dar porque no tenía un médico adjudicado desde agosto. "Pensé que era algo ajeno a mí, un error administrativo", explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo que le pasaba. "Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar". Tampoco en esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas bloqueadas.

A la vez que continúa el goteo de casos, aumenta el número de firmas reunidas en la plataforma digital Actuable para pedir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el desbloqueo de la tarjeta sanitaria a los parados que llevan más de 12 meses sin prestación. Ayer apoyaban la iniciativa de Alejandro J. Pérez Morán 11.000 personas. Los firmantes exigen a Feijóo "la retirada inmediata de la orden del 5 de septiembre de 2011", la norma que cambia los requisitos de acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin empleo o con pocos recursos.

Vaivenes del Sergas con la tarjeta sanitaria

- 20 de octubre. Pago de 10 euros por el extravío. Al Consello Económico e Social de Galicia le parece que la propuesta "debe de ser un error" y propone "eliminarla".

- 23 de octubre. Trascienden las limitaciones del nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde el 29 de septiembre, al uso de la tarjeta para parados de larga duración, personas sin recursos y extranjeros. Sanidade alega que es para evitar el fraude a la Seguridad Social y que sigue una recomendación de la Comisión Europea para "detectarlo".

- 18 de noviembre. Primeras denuncias de desactivación de la tarjeta. "Es absolutamente falso", responde el Sergas. Atribuye las denuncias a las elecciones.

- 12 de noviembre. El Sergas admite que se bloquean tarjetas y señala que ha ordenado reactivarlas de oficio. Los afectados "no tendrán que tramitar nada". Galicia solo se adelanta cuatro meses "a una medida del Gobierno de España".

- 24 de noviembre. La conselleira, Pilar Farjas, afirma que se limita a recoger los requerimientos del INSS y que es este organismo del Ministerio de Trabajo el que deja a 300.000 personas sin cobertura hasta el 1 de enero. El INSS sostiene lo contrario, que garantiza la cobertura a los 300.000 y que la Xunta no ha firmado un convenio para reducir trámites. Farjas dice que lo firmó, pero se refiere a un acuerdo de un año antes.

www.elpais.es 26.11.11

FEIJÓO DEFIENDE QUE SE PAGUE MÁS POR FÁRMACOS Y TASAS UNIVERSITARIAS

El presidente coincide con el rector de Santiago en subir tasas universitarias

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está a favor de un nuevo modelo de prestación farmacéutica que lleve a que los pacientes tengan que pagar más por las medicinas. Lo avanzó ayer en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta en la que se sucedieron cinco preguntas consecutivas acerca de su postura sobre el copago. Feijóo sembró primero todas las dudas posibles sobre las cuentas del Estado: dijo textualmente que hay que conocer el "déficit real", aseguró que existen "facturas sin computar" y "deudas ocultas", de forma que el Gobierno de Rajoy recibe una "herencia compleja".

El jefe del Ejecutivo rechaza cobrar por consultas o estancias hospitalarias

Cuando tome posesión el nuevo gabinete y se conozca el "déficit real", se abrirá un debate sobre el futuro de la sanidad. Feijóo pidió "no demonizar" formulas como el copago pero se apresuró a anticipar que si el futuro presidente le consulta, él desaconsejará "el cobro por consultas, pruebas y estancias hospitalarias". Invocó su experiencia como gestor -fue presidente del Insalud cuando José Manuel Romay Beccaría era ministro de Sanidad- para desecharla. No obstante, en su afán por "buscar eficiencias" para que el sistema sanitario sea viable, abrió la puerta a aumentar el precio que se paga por los fármacos. No facilitó más datos ni ofreció ninguna pista.

Solo abogó por "hablar y adentrarse" en una nueva prestación farmacéutica, el capítulo que más presupuesto consume de toda la Xunta. Lo importante, subrayó, es "garantizar la pervivencia del sistema público y universal para que no quiebre", dando a entender que puede venirse abajo "con un déficit de 18.000 millones" o los "500 euros que debe cada español" en este capítulo. En cualquier caso, defendió que no se deben hacer distinciones entre territorios y que el debate habrá de afrontarse "desde el todo".

De ahí que se felicitase por que Rajoy anunciara ya la misma noche de su victoria que convocará a todos los presidentes autonómicos. En ese foro es en el que Feijóo apuesta por "proponer fórmulas para salir entre todos del agujero económico". Interrogado sobre si el modelo de CiU de introducir el copago en forma de "tique moderador" para evitar el "uso abusivo" del sistema, Feijóo insistió en que no utilizará "la demagogia" para referirse a dirigentes que "quieren ser rigurosos".

En la misma línea, se posicionó del lado del rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Casares Long, que ha propuesto una subida de las tasas universitarias en la línea de otros países europeos. El presidente gallego calificó la idea del rector como "valiente y no improvisada". Feijóo defendió las becas para aquellos "que no tienen recursos" y subrayó que las matrículas para cursar estudios universitarios son más baratas que un colegio privado de educación secundaria. Además recordó que su Gobierno congeló las tasas en su primer año y las actualizó después por debajo del listón que propuso el Ministerio de Educación.

Fue en la misma rueda de prensa en la que dio por finalizadas "las fiestas presupuestaria" y avanzó que llegaron los tiempos del rigor, en que "los políticos que dejan agujeros son sustituidos por otros que los solucionan". Cuando llegó la recurrente pregunta sobre el número de ministros gallegos con los que podría contar el líder de su partido, despejó la cuestión, como lleva haciendo desde el pasado domingo, y pronosticó que el futuro gabinete de Rajoy no contará con cuotas territoriales, como tampoco lo hizo el que nombró él mismo para la Xunta en abril de 2009. Aseguró que en Galicia y fuera de ella hay políticos muy competentes, "la prueba es que el presidente del Gobierno es un gallego". La cuestión de si tiene pensado hacer cambios en la Xunta después de que el lunes anunciase su intención de acabar la legislatura la dejó sin responder.

www.elpais.es 25.11.11

EL MODELO DE RAJOY SE DESPLOMA

Galicia, a la que el líder del PP cita como ejemplo para su futura gestión, ve cómo cae su industria y el paro sube por encima de la media nacional

Por encima de Cospedal, Monago, Rudi o Bauzá -las nuevas caras del poder omnímodo del PP en las autonomías-, el ejemplo de Mariano Rajoy, según repite a la caravana electoral, está en Galicia y se llama Alberto Núñez Feijóo. Preside una comunidad que en dos años y medio de Gobierno popular ha dejado de converger con España y Europa, genera más paro que la media nacional, tiene a los colectivos profesionales de la sanidad y la educación en pie de guerra y amenaza con no pagar los casos menos severos de dependencia. También es la única autonomía junto a Madrid que ha cumplido en 2009 y 2010 con los objetivos de déficit presupuestario y mantiene una calificación por encima del resto de comunidades -A2, en términos de Moody's-, un notable alto que le permite pagar menos por una deuda que se ha incrementado en 3.600 millones de euros desde que Feijóo es presidente. Sin contar los compromisos extrapresupuestarios.

El presidente gallego presume de cumplir el déficit presupuestario

La deuda de la comunidad se ha incrementado en 3.600 millones

El curso empezó con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos

El índice de producción industrial ha bajado en picado

Al igual que repite ahora Rajoy, también hubo un tiempo en que su líder en Galicia disponía de las recetas para atajar el paro y reactivar la economía. Lo decía, de gira por las carreteras gallegas, en febrero de 2009, cuando hizo famoso el Audi blindado de su antecesor, Emilio Pérez Touriño, y el supuesto despilfarro del bipartito que mandaba en Galicia. Entonces, como ahora, el PP invocaba "el milagro" de Aznar en 1996. La receta también en aquellas vísperas electorales pasaba por bajar impuestos. En la promesa que Feijóo lanzó el 18 de febrero de 2009 no había ambigüedad posible: eran descuentos generalizados (de hasta el 8,2%) en el tramo autonómico del IRPF para ayudar a 600.000 familias a llegar a fin de mes. Costarían 100 millones de euros a las arcas de la comunidad y supondría "una inyección en vena al consumo".

Los condicionales aún sirven, porque esa medida nunca se llevó a cabo. El presidente repite ahora, tras cuadrar su tercer presupuesto, que aún tiene tiempo para aplicar su promesa estrella porque era un compromiso de legislatura. Si no lo hizo antes, alega, fue por "la herencia" que se encontró al llegar al Gobierno.

Por más que dibujase en campaña el panorama económico más negro que uno se pueda imaginar, el PP no contó con el desplome de la recaudación que se produjo en 2008, cuando Galicia entró de lleno en la recesión. Tras la victoria en las urnas y mientras se acomodaba en el poder, empezó a hablar de agujeros que pronto cifró en 2.600 millones de euros. La cuenta salía de sumar los anticipos a cuenta que la Xunta recibió en 2008 y 2009 del Estado y que debía devolver en los cinco años siguientes. Galicia solo ha afrontado un pago, 114 millones; el segundo ya no lo tendrá que efectuar, puesto que el aumento de la recaudación en 2010 ha compensado los 434 millones del segundo plazo que debía abonar en este ejercicio al Ministerio de Economía. Al final, en 2011 será lo comido por lo servido, pero aquel supuesto agujero sirvió y sirve para enterrar las publicitadísimas rebajas fiscales y justificar de paso muchos de los recortes.

En lugar de copiar la fórmula del 96, el PP gallego calcó la de 2007 cuando, en la campaña de las municipales, prometió bajar en los Ayuntamientos un 25% del IBI a los hogares con ingresos menores a 20.000 euros, una medida de la que nunca más se supo.

La Administración de Feijóo tampoco ha dado en la primera mitad de legislatura con la tecla del empleo. "La fábrica de parados de Zapatero" a la que suele aludir el presidente tiene en Galicia una subcontrata muy eficiente. En Galicia hay ahora 63.000 parados más que con el Gobierno anterior y Feijóo ha llegado a decir en el Parlamento que la Xunta "casi no tiene competencias para luchar contra el desempleo". Los datos del INEM y la Encuesta de Población Activa ratifican que el paro crece en Galicia dos décimas por encima de la media nacional y el índice de producción industrial se ha desplomado: acumula 11 meses consecutivos de caída, con una media de descensos del 7,5%, frente al 1,7% en el resto de España. Y por primera vez desde 2005, la Comunidad crece a un ritmo menor que la media española. Desde el Ejecutivo del PP admiten que se debe a que esta comunidad fue la primera en aplicar los recortes, una suerte de *keinesianismo* con la boca pequeña

La austeridad que pregonó Feijóo antes que nadie -y ahora Rajoy- sí entró a saco en la Administración gallega: redujo de 14 a 10 las consejerías, laminó a 45 de los 52 delegados de la Xunta en las provincias y dejó envejecer docenas de Audi en el garaje, la mayoría adquiridos por Fraga, antes de malvenderlos a proveedores habituales del Gobierno. Cayó el gasto superfluo, se recortó en asesores y personal de gabinete, y la Xunta impulsó un catálogo priorizado de medicamentos (solo subvencionaba el más barato) que fue recurrido por el ministerio ante el Tribunal Constitucional y que según el Servicio Galego de Saúde le ha permitido ahorrar 300.000 euros al día.

El candidato y presidente nacional del PP cita Galicia porque, a diferencia de las cuentas en Castilla-La Mancha o Cataluña, que se han desplomado súbitamente, en la Xunta la caída del presupuesto ha sido gradual desde 2009, y entretanto los populares presumen de dedicar "tres de cada cuatro euros a gasto social". Las cuentas han perdido 2.500 millones de euros en dos años y la Xunta tiene hoy una capacidad de gasto similar a la de 2006: 9.135 millones. El capítulo más castigado ha sido el de las obras públicas, que han sufrido caídas de más del 40% año tras año en la licitación.

Pero la sanidad y la educación públicas y por supuesto la dependencia, donde tanto Feijóo como su consejera de Bienestar, Beatriz Mato, deslizan que deberían librarse fondos para los casos más severos, también se han dejado jirones en este camino. Se puso fin a la gratuidad universal de los libros de texto instaurada por Touriño y desde enero cada usuario deberá pagar por la tarjeta sanitaria. La versión oficial es que se perdían muchas.

El curso 2011 ha empezado en Galicia con 3.000 alumnos más y 1.000 profesores menos. Y cuando estalló el conflicto en las aulas y se convocaron las primeras manifestaciones de alumnos, padres y profesores, el presidente pidió a los docentes que tomaran nota de la responsabilidad de los médicos. Sucedió al revés, los sindicatos se enteraron de que la Consejería de Sanidad solo cubrirá 176 de las 1.760 vacantes por jubilaciones, y fueron los médicos los que programaron huelga para el jueves anterior a las elecciones. Entretanto, Feijóo, aun a riesgo de incomodar a su secretaria general, reitera que mientras en Barcelona y Toledo "se cierran quirófanos y alas enteras de clínicas públicas, Galicia financia nuevos hospitales en tiempos de crisis".

Es una verdad a medias, porque, aunque la Xunta tiene previsto levantar dos macrocomplejos sanitarios en Pontevedra y Vigo y 19 centros de salud desperdigados por las cuatro provincias, el Gobierno actual no pagará ni un céntimo de esas infraestructuras. La fórmula de la colaboración público-privada (para pagar los edificios y algunos servicios no sanitarios) provocará que sean los próximos cinco Gobiernos los que sufragan esas obras durante los próximos 20 años.

De momento, el PP asume estas políticas recurriendo al enemigo exterior -la culpa siempre es de Zapatero- y sin ningún castigo electoral. Desde las municipales de mayo gobierna 212 de los 315 ayuntamientos, incluidos los de A Coruña, Santiago y Ferrol, además de tres de las cuatro Diputaciones. Y las encuestas vaticinan que el 20-N subirá un diputado por provincia hasta festejar su récord: 15 de los 23 parlamentarios en liza. Pero la cita electoral también tendrá efectos colaterales; si gana Rajoy, cuando pase la resaca a Feijóo se le habrán acabado las excusas.

www.elpais.es 15.11.11

FEIJÓO NIEGA QUE SE VAYA A COBRAR POR FALTAR A CITAS DEL SERGAS PESE AL DECRETO QUE LO PREVÉ

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó ayer con indignación cuando se le preguntó si el Sergas prevé cobrar cuando un usuario no comunique la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente, una acusación que tachó de "fraude electoral". Pese a la firmeza de su afirmación, el decreto publicado el pasado martes establece en una disposición adicional por la que "podrá establecerse un procedimiento para repercutir en los usuarios" gastos ocasionados por cuatro de los 12 supuestos que la Ley de Saúde, de 2008, establece como "deberes de la ciudadanía". Entre esas cuatro obligaciones se encuentra la número 11, que reza así: "Comunicar al sistema sanitario, a la mayor brevedad posible, la no utilización por cualquier causa de un servicio programado previamente".

Feijóo aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que fue el Gobierno bipartito al incluir ese deber el que "posibilita" el cobro, y expuso como demostración de que de momento Sanidade no lo va a ejercer el hecho de que el nuevo decreto deba desarrollarse en un orden de la consellería. "No se puede cobrar nada que no está totalmente tipificado", afirmó. No aclaró si lo piensa aplicar en el futuro.

El decreto que permite el cobro por el uso irresponsable de las prestaciones asistenciales es, según Feijóo, "lucha contra el fraude". La misma calificación concedió a la modificación de la Ley de Salud que obliga a los extranjeros a permanecer seis meses censados para acceder a servicios sanitarios distintos de los de urgencias, que aparece en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Galicia.

Defendió el presidente de la Xunta esta modificación para combatir lo que denominó "turismo sanitario", de extranjeros que se empadronan para beneficiarse de servicios de la sanidad pública española, como pruebas u operaciones quirúrgicas. Y de paso, criticó duramente al Ministerio de Sanidad por su rechazo a las restricciones al usufructo de los servicios del Sergas y por la posibilidad de que lo recurra judicialmente. "Ya sabemos la opinión de la ministra en asuntos judiciales", afirmó, en referencia al recurso contra el catálogo de medicamentos de la Xunta.

Otro recurso contra una ley gallega, la de Comercio Interior, ha obligado a la Consellería de Economía a modificar la norma, para suavizar los criterios de autorización de grandes superficies comerciales. Así lo reconoció ayer el titular del departamento, Javier Guerra, que compareció tras al Consello de la Xunta para presentar el anteproyecto de ley del consumidor, aprobado ayer. Entre las novedades de la nueva norma está la de impedir contratar con el sector público a empresas que cometan infracciones graves.

www.elpais.es 11.11.11

LA XUNTA SUPRIME 120 LIBERADOS SINDICALES EN LA ADMINISTRACIÓN

La mitad de los afectados salen de Educación y sin acuerdo con las centrales

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica la Xunta. Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de disponer de horas libres para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores, con un ahorro de cuatro millones de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerció de portavoz del Gobierno tras presidir el Consello de la Xunta en ausencia de Feijóo, de viaje en América, la medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La afirmación es cierta solo a medias: las principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación, del que saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo.

CC OO desmiente a Rueda y la CIG tacha la medida de "castigo al profesorado"

El sector de Sanidade pierde 45 liberados y el de Xustiza, 11

El conselleiro afirma que se dejarán de gastar al año cuatro millones

El Gobierno gallego prepara un segundo plan de ahorro en el parque móvil

No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se examinó en la reunión del Gobierno gallego. En él se especifica que el recorte de horas sindicales afectará al equivalente a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres áreas de la Administración autonómica concentran el 80% del personal autonómico, formado por unas 90.000 personas, pero menos de la mitad del total de liberados sindicales del comité de personal, que superan los 600. Los 120 afectados son, por tanto, alrededor del 20% del total.

"El consenso no es total, pero sí amplio", defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en Educación, que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos, ya que se efectúa sin ningún tipo de acuerdo. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao,

atribuyó la decisión a "un castigo" de la Consellería de Educación por las movilizaciones del profesorado de estos días. "Es un acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta", lamentó el dirigente del sindicato nacionalista, que aseguró que la medida dejará la actividad sindical "bajo mínimos".

Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el número de liberaciones en ninguna de las áreas afectadas. El coordinador del Área Pública del sindicato, Ramiro Otero, emplazó al Gobierno gallego a constituir una mesa global para negociar esta cuestión. Las declaraciones de Rueda, prosiguió Otero, "no responden a la realidad de los hechos". "La Xunta no nos ha hecho llegar ninguna propuesta por escrito, por lo que es falso decir que llegásemos a un acuerdo", sostuvo. El sindicato UGT, mientras, eludió comentar las afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó que hubo acuerdo en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación.

La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo, por lo que se procedió a "una regularización derivada de la aplicación de los acuerdos vigentes". El pacto en Sanidade fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se desmarcaron Comisiones Obreras y SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un "preacuerdo" firmado el pasado mes de agosto. Pese al desmentido de CC OO, la consellería asegura que fue asumido por "todas las centrales sindicales implicadas" y que supone una modificación del acuerdo existente en 2000.

La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración del número de liberados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos específicos en materia de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte aplicado a los liberados por acumulación de créditos horarios.

Los 120 afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos negociables en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están blindados por ley. Esta medida "de ahorro", como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta dejar de gastar cuatro millones de euros anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la medida se realiza "en proporción" al número de funcionarios en cada sector y se adopta "con las máximas garantías jurídicas". El Gobierno gallego, añadió Rueda, aspira a lograr un recorte similar, de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la Administración central autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de áreas funcionales.

Rueda aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para anunciar que ha pedido comparecer en el Parlamento para detallar una segunda fase de medidas de ahorro con el parque móvil de la Xunta. El conselleiro aseguró que cree "posible" economizar más en la gestión de los vehículos oficiales, por lo que ha decidido implantar nuevas medidas de contención del gasto. "Es lo que demandan los ciudadanos", argumentó. Alfonso Rueda evitó anticipar cuáles serán estas medidas y rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de restringir el uso de los coches oficiales solo a los conselleiros y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

www.elpais.es 23.09.11

DE GALICIA A PANAMÁ

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inició ayer su gira por México y Panamá en este último país, donde reivindicó el "prestigio" de las empresas gallegas, que "son fiables, cumplen con sus contratos y están acostumbradas a competir". Así lo sostuvo en la inauguración de un foro que estudiará las posibilidades de negocio entre Galicia y Panamá. En el encuentro, en el que participaron los ministros de Vivienda y de Obras Públicas y el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, Feijóo destacó, informa Europa Press, las "enormes expectativas económicas" que la comunidad tiene en este país, para conquistar "nuevos mercados" y atraer nuevas inversiones para la comunidad. A su llegada a Panamá, el presidente gallego marcó como "objetivo prioritario" de esta primera etapa de su viaje convertir los puertos gallegos en "puerta de entrada" de las nuevas rutas marítimas que se abrirán con la ampliación del Canal.

El PSdeG acusó a Feijóo de "huir de la crisis en Galicia" para hacer campaña en América "en favor de Mariano Rajoy y del PP". El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, reprochó a los

socialistas sus críticas "sin sentido" y los animó a unirse al "objetivo de internacionalizar la economía

www.elpais.es 23.09.11

BALTAR CONVIERTE EN FUNCIONARIOS A 15 CARGOS MÁS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS

Entre ellos, la hija del regidor de Cea, que ya tiene a cuatro parientes en la Diputación

José Luis Baltar sigue llenando la Diputación de alcaldes y concejales del PP, e hijos de todos ellos. Una nueva remesa de personas vinculadas a este partido en la provincia de Ourense ha resultado la mejor calificada en los exámenes de las oposiciones abiertas recientemente por el barón del PP gallego. La puntuación la puso un tribunal examinador que, como es habitual, estuvo integrado mayoritariamente por alcaldes, exalcades, concejales, o vástagos de ellos, también del PP. El *Boletín Oficial de la Provincia* (BOP) de Ourense de ayer detalla el nombre de una quincena de nuevos funcionarios de la endeudada institución ourensana al mismo tiempo que informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de cuatro plazas más.

El barón popular anunció en junio una política "de recortes" en la institución

Entre los nuevos funcionarios figuran María Pilar García Tizón, concejala del PP en Cea; Nicolás Pérez Pereira, hijo del alcalde de Padrenda; Diego Paz Taín, concejal de Verea; María Jesús Casas Nieto, hija del exchófer del vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández; Javier Fernández Varela, sobrino del alcalde de Boborás, y Avelino Pazos Pérez, *número dos* del PP en Castrelo de Miño y miembro de la ejecutiva provincial de este partido. Junto a ellos, la hija del alcalde de Cea, José Luis Valladares, que tras quedar sin escaño en la Diputación, decidió subir el sueldo en el Ayuntamiento un 70% y cobrar de las arcas municipales en torno a 34.000 euros anuales. Con el acceso de esta hija a la institución provincial, Valladares suma ya cinco familiares empleados por Baltar.

En el verano de 2010, el presidente de la Diputación de Ourense le vio las orejas a la crisis. Entonces alertó de que había "graves problemas" económicos en la institución provincial, con 17 millones de euros menos en el presupuesto de 2011. Baltar encaró la situación con el anuncio de que reduciría el gasto corriente y de personal así como las subvenciones. Pese a ello, en los primeros meses de este año blindó a su hijo para las municipales con una nueva remesa de aprobados en la Diputación, repitiendo la práctica de convocar plazas coincidiendo con las citas electorales. Solo entre octubre y junio, el presidente de la Diputación firmó 170 contratos temporales y convocó 50 nuevas plazas de funcionarios. La nueva remesa de aprobados que anuncia el BOP de ayer se suma a una plantilla que en este momento alcanza las 700 personas. Y la cuenta sigue.

La mayor parte de los empleos que ofrece la Diputación ourensana son, aunque bien remunerados, de baja cualificación. Es el caso de los 33 porteros de que dispone el edificio cultural de la Diputación que tiene tres puertas. En la tanda que ahora se ha hecho con plaza fija, figuran nueve puestos de peón caminero. Y el BOP de ayer informa de la convocatoria, por procedimiento de urgencia, de otras cuatro plazas más de estos peones. La hija de Valladares accede como administrativa.

Baltar contrata al nuevo personal vinculado al PP apenas unos meses después de explicar su política de recortes. En junio, el barón del PP advirtió públicamente de que "dietas y horas extraordinarias, las mínimas" y anunció que realizaría desde la institución un "estudio del gasto en teléfonos móviles porque se hace un abuso de ellos". "Hay que ver quiénes tienen que llevar móviles y a qué números pueden llamar", precisó entonces. Y aclaró en ese momento que los recortes no podían afectar en gran manera a los coches oficiales toda vez que "ningún diputado, excepto el presidente" lo tiene. Mientras tanto, el presidente convoca, mediante decretos publicados en el BOP de ayer, nuevas plazas de chóferes para la institución.

Pese a la crisis, pese a los anuncios de recortes para afrontarla y pese a la carga de personal, Baltar sigue colocando a los vástagos de los suyos ahora que espera finalizar su carrera política y dejar el legado de la institución -como hizo con el del partido- a su propio hijo.

LOS NUEVOS COLEGIOS CONCERTADOS SE SALTAN LAS NORMAS DE ADMISIÓN

Educación autoriza que cierren las matrículas antes de concederles el convenio

Los alumnos de tres años que este curso estudian gratis (subvencionados con fondos públicos) en el selecto y ultracatólico colegio Miraflores de Ourense no pasaron el criterio de selección que establece la normativa de la Xunta. El centro cerró el plazo de matrícula el pasado marzo. La dirección ya había solicitado el concierto, y el comité de evaluación provincial -no vinculante- lo había informado favorablemente, aunque faltaba la aprobación de la consellería. Pero la población no se enteró hasta agosto (el 19 de ese mes se publicó en el DOG) de que esa aula quedaba subvencionada con fondos públicos y de que, por lo tanto, podía aspirar a matricular a sus hijos gratis. Al día siguiente de que la Xunta autorizara el concierto, el colegio ya no admitía matrículas. Cerró su plazo en marzo, según confirman fuentes de Educación, que justifican la "normalidad" de este hecho en que "en ese momento, el centro era privado y no estaba sujeto a los controles administrativos a los que se someten los centros sostenidos con fondos públicos". La práctica es habitual en los nuevos centros concertados.

La consellería ve normal que el colegio aplique su criterio de selección

Cuando los padres del municipio quisieron hacer la matrícula, era tarde

El colegio Miraflores tenía en el curso pasado siete alumnos en el aula de cuarto curso de Infantil (niños de tres años) a la que se le concedió la subvención. En marzo, triplicó la matrícula y obtuvo el tope máximo de 25 niños para poder suscribir el concierto, según confirman las mismas fuentes de la consellería. Los matriculados no pasaron los criterios de selección que establece la Xunta (y entre los que figura como prioritaria la proximidad geográfica al domicilio familiar o al lugar de trabajo de los padres, el nivel de renta, la condición de familia numerosa y tener otros hermanos matriculados en el mismo centro).

La normativa relativa a matriculación de la Consellería de Educación establece que "los padres y madres tienen derecho a elegir centro docente entre la oferta de centros sostenidos con fondos públicos", pero los de los alumnos del municipio de Pereiro de Aguiar no lo tuvieron. No se enteraron hasta agosto (cuando ya no había plazas) de que sus hijos podían estudiar en el selecto y bien dotado centro en lugar de hacerlo en el público, Ben-Cho-Shey, donde Educación ha suprimido un profesor y ha creado un aula mixta de alumnos de distintos cursos académicos atendidos en el mismo horario por un solo maestro.

La consellería considera normal el proceso de admisión de los alumnos y asegura-citando fuentes del centro- que las matrículas se realizaron "por riguroso orden de solicitud". Educación puntualiza que el proceso de admisión "fuera cual fuere, se hizo según el criterio del colegio cuya unidad concertada sí que se verá sometida a partir de ahora a todo tipo de control".

Padres de alumnos domiciliados en el municipio de Pereiro de Aguiar en el que se enclava este centro -junto al también privado Guillelme Brown y al público Ben-Cho-Shey- aseguran que no tuvieron noticia alguna de que podían llevar a sus hijos a ese colegio. Y tienen difícil poder acceder en próximos cursos. "Nosotros nos sabíamos que lo iban a concertar pero, por lo que se ve, ellos sí, ya que avisaron a los suyos para que se matricularan", destaca un portavoz del Anpa del Ben-Cho-Shey.

El concierto que la Xunta concedió al aula de Infantil del colegio Miraflores se irá ampliado -como ocurre con todos los conciertos- año a año, de forma que estos niños podrán finalizar sus estudios en el centro y tendrán, en todo caso, prioridad sobre los restantes. Es lo que ha ocurrido este año con el también colegio privado -en este caso de ideología progresista- de Pereiro de Aguiar, Guillelme Brown. Educación le concedió el curso anterior el concierto que automáticamente se amplió este año.

El responsable de Educación de CC OO en Galicia, José Fuentes, advierte de que esta práctica de matriculación que la consellería autoriza es "fraudulenta". "Educación buscó un resquicio en la ley para permitir que colegios como en este caso el Miraflores matriculen a los suyos con dinero

público en lugar de a los alumnos del pueblo". Los sindicatos reclaman que las matrículas de los concertados las concedan "comisiones de escolarización externas al centro y vinculadas a la Administración, que es la que aporta el dinero". Creen que sería la única forma de impedir que el colegio "ofrezca a los suyos plazas que pagamos todos, incumpliendo los criterios de selección que impone la Administración.

www.elpais.es 17.09.11

EL TIJERETAZO A LAS CUENTAS RESTA OTROS 23 MILLONES A EDUCACIÓN Y SANIDAD

Los presupuestos para infraestructuras y cultura sufren una caída del 5%, el mayor porcentaje - Facenda insiste en que "se mantiene la calidad educativa"

Este otoño se notarán las consecuencias de un nuevo ajuste en el presupuesto de la Xunta, el segundo que acomete este año. Las consellerías verán restados sus fondos en 103 millones y paralelamente Galicia emitirá deuda por otros 114. Otros 26 millones se recaudarán de modo extraordinario a través del nuevo impuesto sobre el juego y de otras partidas menores.

El equilibrio pasa, según Alberto Núñez Feijóo, por no perjudicar el gasto social, que sin embargo se verá afectado. Los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, por debajo de la media de consellerías, que recortan un 3%. Aún así son 23 millones menos para educación y sanidad que aún no se ha aclarado de dónde se restarán. El resto de las consellerías, con alguna excepción, evitaron ayer explicar los planes de ahorro que avanzó la conselleira de Facenda. La tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la calidad educativa".

La consellería que dirige Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvió cualquier explicación al departamento de Facenda.

A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de atención primaria". También se "reprogramarán", inversiones que no se han iniciado.

En el área de Trabajo se habla de "reformular" (suprimir) las órdenes de ayudas que no están teniendo demanda. De manera genérica se alude a que se "optimizarán recursos" y se introducirán "mejoras en la gestión" de los centros, sin más concreciones.

Como en anteriores ocasiones, el departamento más perjudicado será el de Infraestructuras, cuya previsión de gasto se desploma un 5% (30 millones). Sufrirán las obras en proyecto y se priorizan las de titularidad propia. Aunque con un presupuesto cuantitativamente menor, otro damnificado es el departamento de Cultura, que tiene que ajustarse en un porcentaje similar, lo que le llevará a gastar siete millones menos. Los edificios del Gaiás seguirán esperando.

EL CONSELLEIRO DA LA ESPALDA A LAS CRÍTICAS

Jesús Vázquez salió ayer custodiado por la Guardia Civil del colegio público de Maside en el que iba a inaugurar el nuevo curso escolar. No pudo hacerlo. Los sindicatos educativos lo acorralaron con sus reivindicaciones. Le reprocharon el aumento del horario lectivo y el desmantelamiento de la enseñanza pública en beneficio de la privada. El conselleiro lo negó todo.

www.elpais.es 13.09.11

LAS INFRAESTRUCTURAS SUFREN DE NUEVO EL MAYOR RECORTE

El conselleiro Hernández pierde otros 30 millones de euros para obras

El Gobierno gallego deberá apanárselas este año con 1.282 millones de euros menos que en 2010, una caída del 11,8%, y del 15% si se compara con las últimas cuentas que manejó el bipartito. La

Xunta lo sabía desde hace un año -porque ya entonces el Ministerio de Economía avisó de que no transferiría hasta 2013 los 243 millones que le corresponden a Galicia por el fondo de cooperación en este ejercicio- pero prefirió ejecutar los recortes en dos tandas.

Ningún departamento explicó dónde aplicará el ahorro

Facenda ultima el pleito en el Constitucional contra el Gobierno

Así que en otoño aplicará un nuevo tijeretazo. El Gobierno gallego resta 103 millones de todas las consellerías y emite deuda (que no computará como déficit) por 114 millones. Los 26 que faltan hasta completar los 243 saldrán (o eso espera la titular de Facenda, Marta Fernández Currás) de la recaudación del nuevo impuesto sobre el juego que estableció el Gobierno central y empezará a cobrar en octubre, de un par de convenios con el Estado en materia de Medio Rural y de Sanidad, y de partidas de subvenciones que no tuvieron éxito entre los demandantes.

El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en las últimas semanas en que su gabinete preservará el gasto social en este nuevo ajuste, tesis que aún esgrimió ayer la conselleira de Facenda. En términos porcentuales es así: los departamentos de Sanidade y Educación pierden ahora un 0,4% de sus fondos, bastante menos que la media de las consellerías, que caen un 3%. Eso no evita que se dejen casi 23 millones en total (14,2 en sanidad, y 8,7 más en la rama educativa). Traballo y Benestar deberá meter la tijera para suprimir 17,8 millones sin que sus responsables hayan desglosado qué parte corresponde a políticas activas de empleo y cuál a servicios asistenciales. Fue la titular de Facenda quien pronosticó que "se blindará" el complemento de las pensiones no contributivas, la renta de integración social, las ayudas a ayuntamientos para centros de día, la dependencia y las subvenciones a discapacitados.

Casi ninguna consellería quiso explicitar ayer dónde centrará su plan de ahorro, así que fue Currás quien anticipó la filosofía del Gobierno. Aclaró que en la de Educación "no se tocarán" los capítulos destinados a transporte, ni a comedores, ni la financiación de universidades, ni el decreto de plurilingüismo, ni la formación del profesorado, ni las ayudas a la investigación. La tijera obligará a aplazar obras de reparación en colegios, así que según Facenda "se mantiene la calidad educativa".

Con su habitual oscurantismo, la consellería de Pilar Farjas también declinó detallar a este periódico los pormenores de su ajuste de 14,2 millones en la sanidad pública. El gabinete de comunicación dijo desconocer incluso "los datos concretos del recorte" y desvió cualquier explicación al departamento de Facenda. A tenor de lo que explicó Currás, quedarán a resguardo del recorte "el gasto farmacéutico, los programas de vacunación y salud mental, la coordinación de trasplantes y los equipos de atención primaria". Defendió que perderán fondos "los servicios que aportan menos valor" y algunas inversiones en tecnología que no hayan sido iniciadas. Preguntada sobre qué servicios aportan menor valor en la sanidad, la conselleira de Facenda titubeó primero y luego afirmó que se trata de concentrar servicios en algunos centros para ganar eficiencia. Nadie del gabinete de Farjas quiso ampliar esta explicación.

Como ya sucedió cuando se presentaron las cuentas, el principal damnificado vuelve a ser el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras que preside Agustín Hernández. Más que caer, se desploma, se mire como se mire. En términos porcentuales, un 5%, en dinero contante, 30 millones de euros. De dónde van a salir es otro de los misterios que ayer dejaron en el aire los distintos gabinetes de prensa de la Xunta. Si bien, un portavoz oficial de este departamento aseguró que Hernández aún está haciendo números. Su idea es respetar los capítulos dedicados a saneamiento, seguridad vial, supresión de peajes, y planeamiento urbanístico. El calendario de obras será replanteado, tendrán prioridad las de titularidad de la Xunta, las que están en marcha, y se castigarán las inversiones conjuntas con la Administración local, ya sean ayuntamientos o diputaciones. En los próximos días, Hernández se compromete a detallarlo todo en una comparecencia pública.

La cartera de Cultura, en manos de Roberto Varela, también tendrá que echar cuentas para arreglárselas con un 5% menos de fondos y renunciar a siete millones. Se retraerán del epígrafe de nuevos equipamientos culturales e infraestructuras. No habrá fondos para nuevos proyectos, aunque "se tratará de mantener" los que ya se encuentran en marcha. Las subvenciones "ya concedidas" tampoco sufrirán modificaciones y obviamente el Teatro Obradoiro y el Centro de

Arte Internacional, los edificios por concluir en la Cidade da Cultura, aguardarán tiempos mejores..

La comparecencia de la responsable de Facenda sirvió también para conocer que, pese al adelanto electoral, la Xunta presentará antes de que acabe el mes el recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno central por un supuesto incumplimiento del sistema de financiación. El Gobierno gallego le reclamará en los tribunales 805 millones de euros. Currás también aprovechó para pronunciarse sobre el impuesto de patrimonio que el Ejecutivo de Madrid tiene previsto reinstaurar ahora que agoniza su mandato. La conselleira hizo ver que con sus progresivas deducciones el tributo había quedado descafeinado y recalcó que desde su desaparición Galicia está siendo compensada por lo que deja de recaudar.

www.elpais.es 13.09.11

UN TESTIGO DECLARA QUE PORRO LE INDUJO A FALSEDAD DOCUMENTAL

¿Hubo dimisión o despido improcedente? Es la cuestión capital que tendrá que sentenciar el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo en relación con el primer director gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), que aún sigue presidiendo Corina Porro, desde hace unos meses presidenta a la vez del Consello Económico e Social de Galicia (CES). El despido improcedente comportaría una indemnización al demandante, Pablo Alborés, de 570.000 euros, cuando, según todos los indicios conocidos por este periódico, la FPV se encuentra en situación de quiebra técnica.

Las dos partes presentaron sendos documentos determinantes y contradictorios: el escrito de dimisión y el de aprobación de la excedencia del director gerente, respectivamente. Y solo prestó testimonio Mario Ubiaga, que sucedió en el cargo a Alborés y que declaró que había certificado la celebración de un consejo del Patronato de la FPV, el que aprueba la dimisión de Alborés, que nunca llegó a tener lugar. ¿Admitía entonces que había cometido un delito de falsedad documental?, le preguntó el abogado de la FPV. "Firmé por orden de mi presidenta", respondió en un par de ocasiones.

Pablo Arbolés firmó su contrato con la FPV el mismo día de su presentación pública, el 16 de abril de 2010. Fijaba un sueldo anual de 57.000 euros y una cláusula de rescisión equivalente a 10 anualidades en caso de despido improcedente. Doce días después, el 28 de abril, Porro y Alborés firman la aceptación de la excedencia del director gerente hasta el 2 de mayo de 2011, concediéndosele un plazo de 20 días a partir de entonces para pedir la reincorporación a su puesto. Oficializaron el documento ante notario y ayer Porro reconoció su firma en el mismo.

El 5 de mayo de 2010, sin embargo, Alborés recibió una notificación notarial que le informaba de que el Patronato de la FPV, con fecha 30 de abril, había aceptado su dimisión, presentada por escrito el mismo 28. No hubo tal escrito de dimisión, según Alborés, ni tampoco reunión alguna del Patronato, según el testimonio de su sucesor en el cargo, Mario Ubiaga. "No me consta que hasta el 14 de diciembre, en que cojo la baja, se celebrara ningún consejo del Patronato", afirmó ayer.

Ubiaga sigue de baja desde entonces y con otro litigio pendiente con la FPV -el juicio está marcado para el 6 de octubre- para hacer valer un contrato análogo al de Arbolés a cuyas condiciones habría renunciado en un acuerdo ante el servicio de mediación laboral -a cambio de una indemnización aplazada de 100.000 euros- pero que ahora desea anular porque entonces estaba en tratamiento psiquiátrico.

Porro reconoció su firma en el documento de excedencia de Alborés, aunque no el propio documento, y declaró que el gerente le entregó su dimisión en mano y que no podía recordar la fecha concreta de la reunión del Patronato que la aprobó. "No se ha acreditado nada", afirmó su abogado en las conclusiones, expresando su extrañeza por que Alborés no hubiera hecho nada cuando recibió, el 5 de mayo, el acta en que se revocaban sus poderes y esperara un año, hasta después de las elecciones municipales, para entablar el litigio.

Alborés sostiene que retomó los contactos con la FPV al vencimiento de su excedencia y fue entonces, a primeros de mayo último, cuando se le emplazó a esperar a que pasasen las

elecciones del 22-M para buscar una salida negociada. En esos momentos Porro confiaba en ganar la alcaldía de Vigo. Al no cumplirse ese objetivo, también se desentendieron y desaparecieron los interlocutores de la FPV que Alborés había tenido durante la campaña electoral. Aunque mantuvo el acceso a las cuentas bancarias de la fundación hasta el último 31 de agosto.

www.elpais.es 16.09.11

EL PP VE "COHERENTE" PERMITIR QUE MILLÁN ASTRAY SEA HIJO PREDILECTO

El portavoz conservador en A Coruña defiende no recurrir la sentencia que insta a devolver los honores al fundador de la Legión

El portavoz del PPdeG en el Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores, ha defendido en el pleno celebrado hoy la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a devolver al fundador de La Legión, Millán Astray, el título de hijo predilecto de la ciudad, una postura que ha suscitado las críticas de la oposición.

"El nuevo Ayuntamiento ha actuado con absoluta transparencia y coherencia y en base a los dictámenes de los servicios jurídicos"; ha insistido Flores, quien ha pedido que se deje trabajar a la justicia.

"Los políticos tienen que callarse y respetar las decisiones judiciales. Ante dos sentencias contradictorias, el gobierno municipal respetará lo que diga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", ha zanjado Flores.

La decisión del gobierno local de no recurrir la sentencia que obliga a devolver la distinción de hijo predilecto al fundador de la Legión, Millán Astray, ha sido censurada por la oposición.

De hecho, el BNG ha presentado un voto particular ante el dictamen de la comisión de Hacienda y Administración Pública al entender que esta resolución "omite todos los precedentes judiciales", incluida una sentencia anterior que sí avalaba la decisión del gobierno precedente bipartito del PSdeG-BNG de retirar el galardón al militar.

El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, ha criticado el informe "lacónico" y "extremadamente breve" del director de la asesoría jurídica que "omite toda referencia" a la sentencia anterior, así como a otros informes de la asesoría jurídica que sí se pronunciaba a favor de la legalidad del acuerdo municipal.

"El PP no tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", asegura el BNG "El PP no tiene voluntad política y retorna a sus orígenes franquistas", ha censurado Carril.

Esta argumentación crítica ha sido utilizado por IU, que ha asegurado que un "traidor" como Millán Astray "no puede representar los valores de una ciudad abierta y plural como A Coruña".

No obstante, IU ha lamentado que se utilice este conflicto como "cortina de humo" para "desviar la atención" de los verdaderos problemas de la ciudadanía.

Por su parte, el PSdeG ha pedido al Ayuntamiento que defienda "los intereses de los coruñeses" y se persone para evitar que se devuelvan los honores al golpista, "con riesgo de devolver la estatua y el nombre a la plaza.

www.publico.es 12.09.11

QUERRELLA CONTRA UN ALTO CARGO DE TRABAJO POR PREVARICACIÓN

La secretaria general de la Consellería de Traballo e Benestar, Cristina Ortiz, tendrá que declarar como imputada el 28 de septiembre en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Lo hará junto a otras dos funcionarias de la Xunta, María José Fernández Ribero, la representante del Protectorado de Fundaciones de Interés Gallego, y María Amadora Rodríguez Carreiro, encargada

del Registro de Fundaciones de Interés Gallego. La citación judicial al alto cargo y las dos funcionarias fue revelada ayer en el Parlamento por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich.

En el auto del pasado 29 de julio, el magistrado José Antonio Vázquez Taín sostiene que existen indicios de posibles delitos de falsificación de documentos públicos, prevaricación y usurpación de funciones por parte de la alto cargo de Trabajo y las funcionarias, en un caso relacionado con la Fundación Nuestra Señora de Fátima. El magistrado matiza que no están determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos, por lo que instruye diligencias previas para decidir si les imputa los citados delitos. Por el mismo caso habrá de declarar Gerardo Rodríguez Encinas, último presidente de la fundación, que está inmerso en un enredado proceso judicial promovido desde la Seguridad Social, ante las denuncias de irregularidades detectadas en la gestión de varios geriátricos, uno de ellos en O Barco de Valdeorras. Tras ser apartado de la dirección por una orden judicial, asumió la gestión de la fundación Carles Enric Moner como administrador judicial. Fuentes de la Consellería de Trabajo e Benestar aseguraron a este diario que la implicación de su alto cargo se debe a que este departamento gestiona el registro único de fundaciones de interés gallego e inciden en que "no hay nada más allá de un tema farragoso, entre el expresidente de la Fundación Nuestra Señora de Fátima y el administrador judicial, difícil de explicar". Hace un año, otra querrela de Moner contra Cristina Ortiz por el mismo motivo fue archivada.

Moner -administrador judicial hasta que un juzgado de Barcelona le apartó en mayo de 2010- solicitó a Cristina Ortiz que le inscribiese como patrono de la misma y la secretaria general emitió un certificado asegurando que no lo podía nombrar. "Moner siguió actuando como administrador cuando ya no lo era y le imputaron por desobediencia. Ahora Moner la acusa de prevaricar y de conchabeo con Gerardo Rodríguez", aseguran desde el departamento de Trabajo e Benestar.

La querrela que ahora instruye Vázquez Taín alega, sin embargo, que la secretaria general de Beatriz Mato y las otras dos funcionarias son cómplices del expresidente de la Fundación. El escrito asegura que Cristina Ortiz es "cómplice necesario" al facilitar a Rodríguez Encinas la apariencia de ser el representante de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, a pesar de constarle que había sido sustituido en dicho cargo el 11 de diciembre de 2009.

Graves delitos

A la funcionaria María José Fernández Ribeiro la culpa el denunciante de ayudar en el nombramiento de distintos testaferros como representantes de la fundación, cuando el mismo ya no podía ocupar ese puesto por mandato judicial. Y sobre María Amadora Rodríguez Carreiro la denuncia afirma que se negó a inscribir y certificar los "asientos inscribibles en los Libros Diario y de Inscripciones del registro a su cargo".

Gerardo Rodríguez también está imputado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, como presunto autor de un fraude a la Seguridad Social por importe de 1,6 millones y por la apropiación indebida de 8,4 millones, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, societario y también de un delito contra el medio ambiente.

www.elpais.es 08.09.11

EDUCACIÓN CIERRA UN AULA PÚBLICA PARA CONCERTARLA CON CENTROS PRIVADOS

El colegio de Pereiro suple la carencia con una clase mixta de distintos cursos

El ayuntamiento ourensano de Pereiro de Aguiar se convierte este curso en exponente del avance de la enseñanza privada a costa de la pública. El colegio ultrarreligioso Miraflores, de la orden de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, acaba de obtener un concierto de la Consellería de Educación para un aula de Infantil. Recibirá 46.000 euros de las arcas públicas. El Miraflores, del que es máxima responsable en la gestión del conglomerado internacional la religiosa ourensana afincada en México Salud Conde -con estupendas conexiones con el PP gallego y el empresariado mexicano- es un centro elitista que pretende formar a "apóstoles" en la

fe cristiana, según ha reconocido Conde públicamente. Sin embargo, en contra de lo que publicó el domingo pasado este diario, no segrega por sexos.

El colegio público alerta de que pierde competitividad frente a los privados

El Anpa lamenta que "gasten más en los conciertos que lo que ahorran aquí"

Junto al Miraflores, el centro también privado, éste progresista, Guillelme Brown, consiguió el año pasado el concierto para un aula de Primaria y este año lo extendió a otra. Mientras estas empresas educativas privadas ven multiplicada su matrícula, el colegio público del municipio, Ben-Cho-Shey, masificado, no solo no ha conseguido su objetivo de obtener un aula más, sino que, lejos de ello, se quedará con una menos y pierde un profesor. El Anpa ha convocado una manifestación esta mañana ante la Delegación de Educación en Ourense en protesta por esta decisión.

Educación suscribió durante las vacaciones de verano los conciertos para financiar los dos centros privados del municipio de Pereiro. El pasado 10 de agosto, la presidenta del Anpa del Ben-Cho-Shey remitió, alarmada, una carta a la delegada territorial de Educación. Protestaba por el anuncio que acababa de recibir de la supresión de un aula de quinto curso de educación infantil. El que se concedía al Miraflores.

La comisión provincial de valoración de los conciertos educativos ya había dado el visto bueno a los de los dos colegios privados de Pereiro de Aguiar el año pasado. El acta de la sesión celebrada el 11 de febrero de 2010 presidida por la jefa territorial de Educación, Marisol Díaz, informó favorablemente el concierto de una nueva unidad de educación infantil (para alumnos de 4 años) en el Guillelme Brown, "para que se lleve a cabo un concierto progresivo". Se comprometía a informar favorablemente el concierto de todas las unidades del colegio "en caso de haber dotación presupuestaria". La comisión informaba también favorablemente la petición del Miraflores. El colegio quería tres unidades de educación infantil y seis de primaria y le concedieron inicialmente una de infantil. El resto, como en el caso del Guillelme Brown, quedaron condicionadas a la existencia de presupuesto.

El Anpa del centro público se enteró hace unos días de que "las aulas concertadas con los privados son a costa de una mayor masificación" del Ben-Cho-Shey, al que se le suprime un aula y se convierte otra en mixta, con dos niveles educativos distintos "a cargo de un mismo profesor". Aunque docentes y padres de alumnos sostienen que Educación no les ha dado explicaciones, lo atribuyen a la política de recortes. "Nos habríamos resignado si no fuera a cambio de gastar en los centros privados más de lo que se ahorran suprimiendo un aula y un profesor aquí", sostienen los representantes del Ben-Cho-Shey.

Ayer, remitieron una carta a la jefa territorial de la Consellería de Educación en Ourense. Denuncian su "sensación de abandono" por la administración autonómica y le piden una reunión de urgencia que la consellería ha convocado para esta misma mañana. Amenazan con que los alumnos no asistirán a clases hasta que "se solucione esta situación".

Para organizar el nuevo curso al ya masificado alumnado del colegio público, ahora con un grupo y un profesor menos, Educación informó al Ben-Cho-Shey de que debía crear un aula mixta que concentrara a alumnos de quinto y sexto curso de educación infantil. Un mismo profesor impartiría las materias de los dos cursos en la misma aula y horario escolar, explican el "despropósito" los representantes del Anpa, que consideran la decisión de la Xunta "un atentado a la enseñanza pública". Para organizar al alumnado con un aula menos, Educación sustituye la distribución "lógica" de dos aulas para alumnos de 3 años, otras dos para alumnos de 4 y dos más para los de 5 por "dos aulas para alumnos de 3 años, una masificada para niños de 4 y una mixta de sexto con 12 niños de 5 años, además de otra aula masificada de 25 niños de 5 años".

www.elpais.es 07.09.11

EDUCACIÓN SUBVENCIONA CON 46.000 EUROS UN CENTRO DE ÉLITE ULTRARRELIGIOSO

El colegio Miraflores propone formar a los niños "como verdaderos apóstoles"

La orden religiosa de las Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la madre de Dios -de origen mexicano y con excelentes relaciones políticas y económicas en el país azteca y en Galicia- ha obtenido un concierto educativo de la Consellería de Educación. Recibirá más de 46.000 euros de las arcas públicas este año para formar a los niños "como verdaderos apóstoles" en la fe cristiana. La aseveración sobre el objetivo educativo la formuló el año pasado, en una entrevista publicada en *La Voz de Galicia*, la máxima responsable de los centros Miraflores esparcidos por el mundo, Salud Conde. "La verdad es que este colegio no es para todos", precisó la monja en la entrevista para destacar el elitismo del centro escolar que ahora subvenciona la Xunta. Y dibujó el perfil de quienes deben ser sus alumnos: "La familia, que sea lo mejor integrada posible y si está disfuncional, que no haya problemas". "El perfil de estos niños es que sean verdaderos apóstoles en el medio en el que se desenvuelvan. Que sean niños que se sientan capacitados en todos los sentidos: espiritual, académico, social... y también son muy importantes los idiomas", enumeró la religiosa los valores del centro ahora concertado.

"La verdad es que esta institución no es para todos", afirma la directora

El centro opta por alumnos integrados sin problemas de disfunción familiar

Salud Conde (ourensana emigrada a México, en donde lleva más de medio siglo creando y dirigiendo el conglomerado de los centros religiosos Miraflores) es íntima amiga de Manuel Fraga. El entonces presidente de la Xunta acudió a la inauguración del colegio ourensano en 2004. Junto a él, el empresario ourensano afincado en México Olegario Vázquez Raña (propietario de diversos grupos de comunicación en México), la plana mayor del PP provincial y, además, representantes de la directiva de la Fundación San Rosendo que presidía el cura Benigno Moure, ahora en la cárcel cumpliendo condena por estafa.

La concesión de un aula de Infantil concertada para el colegio ultrarreligioso supone un primer paso en la cofinanciación por la Xunta del centro. La Consellería de Educación confirmó a este diario que en años sucesivos podrían incrementarse las aulas concertadas. "Cumple todos los requisitos que figuran en la norma, de demanda y de población", sostienen las fuentes de Educación.

Sin embargo, el elitismo del centro -que segrega por sexos- y las condiciones familiares que exige la dirección para aceptar a sus alumnos, han hecho que hasta el momento su matrícula se nutra básicamente de familias de la ciudad con alto poder adquisitivo y de las de nueva adscripción en el municipio.

En el mismo ayuntamiento de Pereiro de Aguiar está el colegio público Ben-Cho-Shey. Masificado. El profesorado se ha movilizado constantemente en los últimos años en demanda de nuevas aulas que la Consellería de Educación les ha negado "mientras las concede al colegio privado". Ello, aun cuando Salud Conde no es partidaria de subvenciones. En la entrevista concedida a *La Voz de Galicia*, la máxima responsable de los centros Miraflores del mundo aseguraba tajante: "Hemos pedido el concierto porque lo quieren las madrecitas, pero no me gustan las subvenciones porque no quiero vivir amarrada". Lo hará. Pero con el malestar de todos los sindicatos.

A comienzos de este año, Comisiones Obreras, CIG, STEG y UGT denunciaron ya el inminente "despilfarro" que supone la concertación con el Colegio Miraflores. "La Xunta le paga la educación a los ricos cuando esa necesidad está cubierta ya por el centro público de Pereiro de Aguiar", sostienen, indignados. El colegio Miraflores crece, según los profesores, a expensas del centro público.

Las buenas relaciones de Salud Conde con el Partido Popular acrecientan el malestar de los sindicatos. No solo Fraga acudió a arroparla en el acto inaugural del centro privado en 2004, acompañado de importantes empresarios. Seis años después, Alberto Núñez Feijóo representaba a la Xunta en el respaldo al centro que había aumentado ya sus aulas, en previsión del crecimiento que ahora llegará con el concierto. Junto a él, el presidente de la Diputación provincial, José Luis Baltar, el presidente de Coren, Manuel Gómez Franqueira, el obispo de Ourense y Vázquez Raña, el gran benefactor de todos los centros educativos Miraflores que están esparcidos por el mundo.

Masificación en la escuela pública

El concierto que la Consellería de Educación ha concedido al colegio Miraflores supone "la asfixia del centro público". Sindicatos y profesores del colegio Ben-Cho-Shey no tienen duda alguna de que la Xunta ha impedido la ampliación del colegio público para garantizar la subvención del religioso.

"Los niños del Ben-Cho-Shey están masificados, superando la ratio recomendable de alumnos por aula", sostienen los representantes sindicales que advierten de que los vecinos del municipio no acudirán al centro privado "porque no pueden pagar transporte y comedor".

El concierto con el centro Miraflores pone el punto final a una "evidencia" que profesorado público y sindicatos esperaban desde 2010, cuando Salud Conde acudió a Ourense para inaugurar la ampliación de las instalaciones acompañada de los máximos representantes del PP gallego y provincial. "La vinculación con el PP es diáfana", destacan los representantes de Comisiones Obreras, que, al mismo tiempo, tildan de "ultrarreligioso" el centro.

La monja despejó abiertamente la incógnita sobre el elitismo del centro cuando, ampliado el espacio del colegio, explicó a *La Voz de Galicia*: "Los colegios para nuestros niños tienen que ser muy oreados, con mucha vegetación, con mucho espacio. El niño tiene que crecer distendido, no puede crecer a oscuras. Tiene que ser un colegio en el que los niños se sientan en su casa".

Los alumnos del Ben-Cho-Shey no podrán disfrutar de tanto espacio. "Están masificados y utilizan las aulas de informática e inglés por falta de espacio", detallan molestos los sindicatos.

www.elpais.es 04.09.11

FEIJÓO DEJA HACER EN EL PARTIDO

El presidente evita comparecer como líder del PP y se desmarca de las polémicas de sus alcaldes
- En las listas de las municipales dio carta blanca a sus barones

Nada más recuperar el poder, a la primera, con mayoría absoluta y en solo tres años, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la designación del Gobierno una demostración de fuerza. Sin concesiones a los barones provinciales, invistió a 10 conselleiros a su gusto y solo obedeció indicaciones del que fue su mentor político y actual tesorero del PP nacional, José Manuel Romay Beccaría. Incluso se permitió llamar a Nueva York a Roberto Varela, un desconocido en el partido, para entregarle la cartera de Cultura y Turismo. El presidente ratificaba así el comienzo de una nueva era, coherente con su filosofía de campaña, que se podía resumir en dos ideas: Feijóo es un líder sin pasado en Galicia que si gobierna "acabará con el caciquismo y el clientelismo en un día". Lo último lo llegó a prometer de forma textual en la recta final de sus mítines, antes de regresar a la Xunta.

Tras el fracaso de su pulso a Baltar, el líder evita cualquier conflicto interno

Hace como si las declaraciones del portavoz popular no fueran con él

Dos años y medio después, Feijóo sigue controlándolo todo en el Gobierno, supervisa las líneas generales de cada consellería y hasta revisa personalmente los comunicados de su gabinete de comunicación. Esa omnipresencia en la Xunta le ha llevado a desatender el día a día del partido que deja en manos de su secretario genral, Alfonso Rueda, y a dejar hacer a sus barones. En las listas de las municipales apenas metió baza, tal y como recordó a los presidentes provinciales de Ourense, Xosé Manuel Baltar, y Pontevedra, Rafael Louzán, durante la reunión de su ejecutiva el primero de agosto, para advertirles que la última palabra sobre la candidatura de las generales le compete ahora a Génova 13.

No siempre fue así. Hubo un tiempo en el principio de la legislatura en la que el presidente intentó mudar las oxidadas estructuras del partido que heredó de Fraga. Feijóo solía quejarse ante sus colaboradores más cercanos de las prácticas de Baltar en Ourense -y los consiguientes disgustos en forma de titulares-, lo que sumado a las presiones del sector más urbano del partido

en aquella provincia, lo empujó a plantar cara al sempiterno clan ourensano. Auspició una candidatura rival en la que situó al número 3 del PP gallego, el portavoz Antonio Rodríguez Miranda, pero perdió en el congreso de enero de 2010 en el que Xosé Manuel Baltar, sucedió a su padre como presidente provincial, mientras el equipo de Feijóo lamentaba en privado las prácticas de la saga familiar.

Algunos compañeros del partido siguen lamentando que no hubiera levantado el teléfono para llamar a cada alcalde y tumbar a Baltar hijo. Apuntan que el presidente lo hubiera logrado sin problemas. Pero no lo hizo y desde entonces, el líder del PP opta por relajar su intervención en los conflictos internos. Cuando llegó el momento de cuadrar las listas de las municipales, dejó manos libres a los barones.

Ni siquiera interfirió cuando la nueva dirección del PP en Ourense decidió ajustar cuentas con el entonces portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique, Poly, Novoa, -a quien los Baltar consideraron un traidor por alinearse con su rival, el regidor de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, en el congreso de Ourense- para colocar al diputado Rosendo Fernández en el cartel de campaña en la capital de provincia, pese a saber por los sondeos que tenía menos posibilidades. La inacción de Feijóo defraudó al sector urbanita de los populares ourensanos, igual que disgustó entre las bases de Pontevedra que el presidente no hubiera intercedido ante Telmo Martín para que la concejal Guadalupe Murillo, hija de un histórico en el partido, el médico Diego Murillo, tuviese hueco en sus listas.

Ese dejar hacer al PP de Feijóo para evitar nuevos choques internos le llevó a tragar con la inclusión de transfugas e imputados en las candidaturas, por más que el líder repitiese en los foros internos e incluso en algún acto público que no era partidario de hacerlo. Si fue una pose, o el ansia de evitar nuevos conflictos de puertas para adentro, es algo en lo que discrepan los dirigentes consultados.

La estrategia de dotar de perfil bajo a todo lo que sucede en la sede regional del PP pasa por encomendar las ruedas de prensa a un portavoz, Rodríguez Miranda, con nula ascendencia sobre el partido. Pero sobre todo, por evitar respaldar sus declaraciones cuando éste saca los pies del tiesto. Lo ha hecho varias veces, las más evidentes cuando el presidente fue interpelado sobre las graves acusaciones de financiación ilegal del PSOE sobre la supuesta trama corrupta que tanto Rueda como Miranda imputaron a Unións Agrarias. Y ha empleado la misma táctica cada vez que un alcalde suyo se ve envuelto en asuntos turbios. Si acaso, discrepa sobre ciertas actitudes en la sala de prensa, pero evita intervenir para corregir esas actitudes. Lo ha repetido en numerosas ocasiones, la última a propósito de la idea de la alcaldesa de Melón de nombrar a su marido -al que sucedió después de que este fuese inhabilitado por un juez- director general de ese pequeño ayuntamiento ourensano. Feijóo dijo que él no lo haría en ningún caso, pero se negó a tomar cartas en el asunto. Tampoco lo hizo con los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados en graves delitos relacionados con la corrupción.

En los últimos meses la única vez que levantó el teléfono para ordenar un cese fue cuando se conoció la detención del concejal y entonces candidato en Santiago, Ángel Espadas -hoy jefe de gabinete en la alcaldía de Gerardo Conde Roa- por estar dormido y borracho al volante de un coche encendido ante un semáforo. Ese día la noticia saltó a los medios nacionales que tanto preocupan a Feijóo.

Cábalas sobre el adelanto y una crisis de Gobierno

El runrún sobre una inminente remodelación de Gobierno con la que se ha especulado en los mentideros del PP desde antes de las elecciones municipales ha llegado al Consello de la Xunta. Uno de sus integrantes apunta que no sería extraño que Feijóo, empeñado en liderar el programa de la austeridad, optase por reducir aun más el tamaño de su Gobierno, ahora que algunos de sus compañeros de partido ha conformado un gabinete con menos carteras. De ser cierto, estaría solo en la cabeza de Feijóo, que no es muy dado a compartir sus planes con terceros, y, como mucho, de su secretario general y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.

El entorno del presidente niega que vaya a adoptar ninguna medida en ese sentido. Y eso que son legión los dirigentes consultados que admiten en voz baja la necesidad de hacer algún relevo, sobre todo en el departamento de Industria, donde Javier Guerra no acaba de responder a las expectativas y menos después de la detención del director que eligió para el Igape, Joaquín

Varela de Limia, que ha tenido que ser relevado del puesto. Algunas de las fuentes consultadas admiten esa necesidad pero recuerdan que Feijóo ya tuvo muchos problemas para cerrar su gabinete, hasta el punto de que en algunas consellerías tuvo que conformarse con la que la que era su cuarta opción para el puesto.

El núcleo duro del presidente se muestra aun más firme cuando se le plantea la tesis -sorprendentemente cada vez más extendida- de que su líder abandonará Galicia para incorporarse a un hipotético Gobierno de Rajoy.

Según todos los asesores consultados, esa posibilidad no entra en los planes del presidente, quien repite en público y privado que "ser primer ministro de Galicia" es más que gestionar una cartera en Madrid.

Tras el anuncio del adelanto electoral de Zapatero, alcaldes de Pontevedra han pedido a Feijóo que anticipe también en Galicia los comicios para hacerlos coincidir con las andaluzas que se celebrarán en marzo. Uno de los conselleiros consultados comparte esta idea "para evitar que la sociedad pueda pasar factura a Feijóo por los recortes que inevitablemente ha de llevar a cabo Rajoy" si finalmente llega a la Moncloa. El presidente no se ha pronunciado, si bien lo que está absolutamente descartado es que las elecciones gallegas se celebren el 20-N con las nacionales.

www.elpais.es 22.08.11

EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN

La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.

El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificial". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".

www.elpais.es 11.08.11

OURENSE EMPLEA A 400 EDILES DEL PP Y FAMILIARES SUYOS

Baltar paga a 950 personas que se llevan un tercio del presupuesto

José Luis Baltar Pumar acumula 21 años al frente de la Diputación de Ourense, que pretende legar -como ya hizo con la presidencia provincial del PP- a su hijo, José Manuel, hoy vicepresidente del Parlamento gallego. Se autodefine como un "cacique bueno" y suele recordar a los vecinos en los mítines que su brigada de obras llegará rauda a asfaltar pistas y carreteras si las municipales las gana un alcalde popular. El sempiterno barón, que amenazó con romper el último Gobierno a Manuel Fraga si no se avenía a sus manejos, ha controlado desde siempre su provincia con mayorías absolutas en sus feudos rurales, donde obtiene porcentajes de voto escandalosos, que superan el 70%.

La Diputación, la segunda mayor empresa en personal de Ourense, 950 nóminas de las que 400 se reservan para alcaldes del PP o familiares directos, gasta en el capítulo de recursos humanos un tercio de sus cuentas anuales. Incluso dedica una partida para ayudar a sus trabajadores fijos a pagar la hipoteca. Mientras Baltar presume de no subcontratar servicios, de que los camiones que recogen la basura los conducen funcionarios bien pagados, su institución roza el máximo de deuda permitida, 80 millones, el 110% de su presupuesto. Coincidiendo con las vísperas del último congreso del PP de Ourense, un pulso a Feijóo que acabó ganando para que su hijo le sucediese al frente del partido, convocó oposiciones en la institución provincial. Los nuevos puestos se los adjudicaron los compromisarios del congreso o familiares de estos que apoyaron a su vástago. Entonces, incluso los colaboradores de Feijóo hicieron oír sus quejas sobre las prácticas de la saga.

El edificio Simeón, un centro cultural en la capital, emplea a 33 porteros para cuidar de sus tres accesos. El ente público cuenta incluso con un centro de equitación que llegó a pagar a 17 personas que atendían a 15 caballos. La nómina de funcionarios es tan abusiva que hubo que organizar un sistema de sillas calientes, de forma que los trabajadores se turnasen en el mobiliario de oficina. Como ni así había hueco para todos, a algunos contratados de la institución provincial los acabó cediendo a ayuntamientos de su mismo color político.

En los pasillos de la Diputación, un día a la semana hacen cola responsables de entidades culturales y deportivas a la espera de una subvención que Baltar concede de forma graciosa. Su filosofía de Gobierno la resume el cántico con el que él y su tropa de colaboradores solían amenizar las campañas electorales con el trombón a la espalda: "Y si no eres del PP, jódete, jódete..."

www.elpais.es 23.08.11

LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR

La Diputación de Ourense gasta un 41% en sueldos y sólo un 15% en obras

Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar (PP), se le conoce, además de por las reiteradas acusaciones de nepotismo que le lanza la oposición, por sus escasos reparos a la hora de gastar y por hacerlo con cierta extravagancia.

Valga de ejemplo la cena que uno de los organismos dependientes de la institución, el Inorde, organizó en A Limia en 2009, a la que invitó a más de 700 personas, o los 3.000 euros que el pasado mes de mayo, y a la salida de un mitin, entregó en mano a un alcalde como anticipo de una subvención, dinero que según explicó días más tarde, adelantó de su bolsillo para la instalación de un sistema de aire acondicionado.

Un organismo de la diputación llegó a organizar comidas para 700 personas

Gastos de funcionamiento

Esos gastos puntuales hacen que Baltar, que afronta su sexto mandato al frente de la institución provincial, salte a los medios y los partidos de la oposición le exijan explicaciones, pero a la Diputación ourensana la mayor parte del dinero, un 63%, se le va en gastos de personal y en los llamados gastos corrientes.

De los 73 millones de euros presupuestados para este año casi 30 (el 41%) están reservados al pago de las nóminas de 286 funcionarios, 410 trabajadores fijos y un eventual. En total, casi 700 empleados según el cuadro de personal aprobado a comienzos de año.

La diputación subvenciona hasta viajes a Fátima y Lourdes

Pero la diputación también realiza numerosos contratos temporales y cuenta con tres organismos autónomos el Inorde, el Padroado Provincial de Turismo y la Sociedade Urbanística Provincial de Ourense que tienen sus propios presupuestos y plantilla. El portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, advierte de que de octubre a junio se han firmado unos 170 contratos temporales y se han convocado 50 nuevas plazas de funcionario.

Todo ello a pesar de que la deuda de la institución provincial se aproxima al máximo legalmente permitido, lo que ha hecho que Baltar se haya apuntado al discurso de la austeridad.

El pasado mes de junio anunció un recorte en materia de personal, pero aclaró que sólo afectaría a los contratos temporales, por lo que en la práctica la plantilla se mantendría casi igual: más de 700 trabajadores fijos, en su mayor parte cargos del PP, familiares o militantes, según denuncia el PSOE. Pero además, a pesar de las declaraciones del veterano político, la Diputación anunciaba este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de una docena de nuevos contratos temporales.

La oposición socialista exige la realización de una auditoría de cuentas

Ni sus propias medidas para "apretarse el cinturón" ni los tirones de orejas que le ha dado el Consello de Contas parece que vayan a ser efectivos y Baltar mantiene su sistema de contratación y prácticas como la de otorgar subvenciones sin una convocatoria pública "para tanatorios o viajes a Fátima y Lourdes", como destacan los socialistas, que en el próximo pleno tienen previsto solicitar una auditoría.

Duplicidades

El portavoz del BNG en la Diputación, Xoán Xosé Jardón, recuerda que su formación reclama la supresión de las diputaciones desde hace años y denuncia las "flagrantes duplicidades" que se dan en materia de competencias, que de evitarse ahorrarían a la institución ourensana "entre nueve y diez millones de euros". "Los centros ecuestres los habría que suprimir y las granjas se podrían transmitir a la Consellería de Medio Rural o alquilarlas", comenta.

El presidente provincial repartió dinero en mano en plena campaña

Para Jardón, "las diputaciones tienen que ser un instrumento de cooperación, no de control político" y es "el porcentaje en inversión real lo que incide en la calidad de vida de los ciudadanos". Porcentaje que la Diputación de Ourense fijó este año en un 15%, frente al 41% reservado a gastos de personal, cifra que prácticamente duplica la de cualquier otra diputación gallega

www.publico.es 21.08.11

NEGREIRA OCULTÓ QUE UN JUEZ AVALA RETIRAR LOS HONORES A MILLÁN-ASTRAY

El gobierno coruñés dice ahora que esperará a un nuevo pronunciamiento judicial

Parapetado tras un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de A Coruña que se niega a hacer público, el gobierno local de Carlos Negreira (PP) se mantiene firme en acatar sin más la sentencia que avala la retirada de la estatua del teniente coronel golpista José Millán-Astray pero anula la revocación del título de hijo predilecto de la ciudad. Sin embargo, el ejecutivo local ocultó que hay otro fallo judicial, anterior a este y contradictorio, que da la razón al Ayuntamiento y da por buena su decisión de suprimir todos los honores al militar amigo y colaborador de Franco. La polémica volvió a arreciar ayer al difundirse la existencia de este primer fallo, emitido en mayo, dos semanas antes de las elecciones municipales que ganó el PP en A Coruña.

"El debate político sobre esto está zanjado", alega el ejecutivo de Negreira

La sentencia que se ocultó fue emitida dos semanas antes de las municipales

La oposición municipal en bloque denunció la complacencia del equipo de gobierno de Negreira con un golpista que llegó a defender como "un coruñés de pro". Será ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que decidirá sobre la legalidad del acuerdo plenario del Ayuntamiento por el que, en 2009, se decidió la retirada de medio centenar de símbolos del franquismo, incluido los dedicados a Millán-Astray.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazó el recurso de la Asociación de Veteranos de la Legión contra la retirada de la enorme estatua de cuerpo entero que lucía una pequeña y céntrica plaza también dedicada a Millán-Astray así como la revocación del título de hijo predilecto de A Coruña que el Ayuntamiento le había concedido en 1922, en su calidad de fundador de la Legión. Pero nada se dijo de esa sentencia que avala en el fondo y el procedimiento la decisión del pleno del Ayuntamiento de retirar todos los honores a Millán-Astray en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y el gobierno de Negreira se apresuró, el pasado día 15, en pleno periodo estival, a dar a conocer solo otro fallo posterior de un juzgado de la misma instancia, el Contencioso-Administrativo número 3, que también avala la retirada del enorme mamotreto de bronce pero anula la revocación del título por haber sido concedido 14 años antes de la Guerra Civil.

Pese a que ambas sentencias, ahora recurridas ante el Tribunal Superior, reconocen la potestad del Ayuntamiento para dar o retirar títulos honoríficos, el equipo de Negreira prefirió silenciar el primer fallo judicial que avala la actuación de la Corporación y decidió renunciar a defender sus derechos presentando un recurso contra la segunda sentencia. "El debate político sobre esta cuestión está zanjado", arguyó ayer el primer teniente de alcalde, Julio Flores. Y se limitó a afirmar que acatará lo que decida el Tribunal Superior, ante el cual recurrieron tanto la Asociación de Veteranos de la Legión como la hija del militar. PSOE, BNG y EU reiteraron su intención de forzar un nuevo acuerdo, ante la Comisión Municipal de Honores y Distinciones para retirar de nuevo todos los honores al militar golpista.

www.elpais.es 30.08.11

MILLÁN-ASTRAY RECUPERA EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

En El Ala Oeste de la Casa Blanca, la serie que mejor ha contado los entresijos del Despacho Oval y la corte de asesores de un presidente demócrata en la ficción, el gabinete gubernamental fija un día al año para servir asuntos espinosos a la prensa. Le llaman "el día de sacar la basura" y suelen hacerlo coincidir con la víspera de una fiesta en la que cae la lectura de prensa.

Ayer, en el festivo por excelencia, en medio de un puente con toda Galicia, incluida su ciudad, de celebración, el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, programó también su día de sacar la basura. Comunicó a media tarde en una nota de prensa encabezada con el título "actividad municipal" que el Ayuntamiento que preside no va a recurrir la sentencia que anula la retirada del título de hijo predilecto de A Coruña a José Millán-Astray, fundador de la legión, y el que gritó a Miguel de Unamuno "¡muera la inteligencia!", después de que el intelectual y rector de la Universidad de Salamanca, replicase al discurso de un fascista a las pocas semanas del golpe de estado de 1936.

El regidor coruñés basa su decisión en un informe de la asesoría jurídica municipal que avala la "solidez" de los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña, que decidió anular el acuerdo plenario adoptado por el bipartito. El comunicado del Gobierno coruñés subraya que no quiere "perder ni un minuto en politizar el pasado y prefiere mirar al futuro y apostar por la concordia y por trabajar en cuestiones que preocupan a los ciudadanos".

Resalta además que "el fallo obliga a devolver el título de hijo predilecto a Millán Astray porque esta distinción no se puede retirar de acuerdo a la Ley de la Memoria Histórica, ya que, como indica la juez en el fallo, el nombramiento se aprobó en un pleno municipal de agosto de 1922, 14 años antes de la sublevación". Como la distinción fue previa a la Guerra Civil, el fallo estima que

no cabe retirar los honores apoyándose en esa ley. La sentencia judicial dice algo más que obvia el comunicado de Negreira: que el Gobierno coruñés es libre de retirar o no dicha distinción al dirigente franquista, siempre que no apele a la Ley de Memoria Histórica. Y eso fue lo que ayer le exigieron los grupos de la oposición al alcalde, que cuando era portavoz del PP en la oposición decidió abstenerse en la votación para retirar la distinción a Millán-Astray.

Nada más conocer su decisión, el PSOE de A Coruña, a través de su portavoz, Mar Barcón, atribuyó la decisión "indigna" de abandonar el contencioso con la familia de Millán-Astray a Negreira, "quien en su día definió como coruñés de pro a este golpista que no merece ningún reconocimiento de la ciudad de A Coruña". Barcón censuró a su vez la "sorprendente tibieza" con la que siempre se dirigió Negreira en este asunto.

En el mismo sentido se pronunció el BNG, que reclamó al alcalde del PP que tome decisiones para que A Coruña "deje de ser la capital de la simbología franquista". También los nacionalistas acusan al regidor de "refrendar los honores a un fascista después de llamarle coruñés de pro".

Por su parte, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó la postura del Gobierno coruñés como "una decisión política revestida de acatamiento judicial", que "trata de satisfacer a los nostálgicos franquistas" al tiempo que "defiende a un golpista".

www.elpais.es 16.08.11

FEIJÓO LIDERA LA PRESIÓN DEL PP PARA PEDIR MÁS DINERO A SALGADO POR LA CRISIS

Rajoy suma fuerzas hoy con sus barones para un difícil Consejo de Política Fiscal

No es un asunto puramente económico el que se discute en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para mañana. El eje de la política española pasa por ahí. Si la legislatura se agotara y las comunidades del PP se vieran obligadas a hacer drásticos recortes de gastos en otoño-invierno, con el consiguiente coste político, el asunto podría convertirse en el eje de la campaña. Por eso, conscientes de que todos se juegan mucho, no solo los barones autonómicos sino también Mariano Rajoy, los populares llegan a la cita con una estrategia.

En la única rueda de prensa en la sede nacional del PP que ha ofrecido Rajoy en todo el año, tres días después del gran éxito electoral del 22 de mayo, lo dejó muy claro: reclamó un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente para pactar con el Gobierno cómo cumplir el objetivo del déficit del 1,3% para todas las autonomías. Unos días después, prometió la "lealtad" del PP si el Gobierno hablaba "a calzón quitado" del déficit. Ese momento ha llegado, y el PP, que domina ya 11 de las 17 autonomías, aprovechará toda esa potencia para tratar de que sea el Gobierno, y no ellos, quien asuma el coste político de las medidas duras que se avecinan.

Rajoy ha convocado hoy en Génova a sus 11 presidentes autonómicos para unir fuerzas, y la línea empieza a verse ya muy clara. Alberto Núñez Feijóo y su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, van a liderar la estrategia central del PP para este difícil consejo, que llega cuando autonomías populares como Castilla-La Mancha aseguran que su déficit real puede estar entre el 5% y el 6% a mitad de año.

El mensaje que está trasladando Feijóo y otros dirigentes del PP, y que se pactará hoy, no está centrado en la reducción del gasto, aunque sí hay un planteamiento genérico de austeridad. Su discurso se concentra en pedir al Gobierno más dinero, en reclamar una interpretación más flexible del modelo de financiación autonómico que aprobó el Ejecutivo con la abstención de las comunidades del PP. Las autonomías populares, lideradas por Galicia, que exige 800 millones de euros por distintos conceptos de interpretación del sistema de financiación, reclamarán una moratoria para devolver el dinero que, según el nuevo sistema, deberían entregar al Gobierno porque han cobrado de más. También exigirán que Salgado haga un planteamiento de fondo para resolver la deuda del sistema sanitario, gran caballo de batalla.

El trasfondo es evidente: el PP quiere que el Gobierno y el PSOE sigan asumiendo políticamente el principal coste de la crisis, como sucedió en las últimas elecciones autonómicas, donde autonomías del PP con muchos problemas de gestión, como Murcia o la Comunidad Valenciana,

apenas sufrieron desgaste político. El propio Feijóo lo dejó ayer muy claro: si el Gobierno "incumple" el modelo de financiación, esto es si no acepta la interpretación del PP, tendrá que ir al consejo "con una guía sobre dónde deben recortarse las aportaciones y los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas". En esa interpretación de Feijóo, si el Gobierno plantea avances importantes en este tema de la financiación es señal también de que quiere agotar la legislatura y en caso contrario de que anticiparán.

Esto es algo que también ha planteado Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha: que Salgado le diga dónde tiene que recortar para alcanzar el objetivo de déficit. Es una forma de trasladar el coste político de las medidas duras al Gobierno.

Salgado rechaza esta idea. Insiste en que el Gobierno no tiene por qué decidir esos recortes. Pone el objetivo, del 1,3%, y son las comunidades, también los gobiernos recién llegados como el de Cospedal, los que tienen que decidir cómo cumplirlo. Feijóo promete que él cumplirá el objetivo, y Rajoy no puede admitir un incumplimiento que en Castilla-La Mancha ya se da por hecho, porque iría contra el eje de su discurso de reducción del déficit. Tal vez por eso se busca trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo. En cualquier caso, el sistema de votación del consejo hace que el Gobierno pueda aprobar lo que quiera con el apoyo de una sola autonomía, y tiene para eso a varias del PSOE o de aliados. Los populares están ahí más cerca de la abstención.

www.elpais.es 26.07.11

EL PP GALLEGO RECHAZA QUE LOS MÉDICOS SOLO RECETEN LOS FÁRMACOS MÁS BARATOS

Farjas argumenta que se sustrae a los médicos la elección del fármaco

No hay tregua. El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central sobre el catálogo de medicamentos sobrevive a todos los intentos de consenso. El último, el del jueves, en el Consejo Interterritorial de Sanidad presidido por la ministra Leire Pajín. En este caso, Galicia se desmarca no solo de la propuesta del ministerio, sino también de la de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia, que aceptan la medida.

El ministerio ve imposible "prescribir un genérico más barato"

El Gobierno gallego estará obligado a cumplir el nuevo decreto

La máxima responsable de Sanidad del Gobierno de España informó, en esa reunión del Consejo interterritorial, a los 17 consejeros autonómicos de su decisión de que los médicos comiencen a recetar por principio activo en lugar de hacerlo por marca. Esto es, que las farmacias deberán dispensar genéricos y tendrán que optar siempre por el más barato. "Ingresos, ahorro y eficiencia", resumió Pajín su objetivo a los consejeros autonómicos de Sanidad, la mayoría del PP. A la de Galicia, Pilar Farjas, "no le gustó nada". "La ministra no puede hablar de que hay acuerdo, porque nosotros no lo aceptamos", explicó ayer a este diario un portavoz de la consellería de Sanidade.

El argumento de la Xunta en contra de la decisión del ministerio se sustenta en que "quita al médico, que debería ser el actor principal, la facultad de elegir el medicamento, lo que ahora quedará en manos de las distribuidoras farmacéuticas". Junto a ello, Farjas entiende que el ahorro es mayor con la aplicación del catálogo gallego -un listado de genéricos al que los médicos deben ceñirse para recetar- que mediante la propuesta del Gobierno de España de no recetar marca, sino un principio activo que luego dispensa el farmacéutico, optando obligatoriamente por el más barato.

La Consellería de Sanidade apela, además, al rechazo del Parlamento gallego a la propuesta de recetar por principio activo, con lo que da por zanjada cualquier propuesta al respecto. "Portugal aprobó en su día esta obligatoriedad del principio activo y tuvo que paralizarlo", sostiene la Consellería.

La rotunda reacción del Gobierno gallego ha sorprendido en Madrid. "En la reunión del Consejo no se opuso ninguna comunidad autónoma", precisa un portavoz del Ministerio de Sanidad.

Sostiene que la intención de Pajín es "aprobarlo cuanto antes, llevarlo al Consejo de Ministros de la próxima semana para buscar lo más rápidamente posible la fórmula legal", que comprometerá a toda España, con lo que Galicia no tendrá más remedio que cumplirlo".

El Ministerio reconoce que algunos consejeros de comunidades del PP criticaron la falta de concreción de la propuesta y que esta no se sometiera a votación, "pero ninguno de ellos se opuso". El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, destacó que la propuesta del ministerio recogía "exactamente" sus peticiones. En similares términos se expresó el representante de la Comunidad Valenciana, Luis Rosada, también gobernada por el PP.

En el Ministerio de Sanidad no entienden la postura de la Xunta. "Si lo que pretenden es ahorrar con su catálogo, de esta forma, se ahorra más: es imposible recetar un genérico más barato ya que las farmacias quedan obligadas a dispensar el más barato de todos", precisa el portavoz del ministerio. Al mismo tiempo, explica que con esta decisión, la ministra pretende "que no se rompa la cohesión nacional" en cuestión de recetas de la sanidad pública. "No puede ser que un señor de León vaya a veranear a Pontevedra y, ahí, el médico no pueda recetarle el mismo medicamento que está tomando porque no está en el *vademécum* de la Xunta".

Desde el ministerio insisten en que la decisión tiene como objetivo "beneficiar a las comunidades autónomas y contribuir a aliviar su carga financiera", motivo por el que no entienden el rechazo de Galicia. Pero la oposición de la Xunta es rotunda. El portavoz de la conselleira asegura que no se trata de una batalla política ni jurídica. "Defendemos el catálogo y nuestra única batalla es mantenerlo en pie", destacan en la Consellería.

La misma propuesta que Feijóo

Una de las propuestas del Ministerio de Sanidad que rechaza la conselleira Pilar Farjas es la misma que hace menos de diez días avalaba el presidente de la Xunta. En una entrevista publicada por este diario el pasado día 10, Feijóo explicaba que el catálogo "no es más que volver a la legislación anterior", la aprobada bajo la presidencia de Aznar y que reformó el Gobierno del PSOE.

El presidente gallego advertía de que si el PP ganaba las elecciones generales implantaría el sistema de la última legislatura de Aznar, cuando "automáticamente se hacían unos precios de referencia, es decir, el Estado solo financiaba los medicamentos que tuviesen un precio similar al genérico".

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunció en la reunión del jueves que retomaría esa misma propuesta que supone la supresión de las patentes farmacéuticas a los diez años. Esto es, sin la prórroga de tres años más que ofreció la socialista Elena Salgado durante su etapa al frente de este Ministerio.

La modificación de los precios de referencia que propone Pajín prevé una reabaja del 15% del precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado sin que haya aparecido un genérico.

Ayer, la Consellería de Sanidade -preguntada por esta posición del presidente gallego que Farjas acababa también de rechazar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud- destacaba que "la obligatoriedad de la receta de principio activo no tiene nada que ver con el catálogo" de medicamentos aprobado por la Xunta.

La desintonía entre ambas instituciones es absoluta y afecta a todas las propuestas. Para la Consellería de Sanidade, la propuesta del Ministerio "va a remolque" de la suya. Y para el Ministerio, es el "reducido catálogo aprobado por el Gobierno gallego" el que queda superado por su medida "de mayor alcance".

Mientras la ministra de Sanidad intenta realizar "cuanto antes" la modificación legal que dé soporte a la nueva medida "de ahorro sanitario", la conselleira gallega alerta de que "no se sabe qué es lo que se va a aprobar" y alude a la "frivolidad del Ministerio" en su reunión del Consejo Interterritorial.

Farjas lamenta que "no se presentara una sola propuesta concreta, ni un documento que acredite cómo, dónde y de qué forma" se va a aplicar el sistema de receta por principio activo que acabará con el catálogo gallego.

www.elpais.es 23.07.11

CONDE ROA SE NIEGA A REVELAR EL COSTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA DAVIS

El regidor solo informará del presupuesto si Santiago sale elegida como sede

El precio que supone albergar una semifinal de Copa Davis en Santiago es todavía un misterio. Aunque el proyecto ya está en la sede de la Federación Española de Tenis, el alcalde, el popular Gerardo Conde Roa, rechazó ayer cifrar el gasto que conllevará su organización en caso que la capital gallega resulte elegida. El día 1 de agosto la Federación española deberá comunicar a la internacional su decisión, y el presupuesto necesario no se conocerá hasta saber si Santiago es la seleccionada, explicó ayer Conde Roa, quien sí insistió en el retorno económico que puede tener el evento para la ciudad, así como la proyección internacional que supondría. "No puedo entrar en detalles económicos porque podrían perjudicar las negociaciones", indicó sin dar más explicaciones. Tampoco quiso especificar si el ayuntamiento se ha marcado un techo de gasto, solo se limitó a afirmar que los dos millones de euros de coste que se estimaron en Gijón -ciudad que retiró su candidatura por el alto coste- "están muy alejadas de la realidad". "Conocerán los datos, pero no puedo adelantarlos", insistió.

La federación de tenis debe tomar la decisión antes del 1 de agosto

El ayuntamiento trabaja ya en buscar algún tipo de ayuda "o fórmula económica" para aligerar los gastos, cuenta también con obtener el apoyo de la Xunta y recibirá además el 40% de los ingresos de los partidos, explicó el alcalde, que lo definió como "un cuadro económico para salir honrosamente de este evento". Tanto PSdeG como BNG admitieron la relevancia que tendría acoger las semifinales, pero manifestaron sus dudas sobre cómo se va a financiar.

El lugar elegido para instalar la pista central con capacidad para 16.000 espectadores, dos pistas de entrenamientos, vestuarios y aparcamiento VIP es la explanada abierta junto a los edificios de la Cidade da Cultura. Aunque también se barajaron el pabellón del Sar y el estadio municipal, no cumplían los requisitos de aforo que marca la Federación. "La Cidade da Cultura es un icono cultural y podría ser de sus mejores proyecciones para el futuro", defendió el alcalde. Los 300 metros de altura, apuntaron desde la Federación gallega, "son asumibles" y el parte meteorológico para esas fechas de mediados de septiembre arroja unas condiciones de humedad y lluvia buenas para el tenis. En los tres días de competición se organizarán además actividades paralelas en la ciudad

www.elpais.es 23.07.11

VÍA LIBRE A LAS 3.000 VIVIENDAS ILEGALES CONSTRUIDAS EN LA COSTA DE BARREIROS

Hernández retira los recursos judiciales del bipartito a raíz de un pacto con los promotores - Feijóo no informó del acuerdo tras la última reunión de gobierno

En la rueda de prensa del último Consello de la Xunta, Feijóo tuvo tiempo para detallar hasta un informe de actividades de la Fundación Illa de San Simón. Se le quedó en el tintero una de las decisiones más importantes que acababa de adoptar su Gobierno: la retirada de 21 recursos judiciales presentados por el anterior Ejecutivo gallego contra otras tantas promociones ilegales en el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, lo que supone el desbloqueo definitivo de 3.174 viviendas levantadas en zonas que carecían del menor servicio. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, completa así el tenaz camino emprendido para la legalización de unas viviendas de las que cientos de ellas ya han sido declaradas ilegales.

La legalización afecta a 3.174 casas en un municipio de 3.200 habitantes

La retirada de los 21 recursos, que se corresponden con otras tantas promociones inmobiliarias, confirma la existencia de un acuerdo de Agustín Hernández con la asociación de promotores de la localidad lucense, cuyo presidente aseguró contar con el compromiso del conselleiro para la retirada del recurso antes de agosto. Los responsables de las promociones tenían prisa para intentar vender los pisos en agosto, un mes clave en el negocio por la visita de turistas a A Mariña de Lugo.

La retirada de los recursos no fue mencionada en la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijóo ni apareció en la reseña de los acuerdos que la Xunta cuelga después de cada Consello en Internet. Fuentes de la Consellería de Territorio negaron que esa omisión tuviese voluntad de silenciar la retirada de los recursos. "Son actos jurídicos rutinarios de los que no se acostumbra a informar", afirmó un portavoz del departamento.

Con intención o sin ella, lo cierto es que la retirada de los recursos culmina dos años de esfuerzos de la Xunta para desandar el camino que emprendió el Gobierno bipartito en 2006, cuando suspendió las normas urbanísticas de Barreiros ante la autorización municipal en menos de un año de 5.800 viviendas en un ayuntamiento de apenas 3.200 habitantes. Después de tomar esa decisión, la Xunta de Emilio Pérez Touriño emprendió a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) un contencioso contra la autorización de licencias en zonas sin servicios básicos, como abastecimiento y saneamiento de agua o infraestructuras viarias.

La Consellería de Territorio considera la retirada de los recursos parte del "proceso lógico" después de que se aprobara la memoria ambiental del proyecto sectorial urbanístico de la zona. Este documento se desarrolló después de que Xunta, Diputación y Ayuntamiento de Barreiros firmaran un convenio por 14 millones de euros para dotar a las zonas afectadas de los servicios que impiden su consideración de solar, por lo que los juzgados las consideran en sus primeras sentencias suelo no urbanizable. De acuerdo con la ley, esas obras deberían correr a cargo de los promotores inmobiliarios.

Dicha memoria ambiental da por buena la previsión, incluida en el plan sectorial, de que en plena crisis demográfica y del sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Barreiros multiplique su población por siete, para pasar de sus 3.200 habitantes a 23.500. Para hacer ese cálculo, el plan tiene en cuenta las propias viviendas objeto de la polémica.

La actuación del conselleiro Agustín Hernández en el caso de Barreiros provocó su denuncia ante el fiscal por parte de la asociación Adegas, que le acusa de prevaricación y de delito contra la hacienda pública. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores. Adegas calificó el plan de "recalificación encubierta" del suelo, lo que implicaría "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos.

www.elpais.es 27.07.11

PONTEAREAS CONTRATA A AFILIADOS Y EXEDILES DEL PP EN UNA OFERTA DE 49 EMPLEOS QUE NO PUBLICITÓ

El Gobierno local de Ponteareas (PP) soslayó el dar publicidad a la convocatoria abierta de 49 plazas municipales, dentro de un programa de cooperación con la Xunta, que han ido a parar a afiliados y simpatizantes del propio partido, entre ellos dos exconcejales. El BNG, que acusa directamente al alcalde, Salvador González Solla, del "escándalo" que suponen estas contrataciones "a dedo", anuncia que pedirá la anulación del concurso por el que fueron adjudicadas las citadas plazas y la convocatoria de otro nuevo.

La primera convocatoria de plazas fue decidida por la Xunta de Gobierno de Ponteareas el 30 de mayo, pese a la advertencia de nulidad de la misma que expuso la secretaria municipal precisamente por no darse publicidad a la convocatoria. Con ello, los vecinos fueron privados de optar a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad y aunque reunieran preparación y capacidad para desempeñar las plazas convocadas.

"Solla ocultó deliberadamente la convocatoria", afirman los nacionalistas, "para colocar a las dos exconcejales y a otros candidatos, afiliados y apoderados del PP". El Gobierno local realizó en las últimas semanas la selección para esas plazas, con contratos por un periodo de siete meses.

Rosemary Rodríguez Ogando e Isabel González Lago dirigieron hasta el 22 de mayo las concejalías de Empleo y Personal, respectivamente. Ambas, "que destacaron por la ausencia total de gestión y dejación de responsabilidades durante su etapa en el Gobierno local", denuncia el BNG, "reciben ahora su premio por parte del alcalde".

El Gobierno local se limitó a solicitar en el INEM una oferta de empleo, sin la menor publicidad. "No es posible que habiendo en Ponteareas 2.700 parados, a las citadas plazas solo se presentaran cuatro o cinco personas por cada convocatoria", señalan los nacionalistas.

Rosemary Rodríguez e Isabel González fueron las últimas en anotarse en el INEM. La primera está contratada en la Escuela Infantil Municipal y la otra, en el Registro Municipal. Ambas, según subraya el BNG, incluso participaron en el Gobierno local que tramitó el programa de cooperación e intervinieron también en el comienzo del programa de contratación, con el Gobierno ya en funciones. Ponteareas ya es, desde hace décadas, uno de los municipios gallegos con más carga de personal en su plantilla.

www.elpais.es 27.07.11

NUEVE IMPUTADOS EN LA XUNTA DE FEIJÓO

El cese del titular de Portos alivia solo parcialmente los problemas judiciales en el Gobierno gallego - El presidente mantiene a dos cargos ya condenados. Feijóo "apartó" al director del Igape, pero no lo destituyó

José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso *Rinlo*, en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps "le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez Campana.

Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.

La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres altos cargos.

A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con un ascenso de categoría.

Tráfico de influencias

Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.

Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.

Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados judicialmente. Se trata del *superdelegado* del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido improcedente.

www.elpais.es 24.07.11

FEIJÓO ENSEÑA EL CAMINO AL PP

El presidente gallego ya denunció en 2009 un agujero que haría peligrar las nóminas, pero nunca se dejaron de cobrar

La hecatombe de las cuentas públicas que augura ahora el PP en las comunidades que debe gobernar ya la pregonó hace más de dos años en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Tampoco las alusiones de los dirigentes populares a los coches oficiales, el supuesto lujo y el dispendio con que viven las Administraciones socialistas tienen nada de originales. En vísperas de las autonómicas gallegas, en 2009, Núñez Feijóo desató una campaña para acusar de despilfarro al expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, basada en la compra de un Audi A8 blindado, similar a los dos que tenía Fraga y a los que trasladaban por entonces a Gallardón, Camps y Rita Barberá.

Nada más llegar al poder, Feijóo se deshizo de la berlina de su antecesor por un tercio de lo que había costado y enajenó otros 17 audis comprados por Fraga. Al poco de tomar posesión, se subió a un Citroën sin blindar y un mes después ya ensayaba un discurso nuevo: el de los agujeros en el Presupuesto, la herencia envenenada que, según sus términos, le había legado el bipartito de PSOE y BNG. Feijóo tomó posesión el 18 de abril y el 8 de mayo de ese año ya había detectado una falla de 600 millones de euros en las cuentas. Según explicó ese día en una entrevista en Onda Cero, la falta de fondos hacía peligrar "la paga de trienios al personal

facultativo, las guardias médicas, el gasto farmacéutico e, incluso, una campaña contraincendios razonable".

Nada de eso llegó a suceder, pese a que los cálculos del presidente pronto elevaron el presunto agujero hasta 1.200 millones de euros. Al cierre de 2009 Feijóo lo cifraba ya en 2.550 millones. Computaba así los fondos que la Xunta deberá devolver al Estado en los próximos cuatro años por el dinero que recibió entre 2008 y 2009 tras una previsión de impuestos que no contó con la crisis. De ese supuesto desfase de 2.500 millones, 1.950 corresponden al ejercicio de 2009 que el propio Feijóo gestionó entre abril y diciembre de ese año.

La última queja del presidente gallego tiene que ver con el fondo de cooperación, 243 millones que el Gobierno central incluyó en el nuevo modelo de financiación pero que no pagará a las comunidades hasta 2013. La nueva Xunta del PP hizo entonces lo que reprochaba a sus antecesores y, pese a todo, incluyó la partida en el Presupuesto para seguir cargando contra Zapatero y Touriño como culpables de los recortes. Entretanto, el cacareado plan de austeridad del PP ha suprimido 42 entes administrativos, la mayoría creados por Fraga, hasta ahorrar, según sus datos, 20 millones. Galicia es junto a Madrid la única comunidad que ha cumplido desde 2009 con los objetivos de déficit presupuestario e incluso cerró el último trimestre con superávit. Y a pesar de los agujeros, los médicos, los bomberos y las farmacias han seguido cobrando.

www.elpais.es 07.06.11

DETENIDOS EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRÉDITO DE LA XUNTA

Agentes de Aduanas arrestan a ocho personas imputadas por delito fiscal y cohecho

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron en Santiago de Compostela al director general del Instituto Galego de Promoción Económica, Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva Liste. Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación relacionada con el blanqueo de dinero, que dirige la juez Estela Sanjosé, titular del Juzgado número 3 de Lugo. Este instituto de crédito, dependiente de la Xunta, se encarga de repartir ayudas públicas a empresas.

Los altos cargos están acusados de asesorar a los autores del fraude

El Servicio de Vigilancia Aduanera registró también las sedes de dos empresas en el polígono lucense de O Ceao, la farmacéutica Nupel y la consultora fiscal Proitec, encargada de tramitar las ayudas públicas al laboratorio. El dispositivo policial concluyó con la detención de 15 personas con imputaciones por fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal, entre ellas el dueño de la primera de estas compañías, Jorge Dorribo, y una médico a la que se le imputa un delito de alzamiento de bienes y que ayer por la tarde se encontraba arrestada en la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.

Once agentes de Aduanas se presentaron en la sede compostelana del Igape a primera hora de la mañana y aguardaron la llegada del director y el subdirector. El primero en acudir a su puesto de trabajo fue Joaquín Varela de Limia, y los agentes se encerraron con él en su despacho. Uno de ellos, sin embargo, quedó fuera a la espera del otro responsable del organismo, Carlos Silva, que fue llevado a otro despacho. El objetivo era que no se pudiesen comunicar en ningún momento los dos jefes del Igape. Después de una larga mañana en la que los vigilantes de Aduanas requirieron numerosa información y realizaron abundantes fotocopias, Varela y Silva abandonaron con los agentes en torno a las dos de la tarde la sede del Igape en Santiago y se dirigieron a Lugo.

La Consejería de Economía e Industria confirmó la noticia ayer por la tarde a través de un comunicado en el que informaba de que los agentes de Aduanas solicitaron datos sobre "una veintena de empresas", aunque "solo había expedientes de tres de ellas". La Xunta se ofreció, según la nota de prensa, a colaborar con la Agencia Tributaria, de la que depende Vigilancia Aduanera, para que "se investigue sin límites". Además, la consejería "defiende la presunción de inocencia" del director y el subdirector puestos a disposición judicial.

El director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, no tenía experiencia en el sector público hasta que llegó a este organismo. Licenciado en Económicas y máster por la Escuela de Negocios Caixanova, el vigués desarrolló su carrera en la consultora PriceWaterhouse Cooper.

Por su parte, Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica lucense Nupel, es uno de los empresarios más influyentes de Lugo, hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a exportar sus medicamentos en una treintena de países, a inaugurar un centro de distribución en Abu Dabi y a patrocinar su propio equipo de rallies. Últimamente, la empresa, que recibió varias ayudas de la Xunta, la última para una planta de envasado unidosis en Rábade (Lugo), atravesaba una situación económica difícil.

La titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, es responsable de varias investigaciones de gran calado, como una que relacionó a varios políticos con un caso de tráfico de influencias en Castro de Rei y otra sobre la retirada masiva de multas en Lugo a cargo de los agentes.

www.elpais.es 25.11.11

EL EMPRESARIO DETENIDO LOGRÓ DEL IGAPE CUATRO MILLONES DESDE DICIEMBRE

La Xunta anuncia una investigación interna sobre el instituto de crédito

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela Sanjosé, ordenó anoche el ingreso en prisión del empresario Jorge Dorribo, uno de los principales implicados en la trama que presuntamente defraudaba ayudas de la Xunta. La juez tomará hoy declaración al director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que canaliza ayudas y préstamos a empresas de la Xunta, Joaquín Varela Cominges, y a Carlos Silva, subdirector de Información Especializada de ese organismo. Ambos continuaron ayer incomunicados en los calabozos de las dependencias policiales después de que el martes fuesen detenidos en la sede del instituto dependiente de la Consellería de Economía. Además de diversa documentación (que incluye los expedientes de concesión de casi cuatro millones de euros, en préstamos y ayudas, durante los últimos seis meses, a empresas de Dorribo), la policía se incautó de los ordenadores personales.

El empresario Jorge Dorribo fue interrogado durante cuatro horas

Fuentes del PP mostraron malestar por cómo trata la juez a los directivos

Dorribo fue conducido a la prisión provincial de Bonxe, pasadas las diez de la noche, tras declarar ante la juez. Otros cuatro presuntos implicados en la Operación Campeón quedaron en libertad. Entre ellos se encuentra la esposa de Dorribo y dos empleadas de su empresa, la farmacéutica Nupel. La operación, en la que intervienen 30 agentes de Vigilancia Aduanera, halló indicios de que los 15 detenidos el martes podrían haber cometido delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Las cuentas bancarias de 14 de ellos han sido intervenidas y la policía tiene en su poder grabaciones de conversaciones telefónicas entre los implicados.

Los agentes del organismo desplazados desde Madrid seguirán en Galicia por lo menos hasta este viernes, por lo que no se descartan más detenciones y registros. A los cargos de la Xunta se les atribuye el supuesto asesoramiento para montar la trama que permitiese a Dorribo obtener cuantiosas ayudas públicas.

En los últimos seis meses, la empresa farmacéutica Nupel, sobre la que se centran todos los focos, tuvo suerte con sus solicitudes ante el Igape. En marzo el organismo publicó la concesión a fondo perdido de 992.942,55 euros para un proyecto de inversión de la firma centrado en una planta de medicamentos en Rábade (Lugo). El Igape dio luz verde a la operación pese a que ya se encontraba en una situación económica delicada. Unos meses antes, en diciembre, consiguió del mismo organismo un préstamo en condiciones muy favorables (euribor más el 0,5%) de 2.956.000 euros financiado con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Otra de las empresas de la supuesta trama, la consultora Proitec -que asesoraba a empresas para lograr ayudas públicas- había recibido en 2009 subvenciones a fondo perdido de menor cuantía.

Fuentes del Igape aseguraron ayer que la orden de resolución por las que se otorgaron las subvenciones fue "perfectamente correcta". Aun así, la Consellería de Industria quiso dejar clara su voluntad de cooperación y anunció que ha solicitado a otro departamento, el de Presidencia, que compruebe los expedientes vinculados con la investigación. La Consellería que dirige Javier Guerra pidió que actúe la unidad especializada de la Dirección Xeral de Avaliación Administrativa. En un comunicado -Guerra no compareció ante los medios y su departamento remitió a la intervención en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo-, Economía insiste en la presunción de inocencia de los altos cargos y en su voluntad de arrojar al caso "la mayor transparencia".

Ante el revuelo mediático que ha levantado la Operación Campeón, fuentes del PP y los abogados de varios detenidos mostraron ayer su malestar por los pasos que está dando la juez Estela Sanjosé, que ya ha dirigido otras operaciones de gran repercusión pública. "No se entiende el motivo de que [Joaquín Varela] lleve dos días detenido y no le dejen ni comunicarse con su familia", señalaron esas fuentes, "sobre todo teniendo en cuenta que es un ejecutivo respetado, que le han registrado el despacho y que no hay riesgo de fuga".

www.elpais.es 26.05.11

FEIJÓO: "A MÍ ME LLEGAN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE ME DAN LOS VOTOS"

El presidente gallego mantiene a los dos cargos detenidos

Tras ver cómo el director y otro alto cargo del instituto económico de la Xunta dormían en los calabozos, acusados de estar implicados en graves delitos económicos, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hizo ayer en el Parlamento una defensa cerrada de los dos directivos. Pese a la insistencia de la oposición en reclamar ceses, Feijóo pidió tiempo para decidir sobre los arrestados -todavía no han declarado- en la Operación Campeón, que persigue a una presunta red para captar subvenciones, y a la que la juez le atribuye delitos de fraude, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Los investigadores sospechan que los altos cargos asesoraban a un empresario, también detenido, que logró un crédito de cuatro millones de la Xunta. Feijóo apeló a su victoria en las municipales del 22-M para ganar tiempo. "A mí me llegan los principios éticos que me dan los votos", zanjó el debate.

www.elpais.es 26.05.11

PRESIDENCIA NO INVESTIGA EL 'CASO ORQUESTA' Y RUEDA RECHAZA "LECCIONES DE MORALIDAD"

Justo después de la bronca por el caso *Campeón*, llegó al hemicycle la Operación Orquesta, por la que están imputados los alcaldes de Cee, el independiente Manuel Vigo, y los populares de Fisterra, Manuel Traba, y de Mazaricos, Juan Manuel Santos, (que el domingo revalidaron sus mayorías absolutas). La pregunta la formuló el Bloque y pretendía conocer las actuaciones que la Xunta ha llevado a cabo en este caso, que ha puesto al descubierto gestiones del alcalde de Fisterra ante la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, para que emplease a una familiar de un constructor también detenido en la trama, e incluso las subvenciones de Cultura que recibió una asociación para lanzar políticamente al candidato del PP de Corcubión.

Con todo eso, prometió ponerse Feijóo cuando se conocieran los detalles del sumario. Y el portavoz parlamentario del BNG quiso saber cómo iban las gestiones del Gobierno gallego. No obtuvo respuesta. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien sí mandó a los investigadores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a fiscalizar 13 entidades denunciadas por él mismo desde la sede del PP, invocó esta vez la presunción de inocencia. E incluso acusó a Aymerich de actuar con "parcialidad". Luego el conselleiro subrayó su defensa del "derecho a la presunción de inocencia, la colaboración máxima con los órganos judiciales, investigación a tope y la contundencia siempre que sea posible". No detalló qué gestiones concretas ha realizado su departamento, si es que ha hecho alguna.

Y cuando escuchó el ataque del Bloque a la inclusión de los alcaldes imputados en las listas, Rueda recuperó un episodio del sumario en el que uno de los imputados contaba a otro que

determinado alcalde nacionalista [del que Rueda no citó nombre ni localidad] "solía meter el cazo para venderse al mejor ofertante".

Ese pasaje, del que Rueda no dio más datos -en el caso *Orquesta* no hay imputado ningún regidor del BNG- sirvió al conselleiro para subrayar que no acepta "lecciones de moralidad". Aymerich siguió preguntando por qué Portos de Galicia, según aparece en el sumario, permitía al constructor imputado ver el resto de ofertas para mejorarlas y hacerse con los contratos, pero no recibió respuestas.

www.elpais.es 26.05.11

FEIJÓO EVITA ACLARAR EN EL PARLAMENTO EL CASO DEL AGENTE ELECTORAL DE BALTAR

El presidente implica a Vázquez en el 'caso Orquesta' en un bronco debate

Como si uno viviese en Marte y el otro en Venus, Feijóo y Pachi Vázquez disputaron ayer un duelo ininteligible en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente de la Xunta pasó por alto las acusaciones más graves del líder del PSdeG y contraatacó con munición de calibre tan grueso como vincular a Vázquez con la Operación Orquesta. Pese a la insistencia del socialista, Alberto Núñez Feijóo obvió el caso del agente electoral confeso de la Diputación de Ourense, pagado por esta institución para buscar votos en Argentina para el PP en las municipales de 2007. Su presidente, José Luis Baltar, no lo negó. Feijóo optó por el silencio.

El líder del PSdeG tacha a Feijóo de "presidente del transfuguismo"

A medida que se acercan las municipales, las sesiones de control del Parlamento ganan en tensión pleno a pleno. La pregunta de Vázquez iba sobre el "incumplimiento del programa electoral" del PP. En ese documento, la regeneración democrática tenía especial protagonismo, pero la pasividad de ese partido con sus alcaldes imputados en el caso *Orquesta*, el fichaje de transfugas y los últimos escándalos que afectan a la Diputación ourensana desmienten esa promesa, acusó Vázquez.

En su primera respuesta, Feijóo no se apeó del guión que llevaba escrito, un resumen de lo que consideró los logros de su Gobierno. Vázquez replicó con su versión particular de esos dos años: "Más paro, menos servicios públicos, paralización de grandes infraestructuras y degeneración, que no regeneración democrática". En algo sí le reconoció como "el mejor": "En comprar voluntades es usted el presidente del transfuguismo de Galicia". Y como Feijóo no entró en el caso del agente electoral, Vázquez insistió: "Lo que es ilegal es coger dinero de la Diputación de Ourense". Y ya que el empleado de Baltar asegura que Feijóo estaba informado de sus actividades en América, le preguntó por qué no acudió a la justicia.

Fue en su segundo turno cuando Feijóo contraatacó con la Operación Orquesta, por el que están imputados dos alcaldes del PP y otro independiente de la Costa da Morte por presunta prevaricación y cohecho en contrataciones municipales. "En la Operación Orquesta hay cosas que se van a saber. Por ejemplo, su nombre aparece en el sumario y el mío no", acusó. Según desveló después el PSdeG, la cita es una conversación del empresario Daniel Ogando con el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, en el que este se excusa de no poder acudir a una cita por tener una entrevista con Pachi Vázquez. Esa entrevista fue en el Parlamento con la directiva de la Asociación Neria, de ayuntamientos de la zona, y de la Federación de Empresarios de la Costa da Morte. Feijóo también afirmó que un alcalde imputado acusó a "un ministro" de amenazarle si no iba en la lista del PSdeG. Tras el pleno, los socialistas exigieron disculpas a Feijóo por su "terrorismo político e informativo".

Las insinuaciones de Feijóo calentaron los ánimos en los bancos de la oposición, que estallaron cuando atacó a los concejales de los gobiernos municipales bipartitos por "vivir exclusivamente de sus ayuntamientos". Diputados del PSdeG interrumpieron al presidente con gritos de "¿Y tú de qué vives?" o "¡Fuera el populismo!". Feijóo cerró el turno con una propuesta de "acuerdo por la regeneración democrática".

Previamente, Feijóo provocó las carcajadas de la oposición cuando, en respuesta a la pregunta del nacionalista Carlos Aymerich sobre la evolución del desempleo, presumió de presidir "la

comunidad pluriprovincial del régimen general con menos paro de España". El presidente alertó, no obstante, que "es difícil crear empleo con un Gobierno interino" en España, y afirmó que las dos ciudades con más paro son Vigo y Pontevedra, "gobernadas por el PSOE y el BNG".

www.elpais.es 05.05.11

LA DIPUTACIÓN OURENSANA ADMITE QUE PERMITIÓ AL AGENTE DEL PP IR A AMÉRICA

José Vázquez asegura que informó por carta a Feijóo de su misión en Argentina

Alberto Núñez Feijóo "estaba al corriente" de que el ex empleado de José Luis Baltar en la Diputación que asegura haber actuado como agente electoral para el PP en Argentina cobrando de la institución provincial, iba a denunciar públicamente estos hechos. José Vázquez, conocido entre los populares ourensanos como *El Argentino*, asegura que envió hace dos meses una carta al presidente de la Xunta y del PP informándole de la denuncia que ayer publicó este periódico. "El presidente me contestó por un emisario diciendo que él no respondía por la Diputación, que eso era cosa de Ourense". Y optó por hacerlo público.

El presidente provincial culpa del caso a la "buena fe" de un funcionario

José Luis Baltar: "Les das un bocadillo y te muerden la mano"

Baltar se mostró ayer muy ofendido con su antiguo empleado -"le das un bocadillo y te muerde la mano", dijo- y no fue capaz de desmentirlo, aunque negó su participación. Una hora antes, Alfonso Rueda echaba balones fuera contestando a los periodistas que "debe ser la Diputación de Ourense quien explique" los hechos denunciados. "No hago valoraciones sobre las noticias de la prensa", afirmó.

Pero Baltar ya se había explicado ante sus superiores del PP de Galicia. "Hablé esta mañana con Santiago y ya les dije que íbamos a abrir un expediente informativo para ver si hubo alguna responsabilidad" de la Diputación, aunque él cree que "se actuó bien". Los servicios jurídicos de la institución estudian la "reclamarle" a El Argentino "las mensualidades que cobró" del organismo público durante su estancia como agente electoral en Buenos Aires.

El barón del PP de Ourense reconoció que el entonces empleado de la Diputación se había ido a Argentina los tres meses previos a las municipales de 2007 -regresó un día antes de la cita electoral- con la "autorización de su jefe superior". Baltar intentó quedarse al margen del supuesto fraude señalando que su protegido "abusó de la buena fe" del funcionario jefe: "Le engañó diciéndole que tenía mi autorización para irse".

Pero mientras Baltar sostiene que, "la Diputación no llegó a enterarse" de que Vázquez se había ausentado los tres meses preelectorales de su puesto de trabajo, El Argentino asegura que tiene las facturas de sus llamadas desde Buenos Aires a José Manuel Baltar Blanco -entonces responsable de organización del PP de Ourense, que presidía su padre- y a Jorge Pumar, uno de los dirigentes que Vázquez asegura que le pidió, junto con el alcalde de Melón, Alberto Pardellas, que "les trajera votos de allá".

En el relato de su versión de los hechos, el presidente de la Diputación detalló el criterio que utilizó para contratar a Vázquez en 2002 cuando éste llegó a España, arruinado, desde Argentina. "Pese a que nadie me pidió por él ni era de mi familia", dijo, lo contrató "porque no tenía ni para comer".

Ayer, el barón del PP reconoció que se siente decepcionado con su antiguo protegido. "Es una persona a la que ayudas y te saltas a la torera determinadas cosas". Y añadió: "Hay rumores de que ha dicho que me quería ver tirado por la calle y de que pidió dinero, aunque parece que no se lo dieron".

El PSdeG no tardó en reaccionar. Su líder, Pachi Vázquez, tildó de "muy graves" las acusaciones y demandó que sean desmentidas por el PP y Feijóo, a la vista de la documentación aportada.

Además, reclamó la intervención de la fiscalía en caso de que las denuncias "tengan visos de realidad".

www.elpais.es 04.05.11

"FUI AGENTE ELECTORAL DEL PP PAGADO POR LA DIPUTACIÓN DE OURENSE"

Un excontratado por Baltar asegura que recabó votos en Argentina en las pasadas municipales mientras cobraba una nómina del organismo provincial- Su pasaporte acredita que estaba en Argentina mientras cobraba de la Diputación

José Vázquez, empleado a dedo por Baltar en la Diputación durante cinco años, asegura que ejerció como "agente electoral para el PP" en Argentina durante los tres meses previos a las municipales de 2007. "Fui agente electoral del PP pagado por la Diputación de Ourense", afirma. Vázquez, ourensano emigrado a Buenos Aires con sus padres cuando apenas era un niño, recaló en Madrid en 2000. Estaba arruinado. Tras dos años de penurias se le "ocurrió" pedirle cita, para hacerse con un empleo, al presidente de la Diputación de Ourense, quien no se lo pensó. A los dos meses de formularle su petición, *El Argentino*, como lo llaman en el PP provincial, tenía un trabajo de *legoeiro* -vigilante de obras de infraestructuras- en la institución provincial.

José Vázquez sostiene que logró 152 sufragios para el alcalde de Melón

"Sigo militando en el PP pero les devuelvo el recibo todos los meses"

Era un contrato temporal y renovable, como el de cientos de ourensanos a quienes el barón del PP suele recompensar en la institución que preside su trabajo político, según se han hartado de denunciar los grupos de oposición, PSOE y BNG. Con Vázquez, Baltar hizo al revés. Primero lo contrató "altruístamente" -"por lo que le quedé muy agradecido"- y después le "reclamó el favor político".

En 2007, Alberto Pardellas, alcalde de Melón -condenado ahora a ocho años de inhabilitación por prevaricación- se entrevistó con él. "Me encomendó que me fuera a Buenos Aires a trabajar el voto de los emigrantes para su ayuntamiento y para los de Ribadavia, O Carballiño, Carballeda de Avia y Ourense", gobernados estos últimos por el PSOE o por bipartitos.

La reunión se celebró a comienzos de marzo de aquel año. Vázquez sostiene que acompañaban a Pardellas el exalcalde popular de Ribadavia José Luis Pérez Iglesias, el portavoz del PP en Carballeda de Avia, Lorenzo González, además del exconcejal ourensano, del círculo más íntimo de José Manuel Baltar Blanco, Jorge Pumar. "Le dije a Pardellas que cómo iba a irme a Argentina y dejar el empleo. Solo me quedaban 15 días de vacaciones. Pero él me advirtió de que eso quedaba por su cuenta".

Inmediatamente Vázquez recibió "un llamada de Baltar". "Me dijo que hablara con el jefe de Personal de la Diputación, José Luis Suárez", hijo del alcalde baltarista de Monterrei, quien le dijo que "estaba todo en orden". Vázquez viajó entonces a Argentina, donde permaneció -según consta en su visado de entrada y salida de ese país- durante tres meses. Según el listado de nóminas que aporta, durante ese trimestre de trabajo como "agente electoral del PP" siguió cobrando el sueldo de la institución provincial por su empleo de *legoeiro* mientras acudía "puerta por puerta" a pedir el voto a los ourensanos afincados en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires: "Además el PP me ingresaba un extra y, cuando me fui de Ourense, me dieron dinero en mano para los gastos".

El exempleado de la Diputación explica cómo trabajó el voto "visitando casa por casa": "También hice algunas llamadas telefónicas desde la sede del PP en la calle San José". Asegura que aportó a la victoria de Pardellas en Melón 152 votos de Argentina. Para el PP de Bande, el concejal Enrique Badás -con residencia en Buenos Aires: no acude a las sesiones plenarias del municipio ourensano- aportó "sobre 400 votos".

Pardellas visitó a Vázquez en Buenos Aires. El entonces candidato a la alcaldía de Melón organizó en la capital argentina comidas multitudinarias con los emigrantes de su pueblo, a quienes entregaba un diploma de asistencia al evento con la leyenda "I Xuntaza de Melón en Argentina" y

con los que se fotografiaba. "Las comidas las pagaba el PP; eso sí, no sé con qué dinero", reconoce el exempleado de la Diputación.

El agradecido baltarista que era José Vázquez se convirtió en un decepcionado con los métodos del presidente de la Diputación en cuanto, según asegura, este "rompió su promesa" de renovar el contrato que le garantizara la jubilación. La ruptura se produjo en enero de 2010 cuando, en el congreso provincial, José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente provincial saliente, venció al candidato arropado por Rajoy y Feijóo, el alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán.

En ese momento "Baltar prescindió de mis servicios y no me renovó el contrato", sostiene, dolido, El Argentino quien, tras agotar las percepciones de desempleo asegura que vive, sin ingresos, en una casa de Cáritas: "Sigo militando en el PP, pero me tomo el gusto de devolverles el recibo todos los meses".

José Vázquez salió de Ourense el 16 de marzo de 2007 rumbo a Argentina y regresó, "con la misión cumplida", el 24 de mayo. "Mi único trabajo allí era pedir el voto", sostiene. La vinculación del *legoeiro* con la cúpula del PP fue estrecha. No solo Baltar le ofreció empleo de inmediato, sino que Vázquez asegura que la pareja del actual presidente provincial, la exparlamentaria María José Caldelas, ya le había mostrado la confianza del partido y de los Baltar nombrándolo, apenas aterrizado en Ourense, "jefe de la carpa electoral del PP" de la calle Paseo en las autonómicas de 2005. Durante su trimestre en Argentina, Vázquez vivió la transformación de la histórica Casa de Hijos y Nietos de Bande en la Casa de Ourense en Buenos Aires, una especie de sede duplicada del PP.

"Baltar padre me había prometido que trabajaría para su hijo cinco años más [los necesarios para cobrar la jubilación] tras el congreso. Pero no cumplió y ahora no me llega para vivir porque no tengo los 15 años cotizados", afirma. Un portavoz de la Diputación de Ourense confirmó ayer que Vázquez ha trabajado de *legoeiro* en la institución, aunque afirmó que lo hizo hasta su jubilación. El representante del organismo que preside Baltar añade que no le consta ninguna "petición o autorización" a nombre de José Vázquez para que marchara durante tres meses a Argentina a trabajar el voto emigrante.

www.elpais.es 03.05.11

FEIJÓO RESPALDA A LOS IMPUTADOS DEL 'CASO ORQUESTA'

El líder del PP descarta "prejuicios y precipitaciones" con sus alcaldes

A poco más de un mes de las elecciones, Feijóo pide justo lo que no tiene antes de tomar una decisión sobre los alcaldes del PP imputados en la Operación Orquesta: tiempo. "Tenemos que conocer ese sumario y conocerlo todo, absolutamente todo", contestó ayer el presidente de la Xunta y del PP, a la pregunta de si es partidario de que los regidores de Fisterra y Mazaricos, imputados por el juez, vuelvan a ser candidatos. El "todo" al que se refería son regidores de otros partidos que Feijóo considera "señalados" en el sumario, ya que aparecen citados en conversaciones intervenidas por la policía, pero sobre los que el juez no ha encontrado indicios para imputarlos.

- *El presidente deja en manos del grupo popular la comisión de la 'trama agraria'*
- *Pide explicaciones al PP de A Coruña por el intento de soborno en Arzúa*

El presidente gallego no descartó actuar contra sus dos alcaldes, pero las imputaciones judiciales -prevaricación, cohecho y tráfico de influencias- no le parecen material suficiente para que el PP los aparte ya de las candidaturas. Para explicarlo, apeló Feijóo a la necesidad de actuar de forma "contundente y consecuente", lo que en su opinión "está reñido con cualquier prejuicio o precipitación". De alguna manera, la decisión que tome el Partido Popular estará vinculada a lo que Feijóo espera que ocurra con otros cargos públicos, a pesar de que los dos alcaldes del PP y el de Cee, independiente, son los únicos regidores imputados por el juez. "Vamos a conocer la investigación sin límites, a cuántos alcaldes afecta, qué se les imputa, cuál es la graduación de las imputaciones y conocer con amplitud todo el sumario", añadió.

Preguntado sobre si lo conocido -las imputaciones y la totalidad del sumario- no es suficiente, Feijóo respondió: "No sé exactamente qué es lo que se conoce, porque el sumario, que nosotros sepamos, no lo conocen las partes ni sus abogados en su totalidad". El presidente añadió que, "por lo leído en los medios de comunicación", resulta "muy sorprendente" que solo estén imputados los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos.

Algo más contundente se mostró respecto a la posibilidad de investigar la implicación de funcionarios y cargos públicos de la Xunta en la presunta tramitación irregular de subvenciones, que también aparecen en los autos judiciales. Será, eso sí, cuando el Gobierno gallego tenga "ese sumario por capítulos" de la Operación Orquesta. En ese momento, y no antes, "será investigado en el ámbito de la Administración autonómica y será clarificado".

"Espero que nadie lo considere un abuso de poder", ironizó, en alusión a las acusaciones de la oposición sobre la investigación de la Xunta a Unións Agrarias, por la que el juez imputa a dos directores generales del Gobierno gallego por presunta desviación de poder. A diferencia de la demora de la investigación sobre el caso *Orquesta*, la Xunta tardó solo una semana en irrumpir en las sedes de las asociaciones vinculadas a Unións Agrarias desde que el PP denunció en una rueda de prensa las presuntas irregularidades.

Lo que no parece tan claro es que el PP vaya a impulsar en el Parlamento la comisión de investigación sobre lo que denomina "trama agraria", esto es, el supuesto desvío al PSdeG de fondos a través de subvenciones a asociaciones afines a Unións Agrarias. Tras el ofrecimiento de retirar la solicitud de investigación si los socialistas no insisten en su denuncia de "abuso de poder" de la Xunta, un trato ya rechazado por el PSdeG, Feijóo dejó en manos de "la autonomía" del grupo parlamentario el impulsar o no la comisión.

El presidente fue preguntado en tres ocasiones sobre sus intenciones de abrir la comisión, ya solicitada formalmente por el PP en el Parlamento. Prefirió criticar la actitud del PSdeG el miércoles en la Cámara. "No sé si le molesta que se investigue o por qué teme que un Gobierno ejerza sus funciones", afirmó, en referencia a la investigación de la Xunta, que consideró "un cumplimiento estricto de las normas", y no un "abuso de poder". No fue hasta la tercera pregunta cuando aclaró que la decisión queda en manos del grupo popular, que él preside.

Sobre Baltar: "Cada uno responde de lo que hace"

Alberto Núñez Feijóo arrojó ayer la toalla sobre la posibilidad de echarle el lazo a la política de personal del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Preguntado por los últimos casos de enchufismo en la institución provincial, el titular de la Xunta decidió desentenderse. "Cada cual es responsable de lo que haga", respondió.

La frase vino precedida de un alegato en defensa de las competencias que le corresponden a cada Administración. La Xunta "ejecutará" las que le son propias en cuestiones que afecten a la Administración local, pero no consideró que competan a su Gobierno las de "personal y contratación" de ayuntamientos y diputaciones.

"Lo que hace el Gobierno gallego será el Gobierno gallego el que deba responder en todos los ámbitos, y cada administración pública deberá ser responsable de lo que hace en materia de personal y contratación", manifestó. Los periodistas insistieron. ¿Cree entonces que no hay mecanismos para controlar la situación? Feijóo no se salió del carril. "Cada uno es responsable de lo que hace, y la Xunta es responsable de lo que hace, de lo cual yo doy cuenta diariamente, y al resto de administraciones públicas le toca dar cuenta a sus órganos de gobierno".

Pese a esta declaración, la Consellería de Presidencia explicó ayer que dentro de los 147 requerimientos enviados a las administraciones locales contra las bases de oposiciones, 14 corresponden a las diputaciones provinciales. La intervención de la Xunta se limita a la fase previa, ya que que los representantes del Gobierno gallego no participan en los tribunales de las instituciones provinciales. Entre la última remesa de aprobados por al Diputación de Ourense no figura el hijo del número 13 de la lista del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Aurelio Gómez, en contra de lo que publicó este periódico. El resto de los citados en la misma noticia sí aprobaron.

Feijóo, por otra parte, pidió una aclaración al PP de A Coruña sobre el intento de soborno del candidato popular al alcalde de Arzúa, aunque advirtió que no lo considera probado. El caso le pareció "suficientemente grave" para que la dirección provincial del partido "lo analice en profundidad".

www.elpais.es 15.04.11

EL BNG Y EL PSOE PIDEN CUENTAS A FEIJÓO POR LA FOTO DE RAJOY EN EL BARCO DE UN CLAN DE LA DROGA

El BNG y el PSOE gallego han pedido explicaciones en el Parlamento gallego al Partido Popular por la foto en la que su líder aparece en el barco Moropa, propiedad de un narcotraficante. "Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto", afirmó el diputado socialista José Luis Méndez Romeu.

En un pleno, este martes, en el que se debatía el plan eólico puesto en marcha por el gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo, tras una pregunta de la oposición, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se defendió mostrando una foto del exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana en un yate con el empresario Jacinto Rey, a quien en su momento el PP acusó de favorecerle. Fue entonces cuando el diputado del BNG Enrique Viéitez mostró la portada del diario *Público*, que reveló los hechos, donde aparece Rajoy en el yate de un narcotraficante.

Un turbio asunto

El parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu también exigió al PP que se aclare por qué Mariano Rajoy estaba en ese yate. "Alguien tiene que dar explicaciones sobre barcos, porque los gallegos aún esperan explicaciones por ese turbio asunto", afirmó.

La presidenta del Parlamento recrimina al nacionalista

La presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, reprochó al parlamentario gallego que mostrara la portada de *Público* mientras estuvo en el estrado. "Un recordatorio antes de abandonar la tribuna: puede usted mostrar cualquier tipo de papeles, pero en cualquier caso, que sepa, para otra vez, que la tribuna no está para colocar ningún tipo de pósters", precisó.

La visita de Rajoy a Cambados

El 19 de marzo de 2009, en vísperas de la campaña de las elecciones europeas, el PP gallego organizó un acto en el que participó Mariano Rajoy, que incluyó una visita a la lonja de Cambados (Pontevedra), donde fue invitado a subir a la embarcación Moropa, dispuesta para la ocasión.

www.elplural.com 13.04.11

FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA"

El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez, condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios, imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por ninguno de sus dos bastiones en la provincia.

"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de

las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.

Contención del gasto

Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que "Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".

No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.

"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las consecuencias".

www.elpais.es 03.03.11

C.A GALICIA: FEIJÓO: "¿LA POLÍTICA DE PERSONAL DE BALTAR? AHORA ME VOY A XINZO Y A CELANOVA"

El presidente presume junto a Baltar de "austeridad y contención del gasto"

A 82 días para las municipales, Feijóo abraza el baltarismo. "Se acabaron los tiempos de las luchas internas", proclamó ayer en Ourense el presidente del PP de Galicia flanqueado por los dos Baltar (padre e hijo) y por el aspirante a la alcaldía de la ciudad, el parlamentario Rosendo Fernández, en la inauguración de la oficina del candidato. En el momento en el que arrecian las críticas, y las denuncias judiciales, contra la gestión de la Diputación por parte del barón ourensano, Feijóo lo redime con su presencia y su discurso.

Baltar Blanco carga contra el "despilfarro" de los gobiernos bipartitos

El líder del PP gallego proclama el fin de las "luchas internas" en Ourense

No fueron solo sus palabras. Los populares convocaron a los medios de comunicación a unos 100 metros del local en el que se iba a celebrar el acto para que levantaran acta del encuentro del dirigente gallego con los presidentes del PP y de la Diputación. Los tres, acompañados por un pequeño séquito, sonrieron para los fotógrafos, se estrecharon las manos y se dieron palmaditas en la espalda mientras se dejaban ver paseando juntos por la céntrica calle del Paseo.

Ante el portal de la oficina del candidato, medio centenar de militantes baltaristas aclamaron al aspirante, hombre de la máxima confianza de José Manuel Baltar Blanco, al grito de "alcalde, alcalde, alcalde", mientras se acercaban a saludar al presidente provincial, a quien felicitaron por su inminente paternidad. "Presidente, avísame cuando sea el mitin de Esgos", le pidió un militante.

El presidente del PP gallego quedó prácticamente diluido en medio del baltarismo ourensano a pie de calle. En la abarrotada oficina del candidato, Baltar Blanco arremetió contra los "inoperantes y despilfarradores" gobiernos bipartitos y proclamó a Feijóo como "espejo" en el que se habrá de mirar el "próximo alcalde del PP".

Feijóo le devolvió con creces el piropo. Felicitó al PP de Ourense por "abrir las puertas del partido" y animó a los militantes allí presentes a "entrar en las casas" para anunciar el "cambio en la gestión" municipal. Frente al "despilfarro de los socialistas", Feijóo propuso el modelo de "austeridad y contención del gasto del PP".

Cuando, finalizado el acto, los periodistas le preguntaron si ese modelo de contener el gasto será el de la política de contrataciones que lleva a cabo José Luis Baltar en la Diputación, Feijóo evitó responder. "Con todos los respetos, estamos hablando de las elecciones municipales. Y ahora me voy a Xinzo y después a Celanova", esquivó.

En la oficina del candidato, el presidente gallego había arremetido contra los bipartitos "que gobiernan aunque pierden las elecciones" en contraposición al "democrático PP", que "se compromete a gobernar solo si las gana". "Aquí no hay trampa ni cartón, nosotros no tenemos compromisos con nadie", afirmó Feijóo en la provincia con más denuncias de enchufismo.

Cuando los periodistas le preguntaron si su partido incluirá a tráfugas en las listas, acusó al PSOE de haber roto el pacto anti-tráfugismo y despejó el camino para que cada junta local del PP decida a quién incluye en las candidaturas "de acuerdo con nuestros estatutos".

Un candidato eclipsado por el aparato provincial

El candidato que inauguraba oficina es, pese a haber desempeñado casi todos los cargos institucionales posibles en el PP, prácticamente un desconocido para la opinión pública ourensana. El elevado protagonismo de los dos Baltar aniquila la proyección de este político de discreto perfil que fue alcalde de A Merca, subdelegado del Gobierno y parlamentario autonómico.

Feijóo se arrima al baltarismo en un momento en el que las encuestas realizadas por el propio PP le dan una pérdida de tres concejales en la ciudad, dejando al partido a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Ourense sería la excepción al previsible crecimiento del PP en el resto de las ciudades gallegas.

El candidato no ayuda. Lo reconocen baltaristas y oficialistas, que destacan su bonhomía. La crispación interna desatada por el nuevo líder provincial -Baltar hijo, que ha laminado en la ciudad al sector crítico- tampoco. Rosendo Fernández pasa desapercibido en los actos que celebra, cuyo verdadero protagonista es el presidente provincial, Baltar Blanco.

Ayer Baltar Blanco dio cuenta ante su militancia de la labor que realiza el candidato. "Lleva trabajando muchos meses en todos los barrios y distritos, fue recibido por el presidente de la Diputación y por el del PP nacional, con quien estuvimos hace unas semanas", enumeró Baltar Blanco los logros de su hombre de confianza y apuesta personal frente al más conocido y valorado por sus votantes -según la encuesta del propio partido- el portavoz municipal del PP y ex alcalde, Enrique *Poly* Nóvoa.

En el discurso en su sede de aspirante a la alcaldía, Fernández repitió prácticamente las críticas del presidente provincial a los bipartitos y al alcalde ourensano, el socialista Francisco Rodríguez, a quien ambos acusaron de "echar por tierra una buena entrada para el AVE" y de haber convocado, ayer mismo, "un paripé" con el secretario de Estado de Fomento, "de espaldas a todos los colectivos sociales y empresariales".

www.elpais.es 25.02.11

FACENDA ABRIÓ OTRA INVESTIGACIÓN A UNIÓN AGRARIAS TRAS ACUDIR EL PP AL JUZGADO

Facenda inició el control financiero de UU AA cuando el caso estaba judicializado

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo implicó a personal de cuatro consellerías en la investigación a Unión Agrarias, después de que la cúpula del PP acusase en junio pasado al sindicato de "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales del PSOE". Además de los investigadores de Trabajo y Presidencia, funcionarios de Sanidade y de Facenda se involucraron también en las pesquisas sobre la central agraria.

Trabajo certificó por escrito en octubre que la investigación seguía en marcha

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha citado hoy a declarar en calidad de imputados al director general de Promoción do Emprego, Andres Hermida Trastoy, y al de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada Romero, por el modo en que se ordenó y se llevó a cabo esa investigación. La decisión judicial tiene su raíz en una querella de Unións Agrarias que atribuye a la Xunta desviación de poder, un tipo de prevaricación administrativa.

El caso parte de una querella anterior que el PP presentó en Corcubión contra el alcalde socialista de Muxía, Félix Porto, también imputado, al que acusa de utilizar para las municipales de 2007 en Buenos Aires a una trabajadora del sindicato, donde entonces Porto tenía responsabilidades. Justo doce días después de que el PP ampliase esa denuncia, Facenda abrió un procedimiento de control financiero contra el sindicato y varias entidades afines que todavía no ha dado resultados. Lo que sigue es la cronología del expediente abierto por la Xunta a Unións Agrarias: el 7 de junio de 2010, coincidiendo con el inicio de un juicio por corrupción a dos ediles del PP de Gondomar finalmente condenados, la dirección de este partido encabezada por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, extendía el supuesto fraude en las subvenciones a Unións Agrarias a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. El punto de partida de su denuncia era la confesión de una trabajadora de Unions Agrarias, que dijo haber hecho campaña para el PSOE de Muxía en las municipales de 2007, pese a estar contratada por Unións Agrarias.

La orden se la habría dado el entonces candidato socialista de Muxía y hoy alcalde, Félix Porto, imputado por este caso. Tras señalar que 28 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias habían percibido ayudas de la Xunta para contratar personal con cargo al fondo de cooperación que subvencionó en esos años a 300 colectivos, la dirección del PP denunció una "trama agraria para beneficiar al PSOE". No aportó ni una sola pista más, pero se ganó unos titulares de prensa que, según reconoció el director general de Promoción de Emprego, Andres Hermida Trastoy, en la documentación enviada al juez, llevó a su departamento a abrir ese mismo día, el 7 de junio, una investigación sobre el sindicato.

En ella participó personal de Trabajo y de la Consellería de Presidencia del mismo Alfonso Rueda, que aireó, como secretario general, las denuncias desde la sede del PP. Solo tres semanas después, el 30 de junio, los populares ampliaron la querella presentada contra el alcalde socialista de Muxía en Corcubión. Pese a la petición que Unións Agrarias formuló a la Xunta el 9 de julio para que se frenase el expediente administrativo, tal y como establece la ley para asuntos que están judicializados, Trabajo continuó con su investigación.

Y la Consellería de Facenda inició otra paralela de control financiero sobre las cuentas de Unións Agrarias. Según consta en la documentación que maneja este diario (en la imagen se reproduce el documento oficial de Facenda), la Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, adscrita al departamento de Marta Fernández Currás, puso a trabajar al equipo auditor el 12 de julio de 2010, semana y media después de que el PP ampliase su denuncia. Ni Trabajo ni Facenda han ofrecido ocho meses después ningún dato sobre el resultado de sus indagaciones.

La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, aseguró ayer que "sobre ese tema la Xunta poco más tiene que decir porque el procedimiento administrativo queda condicionado desde que hay un proceso judicial abierto. Mientras uno de ellos no termine, que será el judicial, el otro no va a continuar".

Pese a sus palabras, el departamento que dirige siguió practicando pruebas sobre la supuesta trama entre junio y noviembre pasado. El pasado 21 de octubre, la jefa de servicio de programas de cooperación de su consellería, Silvia Cortiñas Fernández, admitía en un documento con sello oficial que ambas pesquisas, la de Facenda y la de Trabajo, estaban coordinadas y seguían su trámite. Así lo comunicó a varias asociaciones en el siguiente escrito: "Por lo que respecta al estado de tramitación del procedimiento, se informa que en la actualidad desde la Intervención Xeral se están terminando los trabajos de control realizados por el equipo auditor, que en ejecución del Plan de Control Financiero de 2010, realizaron sobre su entidad".

Pese a las palabras de Mato, su departamento siguió recabando información de las entidades fiscalizadas entre junio, en que se judicializó el caso, y diciembre, según consta en varios documentos oficiales. Horas después de la comparecencia de la conselleira, un portavoz oficial dijo a este periódico que el expediente se paralizó el pasado enero.

EL PSOE PIDE LA DIMISIÓN DE RUEDA POR SUS PRÁCTICAS "NEONAZIS"

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, a quien el Partido Popular situó en el centro de la supuesta trama por ser directivo de Unións Agrarias hasta 2009, exigió ayer la dimisión del conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, por "utilizar la Administración con fines partidistas y métodos mafiosos y antidemocráticos". García vinculó a los populares con prácticas propias de la "noche de los cristales rotos" y culpó a Feijóo de "presentarse como la vanguardia de la derecha, mientras convierte la Administración en una brigada central del partido, al estilo neonazi".

Entretanto, el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas también registro una pregunta parlamentaria para que Rueda aclare en el pleno del próximo mes qué papel jugó como denunciante, desde el PP, e investigador, al frente de la consellería, en la supuesta trama agraria que los populares atribuyen al sindicato y que según su portavoz Antonio Rodríguez Miranda habría servido para "sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para pagar campañas electorales".

Preguntado por si ocho meses después de iniciada la investigación respaldaba esa acusación de financiación ilegal, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, evitó refrendar esa imputación que atribuye un grave delito tanto al PSOE como al sindicato Unións Agrarias.

DOS CARGOS DE LA XUNTA DECLARAN COMO IMPUTADOS POR INVESTIGAR A UU AA

Los responsables de los dos departamentos del Gobierno gallego que investigan desde hace ocho meses una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales" deberán comparecer mañana en los juzgados de Santiago en calidad de imputados. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero.

La "trama" nació el día que un edil de Gondomar admitió comisiones ilegales

La titular del juzgado número 1 de Santiago quiere escuchar la versión de ambos sobre las inspecciones y comprobaciones realizadas por personal de la Xunta en distintas sedes del sindicato el pasado mes de junio, días después de que varios cargos del PP, entre ellos su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario general, conselleiro de Presidencia y superior de Bouzada, Alfonso Rueda, denunciasen la existencia de una red de financiación ilegal que habría servido al PSOE para captar dinero público de la Administración a través de organizaciones afines.

El giro en los acontecimientos -de denunciar una trama corrupta el PP pasa a ver a dos de sus cargos en la Xunta declarando como imputados- se produce una vez que el sindicato agrario Unións Agrarias (UU AA) presentó una querella contra la Xunta a la que acusa de desvío de poder, un tipo de prevaricación administrativa, por el modo en que se ordenaron y llevaron a cabo las comprobaciones en los locales del sindicato.

La juez que instruye el caso también ha requerido a la Consellería de Traballo para que le proporcione documentación que explique el sentido de aquellas visitas. En el escrito que remitió al juzgado el pasado mes de noviembre, el departamento de Beatriz Mato alega que el personal que entró el día 7 de junio en 13 oficinas de Unións Agrarias no realizó inspecciones sino "visitas de seguimiento y control".

En la información que la Xunta remitió a la juez, Traballo admite que la decisión de enviar a su personal a las sedes de Unións Agrarias se adoptó "ante las informaciones publicadas en diferentes medios sobre la existencia de presuntas irregularidades por parte de determinadas entidades vinculadas a Unións Agrarias en la gestión de ayudas para el fomento del empleo

durante 2006, 2007 y 2008 para comprobar *in situ* la prestación del servicio por parte de los trabajadores contratados a través de las subvenciones".

O lo que es lo mismo, Trabajo reconoce a la juez que la decisión de entrar de forma simultánea en las oficinas del sindicato se adoptó el mismo día en que el portavoz del PP denunció supuestas irregularidades en las subvenciones de 2006, 2007 y 2008 concedidas por el bipartito. En la documentación remitida al juzgado, la consellería se esfuerza en remarcar y repite hasta en tres ocasiones que el personal desplazado el 7 de junio de 2010 a las sedes del sindicato y las organizaciones afines, no realizó "inspecciones" sino "visitas de control y seguimiento" para comprobar que los contratados estaban trabajando.

Argumenta que como 13 de los 28 entes que recibieron ayudas con la Xunta anterior siguieron cobrando subvenciones tras la llegada del PP al poder, se trataba de supervisar si el personal contratado desempeñaba alguna tarea en esas asociaciones.

Frente a la tesis de la consellería de que fueron visitas rutinarias para certificar que los empleados acudían a las oficinas, algunos trabajadores del sindicato aseguraron ya entonces que el personal de la consellería se autoidentificó como "inspección" y que accedió a las oficinas sin presentar ninguna orden que les acreditase ni permitirles realizar alegaciones.

El matiz es clave porque las personas que acudieron a las sedes de Unións Agrarias aquel día, el 7 de junio de 2010, no estaban legitimados para inspeccionarlas, puesto que no eran personal competente ni disponían aún de la orden que la consellería acabó firmando una semana más tarde, el 14 de junio, y en la que se basaron posteriormente los inspectores de Trabajo y de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, adscritos a la Consellería de Presidencia, para interrogar al personal de Unións Agrarias, ganaderos, agricultores y presidentes de asociaciones rurales.

La llamada "trama agraria" partió de una denuncia del PP el mismo día en que estaban citados a declarar ante el juez dos concejales de ese partido en Gondomar a quienes la policía detuvo cobrando comisiones ilegales a promotores inmobiliarios en una cafetería de Vigo. Coincidiendo con el juicio en el que uno de los ediles, el titular de Cultura, José Luis Mosquera, finalmente condenado por cohecho, admitió haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 90.000 para financiar campañas del PP y de un partido independiente afín, la cúpula del PP capitaneada por su portavoz, Rodríguez Miranda, y el secretario general, Alfonso Rueda, hicieron estallar el escándalo.

La única prueba que presentaron los populares para respaldar sus acusaciones es el testimonio de una mujer contratada por una de las sociedades vinculadas a Unións Agrarias que declaró haber hecho campaña por el PSOE de Muxía en Argentina durante 2007. De ese episodio que instruye un juez de Corcubión y que mantiene imputado al alcalde de Muxía, Félix Porto -por aquel entonces candidato y dirigente de Unións Agrarias- los populares derivaron una causa general contra el sindicato y acusaron al PSOE de financiación ilegal.

Un secretario y varios administrativos

Ni uno sola de las diez personas que la Xunta envió el 7 de mayo de 2010 a los locales de Unións Agrarias tenía la condición de inspector de la Consellería de Trabajo. Según admite en la relación de puestos de trabajo -que el Gobierno gallego mandó al juzgado cuando se le requirió que identificase al personal que acudió a las oficinas del sindicato-, en la plantilla figura una ensalada de categorías profesionales, ninguna de ellas capacitada para realizar tareas de inspección.

Las heterodoxas excursiones a las sedes de Unións Agrarias las integraron desde jefes de sección hasta una auxiliar administrativa que es personal laboral y por tanto no tiene la condición de funcionaria, así como varios técnicos laborales e incluso el secretario del subdirector general de Escolas Obradoiro de la consellería. En el mismo documento, que figura ya en la causa, el director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Trabajo, Andrés Hermida Trastoy, asume que la orden de realizar las visitas -que no inspecciones- fue suya por estar al frente del órgano que concedió las ayudas.

XUNTA DE GALICIA: UN GOBIERNO MANIATADO

La mayor caída del presupuesto en la historia de la autonomía atenaza a la Xunta, que apenas es capaz de aprobar asuntos de trámite en los consellos

Todos los periodistas que siguen regularmente la actividad de la Xunta recuerdan el *Consello de la filloa*. Se celebró el 28 de enero de 2008. Aquel día, el bipartito llevó un único asunto a su reunión semanal de Gobierno: declaró el interés turístico y cultural de la Festa da Filloa de Lestedo. No hubo más acuerdo que ese y desde entonces se convirtió en un símbolo de la falta de ideas de la coalición. Dos años más tarde, la Xunta de Feijóo, que ha sufrido el mayor desplome presupuestario de la historia de la Autonomía, vive bajo el síndrome del *Consello de la filloa*.

En su peor semana, Feijóo alegó no tener competencias para luchar contra el paro

Facenda reclamará 563 millones más al Gobierno central en los tribunales

Desde que comenzó 2011, año en que las cuentas públicas deberán reducirse en 1.177 millones de euros hasta llegar a los niveles de inversión de 2006, el Gobierno gallego, sin fondos para financiar grandes proyectos, apenas aprueba asuntos de trámite y se limita a despachar el día a día de la gestión. En lo que va de año ha celebrado cinco consellos donde ha dado luz verde a 16 decretos, 31 acuerdos y repasado 21 informes. Excepción hecha de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices do Territorio, que salvaron su último trámite el pasado jueves, ningún asunto de calado. La Consellería de Industria renueva avales a empresas, la de Presidencia firma convenios en materia de emergencias e incendios, y la de Educación cambia nombres a los centros universitarios de Vigo, igual que la de Cultura declara algún monumento bien de interés cultural.

La prueba de que la falta de fondos atenaza a la Administración gallega estuvo en el Consello de la Xunta que el presidente desplazó a Coruña el pasado 3 de febrero. A falta de obras para vender en una de las ciudades que el PP pretende gobernar tras las municipales, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, pregonó los fondos que destina en la provincia a la conservación de las carreteras: 30 millones de euros. Es, con mucho, la mayor inversión de las aprobadas en este mes y medio. La siguiente son 13 millones de euros que se destinan a urbanizar el parque industrial de Tomiño, paralizado por este mismo Gobierno al poco de llegar al poder.

Y mientras, las cifras de la Encuesta de Población Activa colocan a Galicia como la comunidad donde más ha crecido el paro en 2010, un 20,9%, a pesar de los efectos turístico y los supuestos récords del Xacobeo. El pésimo dato económico ha pillado al presidente y al PP con el pie cambiado. En medio de esa cascada de cifras negativas, los populares programaron como primera comparecencia parlamentaria tras las vacaciones, la del titular de Medio Rural, Samuel Juárez, para informar de un tratamiento contra la plaga del pino.

Enzarzado en la batalla de las cajas y en mil guerras contra el Gobierno central, Feijóo vive sus peores días desde que accedió al poder. Esta semana llegó a alegar en el Parlamento que carece de competencias para luchar contra el desempleo, en un claro signo de impotencia, mientras la oposición, igual que hizo él la legislatura pasada, le reprocha cada nuevo parado. El presidente reconoció algo más: que por mucho que reciba más fondos del Gobierno central, los desempleados serán los mismos.

Lo que no impide que se parapete tras el Ejecutivo de Zapatero al que el propio Feijóo ha convertido en el payaso de las bofetadas. Sin apenas programas que aprobar, las ruedas de prensa posteriores al Consello se convierten en un *pim pam pum* contra el Gobierno socialista, "culpable" de que la Xunta no pueda ahorrar 100 millones anuales en medicamentos, del desmoronamiento de las cajas, pero sobre todo de no transferir a Galicia 243 millones de euros del Fondo de Cooperación firmado en el último acuerdo de financiación autonómica.

Ese dinero que el Ministerio de Economía pretende transferir en 2013 sirve a Feijóo y al PP para justificar la inacción de la Xunta en cualquier asunto imaginable. Atendiendo a las explicaciones del presidente y de algunos de sus diputados durante estas últimas semanas, la llegada de esa

partida solucionaría a la vez la financiación de las universidades, el pago de las ayudas por dependencia, una mayor apuesta por las políticas activas de empleo y hasta la apertura de guarderías infantiles y residencias de ancianos.

Demasiados problemas que solucionar con solo 243 millones de euros. A esa cantidad sumó la Conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, una nueva deuda, otros 563 millones, en recaudación del IVA y otros conceptos, que la Xunta amenaza con reclamar en los tribunales.

La mano del presidente, en las notas de prensa

Que el actual Gobierno de la Xunta no es el que soñó Feijóo tras ganar las autonómicas es algo que sabe todo el partido y que ni siquiera los asesores del presidente se atreven a desmentir. En círculos financieros está corrido que Juan Ramón Quintas, ex presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, era el elegido por Feijóo para capitanear la economía gallega en medio de esta tormenta perfecta que resultó ser la crisis. Dijo que no.

Directivos de empresas importantes también desecharon otras ofertas del presidente para hacerse con una cartera en la Xunta y al final, pese a que gozó de plena libertad para configurar su gabinete, Feijóo tiene el Gobierno que puede, pero no el que le gustaría.

Cuenta entre sus personas de máxima confianza a Agustín Hernández, titular de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, la más inversora, y a Alfonso Rueda, titular de Presidencia y su alter ego en el partido, pero algunos alcaldes y cargos intermedios de la Xunta empiezan a echar en falta más peso político en otros departamentos, especialmente en el área económica.

Y así las cosas, es el propio Feijóo el que no solo coordina, también supervisa toda la labor del Gobierno, hasta el punto de que llega a revisar personalmente los comunicados de prensa que manda la Xunta a los medios de comunicación sobre sus discursos. El presidente cambia titulares e incluso dicta la redacción de las notas que se envían a los medios. Algunas fuentes señalan que ese afán por controlarlo todo, por estar en el más mínimo detalles, que siempre ha caracterizado a Feijóo, ralentiza la acción del Gobierno.

Su apretada y mediática agenda que suele requerir de su presencia en medios nacionales -al contrario de lo que hacen otros dirigentes, Feijóo no suele denegar entrevistas, por pequeño o crítico que sea con él el medio de comunicación- lastra también capacidad ejecutiva a la Xunta.

www.elpais.es 13.02.11

EL PP PROMETIÓ SIETE PLANES PARA CREAR EMPLEO EN SU PROGRAMA ELECTORAL

Ninguno de esos programas se ha puesto en marcha tras dos años de Gobierno

El primer eje en el que el PP gallego basaba su programa de campaña en las pasadas elecciones autonómicas se refería a impulsar la competitividad y la apertura de la economía gallega. Uno de los puntos para conseguirlo era el fomento del empleo a través de políticas específicas y de la actividad emprendedora. De seis planes concretos destinados a emplear a mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, parados de larga duración y autónomos, así como un plan autonómico de empleo general, ninguno se ha puesto en marcha tras casi dos años de Gobierno. Los planes, que conllevan una dotación específica para sus años de duración y engloban todas las medidas sobre un ámbito, estaban pensados para el periodo 2009-2013.

Las últimas ayudas para fomentar el empleo de jóvenes se publicaron en 2009

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba el pasado miércoles que Galicia no tenga competencias suficientes en materia de empleo para hacer frente al crecimiento del paro en la comunidad autónoma donde más creció el año pasado, un 20,9%. El programa con el que Feijóo llegó a la Xunta, sin embargo, recoge decenas de medidas en planes que aún no se han puesto en marcha. La Consellería de Trabajo explica que esos planes se están debatiendo en las mesas de diálogo social, de donde quieren que salgan con el mayor consenso posible.

Aunque no hay programa director, Trabajo asegura que ha adoptado medidas destinadas a los colectivos más vulnerables incluidas en diversas líneas de ayuda de la Consellería. Las acciones específicas para jóvenes -hay 22.000 parados menores de 25 años- desaparecieron de las convocatorias de ayudas y subvenciones durante el año pasado y las últimas puestas en marcha son de comienzos de 2009. Las actuaciones de empleo y formación para jóvenes desempleados se centran en escuelas taller y talleres de empleo. Trabajo asegura que también el plan estratégico de juventud incluye medidas de fomento de empleo. Las mujeres no tienen tampoco nuevas medidas específicas a su alcance, aunque desde Trabajo insisten en que recibe un trato diferenciado en todas las ayudas de la Consellería a este colectivo, como los incentivos a las empresas por contratos indefinidos de trabajadoras. Están en marcha varias medidas como el programa Executiva, que pretende impulsar el liderazgo de las mujeres a través de su formación en escuelas de negocio, y los incentivos a las pequeñas y medianas empresas para que ejecuten planes de igualdad. El colectivo de los inmigrantes no dispone de subvenciones para su integración laboral, mientras que los parados de larga duración cuentan con ayudas para la contratación indefinida a mayores de 45 años.

Otros ámbitos, como el de los autónomos, sí que disponen de una o dos líneas de ayuda como la financiación de proyectos que promocionan este tipo de empleo o el que ayuda a sufragar los gastos de sus entidades asociativas. Para potenciar el empleo de personas con discapacidad existen incentivos para financiar los costes laborales y de la Seguridad Social de estos trabajadores y para la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo.

www.elpais.es 12.02.11

EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA

Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe

Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando quedaban cinco días para las elecciones.

Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos

Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como candidatos.

No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia.

La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis

Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tráfugas en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y callar.

Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.

Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lo ha premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio municipio.

La regeneración que obvia Feijóo

- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.
- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con testaferros de narcotraficantes.
- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en el juzgado por prevaricación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.
- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.
- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con tráfugas en Mos y Silleda con la aquiescencia de dirección regional.

www.elpais.es 08.02.11

GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS

El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se desploma - Las ventas al exterior pierden fuelle

A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España temblaba de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los jóvenes gallegos interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas vacaciones pagadas. Ahora, con 21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 237.313 parados con que acabó 2010 son 14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. Galicia es la cuarta comunidad que más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas corren un 25% más rápido que la media

española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos del tercer trimestre de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%.

La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas

"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago

Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia

El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística

La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción industrial cae entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español avanza en positivo un 2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran que la bolsa de pisos nuevos sin vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323 unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los promotores. Los precios del metro cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el resto del país bajaban (aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir las pérdidas mientras la banca les siga refinanciando.

¿Significa que se acaba aquel *plus de resistencia* del que presumía el anterior gobierno bipartito de la Xunta, o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción industrial y el empleo caen fuertemente. Una vez descontado el menor *shock* inicial de una burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan solo queda como factor diferencial la obra pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la máquina que tira del mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval, construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones son el único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a diferencia de España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más que las importaciones, en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido más las importaciones y en consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas de la Fundación Barrié.

El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del conjunto del Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado, esa diferencia, positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese *plus* se recortará aún más, según las propias previsiones de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos ante una crisis de ámbito mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las consecuencias", concluye el catedrático de economía financiera de la Universidad de Santiago José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro y el superávit de la balanza comercial. "No debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario corregir y que solo tienen solución a muy largo plazo".

El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los peregrinos), hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en pernoctaciones cuando solo falta por contabilizar el mes de diciembre).

"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el economista Manuel Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el verdadero debate es nuestro sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema menor", añade. No es de la misma opinión Luis Caramés, catedrático de la Universidad de Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con cifras millonarias de visitantes. Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de España. Si la industria levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo mismo, todavía sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial dentro de España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos bruscas.

Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de financiación autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para reducir el déficit de las autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de medicamentos) y la Ley de Dependencia. Ciertamente que Galicia es una de las pocas regiones disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su deuda alcanza ya el 10,6% del PIB, por encima de la media.

"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en industria, economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente económico del país, por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la evolución económica mejor o peor recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona Manuel Lago.

El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron despedidos. Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe de CC OO, las empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis de cada diez rupturas de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter improcedente del acto y depositar la indemnización.

En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que dio lugar a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de dinamización. Pero Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de problemas, como despedir a 1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido prestado al Frob y pelear para seguir siendo una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en su último informe, la caja gallega necesita recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil que, en estas condiciones, financie además la recuperación económica de sectores clave para Galicia.

www.elpais.es 23.01.11

PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE DURANTE 10 DÍAS

Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones sobre el comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los problemas de Galicia" durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente de la Xunta a estar de vacaciones, pero advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin presidente durante 10 días".

"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el *Diario Oficial de Galicia* haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde cualquier parte del planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que pasó sus vacaciones en Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a otro conselleiro, la presidencia de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del Gobierno de mayor edad.

Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas vacaciones del entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por sentado que se las paga él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos" que en momentos complicados, a causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa dónde está el presidente". "Si Zapatero se va el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual, yo creo que cae el país", opinó.

Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así, subrayó que, mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o falso directo" en el que aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con desánimo por el desempleo y en el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto, bromeó con que esa responsabilidad se debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál

"compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló en su mensaje navideño con las vacaciones que le esperaban.

El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a socialistas y nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la Xunta ni la delegación de competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no solo con su Gobierno, sino también con el de España". Como prueba de esto último, cita las conversaciones que mantuvo por teléfono con las ministras de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5.

www.elpais.es 11.01.11

LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD

La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo

Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733 procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el *Diario Oficial de Galicia* (DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.

Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes

La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de igualdad.

Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542 euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que supera los 300 millones.

Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca. También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.

En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000 euros cada contrato).

www.elpais.es 06.12.10

GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS

Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros, pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001 y el segundo catorce meses más tarde.

Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago, Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).

Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el mismo precio, 31.000 euros.

El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas, 4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes Fraga en medio de sus maratónicas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip".

El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar: también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio que explice las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial.

En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en algún garaje de Santiago.

(www.elpais.com, 31/10/10)

"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"

La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el pasado miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".

El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de

recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. Ayer, el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.

- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.

- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable.

- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.

- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.

- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.

- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten apartar el asunto.

- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica.

- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores.

(www.publico.es, 15/10/10)

GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES DE LA XUNTA

De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la Administración autonómica.

La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de confianza

y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos, sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales, directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra profesión por cuenta propia o ajena.

A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección, representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La reforma legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de pensiones de jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos públicos. Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, asesores y personal de confianza perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho interviene empresas o sociedades en las que han participado ellos o sus familiares. También podrán poseer la titularidad de participaciones sin límite en empresas con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, autonómico o local.

La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.

Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre otros entes.

La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función Pública que recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio.

(www.elpais.com, 13/10/10)

FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE

El viceportavoz del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, denunció ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "con su falsa austeridad fuerza la ley de presupuestos" para designar "más de 200 nuevos cargos políticos" y premiar a los funcionarios por su "obediencia partidaria" y no por "su capacidad".

Así lo manifestó el PSOE en un comunicado, en el que además apuntaba que "el consellerio de Presidencia, Alfonso Rueda, y Feijóo renuncian a la reforma" de la Función Pública prometida y "cuelan por la puerta de atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios.

El portavoz de Presidencia del PSdeG consideró que las políticas de Feijóo "huyen de la austeridad" y, además, "evitan una reforma en profundidad" de la administración pública. Ante estas cuestiones, el PSdeG animó a los sindicatos de la función pública "a revelarse" contra la discrecionalidad de la que "quiere hacer uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos o malos", en función de sus preferencias políticas.

(www.publico.es, 13/10/10)

"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"

La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".

El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.

- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.

- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable.

- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.

- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.

- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.

- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten apartar el asunto.

- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica.

- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores.

(www.publico.es, 15/10/10)

FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS

Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en paraísos fiscales.

El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefa de control presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que hacer", sentenció entonces Feijóo.

De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración, suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.

De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra de duda, antes incluso de que intervinieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un restaurante familiar)

Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".

El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó 156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.

En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.

El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón, José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.

(www.elpais.com, 05/07/10)

LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER

- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por certificar obras en falso.
- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada por despido improcedente.
- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000 euros a Gürtel por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal, delegado de urbanismo, tiene un chalé ilegal.
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal que ve prevaricación en el permiso de una piscifactoría.
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.

(www.elpais.com, 05/07/10)

FEIJÓO GASTA AHORA MEDIO MILLÓN DE EUROS SÓLO EN MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA DEL GAIÁS

El presidente gallego, el *popular* Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Zapatero de "actuar como un nuevo rico en épocas de vacas flacas", ha anunciado que va a gastar más de medio millón de euros en dotar de mobiliario la biblioteca del Gaiás, la Ciudad de la Cultura, que se construye a las afueras de Santiago de Compostela.

- La oposición acusa a Feijóo de viajes partidarios con fondos públicos
- Feijóo sigue apretándose el cinturón a su manera gastando otros 1,6 millones de euros para...
- Feijóo adjudica a dedo a su amigo Piqué un contrato multimillonario para que gestione tres...

Unos 88 millones de las antiguas pesetas destinado a la adquisición, entre otros muebles, de sillas de diseño por valor de 509 euros cada una y butacas para el auditorio por unos 800 euros la unidad. Un arrebató de despilfarro que, sin embargo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, se ha apresurado a justificar afirmando que "no contradice la política de austeridad de la Xunta".

Sillas de 509 euros

Feijóo, que ha reiterado sus mensajes de austeridad, después que basara su campaña política para llegar a la presidencia de Galicia en una fuerte *cruzada* contra el supuesto despilfarro de su antecesor Emilio Pérez Touriño, ha decidido anunciar cuatro licitaciones que suman exactamente 533.610 euros (lo que equivale a 88,8 millones de pesetas). La primera de ellas, con un presupuesto de 191.600 euros, está destinada a la adquisición de 376 sillas, que tendrán un coste, de media, de 509,10 euros cada una. En el pliego destaca la oferta para comprar 188 sillas destinadas a los visitantes y que son del tipo Bertoia, apellido del célebre artista y diseñador italiano que hizo el modelo Diamond de varilla soldada en la década de los años cincuenta. El precio de mercado de cada una oscila entre los 200 y los 400 euros, según *La Voz de Galicia*.

Butacas de 800 euros

El segundo pliego, con un presupuesto asignado de 94.600, está destinado a la compra de muebles fijos -mesas para puestos de trabajo. El tercero es una partida de 150.610 euros para mobiliario auxiliar (escritorios, cajoneras, archivos y mesas de reuniones). Y la cuarta licitación, que cuenta con 96.800 euros, es para dotar con 121 butacas el auditorio de la biblioteca. Cada unidad costaría unos 800 euros.

La austeridad de Feijóo

Hace unos días, siguiendo con su mensaje de austeridad, Feijóo anunció su decisión de rebajar el sueldo a los funcionarios y altos cargos, una medida que ahorrará unos 60 millones de euros. Sin embargo, la Xunta mantiene su intención de gastarse 40 millones de euros en la obra más cara que tiene en marcha Galicia, la Ciudad de la Cultura, que se construye en el monte Gaiás.

Los gastos de la Ciudad de la Cultura

El Gaiás, que será abierto en noviembre próximo, generará anualmente unos gastos fijos de 890.000 euros en concepto de consumos de energía y agua, vigilancia, limpieza y tareas de mantenimiento. El cálculo no incluye otros desembolsos corrientes, como, por ejemplo, los de suministros de material de oficina, los de primas de seguros, comunicaciones, ni, sobre todo, los de plantilla, según destaca la prensa gallega.

www.elplural.com 13.06.10

FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO

En medio de las acusaciones de la oposición por los gastos de los viajes de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta ha llamado la atención al departamento de Cultura por gastarse más de 14.000 euros en los pasajes del conselleiro, su jefa de gabinete y el director del Xacobeo de dos acompañantes para ir a la Expo de Shanghai (China). Feijóo admitió ayer que el coste de los billetes "pudo ser excesivo", por lo que instó a los departamentos de su Gobierno a vigilar las agencias con las que contratan y la anterioridad con la que cierran sus viajes, informa Europa Press.

Sin embargo, el presidente de la Xunta se negó a aceptar "lecciones de austeridad" por parte del PSdeG. Así, mostró su sorpresa por que los socialistas hagan ese tipo de denuncias cuando el actual Gobierno ahorró "un 90%" de los 3,5 millones de euros de presupuesto inicial previsto por el bipartito para la presencia gallega en China.

Cultura acostumbra a hacer en clase preferente todos los viajes de más de seis horas para llegar al destino "con unas pocas fuerzas". El responsable de la consellería, Roberto Varela, aseguró que en su departamento está así regulado para "viajar en unas mínimas condiciones que puedan garantizar la realización" de su trabajo, que calificó de "muy duro". Así, explicó que tuvo un acto en Shanghai a las nueve y media de la mañana tras doce horas de viaje. "Si cuento con la confianza de mi presidente tengo pensado seguir haciéndolo", sentenció.

El Gobierno deberá dar explicaciones también por estos viajes en el Parlamento. Los socialistas presentarán una moción para regular los viajes institucionales, mientras que el BNG defenderá otra iniciativa sobre la "hiperactividad viajera" de Feijóo. Además, "la confusión entre lo institucional y lo partidario", dicen, les está costando dinero público a los gallegos. El portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, criticó las frecuentes ausencias de Galicia del presidente de la Xunta y se preguntó: "¿Estamos pagándole los viajes y gastos para que haga campaña por España?", se preguntó. El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, acusó a Feijóo de "estar de bolos por España". "Tiene una pierna aquí y otra en Madrid".

Para el PP, estas críticas se deben a que la oposición "está rabiosa porque Feijóo, como Fraga, fueron admirados y queridos en el Estado español".

(www.elpais.com, 02/06/10)

LA OPOSICIÓN ACUSA A FEIJÓO DE VIAJES PARTIDARIOS CON FONDOS PÚBLICOS

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y BNG han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar "de bolos" en viajes institucionales por toda España que, según la oposición, tienen carácter partidario, pese a que son pagados con fondos públicos.

Tras la junta de portavoces, sin embargo, el popular Manuel Ruiz Rivas dijo de socialistas y nacionalistas que, en realidad, lo que les contraría es el "afecto y admiración" hacia la figura del presidente de la Xunta en el resto de España, mientras que señaló que el anterior Ejecutivo sí que era un ejemplo de "despilfarro" en sus viajes.

Cuestiones

El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, anunció tras la reunión de la Junta de Portavoces que su grupo llevará al próximo pleno una interpelación sobre los viajes de miembros de la Xunta, en los que, a su juicio, se mezcla lo institucional y lo partidario.

Venezuela

A este respecto, recordó el viaje del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, a Venezuela, que coincidió con el congreso del PP en aquel país y con la entrega por la Xunta de un cheque al presidente de los populares venezolanos, como miembro de una fundación de emigrantes.

Shangai

Este viaje, dijo Leiceaga, "le está costando dinero al conjunto de los gallegos", y citó también el desplazamiento a Shangai del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y su equipo, que costó más de quince mil euros, en un momento en que "todos deberíamos apretarnos el cinturón".

De bolos por España

Se refirió también a que el presidente de la Xunta "está de bolos por toda España, publicitando su figura". Núñez Feijóo, subrayó, "tiene una pierna aquí y otra en Madrid, por si acaso suena la flauta por casualidad y tiene que desempeñar alguna función" en el PP nacional, lo que "nos está costando demasiados recursos a los gallegos".

Hiperactividad viajera

Por su parte, el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, lamentó la "hiperactividad viajera" del presidente e indicó que estaría bien que el Gobierno gallego ofrezca explicaciones sobre ella. "Como mínimo, dos días a la semana", el presidente no está en Galicia, manifestó el dirigente del BNG, que lamentó que ayer Núñez Feijóo estuviese en Andalucía "compareciendo con Arenas", presidente del PP andaluz.

En campaña

A este respecto, se preguntó si los gallegos "le estamos pagando el salario, gastos y viajes al señor Feijóo para que haga una campaña partidaria por España adelante".

Explicación del PP

El portavoz popular Manuel Ruiz Rivas replicó a la oposición al asegurar que socialistas y nacionalistas están "dolientes" por que el presidente gallego sea una figura "admirada y querida en todo el territorio español. El PSOE y el BNG, manifestó, tuvieron "bastante tiempo" para regular los viajes institucionales cuando estuvieron en el Gobierno, y así habrían "evitado muchos gastos y cuartos a los ciudadanos" y citó visitas a La Habana del anterior Ejecutivo, que a su juicio no generaron "absolutamente nada positivo".

Contra el PSOE y el BNG

"Ahora dan muchas ideas que bien pudieron plasmar en la práctica cuando dieron ejemplo de todo lo contrario" a la austeridad, señaló el portavoz del PP, que indicó que el PSOE y el BNG han sido "ejemplo de despilfarro", mientras el actual Ejecutivo reduce los gastos institucionales.

(www.elplural.com, 02/06/10)

EL PSDEG DENUNCIA CONTRATOS CON "AMIGOS DEL PP"

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, denunció ayer que la Xunta adjudicó 19,6 millones de euros a empresas de "familiares, compañeros de partido y amigos del alma". García citó las adjudicaciones a una empresa de la que es directiva la sobrina del ex ministro José Manuel Romay Beccaría, a la que se concedieron contratos por valor de cuatro millones de euros, "algunos sin publicidad".

En la lista está Tecnomia, que preside el ex conselleiro Carlos del Álamo, que "de momento" obtuvo 1,6 millones. Carat-España, que hasta 2006 fue presidida por el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez, recibió siete millones de euros para el Plan de Medios del Xacobeo. Vueling, dirigida por el ex líder del PP catalán Josep Piqué, percibió siete millones, según el PSdeG, sin concurso. Hizo "mención aparte" el gasto de siete millones en más de 400 coches "del mismo concesionario", "casualmente, del que regaló a Feijóo un coche". También se refirió a la adjudicación de 120.000 euros a una fundación que lidera el presidente del PP en Venezuela.

www.elpais.es 22.05.10

GALICIA EMULA A VALENCIA Y HARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO ENTRE JÓVENES

La Xunta de Galicia promoverá campañas de sensibilización para a la protección del "derecho a la vida en formación", según recoge específicamente el anteproyecto de ley de apoyo a la familia que presentó el lunes. Se trata de una terminología habitual entre los colectivos antiabortistas y calcada de la ley valenciana de protección de la maternidad de 2009, abiertamente contraria a la interrupción del embarazo.

La ley introduce medidas de apoyo a los mayores y de reeducación de menores que delincan, pero cuando habla de la maternidad copia preceptos de la ley valenciana, como el "derecho de los hijos a desarrollarse en un entorno familiar alternativo al biológico, cuando este no sea propicio". También prescribe "campañas informativas" para niños y promueve la acogida y la adopción "como alternativa para que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo". Fuentes de la consejería descartan que la ley sea antiabortista y avisan de que su tramitación aún se encuentra en una etapa inicial.

www.elpais.es 22.05.10

LAS PROMESAS EN EL AIRE DE FEIJÓO

Las propuestas electorales que le auparon a la Xunta de Galicia no se han cumplido en sus 12 meses de mandato

La estampa que inauguró la nueva era en la Xunta de Galicia no pudo ser más elocuente: 10 lustrosos Citroën aguardaron en la Plaza del Obradoiro de Santiago a que otros tantos *conselleiros* regresasen de su toma de posesión. La primera pregunta que tuvo que responder el 2 de marzo el presidente *in pectore* en la resaca de su victoria electoral fue sobre la venta del Audi A8 blindado de su predecesor, objeto de una larga polémica durante la campaña electoral. Dos anécdotas que explican el tono de la campaña que devolvió al PP al Gobierno gallego. Sin ese doble discurso, el de la crisis y el lujo del saliente bipartito, presidido por el PSOE, no se entendería este primer año de legislatura.

Nada más aterrizar en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo rebajó un 25% el número de consejerías y laminó a 45 de los 52 delegados provinciales, para cuadrar su anunciada reducción del 70% de altos cargos. De ese "plan de austeridad", que dejó envejecer docenas de *audís* en el garaje de la

Xunta mientras se siguen pagando sus seguros, vivió el nuevo presidente durante sus primeros meses.

Hasta que llegó el momento de cuadrar los Presupuestos para 2010. En sus primeras cuentas, el compromiso estrella del PP para bajar el IRPF, dormita en el cajón a la espera de tiempos mejores. El propio Feijóo admite que no será posible acometer la cacareada rebaja, que ya ha pospuesto hasta el final de la legislatura. A cambio, la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, sí ha cumplido con el propósito de recortar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con mucho menor impacto en los bolsillos de los contribuyentes.

Y, mientras, la cola del paro se alarga en Galicia. Si el programa del PP lamentaba el número de desempleados, 189.903 en enero de 2009, esa cifra ahora ha engordado en 41.725 personas más. El Presupuesto de 2010 también ha dejado al aire otras costuras de la nueva Xunta: si hace un año el PP censuraba que la partida para Universidades sólo crecía un 4%, en los nuevos números cae un 2,39%.

Otro gran argumento de la campaña, el del uso del gallego en la enseñanza, sigue rigiéndose por el tan criticado decreto del anterior Gobierno de Emilio Pérez Touriño, después de que Educación presentase unas bases que el único consenso que lograron fue el del rechazo, con una multitudinaria manifestación y protestas generalizadas entre la comunidad educativa y los padres. Feijóo augura que la futura norma (que según varias fuentes está ya muy avanzada) entrará en vigor el próximo curso, mientras busca fórmulas para conciliar la libertad que prometía en sus mítines, y el equilibrio entre gallego y castellano que consagraba su "contrato con los ciudadanos".

Pero los principales desvelos del presidente de la Xunta en su arranque de mandato, sobre todo en los últimos meses, están en su proyecto de fusionar las dos cajas gallegas. Una de ellas, Caixanova, se opone. La ley de cajas, aprobada por trámite de urgencia, permitiría renovar su órgano directivo y desbloquear la unión, pero el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional ha frustrado la hoja de ruta de Feijóo.

www.elpais.es 28.02.10

FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA"

El presidente de la Xunta se insinúa a una joven actriz durante una cena con jóvenes simpatizantes del PP gallego



""Si os calláis, sigo hablando". La voz del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacerse eco entre la algarabía de un restaurante cercano a Santiago. Allí se han congregado jóvenes simpatizantes del Partido Popular de Boqueixón, Vedra, Arzúa, Melide y demás ayuntamientos limítrofes, aunque en la cita también están presentes miembros de Novas Xeracións (la franquicia gallega de las juventudes del PP) y cargos políticos venidos de otros rincones de la región.

El ambiente es festivo y algunos asistentes lo interrumpen con comentarios jocosos. "Calla la boca, que está emocionado, joder". El líder conservador cierra la Noche Solidaria con Haití, organizada por varias asociaciones juveniles el pasado 5 de marzo en un local de Montouto (Teo), justo antes de dar paso a la actuación de una orquesta. En el programa no se menciona al partido, pero sí constan las intervenciones del director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro Tato, y del propio presidente.

El discurso comienza de modo formal. "Os agradezco mucho que os sintáis orgullosos de participar en los intereses generales de Galicia", arranca Feijóo. Luego, critica a las juventudes del PSOE y del BNG, ensalza las virtudes de los suyos y suelta la primera machada: "Voy a ser breve porque he quedado con María Mera a partir de la una en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar". Un joven suelta: "Un sinvergüenza. Es un payaso".

De la pasarela del centro comercial a la TVG

La joven a la que se refiere Feijóo, presente en el comedor, es María Mera, una actriz nacida en 1986 en Boqueixón y natural de Vedra. Cuando tenía 16 años, ganó un concurso de belleza organizado por un centro comercial santiagués y, desde entonces, ha participado en programas y series de la TVG como Acompáñenos o Matalobos. El comentario, en el que insistiría más tarde, ha sido calificado de "machista" por la oposición política.

El BNG local ha censurado "el trato negligente con la chica, a quien trata como un objeto sexual", así como su "actitud machista, ya que delante de unos jóvenes Feijóo vende el rol de estar por encima de ellos, que tienen que plegarse a sus deseos". Fuentes nacionalistas también aseguran que, además, proyecta a los jóvenes "una imagen muy negativa" y "fomenta ir de fiesta hasta las seis de la madrugada", como se puede ver en las imágenes. Una "fiesta de verdad".

El PP resta importancia a la "anécdota"

Fuentes del Partido Popular de Galicia han informado de que Feijóo tenía un compromiso al día siguiente, por lo que debía ausentarse del acto. Sin embargo, la excusa del presidente ha levantado sarpullidos en el BNG de Boqueixón, que no se explica como "se puede hablar de la generación ni-ni y, a la vez, plantear que se empalmen las copas con el desayuno", como propone Feijóo. "Y de aquí hasta que se organice la fiesta", prosigue el líder conservador en el vídeo, "yo voy a seguir hablando con María Mera para ver si tengo alguna posibilidad". Fin del discurso. "Muchas gracias".

"De momento me dijo que no, pero voy a seguir hablando con ella para ver si tengo alguna posibilidad", aventuró Feijóo

Una mera "anécdota", según el partido. "En un acto informal, sin corsés ni discursos preparados, Feijóo comenta que no le parece pertinente insultar a ningún partido, no hace apología del PP y habla de libertad lingüística", subrayan fuentes conservadoras. La grabación también muestra a un Feijóo convencido de que, si en vez de jóvenes populares los invitados fuesen socialistas, "casi todos estarían empleados en algún chollo [trabajo] de algún Ministerio" y, si se tratase de nacionalistas, "sólo se podrían dirigir en un idioma, sólo se podría hablar una cosa y estarían toda la noche hablando mal del PP".

Respecto a la referencia a la actriz, las mismas fuentes —que no han confirmado si es militante de la formación conservadora— le restan importancia. "María, lejos de sentirse ofendida, se lo tomó a broma", aseguran tras hablar con ella. "Y le sorprende que se haya dramatizado de esa forma".

www.publico.es 25.03.10

FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.

Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.

Una estrecha amistad

Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.

Piqué, el abridor de Vueling

Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.

Los 4,5 millones

La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.

Ryanair, el trato oscuro

De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.

Violación de la normativa europea

Fuentes del sector han transmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.

Las Aerolíneas históricas en Galicia

Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que han transmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling.

¿Concurso amañado?

En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su conselleiro de Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana.

PSdeG: “Dudosa” adjudicación

También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar “al señor Piqué”, de “promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.

El Delfín y el vuelo a Gürtel

Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.

(www.elplural.com, 27/01/10)

FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES

La austeridad de Alberto Núñez Feijóo no da para más. La Xunta que preside se ha gastado en nueve meses 6,3 millones de euros en la adquisición de 347 coches, varios de ellos de alta gama, mediante leasing (alquiler con derecho de compra) o renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos), según el diputado socialista Xosé Manuel Lage. La lista confeccionada por el parlamentario del PSdeG incluye vehículos para el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Medio Rural.

Xosé Manuel Lage, que pedirá explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, centró sus críticas en la adquisición de varios vehículos de alta gama para altos cargos cuando la Xunta sigue teniendo en sus cocheras 17 Audis parados desde que Feijóo llegó a la presidencia. Entre ellos, citó un todoterreno “de gran cilindrada” y dos berlinas de alta gama para Sogama, una sociedad participada por la Xunta que se dedica a gestionar los residuos de los ayuntamientos. Para uno de los coches, la convocatoria exigió 240 caballos de potencia y tapicería de piel.

Otras dos entidades dependientes del Gobierno han adquirido vehículos de lujo, según el PSOE. Se trata de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y de Portos de Galicia. El coche contratado por esta última, que es el que ahora utiliza la conselleira de Mar, fue adquirido además mediante procedimiento negociado y sin publicidad.

Lage aseguró que estos gastos ponen de manifiesto la “doble moral” de la Xunta. “Por un lado, compran berlinas de clase superior con tapicería de cuero y, por otro, tienen guardados 17 coches de alta gama sin utilizar”, dijo.

La Xunta, a través de un comunicado, aseguró que se ha limitado a renovar el renting y leasing de los vehículos usados durante la legislatura anterior y confirmó su intención de adquirir nueve coches para altos cargos a lo largo de los próximos tres años.

Feijóo hizo del supuesto gasto del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en coches de lujo el eje principal de la campaña electoral que le dio la victoria el año pasado por un margen de apenas 50.000 votos. Lo hizo a pesar de que, como se supo después, de los 32 Audi que integraban entonces el parque móvil de la Xunta, 29 habían sido adquiridos por el PP durante la época de Fraga (19 de ellos específicamente cuando el propio Feijóo era vicepresidente).

El hoy jefe del Ejecutivo gallego insistió en deshacerse de ellos, pero la subasta que convocó en octubre sólo logró enajenar tres de los 20 vehículos sometidos a puja. Los otros 17 permanecen cubiertos de polvo en dependencias oficiales de la Xunta. Previamente, Feijóo se había desprendido de tres Audi A8 blindados (uno comprado por Touriño y dos por Fraga) a cambio de 12 vehículos que, según su Gobierno, se dedican a prestar servicios sociales.

El Gobierno de Feijóo ha hecho bandera de la transparencia, pero ayer la Consellería de Facenda no quiso confirmar ni desmentir si el informe que encargó a la empresa KPMG para respaldar su propuesta de fusión de las cajas de ahorros de Galicia ha costado un millón de euros. Fuentes de Facenda aseguraron a 'Público' que el informe, que se realizó en tres semanas y que la Xunta presentó el 20 de enero, no está concluido y que su precio se corresponde al trabajo de "35 profesionales que realizaron una labor compleja con premura y en una fecha complicada" (durante la Navidad). El millón de euros, cifra citada ayer por Cotizalia.com, corresponde, según la Xunta, a una estimación que se niega a confirmar. La auditoría, insiste, comprende varias fases y aún no está acabada, informa Mariola Moreno.

(www.publico.es, 28/01/10)

FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.

Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.

Una estrecha amistad

Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.

Piqué, el abridor de Vueling

Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.

Los 4,5 millones

La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.

Ryanair, el trato oscuro

De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.

Violación de la normativa europea

Fuentes del sector han transmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.

Las Aerolíneas históricas en Galicia

Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que han transmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling.

¿Concurso amañado?

En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratos, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana.

PSdeG: “Dudosa” adjudicación

También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar “al señor Piqué”, de “promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.

El Delfín y el vuelo a Gürtel

Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.

(www.elplural.com, 27/01/10)

PROTESTA HISTÓRICA CONTRA EL RECORTE DEL GALLEGO

Había muchos estudiantes. Eran los más ruidosos, pero también abundaban profesores, sindicalistas, políticos, intelectuales, artistas o trabajadores que se escaparon de sus puestos

para protestar por la política lingüística de la Xunta. Llenaron ayer la Praza do Obradoiro -donde caben unas 25.000 personas- y muchos quedaron fuera marchando por las calles del casco viejo de Santiago. La Policía Local de la ciudad cifra en 30.000 personas las asistentes a la manifestación contra las bases del decreto del gallego que reducirá las horas de este idioma en la enseñanza. Los convocantes elevan la cifra a 50.000. Los datos son difíciles de concretar porque, durante toda la mañana, no dejaron de llegar manifestantes desde la Alameda, el punto de partida, incluso cuando ya había concluido la protesta y muchas personas regresaban a los autobuses para volver a los diferentes puntos de Galicia.

Tampoco hay coincidencia sobre el porcentaje de profesores que secundó la huelga que había convocada ayer en la enseñanza pública por las mismas razones. La Consellería de Educación asegura que no llegó la mitad de los docentes, mientras que las entidades sindicales convocantes elevan la cantidad a casi el 90% de los profesores y alumnos. Educación argumenta que "las clases transcurrieron como en un día normal" porque "la mayoría de los profesores entendieron la falta de argumentos de los convocantes", mientras los sindicatos valoran que la jornada de paro fue un "éxito que dejó las aulas de toda Galicia vacías".

Fuera de ellas, la manifestación estuvo nutrida por numerosos políticos. Acudieron los dos principales líderes de la oposición, el socialista Manuel Vázquez y el nacionalista Guillermo Vázquez, y destacados miembros del anterior Gobierno bipartito de la Xunta como el ex vicepresidente Anxo Quintana y la ex conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, autora del decreto que pretende derogar la Xunta. Pero los nacionalistas tomaron el protagonismo de la marcha. Desde los sindicatos, la CIG y STEG, que anduvieron siempre al frente, hasta los políticos: el líder del BNG fue el único que se colocó en la cabecera de la marcha. Tanto los sindicatos UGT y CC OO como el PSdeG se quedaron en una posición más retrasada y no habían llegado a la Praza do Obradoiro cuando la protesta estaba concluyendo.

La marcha transcurrió sin apenas incidentes. El PP difundió una foto de unos manifestantes quemando una bandera española y otros vertieron pintura roja en escaparates comerciales. Pero, en general, el ambiente fue festivo, con chascarrillos sobre la propuesta de trilingüismo de la Xunta. Se oyó cantar A Rianxeira en inglés: "The virgin of Guadalupe, when goes down the river..." y había decenas de carteles con lemas parecidos a este: We love very moito o galego. Los gritos más coreados, sin embargo, fueron otros: "Nas aulas de Galiza queremos galego"; "pola nosa lingua ni un paso atrás"; "aquí está, aquí se ve a mocidade galega en pé"; "este decreto, ímolo parar".

Desde el escenario montado en la plaza, los convocantes pidieron que Educación destine a Haití el dinero que les descuenten a los profesores por la huelga de ayer. Además, docentes, estudiantes y padres leyeron razones por las que se oponen al decreto de la Xunta: "Porque no garantiza que los jóvenes terminen sus estudios dominando el idioma propio"; "porque es una propuesta a espaldas de la realidad, sin consenso y presentada con nocturnidad"; "porque creará enfrentamientos entre los centros y traslada un problema a los profesores y a los padres". En una de estas alegaciones alguien gritó otra consigna: "Esta norma, nunca máis". Y toda la plaza coreó el grito.

En ese mismo escenario, Fran Rei, presidente de la plataforma Queremos Galego, convocante de la protesta, pidió al Gobierno que se "vaya a casa" si no sabe "escuchar ni hablar". Carlos Callón, de la Mesa pola Normalización Lingüística, se preguntó: "¿En qué lugar del mundo se aprueba una norma en contra de todo el mundo?". El portavoz del sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega (CIG), Anxo Louzao consideró un "hito" el apoyo de la ciudadanía a la movilización, que demuestra la "repulsa a unas bases que pretenden erradicar el gallego en la enseñanza". El objetivo para los convocantes no es el cambio de las bases que presentó la Xunta, sino su retirada y replanteamiento "sin un paso atrás sobre lo ya conseguido". De no ser así, piden a los profesores que enseñaban en gallego que lo sigan haciendo en el futuro.

(www.elpais.com, 22/01/10)

PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES

A la Xunta del PP le está costando más de lo previsto gestionar el parque móvil de la Administración autonómica, del que tanto rédito electoral obtuvo. Amortizadas las críticas al despilfarro del bipartito, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lidia ahora con unas

promesas electorales difíciles de cumplir, como la venta de los automóviles que usaban los anteriores conselleiros y altos cargos. En medio de esa fiebre contra la marca Audi, Rueda anunció ayer la compra por la Xunta de 67 vehículos, nueve de ellos para los miembros del Gobierno, en la que se entregarán a cambio como parte del pago 82 coches de titularidad autonómica.

La adquisición de los nuevos coches se realizará a lo largo de esta legislatura por el sistema de leasing, es decir, de alquiler con opción de compra. Para ello, la Xunta convocará un concurso en cuyo precio integrará 82 coches que no utiliza. En ese lote van incluidos los 17 audis que Presidencia sacó a subasta y que no logró vender. Para justificar la operación, Alfonso Rueda apeló al "alto coste de mantenimiento" de los vehículos que permanecen inactivos en los garajes de la Xunta.

No será el primer negocio dudoso al que se ve abocada la Xunta en su gestión del parque móvil. La Administración autonómica perdió más de 200.000 euros con la venta del coche blindado en el que viajaba el ex presidente Touriño, traspasado con dos años y 157.305 kilómetros. En el mismo lote se vendieron otros dos blindados, ambos comprados por la Xunta de Fraga. En conjunto, costaron 1,1 millones de euros. Salieron al mercado por 330.650 euros. Se los llevó un proveedor habitual del Gobierno gallego. A cambio, el concesionario entregó nueve furgonetas Citroën Berlingo adaptadas para minusválidos y tres monovolúmenes C4 Picasso, que ayer presentó Rueda.

Además de anunciar la compra de los 67 nuevos coches, que se integrarán en un parque móvil que cuenta ahora con 366 unidades, en la presentación el conselleiro tuvo que explicar la compra para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, de un Citroën C5 a través del ente Portos de Galicia. Rueda recordó que Portos forma parte de Mar y negó haber recurrido a "subterfugios" para ocultar la adquisición, que atribuyó a "motivos de seguridad". "Para que los diez miembros del Gobierno tengan un coche adecuado", añadió.

(www.elpais.com, 14/01/10)

EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS POR FRAGA

Alberto Núñez Feijóo continúa inmerso en su campaña de marketing, queriendo huir de todo lo que huele a lujo, por eso de las apariencias. El presidente gallego está queriendo deshacerse de 20 coches de gama alta, en estos momentos en posesión de la Xunta, pero hasta ahora sólo ha conseguido subastar tres vehículos, con los que ha recaudado apenas 28.870 euros.

Feijóo anda ansioso por perder de vista el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que le valió de bastión en su campaña electoral presentándolo como un símbolo de despilfarro. Claro que entonces ocultó que su compañero de partido, Manuel Fraga, adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados como el de Touriño y que él mismo, en su época de vicepresidente utilizó un A8.

La subasta de Feijóo

La subasta organizada por el presidente gallego tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, donde un particular adquirió por el valor tasado de 9.830 euros uno de los coches. Otro se hizo con otros dos por 9.140 y 9.990 euros. Los dos primeros turismos son modelos A8 de la marca Audi, con más de 200.000 kilómetros y fecha de matriculación del año 2001 y 2000. El tercero es un Audi A6 de 2001 con casi 300.000 kilómetros.

Un blindado para Feijóo

Toda esta campaña montada por Feijóo parece un poco precipitada, teniendo en cuenta que el mes pasado el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, confirmó que todavía no se había conseguido vender los automóviles, pero pidió responsabilidad para abordar cuestiones "relacionadas con la seguridad" del presidente, con lo cual no descartó la compra de un blindado para el nuevo inquilino de San Caetano.

Quedarse los coches

La Xunta tiene la posibilidad de ir a una nueva subasta con un descuento del 15%, aunque la Consellería de Presidencia está estudiando utilizar los coches sin vender para abaratar el precio de futuras adquisiciones de vehículos, lo cual parece tener más sentido común.

(www.elplural.com, 19/10/09)

FEIJOO SE DESMELENA Y FLIRTEA CON LA INSUMISIÓN FISCAL GALLEGA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que sube enteros cada día como uno de los pesos pesados del Partido Popular, se desmelenó ayer ante los medios de comunicación y abogó, de forma más o menos directa, por la insumisión fiscal de Galicia. Aseguró, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que el Gobierno de su comunidad no tiene dinero para devolver los ingresos que recibió de más como anticipos de la financiación autonómica por parte del Estado en los ejercicios del 2008 y el actual, que cifró en unos 2.000 millones de euros, y subrayó que difícilmente Galicia lo devolverá ahora «porque nadie puede dar lo que no tiene».

Feijoo emergió ayer como un dirigente mucho menos moderado que hasta ahora, abonando posiciones contrarias, de hecho, al cumplimiento de determinadas leyes. Se situó así en línea con otros presidentes autonómicos populares que se han opuesto a aplicar leyes como la que restringe los ámbitos para el consumo del tabaco, permitiendo fumar en muchos más locales, o como la frontal oposición, cuando no boicot, a la aplicación en sus aulas de la asignatura de educación para la ciudadanía.

Sin embargo, en este caso la posición de Feijoo sube un escalón, ya que se opone, con sus justificaciones pertinentes, a aplicar una consecuencia del pacto de financiación que acordó el propio PP con CiU en el 2001. En esa ley, vigente hasta el 2009, se establece que cada año las autonomías recibirán la financiación con entregas a cuenta por los conceptos que les corresponda, y en el año que se tengan los datos reales se hará «la liquidación por la diferencia entre el importe de las entregas a cuenta percibidas y los valores definitivos de los mismos». Hasta el 2007, las liquidaciones siempre habían salido a favor de las autonomías, que cobraban la diferencia, y nadie protestaba. A mediados de este año las autonomías han ingresado 6.070 millones de euros de la liquidación del 2007, de los que a Galicia le han tocado 393. Ahora que la liquidación del 2008 sale negativa, Feijoo se niega a pagar. Lo argumenta atribuyendo al Estado un error en sus previsiones que «ahora pretende hacer pagar a las autonomías». Y añade que en los presupuestos Generales del 2009 se persistió en ello «a sabiendas».

Con el nuevo acuerdo de financiación, pendiente de aprobación en el Congreso, las autonomías podrán devolver el dinero cobrado de más el 2008 a partir del 2011, en lugar del 2010, mediante un descuento en los anticipos a cuenta del citado ejercicio que recibirán del Estado. Feijoo también desveló que ofreció la Consejería de Economía al presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Juan Ramón Quintás, que la semana pasada abogó por un adelanto electoral.

(www.elperiodico.com, 22/09/09)

FEIJÓO JUSTIFICA ANTE RAJOY LOS PACTOS CON TRÁNSFUGAS EN SILLEDA Y GONDOMAR

En la víspera de la moción de censura de Benidorm, la que centra desde hace un mes todas las acusaciones del PP contra el PSOE, el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a justificar los pactos con tráfugas que ha sellado su partido en Gondomar para recuperar la alcaldía y el que se ultima, con el mismo propósito, en Silleda. La doctrina que defiende el presidente gallego no puede ser más distinta a la que pregonaba el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sin embargo aplaudió ayer las explicaciones de Feijóo en un desayuno informativo en Madrid.

A 600 kilómetros de distancia, acostumbra el presidente gallego a ofrecer su muy personal versión de lo que aquí sucede. Lo de Gondomar -donde los populares desalojaron al alcalde del BNG después de acordarlo con ediles tráfugas del PSdeG- es para él un "pacto poselectoral". Feijóo aderezó su argumento: el PP fue el partido más votado en ese ayuntamiento pontevedrés.

Algo que no sucedió en Silleda donde la dirección del PP ha recomendado a su portavoz José Fernández Viéitez esperar "órdenes de arriba" antes de ejecutar la maniobra y cambiar de manos el bastón de mando, actualmente en manos de una alcaldesa socialista. En este caso, Feijóo se mostró más cauto, si bien se negó a desautorizar el probable pacto con transfugas.

El presidente trasladó la responsabilidad al PSOE. "Si usted vive conmigo en un pueblo donde vemos que mandan tres concejales y todos los demás están en contra, a lo mejor lo podemos aguantar un tiempo pero no indefinidamente", dijo. Pese a todo, admitió que si por él fuese, no se llevaría a cabo la moción de censura. La complicidad con las mociones de censura que se valen de transfugas se disipó cuando llegó la previsible pregunta por el caso Benidorm. Feijóo despejó la cuestión con un chascarrillo. "No puedo asegurar que mi madre y yo lleguemos siempre a acuerdos políticos", aludió con sorna al parentesco entre la número tres del PSOE, Leire Pajín, y su madre, una de las impulsoras del pacto contra el PP en Benidorm.

Como sucede cada vez que el presidente gallego pisa tierras madrileñas, y cada vez las frecuenta más este valor en alza en el PP, el presidente gallego repasó la actualidad política. Aprovechó su presencia en la capital para pedir al Ejecutivo central y a su presidente Zapatero que "reflexione" antes de reclamar a las comunidades autónomas "un dinero que no tienen".

Esa referencia a los fondos que Galicia debe devolver a partir de 2011 (1.900 millones de euros) por los anticipos a cuenta recibidos del Estado no estuvo exento de crítica. No se puede pedir cuentas a las comunidades, vino a decir, "por los errores de una política presupuestaria" elaborada para ocultar la crisis.

Y volvió sobre el acuerdo de financiación autonómica que se aprobó con la abstención de las comunidades con presidente del PP, "una improvisación" del Gobierno central que "perjudica a las autonomías menos desarrolladas". Feijóo lamentó que inversiones previstas durante los mandatos de Zapatero por 3.000 millones de euros "nunca llegaron", y "el incremento de la fiscalidad" que se cebará con las rentas altas o medias.

Tuvo tiempo de confirmar que el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro era su elegido para la cartera de Economía, si bien se permitió discrepar con Juan Ramón Quintas, sobre las críticas que este último formuló contra el intervencionismo de los gobiernos autónomos en estas entidades financieras.

Sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas, algo que reclamó el propio Quintas, el presidente de la Xunta se quedó a medio camino. Apuntó que deben ser "el último recurso en democracia".

(www.elpais.com, 22/09/09)

LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tropezar con el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que él mismo catapultó a la fama en plena campaña de acoso y derribo pre electoral. Antes de las elecciones de marzo pasado, Feijóo y los suyos encumbraron el blindado de Touriño al puesto de máximo símbolo del despilfarro. Olvidaron explicar, por ejemplo, que en la etapa de Manuel Fraga Iribarne el Ejecutivo adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados y un Touareg del ex presidente. De hecho, el mismo Feijóo siendo vicepresidente de Fraga utilizó un A8, en su caso sin blindar. Ansioso de construirse una fama de hombre austero en supuesta contraposición a Touriño, el entonces aspirante al Gobierno regional prometió vender el legado de su ya antecesor y circular en un Citroën de fabricación local. La última promesa la incumplió nada más hacerla: no se fabrican Citroëns blindados en España. La primera está rozando el fracaso seis meses después: ni siquiera rebajando en 200.000 los vehículos se ha logrado "malvenderlos".

Fue en mitin en Vigo donde Feijóo recrudesció su embestida contra Touriño con dos promesas: "poner el cartel de se vende" al A8 blindado y usar un coche "hecho aquí al lado, en la factoría de Citroën", recuerda El País.

Citroën de importación

Verdades a medias. Efectivamente, la mayor fábrica de Galicia es una fábrica de Citroën y, sin embargo, ésta no hace berlinas blindadas: es necesario importarlas de Francia. Claro que el compadreo de Feijóo con Citroën venía de lejos. En su etapa frente a la oposición, esta multinacional le facilitó un vehículo que nunca se declaró a Hacienda como préstamo según se aconseja en estos casos.

Se “malvende”

En cuanto al “cartel de se vende”, el primer matiz ya lo introdujeron los socialistas en marzo pasado: se “malvende” y no sólo el Audi de Touriño. “El PP malvende los Audi que ellos mismos compraron”, es decir, un total de 23 vehículos de los que sólo uno era del ex presidente. La etapa Fraga equipó a la Xunta con un parque de 32 vehículos. Olvidando su propia responsabilidad en la compra y obsesionados con el vehículo del ex presidente, el PP llegó a organizar visitas guiadas a los sótanos de San Caetano -sede del Gobierno- para mostrar a la prensa cómo acumulaban polvo estos coches, apunta el medio antes citado.

Sin comprador

La segunda rectificación acaba de salir a la luz: seis meses después de su anuncio, Feijóo no ha colocado el A8 de su antecesor –ni los dos de Fraga-. La berlina blindada y con inhibidor de frecuencia antibomba costó en su momento 480.000 euros. El PP ha intentado darle salida por 280.000 euros año y medio después de su adquisición. Para ello, se abrió una subasta pública que pretendía cambiarla, al igual que a las dos de Fraga, por “vehículos para colectivos sociales y de Protección Social”. El plazo expiró el pasado sábado y, a estas alturas, sólo se sabe que la Xunta recibió una oferta in extremis durante esa misma mañana.

Nueva subasta

El Gobierno gallego no ha dado explicaciones al respecto. Ayer compareció el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, quien se mostró más parco que cuando tuvo que criticar los supuestos despilfarros socialistas. Rueda se limitó a aclarar que todavía no se había conseguido vender los automóviles y, curiosamente, pidió responsabilidad para abordar cuestiones “relacionadas con la seguridad” sin descartar la compra de un blindado para su jefe en el Ejecutivo. Finalmente, el consejero anunció una nueva subasta para deshacerse de 20 de los audis de Fraga, entre ellos el A8 que utilizara el mismo Feijóo.

(www.elplural.com, 09/09/09)

ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO

Con motivo de su reciente gira por Galicia para inaugurar el curso político tras las vacaciones, Mariano Rajoy no ha dudado en poner la Xunta de Alberto Núñez Feijóo como referente para todo el país, instando a “exportar” su modelo y poniéndolo como ejemplo de eficacia en la gestión económica. Sin embargo Feijóo, que hizo de la austeridad y la transparencia su caballo de batalla durante la campaña electoral, ya ha levantado malestar y sospechas en sus primeros pasos como presidente. En los pocos meses que lleva de andadura, la Xunta popular ya ha privilegiado con dinero público a colegios del Opus Dei y a organizaciones ultracatólicas como el Foro de la Familia, ha tratado de tapar el escándalo de un alto cargo de la consejería de Trabajo condenado tras despedir a un trabajador sin papeles o ha aprovechado el mes de agosto para adjudicar sin razón aparente contratos millonarios por el procedimiento “negociado sin publicidad”, reservado para determinados supuestos.

Las primeras alarmas en torno a las políticas de la Xunta comenzaron su política de recortes en gastos sociales combinada con partidas para financiar a colectivos afines, según denunciaba este verano la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSdeG, Laura Seara.

Opus Dei y Foro de la Familia

“Empezaron financiando colegios del Opus Dei, que apuestan por la segregación, pero ahora van a financiar las organizaciones del Foro de la Familia para que lleven acabo acciones que atentan contra la libertad y los derechos consolidados de la ciudadanía”, alertó Seara. La diputada

socialista advirtió asimismo del apoyo del Ejecutivo gallego a las iniciativas legales antiabortistas del Foro de la Familia, un colectivo “ultracatólico” constituido por entidades como “la Asociación Católica de Propagandistas o la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa)”. Así, el PPdeG ha presentado un marco legal para que estas organizaciones ultraderechistas asesoren a través de la Xunta a mujeres embarazadas de la Xunta, cobrando por ello.

Ayudas para la empresa de un alto cargo

Otros quebraderos de cabeza para la Xunta están siendo protagonizados por sus altos cargos, como explica El Confidencial. Así, a principios de julio tomaba posesión el director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El 22 del mismo mes, su empresa Zouma Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones de la Xunta y sólo cinco días después Fernández Fasero la vendía. Fuentes cercanas a la administración autonómica consultadas por el digital niegan irregularidades porque Zouma ya había recibido otras ayudas con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder y Fernández Fasero no todavía no formaba parte del Ejecutivo cuando se cerraron las subvenciones.

Deudas con Hacienda y trabajadores sin contrato

Pero el nombre de Fernández Fasero ya está relacionado con otros escándalos, y es que una de sus empresas, Talleres de Ilusión Editorial, figura en el BOE como deudora de Hacienda tras varios intentos infructuosos de que pagara. Además, la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz López, fue condenada en firme por haber despedido a una trabajadora que no tenía contrato. La empleada, que fue despedida por la propia Díaz López según la sentencia, trabajaba en su casa particular por las mañanas y como cocinera en la empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses de la ciudad de Ferrol, por las tardes. La Xunta primero lo negó, luego obvió que la sentencia era firme y finalmente desde el PPG atribuyeron todo a una confusión entre los apellidos de la directora y los de sus padres, pero la sentencia deja claro ese aspecto y señala claramente a la dirigente popular como autora del despido.

Contratos millonarios por vía urgente

El mes de agosto también ha sido aprovechada por la Xunta, según da cuenta El Confidencial, para realizar adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes. Así, la consejería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras adjudicó obras por valor de unos 40 millones de euros durante por el procedimiento “negociado sin publicidad”, destinado normalmente a procesos que se justifican por su urgencia o por otra razón de peso que en este caso se desconocen. La consejería de Trabajo, la de Medio Ambiente y la de Hacienda también han recurrido este verano al procedimiento “sin publicidad” para adjudicar diversos contratos.

Opacidad también con en el Xacabeo

La licitación sobre la campaña publicitaria de un proyecto clave para el turismo gallego, el Xacobeo del año próximo, ha sido publicada también en pleno mes de agosto y no en el Diario Oficial de Galicia, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el diario Xornal de Galicia, aunque ni el montante ni los plazos del contrato justifican este procedimiento.

(www.elplural.com, 01/09/09)

LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS

El presidente Francisco Camps tiene a su disposición una flota de tres vehículos oficiales de alta gama, todos de la marca Audi y uno blindado, según reconoce el Gobierno valenciano por escrito en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV en las Corts José Camarasa. Uno de ellos es un modelo A8 blindado, "comprado en el año 2001 conforme a precio de mercado", refiere el vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. Camarasa denunció ayer la "doble vara de medir" del PP tras el "linchamiento" al ex presidente socialista de Galicia, Emilio Pérez Touriño, por gastar 432.000 euros en comprar un Audi A8 blindado.

El Consell no informa en su respuesta sobre el precio que costaron los coches destinados al presidente, pero los socialistas consideran que el valor actual de mercado de estos automóviles de alta gama blindados está en torno a los 400.000 euros. Unido a los otros dos Audi, la flota presidencial superaría los 500.000 euros con los precios de hoy. Especialistas del sector consultados por este periódico indicaron que, aunque hay niveles de blindaje, el coste total suele ser cercano a los 400.000 euros. La Xunta pagó en 2007 432.000 euros por el vehículo de Touriño. Éste sustituía otro idéntico adquirido en la etapa de Manuel Fraga en 2001 y por el que se abonaron 266.230 euros. Sin embargo, otro comprado en 2002 también por Fraga ya subió a 331.157 euros.

Presidencia de la Generalitat, a preguntas de este periódico, declinó ofrecer explicaciones sobre las necesidades que justifican "flota" del mandatario autonómico o el coste. Según la información de Gerardo Camps, el A8 blindado "ha realizado 86.111 kilómetros". El coche lo heredó del ex presidente Eduardo Zaplana y, a tenor de los kilómetros, no ha tenido un gran uso. A diferencia del blindado, Camps cuenta con otro Audi A8, comprado en 2005 "a precio de mercado", con un recorrido de 264.741 kilómetros. El coste actual podría estar en torno a los 80.000 euros. Finalmente, hay otro Audi más nuevo, de 2006, pero A6, con un escaso uso, 59.983 kilómetros. El precio hoy giraría entre 60.000 y 70.000 euros.

El PSPV contrapuso los ataques a Pérez Touriño con el hecho de que dirigentes del PP como Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también cuentan con un vehículo blindado Audi A8, recriminó el socialista Camarasa. "Ahora vemos que Camps no solo tenía afición por los trajes a medida, sino también por los coches de alta gama", una situación que rompe "la falsa imagen de austeridad" que había vendido el jefe del Consell, según el diputado del PSPV.

El gusto de las autoridades por los selectos Audi A8 y A6 no casa mucho con la crisis. Por eso, el portavoz del PSPV para grandes proyectos, José Camarasa, emplazó ayer al Consell a renovar, cuando proceda, el parque móvil de la Generalitat con el fin de sustituir los vehículos Audi existentes por otros Ford, igual que Feijóo se ha pasado a Citroën, con fábrica en Vigo. "Sería una forma más de mostrar la apuesta por la marca de Almussafes en estos tiempos", enfatizó Camarasa. El hecho de que el A8 blindado lo heredó Camps de Zaplana no es excusa para el socialista. "Podía, como acaba de hacer Feijóo con los Audi, por cierto, casi todos de la etapa de Fraga, haberlo sacado a subasta", resalta el diputado del PSPV, para el que Camps, "en vez de dar consejos de austeridad, podría dar ejemplos".

(www.levante-emv.com, 14/07/09)



AUSTERA, PERO EFICAZ VUELVE LA C15: LA FEIJOONETA

"YO NUNCA SALGO DEL MONTE (P)OI SIN MI C15"
-Alberto Núñez Feijóo-



- ★ Fabricada en Vigo
- ★ Ideal para Obras y desmontes (Ciudad de la Cultura, galescolas...)
- ★ Capacidad: Hasta 10 conselleiros (o conselleiras)

EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE SEGURIDAD

La Xunta se va a quedar sin coches blindados, pero su presidente no descarta adquirir uno nuevo. Lo hará "si se lo recomiendan los servicios de seguridad", reconoció ayer. A pesar de ello, la operación para enajenar esos tres vehículos y otros 20 convencionales, todos ellos de la marca Audi, se puso ayer en marcha, con la autorización de la operación por el Consello de la Xunta.

Los tres blindados, cuyo precio de compra conjunto supera el millón de euros, serán permutados por 12 vehículos que se destinarán a Protección Civil y fines sociales, lo que ha provocado las críticas de la oposición por "despilfarro". Pero la austeridad es precisamente el argumento que esgrime el Gobierno para promover su venta. Uno de los tres Audi A8 blindados es el que provocó una polémica en la campaña electoral, cuando el PP reprochó al ex presidente Emilio Pérez Touriño su afán por el lujo. Según datos confirmados ayer por la Consellería de Presidencia, Fraga compró otros dos vehículos similares en características y precio entre 2001 y 2002.

Si Fraga compró dos blindados y Touriño uno, Alberto Núñez Feijóo puede adquirir el siguiente tras desprenderse de los tres de su parque móvil, según reconoció ayer. "Viajo en un coche que creo que cumple con todos los requisitos", manifestó. Pero a continuación matizó: "Si en algún momento soy avisado por los servicios de seguridad de algún tipo de riesgo, estoy dispuesto a revisar mi decisión".

Mientras Feijóo no descartaba la adquisición de un coche blindado, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, aseguraba ayer que el presidente de la Xunta ya ha encargado en París el blindaje de un coche de la marca Citroën. Lo hizo en su blog personal, en el que asegura que mientras Feijóo vende los vehículos de la marca Audi, encarga otros de Citroën "para sí mismo y para sus conselleiros, mientras espera que en París le blinden el presidencial".

De los 23 coches que salen a la venta, 20 fueron comprados durante los gobiernos de Manuel Fraga. Con los convencionales, que serán subastados, la Xunta recaudará unos 350.000 euros. Feijóo salió al paso de las críticas de socialistas y nacionalistas a la dudosa rentabilidad de la operación. "Esta no es una medida contra el bipartito", expuso, antes de preguntarse si el anterior gobierno no tenía previsto vender esos 23 vehículos "que no se usan".

Para justificar el carácter económico de la operación apeló al ahorro en mantenimiento de los vehículos. Feijóo situó la venta en un marco de "eficiencia y austeridad", y resaltó que la reordenación de los vehículos permitirá reducir en un 25% los gastos del parque móvil de la Xunta.

(www.elpais.com, 03/07/09)

“EL PP MALVENDE LOS AUDI QUE ELLOS MISMOS COMPRARON”

El Ejecutivo gallego ya ha iniciado el proceso de permutas y subastas por el que se desharán de 23 coches de su parque móvil, aunque anteriormente han reconocido las dificultades para poder revenderlos, al menos a buen precio. Los socialistas gallegos creen que el PP está “malvendiendo” el patrimonio de los gallegos y que además responde a una “bravata electoral”.

La Xunta ha anunciado un concurso público para permutar sus tres coches blindados Audi -dos adquiridos por Fraga y otro durante el gobierno de Touriño- por vehículos para fines sociales. También sacarán hoy a subasta otros 20 Audi del parque móvil oficial con un precio de salida de entre 350.000 y 400.000 euros, aunque el Ejecutivo gallego ha dejado entrever en varias ocasiones la dificultad de dar salida a estos coches, especialmente en el caso de los blindados.

PSG alerta de la “austeridad” del PP

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que centró su campaña electoral en criticar los gastos del bipartito PSOE-BNG e hizo del coche blindado de Touriño un símbolo, enmarca ahora la venta de los coches en un plan de “austeridad”. Sin embargo, los socialistas gallegos insisten en que en lo que en realidad hace el PP es “malvender los Audi que ellos mismos compraron, entre ellos el que usaba el propio Feijóo cuando era vicepresidente” en el último Gobierno de Fraga. Así lo

expone a *El Plural* el responsable de comunicación del grupo socialista en el Parlamento gallego, Xosé Carballo, quien alerta de que el PP "compró por mucho más de lo que ahora venden" los coches con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas, y todo "para mantener una bravata electoral".

"Que empiece por los tres millones de su residencia"

Carballo advierte además contra medidas de "austeridad" de Feijóo, como la de "suprimir los libros de textos gratuitos" a los que ahora sólo podrán acceder el 25% de los ciudadanos, el cierre de las delegaciones de la Xunta en Buenos Aires o Montevideo que atendían al numeroso colectivo gallego emigrante en Argentina y Uruguay, o la paralización de la construcción de hospitales. Por eso propone que si quiere recortar gastos Feijóo empiece por ejemplo por "los 250.000 euros que cuesta mensualmente su residencia oficial, tres millones al año".

Solo los últimos blindados de Fraga costaron 600.000

La coordinadora de acción electoral del PSdeG, Mar Barcón, también acusó ayer al PP de "dilapidar" el patrimonio de los gallegos "malvendiendo" los Audi así como que sólo los dos A8 adquiridos por Fraga en un mismo año, en 2002, costaron 600.000 euros.

www.elplural.com 02.07.09

FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO

La Xunta pone en venta 20 coches adquiridos por el Gobierno de Fraga

La Xunta ha puesto en venta una parte importante de su parque móvil. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se extendió ayer en detalles sobre el sistema que se seguirá para permutar tres Audi blindados y subastar otros 20 de los modelos A6 y A8. Ahora que está en el Gobierno, el PP, que convirtió los coches oficiales en bandera electoral, le resta importancia al responsable del gasto. "Lo importante no es hacer distinción de quién los compró, sino optimizar el ahorro en época de crisis", argumentó Rueda. En realidad, dos de los blindados y 18 de los convencionales que salen a la venta fueron adquiridos durante el mandato de Manuel Fraga.

Todos los vehículos del lote excepto tres fueron adquiridos antes del bipartito

De acuerdo con los datos confirmados por Presidencia, Fraga adquirió en el plazo de 14 meses, entre septiembre de 2001 y noviembre de 2002, dos Audi A8 blindados de características y precio similar al polémico blindado del anterior presidente, Emilio Pérez Touriño: 266.230 euros de la época el primero y 331.157 el segundo. De la relación de *audís* que permanecen en el parque móvil de la Xunta se desprende que el rechazo del PP a esta marca es reciente. Sólo en 2003, la Xunta de Fraga adquirió 13 coches Audi. La cifra se eleva a 34 entre 1999 y 2005, los dos últimos, matriculados con el Gobierno ya en funciones. No fueron las únicas compras de coches en período de transición. En 2005 el bipartito recibió 24 Volkswagen Passat encargados por el anterior Gobierno.

Pero ayer no era la intención de Alfonso Rueda distinguir quién adquirió los vehículos y sí poner de relieve los criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" que imperan en el nuevo Gobierno gallego. La oposición lo tendrá difícil para calcular cuánto dinero se pierde en la venta del blindado de Touriño, ya que para enajenar los tres blindados, Presidencia opta por un sistema de "permuta" por otros vehículos nuevos, que se destinarán a fines sociales y Protección Civil. El resto saldrá en subasta con un precio global de salida de entre 350.000 y 400.000 euros. Estos ingresos se destinarán a "gasto social y equipamiento para policías locales". En este paquete no entran algunos de los coches más antiguos de la marca Audi que permanecen en los garajes de la Xunta, pero sí los dos únicos A-6 que adquirió el bipartito.

La oferta inicial, que hoy aprobará el Consello de la Xunta, es de 12 vehículos para servicios sociales y Protección Civil para la permuta por los tres blindados, aunque se negociarán "posibles mejoras" en las ofertas. Los 20 vehículos sin blindar se someterán a un proceso de subasta "abierta y publicitada" que se abrirá en septiembre. Según los cálculos de Rueda, permuta y subasta permitirán reducir en un 25% los gastos del parque móvil oficial en la legislatura, con un ahorro de entre un millón y 1,5 millones de euros a lo largo de cuatro años. Con la enajenación de esta parte del parque móvil, la comunidad autónoma se queda sin ningún

vehículo blindado. Rueda afirmó que "a día de hoy" la Xunta no prevé hacerse con ningún coche de estas características.

Para el PSdeG, la operación supone "malvender" patrimonio público para "justificar la campaña electoral del Partido Popular, acusó la portavoz del partido, Mar Barcón. La dirigente socialista lamentó los "tintes ridículos" de la operación anunciada ayer por la Xunta, y se preguntó si el Gobierno gallego incluirá en la subasta el coche que utiliza en la actualidad el ex presidente Fraga, un Volkswagen Touareg pagado por la comunidad autónoma.

También el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que los coches oficiales que salen a subasta son "los mismos" que compró el Gobierno de Fraga "en su mayoría", y que también utilizó el ahora presidente Alberto Núñez Feijóo en su etapa de vicepresidente. Aymerich afirmó que "se venderán todos" excepto uno "de color burdeos", que quedó "siniestro total" tras un accidente ocurrido durante la campaña de las autonómicas de 2005 con Feijóo a bordo, según denunció el portavoz del BNG.

www.elpais.es 02.07.09

HERNÁNDEZ COMPRÓ DESDE LA XUNTA TRES AUDI POR VALOR DE 262.000 EUROS

Tres Audi de alta gama adquiridos durante dos años, cada vez más caros y con precios que oscilaban entre los 53.374 euros del primero y los 133.128 del último. Todos ellos fueron incorporados al parque móvil de una sociedad de la Xunta que contaba con apenas cinco trabajadores y se encontraba en pérdidas. Así era la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, dependiente de Augas de Galicia, bajo la presidencia del actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández Fernández de Rojas. El valor de los tres turismos de lujo alcanzó 261.963 euros.

El Consello de Contas, en su informe de fiscalización del año 2000, ya dedicó un capítulo a la sociedad que Hernández presidió hasta febrero del 2002. Y, entre otros excesos detectados en la gestión de la empresa, se detiene a analizar la compra de los tres vehículos, de una marca ahora denostada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Como responsable de Augas de Galicia, Hernández presidió entre septiembre de 1998 y febrero de 2002 el consejo de administración de la sociedad pública, que Contas califica de "instrumental" por su actividad.

El primer Audi, un A-8 con 260 caballos de potencia, llegó en octubre de 1999, mediante la firma de un contrato de arrendamiento financiero, o leasing, con una entidad bancaria, con un precio de 53.374 euros, unos 8,7 millones de pesetas de entonces. El contrato, dice el informe, tiene una duración de 36 meses, con un tipo de interés del 5%, lo que supone una cuota anual de 18.926 euros.

Casi un año después se modifica el contrato anterior, respetando las mismas condiciones, pero con el acuerdo del cambio de dicho vehículo por otro Audi, en este caso un modelo deportivo S-8 4,2 V8 Quattro trip tronic. El coche más caro de la marca alemana costaba entonces 75.460 euros, unos 12,3 millones de pesetas. La querencia por los Audi desde la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos durante el mandato de Hernández no cejó. A finales de 2001, la empresa de Hernández firmó la tercera adquisición, el modelo de más alta gama: un A-8 largo 4,2 Quattro trip tronic, con un precio de 133.128 euros. De esta operación, dice el Consello de Contas: "Se mantuvieron las demás condiciones inicialmente pactadas, tanto en lo que se refiere al tipo de interés como al vencimiento del contrato, lo que supuso la modificación de la cuantía de las cuotas abonadas, de manera que no guarda la más mínima proporcionalidad con el resto de las cifras de la sociedad".

Los tres coches se convirtieron, a juicio del Consello de Contas, en el bien con más valor de la empresa. "El mayor saldo del activo del balance de situación está constituido por los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero de un vehículo", denuncia el órgano fiscalizador.

Todas estas operaciones se realizaron pese a que la sociedad registraba abultadas pérdidas. También lo constata el informe del Consello de Contas. En 2000, señala, obtuvo unos resultados negativos de explotación de 226.994 euros. La empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos

se constituyó en 1993, y bajo la tutela de Hernández realizó en aquel año una sola obra: la mejora de la red de saneamiento del río Lagares.

Las alegaciones a Contas realizadas por la sociedad apelan a "razones de necesidades operativas", que considera "lógicas teniendo en cuenta las funciones a desarrollar". Explica la sociedad que en octubre de 1999 se realizó un arrendamiento financiero, pero con posterioridad, en 2001, se tuvo que cambiar por otro "como consecuencia de un grave siniestro que sufrió el primer vehículo y que derivó en su inutilidad". Para evitar más explicaciones, la empresa pública respondió al Consello de Contas que sólo una de las compras se realizó en 2000, el ejercicio que revisaba el órgano fiscalizador, por lo que no se sentía obligada a justificar las dos operaciones posteriores.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio aseguraron ayer que, siendo presidente de Augas de Galicia y de Obras y Servicios Hidráulicos, Hernández no hizo uso de los coches oficiales adquiridos, ni Audi ni otros modelos y que empleó como vehículo oficial un Passat asignado a la Dirección Xeral de Obras Públicas, de la que él era titular. La adquisición de los Audi "fue una decisión de la consellería", aseguran las mismas fuentes. En aquel momento, el titular de Política Territorial era el difunto Xosé Cuiña.

Los tres Audi

- Octubre de 1999. Audi A-8. 3.7. MPT 260 cv. Precio: 53.374 euros
- Diciembre de 2000. Audi S-8. 4,2. V8 Quattro trip tronic. Precio: 75.460 euros.
- Octubre de 2001. Audi A-8 largo 4,2 Quattro trip tronic. Precio: 133.128 euros

(www.elpais.com, 29/04/09)

FEIJÓO REDUCE ANTE LOSANTOS EL PROBLEMA DE LOS AUDIS A UN SOLO "COCHE INSIGNIA" Y RECONOCE QUE LA XUNTA YA TENÍA CITROËN

El nuevo presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en los micrófonos de la COPE para ser entrevistado por el locutor Federico Jiménez Losantos, quien no recibió de buen grado su victoria en Galicia por lo que suponía de espaldarazo para la continuidad de Mariano Rajoy al frente del PP. El locutor recibió al popular restando trascendencia la victoria del PPdG aunque acabó sacando la bandera blanca: "A unos les parece mucho, a otros les parece poco, pero a ninguno les parece mal...". Preguntado por un oyente sobre el eje de su campaña electoral, los supuestos gastos fastuosos de la Xunta en puntos como los muebles, el despacho de Touriño o la flota de vehículos oficiales, el nuevo presidente se limitó a reducir el asunto a un "coche insignia" del que intentarán desprenderse. Asegura que ya ha cumplido su promesa porque el Gobierno "usa Citroën", pero reconoció que ya eran vehículos de la Xunta. Además, Feijóo mostró su reticencia a privatizar hoy por hoy TVG y en referencia a Esperanza Aguirre y a sus planes para Telemadrid concluyó que hacerlo "aisladamente" por parte de una comunidad "es muy arriesgado".

Feijóo inició su entrevista con Losantos -quien no recibió con demasiado entusiasmo su victoria en las urnas- abordando la situación de los Audi oficiales de la Xunta. Estos vehículos ya eran usados por el Gobierno gallego con la presidencia de Fraga pero el PP denunció reiteradamente durante la campaña su empleo y prometió usar Citroën porque tiene factoría en Vigo. "Lo primero que hemos hecho es cumplir esa promesa, en estos momentos todo el Gobierno tiene un Citroën". Sin embargo, a continuación aclaró que "no hemos comprado un solo coche" reconociendo que en realidad "son Citroën que ya estaban en el parque móvil de la Xunta". En cuanto a los criticados Audi oficiales, al menos hasta el 1-M, apuntó que son unos 25 y que una empresa se encargará de "del mantenimiento razonable del parque" automovilístico y "buscará una fórmula de renting".

¿El derroche se reduce a un solo Audi?

Feijóo acabó reduciendo el problema de los Audi a uno que "es el buque insignia de escudería" que vale "medio millón de euros" y que ahora intentará "colocar" con la empresa que gestiona el

parque. Si no lo consiguen colocar lo sacarán a subasta “y se venderá al mejor postor”. Losantos propuso entonces que se lo regalen a la Iglesia para utilizarlo en “los comedores de los pobres”. Aunque un oyente había preguntado sobre los presuntos gastos excesivos en el despacho y los muebles de su predecesor Touriño, Feijóo no comentó nada al respecto. Precisamente ayer, El Plural publicó la fotografía del famoso despacho, que Feijóo abrió hace unos días a los periodistas y, casualmente, no había ni rastro de los lujos denunciados por el PP durante la campaña.

¿Y el resto de las fábricas de España?

El presidente gallego insistió en su defensa del empleo de Citroën por parte de la Xunta porque cuenta con factoría en Vigo, aunque reconoció que ésta es “una de las seis grandes fábricas” que hay en toda España. La lógica de Feijóo obligaría por ejemplo a la Generalitat Valenciana a deshacerse también de su actual flota de Audis para recurrir a Ford, la marca que produce allí.

Pedro J. le insta a privatizar TVG

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, también presente en la entrevista, criticó que Galicia cuente con “una televisión pública” propia cuando ya hay canales privados en la comunidad. Feijóo defendió que TVG nació entre otras cosas para “promover la cultura gallega” y este punto no tienen por qué cubrirlo las televisiones privadas. “Se puede más por Galicia con 200 millones de euros que estar compitiendo en un terreno, si la Comunidad tiene una TV, ¿por qué no un periódico?”, insistió Pedro J., y ahí otro de los contertulios, el director de La Razón Francisco Marhuenda, recordó el proyecto de Aguirre de “privatizar” Telemadrid.

Ir “aisladamente” es “arriesgado”

Sin embargo, Feijóo discrepó abiertamente de la presidenta madrileña, apuntando que en Galicia tienen “mucho trabajo por hacer antes de llegar a ese estadio” y que la “discusión” sobre el futuro de las televisiones autonómicas debería afrontarse “por parte de muchas”, por lo que concluyó que si “aisladamente” lo hacía una comunidad es “muy arriesgado por parte de ese Gobierno”.

(www.elplural.com, 28/04/09)

SU COCHE OFICIAL COMO VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA ERA... ¡UN A-8!

El presidente en funciones de la Xunta gallega, Emilio Pérez Touriño, respondió ayer a las acusaciones que se le han hecho durante la campaña electoral, cuando su oponente político, Alberto Núñez Feijóo arremetió contra él por su vehículo oficial, un Audi A8. Touriño desveló ayer que el anterior Ejecutivo gallego, presidido por Manuel Fraga contaba con 32 vehículos de la misma marca, y el propio veterano dirigente adquirió dos Audi A8, uno de los cuales le costó a la Xunta 331.000 euros. Además, según indicó, el propio Feijóo dispuso también de un Audi A8 cuando era vicepresidente regional, por lo que Touriño calificó de “inadmisible e intolerable” el ejercicio de “demagogia” que el PP ha hecho con este asunto en los días previos a las elecciones.

- Ni coche oficial gallego, ni el personal: prefiere la marca Audi
- El coche "prestado" de Feijóo va camino de atropellarle y de paso, al PP
- ¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25...
- ¿De dónde sacará Feijóo un Citroën gallego blindado?
- Feijóo se pasea desde hace tres años en un coche que le presta Citroën

Ya parecía claro que Alberto Núñez Feijóo no cambiará, como prometió durante la campaña electoral, su coche oficial, un Audi A8, por un Citroen C4. El presidente saliente de la Xunta ha desvelado ahora que antes de su llegada al Ejecutivo regional, el ex presidente *popular* Manuel

Fraga ya contaba con una flota de 32 vehículos de la polémica marca. El propio Fraga adquirió otros dos Audi A8 y también un Volkswagen Touareg entre 2001 y 2004.

"Ya costaban los coches"

Touriño lamentó el "oportunismo" y la "falsedad" de las acusaciones de despilfarro que se hicieron contra él durante la campaña electoral y señaló que uno de los Audi adquiridos por Fraga costó 331.000 euros. "Ya costaban entonces los coches", ironizó, y recordó que las compras de los dos vehículos se hicieron "sin dotación presupuestaria". En el caso del Volkswagen Touareg, que se compró en 2004, se adquirió además "sin siquiera procedimiento de contratación", por lo que a posteriori tuvo que pasar un expediente de convalidación de gasto.

"Demagogia, oportunismo y falsedad"

"Le pasaré a Feijóo información de primera mano y papeles que lo acreditan, aunque él sabe bien de lo que hablo", apuntó Touriño, que afirmó que "tanta demagogia, oportunismo y falsedad acumulada no cabe en los edificios de San Caetano", sede del Parlamento autonómico. Además recordó que el PP había pagado la flota de 32 Audi, por lo que "debe saber bien de lo que habla el señor Feijóo cuando habla de los Audi".

Un Audi para el vicepresidente

Además, Touriño señaló que el propio Feijóo, cuando ocupaba la vicepresidencia de la Xunta "tuvo desde el primer día a su servicio, y circuló por el país, incluso en la campaña electoral, subido a un Audi A8", este sin blindaje, porque su cargo no lo estipulaba. En este sentido, se preguntó si esta es la "austeridad y regeneración democrática" que pregonó el candidato *popular* durante la campaña.

Todos los presidentes autonómicos

El dirigente socialista apuntó que, a la vista de cómo se han desarrollado los hechos, "tal vez" debió hacer pública esta información antes de que se celebrasen las elecciones, pero apuntó que "cada uno tiene su actitud en la vida", y la suya no pasa por "enturbiar ni enlodar". Según apuntó, nunca ha criticado que su antecesor contase con un coche blindado ya que lo tienen todos los presidentes autonómicos.

www.elplural.com 13.02.09

EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP

El Peugeot 607 que utiliza el inesperado ganador de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, desde hace tres años fue "un préstamo" de la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo a "una institución" –el PP-. Es la versión que ayer defendía una portavoz del grupo en Galicia para acallar los rumores de que Feijóo habría defraudado a Hacienda al no declarar su vehículo. Al apuntar al partido como usufructuario, sin embargo, el grupo se ha metido en una nueva encrucijada: en ese caso, Feijóo no habría cometido delitos fiscales, pero el PP habría violado la Ley de Financiación de Partidos, que no contempla la figura del "préstamo".

Según su última justificación, el PPdeG es usufructuario del coche oficial del su presidente, un Peugeot 607 que proviene de "un préstamo" de la factoría Citroën de Vigo. Pero la Ley de Partidos no contempla la figura del "préstamo" y es muy estricta ante este tipo de operaciones, recoge Público.

Violan la Ley

El artículo 4.2 del citado reglamento aclara que los partidos "podrán recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley", pero las mencionadas donaciones deben tener "carácter irrevocable" y este concepto es incompatible con el de "préstamo" con el que se justifica Feijóo.

No hay contrato

Además, las donaciones de personas jurídicas –el caso de la fábrica Citroën de Vigo- necesitan siempre un "acuerdo adoptado en debida forma", algo que Feijóo no hizo. El dirigente ni siquiera

firmó un contrato como tal: la operación sólo quedó recogida en una “papel de autorización para la utilización del vehículo”, tal como han explicado fuentes de la factoría.

Ni acreditaciones

Pero a efectos legales, esta no basta. La normativa requiere que se acredite “mediante certificación expedida por el partido político” la “identificación del donante”, un documento “que acredite la entrega del bien donado” y una “mención expresa del carácter irrevocable de la donación”. En ningún momento se contempla la justificación de Feijóo –el “préstamo” gratis y total-.

“Interés específico” de Feijóo

En el PP rehúsan hablar del tema, a pesar de la locuacidad que se demostró con el Audi del presidente saliente, Emilio Pérez Touriño. PSA Peugeot Citroën Vigo sí ha dado explicaciones pero estas no dejan bien parado al líder popular. “Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo. El nos expresó su interés por comprarlo” apuntó ayer un portavoz de la fábrica. “Manifestó su deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo”, agrega.

Promesas

incumplidas

El “préstamo”, que se alargó durante tres años, parece haber tocado fin: Feijóo tiene intención de sustituir el Peugeot 607 –el coche de los ministros-, por un Citroën C6 –el coche de Sarkozy-, incumpliendo así, por cierto, su primera promesa: el dirigente, que había aseverado que se desplazaría en un coche fabricado en Galicia, finalmente lo hará en un vehículo que sólo se produce en Francia.

(www.elplural.com, 10/03/09)

EL COCHE GRATIS TOTAL DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY DE FINANCIACIÓN

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, utiliza desde hace tres años el coche que la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo le presta de manera gratuita. Feijóo no ha declarado el vehículo a Hacienda ya que fue “un préstamo a una institución”, según justificó una portavoz del líder de la derecha en Galicia.

Al erigirse en “institución”–lo es el Parlamento, pero no sus diputados, portavoces o grupos–, Feijóo convirtió de forma implícita en usufructuario de su coche oficial al PP gallego. La Ley sobre Financiación de Partidos Políticos, sin embargo, no recoge la aludida figura del “préstamo” y es muy estricta ante operaciones como la que ha beneficiado al próximo presidente de la Xunta desde hace tres años, como adelantó Público el miércoles. Los requisitos que impone no se han cumplido en este caso.

El artículo 4.2 del citado texto establece que los partidos “podrán recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”. Su articulado obliga a que las donaciones tengan “carácter irrevocable”, concepto que es incompatible con “el préstamo” con el que se excusa Feijóo. Además, las donaciones procedentes de personas jurídicas –como es la factoría Citroën de Vigo– requieren siempre “acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto, haciendo constar de forma expresa el cumplimiento de las previsiones de la presente ley”. Tampoco se hizo así.

Marketing con Feijóo

En esta ocasión, el préstamo del vehículo que utilizó Feijóo, un Peugeot 607 –el coche que utilizan la mayoría de ministros– se realizó en el marco de “una acción de relaciones públicas y promoción de producto”, según aseguró este lunes a este diario un portavoz de la factoría.

Este mismo interlocutor admitió que no ha mediado contrato alguno en la operación. Simplemente se firmó “un papel de autorización para la utilización del vehículo”. El trámite es, sin

embargo, bastante más complejo. La ley especifica que "cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación expedida por el partido político en el que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado, haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación". La ley de financiación de partidos no contempla, por tanto, la opción elegida por Feijóo: el "préstamo" gratis total.

"Interés de Feijóo, no del PP"

El líder del PP gallego no quiso aclarar el lunes estas circunstancias. "No vamos a hablar más de este tema", zanjó su portavoz. La locuacidad exhibida por Feijóo contra el Audi de su antecesor en la Xunta se apagó así a la hora de explicar los detalles que envuelven a su vehículo gratuito, un empeño personal de Feijóo. Fue él quien, hace tres años, recién elegido presidente del PP gallego, mostró su interés a los responsables de la factoría de Citroën de Vigo para hacerse con un coche gracias a su favor.

"Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo, él no expresó su interés por comprarlo", explicó el lunes el portavoz de la factoría. "Manifestó su deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo", se justificó. El préstamo ha durado más de tres años.

Feijóo sustituyó este vehículo por un Citroën C6, también gratis, antes de comenzar la campaña electoral gallega. Este modelo —el mismo que usa el presidente francés— es el que ha elegido finalmente como coche oficial, a pesar de haber prometido que se serviría de uno de los modelos fabricados en la factoría gallega. La limusina que ha encargado se produce únicamente en Francia.

www.publico.es 09.03.09

EL HIJO DEL SATURNINO Y LA SIRA

Alberto Núñez Feijóo, el próximo presidente de la Xunta de Galicia, ganó contra pronóstico y devolvió el aliento a Rajoy. Ésta es su historia

Acabo de tirar al *Touro* en el contenedor", le confesó una tarde de éstas la señora Ramona a su vecina Geluca, en alusión a los carteles con la cara de Touriño. En el pueblo de Os Peares, el único de Galicia que está dividido -por tres ríos y la vía del tren- en cuatro municipios y dos provincias, todos los habitantes se han unido por la causa de Feijóo. "Alberto, o noso presidente", proclama gloriosa una pancarta que atraviesa la vía a la entrada de la localidad. Detrás del letrero, la primera casa que aparece es una de piedra en la que el próximo gobernante de Galicia nació el 10 de septiembre de 1961, y vivió casi toda su infancia y adolescencia. El número 6 del lugar de O Mesón, Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, provincia de Ourense, feudo hoy del barón popular José Luis Baltar, ya era entonces un caserón habitado por cuatro familias. Eladia, la abuela de Feijóo, su abuela del alma, y el abuelo Manolo, que era panadero, ocupaban, con sus ocho hijos y luego también con el yerno, el nieto Alberto y su hermana Micaela, parte del primer piso y de la planta baja. Allí, Eladia atendía al mismo tiempo una expendeduría de tabacos y una tienda de ultramarinos menos surtida que la de la acera de enfrente, la del *Alpargateiro*.

- PSOE y BNG denuncian que el PP llevó hasta el colegio electoral en autobús y en coche a potenciales votantes
- En un día acabaré con el caciquismo en Galicia, prometió Feijóo durante la campaña electoral

En Os Peares había una tienda debajo de cada casa y la clientela se repartía. "Era difícil llegar a rico y ellos eran bastante pobres", recuerda ahora Ramona, que a sus 93 años es la más anciana del pueblo. "Si vienes buscando cosas, aquí nadie te hablará mal de los de la Eladia, y menos del Alberto", advierte la vecina. Un rincón de Galicia difícil de gobernar, donde todo va lento porque es preciso el consenso de cuatro alcaldes y dos diputaciones.

El nieto de Eladia no será sólo el próximo presidente de Galicia: el niño nacido en el número 6 de O Mesón ha logrado salvar a Mariano Rajoy, asediado por las tramas de espías y de corrupción, de los enemigos internos que se aprestaban a cortarle la cabeza, esperando la previsible derrota del PP en las elecciones gallegas.

En Os Peares están Alberto, el hijo de Pepito *dos Barcos*, y Alberto, el hijo del *Quintela*. Pero el Alberto por antonomasia es el que ya sólo pasa de vez en cuando de visita, acompañado de políticos conocidos, para saludar a todos y comer en el bar Barra. Es Alberto, "el hijo del Saturnino y la Sira", aquí no tiene apellidos. Su padre empezó de "listero". Pasaba lista y controlaba a los obreros que construían la carretera y los embalses del río Sil. Luego llegó a encargado. Mientras, el niño, "responsable y obediente", estudiaba todo el día. Todo el mundo lo recuerda así: encerrado siempre en casa. "Sólo salía a estirar las piernas". Daba "un par de vueltas" por la acera y volvía sobre sus libros. Casi nunca iba a jugar con los otros chicos.

Con el tiempo, los Núñez Feijóo compraron su parte de inmueble, y hace cuatro años la vendieron con la condición de que Alberto pudiese seguir ocupando un cuarto con llave. Allí, según Rosa Caride, la nueva propietaria, guarda "papeles, libros, botellas de vino y ese montón de regalos que le hacen desde que está tan arriba". Hasta que la familia marchó a vivir a Ourense, no tuvo baño en casa.

Si Saturnino, su padre, no se hubiese quedado en paro, Alberto no habría sido presidente de Galicia. Porque el chico, que acababa de terminar Derecho, no mostraba interés por la política y lo que quería era llegar a juez. Pero al perder Saturnino el empleo, y con una hermana seis años menor, Alberto tuvo que ponerse a trabajar. En 1984, preparó en dos meses las primeras oposiciones a la Xunta y las aprobó con el número dos. El primero fue un amigo de la universidad, Carlos Negreira, que tenía fama de ser más listo, pero también menos disciplinado. En estas elecciones, Negreira iba de primero en la lista del PP por A Coruña. Y Feijóo, de primero por Pontevedra. Otro compañero de Derecho, el socialista José Blanco, dice que no se acuerda de él porque estuvo poco tiempo en la Facultad; pero alguna vez Feijóo ha preguntado por los apuntes que Blanco nunca le devolvió, sólo para dejar claro que él era mejor estudiante.

Dos años antes de entrar en la Xunta, el hombre que el domingo pasado salvó a un Rajoy en caída libre había votado a Felipe González. No tenía una ideología formada. Lo que le preocupaba era sacar buenas notas, ayudar a su familia y no perder el tiempo. Era, y sigue siendo, según los que lo conocen, "católico, apostólico y romano", y frecuentaba algo más la iglesia que en la actualidad. En su casa natal se hablaba más castellano que gallego. Al pueblo que medró gracias a las centrales hidráulicas había llegado mucha gente de fuera, y la denostada lengua propia era lo que se hablaba "en la montaña", allá en núcleos alejados.

Con Feijóo, el PP abandonó la política de apoyo a la lengua gallega que durante años había defendido Fraga y se enfrentó por ello al Gobierno bipartito. Durante la precampaña, la cúpula del partido encabezó la manifestación del colectivo Galicia Bilingüe, que acabó con enfrentamientos violentos entre grupos independentistas y la policía. Él no asistió. Estaba en Argentina visitando a la emigración votante. Unos días antes, le había asegurado al periodista Jiménez Losantos que apoyaba la marcha en defensa del castellano. El mismo Jiménez Losantos que en una ocasión le preguntó a Rajoy "de qué escombrera ideológica" le había sacado.

Feijóo suele contar que se interesó por la política viendo por la tele las tertulias de *La Clave*. José Luis Balbín tuvo la culpa, pero también el antiguo *conselleiro* y ministro José Manuel Romay Beccaría, su verdadero padrino en el PP. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy, del sector urbano de los populares gallegos (los que en el partido llamaban del *birrete*, conservadores tradicionales) enfrentado en una larguísima disputa interna a la facción rural y caciquil, impregnada de galleguismo y populismo y encarnada por Xosé Cuiña y José Luis Baltar, los de la *boina*, adversarios de la dirección nacional del PP. Romay no lo conocía de nada, pero en 1991, siendo *conselleiro* de Agricultura, necesitaba un secretario general para su departamento. Así que hizo una encuesta rápida entre el cuerpo de letrados y todos le comentaron que el que más valía era un tal Alberto, de 29 años.

Lo llamó a su despacho, charló con él, y en el acto decidió su nombramiento. Se lo llevó después, como secretario general, al Servizo Galego de Saúde. Y cuando José María Aznar nombró a Romay ministro de Sanidad, Feijóo se convirtió en presidente del sistema sanitario nacional. Tenía 35 años. Se cuenta que Romay lo dejó en el edificio del Insalud y ya no volvió. La leyenda

dice también que al llegar le hicieron una advertencia: "De la tercera planta hacia arriba no trabaja ni dios". "Pues él los puso a trabajar, porque tiene una capacidad de motivación tremenda, contagia su energía", asegura ahora el ex ministro. A la hora de hacer equipos y nombrar gerentes de hospital, no miraba el carné político de nadie. Todo el mundo le tenía por un gestor pragmático sin inclinaciones ideológicas, que se había limitado a hacer carrera en administraciones del PP. De hecho, no se afilió hasta 2002.

"Todavía se recuerda su gestión porque en cuatro años redujo las listas de espera quirúrgicas de 212 a 53 días. Acabó con las diferencias regionales. Y yo entonces ya pensaba que podría llegar a presidente de la Xunta". Romay, que está "orgullosísimo", destaca su "capacidad de trabajo, su liderazgo, su honestidad y su gran sentido de la oportunidad". En sus tiempos, él no logró imponer *el birrete*, pero su delfín ha "unificado el partido", y tras ganar estas elecciones, Baltar, el último patriarca *con boina*, ha anunciado que se irá "en dos o tres años".

"En un día acabaré con el caciquismo", prometía Feijóo en la campaña. Mientras, el *barón* Baltar enrarecía la contienda dando rienda suelta a su lengua desbocada. Insultos (del tipo "maricón" y "sinvergüenza") hacia unos y comentarios sobre la supuesta vida íntima del nacionalista Anxo Quintana. Ése era el contenido de sus mítines por los pueblos. Y su juego sucio resultó doblemente eficaz cuando algunos medios publicaron noticias y fotos comprometidas sobre el líder del BNG.

El error más grave de Quintana, en los primeros días de la campaña, fue dar un mitin ante un grupo de ancianos que habían asistido engañados por un colectivo organizador del acto. Habían pagado 15 euros para viajar a Portugal y el autobús paró en un hotel a pocos kilómetros de la frontera. El PP se cebó en este hecho a pesar de que Baltar es el gurú de lo que en Galicia se llama *carrexo* (transporte al colegio electoral de votantes, por lo general de cierta edad, en coches particulares de los políticos locales). El sábado de reflexión, la Diputación de Ourense movilizó una flota de vehículos para llevar de excursión por la Ribeira Sacra a vecinos de varios municipios. El BNG y el PSOE denuncian que tanto los alcaldes como Baltar, presidente de la institución provincial, compartieron banquete con los potenciales electores. Al día siguiente, el *carrexo* se volvió a repetir. Hay pruebas gráficas y denuncias, ante la Guardia Civil y la Junta Electoral, de que incluso se transportó a los votantes hasta el colegio electoral en autocar... Pero Feijóo promete que acabará en un día con el caciquismo.

Cuando Romay dejó el ministerio, Álvarez-Cascos, que también había puesto los ojos en el empollón de Os Peares -y Feijóo le considera otro padrino político-, se lo llevó de director general a Correos. De ahí, y de su etapa en el Insalud, viene su estrecha amistad con varios sindicalistas como Regino Martín, de CC OO. En esta organización aseguran que su gestión fue "muy buena", que con él se consiguió firmar un plan de pensiones que sigue en vigor y el primer convenio colectivo, que consolidó 10.000 empleos.

Unos cuantos años después, Esperanza Aguirre lo quiso fichar como consejero de Sanidad, pero entonces el ahijado político de Romay ya estaba "casado con Galicia", como dice su madre. "Se casó con Galicia, pero Galicia no me da nietos", se lamentaba la madre en un video electoral propagandístico, con el que el partido intentaba acercar la figura distante y todavía desconocida del candidato. La frase era, en realidad, una indirecta. Porque aunque casi nadie lo sabía entonces, Feijóo tiene una novia ocho días más joven que él. "Los dos somos virgo, y por lo tanto, tímidos y reservados", comentó ella un día. Lo de la timidez de Alberto, disfrazada de chulería y un humor desconcertante cuando trata con quienes no le dan confianza, es *vox pópuli*. Y sus rivales lo saben y lo utilizan. El socialista Francisco Cerviño, diputado autonómico, explica que es fácil percibir cuándo en un debate se ha dado en el blanco "porque se pone todo colorado". Pese a ello, dicen que "encaja bien los golpes".

La periodista madrileña Carmen Gámir, *Chinny* (de chinita) para todo el mundo, porque su madre es española nacida en Filipinas, lo conoció en el año 2000, cuando lo entrevistó como director de Correos para el diario orensano *La Región*. Durante nueve años mantuvieron su relación en secreto. A Feijóo se le atribuyeron antes otras relaciones. Pero en el ecuador de esta campaña Gámir salió a la luz, precisamente en un reportaje que le dedicaba su diario. La periodista, que trabaja para el semanario internacional de *La Región*, terminó pidiendo una excedencia hace algo más de dos meses para seguir a Alberto y vive con él en una de las dos torres gemelas más altas y exclusivas de Vigo. Feijóo está pagando la hipoteca y presume de ello, pero sus allegados no aclaran si tiene más propiedades.

En contra de lo que mostraba otro vídeo electoral, Feijóo no recoge los platos en su domicilio. "Un día a la semana", explica un amigo, "le va una mujer", pero eso es porque "trabaja 16 horas al día". Pese a que es un hombre "corriente", o quizá por eso, el líder del PP gallego "jamás plancha". Los domingos por la noche telefonea a su padre para que le cuente cómo han quedado el Depor y el Madrid. En la noche electoral también lo llamó. Saturnino, en lugar de darle la enhorabuena, le cantó los resultados de la jornada.

En una muestra de heterodoxia para el PP, Feijóo suele afirmar que "el matrimonio es la institución menos democrática que hay". En una ocasión, Fraga dijo que su único defecto era estar soltero. Años antes, el ex presidente de la Xunta también le había recomendado a Rajoy que se casase y tuviese hijos. En una charla en el Club Financiero de Vigo, le preguntaron a Feijóo qué medidas pensaba tomar para fomentar la natalidad. Siempre rápido en sus respuestas, contestó con otra pregunta, "¿vais con segundas?", y con una afirmación: "Yo, por lo pronto, el año que viene me pongo a ello".

Desde una ventana de su domicilio, el presidente *in pectore* de Galicia se despide de la ría por la mañana, antes de marchar a Santiago en el C6 negro que puso hace tiempo a su servicio la factoría viguesa de Citroën (la misma empresa que ahora fabricará su coche presidencial, en Francia). Feijóo no ha confirmado aún si piensa instalarse en la residencia oficial de Monte Pío, en Santiago. "Le gusta demasiado el mar", cuenta uno de sus próximos. Él pesca y tiene "muchos amigos marineros".

Lo que ya ha puesto a la venta, dice Feijóo, es el lujoso Audi oficial de Touriño, que seguramente tantos votos le valió al PP. El mensaje sobre los gastos astronómicos del presidente socialista ("con el Audi de Touriño se podrían comprar 24 ambulancias") y una historia de sillas a 2.269 euros para una sala de la Xunta (que en realidad nunca fueron compradas) caló en la opinión más que las noticias de corrupción y casos de espionaje del PP. Ni siquiera llamó la atención un escándalo del dinero procedente de las Caimán que había cobrado Luis Carrera, el número uno del PP por Ourense, sin declararlo a Hacienda. Feijóo ganó con holgura tras una campaña en la que el chaval vergonzoso, interno de los 10 a los 14 en los Maristas de León, aparcó sus escrúpulos y abundó en la demagogia. "Él estaba seguro de que iba a ganar, y logró transmitirlo", afirman sus íntimos. "Hace años que en los mítines del PP no había tanta alegría y tanta gente".

Feijóo presume de ser leal, humilde y austero. Sus amigos aseguran que "no le gusta gastar por gastar". Lleva años con el mismo móvil Nokia. Un modelo básico roto por todas partes. Durante el tiempo que ejerció cargos públicos en Madrid se resistió a cambiar de vehículo. Al llegar a la Xunta llamado por Fraga, primero para sustituir a Cuiña como *conselleiro* de Política Territorial y luego como vicepresidente, heredó un Audi A8 y con éste siguió hasta que el bipartito le arrebató el poder al PP en 2005. Entonces aquel gestor sin ideología aparente fue el hombre elegido por Rajoy para suceder a don Manuel. Ofrecía una imagen centrista y moderada, que en buena parte se ha roto con la dureza de la reciente campaña.

Cuando era vicepresidente, le ofrecieron un A8 nuevo, pero él se negó a estrenarlo. En un acto, durante el traspaso de poderes, Quintana le preguntó qué coche tenía. Feijóo le aconsejó que fuese a mirar en el garaje de la Xunta: "Hay un A8 sin estrenar que yo nunca acepté". En un segundo encuentro, el del BNG le volvió a preguntar: "Es que no está donde me dijiste". "Pregúntale a Méndez Romeu [*conselleiro* socialista de Presidencia]; lo está usando él", le contestó Feijóo, dando muestras de que se encontraba más al tanto de las cosas de palacio que el socio nacionalista de Touriño.

Esta semana, cuando después de la victoria viajó a Madrid para reunirse con la dirección del partido, Feijóo cenó en un bar de carretera. Era muy tarde, sólo estaban los camareros, pero lo reconocieron y le felicitaron. Luego, él, su novia y su chófer se sentaron en una mesa y pidieron, para los hombres, un pepito de ternera, y para ella, un sándwich. Su primera cena como presidente recién elegido era de veras modesta.

Y suele decir que sus platos favoritos son "las *xoubas* [sardinillas] fritas y los huevos fritos", aunque siempre que puede acude al restaurante Estrella, del municipio pontevedrés de Bueu, en el que trabaja su amigo Andrés Pérez, *percebeiro* de mañana y cocinero por las tardes. "Es de buen diente", asegura Pérez, "suele pedir percebes, centollas, arroz con bogavante, rape y lenguado". En verano, con éste y con otros amigos, Feijóo suele pasar unos días en la isla de Ons. Con otro de sus colegas, los fines de semana va a correr por el parque vigués de Castrelos.

"Está en forma y eso le valió para aguantar como un toro la campaña". A diario visitaba tres provincias, pero físicamente no se resintió. Él, "que suele sufrir de la garganta", conservó la voz todo el tiempo y "sólo se acatarró el último día". Mientras Quintana, por ejemplo, perdió siete kilos, Feijóo sólo adelgazó uno y medio.

El de Os Peares sigue haciendo alarde de su origen y llama "señoritos" a sus contrincantes. Nunca se arrepentirá lo suficiente de aquella foto, durante los terribles incendios del verano de 2006, que lo mostraba sosteniendo una manguerita vestido de domingo. Combatir su fama de estirado es tarea difícil. Tras una encuesta entre los alcaldes del PP, concluyó que tenía que cambiar de imagen. En la precampaña, el candidato que de niño se lavaba en una palangana se cortó el pelo y abandonó la gomina para siempre.

www.elpais.es 08.03.2009

EL PRESIDENTE RIOJANO, PEDRO SANZ, VIAJA EN UN A-8 COMO EL DE TOURIÑO, *TUNEADO* ADEMÁS CON TV Y FAX

¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25 Audis de alta gama?

"Creo que deberíamos parar de hablar de esto", rogaba Alberto Núñez Feijóo, presidente electo de la Xunta de Galicia, el pasado miércoles en la *Cadena Ser*. La marcha atrás de Feijóo en lo que había sido el pilar de su campaña electoral (el gasto "suntuoso" de Touriño en su Audi A8), no parece funcionar. En realidad, el *popular* parece haber abierto la caja de Pandora automovilística y ha hecho mirar con lupa cuánto gastan las Comunidades Autónomas en vehículos. Entre todas, resulta llamativo el caso de La Rioja, donde gobierna el también *popular* Pedro Sanz y que cuenta -sólo en el ámbito de presidencia- con cinco coches de alta gama. En concreto, cuatro Audi A-8 para diferentes usos. El presidente, en cambio, se reserva para él un espléndido Audi A-8.

Y es que, en La Rioja, cada consejero tiene a su disposición un coche de alta gama. En total, se han pagado 200.000 euros en horas extras de los conductores. El Partido Riojano denuncia casos de conductores "esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus" o el traslado de hijos de consejeros al colegio en coches oficiales.

Sanz, también en Audi A8

El Gobierno riojano cuenta en su haber con un parque automovilístico que provocaría la envidia de cualquier coleccionista de Audi. En total 24 modelos A6 al que habría que sumar el espléndido, y equipadísimo, Audi A8 con que se mueve su presidente, el popular Pedro Sanz.

En el Diario La Rioja

Las protestas del Partido Riojano (PR) no se han hecho esperar y en una rueda de prensa ofrecida ayer denunciaron, no sólo este amplio parqué automovilístico, sino los abultados gastos de horas extras y el kilometraje realizado con los coches. La comparecencia del PR la recogía el diario La Rioja en una pequeña pieza en la página 8. La inclinación creciente de este rotativo -el único editado en la Rioja- hacia el PP en general, y hacia su presidente en particular, es conocida en la región.

Un modelo familiar

El Audi A8 es el mismo modelo que utilizaba Emilio Pérez Touriño, presidente en funciones de la Xunta de Galicia, y al que tanto rédito electoral ha sabido sacar Alberto Núñez Feijóo – especialista en escándalos artificiales-, gracias a sus críticas sin fundamento durante la pasada campaña electoral. También es el mismo modelo en el que se mueven Alberto Ruiz-Gallardón (aunque es un ejemplar bastante más caro), Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá y otros altos cargos populares...

Jugoso Plan Renove

El modelo que usa el presidente riojano fue adquirido el 3 de noviembre de 2005 para su uso exclusivo y gracias a un beneficioso Plan Renove, de manera que sólo pagó, tras entregar el coche antiguo, 100.436 euros por él. Sin embargo, habría que sumarle la instalación – perfectamente justificada- de un inhibidor de frecuencia y el blindaje que llevan los coches de los altos cargos autonómicos.

Habitáculo tuneado

Hasta aquí todo normal. No lo es tanto la mejora del habitáculo que se suministró Pedro Sanz. Gracias a una reducción del maletero, el presidente riojano ganó espacio en la parte de atrás del coche. Justo lo necesario para poder instalarse un fax, una televisión, etc. Ahora pocos recuerdan cuando el PP puso el grito en el cielo porque el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), se había instalado una mini oficina en su Audi A-8 por valor de 20.000 euros. Finalmente, las críticas obligaron a Benach a dar marcha atrás.

25 Audi para el Gobierno

Pero el patrimonio riojano en vehículos no se queda aquí. El pasado 5 de diciembre, se adquirieron para el parque automovilístico 3 Audi A-6 por valor de casi 40.000 euros cada uno. Este es el modelo con el que el Gobierno riojano se encuentra más cómodo. Cada una de las nueve consejerías tiene uno a disposición de su responsable. A estos, habría que sumar los cuatro que tiene Presidencia (aparte del A-8): 1 destinado al Gabinete de Comunicación, 2 para la Consejería de Presidencia y uno más para asuntos varios. De todos estos, quedarían al margen los 4 puestos a disposición de altos cargos y otros 6 para servicios alternativos. Queda uno más que realiza los traslados al Hospital Psiquiátrico. En total, 25 Audi.

2.384 kilómetros al día

Más allá de la cantidad de vehículos, llaman la atención, tal y como denuncia el PR, el kilometraje realizado con los vehículos y las horas extras pagadas a los conductores. En el año 2008, en total se realizaron 870.182 kilómetros. La cuenta sale a 2.384 kilómetros al día, pero hay que tener en cuenta que en cada jornada, sin descontar festivos, no se parece que se hayan de mover tanto todos los coches.

La penúltima Comunidad

Si prestamos atención al mapa español, estas cantidades parecen, por lo menos, exageradas. En términos de territorio, La Rioja, con 29.574 m2, es la 16ª Comunidad Autónoma de España. Sólo supera en tamaño a las Islas Baleares. Galicia, raíz de la polémica, es la 7ª Comunidad más grande de España. Si hablamos de población, La Rioja cuenta con 317.501 habitantes. Esto la convierte en la Comunidad Autónoma con menos habitantes de España. Mil menos de los que tiene la ciudad de Valladolid. Galicia, con casi tres millones de almas está en el 5º puesto de población.

Horas extra a la espera de un mus

¿Y las horas extra de los conductores? El PR defiende que tienen todo el derecho a cobrarlas “porque las han realizado”. Pero, ¿en qué? El Partido Riojano denuncia que se ha hecho “una utilización abusiva”. Es el caso de los desplazamientos a Riojafórum, yendo “cada consejero en un coche”. Pero hay desplazamientos más estrafalarios: “Hay consejeros que llevan en el coche oficial a sus niñas al colegio” y se ha dado el caso de que “haya un conductor esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus”.

www.elplural.com 08.03.09

FEIJÓO ERA EL ÚNICO PORTAVOZ QUE USABA UN COCHE GRATIS TOTAL



empezamos.

Nueva Citroën Benlingo Frijolito Special Edition*
Para la faena y el paseillo
Porque yo lo valgo.

*Con acabados bilingües. De regalo edición de lujo del nuevo Decreto de Normalización del Español. Fabricado en Vigo por gallegos de bien. Plan Renove si nos traes tu viejo Audi A6.

Los líderes de PSOE y BNG en la Cámara sólo tuvieron opción de compra de un vehículo

Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado desde 2006, cuando fue aupado al liderazgo del PP gallego, de una ventaja exclusiva: era el único líder parlamentario que disponía de un vehículo “prestado” por la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo. Los portavoces en la Cámara autonómica de PSOE (Ismael Rego) y BNG (Carlos Aymerich) nunca tuvieron a su disposición un vehículo cedido por la empresa más importante de Galicia. Así lo han confirmado ambos a *Público*.

“Adquirimos en 2002 un 607 por 39.000 euros”, dicen en el PSdeG

Citroën procuró a Feijóo un Peugeot 607 hace tres años “en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Popular”, había explicado una portavoz del partido a este diario. Se trataba, añadió, de “un préstamo a una institución, como se presta a otras instituciones, caso del Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra”. En caso de que el Grupo Popular fuese una institución, ¿por qué no hubo una cesión similar a los grupos de BNG y PSOE? Este periódico intentó contactar, sin éxito, con algún responsable de la compañía que explicase la diferencia de criterio.

El problema es que los grupos parlamentarios no son una institución. Lo es el Parlamento gallego, o la Xunta, pero no un grupo que, como lo asume el Reglamento de la Cámara –y de todas las asambleas legislativas–, es una forma de organización de los diputados para acceder a los recursos y articular el trabajo parlamentario.

Feijóo usaba el 607 “prestado, a nombre de Citroën”, aunque su grupo corría con “todos los gastos de mantenimiento”, desde el seguro a la gasolina o el chófer. “Nunca” utilizó el único Audi A6 que el Parlamento pone a disposición de los portavoces de los tres grupos, previa solicitud.

Rego recordaba ayer que en la última legislatura de Manuel Fraga (2001-2005) se consiguió que la Cámara aumentase la subvención a los grupos para que estos, si querían, comprasen un coche.

Socialistas y Bloque quieren saber la “situación fiscal” del automóvil

“Adquirimos un 607 el 5 de abril de 2002 en un concesionario de Santiago, con mediación de la fábrica de Vigo. Nos salió por 38.890,41 euros, y aún pagamos una letra de 565,36 euros”, relató. “¿Por qué se le presta a Feijóo y se nos cobra a nosotros? ¿Y lo acepta por qué? Ni se nos habría ocurrido al PSdeG. ¿Y a cambio de qué? Con mayor razón se lo regalarán ahora, cuando sea presidente de la Xunta”. El portavoz socialista le exigió que explique “cuanto antes” la “situación fiscal” del coche y “la relación con Citroën”. Ayer, en el PP decían ignorar si Feijóo ha declarado el Peugeot a Hacienda. “Me sorprende su desparpajo, y que no haya dicho nada. Veo cierto tufillo”, afirmó Rego.

Sin coche en el grupo del BNG

En el BNG, Aymerich pidió respuestas a las “preguntas que todo el mundo se hace”. Y citó: “¿Un político debe aceptar regalos? ¿Con qué contraprestación? ¿Debemos creer que es un préstamo y punto? Es un escándalo que se nos oculte esta presunta irregularidad. Casa mal con la austeridad que ha predicado”. Aymerich subrayó que su grupo no ha comprado ningún vehículo.

Fuentes del PP, consultadas por este diario, no pudieron precisar si su grupo adquirió un coche. Añadieron que el portavoz en la pasada legislatura, Manuel Ruiz, “solía conducir su vehículo y usó muy ocasionalmente el del Parlamento”. Feijóo ha prometido “andar en un Citroën”. Fuentes de la Xunta recordaron ayer que el próximo presidente deberá convocar un concurso público para adjudicar el coche oficial al tratarse de un contrato mayor de 18.000 euros. No podrá darlo sin más, a dedo.

LAS INSTITUCIONES DE VERDAD: LOS “PRÉSTAMOS” A PONTEVEDRA Y AL ALCALDE DE VIGO

En el PP gallego citaron el “préstamo” al Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Hay diferencias.

En la Diputación explican que Citroën cede tres C5, uno para el presidente del órgano, Rafael Louzán (PP), y los otros “para los cinco vicepresidentes o algún jefe de servicio”. Al cabo de “15.000 ó 20.000 kilómetros”, el coche se devuelve a la fábrica, que lo pone a la venta. La Diputación corre con los gastos. “Se nos da como institución, no a la persona. Y no hay contraprestación”. ¿Un grupo parlamentario es una institución? “No”, responden fuentes de la Diputación.

En Vigo, situación similar. “Desde hace años se llegó a un convenio con Citroën: la fábrica cedía al alcalde un coche [hoy, un C6] que renueva cada ocho meses y luego se vende. Lo hace como máximo dignatario de la ciudad, para promocionar la marca. Todos los demás coches son Citroën, comprados o de alquiler”, relatan fuentes próximas al alcalde, Abel Caballero (PSOE).

www.publico.es 07.03.09

EL PP DESCONOCE SI FEIJÓO DECLARÓ A HACIENDA EL COCHE



Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado durante tres años de coche gratis desde que es presidente del PP gallego. Se trata de un Peugeot 607, "prestado" por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada en Vigo (Pontevedra), según confirmó ayer a Público una portavoz. La fábrica se lo cedió "como presidente del Grupo Parlamentario Popular". Y, como era un "préstamo", el coche figuraba "a nombre de la compañía, de Citroën". ¿Declaró Feijóo alguna vez a Hacienda el 607? "No lo sé", respondió la portavoz del PP.

El próximo presidente de la Xunta, como desveló ayer este diario, ha utilizado como coche oficial el citado 607 desde 2006. Hace tres semanas, antes de que comenzara la campaña, "un concesionario de Citroën prestó a Feijóo un C6". "Pero hasta entonces sólo usó el 607", repitió la portavoz. No aprovechó "nunca" el Audi A6 que el Parlamento gallego pone a disposición de los portavoces de los tres grupos parlamentarios. La Cámara cuenta con un parque móvil reducido: cinco automóviles para los cinco miembros de la Mesa y otro más para los portavoces "previa solicitud", precisaron fuentes del Parlamento.

"No es un regalo, sino un préstamo a una institución. La fábrica PSA es la principal empresa de Galicia, con el mayor número de trabajadores. Ha prestado a Feijóo como a otras instituciones, al Ayuntamiento de Vigo [gobernado por PSOE y BNG] o la Diputación de Pontevedra [dirigida por el PP]", añadió la portavoz.

En el PP recalcan que "en ningún caso se trata de una donación". Si así fuera, debería tributarse el coche a Hacienda. Pero aun siendo un "préstamo", Feijóo podría tener que declararlo como renta en especie si usara el vehículo para disfrute personal, como interpretan los expertos en fiscalidad consultados por este periódico, que señalan los artículos 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 2006. "Usó el 607 como presidente del grupo, nunca para uso personal", subrayan en el PP.

¿Por qué no se dijo nunca nada del vehículo, precisamente cuando Feijóo empleó el argumento del "despilfarro" de Pérez Touriño? "No se preguntó. Cuando se nos ha preguntado, lo hemos dicho, sin problema". ¿Ha supuesto un ahorro para el PP el préstamo del 607? "No hay nada más que decir", zanjó la portavoz.

"Refleja la impostura del PP y de Feijóo, que se presentó como abanderado de la austeridad y la regeneración", replicó Carlos Aymerich, portavoz del BNG en el Parlamento. "Lo más grave es que ese préstamo le impide defender los derechos de los trabajadores de Citroën de Vigo. ¿De parte de quién se va a poner cuando se presente el ERE?", añadió. "¿Por qué ocultó ese dato?", inquirió Mar Barcón, miembro de la gestora del PSdeG. "El PP debe explicarse por si se saliera de los márgenes de la Ley de Financiación de Partidos. ¿Y cómo es posible que una empresa que recibe dinero público para evitar despidos preste coches?"

En EEUU, el candidato de Barack Obama para Sanidad, Tom Daschle, tuvo que renunciar al puesto al no declarar como ingresos el uso de un coche gratis con chófer que le puso una compañía a la que asesoraba.

Si hay uso personal, hay que pagar tasas

Si es renta en especie

El artículo 42 de la Ley 35/2006, del IRPF, señala que "constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda". El artículo 43 añade que "en el supuesto de uso" de coches, esa renta en especie será el 20% del valor del vehículo. Si el pagador no es el propietario, "se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo".

Si es una donación

Si Citroën hubiese donado el coche a Feijóo, y estuviese a nombre de éste, se aplicaría la ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de 1987, ya que la norma gallega sólo prevé reducciones para casos de parentesco. La ley del Estado establece una tarifa progresiva, del 7% al 34%, en función del valor de la donación.

(www.publico.es, 06/03/09)

EL FUTURO COCHE OFICIAL SE FABRICA EN FRANCIA



Hizo del "lujo bipartito" y del coche oficial de Touriño el eje de la campaña y ahora el Audi A8 del presidente en funciones persigue a Alberto Núñez Feijóo en cada comparecencia pública. La Cadena SER avanzó ayer que el candidato del PP no midió bien sus promesas cuando anunció que compraría un vehículo fabricado en Galicia. El Citroën C6, la berlina que ha probado durante la campaña y que ahora pretende comprar para la Xunta, no se produce en Vigo sino en Francia.

Tal vez por eso, el presidente electo, que la semana pasada repetía en cada mitin que nunca se subiría a "un coche que cuesta como 24 ambulancias", pidió ayer "parar de hablar de esto". "Sólo hemos dicho que no nos gustan los gastos suntuarios del ex presidente", dijo Feijóo, quien reclamó "empezar ya a construir el futuro". El futuro jefe del Ejecutivo reiteró su intención de comprar un Citroën C6, por ser "el vehículo de representación" de la marca francesa. Feijóo no dio pistas sobre el futuro del A8 blindado que intentará vender.

(www.elpais.com, 05/03/09)

PAJÍN ACUSA A FEIJÓO DE HACER "MUCHA DEMAGOGIA" SOBRE EL COCHE OFICIAL Y AHORA NO PUEDE CUMPLIR SUS PROMESAS



La secretaria de Organización del **PSOE**, **Leire Pajín**, acusó hoy al candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, **Alberto Núñez Feijóo**, de haber hecho "muchísima demagogia" sobre el coche oficial del presidente saliente de la Xunta, **Emilio Pérez Touriño**, de manera que ahora no puede cumplir sus promesas.

PSOE ve "tufillo" en que Feijóo elija un coche oficial de Citroën tras saberse que la marca le cedió "uno de cortesía"

Pajín señaló que se ha hecho "muchísima demagogia" y eso, a su juicio, supone que a veces "uno sea prisionero de sus propias palabras como le ha pasado a Feijóo". "Hoy vemos en algunas de las portadas que Feijóo hizo algunas promesas sobre el cambio de coche que ahora no puede cumplir", agregó.

En su opinión, el futuro presidente de la Xunta quiso hacer una campaña electoral "basada en declaraciones como ésta", en vez de estar basada "en las propuestas que los ciudadanos gallegos querían hacerle". No obstante, recordó que son los ciudadanos los que han hablado y los socialistas "saben escuchar" y, por eso, "se ha empezado una nueva etapa".

<http://es.noticias.yahoo.com/5/20090305/tpl-pajin-acusa-a-feijo-de-hacer-mucha-de-679ba16.html>

EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO

Ahora el líder popular gallego quiere "parar de hablar de esto" **El PP valenciano se pasea en el Audi que Feijóo reprochaba a Touriño** y con el que se desplazaron a Alicante. Las críticas al Audi de Touriño comprometen a Gallardón y Aguirre, que usan el mismo modelo

Coche 'gratis total' desde hace tres años

Citröen Vigo ha cedido un coche a Feijóo desde que preside el PP gallego hace tres años . Ahora pasará "del coche de Obama" de Touriño a la limusina de Sarkozy

El líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral.... El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de Citroën añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo "el presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo"

El bulo de Obama

Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar "el coche de Obama". Como un arma recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de "la tendencia al lujo" del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.

Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa.

El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco años, entre 2008 y 2012.

Fuente: Público

<http://alacant.wordpress.com/2009/03/05/el-pp-valenciano-se-pasea-en-el-audi-que-feijoo-reprochaba-a-tourino>

FEIJÓO NO QUIERE HABLAR AHORA SOBRE EL COCHE



El recién elegido presidente se ha decantado por un C6 que se fabrica en Francia y no en la factoría de Vigo

[Feijóo no quiere hablar ahora sobre el coche](#)

http://www.cadenaser.com/espana/audios/feijoo-quiere-hablar-ahora-coche/csrrcsrpor/20090304csrrcsrnac_2/Aes/

FEIJÓO INTENTARÁ VENDER EL COCHE OFICIAL DE TOURIÑO A TRAVÉS DE LA CONCESIONARIA ANTES DE RECURRIR A LA SUBASTA PÚBLICA

El candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que intentará vender el coche oficial del máximo mandatario autonómico en funciones, Emilio Pérez Touriño, a través de la concesionaria, antes de recurrir a la subasta pública. En una entrevista a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, entendió que "pocas personas" podrían comprar "un coche de esa categoría", por lo que optó por recurrir a la fábrica, que "puede conocer clientes que necesiten este tipo de vehículos", un Audi A8 blindado. No obstante, el dirigente popular no descartó, llegado el caso, acudir al "procedimiento habitual" y subastar públicamente este vehículo oficial de la Xunta de Galicia.

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-intentara-vender-coche-oficial-tourino-traves-concesionaria-antes-recurrir-subasta-publica-20090305124554.html>

FEIJÓO DISFRUTA DESDE HACE TRES AÑOS DE UN COCHE GRATIS TOTAL

El presidente del Partido Popular gallego cambiará "el coche de Obama" de Touriño por la limusina de Sarkozy

Cuando el presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mencionó a la firma Citroën durante su campaña electoral asegurando que es "mi marca y mi coche", no dijo toda la verdad. Suyo no ha sido nunca. Ni del PP gallego. El líder conservador emplea desde hace tres años vehículos cedidos por la factoría que Citroën tiene en Vigo de manera totalmente gratuita, según confirmó a *Público* el miércoles el propio Feijóo a través de una portavoz.

Desde que fue elegido presidente del PP gallego, el 15 de enero de 2006, Feijóo ha dispuesto siempre de vehículos de alta gama cedidos por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada en Vigo. Primero fue un Peugeot 607 el mismo modelo que emplean la mayoría de ministros y después un Citroën C6, el más exclusivo de la firma francesa.

Feijóo ha disfrutado de este vehículo *gratis total* durante toda la campaña electoral gallega. Una portavoz de Citroën España explicó ayer a *Público* que la planta de Vigo "dispone de autonomía" para ceder vehículos según su estrategia de empresa ya que "tienen su propia flota y sus propios criterios". No es por tanto la marca, sino la fábrica de Vigo, la que ha proporcionado a Feijóo locomoción gratis durante los últimos tres años. Ahora, desde su responsabilidad al frente de la Xunta, el líder del PP gallego deberá tomar decisiones que afecten al futuro de este centro de producción. Este diario intentó este miércoles insistentemente recabar la versión de la factoría Citroën de Vigo, pero ninguno de sus responsables estuvo "localizable" desde primera hora de la tarde, según aseguró una portavoz de la planta.

Utilizará el coche de Sarkozy

El modelo que Núñez Feijóo ha disfrutado gratis durante la campaña gallega será, además, el coche elegido por el próximo presidente de la Xunta para convertirlo en su coche oficial.

El agradecimiento a la marca ha llevado Feijóo a encargar un Citroën C6 el más representativo de la marca para su uso institucional, según anunció en la Ser. Este modelo es el mismo que emplea en sus desplazamientos oficiales el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy. Al elegir su nuevo C6, el líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral aún antes de estrenar su despacho.

El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de Citroën añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo "el presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo". Dos días después de vencer el plazo de su palabra dada, el líder conservador ha fallado ya a su primera obligación contraída. El coche lo comprará a cargo de la Xunta, pero lo hará en Francia, único país en el que se fabrica el exclusivo modelo elegido.

La firma francesa produce en Galicia los modelos Xsara Picasso, C4 Picasso, y el Berlingo, así como la Peugeot Partner. Ninguno ha sido escogido, a pesar de que el modelo más alto de la gama C4 sí admite blindaje y los elementos adicionales de seguridad que requiere un vehículo de altas prestaciones dispuesto para el servicio oficial. Su coste no supera los 30.000 euros, la mitad que el vehículo seleccionado, el Citroën C6, cuyo precio es de 60.000 euros sin incluir refuerzos de seguridad en neumáticos, carrocería y cristales, que pueden duplicar la factura final que abonará la Xunta.

El bulo de Obama

Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar "el coche de Obama". Como un arma recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de "la tendencia al lujo" del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.

Después de ganar las elecciones, Feijóo aparcará el vehículo alemán de Touriño y disfrutará de uno francés "muy digno", según el líder gallego intentando cerrar el juego electoral que le ha acompañado durante las últimas semanas. "Creo que deberíamos dejar de hablar de esto", pidió el martes Feijóo en la misma entrevista en la que anunció qué exclusivo modelo presidirá su parque móvil oficial.

Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa.

El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco años, entre 2008 y 2012.

Una campaña en el Audi de Emilio Pérez Touriño

Según aseguró Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral gallega, "todos los periódicos y tertulias" se han hecho eco del "deterioro" de imagen de una Galicia gobernada por un bipartito con aires de nuevo rico. En realidad, fueron ABC y la Cope quienes más insistieron en esa idea. El PP rentabilizó en campaña la acusación generalizada de "despilfarro" que lanzó sobre la Xunta presidida por Touriño y caricaturizada en su coche oficial, un Audi A8, "más caro que el de Obama". La inclinación "al lujo" del ex presidente socialista no acababa ahí ya que sus sillas son –y serán si no las cambia ahora– "mejores que las de los Reyes Católicos", según Feijóo. El líder de la derecha gallega llegó a decirse "avergonzado" por tanto dispendio y erigió a Galicia en "referente nacional del despilfarro", gobernada por dos "jeques", Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana

<http://www.publico.es/espana/politica/206600/fejoo/disfruta/tresanos/coche/gratis/total>

FIN A OCHO AÑOS EN LA SOMBRA LA PERIODISTA CHINNY GÁMIR SE 'DESCUBRE' COMO LA PAREJA OFICIAL DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

A Carmen Gámir todo el mundo le llama Chinny, incluso sus compañeros de trabajo y, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, que es su pareja desde hace más de ocho años, mucho tiempo con una enorme discreción que se terminó hace apenas una semanas cuando comenzó a aparecer tímidamente a su lado. Reconoce que cada vez le cuesta más mantener este perfil bajo que se autoimpuso cuando Feijóo volvió a Galicia, primero para formar parte de la Xunta y después para asumir la presidencia del PPdeG.

Hasta hace dos meses Chinny era periodista en activo de La Región y Atlántico, y hasta ahora había conseguido esquivar los focos, no sin dificultad. Hasta ahora, porque, reconoce, cada vez le resulta más difícil evitar una cierta curiosidad en su condición de pareja del antes vicepresidente de la Xunta, mucho antes presidente de Correos y ahora líder de la oposición y aspirante a dirigir el próximo Gobierno gallego. 'Hasta ahora, no tenía ningún problema para hacer informaciones de todos los partidos. Aunque sabían lo mío con Alberto, nadie me puso problemas', explica tras un mitin del PP en el que ocupó un discretísimo y lejano lugar, muy lejos de donde Feijóo hablaba.

Chinny ha tenido que dejar la profesión, de momento, y pedir una excedencia mientras la campaña se encuentra en lo más alto, así que ahora tiene instalada su residencia en Vigo.

Carmen Gamir nació en Filipinas y parece que de eso le viene su diminutivo. Desde hace muchos años vive en Madrid, donde sigue la información relacionada con Galicia, sobre todo en el Congreso y el Senado. Allí fue donde conoció a Alberto Núñez, cuando éste era presidente de Correos. Fue el año 2000, y el inicio de su relación fue por una entrevista para este diario. Desde entonces, hasta ahora (más de ocho años), primero con cierta libertad y desde que Feijóo fue llamado por Fraga a Galicia, con más dificultades. Con todo, asegura que cuenta con los dedos de una mano los fines de semana que no pudie ron pasar juntos. 'Recuerdo algunos viajes que tuvo que hacer a América y algunos encierros que organizaba Fraga para el Gobierno. Ha sido más o menos llevadero hasta ahora, que empieza a costar más que nuestra relación pase desapercibida', cuenta.

¿Cómo es Núñez Feijóo? 'Muy divertido, con mucho sentido del humor. Muchas veces se ríe, y yo también, cuando en las informaciones aparece que está soltero y no tiene pareja. Para mí era mejor así, me permitía seguir con mi trabajo, pero ahora es más difícil', añade.

NÚÑEZ FEIJÓO OFRECE VENDER EL AUDI DE TOURIÑO PORQUE NO LO NECESITA

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de vender el Audi oficial del hasta ahora presidente Emilio Pérez Touriño y ha ofrecido el vehículo a quien quiera comprarlo porque el Gobierno de la Xunta "no lo necesita".

Ha asegurado que él "andaré" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia

En una entrevista en el programa de Antena 3 "Espejo Público", Núñez Feijóo se ha dirigido a la entrevistadora para decirle: "si usted conoce a alguien que lo quiera comprar, yo desde ahora mismo me someto a cualquier persona que quiera comprar ese coche, porque creo que no lo necesitamos y lo que no se necesita es mejor cambiar y comprar otra cosa". Además, a la pregunta de si cumplirá su promesa de comprar un Citroen de los que venden en la planta de Vigo, Núñez Feijóo ha comentado que espera que el Gobierno se lo compre. El candidato popular a la Presidencia ha asegurado que él "andaré" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia y ha reiterado que "esa es su marca y ese es su coche". Sobre el despacho de Touriño y a la pregunta de si también lo venderá, Núñez Feijóo ha dicho que el despacho es "una obra civil" que espera estará "consolidada". El candidato del PP ha subrayado que lo que sí hará el Gobierno de la Xunta es "dar ejemplo" al igual que muchas familias que están haciendo "un enorme esfuerzo de austeridad". Núñez Feijóo también ha comentado que el Plan es "adelgazar" el Gobierno en un 25 por ciento y pasar de 13 consejerías a 10, y disminuir en un 40 por ciento el número de altos cargos, de 52 delegaciones provinciales que tiene la Xunta a cuatro.

RAJOY: «FEIJÓO NO TIENE COCHE NI YATE PERO ES MEJOR QUE TOURIÑO Y QUINTANA»

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene coche ni yate", pero "es mucho mejor" que sus rivales electorales del PSdeG y del BNG, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, respectivamente. Rajoy se ha expresado de este modo durante un acto electoral celebrado en Ourense y en referencia a una foto, publicada en algunos medios, en la que figura el líder de los nacionalistas gallegos, Anxo Quintana, en un yate junto al empresario Jacinto Rey, beneficiario al parecer de un concurso del Gobierno gallego para la concesión de un plan eólico.

El presidente del PP ha añadido que por esta imagen los integrantes de la Xunta están "obligados a dar una explicación". Igualmente ha ironizado sobre la "desaparición" de los kioscos de Ourense de los periódicos que publican la imagen o se hacen eco de la stampa. Al margen de la fotografía de Quintana con el empresario, Rajoy nuevamente ha elogiado las virtudes del candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, un político "competente, trabajador, con conocimientos y experiencia", artífice en gran medida del salto adelante que ha dado Galicia en materia de infraestructuras, y por tanto, "bueno" para una comunidad autónoma que el domingo vivirá jornada electoral. Y para sentenciar cualquier alusión a la foto del yate, ha dicho: "Y es mucho mejor que Quintana y que -el candidato socialista- Emilio Pérez Touriño juntos; no tiene coche ni yate, pero es mucho mejor". Además, el PP, "un gran partido", está volcado en la victoria electoral de Feijóo, pues tiene un programa y quiere gobernar, según ha señalado Rajoy, con los votos de la gente y "no ligarse con otros con programas distintos". El presidente del PP ha recurrido de nuevo al sarcasmo para afirmar que si bien socialistas y nacionalistas plantean propuestas propias del gobierno, "Touriño, si tiene la oportunidad, irá detrás de Quintana de aquí a Sanlúcar de Barrameda, ida y vuelta, y varias veces".

Por ello, ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los simpatizantes del partido, un "esfuerzo" para evitar "otros cuatro años perdidos", algo que sólo puede asegurar el PPdeG, pues sabe cómo resolver la crisis económica -ya lo hizo en 1996-. La receta para ello consiste en tener "objetivos claros" y medidas diáfanas, entre ellas la reducción de impuestos, planteamiento que Feijóo llevará a la práctica en Galicia si gobierna y que el PP establecerá en el Estado cuando llegue a La Moncloa, para lo que tampoco, ha dicho Rajoy, "falta mucho".

FEIJÓO DECLARA 570.000 EUROS, CON PISOS Y FINCAS EN GALICIA Y MADRID

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene un patrimonio de 517.000 euros, que incluye dos viviendas en Vigo y Madrid, fincas en Moaña (Pontevedra) y Santiago de Compostela, y un Citroën -su marca preferida desde que volvió a la Xunta- comprado este mismo año, que vino a sustituir a su Audi A4 de cuando estaba en la oposición. Al igual que hizo al llegar al poder, también en su vida personal, Feijóo optó por jubilar la berlina alemana cambiarla por un todoterreno de la marca francesa que al menos tiene factoría en Vigo. Pero el del presidente no es ni de lejos el patrimonio más abultado del Gobierno gallego. Lo supera con mucho el titular de Economía e Industria, Javier Guerra, con más de 15,6 millones de euros en propiedades.

Este conselleiro y exdirectivo de varias multinacionales, expropietario de la firma El Secreto del Mar, que comercializa la marcas de moda juvenil como El Niño y Gurú, no debe un céntimo. En la declaración de bienes que publicó ayer la Xunta tiene el pasivo a cero y declara 365.000 euros en bienes inmuebles -según su valor catastral, no el de mercado- y 15,3 millones en el apartado de "otros bienes". Antes de emprender su aventura empresarial por libre fue directivo de multinacionales como Nike GFT Moda, Alfico y Skechers. Su condición de empresario ha suscitado variadas polémicas en el Parlamento y el Bloque suele acusarlo de tener deslocalizada la producción de sus factorías en Portugal. Guerra suele repetir a la prensa y a algunos compañeros de partido que no precisa de la política para vivir y que si decidió enrolarse en la Xunta fue para echar una mano a Galicia.

Le sigue en la lista Roberto Varela, responsable de Cultura y excónsul en Nueva York, con 436.000 y 201.000 euros respectivamente. El pasivo del diplomático, sin embargo, asciende a 312.000 euros. Es el más endeudado del Ejecutivo.

En el otro extremo, la que menos bienes declara es la responsable de las cuentas públicas de Galicia, la titular de Facenda, Marta Fernández Currás: solo 78.000 euros. La relación se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia, como había anunciado Feijóo hace más de dos meses, y tendrá que actualizarse, ese es el compromiso, cuando cese el Ejecutivo "al final de la legislatura". El Gobierno central ya cumplió en septiembre y con el mismo detalle. Incluía, eso sí, a sus secretarios de Estado.

www.elpais.es 10.12.11

na visión subjetiva y nada neutral de Los Genoveses originales y genuinos

domingo, 24 de julio de 2011

La lista de imputados del triler de Feijóo



El triler con el Papa y su novia, novia

Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia y Presidente de los genoveses gallegos tiene una extraña habilidad para engañar a mucha gente a la vez. Es un triler profesional y aunque trata de disimularlo pertenece a la misma escuela genovesa de Formación del Espíritu Nacional que la nueva **Emperatriz de la Mancha, Mª Dolores de Cospedal**.

También tiene su propia doctrina sobre la importancia de los votos frente a las actuaciones judiciales. Dice el triler que : **"A mí me llegan los principios éticos que me dan los votos"**. Y se queda tan contento. Con esta declaración de plantilla suele curarse en salud cuando los jueces actúan y le achuchan.

Además Feijóo tiene su propio fondo de armario en el que conviven **caciques clásicos tipo José Luis Baltar** con sospechosos consejeros que a su vez almacenan a todo tipo de imputados por los tribunales. Aquí os va una relación provisional susceptible de ampliación en los próximos días :

José Manuel Álvarez Campana . Ex Presidente de Portos de Galicia. Implicado en el Caso Rinlo, en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo.

Ethel Vázquez. Directora General de Infraestructuras. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Imputada

Antonio López Blanco. Subdirector de Planificación. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Imputado por la Operación Campeón.

Mateo Maigler. Subdirector de Estradas. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Imputado por la Operación Campeón.

Joaquín Varela de Limia Cominge. Director General del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Imputado en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos

Carlos Silva Liste. Subdirector de Información Especializada. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Imputado en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos

Andrés Hermida Trastoy. Director General de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo.

Jaime Bouzada Romero. Director General de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia. Imputado por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias

Ramón Pérez Mariño. Jefe de Servicio del área técnica de la sociedad pública Sogama . Imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias

Ángel Javier Costal Vázquez. Jefe de Transferencia y Transporte de la sociedad pública Sogama . Imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias

Además de estos **10 imputados**, siguen en sus funciones cargos de la Xunta ya condenados judicialmente:

Rogelio Martínez. Superdelegado del Gobierno en Ourense. Está condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia

Ana María Díez López. Directora General de Formación y Colocación. Condenada por un juzgado de Ferrol por despido improcedente.

Una visión subjetiva y nada neutral de Los Genoveses originales y genuinos

miércoles, 12 de enero de 2011

Alberto Núñez Feijóo : El turista accidental



El susodicho posando con naturalidad

Alberto Núñez Feijóo es un genovés despreocupado y sin complejos. Además no le importa que se sepa. Por ejemplo, en plena crisis económica ha tirado la casa por la ventana y ha cogido a su parienta colaboradora, no se sabe bien si a costa o no del contribuyente y se ha marchado a Brasil a pasar unas largas y tranquilas vacaciones. **Van ya 10 días y si te he visto no me acuerdo**. Dejó grabado el mensaje navideño para sus súbditos, incluidos los que le votan y los que le botarían y a vivir que son dos

días.

Imaginémonos por un instante que hubiera sucedido y que hubieran clamado las Cospedal y los Pons si por ejemplo ZP hubiera hecho lo mismo que el trilerio de Feijóo y desde el 30 de Diciembre estuviera de vacaciones en algún lugar del Caribe. El cinismo y la poca vergüenza es lo que tiene

EL CACIQUISMO NO SE ACABA EN UN DÍA

Feijóo prometió hace dos años regenerar la política y tumbar el clientelismo en 24 horas pero los incumplimientos del código ético se repiten sin que el PP actúe

Una mañana de febrero, hace ahora dos años, lanzado hacia la presidencia de la Xunta, el candidato Alberto Núñez Feijóo prometió que nada más llegar al poder acabaría "con el caciquismo y el clientelismo en un solo día". Un bus de excursionistas jubilados camino de Portugal había parado por sorpresa en Oia para completar el aforo de un mitin del BNG y el episodio le sirvió a Feijóo para "pedir perdón en nombre de la política" y exigir la dimisión de Anxo Quintana. Cuando vio que el entonces vicepresidente no estaba por la labor, elevó el tiro y reclamó al presidente, Emilio Pérez Touriño, la destitución "fulminante" de su socio cuando quedaban cinco días para las elecciones.

Alcaldes y cargos imputados esperan los juicios desde sus despachos

Para significar la nueva era que abriría su mandato, en aquellos mítines deslizaba incluso alguna crítica a los Ejecutivos de Fraga. Frente al bipartito y "sus escándalos", el nuevo PP no admitiría mácula en sus dirigentes. Eso fue antes de ganar las elecciones. Desde entonces, media docena de cargos institucionales y de partido han vulnerado el código ético del PP sin que su presidente haya movido un dedo. El último caso significativo es el de los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, a quienes el juez ha dejado en libertad provisional tras imputarle los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en la Operación Orquesta contra una presunta red de corrupción en la Cosa da Morte. Según los estatutos del partido, ambos regidores deberían ser apartados de sus cargos institucionales. De momento, compatibilizarán sus visitas al juzgado cada quincena con el bastón de mando, y el PP sigue considerando la idea de presentarlos como candidatos.

No son casos aislados. El ambicioso listón de la ética de Feijóo en campaña queda también muy alto para Evaristo Juncal. El ex delegado de Urbanismo de la Xunta en Pontevedra abandonó su puesto en el Gobierno cuando se supo de su chalé ilegal y de los negocios que mantenía con testaferros de narcotraficantes. Tras las informaciones publicadas por este diario, fue relevado en la consellería, pero sigue como presidente del PP de Caldas, donde nunca ha pagado impuestos por su segunda residencia.

La ansiada regeneración democrática de aquellos mítines está, sobre todo, en las antípodas del comportamiento de las diputaciones de Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última, José Luis Baltar, simultanea el mensaje de austeridad del PP, que repiten Mariano Rajoy y Feijóo, con la contratación de familiares de los compromisarios que permitieron a su hijo hacerse con la presidencia provincial del partido. La institución gasta más en personal que la Diputación de A Coruña, mientras busca acomodo a familias populares para saldar favores. Y la dirección regional mira hacia otro lado. El barón de la provincia de al lado, Rafael Louzán, disfruta de manga ancha para fraguar mociones de censura y pactos con tráfugas en los ayuntamientos que controla. Si alguna ha disgustado a la cúpula del PP gallego, sus dirigentes optaron por ver, oír y callar.

Igual que hizo hace mes y medio cuando el alcalde de A Merca -un municipio con 2.500 vecinos-, Manuel Jorge Velo, se adjudicó un sueldo de 3.600 euros en el Ayuntamiento hasta el día de las elecciones. Interrogado sobre si avalaba esa decisión, Feijóo respondió hace un mes que pediría explicaciones y actuaría en consecuencia. Nunca más se supo.

Tampoco hubo represalias contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, a quien el fiscal denunció en un juzgado por prevaricación urbanística, después de que permitiese aflorar mamotretos por todo el municipio que ni siquiera contaban con los servicios básicos. Las primeras sentencias han anulado los permisos que concedió su Junta de Gobierno, pero, lejos de castigar su conducta, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lo ha

premiado con un convenio para corregir todas esas deficiencias de los suelos con dinero público, 14 millones de la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo.

El regidor de Portas, Roberto Vázquez Souto, espera también un juicio por delito fiscal sentado en su despacho. Como lo ha hecho durante estos dos años el alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, otro habitual de los juzgados por cuestiones urbanísticas y que es además promotor inmobiliario en su propio municipio.

La regeneración que obvia Feijóo

- Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, imputados por cohecho y prevaricación siguen ostentando el bastón de mando, pese a que el código ético del PP obligaría a apartarlos de sus cargos.

- El presidente del PP de Caldas de Reis, Evaristo Juncal, continúa al frente del partido después de ser relevado en la Xunta cuando se conoció que tenía un chalé ilegal y sus negocios con testaferros de narcotraficantes.

- El alcalde de Barreiros se mantiene en el poder después de que el fiscal lo haya denunciado en el juzgado por prevaricación urbanística. La Xunta y la Diputación de Lugo financian los servicios de los que carecen los suelos donde concedió licencias.

- El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, continúa dando contratos a familiares de los compromisarios que ayudaron a su hijo a ganar el congreso provincial.

- Rafael Louzán pergeña mociones de censura con transfugas en Mos y Silleda con la aquiescencia de dirección regional.

www.elpais.es 08.02.11

GALICIA ENTRA EN LO PEOR DE LA CRISIS

El paro avanza en Galicia más rápido que en el resto de España y la producción industrial se desploma - Las ventas al exterior pierden fuelle

A Galicia las cosas le suceden tarde, para bien o para mal. Hace dos años, cuando media España temblaba de miedo por la crisis, un sindicalista se quejaba amargamente porque, decía, los jóvenes gallegos interpretaban un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como unas vacaciones pagadas. Ahora, con 21.000 menores de 25 años apuntados al Servicio de Colocación, ya no se hacen bromas con el tema. Los 237.313 parados con que acabó 2010 son 14.474 más que los anotados en las oficinas un año antes. Galicia es la cuarta comunidad que más desempleados ha generado en los últimos doce meses. Sus listas corren un 25% más rápido que la media española. Aún así, según la Encuesta de Población Activa (datos del tercer trimestre de 2010), la tasa de paro roza el 15% cuando la media del país acaricia el 20%.

La bolsa de pisos nuevos sin vender suma 34.323 viviendas

"El debate no debe centrarse en el Xacobeo", opina Manuel Lago

Unos 21.000 menores de 25 años no encuentran trabajo en Galicia

El crecimiento de viajeros en 2010 fue del 6% según Estadística

La mala evolución del paro se suma a otros datos bastante desalentadores. La producción industrial cae entre enero y noviembre de 2010 un 3,4%, mientras que el índice general español avanza en positivo un 2,7%. Las últimas cifras de vivienda del Ministerio de Fomento muestran que la bolsa de pisos nuevos sin vender ha crecido en Galicia más que en ninguna otra comunidad (excepto Valencia) el año pasado. Suma 4.462 inmuebles vacíos y alcanza las 34.323 unidades, por encima de los 20.000 que estimaban los promotores. Los precios del metro cuadrado construido, por el contrario, crecieron un 0,2% cuando en el resto del país bajaban

(aunque moderadamente), lo que significa que los constructores no quieren asumir las pérdidas mientras la banca les siga refinanciando.

¿Significa que se acaba aquel *plus de resistencia* del que presumía el anterior gobierno bipartito de la Xunta, o es que realmente nunca existió? "En el último año el índice de producción industrial y el empleo caen fuertemente. Una vez descontado el menor *shock* inicial de una burbuja inmobiliaria, que aquí estaba menos inflada, y barrido el activismo del gobierno bipartito en inversiones, dependencia y servicios sociales, tan solo queda como factor diferencial la obra pública en AVE, autovías y puertos". Para Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, estos son los únicos combustibles de la máquina que tira del mercado. Sectores básicos están sufriendo el correctivo de la crisis (automóvil, naval, construcción, lácteo) cuando en otras comunidades autónomas se tocó fondo. "Las exportaciones son el único componente de la demanda agregada que genera crecimiento económico. Pero a diferencia de España, donde observamos que un trimestre tras otro las exportaciones crecen más que las importaciones, en Galicia constatamos lo contrario. En el tercer trimestre han crecido más las importaciones y en consecuencia han lastrado el crecimiento", añade Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas de la Fundación Barrié.

El PIB gallego, que en 2008 crecía con un diferencial positivo de ocho décimas frente al del conjunto del Estado, ha perdido buena parte de ese empuje. En el tercer trimestre del año pasado, esa diferencia, positiva para Galicia, se redujo a la mitad. Y ese *plus* se recortará aún más, según las propias previsiones de la Consellería de Facenda. "Debemos partir de la base de que estamos ante una crisis de ámbito mundial. Galicia, como el resto de las economías, está sufriendo las consecuencias", concluye el catedrático de economía financiera de la Universidad de Santiago José A. Redondo, que destaca la menor tasa de paro y el superávit de la balanza comercial. "No debemos ocultar deficiencias estructurales que es necesario corregir y que solo tienen solución a muy largo plazo".

El efecto Xacobeo ha ayudado a amortiguar un poco el empeoramiento de los índices, aunque las estadísticas de viajeros que se alojan en establecimientos turísticos (excluidos, por tanto, los peregrinos), hablan de crecimientos modestos (del 6% en el número de visitantes y del 5% en pernoctaciones cuando solo falta por contabilizar el mes de diciembre).

"El Xacobeo no es suficiente para contrarrestar el grave problema industrial", apunta el economista Manuel Lago. "El debate no debe centrarse en si el Xacobeo aportó crecimiento, el verdadero debate es nuestro sector industrial y la Xunta lo elude obsesionándose con un tema menor", añade. No es de la misma opinión Luis Caramés, catedrático de la Universidad de Santiago: "Galicia viene de vivir un exitoso Xacobeo con cifras millonarias de visitantes. Presenta una tasa de crecimiento más positivo que el del conjunto de España. Si la industria levanta cabeza es posible que concluyamos 2011 creciendo el 1% o, lo que es lo mismo, todavía sin crear empleo". Es de la teoría de que Galicia "sigue un ciclo relativamente especial dentro de España", con crecimientos menos espectaculares cuando las cosas van bien y recesiones menos bruscas.

Entretanto, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la culpa de todas las tensiones económicas" es del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En concreto le reprocha los acuerdos de financiación autonómica (en los que las comunidades del PP se abstuvieron), la presión para reducir el déficit de las autonomías, la política sanitaria (por la contestación al catálogo de medicamentos) y la Ley de Dependencia. Ciertamente que Galicia es una de las pocas regiones disciplinadas en el objetivo del déficit, pero también que su deuda alcanza ya el 10,6% del PIB, por encima de la media.

"La Xunta tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y amplias competencias en industria, economía, infraestructuras, empleo o educación. Es, por lo tanto, el principal agente económico del país, por encima del Gobierno central. De ahí que la responsabilidad de la evolución económica mejor o peor recae en el Gobierno autónomo y su presidente", reflexiona Manuel Lago.

El año pasado 12.963 trabajadores estuvieron afectados por un ERE. De ellos, 1.470 fueron despedidos. Son, comparativamente, 7.501 y 434 menos que en 2009, aunque según un informe de CC OO, las empresas gallegas utilizan los ERE sólo en el 5% de los casos de despido. En seis de cada diez rupturas de contrato prefieren la vía rápida: reconocer inmediatamente carácter improcedente del acto y depositar la indemnización.

En este mar revuelto de la economía, la comunidad autónoma acaba de asistir a la operación que dio lugar a la fusión de las cajas. Su objetivo a largo plazo es convertirse en un elemento de dinamización. Pero Novacaixagalicia tiene que hacer frente de forma inmediata a un montón de problemas, como despedir a 1.200 trabajadores, afrontar los pagos del dinero que ha pedido prestado al Frob y pelear para seguir siendo una caja de ahorros. Si Merrill Lynch ha acertado en su último informe, la caja gallega necesita recapitalizarse con 3.100 millones. No va a ser fácil que, en estas condiciones, financie además la recuperación económica de sectores clave para Galicia.

www.elpais.es 23.01.11

PACHI VÁZQUEZ ACUSA A FEIJÓO DE DEJAR A GALICIA SIN PRESIDENTE DURANTE 10 DÍAS

Pasados 10 días desde que comenzó sus vacaciones, no había ayer agenda oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Sí hubo una escueta nota en su nombre con declaraciones sobre el comunicado de ETA, y críticas de la oposición por permanecer "ausente de los problemas de Galicia" durante todo este tiempo, en palabras del portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, reconoció el derecho del presidente de la Xunta a estar de vacaciones, pero advirtió: "Lo que no es normal es que Galicia esté sin presidente durante 10 días".

"Llevamos 10 días sin saber oficialmente dónde está el presidente de Galicia, y sin que el *Diario Oficial de Galicia* haga mención alguna a si está aquí o nos está dirigiendo desde Brasil o desde cualquier parte del planeta", acusó el secretario general del PSdeG. En ausencia de Feijóo, que pasó sus vacaciones en Salvador de Bahía, y a falta de una delegación expresa de competencias a otro conselleiro, la presidencia de la Xunta recayó en funciones todos estos días en la titular de Sanidade, Pilar Farjas, como miembro del Gobierno de mayor edad.

Vázquez recordó a Feijóo su actitud en la oposición, cuando exigió las cuentas de unas vacaciones del entonces presidente, Emilio Pérez Touriño, en una casa de O Grove. "Yo doy por sentado que se las paga él", contrastó, aunque consideró "muy difícil de explicar a los gallegos" que en momentos complicados, a causa de las inundaciones o los datos del paro, "no se sepa dónde está el presidente". "Si Zapatero se va el día 1 a Cancún sin decir nada y el 10 sigue igual, yo creo que cae el país", opinó.

Carlos Aymerich, mientras, tiró de ironía para referirse a las vacaciones del presidente. Así, subrayó que, mientras Feijóo estaba en Brasil, realizó un mensaje de fin de año "en directo o falso directo" en el que aseguraba sentirse "muy próximo" a los gallegos que están viviendo con desánimo por el desempleo y en el que recordaba su situación de "responsabilidad". Al respecto, bromeó con que esa responsabilidad se debía de referir a "la elección complicada" de qué cuál "compañía aérea" iba a elegir para su viaje, y relacionó el "espacio para la ilusión" del que habló en su mensaje navideño con las vacaciones que le esperaban.

El grupo parlamentario del PP replicó a la oposición con un comunicado en el que acusa a socialistas y nacionalistas de "dramatizar", pero que no aclara el paradero del presidente de la Xunta ni la delegación de competencias. Según el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, Feijóo estuvo "en contacto, no solo con su Gobierno, sino también con el de España". Como prueba de esto último, cita las conversaciones que mantuvo por teléfono con las ministras de Defensa y Pesca por el secuestro del Vega 5.

www.elpais.es 11.01.11

LA XUNTA REPARTE 151 MILLONES DE EUROS EN CONTRATOS SIN PUBLICIDAD

La mitad de las adjudicaciones de las consellerías en 2010 se efectúan a dedo

Se suceden los gobiernos, se multiplican las promesas pero, a la hora de la verdad, ninguno renuncia al ventajoso sistema de la adjudicación directa. Sólo en los 11 primeros meses de 2010, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha repartido más de 151 millones de euros en 733 procedimientos negociados sin publicidad. Eso supone que más de la mitad de las

adjudicaciones del Gobierno gallego han sorteado la publicación en el *Diario Oficial de Galicia* (DOG), por un importe que supera al 8% del total destinado a contratos de obras y servicios.

Deportes distribuyó en un solo día dos millones de euros entre 56 clubes

La ley de contratos del sector público establece el procedimiento negociado como una modalidad que debe estar justificada por razones "técnicas", "artísticas" o "de urgencia", y que no deben superar los 60.000 euros salvo excepciones. Con este sistema, la Administración debe consultar con un mínimo de tres candidatos, de los que resultará un adjudicatario elegido por la mesa de contratación. Eso dice la ley, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la realidad, ya que tanto el Gobierno de Feijóo como el bipartito o antes el de Fraga exprimen al máximo un sistema que ni propicia la competencia entre licitadores ni promueve la concurrencia en condiciones de igualdad.

Los 733 contratos negociados sin publicidad firmados entre enero y noviembre de 2010, ambos incluidos, figuran en la propia plataforma de contratación de la Xunta en Internet, que funciona desde 2008 y se puede consultar en la web de la Xunta. La cantidad total asciende a 150.847.542 euros. Su número total supera en 73 (un 11%) al de contrataciones de obras y servicios de la Xunta que se publicaron en el DOG en el mismo período, por una cantidad total de 1.667 millones de euros. En esa cifra entran grandes contrataciones como el hospital de Vigo, que supera los 300 millones.

Aunque todas las consellerías recurren a este sistema, la de Medio Rural es la que más destaca. También ha empleado muy recientemente el mismo método la Fundación Deporte Galego, que el pasado 2 de diciembre repartió de una tacada 1,9 millones de euros entre 56 clubes mediante una orden firmada por el presidente de la comisión ejecutiva, el director general de Deportes, José Ramón Lete. El informe del Consello de Contas de 2006 destapó un fraude en las ayudas a federaciones y clubes deportivos, y atribuía a Lete "graves deficiencias" en su gestión de Deportes durante el mandato de Manuel Fraga.

En este caso, ninguno de los clubes seleccionados supera el límite legal de 60.000 euros sin IVA que la ley establece para los contratos a dedo, listón que se han saltado en abundantes ocasiones otros departamentos del Gobierno gallego acogiéndose a las excepciones que establece la ley. Es lo que hizo la Presidencia de la Xunta para contratar "sistemas de alimentación ininterrumpida para los nodos de la red corporativa de la Xunta" (254.310 euros); Educación, para "las actividades Abrapalabra e ola, ola, la!" (206.800 euros), y Medio Rural, para los servicios de "difusión y divulgación de información agroganadera y forestal" en Lugo y Ourense (125.000 euros cada contrato).

www.elpais.es 06.12.10

GALICIA. UN BLINDADO DE FRAGA, 31.000 EUROS

Pesaron en la campaña electoral de las autonómicas de 2009 tanto o más que la rebaja fiscal generalizada que Feijóo prometió para 600.000 familias. Eran el símbolo "del lujo y la suntuosidad" que el PP atribuía a Touriño y, por extensión, a todo conselleiro del bipartito que osase remodelar un despacho. Pero cambió el Gobierno, y, como en el caso de la bajada del IRPF, nunca más se supo de aquellos audis. En realidad, del Audi, porque de los tres blindados que había en el parque móvil de la Xunta, el gabinete del presidente socialista había comprado uno por 480.000 euros, frente a otros dos acorazados que por un precio similar (300.000 euros, pero siete años antes) se habían adquirido para Manuel Fraga, el primero en septiembre de 2001 y el segundo catorce meses más tarde.

Los tres blindados siguen hoy en las instalaciones de un grupo de concesionarios de Santiago, Noyamóvil, que comercializa Citroën y Lancia, entre otras marcas, y proveedor habitual de la Xunta, y que se hizo con ellos a cambio de pagar a la Consellería de Presidencia 330.000 euros en especie (entregó coches que el Gobierno gallego prometió destinar a servicios sociales).

Y no parece que tengan mucha salida en el mercado de segunda mano las berlinas blindadas con inhibidor de frecuencia y sistema antibombas durante esta época de crisis. En el escaparate de

Noyamóvil conviven desde hace meses los dos vehículos de Fraga junto a pequeños utilitarios diésel y fáciles de aparcar, mucho más demandados como vehículos de ocasión. Ambos tienen el mismo precio, 31.000 euros.

El más antiguo, matriculado en septiembre de 2001, cuenta con tracción a las cuatro ruedas, 4.200 centímetros cúbicos en su motor a gasolina, cristales a prueba de explosivos, y blindaje especial, como el que salvó al ex presidente del Gobierno José María Aznar del atentado de ETA. Entre la tapicería de cuero sobresale el teléfono con cables desde el que daba órdenes Fraga en medio de sus maratónicas jornadas en la carretera. El cartel detalla incluso el número de kilómetros, 157.323, y ofrece garantía de un año para el que se lleve este turismo "full equip".

El equipamiento del otro Audi A8 que transportaba a Fraga cuando gobernaba Galicia es similar: también cuenta con asistente de aparcamiento mediante sensores (una auténtica revolución tecnológica a principios de 2000) y en cada lateral tiene incluso soportes para colgar esas banderitas que tanto lucen en las cumbres internacionales. Si bien en este caso, no hay anuncio que explicita las características del vehículo, y los vendedores de tienda tampoco ofrecen demasiados datos porque "esos modelos los gestiona directamente la dirección". "El que puede comprar uno de esos coches habla directamente con la dirección", admite un comercial.

En cuanto se menciona el tercer Audi, el de la polémica, el que usó el PP en campaña para decir que era "más caro que el de Obama", del que algunos candidatos llegaron a decir que "tenía misiles", nadie sabe nada. Ni siquiera la dirección de Noyamóvil que le busca comprador desde hace un año. A diferencia de los otros dos, el blindado de Touriño no está en exposición y el concesionario tampoco explica el precio a los periodistas. "Bastante polémica tuvo ya ese coche", es lo máximo que acierta a decir uno de los gestores, al otro lado del teléfono. Después de meses acumulando polvo en los sótanos de la Xunta, el Audi de Touriño espera chófer en algún garaje de Santiago.

(www.elpais.com, 31/10/10)

"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"

La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó el pasado miércoles a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".

El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. Ayer, el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.

- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.

- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable.

- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.

- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000

mueritos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.

- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.

- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten apartar el asunto.

- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica.

- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores.

(www.publico.es, 15/10/10)

GALICIA. FEIJÓO PERMITIRÁ MANTENER NEGOCIOS PRIVADOS A LOS ASESORES DE LA XUNTA

De forma silenciosa, en la misma Ley de Presupuestos en la que la Xunta quiere recuperar el nombramiento a dedo de los jefes de servicio, Feijóo pretende imponer un cambio sustancial en el régimen de incompatibilidades que rige para los cargos públicos. Se trata de una modificación de la norma que promovió Fraga en 1996, por la que se eximirá a los asesores de la Xunta de atenerse al sistema de incompatibilidades que deben respetar los demás cargos de la Administración autonómica.

La modificación figura entre la documentación remitida por la Consellería de Presidencia a los sindicatos para discutir hoy la reforma de otra ley, la de Función Pública. El Gobierno gallego colgará ambos cambios normativos del proyecto de Ley de Presupuestos. En la de incompatibilidades, la modificación afecta a un único artículo, el 2, en el que figura la relación de cargos públicos a los que les incumbe el régimen de control. Desaparece el personal de confianza y de asesoramiento especial, tanto de la Xunta como de organismos autónomos, sociedades y entes públicos y fundaciones, unas 200 personas, y se les sustituye por los jefes de Gabinete del presidente y los conselleiros, 11 en la actualidad. Como consecuencia de este cambio, asesores y demás cargos de confianza de la Administración gallega ya no estarán sujetos al férreo régimen que deben atender los miembros del Gobierno, secretarios generales, directores, delegados, responsables de organismos autónomos y cualquier otro puesto cuyo nombramiento se efectúe por decreto del Consello de la Xunta. Así, dejarán de ejercer sus funciones con dedicación absoluta, y podrán combinar su actividad pública con cualquier otra profesión por cuenta propia o ajena.

A diferencia de como viene ocurriendo desde 1996, también podrán ocupar cargos de dirección, representación o asesoramiento de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles y consorcios. La reforma legal les permitirá asimismo compatibilizar el cargo en la Xunta con la percepción de pensiones de jubilación, y cobrar más de una remuneración, periódica o eventual, con cargo a los presupuestos públicos. Con su salida del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, asesores y personal de confianza perderán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho interviene empresas o sociedades en las que han participado ellos o sus familiares. También podrán poseer la titularidad de participaciones sin límite en empresas con conciertos o contratos con el sector público, ya sea estatal, autonómico o local.

La medida beneficia al personal que nombran para su asesoramiento tanto el presidente de la Xunta como los conselleiros y el resto de altos cargos, ya sean de la Administración autonómica como de organismos públicos o fundaciones. A diferencia del resto de cargos, con la modificación de la ley dejarán de estar obligados a formular las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales, en las que debían incluir todos sus negocios, la totalidad de sus bienes y obligaciones y las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades.

Se trata de la segunda modificación que experimenta el artículo 2 de la Lei de Incompatibilidades de Galicia en sus 14 años de existencia. En 2006, el bipartito aprovechó la Lei de Transparencia y Buenas Prácticas para establecer un cambio, aunque en el sentido contrario al ahora emprendido, al extender las limitaciones a los asesores y personal de confianza de presidentes y directores de organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones, entre otros entes.

La nueva reforma se tramitará en el mismo proyecto que los Presupuestos y la de Función Pública que recuperará el nombramiento a dedo de al menos 700 cargos administrativos, a partir de los jefes de servicio.

(www.elpais.com, 13/10/10)

FEIJÓO HA CREADO 200 CARGOS POLÍTICOS, SEGÚN EL PSOE

El viceportavoz del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, denunció ayer que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "con su falsa austeridad fuerza la ley de presupuestos" para designar "más de 200 nuevos cargos políticos" y premiar a los funcionarios por su "obediencia partidaria" y no por "su capacidad".

Así lo manifestó el PSOE en un comunicado, en el que además apuntaba que "el consellerio de Presidencia, Alfonso Rueda, y Feijóo renuncian a la reforma" de la Función Pública prometida y "cuelan por la puerta de atrás" la movilidad forzosa de los funcionarios.

El portavoz de Presidencia del PSdeG consideró que las políticas de Feijóo "huyen de la austeridad" y, además, "evitan una reforma en profundidad" de la administración pública. Ante estas cuestiones, el PSdeG animó a los sindicatos de la función pública "a revelarse" contra la discrecionalidad de la que "quiere hacer uso" la Xunta, al "clasificar a los funcionarios en buenos o malos", en función de sus preferencias políticas.

(www.publico.es, 13/10/10)

"NÚÑEZ FEIJÓO QUIERE QUE EL PASADO SIGA ENTERRADO... EN LAS CUNETAS"

La negativa del Partido Popular de Galicia a identificar a las víctimas del franquismo irritó a la oposición, más por la forma que por el fondo, ya que el rechazo a una proposición de ley para localizar a los represaliados de la Guerra Civil presentada por los socialistas era aguardado. "Esperábamos, en cambio, una reacción más ética", explica Concepción Burgo (PSdeG), que calificó las palabras de Agustín Baamonde (PPdeG) de "duras" y "unidas a valores del pasado que hoy nadie debería asumir".

El parlamentario conservador advirtió en el Parlamento de Galicia del peligro que supone, a su juicio, "revivir fantasmas" del pasado y llegó a decir que "un abuelo falangista lo tiene cualquiera". El nacionalista Bieito Lobeira dejó claro que no era su caso y se encargó de recordarle que tres tíos suyos fueron ejecutados por el régimen. El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los argumentos de Baamonde y aseguró que la Guerra Civil está "superada" y que los socialistas sólo buscan rentabilidad política.

- La postura contraria del PP a que se localicen los desaparecidos deja en manos de las universidades gallegas, a través del proyecto Nomes e voces, esa tarea.

- El rechazo era previsible, pero dado que era una propuesta de ley abierta a todas las víctimas, esperábamos una reacción más ética y no unida a unos valores que no asume ninguna derecha europea, que ha condenado el franquismo y otras muchas atrocidades que ocurrieron en sus respectivos países. No esperábamos una respuesta tan virulenta, que nos enseña que en el PP queda una derecha poco civilizada, alejada del centro, unida a valores del pasado y que parece querer imponer sus ideas sobre las de los demás. Algo que consideramos lamentable.

- Feijóo comentó que sentía un "respeto profundo para los abuelos que se mataron entre sí", aunque esa afirmación resulta tan inexacta como la de los "abuelos falangistas" de Baamonde.

- En Galicia no hubo guerra y fundamentalmente hablamos de represaliados. Desde el primer instante, la represión fue muy fuerte y terminó, según algunos historiadores, con unos 7.000 muertos. Me dolió el desprecio que utilizó contra las víctimas cuando dijo que el pasado tenía que quedar enterrado, lo que quiere decir enterrado en las cunetas. En cuanto a Feijóo, es terrible, porque las denigra. En Galicia no se mataron entre sí: solo murió una parte, la que sufrió la represión.

- El PP les acusa de buscar la rentabilidad política.

- Feijóo se contradice. Si es algo del pasado y está enterrado, como sostiene él, qué rentabilidad política vamos a encontrar en esos restos. La Guerra Civil está en el pasado, cierto, pero las heridas están presentes y se curan diciendo la verdad. Pero éste, el de la memoria histórica, es un terreno muy duro y difícil para ellos, donde se manejan muy mal y con mala conciencia, por lo que es normal que intenten apartar el asunto.

- Familias y asociaciones de víctimas aseguran que la Ley de Memoria Histórica, en la práctica, no se aplica.

- La Ley recoge el derecho de las familias a identificar a sus muertos y en Galicia la Xunta no ha hecho nada al respecto. No quiso firmar con el ministro Caamaño el convenio para realizar el mapa de fosas ni el protocolo de exhumaciones. En definitiva, han abandonado toda la política de la memoria histórica, por lo que decidimos presentar esta proposición de ley. Veíamos una indefensión de los afectados —familiares y asociaciones que tienen derecho a buscar a sus seres queridos y honrarlos públicamente— frente a la Xunta del PP, que sufre de inacción: no están haciendo nada y no quieren hacerlo. Había que denunciarlo, porque tenemos un compromiso moral con las víctimas, de nuestro partido y de otros, incluidos republicanos conservadores.

(www.publico.es, 15/10/10)

FEIJÓO ENSEÑA SUS COSTURAS

Empequeñeció las siglas del PP en el atrezo de campaña cuando arreciaba lo más duro de la trama Gürtel, rompió con su imagen de vicepresidente de Fraga llegando a admitir en público algunos errores del antiguo régimen, pero sobre todo prometió regenerar la vida pública tras el bipartito que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Ese era el candidato Alberto Núñez Feijóo, que se proponía regresar a la Xunta pidiendo perdón, mitin a mitin, "en nombre de la política", para conjurar los pecados de PSOE y BNG. Prueba de su convicción, cesó de forma fulminante al cabeza de cartel en Ourense, Luis Carrera Pásaro, llamado a convertirse en gurú económico del futuro gobierno, cuando supo que se iba a revelar que había cobrado comisiones no declaradas en paraísos fiscales.

El episodio sucedió a semana y media de las autonómicas de 2009 y Feijóo buscó el espejo de Obama, que por aquellos días también había relevado a quien iba a ser su jefe de control presupuestario, Nancy Killefer, por no haber declarado el sueldo de su empleada del hogar. "El presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y yo he hecho lo que tenía que hacer", sentenció entonces Feijóo.

De esa cita hace año y medio. Además de recuperar el poder en Galicia -o sobre todo por eso- el presidente de la Xunta se ha convertido en líder emergente del PP nacional y una de las voces que más influye en Mariano Rajoy. Tal y como había prometido, la nueva cara amable de la derecha ha rebajado antes que ningún otro presidente regional los gastos de su Administración,

suprimido cuatro de 12 consejerías y 47 altos cargos con sus correspondientes chóferes y coches oficiales. No hay rueda de prensa del Gobierno gallego en que "la austeridad de Feijóo" no salga a relucir, mientras la oposición aprovecha para denunciar recortes sociales como el fin de la gratuidad universal de los libros de texto.

De aquel discurso de la regeneración democrática que prometía cortar de raíz cualquier sombra de duda, antes incluso de que intervinieran los juzgados, no hay noticias. A pesar de que durante estos 18 meses se han sucedido las imputaciones judiciales de altos cargos del Gobierno, el presidente evita echar mano ya de la doctrina Obama. Y eso que en su primer año de legislatura, Feijóo tuvo oportunidad de toparse con su propio caso Killefer. Ana María Díaz López, directora general de Formación y colocación en la consejería de Trabajo, fue condenada en sentencia firme por despido improcedente (de una empleada sin contrato y sin seguro en un domicilio y un restaurante familiar)

Feijóo optó por dejarlo correr. Un año después, Díaz sigue en su puesto y a principio de cada mes hace balance de los datos del paro. Igual que el hombre fuerte del Gobierno, Agustín Hernández, que preside el departamento más inversor, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, aún después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo haya imputado por certificar en falso desde su anterior puesto como director de infraestructuras la Diputación de Pontevedra el final de una obra que apenas había comenzado a una constructora, Sercoysa, en la que él mismo había trabajado como directivo. Hernández, aforado por ser miembro del Gobierno, compareció este viernes ante el tribunal y regresó como si nada a su consejería. Feijóo sigue respaldándolo. Es su hombre para las obras públicas porque, según repite en público y en privado, está seguro de que el consejero "pudo meter la pata, pero nunca la mano".

El jefe territorial de este mismo departamento en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, también mantiene su silla después de que este diario revelase hace semanas que en 2001 pagó 156.166 euros a la trama Gürtel (a través de la firma Special Events de Francisco Correa) por un informe para instalar un sistema de información telefónica a ganaderos que en la Xunta nadie encuentra por ningún lado.

En este primer año de Gobierno del PP, se ha desvelado además que el delegado de la misma consejería, responsable del urbanismo en Pontevedra, Evaristo Juncal, tiene un chalé ilegal por el que en 24 años no ha pagado el IBI en el Ayuntamiento donde es concejal. Juncal había saltado ya a los titulares cuando se supo de sus negocios con testaferros de narcos. El presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez Campana, también se ha dado de bruces con el juzgado. La fiscalía le atribuye haber autorizado en tiempos de Fraga una piscifactoría por "intereses económicos ajenos". El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, que se ha visto involucrado en un fraude de ayudas de la Unión Europea, sigue representando a todas las consejerías del Gobierno gallego en aquella provincia. No hay noticia de que ni Feijóo ni el PP vayan a aplicar el rigor del código ético que rige en los estatutos del partido.

El compromiso de "acabar con el caciquismo en un solo día" que el nuevo PP gallego, y sobre todo su líder, abanderaron también es papel mojado. En Ourense, donde el sempiterno barón, José Luis Baltar provincial, ha cedido los trastos del partido a su hijo, José Manuel, se repiten los enchufes para acceder a la Diputación. Familiares e hijos de los compromisarios que permitieron a Baltar, tras treinta años de mandato, sucederse a sí mismo, han copado las nuevas plazas de funcionario en la Diputación de Ourense. Y mientras, la oposición no deja de repetirse qué debe pasar para que Feijóo cese por fin a alguien en la Xunta o el partido.

(www.elpais.com, 05/07/10)

LOS CASOS QUE EL PRESIDENTE NO QUIERE VER

- Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por certificar obras en falso.

- Ana María Díaz, directora de Formación y Colocación en la consejería de Trabajo, condenada por despido improcedente.

- El jefe territorial de Medio Ambiente en A Coruña, José Antonio Álvarez Vidal, pagó 156.000 euros a Gürtel por un informe que no aparece. Su homólogo en Pontevedra, Evaristo Juncal, delegado de urbanismo, tiene un chalé ilegal.
- El presidente de Puertos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, denunciado por el fiscal que ve prevaricación en el permiso de una piscifactoría.
- El superdelegado en Pontevedra, Rogelio Martínez, imputado por fraude documental.

(www.elpais.com, 05/07/10)

FEIJÓO GASTA AHORA MEDIO MILLÓN DE EUROS SÓLO EN MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA DEL GAIÁS

El presidente gallego, el *popular* Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Zapatero de “actuar como un nuevo rico en épocas de vacas flacas”, ha anunciado que va a gastar más de medio millón de euros en dotar de mobiliario la biblioteca del Gaiás, la Ciudad de la Cultura, que se construye a las afueras de Santiago de Compostela.

- La oposición acusa a Feijóo de viajes partidarios con fondos públicos
- Feijóo sigue apretándose el cinturón a su manera gastando otros 1.6 millones de euros para...
- Feijóo adjudica a dedo a su amigo Piqué un contrato multimillonario para que gestione tres...

Unos 88 millones de las antiguas pesetas destinado a la adquisición, entre otros muebles, de sillas de diseño por valor de 509 euros cada una y butacas para el auditorio por unos 800 euros la unidad. Un arrebato de despilfarro que, sin embargo, el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, se ha apresurado a justificar afirmando que “no contradice la política de austeridad de la Xunta”.

Sillas de 509 euros

Feijóo, que ha reiterado sus mensajes de austeridad, después que basara su campaña política para llegar a la presidencia de Galicia en una fuerte *crusada* contra el supuesto despilfarro de su antecesor Emilio Pérez Touriño, ha decidido anunciar cuatro licitaciones que suman exactamente 533.610 euros (lo que equivale a 88,8 millones de pesetas). La primera de ellas, con un presupuesto de 191.600 euros, está destinada a la adquisición de 376 sillas, que tendrán un coste, de media, de 509,10 euros cada una. En el pliego destaca la oferta para comprar 188 sillas destinadas a los visitantes y que son del tipo Bertoia, apellido del célebre artista y diseñador italiano que hizo el modelo Diamond de varilla soldada en la década de los años cincuenta. El precio de mercado de cada una oscila entre los 200 y los 400 euros, según *La Voz de Galicia*.

Butacas de 800 euros

El segundo pliego, con un presupuesto asignado de 94.600, está destinado a la compra de muebles fijos -mesas para puestos de trabajo. El tercero es una partida de 150.610 euros para mobiliario auxiliar (escritorios, cajoneras, archivos y mesas de reuniones). Y la cuarta licitación, que cuenta con 96.800 euros, es para dotar con 121 butacas el auditorio de la biblioteca. Cada unidad costaría unos 800 euros.

La austeridad de Feijóo

Hace unos días, siguiendo con su mensaje de austeridad, Feijóo anunció su decisión de rebajar el sueldo a los funcionarios y altos cargos, una medida que ahorrará unos 60 millones de euros. Sin embargo, la Xunta mantiene su intención de gastarse 40 millones de euros en la obra más cara que tiene en marcha Galicia, la Ciudad de la Cultura, que se construye en el monte Gaiás.

Los gastos de la Ciudad de la Cultura

El Gaiás, que será abierto en noviembre próximo, generará anualmente unos gastos fijos de 890.000 euros en concepto de consumos de energía y agua, vigilancia, limpieza y tareas de mantenimiento. El cálculo no incluye otros desembolsos corrientes, como, por ejemplo, los de suministros de material de oficina, los de primas de seguros, comunicaciones, ni, sobre todo, los de plantilla, según destaca la prensa gallega.

FEIJÓO ADMITE QUE LA XUNTA GASTÓ EN EXCESO PARA IR A LA EXPO

En medio de las acusaciones de la oposición por los gastos de los viajes de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta ha llamado la atención al departamento de Cultura por gastarse más de 14.000 euros en los pasajes del conselleiro, su jefa de gabinete y el director del Xacobeo de dos acompañantes para ir a la Expo de Shanghai (China). Feijóo admitió ayer que el coste de los billetes "pudo ser excesivo", por lo que instó a los departamentos de su Gobierno a vigilar las agencias con las que contratan y la anterioridad con la que cierran sus viajes, informa Europa Press.

Sin embargo, el presidente de la Xunta se negó a aceptar "lecciones de austeridad" por parte del PSdeG. Así, mostró su sorpresa por que los socialistas hagan ese tipo de denuncias cuando el actual Gobierno ahorró "un 90%" de los 3,5 millones de euros de presupuesto inicial previsto por el bipartito para la presencia gallega en China.

Cultura acostumbra a hacer en clase preferente todos los viajes de más de seis horas para llegar al destino "con unas pocas fuerzas". El responsable de la consellería, Roberto Varela, aseguró que en su departamento está así regulado para "viajar en unas mínimas condiciones que puedan garantizar la realización" de su trabajo, que calificó de "muy duro". Así, explicó que tuvo un acto en Shanghai a las nueve y media de la mañana tras doce horas de viaje. "Si cuento con la confianza de mi presidente tengo pensado seguir haciéndolo", sentenció.

El Gobierno deberá dar explicaciones también por estos viajes en el Parlamento. Los socialistas presentarán una moción para regular los viajes institucionales, mientras que el BNG defenderá otra iniciativa sobre la "hiperactividad viajera" de Feijóo. Además, "la confusión entre lo institucional y lo partidario", dicen, les está costando dinero público a los gallegos. El portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, criticó las frecuentes ausencias de Galicia del presidente de la Xunta y se preguntó: "¿Estamos pagándole los viajes y gastos para que haga campaña por España?", se preguntó. El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, acusó a Feijóo de "estar de bolos por España". "Tiene una pierna aquí y otra en Madrid".

Para el PP, estas críticas se deben a que la oposición "está rabiosa porque Feijóo, como Fraga, fueron admirados y queridos en el Estado español".

(www.elpais.com, 02/06/10)

LA OPOSICIÓN ACUSA A FEIJÓO DE VIAJES PARTIDARIOS CON FONDOS PÚBLICOS

Los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE y BNG han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar "de bolos" en viajes institucionales por toda España que, según la oposición, tienen carácter partidario, pese a que son pagados con fondos públicos.

Tras la junta de portavoces, sin embargo, el popular Manuel Ruiz Rivas dijo de socialistas y nacionalistas que, en realidad, lo que les contraría es el "afecto y admiración" hacia la figura del presidente de la Xunta en el resto de España, mientras que señaló que el anterior Ejecutivo sí que era un ejemplo de "despilfarro" en sus viajes.

Cuestiones

El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, anunció tras la reunión de la Junta de Portavoces que su grupo llevará al próximo pleno una interpelación sobre los viajes de miembros de la Xunta, en los que, a su juicio, se mezcla lo institucional y lo partidario.

Venezuela

A este respecto, recordó el viaje del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, a Venezuela, que coincidió con el congreso del PP en aquel país y con la entrega por la Xunta de un cheque al presidente de los populares venezolanos, como miembro de una fundación de emigrantes.

Shangai

Este viaje, dijo Leiceaga, "le está costando dinero al conjunto de los gallegos", y citó también el desplazamiento a Shangai del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y su equipo, que costó más de quince mil euros, en un momento en que "todos deberíamos apretarnos el cinturón".

De bolos por España

Se refirió también a que el presidente de la Xunta "está de bolos por toda España, publicitando su figura". Núñez Feijóo, subrayó, "tiene una pierna aquí y otra en Madrid, por si acaso suena la flauta por casualidad y tiene que desempeñar alguna función" en el PP nacional, lo que "nos está costando demasiados recursos a los gallegos".

Hiperactividad viajera

Por su parte, el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, lamentó la "hiperactividad viajera" del presidente e indicó que estaría bien que el Gobierno gallego ofrezca explicaciones sobre ella. "Como mínimo, dos días a la semana", el presidente no está en Galicia, manifestó el dirigente del BNG, que lamentó que ayer Núñez Feijóo estuviese en Andalucía "compareciendo con Arenas", presidente del PP andaluz.

En campaña

A este respecto, se preguntó si los gallegos "le estamos pagando el salario, gastos y viajes al señor Feijóo para que haga una campaña partidaria por España adelante".

Explicación del PP

El portavoz popular Manuel Ruiz Rivas replicó a la oposición al asegurar que socialistas y nacionalistas están "dolientes" por que el presidente gallego sea una figura "admirada y querida en todo el territorio español. El PSOE y el BNG, manifestó, tuvieron "bastante tiempo" para regular los viajes institucionales cuando estuvieron en el Gobierno, y así habrían "evitado muchos gastos y cuartos a los ciudadanos" y citó visitas a La Habana del anterior Ejecutivo, que a su juicio no generaron "absolutamente nada positivo".

Contra el PSOE y el BNG

"Ahora dan muchas ideas que bien pudieron plasmar en la práctica cuando dieron ejemplo de todo lo contrario" a la austeridad, señaló el portavoz del PP, que indicó que el PSOE y el BNG han sido "ejemplo de despilfarro", mientras el actual Ejecutivo reduce los gastos institucionales.

(www.elplural.com, 02/06/10)

EL PSDEG DENUNCIA CONTRATOS CON "AMIGOS DEL PP"

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, denunció ayer que la Xunta adjudicó 19,6 millones de euros a empresas de "familiares, compañeros de partido y amigos del alma". García citó las adjudicaciones a una empresa de la que es directiva la sobrina del ex ministro José Manuel Romay Beccaría, a la que se concedieron contratos por valor de cuatro millones de euros, "algunos sin publicidad".

En la lista está Tecnomá, que preside el ex conselleiro Carlos del Álamo, que "de momento" obtuvo 1,6 millones. Carat-España, que hasta 2006 fue presidida por el ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez, recibió siete millones de euros para el Plan de Medios del Xacobeo. Vueling, dirigida por el ex líder del PP catalán Josep Piqué, percibió siete millones, según el PSdeG, sin concurso. Hizo "mención aparte" el gasto de siete millones en más de 400 coches "del mismo concesionario", "casualmente, del que regaló a Feijóo un coche". También se refirió a la adjudicación de 120.000 euros a una fundación que lidera el presidente del PP en Venezuela.

www.elpais.es 22.05.10

GALICIA EMULA A VALENCIA Y HARÁ CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO ENTRE JÓVENES

La Xunta de Galicia promoverá campañas de sensibilización para a la protección del "derecho a la vida en formación", según recoge específicamente el anteproyecto de ley de apoyo a la familia que presentó el lunes. Se trata de una terminología habitual entre los colectivos antiabortistas y calcada de la ley valenciana de protección de la maternidad de 2009, abiertamente contraria a la interrupción del embarazo.

La ley introduce medidas de apoyo a los mayores y de reeducación de menores que delincan, pero cuando habla de la maternidad copia preceptos de la ley valenciana, como el "derecho de los hijos a desarrollarse en un entorno familiar alternativo al biológico, cuando este no sea propicio". También prescribe "campañas informativas" para niños y promueve la acogida y la adopción "como alternativa para que la mujer gestante pueda continuar con su embarazo". Fuentes de la consejería descartan que la ley sea antiabortista y avisan de que su tramitación aún se encuentra en una etapa inicial.

www.elpais.es 22.05.10

LAS PROMESAS EN EL AIRE DE FEIJÓO

Las propuestas electorales que le auparon a la Xunta de Galicia no se han cumplido en sus 12 meses de mandato

La estampa que inauguró la nueva era en la Xunta de Galicia no pudo ser más elocuente: 10 lustrosos Citroën aguardaron en la Plaza del Obradoiro de Santiago a que otros tantos *conselleiros* regresasen de su toma de posesión. La primera pregunta que tuvo que responder el 2 de marzo el presidente *in pectore* en la resaca de su victoria electoral fue sobre la venta del Audi A8 blindado de su predecesor, objeto de una larga polémica durante la campaña electoral. Dos anécdotas que explican el tono de la campaña que devolvió al PP al Gobierno gallego. Sin ese doble discurso, el de la crisis y el lujo del saliente bipartito, presidido por el PSOE, no se entendería este primer año de legislatura.

Nada más aterrizar en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo rebajó un 25% el número de consejerías y laminó a 45 de los 52 delegados provinciales, para cuadrar su anunciada reducción del 70% de altos cargos. De ese "plan de austeridad", que dejó envejecer docenas de *audis* en el garaje de la Xunta mientras se siguen pagando sus seguros, vivió el nuevo presidente durante sus primeros meses.

Hasta que llegó el momento de cuadrar los Presupuestos para 2010. En sus primeras cuentas, el compromiso estrella del PP para bajar el IRPF, dormita en el cajón a la espera de tiempos mejores. El propio Feijóo admite que no será posible acometer la cacareada rebaja, que ya ha pospuesto hasta el final de la legislatura. A cambio, la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, sí ha cumplido con el propósito de recortar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con mucho menor impacto en los bolsillos de los contribuyentes.

Y, mientras, la cola del paro se alarga en Galicia. Si el programa del PP lamentaba el número de desempleados, 189.903 en enero de 2009, esa cifra ahora ha engordado en 41.725 personas más. El Presupuesto de 2010 también ha dejado al aire otras costuras de la nueva Xunta: si hace un año el PP censuraba que la partida para Universidades sólo crecía un 4%, en los nuevos números cae un 2,39%.

Otro gran argumento de la campaña, el del uso del gallego en la enseñanza, sigue rigiéndose por el tan criticado decreto del anterior Gobierno de Emilio Pérez Touriño, después de que Educación presentase unas bases que el único consenso que lograron fue el del rechazo, con una multitudinaria manifestación y protestas generalizadas entre la comunidad educativa y los padres. Feijóo augura que la futura norma (que según varias fuentes está ya muy avanzada) entrará en vigor el próximo curso, mientras busca fórmulas para conciliar la libertad que prometía en sus mítines, y el equilibrio entre gallego y castellano que consagraba su "contrato con los ciudadanos".

Pero los principales desvelos del presidente de la Xunta en su arranque de mandato, sobre todo en los últimos meses, están en su proyecto de fusionar las dos cajas gallegas. Una de ellas, Caixanova, se opone. La ley de cajas, aprobada por trámite de urgencia, permitiría renovar su órgano directivo y desbloquear la unión, pero el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional ha frustrado la hoja de ruta de Feijóo.

www.elpais.es 28.02.10

FEIJÓO: "VOY A SER BREVE PORQUE HE QUEDADO CON MARÍA"

El presidente de la Xunta se insinúa a una joven actriz durante una cena con jóvenes simpatizantes del PP gallego



""Si os calláis, sigo hablando". La voz del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacerse eco entre la algarabía de un restaurante cercano a Santiago. Allí se han congregado jóvenes simpatizantes del Partido Popular de Boqueixón, Vedra, Arzúa, Melide y demás ayuntamientos limítrofes, aunque en la cita también están presentes miembros de Novas Xeracións (la franquicia gallega de las juventudes del PP) y cargos políticos venidos de otros rincones de la región.

El ambiente es festivo y algunos asistentes lo interrumpen con comentarios jocosos. "Calla la boca, que está emocionado, joder". El líder conservador cierra la Noche Solidaria con Haití, organizada por varias asociaciones juveniles el pasado 5 de marzo en un local de Montouto (Teo), justo antes de dar paso a la actuación de una orquesta. En el programa no se menciona al partido, pero sí constan las intervenciones del director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro Tato, y del propio presidente.

El discurso comienza de modo formal. "Os agradezco mucho que os sintáis orgullosos de participar en los intereses generales de Galicia", arranca Feijóo. Luego, critica a las juventudes del PSOE y del BNG, ensalza las virtudes de los suyos y suelta la primera machada: "Voy a ser breve porque he quedado con María Mera a partir de la una en ir a tomar una copa. De momento me dijo que no, pero lo voy a intentar". Un joven suelta: "Un sinvergüenza. Es un payaso".

De la pasarela del centro comercial a la TVG

La joven a la que se refiere Feijóo, presente en el comedor, es María Mera, una actriz nacida en 1986 en Boqueixón y natural de Vedra. Cuando tenía 16 años, ganó un concurso de belleza organizado por un centro comercial santiagués y, desde entonces, ha participado en programas y series de la TVG como Acompáñenos o Matalobos. El comentario, en el que insistiría más tarde,

ha sido calificado de "machista" por la oposición política.

El BNG local ha censurado "el trato negligente con la chica, a quien trata como un objeto sexual", así como su "actitud machista, ya que delante de unos jóvenes Feijóo vende el rol de estar por encima de ellos, que tienen que plegarse a sus deseos". Fuentes nacionalistas también aseguran que, además, proyecta a los jóvenes "una imagen muy negativa" y "fomenta ir de fiesta hasta las seis de la madrugada", como se puede ver en las imágenes. Una "fiesta de verdad".

El PP resta importancia a la "anécdota"

Fuentes del Partido Popular de Galicia han informado de que Feijóo tenía un compromiso al día siguiente, por lo que debía ausentarse del acto. Sin embargo, la excusa del presidente ha levantado sarcasmos en el BNG de Boqueixón, que no se explica como "se puede hablar de la generación ni-ni y, a la vez, plantear que se empalmen las copas con el desayuno", como propone Feijóo. "Y de aquí hasta que se organice la fiesta", prosigue el líder conservador en el vídeo, "yo voy a seguir hablando con María Mera para ver si tengo alguna posibilidad". Fin del discurso. "Muchas gracias".

"De momento me dijo que no, pero voy a seguir hablando con ella para ver si tengo alguna posibilidad", aventuró Feijóo

Una mera "anécdota", según el partido. "En un acto informal, sin corsés ni discursos preparados, Feijóo comenta que no le parece pertinente insultar a ningún partido, no hace apología del PP y habla de libertad lingüística", subrayan fuentes conservadoras. La grabación también muestra a un Feijóo convencido de que, si en vez de jóvenes populares los invitados fuesen socialistas, "casi todos estarían empleados en algún chollo [trabajo] de algún Ministerio" y, si se tratase de nacionalistas, "sólo se podrían dirigir en un idioma, sólo se podría hablar una cosa y estarían toda la noche hablando mal del PP".

Respecto a la referencia a la actriz, las mismas fuentes —que no han confirmado si es militante de la formación conservadora— le restan importancia. "María, lejos de sentirse ofendida, se lo tomó a broma", aseguran tras hablar con ella. "Y le sorprende que se haya dramatizado de esa forma".

www.publico.es 25.03.10

FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.

Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.

Una estrecha amistad

Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.

Piqué, el abridor de Vueling

Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que,

para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.

Los 4,5 millones

La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.

Ryanair, el trato oscuro

De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.

Violación de la normativa europea

Fuentes del sector han transmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.

Las Aerolíneas históricas en Galicia

Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que han transmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling.

¿Concurso amañado?

En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana.

PSdeG: “Dudosa” adjudicación

También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han calificado de “dudosa”, y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar “al señor Piqué”, de “promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos”. La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.

El Delfín y el vuelo a Gürtel

Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año

como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.

(www.elplural.com, 27/01/10)

FEIJÓO SE GASTA SEIS MILLONES EN COCHES EN NUEVE MESES

La austeridad de Alberto Núñez Feijóo no da para más. La Xunta que preside se ha gastado en nueve meses 6,3 millones de euros en la adquisición de 347 coches, varios de ellos de alta gama, mediante leasing (alquiler con derecho de compra) o renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos), según el diputado socialista Xosé Manuel Lage. La lista confeccionada por el parlamentario del PSdeG incluye vehículos para el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Medio Rural.

Xosé Manuel Lage, que pedirá explicaciones en el Parlamento al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, centró sus críticas en la adquisición de varios vehículos de alta gama para altos cargos cuando la Xunta sigue teniendo en sus cocheras 17 Audis parados desde que Feijóo llegó a la presidencia. Entre ellos, citó un todoterreno "de gran cilindrada" y dos berlinas de alta gama para Sogama, una sociedad participada por la Xunta que se dedica a gestionar los residuos de los ayuntamientos. Para uno de los coches, la convocatoria exigió 240 caballos de potencia y tapicería de piel.

Otras dos entidades dependientes del Gobierno han adquirido vehículos de lujo, según el PSOE. Se trata de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y de Portos de Galicia. El coche contratado por esta última, que es el que ahora utiliza la conselleira de Mar, fue adquirido además mediante procedimiento negociado y sin publicidad.

Lage aseguró que estos gastos ponen de manifiesto la "doble moral" de la Xunta. "Por un lado, compran berlinas de clase superior con tapicería de cuero y, por otro, tienen guardados 17 coches de alta gama sin utilizar", dijo.

La Xunta, a través de un comunicado, aseguró que se ha limitado a renovar el renting y leasing de los vehículos usados durante la legislatura anterior y confirmó su intención de adquirir nueve coches para altos cargos a lo largo de los próximos tres años.

Feijóo hizo del supuesto gasto del Gobierno de Emilio Pérez Touriño en coches de lujo el eje principal de la campaña electoral que le dio la victoria el año pasado por un margen de apenas 50.000 votos. Lo hizo a pesar de que, como se supo después, de los 32 Audi que integraban entonces el parque móvil de la Xunta, 29 habían sido adquiridos por el PP durante la época de Fraga (19 de ellos específicamente cuando el propio Feijóo era vicepresidente).

El hoy jefe del Ejecutivo gallego insistió en deshacerse de ellos, pero la subasta que convocó en octubre sólo logró enajenar tres de los 20 vehículos sometidos a puja. Los otros 17 permanecen cubiertos de polvo en dependencias oficiales de la Xunta. Previamente, Feijóo se había desprendido de tres Audi A8 blindados (uno comprado por Touriño y dos por Fraga) a cambio de 12 vehículos que, según su Gobierno, se dedican a prestar servicios sociales.

El Gobierno de Feijóo ha hecho bandera de la transparencia, pero ayer la Consellería de Facenda no quiso confirmar ni desmentir si el informe que encargó a la empresa KPMG para respaldar su propuesta de fusión de las cajas de ahorros de Galicia ha costado un millón de euros. Fuentes de Facenda aseguraron a 'Público' que el informe, que se realizó en tres semanas y que la Xunta presentó el 20 de enero, no está concluido y que su precio se corresponde al trabajo de "35 profesionales que realizaron una labor compleja con premura y en una fecha complicada" (durante la Navidad). El millón de euros, cifra citada ayer por Cotizalia.com, corresponde, según la Xunta, a una estimación que se niega a confirmar. La auditoría, insiste, comprende varias fases y aún no está acabada, informa Mariola Moreno.

(www.publico.es, 28/01/10)

FEIJÓO ADJUDICA A DEDO A SU AMIGO PIQUÉ UN CONTRATO MULTIMILLONARIO PARA QUE GESTIONE TRES NUEVAS RUTAS AÉREAS

Galicia contará con tres nuevos destinos internacionales: Vigo- Bruselas, A Coruña- Amsterdam y Santiago-Zurich. La Xunta gastará 4,5 millones de euros este año en subvencionar esas líneas aéreas. El anuncio lo hizo personalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo en una rueda de prensa celebrada en noviembre último. El lado bueno de esta noticia fue recogido por los medios de comunicación gallegos. El malo pasó desapercibido para la mayoría. La empresa que hará los vuelos y recibirá la subvención, sin que haya mediado un concurso público, es Vueling, la compañía que preside Josep Piqué, ex presidente del PP de Cataluña y amigo de Feijóo.

Les han visto juntos paseando por Santiago. Degustando exquisiteces gallegas en una pulpería en Casas Novas, la zona donde está ubicada la residencia oficial del presidente gallego, Monte Pío. Fuentes oficiales dijeron que se trató de una visita privada.

Una estrecha amistad

Entre Piqué y Feijóo existe una estrecha relación desde hace años. El presidente gallego respaldó al ex líder de los populares catalanes cuando este presentó su dimisión en julio de 2007, por sus diferencias con la cúpula del partido, y por su parte, Piqué apoyó a Feijóo en diversos actos políticos durante su campaña electoral en las autonómicas gallegas.

Piqué, el abridor de Vueling

Josep Piqué fue nombrado presidente de la compañía aérea Vueling en 2007. Más que un presidente ejecutivo, se ocupa de las relaciones institucionales, de abrir negocio, un puesto que, para quien ha sido ministro de Industria, de Ciencia y Tecnología y de Exteriores, debe resultar relativamente más fácil que para otros, y que, como se ve, desempeña con éxito.

Los 4,5 millones

La Xunta destinará este año 4,5 millones de euros para potenciar los tres destinos internacionales, que en su totalidad realizará Vueling, y que tendrán una frecuencia de tres días por semana. Los nuevos servicios supondrán repartir la citada cantidad entre las tres terminales, de forma que el aeropuerto de Lavacolla (Santiago) recibirá 1.870.000 euros, el de Peinador (Vigo), 1.390.000 y el de Alvedro (A Coruña), 1.230.000 euros.

Ryanair, el trato oscuro

De la cifra destinada al aeropuerto de Santiago, se concederán 500.000 euros a subvencionar a la compañía irlandesa Ryanair en los vuelos que ya realiza con destino a Roma. Según fuentes del sector, la forma de operar de esta compañía, que tiene una política comercial muy agresiva, está “provocando una distorsión del mercado”, y se quejan de que las relaciones de la Xunta de Galicia con esta empresa son poco transparentes. Ryanair recibe todos los años una subvención, que tramita el organismo de Turismo de Santiago, y en el que participa el Gobierno autonómico, el de A Coruña y Santiago, además de una entidad privada.

Violación de la normativa europea

Fuentes del sector han transmitido a El Plural su malestar por la adjudicación a Vueling de los tres nuevos destinos internacionales y afirman que no se ha respetado la normativa europea que regula las subvenciones al transporte aéreo a través de una serie de pasos administrativos, que tienen como requisito imprescindible la máxima transparencia a través de concursos públicos.

Las Aerolíneas históricas en Galicia

Air Europa, KLM y Air France son algunas de las compañías que operan en Galicia desde hace años y que han transmitido ya su queja al Gobierno de Feijóo por su actuación en esta adjudicación a dedo a Vueling.

¿Concurso amañado?

En la mencionada rueda de prensa, que se celebró en noviembre último, Feijóo y su consellero de Turismo, Roberto Varela, anunciaron, también, dos nuevos destinos nacionales: Valencia y Sevilla, aunque precisaron que en este caso sí se convocaría un concurso público. Algo que sin embargo, han recibido con suspicacia las mismas fuentes del sector consultadas por El plural, que expresaron su temor de que se trate de un concurso cuyas puntuaciones estén manipuladas para favorecer a una única empresa: Air Nostrum, del grupo Nesfinsa, cuyo propietario es la familia Serratosa, que mantiene estrechos lazos con administraciones donde gobierna el PP, como la Comunidad Valenciana.

PSdeG: "Dudosa" adjudicación

También desde la oposición política se ha cuestionado la adjudicación. Los socialistas gallegos la han calificado de "dudosa", y han acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar "al señor Piqué", de "promulgar la austeridad sólo para los gallegos, recortando derechos en educación o en inversión para hospitales, pero no para sus amigos". La portavoz de Turismo del PSdeG, María Quintas, ha pedido ya explicaciones.

El Delfín y el vuelo a Gürtel

Alberto Núñez Feijóo, un político joven, cuyo curriculum no está relacionado con la era Aznar, es considerado por los dirigentes populares como el nuevo delfín del PP. El preferido de Rajoy, después de que la imagen del presidente valenciano, Francisco Camps, resultara dañada, y además, su victoria en Galicia le dio al líder nacional el respiro que necesitaba. Por estas razones muchos ven en él a una promesa política dentro del partido. Aunque no lleva todavía un año como presidente de la Xunta y ya estamos hablando de falta de transparencia en adjudicaciones. Debería cuidarse Feijóo de este modo de hacer que puede comprometer su futuro político. Se comienza con este tipo de manejos turbios y se termina embarcado en un vuelo con destino a Gürtel.

(www.elplural.com, 27/01/10)

PROTESTA HISTÓRICA CONTRA EL RECORTE DEL GALLEGO

Había muchos estudiantes. Eran los más ruidosos, pero también abundaban profesores, sindicalistas, políticos, intelectuales, artistas o trabajadores que se escaparon de sus puestos para protestar por la política lingüística de la Xunta. Llenaron ayer la Praza do Obradoiro -donde caben unas 25.000 personas- y muchos quedaron fuera marchando por las calles del casco viejo de Santiago. La Policía Local de la ciudad cifra en 30.000 personas las asistentes a la manifestación contra las bases del decreto del gallego que reducirá las horas de este idioma en la enseñanza. Los convocantes elevan la cifra a 50.000. Los datos son difíciles de concretar porque, durante toda la mañana, no dejaron de llegar manifestantes desde la Alameda, el punto de partida, incluso cuando ya había concluido la protesta y muchas personas regresaban a los autobuses para volver a los diferentes puntos de Galicia.

Tampoco hay coincidencia sobre el porcentaje de profesores que secundó la huelga que había convocada ayer en la enseñanza pública por las mismas razones. La Consellería de Educación asegura que no llegó la mitad de los docentes, mientras que las entidades sindicales convocantes elevan la cantidad a casi el 90% de los profesores y alumnos. Educación argumenta que "las clases transcurrieron como en un día normal" porque "la mayoría de los profesores entendieron la falta de argumentos de los convocantes", mientras los sindicatos valoran que la jornada de paro fue un "éxito que dejó las aulas de toda Galicia vacías".

Fuera de ellas, la manifestación estuvo nutrida por numerosos políticos. Acudieron los dos principales líderes de la oposición, el socialista Manuel Vázquez y el nacionalista Guillermo Vázquez, y destacados miembros del anterior Gobierno bipartito de la Xunta como el ex vicepresidente Anxo Quintana y la ex conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, autora del decreto que pretende derogar la Xunta. Pero los nacionalistas tomaron el protagonismo de la marcha. Desde los sindicatos, la CIG y STEG, que anduvieron siempre al frente, hasta los políticos: el líder del BNG fue el único que se colocó en la cabecera de la marcha. Tanto los

sindicatos UGT y CC OO como el PSdeG se quedaron en una posición más retrasada y no habían llegado a la Praza do Obradoiro cuando la protesta estaba concluyendo.

La marcha transcurrió sin apenas incidentes. El PP difundió una foto de unos manifestantes quemando una bandera española y otros vertieron pintura roja en escaparates comerciales. Pero, en general, el ambiente fue festivo, con chascarrillos sobre la propuesta de trilingüismo de la Xunta. Se oyó cantar A Rianxeira en inglés: "The virgin of Guadalupe, when goes down the river..." y había decenas de carteles con lemas parecidos a este: We love very moito o galego. Los gritos más coreados, sin embargo, fueron otros: "Nas aulas de Galiza queremos galego"; "pola nosa lingua ni un paso atrás"; "aquí está, aquí se ve a mocidade galega en pé"; "este decreto, ímolo parar".

Desde el escenario montado en la plaza, los convocatnes pidieron que Educación destine a Haití el dinero que les descuenten a los profesores por la huelga de ayer. Además, docentes, estudiantes y padres leyeron razones por las que se oponen al decreto de la Xunta: "Porque no garantiza que los jóvenes terminen sus estudios dominando el idioma propio"; "porque es una propuesta a espaldas de la realidad, sin consenso y presentada con nocturnidad"; "porque creará enfrentamientos entre los centros y traslada un problema a los profesores y a los padres". En una de estas alegaciones alguien gritó otra consigna: "Esta norma, nunca máis". Y toda la plaza coreó el grito.

En ese mismo escenario, Fran Rei, presidente de la plataforma Queremos Galego, convocante de la protesta, pidió al Gobierno que se "vaya a casa" si no sabe "escuchar ni hablar". Carlos Callón, de la Mesa pola Normalización Lingüística, se preguntó: "¿En qué lugar del mundo se aprueba una norma en contra de todo el mundo?". El portavoz del sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega (CIG), Anxo Louzao consideró un "hito" el apoyo de la ciudadanía a la movilización, que demuestra la "repulsa a unas bases que pretenden es erradicar el gallego en la enseñanza". El objetivo para los convocantes no es el cambio de las bases que presentó la Xunta, sino su retirada y replanteamiento "sin un paso atrás sobre lo ya conseguido". De no ser así, piden a los profesores que enseñaban en gallego que lo sigan haciendo en el futuro.

(www.elpais.com, 22/01/10)

PRESIDENCIA ANUNCIA AHORA LA COMPRA DE 67 COCHES

A la Xunta del PP le está costando más de lo previsto gestionar el parque móvil de la Administración autonómica, del que tanto rédito electoral obtuvo. Amortizadas las críticas al despilfarro del bipartito, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lidia ahora con unas promesas electorales difíciles de cumplir, como la venta de los automóviles que usaban los anteriores conselleiros y altos cargos. En medio de esa fiebre contra la marca Audi, Rueda anunció ayer la compra por la Xunta de 67 vehículos, nueve de ellos para los miembros del Gobierno, en la que se entregarán a cambio como parte del pago 82 coches de titularidad autonómica.

La adquisición de los nuevos coches se realizará a lo largo de esta legislatura por el sistema de leasing, es decir, de alquiler con opción de compra. Para ello, la Xunta convocará un concurso en cuyo precio integrará 82 coches que no utiliza. En ese lote van incluidos los 17 audis que Presidencia sacó a subasta y que no logró vender. Para justificar la operación, Alfonso Rueda apeló al "alto coste de mantenimiento" de los vehículos que permanecen inactivos en los garajes de la Xunta.

No será el primer negocio dudoso al que se ve abocada la Xunta en su gestión del parque móvil. La Administración autonómica perdió más de 200.000 euros con la venta del coche blindado en el que viajaba el ex presidente Touriño, traspasado con dos años y 157.305 kilómetros. En el mismo lote se vendieron otros dos blindados, ambos comprados por la Xunta de Fraga. En conjunto, costaron 1,1 millones de euros. Salieron al mercado por 330.650 euros. Se los llevó un proveedor habitual del Gobierno gallego. A cambio, el concesionario entregó nueve furgonetas Citroën Berlingo adaptadas para minusválidos y tres monovolúmenes C4 Picasso, que ayer presentó Rueda.

Además de anunciar la compra de los 67 nuevos coches, que se integrarán en un parque móvil que cuenta ahora con 366 unidades, en la presentación el conselleiro tuvo que explicar la compra para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, de un Citroën C5 a través del ente Portos de Galicia. Rueda recordó que Portos forma parte de Mar y negó haber recurrido a "subterfugios" para ocultar la adquisición, que atribuyó a "motivos de seguridad". "Para que los diez miembros del Gobierno tengan un coche adecuado", añadió.

(www.elpais.com, 14/01/10)

EL PRESIDENTE GALLEGO MALVENDE LOS COCHES DE ALTA GAMA, LA MAYORÍA ADQUIRIDOS POR FRAGA

Alberto Núñez Feijóo continúa inmerso en su campaña de marketing, queriendo huir de todo lo que huele a lujo, por eso de las apariencias. El presidente gallego está queriendo deshacerse de 20 coches de gama alta, en estos momentos en posesión de la Xunta, pero hasta ahora sólo ha conseguido subastar tres vehículos, con los que ha recaudado apenas 28.870 euros.

Feijóo anda ansioso por perder de vista el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que le valió de bastión en su campaña electoral presentándolo como un símbolo de despilfarro. Claro que entonces ocultó que su compañero de partido, Manuel Fraga, adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados como el de Touriño y que él mismo, en su época de vicepresidente utilizó un A8.

La subasta de Feijóo

La subasta organizada por el presidente gallego tuvo lugar en el complejo administrativo de San Caetano, donde un particular adquirió por el valor tasado de 9.830 euros uno de los coches. Otro se hizo con otros dos por 9.140 y 9.990 euros. Los dos primeros turismos son modelos A8 de la marca Audi, con más de 200.000 kilómetros y fecha de matriculación del año 2001 y 2000. El tercero es un Audi A6 de 2001 con casi 300.000 kilómetros.

Un blindado para Feijóo

Toda esta campaña montada por Feijóo parece un poco precipitada, teniendo en cuenta que el mes pasado el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, confirmó que todavía no se había conseguido vender los automóviles, pero pidió responsabilidad para abordar cuestiones "relacionadas con la seguridad" del presidente, con lo cual no descartó la compra de un blindado para el nuevo inquilino de San Caetano.

Quedarse los coches

La Xunta tiene la posibilidad de ir a una nueva subasta con un descuento del 15%, aunque la Consellería de Presidencia está estudiando utilizar los coches sin vender para abaratar el precio de futuras adquisiciones de vehículos, lo cual parece tener más sentido común.

(www.elplural.com, 19/10/09)

FEIJOO SE DESMELENA Y FLIRTEA CON LA INSUMISIÓN FISCAL GALLEGA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que sube enteros cada día como uno de los pesos pesados del Partido Popular, se desmelenó ayer ante los medios de comunicación y abogó, de forma más o menos directa, por la insumisión fiscal de Galicia. Aseguró, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que el Gobierno de su comunidad no tiene dinero para devolver los ingresos que recibió de más como anticipos de la financiación autonómica por parte del Estado en los ejercicios del 2008 y el actual, que cifró en unos 2.000 millones de euros, y subrayó que difícilmente Galicia lo devolverá ahora «porque nadie puede dar lo que no tiene».

Feijoo emergió ayer como un dirigente mucho menos moderado que hasta ahora, abonando posiciones contrarias, de hecho, al cumplimiento de determinadas leyes. Se situó así en línea con

otros presidentes autonómicos populares que se han opuesto a aplicar leyes como la que restringe los ámbitos para el consumo del tabaco, permitiendo fumar en muchos más locales, o como la frontal oposición, cuando no boicot, a la aplicación en sus aulas de la asignatura de educación para la ciudadanía.

Sin embargo, en este caso la posición de Feijoo sube un escalón, ya que se opone, con sus justificaciones pertinentes, a aplicar una consecuencia del pacto de financiación que acordó el propio PP con CiU en el 2001. En esa ley, vigente hasta el 2009, se establece que cada año las autonomías recibirán la financiación con entregas a cuenta por los conceptos que les corresponda, y en el año que se tengan los datos reales se hará «la liquidación por la diferencia entre el importe de las entregas a cuenta percibidas y los valores definitivos de los mismos». Hasta el 2007, las liquidaciones siempre habían salido a favor de las autonomías, que cobraban la diferencia, y nadie protestaba. A mediados de este año las autonomías han ingresado 6.070 millones de euros de la liquidación del 2007, de los que a Galicia le han tocado 393. Ahora que la liquidación del 2008 sale negativa, Feijoo se niega a pagar. Lo argumenta atribuyendo al Estado un error en sus previsiones que «ahora pretende hacer pagar a las autonomías». Y añade que en los presupuestos Generales del 2009 se persistió en ello «a sabiendas».

Con el nuevo acuerdo de financiación, pendiente de aprobación en el Congreso, las autonomías podrán devolver el dinero cobrado de más el 2008 a partir del 2011, en lugar del 2010, mediante un descuento en los anticipos a cuenta del citado ejercicio que recibirán del Estado. Feijoo también desveló que ofreció la Consejería de Economía al presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, que la semana pasada abogó por un adelanto electoral.

(www.elperiodico.com, 22/09/09)

FEIJÓO JUSTIFICA ANTE RAJOY LOS PACTOS CON TRÁNSFUGAS EN SILLEDA Y GONDOMAR

En la víspera de la moción de censura de Benidorm, la que centra desde hace un mes todas las acusaciones del PP contra el PSOE, el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a justificar los pactos con tráfugas que ha sellado su partido en Gondomar para recuperar la alcaldía y el que se ultima, con el mismo propósito, en Silleda. La doctrina que defiende el presidente gallego no puede ser más distinta a la que pregona el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que sin embargo aplaudió ayer las explicaciones de Feijóo en un desayuno informativo en Madrid.

A 600 kilómetros de distancia, acostumbra el presidente gallego a ofrecer su muy personal versión de lo que aquí sucede. Lo de Gondomar -donde los populares desalojaron al alcalde del BNG después de acordarlo con ediles tráfugas del PSdeG- es para él un "pacto poselectoral". Feijóo aderezó su argumento: el PP fue el partido más votado en ese ayuntamiento pontevedrés.

Algo que no sucedió en Silleda donde la dirección del PP ha recomendado a su portavoz José Fernández Viéitez esperar "ordenes de arriba" antes de ejecutar la maniobra y cambiar de manos el bastón de mando, actualmente en manos de una alcaldesa socialista. En este caso, Feijóo se mostró más cauto, si bien se negó a desautorizar el probable pacto con tráfugas.

El presidente trasladó la responsabilidad al PSOE. "Si usted vive conmigo en un pueblo donde vemos que mandan tres concejales y todos los demás están en contra, a lo mejor lo podemos aguantar un tiempo pero no indefinidamente", dijo. Pese a todo, admitió que si por él fuese, no se llevaría a cabo la moción de censura. La complicidad con las mociones de censura que se valen de tráfugas se disipó cuando llegó la previsible pregunta por el caso Benidorm. Feijóo despejó la cuestión con un chascarrillo. "No puedo asegurar que mi madre y yo lleguemos siempre a acuerdos políticos", aludió con sorna al parentesco entre la número tres del PSOE, Leire Pajín, y su madre, una de las impulsoras del pacto contra el PP en Benidorm.

Como sucede cada vez que el presidente gallego pisa tierras madrileñas, y cada vez las frecuenta más este valor en alza en el PP, el presidente gallego repasó la actualidad política. Aprovechó su presencia en la capital para pedir al Ejecutivo central y a su presidente Zapatero que "reflexione" antes de reclamar a las comunidades autónomas "un dinero que no tienen".

Esa referencia a los fondos que Galicia debe devolver a partir de 2011 (1.900 millones de euros) por los anticipos a cuenta recibidos del Estado no estuvo exento de crítica. No se puede pedir cuentas a las comunidades, vino a decir, "por los errores de una política presupuestaria" elaborada para ocultar la crisis.

Y volvió sobre el acuerdo de financiación autonómica que se aprobó con la abstención de las comunidades con presidente del PP, "una improvisación" del Gobierno central que "perjudica a las autonomías menos desarrolladas". Feijóo lamentó que inversiones previstas durante los mandatos de Zapatero por 3.000 millones de euros "nunca llegaron", y "el incremento de la fiscalidad" que se cebará con las rentas altas o medias.

Tuvo tiempo de confirmar que el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro era su elegido para la cartera de Economía, si bien se permitió discrepar con Juan Ramón Quintas, sobre las críticas que este último formuló contra el intervencionismo de los gobiernos autónomos en estas entidades financieras.

Sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas, algo que reclamó el propio Quintas, el presidente de la Xunta se quedó a medio camino. Apuntó que deben ser "el último recurso en democracia".

(www.elpais.com, 22/09/09)

LA XUNTA NO LOGRA VENDER EL AUDI DE TOURIÑO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tropezar con el Audi A8 de su antecesor en el cargo, el socialista Emilio Pérez Touriño, un vehículo que él mismo catapultó a la fama en plena campaña de acoso y derribo pre electoral. Antes de las elecciones de marzo pasado, Feijóo y los suyos encumbraron el blindado de Touriño al puesto de máximo símbolo del despilfarro. Olvidaron explicar, por ejemplo, que en la etapa de Manuel Fraga Iribarne el Ejecutivo adquirió 32 coches de la misma marca, entre ellos dos blindados y un Touareg del ex presidente. De hecho, el mismo Feijóo siendo vicepresidente de Fraga utilizó un A8, en su caso sin blindar. Ansioso de construirse una fama de hombre austero en supuesta contraposición a Touriño, el entonces aspirante al Gobierno regional prometió vender el legado de su ya antecesor y circular en un Citroën de fabricación local. La última promesa la incumplió nada más hacerla: no se fabrican citroëns blindados en España. La primera está rozando el fracaso seis meses después: ni siquiera rebajando en 200.000 los vehículos se ha logrado "malvenderlos".

Fue en mitin en Vigo donde Feijóo recrudesció su embestida contra Touriño con dos promesas: "poner el cartel de se vende" al A8 blindado y usar un coche "hecho aquí al lado, en la factoría de Citroën", recuerda El País.

Citroën de importación

Verdades a medias. Efectivamente, la mayor fábrica de Galicia es una fábrica de Citroën y, sin embargo, ésta no hace berlinas blindadas: es necesario importarlas de Francia. Claro que el compadreo de Feijóo con Citroën venía de lejos. En su etapa frente a la oposición, esta multinacional le facilitó un vehículo que nunca se declaró a Hacienda como préstamo según se aconseja en estos casos.

Se "malvende"

En cuanto al "cartel de se vende", el primer matiz ya lo introdujeron los socialistas en marzo pasado: se "malvende" y no sólo el Audi de Touriño. "El PP malvende los Audi que ellos mismos compraron", es decir, un total de 23 vehículos de los que sólo uno era del ex presidente. La etapa Fraga equipó a la Xunta con un parque de 32 vehículos. Olvidando su propia responsabilidad en la compra y obsesionados con el vehículo del ex presidente, el PP llegó a organizar visitas guiadas a los sótanos de San Caetano -sede del Gobierno- para mostrar a la prensa cómo acumulaban polvo estos coches, apunta el medio antes citado.

Sin comprador

La segunda rectificación acaba de salir a la luz: seis meses después de su anuncio, Feijóo no ha colocado el A8 de su antecesor –ni los dos de Fraga-. La berlina blindada y con inhibidor de frecuencia antibomba costó en su momento 480.000 euros. El PP ha intentado darle salida por 280.000 euros año y medio después de su adquisición. Para ello, se abrió una subasta pública que pretendía cambiarla, al igual que a las dos de Fraga, por “vehículos para colectivos sociales y de Protección Social”. El plazo expiró el pasado sábado y, a estas alturas, sólo se sabe que la Xunta recibió una oferta in extremis durante esa misma mañana.

Nueva subasta

El Gobierno gallego no ha dado explicaciones al respecto. Ayer compareció el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, quien se mostró más parco que cuando tuvo que criticar los supuestos despilfarros socialistas. Rueda se limitó a aclarar que todavía no se había conseguido vender los automóviles y, curiosamente, pidió responsabilidad para abordar cuestiones “relacionadas con la seguridad” sin descartar la compra de un blindado para su jefe en el Ejecutivo. Finalmente, el consejero anunció una nueva subasta para deshacerse de 20 de los audis de Fraga, entre ellos el A8 que utilizara el mismo Feijóo.

(www.elplural.com, 09/09/09)

ESCÁNDALOS Y OPACIDAD MARCAN LOS PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE FEIJÓO

Con motivo de su reciente gira por Galicia para inaugurar el curso político tras las vacaciones, Mariano Rajoy no ha dudado en poner la Xunta de Alberto Núñez Feijóo como referente para todo el país, instando a “exportar” su modelo y poniéndolo como ejemplo de eficacia en la gestión económica. Sin embargo Feijóo, que hizo de la austeridad y la transparencia su caballo de batalla durante la campaña electoral, ya ha levantado malestar y sospechas en sus primeros pasos como presidente. En los pocos meses que lleva de andadura, la Xunta popular ya ha privilegiado con dinero público a colegios del Opus Dei y a organizaciones ultracatólicas como el Foro de la Familia, ha tratado de tapar el escándalo de un alto cargo de la consejería de Trabajo condenado tras despedir a un trabajador sin papeles o ha aprovechado el mes de agosto para adjudicar sin razón aparente contratos millonarios por el procedimiento “negociado sin publicidad”, reservado para determinados supuestos.

Las primeras alarmas en torno a las políticas de la Xunta comenzaron su política de recortes en gastos sociales combinada con partidas para financiar a colectivos afines, según denunciaba este verano la portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSdeG, Laura Seara.

Opus Dei y Foro de la Familia

“Empezaron financiando colegios del Opus Dei, que apuestan por la segregación, pero ahora van a financiar las organizaciones del Foro de la Familia para que lleven a cabo acciones que atentan contra la libertad y los derechos consolidados de la ciudadanía”, alertó Seara. La diputada socialista advirtió asimismo del apoyo del Ejecutivo gallego a las iniciativas legales antiabortistas del Foro de la Familia, un colectivo “ultracatólico” constituido por entidades como “la Asociación Católica de Propagandistas o la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa)”. Así, el PPdeG ha presentado un marco legal para que estas organizaciones ultraderechistas asesoren a través de la Xunta a mujeres embarazadas de la Xunta, cobrando por ello.

Ayudas para la empresa de un alto cargo

Otros quebraderos de cabeza para la Xunta están siendo protagonizados por sus altos cargos, como explica El Confidencial. Así, a principios de julio tomaba posesión el director de la Agencia Gallega de Industrias Culturales (Agadic), Juan Ramón Fernández Fasero. El 22 del mismo mes, su empresa Zouma Producciones recibía 18.000 euros en tres subvenciones de la Xunta y sólo cinco días después Fernández Fasero la vendía. Fuentes cercanas a la administración autonómica consultadas por el digital niegan irregularidades porque Zouma ya había recibido otras ayudas con el bipartito (PSdG y BNG) en el poder y Fernández Fasero no todavía no formaba parte del Ejecutivo cuando se cerraron las subvenciones.

Deudas con Hacienda y trabajadores sin contrato

Pero el nombre de Fernández Fasero ya está relacionado con otros escándalos, y es que una de sus empresas, Talleres de Ilusión Editorial, figura en el BOE como deudora de Hacienda tras varios intentos infructuosos de que pagara. Además, la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz López, fue condenada en firme por haber despedido a una trabajadora que no tenía contrato. La empleada, que fue despedida por la propia Díaz López según la sentencia, trabajaba en su casa particular por las mañanas y como cocinera en la empresa familiar que tiene la concesión del bar de la estación de autobuses de la ciudad de Ferrol, por las tardes. La Xunta primero lo negó, luego obvió que la sentencia era firme y finalmente desde el PPG atribuyeron todo a una confusión entre los apellidos de la directora y los de sus padres, pero la sentencia deja claro ese aspecto y señala claramente a la dirigente popular como autora del despido.

Contratos millonarios por vía urgente

El mes de agosto también ha sido aprovechada por la Xunta, según da cuenta El Confidencial, para realizar adjudicaciones millonarias sobre asuntos que no son urgentes. Así, la consejería de Medio ambiente, Territorio e Infraestructuras adjudicó obras por valor de unos 40 millones de euros durante por el procedimiento "negociado sin publicidad", destinado normalmente a procesos que se justifican por su urgencia o por otra razón de peso que en este caso se desconocen. La consejería de Trabajo, la de Medio Ambiente y la de Hacienda también han recurrido este verano al procedimiento "sin publicidad" para adjudicar diversos contratos.

Opacidad también con en el Xacabeo

La licitación sobre la campaña publicitaria de un proyecto clave para el turismo gallego, el Xacobeo del año próximo, ha sido publicada también en pleno mes de agosto y no en el Diario Oficial de Galicia, sino en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según desveló el diario Xornal de Galicia, aunque ni el montante ni los plazos del contrato justifican este procedimiento.

(www.elplural.com, 01/09/09)

LA FLOTA DE COCHES DE CAMPS

El presidente Francisco Camps tiene a su disposición una flota de tres vehículos oficiales de alta gama, todos de la marca Audi y uno blindado, según reconoce el Gobierno valenciano por escrito en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV en las Corts José Camarasa. Uno de ellos es un modelo A8 blindado, "comprado en el año 2001 conforme a precio de mercado", refiere el vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. Camarasa denunció ayer la "doble vara de medir" del PP tras el "linchamiento" al ex presidente socialista de Galicia, Emilio Pérez Touriño, por gastar 432.000 euros en comprar un Audi A8 blindado.

El Consell no informa en su respuesta sobre el precio que costaron los coches destinados al presidente, pero los socialistas consideran que el valor actual de mercado de estos automóviles de alta gama blindados está en torno a los 400.000 euros. Unido a los otros dos Audi, la flota presidencial superaría los 500.000 euros con los precios de hoy. Especialistas del sector consultados por este periódico indicaron que, aunque hay niveles de blindaje, el coste total suele ser cercano a los 400.000 euros. La Xunta pagó en 2007 432.000 euros por el vehículo de Touriño. Éste sustituía otro idéntico adquirido en la etapa de Manuel Fraga en 2001 y por el que se abonaron 266.230 euros. Sin embargo, otro comprado en 2002 también por Fraga ya subió a 331.157 euros.

Presidencia de la Generalitat, a preguntas de este periódico, declinó ofrecer explicaciones sobre las necesidades que justifican "flota" del mandatario autonómico o el coste. Según la información de Gerardo Camps, el A8 blindado "ha realizado 86.111 kilómetros". El coche lo heredó del ex presidente Eduardo Zaplana y, a tenor de los kilómetros, no ha tenido un gran uso. A diferencia del blindado, Camps cuenta con otro Audi A8, comprado en 2005 "a precio de mercado", con un recorrido de 264.741 kilómetros. El coste actual podría estar en torno a los 80.000 euros. Finalmente, hay otro Audi más nuevo, de 2006, pero A6, con un escaso uso, 59.983 kilómetros. El precio hoy giraría entre 60.000 y 70.000 euros.

El PSPV contrapuso los ataques a Pérez Touriño con el hecho de que dirigentes del PP como Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también cuentan con un vehículo blindado Audi A8, recriminó el socialista Camarasa. "Ahora vemos que Camps no solo tenía afición por los trajes a medida, sino también por los coches de alta gama", una situación que rompe "la falsa imagen de austeridad" que había vendido el jefe del Consell, según el diputado del PSPV.

El gusto de las autoridades por los selectos Audi A8 y A6 no casa mucho con la crisis. Por eso, el portavoz del PSPV para grandes proyectos, José Camarasa, emplazó ayer al Consell a renovar, cuando proceda, el parque móvil de la Generalitat con el fin de sustituir los vehículos Audi existentes por otros Ford, igual que Feijóo se ha pasado a Citroën, con fábrica en Vigo. "Sería una forma más de mostrar la apuesta por la marca de Almussafes en estos tiempos", enfatizó Camarasa. El hecho de que el A8 blindado lo heredó Camps de Zaplana no es excusa para el socialista. "Podía, como acaba de hacer Feijóo con los Audi, por cierto, casi todos de la etapa de Fraga, haberlo sacado a subasta", resalta el diputado del PSPV, para el que Camps, "en vez de dar consejos de austeridad, podría dar ejemplos".

(www.levante-emv.com, 14/07/09)



EL PRESIDENTE COMPRARÁ UN COCHE BLINDADO SI SE LO RECOMIENDA EL SERVICIO DE SEGURIDAD

La Xunta se va a quedar sin coches blindados, pero su presidente no descarta adquirir uno nuevo. Lo hará "si se lo recomiendan los servicios de seguridad", reconoció ayer. A pesar de ello, la operación para enajenar esos tres vehículos y otros 20 convencionales, todos ellos de la marca Audi, se puso ayer en marcha, con la autorización de la operación por el Consello de la Xunta.

Los tres blindados, cuyo precio de compra conjunto supera el millón de euros, serán permutados por 12 vehículos que se destinarán a Protección Civil y fines sociales, lo que ha provocado las críticas de la oposición por "despilfarro". Pero la austeridad es precisamente el argumento que esgrime el Gobierno para promover su venta. Uno de los tres Audi A8 blindados es el que provocó una polémica en la campaña electoral, cuando el PP reprochó al ex presidente Emilio Pérez Touriño su afán por el lujo. Según datos confirmados ayer por la Consellería de Presidencia, Fraga compró otros dos vehículos similares en características y precio entre 2001 y 2002.

Si Fraga compró dos blindados y Touriño uno, Alberto Núñez Feijóo puede adquirir el siguiente tras desprenderse de los tres de su parque móvil, según reconoció ayer. "Viajo en un coche que creo que cumple con todos los requisitos", manifestó. Pero a continuación matizó: "Si en algún momento soy avisado por los servicios de seguridad de algún tipo de riesgo, estoy dispuesto a revisar mi decisión".

Mientras Feijóo no descartaba la adquisición de un coche blindado, la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, aseguraba ayer que el presidente de la Xunta ya ha encargado en París el blindaje de un coche de la marca Citroën. Lo hizo en su blog personal, en el que asegura que mientras Feijóo vende los vehículos de la marca Audi, encarga otros de Citroën "para sí mismo y para sus conselleiros, mientras espera que en París le blinden el presidencial".

De los 23 coches que salen a la venta, 20 fueron comprados durante los gobiernos de Manuel Fraga. Con los convencionales, que serán subastados, la Xunta recaudará unos 350.000 euros. Feijóo salió al paso de las críticas de socialistas y nacionalistas a la dudosa rentabilidad de la operación. "Esta no es una medida contra el bipartito", expuso, antes de preguntarse si el anterior gobierno no tenía previsto vender esos 23 vehículos "que no se usan".

Para justificar el carácter económico de la operación apeló al ahorro en mantenimiento de los vehículos. Feijóo situó la venta en un marco de "eficiencia y austeridad", y resaltó que la reordenación de los vehículos permitirá reducir en un 25% los gastos del parque móvil de la Xunta.

(www.elpais.com, 03/07/09)

"EL PP MALVENDE LOS AUDI QUE ELLOS MISMOS COMPRARON"

El Ejecutivo gallego ya ha iniciado el proceso de permutas y subastas por el que se desharán de 23 coches de su parque móvil, aunque anteriormente han reconocido las dificultades para poder revenderlos, al menos a buen precio. Los socialistas gallegos creen que el PP está "malvendiendo" el patrimonio de los gallegos y que además responde a una "bravata electoral".

La Xunta ha anunciado un concurso público para permutar sus tres coches blindados Audi -dos adquiridos por Fraga y otro durante el gobierno de Touriño- por vehículos para fines sociales. También sacarán hoy a subasta otros 20 Audi del parque móvil oficial con un precio de salida de entre 350.000 y 400.000 euros, aunque el Ejecutivo gallego ha dejado entrever en varias ocasiones la dificultad de dar salida a estos coches, especialmente en el caso de los blindados.

PSG alerta de la "austeridad" del PP

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que centró su campaña electoral en criticar los gastos del bipartito PSOE-BNG e hizo del coche blindado de Touriño un símbolo, enmarca ahora la venta de los coches en un plan de "austeridad". Sin embargo, los socialistas gallegos insisten en que en lo que en realidad hace el PP es "malvender los Audi que ellos mismos compraron, entre ellos el que usaba el propio Feijóo cuando era vicepresidente" en el último Gobierno de Fraga. Así lo expone a *El Plural* el responsable de comunicación del grupo socialista en el Parlamento gallego, Xosé Carballo, quien alerta de que el PP "compró por mucho más de lo que ahora venden" los coches con el consiguiente perjuicio a la arcas pública, y todo "para mantener una bravata electoral".

"Que empiece por los tres millones de su residencia"

Carballo advierte además contra medidas de "austeridad" de Feijóo, como la de "suprimir los libros de textos gratuitos" a los que ahora sólo podrán acceder el 25% de los ciudadanos, el cierre de las delegaciones de la Xunta en Buenos Aires o Montevideo que atendían al numeroso colectivo gallego emigrante en Argentina y Uruguay, o la paralización de la construcción de hospitales. Por eso propone que si quiere recortar gastos Feijóo empiece por ejemplo por "los 250.000 euros que cuesta mensualmente su residencia oficial, tres millones al año".

Solo los últimos blindados de Fraga costaron 600.000

La coordinadora de acción electoral del PSdeG, Mar Barcón, también acusó ayer al PP de "dilapidar" el patrimonio de los gallegos "malvendiendo" los Audi así como que sólo los dos A8 adquiridos por Fraga en un mismo año, en 2002, costaron 600.000 euros.

FRAGA COMPRÓ EN UN AÑO DOS BLINDADOS COMO EL DE TOURIÑO

La Xunta pone en venta 20 coches adquiridos por el Gobierno de Fraga

La Xunta ha puesto en venta una parte importante de su parque móvil. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se extendió ayer en detalles sobre el sistema que se seguirá para permutar tres Audi blindados y subastar otros 20 de los modelos A6 y A8. Ahora que está en el Gobierno, el PP, que convirtió los coches oficiales en bandera electoral, le resta importancia al responsable del gasto. "Lo importante no es hacer distinción de quién los compró, sino optimizar el ahorro en época de crisis", argumentó Rueda. En realidad, dos de los blindados y 18 de los convencionales que salen a la venta fueron adquiridos durante el mandato de Manuel Fraga.

Todos los vehículos del lote excepto tres fueron adquiridos antes del bipartito

De acuerdo con los datos confirmados por Presidencia, Fraga adquirió en el plazo de 14 meses, entre septiembre de 2001 y noviembre de 2002, dos Audi A8 blindados de características y precio similar al polémico blindado del anterior presidente, Emilio Pérez Touriño: 266.230 euros de la época el primero y 331.157 el segundo. De la relación de *audís* que permanecen en el parque móvil de la Xunta se desprende que el rechazo del PP a esta marca es reciente. Sólo en 2003, la Xunta de Fraga adquirió 13 coches Audi. La cifra se eleva a 34 entre 1999 y 2005, los dos últimos, matriculados con el Gobierno ya en funciones. No fueron las únicas compras de coches en período de transición. En 2005 el bipartito recibió 24 Volkswagen Passat encargados por el anterior Gobierno.

Pero ayer no era la intención de Alfonso Rueda distinguir quién adquirió los vehículos y sí poner de relieve los criterios de "racionalidad, austeridad y eficiencia" que imperan en el nuevo Gobierno gallego. La oposición lo tendrá difícil para calcular cuánto dinero se pierde en la venta del blindado de Touriño, ya que para enajenar los tres blindados, Presidencia opta por un sistema de "permuta" por otros vehículos nuevos, que se destinarán a fines sociales y Protección Civil. El resto saldrá en subasta con un precio global de salida de entre 350.000 y 400.000 euros. Estos ingresos se destinarán a "gasto social y equipamiento para policías locales". En este paquete no entran algunos de los coches más antiguos de la marca Audi que permanecen en los garajes de la Xunta, pero sí los dos únicos A-6 que adquirió el bipartito.

La oferta inicial, que hoy aprobará el Consello de la Xunta, es de 12 vehículos para servicios sociales y Protección Civil para la permuta por los tres blindados, aunque se negociarán "posibles mejoras" en las ofertas. Los 20 vehículos sin blindar se someterán a un proceso de subasta "abierta y publicitada" que se abrirá en septiembre. Según los cálculos de Rueda, permuta y subasta permitirán reducir en un 25% los gastos del parque móvil oficial en la legislatura, con un ahorro de entre un millón y 1,5 millones de euros a lo largo de cuatro años. Con la enajenación de esta parte del parque móvil, la comunidad autónoma se queda sin ningún vehículo blindado. Rueda afirmó que "a día de hoy" la Xunta no prevé hacerse con ningún coche de estas características.

Para el PSdeG, la operación supone "malvender" patrimonio público para "justificar la campaña electoral del Partido Popular, acusó la portavoz del partido, Mar Barcón. La dirigente socialista lamentó los "tintes ridículos" de la operación anunciada ayer por la Xunta, y se preguntó si el Gobierno gallego incluirá en la subasta el coche que utiliza en la actualidad el ex presidente Fraga, un Volkswagen Touareg pagado por la comunidad autónoma.

También el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, subrayó que los coches oficiales que salen a subasta son "los mismos" que compró el Gobierno de Fraga "en su mayoría", y que también utilizó el ahora presidente Alberto Núñez Feijóo en su etapa de vicepresidente. Aymerich afirmó que "se venderán todos" excepto uno "de color burdeos", que quedó "siniestro total" tras un accidente ocurrido durante la campaña de las autonómicas de 2005 con Feijóo a bordo, según denunció el portavoz del BNG.

HERNÁNDEZ COMPRÓ DESDE LA XUNTA TRES AUDI POR VALOR DE 262.000 EUROS

Tres Audi de alta gama adquiridos durante dos años, cada vez más caros y con precios que oscilaban entre los 53.374 euros del primero y los 133.128 del último. Todos ellos fueron incorporados al parque móvil de una sociedad de la Xunta que contaba con apenas cinco trabajadores y se encontraba en pérdidas. Así era la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos, dependiente de Augas de Galicia, bajo la presidencia del actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández Fernández de Rojas. El valor de los tres turismos de lujo alcanzó 261.963 euros.

El Consello de Contas, en su informe de fiscalización del año 2000, ya dedicó un capítulo a la sociedad que Hernández presidió hasta febrero del 2002. Y, entre otros excesos detectados en la gestión de la empresa, se detiene a analizar la compra de los tres vehículos, de una marca ahora denostada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Como responsable de Augas de Galicia, Hernández presidió entre septiembre de 1998 y febrero de 2002 el consejo de administración de la sociedad pública, que Contas califica de "instrumental" por su actividad.

El primer Audi, un A-8 con 260 caballos de potencia, llegó en octubre de 1999, mediante la firma de un contrato de arrendamiento financiero, o leasing, con una entidad bancaria, con un precio de 53.374 euros, unos 8,7 millones de pesetas de entonces. El contrato, dice el informe, tiene una duración de 36 meses, con un tipo de interés del 5%, lo que supone una cuota anual de 18.926 euros.

Casi un año después se modifica el contrato anterior, respetando las mismas condiciones, pero con el acuerdo del cambio de dicho vehículo por otro Audi, en este caso un modelo deportivo S-8 4,2 V8 Quattro trip tronic. El coche más caro de la marca alemana costaba entonces 75.460 euros, unos 12,3 millones de pesetas. La querencia por los Audi desde la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos durante el mandato de Hernández no cejó. A finales de 2001, la empresa de Hernández firmó la tercera adquisición, el modelo de más alta gama: un A-8 largo 4,2 Quattro trip tronic, con un precio de 133.128 euros. De esta operación, dice el Consello de Contas: "Se mantuvieron las demás condiciones inicialmente pactadas, tanto en lo que se refiere al tipo de interés como al vencimiento del contrato, lo que supuso la modificación de la cuantía de las cuotas abonadas, de manera que no guarda la más mínima proporcionalidad con el resto de las cifras de la sociedad".

Los tres coches se convirtieron, a juicio del Consello de Contas, en el bien con más valor de la empresa. "El mayor saldo del activo del balance de situación está constituido por los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero de un vehículo", denuncia el órgano fiscalizador.

Todas estas operaciones se realizaron pese a que la sociedad registraba abultadas pérdidas. También lo constata el informe del Consello de Contas. En 2000, señala, obtuvo unos resultados negativos de explotación de 226.994 euros. La empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se constituyó en 1993, y bajo la tutela de Hernández realizó en aquel año una sola obra: la mejora de la red de saneamiento del río Lagares.

Las alegaciones a Contas realizadas por la sociedad apelan a "razones de necesidades operativas", que considera "lógicas teniendo en cuenta las funciones a desarrollar". Explica la sociedad que en octubre de 1999 se realizó un arrendamiento financiero, pero con posterioridad, en 2001, se tuvo que cambiar por otro "como consecuencia de un grave siniestro que sufrió el primer vehículo y que derivó en su inutilidad". Para evitar más explicaciones, la empresa pública respondió al Consello de Contas que sólo una de las compras se realizó en 2000, el ejercicio que revisaba el órgano fiscalizador, por lo que no se sentía obligada a justificar las dos operaciones posteriores.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio aseguraron ayer que, siendo presidente de Augas de Galicia y de Obras y Servicios Hidráulicos, Hernández no hizo uso de los coches oficiales adquiridos, ni Audi ni otros modelos y que empleó como vehículo oficial un Passat asignado a la Dirección Xeral de Obras Públicas, de la que él era titular. La adquisición de los Audi "fue una decisión de la consellería", aseguran las mismas fuentes. En aquel momento, el titular de Política Territorial era el difunto Xosé Cuiña.

Los tres Audi

- Octubre de 1999. Audi A-8. 3.7. MPT 260 cv. Precio: 53.374 euros
- Diciembre de 2000. Audi S-8. 4,2. V8 Quattro trip tronic. Precio: 75.460 euros.
- Octubre de 2001. Audi A-8 largo 4,2 Quattro trip tronic. Precio: 133.128 euros

(www.elpais.com, 29/04/09)

FEIJÓO REDUCE ANTE LOSANTOS EL PROBLEMA DE LOS AUDIS A UN SOLO “COCHE INSIGNIA” Y RECONOCE QUE LA XUNTA YA TENÍA CITROËN

El nuevo presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en los micrófonos de la COPE para ser entrevistado por el locutor Federico Jiménez Losantos, quien no recibió de buen grado su victoria en Galicia por lo que suponía de espaldarazo para la continuidad de Mariano Rajoy al frente del PP. El locutor recibió al popular restando trascendencia la victoria del PPdG aunque acabó sacando la bandera blanca: “A unos les parece mucho, a otros les parece poco, pero a ninguno les parece mal...”. Preguntado por un oyente sobre el eje de su campaña electoral, los supuestos gastos fastuosos de la Xunta en puntos como los muebles, el despacho de Touriño o la flota de vehículos oficiales, el nuevo presidente se limitó a reducir el asunto a un “coche insignia” del que intentarán desprenderse. Asegura que ya ha cumplido su promesa porque el Gobierno “usa Citroën”, pero reconoció que ya eran vehículos de la Xunta. Además, Feijóo mostró su reticencia a privatizar hoy por hoy TVG y en referencia a Esperanza Aguirre y a sus planes para Telemadrid concluyó que hacerlo “aisladamente” por parte de una comunidad “es muy arriesgado”.

Feijóo inició su entrevista con Losantos -quien no recibió con demasiado entusiasmo su victoria en las urnas- abordando la situación de los Audi oficiales de la Xunta. Estos vehículos ya eran usados por el Gobierno gallego con la presidencia de Fraga pero el PP denunció reiteradamente durante la campaña su empleo y prometió usar Citroën porque tiene factoría en Vigo. “Lo primero que hemos hecho es cumplir esa promesa, en estos momentos todo el Gobierno tiene un Citroën”. Sin embargo, a continuación aclaró que “no hemos comprado un solo coche” reconociendo que en realidad “son Citroën que ya estaban en el parque móvil de la Xunta”. En cuanto a los criticados Audi oficiales, al menos hasta el 1-M, apuntó que son unos 25 y que una empresa se encargará de “del mantenimiento razonable del parque” automovilístico y “buscará una fórmula de renting”.

¿El derroche se reduce a un solo Audi?

Feijóo acabó reduciendo el problema de los Audi a uno que “es el buque insignia de escudería” que vale “medio millón de euros” y que ahora intentará “colocar” con la empresa que gestiona el parque. Si no lo consiguen colocar lo sacarán a subasta “y se venderá al mejor postor”. Losantos propuso entonces que se lo regalen a la Iglesia para utilizarlo en “los comedores de los pobres”. Aunque un oyente había preguntado sobre los presuntos gastos excesivos en el despacho y los muebles de su predecesor Touriño, Feijóo no comentó nada al respecto. Precisamente ayer, El Plural publicó la fotografía del famoso despacho, que Feijóo abrió hace unos días a los periodistas y, casualmente, no había ni rastro de los lujos denunciados por el PP durante la campaña.

¿Y el resto de las fábricas de España?

El presidente gallego insistió en su defensa del empleo de Citroën por parte de la Xunta porque cuenta con factoría en Vigo, aunque reconoció que ésta es “una de las seis grandes fábricas” que hay en toda España. La lógica de Feijóo obligaría por ejemplo a la Generalitat Valenciana a deshacerse también de su actual flota de Audis para recurrir a Ford, la marca que produce allí.

Pedro J. le insta a privatizar TVG

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, también presente en la entrevista, criticó que Galicia cuente con “una televisión pública” propia cuando ya hay canales privados en la comunidad. Feijóo defendió que TVG nació entre otras cosas para “promover la cultura gallega” y este punto no tienen por qué cubrirlo las televisiones privadas. “Se puede más por Galicia con 200 millones de euros que estar compitiendo en un terreno, si la Comunidad tiene una TV, ¿por qué no un periódico?”, insistió Pedro J., y ahí otro de los contertulios, el director de La Razón Francisco Marhuenda, recordó el proyecto de Aguirre de “privatizar” Telemadrid.

Ir “aisladamente” es “arriesgado”

Sin embargo, Feijóo discrepó abiertamente de la presidenta madrileña, apuntando que en Galicia tienen “mucho trabajo por hacer antes de llegar a ese estadio” y que la “discusión” sobre el futuro de las televisiones autonómicas debería afrontarse “por parte de muchas”, por lo que concluyó que si “aisladamente” lo hacía una comunidad es “muy arriesgado por parte de ese Gobierno”.

(www.elplural.com, 28/04/09)

SU COCHE OFICIAL COMO VICEPRESIDENTE DE LA XUNTA ERA... ¡UN A-8!

El presidente en funciones de la Xunta gallega, Emilio Pérez Touriño, respondió ayer a las acusaciones que se le han hecho durante la campaña electoral, cuando su oponente político, Alberto Núñez Feijóo arremetió contra él por su vehículo oficial, un Audi A8. Touriño desveló ayer que el anterior Ejecutivo gallego, presidido por Manuel Fraga contaba con 32 vehículos de la misma marca, y el propio veterano dirigente adquirió dos Audi A8, uno de los cuales le costó a la Xunta 331.000 euros. Además, según indicó, el propio Feijóo dispuso también de un Audi A8 cuando era vicepresidente regional, por lo que Touriño calificó de “inadmisible e intolerable” el ejercicio de “demagogia” que el PP ha hecho con este asunto en los días previos a las elecciones.

- [Ni coche oficial gallego, ni el personal: prefiere la marca Audi](#)
- [El coche "prestado" de Feijóo va camino de atropellarle y de paso, al PP](#)
- [¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25...](#)
- [¿De dónde sacará Feijóo un Citroën gallego blindado?](#)
- [Feijóo se pasea desde hace tres años en un coche que le presta Citroën](#)

Ya parecía claro que Alberto Núñez Feijóo no cambiará, como prometió durante la campaña electoral, su coche oficial, un Audi A8, por un Citroen C4. El presidente saliente de la Xunta ha desvelado ahora que antes de su llegada al Ejecutivo regional, el ex presidente *popular* Manuel Fraga ya contaba con una flota de 32 vehículos de la polémica marca. El propio Fraga adquirió otros dos Audi A8 y también un Volkswagen Touareg entre 2001 y 2004.

"Ya costaban los coches"

Touriño lamentó el “oportunismo” y la “falsedad” de las acusaciones de despilfarro que se hicieron contra él durante la campaña electoral y señaló que uno de los Audi adquiridos por Fraga costó 331.000 euros. “Ya costaban entonces los coches”, ironizó, y recordó que las compras de los dos vehículos se hicieron “sin dotación presupuestaria”. En el caso del Volkswagen Touareg, que se compró en 2004, se adquirió además “sin siquiera procedimiento de contratación”, por lo que a posteriori tuvo que pasar un expediente de convalidación de gasto.

"Demagogia, oportunismo y falsedad"

“Le pasaré a Feijóo información de primera mano y papeles que lo acreditan, aunque él sabe bien de lo que hablo”, apuntó Touriño, que afirmó que “tanta demagogia, oportunismo y falsedad acumulada no cabe en los edificios de San Caetano”, sede del Parlamento autonómico. Además recordó que el PP había pagado la flota de 32 Audi, por lo que “debe saber bien de lo que habla el señor Feijóo cuando habla de los Audi”.

Un Audi para el vicepresidente

Además, Touriño señaló que el propio Feijóo, cuando ocupaba la vicepresidencia de la Xunta “tuvo desde el primer día a su servicio, y circuló por el país, incluso en la campaña electoral, subido a un Audi A8”, este sin blindaje, porque su cargo no lo estipulaba. En este sentido, se preguntó si esta es la “austeridad y regeneración democrática” que pregonó el candidato *popular* durante la campaña.

Todos los presidentes autonómicos

El dirigente socialista apuntó que, a la vista de cómo se han desarrollado los hechos, “tal vez” debió hacer pública esta información antes de que se celebrasen las elecciones, pero apuntó que “cada uno tiene su actitud en la vida”, y la suya no pasa por “enturbiar ni enlodar”. Según apuntó, nunca ha criticado que su antecesor contase con un coche blindado ya que lo tienen todos los presidentes autonómicos.

www.elplural.com 13.02.09

EL COCHE "PRESTADO" DE FEIJÓO VA CAMINO DE ATROPELLARLE Y DE PASO, AL PP

El Peugeot 607 que utiliza el inesperado ganador de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo, desde hace tres años fue “un préstamo” de la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo a “una institución” –el PP-. Es la versión que ayer defendía una portavoz del grupo en Galicia para acallar los rumores de que Feijóo habría defraudado a Hacienda al no declarar su vehículo. Al apuntar al partido como usufructuario, sin embargo, el grupo se ha metido en una nueva encrucijada: en ese caso, Feijóo no habría cometido delitos fiscales, pero el PP habría violado la Ley de Financiación de Partidos, que no contempla la figura del “préstamo”.

Según su última justificación, el PPdeG es usufructuario del coche oficial del su presidente, un Peugeot 607 que proviene de “un préstamo” de la factoría Citroën de Vigo. Pero la Ley de Partidos no contempla la figura del “préstamo” y es muy estricta ante este tipo de operaciones, recoge Público.

Violan la Ley

El artículo 4.2 del citado reglamento aclara que los partidos “podrán recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley”, pero las mencionadas donaciones deben tener “carácter irrevocable” y este concepto es incompatible con el de “préstamo” con el que se justifica Feijóo.

No hay contrato

Además, las donaciones de personas jurídicas –el caso de la fábrica Citroën de Vigo- necesitan siempre un “acuerdo adoptado en debida forma”, algo que Feijóo no hizo. El dirigente ni siquiera firmó un contrato como tal: la operación sólo quedó recogida en una “papel de autorización para la utilización del vehículo”, tal como han explicado fuentes de la factoría.

Ni acreditaciones

Pero a efectos legales, esta no basta. La normativa requiere que se acredite “mediante certificación expedida por el partido político” la “identificación del donante”, un documento “que acredite la entrega del bien donado” y una “mención expresa del carácter irrevocable de la donación”. En ningún momento se contempla la justificación de Feijóo –el “préstamo” gratis y total-.

“Interés específico” de Feijóo

En el PP rehúsan hablar del tema, a pesar de la locuacidad que se demostró con el Audi del presidente saliente, Emilio Pérez Touriño. PSA Peugeot Citroën Vigo sí ha dado explicaciones pero estas no dejan bien parado al líder popular. “Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo. El nos expresó su interés por comprarlo” apuntó

ayer un portavoz de la fábrica. "Manifestó su deseo de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo", agrega.

Promesas

incumplidas

El "préstamo", que se alargó durante tres años, parece haber tocado fin: Feijóo tiene intención de sustituir el Peugeot 607 –el coche de los ministros–, por un Citroën C6 –el coche de Sarkozy–, incumpliendo así, por cierto, su primera promesa: el dirigente, que había aseverado que se desplazaría en un coche fabricado en Galicia, finalmente lo hará en un vehículo que sólo se produce en Francia.

(www.elplural.com, 10/03/09)

EL COCHE GRATIS TOTAL DE FEIJÓO INCUMPLE LA LEY DE FINANCIACIÓN

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, utiliza desde hace tres años el coche que la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo le presta de manera gratuita. Feijóo no ha declarado el vehículo a Hacienda ya que fue "un préstamo a una institución", según justificó un portavoz del líder de la derecha en Galicia.

Al erigirse en "institución"—lo es el Parlamento, pero no sus diputados, portavoces o grupos—, Feijóo convirtió de forma implícita en usufructuario de su coche oficial al PP gallego. La Ley sobre Financiación de Partidos Políticos, sin embargo, no recoge la aludida figura del "préstamo" y es muy estricta ante operaciones como la que ha beneficiado al próximo presidente de la Xunta desde hace tres años, como adelantó Público el miércoles. Los requisitos que impone no se han cumplido en este caso.

El artículo 4.2 del citado texto establece que los partidos "podrán recibir donaciones, no finalistas, nominativas, en dinero o en especie, procedentes de personas físicas o jurídicas, dentro de los límites, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley". Su articulado obliga a que las donaciones tengan "carácter irrevocable", concepto que es incompatible con "el préstamo" con el que se excusa Feijóo. Además, las donaciones procedentes de personas jurídicas —como es la factoría Citroën de Vigo— requieren siempre "acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto, haciendo constar de forma expresa el cumplimiento de las previsiones de la presente ley". Tampoco se hizo así.

Marketing con Feijóo

En esta ocasión, el préstamo del vehículo que utilizó Feijóo, un Peugeot 607 —el coche que utilizan la mayoría de ministros— se realizó en el marco de "una acción de relaciones públicas y promoción de producto", según aseguró este lunes a este diario un portavoz de la factoría.

Este mismo interlocutor admitió que no ha mediado contrato alguno en la operación. Simplemente se firmó "un papel de autorización para la utilización del vehículo". El trámite es, sin embargo, bastante más complejo. La ley especifica que "cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se acreditará mediante certificación expedida por el partido político en el que se haga constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado, haciendo mención expresa del carácter irrevocable de la donación". La ley de financiación de partidos no contempla, por tanto, la opción elegida por Feijóo: el "préstamo" gratis total.

"Interés de Feijóo, no del PP"

El líder del PP gallego no quiso aclarar el lunes estas circunstancias. "No vamos a hablar más de este tema", zanjó su portavoz. La locuacidad exhibida por Feijóo contra el Audi de su antecesor en la Xunta se apagó así a la hora de explicar los detalles que envuelven a su vehículo gratuito, un empeño personal de Feijóo. Fue él quien, hace tres años, recién elegido presidente del PP gallego, mostró su interés a los responsables de la factoría de Citroën de Vigo para hacerse con un coche gracias a su favor.

"Más que el PP, fue un interés específico de Alberto Núñez Feijóo por probar el vehículo, él no expresó su interés por comprarlo", explicó el lunes el portavoz de la factoría. "Manifestó su deseo

de conocer nuestros vehículos y se le hizo un préstamo", se justificó. El préstamo ha durado más de tres años.

Feijóo sustituyó este vehículo por un Citroën C6, también gratis, antes de comenzar la campaña electoral gallega. Este modelo –el mismo que usa el presidente francés– es el que ha elegido finalmente como coche oficial, a pesar de haber prometido que se serviría de uno de los modelos fabricados en la factoría gallega. La limusina que ha encargado se produce únicamente en Francia.

www.publico.es 09.03.09

EL HIJO DEL SATURNINO Y LA SIRA

Alberto Núñez Feijóo, el próximo presidente de la Xunta de Galicia, ganó contra pronóstico y devolvió el aliento a Rajoy. Ésta es su historia

Acabo de tirar al *Touro* en el contenedor", le confesó una tarde de éstas la señora Ramona a su vecina Geluca, en alusión a los carteles con la cara de Touriño. En el pueblo de Os Peares, el único de Galicia que está dividido -por tres ríos y la vía del tren- en cuatro municipios y dos provincias, todos los habitantes se han unido por la causa de Feijóo. "Alberto, o noso presidente", proclama gloriosa una pancarta que atraviesa la vía a la entrada de la localidad. Detrás del letrero, la primera casa que aparece es una de piedra en la que el próximo gobernante de Galicia nació el 10 de septiembre de 1961, y vivió casi toda su infancia y adolescencia. El número 6 del lugar de O Mesón, Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, provincia de Ourense, feudo hoy del barón popular José Luis Baltar, ya era entonces un caserón habitado por cuatro familias. Eladia, la abuela de Feijóo, su abuela del alma, y el abuelo Manolo, que era panadero, ocupaban, con sus ocho hijos y luego también con el yerno, el nieto Alberto y su hermana Micaela, parte del primer piso y de la planta baja. Allí, Eladia atendía al mismo tiempo una expendeduría de tabacos y una tienda de ultramarinos menos surtida que la de la acera de enfrente, la del *Alpargateiro*.

- PSOE y BNG denuncian que el PP llevó hasta el colegio electoral en autobús y en coche a potenciales votantes
- En un día acabaré con el caciquismo en Galicia, prometió Feijóo durante la campaña electoral

En Os Peares había una tienda debajo de cada casa y la clientela se repartía. "Era difícil llegar a rico y ellos eran bastante pobres", recuerda ahora Ramona, que a sus 93 años es la más anciana del pueblo. "Si vienes buscando cosas, aquí nadie te hablará mal de los de la Eladia, y menos del Alberto", advierte la vecina. Un rincón de Galicia difícil de gobernar, donde todo va lento porque es preciso el consenso de cuatro alcaldes y dos diputaciones.

El nieto de Eladia no será sólo el próximo presidente de Galicia: el niño nacido en el número 6 de O Mesón ha logrado salvar a Mariano Rajoy, asediado por las tramas de espías y de corrupción, de los enemigos internos que se aprestaban a cortarle la cabeza, esperando la previsible derrota del PP en las elecciones gallegas.

En Os Peares están Alberto, el hijo de Pepito *dos Barcos*, y Alberto, el hijo del *Quintela*. Pero el Alberto por antonomasia es el que ya sólo pasa de vez en cuando de visita, acompañado de políticos conocidos, para saludar a todos y comer en el bar Barra. Es Alberto, "el hijo del Saturnino y la Sira", aquí no tiene apellidos. Su padre empezó de "listero". Pasaba lista y controlaba a los obreros que construían la carretera y los embalses del río Sil. Luego llegó a encargado. Mientras, el niño, "responsable y obediente", estudiaba todo el día. Todo el mundo lo recuerda así: encerrado siempre en casa. "Sólo salía a estirar las piernas". Daba "un par de vueltas" por la acera y volvía sobre sus libros. Casi nunca iba a jugar con los otros chicos.

Con el tiempo, los Núñez Feijóo compraron su parte de inmueble, y hace cuatro años la vendieron con la condición de que Alberto pudiese seguir ocupando un cuarto con llave. Allí, según Rosa Caride, la nueva propietaria, guarda "papeles, libros, botellas de vino y ese montón de regalos que le hacen desde que está tan arriba". Hasta que la familia marchó a vivir a Ourense, no tuvo baño en casa.

Si Saturnino, su padre, no se hubiese quedado en paro, Alberto no habría sido presidente de Galicia. Porque el chico, que acababa de terminar Derecho, no mostraba interés por la política y lo que quería era llegar a juez. Pero al perder Saturnino el empleo, y con una hermana seis años menor, Alberto tuvo que ponerse a trabajar. En 1984, preparó en dos meses las primeras oposiciones a la Xunta y las aprobó con el número dos. El primero fue un amigo de la universidad, Carlos Negreira, que tenía fama de ser más listo, pero también menos disciplinado. En estas elecciones, Negreira iba de primero en la lista del PP por A Coruña. Y Feijóo, de primero por Pontevedra. Otro compañero de Derecho, el socialista José Blanco, dice que no se acuerda de él porque estuvo poco tiempo en la Facultad; pero alguna vez Feijóo ha preguntado por los apuntes que Blanco nunca le devolvió, sólo para dejar claro que él era mejor estudiante.

Dos años antes de entrar en la Xunta, el hombre que el domingo pasado salvó a un Rajoy en caída libre había votado a Felipe González. No tenía una ideología formada. Lo que le preocupaba era sacar buenas notas, ayudar a su familia y no perder el tiempo. Era, y sigue siendo, según los que lo conocen, "católico, apostólico y romano", y frecuentaba algo más la iglesia que en la actualidad. En su casa natal se hablaba más castellano que gallego. Al pueblo que medró gracias a las centrales hidráulicas había llegado mucha gente de fuera, y la denostada lengua propia era lo que se hablaba "en la montaña", allá en núcleos alejados.

Con Feijóo, el PP abandonó la política de apoyo a la lengua gallega que durante años había defendido Fraga y se enfrentó por ello al Gobierno bipartito. Durante la precampaña, la cúpula del partido encabezó la manifestación del colectivo Galicia Bilingüe, que acabó con enfrentamientos violentos entre grupos independentistas y la policía. Él no asistió. Estaba en Argentina visitando a la emigración votante. Unos días antes, le había asegurado al periodista Jiménez Losantos que apoyaba la marcha en defensa del castellano. El mismo Jiménez Losantos que en una ocasión le preguntó a Rajoy "de qué escombrera ideológica" le había sacado.

Feijóo suele contar que se interesó por la política viendo por la tele las tertulias de *La Clave*. José Luis Balbín tuvo la culpa, pero también el antiguo *conselleiro* y ministro José Manuel Romay Beccaría, su verdadero padrino en el PP. Romay era el representante más visible, junto a Rajoy, del sector urbano de los populares gallegos (los que en el partido llamaban del *birrete*, conservadores tradicionales) enfrentado en una larguísima disputa interna a la facción rural y caciquil, impregnada de galleguismo y populismo y encarnada por Xosé Cuiña y José Luis Baltar, los de la *boina*, adversarios de la dirección nacional del PP. Romay no lo conocía de nada, pero en 1991, siendo *conselleiro* de Agricultura, necesitaba un secretario general para su departamento. Así que hizo una encuesta rápida entre el cuerpo de letrados y todos le comentaron que el que más valía era un tal Alberto, de 29 años.

Lo llamó a su despacho, charló con él, y en el acto decidió su nombramiento. Se lo llevó después, como secretario general, al Servizo Galego de Saúde. Y cuando José María Aznar nombró a Romay ministro de Sanidad, Feijóo se convirtió en presidente del sistema sanitario nacional. Tenía 35 años. Se cuenta que Romay lo dejó en el edificio del Insalud y ya no volvió. La leyenda dice también que al llegar le hicieron una advertencia: "De la tercera planta hacia arriba no trabaja ni dios". "Pues él los puso a trabajar, porque tiene una capacidad de motivación tremenda, contagia su energía", asegura ahora el ex ministro. A la hora de hacer equipos y nombrar gerentes de hospital, no miraba el carné político de nadie. Todo el mundo le tenía por un gestor pragmático sin inclinaciones ideológicas, que se había limitado a hacer carrera en administraciones del PP. De hecho, no se afilió hasta 2002.

"Todavía se recuerda su gestión porque en cuatro años redujo las listas de espera quirúrgicas de 212 a 53 días. Acabó con las diferencias regionales. Y yo entonces ya pensaba que podría llegar a presidente de la Xunta". Romay, que está "orgullosísimo", destaca su "capacidad de trabajo, su liderazgo, su honestidad y su gran sentido de la oportunidad". En sus tiempos, él no logró imponer el *birrete*, pero su delfín ha "unificado el partido", y tras ganar estas elecciones, Baltar, el último patriarca *con boina*, ha anunciado que se irá "en dos o tres años".

"En un día acabaré con el caciquismo", prometía Feijóo en la campaña. Mientras, el *barón* Baltar enrarecía la contienda dando rienda suelta a su lengua desbocada. Insultos (del tipo "maricón" y "sinvergüenza") hacia unos y comentarios sobre la supuesta vida íntima del nacionalista Anxo Quintana. Ése era el contenido de sus mítines por los pueblos. Y su juego sucio resultó doblemente eficaz cuando algunos medios publicaron noticias y fotos comprometidas sobre el líder del BNG.

El error más grave de Quintana, en los primeros días de la campaña, fue dar un mitin ante un grupo de ancianos que habían asistido engañados por un colectivo organizador del acto. Habían pagado 15 euros para viajar a Portugal y el autobús paró en un hotel a pocos kilómetros de la frontera. El PP se cebó en este hecho a pesar de que Baltar es el gurú de lo que en Galicia se llama *carrexo* (transporte al colegio electoral de votantes, por lo general de cierta edad, en coches particulares de los políticos locales). El sábado de reflexión, la Diputación de Ourense movilizó una flota de vehículos para llevar de excursión por la Ribeira Sacra a vecinos de varios municipios. El BNG y el PSOE denuncian que tanto los alcaldes como Baltar, presidente de la institución provincial, compartieron banquete con los potenciales electores. Al día siguiente, el *carrexo* se volvió a repetir. Hay pruebas gráficas y denuncias, ante la Guardia Civil y la Junta Electoral, de que incluso se transportó a los votantes hasta el colegio electoral en autocar... Pero Feijóo promete que acabará en un día con el caciquismo.

Cuando Romay dejó el ministerio, Álvarez-Cascos, que también había puesto los ojos en el empollón de Os Peares -y Feijóo le considera otro padrino político-, se lo llevó de director general a Correos. De ahí, y de su etapa en el Insalud, viene su estrecha amistad con varios sindicalistas como Regino Martín, de CC OO. En esta organización aseguran que su gestión fue "muy buena", que con él se consiguió firmar un plan de pensiones que sigue en vigor y el primer convenio colectivo, que consolidó 10.000 empleos.

Unos cuantos años después, Esperanza Aguirre lo quiso fichar como consejero de Sanidad, pero entonces el ahijado político de Romay ya estaba "casado con Galicia", como dice su madre. "Se casó con Galicia, pero Galicia no me da nietos", se lamentaba la madre en un vídeo electoral propagandístico, con el que el partido intentaba acercar la figura distante y todavía desconocida del candidato. La frase era, en realidad, una indirecta. Porque aunque casi nadie lo sabía entonces, Feijóo tiene una novia ocho días más joven que él. "Los dos somos virgo, y por lo tanto, tímidos y reservados", comentó ella un día. Lo de la timidez de Alberto, disfrazada de chulería y un humor desconcertante cuando trata con quienes no le dan confianza, es vox *pópuli*. Y sus rivales lo saben y lo utilizan. El socialista Francisco Cerviño, diputado autonómico, explica que es fácil percibir cuándo en un debate se ha dado en el blanco "porque se pone todo colorado". Pese a ello, dicen que "encaja bien los golpes".

La periodista madrileña Carmen Gámir, *Chinny* (de chinita) para todo el mundo, porque su madre es española nacida en Filipinas, lo conoció en el año 2000, cuando lo entrevistó como director de Correos para el diario orensano *La Región*. Durante nueve años mantuvieron su relación en secreto. A Feijóo se le atribuyeron antes otras relaciones. Pero en el ecuador de esta campaña Gámir salió a la luz, precisamente en un reportaje que le dedicaba su diario. La periodista, que trabaja para el semanario internacional de *La Región*, terminó pidiendo una excedencia hace algo más de dos meses para seguir a Alberto y vive con él en una de las dos torres gemelas más altas y exclusivas de Vigo. Feijóo está pagando la hipoteca y presume de ello, pero sus allegados no aclaran si tiene más propiedades.

En contra de lo que mostraba otro vídeo electoral, Feijóo no recoge los platos en su domicilio. "Un día a la semana", explica un amigo, "le va una mujer", pero eso es porque "trabaja 16 horas al día". Pese a que es un hombre "corriente", o quizá por eso, el líder del PP gallego "jamás plancha". Los domingos por la noche telefonea a su padre para que le cuente cómo han quedado el Depor y el Madrid. En la noche electoral también lo llamó. Saturnino, en lugar de darle la enhorabuena, le cantó los resultados de la jornada.

En una muestra de heterodoxia para el PP, Feijóo suele afirmar que "el matrimonio es la institución menos democrática que hay". En una ocasión, Fraga dijo que su único defecto era estar soltero. Años antes, el ex presidente de la Xunta también le había recomendado a Rajoy que se casase y tuviese hijos. En una charla en el Club Financiero de Vigo, le preguntaron a Feijóo qué medidas pensaba tomar para fomentar la natalidad. Siempre rápido en sus respuestas, contestó con otra pregunta, "¿vais con segundas?", y con una afirmación: "Yo, por lo pronto, el año que viene me pongo a ello".

Desde una ventana de su domicilio, el presidente *in pectore* de Galicia se despide de la ría por la mañana, antes de marchar a Santiago en el C6 negro que puso hace tiempo a su servicio la factoría viguesa de Citroën (la misma empresa que ahora fabricará su coche presidencial, en Francia). Feijóo no ha confirmado aún si piensa instalarse en la residencia oficial de Monte Pío, en

Santiago. "Le gusta demasiado el mar", cuenta uno de sus próximos. Él pesca y tiene "muchos amigos marineros".

Lo que ya ha puesto a la venta, dice Feijóo, es el lujoso Audi oficial de Touriño, que seguramente tantos votos le valió al PP. El mensaje sobre los gastos astronómicos del presidente socialista ("con el Audi de Touriño se podrían comprar 24 ambulancias") y una historia de sillas a 2.269 euros para una sala de la Xunta (que en realidad nunca fueron compradas) caló en la opinión más que las noticias de corrupción y casos de espionaje del PP. Ni siquiera llamó la atención un escándalo del dinero procedente de las Caimán que había cobrado Luis Carrera, el número uno del PP por Ourense, sin declararlo a Hacienda. Feijóo ganó con holgura tras una campaña en la que el chaval vergonzoso, interno de los 10 a los 14 en los Maristas de León, aparcó sus escrúpulos y abundó en la demagogia. "Él estaba seguro de que iba a ganar, y logró transmitirlo", afirman sus íntimos. "Hace años que en los mítines del PP no había tanta alegría y tanta gente".

Feijóo presume de ser leal, humilde y austero. Sus amigos aseguran que "no le gusta gastar por gastar". Lleva años con el mismo móvil Nokia. Un modelo básico roto por todas partes. Durante el tiempo que ejerció cargos públicos en Madrid se resistió a cambiar de vehículo. Al llegar a la Xunta llamado por Fraga, primero para sustituir a Cuiña como *conselleiro* de Política Territorial y luego como vicepresidente, heredó un Audi A8 y con éste siguió hasta que el bipartito le arrebató el poder al PP en 2005. Entonces aquel gestor sin ideología aparente fue el hombre elegido por Rajoy para suceder a don Manuel. Ofrecía una imagen centrista y moderada, que en buena parte se ha roto con la dureza de la reciente campaña.

Cuando era vicepresidente, le ofrecieron un A8 nuevo, pero él se negó a estrenarlo. En un acto, durante el traspaso de poderes, Quintana le preguntó qué coche tenía. Feijóo le aconsejó que fuese a mirar en el garaje de la Xunta: "Hay un A8 sin estrenar que yo nunca acepté". En un segundo encuentro, el del BNG le volvió a preguntar: "Es que no está donde me dijiste". "Pregúntale a Méndez Romeu [*conselleiro* socialista de Presidencia]; lo está usando él", le contestó Feijóo, dando muestras de que se encontraba más al tanto de las cosas de palacio que el socio nacionalista de Touriño.

Esta semana, cuando después de la victoria viajó a Madrid para reunirse con la dirección del partido, Feijóo cenó en un bar de carretera. Era muy tarde, sólo estaban los camareros, pero lo reconocieron y le felicitaron. Luego, él, su novia y su chófer se sentaron en una mesa y pidieron, para los hombres, un pepito de ternera, y para ella, un sándwich. Su primera cena como presidente recién elegido era de veras modesta.

Y suele decir que sus platos favoritos son "las *xoubas* [sardinillas] fritas y los huevos fritos", aunque siempre que puede acude al restaurante Estrella, del municipio pontevedrés de Bueu, en el que trabaja su amigo Andrés Pérez, *percebeiro* de mañana y cocinero por las tardes. "Es de buen diente", asegura Pérez, "suele pedir percebes, centollas, arroz con bogavante, rape y lenguado". En verano, con éste y con otros amigos, Feijóo suele pasar unos días en la isla de Ons. Con otro de sus colegas, los fines de semana va a correr por el parque vigués de Castrelos. "Está en forma y eso le valió para aguantar como un toro la campaña". A diario visitaba tres provincias, pero físicamente no se resintió. Él, "que suele sufrir de la garganta", conservó la voz todo el tiempo y "sólo se acatarró el último día". Mientras Quintana, por ejemplo, perdió siete kilos, Feijóo sólo adelgazó uno y medio.

El de Os Peares sigue haciendo alarde de su origen y llama "señoritos" a sus contrincantes. Nunca se arrepentirá lo suficiente de aquella foto, durante los terribles incendios del verano de 2006, que lo mostraba sosteniendo una manguerita vestido de domingo. Combatir su fama de estirado es tarea difícil. Tras una encuesta entre los alcaldes del PP, concluyó que tenía que cambiar de imagen. En la precampaña, el candidato que de niño se lavaba en una palangana se cortó el pelo y abandonó la gomina para siempre.

www.elpais.es 08.03.2009

EL PRESIDENTE RIOJANO, PEDRO SANZ, VIAJA EN UN A-8 COMO EL DE
TOURIÑO, *TUNEADO* ADEMÁS CON TV Y FAX

¿Sabe Feijóo, especialista en falsos escándalos, que el Gobierno del PP de La Rioja tiene 25 Audis de alta gama?

“Creo que deberíamos parar de hablar de esto”, rogaba Alberto Núñez Feijóo, presidente electo de la Xunta de Galicia, el pasado miércoles en la *Cadena Ser*. La marcha atrás de Feijóo en lo que había sido el pilar de su campaña electoral (el gasto “suntuoso” de Touriño en su Audi A8), no parece funcionar. En realidad, el *popular* parece haber abierto la caja de Pandora automovilística y ha hecho mirar con lupa cuánto gastan las Comunidades Autónomas en vehículos. Entre todas, resulta llamativo el caso de La Rioja, donde gobierna el también *popular* Pedro Sanz y que cuenta -sólo en el ámbito de presidencia- con cinco coches de alta gama. En concreto, cuatro Audi A-6 para diferentes usos. El presidente, en cambio, se reserva para él un espléndido Audi A-8.

Y es que, en La Rioja, cada consejero tiene a su disposición un coche de alta gama. En total, se han pagado 200.000 euros en horas extras de los conductores. El Partido Riojano denuncia casos de conductores “esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus” o el traslado de hijos de consejeros al colegio en coches oficiales.

Sanz, también en Audi A8

El Gobierno riojano cuenta en su haber con un parque automovilístico que provocaría la envidia de cualquier coleccionista de Audi. En total 24 modelos A6 al que habría que sumar el espléndido, y equipadísimo, Audi A8 con que se mueve su presidente, el popular Pedro Sanz.

En el Diario La Rioja

Las protestas del Partido Riojano (PR) no se han hecho esperar y en una rueda de prensa ofrecida ayer denunciaron, no sólo este amplio parque automovilístico, sino los abultados gastos de horas extras y el kilometraje realizado con los coches. La comparecencia del PR la recogía el diario La Rioja en una pequeña pieza en la página 8. La inclinación creciente de este rotativo -el único editado en la Rioja- hacia el PP en general, y hacia su presidente en particular, es conocida en la región.

Un modelo familiar

El Audi A8 es el mismo modelo que utilizaba Emilio Pérez Touriño, presidente en funciones de la Xunta de Galicia, y al que tanto rédito electoral ha sabido sacar Alberto Núñez Feijóo – especialista en escándalos artificiales-, gracias a sus críticas sin fundamento durante la pasada campaña electoral. También es el mismo modelo en el que se mueven Alberto Ruiz-Gallardón (aunque es un ejemplar bastante más caro), Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá y otros altos cargos populares...

Jugoso Plan Renove

El modelo que usa el presidente riojano fue adquirido el 3 de noviembre de 2005 para su uso exclusivo y gracias a un beneficioso Plan Renove, de manera que sólo pagó, tras entregar el coche antiguo, 100.436 euros por él. Sin embargo, habría que sumarle la instalación – perfectamente justificada- de un inhibidor de frecuencia y el blindaje que llevan los coches de los altos cargos autonómicos.

Habitáculo tuneado

Hasta aquí todo normal. No lo es tanto la mejora del habitáculo que se suministró Pedro Sanz. Gracias a una reducción del maletero, el presidente riojano ganó espacio en la parte de atrás del coche. Justo lo necesario para poder instalarse un fax, una televisión, etc. Ahora pocos recuerdan cuando el PP puso el grito en el cielo porque el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), se había instalado una mini oficina en su Audi A-8 por valor de 20.000 euros. Finalmente, las críticas obligaron a Benach a dar marcha atrás.

25 Audi para el Gobierno

Pero el patrimonio riojano en vehículos no se queda aquí. El pasado 5 de diciembre, se adquirieron para el parque automovilístico 3 Audi A-6 por valor de casi 40.000 euros cada uno. Este es el modelo con el que el Gobierno riojano se encuentra más cómodo. Cada una de las nueve consejerías tiene uno a disposición de su responsable. A estos, habría que sumar los cuatro que tiene Presidencia (aparte del A-8): 1 destinado al Gabinete de Comunicación, 2 para la Consejería de Presidencia y uno más para asuntos varios. De todos estos, quedarían al margen los 4 puestos a disposición de altos cargos y otros 6 para servicios alternativos. Queda uno más que realiza los traslados al Hospital Psiquiátrico. En total, 25 Audi.

2.384 kilómetros al día

Más allá de la cantidad de vehículos, llaman la atención, tal y como denuncia el PR, el kilometraje realizado con los vehículos y las horas extras pagadas a los conductores. En el año 2008, en total se realizaron 870.182 kilómetros. La cuenta sale a 2.384 kilómetros al día, pero hay que tener en cuenta que en cada jornada, sin descontar festivos, no se parece que se hayan de mover tanto todos los coches.

La penúltima Comunidad

Si prestamos atención al mapa español, estas cantidades parecen, por lo menos, exageradas. En términos de territorio, La Rioja, con 29.574 m2, es la 16ª Comunidad Autónoma de España. Sólo supera en tamaño a las Islas Baleares. Galicia, raíz de la polémica, es la 7ª Comunidad más grande de España. Si hablamos de población, La Rioja cuenta con 317.501 habitantes. Esto la convierte en la Comunidad Autónoma con menos habitantes de España. Mil menos de los que tiene la ciudad de Valladolid. Galicia, con casi tres millones de almas está en el 5º puesto de población.

Horas extra a la espera de un mus

¿Y las horas extra de los conductores? El PR defiende que tienen todo el derecho a cobrarlas “porque las han realizado”. Pero, ¿en qué? El Partido Riojano denuncia que se ha hecho “una utilización abusiva”. Es el caso de los desplazamientos a Riojafórum, yendo “cada consejero en un coche”. Pero hay desplazamientos más estrafalarios: “Hay consejeros que llevan en el coche oficial a sus niñas al colegio” y se ha dado el caso de que “haya un conductor esperando cinco horas en un restaurante a que un consejero coma y juegue al mus”.

www.elplural.com 08.03.09

FEIJÓO ERA EL ÚNICO PORTAVOZ QUE USABA UN COCHE GRATIS TOTAL

empezamos.



Los líderes de PSOE y BNG en la Cámara sólo tuvieron opción de compra de un vehículo

Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado desde 2006, cuando fue aupado al liderazgo del PP gallego, de una ventaja exclusiva: era el único líder parlamentario que disponía de un vehículo “prestado” por la factoría PSA Peugeot Citroën de Vigo. Los portavoces en la Cámara autonómica de PSOE (Ismael Rego) y BNG (Carlos Aymerich) nunca tuvieron a su disposición un vehículo cedido por la empresa más importante de Galicia. Así lo han confirmado ambos *aPúblico*.

“Adquirimos en 2002 un 607 por 39.000 euros”, dicen en el PSdeG

Citroën procuró a Feijóo un Peugeot 607 hace tres años “en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Popular”, había explicado una portavoz del partido a este diario. Se trataba, añadió, de “un préstamo a una institución, como se presta a otras instituciones, caso del Ayuntamiento de Vigo o la Diputación de Pontevedra”. En caso de que el Grupo Popular fuese una institución, ¿por qué no hubo una cesión similar a los grupos de BNG y PSOE? Este periódico intentó contactar, sin éxito, con algún responsable de la compañía que explicase la diferencia de criterio.

El problema es que los grupos parlamentarios no son una institución. Lo es el Parlamento gallego, o la Xunta, pero no un grupo que, como lo asume el Reglamento de la Cámara –y de todas las asambleas legislativas–, es una forma de organización de los diputados para acceder a los recursos y articular el trabajo parlamentario.

Feijóo usaba el 607 “prestado, a nombre de Citroën”, aunque su grupo corría con “todos los gastos de mantenimiento”, desde el seguro a la gasolina o el chófer. “Nunca” utilizó el único Audi A6 que el Parlamento pone a disposición de los portavoces de los tres grupos, previa solicitud.

Rego recordaba ayer que en la última legislatura de Manuel Fraga (2001-2005) se consiguió que la Cámara aumentase la subvención a los grupos para que estos, si querían, comprasen un coche.

Socialistas y Bloque quieren saber la “situación fiscal” del automóvil

“Adquirimos un 607 el 5 de abril de 2002 en un concesionario de Santiago, con mediación de la fábrica de Vigo. Nos salió por 38.890,41 euros, y aún pagamos una letra de 565,36 euros”, relató. “¿Por qué se le presta a Feijóo y se nos cobra a nosotros? ¿Y lo acepta por qué? Ni se nos habría ocurrido al PSdeG. ¿Y a cambio de qué? Con mayor razón se lo regalarán ahora, cuando sea presidente de la Xunta”. El portavoz socialista le exigió que explique “cuanto antes” la “situación fiscal” del coche y “la relación con Citroën”. Ayer, en el PP decían ignorar si Feijóo ha declarado el Peugeot a Hacienda. “Me sorprende su desparpajo, y que no haya dicho nada. Veo cierto tufillo”, afirmó Rego.

Sin coche en el grupo del BNG

En el BNG, Aymerich pidió respuestas a las “preguntas que todo el mundo se hace”. Y citó: “¿Un político debe aceptar regalos? ¿Con qué contraprestación? ¿Debemos creer que es un préstamo y punto? Es un escándalo que se nos oculte esta presunta irregularidad. Casa mal con la austeridad que ha predicado”. Aymerich subrayó que su grupo no ha comprado ningún vehículo.

Fuentes del PP, consultadas por este diario, no pudieron precisar si su grupo adquirió un coche. Añadieron que el portavoz en la pasada legislatura, Manuel Ruiz, “solía conducir su vehículo y usó muy ocasionalmente el del Parlamento”. Feijóo ha prometido “andar en un Citroën”. Fuentes de la Xunta recordaron ayer que el próximo presidente deberá convocar un concurso público para adjudicar el coche oficial al tratarse de un contrato mayor de 18.000 euros. No podrá darlo sin más, a dedo.

LAS INSTITUCIONES DE VERDAD: LOS “PRÉSTAMOS” A PONTEVEDRA Y AL ALCALDE DE VIGO

En el PP gallego citaron el “préstamo” al Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Hay diferencias.

En la Diputación explican que Citroën cede tres C5, uno para el presidente del órgano, Rafael Louzán (PP), y los otros “para los cinco vicepresidentes o algún jefe de servicio”. Al cabo de “15.000 ó 20.000 kilómetros”, el coche se devuelve a la fábrica, que lo pone a la venta. La Diputación corre con los gastos. “Se nos da como institución, no a la persona. Y no hay contraprestación”. ¿Un grupo parlamentario es una institución? “No”, responden fuentes de la Diputación.

En Vigo, situación similar. “Desde hace años se llegó a un convenio con Citroën: la fábrica cedía al alcalde un coche [hoy, un C6] que renueva cada ocho meses y luego se vende. Lo hace como máximo dignatario de la ciudad, para promocionar la marca. Todos los demás coches son Citroën, comprados o de alquiler”, relatan fuentes próximas al alcalde, Abel Caballero (PSOE).

www.publico.es 07.03.09

EL PP DESCONOCE SI FEIJÓO DECLARÓ A HACIENDA EL COCHE



Alberto Núñez Feijóo ha disfrutado durante tres años de coche gratis desde que es presidente del PP gallego. Se trata de un Peugeot 607, “prestado” por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada en Vigo (Pontevedra), según confirmó ayer a Público una portavoz. La fábrica se lo cedió “como presidente del Grupo Parlamentario Popular”. Y, como era un “préstamo”, el coche figuraba “a nombre de la compañía, de Citroën”. ¿Declaró Feijóo alguna vez a Hacienda el 607? “No lo sé”, respondió la portavoz del PP.

El próximo presidente de la Xunta, como desveló ayer este diario, ha utilizado como coche oficial el citado 607 desde 2006. Hace tres semanas, antes de que comenzara la campaña, "un concesionario de Citroën prestó a Feijóo un C6". "Pero hasta entonces sólo usó el 607", repitió la portavoz. No aprovechó "nunca" el Audi A6 que el Parlamento gallego pone a disposición de los portavoces de los tres grupos parlamentarios. La Cámara cuenta con un parque móvil reducido: cinco automóviles para los cinco miembros de la Mesa y otro más para los portavoces "previa solicitud", precisaron fuentes del Parlamento.

"No es un regalo, sino un préstamo a una institución. La fábrica PSA es la principal empresa de Galicia, con el mayor número de trabajadores. Ha prestado a Feijóo como a otras instituciones, al Ayuntamiento de Vigo [gobernado por PSOE y BNG] o la Diputación de Pontevedra [dirigida por el PP]", añadió la portavoz.

En el PP recalcan que "en ningún caso se trata de una donación". Si así fuera, debería tributarse el coche a Hacienda. Pero aun siendo un "préstamo", Feijóo podría tener que declararlo como renta en especie si usara el vehículo para disfrute personal, como interpretan los expertos en fiscalidad consultados por este periódico, que señalan los artículos 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 2006. "Usó el 607 como presidente del grupo, nunca para uso personal", subrayan en el PP.

¿Por qué no se dijo nunca nada del vehículo, precisamente cuando Feijóo empleó el argumento del "despilfarro" de Pérez Touriño? "No se preguntó. Cuando se nos ha preguntado, lo hemos dicho, sin problema". ¿Ha supuesto un ahorro para el PP el préstamo del 607? "No hay nada más que decir", zanjó la portavoz.

"Refleja la impostura del PP y de Feijóo, que se presentó como abanderado de la austeridad y la regeneración", replicó Carlos Aymerich, portavoz del BNG en el Parlamento. "Lo más grave es que ese préstamo le impide defender los derechos de los trabajadores de Citroën de Vigo. ¿De parte de quién se va a poner cuando se presente el ERE?", añadió. "¿Por qué ocultó ese dato?", inquirió Mar Barcón, miembro de la gestora del PSdeG. "El PP debe explicarse por si se saliera de los márgenes de la Ley de Financiación de Partidos. ¿Y cómo es posible que una empresa que recibe dinero público para evitar despidos preste coches?"

En EEUU, el candidato de Barack Obama para Sanidad, Tom Daschle, tuvo que renunciar al puesto al no declarar como ingresos el uso de un coche gratis con chófer que le puso una compañía a la que asesoraba.

Si hay uso personal, hay que pagar tasas

Si es renta en especie

El artículo 42 de la Ley 35/2006, del IRPF, señala que "constituyen rentas en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda". El artículo 43 añade que "en el supuesto de uso" de coches, esa renta en especie será el 20% del valor del vehículo. Si el pagador no es el propietario, "se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo".

Si es una donación

Si Citroën hubiese donado el coche a Feijóo, y estuviese a nombre de éste, se aplicaría la ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de 1987, ya que la norma gallega sólo prevé reducciones para casos de parentesco. La ley del Estado establece una tarifa progresiva, del 7% al 34%, en función del valor de la donación.

(www.publico.es, 06/03/09)

EL FUTURO COCHE OFICIAL SE FABRICA EN FRANCIA



Hizo del "lujo bipartito" y del coche oficial de Touriño el eje de la campaña y ahora el Audi A8 del presidente en funciones persigue a Alberto Núñez Feijóo en cada comparecencia pública. La Cadena SER avanzó ayer que el candidato del PP no midió bien sus promesas cuando anunció que compraría un vehículo fabricado en Galicia. El Citroën C6, la berlina que ha probado durante la campaña y que ahora pretende comprar para la Xunta, no se produce en Vigo sino en Francia.

Tal vez por eso, el presidente electo, que la semana pasada repetía en cada mitin que nunca se subiría a "un coche que cuesta como 24 ambulancias", pidió ayer "parar de hablar de esto". "Sólo hemos dicho que no nos gustan los gastos suntuarios del ex presidente", dijo Feijóo, quien reclamó "empezar ya a construir el futuro". El futuro jefe del Ejecutivo reiteró su intención de comprar un Citroën C6, por ser "el vehículo de representación" de la marca francesa. Feijóo no dio pistas sobre el futuro del A8 blindado que intentará vender.

(www.elpais.com, 05/03/09)

PAJÍN ACUSA A FEIJÓO DE HACER "MUCHA DEMAGOGIA" SOBRE EL COCHE OFICIAL Y AHORA NO PUEDE CUMPLIR SUS PROMESAS



La secretaria de Organización del **PSOE**, **Leire Pajín**, acusó hoy al candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de haber hecho "muchísima demagogia" sobre el coche oficial del presidente saliente de la Xunta, **Emilio Pérez Touriño**, de manera que ahora no puede cumplir sus promesas.

PSOE ve "tufillo" en que Feijóo elija un coche oficial de Citroën tras saberse que la marca le cedió "uno de cortesía"

Pajín señaló que se ha hecho "muchísima demagogia" y eso, a su juicio, supone que a veces "uno sea prisionero de sus propias palabras como le ha pasado a Feijóo". "Hoy vemos en algunas de las portadas que Feijóo hizo algunas promesas sobre el cambio de coche que ahora no puede cumplir", agregó.

En su opinión, el futuro presidente de la Xunta quiso hacer una campaña electoral "basada en declaraciones como ésta", en vez de estar basada "en las propuestas que los ciudadanos gallegos querían hacerle". No obstante, recordó que son los ciudadanos los que han hablado y los socialistas "saben escuchar" y, por eso, "se ha empezado una nueva etapa".

<http://es.noticias.yahoo.com/5/20090305/tpl-pajn-acusa-a-feijo-de-hacer-mucha-de-679ba16.html>

EL PP VALENCIANO SE PASEA EN EL AUDI QUE FEIJÓO REPROCHABA A TOURIÑO

Ahora el líder popular gallego quiere "parar de hablar de esto" **El PP valenciano se pasea en el Audi que Feijóo reprochaba a Touriño** y con el que se desplazaron a Alicante. Las críticas al Audi de Touriño comprometen a Gallardón y Aguirre, que usan el mismo modelo

Coche 'gratis total' desde hace tres años

Citröen Vigo ha cedido un coche a Feijóo desde que preside el PP gallego hace tres años . Ahora pasará “del coche de Obama” de Touriño a la limusina de Sarkozy

El líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral.... El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de Citröen añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo “el presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo”

El bulo de Obama

Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar “el coche de Obama”. Como un arma recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de “la tendencia al lujo” del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.

Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa.

El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco años, entre 2008 y 2012.

Fuente: Público

<http://alacant.wordpress.com/2009/03/05/el-pp-valenciano-se-pasea-en-el-audi-que-feijoo-reprochaba-a-tourino>

FEIJÓO NO QUIERE HABLAR AHORA SOBRE EL COCHE



El recién elegido presidente se ha decantado por un C6 que se fabrica en Francia y no en la factoría de Vigo

Feijóo no quiere hablar ahora sobre el coche

http://www.cadenaser.com/espana/audios/feijoo-quiere-hablar-ahora-coche/csrrcsrpor/20090304csrrcsrnac_2/Aes/

FEIJÓO INTENTARÁ VENDER EL COCHE OFICIAL DE TOURIÑO A TRAVÉS DE LA CONCESIONARIA ANTES DE RECURRIR A LA SUBASTA PÚBLICA

El candidato del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó hoy que intentará vender el coche oficial del máximo mandatario autonómico en funciones, Emilio Pérez Touriño, a través de la concesionaria, antes de recurrir a la subasta pública. En una entrevista a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, entendió que "pocas personas" podrían comprar "un coche de esa categoría", por lo que optó por recurrir a la fábrica, que "puede conocer clientes que necesiten este tipo de vehículos", un Audi A8 blindado. No obstante, el dirigente popular no descartó, llegado el caso, acudir al "procedimiento habitual" y subastar públicamente este vehículo oficial de la Xunta de Galicia.

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-intentara-vender-coche-oficial-tourino-traves-concesionaria-antes-recurrir-subasta-publica-20090305124554.html>

FEIJÓO DISFRUTA DESDE HACE TRES AÑOS DE UN COCHE GRATIS TOTAL

El presidente del Partido Popular gallego cambiará "el coche de Obama" de Touriño por la limusina de Sarkozy

Cuando el presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mencionó a la firma Citroën durante su campaña electoral asegurando que es "mi marca y mi coche", no dijo toda la verdad. Suyo no ha sido nunca. Ni del PP gallego. El líder conservador emplea desde hace tres años vehículos cedidos por la factoría que Citroën tiene en Vigo de manera totalmente gratuita, según confirmó a *Público* el miércoles el propio Feijóo a través de una portavoz.

Desde que fue elegido presidente del PP gallego, el 15 de enero de 2006, Feijóo ha dispuesto siempre de vehículos de alta gama cedidos por la factoría PSA Peugeot Citroën ubicada en Vigo. Primero fue un Peugeot 607 el mismo modelo que emplean la mayoría de ministros y después un Citroën C6, el más exclusivo de la firma francesa.

Feijóo ha disfrutado de este vehículo *gratis total* durante toda la campaña electoral gallega. Una portavoz de Citroën España explicó ayer a *Público* que la planta de Vigo "dispone de autonomía" para ceder vehículos según su estrategia de empresa ya que "tienen su propia flota y sus propios criterios". No es por tanto la marca, sino la fábrica de Vigo, la que ha proporcionado a Feijóo locomoción gratis durante los últimos tres años. Ahora, desde su responsabilidad al frente de la Xunta, el líder del PP gallego deberá tomar decisiones que afecten al futuro de este centro de producción. Este diario intentó este miércoles insistentemente recabar la versión de la factoría Citroën de Vigo, pero ninguno de sus responsables estuvo "localizable" desde primera hora de la tarde, según aseguró una portavoz de la planta.

Utilizará el coche de Sarkozy

El modelo que Núñez Feijóo ha disfrutado gratis durante la campaña gallega será, además, el coche elegido por el próximo presidente de la Xunta para convertirlo en su coche oficial.

El agradecimiento a la marca ha llevado Feijóo a encargar un Citroën C6 el más representativo de la marca para su uso institucional, según anunció en la Ser. Este modelo es el mismo que emplea en sus desplazamientos oficiales el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy. Al elegir su nuevo C6, el líder del PP gallego ha incumplido también su primera promesa electoral aún antes de estrenar su despacho.

El pasado 26 de febrero, igual que en otras citas electorales, pero en Vigo, donde los empleos de la factoría de Citroën añaden votos en tiempos de crisis, Feijóo solemnizó un compromiso: el 2 de marzo "el presidente de la Xunta solamente se acercará a ese coche [el de Touriño], que es más caro que el de Obama, para poner un cartel de se vende y montarse en un coche hecho en Vigo". Dos días después de vencer el plazo de su palabra dada, el líder conservador ha fallado ya a su primera obligación contraída. El coche lo comprará a cargo de la Xunta, pero lo hará en Francia, único país en el que se fabrica el exclusivo modelo elegido.

La firma francesa produce en Galicia los modelos Xsara Picasso, C4 Picasso, y el Berlingo, así como la Peugeot Partner. Ninguno ha sido escogido, a pesar de que el modelo más alto de la gama C4 sí admite blindaje y los elementos adicionales de seguridad que requiere un vehículo de altas prestaciones dispuesto para el servicio oficial. Su coste no supera los 30.000 euros, la mitad que el vehículo seleccionado, el Citroën C6, cuyo precio es de 60.000 euros sin incluir refuerzos de seguridad en neumáticos, carrocería y cristales, que pueden duplicar la factura final que abonará la Xunta.

El bulo de Obama

Feijóo ha optado así por la limusina de Sarkozy para jubilar "el coche de Obama". Como un arma recurrente en campaña, el PP ha hecho bandera de "la tendencia al lujo" del socialista Emilio Pérez Touriño. Feijóo ejemplificó esta supuesta inclinación al dispendio en su coche oficial, un Audi A8. Para redondear el argumento, la derecha gallega lo simplificó tejiendo un bulo rentable: el coche de Touriño es más caro que el del presidente de Estados Unidos, Barak Obama.

Después de ganar las elecciones, Feijóo aparcará el vehículo alemán de Touriño y disfrutará de uno francés "muy digno", según el líder gallego intentando cerrar el juego electoral que le ha

acompañado durante las últimas semanas. "Creo que deberíamos dejar de hablar de esto", pidió el martes Feijóo en la misma entrevista en la que anunció qué exclusivo modelo presidirá su parque móvil oficial.

Las acusaciones contra Touriño no han sido, sin embargo, una estrategia original. El PP ha cargado también contra el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, por instalar una oficina móvil en su coche oficial que acabó retirando y contra el líder del BNG, Anxo Quintana, a quien acusó de instalar en su vehículo un minibar de 6.000 euros que resultó ser, finalmente, una nevera de playa.

El PP nunca ha criticado, sin embargo, que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, disfrute de un Audi A8 el modelo de Touriño aparcado bajo su despacho, cuyo alquiler asciende a 591.624 euros por cinco años, entre 2008 y 2012.

Una campaña en el Audi de Emilio Pérez Touriño

Según aseguró Alberto Núñez Feijóo durante la campaña electoral gallega, "todos los periódicos y tertulias" se han hecho eco del "deterioro" de imagen de una Galicia gobernada por un bipartito con aires de nuevo rico. En realidad, fueron ABC y la Cope quienes más insistieron en esa idea. El PP rentabilizó en campaña la acusación generalizada de "despilfarro" que lanzó sobre la Xunta presidida por Touriño y caricaturizada en su coche oficial, un Audi A8, "más caro que el de Obama". La inclinación "al lujo" del ex presidente socialista no acababa ahí ya que sus sillas son –y serán si no las cambia ahora– "mejores que las de los Reyes Católicos", según Feijóo. El líder de la derecha gallega llegó a decirse "avergonzado" por tanto dispendio y erigió a Galicia en "referente nacional del despilfarro", gobernada por dos "jeques", Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana

<http://www.publico.es/espana/politica/206600/fejoo/disfruta/tresanos/coche/gratis/total>

FIN A OCHO AÑOS EN LA SOMBRA LA PERIODISTA CHINNY GÁMIR SE 'DESCUBRE' COMO LA PAREJA OFICIAL DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

A Carmen Gámir todo el mundo le llama Chinny, incluso sus compañeros de trabajo y, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, que es su pareja desde hace más de ocho años, mucho tiempo con una enorme discreción que se terminó hace apenas una semanas cuando comenzó a aparecer tímidamente a su lado. Reconoce que cada vez le cuesta más mantener este perfil bajo que se autoimpuso cuando Feijóo volvió a Galicia, primero para formar parte de la Xunta y después para asumir la presidencia del PPdeG.

Hasta hace dos meses Chinny era periodista en activo de La Región y Atlántico, y hasta ahora había conseguido esquivar los focos, no sin dificultad. Hasta ahora, porque, reconoce, cada vez le resulta más difícil evitar una cierta curiosidad en su condición de pareja del antes vicepresidente de la Xunta, mucho antes presidente de Correos y ahora líder de la oposición y aspirante a dirigir el próximo Gobierno gallego. 'Hasta ahora, no tenía ningún problema para hacer informaciones de todos los partidos. Aunque sabían lo mío con Alberto, nadie me puso problemas', explica tras un mitin del PP en el que ocupó un discretísimo y lejano lugar, muy lejos de donde Feijóo hablaba.

Chinny ha tenido que dejar la profesión, de momento, y pedir una excedencia mientras la campaña se encuentra en lo más alto, así que ahora tiene instalada su residencia en Vigo.

Carmen Gamir nació en Filipinas y parece que de eso le viene su diminutivo. Desde hace muchos años vive en Madrid, donde sigue la información relacionada con Galicia, sobre todo en el Congreso y el Senado. Allí fue donde conoció a Alberto Núñez, cuando éste era presidente de Correos. Fue el año 2000, y el inicio de su relación fue por una entrevista para este diario. Desde entonces, hasta ahora (más de ocho años), primero con cierta libertad y desde que Feijóo fue llamado por Fraga a Galicia, con más dificultades. Con todo, asegura que cuenta con los dedos de una mano los fines de semana que no pudie ron pasar juntos. 'Recuerdo algunos viajes que tuvo que hacer a América y algunos encierros que organizaba Fraga para el Gobierno. Ha sido más o menos llevadero hasta ahora, que empieza a costar más que nuestra relación pase desapercibida', cuenta.

¿Cómo es Núñez Feijóo? 'Muy divertido, con mucho sentido del humor. Muchas veces se ríe, y yo también, cuando en las informaciones aparece que está soltero y no tiene pareja. Para mí era mejor así, me permitía seguir con mi trabajo, pero ahora es más difícil', añade.

<http://www.laregion.es/noticia/82682/elecciones09/auton%C3%B3micas09/pp/chinny/periodista/g%C3%A1mir/fej%C3%B3/pareja/> 22.02.09

NÚÑEZ FEIJÓO OFRECE VENDER EL AUDI DE TOURIÑO PORQUE NO LO NECESITA

El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de vender el Audi oficial del hasta ahora presidente Emilio Pérez Touriño y ha ofrecido el vehículo a quien quiera comprarlo porque el Gobierno de la Xunta "no lo necesita".

Ha asegurado que él "andaré" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia

En una entrevista en el programa de Antena 3 "Espejo Público", Núñez Feijóo se ha dirigido a la entrevistadora para decirle: "si usted conoce a alguien que lo quiera comprar, yo desde ahora mismo me someto a cualquier persona que quiera comprar ese coche, porque creo que no lo necesitamos y lo que no se necesita es mejor cambiar y comprar otra cosa". Además, a la pregunta de si cumplirá su promesa de comprar un Citroen de los que venden en la planta de Vigo, Núñez Feijóo ha comentado que espera que el Gobierno se lo compre. El candidato popular a la Presidencia ha asegurado que él "andaré" en un Citroen que es "un coche muy digno" para el presidente de Galicia y ha reiterado que "esa es su marca y ese es su coche". Sobre el despacho de Touriño y a la pregunta de si también lo venderá, Núñez Feijóo ha dicho que el despacho es "una obra civil" que espera estará "consolidada". El candidato del PP ha subrayado que lo que sí hará el Gobierno de la Xunta es "dar ejemplo" al igual que muchas familias que están haciendo "un enorme esfuerzo de austeridad". Núñez Feijóo también ha comentado que el Plan es "adelgazar" el Gobierno en un 25 por ciento y pasar de 13 consejerías a 10, y disminuir en un 40 por ciento el número de altos cargos, de 52 delegaciones provinciales que tiene la Xunta a cuatro.

RAJOY: «FEIJÓO NO TIENE COCHE NI YATE PERO ES MEJOR QUE TOURIÑO Y QUINTANA»

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene coche ni yate", pero "es mucho mejor" que sus rivales electorales del PSdeG y del BNG, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, respectivamente. Rajoy se ha expresado de este modo durante un acto electoral celebrado en Ourense y en referencia a una foto, publicada en algunos medios, en la que figura el líder de los nacionalistas gallegos, Anxo Quintana, en un yate junto al empresario Jacinto Rey, beneficiario al parecer de un concurso del Gobierno gallego para la concesión de un plan eólico.

El presidente del PP ha añadido que por esta imagen los integrantes de la Xunta están "obligados a dar una explicación". Igualmente ha ironizado sobre la "desaparición" de los kioscos de Ourense de los periódicos que publican la imagen o se hacen eco de la stampa. Al margen de la fotografía de Quintana con el empresario, Rajoy nuevamente ha elogiado las virtudes del candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, un político "competente, trabajador, con conocimientos y experiencia", artífice en gran medida del salto adelante que ha dado Galicia en materia de infraestructuras, y por tanto, "bueno" para una comunidad autónoma que el domingo vivirá jornada electoral. Y para sentenciar cualquier alusión a la foto del yate, ha dicho: "Y es mucho mejor que Quintana y que -el candidato socialista- Emilio Pérez Touriño juntos; no tiene coche ni yate, pero es mucho mejor". Además, el PP, "un gran partido", está volcado en la victoria electoral de Feijóo, pues tiene un programa y quiere gobernar, según ha señalado Rajoy, con los votos de la gente y "no ligarse con otros con programas distintos". El presidente del PP ha recurrido de nuevo al sarcasmo para afirmar que si bien socialistas y nacionalistas plantean propuestas propias del gobierno, "Touriño, si tiene la oportunidad, irá detrás de Quintana de aquí a Sanlúcar de Barrameda, ida y vuelta, y varias veces".

Por ello, ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los simpatizantes del partido, un "esfuerzo" para evitar "otros cuatro años perdidos", algo que sólo puede asegurar el PPdeG, pues sabe cómo resolver la crisis económica -ya lo hizo en 1996-. La receta para ello consiste en tener "objetivos claros" y medidas diáfanas, entre ellas la reducción de impuestos, planteamiento que

Feijóo llevará a la práctica en Galicia si gobierna y que el PP establecerá en el Estado cuando llegue a La Moncloa, para lo que tampoco, ha dicho Rajoy, "falta mucho".

<http://www.larazon.es/noticia/rajoy-feijoo-no-tiene-coche-ni-yate-pero-es-mejor-que-tourino-y-quintana> 25.02.09

CANGAS, EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y LA TRAMA GÜRTTEL

El mitin de las elecciones de 1999 costó casi 3 millones de pesetas, igual que en Vigo

En la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, contable de las empresas de la trama Gürtel, aparece documentación donde, bajo el epígrafe "Cuentas Pte PP Galicia" figuran los costes de los mítines de la campaña municipal de 1999. Todos cuestan lo mismo 1.995.000 pesetas.

En el informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal eleva al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dentro de las investigaciones de la financiación del PP derivadas del caso Bárcenas, aparece una documentación relacionada con los mítines de la campaña electoral en Galicia. Da igual que el mitin se desarrollara en un recinto privado por el que había que pagar un alquiler que en uno público, donde el organizador no tenía que pagar nada: el coste siempre era el mismo, 1.995.000 de las antiguas pesetas. Lo único que varían son las extras. En el caso de Cangas, estas cantidades suplementarias alcanzan la cifra más grande de las que figura en todo el listado: 876.000 pesetas. Es decir, que el coste que el PP otorgaba a la celebración del mitin de Cangas alcanzaba los casi tres millones de pesetas. Según el portavoz de Alternativa Canguesa de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Pazos, que fue miembro del cuatripartito, entre 1996 y 1999, el Concello de Cangas no cobraba ninguna tasa por celebrar actos políticos en el pabellón de O Gatañal, que fue donde se celebró el mitin, el día 30 de mayo de 1999 y en el que participaron 400 personas. Para Xosé Manuel Pazos es muy difícil explicar esos elevados gastos. La campaña de 1999 fue la que puso a José Enrique Sotelo en el gobierno de Cangas con mayoría absoluta. Al acto electoral celebrado en O Gatañal asistieron el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, el que era conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, y el que fue conselleiro de Sanidade, Hernández Cochón.

Lo curioso es que todos los mítines tenían el mismo presupuesto, independientemente de que como en Vigo o en Pontevedra hubiera que alquilar locales. El de Vigo se celebró el día 11 de junio de 1999 en el cine Fraga y a él asistió como cabeza de cartel el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que por aquel entonces era ministro de Educación. En la foto estaba también el que era presidente del Real Club Celta de Vigo, Horacio Gómez, que iban de número dos en la lista. El de Pontevedra se celebró el 6 de junio en un abarrotado cine Gónviz. Mariano Rajoy y Manuel Fraga coincidieron en este mitin en el que apareció también Xosé Cuiña. La extra que sfigura en el caso de Vigo fue de 495.000 pesetas y ninguna en el de Pontevedra.

La documentación muestra que la precampaña es más cara que la campaña. En el extracto localizado en la casa de José Luis Izquierdo aparece que el acto electoral celebrado en el Cine Fraga en 27 de abril de 1999 tuvo un coste de 3.380.000 pesetas, el que se celebró en el Auditorio de Galicia en Santiago el 8 de mayo, 5.670.770 pesetas. En total se pasó una cuenta de 17.668.370 pesetas por la precampaña, que consistió en 6 actos principales, mientras que los 10 actos que figuran en el listado de la campaña tuvieron un coste total de 34.363.000 pesetas. A esas cantidades hay que añadir el coste del acto de Monte Faro celebrado el 17 de julio de 199, que aparece con 5.970.000 pesetas.

Durante la campaña de 1999 para las elecciones municipales y europeas, Pablo Crespo aún era secretario de Organización del PP de Galicia y hombre de máxima confianza de Xosé Cuiña Crespo. Poco después entraría a trabajar para Francisco Correa, que dirige la trama Gürtel. También aparecen en la documentación requisada al contable José Luis Izquierdo los costes del congreso del PP de Galicia y por otro lado las cantidades recibidas ya sea vía cheque con origen en facturas emitidas o en efectivo con la que se financian dichos eventos consignadas entre julio y octubre de 1999, calculando a continuación la cantidad pendiente de pago. El congreso del PP de Galicia celebrado en octubre de 1999 aparece con un coste de 8.750.000 pesetas. La cantidad que parece pendiente de pago se eleva a 20.803.094 euros.

Fue en 1999 precisamente cuando Xesús Palmou toma el relevo a Xosé Cuiña al frente de la secretaría xeral del PP de Galicia. El abogado estradense, que había entrado en la política de la mano de Xosé Cuiña se desmarca progresivamente del por aquel entonces todopoderoso Cuiña. Palmou no acepta los costes que figuran en el listado localizado en la casa del contable de la trama Gürtel y decide no pagar. Alega que no se presentan facturas para justificar semejante cantidad de dinero.

Entre la documentación aparecen también facturas emitidas por la empresa Special Events, ligada a la trama Gürtel, al Partido Popular "Elecciones Municipales y Europeas 1999 de Pontevedra" con el concepto "importe correspondiente a los montajes e instalación de escenarios, luz y demás en actos de campaña electoral en la provincia" por un importe de 700.000 pesetas. También hay otra de 28 de junio de 1999 de Special Event a PP "Elecciones Municipales y Europeas 1999 de Orense" con el concepto "importe correspondiente a los montajes e instalaciones de escenarios, luz y demás actos de campaña en la provincia por 400.000 pesetas.

<http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2014/03/16/cangas-papeles-barcenas-y-trama/985933.html>

LA XUNTA EXPROPIÓ AL DOBLE DE SU PRECIO LA CANTERA DE UNA EMPRESA AFÍN A LOUZÁN

El fiscal investiga el pago de más de un millón de euros a la compañía

El justiprecio de la expropiación por parte de la Xunta de una cantera de granito explotada por la empresa Áridos de Curro, SL (Aricur), propiedad de Juan Luis Abal Piñeiro, familiar del presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, por la que la Administración autonómica pagó más de un millón de euros, está bajo sospecha de la Fiscalía de Pontevedra tras una denuncia anónima y varios meses de investigaciones. En los expedientes de la denuncia figura una tasación que estipula el precio real de la cantera en apenas medio millón de euros y aporta datos oficiales de su escasa actividad antes de la expropiación, en 2008, para construir la variante de Meis, una conexión con la AP-9 y con la autovía de O Salnés. Juan Luis Abal, primo segundo de Louzán, además de contratista habitual con la Diputación, es socio de uno de los diputados del PP en el organismo provincial.

Los trámites de expropiación se iniciaron con el bipartito en la Xunta, cuando se encargó la tasación de la cantera a una empresa privada, que hizo una valoración de más de un millón de euros. El pago lo hizo efectivo el actual Gobierno poco después de ganar las primeras elecciones, en 2009. Según los peritajes que contradicen a los técnicos de la Xunta que firmaron el finiquito, la tasación de la cantera expropiada en Meis se hizo muy por encima de su valor real, ya que no costaría ni la mitad de lo que se pagó. Este notable desfase de cálculo se ha cotejado con los movimientos económicos de la empresa derivados de la extracción de áridos y que constatan que, al menos en los cuatro años anteriores, la cantera apenas tenía recursos y por tanto actividad. En la documentación en poder de la fiscalía figuran copias de la contabilidad de la empresa antes de ser expropiada.

La denuncia anónima no solo implica al empresario de Ribadumia Juan Luis Abal sino a varios técnicos de la Xunta y de la empresa que en su día realizó la tasación, quienes tendrán que prestar testimonio judicial. La firma Áridos de Curro figura en el listado de empresas que han venido contratando habitualmente con la Diputación Provincial de Pontevedra para el alquiler tanto de vehículos como de maquinaria pesada, al menos entre los años 2008 y 2013. En la última década, la arenera se hizo con una decena de contratos ofertados por el ente provincial, casi todas por el procedimiento negociado sin publicidad y por importes inferiores a 60.000 euros, según las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, en 2009, la Diputación le compró una partida de granito por valor de 59.000 euros.

La denuncia por presunta malversación de fondos públicos en la expropiación de la cantera de Aricur derivó posteriormente en la investigación económica abierta por la fiscalía al diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, al aparecer este último como socio de Juan Luis Abal en otros recientes proyectos empresariales. Después de cruzar datos económicos de las empresas y socios de Abal, los negocios del diputado, que también tiene una empresa de panadería, han llegado a salpicar al propio Rafael Louzán, quien le ha alquilado unos bajos comerciales en el barrio de Navia, en Vigo, donde Reguera abrió en 2008 una sucursal para el despacho de pan y otros productos derivados de alimentación. Presidente y diputado provincial fueron citados el pasado martes por el fiscal de delitos económicos de Pontevedra para aclarar el alquiler de esos bajos, al detectarse un precio de arrendamiento por encima del promedio habitual en esa zona. Después de esta comparecencia, la fiscalía tendrá que determinar si hay o no materia para emprender acciones judiciales.

El presidente de la Diputación pontevedresa explicó públicamente que su citación por la fiscalía era consecuencia de una denuncia anónima por "asuntos privados que no afectan a la institución".

Negocios con un antiguo contrabandista

Dos años después de la expropiación de la cantera, el pariente de Rafael Louzán denunciado ante la fiscalía, Juan Luis Abal Piñeiro, y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera emprendieron nuevos negocios. En marzo de 2011 constituyeron la sociedad Desarrollo Global Atlántico, SL, según la inscripción en el Registro Mercantil de Pontevedra.

En la última actualización corporativa de la sociedad, el 31 de enero de 2013, la dirección de la empresa también es compartida por otro nombre conocido en los anales judiciales del desaparecido contrabando de tabaco de las rías gallegas: Ramiro Martínez Señoráns. Reconvertido en uno de los más potentes empresarios relacionados con la industria cárnica en Galicia, Ramiro Martínez estuvo judicialmente implicado como uno de los principales integrantes de las tres históricas redes de contrabandistas de los años ochenta, una causa que finalmente nunca llegó a juicio. Ramiro y sus antiguos socios, entre ellos Sito Miñanco, coparon las portadas de los periódicos de la época.

La sociedad Desarrollo Global Atlántico se dedica al "asesoramiento en inversiones dentro y fuera de España, dirección y gestión de acciones, participación y valores representativos de los fondos propios de sociedades mediante la organización de medios materiales y humanos", según su objeto social declarado.

Con un capital de 50.000 euros, la empresa hizo una ampliación de 295.750 euros en septiembre de 2012 y el pasado año otra de 225.000. En el órgano directivo mancomunado y con igual aportación económica participan otros dos empresarios, Manuel Castro Fariña, del ramo de la fontanería, y Cristóbal Monteagudo Padín.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/16/galicia/1395002628_759103.html

NUEVOS INDICIOS APUNTAN AL PAGO DE DINERO NEGRO DESDE PONTEVEDRA

Un informe de la Intervención General del Estado al que ha tenido acceso la SER acredita que el PP de Pontevedra no devolvió a la sede central una deuda que, según Bárcenas, se pagó en negro a Rajoy y Cospedal. Fuentes jurídicas sostienen que la revelación de la IGAE "da verosimilitud" a la explicación

Primero fue Castilla La Mancha, luego La Rioja, y ahora Pontevedra. Un nuevo informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la pieza separada de la caja B del PP al que ha tenido acceso la Cadena SER "da verosimilitud", según fuentes jurídicas consultadas por esta emisora, a las explicaciones del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, sobre determinados pagos en B. Y en concreto, al supuesto reparto en 2010 de 50.000 euros "en mano y en sobres de color marrón y billetes de 500" a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Luis Bárcenas aseguró en su declaración del pasado 15 de julio que había otros pagos en negro posteriores a 2008, año en la que concluyen sus célebres 'papeles'. Se refirió a un embargo de 160.000 euros en la cuenta de la sede central, por culpa de una deuda del PP de Pontevedra. El extesorero manifestó que en 2010 recibieron 50.000 euros en negro de Pontevedra por esa deuda y que los entregó "en mano y en sobres de color marrón" a "Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal"; "veinticinco mil a cada uno" en "billetes de 500", añadió.

El informe de la IGAE con fecha de 21 de enero y complementado con otro del pasado 19 de febrero, acredita como dijo Bárcenas que el embargo a Pontevedra existió, y que lo asumió la sede nacional. Relata el informe la existencia de un embargo de la cuenta de la sede nacional por la deuda de "proveedor PP Galicia" de fecha 21 de septiembre de 2009. La cifra es algo superior a la que dice Bárcenas, un total de 187.569,83 euros, pero se explica según las fuentes jurídicas consultadas, por intereses devengados.

La IGAE confirma la deuda y que no fue devuelta

La IGAE también acredita como dijo Bárcenas que el PP de Pontevedra no devolvió la deuda por conducto oficial alguno. Sostienen los autores del informe al juez Ruz que "analizados los registros contables" de la sede central en los ejercicios de 2009 y 2010 y el "libro mayor y diario" de la sede territorial de Pontevedra "no se ha encontrado movimiento alguno que permita establecer una relación directa con una devolución por la sede de Pontevedra (Galicia) de los fondos embargados a la sede central en 2009".

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por la SER sostienen que los datos aportados por la IGAE dan credibilidad a la versión del extesorero del Partido Popular sobre la forma de abonar esta deuda de Pontevedra. Se trata de un indicio más, resaltan estas fuentes, a los ya acumulados hasta la fecha en el juzgado que dirige Pablo Ruz, sobre la certeza de muchos de las anotaciones del extesorero del PP en sus documentos manuscritos.

Páez también confirmó que "el dinero no llegó" por vía oficial

No solo Bárcenas sostuvo en su declaración la existencia de ese embargo de la cuenta de la sede nacional por una deuda del PP de Pontevedra. También el exgerente Cristóbal Páez, en su declaración como testigo y por lo tanto con obligación de decir verdad, reconoció al juez Ruz el pasado mes de agosto la existencia del embargo por la deuda gallega, y que por lo menos mientras estuvo -hasta febrero de 2010- "el dinero no llegó" por conducto oficial. Porque según Páez, el PP gallego sí que tuvo intención de pagarlo por otra vía, ya que afirmó "en un momento dijeron que ellos lo podían devolver, y yo les dije que no, que lo tenían que devolver con una transferencia", que "eso", tenía "que volver a la cuenta del partido".

Cristóbal Páez afirma que comunicó la deuda "al Sr. Rajoy" y a "la Sra. Cospedal". María Dolores de Cospedal, también como testigo ante el juez Ruz, aseguró que no recordaba que Páez le hubiera comunicado la existencia de la deuda. Y en cualquier caso, negó rotundamente que hubiera recibido cualquier sobre con dinero negro como afirmó Luis Bárcenas por ese u otro concepto.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/nuevos-indicios-apuntan-pago-dinero-negro-pontevedra/csrrsrrpor/20140305csrrsrrnac_2/Tes

LA XUNTA ADMITE 2.500 CONTRATOS CON FIRMAS CITADAS POR BÁRCENAS

El exgerente del PP en Galicia Modesto Fernández detalló ingresos de 1,8 millones en supuestos donativos opacos

Cinco meses y medio ha tardado el Gobierno gallego en responder a los tres grupos de la oposición sus peticiones sobre los contratos adjudicados por la Xunta a 16 empresas que el extesorero del PP Luis Bárcenas vinculó con la supuesta contabilidad B del partido. El pasado 15 de julio, Bárcenas ratificó ante el juez Pablo Ruz la autenticidad de un documento supuestamente elaborado en 2006 (cuando Alberto Núñez Feijóo ya lideraba el partido) por el entonces gerente del PP en Galicia, Modesto Fernández, que detalla ingresos de 1,8 millones supuestamente procedentes de donativos opacos de adjudicatarias de la Xunta en tiempos de Manuel Fraga.

La oposicion considera que ese papel es una prueba más de que la supuesta financiación ilegal del PP tenía ramificaciones en Galicia a través de la Xunta, y que se prolongó hasta la época en que Feijóo ya había sustituido a Fraga. Pidió entonces el desglose de los contratos de la Administración autonómica con las 16 empresas citadas y ahora el Gobierno gallego se lo ha remitido al Parlamento, el penúltimo día del año, aunque ha incluido también los pagos realizados durante el bipartito.

En el listado de más de 2.500 contratos con dichas empresas, que se remonta a comienzos de la pasada década y fue facilitado sin ningún tipo de orden, ni cronológico, ni alfabético, ni cuantitativo, hay de todo. Desde un pago de 4,72 euros por parte de la Consellería de Sanidade a la empresa Espina y Delfín que data de julio del año pasado hasta grandes adjudicaciones de obras públicas. Entre ellas destacan los contratos de varios cientos de millones de 2011 con Acciona para construir el nuevo hospital de Vigo y con Copasa y CRC para la Autovía da Costa da Morte, seguidos de diversos contratos de varias decenas de millones, por ejemplo, con FCC para el museo de la Cidade da Cultura, todavía en la época de Fraga.

La Xunta, que califica de "laborioso" su propio trabajo de recopilación de los datos largamente solicitados por la oposición, no facilita la suma de las cantidades pero asegura que, de las 16 empresas, "13 de ellas recibieron más recursos públicos durante la legislatura del bipartito que durante el mandato de Feijóo, pese a tener este último casi un año más de duración".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/30/galicia/1388436504_827309.html

EL PP TEME QUE LA CONEXIÓN GALLEGA DE LA TRAMA GÜRTEL ACABE SALPICANDO A FEIJÓO

La 'bomba Bárcenas' tiene sucedáneos repartidos por la geografía nacional y el que quedó instalado en Galicia en la etapa de José Cuiña como hombre fuerte del PP pasa ahora su factura. Pablo Crespo, compañero de fatigas de Francisco Correa en la trama Gürtel, siembra ahora sus amenazas contra el 'número dos' del partido y actual consejero de Infraestructuras en la Xunta, Agustín Hernández.

Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y antiguo 'número dos' de José Cuiña cuando éste ocupó hasta 2003 la cartera de Obras Públicas, salió de la cárcel el pasado febrero y su abogado le ha recomendado que mida bien los tiempos en su afán de tirar de la manta. En sus paseos por varios medios de comunicación no ha desvelado ningún nombre propio, pero dentro de su partido se cree que ha puesto en la diana al actual consejero de Infraestructuras de la Xunta, Agustín Hernández, al que Alberto Núñez Feijóo también hizo vicesecretario general del PP en esta comunidad en el congreso celebrado el pasado febrero.

Cuiña, fallecido hace seis años, era íntimo de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama Gürtel, y el sector de la construcción en Galicia conoce al dedillo cómo se la gastaban ambos en todo el manejo de las adjudicaciones de obra pública en la región. Según fuentes del PP, en esa época, que abarca toda la década de los noventa, el que ejecutaba las decisiones de Cuiña era Agustín Hernández, desde su puesto de director general de Obras Públicas de la Xunta, tarea en la que estuvo volcado desde 1998 a 2005. En el PP se cree que una parte de las amenazas de Crespo van dirigidas contra él, en una maniobra orientada también a salpicar a Alberto Núñez Feijóo, pues ha sido quien le ha nombrado consejero de Infraestructuras de la Xunta y, en clave orgánica de partido, vicesecretario general en el último congreso.

Lo que Pablo Crespo amenaza con ventilar, aseguran las mismas fuentes, no es ni más ni menos que la conexión gallega de la trama Gürtel, a la que se ha prestado escasa atención en el ámbito nacional pese a las numerosas huellas dejadas en esa comunidad. En el partido y también entre los constructores gallegos, llegaron a hacerse famosas las comidas que mantenían los primeros viernes de mes Cuiña, Correa y el propio Pablo Crespo para abordar las operaciones en las que se decidían las principales adjudicaciones de obra pública.

Crespo, que desde su salida de prisión se mueve con gran aplomo y seguridad, declaró esta semana a Faro de Vigo que en un año electoral, fácilmente entraban en el PP gallego más de dos millones de euros en dinero B y que, después de permanecer tres años en la cárcel, lo que le piden el cuerpo y su defensa es tirar de la manta.

Afirma también en esta entrevista que ha recomendado al extesorero del PP Luis Bárcenas, alguien "que conoce los cuartos más oscuros del partido", que diga "toda la verdad", aunque él esperará a dar nombres y documentación al comienzo del juicio. El exnúmero dos de Cuiña concluye afirmando que Bárcenas era una persona "extremadamente respetada" en su partido "por la pulcritud con que llevaba las cuentas" y que por el PP circulan dirigentes que "dan buena imagen pública, pero mantienen vicios privados". Otra bomba de relojería, sucedáneo de la de Bárcenas, que en Madrid también están teniendo en cuenta.

<http://www.vozpopuli.com/actualidad/27718-el-pp-teme-que-la-conexion-gallega-de-la-trama-gurtel-acabe-salpicando-a-feijoo>

HERNÁNDEZ FICHA AL APODERADO DE UNA INMOBILIARIA VINCULADA A LA GÜRTEL

El representante de Sedesa releva al dimitido Juncal como delegado provincial- Díez firmó la demanda tras pactar con Telmo Martín la exención de vivienda pública

El conselleiro Agustín Hernández ha confiado en un promotor inmobiliario, José Luis Díez Yáñez, la representación en la provincia de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que aglutina todas las competencias autonómicas en urbanismo. Se trata del ex director de Relaciones Institucionales de Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del *caso Gürtel* por presunta financiación ilegal del Partido Popular. Díez Yáñez trabajó en al menos 13 compañías relacionadas con Sedesa, el grupo empresarial que dirigió hasta hace unos meses Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino. El nombre de Díez aún aparece en el Registro Mercantil como apoderado de una de ellas, Mirador de Zapateira, SL, con sede en A Coruña, en la que figura como apoderado, según la consellería por error.

- [La consellería archiva el expediente a Evaristo Juncal](#)

El jefe territorial de la consellería -la figura que sustituyó a los delegados provinciales- relevó en el cargo el pasado agosto a Evaristo Juncal, destituido tras revelar este periódico sus negocios con testaferros de narcotraficantes y la situación de ilegalidad de un chalé de su propiedad. El cargo de jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lleva aparejadas otras competencias en Urbanismo, como la presidencia de la comisión provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. La consellería resta importancia a los intereses inmobiliarios de Díez y precisa que renunció a ellos en tiempo y forma. Agustín Hernández confía así, entre otras competencias, la construcción de vivienda protegida a quien rechazó, como apoderado de otra empresa de Sedesa, Mirador de Sanxenxo, SL, la construcción de ese tipo de viviendas en el suelo urbanizable de Monte Faro, una polémica promoción de 1.330 viviendas de lujo anexa a un campo de golf. El convenio, firmado con el entonces alcalde, Telmo Martín en 2006, preveía un ingreso de 4,8 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la exención de construir vivienda social.

Lo que entonces pareció un gran negocio para Sedesa cambió con las trabas medioambientales impuestas por el Gobierno bipartito y la posterior crisis y escasez financiera. El grupo empresarial con sede en Valencia denunció ante el Ayuntamiento de Sanxenxo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que reclama la devolución del dinero ingresado. El TSXG ha admitido a trámite la denuncia. El recurso de reposición contra el Ayuntamiento lleva la firma de José Luis Díez Yáñez. El convenio con Telmo Martín se firmó el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que el ahora presidente local del PP de Pontevedra abandonara la alcaldía de Sanxenxo. La gerente municipal de Urbanismo era entonces Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, nombrado en agosto de 2010, figura en el registro como apoderado de Mirador de Zapateira y como ex apoderado, ex consejero o ex administrador de otras 14 sociedades, 12 ellas relacionadas con el grupo de Vicente Cotino Escribá. Se trata de Mirador de Sanxenxo, Gerpe Contratas y Construcciones, Verterra, Verterra Galicia, Urbanizadora Ronda Norte Benisa, Senda Ambiental, Ecosenda Gestión Ambiental, Gran Hotel Xirivella, Sistemas Globales Inmobiliarios, Sistemas Globales del Medio Ambiente, Sedesa Urbana y Transporte de Residuos Industriales y Peligrosos. Un acta notarial del 2 de agosto revela que, ese día, Díez Yáñez, firmó por escrito su renuncia de poderes en diversas compañías, entre ellas Mirador de Zapateira. La consellería ha anunciado que el jefe territorial está haciendo "gestiones" para que su cese se refleje en el Registro Mercantil.

Las únicas dos empresas con las que estuvo vinculado Díez Yáñez que no con Sedesa son Sogama y Sogarisa, de las que fue consejero en su condición de director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Fraga, entre 2001 y 2003. El ahora jefe territorial también fue delegado de la Consellería de Medio Ambiente hasta 2001. Tras su salida de la Xunta, comenzó a trabajar con empresas relacionadas precisamente con los sectores inmobiliario y medioambiental.

La irrupción de los negocios de la familia Cotino en Galicia se produjo a través de el empresario coruñés José Antonio Souto, suegro de Cotino Escribá. Souto es presidente del grupo Tecam y promotor, junto a Manuel Jove, de Inveravante, y José Collazo, de Comar, de Invest Cos, que promueve el centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña, investigado por el Tribunal de Cuentas. Souto y Cotino fundaron Work Center, donde tienen su sede las sociedades de Sedesa en Galicia.

www.elpais.es 06.02.11

FEIJÓO CONTRATA A UNA FIRMA QUE SE COORDINABA CON LA 'GÜRTEL'

El Partido Popular de Galicia ha contratado para asesoramiento a Swat SL, firma que colaboraba con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos. Los socialistas gallegos anunciaron ayer que enviarán un escrito al juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, porque a su juicio la relación demuestra que el PP gallego y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "siguen ligados" a la trama.

Un portavoz del PP gallego precisó que la empresa asesora al partido desde hace tiempo y lo sigue haciendo, aunque negó que el contrato sea para preparar las municipales. "La relación es pública y notoria", añadió. En 2001, Swat SL dirigió la campaña autonómica del PP. Y en 2009, en las elecciones que ganó Feijóo, la firma fue proveedora destacada.

El PP emitió una nota en la que acusa a los socialistas de difundir "falsedades". "Dicha empresa [Swat SL] aparece en el sumario como proveedor de otras compañías en operaciones no cuestionadas, de la misma forma que aparecen otras sociedades, clubes de fútbol, empresas y medios de comunicación". En la nota, el PP cita otras empresas que también fueron proveedores de la trama y que luego trabajaron con el PSOE.

Sin embargo, la relación de Swat SL con la trama no se limita a su papel de proveedor, sino que el juez dispone de documentación que muestra que la firma se coordinaba con la trama para acceder a contratos públicos. Ninguno de los responsables actuales de Swat SL está imputado, aunque sí lo está uno de sus ex directivos, Rafael de León.

Fuentes jurídicas explican que José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, ha aportado al juez Pedreira varios correos electrónicos del año 2001 en los que Óscar Bermejo, entonces directivo de Swat SL, explica a la jefa de Gabinete del alcalde, el hoy imputado Guillermo Ortega, cómo trocear entre varias concejalías un contrato para evitar el concurso.

La convocatoria pública sólo es imperativa si el precio supera los 12.000 euros. Esta adjudicación para una campaña de publicidad sobre la implantación del euro tuvo un coste de 132.000 euros.

La receptora de esta serie de mensajes que están en poder del juez fue la jefa de Gabinete de Ortega, Carmen Rodríguez, esposa de Correa. En otros emails, el directivo de Swat SL detallaba un listado de empresas que debían recibir las distintas adjudicaciones del contrato troceado. Entre estas empresas beneficiarias estaba Swat Data que comparte administradores con Swat SL, TCM y Sunset Blvd, ambas vinculadas a la trama.

Óscar Bermejo, el firmante de los correos, abandonó Swat SL en 2007. En conversación con Público, Bermejo negó haberlos mandado: "Si alguien utilizó la clave, pues no lo sé, pero yo esto no lo llevé. Deberían preguntar a los administradores de la empresa". Swat SL nunca ha contestado a las preguntas de este periódico, que las ha planteado por escrito.

En cambio, Bermejo sí reconoció haber participado, como directivo de Swat SL, en las campañas del PP para las generales de 2000 y para las autonómicas de Galicia de 2001. En estos años, la trama Gürtel dirigía las campañas del PP.

Otra operación polémica en la que coinciden Swat SL y la Gürtel fue la adjudicación de la publicidad fantasma en Madrid, a las puertas de las elecciones de 2007.

Swat SL obtuvo un contrato de 1,3 millones de euros del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que le encargó que eligiera entre varias empresas para lanzar campañas de publicidad. Dos de ellas nunca se llevaron a cabo, pese a que el organismo pagó 3,25 millones.

Por sugerencia de Swat SL, las adjudicatarias fueron Over MC y MQM. Los dos proyectos eran clónicos, a pesar de que se dirigían a concursos distintos. Y las dos empresas se coordinaban con la trama para acceder a concursos públicos, según declaró al juez la imputada Isabel Jordán, que organizaba los actos de la trama en Madrid.

Una deuda impagada por una de las empresas de la 'trama Gürtel' ha sacado a la luz la existencia de un contenedor alojado en un guardamuebles y cuyo contenido no se conoce. El contenedor se alquiló en julio de 2006 a nombre de Special Events. Seis meses más tarde, en enero de 2007, el contrato pasó a ser titularidad de Technology Consulting Managment (TCM). En un escrito dirigido el pasado día 1 al juez Antonio Pedreira e incorporado al sumario, el administrador judicial de TCM informa al magistrado del hallazgo y le pide que reclame a la empresa de guardamuebles la apertura del contenedor y la exhibición de su contenido "bien a los interventores judiciales o bien a cualquier agente o responsable en tareas de auxilio judicial". En su defecto, solicita a Pedreira que requiera "cualquier otra actuación o registro del contenedor citado".

La empresa Mudalia Mudanzas SL, propietaria del guardamuebles, se ha negado a facilitar información sobre lo almacenado. El argumento para la negativa ha sido que TCM adeuda 1.404 euros, explica el escrito dirigido al juez.

En su solicitud a Pedreira, el administrador judicial afirma lo siguiente: "Los antiguos empleados de TCM no han aportado información sobre el contenido del contenedor almacenado". El hecho de que callaran sobre este extremo abona las sospechas de que el contenedor puede ocultar material relevante.

(www.publico.es, 08/10/10)

FEIJÓO CONTRATA A UNA EMPRESA VINCULADA A LA TRAMA GÜRTEL

La precampaña para las elecciones municipales del año próximo ya está en marcha y el PP ha recurrido nuevamente a la empresa Swat, responsable del eslogan Feijó09, para que le ayude en el diseño de su estrategia. El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, arremetió ayer en rueda de prensa contra el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por volver a confiar en la compañía, que saltó a la luz hace unos meses por sus vínculos con la trama madrileña de la trama Gürtel, revelados por Público. Los populares gallegos defienden que su relación mercantil con Swat es transparente y fue fiscalizada por el Consello de Contas.

"La empresa a la que Feijóo le encarga la campaña es la misma a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre había encargado en las municipales de 2007 la gestión y coordinación de un proceso de adjudicaciones fantasmas por un importe de tres millones de euros para una campaña de publicidad que no se llegó a realizar nunca", recordó García. "Esta empresa es la misma que en 2001 hizo la campaña de las autonómicas del PP, cuyo pago le reclamaban después a Fraga, El Bigotes y Correa", añadió. El secretario socialista anunció que informará al juez instructor de la trama de esta nueva contratación.

Hasta la fecha no consta que el PP de Galicia cometiese ninguna irregularidad en sus negocios con Swat. Los populares lo recordaron ayer en un comunicado de prensa con el que salieron al paso de las acusaciones del PSdeG.

"El PP gallego no contrató a ninguna empresa para gestionar de forma específica la campaña de comunicación del partido de cara a las municipales, sino que recibe asesoramiento puntual sobre diversas cuestiones, del mismo modo que lo hacen otros partidos, PSOE incluido". Señalan, además, dos casos de empresas proveedoras de los socialistas que también contrataron con entidades ligadas a la red corrupta.

Los socialistas entienden, no obstante, que la colaboración con Swat implica en la práctica que el PP gallego lleva vinculado con la Gürtel desde 1993. "Todas las campañas del PP gallego a partir de este año han sido realizadas por Swat o por Special Events [otra de las empresas de la trama]", alegan. "La estrategia de Feijóo era escudarse en que eran cosas del pasado [...] Ahora tendrá que decir algo", reclamó García.

(www.elpais.com, 08/10/10)

PORTOS DE GALICIA ERA EL "CONSULADO DE 'GÜRTEL'", DENUNCIA EL PSDG

Portos de Galicia "parecía el consulado de Gürtel" en esa comunidad. En esos términos se pronunció ayer el PSOE gallego (PSdG) tras la [información de este diario](#) que desvelaba cómo el jefe de contabilidad del ente público portuario, Victoriano Lago, aparece societariamente conectado al número dos de la red corrupta, Pablo Crespo, a través de una empresa radicada en el paraíso fiscal de la isla de Nevis. Los socialistas exigen explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, como consejero de Política Territorial, mantuvo hasta 2005 a Crespo en el consejo de Portos de Galicia. Feijóo "no pasaba por allí", acusó el portavoz parlamentario del PSdG para Portos de Galicia, Manuel Gallego.

En una nota, Gallego subrayó que "la tela de araña del caso Gürtel ahoga cada día con más fuerza al PP de Galicia y a sus gobiernos". En su opinión, el actual candidato conservador a la alcaldía de A Coruña, Carlos Negreira, fue "colaborador necesario", dado que, como presidente de Portos, "mantuvo a Crespo en los consejos" del ente y "creó plazas ad hoc para los urdidores de la red que capitaneaba" el lugarteniente de Francisco Correa. Al hablar de "plazas ad hoc", Gallego aludía de forma implícita al caso de Victoriano Lago. En medios políticos gallegos se asegura que este consolidó su puesto gracias a unas oposiciones entre cuyos requisitos para ganar la plaza de jefe de contabilidad incluía el de desempeñar ya ese mismo cargo.

Crespo fue secretario de organización del PP gallego hasta octubre de 1999. Dos meses más tarde, el 21 de diciembre, quedó constituida en Nevis la sociedad Midcourt Limited. Ese mismo día, se expidió el certificado acreditativo de que Victoriano Lago quedaba a su frente como director, cargo equivalente al de administrador único. Redactado en inglés, al documento se adjuntó una traducción jurada al castellano. El registro de compañías de Nevis asignó a Midcourt el número 11.046: así consta en las actuaciones del caso Gürtel. Esa isla caribeña es uno de los paraísos fiscales que la red usó para blanquear dinero.

El 14 de abril de 2002, Midcourt Limited y Luis de Miguel Pérez, hoy imputado, crearon en Madrid Welldone 2002 SL. De las 3.025 participaciones, Midcourt se atribuyó 3.000. Como administrador único de Welldone fue nombrado Pablo Crespo.

Victoriano Lago, que el martes declaró como testigo ante el juez del caso Gürtel, ya trabajaba para Portos de Galicia en 1999. Por su condición de jefe de contabilidad, participa en la mesa de contratación del ente público. Hace un año, el diario gallego Xornal reveló que, entre 1999 y 2005, Portos adjudicó siete contratos a Constructora Hispánica, cuyo ex presidente está imputado en el caso Gürtel.

Feijóo: "Hay que ser implacables" con los corruptos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que debe ser apartado de la política aquel que "meta la mano", al tiempo que dijo que la justicia debe ser "implacable" en asuntos de "corruptelas". El presidente de la Xunta se refería a la condena de dos ex concejales del PP de Gondomar a multas de 675.000 euros por prácticas corruptas en materia de urbanismo. Sobre la conexión del jefe de contabilidad de Portos de Galicia con el número dos de la red Gürtel, el PP gallego guardó silencio.

(www.publico.es, 10/09/10)

UN CARGO DE LA XUNTA, SOCIO DEL NÚMERO DOS DE LA 'GÜRTEL'

La investigación sobre el caso Gürtel acaba de poner al descubierto un dato que añade sospechas a la relación de la trama corrupta con el PP gallego. Victoriano Lago, jefe de contabilidad de Portos de Galicia desde su creación en 1996 bajo el Gobierno de Manuel Fraga, figura como socio de Pablo Crespo. Considerado el lugarteniente de Francisco Correa en la red Gürtel y todavía preso, Crespo fue secretario de organización de los conservadores gallegos hasta 1999 y miembro del consejo de administración de Portos de Galicia entre 1996 y 2005.

Victoriano Lago, que participa en la mesa de contratación de obras del ente público portuario gallego, aparece como administrador de Midcourt Limited, radicada desde diciembre de 1999 en la isla caribeña Nevis, uno de los paraísos fiscales que utilizó la trama para ocultar dinero y blanquearlo. Así lo confirmaron a Público fuentes de la investigación, cuyas sospechas se centran en que Lago operaba en Midcourt como testaferro de Crespo.

En 2002, Midcourt Limited y el también imputado Luis de Miguel Pérez constituyeron en Madrid la sociedad Welldone 2002 SL. Pablo Crespo pasó a ocupar el cargo de administrador único en Welldone, dedicada a la promoción inmobiliaria y cuyo nombre en inglés significa bien hecho. De las 3.025 participaciones en que se dividió el capital social inicial, 3.000 quedaron atribuidas a Midcourt. Las otras 25 fueron para Luis de Miguel Pérez.

Lago, a quien este periódico ha intentado infructuosamente localizar a lo largo de dos días, declaró el pasado miércoles ante el juez Antonio Pedreira en calidad de testigo. Ayer, un portavoz de Portos de Galicia rehusó valorar los hechos y se limitó a afirmar lo siguiente: "Un trabajador de Portos fue llamado a declarar y ha cumplido con su deber colaborando con la justicia". En septiembre de 2009, el semanario gallego A Nosa Terra desveló que Portos de Galicia había contratado a dedo a Constructora Hispánica, cuyo ex presidente, Alfonso García Pozuelo, permanece imputado en el caso Gürtel. Fuentes de la investigación subrayaron que, durante su comparecencia ante el juez Pedreira, Lago fue interrogado sobre el ingreso de 300.000 euros en una cuenta bancaria de la que es titular.

Welldone había sido constituida en Madrid en abril de 2002 con un capital que apenas superaba (3.025 euros) el mínimo exigible a las sociedades limitadas. Pero, cuatro meses después, efectuó una ampliación de capital por 151.465 euros. Exactamente esa cantidad volvió a las manos de Mid-court Limited en septiembre de 2006 tras la reducción de capital que Welldone 2002 SL acometió en esa

fecha. En otras palabras, el dinero afloró en España para sumergirse de nuevo en el paraíso fiscal de Nevis, sede de Midcourt.

A preguntas de Público, el portavoz de Portos de Galicia eludió verificar si, como aseguran en medios políticos gallegos, Lago consolidó su cargo en el ente público gracias a unas oposiciones a medida convocadas a finales de los noventa. Y entre los requisitos para ganar la plaza laboral de jefe de contabilidad de Portos, habría figurado el de ocupar ya ese mismo puesto.

Hasta 2002, Lago representó a la Xunta en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), cuyo puerto está calificado como de interés general. Tradicionalmente, el PP gallego otorgaba esos cargos como premio a sus fieles. Lago reside en Vilagarcía. Y allí, como director de una sucursal bancaria, adquirió Crespo su experiencia contable.

Como conselleiro de Política Territorial, el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo dos años y medio a Crespo en el consejo de administración de Portos de Galicia. A finales de 2005, y tras la victoria socialista en la Xunta, Crespo fue destituido. Feijóo nunca ha explicado por qué lo mantuvo en Portos si, tal como el PP sostiene, el partido conocía los vínculos de Crespo con Correa y su grupo desde 1999. Entre 1998 y 1999, el PP gallego pagó en negro 2,3 millones de euros por deudas contraídas por el partido. Una parte fue para la red Gürtel.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el "caso Gürtel", volverá a tomar declaración como imputada el próximo día 16 a la edil del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Yolanda Estrada, elegida en las listas del PP y ahora concejala no adscrita.

Estrada, que hasta su imputación pertenecía al PP y ocupaba la concejalía de Obras Públicas en los años en los que operaba en Pozuelo la 'trama Gürtel', ya compareció ante Pedreira el pasado 12 de enero, cuando fue imputada por prevaricación y cohecho.

Las investigaciones llevadas a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJM señalaban a la concejal como la persona que hacía de enlace entre los miembros de la trama y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, también imputado en la causa.

(www.publico.es, 09/09/10)

LA XUNTA DE FRAGA PAGÓ A LA GÜRTTEL POR UN ESTUDIO DEL QUE NO HAY CONSTANCIA

Special Events facturó 156.000 euros a Agricultura en vísperas de las autonómicas

Un estudio que no aparece por ningún lado, un encargo equívoco y una empresa en el centro de la trama Gürtel: Special Events. Los vínculos de la Xunta con la sociedad de Francisco Correa y Pablo Crespo no se ciñeron a la conocida campaña de imagen de la carne gallega tras la crisis de las vacas locas. Otro contrato llegó a mediados de 2001, a pocos meses de las elecciones autonómicas en las que Manuel Fraga revalidaría su mayoría absoluta. El objetivo: un "sistema de estudio de llamadas" de un centro de información de la Consellería de Agricultura. El importe ascendió a 25.984.000 pesetas (156.166 euros). El trabajo no aparece por ningún lado.

El encargo partió de la consellería de un amigo de Pablo Crespo

El concepto de la factura, reclamada judicialmente para la instrucción del *caso Gürtel*, no puede resultar más confuso: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)". El encargo lo realizó la Consellería de Agricultura, entonces dirigida por Juan Miguel Diz Guedes, amigo personal de Crespo, a través de la empresa Tragsa.

Pero no fue Special Events, una empresa especializada en la organización de eventos, la que puso en marcha el centro de información del CIAG, recientemente integrado en el 012. Fuentes de Tragsa, donde no hay rastro del estudio, sostienen que fue una empresa de Telefónica la que aplicó el servicio de información del centro, una línea para la solicitud de quemas controladas o de servicios relacionados con la sanidad de animales. El importe de la factura convertiría a Special Events en el cuarto proveedor del

CIAG desde su puesta en marcha. Sin embargo, la empresa de Correa no aparece en el listado de colaboradores oficiales del centro a través de Tragsa, según una información remitida en 2004 por el Gobierno al diputado socialista Ceferino Díaz, en respuesta a una pregunta parlamentaria.

"No hay constancia de la existencia de ese estudio", reconocieron a este periódico fuentes de la Consellería de Medio Rural, de la que ahora depende el CIAG. De lo que sí hay pruebas es de que Special Events facturó el 5 de septiembre de 2001 el supuesto trabajo, valorado en 22,4 millones de pesetas, que ascendieron a 25,9 con la aplicación del IVA. Solo dos días después, el entonces secretario general de la consellería, José Antonio Álvarez Vidal, remitía a la dirección de Tragsa la factura de la empresa de Correa junto a otras seis, "con cargo a las obras que esta consellería tiene contratadas con su empresa". Tragsa efectuó la transferencia a través de una cuenta de Caixa Galicia, que hizo el ingreso en otra del Banco Santander el 31 de octubre de ese mismo año.

La amistad de Pablo Crespo y Diz Guedes se forjó en la ejecutiva del PP de Galicia, que ambos compartieron hasta 1999, y en la que formaban parte del círculo de confianza del entonces secretario general, el fallecido Xosé Cuiña. Durante esos años, casi todos los actos del partido los organizaba Special Events, empresa que ofreció un cargo directivo a Crespo cuando cayó en desgracia en el PP gallego. En esas fechas cesaron también los encargos del partido que presidía Fraga a la empresa de Francisco Correa.

Special Events había realizado las últimas campañas de los populares gallegos. Cuando se realizó el supuesto estudio para Tragsa faltaban sólo unos meses para las autonómicas de 2001, celebradas en octubre. Eran tiempos también en los que Special Events, ya con Pablo Crespo al frente, porfiaba para cobrar una deuda al Partido Popular de Galicia de 50 millones de pesetas (300.000 euros), reconocida en una declaración jurada en la que no figuraban ni el concepto ni los servicios facturados, pero sí la firma del propio Crespo como secretario de Organización del partido.

La ruptura del PP gallego con Special Events provocó reiteradas llamadas a la sede de Santiago del entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso, para intentar recomponer las relaciones con la empresa de Correa. Según un ex trabajador del partido en Galicia, Bárcenas llegó a preguntar por la factura impagada que la empresa reclamaba. En el sumario del Gürtel figuran, bajo el epígrafe *Cobro Elecciones Gallegas*, varias entregas por un total de 131.570 euros a L. B., siglas que la policía y el juez asocian al ex tesorero. Las presuntas comisiones las habría percibido Bárcenas, según el auto, entre el 13 de enero de 1997 y el 13 de marzo de 2002.

UN CONTRATO SINGULAR

- **Special Events** facturó 25.984.000 pesetas (156.166 euros) el 5 de septiembre de 2001 a Tragsa, que realizó el encargo a instancias de la Consellería de Agricultura. El concepto es el siguiente: "Diseño, estudio e implantación de un sistema de estudio de llamadas del centro de información del sector agro-ganadero de la Xunta de Galicia, para la creación del centro de información agro-ganadero (CIAG)".

- **La empresa no aparece** entre los 10 proveedores principales de Tragsa desde 2001 relacionados con el CIAG, según información remitida por el Gobierno al Parlamento. Son los siguientes: Telefónica Soluciones de Informática (418.680 euros), Dual-Spania (225.981,75), Diseño y Construcción (219.244,08), Ibal (91.155,50), Manuel Formoso Varela y otros (88.705,42), Manuel Formoso Varela (78.760,77), Eido Galicia 66.000,00, Topografía y Servicios (62.000,00), Telefónica Móviles España (41.340,20), Unión Fenosa Distribución (33.172,30)

- **El pago de la factura** se efectuó el 31 de octubre de 2001 en una cuenta del Banco Santander

www.elpais.es 06.06.10

JUAN MIGUEL DIZ GUEDES: "NO RECUERDO NADA"

El ex conselleiro de Agricultura Juan Miguel Diz Guedes apela a los nueve años transcurridos desde la contratación con Special Events para justificar su total olvido del contrato con la empresa de Francisco Correa y Pablo Crespo. "No me acuerdo de nada de eso; ni idea", sostiene. Sí recuerda que su departamento encomendó la puesta en marcha del centro de información agro-ganadero a Tragsa, el grupo empresarial participado por el Estado, y que lo hizo "por razones de urgencia". "Era urgente y se contactó con Tragsa para que se encargara de la gestión y el montaje, nada más", resume Diz Guedes.

En efecto, fue Tragsa, cuyo presidente había sido nombrado por el Gobierno de Aznar, la que efectuó el pago a Special Events, como figura en la factura con el número 01/098 remitida por la empresa de Crespo y Correa. Pero lo hizo por indicación de la Consellería de Agricultura, que remitió a Tragsa una relación de siete facturas para que fueran abonadas, entre ellas el estudio del CIAG. Ese documento, que fuentes del grupo empresarial consideran insólito, fue requerido por las autoridades judiciales para la instrucción del caso *Gürtel*.

Libertad para contratar

Diz Guedes, ex delegado del Gobierno de Aznar en Galicia y en la actualidad concejal independiente en el Ayuntamiento de Tui, tras darse de baja en el PP en 2006, atribuye toda la responsabilidad de la contratación a Tragsa: "No sé si hubo concurso o no, pero ya no solo por no acordarme, sino porque en todo caso era cosa de Tragsa". Esa empresa, añade, "es libre de contratar con quien quiera". El ex conselleiro no niega la relación que en aquellos años le unía con Pablo Crespo, ahora en la cárcel, pero descarta por completo que influyera en la adjudicación del estudio. Tampoco tuvo que ver esa amistad, según él, con el contrato que firmó su consellería con Special Events para la campaña de imagen de la carne gallega, que fue "fruto de un concurso", precisa.

De las siete empresas que figuran en la relación que Agricultura remitió a Tragsa con orden de pago, Special Events es la única que no guarda relación con el servicio prestado en el Centro de Información Agrogandeiro. Junto a ella, en la lista, firmada por el entonces secretario general de la consellería, figuran Tresima (14,24 millones de pesetas), Visecorsa (14,76 millones), Francisco Gómez y Cía (12,12 millones) y José M. Blanco García, compañías dedicadas a construcción de obras públicas y transporte. También aparecen dos agencias de viajes, Ecuador y Ciberviaxes, con facturas por 9,07 y 34,19 millones de pesetas, respectivamente.

www.elpais.es 06.06.10

SWAT S.L. REALIZÓ LA CAMPAÑA FEIJÓ09 PARA LAS ELECCIONES GALLEGAS

Parece ser una constante en el caso Gürtel: primero, el nombre de una empresa sospechosa aparece relacionada puntualmente a la trama. Después, su nombre se repite como un eco a poco que se escarbe. Es lo que ha sucedido con Swat S.L., la consultora privada a la que Aguirre contrató por 1,3 millones y que se encargó de adjudicar 3,25 millones en campañas fantasma que nunca llegaron a realizarse. Ahora, el diario gallego Xornal ha desvelado que esta misma empresa fue quien llevó a cabo la campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo el año pasado y que llevó a la presidencia de la Xunta.

Swat S.L. es la empresa responsable del lema jamesbondiano "Feijó09" que presidió la campaña de Alberto Núñez Feijóo para devolver el poder en Galicia al Partido Popular.

Con Aznar y Fraga

Según informa Xornal, la compañía Swat S.L. también trabajó para José María Aznar durante el año 2000 y para Manuel Fraga en las elecciones gallegas del año 2001. En cualquier caso, no hay constancia de que se haya producido ninguna irregularidad en las contrataciones de Swat S.L. por parte del PP gallego para llevar a cabo la campaña electoral de Feijóo en 2009.

"Clara y cristalina"

El PP de Galicia ha confirmado a El Plural que la empresa en cuestión fue contratada en los pasados comicios. "Sí que trabajó con nosotros en las autonómicas", aseguran fuentes populares, "pero nuestra relación con ella está perfectamente fiscalizada en el Consello de Contas". "Todas nuestras cuentas son claras y cristalinas", afirman en el PP gallego.

Las campañas fantasmas

Swat S.L. se ha hecho famosa a raíz de que Público descubriera que unos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007, Esperanza Aguirre pagara 3,25 millones a dos empresas desconocidas para realizar dos campañas publicitarias. En concreto, fue el IMADE quien convocó los concursos y pagó las cantidades, aunque no existe ni una sola prueba que demuestre que dichas campañas fueron llevadas a cabo.

1,3 millones para ser juez

Al menos una de las empresas beneficiadas, MQM, está vinculada con el caso Gürtel, ya que había sido proveedora habitual de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. El papel de Swat S.L. en el asunto se sale de lo normal. La compañía en cuestión se encargó de resolver el concurso a favor de dichas empresas, aunque esta suele ser tarea de los técnicos dependientes de cada organismo. No en vano, Aguirre se gastó 1,3 millones de euros para contratar los servicios privados de Swat S.L. .

Partiendo el bacalao

Además, según la información obtenida por el magistrado del caso Gürtel, Antonio Pedreira, Swat S.L. ya partía el bacalao en 2001 allí donde estaba la trama de Correa. En concreto, existe una serie de e-mails en los que Óscar Bermejo, entonces director de cuentas de Swat SL, daba instrucciones al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo trocear una campaña publicitaria para eludir su salida a concurso –a partir de 12.000 euros, el requisito es ineludible-.

Siete veces autobeneficiada

Así las cosas y con la ayuda de Carmen Rodríguez, entonces mujer de Francisco Correa y jefa de gabinete del imputado ex alcalde Guillermo Ortega, la iniciativa publicitaria-informativa sobre la llegada del euro costó 132.000 euros, se distribuyó entre siete concejalías y se repartió a las empresas recomendadas por Bermejo. Las beneficiadas de las concesiones fueron, asimismo, siete entidades encabezadas por la propia Swat.

(www.elplural.com, 08/04/10)

EL PARTIDO PAGÓ CON DINERO NEGRO LA MITAD DE LOS ACTOS EN GALICIA

Gracias a una documentación hallada en una caja de seguridad de Pablo Crespo en Pontevedra, la policía consiguió los primeros indicios de que los actos celebrados por el PP en Galicia entre abril de 1996 y septiembre de 1999 se pagaron con dinero negro. Un informe de la Unidad Central de Delitos Económicos y Financieros (UDEP) de la policía incluido en el sumario del caso Gürtel certifica que así fue y que la cantidad abonada por este método alcanzó los 3,2 millones de euros, más de la mitad de los 6,1 millones que sumaron los gastos totales durante el citado periodo.

En esa época, Crespo ostentaba el cargo de secretario de organización del partido y a él se le atribuye la creación de un sistema de «doble facturación». El considerado número dos de la red corrupta facturaba una parte del importe de los servicios con cargo a la caja A, mediante la emisión de una factura y su anotación en el sistema de contabilidad legal, mientras que otra la pagaba con la caja B, sin factura y por tanto sin reflejo en la contabilidad real.

La policía dice desconocer el origen de los recursos con los que el PP abonó las facturas con dinero negro. Solo apunta que quizá procedían «de terceros que financian los gastos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos».

Tras dejar Crespo el partido, la trama no pudo cobrar parte de las facturas y así lo atestiguan cartas incluidas en el sumario en las que los cabecillas reclaman pagos Javier Arenas y a Manuel Fraga

(www.elperiodico.com, 07/04/10)

LOS CONTRATOS EN MADRID SALPICAN A UN ALTO CARGO DE NÚÑEZ FEIJÓO

José Ramón Lete Lasa, secretario general para el Deporte en la Xunta, firmó al menos dos contratos con Diseño Asimétrico, una de las empresas de la trama Gürtel en la comunidad de Madrid, donde Lete desempeñó sucesivamente la Subdirección y la Dirección General de Promoción Deportiva, dependiente de la Consejería de Cultura y Deportes que presidía Alberto López Viejo, a quien Pablo Crespo, ex secretario de organización del Partido Popular de Galicia y segundo cabecilla de la trama, identifica como "el muñidor de toda la operativa" de la corrupción en Madrid.

Dentro de sus atribuciones de promocionar el deporte, la citada dirección general madrileña organizó en 2006 un homenaje al montañero César Pérez de Tudela en el que gastó 11.813 euros que fueron pagados a Asimétrico Diseño. Los conceptos se refieren al montaje del escenario donde se celebró el acto. Otra factura de la misma empresa y por importe de 3.300 euros, en 2007, cubrió gastos del Segundo Memorial Jesús Gil. Las dos facturas fueron conformadas por Lete "como un mero trámite", según han precisado fuentes próximas al mismo.

Las contrataciones en la Consejería de Deportes, según las mismas fuentes, eran decididas por el titular del departamento, López Viejo, o el viceconsejero, Javier Hernández Martínez. A mayores, López Viejo, se encargaba de organizar los actos en los que participaba Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, y, según consta en el sumario, obligaba a sus compañeros de Gobierno a contratar con las empresas de Francisco Correa, que facturaron a la comunidad tres millones de euros, troceados en contratos (358) que no superan los 12.000 euros para poder adjudicarlos a dedo. A López Viejo se le atribuye la percepción de 536.000 euros en sobornos.

José Ramón Lete tomó posesión como secretario general para el Deporte en mayo pasado. En la anterior Xunta del Partido Popular, entre 2003 y 2005, fue director general de Deportes y, en Madrid, subdirector general de Promoción Deportiva, y luego, desde el año 2007, director general del mismo departamento. Ayer reiteró que no tiene nada que ver con la trama Gürtel y que se limitó, como centenares de funcionarios, a dar conformidad a unas facturas que pagaban servicios contratados por sus superiores y contaban con el visto bueno de la Intervención.

www.elpais.es 18.10.09

CEMENTERA DIRIGIDA POR UN IMPUTADO

José Martínez Núñez, el empresario leonés dueño de Teconsa y de un amplio grupo de empresas de sectores diversos -incluido el de la prensa, pero ninguna que se dedique a instalar el sonido y las pantallas de vídeo, como le fue adjudicado en Valencia con motivo de la visita del Papa- solía hasta hace poco visitar las obras que realizaba su empresa en Galicia desde el aire, a bordo de helicóptero, debido a la dispersión de las mismas por la geografía de toda la comunidad. Aquí, a su vez, se situó en otros negocios -empresas suyas son titulares, por ejemplo, de hoteles en Santiago, Lugo y Ourense- y ha fichado a algunos directivos para su grupo. El caso más descolante es el del madrileño Fulgencio García Cuéllar, que fue consejero delegado del Banco Pastor entre 2002 y 2005. Gracias a su programa de actuación, el banco fue saneado y, al concluir esa tarea, en 2005, fue captado por Martínez Núñez para el primer nivel de dirección de su grupo.

El empresario colocó en Galicia a otro personaje que está resultando más polémico. José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, fue puesto al frente de la cementera Gallega de Molienda de Clinker, como presidente y consejero delegado de la misma. La empresa es una de las filiales del Grupo Martínez Núñez, domiciliada en Ourense pero con la fábrica en Coirós (A Coruña). Comercializa los cementos La Estrella. Balín cesó en sus cargos en la cementera el pasado mes de julio, a raíz de conocerse su implicación en la trama Gürtel, en la que finalmente figura como imputado por sus relaciones con uno de los cabecillas, Pablo Crespo, y por aparecer como administrador de tres sociedades de la red.

www.elpais.es 18.10.09

UNA EMPRESA IMPLICADA EN EL GÜRTEL ABANDONA SUS OBRAS PÚBLICAS

Teconsa suspende pagos y deja colgadas varias infraestructuras - Pablo Crespo hacía los "recados" en el PP gallego

La suspensión de pagos presentada por Teconsa, una constructora enredada en la trama Gürtel, ha paralizado media docena de obras públicas en la comunidad, adjudicadas por un precio conjunto de más de 15 millones de euros. Teconsa es una de las mayores firmas adjudicatarias de infraestructuras en Galicia desde tiempos de Fraga. Y saltó a los titulares cuando el dueño, José Martínez Núñez, encargó presuntamente a unos sicarios el asesinato de Xosé Cuiña, entonces conselleiro de Obras Públicas. El empresario leonés mantenía buenas relaciones con Fraga, pero la Xunta siguió contratándole obras también con el bipartito. La mayoría de las obras que le fueron adjudicadas entre los años 2008 y 2009, por el Gobierno gallego y otras administraciones, sólo están ejecutadas en un 10% y un 20%.

En 1999, un año antes del rocambolesco episodio del intento de asesinato del delfín de Fraga, que al final no pudo ser demostrado, uno de los principales implicados en la trama Gürtel, Pablo Crespo, era recomendado por Cuiña a Correa, que se lo llevó a Madrid. Hasta ese momento y desde 1994, Pablo Crespo hizo las cuentas del PP gallego y fue el encargado de organizar las campañas y los mítines. Nunca hacía declaraciones públicas y para muchos pasaba por ser un trabajador discreto y eficaz. Pero en la ría de Arousa, donde se produjo su bautizo político, hay ex alcaldes que recuerdan sus amenazas y sus mentiras.

En Santiago, siempre aparecía dos metros por detrás del presidente de la Xunta y del conselleiro de Obras Públicas. Era el chico de los "recados", por alguno definido como "la criada del partido".

www.elpais.es 18.10.09

UNA FIRMA IMPLICADA EN LA RED GÜRTEL DEJA SIN ACABAR OBRAS POR 15 MILLONES

Teconsa era una de las principales adjudicatarias en Galicia desde la época de Fraga

La suspensión de pagos por Teconsa, empresa constructora con graves implicaciones en la trama Gürtel, ha dejado colgadas media docena de obras públicas en Galicia, las adjudicadas y empezadas en 2008 y 2009 con un precio global que superó los 15 millones de euros. La presencia de Teconsa en Galicia viene de lejos y está salpicada de episodios sonados, como el presunto encargo a unos sicarios, por parte del dueño de la empresa, José Martínez Núñez, del asesinato de Xosé Cuiña, a la sazón conselleiro de Obras Públicas, que finalmente se quedó en nada.

- **El polideportivo de Navia, en Vigo, fue adjudicado por 4,2 millones**
- **Todas las obras empezaron a ralentizarse antes del verano**

Las relaciones de Manuel Fraga con el empresario leonés siempre fueron amigables, pero no cabe cargar únicamente sobre esas relaciones la amplia huella de la empresa en Galicia. En 2007, por ejemplo, Teconsa contrató en la comunidad obras públicas por 33,8 millones. Ahora, el proceso concursal de la empresa, señalado en septiembre pasado, sancionó la gravedad de su situación, coincidiendo con las primeras referencias de su implicación en el Red Gürtel. En algunas de las obras que ejecutaba en Galicia, sin embargo, ya se trabajaba al ralentí desde antes de verano.

Entre las obras adjudicadas en 2008 y 2009, sólo una está casi acabada y otra ni ha comenzado, ambas en Narón; de otras está ejecutado sólo el 10% o el 20%. Es el caso del polideportivo que Teconsa construía en el polígono de Navia para el Ayuntamiento de Vigo dentro del programa del Plan E. Fue la opción más fuerte de la Tenencia de Alcaldía de Vigo (BNG) en la cuota de gasto que le correspondió en el reparto con el PSOE. Por su precio, 4,2 millones, era la obra más importante de la empresa en Galicia, y tenía que estar acabada en diciembre próximo. Pero la constructora sólo ha certificado el 20%, aunque no todo le ha sido pagado.

El Ayuntamiento -con tranquilidad porque en los casos de fuerza mayor puede prorrogarse la fecha de fin de obra, según la convocatoria del Plan E, que financia la Administración central- se mantiene a la espera de que el administrador concursal autorice la cesión de la obra a otra empresa alternativa, y en esos trámites andan las administraciones afectadas.

Para la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Teconsa estaba trabajando en la carretera Ponte do Porto-Laxe, adjudicada en 2008 por 2,9 millones, y la travesía de Seixo, en Marín, adjudicada este año por 791.000 euros. La primera está ejecutada en un 20% y la otra, en un 10%. La consellería ha roto el contrato con la constructora de mutuo acuerdo y tras incumplir ésta, reiteradamente, los plazos acordados. Ahora está en trámite de dar audiencia a las siguientes empresas que participaron en el concurso de adjudicación para conocer su interés en proseguir las obras paradas. "No habrá adjudicación directa", subraya la consellería.

Adjudicaciones de la Xunta a Teconsa son también la construcción del complejo lúdico deportivo de A Parda, en Pontevedra, por 2,3 millones. La obra, adjudicada en 2008, tendría que estar acabada en diciembre, pero no se mueve desde julio. La rehabilitación del monasterio de Monfero, adjudicada en la misma fecha por 1,5 millones por la Consellería de Industria, también está parada. Ni este departamento

ni la Dirección Xeral de Deportes, de la que depende el complejo de A Parda, han facilitado datos sobre la salida que prevén para ambas obras.

Además, Teconsa ha dejado una obra casi acabada y otra sin empezar en Narón. La primera, la perimetral del polígono de A Gándara, adjudicada por 1,2 millones de euros, está prácticamente acabada. "Sólo quedan unos muretes y los enganches a la red eléctrica", dice el alcalde, Xoán Gato. La otra, un paso inferior en la vía de FEVE adjudicado por 550.000 euros, no llegó a empezar y el Ayuntamiento tramita la rescisión del contrato.

El Ministerio de Fomento adjudicó a Teconsa, el año pasado, la adecuación de las travesías de Melón, Cea, Sobradelo y Xinzo por casi un millón de euros. Pero el encargo más importante de la Administración central fue la adjudicación, en 2007, de la nueva terminal del aeropuerto de Santiago, que ganó la UTE Teconsa, Isolux Corsán y Copcisa por 125,8 millones. Ahora Fomento ya ha ejecutado una de las cláusulas del pliego de condiciones y ha dejado fuera a Teconsa, cuya participación en la UTE ya ha sido directamente asumida por Isolux.

www.elpais.es 18.10.09

PABLO CRESPO : EL HOMBRE DE LOS "PAQUETITOS"

Pablo Crespo, 'segundo' de Francisco Correa, gobernó durante cinco años la 'cocina' del PP gallego parapetado tras las figuras de Manuel Fraga y Xosé Cuiña

"No soy un político, soy un técnico", repetía, con una media sonrisa, cuando un periodista le pedía una declaración. Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) justificaba así su empeño en permanecer en la sombra durante el lustro, entre 1994 y 1999, que estuvo en la cúspide del PP gallego dirigido por Manuel Fraga y el entonces todopoderoso Xosé Cuiña. Al hombre que ahora tiene 1.240.000 entradas con sólo teclear su nombre en Google no se le recuerda entrevista alguna ni declaraciones públicas. Ni tampoco, pese a ser el tercero del partido, tras Fraga y Cuiña, una intervención política. Ni siquiera un mitin en la campaña de las elecciones gallegas de 1997, en la que era el *número cinco* por Pontevedra y en la que tanto facturaron las empresas de la trama Gürtel que ahora codirigía. En los años dorados del fraguismo, Crespo aparecía como un escudero silencioso, siempre un par de metros detrás del presidente y su delfín, un hombre casi sin rostro.

- "Me dijo, 'te vas a acordar', y me acuerdo. Al verlo esposado en la tele"
- "Fue un adicto a la mentira, a la confabulación y a la traición"

Lo suyo era llevar los libros contables y organizar campañas y grandes actos, no ocuparse de la ideología, y menos de dar mitines. Ni uno. "Fue un gerente con amplias funciones en el partido", explica un ex político que se sentaba con Crespo en la ejecutiva del PP gallego. Pero eran labores siempre en la *cocina*.

"Tenía cero autonomía y responsabilidad política", asegura otro dirigente jubilado. "Más que un intendente, era como la criada del partido, el que hacía los recados, iba a buscar un paquetito aquí, a llevar otro allá. Pero no pintaba nada" en el plano político, señala uno de los también ahora retirados responsables del PP en el sur de Galicia. "Nosotros nos autofinanciábamos, no teníamos ni una deuda en el partido y no recurrimos nunca a él para nada", se apresura a añadir. Los libros con cuentas presuntamente irregulares del PP gallego, que Crespo guardaba en la caja fuerte de un banco en Pontevedra, dispararon estos días las llamadas entre compañeros de filas, con preguntas del tipo "oye, ¿y tú de todo esto tienes algo?".

Los que compartían responsabilidades en el PP gallego reconocen que cuando en 1994 Cuiña lo introdujo como su mano derecha, tanto en el partido como de asesor en Obras Públicas, a aquel treintañero sin experiencia política que dirigía una caja de ahorros en Vilagarcía se le acogió sin sorpresa por ser el hijo de un histórico muy apreciado, Manuel Crespo Alfaya. "Nadie lo conocía, pero llegó con un aval de primera división", destaca un ex dirigente. No hay nadie en el PP que aún hoy no exprese afecto por el ya fallecido y muy respetado Crespo Alfaya, delegado de Fraga cuando era ministro de la dictadura y mano derecha en Pontevedra del joven Mariano Rajoy, primero presidente de la diputación y luego vicepresidente de la Xunta (1986-1987). Crespo Alfaya ayudó también mucho a Cuiña cuando pasó de alcalde de Lalín a sustituir a Rajoy en la Diputación, por lo que a nadie le extrañaba que luego le devolviese el favor colocando a su retoño. "Era de esas estrategias de fichaje de Cuiña que no entendía

nadie, aunque en este caso debería un favor al padre", apunta otro ex miembro de la cúpula conservadora.

Crespo había tenido su bautismo político en Vilagarcía, adonde llegó en 1993 para dirigir una sucursal de Caixa Galicia. Tres años después, fue elegido presidente local del PP. Los populares habían perdido la mayoría absoluta en el ayuntamiento gracias a los manejos del secretario general de la Cámara de Comercio, y a la postre narcotraficante, Pablo Vioque, ya desvinculado del PP, en el que había sido un destacado dirigente local años atrás. Vioque se hizo con la llave para arrebatarle la alcaldía a la derecha y dársela al PSOE, en las elecciones de 1991. Eran los años del apogeo del contrabando y el narcotráfico. Con el apoyo de Cuiña, Crespo comenzó el asalto al poder por la Cámara de Comercio. Por mandato expreso de Fraga, Vioque fue apartado fulminantemente de la Cámara en julio de 1995, tras la entrada y registro de la sede por parte de personal de la Dirección Xeral de Comercio.

Eliminado Vioque, Crespo inició su cruzada contra las viejas huestes del PP en Vilagarcía para hacerse con el control, no sólo de su ejecutiva, sino también del puerto y de Fexdega. Siempre con el respaldo de Cuiña, se salió con la suya, aunque en dos años la militancia pasó de 1.200 afiliados a 60. Colocó a un hombre de paja en el partido y en la presidencia de la Autoridad Portuaria, Manuel Bouzas, también director de banco y que provenía del PSOE. Para apartar del puerto al ex alcalde José Luis Rivera Mallo, *Pablito*, como le llamaban, desató una campaña de ataques personales que le valieron una condena por calumnias. Hoy nadie quiere hablar públicamente de su paso por Vilagarcía. Sólo Rivera se expresa sin tapujos: "Fue un adicto a la mentira, a la confabulación y a la traición, pero no voy a hacer leña del árbol caído".

De su etapa arousana también se recuerda su campaña a favor de la instalación de los depósitos químicos de Ferrazo, ahora declarados ilegales. Algunos alcaldes de la ría admiten que fueron presionados por él para que apoyaran el proyecto. "Sólo unos pocos no cedimos a unas maniobras que sólo podían entenderse por intereses económicos", comenta un alcalde. "Me dijo 'te vas a acordar', y claro que me acuerdo. Cuando sale esposado en la tele".

Mientras fraguaba su carrera en Vilagarcía, Crespo ya estaba en nómina de la consellería de Cuiña como asesor desde 1994. Lo dejó dos años más tarde, cuando irrumpió como secretario de Organización del PP, cargo que compaginó luego con el de consejero de Portos de Galicia, con una interrupción de un año cuando ocupó un escaño de diputado. Nadie le recuerda en una reunión del ente, del que fue cesado por la conselleira socialista María José Caride al final de 2005.

En Santiago, Crespo se esforzó por no llamar la atención. Su protagonismo fue nulo durante los ocho meses en los que ejerció como diputado autonómico, entre noviembre de 1997 y julio de 1998. "No puedo, no tengo tiempo", se excusaba con sus compañeros de escaño. Prefería dedicarlo a la *Nécora*, la antigua sede del PP gallego en la acera de enfrente del Parlamento. "Tenía una capacidad de trabajo enorme, en la línea de Fraga y Cuiña", asegura otro ex dirigente. Pero eran labores alejadas de las de un secretario de Organización. "Ni siquiera le enviaban a apagar fuegos". El hoy uno de los principales protagonistas de la trama Gürtel huía de los micros, pero no faltaba a una cita del PP gallego, a las que siempre acudía "con extrema puntualidad" aunque sin abrir la boca. "Tenía un comportamiento extraordinario, impecable y cumplidor", cuenta un ex dirigente del grupo parlamentario.

Se marchó a Madrid cuando Fraga decapitó el cuiñismo, en 1999, y Cuiña lo recomendó -"es oro molido"- a Francisco Correa, cerebro de la red Gürtel. En el PP gallego muchos aseguran tener dificultades para reconocer en aquel hombre sin genio ni figura a uno de los cerebros de la trama. Un ex eurodiputado cuenta que coincidía mucho con Crespo en aviones de Madrid a Bruselas. "Siempre lo veía viajar en *business*, lo recogían en el aeropuerto coches de lujo y siempre me preguntaba a qué se dedicaría para tener semejante tren de vida".

www.elpais.es 18.10.09

NADIE CONOCE AHORA A PABLO CRESPO

El PP gallego se desmarca de la financiación que urdió su ex 'número tres'.- Feijóo endosa la responsabilidad de la trama Gürtel a sus antecesores

De repente, nadie en el PP gallego conoce a Pablo Crespo, la mano que meció sus cuentas y campañas electorales durante un lustro, entre 1994 y 1999, siempre bajo el mando del entonces todopoderoso Xosé

Cuiña. La amnesia en el partido se extiende de la actual dirección, que preside Alberto Núñez Feijóo desde enero de 2006, a los barones provinciales aliados a finales de los años noventa en el llamado sector de la boina, el ala rural del PP que monopolizaba el poder orgánico dentro de la formación conservadora.

- *El presidente de la Xunta repite que en los noventa él no era ni afiliado al partido*
- *"Que cada palo aguante su vela", responde sobre Valencia y Madrid*
- *Algunos allegados empiezan a verle como candidato a suceder a Rajoy*

El actual presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán ¿que en 2001 encargó una encuesta para el partido a la mujer de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama?, dice que "no hay caso", y a la vez aplaude la mano dura contra los imputados de Madrid y Valencia. En Ourense, a José Luis Baltar, hombre de confianza del ya fallecido Cuiña, el jefe de Crespo durante aquella época, tampoco le suenan empresas como Orange Market y Special Events.

Mientras, el sumario judicial revela la existencia de una caja de seguridad en un banco de Pontevedra, registrada a nombre de Crespo y que refleja supuestamente la contabilidad en dinero negro del PP gallego, ingresos cuya procedencia no se detalla e infinidad de pruebas de que buena parte de la trama Gürtel se fraguó en Galicia hace ahora 15 años. El propio Crespo apunta a la financiación irregular en una conversación grabada que mantuvo con su abogado el pasado 24 de febrero en la cárcel y en la que le pregunta por la prescripción de este tipo de delitos.

Sus compañeros de escaño durante el año que permaneció en el Parlamento gallego también han perdido la memoria.

La muerte de Xosé Cuiña, el secretario general y consejero de Obras Públicas de Fraga hasta 2003 ¿cuando fue apartado del Gobierno por vender desde sus empresas trajes de agua a la Xunta en plena crisis del petrolero Prestige?, traza la frontera entre el nuevo y el viejo PP. Cuiña, el hombre que fichó como número tres del partido a Crespo ¿director por aquel entonces de una sucursal bancaria en Vilagarcía de Arousa, sin apenas pasado político y con un perfil muy bajo?, todavía intentó plantar batalla años más tarde en el congreso de la sucesión de 2006. Perdió frente a Núñez Feijóo, que por entonces ya le había sustituido como vicepresidente primero del Gobierno gallego, responsable de las infraestructuras y favorito en las plantas nobles de Génova 13, sede nacional del PP.

Y Fraga... Fraga, presidente del partido durante 17 años, ha dicho ahora desde el Senado que en cuanto conoció de las andanzas de Crespo lo puso en la calle.

Esa decisión la adoptó en 1999, a instancias del secretario general del PP gallego, Xesús Palmou. Tuvo bastante que ver una declaración jurada que firmó el propio Crespo reconociendo una supuesta deuda del partido ¿sin facturas ni presupuesto que avalasen los gastos ¿de 50 millones de pesetas con Special Events. Fraga dio orden de cortar cualquier lazo con la red de sociedades de la trama y el secretario de organización fue relevado del cargo. Pero Crespo pronto buscó acomodo en Special Events, la firma con la que tanto había contratado años atrás. En el sumario consta que fue el mismo Cuiña quien le recomendó. "Llévate a Crespo que es oro pulido", cuenta Correa que le dijo.

En la sede popular de Santiago algunos ex trabajadores tienen frescas las constantes llamadas del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, y sus repetidas presiones después del año 2000 para que se volvieran a encomendar trabajos desde el partido y la Xunta a Special Events. La única consejería que accedió, la de Agricultura, encargó una campaña de promoción de la carne en plena crisis de las vacas locas, por 1,5 millones de euros. Estaba presidida por Juan Miguel Diz Guedes, otro histórico del PP e íntimo de Cuiña. Diz Guedes ha cambiado de siglas para presentarse por un partido independiente a la alcaldía de Tui, un ayuntamiento mediano de Pontevedra.

Si sus antiguos socios internos reniegan de Crespo e insisten en que nunca lo trataron, al PP de Feijóo esas "historias de hace diez años" le suenan a chino. El propio presidente aseguró el jueves que sólo dará explicaciones sobre Gürtel si aparece algo posterior a 2006. Lo de atrás, dijo, tendrán que aclararlo "anteriores responsables" del partido. Entre ellos, es de suponer, el propio Fraga, que lo nombró vicepresidente. Y, cada vez que tiene ocasión ¿sucede casi a diario?, Feijóo airea que cuando sucedió "todo aquello" (la trama que financiaba los actos electorales del partido en los 90) él ni siquiera militaba en el PP (se afilió en 2001).

Sus allegados insisten en que la financiación ilegal le queda lejos "no sólo en el tiempo, también por sus protagonistas", la mayoría enemigos internos que se opusieron a su ascenso en la organización. Hay incluso quien se sorprende de lo comprensiva que está siendo la prensa con las prácticas del sector de la boina, muy probablemente porque su máximo exponente, Xosé Cuiña, falleció en diciembre de 2007.

Feijóo, convertido en barón del PP nacional desde que recuperó la Xunta con una victoria que salvó el tipo a Mariano Rajoy, trata de evitar cada mañana que la corrupción lo salpique. Y no sólo la de Galicia. Cuando los titulares del escándalo en Valencia se hicieron insostenibles, el presidente gallego pidió "que cada palo aguante su vela". Mientras los candidatos a liderar el partido en el futuro ¿incluido Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y el propio Camps? se abrasan, uno tras otro, al calor de las imputaciones judiciales de sus cargos, Feijóo responde sólo sobre Galicia. Afirma que no es nadie para dar ejemplo pero deja entrever que él sería más contundente con ciertos comportamientos.

El presidente repite a menudo que su cabeza está en la Xunta y en cómo salir de la crisis, pero algunos de sus colaboradores empiezan a mirar sin disimulo a Madrid. No piensan en el corto plazo, porque, según un dirigente de su confianza, "Alberto siempre será leal a Mariano, en quien ve a un amigo que lo está pasando mal". Otra cosa es que Rajoy no esté. El día que eso suceda, Feijóo aspira a presentarse como el político impoluto que no se dejó manchar por Gürtel.

www.elpais.es 12.10.09

FEIJÓO Y LOUZÁN APLAUDEN EL CESE DE LOS IMPUTADOS EN EL 'CASO GÜRTEL'

Pablo Crespo dimitió de Portos en 2003 pero no fue apartado hasta el bipartito

No es precisamente una de sus aliadas en el partido, pero ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salió públicamente a aplaudir la decisión de Esperanza Aguirre de expulsar del grupo parlamentario a los tres diputados, todos de su máxima confianza, imputados por el juez en la *trama Gürtel*. "Lo mejor", dijo Feijóo en una entrevista en la Cadena SER, "es que mientras no se aclaren estas cosas, esas personas tengan una baja en las responsabilidades de un partido que no está de acuerdo en que haya gente que utiliza la política para mejorar su situación económica".

- *"Es mejor dar de baja a quien usa la política para mejorar su economía"*
- *Portos pone sus actas como prueba de que Crespo no acudió a reuniones*

El mensaje dirigido a Madrid busca otros destinatarios en Valencia y en la sede del PP nacional en la calle Génova. Feijóo, uno de los barones regionales que más influye en Rajoy, siempre ha sido partidario de cortar cabezas y de adoptar medidas ejemplarizantes para borrar cualquier signo de complicidad con la corrupción y taponar la sangría de credibilidad que amenaza al partido. Para evitar verse salpicado por la trama corrupta, el propio Feijóo desveló ayer, que uno de los cerebros de la red de Correa, Pablo Crespo, presentó su renuncia como vocal de Portos de Galicia en 2003, justo después de que el actual presidente de la Xunta asumiera la Consellería de Política Territorial. "Dimitió a los pocos días de llegar yo y no volvió a participar en el consejo de administración", insistió. Es una verdad a medias. Lo cierto es que la carta con su renuncia no fue tenida en cuenta hasta tres años después con la llegada del bipartito a la Xunta. Fuentes cercanas a Feijóo aseguran que Crespo no participó en ninguna reunión de este organismo y ponen a disposición las actas del consejo de administración.

El líder del PSdeG, Manuel Vázquez, acusó, no obstante, al jefe del Ejecutivo de mentir. Vázquez volvió a reclamar ayer que la fiscalía abra una investigación de oficio y los juzgados una pieza separada para estudiar las ramificaciones de Gürtel en Galicia. De hecho, los socialistas ya han presentado una batería de preguntas en las diputaciones de Pontevedra y Ourense para que expliquen si contrataron con alguna de las sociedades de Correa y Crespo.

La ofensiva del PSOE no inquietó al presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, quien dijo sentirse "tranquilo" porque, según explicó, hay "cero posibilidades" de que su institución o el partido se vea afectada por este caso de corrupción masiva que sacude al PP. Poco después de escuchar a su jefe de filas, Louzán, se apuntó a su discurso sobre las responsabilidades depuradas en Madrid. "Me parece lo más razonable porque se mantiene la imagen de que el PP es un partido honesto", valoró la decisión de Aguirre.

La doctrina política que Feijóo y Louzán abrazan ahora, acorralados por la presión de la opinión pública, está lejos de la que uno y otro han aplicado en Galicia estos últimos años. La dirección regional del PP y también la de Pontevedra siempre han reclamado esperar al último pronunciamiento judicial antes de adoptar medidas disciplinarias. Sucedió en el caso del alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, ratificado como candidato en las últimas elecciones donde encabezó la lista más votada, pese a estar imputado por cinco graves delitos relacionados con el trato desde el ayuntamiento a sus propias inmobiliarias. Cuando la oposición pidió su cese, Louzán primero y Feijóo apelaron a "la presunción de inocencia". Entretanto, Fernández Rocha sigue acumulando reveses judiciales.

Como el teniente alcalde de Gondomar, Carlos Silva, condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Mientras los tribunales resuelve su recurso, Louzán lo ha consolado con un sueldo por dedicación exclusiva en la Diputación pontevedresa de 60.000 euros al año. El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, que sigue en su puesto, también está imputado por un juez, que persigue un doble delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La sentencia firme en la sala de lo social contra la directora general de Trabajo, Ana María Díaz López, por despido improcedente, tampoco mereció de momento ninguna respuesta del jefe del Ejecutivo, que alega que es fruto de un error.

www.elpais.es 10.10.09

LA GÜRTEL INTERVINO EN LAS GALLEGAS DE 2001

El lápiz de memoria intervenido por la Policía al contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, incluye entre otros documentos un informe económico de ingresos y gastos de las elecciones gallegas de 2001, las últimas que Manuel Fraga ganó por mayoría absoluta. El vínculo entre las empresas de la red corrupta y el Partido Popular, dos años después de que Pablo Crespo abandonase la secretaría de Organización del PP gallego, echa por tierra la afirmación del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que la relación de los conservadores gallegos con la trama murió en 1999.

Una tesis en la que intentó abundar ayer el presidente gallego en la rueda de prensa posterior al semanal Consello de la Xunta. "Lo único que sé es que el señor que está implicado en este asunto [Pablo Crespo] fue apartado del PP de Galicia en 1999. Si lo pudiéramos volver a apartar lo haríamos, pero ya está apartado", insistió sin explicar por qué lo mantuvo como su representante en el Consejo de Administración de Portos de Galicia entre 2003 y 2005.

Según Feijóo, "el tema está claro: hay una persona que perdió la confianza del partido hace diez años, fue apartado y ahora está siendo juzgado. Por una serie de actuaciones que hizo hace más de diez años o más". El presidente gallego aseguró que, "de momento", lo que se conoce del sumario "es exactamente lo mismo" que ya sabía "al inicio de la campaña electoral" de las elecciones gallegas de marzo, a pesar de que ahora la Policía ha hallado evidencias de irregularidades contables en el partido que él preside. Y justificó su negativa a investigar con el argumento de que sólo pueden hacerlo los jueces, que son quienes tienen en su poder los apuntes contables de las elecciones a las que ha acudido el Partido Popular.

Los documentos relativos a las elecciones de 2001 no son los únicos que han aparecido en el sumario del caso Gürtel relacionados con Galicia y posteriores a la salida de Crespo de la dirección del PP. También consta, por ejemplo, el contrato adjudicado a la trama en 2001 por la Xunta de Manuel Fraga para favorecer el consumo de carne de vacuno.

Una vez más, Feijóo se escudó en su supuesta bisoñez para negar toda responsabilidad y apuntar a su antecesor en el cargo, hoy senador en representación del Parlamento de Galicia. Su único compromiso, subrayó, es desde que tomó posesión como presidente del partido, en el año 2006: "De los anteriores años hay responsables del partido que asumirán su responsabilidad".

El propio jefe de la trama, Francisco Correa, relató a la fiscal su vinculación con el PP gallego. "Yo fui a ver a don Manuel para hacer nosotros las campañas electorales de Galicia y conozco a Pablo Crespo porque era la mano derecha de Fraga y de Pepe Cuiña (...) e iniciamos una relación excelente".

Obligado a responder, durante media hora, a multitud de preguntas sobre la trama, Feijóo se esforzó en restarle importancia. "Me preocupa mucho más el precio de la leche en Galicia que el caso Gürtel y su relación con el PP de Galicia", declaró.

Y en línea con la argumentación de Rajoy y de Camps, el presidente gallego lo fió todo al resultado electoral. "Yo sólo creo en la opinión de los electores, de los ciudadanos cuando dan su voto. Y todo indica que hay un partido que está bajando y otro que está subiendo. Y el que está bajando no está dispuesto a que esto ocurra", concluyó, insinuando la supuesta relación del PSOE con el vendaval que amenaza al PP.

Eso sí, Feijóo evitó garantizar que no habrá más implicados del PP gallego en la trama y rechazó poner las manos en el fuego por el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, que supuestamente adjudicó contratos desde la Diputación provincial a una empresa de la red de Correa. "Él acaba de decir que nada tiene que ver", respondió cuando fue preguntado por los periodistas.

(www.publico.es, 09/10/09)

FEIJÓO AFIRMA QUE SÓLO RESPONDE POR LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS DEL PP GALLEGO

Mientras los dirigentes nacionales del PP envían declaraciones grabadas y convocan ruedas de prensa sin preguntas - Mariano Rajoy, no ha contestado a los periodistas en la calle Génova desde el 13 de abril- su líder en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ve obligado a responder incluso desde la sede del Gobierno a espinosas cuestiones relacionadas con el caso Gürtel.

Como ejemplo, ayer. La trama de financiación ilegal que salpica al PP monopolizó su comparecencia tras el Consello de la Xunta. Aunque advirtió de que no era "ni el momento ni el lugar", Feijóo se presentó como "el primer interesado" en solventar las dudas. Tuvo que contestar once preguntas consecutivas, en una hora de comparecencia, sobre las andanzas de Correa, El Bigotes, la actuación de los dirigentes populares en Valencia y Madrid, pero también sobre las posibles ramificaciones de la trama en Galicia. Y, éstas últimas le suenan lejanas no sólo en el tiempo, también por sus protagonistas, al presidente del PP. "Cosas que pasaron hace diez años", repitió una y otra vez, a la prensa. Cuando se refirió a Pablo Crespo, el ex secretario de organización del PP de Galicia hasta 1999, ahora encarcelado, y que desde prisión ha admitido la financiación ilegal del PP gallego en aquella época, Feijóo insistió en que "el partido lo apartó en su día y que lo apartaría una segunda vez si fuera posible".

No se quedó en eso. Feijóo optó por desmarcarse de todo lo que pasaba en la formación conservadora hasta su llegada a la presidencia. Si en las últimas semanas advirtió de que ni siquiera militaba en el PP a finales de los 90, cuando la red de Correa empezó a acumular contratos millonarios en Galicia, ayer señaló en rojo la fecha desde la que está dispuesto a asumir responsabilidades. Y ésta arranca en enero de 2006 cuando las bases lo proclamaron formalmente sucesor de Fraga. De todo lo anterior, deberán responder sus antecesores, anunció, cuando los periodistas le preguntaron por escándalos en Galicia que podrían ver la luz a medida que se vaya conociendo el sumario.

"Yo me comprometo con lo que hizo el partido desde que tomé posesión como presidente, en los años anteriores, como es natural hay responsables del partido que asumirán esa responsabilidad". Feijóo se desentendió así de lo que pasaba en el PP, incluso cuando él era vicepresidente de la Xunta y mano derecha de Fraga en el Gobierno. Así que la siguiente cuestión aludió a uno de los hombres fuertes del partido, el presidente provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, quien contrató en 2001 una encuesta para el PP provincial que hizo María del Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Francisco Correa.

¿Pone la mano en el fuego por Louzán? "Vamos a ver lo que hay, creo que la exposición del señor Louzán es clarísima, ha dado la cara y ha dicho que nada tiene que ver". En realidad, Louzán se ha limitado a decir que "no hay caso" y a recordar que sus cuentas están auditadas por el Consello de Contas, un argumento que también utiliza el PP de Valencia. En su larga comparecencia, Feijóo evitó juzgar el comportamiento de su partido en otras comunidades abogó varias veces por dejar trabajar a la Justicia, y por que "quienes se aprovecharon de la política o de algún partido político" asuman las consecuencias. Sí, exigió, sin citar su nombre al líder del PSdeG, Manuel Vázquez, que haga públicos nuevos datos sobre Gürtel, "si es que tiene esa información privilegiada".

Otros dirigentes del PP gallego se multiplicaron ayer para negar cualquier vinculación con Gürtel. El líder local de Pontevedra, Telmo Martín, señalado por los socialistas al haber adjudicado una urbanización a

una constructora valenciana que supuestamente pagó comisiones a la trama, compareció indignado para proclamar: "Ni el PP de Galicia ni yo mismo hemos sido nombrados en el sumario". En parecidos términos se expresó el líder del PP de Ourense, José Luis Baltar: "Nosotros no tuvimos trato con esa gente".

(www.elpais.com, 09/10/09)

CORREA ENTREGÓ A BÁRCENAS 131.570 EUROS POR LAS ELECCIONES GALLEGAS

El levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Gürtel refleja que la organización dirigida por Francisco Correa realizó entregas de dinero entre 1997 y el 2002 al ex tesorero del PP Luis Bárcenas vinculadas con las elecciones gallegas. Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso La Voz, la trama Gürtel entregó un total de 131.570 euros a Bárcenas, en aquella época gerente del PP nacional, en tres pagos en los años 1997, 1999 y 2002. Los apuntes de esas entregas al entonces número dos de la tesorería del PP se encuentran en la cuenta «Caja X PC Caja Madrid» bajo el encabezamiento «Cobro elecciones gallegas» y cuyos movimientos se detallan en el sumario.

El primero, que lleva fecha del 13 de enero de 1997, figura como «Ent.P.Correa (Fra. L. Bárcenas)» por valor de 1.900.000 pesetas. El segundo, del 22 de julio de 1999, bajo el concepto de «retirada por P.C. (L.Barc.?)», es de 15.000.000 pesetas. El tercer pago, del 13 de marzo del 2002, aparece como «Sobre L.?B.» por un montante de 30.000 euros.

Antes, el 15 de junio de 1998, y siempre bajo el encabezamiento «Cobro elecciones gallegas», hay otra entrada, en este caso «Ent. L.Barc. a PC (Caja de Seguridad)», que da cuenta de un cobro por parte de la trama corrupta de 1.000.000 de pesetas con la anotación en el campo de observaciones de «sobre sin contar». Es decir, que Bárcenas entregó a Correa un sobre con un millón de pesetas en efectivo de procedencia desconocida y que pasó a engrosar la contabilidad B de la trama.

La conclusión que consta en el sumario sobre estos apuntes es taxativa: «De ello se infiere que la persona que responde a las siglas L.?B. recibió dinero por importe de 1.900.000 pesetas (11.419 euros), 1.500.000 pesetas (90.151 euros) y 30.000 euros, y a su vez aportó fondos a la organización que van a una caja de seguridad que posteriormente nutre la caja B de Serrano, con la anotación en un sobre sin contar. Dichas operaciones se refieren a la campaña electoral en Galicia en el año 1998 [sic] y ponen de manifiesto unas aportaciones directas de fondos».

(www.lavozdegalicia.es, 09/10/09)

EL BIGOTES RECLAMÓ POR CARTA A RAJOY 150.000 EUROS DE DEUDA POR ACTOS ORGANIZADOS PARA EL PPDEG

Entre la documentación aportada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales figura una carta que Álvaro Pérez, el Bigotes, uno de los imputados, dirigió a Mariano Rajoy y a otros dirigentes del PP para reclamarle el pago de una deuda del año 1999 por diversos actos de la campaña de las elecciones municipales en Galicia organizados por empresas de la red corrupta de Francisco Correa. En la carta, fechada en diciembre del 2003, Álvarez asegura que tanto el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, como su segundo en esa época, Luis Bárcenas, y Javier Arenas estaban al corriente de la deuda.

La explicación a esa reclamación de pago se encuentra en el hecho de que cuando Xesús Palmou llegó a la secretaría general del PPdeG, en 1999, no solo ordenó que no se contratara ningún evento más con las empresas de Correa, sino que se negó a asumir las deudas con esas empresas correspondientes a los años en que Pablo Crespo era secretario de Organización del PP de Galicia.

Palmou fue quien sugirió al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, que destituyera a Crespo y tras cumplirse esa medida, el ex secretario de Organización pasó a trabajar directamente a las órdenes de Francisco Correa como responsable de varias de sus empresas. La deuda que el Bigotes reclamaba a Rajoy ascendía a 150.000 euros y estaba relacionada con los actos que la empresa Special Events organizó para el PPdeG en la campaña de las elecciones municipales de 1999. «El motivo de la presente no es otro que solicitar tu intervención en un asunto que para nuestra compañía es grave y en el que hemos sido maltratados por la dirección general del partido en Galicia», señalaba Álvaro Pérez en su misiva. Además de a Rajoy, Lapuerta y Arenas, la red de Correa presionó también a Fraga para intentar cobrar la deuda, pero ni el ex presidente ni Xesús Palmou cedieron a las presiones.

FEIJÓO ASEGURA QUE NO SUPO DE LA PRESENCIA DE CRESPO EN UNA EMPRESA DE SU CONSELLERÍA

Frente al intento de Feijóo de desmarcarse de la presunta financiación ilegal del PP de Galicia, el PSOE ató ayer el cabo de Portos de Galicia. Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de Organización del PP gallego, figuró como vocal de Portos de Galicia hasta que fue destituido por el bipartito en 2005. Y el ente portuario dependía directamente de la Consellería de Política Territorial, de la que era responsable Alberto Núñez Feijóo. Pero el presidente de la Xunta no tardó ayer en proclamar que desconocía el cargo que ejercía Crespo en Portos cuando él era conselleiro.

"En relación con el tema de Portos, que yo sepa [Crespo] ni siquiera aparecía por ahí, ni yo sabía por supuesto que estaba nombrado", afirmó Feijóo en Bruselas, al ser preguntado por si se había planteado destituirlo cuando asumió la consellería. El presidente del PP señaló que las posibles irregularidades en la financiación del PP gallego son cuestiones de "hace 10 años". Ningún miembro de la actual ejecutiva del partido estaba implicado, resaltó. "La renovación del Partido Popular iniciada en 2006 fue lo suficientemente grande como para mantener una tranquilidad absoluta en relación con este asunto", zanjó Feijóo. Según el presidente, el sumario del caso Gürtel no aporta novedades: "Las revelaciones lo único que acreditan es lo que ya sabemos".

Por lo que se refiere a la actuación de Manuel Fraga, que en aquel momento era presidente de la Xunta, Feijóo resaltó que el propio senador "acaba de decir claramente que cuando tuvo algún contacto, algún conocimiento directo o indirecto de alguna cuestión que no le encajaba, automáticamente destituyó esa persona".

El tiempo transcurrido también fue el argumento principal del portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda. En el seno del partido reina una "absoluta tranquilidad", señaló Miranda, porque ningún miembro de la dirección actual tiene "relación con este tipo de cosas ni con estas personas". Feijóo resumió así las revelaciones del caso que figuran en el sumario: "Había una persona que llevó las cuentas del partido entre el 96 y el 99, y los papeles de esas cuentas se los llevó en una caja fuerte y esa caja fuerte está intervenida por las autoridades judiciales que están investigando precisamente las cuestiones que hizo esa persona".

La renovación llevada a cabo desde 2006 en el PP de Galicia significa que "las personas implicadas en presuntos casos de corrupción son personas que no están hoy con cargos en el partido", insistió. "Lo que ocurrió hace 10 años, 12 años, 13 años en un partido es evidente que tiene su repercusión, pero actualizar lo que ocurrió hace 13 años es simplemente descontextualizar un debate", añadió, para concluir: "En este momento, implicar al Partido Popular de Galicia en este asunto me parece enredar mucho el tema".

Por lo que se refiere al PP nacional, el presidente de la Xunta reclamó "actuar en consecuencia" cuando "hay alguna responsabilidad" y "dejar que la justicia investigue a fondo este asunto y nos diga todo lo que nos tiene que decir". "Somos un partido democrático y aceptamos por supuesto las investigaciones judiciales. Otra cosa son las filtraciones judiciales, pero eso no es responsabilidad del PP sino que es responsabilidad directa del Gobierno socialista", acusó.

El presidente del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, contraatacó "¿Qué puedo contestar? ¿A qué contesto?", respondía ayer a las preguntas de los periodistas. "No tengo constancia de nada" que pueda implicar al PP en la provincia o a la Diputación que él preside en la trama corrupta. "No hay caso", sostuvo, aunque sí abundó en las acusaciones a los socialistas, al afirmar que el PSOE "es un gran artista a la hora de intentar embarrar".

El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, mientras, centró la diana en Feijóo, de quien rechazó su argumento principal. "No llegó anteayer al PP, era parte del entramado", le acusó, después de recordar que ya en 1991 era alto cargo de la Xunta de Fraga. "Feijóo y Crespo coincidieron en el anterior Gobierno del PP, en Política Territorial", dijo en relación con la vocalía de Portos de Galicia. "Ya está bien de mentir".

El líder de los socialistas gallegos exigió a Feijóo que "dé la cara" y explique la vinculación de su partido con el caso, y avisó de que si no lo hace, su partido intentará "abrir otras vías" para llegar al fondo del

asunto. "Si Feijóo no toma la iniciativa tendrá que ser la justicia la que abra una separata en el caso gallego", indicó

El portavoz del BNG, Guillermo Vázquez, también exigió explicaciones a Feijóo sobre lo que definió como "trama corrupta". Vázquez fue más lejos y sostuvo que Feijóo no puede despachar este asunto diciendo que él no estaba al frente del partido en ese periodo. "Nuestro país merece una explicación del señor Núñez Feijoo", declaró. Vázquez censuró la política de silencio de los líderes populares ante esta situación, porque "a uno sólo le lleva a pensar, francamente, que están de acuerdo con lo que pasa". "Si uno no está de acuerdo adopta algún tipo de medida y si espera a que pase la tormenta, induce a pensar que está de acuerdo con lo estaba pasando", razonó el portavoz nacionalista.

(www.elpais.com, 08/10/09)

FRAGA: "EN CUANTO SUPE ALGO, CESÉ INMEDIATAMENTE A PABLO CRESPO"

El PP de Galicia había reclamado silencio sobre Gürtel. Ayer no había programado ni un acto y el propio presidente de la Xunta, de viaje en Bruselas, negó que conociera a Pablo Crespo, el número dos de la trama, a pesar de que éste fue vocal en un organismo de la Consejería que presidió Alberto Núñez Feijóo entre 2003 y 2005.

El silencio oficial lo rompió, otra vez más, el presidente fundador. Un día después de que se conociera la conversación en la que Crespo dejaba entrever a su abogado una trama de financiación ilegal del PP gallego a finales de los noventa, Manuel Fraga negó tener conocimiento alguno de esas prácticas. A preguntas de los periodistas en el Senado, el veterano senador presumió de haber sido él quien echó a Crespo de la Secretaría de Organización del partido, en cuanto supo algo. "A la persona que ha mencionado, la he cesado inmediatamente", y eso, añadió, "que había sido propuesto por un gran hombre de Galicia como fue el señor Cuiña. El señor Crespo tendría todo el conocimiento, yo no, y en cuanto supe algo lo eché", insistió Fraga.

(www.elpais.com, 08/10/09)

ALERTA EN GALICIA: "EL LÍO QUE SE PUEDE MONTAR SERÁ MORROCOTUDO"

Solo 24 horas después de que Manuel Fraga sacase pecho en la ejecutiva estatal del PP destacando los problemas de los colegas valencianos, la sombra de la duda se cernió ayer sobre su gestión. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas desde la cárcel por el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, uno de los principales implicados en el caso Gürtel, incluyen una alusión directa a las cuentas de la formación que gestionó entre 1996 y 1999, cuando Fraga presidía la Xunta. Y en ellas advierte a su abogado de la existencia de «una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba». «Eso va traer cola cuando se levante el secreto de sumario», vaticina.

El PP gallego se había mantenido al margen de la presunta financiación irregular del partido. Ello había llevado al actual hombre fuerte en esa comunidad, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a soltarle a su homólogo valenciano, Francisco Camps, un «que cada palo aguante su vela», que ahora deberá aplicarse a sí mismo. Y es que las revelaciones de Crespo a su abogado, José Antonio López Rubal, abren la puerta a todo tipo de suspicacias.

El imputado explica al letrado, el 22 de febrero de este año, que la policía le ha intervenido en una caja fuerte que tiene en Pontevedra la «documentación económica pura» del PP gallego en esos cuatro ejercicios y le indica que no cree que estos entrañen un «problema jurídico muy grave, salvo el de 1999».

Crespo pregunta a López Rubal cuándo prescriben «este tipo de cosas», y este le previene de que si es un «problema de financiación irregular» pueden conducir a un «delito electoral». «Como mucho, 10 años», le explica. El exdirigente del PP recuerda, aliviado, que si la prensa se entera esa semana —la víspera de las últimas elecciones autonómicas gallegas— «el lío que se podría montar sería morrocotudo».

Dos días antes, Crespo habló de esta documentación con su esposa, Consuelo Margarita Vázquez, para explicarle que, en su día, le entregó una copia de las cuentas a Fraga para que este supiera que había tenido un «secretario de organización decente y ordenado». «Para que vaya haciendo comentarios por ahí el viejo de que no sé qué y que no sé cuánto. A ver lo que hace ahora, a ver qué comentario hace

ahora», se lamenta ante su compañera sentimental en referencia a los comentarios negativos que Fraga pueda hacer sobre él.

El tema vuelve a salir en otra conversación del detenido con sus abogados, fechada el pasado 6 de marzo, en la que les dice irónicamente que en las cuentas de la caja fuerte los investigados hallarán «cosas espectaculares». «Ahí encontrarán mil y pico millones de pesetas de la época y no sé qué. Y verán ingresos, y bueno, yo ni siquiera me acuerdo de eso, porque además todo estaba con seudónimos», concluye.

(www.elperiodico.com, 07/10/09)

CRESPO APUNTA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DEL PP GALLEGO

Fue el secretario de Organización del PP gallego a finales de los años noventa, cuando el todopoderoso Xosé Cuiña ejercía como número dos de Fraga. Pablo Crespo se ocupaba de la fontanería, organizaba las campañas y romerías multitudinarias de los populares. También llevaba las cuentas del partido. Todo lo dejó anotado en una caja de seguridad de un banco en Pontevedra. Cuando 10 años después tuvo noticias de que la policía acudía a desprecintarla, estando ya él en la cárcel, Crespo expresó su preocupación a su socio, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a su abogado.

Sucedió el pasado 24 de febrero. La conversación que figura en el sumario, cuyo secreto levantó ayer el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP gallego. En el locutorio de Soto del Real, Crespo admite que la contabilidad del PP está en la caja y que ésta contiene una relación de ingresos sin explicitar quién los hacía. Crespo pregunta directamente a su abogado por las consecuencias legales de sus actividades. Este es un extracto de la conversación:

Crespo. No creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo de 1999. ¿Cuándo prescriben este tipo de cosas?

Abogado. Depende de lo que hablemos. Si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que menos.

Crespo. Le dice a Francisco Correa: como mucho 10 años. Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

Abogado. Seguro, seguro. Aunque hiciese 20 años, EL PAÍS lo sacaría igual.

Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana [...], el lío que se puede montar es morrocotudo.

(www.elpais.com, 07/10/09)

CRESPO REVELA IRREGULARIDADES EN LAS CUENTAS DEL PP GALLEGO EN LOS 90

Una conversación mantenida por Pablo Crespo con su abogado, que figura en la parte del sumario cuyo secreto levantó ayer el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP de Galicia. El ex secretario de Organización de los populares gallegos reconoce en ella que había gastos e ingresos sin justificar en las cuentas del partido entre 1996 y 1999, que estaban depositadas en una caja de seguridad de Pontevedra, donde guardaba toda la información económica de su gestión, y de la que se incautó la policía.

Así lo dice en una comunicación con su letrado José Antonio López Rubal grabada por orden judicial en el locutorio de la cárcel de Soto del Real el pasado 24 de febrero. Crespo informa a su letrado de que en esa documentación había una «relación de ingresos y gastos sin especificar quién ingresaba», le muestra su preocupación por las irregularidades y le dice que el asunto va a «traer cola» cuando se levante el secreto sumarial.

Crespo considera que las cuentas del ejercicio de 1999 pueden ser un «problema jurídico muy grave» y le pregunta, muy inquieto, cuándo prescriben «este tipo de cosas», a lo que su abogado responde que si se trata de «financiación irregular» que sea constitutiva de un delito electoral son «como mucho diez años». A continuación, el número dos de la trama dirigida por Francisco Correa asegura que si publica esa información un diario madrileño estando vigente el secreto del sumario y esa misma semana, a poco días de las elecciones gallegas del 1 de marzo, «el lío que se puede montar es morrocotudo».

En esa misma conversación, Crespo ordena a su abogado la «ejecución» de fondos en Suiza, sin especificar los detalles de la operación, aunque le advierte que «hay que hacerlo con calma porque una cosa desproporcionada salta las alarmas allí». En otro momento, López Rubal le comenta que si el caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid «hay un magistrado que les ayuda» y que cuentan con abogados que «se mueven bien» en la Audiencia Nacional.

Cuatro días antes, Crespo mantuvo una conversación con su mujer, en la que le cuenta que en su día entregó a Manuel Fraga una copia de las cuentas del partido para que supiera que había sido un secretario de Organización «decente y ordenado». «Para que vaya haciendo comentarios por ahí el viejo de que no sé qué y no sé cuánto... a ver lo que hace ahora», afirma el que fue hombre de confianza del fallecido Xosé Cuiña. Una vez celebradas las elecciones gallegas, Crespo se jacta en otra conversación con su abogado de que el caso Gürtel no había perjudicado al PP.

Los gastos sin justificar a los que alude Crespo ascienden a 584.580 euros, según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que consta en el sumario. De los 6,1 millones de euros a que ascendieron los gastos totales del PP gallego entre abril de 1996 y septiembre de 1999, más de la mitad, algo más de 3,2 millones, se pagaron en dinero B, de los que solo hay recibos por valor de 2,6 millones. El informe está elaborado a partir de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco de Santander en la calle de la Peregrina, de Pontevedra, cuyo titular era Crespo, y que fueron requisados por la policía el pasado 19 de febrero.

En la misma caja de seguridad había una carta enviada por Álvaro Pérez, el Bigotes, a Mariano Rajoy el 18 de diciembre del 2003, tres meses después de que fuera nombrado secretario general, en la que le reclamaba el pago de los compromisos pendientes de la campaña de las municipales de 1999. En ella, le recuerda que Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto.

(www.lavozdegalicia.es, 07/10/09)

FEIJÓO: "EL 'CASO GÜRTEL' SON CUESTIONES DE HACE 10 AÑOS"

La ramificación gallega del caso Gürtel, posibles irregularidades en la financiación del PP de la comunidad, son, para Alberto Núñez Feijóo, "cuestiones de hace 10 años". "No solamente es pasado", afirmó ayer en Bruselas, "sino que ningún miembro del comité ejecutivo del PP formaba parte hace 10 años de esa situación". El presidente de la Xunta añadió, además, que le "parece muy bien que el responsable de organización del PP hace 10 años dé cuentas ante la justicia".

El PSdeG, por su parte, exigió de los populares que "abran ventanas" y reclamó "explicaciones" a Carlos Negreira, Rafael Louzán y Telmo Martín, todos del PP y que, según la socialista Mar Barcón, "dieron dinero público a empresas de la trama". Los nacionalistas del BNG también solicitaron "explicaciones" de Feijóo "a la sociedad gallega, en vez de él pedírselas a Camps".

(www.elpais.com, 07/10/09)

'FONTANERO' EN BUSCA DE DINERO FÁCIL

No hubo acto político entre 1996 y 1999 en el PP gallego que no organizase Special Events, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Su monopolio era tal que el resto de agencias ni peleaban por las campañas de los populares gallegos. Corrían buenos tiempos para el *sector de la boina*, el ala rural del partido, que proporcionaba a Manuel Fraga las romerías multitudinarias que tanto le gustaban. Su máximo exponente, Xosé Cuiña, el sempiterno delfín -ya fallecido-, ocupaba la secretaría general del PP y presidía la consejería más inversora del Gobierno: Obras Públicas. Y, para los asuntos corrientes, Cuiña había aupado a *número tres* del PP (secretario de organización) a Pablo Crespo, un dirigente de perfil bajo con experiencia en los números como director de banco en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Si Cuiña programaba un baño de masas para don Manuel, Pablo Crespo se encargaba de cerrar el trato. Siempre a través de Special Events. Si el alcalde de un pequeño ayuntamiento se tambaleaba en las encuestas, el secretario de organización asfaltaba carreteras para ganarse a los vecinos. Aunque luego olvidase pagar la factura, como recordaban ayer dos constructores pontevedreses.

A Crespo apenas se le conocieron declaraciones públicas. Los enemigos de Cuiña, el sector urbano del PP, no olvidan sin embargo una afrenta a finales de 1997 que refleja la incruenta batalla interna. El secretario de organización, ya con escaño autonómico, aprovechó la celebración de un congreso para relegar a los últimos bancos a dos ministros de Aznar: Mariano Rajoy y José Manuel Romay, enfrentados al sector galleguista. En primera fila posaban sonrientes Cuiña y su equipo. El episodio molestó mucho a La Moncloa y sirvió a la prensa para explicar la caída de Crespo un año más tarde. Pero su eclipse, a principios de 1999, tuvo más que ver con la gestión y contratos a empresas (singularmente Special Events) que firmó en nombre del PP, según fuentes del partido.

Tras la caída de Cuiña, el nuevo secretario general, Xesús Palmou, exigió a Fraga la destitución del secretario de organización. Y Crespo buscó acomodo en la sociedad con la que tanto había tratado. Special Events le ofreció un cargo directivo en Madrid y el eterno *fontanero* siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo. Fue tal el ninguneo que ni siquiera la presión desde la sede nacional del PP surtió efecto: y entre 1999 y 2004 la sociedad no facturó un euro al PP gallego (aunque sí firmó una campaña por 1,5 millones con la Consejería de Agricultura).

Las informaciones sobre el accionariado de Special Events y su ubicación en un paraíso fiscal obligaron a Fraga a comprometerse en 2005 a no tratar más con la empresa. Pero Pablo Crespo hacía un lustro que volaba por libre lejos de Santiago. A través de ocho sociedades distintas ha negociado contratos con Administraciones públicas gobernadas por el PP, como la Generalitat valenciana o la Comunidad de Madrid.

En octubre no perdió ocasión de saldar viejas cuentas en el juzgado. Acudió como testigo a una vista por una deuda que el PP de Pontevedra contrajo con una pequeña agencia de publicidad cuando él era gerente provincial. Crespo testificó a favor de la empresa y el PP fue condenado.

Nada más conocerse su detención, los populares gallegos anunciaron el viernes que el ex secretario de organización ni siquiera es ya afiliado. El fin de su carrera empresarial no pilló por sorpresa a quienes lo conocieron en Pontevedra. Algunos ex compañeros recordaban ayer su propensión a elegir socios comprometidos en busca de dinero fácil.

www.elpais.es 06.10.09

UNA CONVERSACIÓN GRABADA EN LA CÁRCEL APUNTA A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP GALLEGO

Tras la Comunidad Valenciana y Castilla y León, las redes de la trama Gürtel llegan a Galicia. Una conversación mantenida entre uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado, y que figura en la parte del sumario hecha pública hoy por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP de Galicia.

La conversación entre Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex que fuera número tres de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, se produjo el pasado 24 de febrero en los siguientes términos:

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.

José Antonio. Seguramente.

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

José Antonio. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral [inaudible], como mucho diez años, pero yo creo que es menos.

Pablo Crespo. Le dice a Francisco Correa "como mucho diez años". Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

José Antonio. Seguro, seguro. Aunque hiciese veinte años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. Si estando el secreto del sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo.

José Antonio. Lo sacan igual, porque ya me lo han hecho con otras cosas parecidas.

(www.elpais.com, 06/10/09)

EL PP GALLEGO PAGÓ EN DINERO NEGRO 3,2 MILLONES DE EUROS

El Partido Popular de Galicia pagó 3.224.826 euros en dinero negro, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a diferentes proveedores que le organizaron todo tipo de eventos. Así consta en un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, donde **también se recogen múltiples pruebas que demuestran la financiación ilegal del PP** en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

El presidente del PP gallego en aquella época era Manuel Fraga y como número tres del partido en su calidad de secretario de Organización figuraba Pablo Crespo, ahora en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama *Gürtel*. La cúpula la completaba el secretario general, José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. **El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero**, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión.

Dos grupos de dinero B

En los documentos se detallaban los gastos totales del PP de Galicia en ese periodo de tres años y medio, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

En algunos casos, el PP no tiene ni una nota de recibí del pago realizado

La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "Uno que corresponde a pagos realizados donde **existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc**, que **ascienden a 2.640.246 euros**, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a **584.580 euros**".

En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación parcial de acreedores que habían organizado actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. Es más, Crespo menciona expresamente en sus papeles "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y por dichos importes". Las empresas y los importes son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

La Policía recuerda que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del conglomerado empresarial montado por Francisco Correa, jefe de la *trama Gürtel*. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

El partido abonaba más de la mitad de sus gastos en dinero B

Junto al nombre de la empresa y el importe, en el listado de Pablo Crespo también consta el "concepto" genérico del evento por el que pagó el PP. En varias ocasiones se especifica que fueron actos de las elecciones autonómicas de 1997, las terceras que ganó Fraga.

"Facturación dual"

Tras analizar los documentos, la Policía es contundente en sus conclusiones: **"Este método de facturación pone de manifiesto la existencia de un sistema de facturación dual**, una parte es visible y por tanto fiscalizable, y otra es invisible y en consecuencia ajena a los circuitos financieros reales". Además, los investigadores de la Brigada de Blanqueo denuncian que esta forma de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

El PP no ha asumido aún ninguna responsabilidad por la financiación ilegal destapada por la Policía.

www.publico.es 04.10.09

EL PP GALLEGO, CON FRAGA A LA CABEZA, PAGÓ MILLONES DE EUROS *EN NEGRO* A LA TRAMA GÜRTEL

El Partido Popular gallego pagó 3.224.826 euros en *dinero negro*, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a los proveedores que le organizaron todo tipo de eventos, según revela un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, que concluye que existen indicios de una presunta financiación ilegal del PP, según recoge *Público*.

- [Rajoy estaba al tanto de los pagos en dinero negro a las empresas de Correa](#)
- [El PP gallego, con Fraga a la cabeza, pagó millones de euros en negro a la trama Gürtel](#)

El presidente de los *populares* gallegos durante aquellos años era Manuel Fraga, que tenía como secretario de Organización del partido a Pablo Crespo, hoy en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la *trama Gürtel*, y como secretario general a José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

La caja de Pontevedra

Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión, según recogió [El Plural el pasado domingo](#).

Más de tres millones *en negro*

En los documentos en poder de la Policía se detallaban los gastos totales del PP de Galicia entre los años 1996 y 1999, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

La Brigada de Blanqueo

La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "uno que corresponde a pagos realizados donde existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc, que ascienden a 2.640.246 euros, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a 584.580 euros".

Las empresas proveedoras

En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación de empresas que habían organizado los actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. En uno de los papeles encontrados, Crespo escribe "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y los importes correspondientes. Según la Policía, son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

Empresas Gürtel

Los investigadores concluyen que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del

entramado empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de *Gürtel*. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

www.elplural.com 04.10.09

ERNÁNDEZ: "ACTUÉ EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO"

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, trató ayer de restar importancia a la reapertura por el Tribunal Supremo del caso de la certificación en falso de una obra cuando trabajaba para la Diputación de Pontevedra. "No le dedico ni un minuto, me someto a la decisión de los jueces", declaró ayer.

El Supremo decidirá el 15 de noviembre si obliga al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a celebrar juicio oral contra el conselleiro, tras aceptar el recurso del PSOE contra el archivo de la causa que decidió el tribunal gallego. Hernández apeló al "único auto existente", el del TSXG, "que explicita que se actuó en defensa de los intereses de Galicia". "Y por cierto, con la conformidad del ministerio fiscal", añadió. La certificación de la obra pese a que estaba inacabada permitió liberar 331.629 euros del Gobierno a la empresa Sercoysa, en la que Hernández trabajó hasta un mes antes de hacerlo para la Diputación.

www.elpais.es 27.10.11

EL SUPREMO REABRE LA CAUSA CONTRA HERNÁNDEZ POR CERTIFICAR EN FALSO

El tribunal admite el recurso del PSdeG por la validación de una obra inacabada

En diciembre de 2008, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, avaló un certificado de finalización de una obra de la empresa Sercoysa a pesar de que apenas había comenzado. La constructora, de la que Hernández era hasta un año antes apoderado y director de construcción, ingresó así 331.629 euros por un trabajo que no había ejecutado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa en abril, pero llegan malas noticias para el conselleiro desde el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSdeG para decidir si abre juicio oral contra el conselleiro.

El alto tribunal decidirá el 15 de noviembre si juzga al conselleiro

La firma de Agustín Hernández benefició a una empresa en la que había trabajado

La decisión, adoptada el pasado viernes por la Sala Segunda del alto tribunal, acepta las alegaciones del PSdeG, secundadas por el fiscal del Supremo en un informe en el que reprochaba el "error claro" del TSXG y consideraba los hechos "un delito de falsedad en documento público". El Supremo señala para el 15 de noviembre la deliberación y decisión del caso, para entrar en el fondo del asunto y decidir si juzga a Hernández.

El escrito de la fiscalía demolía los argumentos manejados por el tribunal gallego en el auto de sobreseimiento y archivo. El fiscal sostiene que el ingeniero de la Diputación y director del proyecto, Baltasar Pujales, también denunciado por el PSdeG, certificó que la obra estaba concluida "con pleno conocimiento de la falsedad de tal afirmación". Hernández firmó la conformidad con el certificado emitido por Pujales, y ordenó continuar con los trámites hasta obtener los 331.629 euros -que corresponden a la parte cofinanciada por el Gobierno central- para la concesionaria, en la que el conselleiro trabajó hasta un mes antes de incorporarse al organismo que preside Rafael Louzán. Para el fiscal, Hernández actuó "o bien con el pleno conocimiento de que la obra no se había concluido, o bien sin haber efectuado averiguación alguna". Incluso en este segundo caso, su actuación supondría "un claro incumplimiento de sus obligaciones".

Así las cosas, la fiscalía solo contemplaba dos posibilidades. O Agustín Hernández actuó "con manifiesta e inexcusable negligencia", al firmar un certificado de fin de obra sin hacer las oportunas comprobaciones, o lo hizo "con pleno conocimiento de la falsedad". Pero cualquier averiguación al respecto pasaba por la celebración de un juicio oral al que el TSXG se opuso. Y en cualquiera de los dos

casos, para el ministerio público existe una certeza: "Sin duda alguna, los hechos referidos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público". "Lo que es indiscutible", abundó el fiscal, es que de las investigaciones practicadas se deduce "la condición de delictivas" de las conductas de Hernández y Baltasar Pujales.

La celebración del juicio que reclaman los socialistas permitiría aclarar si el miembro del Gobierno gallego cometió un delito doloso, en el caso de tener conocimiento de la falsedad, o culposos, si incumplió su obligación de cerciorarse del fin de la obra. Las únicas objeciones fiscales a la petición del abogado del PSdeG consistían en la recurribilidad del auto de sobreseimiento, dudas que quedan disipadas al aceptar el Supremo la petición de los socialistas. Por lo demás, el ministerio público consideraba que el "error jurídico" de la resolución del tribunal gallego "es muy claro".

La admisión del recurso supone un serio varapalo al TSXG, que vio en la actitud de los imputados "irregularidades administrativas", pero no delictivas, al sostener que se desconoce el daño real o potencial causado. "Se conoce perfectamente, y consiste en provocar un error en la Administración por el que esta abonó a una constructora el importe total de unas obras no construidas" y que, en ese momento, "ni siquiera se sabía si algún día serían o no acabadas", según el fiscal.

www.elpais.es 26.10.11

DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO HERNÁNDEZ' SE NIEGAN A RATIFICAR SU TESTIMONIO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sigue adelante con la instrucción de la querella presentada por el PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, por dar por acabada y permitir el pago de una carretera en Lira, en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño, cuando apenas estaba comenzada, pese a las dificultades que supone que los imputados se acojan a su derecho a no contestar a algunos interrogantes. Los encausados son cuatro: el ahora conselleiro Agustín Hernández, responsable de Infraestructuras de la Diputación que realizó esa obra; el ingeniero técnico del organismo provincial, Baltasar Pujales; así como otro funcionario del ente provincial, Pablo Montero Carrera, y el director técnico de Sercoysa, la empresa que realizó el vial, Juan Sánchez González.

Estos últimos volvieron ayer a comparecer ante el juez del alto tribunal, pero esta vez como imputados al haber admitido en julio pasado, cuando declararon como testigos, que habían certificado como acabada y recibida una obra que no se había finalizado. De sus primeras declaraciones, el juez entendió que podían "existir indicios de criminalidad" y aceptó la ampliación de la querella pedida por los socialistas para convertir en imputados a ambos testigos.

Pero ayer, al tener que ratificar sus iniciales declaraciones inculpatorias, tanto Montero como Sánchez siguieron el mismo guión que ya habían interpretado en su día Hernández y Pujales: se acogieron a su derecho -que no tenían como testigos- a no contestar a la batería de preguntas de la acusación del PSOE. Y rechazaron ratificar sus primeras declaraciones ante el juez, en las que admitían haber incurrido en una irregularidad.

El juez de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior seguirá ahora con la práctica de pruebas que dice que le faltan para concluir la instrucción. Rechazó la petición de la defensa de que se archive la causa. Todos los que declararon hasta ahora ante el magistrado, como imputados o como testigos, corroboraron que esa carretera se hizo y se pagó antes de empezar siquiera a construirse. Pero lo justificaron.

Hernández, que dejó su puesto en la Diputación al convertirse en abril de 2009 en conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, admitió ante el juez que validó el fin de una obra "sin saber su estado real". Su firma permitió a Sercoysa, empresa en la que Hernández estuvo contratado antes de entrar en la Diputación, cobrar 331.000 euros por una obra sin empezar. Pero el conselleiro se escudó en que tampoco era su cometido supervisar todas las infraestructuras y obras del ente provincial bajo su dirección.

Pujales, por su parte, asumió toda la culpa del certificado en falso, que justificó para no perder una cuantiosa subvención del Estado que obligaba a terminar la carretera de Lira antes de finalizar 2008. Y finalmente el presidente de la Diputación, que compareció ante el juez como testigo, reivindicó "el interés general" para defender que se certifique como acabada y se pague una obra pública cuando aún no existe.

(www.elpais.com, 22/09/10)

HERNÁNDEZ DENIEGA AL TRIBUNAL EL EXPEDIENTE DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO

La información que la Xunta le ocultó a Dragados se la deniega también al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras atendió ayer al requerimiento del tribunal gallego sobre la adjudicación del tramo Carballo-Berdoias de la autovía de la Costa da Morte. Pero lo hizo parcialmente: sólo remitió "aquello que la consellería considera que no afecta a la confidencialidad" de las distintas ofertas, según informó un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. El auto del TSXG le instaba a remitir el expediente completo.

"Se ha enviado lo que entendemos que pide el tribunal", precisó el mismo portavoz. Según Medio Ambiente, se trata de "documentos administrativos relacionados con la decisión de la mesa de contratación" de no compartir con otras empresas concursantes la de la oferta seleccionada, liderada por FCC en unión con Inveravante, del empresario gallego Manuel Jove. La mesa seleccionó a mediados de junio esa propuesta, con un coste para la Xunta de 979 millones de euros, 215 millones más que la Dragados, a través de Iridium y en unión con Puentes y Calzadas. Aquella cantidad supone además un sobre coste de 395 millones de euros respecto al proyecto adjudicado por el anterior Gobierno, un contrato rescindido por el de Feijóo.

Pese a que el pasado 23 de junio Agustín Hernández garantizó que la adjudicación se realizaría en el plazo de dos días, casi tres meses después la propuesta de la mesa de contratación sigue en un cajón, debido principalmente al recurso judicial. La Xunta, mientras, ha comunicado verbalmente a las empresas seleccionadas en este segundo concurso público su intención de replantearse el proyecto.

El recuso ante el TSXG se presentó después de que la mesa de contratación denegase a los representantes de Iridium y Puentes información relacionada con la oferta que obtuvo la mejor puntuación. La unión temporal liderada por esas dos empresas no sólo ofrecía mejores condiciones económicas, sino que obtuvo más puntos que FCC (814 frente a 656 de la finalmente escogida). Sin embargo, una penalización por quedarse a 13 puntos del mínimo de 160 en los criterios de calidad técnica le hizo perder 543 y quedar descartada.

La información que demandan Iridium y Puentes está relacionada con los motivos que supusieron la penalización de su oferta. Una de las razones de esa sanción es la escasa valoración que, según Iridium y Puentes, se otorgó a la cualificación del personal encargado del proyecto. Ambas empresas quieren comprobar que el personal propuesto por FCC está efectivamente mejor cualificado, pero la Consellería de Medio Ambiente apela a la confidencialidad de esos datos para denegar la documentación. Otra petición rechazada por la mesa de contratación es la de los datos de la oferta económica presentada por FCC.

Todas estas cuestiones fueron planteadas por la representante de Iridium ante la mesa de contratación el pasado 7 de junio. La portavoz de la empresa denunció las "irregularidades" y se reservó el derecho a acudir a la justicia, como finalmente hizo.

Los problemas para la adjudicación de la autovía se producen después de que Feijóo, al inicio de su mandato, acusara al bipartito de "ser incapaz" de ejecutar las obras. Cuando el Consello de la Xunta anuló el contrato con Ferrovial, que ofrecía realizar la autovía con un coste sensiblemente inferior, el presidente pidió "perdón" a los gallegos por una decisión de la que culpó al Gobierno anterior, y se comprometió a licitar el contrato cuanto antes. La Xunta no ha aclarado todavía cómo resolverá la situación.

(www.elpais.com, 21/09/10)

HERNÁNDEZ CONTRATA COMO ASESOR A UN ABOGADO DE INFRACTORES URBANÍSTICOS

Narbón litigó contra la Xunta para dejar sin efecto órdenes de demolición

De litigante contra la Xunta a contratado por la Consellería de Medio Ambiente. José Luis Narbón, durante muchos años mano derecha del fallecido José Cuiña en la antigua Consellería de Ordenación del Territorio, vuelve a trabajar para la Xunta, después de un período en el que se significó por ejercer

como defensor de conocidos infractores urbanísticos. Lo hará en virtud de una resolución del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que el pasado 1 de septiembre le adjudicó un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español".

Narbón cobrará por informar sobre "el panorama urbanístico español"

Narbón ingresará 67.260 euros por el trabajo, encargado mediante el procedimiento de contratación negociada sin publicidad y sin mesa. La consellería invitó a tres empresas para participar en el procedimiento. Seleccionó la oferta de Narbón, elaborada a título particular, y no desde su empresa Urbagalex, de gestión integral del proceso inmobiliario. La resolución, que no especifica con qué objeto se encarga el estudio, lleva las firmas de Agustín Hernández y del secretario general de la consellería, José Antonio Fernández Vázquez.

Durante el largo mandato de Cuiña en la Xunta, José Luis Narbón, al frente de la Dirección Xeral de Urbanismo entre 1990 y 1997, ejerció una influencia absoluta en la consellería, hasta el punto de que se le considera el padre de la polémica ley del suelo de 2002. Con Agustín Hernández al frente de Territorio, Narbón reapareció para ejercer como asesor en la reforma de la ley aprobada en marzo pasado. Su responsabilidad en la nueva norma es tal que fue contratado por la Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP) para unas jornadas explicativas de la ley, el pasado junio.

Entre la colaboración con los gobiernos de Fraga y con el de Feijóo, el ex director general se dedicó a ejercer la profesión de abogado como experto en urbanismo, una etapa en la que se significó en la defensa de conocidos infractores urbanísticos. Es el caso de la empresa promotora del hotel Talaso Atlántico, en Oia, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. También defendió al Ayuntamiento de A Guarda para intentar salvar de la piqueta 21 chalés construidos en suelo no urbanizable de protección paisajística, igualmente ilegalizados por el tribunal gallego tras un procedimiento iniciado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Narbón defendió asimismo al ex concejal de Urbanismo de Oia Manuel Acevedo, imputado por prevaricación por la concesión de licencia para una piscifactoría en suelo rústico de protección de costas, pese a los informes contrarios de la Xunta.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras enmarcaron el estudio adjudicado a Narbón en los "trabajos previos" para la redacción de una nueva Lei do Solo que el Gobierno gallego quiere sacar adelante en esta legislatura.

84.600 euros al año de Sanxenxo

Las administraciones del Partido Popular están resultando un negocio rentable para José Luis Narbón, que el pasado 3 de marzo se hizo con un contrato con el Ayuntamiento de Sanxenxo por 84.600 euros al año. En este caso, el expediente se tramitó por procedimiento abierto, que contó con dos ofertas. Una ofrecía el servicio por 79.600 euros anuales. La alcaldesa, Catalina González, optó por la de Narbón.

En realidad, el ahora asesor de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ya venía ejerciendo las labores que se le adjudicaron en este nuevo contrato, consistentes en la asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general para la Gerencia de Urbanismo, sólo que hasta 2009 lo realizaba a través de su despacho. La colaboración de José Luis Narbón con el Ayuntamiento de Sanxenxo se remonta al mandato de Telmo Martín. Con este de alcalde también presidió la Gerencia de Urbanismo Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Los contratos con el Ayuntamiento de Sanxenxo sucedieron a una larga trayectoria en los gobiernos de Manuel Fraga. En ellos, además de director general de Urbanismo, Narbón ejerció como vicepresidente de la Comisión Superior Urbanística de Galicia y del Instituto Galega da Vivenda e Solo, presidente de las cuatro comisiones provinciales de Urbanismo, y consejero de las Sociedades de Xestión Urbanística (Xestur) de Ourense y Pontevedra y de la Sociedade Galega de Desenvolvemento Comarcal. También fue vocal de las comisiones gallegas de Medio Ambiente y de Equipamientos Comerciales.

www.elpais.es 04.09.10

"CONFÍO EN LOS JUECES Y EN HERNÁNDEZ Y GALICIA SE DARÁ CUENTA DE ESTA INJUSTICIA"

Mientras la oposición, fundamentalmente el PSOE, estrecha el cerco contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, imputado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el caso de la certificación falsa de una obra en Salvaterra de Miño cuando estaba en la Diputación de Pontevedra, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, refrenda su confianza en su hombre para las infraestructuras.

Casi a la misma hora que el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, exigía por enésima vez la destitución del conselleiro, Feijóo volvía a defender a Hernández. "La misma confianza que tengo en la Justicia la tengo en Hernández", subrayó antes de culpar al PSOE de su imputación. "Cuanto más tiempo se mantenga abierto este asunto como pretende el PSOE, Galicia se dará más cuenta de la gran injusticia que se está intentando cometer con un miembro del Gobierno".

Sobre la negativa del juez a dar carpetazo al caso, el presidente explicó que el auto es una respuesta a la defensa que ejerce la Diputación de Pontevedra en esta causa. "No dice nada en relación con la responsabilidad del conselleiro". Cuando se le preguntó si confía igual en la actuación que mantuvo en este caso la Diputación de Pontevedra, Feijóo dijo "no tener información" sobre los técnicos de la Diputación de Pontevedra. Sí aseguró que, al menos en este caso, la obra contaba con un aval de la constructora. E intentó hacer ver que "en la técnica administrativa, cuando por razones de ejecución o trazado hay problemas, se puede avalar la certificación y no perder fondos europeos. Lo hacen funcionarios públicos desde hace décadas, si eso implica responsabilidad administrativa, no se podrá hacer en ninguna institución. No afecta a un miembro de la Xunta, sino que lo hicieron otros funcionarios públicos que prestan declaración en los juzgados", respondió.

Cuando se le recordó que hace un par de años él mismo había pedido la cabeza de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, cuando se supo de la imputación de cuatro de sus altos cargos que resultaron absueltos, Feijóo se reafirmó en aquella exigencia porque "entonces se adjudicó una obra en contra de un informe de la mesa de contratación y entiendo que tiene una responsabilidad política evidente. Nunca lo aceptaré en mi gobierno".

También el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, salió ayer a defender que "no hubo mala fe" en la actuación del ente provincial. Louzán tachó de "partidista" la denuncia del PSdeG y expresó su máximo respeto a las decisiones de la Justicia. El portavoz nacional del Bloque, Guillermo Vázquez, abogó por aguardar a que haya una sentencia.

(www.elpais.com, 23/07/10)

EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES EN EL 'CASO HERNÁNDEZ'

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial.

En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción. También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez González, director técnico de Sercoya, adjudicataria de la obra. El tribunal toma esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su actuación en este caso.

Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoya, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución.

Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a subrayar que respeta la decisión judicial. Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima

confianza del presidente y que dirige tres carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro.

El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno.

Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Trabajo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra.

Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus adjudicaciones "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin empezar la infraestructura.

El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas.

(www.elpais.com, 22/07/10)

LOUZÁN: "JUNCAL HIZO UNA LABOR EXTRAORDINARIA"

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, defendió ayer la "labor extraordinaria" del ex jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia, Evaristo Juncal, que fue destituido después de saberse que tiene un chalé ilegal y que vendió empresas a socios de narcos.

Louzán le restó importancia al hecho de que Juncal levantara su vivienda de dos plantas con una licencia de galpón y que lleve 24 años sin pagar el IBI en Caldas, el ayuntamiento donde es presidente del PP. Y acusó al líder del PSdeG de tener también una casa ilegal. "Sobre la licencia de su casa, habría que recordar que casos de estos tenemos en Galicia, sin ir más lejos, en el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Pachi Vázquez", afirmó Louzán.

"Evaristo Juncal, era, es un técnico que hizo una labor extraordinaria como jefe territorial que ahora termina su comisión de servicios, que decidió no renovarla, y que ahora sigue siendo funcionario", explicó. Y agregó: "Cada uno que entienda lo que quiera".

(www.elpais.com, 13/07/10)

LOUZÁN VE DE "INTERÉS GENERAL" QUE SE CERTIFICARA EN FALSO EL FIN DE UNA OBRA

Certificar como acabada y pagar una obra pública cuando apenas estaba comenzada responde a "la defensa del interés general". Con esta declaración defendió ayer el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), el irregular procedimiento seguido para construir una carretera que investiga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a raíz de una denuncia del PSdeG-PSOE. Están imputados el ahora conselleiro Agustín Hernández, director de Infraestructuras del organismo provincial cuando ocurrieron los hechos, en diciembre de 2008, así como el ingeniero de la Diputación Baltasar Pujales, responsable de esa obra, la variante de Lira en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño.

Louzán, que declaró ayer como testigo ante el alto tribunal, defendió con ahínco al conselleiro, cuya labor tachó de "excepcional", y siguió a pies juntillas el guión de defensa de los dos imputados: son los técnicos los que "certifican, supervisan y ven las obras", no sus superiores. "La labor de Agustín

Hernández no era otra más que de coordinación y dirección" del área de Infraestructura de la Diputación, ahondó ayer el presidente provincial ante los periodistas al salir de la sala del alto tribunal gallego.

El ahora responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta había alegado exactamente lo mismo en su declaración el pasado viernes ante el magistrado, y sostuvo que avaló el certificado en falso de la obra sin saber su estado real. Pujales, ante el juez, asumió en solitario toda la responsabilidad por ese irregular proceso, una decisión que dijo haber adoptado sin informar a Hernández cuando le pasó la acta para que la firmase y se pudiera abonar el importe a la constructora para no perder una subvención del Estado.

La polémica variante de Lira, adjudicada a Sercoysa, una empresa en la que fue directivo Hernández antes de entrar en la Diputación pontevedresa, se construyó nueve meses después de declararse como terminada y pagada (331.000 euros). Los socialistas presentaron su querella en los tribunales medio año antes de que estuviese lista la carretera, construida en un tiempo récord, entre julio y septiembre de 2009.

Louzán, en declaraciones a la prensa, insistió no obstante en calificar de "inocuo" todo el procedimiento de esa obra. "Lo único que pretendía era la defensa del interés general porque así lo demandaba la corporación de Salvaterra y los vecinos". Y recordó que se exigió un aval a Sercoysa cuando se certificó en falso como finalizada la obra para garantizar su posterior construcción. "Es una denuncia política", dijo el presidente de la Diputación al acusar a los socialistas de buscar "réditos políticos que no son capaces de ganar en las urnas".

El alcalde de Salvaterra do Miño, Arturo Grandal (PP), también declaró ayer ante el tribunal en calidad de testigo por una obra "de la Diputación en la que nada tiene que ver el Ayuntamiento", destacó. "Poco puedo aportar", dijo tras quejarse de haber ser citado a declarar. "Si fuera de otro partido, no me llamarían", se quejó.

(www.elpais.com, 08/07/10)

UN FUNCIONARIO ASUME LA CULPA DEL CERTIFICADO FALSO IMPUTADO A HERNÁNDEZ

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia continuó ayer la toma de declaraciones por la denuncia del PSdeG, que en su día alertó de que el conselleiro Agustín Hernández había certificado el fin de una obra para la Diputación de Pontevedra que estaba comenzando a construirse. El actual responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras declaró como imputado por este caso, ocurrido en diciembre de 2008, cuatro meses antes de entrar en la Xunta. También lo hizo el ingeniero técnico del organismo provincial Baltasar Pujales. Este último exculpó a Hernández, quien admitió ante el magistrado que certificó la finalización de la obra sin saber su estado real. El veterano funcionario asumió de este modo toda la responsabilidad.

Ambos imputados, en sus declaraciones el pasado viernes ante el magistrado que instruye las diligencias previas de esta querella, coincidieron en negarse a contestar a todas las preguntas que les planteó el abogado de la acusación, José Luis Prieto. Tanto Hernández, que alardeó de "máxima colaboración con la Justicia", como Pujales se acogieron a su derecho a no responder.

No tienen esa opción los testigos, como los que comparecieron ayer ante el tribunal. Por el juzgado pasaron el responsable de contratación de la Diputación, Pablo Montero y Juan Sánchez, un directivo de la constructora Sercoysa que firmó la recepción de la obra, una carretera en Salvaterra de Miño. Hoy comparecerán ante el tribunal, también como testigos, el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), el alcalde de Salvaterra de Miño y el secretario del organismo provincial.

Los hechos denunciados por los socialistas hace ya año y medio se refieren a la certificación y pago de la variante de Lira a Sercoysa, empresa en la que estuvo contratado el ahora conselleiro antes de ser director de Infraestructuras de la Diputación. Fue siete meses antes de que realmente fuese construida. Tanto Agustín Hernández como Baltasar Pujales reconocieron sus rúbricas en el acta de finalización de la obra que permitió su pago, por un valor total de 331.000 euros.

Pero mientras el conselleiro argumentó que no sabía cuál era su estado real y que no entraba en sus funciones, el ingeniero de la Diputación, director de esa obra, admitió que se certificó la carretera como concluida cuando sólo se había realizado una quinta parte.

Pujales se justificó ante el juez con la misma versión que dio la Diputación cuando el PSdeG presentó su querrela. El funcionario alegó haber mentido para no perder la cuantiosa subvención del Estado, concedida bajo la condición de que la carretera estuviese lista antes de terminar 2008. Un plazo imposible de cumplir dado el retraso de la Confederación Hidrográfica del Norte en otorgar los permisos imprescindibles para la tala de árboles y paso de aguas que requería la infraestructura.

Pujales insistió en que se exigió a Sercoysa un aval por el importe de la obra pendiente para garantizar que procedería a construirla cuando contasen con las autorizaciones pertinentes. Éstas no llegaron hasta la primavera siguiente. La variante de Lira estuvo lista a principios del otoño 2009, nueve meses después de haber sido declarada como terminada.

El ingeniero técnico, con más de 40 años de carrera en la Diputación de Pontevedra, asumió en solitario la responsabilidad por esta irregularidad y aseguró no haber informado a Hernández cuando le pasó el acta para que éste la avalase y que se procediera a su pago.

En aquel momento, según archivos fotográficos aportados por los querellantes, apenas se habían realizado movimientos de tierra donde debía transcurrir la carretera. Desde el PP gallego, se calificó esta práctica para evitar perder ayudas oficiales como "habitual" en todas las administraciones públicas.

Hernández afirmó ante el tribunal que no intervino para nada en esa obra, salvo para dar el conforme, y que no entraba entre sus funciones certificar el estado de actuaciones concretas.

(www.elpais.com, 07/07/10)

292.000 EUROS POR UNA OBRA SIN HACER

Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para declarar como imputado por "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública". Hernández fue denunciado por el PSOE -la querrela fue admitida a trámite el pasado abril-, por avalar con su firma, en su etapa de jefe de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, el certificado que daba por concluida una obra apenas empezada por una empresa en la que él mismo había sido directivo, Serycosa. La empresa, para la que Hernández había estado trabajando entre agosto de 2005 y marzo de 2006, cobró, gracias a su firma, unos 292.000 euros por haber construido una carretera, la variante del Lira, cuando estaba lejos de ser realizada. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2008.

En su declaración ante el juez, que se prolongó durante hora y cuarto, el consejero reconoció que firmó el visado de la obra y que con esa rúbrica "el expediente se remite a Intervención para su posterior pago". Hernández declaró al juez que no sabía en qué "estado real" se encontraban las obras cuando firmó el certificado que las daba por concluidas. Admitió que entre sus funciones en la corporación provincial no figuraba "la de certificar obras, que son [competencia de] los ingenieros técnicos". Al enseñarle las fotos del estado de esa carretera cuando se dio por terminada, unos documentos aportados por el representante del PSdeG-PSOE, Hernández dijo que debía estar en "la fase de movimientos de tierra".

Hernández se acogió a su derecho a no responder a ninguna de la veintena de preguntas que le formuló el abogado del querellante. Sin embargo, al salir de la sala del tribunal, en una escueta declaración ante los periodistas, el consejero sostuvo todo lo contrario: "Respondí a las preguntas de los magistrados, el fiscal, la acusación y los demás abogados comparecientes". Y remachó: "Mi máxima colaboración y respeto por la justicia".

Los socialistas gallegos no tardaron en contestar. "No sólo no colaboró con la justicia sino que más bien la obstruyó al no contestar a la acusación y lo primero que hizo al salir del tribunal es mentir al afirmar que respondió a todas las preguntas de los abogados", acusó la dirigente del PSdeG Beatriz Sestayo, tras recordar el apoyo firme que el presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, expresó hacia su consejero, cuya ética defendió hace unos días.

Feijóo está convencido de que su hombre de confianza es inocente, aunque su cuestionada actuación como cargo de la Diputación pontevedresa "no fue el episodio más brillante de su vida", admitió. El presidente de la Xunta cerró filas con Hernández y ordenó al PP, pese a que sus estatutos prevén la destitución de todo cargo cuando haya indicios de delito, que haga lo mismo. "Puedo aceptar que alguien

meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada", sostuvo Feijóo.

(www.elpais.com, 03/07/10)

HERNÁNDEZ ADMITE QUE VALIDÓ EL FIN DE UNA OBRA "SIN SABER SU ESTADO REAL"

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, se esforzó ayer por aparentar cierta tranquilidad al acudir a su cita ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para declarar como imputado por "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública". Pero no logró evitar que se le notase tenso: sonrisa un tanto forzada ante las cámaras, escueta declaración a los periodistas pero sin responder a una sola pregunta. En mayo de 2009, cuando Hernández aún estaba en su primer mes como conselleiro, fue denunciado por el PSdeG por avalar con su firma -durante su etapa como jefe del área de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra- el certificado que daba por concluida una obra apenas empezada por una empresa en la que él mismo ejerció como directivo. Sucedió en diciembre de 2008.

En su declaración ante el juez que se prolongó durante hora y cuarto, el conselleiro reconoció que firmó el visado de la obra y que con esa rúbrica "el expediente se remite a Intervención para su posterior pago". La empresa Sercoysa, en la que el ahora conselleiro trabajó entre agosto de 2005 y marzo de 2006, cobró gracias a la certificación firmada por Hernández unos 292.000 euros por construir la variante de Lira cuando aún estaba lejos de ser concluida.

Hernández tampoco sabía, según afirmó ante el juez, en qué "estado real" se encontraban las obras cuando firmó "el conforme tramítese". Pero también admitió que entre sus funciones, en la corporación, no figuraba "la de certificar obras, que son [competencia de] los ingenieros técnicos". Es el cargo que ocupa en la Diputación pontevedresa Baltasar Pujales, quien también declaró ayer como imputado.

El responsable de Medio Ambiente de la Xunta se acogió a su derecho a no responder a ninguna de la veintena de preguntas que le formuló el abogado del querellante. Sin embargo, al salir de la sala del tribunal, en una escueta declaración ante los periodistas, el conselleiro sostuvo todo lo contrario: "Respondí a las preguntas de los magistrados, el fiscal, la acusación y los demás abogados comparecientes", aseguró. Ante la prensa, remachó el conselleiro: "Mi máxima colaboración y respeto por la Justicia". "Ahora me voy a trabajar que tengo muchas labores que hacer", añadió en un intento de restar importancia a una imputación que hace días ya advirtió que no le dedicaría "ni un minuto".

Cuando concluyó la declaración, los socialistas criticaron la actitud de Hernández, al que culparon de "ocultar algo". "No sólo no colaboró con la Justicia sino que más bien la obstruyó al no contestar a la acusación y lo primero que hizo al salir del tribunal es mentir al afirmar que respondió a todas las preguntas de los abogados", acusó la dirigente del PSdeG Beatriz Sestayo. La diputada recordó el apoyo firme que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó hacia su conselleiro, cuya ética defiende desde que estalló este caso.

El jefe del Ejecutivo gallego repite en público y en privado que su hombre de confianza "nunca metió la mano" aunque admite que el salto de Hernández de la Xunta de Fraga a la dirección de las empresas a las que él mismo había adjudicado proyectos "no fue el episodio más brillante de su vida". Con todo, Feijóo le mantiene su apoyo y ha ordenado al PP cerrar filas con su conselleiro, pese a que los estatutos y el código ético del partido prevén la destitución de todo cargo cuando un juez vea indicios de delito. "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada", sostiene cada vez que se le pregunta el presidente gallego.

A preguntas del fiscal, ante la sala segunda del Tribunal Superior que decidirá si es procesado o no por esta causa, el conselleiro insistió en descargar cualquier responsabilidad en los hechos denunciados y desviarla hacia el otro imputado, el ingeniero del departamento de Vías y Obras de la Diputación de Pontevedra, Baltasar Pujales. Hernández afirmó que su labor, como responsable de Infraestructuras del organismo provincial entre 2008 y 2009 -lo dejó justo antes de ser nombrado conselleiro-, era de "supervisión, coordinación y gestión de una red muy amplia". "Cada zona tiene su responsable y no entraba dentro de los asuntos concretos de cada zona", alegó. Y cuando firmó el conforme de la obra, no examinó los folios del expediente, reconoció. Ni intervino "para nada en la obra", ni sabía su "estado real" cuando avaló con su firma la certificación del ingeniero que la daba por concluida. Al enseñarle las fotos

del estado de la carretera que apenas estaba en obras cuando se dio por terminada, unos documentos aportados por el PSdeG, Hernández dijo que debía estar en "fase de movimientos de tierra".

Más larga fue la declaración ante el juez del otro imputado en la causa, el ingeniero de la Diputación Baltasar Pujales. Durante una hora y 45 minutos, él sí respondió a las preguntas de todas las partes.

(www.elpais.com, 03/07/10)

EL PP CALIFICA LA IRREGULARIDAD DE "PRÁCTICA HABITUAL" PARA NO PERDER AYUDAS EUROPEAS

Cinco testigos, entre ellos el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), están llamados a declarar entre el martes y el miércoles en la sala segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ésta deberá decidir el procesamiento o archivo de la denuncia contra el conselleiro de Medio Ambiente y un ingeniero del ente provincial por certificar y pagar una obra inacabada. En cuanto el PSdeG formuló la querella que tramita el tribunal dada la condición de aforado de Agustín Hernández, desde el organismo provincial se atribuyeron los hechos denunciados al afán de apurar procesos burocráticos para no perder la subvención de la Unión Europea para la construcción de una carretera denominada variante de Lira.

En el PP, aseguran que esta irregularidad se comete con frecuencia en las administraciones públicas. Y tacha de política la querella de los socialistas contra el conselleiro por avalar, cuando era director de Infraestructuras del organismo provincial, la certificación de que la obra estaba acabada pese a que su finalización estaba lejos.

Un portavoz de la Diputación afirmó hace meses que la obra cuestionada sufrió un importante retraso al demorarse los imprescindibles permisos de la Confederación Hidrográfica del Norte para talar los árboles y sortear las aguas que requería la construcción de esa variante situada en el municipio de Salvaterra do Miño. El alcalde de esa localidad y el secretario del ayuntamiento también están citados a declarar el miércoles como testigos. Otros dos cargos de la Diputación comparecerán ante el magistrado del alto tribunal el martes.

Los socialistas llevan meses exigiendo el cese inmediato del conselleiro Hernández por considerar "intolerable" que siga al frente del departamento de Infraestructuras de la Xunta cuando en su anterior cargo, como responsable de la misma área de la Diputación de Pontevedra, "avaló como terminada una obra inacabada que fue adjudicada a una empresa con la que estuvo vinculado laboralmente".

(www.elpais.com, 03/07/10)

FEIJÓO APOYARÁ A HERNÁNDEZ HASTA EL FINAL PORQUE "NUNCA HA METIDO LA MANO"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevará hasta el final su respaldo al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que mañana tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, imputado por certificar en falso una obra inacabada.

El presidente está convencido de que su hombre de confianza "nunca metió la mano" y ha dado órdenes a su partido de cerrar filas y defender al conselleiro, una apuesta personal de Feijóo, que hace año y medio dejó en manos de Hernández tres de las carteras del bipartito: medio ambiente, infraestructuras y vivienda. Y eso que por aquel entonces, en vísperas de formar gobierno, ya se sabía del polémico tránsito del sector público al privado de Hernández, que saltó de la Xunta de Fraga a la constructora pontevedresa Sercoysa, a la que había adjudicado obras desde la Consellería de Política Territorial.

Fue en su regreso a las instituciones, como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, cuando Hernández certificó el final de obra de una carretera -que debía construir precisamente Sercoysa- que apenas se había comenzado a construir. Esos hechos, denunciados por el BNG de Salvaterra y que los socialistas llevaron a los tribunales, son los que han propiciado la imputación de Hernández. Feijóo ya le mostro el apoyo hace un año, cuando, pese a admitir que "no fue el episodio más brillante de su vida", avaló su nombramiento.

Tanto entonces como ahora el razonamiento del presidente es el mismo: "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada". Ese argumento lo repite en público y en privado. Todo el PP sabe que antes, ahora y después de que se pronuncie el tribunal, el conselleiro de Medio Ambiente cuenta con el favor del presidente.

De ahí que Feijóo haya decidido unir su destino al del hombre que dirige la cartera más inversora de la Xunta. Su discurso tiene poco que ver con el que esgrimía en la oposición. Bastó que el juez decano de Santiago imputase a cuatro altos cargos de la Consellería de Política Territorial del bipartito para que el líder del PP pidiera entonces la dimisión de la mujer que dirigía aquel departamento, la socialista María José Caride, a quien los populares llamaban entonces "becaria" de Emilio Pérez Touriño. Aquel mensaje que repitió en cada mitin durante la campaña de las generales de 2008, llevó a Feijóo a concluir que Caride no podía seguir al frente de una consellería "repleta de imputados".

Ahora el imputado es el propio conselleiro pero Feijóo ha dedidido dejar en el cajón el código ético del partido, incorporado a los estatutos y que obliga al PP a autoexigirse responsabilidades políticas "cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Los mismos que ha observado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el comportamiento de Hernández y que, según los estatutos del partido, obligarían a Feijóo a apartar temporalmente al conselleiro de sus actuales responsabilidades.

Ese códido ético es la mayoría de veces papel mojado: el PP gallego nunca se lo ha aplicado a la media docena de alcaldes y cargos públicos imputados o condenados en primera instancia, igual que la dirección nacional obvia cualquier medida contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por todos los delitos que el Código Penal atribuye a un funcionario.

(www.elpais.com, 01/07/10)

UN CONSELLEIRO DE FEIJÓO, IMPUTADO POR FALSEDAD

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, deberá rendir cuentas a la Justicia. El alto cargo de Alberto Núñez Feijóo tendrá que declarar el viernes como imputado por haber certificado la conclusión de unas obras viarias que en realidad no habían sido acabadas. Se trata de trabajos pendientes, por valor de 800.000 euros, en Pontevedra, a los que dio el visto bueno durante su etapa como responsable de Infraestructuras de la Diputación provincial. Las obras fueron adjudicadas a una empresa constructora, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.

La citación judicial se produce a raíz de la denuncia presentada el año pasado por el PSdeG-PSOE ante la Audiencia de Pontevedra, que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dada la condición de aforado del conselleiro. En abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar un sumario ante los delitos denunciados de "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública" de los que ahora deberá dar cuenta.

"Respetamos la autonomía judicial", se limitó a manifestar ayer un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. "El juez no le imputa ningún delito. Simplemente ha abierto diligencias previas ante la denuncia presentada por el PSOE", insistieron las mismas fuentes.

Atrás quedan los tiempos en los que Feijóo pedía "perdón en nombre de la política" por los supuestos actos reprochables del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas, en la pasada legislatura.

Aunque el presidente evitó referirse ayer a la imputación de su máximo responsable de Infraestructuras, hace tan sólo unos meses, al saltar la noticia de la falsa certificación de las obras, el mandatario gallego se limitó a aseverar que no se trataba "de la actuación más brillante" de Hernández.

Ni una sola referencia al código ético del PP, que compromete a sus militantes a "no dedicarse a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas". Son las mismas normas que exigen "responsabilidades políticas cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

En su descargo, Agustín Hernández justificó en su momento que constituye una "práctica habitual" la certificación de obras que todavía no han sido rematadas "para cumplir con el plazo para recibir una subvención".

Es el mismo argumento empleado entonces por la Diputación de Pontevedra, feudo tradicional del PP. Según el organismo provincial, la obra se había complicado por "problemas burocráticos" y el proceso de certificación ahora en tela de juicio fue realizado para no perder los fondos de la UE con los que se sufragaba la carretera.

Desde las filas socialistas, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió a Núñez Feijóo el cese del conselleiro imputado. "Es intolerable que siga al frente de la consellería", aseveró. "Los antecedentes de Hernández [que adjudicó las obras de la llamada autovía de la Costa de A Morte por un sobreprecio de casi 400 millones, según informó Público] deberían obligar al presidente de la Xunta a tomar una decisión lo más contundente posible", reclamó.

El líder del PP gallego reclamó al Ejecutivo bipartito de Emilio Pérez Touriño que cesase a la entonces responsable de Infraestructuras, la socialista María José Caride, porque un juez había aceptado a trámite una querrela del PP.

Con las elecciones, cambió el Gobierno y la actitud de Feijóo. Sólo en la provincia de Pontevedra, en Gondomar, Tui y Portas, hay al menos tres alcaldes implicados por diferentes delitos. Ni rastro de la "regeneración democrática" tan reiterada antes por Feijóo.

Carlos Silva, alcalde de Gondomar, está condenado por prevaricación a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación. Feliciano Fernández, regidor de Tui, está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El de Portas, Roberto Vázquez, está inhabilitado por emplear empresas familiares como intermediarias para contratos públicos. Los tres continúan en sus puestos.

(www.publico.es, 29/06/10)

FEIJÓO DEFIENDE EL CERTIFICADO FALSO DE OBRAS COMO "PRÁCTICA ADMINISTRATIVA"

Louzán avala a Hernández y dice que sus técnicos atendieron al "interés general"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, siente una "tranquilidad absoluta" ante el anuncio de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) investigará la denuncia del PSdeG contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, por estafa, fraude a la Administración y falsificación de documentos. "Lo que se hizo es una práctica administrativa hecha en otras administraciones públicas y avalada por avals y garantías", defendió ayer Feijóo. El presidente de la Diputación de Pontevedra, en la que trabajaba Hernández cuando visó el fin de una obra recién iniciada, defendió la actuación del conselleiro y sus técnicos, de los que asegura que actuaron "siempre atendiendo al interés general", informa Europa Press.

De viaje oficial en León, Hernández únicamente dijo que profesa el "máximo respeto a la justicia", mientras que Feijóo descartó suspender su capacidad para firmar contratos públicos hasta que se resuelva el caso, en contra de lo que reclamó el PSOE. "Es una propuesta que excede cualquier planteamiento coherente de respeto", opinó, e insistió en defender el proceder de su conselleiro: "Las prácticas administrativas que están en cuestión van a ser dilucidadas. Gobiernos del PSOE hicieron las mismas prácticas sin responsabilidad siquiera administrativa", sostuvo. El TSXG analiza ahora si los hechos pueden constituir delito, cuestión sobre la que el fiscal todavía no se ha pronunciado.

Hernández certificó el final de la construcción de la variante de Lira en Salvaterra con el fin de no perder ayudas europeas. El conselleiro había estado con anterioridad a sueldo de la empresa a la que se encargaron los trabajos.

www.elpais.es 17.04.10

UNA JUEZ PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR QUE INVESTIGUE AL CONSELLEIRO HERNÁNDEZ

El juzgado de Pontevedra aprecia indicios de un delito de falsedad documental

La querrella del PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sigue su curso judicial. Acusado por los socialistas de falsedad documental, estafa y fraude a la Administración por certificar el fin de una obra recién empezada cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra, el Juzgado número 1 de Pontevedra se ha inhibido ahora en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargado de juzgar a los aforados del Gobierno y el Parlamento autónomos.

Hernández certificó el fin de una obra de la empresa Sercoysa -de la que previamente había sido apoderado y director de construcción- cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. El trabajo en cuestión, la construcción de la variante de Lira en Salvaterra, apenas había empezado a acometerse cuando el ahora conselleiro lo dio por finalizado.

Aunque el auto dictado el pasado día 12 no entra en consideraciones de fondo sobre los hechos, fuentes judiciales consultadas explican que de él se deduce que la juez Aránzazu Fernández, al elevar el asunto al Tribunal Superior, ha apreciado indicios de delito, ya que de otro modo debería archivar las diligencias.

La resolución también atañe al otro implicado, el ingeniero y director de la obra en cuestión, Baltasar Pujales. Éste no es aforado, pero la juez lo somete igualmente al TSXG para no romper la unidad de las actuaciones. Esto reforzaría la impresión de que existen indicios de ilícito penal. El auto llega casi cinco meses después de que se rechazase el recurso de Hernández contra la admisión a trámite de la querrella del PSOE. La resolución, que ocupa un folio y medio, da cuenta de las leyes -el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial- que obligan a remitir el caso al TSXG, ambas relativas al estatuto de aforado del conselleiro. La juez, no obstante, se refiere a Hernández como "miembro del Parlamento", si bien no es diputado.

Además, aunque admite que Pujales no goza de la protección del fuero, entiende, apoyándose en una excepción a la regla general que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también el TSXG debe encargarse de su caso porque los investigados podrían ser responsables del delito al mismo nivel. "No es obstáculo a este respecto que el co-querrellado carezca de la condición de aforado, dado que a ambos se les imputa la coautoría en unos mismos delitos de falsedad en documento público y estafa", explica la juez.

Cuando el caso se hizo público, en mayo de 2009,

tanto el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salieron en defensa de Hernández. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó entonces Feijóo. Hernández, por su parte, se defendió alegando que su proceder era habitual en los trámites administrativos para no perder una subvención del Estado

o, que cubrió la mitad de los casi 400.000 euros en que estaba presupuestada la obra.

Este "intolerable aire de normalidad", según palabras del secretario general de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, llevó al partido a presentar la querrella. Pose llegó a afirmar que la extensión del comportamiento de Hernández podría acabar con el Estado de Derecho.

Episodio polémico

El caso de la certificación de subvenciones no fue el primer episodio controvertido en que se vio envuelto el conselleiro de Medio Ambiente. Hernández había llegado a Sercoysa escasos meses después de cesar como director general de Obras Públicas, cargo que había ocupado hasta que el bipartito llegó a la Xunta, en 2005. Este rápido paso del sector público al privado y sus implicaciones respecto a la ley de incompatibilidades también fue objeto de polémica cuando se conoció en abril de 2009, en pleno traspaso de poderes entre el bipartito y el Gobierno de Núñez Feijóo.

www.elpais.es 20.02.10

LA JUEZ VE INDICIOS DE UN DELITO DE FALSEDAD EN LA CERTIFICACIÓN QUE AVALÓ HERNÁNDEZ

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra acaba de asestar el primer revés al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a quien el PSOE de Pontevedra acusó de certificar a su ex empresa desde la Diputación de Pontevedra el final de una obra apenas empezada. En una providencia firmada el pasado 18 de septiembre, la juez desestima el recurso interpuesto por el propio Hernández y el ingeniero de Obras de la Diputación de Pontevedra Baltasar Pujales, contra el auto de admisión a trámite de la querrela que en su día presentaron los socialistas. La magistrada desecha los argumentos de los querrellados y señala que los "hechos relatados pueden constituir un delito de falsedad".

Se queda ahí, sin entrar a juzgar en profundidad del asunto, esto es, si ambos cargos entonces de la Diputación de Pontevedra cometieron "dolo falsario" -premeditación y mala fe- en el acto jurídico o "si concurre o no una causa de justificación", ya que ése será el objeto de las diligencias que ahora se abren.

El hecho al que se refiere la denuncia es la certificación del final de obra en la variante de Lira a la empresa Sercoysa, a la que Hernández se incorporó como directivo cuando la Xunta de Fraga perdió el poder en 2005. En la providencia la juez recuerda además que de momento no ha practicado ninguna prueba, ni siquiera ha tomado declaración a los querrellados, y defiende su competencia para seguir el caso, si bien deja abierta la puerta a que en el futuro podría inhibirse en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dada la condición de aforado de Hernández, que se deriva del cargo público que ocupa en el Gobierno gallego.

En el recurso que ahora desestima el juzgado, Hernández alegó que se limitó a "visar" el documento, porque él "tenía atribuida la misión de visar certificaciones de Obra en la Diputación de Pontevedra". El ingeniero Pujales que dependía de él, aseguró en su descargo, que la certificación falsa trató de salvar la colisión de intereses y optó por el bien mayor: salvar una ayuda del Gobierno central.

www.elpais.es 24.09.09

LOUZÁN OCULTA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA CERTIFICADA EN FALSO

El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, está impidiendo la consulta del expediente de la obra "variante de acceso a Lira", certificada en falso con las firmas de su director, Baltasar Pujales, y el ex director de Infraestructuras de la Diputación, Agustín Hernández, actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. El Grupo Socialista de la Diputación solicitó formalmente el expediente a Louzán la semana pasada. Ayer se cumplieron los cinco días que marca la Ley de Régimen Local para que autorizara o denegara el acceso solicitado: Louzán no se pronunció en ningún sentido, pero el expediente siguió inaccesible para los diputados. El presidente de la Diputación lo mantiene bajo su tutela desde que el BNG denunció las presuntas irregularidades.

"Es un elemento más en los intentos del PP de ocultación de ese expediente concreto y, desde luego, alienta las sospechas de que en él hay gato encerrado", afirmó ayer el secretario provincial del PSdeG, Modesto Pose. Los diputados, recordó, tienen derecho de acceso a todos los expedientes y los socialistas consideran ya la opción de acudir a los tribunales si el presidente de la Diputación persiste en negarles la consulta.

Hernández, como director de Infraestructuras de la Diputación, firmó en diciembre pasado el *conforme* en la certificación de la obra de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, "para no perder la subvención" (50%) del Ministerio de Administraciones Públicas, que ya había concedido dos prórrogas, hasta 31 de diciembre de 2008, para acabar la obra. Con esa certificación y la presentación de unos avales, la adjudicataria de la obra, Sercoysa, empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado antes de ocupar su cargo en la Diputación, pudo cobrar 331.000 euros pese a que la obra apenas está iniciada.

Desde el PP se ha insistido en que el procedimiento administrativo fue "correcto" y "habitual" en todas las administraciones para no perder subvenciones. El propio Louzán, para ilustrarlo, señaló dos casos análogos de los ayuntamientos de Cangas y Pontevedra, los cuales, sin embargo, resultan poco afortunados para subrayar la "normalidad" del procedimiento de Salvaterra.

Contradictorio

En Pontevedra, con subvención de la Consellería de Vivenda, el Ayuntamiento adjudicó unas obras en el entorno de Santa María por 2,3 millones de euros y dos días después, en diciembre de 2006, se certificó un acopio de materiales que permitió a la adjudicataria cobrar 801.000 euros. La operación, según fuentes municipales, fue "absolutamente legal" y lo certificado se situó dentro del porcentaje permitido sobre el importe de la obra.

En Cangas, el asunto está judicializado por demanda de todos los concejales del PP, lo que contradice el criterio de "práctica habitual" que el partido aplica al caso de Salvaterra. En Cangas se certificó en diciembre pasado la primera fase (movimiento de tierras y canalización: 30.000 euros) de una pista de *skate* presupuestada en 104.000 euros, con subvención bianual de la Consellería de Cultura. Los concejales del PP no vieron máquinas que hicieran el movimiento de tierras y el 13 de abril la técnica que certificó la obra prestó declaración ante el fiscal. La pista está ya construida del todo.

www.elpais.es 13.05.09

FEIJÓO DEFIENDE COMO "LEGAL" LA CERTIFICACIÓN FALSA DE HERNÁNDEZ

Es su hombre para las infraestructuras. Así que la estrategia consiste en esperar a que escampen los escándalos que salpican -desde antes incluso de ser nombrado- al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández. La defensa que hizo Alberto Núñez Feijóo de su mano derecha para obras públicas, fue ayer menos cerrada que cuando estalló el caso de las supuestas incompatibilidades derivadas de su trasiego desde la Xunta a los cuadros directivos de las empresas con las que había contratado.

El presidente de la Xunta señaló primero al técnico director de obra de la variante de Lira (Salvaterra), cuando se le preguntó por la certificación falsa avalada por Hernández que dio por concluida una obra que la antigua empresa en la que trabajó el conselleiro apenas había comenzado. Luego se escudó en el informe de intervención de la Diputación de Pontevedra. Y al final acabó cargando contra el BNG, autor de la denuncia, por haber certificado "en 48 horas" también infraestructuras sin acabar desde el gobierno local de Pontevedra.

Sin entrar a juzgar si esta práctica es "habitual", como alegó Hernández en su descargo, Feijóo, conselleiro de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga, apeló al servicio de intervención de la Diputación de Pontevedra para calificar como "legal" la tramitación administrativa de esta obra pública. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó.

Desde que tomó posesión, Feijóo va aparcando su rigurosa doctrina de campaña sobre la regeneración democrática. Sus contradicciones resultaron ayer evidentes. En el caso de la carretera de la Diputación de Pontevedra, rebajó la responsabilidad hasta el director de obra de la infraestructura en cuestión. Pero cuando se le preguntó acerca del sobreseimiento de la querella del PP contra la Consellería de Política Territorial anterior, por la adjudicación de la autovía del Barbanza, se alegró "profundamente de que los funcionarios fuesen absueltos" y apeló a las responsabilidades de su superior orgánica, la ex conselleira María José Caride, a quien culpó "del encarecimiento de la autovía".

En su ataque contra Caride, el presidente de la Xunta se valió de otro requiebro dialéctico. Su argumento partió del "máximo respeto a las decisiones judiciales" para concluir que "hay delitos que no se pueden probar". Así justificó la insistencia de las críticas del PP al bipartito, aun después de que el juez que investigó la querella determinase que ésta "no puede estar más huérfana de trascendencia penal".

Como reza el argumentario del PP, el presidente de la Xunta se aferró a dos términos presentes en el auto, que califican como "chocante y sorprendente" la decisión de la Mesa de Contratación de pedir un segundo informe para valorar las ofertas de las empresas que optaban a construir la vía del Barbanza. Sobre esas dos palabras se asienta la ofensiva póstuma del PP contra el bipartito.

(www.elpais.com, 06/05/09)

HERNÁNDEZ CONSIDERA "PRÁCTICA HABITUAL" LOS FALSOS FIN DE OBRA

Para el PSdeG es "indefendible" que el conselleiro siga en la Xunta

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, considera una "práctica habitual" de todas las administraciones públicas la certificación de obras inacabadas "cuando es necesario cumplir el plazo para cobrar una subvención", como habría sucedido, según él, en el caso de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, que la Diputación Provincial de Pontevedra certificó como acabada con su firma y la del director de la obra, cuando apenas se ha iniciado el movimiento de tierras. Pese a ello, Sercoysa, empresa en la que trabajó el conselleiro, cobró de la Diputación 331.629 euros por la obra terminada. Hernández insistió ayer en negar que él hubiera certificado nada y desplazó las responsabilidades al director de la obra, Baltasar Pujales Estévez. El PSdeG considera "indefendible" que siga en la Xunta.

"Es un mecanismo habitual para no perder una subvención", reiteró ayer el conselleiro, tras la ceremonia en la que dio posesión de sus cargos a la nueva directora general de Infraestructuras, Isabel Vila, y del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Antonio José Boné. "Mi recorrido profesional es conocido, no está escondido por ningún tipo de sombras. Trabajé en Sercoysa, pero la obra

fue adjudicada cuando yo ya no estaba en la empresa ni en la Diputación", afirmó el conselleiro.

La obra, según las fechas que figuran en la propia certificación, fue adjudicada el 27 de octubre de 2006 y Sercoysa ha atribuido a "un error" que Hernández figurara en el Registro Mercantil como su apoderado hasta el 4 de enero de 2008. La construcción del vial tenía que estar concluida en 2007, pero la Diputación de Pontevedra solicitó al Ministerio de Administraciones Públicas una prórroga de un año, que le fue concedida. Podía haber solicitado otra prórroga, según expuso el BNG, denunciante del caso, pero en lugar de hacerlo, liquidó el contrato con Sercoysa falseando el fin de obra. "Yo no firmaba certificaciones, sino el *conforme* para que pudiera seguir el procedimiento administrativo", precisó.

La certificación de que la obra había sido realizada es una competencia del director de la misma, Baltasar Pujales, quien lo hizo, según Hernández, tras solicitar a la contratista Sercoysa la garantía de un aval por la cantidad que iba a recibir aunque el proyecto no estuviera ejecutado. Agustín Hernández no pudo precisar si en la fecha en que firmó la certificación de la obra como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, 19 de diciembre de 2008, ya obraba en la Diputación el aval de Sercoysa. "Entiendo que es así, pero esa verificación le correspondía al director de la obra", señaló.

El conselleiro tampoco aportó más luz sobre los motivos que determinaron a certificar la obra y pagarla en lugar de solicitar una segunda prórroga al Ministerio de Administraciones Públicas, que subvencionaba el 50% de la misma. "Yo entendí que estábamos en un último período y que concluían los plazos. Habrá que preguntar al director de obra si había posibilidad de solicitar otra prórroga y, si la había, por qué no se hizo", adujo Hernández.

La obra se fue retrasando, según expuso el conselleiro, porque faltaba un permiso de la Confederación Hidrográfica para continuarla. Adjudicada en 2006, la certificación señala que fue ejecutada entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008 por valor de los citados 331.629 euros, que se suman a otros 60.235 de "obra ejecutada anteriormente" y sin que quede nada de "obra pendiente de ejecutar".

"Este tipo de certificaciones de obras es una práctica habitual, no es ni anómala ni irregular, sino un mecanismo que suele hacerse a finales de año para cumplir anualidades y conseguir que una subvención no se pierda", resumió el conselleiro, que invitó a socialistas y nacionalistas a ir a los tribunales "si piensan que hubo ilegalidad".

Por un caso análogo, certificar en falso la construcción de un camping que había recibido subvención de fondos europeos, están procesados los alcaldes de O Covelo y A Cañiza, José Costa y César Mera, respectivamente, para quienes la Fiscalía de Pontevedra pide cuatro años de prisión por los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Ambos regidores alegaron, igual que ahora el conselleiro, que habían firmado las certificaciones para poder cobrar las ayudas europeas.

Tanto BNG como PSdeG han blandido la posibilidad de llevar a los tribunales el caso de la variante de Lira, aunque por el momento optan por agotar la vía política, singularmente en el seno de una comisión parlamentaria de investigación, para esclarecer las presuntas incompatibilidades en que Hernández pudo incurrir al trabajar en la Administración y posteriormente en empresas a las que adjudicó obras como cargo público.

El portavoz del área institucional del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, consideró ayer "indefendible" que Hernández siga en su puesto. La variante de Lira, dijo, "prueba" su manera de concebir la gestión y "choca frontalmente con los anuncios" de Alberto Núñez Feijóo en su discurso de investidura. Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, admitió "el valor" del conselleiro al hacer ayer "un reconocimiento expreso de su culpabilidad".

www.elpais.es 03.05.09

LA OPOSICIÓN PIDE AL CONSELLEIRO QUE "SE MARCHE" POR CERTIFICAR UNA OBRA INACABADA

Las actuaciones políticas y empresariales del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que certificó una obra inacabada a favor de la empresa Sercoysa en la que trabajó, podría meter al recién estrenado Gobierno de Núñez Feijóo en su primer problema judicial. El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, reclamó ayer responsabilidades políticas al conselleiro. "Si es cierto lo último que se ha publicado [que como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra firmó una certificación falsa a la empresa de la que fue director de construcción y apoderado] se trata, por lo menos, de falsificación; estamos ante un elemento decisivo para que este señor tenga que marcharse", sentenció.

El PSdeG está dispuesto a agotar la vía administrativa y política en la reclamación de responsabilidades al conselleiro, pero advierte que si éste no las asume, recurrirá, como estudia el BNG, a la vía judicial. "Estamos hablando de algo muy serio: el responsable de medio Gobierno gallego tiene un currículum que hace palidecer a cualquiera, así que llevaremos este asunto a las últimas consecuencias", destacó.

"Es difícil acumular en tan poco tiempo tantos problemas", señala Vázquez en alusión a la nueva Xunta. "A lo de Hernández hay que añadir el dato, que contrastaremos rápidamente, de que el también conselleiro Alfonso Rueda ha estado desempeñando el cargo de asesor político del presidente de la Diputación de Pontevedra". El organismo provincial controlado por el PP defiende que fue "correcto" que Agustín Hernández certificara el final de una obra que no se llegó a ejecutar. Aunque Vázquez se muestra dispuesto a "dar un tiempo prudencial para que esto se aclare", destaca ya que el de Feijóo es "un Gobierno débil y que genera gran desconfianza a los gallegos". Los socialistas no tienen ya dudas de que en el PP de Feijóo "todo empieza y acaba en Hernández". Vázquez destaca que fue el conselleiro quien firmó, como técnico independiente, aunque a sueldo de la Diputación de Pontevedra, la querrela del PP, archivada ahora por el juez, contra la adjudicación por el bipartito de la autovía del Barbanza. "Él es quien está detrás de la campaña de infamias, acusaciones y calumnias" contra el ex presidente Touriño y la ex conselleira María José Caride.

Respecto a la actuación del conselleiro de Medio Ambiente en relación con la variante de Lira en Pontearreas, fuentes de la Diputación Provincial de Pontevedra precisaron ayer que la certificación del final de los trabajos que firmaron Agustín Hernández Fernández de Rojas como director de Infraestructuras y Baltasar Pujales Estévez como director de la obra responde a un "procedimiento administrativo correcto", pese a que el vial al que se refiere tal certificación -una variante de acceso a la parroquia de Lira, en Salvaterra de Miño- apenas está empezada. Sercoysa, según estas fuentes, habría depositado un aval bancario por el mismo importe que cobró el pasado mes de marzo a la Diputación, 331.629 euros, de manera que si finalmente no realiza la obra, la Diputación podría ejecutar el aval y recuperar las fondos ya librados.

Esta práctica es "habitual en otras administraciones", según las mismas fuentes, que aseguran que el citado aval está incorporado al expediente de la obra, contra lo que afirma Gabriel Martínez, diputado del BNG, que no halló rastro del aval en su consulta del expediente.

Tras conocer el caso de la certificación falsa firmada por el conselleiro de Medio Ambiente hace apenas un mes, los socialistas gallegos aprovecharon ayer para alertar contra las "continuas mentiras" del nuevo Gobierno gallego y su pretendido ahorro de 15 millones de euros en la legislatura por la supresión de los delegados provinciales. "Feijóo coloca comisarios políticos para hacer contrapoder y control social como en otras épocas, algo que no pensamos consentirle y, además, mantiene el mismo gasto de delegados, ya que cada delegación provincial tendrá personas con rango de subdirector general, nivel 30 y los mismos coches oficiales: no se ahorra un solo duro".

El recién elegido secretario general de los socialistas gallegos sostiene, además, que "donde quitaron consellerías pusieron directores generales, que cobran apenas 500 euros menos y tienen las mismas prerrogativas de gabinetes y coches oficiales". "Todo es una gran mentira", afirma Vázquez, que arremete además contra "la demagogia electoral" de Feijóo respecto a la política lingüística. "Ahora Feijóo es presidente y tiene que cuadrar en el mismo círculo la legalidad y la demagogia y eso no le cabe en el mismo saco", apostilla.

Certificación ordinaria que falsea el fin de obra

La variante de acceso a la parroquia de Lira, en Salvaterra de Miño, adjudicada a Sercoysa en 2006, cuando Agustín Hernández figuraba como su apoderado y dos meses antes de que se incorporara a la Diputación de Pontevedra, se habría construido entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008, según certifica el director de la obra, Baltasar Pujales Estévez con el *conforme* de Hernández. "El importe de las obras ejecutadas" entre esas fechas, "de acuerdo con el proyecto y el contrato formalizado", asciende a 331.629 euros, que es la cantidad que se certifica para su abono a Sercoysa.

No obstante, en la misma certificación el comienzo de la obra se data el 30 de septiembre de 2008 y la finalización el 30 de diciembre. Las obras teóricamente ejecutadas antes del 1 de diciembre se valoran en 60.235 euros, una cantidad que completa el total del presupuesto de adjudicación (391.864 euros) pero que no consta como pagada. Únicamente aparece el pago de los 331.629 euros financiados por el Ministerio de Administraciones Públicas y la propia Diputación, al 50%. La misma certificación asegura que no hay obra pendiente de ejecutar, pese a la clamorosa evidencia de que apenas hay obra ejecutada.

www.elpais.es 02.05.09

HERNÁNDEZ FIRMÓ UNA CERTIFICACIÓN FALSA A FAVOR DE SU ANTIGUA EMPRESA

El conselleiro dio por concluidas unas obras que apenas si han comenzado

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, certificó como responsable de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra el final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra de Miño, que apenas si ha comenzado a construirse. No obstante, la Diputación de Pontevedra pagó el pasado 17 de marzo 331.629 euros a Sercoysa, adjudicataria de la obra y empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado. El diputado provincial del BNG, Gabriel Martínez, lo presentó ayer como un caso de "grave falsedad" en documento público que implica, además de al conselleiro, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y al alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, como los anteriores, del PP. La dirección del BNG se plantea presentar denuncia en el juzgado

La obra, con la denominación oficial *E.P. 4102 Variante de acceso a Lira (Salvaterra de Miño)*, fue solicitada por el Ayuntamiento de Salvaterra e incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2006, con financiación del Estado. Fue licitada por 458.000 euros y adjudicada a Sercoysa por 391.864 euros. El plazo para concluirla acabó en diciembre de 2007, pero la Diputación solicitó una prórroga de un año que le fue concedida.

Un año después, la obra seguía paralizada: tan sólo se han ejecutado unos desmontes y allanamiento de tierras. Pese a ello, desde la Diputación Provincial, con el visto bueno de su presidente, Rafael Louzán; de Agustín Hernández, en tanto que jefe de Infraestructuras del organismo provincial, y de Baltasar Pujales Estévez como director de la obra, el 19 de diciembre de 2008 se certificó el final de la obra "para engañar al Estado y pagar a la empresa Sercoysa", apuntó ayer Gabriel Martínez.

Consecuentemente con esa certificación, la Diputación Provincial pagó el pasado 17 de marzo 331.629,24 euros a Sercoysa.

Fuentes próximas al conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras precisaron ayer a este periódico, en relación con el asunto, que a Hernández, en su condición de director de Infraestructuras de la Diputación, no le correspondía "certificar" el final de ninguna obra -competencia del director, Baltasar Pujales-, sino que "meramente daba el *conforme* como un trámite de control administrativo".

La obra no pudo hacerse antes, desde que fue aprobada en 2006, porque estaba pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Noroeste, según las mismas fuentes, que también señalaron que "hubo que certificar" el final de la obra porque se acababa el plazo y se perdía la financiación del Estado comprometida.

Los diputados Henrique Viéitez, autonómico, y Olaia Fernández Davila, en el Congreso, que acompañaron ayer a Gabriel Martínez, señalaron, sin embargo, que la Diputación Provincial pudo solicitar una segunda prórroga para ejecutar la construcción de la variante, antes que certificar en falso su conclusión.

Este asunto, según Viéitez, refuerza la necesidad de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las actividades del conselleiro Hernández en la Administración y en las empresas que le dieron empleo. Olaia Fernández también interpelará al Gobierno sobre este tema. La posibilidad de llevarlo al juzgado, por los presuntos delitos que implica, será una decisión del BNG como organización, según indicaron.

www.elpais.es 01.05.09

EL CONSELLEIRO FUE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y APODERADO DE LA EMPRESA BENEFICIADA

Agustín Hernández fue director general de Obras Públicas de la Xunta entre 1998 y 2005, primero a las órdenes del fallecido Xosé Cuiña, y durante los dos últimos años, bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo. Unas semanas después de abandonar la Xunta -cuando el PP perdió el poder- en octubre de 2005, Hernández se colocó como director de construcción de Sercoysa, a la que había adjudicado obras desde la Xunta por 1,2 millones de euros.

En septiembre de 2006, ficha como consejero por Prethor, SL, filial de Puentes y Calzadas, a la que también otorgó contratos millonarios en la Xunta. Ya con Hernández en el consejo directivo, Prethor vende los prefabricados para dos autovías cuya concesión había fallado su departamento. En esa sociedad continuó hasta enero de 2008, cuando se incorporó como director de Infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. El 15 de enero fue presentado por Rafael Louzán, como "el hombre que potenciará la humanización de las carreteras". Seis meses más tarde, la Diputación adjudica a la unión temporal de empresas Sercoysa-Traima la construcción de un puente sobre el Lérez, con un presupuesto de 6,7 millones de euros. Hernández avaló públicamente la solución constructiva que Sercoysa había diseñado cuando aún figuraba como apoderado de la empresa. El tránsito de la empresa a las instituciones motivó que el bipartito le abriera un expediente por supuestas incompatibilidades. Hernández encargó un informe a un abogado que le exime de cualquier responsabilidad.

www.elpais.es 01.05.09

EL INFORME QUE PIDIÓ HERNÁNDEZ ALEGA QUE ADJUDICÓ POR DELEGACIÓN DE FEIJÓO

El documento considera prescrita cualquier incompatibilidad en Sercoysa

Frente al expediente abierto por la Consellería de Presidencia durante el mandato del bipartito, un informe encargado por el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sostiene que no incurrió en incompatibilidades. Pero si lo hubiese hecho, interpreta que cualquier incompatibilidad cometida con anterioridad al día 16 de abril de 2006 está ya prescrita. En contra de lo sostenido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el informe reconoce que Hernández "adjudicó" obras, entre ellas las correspondientes a Autoestradas de Galicia a empresas para las que después trabajó. Pero en ese caso, el ex director general de Obras Públicas actuaba "por delegación del conselleiro, y nunca como competencia propia". Por lo tanto, la responsabilidad de las resoluciones adoptadas legalmente "debe atribuirse" al conselleiro, que entonces era el propio Feijóo.

- **La responsabilidad de la adjudicación "debe atribuirse al conselleiro"**
- **La Xunta paraliza el enlace de Curro promovido por el Gobierno bipartito**

Agustín Hernández fue director general en la Consellería de Política Territorial entre septiembre de 1998 y agosto de 2005. Con posterioridad fue contratado como director de construcción en Sercoysa y como

consejero de Puentes y Calzadas, dos empresas que se beneficiaron de contratos adjudicados por su Dirección Xeral, lo que, según el expediente abierto, puede vulnerar la ley de incompatibilidades de Galicia. Respecto a la primera empresa, el informe encargado por el hombre fuerte del Gobierno de Feijóo sostiene que el plazo de prescripción de las infracciones ya ha sido superado, al considerar que es de tres años desde el día en que se hubieran cometido.

El estudio, elaborado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Miguez Macho, advierte que las competencias de Hernández en relación con las empresas para las que trabajó "se limitaban a gestión y tramitación" y no incluían la adjudicación, que correspondía al conselleiro. Con la excepción de Autoestradas de Galicia, donde el director general "sí actuaba como órgano de contratación".

La relación de Hernández con la Autovía del Salnés, cuya construcción y explotación fue adjudicada precisamente por Autoestradas de Galicia, es doble. En el capital de la adjudicataria participa Puentes y Calzadas. Entre julio de 2006 y febrero de 2007, además, Hernández ocupó en representación de esta empresa un puesto de vocal en el consejo de Inversiones Prethor, que obtuvo a su vez un contrato de suministro de vigas de hormigón para la Autovía del Salnés por parte de la unión temporal de empresas Puentes y Copasa. El contratista en este caso no era una Administración pública, sino una entidad privada, resalta Miguez. Agustín Hernández, en cualquier caso, "había presidido, en su calidad de director general de Obras Públicas, la mesa de contratación que intervino en el procedimiento de adjudicación de la mencionada concesión", admite el informe.

Por lo demás, indica que "no consta que el interesado haya realizado después de su cese actividades privadas relacionadas con expedientes" de los que entraban en sus competencias. Y añade que "tampoco cabrá exigir la incompatibilidad con el mismo rigor en los casos en que el cese se haya debido a un cambio político", ya que ello "reducirá o eliminará las posibilidades de utilizar conocimientos o influencias indebidas para obtener un beneficio privado". Agustín Hernández "no presentó ninguna oferta ni firmó contrato alguno en nombre de las empresas para las que trabajó después de su cese", sostiene Luis Miguez.

Agustín Hernández, que fue una de las voces más críticas contra los acuerdos adoptados por Política Territorial en funciones, tomó ayer una decisión que afecta a uno de esos trámites: el que iniciaba las expropiaciones de terrenos para la construcción del enlace de Curro Grande, en la nueva autovía que conectará Pontevedra y Vilagarcía. La nueva Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras anunció la paralización del proceso, para llevar a cabo un "reestudio del diseño" del enlace, y analizar una "minimización del impacto" del actual trazado sobre los polígonos industriales proyectados en el entorno. El enlace, en el que confluyen tres autovías, fue muy criticado por el PP en la oposición.

www.elpais.es 25-04-09

DEFENSA CERRADA DEL PP DE SU DIPUTADO HERNÁNDEZ

Mucho más que un mensaje de apoyo a un compañero en dificultades. El PP hizo ayer una defensa cerrada de su diputado Agustín Hernández. Y arruinó en el trámite toda la doctrina de campaña sobre la regeneración democrática. Anxo Quintana debía dimitir por ser fotografiado en un yate con un constructor que años después recibió megavatios eólicos. Así lo reclamó insistentemente el PP hace mes y medio.

Que su principal candidato a la cartera de Obras Públicas entre y salga del equipo directivo en las constructoras a las que adjudicó contratos millonarios primero en la Xunta y luego en la Diputación de Pontevedra, es ahora, según su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz, una muestra de "ética, integridad y honradez". Y quienes lo critican practican la "insidia y la ofensa" a Hernández "y a Galicia".

Socialistas y nacionalistas preguntaron a Feijóo sobre la doctrina Carrera -el candidato del PP despedido antes de las elecciones por evasión fiscal- y demandaron su aplicación también fuera de campaña. Tres minutos tardó el portavoz parlamentario del BNG en mentar el polémico periplo profesional de Agustín Hernández. Opta, todavía con mucha fuerza, a la Consellería de Obras Públicas, pero Aymerich reclamó su cese como parlamentario. "Oblíguelo a abandonar el escaño que indignamente ocupa en el Parlamento", reclamó. "Hágalo si de verdad quiere que creamos en sus promesas de regeneración democrática".

"Mal comenzamos", insistió luego el socialista Leiceaga, " si empleamos unos principios para la campaña y otra para el Gobierno". "Convénzanos de que su partido practica y no sólo predica la máxima de Gracián de no hacer negocio del no negocio". No hubo respuesta. Feijóo ni citó el tema. Puso la encendida defensa de su hombre de confianza en manos del portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, que se empleó a fondo, y advirtió de que criticar a Hernández es injuriarle a él y también a Galicia.

Entretanto, la Consellería de Presidencia, que abrió un expediente al diputado por vulnerar, supuestamente, la ley de incompatibilidades, envió ayer la comunicación al grupo parlamentario popular.

(www.elpais.com, 17/04/09)

CARIDE TACHA A HERNÁNDEZ DE "COLMO DE LA INMORALIDAD"

María José Caride, conselleira de Política Territorial en funciones, tachó ayer de "colmo de la inmoralidad" que el diputado del PP Agustín Hernández redactase el informe que sirvió de base a la querella presentada en contra de la adjudicación de la autovía del Barbanza cuando ya cobraba de la Diputación de Pontevedra, controladas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. "El PP lo premió en la Diputación, no sé si sigue con la estrategia de premios varios", argumentó en referencia a la posibilidad de que se convierta en conselleiro en la nueva Xunta.

Es una prueba más de su "falta de ética", subrayó la conselleira, en alusión a la violación de la ley de incompatibilidades que supuestamente habría cometido Hernández al haber aceptado un empleo en una empresa que previamente se había beneficiado de adjudicaciones decididas por la Xunta en la época en que él era responsable de obras públicas. El informe incorporado a aquella querella, subrayó, era además "falso y falto de rigor".

La conselleira aseguró que, al margen de lo que dice la ley y que está siendo sometido a un expediente informativo, es "políticamente cuestionable" que Hernández haya aceptado un empleo en una empresa beneficiaria de contratos de la Xunta habiendo formado parte de las mesas de contratación que decidían las adjudicaciones. Casos como éste, precisó, son los que hacen que los ciudadanos "duden de la honorabilidad de los políticos". "Todo indica" que incurrió en una incompatibilidad susceptible de dar lugar a una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por lo que el PP debería "tomar medidas".

"Primera prueba"

En la misma línea se refirió la secretaria de Organización del PSdeG, Mar Barcón, quien pidió a Feijóo que exija esponsabilidades políticas a Hernández. Según Barcón, esta actuación es "cuestionable desde todos los puntos de vista de la ética y de las buenas prácticas políticas", por lo que concluyó que "el destino ha puesto a Feijóo su primera prueba". "Veremos si lo que se llamaba a sí mismo, defensor de la transparencia y garante de la ética, respondía a sus principios políticos o era sólo palabrería".

Desde su partido, fue el portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, compañero de grupo de Hernández, quien salió a echarle una mano. Ruiz Rivas atribuyó en la Cadena SER a una "campaña de insidias" las acusaciones del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y de los cargos socialistas contra el diputado del PP.

www.elpais.es 14.04.09

HERNÁNDEZ FIRMÓ DESDE LA DIPUTACIÓN UN INFORME TÉCNICO PARA UNA QUERELLA DEL PP

En su periplo profesional desde la Xunta a los consejos directivos de las empresas que habían recibido obras de su consellería el diputado del PP Agustín Hernández no se olvidó del partido. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes y candidato a ocupar la cartera de Obras Públicas en la futura Xunta prestó importantes servicios a la formación conservadora durante la anterior legislatura.

Corría enero de 2008. Hernández acababa de abandonar sus cargos en las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzadas para incorporarse como director de infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. Su presidente, Rafael Louzán, lo presentó en rueda de prensa el 15 de enero. Sólo dos semanas más

tarde, el 29, Hernández firmó el informe técnico sobre el que el PP basó toda la argumentación jurídica para presentar una querrela criminal contra la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de la autovía del Barbanza.

En su denuncia el PP censuraba el cambio de criterio de la Xunta para "beneficiar" en la concesión de la obra a una constructora del grupo Sacyr en detrimento de San José. En la querrela, los populares acusaban de "prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar las cosas y negociaciones prohibidas" a dos altos cargos y a dos funcionarios de la Xunta, todos del departamento que presidía María José Caride. El juez decano de Santiago, Francisco José Míguez Poza, pronto admitió a trámite la querrela e hizo declarar a los cuatro trabajadores de la administración bipartita en la semana previa a las elecciones generales de marzo. Desde hace más de un año, el juez mantiene imputados a los cuatro cargos desoyendo las peticiones del ministerio fiscal, que ya ha solicitado el archivo del caso.

El dictamen que Hernández firmó cuando ya estaba a sueldo de la Diputación de Pontevedra concluye que la decisión de la Consellería de Política Territorial encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" el coste que, bajo la fórmula de peaje en la sombra, la Xunta deberá abonar a la adjudicataria durante el plazo de la concesión. El razonamiento y la imputación todavía no rectificadas por el juez de los cuatro trabajadores de Política Territorial sirvió al PP para lanzar una dura campaña contra Caride y Touriño, a quienes acusaron de urdir prácticas corruptas. Con su número de colegiado, 9.154, encabezó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agustín Hernández en enero de 2008 el informe técnico que avaló la querrela criminal del Partido Popular contra la Xunta. Su dictamen es una prolija explicación de la tramitación administrativa que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, siguió, al llegar al cargo, para adjudicar la autovía del Barbanza a la constructora Itínere, del grupo Sacyr.

En seis páginas, Hernández concluye que el bipartito no respetó las condiciones de la licitación y que, como consecuencia, su decisión de encargar la obra a Sacyr -en perjuicio del Grupo San José- la infraestructura se encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" hasta 2038. Todo esto lo argumentó Hernández en su condición de ingeniero de Caminos. Lo que no detalló en el dictamen que su partido envió al juez fue su determinante participación en los inicios del expediente. Ni su cargo en el momento de emitir su diagnóstico, al frente de la dirección de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el PP.

El escrito sí subraya, por ejemplo, que la Administración [anterior, del Partido Popular] especificaba que los "licitantes no podrían introducir modificaciones en el proyecto". Pero Hernández evita mencionar en el capítulo dedicado a los "antecedentes" del concurso que todo eso lo sabe porque él mismo había redactado el anteproyecto de la obra y presidido después la primera mesa de contratación como director general de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Fraga. "Para el técnico que suscribe", continúa la explicación de Hernández, "la ejecución de la obra en condiciones diferentes a las establecidas en la licitación supone un grave perjuicio al ciudadano y un notable beneficio al adjudicatario". Esa conclusión es la que el PP quería escuchar en el juzgado y lo que le llevó a pedir en la querrela la citación como testigo del propio Hernández. El caso sigue en manos del juez decano de Santiago que desde hace meses desoye los requerimientos del fiscal para decretar el archivo.

A raíz de la denuncia, dos subordinados de Hernández durante su época como alto cargo en la Xunta permanecen todavía imputados. Ayer, como durante toda la semana pasada, este diario intentó sin éxito contactar con el parlamentario para conocer su versión. El diputado prefirió explicarse a través de un comunicado del PP. Anunció que encargará un informe a un "abogado independiente" para demostrar que cumplió la Lei de Incompatibilidades de 1996, cuando dio el salto desde la Xunta al equipo directivo de dos constructoras a las que su consellería había adjudicado infraestructuras por más de 30 millones de euros. Las conclusiones de su letrado se comprometió a enviarlas a la Consellería de Presidencia, que es la que "en teoría abrió la investigación". La nota la facilitó el PP con el objetivo de "responder a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación".

Las explicaciones no convencieron al presidente de la gestora del PSdeG. En una entrevista en la Cadena SER, Ricardo Varela apeló directamente al futuro presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le pidió que exija la renuncia de Hernández al escaño. El dirigente socialista pronosticó que, si no lo hace, entonces será Feijóo el que acudirá "bajo sospecha" al debate de investidura.

(www.elpais.com, 13/04/09)

HERNÁNDEZ AVALÓ UNA ADJUDICACIÓN DE 5,7 MILLONES A SU ANTIGUA EMPRESA

El parlamentario fue apoderado de la firma hasta la víspera de fichar por la Diputación

El extenso currículum del aspirante a conselleiro de Obras Públicas y representante de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes, Agustín Hernández, ha mezclado durante cuatro años la gestión de lo público y su actividad privada en el sector de la construcción. Hernández, ingeniero y funcionario de carrera de la Administración autonómica, abandonó en agosto de 2005 -cuando el PP perdió el poder- la Dirección Xeral de Obras Públicas y también la Xunta para fichar por dos constructoras a las que su departamento había otorgado contratos millonarios. Y dos años más tarde, en junio de 2008, de regreso en una institución, como director de infraestructuras en la Diputación de Pontevedra (también controlada por el PP), avaló la adjudicación de un puente por 5,7 millones de euros a la constructora Sercoysa, en la que figuró como apoderado hasta la misma víspera de incorporarse para desempeñar el alto cargo en el organismo que preside Rafael Louzán.

Las fechas que figuran en el Registro Mercantil son elocuentes. Agustín Hernández Fernández de Rojas cesó como apoderado de la sociedad Sercoysa, Proyectos y Obras SA, el 14 de enero de 2008. Al día siguiente, Louzán y Xosé Crespo, presidente y vicepresidente de la Diputación, lo presentaron en rueda de prensa como el hombre "que potenciará la humanización de la red de carreteras". No fue el único anuncio trascendente que salió de la institución provincial aquella mañana de enero. También se supo que tres empresas optarían finalmente a diseñar y ejecutar un puente sobre el río Lérez para mejorar el acceso oeste a Pontevedra por Montecelo. Entre las finalistas para diseñar y construir el viaducto estaba, junto a las firmas Atesvi y Taboada y Ramos, una unión temporal de empresas integrada por Sercoysa y Traima SL.

Apenas cinco meses más tarde, el 4 de junio de 2008, el Gobierno de la Diputación de Pontevedra emitió su veredicto: Sercoysa y Traima levantarían el sexto puente sobre el Lérez a cambio de 5,7 millones de euros. Aunque el fallo correspondió a la Junta de Gobierno, fue el propio Hernández quien acreditó ante la prensa las características técnicas del proyecto ganador. El director de infraestructuras avaló "la solución constructiva" que Sercoysa había diseñado durante la etapa en que Hernández figuraba como apoderado de la firma. Defendió su "menor agresividad" con el medio ambiente, puesto que el diseño de Sercoysa evitaba "los rellenos en el cauce del Lérez gracias a un viaducto de 110 metros de luz que salva el ancho del río" y coloca los pilares en la orilla. Hernández, que dos años antes había ejercido como director de Construcción de Sercoysa, también subrayó la "técnica de ingeniería elegida" que, a su juicio, permitiría concluir la infraestructura en sólo doce meses.

Fuentes de la empresa aseguraron ayer a este diario que Hernández dejó de trabajar para Sercoysa en 2006, cuando se incorporó al grupo Puentes y Calzadas. "No tiene lógica que esté al mismo tiempo en dos empresas que son competencia", subrayan estas fuentes. Sercoysa atribuye su demora -de más de un año- en dar de baja a Hernández en el Registro Mercantil como apoderado de la sociedad, a "un error", puesto que nadie en la empresa se acordó hasta entonces de realizar la comunicación al registro.

En dos firmas a la vez

En lugar de truncarse con la llegada del bipartito y su salida de la Xunta, la trayectoria profesional de Agustín Hernández siguió creciendo desde 2005 en la empresa privada. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con buen nombre en el sector, evitó regresar a su plaza de funcionario en la Administración autonómica y optó por hacer carrera en las constructoras a las que su departamento había adjudicado contratos millonarios. En octubre de ese mismo año Sercoysa ya lo nombra director de construcción. En septiembre de 2006 otra concesionaria de obra pública, Puentes y Calzadas, lo ficha como consejero de su filial de prefabricados, Prethor SL. Sorprendentemente, Hernández compatibiliza su labor en este grupo constructor con el cargo de apoderado en Sercoysa, en el que no cesa hasta el 14 de enero de 2008, la víspera de incorporarse a la Diputación de Pontevedra como director de infraestructuras.

Según figura en el Registro Mercantil, Hernández deja de ser consejero de Prethor el 28 de marzo de 2008. Desde entonces, no consta en el citado Registro que haya participado en ninguna otra empresa privada.

www.elpais.es 12.04.09

EL DIPUTADO TRABAJÓ DESDE OTRA EMPRESA EN OBRAS ADJUDICADAS POR SU CONSELLERÍA

Lo anuncia la propia empresa, Prethor SL, en su página web. El currículum de la firma "especializada en prefabricados para obra civil y edificación" -en la que Agustín Hernández fue consejero hasta marzo de 2008- cita las vigas que construyó para dos autovías, Santiago-Brión y el desdoblamiento de la vía del Salnés, adjudicadas por la Consellería de Política Territorial cuando Hernández era director xeral de Obras Públicas. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández entró como consejero en Prethor, la filial de Puentes y Calzadas, el mismo día en que se creó, el 12 de septiembre de 2006. Desempeñó el cargo hasta el 28 de marzo de 2008, fecha en que se incorporó como alto cargo a la Diputación de Pontevedra, de la mano de su presidente, Rafael Louzán.

Durante la estancia de Hernández en Prethor SL, la firma suministró los prefabricados a las concesionarias de la vía del Salnés y de la autovía Santiago-Brión, dos adjudicaciones que el Gobierno de Fraga dejó cerradas antes de perder el poder, cuando Hernández presidía la Dirección Xeral de Obras Públicas en la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo. Según ha comprobado este periódico, en las obras de desdoblamiento de la vía del Salnés -acometidas por una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Copasa, Puentes y Calzadas y Caixanova- Prethor vendió las vigas para los puentes en los enlaces de la vía con las localidades de Mosteiro, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y también con la AP-9.

Prohibición de dos años

Desde que la Consellería de Presidencia decidió abrir un expediente a Hernández la pasada semana por considerar que su actividad privada vulneró la ley de incompatibilidades para los altos cargos de la Xunta, Hernández siempre ha negado que tuviese alguna relación desde las empresas con los expedientes que había tramitado en el Gobierno. Esa era precisamente la limitación que la ley de 1996 establecía para los representantes del Ejecutivo y que regía hasta que en 2008, el bipartito aprobó un decreto más restrictivo. La norma vigente en el caso de Hernández no impedía su marcha desde la Administración a sociedades con intereses en el mismo sector. El texto legal sí prohíbe a conselleiros y directores generales, entre otros altos cargos de la Administración autonómica, "realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo durante los dos años siguientes a la fecha de su cese". Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de Hernández.

www.elpais.es 12.04.09

EL SELLO DE LA EMPRESA DE HERNÁNDEZ, EN LA AUTOVÍA DEL SALNÉS



En su etapa como director general de Obras Públicas, Agustín Hernández adjudicó el desdoblamiento de la autovía del Salnés, cuando el Ejecutivo de Fraga estaba en funciones, en junio de 2005. Año y medio después, la sociedad Prethor SL, de la que Hernández era consejero, vendió a la concesionaria las vigas, como se observa en la imagen

www.elpais.es 12.04.09

AGUSTÍN HERNÁNDEZ TRABAJÓ PARA OTRA FIRMA TRAS DARLE UNA OBRA EN FUNCIONES

Feijóo justifica el comportamiento de su ex alto cargo y aspirante a conselleiro

El diputado del PP Agustín Hernández, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, a quien representa en el traspaso de poderes y favorito para dirigir infraestructuras y medio ambiente en la futura Xunta, fue contratado al abandonar el Gobierno gallego por dos empresas que habían recibido adjudicaciones millonarias de su departamento, la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga. Antes de fichar, en septiembre de 2006, como consejero de Puentes y Calzadas - concesionaria del 30% de la autovía del Salnés, en virtud del contrato adjudicado por Obras Públicas en junio de 2005-, Hernández desempeñó durante diez meses el cargo de director de construcción en Sercoysa, un grupo al que Política Territorial también había otorgado entre 2003 y 2005 obras por un importe superior a 1,5 millones de euros.

El último de los encargos lo obtuvo esta constructora pontevedresa en un concurso público que la Consellería de Política Territorial -que presidía Feijóo y en la que Hernández ejercía de *número tres*- falló semanas después de las elecciones autonómicas, cuando el PP ya había perdido el Gobierno. El 29 de julio de 2005, el Ejecutivo en funciones de Manuel Fraga adjudicó a Sercoysa la urbanización de una carretera entre Darbo y Aldán en el municipio de Cangas por 530.112 euros. El contrato fue hecho público la víspera de la toma de posesión del bipartito. Un par de meses antes, en junio, el departamento de Hernández había encargado también a Sercoysa la urbanización de una vía alternativa en Ponte da Barca, en Pontevedra, por 106.514 euros. En los dos ejercicios anteriores, los de 2003 y 2004, Obras

Públicas había reservado partidas para la misma firma por más de 1,2 millones de euros en dos infraestructuras distintas.

Tras perder el poder y abandonar la Xunta, en agosto de 2005, el ex alto cargo de Política Territorial tardó apenas dos meses en dar el salto al sector privado. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández se convirtió en director de construcción y apoderado de Sercoysa el 14 de octubre de 2005. La legislación autonómica no impedía entonces que los altos cargos del Gobierno gallego se incorporasen a empresas con las que trabajaron desde la Administración, una incompatibilidad que sí figuraba en la normativa estatal y que el bipartito estableció a través de un decreto sin efectos retroactivos en 2008.

Al ser consultado por EL PAÍS, Hernández, que estos días ha atacado al Gobierno de Touriño por adjudicar obras estando en funciones, defendió su trayectoria amparándose en la ausencia de un marco legal que limitase las actividades privadas de los altos cargos. Su superior en la Xunta hace cuatro años y próximo presidente, Alberto Núñez Feijóo, avaló ayer ese argumento. "Lo importante es que se cumpla la ley, eso es lo fundamental", dijo a los periodistas.

El futuro jefe del Ejecutivo defendió como "bueno" que "haya profesionales reconocidos que trabajen en el sector público y después en el privado". "Lo que me preocuparía es que no diesen el perfil", sentenció. Feijóo evitó aludir al papel de Hernández en el gabinete que está configurando, pero insistió en que los miembros de su Gobierno "cumplirán la ley". El presidente electo rebajó así uno de sus principales compromisos de campaña, el de "formar un Gobierno irreprochable también desde el punto de vista ético", repetido hasta la saciedad en sus mítines, y dejó claro que los límites para el comportamiento de sus conselleiros los fijará la ley.

La responsable de Organización de los socialistas, Mar Barcón, fue menos comprensiva con las actividades de Hernández, a quien exigió la devolución del acta de diputado. Barcón aseguró que "la legalidad varía en función del legislador" y apeló a "la forma de estar en política". La dirigente socialista atacó a Hernández "por su falta de ética, política y personal".

El PSOE lleva al fiscal el 'carrexo' de Baltar

La secretaria de Organización del PSdeG, Mar Barcón, anunció ayer que pedirá a la Fiscalía que investigue si el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, cometió un delito al persuadir a una pareja a "cambiar el voto" el pasado 1 de marzo, día de las elecciones. Barcón instó a Núñez Feijóo a "aclarar si respalda este modo de entender la política". En una entrevista en *Xornal de Galicia*, Baltar admite que pidió a una pareja que le causó "dudas" si le daba su sobre y, una vez que aceptó, le cambió las papeletas "por unas del PP". "Luego comprobé que le iban a votar al PSOE", relató.

Un antiguo peón de Cuiña

Ahora asesor del círculo más próximo al presidente electo, Alberto Núñez Feijóo, hubo un tiempo en que Agustín Hernández Fernández de Rojas intimó con el llamado sector de la boina. De hecho, fue el todopoderoso conselleiro de Obras Públicas y delfín de Fraga, el fallecido Xosé Cuiña, quien le abrió las puertas de la Administración hace una década. El 24 de septiembre de 1998 este ingeniero de caminos, canales y puertos, con buena reputación en el sector, sustituyó a Emilio García Gallego, uno de los peones del cuiñismo, al frente de la Dirección Xeral de Obras Públicas. Tras la crisis del *Prestige* y la remodelación del Gobierno que supuso el ocaso político del barón de Lalín, en invierno de 2003, su sustituto y rival, Alberto Núñez Feijóo, entonces vicepresidente primero de la Xunta, mantuvo a Hernández durante dos años, hasta que perdió el poder, en el mismo puesto que había ocupado con su predecesor, al frente del departamento con más presupuesto.

En los últimos dos gabinetes de Fraga, Hernández desempeñó importantes responsabilidades al frente de organismos autónomos como Portos y Augas de Galicia. En junio de 2003, Feijóo lo convirtió en delegado de la Xunta en las Sociedades Galegas de Autopistas de Peaxe. En agosto de 2005 salió del Gobierno y en unos meses entró en nomina de la constructora pontevedresa Sercoysa. En septiembre de 2006, la empresa Puentes y Calzadas, una de las tres concesionarias de la Autovía del Salnés, lo recupera como consejero para su filial de prefabricados, Prethor SL, y para asesorar el grupo "en cuestiones inmobiliarias". Tras un par de años en el sector privado, Rafael Louzán lo fichó en enero de 2008 como director de infraestructuras en el departamento de Vías y Obras de la Diputación de

Pontevedra. Feijóo lo tiene en mente para la consellería que fusionará las competencias de medio ambiente y política territorial.

www.elpais.es 07.04.09

FEIJÓO Y SU FAVORITO PARA OBRAS PÚBLICAS FUE FICHADO POR LA FIRMA A LA QUE ADJUDICÓ

Agustín Hernández encargó a Puentes trabajos por 30 millones de euros

El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.

La autovía del Salnés se adjudicó a cinco días de las elecciones de 2005

Un decreto prohíbe ahora a los altos cargos trabajar en el mismo sector

Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.

Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura.

Ya fuera del Gobierno gallego, a finales de 2005, Agustín Hernández pasó primero por la constructora de Pontevedra Sercoysa, en la que ejerció durante algunos meses como "director de construcción", según él mismo confirmó ayer a este periódico. Un año después de abandonar la Xunta, se incorporó como consejero a Inversiones Prethor SL, una filial recién constituida de Puentes y Calzadas [propietaria del 75% de las acciones y con el mismo domicilio social] dedicada a la "fabricación, distribución y venta de elementos prefabricados, vigas, bancadas, utillajes, así como a la financiación de empresas".

De acuerdo con la documentación que figura en el Registro Mercantil, el ex director general de Obras Públicas en el Gobierno de Fraga permaneció como cargo directivo en el grupo constructor desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 28 de marzo de 2008. En esa fecha regresó a la vida pública de la mano del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien lo rescató como director de infraestructuras en el departamento de vías y obras de la institución provincial.

Hernández seguía en ese cometido hasta que, en enero de este año, Feijóo se volvió a acordar de él y lo incorporó a la candidatura por Pontevedra en el puesto número 11. Durante la campaña electoral, Hernández representó al PP en los debates sobre infraestructuras programados por distintos medios de comunicación.

Tras la victoria el 1 de marzo, se ha convertido en látigo del ejecutivo saliente sometiendo a un riguroso marcaje a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien acusó en múltiples ocasiones, la última ayer, de "vaciar las arcas de la Xunta para atar de pies y manos" al futuro gobierno de Feijóo.

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la ley autonómica de incompatibilidades no establecía en 2006 -cuando Hernández dio el salto al sector privado y fichó por el grupo Puentes- ninguna limitación

para que los altos cargos de la Administración se incorporasen a las empresas con las que habían tenido tratos en el Gobierno. La normativa estatal sí prohíbe expresamente desde 1995 a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno y a otros cargos institucionales realizar, "durante los dos años siguientes a su cese, actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". El texto legal no establece restricciones a los responsables de las administraciones autonómicas. El vacío vino a cubrirlo el bipartito con un decreto aprobado el 4 de septiembre de 2008, que prácticamente calca la ley estatal y obliga a los altos cargos de la Xunta a esperar al menos 24 meses para incorporarse a empresas del mismo sector en el que trabajaron desde las instituciones. El decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí impide a los altos cargos que están a punto de abandonar la Administración tomar el camino de vuelta al sector privado que siguió Hernández hace tres años.

"En aquel momento la ley lo permitía"

Todas las quinielas lo sitúan al frente de la macroconsellería que fusionará las de Política Territorial y Medio Ambiente. De momento, Feijóo, que sigue fiel a su costumbre de no soltar prenda, ya lo ha señalado como uno de sus hombres de confianza, al encargarle, junto a Pedro Puy, que negocie con el Gobierno en funciones el traspaso de poderes. Desde el 1 de marzo acude y opina en todas las reuniones importantes donde el PP traza el futuro Ejecutivo. Agustín Hernández Fernández de Rojas se aferró ayer a la literalidad de la ley autonómica de incompatibilidades de 1996 para justificar su incorporación al grupo Puentes y Calzadas. Subrayó que ninguna norma le impedía "en aquel momento" trabajar en la constructora y aclaró que su tarea como "director de desarrollo" de la matriz y consejero de su filial Prethor "no tuvo ninguna relación con los expedientes administrativos en los que había participado" desde la Xunta. "Trabajé en la división inmobiliaria", apuntó.

En conversación con este diario, el diputado del PP insistió en que "el órgano de contratación que adjudicó los contratos no era la Dirección Xeral de Obras Públicas, sino la consellería"

[en la que el propio Hernández figuraba como número 3]. Hernández no encuentra tampoco ningún reparo ético a su tránsito desde la Xunta al sector privado. "Si actúas con lealtad al cargo, sin interés profesional y sin beneficiar a ninguna sociedad, no hay incompatibilidad ética, un profesional puede desarrollar su actividad en la administración o la empresa privada", asegura. No obstante, admite que hoy vulneraría el decreto de incompatibilidades aprobado en 2008.

www.elpais.es 06.04.09

Nació en el municipio orensano de Esgos el 10 de octubre de 1940.

Maestro de Primaria de profesión, abandonó la docencia en 1979 para asumir la Alcaldía de la localidad orensana de Nogueira de Ramuín, al frente de la cual permaneció hasta 1995.

Baltar ingresó en política en Coalición Galega y llegó al PP a través de Centristas de Galicia, una escisión de CG de la que fue su fundador y secretario general.

Centristas de Galicia, que aglutinaba un nutrido grupo de alcaldes rurales, se unió al PP en 1989, año en el que Manuel Fraga se presentó por primera vez a las elecciones a la Xunta. **Meses después de los comicios autonómicos, ya en 1990, pasó a presidir la Diputación Provincial de Orense.**

En las Cortes Generales, fue senador electo por Orense por el PP entre 1993 y 2000, quinta y sexta Legislaturas, en las que fue elegido miembro titular de la Diputación Permanente de la Cámara Alta y presidente de la Comisión Especial sobre el Desarrollo Económico y Social del Estado Español.

En aplicación de las incompatibilidades decididas por su partido, abandonó el escaño del Senado en enero de 2000 para seguir como presidente del PP de Orense, cargo al que había accedido en 1994.

En septiembre de 2004, Baltar junto a siete diputados del PP en la Cámara gallega, amenazó con dejar el Partido Popular de Galicia porque no veía respaldados los intereses de Orense, y con presentar una lista alternativa a los comicios autonómicos de 2005.

Otro de los motivos que desencadenó la crisis fue la excesiva influencia del partido nacional y de su secretario general, Mariano Rajoy, en el PP gallego con la entrada de personas de su entorno en la remodelación del Gobierno de la Xunta llevada a cabo en septiembre de 2004, como el vicepresidente

Alberto Núñez Feijoo. El PPdeG anunció en octubre "un acuerdo definitivo" entre Fraga y Baltar sobre la crisis de partido, después de que ambos mandatarios mantuvieran varias reuniones.

Los diputados críticos ya habían amenazado en enero de 2003 con escindirse del partido por responsabilizar al secretario general del PPdeG, Jesús Palmou, próximo a la dirección central del PP, de la salida del Gobierno gallego del entonces consejero de Política Territorial de la Xunta, José Cuiña, respaldado por los dirigentes del partido en Orense y empeñado en preservar la autonomía de los populares gallegos frente a la dirección nacional.

José Luis Baltar, considerado el principal aliado político de Cuiña, es el líder de una provincia donde el PP obtiene cada cita electoral mayoría absoluta y supone el primer bastión electoral de los 'populares' gallegos. Figura como vocal nato del Comité Ejecutivo del PPdeG.

Está casado y es padre de dos hijos. Uno de ellos, José Manuel Baltar Blanco, fue el elegido en Febreo del 2012 por su padre para sustituirle en la presidencia de la Diputación.

En enero del 2013 el titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha admitido a trámite la querrela del fiscal contra José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.

NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO , SU HIJO Y SUS CIRCUNSTANCIAS

“LA DIPUTACIÓN DE OURENSE ERA PARA BALTAR COMO UNA EMPRESA PRIVADA”

La justicia castiga el enchufismo del barón del PP de Ourense inhabilitándolo nueve años

La sentencia dictamina que contrató a un centenar de personas violando la normativa más básica

La justicia pone coto al baltarismo después de Baltar. La titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Caterina González, ha dictado sentencia condenatoria contra la práctica del enchufismo masivo y continuado ejercido por el expresidente de la Diputación de Ourense en los tres meses en los que se sentaron las bases de su sucesión dinástica. “Parece que la Diputación era una empresa privada en la que se contrataba a quien parecía oportuno al acusado”, sostiene la juez para explicar que el primero de los Baltar utilizó la institución como si de su propiedad se tratara y condena al ya jubilado barón del PP de Galicia a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La condena, consecuencia de una denuncia presentada en 2010 por el PSOE ante la fiscalía, no tendrá ya efectos prácticos pero, en sintonía con la petición del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, de “una pena ejemplar que sirva de aviso a navegantes”, pone en tela de juicio la sucesión dinástica del baltarismo que ahora representa su primogénito.

Dos años después de que el poderoso expresidente ourensano José Luis Baltar hubiese causado baja en el PP, la justicia sentencia que el autodenominado cacique bueno delinquiró. La juez considera probado que en los tres primeros meses de 2010, los que rodearon el congreso provincial del PP en el que se consumó el primer traspaso de poderes entre padre e hijo, José Luis Baltar vulneró “a sabiendas” la normativa de la institución provincial y contrató a dedo a las 104 personas que quiso. En esa simbiosis que, según la juez, Baltar hizo entre lo público y lo privado, buena parte de los enchufados que eligió para los empleos estaban vinculados al PP y participaron (ellos o sus familiares) en el cónclave provincial en el que su primogénito, José Manuel Baltar Blanco, barrió al candidato avalado por Feijóo y Rajoy haciéndose con la presidencia del partido que dejaba

vacante su padre. Dos años más tarde le traspasaría también a dedo la presidencia de la Diputación.

Frente al alegato de Baltar proclamando en su juicio que después de tres décadas al frente de corporaciones (el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín y la Diputación) desconocía que para contratar en una institución es necesario realizar una convocatoria pública de empleo, la juez considera probado que incumplió “conscientemente” la normativa de la institución provincial cuando, en aquellos meses pre y postcongresuales, enchufó al centenar de afines. El condenado lo había reconocido sin complejos en su declaración. “Oye, cuando que haya que contratar a alguien cuenta con este”, explicó Baltar desde el banquillo su método de selección del personal. Él le decía al jefe de Personal quién entraba y quién no. No sabía, intentó justificarse, que las plazas se tenían que publicitar. “Nadie me advirtió”, remachó su exculpación.

A lo largo de 43 folios, la jueza descalifica las prácticas institucionales del expresidente ourensano. La sentencia precisa que Baltar no solo prevaricó al conceder empleos a dedo, sino que “también se ha probado que esa contratación se realizó sin la fiscalización previa que exigía la ordenanza” y que debería garantizar que existía crédito para hacer frente al gasto en nóminas que disparaba la deuda de una Diputación ya sobredimensionada en empleos: llegó a tener más de un millar de trabajadores —33 porteros, que después redujo a 16, para abrir tres puertas en el edificio cultural; 17 personas para cuidar 15 caballos en el centro ecuestre de la institución— que convirtieron al organismo en la mayor fábrica de empleos de la provincia. Y casi todos los empleados estaban vinculados al PP.

La juez sostiene que en los tres meses a los que se refería la denuncia, el expresidente “olvidó en todo momento” el requisito “básico e irrenunciable que es la publicidad” para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano al puesto de trabajo. Y aclara que la Diputación “no es una propiedad de la que pueda hacer el uso que bien le parezca a su titular” para concluir que el acusado viola “consciente y deliberadamente” la norma “en función de una finalidad que le parece prioritaria”, poniéndose para ello “por encima de toda Ley, como quien dispone legítimamente de algo privado”.

En su afán contratador de aquel trimestre sucesorio en el que consumó el primer traspaso de poderes a su hijo, Baltar incumplió, uno tras otro, todos los requisitos que marcaba la ordenanza de la Diputación publicada seis años antes en el boletín oficial de la provincia para los contratos temporales por procedimiento de urgencia. La juez especifica las infracciones: no hubo informe del jefe de servicio de cada plaza, no hubo fiscalización previa de Intervención para comprobar la existencia de crédito suficiente para contratar, no hubo convocatoria pública ni siquiera en el tablón de anuncios y no hubo selección de los contratados basada en su cualificación y méritos. Sencillamente, Baltar tiró también en esa ocasión de los decretos de presidencia con los que durante décadas repartió millones de euros entre sus afines y, así, desde enero hasta el 17 de marzo de 2010 ordenó la contratación en la Diputación de las 104 personas “elegidas por él”.

Según la sentencia, lo hizo “con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública”, por más que el condenado se empleara en el juicio en asegurar que desconocía la existencia de la norma e intentara arrastrar en su caída a sus funcionarios de máxima confianza, a los que acusó de no haberlo advertido de la ilegalidad.

Lejos de aceptar su palabra, la magistrada da credibilidad a los testimonios del jefe de Personal, José Luis Suárez —concejal del PP en el Ayuntamiento de Monterrei e hijo del alcalde de ese municipio—, y al secretario de la institución, Francisco Cacharro —hijo del

exbarón del PP de Lugo—, que aseguraron que el primero de ellos había alertado al presidente de que incurría en ilegalidad y que el otro le había explicado la normativa. Caterina González concluye que Baltar actuó “consciente de lo que estaba haciendo” y se basa para ello en el testimonio de los altos funcionarios y del resto de testigos (73 personas entre cargos de la institución, enchufados y alcaldes del PP) para declarar “claro y probado” el delito de prevaricación que a Baltar —imputado ahora también en la Operación Pokémon que investiga supuestos sobornos a políticos de concesionarias municipales— le supone un oscuro final a su trayectoria política y a su hijo-sucesor la mácula sobre los méritos de su acceso a todos su cargos públicos. La juez desestima la petición de la acusación particular del PSOE para que Baltar abone 696.666,58 euros a la Diputación por los gastos que, según su cálculo, supusieron los 104 enchufados a las arcas públicas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/31/galicia/1406790800_888726.html

OURENSE SIENTA EN EL BANQUILLO AL CLIENTELISMO DEL “CACIQUE BUENO”

La Audiencia abre juicio a José Luis Baltar, ya retirado, por enchufes masivos en la Diputación

Jubilado, pero con todos los poderes políticos intactos —ahora en manos de su primogénito— el expresidente del PP y de la Diputación de Ourense José Luis Baltar se sienta hoy en el banquillo. El fiscal lo acusa de haber enchufado a 104 personas, casi todas vinculadas al PP, para favorecer las opciones de su hijo José Manuel Baltar en las vísperas del congreso provincial del partido que 2010 consumó la sucesión dinástica. 104 personas para engordar la plantilla de una endeudada, y ya sobresaturada de empleos, Diputación Provincial que en buena parte acudieron a votar —ellos o sus parientes— al congreso en el que su hijo barrió al candidato rival apoyado por Rajoy y Feijóo. Ese día, Baltar padre —quien se autodefinía como un “cacique bueno”— llevado por la euforia del triunfo levantó en volandas a su hijo para transportarlo sobre sus hombros por el salón de congresos. Consumada la herencia en el partido, le dejaría también en prenda dos años después la presidencia de la Diputación.

Baltar, que tiene ahora 73 años y presidió durante 23 la Diputación, acude al juicio que hoy se inicia en la Audiencia Provincial de Ourense sabiendo que incluso una condena no tendrá consecuencias prácticas para él. Aunque el PSOE lo denunció por prevaricación y malversación, tanto el fiscal como el juez instructor consideraron que incurrió solo en el primero de los delitos, que no implica cárcel. Si resultase condenado, la pena sería de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

“A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, se zafó cuando trascendió la noticia de su imputación, después de que hubiese dejado ya la política activa Y, convencido de que también lograría zafarse de esta, después de que el fiscal general del Estado archivara por “poco precisa” la denuncia de un anónimo por su supuesto enriquecimiento patrimonial, advirtió: “El que ríe el último ríe dos veces”. Y a continuación se dio de baja en el PP.

Pero, desde entonces, Baltar no ha hecho sino acumular denuncias. El extodopoderoso presidente ourensano ha tenido que enviar un escrito a la juez instructora del caso Pokémon, Pilar de Lara, para justificar su ausencia, hoy mismo, a la citación en la que tenía que responder de una imputación por cohecho por supuestamente haber aceptado un soborno de 6.000 euros del grupo Vendex, concesionario de servicios municipales en Galicia. Además, se enfrenta a su posible responsabilidad en otra causa judicial abierta a

instancias de la Unión Europea. Los técnicos de la oficina de lucha contra el fraude de Bruselas acusan a la Diputación que él presidía de haber cometido fraude en la adjudicación de más de un centenar de depuradoras a una empresa afín.

El juicio del enchufismo lo encuentra jubilado. El fiscal presentó querrela contra él a finales de 2012, dos años después de que los socialistas ourensanos acudieran a su despacho cargados con cientos de folios con los que denunciaban el clientelismo político en una institución, la mayor fábrica de empleos de la provincia, en la que, según las cuentas de la oposición, llegaron a trabajar más de un millar de personas vinculadas al PP. En ocasiones, familias enteras

En el juicio que hoy desfilarán por el estrado docenas de sus fieles alcaldes, sus técnicos — el personal de confianza al que, cuando se vio apretado judicialmente, señaló como responsable de las contrataciones irregulares— y algunos de los supuestos enchufados. Mientras tanto, su hijo-sucesor, bajo cuya presidencia han seguido aprobando oposiciones de la Diputación afines al PP, ha aprobado un código ético contra la corrupción política. Lo hizo unos meses después de haber contratado a dedo a un exdiputado socialista para que lo asesorara en transparencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/29/galicia/1404071340_459957.html

EL FISCAL PIDE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA JOSÉ LUIS BALTAR

El ministerio público solicita la máxima pena por el delito de prevaricación continuada

“A mí no me echa nadie; ya me inhabilité yo”, sentenció José Luis Baltar al conocer su imputación por el supuesto delito de prevaricación por el enchufismo en la Diputación de Ourense que presidía. Casi dos años después de que presentase su renuncia al frente de la institución alardeando de que lo hacía por propia voluntad, la fiscalía ourensana reclama la pena máxima, 10 años sin poder ejercer cargos públicos, para el septuagenario cacique, que ha delegado ya todas sus competencias políticas en su hijo.

El fiscal jefe, Florentino Delgado, registró este lunes el escrito con la petición de la máxima pena que contempla la ley para el delito de prevaricación continuada por el enchufismo en la Diputación de 104 personas en el entorno del congreso provincial del PP que ganó el vástago del exbarón. Baltar se retiró de la presidencia de la institución a la que durante las dos décadas largas que presidió dotó hasta el delirio de empleos de afines, y de la presidencia del PP provincial, desde la que luchó con uñas y dientes contra los presidentes del partido en Galicia (Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo) para mantener su parcela de poder, sin que nadie en su partido le rechistara. Al menos públicamente.

Cuando anunció su renuncia a la Diputación, insistió en que lo hacía por propia voluntad y con el reconocimiento de Feijóo de que se iba porque él mismo quería “sin que nadie te eche”, algo que, según repitió Baltar hasta la saciedad, él no consentiría. Meses después, la fiscalía ourensana presentaba el escrito de acusación por el enchufismo.

Para Baltar la verdadera pena es la acusación judicial. Sus abogados intentaron por todos los medios evitar que se sentara en el banquillo. No lo consiguieron. La Audiencia Provincial rechazó el pasado junio la última de las peticiones de archivo de la causa que reclamó constantemente su defensa. Los magistrados avalaron la instrucción del juez Leonardo Álvarez destacando que no existían motivos para el archivo al constatarse “indicios racionales de criminalidad”. En el auto del juez instructor hecho firme por la Audiencia consta que los contratos de trabajo se realizaron sin publicidad y a dedo “a sabiendas” de que conculcaban las normas de la propia institución. “Se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana”, redactó entonces el juez

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/05/galicia/1375731645_718836.html

BALTAR SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO PERO ESQUIVA UNA CONDENA DE CÁRCEL

La Audiencia desestima los recursos y confirma la imputación por prevaricación

No tendrá que enfrentarse a una posible condena de cárcel, pero se sentará en el banquillo acusado de ejercer el caciquismo del que alardeó durante años aunque ceñido a la contratación irregular, en el entorno del congreso provincial del PP de 2010, de 104 personas mediante una supuesta prevaricación con la que pudo llegar a su vástago la presidencia provincial del partido. José Luis Baltar ya ha agotado, sin éxito, todos los recursos contra el auto del juez instructor, Leonardo Álvarez, que encontró indicios suficientes de este delito en la denuncia presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, a instancias del grupo del PSOE en la Diputación.

Los abogados del extodopoderoso cacique se emplearon por evitarle el trago del juicio e intentaron, recurso tras recurso, convertir las consecuencias penales del aluvión contratador en una mera irregularidad administrativa. Pero ni antes el juez instructor ni ahora los magistrados de la Audiencia les han dado la razón. Baltar será juzgado por lo penal por una supuesta prevaricación continuada: el enchufismo. La Audiencia también avala el auto del juez instructor denegando la petición del PSOE de sumarle a ese supuesto delito los de malversación de caudales y falsedad en documento público con lo que en el caso de sentencia condenatoria el cacique no irá a la cárcel, sino que quedará inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. Y, como él mismo anunció cuando comenzaba la instrucción de la causa, ya se había adelantado jubilándose, y causando baja en el PP, con la misión cumplida del traspaso completo de poderes a su hijo. "A mí no me echan, me voy yo", sentenció entonces.

Baltar se enfrenta ahora al escarnio público tras décadas de apología de su sistema contratador que inmortalizó, a ritmo de trombón, con el epítome de "cacique bueno" cuando acumulaba poderes en Ourense -asentados en la fidelidad de los favores realizados desde la institución pública por los que ahora será juzgado- que hacían temblar las mayorías parlamentarias del PP gallego.

En el auto en el que rechazan los recursos y avalan la instrucción de la causa los magistrados de la Audiencia replican a la defensa de Baltar que "el hecho objeto del procedimiento reviste inicialmente características de delito" y precisan que "el principio de igualdad se ve severamente quebrantado si se carece de idónea información pública de la contratación de personal".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/13/galicia/1371137904_199620.html

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA DESMONTA EL ERE DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

El fallo considera que no han quedado acreditadas las causas alegadas por el organismo

José Manuel Baltar Blanco no consigue desprenderse de la sombra que mancilla el legado político —la presidencia de la Diputación y la del PP de Ourense— que recibió de su padre. Tampoco de sus prácticas. Se lo acaba de recordar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha declarado “no ajustado a Derecho” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que el segundo de los Baltar reprobaba, mediante el despido de 25

empleados, la política de contrataciones de la que supuestamente se benefició políticamente.

En el empeño por desvincularse, una vez en el poder, de la imagen caciquil de su progenitor (procesado por, supuestamente, haber enchufado en la Diputación al menos a 104 afines en el entorno del congreso sucesorio del PP) Baltar promovió un ERE. Lo justificó enmendando públicamente la plana a su padre. En el documento que sustentaba el expediente afirmaba que en la heredada Diputación había un elevado número de trabajadores indefinidos no fijos "que no obtuvieron ese estatus mediante la superación de un proceso selectivo reglamentario, sino por la indebida aplicación de contrataciones temporales no justificadas".

Pero al mismo tiempo que aplicaba el ERE denunciando las contrataciones irregulares de su progenitor, se servía de la misma práctica y enchufaba también él en la Diputación a otros 20 afines al PP, concedía arbitrarias subvenciones, a dedo, por casi dos millones de euros, mantenía las ayudas a los clubes deportivos y se rodeaba de un par de asesores que cuestan 120.000 euros a las arcas de la institución. Aludiendo a estas actuaciones, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desmontado el argumento economicista del presidente provincial y ha declarado "no ajustado a Derecho" el ERE, el primero promovido desde una Administración gallega. Aferrado sin embargo a su decisión -y a la crítica implícita al modelo de contratos temporales que acaban en fijos de la que se sirvió su padre- Baltar ha dado a entender que recurrirá la sentencia. En su opinión, bastará "simplemente" con "aumentar el número de indemnización de los días trabajados" de los 25 despedidos, de forma que pasaran de 20 a 45 para que el ERE sea aceptado por el alto tribunal gallego.

De momento, con su padre y predecesor con un pie en el juzgado para responder por los 104 enchufes, el segundo de los Baltar recibe del Tribunal Superior una crítica a su gestión del gasto en la institución, similar a la de su progenitor de cuya imagen intenta zafarse. El alto tribunal le advierte -para rechazar que el desajuste de la plantilla sea el factor desencadenante de la situación económica negativa de la Diputación- de que mediante "la reducción de las partidas presupuestarias destinadas al baloncesto o al fútbol quizás se hubieran podido evitar si no todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos". El Tribunal Superior precisa, además, que el ERE "resulta contrario al deber de buena fe" toda vez que lo simultaneó con el nombramiento de "dos asesores de confianza con un gasto anual aproximado de 120.000 euros" para las arcas de la institución. Mientras Baltar se sacudía ayer, tras conocer la sentencia, el rapapolvo del alto tribunal gallego y esgrimía un argumento sobre la compatibilidad de contratar caros asesores al mismo tiempo que se despide personal por razones de ahorro para la institución, CC OO, sindicato que denunció judicialmente el ERE, reclamaba la inmediata incorporación de los 25 despedidos a sus puestos.

"Pues claro que los quiere indemnizar con 45 días en lugar de con 20; el dinero no es suyo sino de la institución", reprocha el "clientelismo del nuevo Baltar" el secretario xeral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO, Ramiro Otero. Los 25 despedidos esperan ahora que Baltar tome una decisión en el plazo de los cinco días de que dispone para acatar o recurrir la sentencia del TSXG antes de que, dado que el ERE no fue declarado nulo, comiencen los juicios de los trabajadores en el juzgado de lo social de Ourense que aplicará la Reforma Laboral.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/03/galicia/1367575965_108399.html

EL PSOE PIDE A LA AUDIENCIA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN DEL ENCHUFISMO EN OURENSE

Sostiene que el instructor “pasó por alto” indicios de malversación y falsedad documental

Para que en el entorno del congreso que ganó su hijo José Luis Baltar hubiera podido contratar a toda esa “gente que le vino en gana” -según hace constar el juez instructor Leonardo Álvarez en el auto en el que ordena el procesamiento del cacique ourensano acusado del único delito de prevaricación, que no conlleva cárcel- “no dudó en firmar documentos de su puño y letra” que no se atenían a la verdad, como el referido a las solicitudes de personal de diversos ayuntamientos que la práctica totalidad de estos negaron a requerimiento del juez. Así consta en el recurso de apelación registrado este mediodía en la Audiencia Provincial por el PSOE contra el auto de Álvarez.

Los socialistas insisten en que existen indicios suficientes para procesar a Baltar, además de por prevaricación, por los supuestos delitos de falsedad en documento público y malversación en relación con los mismos hechos. La falsedad documental queda acreditada para el PSOE provincial en esas solicitudes que resultaron no serlo y que sin embargo constan en un documento firmado por Baltar en agosto de 2010.

En lo que respecta al delito de malversación, los socialistas entienden que este es imputable al expresidente de la Diputación considerando que el jefe de servicio de personal de esa institución reconoció ante el juez instructor que “se contrató a nueve personas” para su departamento “y se le envió solo a una”, con lo que ocho contratados “no prestaron servicio” para el organismo público. Los socialistas hacen constar en su escrito de apelación que “no puede tratarse de cerrar una investigación en falso y de forma apresurada pasando por alto indicios” que perjudican al procesado

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/19/galicia/1366368875_065492.html

EL JUEZ PROCESA A BALTAR POR ENCHUFAR EN LA DIPUTACIÓN “A QUIEN LE VINO EN GANA”

La fábrica de votos a cambio de empleos del PP gallego se tambalea. José Luis Baltar, el patrón que durante dos décadas encabezó orgulloso la política caciquil de los conservadores en Ourense, será juzgado por enchufar a 104 personas en la Diputación Provincial que presidía, entre enero y marzo de 2010. Enchufes que sirvieron para apuntalar la sucesión de poder de Baltar su hijo José Manuel como líder del PP de Ourense en un congreso provincial celebrado en 2010. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha ordenado el procesamiento del que fuera uno de los más poderosos barones del PP gallego, imputándole formalmente un delito de prevaricación. El magistrado Leonardo Álvarez emitió ayer un auto en el que considera a Baltar el cerebro único de los enchufes: apunta contra él pero rechaza imputar delito alguno al jefe de personal, al secretario general y al exinterventor de la Diputación.

El juez asegura que Baltar “se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, atentando contra la función pública” y “prescindiendo de las formalidades establecidas” para estos procesos. Además, lo hizo para facilitar que su hijo alcanzase la presidencia del partido en Ourense. El auto judicial vincula los contratos a dedo con el encarnizado congreso en el que los baltaristas se enfrentaron al candidato oficial del PP impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Según el magistrado, hay indicios suficientes para procesar al cacique porque “la mayor parte de las personas beneficiarias” de los enchufes eran “afines, de uno u otro modo, al PP”, y porque lo hizo “en vísperas del congreso que tenía por objeto nombrar presidente, resultando curiosamente elegido su propio hijo”.

La “curiosa” victoria del hijo

Al PP de Ourense se le desmonta la maraña orgánica que permitió urdir la sucesión dinástica de Baltar I a Baltar II. Un relevo facilitado porque, según el juez, los enchufados eran afines al baltarismo “de uno u otro modo” para que en el congreso del partido al final, y “curiosamente”, fuese elegido el hijo. Hace tres años, el partido vivía en Galicia una convulsa campaña orgánica que enfrentó al aparato oficial con el baltarismo, en un congreso al que la dirección nacional del PP envió observadores como si Ourense fuese Kosovo en pleno conflicto bélico. José Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, fue designado candidato a la presidencia por la dirección gallega y se enfrentó a Baltar hijo, por aquel entonces cómodamente instalado en el Parlamento gallego. Desde entonces, el cacique jubilado lo considera el máximo “traidor”.

El vapuleo al candidato de Rajoy y Feijóo en 2010 fue abrasador. Baltar hijo consiguió el 63% de los votos y sucedió a su padre. Feijóo, oriundo de un pueblo ourensano, fue recibido entre abucheos en el recinto congresual. Los

baltaristas más férreos lo nombraron persona non grata en su feudo. Dos años después, Baltar padre también abandonó la presidencia de la Diputación y completó así el plan que permitió al clan familiar heredar el organismo público. La dirección del partido no intentó frenar el traspaso familiar, ya que ahora las aguas bajan más calmadas. El pasado mes de marzo, el PP consagró a Baltar hijo con el beneplácito de Feijóo, en un nuevo congreso en el que fue candidato único obteniendo el 94% de los votos.

Baltar se saltó el proceso legal para contratar a su antojo. En concreto omitió la “fiscalización previa de los contratos por el servicio de intervención así como la correspondiente publicación” de los puestos de trabajo para que cualquier ciudadano tuviese acceso a los empleos públicos. De hecho, al magistrado le llama “poderosamente la atención” que la mayoría de las personas contratadas en esos tres meses tengan una vinculación directa o indirecta con el PP, “lo cual es lógico puesto que eran las únicas que tenían conocimiento de la existencia de estas ofertas”.

Los enchufados eran elegidos a dedo. Baltar lo sabía y, según el auto, formalizó los contratos a través de ocho decretos firmados de su puño y letra sabiendo, “indudablemente”, que era ilegal. El documento asegura que las explicaciones del cacique durante su declaración fueron “poco creíbles” porque “actuó a sabiendas de la injusticia de las resoluciones”, ya que “tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones se prescindía por completo de los trámites procedimentales”.

Durante la investigación judicial, Baltar explicó que actuó basándose en informes que acreditaban la necesidad de personal en la Diputación. Sin embargo, el juez asevera que esos informes “no existen”. Resalta que el expresidente de la Diputación afirmó haberlos visto, pero el magistrado recuerda que los ayuntamientos que, según Baltar, habían reclamado personal lo han negado cuando fueron reclamados durante la fase de instrucción. También destaca que los enchufes suponen “una quiebra de la confianza que los ciudadanos deben tener en la credibilidad de las instituciones públicas”. En los últimos años, Baltar ha dado empleo en la Diputación de Ourense a más de 400 cargos del PP, o familiares directos suyos, según ha documentado EL PAÍS en numerosas informaciones.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/galicia/1365757558_216829.html

LA DIPUTACIÓN OBSTRUYE LA INVESTIGACIÓN SOBRE BALTAR

La Diputación de Ourense, convertida en feudo personal de José Luis Baltar durante dos décadas, intenta retrasar la investigación sobre los enchufes masivos del barón del PP. Tres semanas después de que el juzgado solicitase documentación sobre los contratos de 104 trabajadores, nada se sabe sobre esos expedientes.

La diputación no ha remitido un solo papel. Sí lo hicieron los ayuntamientos y mancomunidades que fueron requeridos sobre este mismo caso el pasado febrero. Fuentes de la investigación se muestran extrañadas por el retraso. “No hay un plazo establecido para la remisión de los documentos” aunque debe ser “a la mayor brevedad posible, como ya han hecho los ayuntamientos”, explican. Si el Gobierno provincial no remite los documentos, el juez puede seguir dos caminos: emitir otro auto reclamándolos o enviar a la policía para proceder a su incautación.

Baltar hijo ha proclamado reiteradamente su total disposición a colaborar con el juez entre apelaciones, también constantes, a la presunción de inocencia de su progenitor. Mientras, la instrucción se encuentra en vía muerta a la espera de que el organismo provincial remita los documentos.

Expedientes inéditos

Entre los papeles reclamados se encuentran los informes que justifican las contrataciones y que, según el expresidente, fueron enviados por los municipios a la diputación para solicitar la contratación urgente de personal antes del congreso que propició en 2010 la sucesión dinástica al frente del PP ourensano. El juzgado exige los expedientes completos correspondientes a los contratos ejecutados a través de ocho decretos firmados por Baltar padre, en los que la fiscalía y el juez instructor aprecian irregularidades. Los jefes de servicio y el propio Baltar hicieron referencia a estos expedientes en sus declaraciones.

Cuando el expresidente provincial fue interrogado, justificó algunos de los enchufes en las necesidades de personal planteadas por los alcaldes en esos hipotéticos escritos. “Deben de estar en la Diputación” aseveró cuándo fue preguntado por ellos. A pesar del minucioso detalle con el que se identifican los documentos reclamados en el auto judicial, ahora la Diputación de Ourense parece no encontrarlos. El jefe de Personal, José Luis Suárez, no los vio “nunca”. “Sólo vi la propuesta directa del presidente para los contratos”, admitió ante el juez.

BALTAR PIDE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE MILITANCIA “PARA NO DAÑAR” AL PP

El PP provincial "agradece la decisión responsable" del expresidente de la Diputación y apela "al respeto a la presunción de inocencia"

El expresidente de la diputación de Ourense asegura que se adelanta a los hechos al evitar la apertura de un expediente sancionador

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, acaba de asegurar, en declaraciones la Cadena SER, que con la baja como militante del Partido Popular (PP) que ha anunciado esta mañana se "adelanta a los hechos" al evitar la apertura de un expediente sancionador por parte de la dirección del PP de Galicia, con la que está enfrentado. Y señala que "es un gesto hacia aquellos que reclaman la dimisión de políticos imputados". Ha evitado valorar lo que hacen otros miembros de su partido en esa misma situación procesal.

Baltar está inmerso en un proceso judicial en el que se le imputa un delito de prevaricación continuada tras una denuncia del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado.

El PSOE, que denunció los enchufes ahora investigados por el juez, amenaza con ampliar la querella a contrataciones hechas por su hijo, Manuel Baltar, el actual presidente de la Diputación. Baltar padre anima a la oposición a denunciar a su hijo. Ha recalcado que "si mi hijo está haciendo lo mismo que yo, que actúen igual que lo han hecho contra mí". Por su parte, Baltar hijo ha explicado que se trata de un "gesto" que "honra" a su padre y que ejemplifica que "su trayectoria, comportamiento y actitud".

Baltar oficializó a última hora de la tarde de ayer su renuncia "para no dañar a la organización". El PP explica que la decisión cumple lo dictado en los estatutos del partido. Los populares ofrecen "toda la colaboración" a la Justicia para esclarecer el caso, en el que se le acusa de enchufar a 104 personas en la Diputación "sin seguir ninguno de los procedimientos legales".

Fuentes del PPdeG aseguraron la pasada semana que se procedería a la apertura de un expediente sancionador contra Baltar si el magistrado titular del juzgado de instrucción uno de Ourense, Leonardo Álvarez, mantenía la imputación tras su declaración, que se producirá a finales de enero. De esta forma, Baltar evita la medida disciplinaria de la dirección del PP gallego, con la que mantiene abierto un enfrentamiento desde 2010, cuando su hijo y actual presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ganó el congreso provincial de partido, enfrentándose al candidato impulsado por Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/10/actualidad/1357810411_367838.html

“LOS CONTRATOS DE BALTAR SON UNA AUTÉNTICA CHAPUZA”

El juez, perplejo, activa la querella del fiscal contra el cacique del PP de Ourense

Su exnuera, enchufada ella misma, empleó a ocho allegados

El baltarismo no se fraguó solo. El poder omnímodo con el que el fundador de la dinastía, José Luis Baltar, hizo y deshizo durante dos décadas cientos de contratos laborales a enchufados en la Diputación de Ourense —que le sirvieron para perpetuarse en el poder del PP y de la propia institución provincial a través de su hijo— tuvo colaboradores necesarios desde un punto de vista judicial. Entre otros, los jefes de personal, en su mayoría colocados por él mismo, y parientes suyos o de cargos públicos del PP. Y también los sindicatos. Así se desprende de la querella del fiscal contra el viejo cacique ourensano, que ayer admitió a trámite el juez Leonardo Álvarez.

El titular del juzgado número 1 de Ourense se incorporó el lunes a su puesto, se topó con la querella del Ministerio Público y no dio crédito. Algunos de los hechos denunciados y contrastados por la fiscalía "son una auténtica chapuza, en el caso de que no sean un error", destaca perplejo el juez Álvarez. Hoy mismo hará público el auto que supone la imputación del exbarón del PP de Galicia, a quien citará a declarar después de que desfilen por el juzgado cuatro jefes de personal —supuestamente colocados a dedo por

Baltar—, los tres representantes sindicales en la comisión de control de la Diputación — que, según la querella, no controlaron nada— cuatro de los enchufados y, finalmente, ya hacia el próximo mes de febrero, el propio imputado. “Apenas les haré dos preguntas a cada uno”, advierte el titular del juzgado ourensano.

Entre las “cosas tan extrañas” que sorprendieron a Leonardo Álvarez tras la lectura de los 800 folios de la denuncia penal presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado —referida solo a los presuntos 104 empleados a dedo, vinculados al PP, en las vísperas del congreso provincial del partido de 2010, que encumbró a la presidencia provincial al hijo del exbarón, Manuel Baltar— destacan casos como que una sola persona figure contratada, en el mismo periodo de tres meses, para cuatro empleos distintos en otros tantos organismos dependientes de la Diputación. En realidad, ese tipo de prácticas no eran novedosas en el entramado administrativo que crearon los Baltar.

A finales de 2009, cuando ató la sucesión de su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar ya era un experto avezado en la contratación masiva de personas vinculadas al partido a través de la Diputación que presidía. Cuando el bipartito formado por PSOE y BNG se hizo con la alcaldía de Ourense, en las elecciones municipales de 2009, desbancando al PP; se encontró con un sistema de sillas calientes utilizado por los enchufados del exbarón: como no había sitio para todos en las oficinas municipales, los colocados por Baltar en la institución local se turnaban para usar las sillas. Mientras unos salían a tomar el café o a hacer recados, las ocupaban otros. Y todos, aunque trabajaban en el Ayuntamiento de la capital provincial, cobraban de la Diputación.

Cuando, a finales de 2009, Baltar padre pugnaba para amarrar la sucesión de su hijo Manuel al frente del partido, contra una candidatura alternativa auspiciada por Feijóo, la espiral de contrataciones se disparó. El fiscal denuncia en su querella el empleo —sin informes ni proceso de selección, es decir, a dedo— en ese momento, de 104 personas en 19 organismos; ayuntamientos, fundaciones y otras instituciones dependientes o controladas por la Diputación. El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para cuidar tres puertas, aunque, según Baltar, se han reducido ahora a 16) solicitó por vía de urgencia 12 personas más. La primera mujer de Manuel Baltar, enchufada desde hace tiempo como gerente del Teatro Principal de la ciudad, reclamó nueve personas más por la misma vía. Y así hasta 19 organismos. Uno tras otro.

Se contrató a una persona para cuatro empleos distintos en tres meses

El fiscal acusa ahora a Baltar de un delito de prevaricación continuado basado en el enchufismo. Pero solo en el de las vísperas del congreso del PP. Aunque el juez reconoce que podría ampliar esa querella “siempre que los hechos que se documenten estén relacionados con esas contrataciones”. Álvarez explica que su instrucción se ceñirá a los más de un centenar de empleos que el fiscal ourensano tilda de ilegales en ese periodo precongresual. Pero puntualiza que si se presentasen pruebas que evidenciaran que fueron concedidos a cambio de “dádivas”, podría añadir al imputado otros delitos.

Tanto el PSOE, autor de la denuncia registrada en la fiscalía, como el sindicato Manos Limpias han solicitado personarse como acusación particular. Manos Limpias presentará la misma documentación sobre el supuesto incremento patrimonial del autodenominado “cacique bueno” que el pasado año un anónimo registró en la Fiscalía Anticorrupción y de la que este diario informó el pasado julio. Se trata de una extensa documentación que incluye datos sobre el patrimonio personal del ahora jubilado Baltar (diversos inmuebles en Galicia, además de una colección personal de más de un centenar de coches antiguos supuestamente concedidos a cambio de empleos, según la documentación del denunciante) así como de otros políticos de su núcleo duro. Los socialistas intentan aportar, además, documentación relativa a fondos europeos “que no fueron destinados al fin requerido”.

El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para tres puertas) solicitó 12 personas más

Mientras el baltarismo se enfrenta por primera vez a la justicia, el heredero del fundador de la dinastía, Manuel Baltar Blanco, evita las comparecencias públicas. Su padre sí da la cara, pero el hijo ha puesto a su brazo derecho en la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, a despejar balones

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/07/actualidad/1357594471_731338.html

LA EXNUERA DE BALTAR, CLAVE PARA ACUSAR AL CACIQUE DE OURENSE DE PREVARICACIÓN

Olga Mojón y otros funcionarios confirmaron al fiscal que el exbarón ourensano se saltó la ley en más de un centenar de contratos. El juez admite a trámite la querella y le cita a declarar

La exnuera del anterior presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ratificó ante el fiscal que el exbarón ourensano realizó más de un centenar de contratos ignorando el procedimiento legal obligatorio, según publica El Faro de Vigo. La declaración de Olga Mojón, directora del Teatro Principal, junto a las de otros responsables de servicios de la diputación permitieron apuntalar el texto de la querella por presunta prevaricación continuada, que ya está en manos del titular del Juzgado número 1, Leonardo Álvarez.

El juez admitió a trámite la querella este mediodía y en el auto de incoación recoge la previsión del juez de tomar declaración al propio Baltar y a varios jefes de servicio y personas contratadas. Fuentes judiciales citadas por la agencia Europa Press, aseguraron que el auto de admisión a trámite de la querella se refiere a 104 contratos.

La querella se produce después de que el grupo provincial socialista denunciara estos hechos en junio de 2010. En aquel momento, el PSOE presentó ante el fiscal jefe de Ourense un escrito en el que acusaba a José Luis Baltar de cuatro delitos. Según denunció ese partido, el expresidente de la Diputación de Ourense contrató de manera irregular a 115 personas ligadas al Partido Popular en las semanas previas al congreso provincial del PP, entre los meses de noviembre de 2009 y marzo de 2010.

Según los socialistas, estos nombramientos consolidaron el relevo de José Luis Baltar por su hijo, José Manuel, al frente del PP en la provincia de Ourense. De hecho, el escrito entregado a la Fiscalía recogería declaraciones públicas de cargos del PP que durante la época precongresual denunciaron la utilización de recursos públicos para ganar votos a favor de Baltar hijo

<http://www.publico.es/espana/448476/la-exnuera-de-baltar-clave-para-acusar-al-cacique-de-ourense-de-prevaricacion>

EL JUEZ ADMITE LA QUERELLA CONTRA BALTAR POR ENCHUFAR A MÁS DE CIENTO PERSONAS

La denuncia de la fiscalía apunta a un presunto delito de prevaricación continuada

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha admitido a trámite la querella del fiscal contra el exbarón del PP en la provincia, José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.

El PSOE denunció que Baltar, que presidía la Diputación, empleó a esas personas a cambio de que votasen a su vástago en el congreso del partido para vencer al candidato apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El juez llamará a declarar como testigos a jefes de servicio de la institución provincial y a nueve de los contratados, que han sido elegidos de forma aleatoria. La fecha de la comparecencia de Baltar como imputado en los juzgados de Ourense aún no ha sido fijada.

La denuncia incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, del centenar de enchufados tras la información que le trasladó, en 2010, el PSOE provincial. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad” —esto es, de convocatoria de oferta pública— para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas. Los socialistas no solo acusaron a Baltar de prevaricación, sino también de cohecho por las supuestas “dávivas” de los seleccionados a cambio del empleo. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que a los investigadores les resultó “prácticamente imposible” aportar pruebas “documentales” de ello.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/galicia/1357562165_196395.html

LA FISCALÍA ACUSA A BALTAR DE FIRMAR LOS CONTRATOS DE 104 PERSONAS SIN INFORMES

Las altas del exbarón ourensano en la Diputación se realizaron con "absoluta omisión de los elementales principios que rigen la contratación pública", según la querella

Contratación a dedo de 104 personas, sin informes y en 8 decretos firmados de "su puño y letra". Estos son uno de los pilares que sustentan la acusación del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, contra el ex presidente de la Diputación, José Luis Baltar, al que imputa en el escrito de la querella a la que tuvo acceso FARO, un delito de prevaricación continuada.

Recalca en la querella que se trata de contratos temporales, y las personas "fueron elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública", además de asegurar que "el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación de los contratos por el propio José Luis Baltar".

Las mencionadas contrataciones, documentadas en los decretos firmados por Baltar, se realizaron "con ausencia de procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico, prescindiendo en cualquier caso, de todo principio constitucional que inspira dicha contratación pública sustentado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en concreto, con desprecio absoluto por la Ley 7/1995 de 2 de abril reguladora del régimen de las Bases del Régimen Local", remacha el fiscal jefe.

La querella también sostiene que "dichas contrataciones vulneraban además frontalmente la ley de Presupuestos del Estado 26/2009, en concreto, su artículo 93 que prohíbe la contratación de personal temporal o funcionarios interinos para todas las Administraciones Públicas salvo casos excepcionales para casos urgentes e inaplazables", y añade que "sin que en ninguna de las contrataciones citadas apareciese ni constatada, ni tan siquiera expresada la excepcionalidad para la necesidad urgente".

El ministerio público asegura que los decretos de contratación "se realizaron con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública, en los que la publicidad es sin duda piedra angular". De esa forma, tanto los puestos de trabajo que habían de ser cubiertos como las personas destinadas para cubrirlos "con la apariencia de contratación temporal, fueron decisiones del querellado que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y que quería de manera directa que fuesen esas personas, y no otras, las que ocuparan los puestos", por lo que "hizo pasar por inaplazables y necesarias las contrataciones bajo su propia consideración" y que se constatan en los decretos.

El fiscal sostiene que "en ninguno de los casos de las 104 contrataciones existió previa convocatoria u oferta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o en el tablón de edictos, o de cualquier otro modo o manera que evidenciara la publicidad de las ofertas de contratación", de lo que colige una "omisión consciente" con el único objetivo de realizar contrataciones discrecionales. Además, revela que Baltar "nunca solicitó informe alguno, ni tan siquiera de manera verbal, existiendo únicamente sobre el particular dos informes, uno de la Intervención y otro de la Secretaría de la Diputación, posteriores a los propios decretos que firmó para las contratación de esas personas".

Esta "ilícita contratación" se desarrolló "sin control o inspección, contribuyendo la omisión y silencio de la comisión de control y seguimiento de la selección de personal temporal que creó la propia Ordenanza provincial".

<http://www.farodevigo.es/galicia/2013/01/05/baltar-acusado-contratar-104-personas-informes/735967.html>

RAJOY SOBRE LOS PROBLEMAS JUDICIALES DEL PP GALLEGO: "HOY VENGO A OTRA COSA"

Los guardaespaldas protegen a Rajoy de las preguntas sobre la imputación del alcalde y la querella de la fiscalía contra Baltar

Mariano Rajoy no está dispuesto a que los problemas judiciales del PP le amarguen su asueto navideño en Galicia. El presidente del Gobierno programó para hoy una mañana de viernes institucional en su tierra, en compañía de su esposa, Elvira Fernández, inaugurando un museo en su ciudad natal, Pontevedra, y entregando en Santiago la Gran Cruz de Isabel la Católica a un amigo personal, el primer

presidente de la Xunta con Alianza Popular, Xerardo Fernández Albor. La querrela del fiscal contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, por prevaricación, y la imputación del alcalde popular de Santiago, Ángel Currás, por tráfico de influencias podrían haber dado al traste con sus planes. Pero no ha sido así. Los guardaespaldas de Rajoy han evitado a empujones que los periodistas parasen al presidente en su entrada al claustro del compostelano Pazo de Fonseca donde se celebró el acto.

Rajoy siguió su camino con el mentón en alto y protegido por el cuerpo de seguridad de las preguntas incómodas que, sin embargo, no pudo evitar oír. “Hoy vengo a otra cosa”, se ha limitado a decir, cuando ha sido preguntado por los casos de presunta corrupción de sus compañeros de partido. En una especie de resumen de la situación vivida por el presidente del Gobierno, el condecorado ha arrancado minutos después su discurso con una frase de John Lennon: “La vida es lo que te va sucediendo mientras tú haces otros planes”.

El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, sí ha accedido a hablar de Baltar y Currás. Rueda ha apelado a la presunción de inocencia de ambos, ha dicho desconocer la querrela del fiscal contra el exbarón del PP en Ourense y, sobre la posible dimisión del regidor compostelano, ha afirmado que el partido esperará a que Currás declare el día 17 ante la juez del caso Pokémon. Currás no ha acudido al acto presidido por Rajoy. Quien sí estaba es el hijo de José Luis Baltar, que heredó de su padre la presidencia del PP ourensano y de la Diputación en un proceso sobre el que la fiscalía ha extendido las sombras.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/1357306260_024183.html

BALTAR: “YO YA ME INHABILITÉ CUANDO ME MARCHÉ”

El barón del PP afirma que todo lo que hizo “está bien hecho”

“¿Que hay un borrón? Pues buscaremos una goma de borrar”, agrega

Baltar se fue tranquilo de la Diputación de Ourense camino de la jubilación. Sabía lo que hacía: legaba todas sus conquistas políticas a su hijo con una sonrisa en la cara y una denuncia del PSOE por enchufismo en la fiscalía. Tras labrarle y entregarle el ansiado futuro político al mayor de sus vástagos empleando métodos ahora cuestionados, el expresidente ourensano se quitó de en medio. “Yo ya me inhabilité cuando me marché”, afirmó ayer tras conocer la denuncia del fiscal y restándole importancia a la pena que podría imponerle la justicia. Solo la denuncia de su posible enriquecimiento personal, que el fiscal general del Estado eludió investigar, podría quitarle el sueño.

El jubilado Baltar asegura que ahora dedica el tiempo al resto de la familia, aunque ha seguido yendo prácticamente a diario a la Diputación. En Esgos, su localidad natal, ante las naves de la antigua granja de Coren en las que guarda una colección personal de coches antiguos, explica a este diario que “no le sorprendió la denuncia porque estaba presentada en 2010 por el PSOE y tenían que darle salida”. Y aún le pone una puntilla. Cree que el fiscal podría tener “miedo a recursos ante instancias superiores” y por eso ha decidido dar traslado al juez. “Todo lo que hice está bien hecho”, sentencia sobre su cuestionada política de personal, aunque reconoce que le amargaría acabar su vida “con un borrón que no tiene efectos prácticos”.

En su larga trayectoria política, Baltar no ha conocido la derrota. Su perfil es el del triunfador esforzado. Al estilo de Fraga, pero con mejor carácter, más boina que Estado en la cabeza y mucha más cintura política. La suficiente para apuntarse a las charangas electorales. La suficiente para tirar de billetes e invitar a todos los del bar de la comisión de fiestas de un pueblo ante la falta de reflejos del presidente de la Xunta que le acompañaba. La suficiente, también, para deshacerse de su exjefe de Centristas de Galicia, Victorino Núñez, que en los ochenta lo dejó durante un rato al frente de la Diputación —mientras él probaba suerte en la presidencia del Parlamento gallego— y jamás pudo recuperar ni la institución ni la amistad con el pupilo. La suficiente para plantarle órdenes a los presidentes de la Xunta que se le pongan delante.

El antiguo maestro de escuela y excobrador del coche de línea se hizo a sí mismo primero para poder hacer después a su semejanza a su hijo. “Con todos los defectos y virtudes seguiré luchando y siempre he salido airoso”, reconocía ayer. “¿Que hay que aguantar ahora este borrón? Pues buscaremos una goma de borrar y a seguir”.

La herencia que legó a su vástago es más política que genética. Mientras el fundador de la dinastía atendía ayer a algunos periodistas, su descendiente y sucesor —beatlemaníaco, madridista y que jamás ha tenido un empleo que no estuviera ligado a la política— evitaba dar la cara y se ausentaba de un acto público. Hace unos días no tuvo reparo en acusar a su progenitor de haber masificado la institución provincial que le entregó con el resto de las partijas políticas como argumento al que aferrarse para explicar que se veía obligado a aplicar un ERE para aliviar la asfixia económica de la Diputación.

“Me tocó a mí y qué le vamos a hacer”, concluye Baltar padre sobre la denuncia penal del fiscal jefe de Ourense. “Seguramente no conseguían pillarme por otra cosa y les dio por esto”, añade, para luego presumir que él “nunca” ha llevado a nadie a los tribunales. Baltar admite que teme este borrón: aún le quedan muchas elecciones a su hijo.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/1357258758_799207.html

RAJOY EN 2009: “BALTAR ES EL PP”

Frente a la timidez y la parquedad del presidente del Gobierno, el cacique ourensano representaba el populismo extremo

Mariano Rajoy y José Luis Baltar son dos personajes completamente antagónicos. Frente a la timidez y la parquedad del presidente del Gobierno, el cacique ourensano representaba el populismo extremo con un don de gentes innato. El indomable Baltar y Rajoy chocaron muchas veces. El marianismo hablaba pestes de él, y maniobraba en su contra. Sin embargo, el ahora presidente del Gobierno siempre acababa rindiendo pleitesía al cacique ourensano cuando llegaban las elecciones.

En 2009, cuando Rajoy se jugaba buena parte de su liderazgo en el resultado de las gallegas, el entonces líder del PP hizo todo lo que le pidió Baltar. Hasta el punto de que se fue con él a recorrer cinco pueblos en un día, incluida O Pinto, la aldea natal del cacique. Y allí pronunció una frase que resume su relación: “Baltar es el PP”, llegó a decir Rajoy ante sus paisanos. “Porque el PP está aquí representado por él, con sus equivocaciones”.

Rajoy siempre ha evitado criticar en público a Baltar pese a sus escándalos. Es como si no fuera con él. Hace menos de un año, en las elecciones autonómicas, al final de un mitin, Baltar entregó a un alcalde, delante de todos, un sobre de 3.000 euros. “¿Qué le parece?”, le preguntaron a Rajoy en la SER al día siguiente. Primero dijo que era una “anécdota”. El periodista insistió: “Yo qué sé... Algo me contaron. Eso no va en mi programa electoral”, esquivó el presidente.

En esa campaña de 2009, para agradar a Baltar, Rajoy le envió a un mitin en Melón (Ourense) a Alberto Ruiz-Gallardón. Ante la mirada atónita del entonces alcalde de Madrid, el cacique soltó esta perla sobre el líder del PSdeG, Pachi Vázquez: “¿Por qué tiene Pachi esa obsesión conmigo? No soy mujer. Si lo fuera, entendería que me tuviera ganas, pero como soy hombre, tengo que entender que es maricón”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/1357258494_897390.html

EL FISCAL CERCA AL CACIQUE DEL PP GALLEGO

El Ministerio Público se querella contra José Luis Baltar por enchufar en la Diputación de Ourense a compromisarios que auparon a su hijo a la presidencia del partido

Creyó que lo dejaba todo atado. La herencia política completa. El exbarón del PP gallego José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940) se empleó para que lo sucediera su hijo José Manuel al frente del partido en la provincia y de la Diputación ourensana —cuyos poderes absolutos ostentó él durante dos décadas— a base de enchufar supuestamente a cientos de cargos, militantes y familiares de estos en la masificada institución provincial. La última tanda, en vísperas del congreso provincial del partido, en el que su vástago pugnaba contra el candidato del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Lo barrió. El “buen cacique” había echado los restos: presuntamente contrató a dedo al menos a 115 militantes o familiares de estos. La mayoría, con voto en el cónclave que en enero de 2010 dio la victoria a su descendiente.

Con la misión cumplida, Baltar enchufó dos años después a su vástago en la Diputación: lo proclamó presidente tras propiciar primero un imprescindible trasiego de dimisiones y renunciaciones de otros diputados. Finalizado el trámite, el veterano político se jubiló. Sin mácula. Pero la herencia estaba

envenenada: el fiscal jefe de Ourense ha presentado ahora una querrela por prevaricación continuada contra el patriarca de los Baltar.

El fiscal Florentino Delgado acusa al expresidente ourensano de contratar ilegalmente a más de un centenar de personas en las vísperas de aquel congreso. Si el juez número 1 de Ourense, en el que ha recaído la denuncia penal, la confirma, el congreso del partido podría declararse nulo.

El PSOE asegura que hay más de 300 personas colocadas a dedo que tienen relación familiar u orgánica con el Partido Popular.

Con el patriarca fuera del escenario público —“a mí no me echa nadie, me voy yo”, repitió hasta la saciedad— una condena de inhabilitación no supondría más que la constatación judicial de las denuncias políticas. Salvo que Feijóo acepte la repetición del congreso de 2010 por la que no han dejado de clamar en Ourense los antibaltaristas de su partido, la querrela interpuesta por la fiscalía no tendría mayores consecuencias que el escarnio público para los Baltar.

Según fuentes judiciales, la denuncia penal registrada el pasado día 28 de diciembre por el fiscal jefe de Ourense incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, de al menos 115 enchufados en la institución provincial en las vísperas del cónclave del PP en el que Baltar padre fue sucedido por Baltar hijo y en el que la nieta, entonces adolescente, del fundador fue presentada como la continuadora de la dinastía.

El fiscal jefe realizó la investigación del enchufismo a instancias de la denuncia registrada en su departamento en 2010 por el PSOE provincial. El candidato de Feijóo —el alcalde de Verín, Juan Luis Jiménez Morán— se había ya hartado de proclamar el juego sucio del exbarón, alertando en la campaña congresual de que el veterano presidente contrataba a personal a cambio de que votara a favor de su hijo en el congreso. Un Baltar al borde del llanto, en ese ejercicio de “humanidad” que sus fieles ensalzan de él, llegó a reconocerlo ante la prensa: “En este caso actuó como un padre. ¿Qué puede hacer un padre?”

Los cientos de folios que el fiscal jefe ha entregado al juzgado son fruto de una investigación tan exhaustiva que las fuentes consultadas consideran muy previsible que Baltar padre sea imputado por el titular del juzgado número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad” —esto es, de convocatoria de oferta pública— para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas.

Baltar eligió personalmente a los empleados. Pero, además, durante la larga investigación, el fiscal jefe intentó conseguir pruebas del supuesto delito de cohecho del que los socialistas acusaban también —junto con el de malversación de fondos públicos sobre el que el fiscal no se pronuncia— al entonces presidente provincial, alertando de supuestas “dádivas” de los seleccionados a cambio del empleo. Pero las mismas fuentes sostienen que a los investigadores les resultó “prácticamente imposible” aportar pruebas “documentales” de ello.

EL PAÍS publicó el pasado julio la denuncia registrada por un anónimo en la Fiscalía Anticorrupción con supuestas pruebas del enchufismo y el incremento de patrimonio del exbarón, cuantificado en diversos inmuebles y en la colección de un centenar de vehículos antiguos que guarda en una antigua granja de pollos de su pueblo. Semanas después, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, descartó la investigación apelando a la inconsistencia de una parte de las pruebas y al hecho de que estaba siendo investigada ya la denuncia del PSOE de Ourense. Ahora, a raíz de su larga investigación, el fiscal aporta pruebas que acreditan, en su opinión, ese enchufismo.

Aun en el caso de que el primero de los Baltar llegue a ser juzgado y condenado, la pena supondría la inhabilitación de un jubilado para el ejercicio de la política y la renuncia a los empleos concedidos “ilegalmente”, según la querrela del fiscal, de 115 personas que ya están fuera de la institución. Esto es, una mera puesta en escena. Y es que el “buen cacique” utilizó con este largo centenar de contratados el método original que le ha permitido alardear sin recato de usar la institución provincial para hacer favores, que después rebosaban en votos para él: emplear a cientos de afines, pero por periodos de tres o seis meses, lo cual le permitía seguir rotando las colocaciones y tener el control político de la práctica totalidad de la provincia.

La Diputación ourensana, que llegó a tener más de un millar de empleados y cuyo comité de empresa lo integran alcaldes del PP que son funcionarios de la institución bajo las siglas de CC OO, se convirtió de esta forma en su fortaleza: ante Fraga, primero, y después ante Feijóo, cuando la mayoría de los dos presidentes de la Xunta pendía del voto de los Baltar. Ahora, la crisis económica, la mayoría absoluta de Feijóo y la menor empatía del sucesor con el núcleo duro de los alcaldes tradicionales del baltarismo liberan al presidente del PP gallego y de la Xunta de estar en este vilo político, al tiempo que convierten a la Diputación en una institución venida a menos. Ello, aunque el segundo de los Baltar recorte empleos por un lado para contratar a más afines a él, por otro, siguiendo el manual paterno.

Baltar hijo sigue reivindicando la herencia. Hace apenas unas semanas presentó un libro en el que reivindica la provincia como demarcación territorial "necesaria" y a la Diputación como "instrumento de vertebración de Ourense". Es decir, el legado intacto de su progenitor.

"Familias enteras chupando del bote"

Baltar hijo evitó esta mañana el encontronazo directo con los medios al no asistir a una convocatoria de prensa. En su lugar estuvo el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, que insistió en que todas las contrataciones realizadas por el exbarón del PP gallego "estaban bien hechas" ya que "nunca hubo problemas con la justicia". La Diputación insiste en que "no tienen comunicación alguna" sobre la denuncia más allá de lo publicado hoy en la prensa.

La secretaria de Organización regional del PSOE, María Quintas, afirma que la denuncia presentada por su partido hace dos años es "la punta del iceberg" de "una trama de corrupción organizada por el clan de los Baltar". Y recuerda que "hay familias enteras del PP, incluida la exmujer de Baltar hijo, chupando del bote" de la Diputación. También matiza que, "con el máximo respeto a los tiempos" de la justicia, es "escandaloso" que no se haya actuado antes.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/03/galicia/1357210667_479808.html

BALTAR COLOCA AL HIJO DE UN DIPUTADO QUE PROPICIÓ LA SUCESIÓN FAMILIAR

Junto a él, logran plazas en la Diputación más descendientes de cargos del PP

El viernes pasado, mientras asistía emocionado a su último acto institucional en la Diputación y se dejaba abrazar por cientos de enchufados, el "cacique bueno" dejaba colocada en la institución a una decena más de ourensanos. En su mayoría del PP, o vinculados a cargos. Uno de ellos, el hijo del portavoz del grupo popular en la institución a quien correspondía, por el cauce natural, la sucesión a la presidencia de la Diputación, Plácido Álvarez. Pero este se autodescartó después de que hubiera hecho otro tanto el vicepresidente y secretario del PP provincial, Rosendo Fernández.

El último proceso opositor abierto por el exbarón aún no ha finalizado

Además del hijo del portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, también consiguió el aprobado una persona del entorno del presidente del Inorde, el alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto.

Mientras ese viernes, día 27 de enero, Baltar se immortalizaba en fotografías con sus empleados, con sus diputados, con los de la oposición, con los periodistas y con los espontáneos que se lo requirieron, la maquinaria institucional seguía su curso y declaraba a siete personas aprobadas para ocupar otras tantas plazas de auxiliares administrativos en la sobresaturada Diputación que en breve administrará su hijo.

Además de los dos mencionados, entre los auxiliares que acceden al organismo provincial con plaza en propiedad figura una hermana del hombre fuerte del baltarismo en Valdeorras, dueño de una cadena de pescaderías, militante sin cargo pero -según confirman fuentes del propio partido- el verdadero poder del PP en la sombra en la comarca. También consiguió superar al resto de aspirantes a uno de esos puestos de auxiliar la hija del alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño y otros vástagos de cargos del PP. Y junto a los siete nuevos auxiliares administrativos accedieron, también como funcionarias, tres nuevas limpiadoras, alguna con vinculación no ya al partido, sino al entorno personal del exbarón.

Las nuevas contrataciones aparecen publicadas desde ayer, lunes, en la página web de la institución provincial y son los flecos del largo proceso opositor abierto por Baltar del PP antes de las pasadas elecciones municipales.

Un proceso al que se presentaron numerosos descendientes de alcaldes y concejales del PP en la provincia y el motor que puso en marcha, con más fuerza que nunca -a la vista de los resultados electorales: el PP se superó a sí mismo y arrebató alcaldías emblemáticas al PSOE- la maquinaria de hacer votos del baltarismo.

José Eugenio Galindo, miembro del equipo jurídico de la institución y que trabaja en este departamento recientemente junto a su hija, que también aprobó una oposición, firma, con fecha de ayer, la remesa de los últimos aprobados de la primera era del baltarismo, aunque todavía queda abierto ese proceso opositor por el que accederán 10 personas más a la Diputación.

www.elpais.es 31.01.12

BALTAR LEGA A SU HIJO UNA RED DE COSTOSOS ENTES PARALELOS A LA DIPUTACIÓN

El clan preserva los 'chiringuitos' e ignora el mandato de austeridad de Feijóo

El poder del baltarismo que el "cacique bueno" ha legado a su hijo se asienta sobre los pilares de la Diputación. Una institución con un presupuesto, este año, de algo más de 71 millones de euros, que el barón ha manejado con una soltura a manos llenas. Baltar no solo la ha atiborrado de empleados con carné o alcaldías y parientes del PP, sino que además la ha diseminado en multitud de *chiriguitos*, esos organismos paralelos sobre los que el Gobierno gallego predica su cierre en la aplicación de su filosofía de la austeridad.

Mantener los diversos centros agropecuarios cuesta 2,5 millones de euros

Los gerentes, entre los que está la exesposa de Baltar hijo, cobran hasta 80.000 euros

El PP de Ourense no ha hecho caso de esos "veletas" (en definición del propio José Luis Baltar en el anuncio de su despedida) de la dirección gallega del partido. Ni antes ni hasta ahora. Baltar optó por trastocar el principio original de la razón de ser de esta institución (ser ayuntamiento de ayuntamientos, esto es, centrar en ellos su inversión), y la puso al servicio de la manutención del millar de empleados.

El Inorde (con un presupuesto de 2,2 millones de euros anuales); el edificio cultural Simeón -el de los 33 porteros para dos puertas que ahora Baltar precisa que son apenas 19- (con 1,1 millones); el Pazo dos Deportes Paco Paz (1,3 millones); la Escola de Gaitas (medio millón de euros); el Teatro Principal (1,1 millones); y Urbaourense (una sociedad anónima pública financiada por la Diputación, con un agujero reconocido en este momento de 135.000 euros) son algunos de los organismos paralelos que han crecido por la ciudad al calor del baltarismo. Algo más alejados del centro de la ciudad están el Centro Ecuéstre de Vilamarín (460.000 euros de presupuesto), el Centro Ecuéstre y de Explotación de A Limia (800.000 euros), el de Valverde (con un presupuesto de 174.000 euros) y diversos centros de explotación agropecuaria -que los grupos de oposición insistieron en reclamar que transfiriese a la Consellería de Agricultura- cuya suma de presupuestos supera los 2,5 millones de euros.

El fin primigenio y último de todos estos organismos no ha sido otro que el de crear empleos, según se ha hartado de denunciar la oposición. Baltar salió un par de veces al paso de las críticas. Una de ellas, para precisar una información del BNG que aseguraba que el presidente afrontaba la crisis "contratando personal para el centro ecuestre en a Lagoa de Antela, dedicado a la selectiva cría del caballo inglés", con una inversión de 1,2 millones de euros en 2008. El entonces portavoz del BNG en la institución provincial, Xosé Manuel Fírvida, aseguró que "17 personas atienden a 15 caballos". Entre el personal que cuida los animales figuraba un alcalde y varios concejales del PP. El gerente ganaba 60.000 euros.

La aclaración del presidente provincial consistió en sentenciar que el centro "funciona bien" y en acusar a los nacionalistas de beneficiarse de subvenciones del bipartito, entonces en la Xunta, para la hípica de Allariz (municipio gobernado por el BNG).

En el pleno del viernes, el último de Baltar en la presidencia de la Diputación, denegó una subida de sueldo a su exnuera, Olga Mojón, gerente del Teatro Principal, organismo que cuesta más de un millón de euros anuales e ingresa apenas 20.000. Un teatro emblemático, restaurado, en el corazón de la ciudad, pero que se ve abocado a competir con el auditorio municipal, que multiplica su aforo.

La exmujer de Baltar Blanco cobra más de 50.000 euros anuales. Un sueldo similar al que percibe el director del centro cultural Simeón, Francisco González, pero aún lejos del salario del presidente de Urbaourense, José Cudeiro, en torno a los 80.000 euros anuales. Urbaourense solo tiene dos empleados en nómina. Junto a Cudeiro está contratada una administrativa, hija del abogado personal del ya exbarón provincial del PP.

Baltar no solo creó organismos a golpe de impulso y colocó en ellos a los suyos. También gastó alegremente el dinero público en cosas "menores". Es el caso del alquiler que la institución está pagando por el local de la Escola de Gaitas, de 3.000 euros mensuales, cuando otros locales prácticamente idénticos a su lado se alquilan por 300. Hace apenas unos días, impelido por la oposición, decidió dejar de pagar los alquileres de los aparcamientos privados en donde, con cargo a las arcas públicas, los funcionarios de la institución guardaban sus coches y, a petición del grupo socialista en este caso, dejó de alquilar una nave en el barrio de O Pino para aparcar la maquinaria de la Diputación por la que los ourensanos pagaban 72.000 euros anuales cuando en el polígono industrial la institución dispone de una nave propia sin ocupar. El baltarismo que viene tendrá que cuadrar las cuentas.

Urbanismo con sello baltarista

La sociedad Urbaourense es el máximo exponente de la duplicidad de funciones que puede llegar a asumir un organismo con un coste fuera de serie. Baltar creó esta entidad dedicada a la promoción de suelo en 2008, con el bipartito gobernando en la Xunta. PSOE y BNG pusieron entonces el grito en el cielo. No le encontraban al organismo otra finalidad que la de competir con Xestur, la sociedad pública de gestión urbanística.

Más allá del sueldo del gerente (destacado cargo del PP), la Diputación financia al 100% a esta sociedad. El primer año, Baltar decidió inyectarle medio millón de euros solo para su constitución. Y Urbaourense se formó con el gerente y la administrativa, alquiló un bajo en el centro de la ciudad y, posteriormente, la institución provincial le hizo dos transferencias de capital por 4,5 millones y le transfirió, además, el aprovechamiento urbanístico de la finca Santamarina para que la urbanizase. No pudo hacerlo hasta ahora por la desaparición del planeamiento urbanístico de Ourense, aniquilado por ocho sentencias.

Entre las competencias que se impuso la sociedad figura la creación de parques empresariales (como hace ya Xestur). Comenzó por construir los de Esgos (el pueblo natal de Baltar) y Nogueira de Ramuín (su pueblo de adopción). El expresidente de la Diputación justificó entonces su decisión apelando a su palabra: la que le había dado al alcalde de este municipio, el mismo que ahora dimite como suplente en la institución provincial para que su hijo pueda continuar la línea sucesoria.

La sociedad compró uno de los terrenos más caros de la ciudad (en O Couto) por 800.000 euros y se propuso construir 17 viviendas. En el acta de aprobación de esta operación consta que los pisos se venderán "a precio de vivienda protegida", lo que evidencia que "no son protegidas", según el BNG, y no contarán con ayuda pública. Los constructores ourensanos optaron por el silencio pese a que la Diputación acababa de irrumpir en el mercado de la libre competencia.

www.elpais.es 30.01.12

EL PP DE OURENSE CONSAGRA LA SUCESIÓN DE BALTAR POR BALTAR

"Todos los diputados me darán su apoyo", afirma el hijo

A pesar de "no creer en las carreras políticas programadas", José Manuel Baltar Blanco heredará la Diputación de Ourense antes del 10 de febrero. El clan familiar se perpetúa en una institución pública como si fuese una finca de su propiedad. Y lo hace gracias a la decisión tomada ayer por unanimidad de todos los miembros de la junta electoral del partido. Ahora solo falta que los 14 diputados provinciales fieles a su padre lo aclamen en un pleno formal en el que asumirá la presidencia. Se cumple así el guión acordado por la familia Baltar para mantener el control del partido en la provincia. El padre renunció a la

presidencia del partido y el hijo se hizo con el puesto tras un congreso en el que se enfrentó a Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín y candidato oficialista de Alberto Núñez Feijóo. Ahora toca la Diputación.

Desde que nació vivió la política en casa, algo que "otros políticos no tienen"

El secretario del comité electoral, Rosendo Fernández -que también es vicepresidente de la Diputación y jefe del grupo municipal de los conservadores en la capital provincial- leyó ayer un escueto comunicado en el que hacía oficial la elección. No quedaba bien que el propio candidato se autoproclamase sucesor frente a las cámaras. Tras el anuncio, Manuel Baltar hizo aparición y afrontó las preguntas de los medios durante 30 minutos. Para el candidato es un "gran honor asumir un cargo de tan alta responsabilidad".

El hijo de Baltar recordaba que aún no tiene los votos de los 14 diputados con los que cuentan los conservadores. En realidad se refería a una cuestión formal, ya que él mismo añadió a continuación: "Todos los diputados me transmitirán su apoyo". La sucesión lleva meses cocinada y ahora únicamente falta poner la guinda al pastel. Según el propio candidato, Feijóo -que eludió hablar del tema durante dos días y cuando lo hizo fue para ofrecer barra libre al clan ourensano- está informado puntualmente de todos y cada uno de los acuerdos y "apoya todas las decisiones que se tomen".

También tuvo tiempo para intentar excusar al patriarca, que llamó "veletas" a la dirección gallega del partido en la comparecencia en la que anunció su marcha. "No se puede simplificar las declaraciones en lo de veletas" porque comparó y eligió "la base frente a los dirigentes". Preguntado por esas discrepancias que todavía mantiene su progenitor con el PP gallego, no concretó si va a seguir esa misma línea aunque matizó que "no va a ser conformista". El hijo también está enfrentado a Núñez Feijóo pero guarda más las formas.

Niega que le molesten las críticas de la oposición, que califica el proceso pactado por el clan familiar como "una abdicación". Baltar hijo asegura que con esa actitud solo han conseguido "fracasos más que sonoros" y defiende que "el tiempo da y quita razones", así como "los electores en las urnas". En su comparecencia aprovechó para defender el papel de las cuestionadas Diputaciones, que en su opinión son "absolutamente necesarias" para garantizar los principios de "solidaridad intermunicipal".

Desde ayer ya no tiene pelos en la lengua. Se reivindica a sí mismo como un buen candidato porque desde que nació vivió la política en casa y eso ofrece "una perspectiva que otros políticos no tienen". Además defiende acérrimamente el trabajo de su padre: "Tenía en casa un gran modelo político a seguir". El único escollo pendiente fue tumbado el viernes. El alcalde de Nogueira de Ramuín y diputado suplente primero, César Parente, firmó la renuncia al puesto que le correspondía tras la dimisión de Baltar padre. Así lo había acordado con el patrón familiar cuando fue colocado como primer reserva tras las elecciones de mayo.

Presidente en pocos días

La normativa dice que el plazo máximo entre la dimisión del presidente y el pleno de nombramiento del sucesor no puede exceder los 10 días hábiles, por eso Baltar Blanco heredará el puesto de su padre antes del 10 de febrero. El partido barajaba el próximo sábado 4, pero las posibles interferencias del congreso federal que el PSOE celebra ese mismo fin de semana en Sevilla, ha descartado ese día. Ahora estudian que sea en la semana del 6 al 10 de febrero. La decisión está en manos del presidente en funciones, Rosendo Fernández.

Baltar padre estará en la sesión de investidura de su hijo. El pasado viernes, tras su marcha entre los vítores y llantos de sus cientos de enchufados, se fue a comer con los diputados conservadores y su chófer. Desde entonces no volvió por el Pazo Provincial y no tiene pensando hacerlo hasta que José Manuel sea el nuevo presidente. En esa histórica retirada no estuvo presente ningún miembro del Gobierno gallego, a diferencia del pleno de investidura de su séptima legislatura, interrumpida ahora por la adelantada dimisión. La presencia institucional en el acto de traspaso familiar de la institución será un buen termómetro para medir la relación del PP ourensano y la dirección gallega. La frialdad con que Alfonso Rueda o Alberto Núñez Feijóo despidieron al barón levantó nuevas ampollas entre los baltaristas.

EL BALTARISMO PASA DE PADRE A HIJO

El hijo de José Luis Baltar, el "cacique bueno" del PP de Ourense, sucede a su padre en la Diputación con el apoyo del partido "por unanimidad"

El exbarón del PP de Galicia se despidió el viernes de dos décadas holgadas al frente de la Diputación y del partido en la provincia de Ourense. José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940), el "cacique bueno" -como él mismo se ha autodefinido-, dio carpetazo en su feudo de la institución provincial, entre ráfagas de vítores y lágrimas, a la primera era del baltarismo. E instauró la siguiente: su hijo, José Manuel Baltar Blanco (Ourense, 1967), anunció ayer que tiene el respaldo del grupo y del partido para suceder a su padre dentro de 15 días. Fue elegido candidato "por unanimidad".

El 'heredero', que ya dirige con mano de hierro el partido, anuncia continuidad

La institución dedica la mitad de su presupuesto a pagar salarios

El fundador de la saga presidió el último pleno de la Diputación con la misma soltura a manos llenas con la que ha gobernado este organismo y la provincia: cruzando chascarrillos con decretos y concesiones a dedo. Estuvo arropado por cerca de 400 *enchufados* (buena parte de cuyos contratos investiga la fiscalía), que formaron pacientes en las escaleras del pazo provincial con la esperanza de poder agradecer al patrón su deferencia. La mayoría, descendientes de alcaldes de la provincia o cargos del partido a quienes el ya exlíder del PP ourensano amarró sus fidelidades -los innumerables votos que le permitieron esas mayorías impenetrables que hicieron arrodillarse al PP de Fraga y de Feijóo- con la dulce soga del puesto de trabajo.

El exbarón besó a docenas, los palmoteó en la espalda y, emocionado antes de tiempo, se vio impelido a huir camino ya de su jubilación sin dejarles completar el besamanos. "Hoy es un día para tener la fiesta en paz", había instado minutos antes a los eternos grupos de oposición (PSOE y BNG) desde el sillón presidencial de la corporación provincial. Y el pleno fue una balsa. Después, agasajó a los medios de comunicación con palabras de agradecimiento a su trabajo.

El "buen cacique" no tocó el trombón. No entonó esta vez la cantinela de "si no eres del PP, jódete", con la que cada apertura de campaña insuflaba ánimos a los suyos, pero mostró igual talante. Se dejó fotografiar a diestro y siniestro -"¿Alguien quiere alguna foto más?", exhortó, sin dejar su sonrisa y campechanía- y avisó distendido a los periodistas de que su ida era dejarles sin titulares. Además, tuvo palabras de aliento hacia al núcleo duro de sus alcaldes, los que hicieron con él la travesía hacia el PP desde aquel partido de Centristas de Ourense que él mismo se inventó, a finales de los ochenta, con su predecesor en la Diputación, Victorino Núñez. Estos no han tenido más remedio que asumir el sacrificio de la renuncia sucesoria -saldada con los empleos- a favor del vástago.

Baltar se despide convencido de que deja atado el baltarismo. En enero de 2010 legó a su hijo la presidencia provincial del PP a través de un congreso tildado de fraudulento por el sector oficial del partido (el fundador de la saga contrataba en la Diputación, en las vísperas, a decenas de compromisarios o parientes de estos).

Ahora, dos años después de aquella transmisión, le entrega el poder de una institución endeudada en el límite legal, con un presupuesto a la baja -este año, 71 millones de euros- del que prácticamente la mitad se destina a pagar salarios de trabajadores que apenas tienen espacio ni tarea en la que emplear su tiempo.

El legado del baltarismo sobre el que se habrá de asentar el nuevo baltarismo es una institución que dedica 29 millones de euros a gastos de personal y apenas 12 a inversiones. Ayer, el heredero, José Manuel Baltar, anunció la continuidad de la dinastía: el comité provincial que, desde que ganó el polémico congreso, él mismo dirige con mano de hierro -laminó previamente a todos los "infieles"-, lo proclamó por unanimidad candidato a la presidencia de la Diputación. Para ello fue necesaria la renuncia del primer suplente de la lista, el alcalde de Nogueira de Ramuín -municipio fetiche del fundador de la saga, en donde comenzó su carrera política- a ocupar la vacante que deja el exbarón.

Hace apenas unos meses, Baltar padre colocó con fórceps a su hijo como suplente segundo. Ya estaba decidido que los sucesores naturales en cualquier institución al uso (el vicepresidente y el portavoz del grupo popular en la Diputación) harían expreso su desinterés por el cargo y su renuncia. Todo bien

atado. Baltar Blanco, el hijo y sucesor, abandonará ahora el escaño del Parlamento autónomo desde el que mantenía en jaque la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo tras promover en 2009 una carta de alcaldes ourensanos en la que acusaban al presidente gallego de marginar a la provincia.

Mientras se gesta la tercera generación -la hija adolescente del sucesor ya se forja en el PP provincial para el que su padre acuñó carnés de *ourensanidad*, distintos del resto de España-, la segunda ya impone su marchamo: un nuevo modo de ejercer, con un Baltar menos empático que el progenitor. Nadie le debe aún nada en la envejecida provincia, que ocupa los últimos lugares en renta *per cápita*, y del que recela incluso el núcleo duro, la generación que arrojó a su padre.

Ayer, el continuador del baltarismo compareció pletórico ante los medios de comunicación para anunciar el "grandísimo honor" que le supone "ser candidato a un cargo de altísima responsabilidad" y calificó de admirable el trabajo realizado por su progenitor y predecesor en todos los cargos. Y encajó con orgullo la acusación de "abdicación" que utiliza la oposición para referirse a este proceso sucesorio: "Ellos [socialistas y nacionalistas] van fracaso tras fracaso" electoral, espetó.

El baltarismo intentará perpetuarse y mantener el pulso con el PP gallego a base de *ourensanidad*. El nuevo líder ya mandó un aviso a Feijóo en su primera comparecencia, antes de tomar las riendas: "Llevo siempre el escudo de Ourense en mi chaqueta", dijo.

www.elpais.es 29.01.12

BALTAR CALIFICA A SUS ENCHUFADOS DE "PROFESIONALES COMPETENTES"

El barón del PP dimite en un pleno en el que por primera vez acepta todas las propuestas de la oposición

José Luis Baltar ya no es presidente de la Diputación de Ourense. La dimisión era el último punto de un farragoso pleno que fue alargado a propósito por las mociones que la oposición llevaba a debate. Su voz, entrecortada casi desde el primer minuto, delataba los nervios del barón, que terminó arropado entre los abrazos y lloros de la mayoría de diputados provinciales del PP -todos alcaldes de feudos baltaristas- y de otros cargos del partido. No estaba ningún representante del birrete. Alberto Núñez Feijóo se desentendió de la sucesión y también de la despedida del hombre que ha garantizado, con su granero de votos, la mayoría absoluta parlamentaria. El baltarismo copó el salón de plenos y paralizó la institución. Entre el público o agolpados en los pasillos del Pazo Provincial, muchos de los trabajadores colocados por Baltar durante 22 años, miraban con añoranza al patriarca del clan.

El PSOE retira una moción incómoda para el PP por respeto al adiós

Al patriarca se le quebró la voz y sus diputados rompieron a llorar

Un largo aplauso de un minuto y medio sirvió para arropar al último barón. Con el público y los baltaristas en pie, la oposición esperó sin inmutarse el momento de la fotografía oficial. El ambiente fue relajado y distendido durante las dos horas de pleno. Incluso hubo tiempo para bromear. "Lo veo muy en forma así que aún podría seguir algunos años más", espetó el portavoz socialista, José Ignacio Gómez. Las risas fueron rebajando la tensión inicial y la voz temblorosa con la que inició sus intervenciones dejó paso a las habituales perlas que le han valido decenas de titulares. Baltar aludió a su esposa, Alicia Blanco, en numerosas ocasiones. Al final de su discurso declaró: "Mi mujer perdió un hombre en su mejor momento y ahora recibe un jubilado. Trataré de hacerla feliz aunque muchas cosas ya no se pueden hacer". Así finalizó su despedida, con risas de los presentes.

La primera referencia en su discurso fue para los trabajadores de la Diputación -muchos parientes de cargos del PP allí presentes-, a los que calificó como "magníficos y competentes profesionales" que convirtieron al ente provincial en "pionero en gestión". En segundo lugar agradeció el "apoyo y respaldo incondicional" a sus compañeros de grupo político, controlado por el baltarismo hasta la última tuerca y sin un solo verso suelto. El barón defendió el papel del ente que presidía hasta ayer, asegurando que "hay que modernizarla, quererla y cuidarla; necesita nuevas competencias para evitar duplicidades". Pero tampoco evitó reconocer errores: "Si en algún momento no fui capaz de estar a la altura de las circunstancias, os presento mis más sinceras disculpas".

También tuvo palabras de agradecimiento para la oposición. Los diputados conservadores acompañaron a Baltar y rehusaron la confrontación con PSOE y BNG por ser "un día especial". Tan buen ambiente se respiraba, que el grupo popular aprobó todas las mociones presentadas por socialistas y nacionalistas, incluidas algunas con reproches a la Xunta por la gestión de la estación de montaña de Manzaneda o las inversiones en la política agraria de la comarca de A Limia. El expresidente insistió en varias ocasiones que era un día "para tener la fiesta en paz". Tras esa aparente calma está un pacto de no agresión acordado por socialistas y populares horas antes. El PSOE incluso retiró una moción de urgencia sobre la planta basurera de O Irixo con la que pensaban "poner contra las cuerdas" al alcalde de O Carballiño y diputado, Argimiro Marnotes.

A los periodistas reconoció el buen el trato y lamentó que "ahora pierden un filón de titulares". Reiteró que su objetivo a partir de ahora es convertirse en una "persona anónima" para poder dedicar más tiempo a su familia. Nada más terminar la ronda de besos, abrazos y miradas cómplices entre los amigos populares que llenaron los sillones para el público, no quiso contestar preguntas. "No, ahora ya no toca".

Desde que el pasado martes anunció su marcha, ha repetido en todas sus declaraciones públicas que quiere ser una persona anónima. Quiere desprenderse de Baltar para ser "Luisiño porque soy pequeño". Así le llamaban en Esgos, su pueblo. En la teoría, va a dejar de ser el patrón de los centenares de empleados colocados en la Diputación. En la práctica, muchos de los que ayer lloraban el epílogo final del astuto líder galleguista seguirán defendiendo que "es un cacique pero nunca robó".

Con la formalización de su renuncia, el baltarismo pone un punto y parte. José Manuel Baltar no estuvo ayer en el acto de despedida de su padre. A esa misma hora trabajaba en sus futuras responsabilidades a unos metros de allí, en la sede provincial del PP. La maquinaria para el relevo está en marcha y funciona más rápido que nunca. Hoy a las 12 del mediodía se postulará oficialmente para presidir la Diputación y antes del día 5 de febrero será nombrado presidente por herencia. Trabaja de otra forma pero continuará la obra del padre. Gestionará el legado rodeándose de otros colaboradores más cercanos pero manteniendo la telaraña de fieles votantes tejida durante dos décadas. El expresidente provincial asegura que en Galicia hay otros políticos que no van "a las aldeas" porque "huelen mal". Ahora quiere ser otra vez un "hombre del pueblo" porque siempre escuchó el sentir de la gente. Y los recibió en su despacho, reconvertido en oficina de empleo, para cambiar votos por favores. Baltar se inmortaliza en Baltar.

www.elpais.es 28.01.12

400 BENEFICIADOS POR SU REPARTO DE EMPLEOS DESPIDEN CON VÍTORES AL PRESIDENTE DIMITIDO

Se despidió en su feudo. Y con honores. Entre salvas de aplausos, lágrimas, vítores y rendiciones. José Luis Baltar ofició hasta el último minuto el "buen" caciquismo del que alardeó durante sus impenetrables y sucesivos mandatos (22 años consecutivos) al frente de la Diputación de Ourense. Ayer, finalizado ya el último pleno que presidió, y tras el besamanos de turno de sus alcaldes y diputados -unos más emocionados que otros- mostró al mundo su verdadero legado: más de 400 empleados vinculados al PP que abarrotaron las regias escaleras del Pazo Provincial para despedir, cariacontecidos, en fila india a su patrón. Le fue materialmente imposible abrazarlos a todos. No solo por la ingente cantidad de sus enchufados, sino porque el ya exbarón del PP gallego había colmado el cupo emocional de la intensa jornada.

No pudo con todo. Dejó a cientos sin posibilidad de expresarle el afecto y enfiló como un rayo, precedido de su chófer, las escaleras hacia el garaje de la institución provincial con el rostro inflamado y los ojos humedecidos para subirse por última vez al coche oficial que habría de llevarlo esta vez a la jubilación. Ya ha dicho que irá él -en lugar del chófer de la Diputación- a sus nietos al colegio.

Tras dos décadas holgadas al frente de la máxima institución provincial, Baltar deja casi un millar de ourensanos (la mayoría cargos, o parientes, del PP) colocados en puestos de trabajo que apenas tienen cometido en una Diputación endeudada hasta el límite legal y con un presupuesto en recesión (poco más de 71 millones este año) del que casi la mitad (un 41%) se evapora en pagar salarios. La mitad estaban ayer ahí.

Antes de que lo embargara la emoción por esta muestra de agradecimiento de los cientos de empleados cuyos contratos investiga la Fiscalía, Baltar regaló a la audiencia las últimas ráfagas de su perfil político.

Sin trombón y todo, mantuvo ese tono de proximidad y chanza que lo caracterizan y que tan buenos resultados (junto a las contrataciones) le han dado en política. Se dejó fotografiar con todo el mundo: diputados de su grupo, de la oposición, alcaldes, concejales, amigos... "Venga, ahí también. ¿Alguien más quiere otra foto? ¡Dónde haga falta!", repetía aparentemente incansable mientras se sometía con la mejor de sus sonrisas al ritual de turno como si aún le fueran los votos en ello.

Se inmortalizó también con los fotógrafos de los medios de comunicación a quienes tantas portadas brindó. Sentado entre ellos en las escaleras próximas a su despacho, fue el único capaz de romper el hielo del momento. "Esta es la foto de los que vamos a ir derechos al infierno", clamó mientras arreciaban los flashes.

"Para eso hay que nacer", comentó una de sus empleadas, expresando en voz alta lo que todo el mundo en el PP da por hecho: el baltarismo que viene está a años luz del baltarismo. Su hijo, el Baltar que se queda ahora con todo el legado acumulado en dos décadas por su padre su padre, no apareció. En breve gestionará una institución que dedica 29 millones de euros a gastos de personal y 12 a inversiones. Lo hará con un equipo de veteranos -otra generación- del núcleo duro de su padre y algunos de los cuales aspiraban a optar, tras años de fidelidad al patrón, a la sucesión institucional.

Como si los astros se conjuraran para marcar la jornada, en el edificio Simeón, el centro cultural de la Diputación (al que Baltar ha prohibido recientemente atribuirle 33 porteros: asegura ahora que "solo hay 19") se proyectaba a última hora de la tarde la segunda parte de la película *El Padrino*, de Coppola.

www.elpais.es 28.01.12

EL PP GALLEGO DEJA MANOS LIBRES A BALTAR PARA QUE LO SUCEDA SU HIJO

"No me faltaron enemigos en el partido, pero los hice esperar 23 años", dice a EL PAÍS el dimitido presidente - Los alcaldes apoyan sin fisuras el relevo

Escaldada por lo ocurrido hace un año, cuando sufrió una sonora derrota en el congreso provincial de Ourense frente al poder de los Baltar, la dirección del PP gallego ha decidido no intervenir esta vez. En enero de 2010, Alberto Núñez Feijóo y los suyos promovieron una candidatura alternativa para evitar que José Luis Baltar cediese a su hijo la presidencia provincial del partido. Los Baltar lograron su mayor triunfo interno y desde entonces la dirección gallega dejó de inmiscuirse en Ourense.

La estrategia se mantendrá, pese al más que previsible traspaso de la presidencia de la Diputación de nuevo de padre a hijo. Además de evitarse otro revés, la dirección del partido entiende que no tiene resortes para intervenir. Y está convencida de que Baltar hijo nunca tendrá el apoyo ciego de los alcaldes con que contaba su padre.

Con este panorama, solo han sido necesarias 24 horas para que la sucesión de José Luis Baltar esté encauzada. Y eso a pesar de que Baltar hijo afirmó ayer que abordará el asunto "sin prisa, aunque sin pausa". El guión se está cumpliendo al dedillo y los gestos a su favor se han ido sucediendo en cascada. Varios de los diputados baltaristas destacaban ayer las bondades de José Manuel Baltar Blanco, quien no niega la posibilidad de asumir la Diputación en herencia, aunque matiza que de momento es "política ficción" porque "serán los órganos de dirección del partido los que elijan lo mejor para la provincia". Unos órganos directivos que encabeza él mismo como es presidente del PP en Ourense.

Ese comité de dirección de los conservadores ourensanos se reunió ayer para analizar la retirada del cabeza del clan baltarista, pero será el próxima sábado cuando el comité electoral del partido proponga un solo candidato. Será de esta forma porque así lo exige la normativa: el pleno de la Diputación para elegir nuevo presidente debe celebrarse en un plazo máximo de 10 días tras la renuncia.

Baltar Blanco dice que será por acuerdo de los miembros de la dirección, pero en realidad será un nombramiento por aclamación u ovación a la figura del hijo del clan baltarista. A pesar de su negativa a aclarar si se postulará para el puesto, la totalidad de cargos del partido consultados dan por supuesto que así será. "Hoy no es día de personalismos", matizó Baltar Blanco ante las insistentes preguntas. Pero en una de ellas dejaba entrever que está siguiendo un guión que todavía no le permite postularse: "Tengo que decir lo que estoy diciendo por respeto a los órganos del partido". Intentó marcar distancia hablando en tercera persona cuando se cuestionaba la influencia del presidente del partido (es decir, él mismo) en el proceso de elección: "El presidente es la persona que tiene un contacto más directo con los

diputados para valorar todas las opiniones. Hablaremos con el segundo diputado suplente para ver qué hará ante este momento histórico".

Tibia despedida

La dirección gallega de los populares ha despedido tibiamente al barón ourensano. Y parece que hasta con prisa, porque lo hizo antes de que el propio Baltar Pumar dimitiese oficialmente: el anuncio se hizo a las seis de la tarde y Alfonso Rueda ya agradecía los servicios prestados a las cinco, una hora antes. Ayer, volvió a ser el secretario general del PP gallego el que se refirió a la sucesión para desentenderse de lo que suceda en el feudo baltarista que garantiza sus mayorías absolutas parlamentarias: "No tengo nada que opinar porque tiene que ser la diputación la que decida". Alberto Núñez Feijóo incluso esquivó a los periodistas en Santiago para no hablar del asunto.

Hace ocho meses que el barón ourensano ató cabos colocando a su hijo como segundo diputado suplente y concejal en Esgos, cuyo alcalde es cuñado del todavía presidente provincial. Cumple así los dos requisitos fundamentales para poder acceder, primero, al sillón de diputado (hay que ser concejal) y segundo, al de presidente (hay que ser diputado). Para completar la jugada, César Parente, el alcalde de Nogueira de Ramuín -otro feudo baltarista- debe ceder su acta de primer concejal suplente a Baltar Blanco. Con esa renuncia, el traspaso familiar de una institución pública será un hecho.

www.elpais.es 26.01.12

BALTAR SE VA CON REPROCHES A FEIJÓO

El último barón histórico del PP abandona la Diputación tras 22 años y deja el camino despejado a su hijo - Admite que el pulso con el partido agotó su paciencia

Pocas veces la sala de juntas de la Diputación de Ourense se queda pequeña para acoger a los periodistas. Ayer sucedió. Tras 44 años en la política y 22 dirigiendo el ente provincial, el barón del PP que aguantó firme los envites de sus adversarios -los de la oposición y los de su propio partido- pone fin a su vida pública. José Luis Baltar lo deja con 71 años. Abandona todos sus cargos públicos: la presidencia de la Diputación y los sillones de diputado en el ente provincial y de concejal en Ourense. Quiere ser una persona totalmente anónima que se va a dedicar a pasear y a cuidar de sus nietos. Le costará lograrlo porque su poso personal ha marcado todas las instituciones públicas ourensanas y la vida política de Galicia.

"No doy por hecho que el sucesor vaya a ser mi hijo", aseguró

"A Feijóo le dije que me voy porque quiero, no porque me echen"

Ha controlado con mano dura a sus diputados, ha presumido de ser "un cacique bueno" y ha hecho temblar los cimientos de la Xunta cuando no veía satisfechas sus reclamaciones. El pasado verano, su salud se resintió seriamente. Ahí empezó el declive. La actividad pública cayó en picado y dejó de ser el protagonista en muchos de los actos que antes controlaba al dedillo. A partir de entonces, sus apariciones se limitaron a ruedas de prensa para presentar actividades de poca envergadura o a la presidencia de plenos. De hecho, uno de sus últimos grandes logros electorales -la conquista del Ayuntamiento de O Carballiño, feudo del líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez- pasó de puntillas por su vida. Su enfermedad no le permitió asistir a las grandes celebraciones. De hecho, se quedó en casa mientras Mariano Rajoy y la plana mayor del partido en Galicia *reconquistaban* la célebre Festa do Pulpo de la localidad, de la que se habían *apoderado* los socialistas.

"El último congreso provincial fue la gota que colmó el vaso", reconoció ayer. En ese cónclave colocó a su hijo José Manuel al frente del partido en la provincia. Las zancadillas y venganzas personales afloraron más que nunca después de que el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, se posicionase en contra del baltarismo liderando una candidatura apoyada por Feijóo y la dirección gallega del PP. Las espinas quedaron clavadas en el interior del histórico líder ourensano, que retiró la palabra a todos los que orbitaron en torno a esa lista. "Yo no me esperaba lo que pasó", dijo ayer en varias ocasiones. En julio de 2011 y tras las elecciones municipales, aseguraba a su hijo en la línea de salida para apuntalar su sucesión al frente de la Diputación. Desde entonces, José Manuel Baltar Blanco es diputado suplente y concejal en Esgos. Cumple así los requisitos para que el grupo popular decida, gracias a su mayoría absoluta, quién será el nuevo presidente. Baltar hijo figura como segundo suplente

por lo que, para completar la sucesión, tendría que renunciar a su acta el primero, el alcalde de Nogueira de Ramuín, César Parente, de lealtad garantizada.

Mañana presentará su renuncia oficial que será llevada a un pleno que se celebra este mismo viernes y en un plazo máximo de 15 días, será convocado otro para elegir sustituto. Rosendo Fernández, vicepresidente, asumirá temporalmente el cargo. A partir de ese momento, "el partido tiene que tomar la decisión", insiste. "Cualquiera de los diputados provinciales, incluyendo el que entre en mi lugar, puede ser presidente", aclaró. Las quinielas están claras para la mayoría de fuentes consultadas, aunque el barón ourensano se mostrase ayer ambiguo: "No doy por hecho que el sucesor sea mi hijo. Ahora soy un militante de base más y solo si alguien me pide consejo se lo daré". Baltar asegura que aconsejó a su hijo que "no se metiese en política" después de su propia experiencia: "Fue más lo que perdí que lo que gané".

La voz se le quebró en más de una ocasión en su comparecencia y dijo que si no lloraba es porque su mujer se lo había prohibido. Las declaraciones acabaron con una gran sonrisa y aplausos de algunos de los trabajadores de la institución. Pocas personas sabían que haría pública su dimisión. A su mujer se lo dijo ayer mismo por la mañana y ella, que le insistía desde hace tiempo en que lo dejara, respondió que "no se lo creía". Al mediodía reunió a sus diputados para comunicárselo. Se ofrecieron a comparecer junto a él, pero lo rechazó.

A Feijóo se lo dijo hace una semana y ayer le llamó para aclararle: "Me voy porque quiero y no porque me eche nadie". Sus enfrentamientos con la dirección del PP han sido muy sonados y en la despedida no olvidó mandarle algún recado. Dijo que "los jefes", en alusión a la dirección gallega, "son una veleta que hoy está a tu favor y mañana te deja en la estacada". Los únicos fieles "son los votantes y los militantes", "con ellos no hay quien te tumbe", afirmó antes de concluir con otro reproche: "Nunca me voy satisfecho y menos con lo que han hecho por Ourense".

www.elpais.es 25.01.12

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

La pugna con el hombre de Feijóo acabó desgastando al veterano dirigente, el único del PP que disienta en público

Se marcha el último enemigo interno. El único dirigente del PP que ha logrado amargar el retorno triunfal de Feijóo a la Xunta. El mismo que en enero de 2010 se empeñó en demostrar al presidente que Ourense seguía siendo su territorio, algo que Manuel Fraga, su predecesor, también conoció de primera mano. El que le hizo tragar al recién investido presidente gallego el sapo de investir a su hijo José Manuel líder del PP provincial, en contra del criterio de Feijóo y de todo su equipo, que improvisó a última hora la candidatura del alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, a la postre vapuleada en el congreso provincial.

De la vieja guardia ya solo queda Rafael Louzán en Pontevedra

Entonces Baltar sucedió a Baltar, y Feijóo, tras perder con estrépito aquella batalla interna -el día en que el PP ourensano le hizo entrar por una puerta lateral entre silbidos de los afines al barón- decidió sentarse y esperar. "Igual que cayó Cacharro, también a Baltar le llegará su día", se consolaban en voz alta algunos de los asesores del presidente.

La paz forzada de estos últimos dos años entre Feijóo y Baltar padre, agua y aceite que nunca han llegado a mezclar, deparó, no obstante, significativos encontronazos. Cada vez que surgió algún escándalo relacionado con las contrataciones de la Diputación que empañaban el discurso de la austeridad del PP, el líder gallego le conminó a explicarse. Entre las últimas tiranteces, una moción aprobada el pasado octubre por la Diputación de Ourense, donde los votos del PP se sumaron a los de socialistas y nacionalistas para censurar "el brutal recorte en servicios sociales por parte de la Xunta de Galicia". Rodeado de los suyos, Baltar también levantó la mano y protestó ese día para contentar a los alcaldes, quejosos con la falta de ayudas que llegan desde Santiago en esta era de vacas flacas. Y ayer volvió a repetir sus críticas a lo que considera un abandono de la provincia de Ourense.

La marcha del "cacique bueno", como él mismo se definió, servida en dos episodios -en 2010 del partido y ahora de las instituciones- abre la puerta a nuevos tiempos en la provincia de Ourense. Entre los

colaboradores de Feijóo cunde la idea de que, aunque intentara perpetuar la sucesión dinástica, su vástago, José Manuel, no cuenta con los mismos adeptos, ni tiene el peso de quien gobernó durante dos décadas en la Diputación. Ni los históricos alcaldes le apoyan como a su padre, piensan, ni los tiempos de tirar de cheques -cuando no de fajos de billetes ante asociaciones, clubes deportivos o particulares- son ya los que eran. Cae otro de los virreyes de la compleja familia popular. Se acaba el tiempo en que hasta el secretario general, Alfonso Rueda, su enemigo íntimo, al que el barón siempre señaló como responsable de urdir una candidatura en su contra, tenía que pedir permiso para entrometerse en la provincia.

Con la retirada se rompe también un matrimonio de conveniencia entre Feijóo y Baltar padre -no son descartables segundas nupcias del líder gallego con su hijo y heredero- que nació el día en que el fallecido Xosé Cuiña se confesó incapaz de obtener el apoyo de los alcaldes de Pontevedra para optar a la sucesión de Fraga. Hasta entonces, Baltar era el gran apoyo de Cuiña, a quien decía que le unía una relación "como de hermanos" y a quien trató de vengar con una revuelta contra Fraga tras la defenestración del eterno delfín. Con Cuiña derrotado de antemano, Baltar tuvo manos libres para dar su apoyo a Feijóo y finiquitar la perenne pugna entre *boinas* y *birretes*. Pero el histórico dirigente orensano, además de algunos disgustos, ha cosechado resultados nunca vistos en su feudo y no solo para sí mismo. Los porcentajes de apoyo superiores al 60% sumaron también en las mayorías absolutas de Fraga y Feijóo, en las de Aznar, y últimamente en las de Rajoy que en las autonómicas de 2009 se prestó a patear los pueblos de su mano, por mucho que nunca fuera un líder del agrado del presidente provincial.

Ayer, ya desprendido de todo compromiso con la cúpula del PP gallego, soltó por su boca muchas de las cosas que siempre insinuó en privado. Cuentan quienes le conocen que ha admitido que su tiempo ha pasado, que está cansado y que su salud ya no es la que le permitía dar 11 mítines diarios cargando con el trombón con el que coreaba "y si no eres del PP, *jodeté*". Ni siquiera dio por hecho que su hijo vaya a sucederle en la Diputación. Entretanto, Feijóo profundiza en la renovación de su partido. Y es un secreto a voces que de la vieja guardia solo queda Rafael Louzán en Pontevedra.

www.elpais.es 25.01.12

EL ADIÓS DEL CACIQUE BUENO

Heredero de los Centristas de Franqueira, Baltar acumuló su poder tejiendo fidelidades gracias al reparto de empleos públicos

El mediodía del 30 de enero de 2010, el barón del PP gallego, y presidente de este partido y de la Diputación en Ourense, José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940), apretó los labios, levantó los brazos y desató la euforia contenida durante semanas por el escarnio de las traiciones de buena parte de sus alcaldes: saltó como un resorte desde la silla que ocupaba en el tenso congreso provincial para coger en brazos a su hijo. Acababa de legarle, en vida política, a su vástago -el vicepresidente del Parlamento gallego y concejal del municipio familiar de Esgos, José Manuel Baltar Blanco- la presidencia provincial en un congreso tras más de 20 años y varios meses de poder omnímodo atornillado a base de la concesión inaudita de empleos en la institución provincial y de plantearle órdagos a los sucesivos presidentes de la Xunta de su propio partido (primero a Fraga y después a Feijóo) para marcar su territorio político y familiar. El territorio de una de las provincias con menor renta per cápita de España, carente de tejido empresarial y principal granero de votos del PP gallego.

Atornilló más de 20 años de poder con el apoyo de sus fieles alcaldes

El pasado julio incorporó a su hijo a la Diputación como suplente

La euforia del expresidente provincial no era baladí. Se había fajado largas semanas, precedidas de largos años, en un cuerpo a cuerpo descarnado con parte de sus propios alcaldes que, llegado el momento del cónclave, decidieron alinearse con Feijóo, convencidos de que hasta el baltarismo tendría fecha de caducidad. El "cacique bueno", según propia definición, no pudo con el regidor de Verín, su hasta entonces fiel aliado Juan Manuel Jiménez Morán, a quien Feijóo ganó para su causa -junto con un puñado más- para colocarlo frente al hijo del barón, convencido de que podría arrebatárle la presidencia del partido. Desde entonces, José Luis Baltar se refirió siempre a Jiménez por el apelativo de "el traidor". Pero Baltar se empleó -hasta las lágrimas en sus comparecencias de aquellos días- reivindicando lealtades a los congresistas (no en vano los había empleado a todos ellos o a sus familiares) para su

hijo, tirando a la desesperada de nuevas ofertas de empleo en la Diputación y reconociendo, con esa sinceridad a la cara que lo caracteriza, que se saltaba todas las normas internas. "¿Pero qué puede hacer un padre?", justificó su actuación política cargado de razones personales.

El Baltar de enero de 2010 que hacía el paseillo cargando sobre la adrenalina de su euforia a su retoño por los pasillos del Palacio de Congresos de Expourense era un Baltar en retirada: enfermo, cansado y con un hijo pugnando desde hacía ya años por levantar cabeza en la política.

Se había acabado su ciclo. Con la misión cumplida, a fórceps, de colocar a su hijo le restaba ya solo legarle la otra parte de la herencia: la finca de la Diputación, el verdadero poder, la máquina de empleos que son votos (un millar de trabajadores, a tercera *empresa* en empleos de la provincia, con cargos en el partido o vinculados a él). Lo hizo ayer, aunque llevaba meses intentándolo. El pasado julio incorporó a su hijo, ya presidente del partido, a la Diputación como suplente. Nadie en el PP duda de que su acceso a la presidencia tardará en llegar lo que tarde en resolverse la maraña burocrática de las dimisiones de un par de diputados. Estaba todo atado.

La historia política de Baltar es la historia del juego de fidelidades e infidelidades que el antiguo maestro de la escuela de Luintra domina a la perfección. Fueron los fieles alcaldes -la mayoría procedentes de la extinta Coalición Galega fundada por Eulogio Franqueira, el ideólogo y promotor de Coren- los que arribaron con él a las filas populares en 1991 procedentes de un partido minoritario, Centritas de Ourense, para asentarse en el PP de Fraga y hacerlo suyo en la provincia para siempre.

A *El león de Vilalba*, Baltar le lanzó el primer órdago en 2003, tras el *Prestige*, con el encierro en un piso de la ciudad de As Burgas de los seis diputados autonómicos ourensanos, encabezados por su hijo, dispuestos a poner en jaque la mayoría del presidente si no les entregaba la cabeza del secretario general del partido, Xesús Palmou y rehabilitaba a Xosé Cuíña. Fraga cedió y Baltar reafirmó su poder.

El segundo órdago al PP gallego fue en 2009. Baltar inflamó otra vez la fidelidad de los suyos (alcaldes y concejales) que firmaron una carta de tres folios de descalificaciones contra el trato de Feijóo -con la mayoría parlamentaria pendiente del voto del hijo del barón- hacia Ourense. Le exigían un cambio en su actitud con la provincia y consideración hacia su presidente. La epístola no era sino el anticipo de la guerra a muerte por colocar a su hijo al frente del partido en el congreso que finalmente ganó con una proclama ourensanista que marcaba la distancia con el humillado aparato del PP. Desde que accedió a la presidencia de la Diputación y del PP de Ourense hace 22 años, José Luis Baltar no ha hecho más que acumular poder para legárselo a su vástago.

Su retirada dejará la estructura institucional y política del PP de Ourense en manos del teniente de alcalde de Esgos -tendrá que renunciar al escaño autonómico- que en los últimos tiempos se ha dejado querer por Feijóo en Santiago mientras en la finca provincial deshacía a su antojo las consignas que allí abrazaba. Baltar, el sucesor de Baltar, no ha dejado de proclamar, desde su acceso a la presidencia del partido, su ourensanidad política apelando a la herencia galleguista de la Xeración Nós como signo de identidad propia (lo escenificó emitiendo carnés de afiliación específicos del PP de Ourense). Exactamente como antes había hecho su padre desde aquel partido de Centristas de Ourense desde. El adiós del "cacique bueno" deja al PP provincial en manos de un heredero de menor empatía y con el que los alcaldes no contrajeron la fidelidad derivada de los empleos. Y se va sin haber asumido ningún coste político ni judicial por su desenfundada política de enchufes, que nunca negó.

www.elpais.es 25.01.12

LA FÁBRICA DE EMPLEOS DE BALTAR

La Diputación de Ourense gasta un 41% en sueldos y sólo un 15% en obras

Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar (PP), se le conoce, además de por las reiteradas acusaciones de nepotismo que le lanza la oposición, por sus escasos reparos a la hora de gastar y por hacerlo con cierta extravagancia.

Valga de ejemplo la cena que uno de los organismos dependientes de la institución, el Inorde, organizó en A Limia en 2009, a la que invitó a más de 700 personas, o los 3.000 euros que el pasado mes de mayo, y a la salida de un mitin, entregó en mano a un alcalde como anticipo de una subvención, dinero

que según explicó días más tarde, adelantó de su bolsillo para la instalación de un sistema de aire acondicionado.

Un organismo de la diputación llegó a organizar comidas para 700 personas

Gastos de funcionamiento

Esos gastos puntuales hacen que Baltar, que afronta su sexto mandato al frente de la institución provincial, salte a los medios y los partidos de la oposición le exijan explicaciones, pero a la Diputación ourensana la mayor parte del dinero, un 63%, se le va en gastos de personal y en los llamados gastos corrientes.

De los 73 millones de euros presupuestados para este año casi 30 (el 41%) están reservados al pago de las nóminas de 286 funcionarios, 410 trabajadores fijos y un eventual. En total, casi 700 empleados según el cuadro de personal aprobado a comienzos de año.

La diputación subvenciona hasta viajes a Fátima y Lourdes

Pero la diputación también realiza numerosos contratos temporales y cuenta con tres organismos autónomos el Inorde, el Padroado Provincial de Turismo y la Sociedade Urbanística Provincial de Ourense que tienen sus propios presupuestos y plantilla. El portavoz del PSOE en la Diputación, Ignacio Gómez, advierte de que de octubre a junio se han firmado unos 170 contratos temporales y se han convocado 50 nuevas plazas de funcionario.

Todo ello a pesar de que la deuda de la institución provincial se aproxima al máximo legalmente permitido, lo que ha hecho que Baltar se haya apuntado al discurso de la austeridad.

El pasado mes de junio anunció un recorte en materia de personal, pero aclaró que sólo afectaría a los contratos temporales, por lo que en la práctica la plantilla se mantendría casi igual: más de 700 trabajadores fijos, en su mayor parte cargos del PP, familiares o militantes, según denuncia el PSOE. Pero además, a pesar de las declaraciones del veterano político, la Diputación anunciaba este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de una docena de nuevos contratos temporales.

La oposición socialista exige la realización de una auditoría de cuentas

Ni sus propias medidas para "apretarse el cinturón" ni los tirones de orejas que le ha dado el Consello de Contas parece que vayan a ser efectivos y Baltar mantiene su sistema de contratación y prácticas como la de otorgar subvenciones sin una convocatoria pública "para tanatorios o viajes a Fátima y Lourdes", como destacan los socialistas, que en el próximo pleno tienen previsto solicitar una auditoría.

Duplicidades

El portavoz del BNG en la Diputación, Xoán Xosé Jardón, recuerda que su formación reclama la supresión de las diputaciones desde hace años y denuncia las "flagrantes duplicidades" que se dan en materia de competencias, que de evitarse ahorrarían a la institución ourensana "entre nueve y diez millones de euros". "Los centros ecuestres los habría que suprimir y las granjas se podrían transmitir a la Consellería de Medio Rural o alquilarlas", comenta.

El presidente provincial repartió dinero en mano en plena campaña

Para Jardón, "las diputaciones tienen que ser un instrumento de cooperación, no de control político" y es "el porcentaje en inversión real lo que incide en la calidad de vida de los ciudadanos". Porcentaje que la Diputación de Ourense fijó este año en un 15%, frente al 41% reservado a gastos de personal, cifra que prácticamente duplica la de cualquier otra diputación gallega

www.publico.es 21.08.11

PARIENTES DE CANDIDATOS DEL PP OURENSANO COPAN APROBADOS EN LA DIPUTACIÓN

José Luis Baltar blinda a su hijo para las municipales con una nueva remesa de aprobados en la Diputación. El mismo día en que el presidente provincial del partido, José Manuel Baltar Blanco, presentaba -en el edificio cultural de la institución provincial- la lista al Ayuntamiento de Ourense que encabeza el parlamentario Rosendo Fernández, su padre colgaba en la Diputación los nombres de 67 aprobados en el primer examen para siete plazas de auxiliar administrativo y de tres aprobados más para dos puestos de auxiliar de la Presidencia de la Diputación.

Entre los aprobados figuran el candidato número 8 de la lista, el ex árbitro de fútbol internacional Bernardino González; el hijo del candidato número 9, Odilo Masid; el hijo del número 13, Aurelio Gómez Villar; la cuñada del número 14, José Araújo Fernández, y la hija del número 25, el exalcalde Antonio Caride Tabarés. Este y el también exalcalde Jorge Bermello cierran la primera candidatura municipal de Ourense elaborada por el sucesor de José Luis Baltar.

La candidatura de la capital ourensana incluye una sorpresa en el quinto puesto, Guillermo Collarte, expresidente de Tragsa y ex director general de la Xunta, especialista en transportes y urbanismo que gestiona en la capital española el grupo Isolux-Corsán y al que en el sector antibaltarista daban por afín. Tras Rosendo Fernández y José Luis Baltar, ocupa el tercer puesto la economista Beatriz González-Tejada, y el cuarto, la actual concejal Mónica Mourelo. El independiente captado por Baltar Blanco hace unos meses para el PP provincial, funcionario municipal y presidente del comité de personal del Ayuntamiento por USO, José Luis Valcarce Baiget, va en el sexto puesto.

Pero José Luis Baltar no ha aprobado en la Diputación solo a personas vinculadas a esta candidatura. También han superado los primeros exámenes para las plazas mencionadas otros candidatos en listas de la provincia o parientes suyos. Es el caso de la compañera del transfuga socialista Eladio Fernández, el primer fichaje estrella de Baltar Blanco apenas alcanzó la presidencia provincial del partido.

Además han superado las pruebas la sobrina del alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto; el hijo del vicepresidente de la Diputación y alcalde de Muíños, Plácido Álvarez; la cuñada del exalcalde de Xinzo de Limia, Isaac Vila; la nuera del alcalde de Montederramo, Juan Francisco Rodríguez; la candidata a la alcaldía de Cenlle en 2007, Ana Jovita González Pérez; la nuera del exalcalde de Amoeiro, Manuel Fernández Rincón; la hija del concejal del PP en Castro Caldelas Camilo Cid Pérez; la hija del alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño; la concejal de Cea María del Mar Conde Seco y la nieta del alcalde de Lobeira, Emilio Higuero Cardoso, entre otros

Junto a ellos, figuran entre los 67 aprobados de este primer examen para las siete plazas de auxiliares administrativos varios compromisarios que contribuyeron a la victoria de Baltar Blanco en el congreso provincial del año pasado. Es el caso de Inmaculada Fernández y Paula Plaza. Se suma a la lista otra sobrina -ya tiene a cuatro y a su cuñada trabajando en la institución- de Gerardo Martínez, uno de los secretarios de Baltar, y los hijos de varios presidentes de distritos del PP de la ciudad.

Los aspirantes del PP competirán por los escasos empleos en otro examen convocado para el 29 de abril. Nadie en el partido duda de que todos trabajarán con ahínco en estas municipales para darle una victoria a Baltar.

www.elpais.es 09.04.11

BALTAR CONTRATA TEMPORALMENTE Y A DEDO A MÁS CARGOS DEL PP Y FAMILIARES SUYOS

Mientras el presidente provincial del PP de Ourense, José Manuel Baltar, hace campaña arropado por Feijóo en la provincia, su padre, el presidente de la Diputación, sigue dando empleos. Al proceso opositor abierto el mes pasado por el barón del PP en la institución provincial, por el que se convertirán en funcionarios más de medio centenar de personas -la mayoría vinculados al PP: son fundamentalmente quienes se presentan- ha sumado estos días la contratación "a dedo" de eventuales. Este nuevo personal, contratado por tres o seis meses, se va convirtiendo en fijo con el tiempo.

Entre los empleados recientemente figuran Roberto Ameijeiras, concejal de O Carballiño y expresidente de Nuevas Generaciones. Su contrato es de personal laboral interino para un puesto de "agente de obras y servicios". Junto a él, Baltar ha empleado como personal laboral con categoría de vigilante de peón agrícola a José Enrique Fernández Tesouro, integrante de la candidatura del PP de Baños de Molgas en las pasadas elecciones municipales, y a José Manuel Fernández Trigás, sobrino del alcalde

de Celanova, como personal laboral interino con categoría de técnico de desarrollo en procesos informáticos. Otro de los contratados recientemente es María Lourdes Pérez, hija del concejal del PP y candidato a la alcaldía de Ribadavia en 2007, José Pérez Iglesias. Su puesto eventual será de técnico superior en administración financiera y tributaria.

Los Baltar se centran en la campaña que pone a prueba dentro del PP la capacidad del nuevo presidente además de la supervivencia política de su padre al frente de la Diputación, donde permanece desde hace más de dos décadas.

Baltar Blanco fichó hace unos meses para el PP al funcionario municipal de la ciudad de Ourense que años anteriores encabezaba una lista de independientes respaldada con cerca de 2.000 votos,. Se trata de José Luis Valcarce, que se da como seguro en puesto de salida en la candidatura de la capital provincial. Ahora, su número dos en aquella lista conservadora, José Manuel Fernández, encabeza una nueva formación independiente con las confusas siglas POLI (Partido Ourensano Liberal Independiente), el apodo por el que es conocido en Ourense el exalcalde y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Enrique Nóvoa, defenestrado por José Manuel Baltar Blanco y sustituido por Rosendo Fernández. José Manuel Fernández es el abogado del ex alcalde de Os Blancos, José Antonio Rodríguez Ferreira -el más baltarista de los alcaldes de la provincia: levantó un busto al presidente en su pueblo y aseguraba únicamente creer "en Dios, en la Virgen y en José Luis Baltar"- actualmente encarcelado por malversación de caudales públicos y falsedad documental.

www.elpais.es 19.03.11

LA IMPOSICIÓN DE CANDIDATOS POR BALTAR PROVOCA ESCISIONES LOCALES EN EL PP

Críticos al barón ourensano dejan el partido y crean formaciones independientes

El nuevo líder del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, afronta su primera prueba de fuego -la elaboración de las listas de las municipales- apostando por la renovación. Esto es, laminando a quienes se alinearon en el congreso provincial del año pasado con el candidato de Feijóo y apoyándose en sus fieles y en fichajes de independientes.

Baltar Blanco prescindió en A Mezquita del portavoz del PP , exalcalde y diputado provincial Francisco José Montesinos, respaldado por más del 90% de la militancia. Les avisó por carta de que la potestad en la elección de los candidatos en municipios de menos de 20.000 habitantes (todos, salvo las grandes villas) la tenía él. Designó a dedo a Roberto Diéguez y el exregidor desafió al presidente anunciando la baja en el partido y la creación de una lista independiente con todos los que lo arropan en el PP.

En Carballada de Valdeorras, el presidente provincial ha querido jugar sobre seguro. Ha fichado para encabezar la lista a la alcaldesa, durante décadas, Carmen González, una exsocialista que ha renovado mayorías absolutas como independiente en los últimos mandatos. La portavoz del PP en el municipio exigió explicaciones, pero descartó presentar lista alternativa.

En O Barco de Valdeorras, Baltar consolida el poder de su hombre de confianza, Moisés Blanco. Aquí también ha depurado a los fieles a Feijóo y se adelantó a la confección de las listas retirando a dos de las concejales críticas de la asistencia a las comisiones municipales. En su lugar designó a dos de sus adeptos.

En su intención de hacer un partido a su medida y prescindir de los alineados en el sector del presidente del PPdeG, el presidente provincial ha elegido para encabezar la lista de Ribadavia a Pilar Rodríguez, una militante que ha estado viviendo hasta ahora en A Coruña. "Hay que estar atentos a ver si aparece contratada en la Diputación", ironizan los críticos populares al baltarismo.

En Amoeiro, la escisión de los críticos también pasa factura. Tres concejales abandonaron el partido cuando Baltar incorporó al nieto -y lo empleó en la Diputación- del exalcalde popular. Los escindidos formalizaron lista independiente.

La situación es especialmente compleja en Xinzo. Baltar prescindió del histórico Isaac Vila hace unos meses y colocó al frente de la alcaldía al penúltimo de los concejales, Antonio Pérez, de su confianza. La elección generó un cisma. El también edil del PP, Alfonso Patricio, se abstuvo, denunció "las formas" de su partido y ahora estudia encabezar una lista integrada por descontentos del PP. El anuncio hizo

reaccionar a Baltar. Isaac Vila promueve, según fuentes de este mismo partido, otra candidatura independiente "para que los votos de los descontentos se dividan entre las dos opciones y no vayan al PSOE", analizan los críticos. Mientras tanto, Feijóo hace campaña en la provincia de Ourense arropando a Baltar Blanco.

Una fuerza llamada POLI

Con la provincia de Ourense sembrada de escisiones del PP, en la capital se ha registrado un partido con las sonoras siglas de POLI (Partido Ourenzano Liberal Independiente), el apodo por el que es conocido el ex alcalde y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Enrique Nóvoa. Éste, que se ha desvinculado por completo de ese proyecto, perdió el apoyo de Baltar cuando se alineó, en el congreso provincial, con el sector de Feijóo.

Los críticos del PP al baltarismo sospechan que el POLI podría estar impulsado por el propio presidente de la Diputación ourensana para evitar que los votos de los descontentos de su partido puedan acabar en el PSOE.

www.elpais.es 17.03.11

BALTAR REPARTIÓ CONTRATOS A DEDO A LA EMPRESA FAMILIAR DE MIRANDA

Las adjudicaciones se frenaron tras el conflicto del barón con el 'número tres' del PP

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ha mantenido una intensa relación comercial con la empresa familiar del portavoz del PP gallego y candidato a la alcaldía de Allariz, Antonio Rodríguez Miranda. Baltar ha adjudicado, sin convocar concurso público, desde 2000 y hasta 2010, a la empresa del padre del *número tres* del PP gallego, compras de material agrícola por importe de miles de euros. La relación económica entre la Diputación y la empresa de la familia del portavoz de los populares es una radiografía de la confianza política que en los últimos años ha oscilado entre Baltar y Miranda.

La Diputación ha estado 10 años comprando material agrícola a la firma

Mientras el concejal y portavoz del PP de Allariz -nacido a la política bajo la protección de Baltar- mantuvo su fidelidad al barón ourensano, las compras a la empresa paterna fueron en aumento. A medida que Miranda comenzó a distanciarse del presidente provincial y a alinearse en el sector de Feijóo, hasta situarse en su núcleo duro, el volumen de las adjudicaciones de la Diputación a la empresa paterna fue decreciendo.

En 2000, Comercial Pardavedra, de la que figura como titular Antonio Rodríguez Piñeiro -padre de Rodríguez Miranda- recibió a dedo adjudicaciones de la Diputación para abastecer a la institución provincial de medicamentos de ganado, piensos y calizas para fincas por importe de 790.653 pesetas.

Rodríguez Miranda era entonces un prometedor político en las filas baltaristas que ejercía la oposición en la difícil plaza de Allariz, gobernada con mayoría absoluta por el BNG y donde el PP era apenas una opción testimonial. En 2001, las compras de la Diputación a Pardavedra incluyen, además de los elementos mencionados, otros como vestuario para el personal de las granjas de la institución, semillas, abonos, salvados, raticidas y virutas. El importe de la factura que cobra ese año la empresa de Rodríguez Piñeiro alcanza los 3,5 millones de pesetas.

En 2002, la relación política entre Baltar y Rodríguez Miranda era ya sólida. Ese año, la Diputación le adjudica a la empresa familiar -además de los productos ya mencionados- "materiales para el Parque Tecnológico", fertilizantes para este mismo recinto empresarial, sulfatadoras de plástico, cepillos, pilas, hilos, sacos, desinfectantes y mangueras. El importe supera los 11.000 euros.

Las compras continúan en 2003. La Diputación necesita ese año mucho más material y la factura a la empresa del padre del portavoz del PP gallego se dispara: más de 40.000 euros por la compra de piensos, fertilizantes, calizas, cordeles de empaquetar y sacos, útiles y abonos adjudicados directamente, sin acudir a concurso público.

En 2004, los gastos a Pardavedra se incrementan hasta superar los 42.000 euros y se mantienen prácticamente igual en 2005, el año de las autonómicas que gana el bipartito (PSdeG-BNG) y en el que Baltar destierra a Feijóo de la lista de Ourense -que encabeza una hasta entonces desconocida Amparo González Méndez, respaldada por José Manuel, hijo del barón- y en la que Miranda ocupa el puesto número cinco. La firma de Rodríguez Piñeiro recibió ese año 35.503 euros por compras de material agrícola a las que no pudieron optar otras empresas del sector.

En 2006 -año de la elección de Feijóo como presidente del PP- empieza a bajar, aunque ligeramente, la facturación de la institución provincial a Pardavedra. La Diputación le compra ese año material por 25.675 euros. Pero cuando la relación comercial se pone fea es en 2009, año de la victoria electoral de líder del PP gallego. Alberto Núñez Feijóo designa entonces como su *número tres*, y persona de estrecha confianza, a Antonio Rodríguez Miranda. La facturación de la Diputación a Pardavedra cae ese año en picado: las compras no llegan a los 5.000 euros.

Confianza traicionada

El secreto mejor guardado de Alberto Núñez Feijóo en el congreso regional del PP de 2009 - la elección de Antonio Rodríguez Miranda como portavoz y vicesecretario del partido- fue destripado por un impulsivo y entusiasta José Luis Baltar. El veterano político ourensano no esperó a la celebración del cónclave para anunciar lo que consideraba un éxito político personal. "Será Toñito", Rodríguez Miranda, el elegido, dijo cuando la dirección del partido en A Coruña creía que tenía opciones para esa cuota territorial.

José Luis Baltar confiaba en Toñito, creía que colocaba a su hombre de confianza cerca de Feijóo y que ello le allanaría el camino en el mantenimiento de su poder territorial dentro de la estructura del PP gallego.

No fue así. Miranda -a quien los baltaristas acusan de haber actuado como "doble agente"- peleó a cara de perro contra la candidatura del hijo del barón provincial, José Manuel Baltar, cuando este se hizo con las riendas del partido. La confianza política se quebró y Baltar se sintió traicionado. Y a partir de entonces las compras de la Diputación a Comercial Pardavedra cayeron en picado.

www.elpais.es 08.03.11

FEIJÓO, SOBRE BALTAR: "YO SOLO SOY RESPONSABLE DE LA XUNTA"

El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez, condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios, imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por ninguno de sus dos bastiones en la provincia.

"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.

Contención del gasto

Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que "Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".

No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.

"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las consecuencias".

www.elpais.es 03.03.11

EL ASESOR JURÍDICO DE BALTAR RENUNCIA A ESTAR EN EL TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN DE SU HIJA

Feijóo se desentiende de las denuncias por nepotismo en la Diputación ourensana

Al día siguiente de que este periódico publicase que la hija del asesor jurídico de José Luis Baltar optaría, mediante una oposición en la que el secretario sería su padre, a una plaza en la Diputación de Ourense, José Eugenio Galindo renunció a su puesto en el jurado de las pruebas. Así lo ratificaba ayer el *Boletín Oficial da Provincia*, en el que, además, el presidente del ente provincial firmaba la convocatoria de 53 nuevas plazas de funcionarios. José Eugenio Galindo, jefe de los servicios jurídicos del organismo público, seguirá, no obstante, como secretario de las otras 52 pruebas.

Mientras las denuncias por nepotismo en el Diputación ourensana se suceden -400 de los 475 ediles del PP en la provincia trabajan o tienen familiares contratados en la institución-, el presidente del partido y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prefiere desentenderse de los hechos. Ayer, en una entrevista en Radio Nacional de España, reclamó "argumentación" y empleo de "los mecanismos de la democracia" a la oposición que señala las prácticas de Baltar.

Preguntado por el periodista acerca de si consideraba que las protestas de PSdeG y BNG estaban "argumentadas", Feijóo se limitó a responder: "Si la pregunta fuese sobre la Xunta, me pronunciaría con intensidad; pero como se trata de otra administración, le corresponde a los dirigentes de esa administración responder". El líder popular aseguró no desconocer que esos dirigentes pertenecen a su partido y también admitió saber de la existencia "de acusaciones al respecto". "Yo creo en el mérito y en la capacidad a la hora de evaluar opositores", añadió, "y si hay alguna cuestión, que se investigue".

www.elpais.es 22.02.11

400 EDILES DEL PP TRABAJAN O TIENEN FAMILIARES EN LA DIPUTACIÓN OURENSANA

La mitad de los empleados del organismo están vinculados al partido de Baltar

A un minuto del comienzo de cada campaña electoral -las cero horas-, el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, toca el trombón. Baltar sopla *forte*, con la cara congestionada, ante el resto de dirigentes y militantes de los otros partidos que, como el suyo, finalizan la simbólica pegada de carteles. Acompañado por una orquestina con bombo y el núcleo duro de sus afines -una facción del partido-, el barón del PP entona la canción del carrito de los helados con traca final de su cosecha: *Y si no eres del PP, jódete, jódete*. Así, desde hace dos décadas: las que ha estado al frente del PP provincial y las que lleva en la presidencia de la Diputación, a la que vuelve a aspirar.

Hay 33 porteros para tres puertas, y sigue convocando más plazas

El PP tiene 485 concejales repartidos en los distintos ayuntamientos de la provincia. La Diputación emplea en este momento a 400 concejales (75 son ediles o alcaldes en activo) o parientes directos de éstos: mujeres, hijos, padres, hermanos y sobrinos. Es por número de trabajadores la segunda *empresa* de la provincia, después de Coren, y prácticamente infranqueable para quien no sea *baltarista*. Ahora cuenta con 950 empleados: los 400 alcaldes, concejales o sus familiares directos y otra mitad -con excepción de un puñado y de los que accedieron a la institución antes que el presidente-, de militantes del partido. Como el representante de Comisiones Obreras en la institución, concejal a su vez del grupo de Gobierno del PP en Esgos, el feudo del barón ourensano. En su pueblo natal gobierna

su cuñado y es teniente de alcalde su hijo, José Manuel Baltar, el parlamentario autonómico y sucesor del progenitor en la presidencia provincial del partido desde el año pasado.

Entre el mes anterior y el siguiente al congreso que eligió a su hijo, Baltar colocó a más de 200 eventuales, según una denuncia del PSOE a la Fiscalía -que va ampliando poco a poco- y del sector crítico del propio PP en la campaña del congreso. A esos 200 los contrató (por tres o seis meses) sin la firma de la Intervención provincial. Después fueron a votar al congreso del partido. Como una buena parte de los funcionarios de la Diputación. El hijo que le sucedió en el cargo barrió al candidato de Feijóo y Rajoy.

La práctica contratadora de Baltar que los de Feijóo denunciaron en la campaña congresual viendo lo que se les venía encima, se repite en las citas electorales. Ya en sus vísperas se disparan las oposiciones aprobadas por familiares o cargos del PP y las contrataciones masivas -también de afines al partido- por periodos pequeños de tiempo, que en muchos casos el presidente acaba renovando.

Entre 2007 y 2009, Baltar empleó en la Diputación, con contratos temporales, a 106 personas que integraron listas del PP en los 92 ayuntamientos de la provincia; a 79 concejales (algunos alcaldes o exalcaldes) y a unos 120 parientes de estos.

También encontraron empleo en la Diputación varios altos cargos del PP: presidentes locales, presidentes de Nuevas Generaciones o, la más reciente y mediante oposición, la exalcaldesa de Bande (el alcalde ahora es su marido) y diputada en Cortes, Ana Belén Vázquez Blanco.

El recuento de enchufados corresponde solo a la institución. Pero, con sus dependencias abarrotadas de personal con escasa tarea -especialmente bedeles y porteros: en el edificio cultural hay 33 para tres puertas, y sigue creando plazas-, el presidente reparte a algunos contratados por ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia. En el de la capital comenzaron a trabajar, cuando gobernaba su partido, la hija y la nuera del juez Abel Carbajales.

Tras el trámite de las contrataciones eventuales, los vinculados al PP acaban aprobando oposiciones. Se convierten en funcionarios. Los que acceden a las jefaturas (todos vinculados al partido) forman el tribunal de las oposiciones que examina a las siguientes tandas, y sigue la rueda. Aunque ahora comienza a haber problemas: llegan las segundas generaciones y se dan casos, como el del jefe de los servicios jurídicos de la institución, que está en la lista (como suplente del secretario, que hace años delega en él) del tribunal que debe examinar a su propia hija.

Familias enteras -siempre vinculadas a alcaldes, concejales o candidatos- comparten además del vínculo sanguíneo, el del empleo en la Diputación. Y hay municipios históricos en los que los parientes de alcaldes y concejales que cada uno de ellos aportan a la institución pública suman e incluso superan la veintena: Esgos, Nogueira de Ramuín (donde Baltar fue maestro), Vilamarín y Cea.

Jornada laboral con familiares y vecinos amigos

No todos los alcaldes o cargos del PP corren la misma suerte cuando intentan emplear a los suyos. Hay que estar especialmente capacitado para la Diputación. Jaime Sousa, concejal de Cartelle, no solo consiguió él mismo un puesto de trabajo: también sus dos hermanos, una hija y una sobrina. Hay sagas familiares que se perpetúan. El anterior secretario de la institución se jubiló por edad, pero sus tres hijos y una de sus nueras tienen plaza en la Diputación. Uno de los administrativos de la secretaría del presidente, Gerardo Martínez, comparte jornada laboral con su cuñada y cuatro sobrinos. La hija, el yerno, una nuera y un nieto del exalcalde de Amoeiro (ahora gobierna el PSOE) también tienen ahí empleo. El alcalde de Cea y diputado provincial José Luis Valladares comparte la jornada laboral con sus tres hijos y una cuñada. La lista es interminable.

Valladares no solo se encuentra a su familia en el trabajo, también a media docena al menos de vecinos de su municipio, todos vinculados a él como candidatos -o sus hijos- de su lista. Pero muchos más empleados de su pueblo aporta el alcalde de Vilamarín, el senador Amador Vázquez. Además de su yerno, también consiguieron empleo en la Diputación 16 vecinos (concejales, candidatos de su lista y parientes de unos y otros).

Nogueira de Ramuín, pueblo de adopción de Baltar, aporta nueve empleados-candidatos del PP y Esgos, el feudo del presidente, donde gobierna su familia y donde él tiene su finca, se lleva la palma: 10

empleados vinculado a la candidatura y alguna familia completa. Es el caso de los Batista: cinco hermanos y los cónyuges de dos. Además, consiguieron empleo otros vecinos del municipio que se deshicieron de unas parcelas de su propiedad que acabaron integrando la finca de Baltar. En la Diputación están también cuatro hijos del exalcalde de Esgos.

Pero no todo va para los hijos de sus concejales. Las dos exnueras del presidente tienen puestos bien remunerados, una como gerente del Teatro Principal y la otra, en el Instituto de Desarrollo Económico (Inorde). Recientemente, un conculado de su hijo, presidente provincial del PP, se hizo con una plaza de técnico en Recursos Humanos.

El PSOE acusa a José Luis Baltar de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y coacciones en relación con las "contrataciones a dedo". Baltar quitó hierro a la denuncia. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", dijo. "Si hay alguna irregularidad, ya la corregiremos". Desde entonces, y tan cerca ya de las elecciones, ha abierto más de 70 procesos de empleo.

La batalla por el empleo ya solo la libran los militantes

"La fábrica de contrataciones del PP", repite la oposición (PSOE y BNG) cada vez que se refieren a la Diputación de Ourense. Los métodos "clientelares" de su presidente han sido denunciados hasta la saciedad. Con una deuda en el límite legal -casi el 107%- y un gasto de personal de 11,5 millones de euros, que casi triplica la inversión real, Baltar habla un día de la necesidad de que la institución "se apriete el cinturón" y, al siguiente, abre un nuevo proceso de contrataciones.

La mayoría de los aspirantes que concurren están vinculados al PP. La presencia de opositores ajenos al partido es simbólica. La batalla por entrar en la Diputación la libran ya solo los propios militantes, aseguran los grupos de oposición.

En el proceso de acceso al empleo en la Diputación los tráfugas también suelen tener suerte. Entre ellos, el marido de la alcaldesa de Porqueira, Susana Dorado, quien en su día encabezó la lista del PSOE en ese municipio. Tras ganar la alcaldía con el apoyo del BNG, se dejó conquistar por el PP, al que entregó la alcaldía que ella misma preside desde entonces. Su marido consiguió más tarde el empleo. No es el único caso.

Ahora, con más de medio centenar de plazas convocadas desde hace un mes, pugnan por hacerse con un empleo fijo en la institución una lista ingente de parientes de numerosos cargos del partido, descendientes de alcaldes, exalcaldes, concejales y candidatos en distintos municipios, además de la hija del asesor jurídico de Baltar. Compiten en concurso oposición y son los hijos de los alcaldes históricos y del núcleo duro del presidente quienes forman los tribunales examinadores.

Feijóo, que prometió acabar con el caciquismo, guarda silencio. Rajoy proclama en las campañas electorales en las que necesita los votos de Ourense que "Baltar es el PP". Y la Justicia aún no se ha pronunciado.

Las academias ourensanas, que forman y exportan a centenares de funcionarios de esta provincia a distintos puntos del territorio español, reconocen que no preparan a alumnos para las oposiciones de la Diputación. No tienen demanda suficiente para llenar un aula.

www.elpais.es 20.02.11

EL PSOE CIFRA EN 12 MILLONES LOS SUELDOS DE BALTAR A AFINES AL PP

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, dedica del presupuesto de la institución 12 millones de euros al año para pagar, "la estructura política del PP", según una denuncia de los socialistas gallegos. Esto es, a una plantilla integrada en su práctica totalidad por cargos públicos del partido, que preside su hijo en Ourense, o a familiares de estos. El capítulo de personal de la institución suma ya más gasto que el que reserva para este mismo cometido la Diputación de A Coruña mientras el sempiterno barón ourensano amenaza con seguir engordando esa nómina.

La tercera parte del presupuesto de la institución provincial se consume en "pagar favores políticos" del barón ourensano del Partido Popular quien en los últimos 14 meses -desde la víspera del congreso

provincial de su partido hasta ahora- "contrató a 542 personas", incluida una diputada. El secretario de organización del PSdeG, Pablo García y el responsable de política municipal del PSOE ourensano, José Arcos, denunciaron ayer no ya el clientelismo de Baltar, que lleva a cabo unos procesos selectivos "ilegales" siempre en vísperas de un proceso electoral interno o público, sino que la Justicia y la dirección del PP gallego "miren hacia otro lado".

Los socialistas responsabilizan a Alfonso Rueda, secretario general del PP y conselleiro de Presidencia, responsable de los procesos públicos de selección de personal, de mantener, "igual que Feijóo", un silencio clamoroso ante las oposiciones que realiza Baltar, presididas por cargos públicos del PP o familiares de estos, que examinan a otros cargos populares, o familiares de estos, a quienes aprueban masivamente.

García apuntó directamente al presidente nacional del partido. Recordó que no es solo que Rajoy proclamase en la campaña de las autonómicas, -cuando Feijóo necesitaba los votos de Ourense para gobernar- que "Baltar es el PP", sino que "ampara sus ilegalidades". "Que Rajoy y Cospedal expliquen este fin de semana que vienen a hablar de austeridad, por qué consienten que Baltar gaste 12 millones de euros en pagar favores políticos en una provincia con 28.000 parados".

Los socialistas han incorporado las últimas noticias publicadas sobre el nuevo proceso de selección de personal abierto estos meses por Baltar -creará 75 nuevos empleos y se presentan una vez más a estas oposiciones masivamente cargos vinculados al PP- a la denuncia que presentaron hace unos meses a la Fiscalía.

Familias enteras

El PSOE cifra en varios centenares el número de contratados en vísperas del congreso provincial que entregó la presidencia del partido provincial a su hijo, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco. Ahora, sostiene que "es absolutamente ilegal que el asesor jurídico de la Diputación y padre de una de las aspirantes a un empleo, José Eugenio Galindo, figure como miembro del tribunal".

La fábrica de contratación de cargos del PP en que se ha convertido la Diputación de Ourense llega al extremo de que haya familias enteras con plaza en la institución provincial. Los socialistas citaron el caso de Maceda. Baltar ha empleado a la mujer, cuatro cuñados y un sobrino de uno de uno de sus concejales en ese municipio. "No es más que un ejemplo", dicen.

www.elpais.es 13.02.11

LA HIJA DE UN ASESOR DE BALTAR OPTA A UNA PLAZA CON SU PADRE EN EL TRIBUNAL

Baltar no cesa. El presidente de la Diputación mantiene abierta hasta las elecciones de mayo una oferta de empleo por la que colocará a 53 personas más en el saturado organismo provincial. En esta ocasión, a la larga lista de aspirantes vinculados al PP admitidos se añade Ángela Galindo, hija del jefe de los servicios jurídicos de la Diputación, José Eugenio Galindo, quien desde hace más de dos años actúa como secretario de los tribunales opositores en sustitución del secretario, Francisco Cacharro Gosende, que delega siempre esta responsabilidad. En las oposiciones a las que se presenta la hija de Galindo, para una plaza de administrativo, su padre figura también como suplente de Cacharro.

Galindo rehusó ayer hablar con este periódico. El secretario de la Diputación asegura que en esta ocasión Galindo tendrá que abstenerse de participar en el tribunal opositor. "Sería ilegal", admite Cacharro Gosende. Pese a que Galindo asume desde hace años esa responsabilidad en los tribunales que aprueban masivamente personas vinculadas al PP, no está obligado a hacerlo. "Cualquier jefe de servicio puede cubrir esa función", dice Cacharro.

El hecho de que Galindo figure como suplente del secretario en el tribunal que decidirá si su hija se hace con la plaza ha alarmado incluso al personal de la Diputación. Aunque Galindo sea sustituido en el tribunal que calificará a su hija -quien competirá con 70 personas por una sola plaza- ella será examinada por los compañeros que habitualmente comparten con su padre esta tarea: José Luis Suárez (hijo del alcalde del PP de Monterrei), Manuel Valentín (hijo del ex alcalde del PP de San Amaro) y José Antonio Blanco (representante de CC OO en la Diputación y concejal del PP Esgos, donde gobierna el cuñado de Baltar padre y donde Baltar hijo es teniente de alcalde). En la lista de los suplentes, además del propio Galindo figura Montserrat Rodríguez (esposa del candidato del PP en O Carballiño).

La hija de Galindo no lo tiene fácil. Tendrá que competir con otros destacados militantes del PP. Entre ellos, Sandra Rodríguez, la portavoz del grupo popular en Calvos de Randín, quien, con el apoyo de un tráfuga del PSOE, promovió durante tres años una moción de censura contra el alcalde socialista que el último día, y a regañadientes, Baltar les obligó a retirar.

Junto a la hija de Galindo, aspiran a la misma plaza David Pérez, hijo del ex alcalde de Coles; Margarita Pérez, candidata en Esgos; Emilio Formoso, candidato en Ourense; Iago González, hijo de un concejal de Piñor; Roberto Ameijeiras, concejal en O Carballiño; Rosa María Valladares, hija del alcalde de Cea y diputado provincial; Blanca Trapote, hija de un ex concejal del PP de Ourense; Francisco Javier Estévez, candidato del PP en Baltar; Corona Fernández, candidata en Petín; Carmen Salomé Caamaño, hija del alcalde de Boborás, y Silvia Carreño, concejal del PP en Parada do Sil.

Hay más. En la misma lista para esa única plaza figura Antonio Aydillo, cuñado del hijo de Baltar -pese a que aprobó recientemente una oposición y se hizo con la plaza de técnico superior en Recursos Humanos- y, por primera vez, aparece entre los candidatos vinculados al PP un pariente de cargo político de allende la provincia: Eugenia Tejero, casada con un concejal del PP de Crecente (Pontevedra).

Pero esta no es sino una más de las 53 plazas que hay convocadas estos días y que ha movilizado en las inscripciones para los exámenes a una multitud de militantes y parientes de cargos del PP.

Para uno de los empleos, de gestor en administración general, solo se han presentado dos personas. Una de ellas, Francisco Cougil, brazo derecho del ex socialista Antonio Troitiño y quien en los últimos años se ha presentado a las municipales por partidos independientes que, según los socialistas, solo les restaban votos a ellos. Cougil tiene ya una plaza, de menor categoría, en la Diputación y el PSOE sospecha que una promesa de ascenso podría estar vinculada a la inclusión de Troitiño en la candidatura del PP en la capital provincial.

LOS BALTAR DISCREPAN SOBRE LA INCLUSIÓN DE TRÁNSFUGAS

No hubo moción de censura en Calvos de Randín el jueves. Pero la presión política la tiene ahora el PP. Los Baltar (padre e hijo) han hecho públicas sus discrepancias. Al fracturado PP ourensano se suma otra discusión. En la decisión sobre la moción de Calvos, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, tomó el mando.

El barón del PP despachó con los ediles de su partido y el tráfuga del PSOE -"un grupo muy unido", según su propia definición- en la institución esa misma mañana; dejó en la sombra a su hijo, el presidente provincial, y cumplió el compromiso que había asumido días antes con Feijóo: retirar la moción. Haberla presentado suponía contravenir la nueva ley que entra en vigor. Otro escándalo en vísperas de la votación que el PP gallego prefiere evitar.

Pero Baltar se juega mucho en ese pequeño y olvidado municipio ourensano. Calvos de Randín está en el partido judicial de Bande, donde el veterano político puede perder uno de los dos diputados que le permiten ahora gobernar la institución provincial. El otro escaño se disputa en Trives, donde Baltar arrebató otra alcaldía también mediante moción de censura, con cuatro tráfugas del PP y dos del PSOE, a un bipartito de independientes y socialistas.

Un dilema

El presidente de la Diputación cumplió con Feijóo el acuerdo sobre Calvos. Pero para ello -los ediles se resistían a acatar la decisión- tiene que cumplir ahora con el grupo de los populares y el tráfuga, José Manuel Andrade. Baltar tiene intención de colocar de número uno en la lista de las municipales en Calvos al tráfuga, según ha declarado a *Faro de Vigo*. Entretanto, su hijo y jefe provincial recibe las felicitaciones del portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, por su decisión de "de no llevar tráfugas en Ourense". Una postura que la dirección del PP gallego "comparte".

Mientras cada uno tira para un lado, el "unido grupo" de Calvos enseña los dientes. En la rueda de prensa del jueves para justificar la retirada de una moción por la que habían peleado con crudeza durante tres años, apuntaron la posibilidad de presentarse como independientes.

Una decisión salomónica que liberaría a la familia Baltar de tensiones entre sí y con la dirección del PP gallego y que, al mismo tiempo, supondría un pequeño alivio para el presidente de la Diputación ya que, al menos, restaría votos al PSOE.

www.elpais.es 05.02.11

BALTAR NO LOGRA DAR EMPLEO A TODOS LOS QUE APOYARON A SU HIJO

José Luis Baltar se enfrenta a sus demonios. El presidente de la Diputación Provincial de Ourense no consigue colocar a todos los militantes del PP que respaldaron la candidatura de su hijo en el congreso del año pasado y que aspiran a empleos en la institución provincial.

Nicolás Pérez Pereira, hijo del alcalde de Padrenda, ha superado en nota -en el tercer examen de las oposiciones para una plaza de auxiliar de administración, del subgrupo C2- a Francisco Javier Masid, hijo del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ourense Odilo Masid. Este edil es el único de los presidentes de las cinco juntas de distrito del PP de la ciudad que ha respaldado al hijo del barón ourensano en su estrategia para hacerse con la presidencia provincial del partido. El resto de los presidentes de juntas locales dimitieron en disconformidad con Baltar.

La nota de esta tercera prueba para las plazas de auxiliar no es definitiva. Se ofertan tres empleos y hay cinco aprobados. Pero Masid, con un 5,5, queda en la cola, superado en medio punto por el hijo del regidor de Padrenda. La estrategia del presidente de la Diputación y sempiterno barón del PP es clara para los populares ourensanos. Baltar colocó hace menos de dos años en la imprenta de la Diputación a la otra hija de su concejal de confianza, Susana Masid. "Tiene que repartir", sostienen fuentes del PP. Y pese a los meritorios esfuerzos del edil, su vástago tendrá que esperar. "Ya lo aprobará más adelante", sostienen las mismas fuentes.

Odilo Masid ha trabajado como pocos militantes por el sector baltarista en las repetidas luchas intestinas que protagoniza la formación conservadora. No solo fue uno de los pocos concejales del PP de la capital ourensana que se alineó en el sector de Baltar en el congreso que le dio la presidencia del partido a su hijo. Masid ofreció además el respaldo del distrito que él preside, el de Mariñamansa, a José Manuel Baltar Blanco y, tras ello, se partió el pecho en la lucha abierta en el seno de la federación vecinal Limiar, controlada desde sus orígenes por el PP -y de la que se han ido escindiendo diversos colectivos vecinales- por imponer a un candidato baltarista en contra del oficialista, alineado con la dirección gallega del partido.

Alarmados por este nuevo proceso de contrataciones de la Diputación, "en el que solo aprueban los parientes del propio Baltar y de los compromisarios que apoyaron a su hijo en el congreso", los socialistas ourensanos anuncian que incorporarán estos datos a la denuncia que han presentado a la fiscalía.

El portavoz del PSOE en la Diputación, y alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García, muestra la "indignación y consternación" de su grupo y lamenta que Baltar pueda insistir en sus prácticas "después de las múltiples denuncias que se han venido realizando". García recuerda que la institución ourensana está en el límite del endeudamiento presupuestario, "del 100%", lo que es insostenible", puntualiza.

El portavoz socialista sostiene que Ourense es ya "el último reducto caciquil de España" y arremete contra la dirección gallega del Partido Popular por respaldarlo "con su cómplice silencio" cuando el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "prometió solemnemente que acabaría con el enchufismo en un solo día".

www.elpais.es 22.01.11

UN CUÑADO DE BALTAR BLANCO DIRIGIRÁ LA POLÍTICA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN

El barón ourensano crea otras 82 plazas de funcionario en vísperas electorales

Los Baltar echan el resto. Las municipales se han convertido en el objetivo de la supervivencia política de padre e hijo. Mientras el vástago -al frente del partido desde el devastador congreso de enero del año

pasado que partió en dos al PP ourensano- intenta amarrar en la provincia los votos que permitan mantener a su padre al frente de la Diputación, este dispara su artillería empleadora. El veterano barón provincial ha convocado un centenar de plazas en la abarrotada institución que preside desde hace dos décadas. De momento, Antonio Aydillo Astorga, cuñado del presidente provincial, se hizo ayer mismo con una plaza de jefe de Recursos Humanos.

Una diputada popular logró hace unos días una plaza en la institución

La cuestionada política de personal de la Diputación, que investiga la fiscalía, estará, más que nunca, en manos de la familia Baltar. El tribunal examinador, que presiden funcionarios del PP, no ha puesto nota en la prueba que le dio la plaza de técnico especialista en Recursos Humanos al pariente de Baltar. De entre la lista de ocho aspirantes es el único que figura como "apto", aún a falta de una prueba de gallego. Aydillo accede al puesto en calidad de funcionario interino.

La oferta de empleo abierta en vísperas de las municipales por el presidente de la Diputación le permite colocar en la institución a cerca de un centenar de personas, pocos meses antes de la celebración de las elecciones municipales. Hace apenas unos días, la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez Blanco, ex alcaldesa de Bande -puesto que ahora ocupa su marido- celebraba por todo lo alto la consecución de su plaza fija en la institución provincial a la que accedió mediante oposición.

La página web de la institución informa ahora de oposiciones para otros 82 puestos de trabajo. Como siempre, la mayoría sin requisitos de titulación. Abundan los puestos de trabajo para peones y limpiadores. Junto a ellos, se convocan nuevas plazas de porteros, una para el teatro Principal y dos sin especificar el destino. La Diputación ya tiene un edificio cultural con 33 porteros. También figuran en la convocatoria siete puestos de auxiliares administrativos y cuatro de chóferes especialistas asimilados al grupo C2, entre otras.

Junto a esta amplia oferta laboral, cuyo proceso está abierto desde hace algunas semanas, el *Boletín Oficial de la Provincia* del martes día 11 de enero da cuenta de la convocatoria y bases de selección de nuevo personal. Se trata de la conversión en funcionarios interinos de algunos de los contratados por Baltar en el entorno del congreso provincial en el que su hijo, enfrentado al candidato de Feijóo, se hizo con el poder del partido en la provincia.

Mediante esta convocatoria de empleo convertirá en funcionarios interinos a un técnico de administración en desarrollo de proyectos informáticos, a otro técnico en recaudación y procesos de integración, a un operario de basuras para la Baixa Limia, a un oficial técnico de seguridad y salud y a otro técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas. Además, accederán a plazas de personal laboral interino un auxiliar técnico de deportes y un oficial para el Centro Ecuestre de Vilamarín.

Los propios funcionarios de la Diputación, acostumbrados a la política de contrataciones de Baltar, asisten asombrados a este despliegue de colocaciones. En la práctica totalidad de las listas de aspirantes a las plazas figura algún militante, o pariente, del sector baltarista del PP. "Está pagando los favores del congreso que le dio la victoria al hijo y llevando las arcas de la Diputación al límite", reprochan los críticos del PP a Baltar, a quien acusan de rebajar laboralmente a funcionarios alineados en el sector de Feijóo que hicieron campaña a favor del contrincante de su hijo en el congreso provincial.

El despliegue de la oferta de empleo se produce pese al compromiso público del propio presidente de la Diputación de que era necesario "apretarse el cinturón" y contradice abiertamente la política del PP en la Xunta. Con el proceso en marcha, todas las miradas están puestas ahora en una plaza especial, la de la secretaria del presidente. Un puesto en el que entran en colisión los intereses de varios candidatos con quienes los Baltar "están en deuda", sostienen las mismas fuentes.

El árbitro y la novia del tráfuga

José Luis Baltar no solo ha abierto una convocatoria de empleo en la Diputación, sino, con ello, también la espita para una lucha feroz entre aspirantes de su propio partido que esperan ver recompensados los "méritos" acumulados ante los dirigentes -padre e hijo- del PP ourensano. A la única plaza convocada de auxiliar de presidencia de la institución provincial han sido admitidas 30 personas. Entre ellas, figuran apellidos de históricos militantes que tuvieron, o tienen, cargos institucionales en este partido y que siguen siendo afines a la línea baltarista.

Pera la verdadera pugna está entre dos de esa treintena de aspirantes: Teresa Fontao Bande, la compañera del ex líder del PSOE ourensano Eladio Fernández, a quien Baltar Blanco fichó con bombo mediático apenas estrenada su presidencia en el partido, y el hasta hace poco árbitro de fútbol de primera división Bernardino González Vázquez.

En sectores del PP próximos a Baltar se da por hecho que este cuenta con el árbitro para incluirlo en la lista de las municipales en la ciudad de Ourense. En el caso de la compañera de Eladio Fernández, los populares entienden que los Baltar tienen que "pagar el esfuerzo" realizado por el ex socialista, quien apenas fue capaz de explicar los motivos de su cambio de afiliación. En el PP de Ourense no se descarta tampoco -Baltar Blanco elude responder a esta cuestión- que Fernández pueda integrar alguna de las listas municipales en la provincia.

www.elpais.es 21.01.11

DIMITE EL LÍDER LOCAL DEL PP DE OURENSE POR EL ENFRENTAMIENTO CON LOS BALTAR

Los populares se juegan en la ciudad dos escaños clave para mantener la Diputación

El PP ourensano afronta su renovación orgánica por la vía de las dimisiones. El presidente de la junta local de la capital ourensana, el ex alcalde y parlamentario Enrique Nóvoa, *Poly*, renunciará hoy a este cargo. La dimisión de Nóvoa como máximo representante de los militantes del PP de la ciudad se sumará a la de los presidentes de las juntas más populosas -la de la zona centro y la del barrio de O Couto-, que abandonaron sus puestos hace algunas semanas por discrepancias con las directrices del nuevo presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco, quien tras el congreso de enero sustituyó a su padre al frente del partido.

Fuentes próximas a Nóvoa aseguraban ayer que su decisión de dimitir -con la que amagó hace días, aunque no llegó a presentar- es firme y obedece a su alejamiento de la dirección provincial. Nóvoa perdió la confianza del nuevo presidente del PP de Ourense después de que el ex regidor apoyara abiertamente la candidatura del aspirante de Feijóo, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, en el congreso provincial del pasado enero.

Los Baltar calificaron a Enrique Nóvoa de "traidor" en la campaña congresual e inmediatamente prescindieron de él como candidato a la alcaldía, pese a que las encuestas internas le daban, con diferencia, mejor puntuación que a los restantes compañeros de partido, incluido el candidato por el que optó Baltar Blanco, Rosendo Luis Fernández.

La confianza del nuevo presidente provincial en Fernández es absoluta. Fue su más estrecho colaborador en el largo periodo congresual y salió de él con la responsabilidad de la secretaría provincial. A los pocos meses, fue impuesto por el presidente como candidato a la alcaldía. Poco le importó a Baltar Blanco que las encuestas le dieran una escasa valoración. El popular mantiene con pulso firme su hoja de ruta pese a la fractura del partido en la ciudad, donde el PP se juega uno de los dos diputados provinciales que podrían apejar de la presidencia de la Diputación a su padre, José Luis Baltar, tras más de 20 años al frente del organismo.

www.elpais.es 01.12.10

EL FICHAJE DE OTROS 30 EVENTUALES ABARROTA LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

José Luis Baltar insiste en su política de contrataciones. El presidente de la Diputación de Ourense ha abierto estos días un nuevo proceso de oposiciones en la institución al mismo tiempo que ha contratado a casi una treintena de eventuales por periodos cortos, de entre tres o seis meses. Los nuevos trabajadores apenas encuentran asiento en las dependencias del organismo y abarrotan los pasillos. Mientras tanto, van aprobando los primeros exámenes de las oposiciones hijos y otros parientes de cargos del PP y del propio presidente.

La práctica de estas contrataciones cortas a la que suele recurrir Baltar desde hace años, permite al barón del PP emplear a un amplio número de personas con lo que, según la denuncia reiterada de socialistas y nacionalistas, los contratos revierten finalmente en votos.

Con las municipales a la vuelta de la esquina, en las que su hijo, el parlamentario José Manuel Baltar Blanco, se juega el prestigio del estrenado liderazgo provincial del partido, el presidente de la Diputación estira un poco más la capacidad empleadora de la institución, desde la que en los últimos tres años - hasta el pasado febrero- ha dado empleos eventuales a 1.600 personas.

La oferta pública da ya poco de sí. Las oposiciones que ha convocado son para cubrir apenas 19 plazas. De momento han superado los primeros exámenes el cuñado de su hijo y presidente provincial del PP, José Manuel Baltar Blanco; el hijo de un concejal de Ourense; el hijo del alcalde popular de Padrenda; y la mujer de un concejal de Nogueira de Ramuín, entre otros.

Mientras Baltar se mantiene fiel a su estilo, el fiscal ha llamado a declarar hoy mismo al secretario general del PSOE ourensano, Raúl González, en la investigación abierta por la denuncia de los socialistas contra las contrataciones del presidente de la Diputación. El PSOE lo acusa de prevaricación y malversación por el "enchufe" de más de 200 personas en los meses previos e inmediatamente posteriores al congreso provincial del PP que le dio la victoria a su hijo.

Según la denuncia, los contratados -ellos o parientes directos- acudieron de compromisarios con derecho a voto a ese congreso. El PSOE advierte de que los contratos se realizaron sin el preceptivo informe de Intervención. Desde que se registró la denuncia, Baltar no ha dejado de convocar nuevas plazas.

www.elpais.es 16.11.10

JOSÉ LUIS BALTAR RECLAMA SU DERECHO A "PERPETUARSE" EN LA DIPUTACIÓN

El presidente ourensano defiende como "social" el gasto de personal

Como cada año, los presidentes de las diputaciones gallegas comparecieron en el Parlamento para informar de sus presupuestos para 2011. El de Ourense, José Luis Baltar, lo hizo como "acto voluntario de colaboración", porque él las cuentas, aclaró, sólo las rinde ante el pleno provincial. Tras esa declaración de intenciones, el veterano político ourensano rechazó las acusaciones de la oposición de que elabora sus presupuestos con el objetivo de "perpetuarse en el cargo". No porque esté en contra de tal práctica, sino porque no considera censurable que un político permanezca en el cargo el máximo tiempo posible.

"¿Perpetuarse en el cargo? ¿Qué político no quiere perpetuarse en el cargo? Yo no veo escapar a tantos, aún no he visto a ninguno desaparecer tranquilamente, y eso que llevo en esto desde 1968". Fue la réplica de Baltar a las alusiones a su longevidad política, y toda una declaración de intenciones frente a las esperanzas de la dirección regional del PP, cada vez más escasas, de abordar un relevo en la presidencia de la Diputación de Ourense tras las elecciones municipales de mayo próximo.

Como Baltar "ya sabía a lo que venía" al Parlamento, confesó, no le extrañó que la oposición lo pusiese "a caldo". Pero aun así se esforzó en defender unas cuentas que dedican más de la mitad del presupuesto total de la Diputación a personal y que consagran una deuda que el portavoz del BNG, Alfredo Suárez Canal, tachó de escandalosa. Para empezar, Baltar partió de la base de que el de personal no es un gasto superfluo ni que fomenta el amiguismo, como le acusó la socialista Mar Quintas, sino un gasto "social". Admitió que "desde fuera", tanto el pago de nóminas como el gasto corriente "puede parecer muy alto", pero reivindicó las contrataciones de personal frente al sistema de "externalizar" los servicios.

Baltar no le hizo ascos a la acusación de caciquismo. Como hiciera hace exactamente un año ante la misma comisión, pidió a la Xunta que aclare las funciones de las diputaciones. En aquella ocasión lo hizo "para no tener que caciquear". Ayer usó otra fórmula: "Para que se acabe lo que ustedes dicen que se hace". Y se explayó con una reflexión sobre una condición de la que PSdeG y Bloque le consideran paradigma: "Yo nunca me tildé de cacique, pero sigo diciendo que estoy al servicio de los ciudadanos. Si eso es caciquismo, lo será, pero nunca me levanto pensando cómo voy a fastidiar a un ciudadano, sino cómo lo puedo ayudar". El popular Antonio Rodríguez Miranda, enfrentado en los últimos tiempos con la familia Baltar, hizo méritos para la reconciliación: "De los cuatro presidentes provinciales, usted ha sido el más ejemplar, claro y transparente en su exposición".

La ronda de comparecencias de presidentes de diputaciones dejó un duro enfrentamiento entre el titular de la de Pontevedra, Rafael Louzán, y el diputado del PSdeG Modesto Pose, quien acusó al también

líder del PP provincial de "amparar la corrupción" y de tener "una actitud mafiosa". El socialista le atribuyó asimismo un "trabajo persistente, de noche y con alevosía" en las mociones de censura, para que personas "en situación de debilidad" de un partido político "caigan" y faciliten cambios de gobiernos municipales que "alteran la democracia".

"Vamos a tope en endeudamiento, transfuguismo y discriminación de ayuntamientos que no son de mi color", continuó Pose, en referencia a la justificación de Louzán de "no dar abasto" para negar información que le pide la oposición provincial. Para encuadrar a Louzán, Modesto Pose encontró una nueva categoría en los sectores tradicionales del PP, ya que no lo ve con boina, "y desde luego mucho menos con birrete". "Usted ha creado un nuevo biotipo, que es el del bolsillo, el interés y el maletín". Dicho todo esto, el diputado del PSdeG pidió después la palabra para retirar cualquier palabra o expresión "que pueda resultar ofensiva".

Louzán ni se inmutó. "Estoy acostumbrado a sus barbaridades", se limitó a replicar, aunque no dejó de reivindicar el derecho del PP a promover mociones de censuras e incluir después a tráfugas en sus listas, una vez que lo va a hacer el PSOE en Benidorm. Como también el PSdeG llegó a la Xunta en 1987 tras una moción de censura, el presidente de la Diputación concluyó que el transfuguismo "está en la esencia" del socialismo. Louzán descartó aplicar en los ayuntamientos gallegos el pacto antitráfuguismo, "porque se firmó en Madrid, no en Galicia".

www.elpais.es 09.11.10

BALTAR CAMBIA EL PRESUPUESTO PARA PAGAR A SUS CONTRATADOS

En los meses anteriores y siguientes al congreso provincial del PP que entregó el partido a su hijo, José Luis Baltar contrató a cientos de compromisarios en la Diputación. Lo hizo sin los correspondientes informes de Intervención y de Secretaría. Y sin partida presupuestaria. Mientras la fiscalía estudia la denuncia presentada por el PSOE ourensano sobre la supuesta ilegalidad de estos contratos, el presidente de la institución provincial anuncia que desviará un millón de euros del remanente de Tesorería, de 3,8 millones, para hacer frente a las nóminas del personal y 500.000 euros más para afrontar los pagos a la Seguridad Social. "Se trata del pago de las nóminas de los nuevos contratados", denunciaron ayer los socialistas.

La modificación de crédito se produce tras las reiteradas declaraciones de Baltar en los últimos meses relativas a la necesidad de que la Diputación se "apriete el cinturón" mediante la "reducción del gasto y el ahorro".

Lejos de ello, el barón ourensano del PP ha decidido seguir gastando. Según informó ayer en comisión a los grupos políticos, de los casi cuatro millones de remanente de Tesorería destinará 360.000 euros a gastos de publicidad y protocolo de la institución y del Inorde (Instituto Ourense de Desarrollo Económico, dependiente de la propia Diputación) y 533.000 euros más los repartirá entre ayuntamientos del PP. Los del BNG no recibirán nada mientras que destina 20.000 euros para la perrera municipal de O Carballiño (PSOE) y 12.000 para la edición de un libro de la castaña promocionado por el Ayuntamiento de Parada do Sil (PSOE).

"Baltar continúa repartiendo el dinero de la institución provincial a su antojo", denunciaba ayer de nuevo el portavoz socialista en la Diputación, Alfredo García. En esta ocasión, la decisión del barón ourensano de distribuir el dinero entre los suyos y para "pagar favores políticos" ha ido más lejos: Baltar ha decidido sufragar, con 12.000 euros de ese mismo remanente de Tesorería, el anteproyecto que un colectivo de comerciantes afín al PP presentó contra el plan municipal de reconversión de la plaza de abastos de la ciudad. "Es algo sin precedentes", exclamaban ayer los socios del bipartito que gobierna en la capital, sorprendidos de que la Diputación pague un proyecto particular "que incumple además las recomendaciones de Patrimonio de la Xunta" utilizado "como arma arrojada política" contra el gobierno local.

La asociación de comerciantes a la que Baltar sufraga -con fondos públicos- el proyecto está presidida por un simpatizante baltarista del PP y las reuniones que el colectivo realizó para oponerse al proyecto municipal fueron convocadas por el concejal del grupo del PP Aurelio Gómez Villar.

Baltar faltó a su compromiso de fomentar el ahorro en la institución, pero no al que asumió el pasado febrero ante el presidente de la Real Academia Galega (RAG), Xosé Luis Méndez Ferrín, quien pidió

subvenciones finalistas ante la necesidad económica del organismo. El presidente provincial le ofreció entonces el "compromiso económico y moral" de la Diputación para que la RAG "no pase estrecheces". Le dedica, en concepto de "gastos de funcionamiento", 37.000 euros de la modificación de crédito.

El resto del dinero, hasta completar los 3,8 millones de euros, los destina a subvenciones de capital nominativas para acción social, actividades culturales y recreativas.

(www.elpais.com, 15/09/10)

BALTAR Y LOS ALCALDES DEL PP DE OURENSE COMPARTEN TRIBUNAL DE OPOSICIONES

Técnicos de la Diputación vinculados con el partido juzgan a los aspirantes

El modelo de oposiciones que tanta fama ha dado a la Diputación de Ourense se extiende por la provincia. El personal que habitualmente forma parte de los tribunales examinadores de la institución provincial -en donde desde hace décadas aprueban prácticamente en exclusiva cargos y parientes del PP- participa también en las oposiciones que celebran buena parte de los consistorios ourensanos gobernados por este mismo partido. De esta forma, en los últimos meses las pruebas para varias administraciones locales han sido fiscalizadas por el asesor jurídico de la Diputación y secretario de las oposiciones, José Eugenio Galindo; el ex presidente de Nuevas Generaciones, José Carlos Castiñeiras, y el hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, jefe del servicio de recursos humanos de la Diputación. Estos dos últimos accedieron a sus empleos en la institución, hace ya años, pese a varias denuncias de enchufismo.

- **Los alcaldes que no son del PP piden ayuda a la Xunta para sus tribunales**
- **Las academias apenas preparan los temas para plazas en la Diputación**

No actúan igual los municipios controlados por el BNG o el PSOE : "¿Cómo íbamos a pedir nosotros que nos envíen a esos técnicos? es personal de la máxima confianza de Baltar; no nos fiamos", resume el alcalde de O Barco, el socialista Alfredo García, harto de denunciar el enchufismo y el gasto en personal de la institución provincial. La práctica habitual entre los ayuntamientos que no son del PP es solicitar, cuando los necesitan, esos técnicos a la Xunta. "Te envían el que les parece, después completamos nosotros con nuestros propios técnicos como vocales", explican los alcaldes.

José Luis Suárez Martínez y José Eugenio Galindo formaron parte del tribunal designado para la cobertura de una plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Boborás . Suárez presidió también las pruebas para acceder a otra plaza en San Cristobal de Cea y las del ayuntamiento de Bande, ambas convocadas a finales de 2009, en donde figuraban como vocal y secretario suplentes Carlos Castiñeiras y José Eugenio Galindo. La situación se repite en buena parte de municipios del PP, lo que genera situaciones curiosas.

Algunos opositores que acuden ya "de oficio" a cuantas pruebas se celebran para acceder a un empleo en Ourense reconocen su sorpresa cuando se encuentran con el mismo tribunal, en la Diputación y en los ayuntamientos.

En cualquier caso, los opositores ajenos al PP son cada vez menos, pese a que algunos insistan. La evidencia es que las academias ourensanas no muestran especial interés en promocionar la preparación de estos exámenes. Mientras sí anuncian las oposiciones a la administración central o a la autonómica, se alejan cada vez más de las de la Diputación.

Los centros formativos más prestigiosos de Ourense reconocen que no suelen preparar las oposiciones de técnicos de la Diputación "porque las convocan con poco plazo de tiempo", insuficiente para llevar bien "un temario de ese nivel".

Sí están dispuestas a preparar las pruebas para puestos inferiores, de auxiliares administrativos. Pero indican al peticionario que debe esperar. Si hay demanda suficiente "como para formar un grupo", lo avisan.

Uno de los opositores que peleó por una plaza en la última convocatoria de la Diputación destaca su sorpresa por el hecho de que, quedando en segundo lugar, tras un hijo de un alcalde, siempre con un punto menos, acabó con un suspenso en la prueba oral, difícil de recurrir por falta de pruebas escritas. Con el suspenso del segundo clasificado en esa última prueba, la Diputación queda obligada a convocar de nuevo la plaza en el caso de que el titular renunciara a ella. "No queda nada al azar", lamenta el afectado.

www.elpais.es 25.07.10

PARIENTES Y CARGOS DEL PP COPAN OTRA OPOSICIÓN DE BALTAR

Los destacados militantes del PP e hijos de éstos que se presentaron a las últimas oposiciones de la Diputación de Ourense ya tienen plaza fija en la institución que preside José Luis Baltar. Los exámenes realizados por la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez Blanco; por la hija del alcalde de Celanova, Marta Mouriño, y por, Esteban Fernández Álvarez, hijo del ex concejal ourensano y ex presidente de los hosteleros gallegos, Ovidio Fernández Ojea, no han encontrado rival que les hiciera sombra.

Todos los opositores vinculados al PP obtuvieron la mejor puntuación en las distintas pruebas que se realizaron en la Diputación y a las que el letrado de la institución y ex alcalde de Nogueira de Ramuín - fichado en su día del PSdeG por Baltar- José Eugenio Galindo, prohibió, en su función de secretario de las oposiciones, la entrada a un periodista de este diario al comienzo del examen. Ello, aun cuando la ley deja claro que las pruebas son de acceso público y Baltar reitera que "puede asistir quien quiera".

Ana Belén Vázquez Blanco no tendrá que repetir la oposición de inspectora nacional de policía que ganó en su día pero que no llegó a ocupar, ya que dio prioridad al escaño en el Congreso que tenía en la legislatura pasada. En las últimas elecciones la ex alcaldesa de Bande -traspasó el bastón de mando a su marido- aspiraba a renovar escaño en el Congreso. La suerte le llegó sólo de rebote. Baltar la situó en un difícil tercer puesto en la lista ourensana y no consiguió el acta hasta que el número dos de la lista, Jesús Vázquez, fue designado conselleiro por Feijóo. Vázquez Blanco prefirió preparar las oposiciones a la Diputación de Ourense que repetir las de policía.

La suerte le pintaba de cara esta vez. Desde los primeros exámenes obtuvo las mejores calificaciones, seguida de cerca por el hijo del ex concejal Fernández Ojea. Llegaron los dos solos a la última prueba y consiguieron ambos las dos plazas, de técnico superior en desarrollo local y recursos europeos.

La hija de Antonio Mouriño, alcalde de Celanova, tampoco encontró opositor que amenazara su plaza de técnico superior en administración financiera y tributaria. Marta Mouriño tenía un oponente duro -un desconocido que no milita en el PP-, pero en la última prueba ella se impuso con una nota de 6 frente al 4 de su adversario.

El tribunal que los examinó, como el que puntúa el resto de las pruebas, estaba integrado por personal de la institución vinculado al PP. A estos tres se suma el aprobado del ingeniero técnico vinculado a Rogelio Martínez y que está imputado, como éste, en el juicio por presunto fraude en el cobro de subvenciones europeas.

Baltar aseguró el mes pasado, cuando comenzaban las críticas a este proceso, que si él fuera miembro del tribunal pondría una "querrela criminal" contra la oposición -PSdeG y Bloque- que denuncia irregularidades a modo de "cortina de humo" ante "problemas graves" como la supuesta trama agraria destapada por el PP. Pese a las acusaciones, Baltar aseguró que nadie conseguiría el objetivo de sacarlo "de sus casillas". El presidente del ente provincial insiste en que las oposiciones de la Diputación "se hacen escrupulosamente".

(www.elpais.com, 07/07/10)

UN TÉCNICO QUE CERTIFICÓ EN FALSO APRUEBA UNA OPOSICIÓN DE BALTAR

El técnico Miguel Reza que el jueves reconoció ante el juez haber certificado en falso la obra de la planta de biomasa por la que el superdelegado de Ourense recibió, de forma supuestamente fraudulenta, una subvención de la UE, tiene ya un pie en la Diputación de Ourense. Reza, imputado en el mismo proceso judicial que Rogelio Martínez, se ha presentado a las últimas oposiciones convocadas por José Luis Baltar y ha ido superando con éxito todas las pruebas.

El pasado 24 de junio llegó ya solo, sin competidores, arrastrando una nota de 5 de su último examen. El hombre de confianza de Martínez se destacó ya en el primer ejercicio. Obtuvo un 6,5 frente a cuatro ceros y un 1,3 de sus competidores. El técnico aspiraba a una plaza de ingeniero superior industrial correspondiente al grupo A1, con el sueldo que corresponde a los funcionarios de nivel mas alto (licenciados). Este no será el primer empleo vinculado a la Diputación del técnico contratado, junto con su padre, por Rogelio Martínez para certificar las obras por las que la agrupación local Ceivam cobró subvenciones comunitarias que ahora investiga la Justicia. Sus anteriores empleos coincidieron con la etapa en la que el propio Martínez fue vicepresidente de la institución ourensana, cargo que dejó cuando fue designado delegado de la Xunta.

Hasta estas oposiciones, Reza ha estado empleado en el Instituto Ourenzano de Desarrollo Económico (Inorde), dependiente de la Diputación. El contrato del técnico de confianza de Martínez era inestable, por periodos de tres años, aunque no tuvo problema en que le fuera renovando constantemente hasta que decidió renunciar a él para optar a la plaza de funcionario.

Su padre, José Miguel Reza, ha colaborado también con el superdelegado de la Xunta certificando las obras de Ceivam que la fiscalía entiende que incurrieron en el supuesto delito de falsedad documental. Jose Miguel Reza, miembro de Ceivam, concedió a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres subvencionados por la UE que no se llegaron a realizar y que él mismo certificaba después desde la asociación a la que pertenecía, según denunció el PSdeG.

(www.elpais.com, 03/07/10)

DENUNCIA A BALTAR ANTE EL FISCAL POR "ENCHUFAR" A 200 PERSONAS

La política de contrataciones de Baltar llega a la Fiscalía. Los socialistas registrarán la próxima semana ante el ministerio público una denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense a quien acusa de prevaricación y malversación. Todo ello relacionado con el "enchufe" en la institución que preside de más de 200 personas en los meses previos e inmediatamente posteriores al congreso provincial del PP en el que su hijo se convirtió en su heredero político.

El escrito del PSdeG atribuye a Baltar un delito de malversación basado en que los contratos de esos "enchufados" se realizaron sin informe de Intervención. De otra parte, fundamenta una de las denuncias de prevaricación en el destino de fondos públicos a fines partidistas toda vez que los contratados en esos meses "no sólo estaban vinculados al PP, sino que acudieron, ellos o sus parientes, a votar en el congreso" que le dio la victoria al hijo. La otra acusación de prevaricación se basa en la "negativa" de Baltar a entregar a la oposición la documentación relativa a esas contrataciones.

El presidente se jacta, sin embargo, de su talante generoso. En un escrito dirigido a los socialistas advierte que les ha enviado documentación pese a que "no está obligado" a dar cuenta a los diputados que la reclaman. "Les recuerdo que no existe obligación legal de emitir esos informes al no ser solicitados por un tercio de la corporación", informa. En sus escritos remite siempre a la oposición al negociado de Personal para que le entreguen ahí el resto de la documentación. Pero cuando los diputados acuden a demandarla, "los funcionarios nunca tienen orden de entregarla".

Mientras el PSOE acude a la Fiscalía, Baltar sigue creando empleos. El Boletín Oficial Provincial de ayer informaba de la convocatoria de siete nuevas plazas. En este caso, para el pabellón Paco Paz. La convocatoria se produjo el mismo día en el que otra vez hijos de alcaldes del PP, entre ellos el del regidor de Celanova, Antonio Mouríño, realizaban exámenes para acceder a puestos de funcionarios en la Diputación.

(www.elpais.com, 10/06/10)

BALTAR REPARTIÓ A DEDO CUATRO MILLONES EN AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES

El presidente decide a quién concede subvenciones de hasta 3.000 euros

En el periodo de crisis económica que coincidió con el preámbulo del congreso provincial del PP, José Luis Baltar gastó cuatro millones de euros de las arcas públicas fraccionados en pequeñas subvenciones nominativas que repartió entre multitud de asociaciones ourensanas. La mayor parte de este dinero fue concedido mediante decretos de la presidencia que Baltar firma en su despacho, de forma que sólo el

titular de la institución decidió a quién concedía el dinero y a quién no. Los destinatarios fueron en aplastante mayoría asociaciones vinculadas al PP o a ayuntamientos gobernados por este partido, según aseguró ayer el portavoz del PSOE en la Diputación, Alfredo García.

El PSdeG denuncia que la mayoría de los beneficiados son afines al PP

Baltar reparte, mediante los decretos de presidencia, partidas de hasta 3.000 euros entre asociaciones vecinales, municipales, artísticas, gastronómicas y culturales. En alguna ocasión "financió" una excursión de fin de curso de un instituto.

Pero no son los únicos fondos con los que, según denuncia el PSOE, el veterano político ourensano "compra" voluntades. Baltar tiró también de la caja de la institución provincial para contratar sólo en tres meses (entre enero y marzo de este año) a unos 200 nuevos empleados que han costado a los ourensanos más de dos millones de euros.

La mayoría de los nuevos trabajadores fichados en el periodo precongresual acudieron al cónclave provincial del PP en el que el hijo de Baltar resultó elegido su sucesor y nuevo presidente del partido en la provincia. A la vista del "dispendio" en época de crisis, el PSOE ha presentado un plan de ahorro para la institución provincial que tiene un endeudamiento en el límite legal, ya que supera el 105%.

La propuesta de los socialistas supone recortar gastos "de las partidas en donde se puede". Por ello, instan al presidente a que deje de repartir millones de euros entre sus fieles, evitando de paso el "clientelismo político que mantiene a los dos Baltar" en el poder provincial.

El portavoz del grupo socialista en la Diputación clamó ayer de nuevo contra los aprobados, ambos vinculados al PP, de la primera prueba para la oposición por la que se cubrirán sendas plazas de técnico en desarrollo local y recursos europeos. "La Diputación se está convirtiendo ya en una nueva sede del PP", advierte García a la vista de que la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez y el hijo del presidente de la Cámara de Comercio, Ovidio Fernández Ojea, se han quedado sin rivales en el primer examen.

Entre las pruebas convocadas para cubrir nuevas plazas figura alguna de portero, pese a que sólo el edificio cultural de la Diputación dispone de 33 para atender tres puertas. La oposición alerta de que los nuevos contratados y funcionarios deberán "apretarse" en las dependencias de la institución considerando que el nivel de empleados es de tal calibre que Baltar destina a ayuntamientos gobernados por su partido a algunos de ellos que no caben ya en los edificios de la Diputación.

www.elpais.es 05.06.10

LOS MEJORES SEMENTALES SON DE BALTAR

La Diputación de Ourense posee los mejores sementales de España, un mérito que se mide cada año de forma objetiva, contando el dinero que han ganado en las carreras sus hijos, repartidos por todo el territorio estatal. Los purasangre más cotizados como padres se llaman Wagon Master, de origen francés, y Baptize, de EE UU, y un encuentro amoroso con ellos les cuesta a los propietarios de las yeguas 1.500 y 1.000 euros respectivamente. El año pasado, cualquiera de estos empleados de José Luis Baltar tenía una tarifa por cubrición de 2.000 euros, que alegremente venían a pagar personas de toda España. Pero el purasangre, como los yates, es un objeto de lujo prescindible para muchos ricos, y con la crisis, el precio de las montas ha caído en picado en toda Europa, más incluso que en Galicia.

En el caso de Baptize, un ejemplar de 12 años al que al menos le restan otros 10 en plena forma como semental, el precio de la cubrición descendió un 50% porque la Diputación comparte su titularidad con accionistas privados (tradicionalmente, la propiedad de los caballos se divide en 40 acciones, y antes cada uno de estos títulos daba derecho a cubrir una yegua al año). Estos particulares, dueños de una parte de Baptize, prefirieron no arriesgar la clientela. Wagon Master, en cambio, es enteramente del organismo provincial, que optó por bajar la tarifa solo 500 euros, entre otras cosas porque al caballo, que ya ha cumplido los 20, no le quedan más que dos o tres años de plenitud sexual y, en total, unos cinco de vida.

Desde febrero hasta principios del verano, en el período denominado parada de sementales, la actividad de estos fenomenales machos y algunos otros es frenética en el Centro Ecuéstre Antela de Sandiás. Probablemente más de 200 yeguas permanecerán durante más de un mes allí, pagando una pensión de

diez euros al día que incluye comida, cuidados y alojamiento, con el único fin de quedarse preñadas. Este precio, que según el gerente, Gumersindo González, es en realidad de lo que "vive" el centro ecuestre, no ha cambiado con la crisis.

Las yeguas, como las cabras o las gatas, son poliéstricas estacionales, es decir, tienen el celo en una determinada época del año. Y todo tiene que ver con la largura de los días. Las yeguas sienten la pulsión del apareo en primavera y una parte del verano. Así que a partir del 1 de diciembre, explica González, "se hace una trampa, porque interesa que los potros nazcan cuanto antes" para que puedan entrar a competir jóvenes (hay carreras a partir de los dos años, y los caballos que más aguantan siguen corriendo hasta los ocho). "Las yeguas, para el celo, necesitan tener 60 días de período lumínico elevado, y para eso lo que hacemos los criadores", detalla, "es dejarles en el box la luz encendida hasta las once y media de la noche, regulada por un reloj temporizador".

En Sandiás controlan la ovulación de las yeguas propias y de las visitantes, y "cuando están a punto", las cruzan con los caballos. Luego, el animal tiene que permanecer en el centro ecuestre al menos 14 días más, que es el tiempo tras el cual "se puede diagnosticar el embarazo con una ecografía".

Después de una gestación de 11 meses, los potros serán vendidos en subasta, en el hipódromo de Madrid, en el otoño del año siguiente al que nazcan. Y el precio dependerá, en buena parte, del nombre de sus padres. En este caso, Wagon Master y Baptize, que está claro que trabajan para la Diputación de Ourense por méritos propios. Gumersindo González reconoce que la compra de los que luego han resultado ser los mejores sementales de España se debió tanto a la "suerte" como al "buen ojo".

Baptize, por ejemplo, costó 100.000 euros, cuando sus propietarios en América empezaron pidiendo por él 400.000. Siendo potro, se había vendido por 200.000 dólares, un precio alto para su edad, cuando todavía no había demostrado nada. Y cuando se interesó por él el centro de Antela ya había ganado 600.000 dólares en carreras celebradas en EE UU. El animal estaba sobradamente acreditado, pero al parecer "no daba el nivel suficiente para ser semental allá". Al final, la Diputación consiguió rebajar sustancialmente su precio, y resultó que la montura sí era un buen semental, el mejor, al menos para la calidad de las carreras que tienen lugar en la Península.

En Antela, por lo menos, estos eventos arrasan, con una media de 3.000 personas. "Estamos en primerísima división. No hay otro espectáculo deportivo en Ourense que junte tanta gente ni de lejos", presume el gerente.

(www.elpais.com, 19/05/10)

BALTAR CONTRATÓ ILEGALMENTE A EMPLEADOS DE LA OPOSICIÓN

Baltar tiene contratados en fraude de Ley a los administrativos y auxiliares que prestan servicio a los grupos de oposición en la Diputación de Ourense. Frente a las contrataciones masivas de personal vinculado al PP, los cuatro empleados (dos por cada grupo) de la oposición en la institución llevan 15 años en situación ilegal, según reconoce una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Ourense contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La resolución se produce tras la denuncia de una trabajadora que presta servicio al grupo socialista desde 1995. Hasta ahora, la empleada tuvo tres contratos, firmados por la institución provincial, en calidad de personal temporal. El último de ellos corresponde a 1997 y fue ilegal, según detalla la sentencia en la que se obliga a la Diputación a convertirla en personal laboral indefinido y a retribuirle los trienios, con carácter retroactivo desde el año pasado. La demandante ha dejado de cobrar los 1.500 euros anuales por ese concepto.

El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, compareció en el juicio en representación de la Diputación para acusar de la contratación ilegal al grupo socialista, que finalmente ha sido absuelto. Los otros tres trabajadores de PSOE y BNG que prestan sus servicios en las oficinas de estos grupos podrán reclamar ahora por vía judicial sus derechos laborales ya que se encuentran en la misma situación.

(www.elpais.com, 07/05/10)

BALTAR PUMAR YA GASTÓ EL DINERO PREVISTO PARA LAS SUBVENCIONES A DEDO DE TODO EL EJERCICIO

La Diputación ourensana se ha gastado en los tres primeros meses del año el dinero que había presupuestado para todo el año para las subvenciones sin concurso previo y concedidas bajo criterio exclusivo del gobierno y de su presidente, José Luis Baltar Pumar. La suma de las ayudas concedidas entre enero y marzo a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, que son de carácter nominativo, por resolución de presidencia o de la junta de gobierno, como las otorgadas a equipos deportivos, es de 1.846.664,94 euros. Para estos conceptos se había previsto un gasto de 1.841.305 euros en todo el ejercicio, según datos de la oposición.

Esta situación no es nueva para la Diputación de Ourense, que suele aprobar el desvío de fondos desde otras partidas para hacer frente al pago de más subvenciones nominativas. En septiembre del año pasado, por ejemplo, se destinaron a este tipo de ayudas gran parte de los 5,6 millones de euros que habían quedado de remanente al sacar adelante la liquidación del ejercicio anterior. Una subvención para el equipo de fútbol de la capital -C.ºD. Ourense- de 400.000 euros para un campo de entrenamiento era entonces la más alta de todas las concedidas.

El club es también el principal beneficiario de las ayudas otorgadas durante el primer trimestre de este año por la Diputación, cuya relación publicaba este fin de semana el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El C.ºD. Ourense se lleva 270.000 euros en esta remesa de subvenciones, aunque también destacan los 180.000 euros del COB (el equipo de baloncesto de la capital). Otros deportistas de élite o clubes deportivos de hockey o atletismo reciben también aportaciones que, según el caso, se recogen en el BOP con finalidades como «axuda ó deporte ourensán», «fomento do deporte ourensán na temporada 2008-2009», «gastos necesarios para a súa progresión como gran mestre internacional en xadrez», etcétera.

Respecto a las ayudas concedidas a ayuntamientos, destaca el hecho de que todas ellas -a excepción de una de 9.000 euros para un programa de educación vial del Concello de Ourense- son para ayuntamientos del PP. La Diputación gastó, por ejemplo, 112.500 euros en plantar césped en el campo de fútbol de Nogueira de Ramuín, concello que gobernó como alcalde el ahora presidente provincial, José Luis Baltar. Los gastos de la guardería de Celanova, un monumento al pan de Cea o una máquina desbrozadora para Baños de Molgas están también entre las subvenciones entregadas a concellos de enero a marzo.

Con las ayudas de la Diputación se hace frente a muy diversas actividades. Entre las subvenciones concedidas por resolución de presidencia, que no deben superar los 3.000 euros, hay algunas muy llamativas. La institución provincial pagó con dinero público las excursiones a Lourdes de la asociación Santa María de Tamagos del ayuntamiento de Verín y de la asociación sociocultural y recreativa San Cibrao de O Carballiño. Con temática religiosa, de hecho, hay numerosas ayudas. El Obispado recibió dinero para una peregrinación diocesana de niños a Santiago o para un sagrario en, de nuevo, la parroquia de Santa María de Tamagos. Destaca una ayuda de 2.000 euros para un solo armario de madera en la parroquia de Redemuíños.

El listado se completa con una gran variedad de aportaciones. Así, las arcas provinciales han financiado la grabación de un cedé de Santiago Expósito Nóvoa, la asistencia a un congreso de magia de Brais Castro Forján, una exposición fotográfica en A Rúa o un libro conmemorativo «coa historia dos vinte e cinco anos de cogomelos na vila de San Rosendo», según reza la justificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

(www.lavozdegalicia.es, 27/04/10)

BALTAR AUMENTA EL PATRIMONIO DE UN COLEGIO RELIGIOSO

Baltar ha incrementado en 400.000, con fondos de todos los ourensanos, el patrimonio privado del colegio de los hermanos Salesianos de la ciudad. La Diputación firmó un convenio con Club Deportivo Ourense (CDO), sociedad anónima cuya directiva la copan básicamente cargos del PP, mediante el cual esta entidad deportiva recibió casi medio millón de euros para construir un campo de hierba artificial en este colegio religioso del centro de la ciudad. La obra, licitada por la entidad futbolística, está ya en marcha sin haber obtenido la correspondiente licencia municipal. El constructor que la ejecuta es el ex alcalde del PP de Maside Benigno Álvarez.

"El patrimonio de los Salesianos acaba de aumentar en la misma proporción en la que ha disminuido el de todos los ourensanos", censura el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Fírvida. El edil

nacionalista advierte no sólo del "agravio comparativo" que supone la construcción de este campo de fútbol artificial respecto al de los centros de enseñanza públicos de la ciudad y provincia, "con grandes carencias", sino también con respecto al resto de campos deportivos "abandonados y en los que no se realiza la mínima inversión".

Baltar se comprometió en comisión informativa ante la oposición a que la ejecución cumpliría "todos los trámites de obra pública". Sin embargo, la convocatoria no la realizó la institución provincial, sino el club deportivo. Éste invitó a participar únicamente a tres empresas que consideró adecuadas: Cofervi, de la que es titular el vicepresidente del mismo club de fútbol que hizo la convocatoria y durante 16 años concejal de Urbanismo del PP en Barbadás, José Ramón Fernández; Coarvi, de la que es apoderado Felipe Rodríguez Vide, ex concejal también del PP de Barbadás promotor destacado en el mismo municipio y miembro también de la directiva del CDO, y, por último, al ex alcalde del PP de Maside, Benigno Álvarez, quien se hizo con la adjudicación de la obra. El resto de empresas de la provincia no pudieron participar.

Baltar aseguró en comisión a los grupos de la oposición que el campo de hierba financiado por todos los ourensanos se utilizaría en horario extraescolar por los alumnos del centro religioso y, además, por el CDO y sus equipos de base. "El resto del tiempo lo podrá usar la ciudadanía", concluyó. La oposición se pregunta si "a partir de las 12 de la noche, horario en el que quedará libre, o los fines de semana, acudirá algún ourensano" a practicar fútbol en las instalaciones de la entidad privada.

El BNG alerta, además, del alto nivel de endeudamiento de la Diputación, de 74 millones de euros de un Presupuesto de 82, y que se ha visto obligada a asumir una reducción de inversiones -"aporta sólo 9 ó 10 millones de euros de fondos propios"- y sin embargo, aumenta el patrimonio de una entidad privada. "¿Será por ese catolicismo practicante del que hizo gala Baltar con cita bíblica para justificar el fichaje del ex líder provincial de PSOE?", se pregunta Fírvida.

El portavoz del BNG lamenta que no haya inversiones para actividades culturales ni deportivas en los ayuntamientos de la provincia a los que se debe la Diputación "y sí para una entidad religiosa privada a la que acuden los niños del centro de la ciudad". A título de ejemplo menciona que el municipio de Barbadás, con más de 10.000 habitantes, "es el único de Galicia con este censo que carece de un polideportivo".

La oposición pone el grito en el cielo. Los socialistas advierten de que la institución provincial tiene la totalidad de sus actividades culturales y deportivas en la ciudad de Ourense, mientras la provincia se sume en el abandono. Teatro Principal, Edificio Cultural "Simeón", Escuela de Danzas, Escuela de Gaitas y Real Banda, están en la capital ourensana. A apenas unos kilómetros se encuentra el Pazo cultural de Vilamarín y el centro hípico de la institución. "La provincia se hunde", denuncian nacionalistas y socialistas.

(www.elpais.com, 26/04/10)

TRABALLO ANULA LA ELECCIÓN DE LA HERMANA DE BALTAR

La elección de Carmen Baltar, hermana del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, como delegada sindical de CC OO ha sido declarada irregular por la Consellería de Traballo. Carmen Baltar Pumar ha perdido su cargo de representante de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en Ourense tras ser proclamada en un polémico proceso.

Baltar, que se afilió al sindicato en 1975 cuando la empresa textil en la que trabajaba despidió a la plantilla, fue propuesta por CC OO como candidata al organismo de cuenca en las elecciones del pasado día 9. La candidata, que accedió al empleo contratada eventualmente por Tragsa durante el gobierno del PP en la Xunta (tras el despido de estos trabajadores por el bipartito pleiteó por la plaza hasta ganarla), obtuvo un empate técnico con el representante de UGT, Juan Méndez Veiras, de mayor antigüedad en la Administración pública. Sin embargo, la Mesa resolvió la igualdad computando sólo los años de trabajo en las oficinas de la Confederación Hidrográfica, lo que dio la victoria a Baltar Pumar.

UGT presentó un laudo ante el árbitro sindical de Traballo, que ayer se resolvió a su favor. El árbitro declara nula el acta de proclamación de la candidata de CC OO y obliga a consignar como delegado al de UGT, a quien reconoce "mayor antigüedad en la empresa", entendiendo por tal la Administración pública.

Aunque cabe la presentación de un recurso judicial, fuentes de CC OO han confirmado ya que no acudirán a esta vía en cumplimiento del acuerdo que tienen con UGT de aceptar las resoluciones de los laudos. Con todo el sindicato cree que "se ha hecho una mala interpretación del reglamento". UGT ha expresado su satisfacción por la resolución arbitral. Este sindicato impugnó la elección con el convencimiento de que había sido irregular ya que "por primera vez en unas elecciones sindicales" de la Administración pública se primó la antigüedad en una sola oficina.

La hermana del presidente de la Diputación (en donde la junta de personal integrada desde hace tres años al cien por cien por CC OO no se ha pronunciado sobre la política de contrataciones de la institución) podrá hacerse con la representación sindical en el organismo de cuenca dentro de dos años, fecha en la que el candidato electo de UGT se jubilará.

(www.elpais.com, 22/04/10)

HISTÓRICOS DE CC OO CLAMAN CONTRA EL "ENTREGUISMO" A LOS BALTAR

CC OO se debate en Ourense. Los afiliados más veteranos se sonrojan ya desde la elección, hace tres años, de la junta de personal de la Diputación, integrada al 100% por militantes de esta central, procedentes de un sindicato independiente creado por el propio José Luis Baltar. Siguió su silencio frente a la política de contrataciones del organismo y, ahora, el fichaje de la hermana del presidente de la institución provincial, delegada electa en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Un amplio grupo de dirigentes ha comenzado a organizarse y se plantea dar un golpe de timón o, en último caso, abandonar el sindicalismo activo, a la vista del "entreguismo a los Baltar". La Federación de Administración Pública, mientras, avala su papel en la Diputación y en el fichaje de la hermana de Baltar en la Confederación Hidrográfica.

Entre ambas posiciones, el alcalde socialista de Parada do Sil y miembro destacado del sindicato, Francisco Magide, defiende a la hermana de Baltar, aunque recela del papel de su sindicato en la Diputación. La secretaria de CC OO en Ourense, Ana Barrios, refrenda también el "compromiso sindical" de Carmen Baltar, aunque no se pronuncia sobre el papel de convidados de piedra que están ejerciendo sus representantes en la Diputación. "No se pueden mezclar ambos hechos: es malintencionado", sostiene.

En la dirección provincial de CC OO destacan que Carmen Baltar Pumar, hermana del titular de la Diputación y tía del presidente provincial del PP, se afilió a CC OO en 1975. "Es una veterana sindical", sostiene la secretaria general del sindicato en Ourense, quien reconoce que la parienta de los Baltar acudió a ellos cuando la empresa textil en la que entonces trabajaba echó a la calle a la plantilla.

Barrios sostiene que Comisiones Obreras "ni pide a nadie su carné político ni discrimina por razones de sexo ni de religión: mucho menos por el apellido". Tampoco se cuestiona cómo accedió al puesto de trabajo en el organismo de cuenca, contratada, según denunciaron los sindicatos en su momento, "a dedo" por Tragsa durante el mandato de Fraga en la Xunta. "Lo que sé es que tiene la plaza en propiedad porque hay una sentencia que lo acredita y nosotros respetamos profundamente las resoluciones judiciales", explica Barrios.

Tanto ella como el regidor de Parada do Sil destacan que el proceso de elección de Baltar Pumar como delegada en la Confederación Hidrográfica fue "transparente y legal". Justifican que fue propuesta por trabajadores y que "ganó limpiamente" la elección, en la que quedó empatada con el candidato de UGT, a quien no le computaron toda la antigüedad en la Administración. "No hay nada reprochable en su elección", confirman Barrios y Magide. Pero mientras Barrios elude pronunciarse sobre el papel del sindicato en la Diputación, Magide sostiene que no lo comparte "en el caso de que realmente los contratos sean fraudulentos".

Frente a esta postura, históricos afiliados de CC OO, algunos de los cuales contribuyeron a la creación de la Federación de Servicios Públicos, reconocen, de momento desde el anonimato, su "profundo malestar". Sostienen que hay un "apoltronamiento" de la cúpula dirigente gallega, que sólo "aspira a sumar delegados, lo que genera subvenciones, al precio que sea", y le echan en cara que olvide los principios constitucionales de mérito, esfuerzo y capacidad, que son "la razón de ser de un sindicato, máxime en una provincia como Ourense, a la cola en desarrollo".

"Lo de la Diputación es un escándalo que salpica mucho a CC OO", lamentan los críticos, quienes alertan de que en estos últimos años "se están sucediendo las bajas de los históricos".

(www.elpais.com, 15/04/10)

LA FISCALÍA INVESTIGA LOS COBROS Y CONTRATOS DE BALTAR EN LA DIPUTACIÓN

Los 400 contratos que Baltar firmó a personas vinculadas al PP en las vísperas del congreso provincial que puso a su hijo al frente del partido, podrían sentarlo en el banquillo. La fiscalía ha abierto diligencias informativas para decidir si presenta una querrela contra el presidente de la Diputación de Ourense por este motivo.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha abierto la investigación a raíz de la denuncia presentada el mes pasado por el ex senador y ex diputado provincial del PSOE ourensano Agustín Vega, que declaró ayer como testigo. El fiscal requirió de Vega información que acreditara la vinculación con el PP de los contratados y le apercibió de que había algunos errores en la lista que le presentó: la misma que difundió el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, cuando Baltar fichó a su hombre de confianza en Ourense, Eladio Fernández.

Vega no pudo ofrecer todas las pruebas -"denuncio para que se investigue", precisó- pero advirtió de que el cruce de los nombres de cada uno de los "enchufados" con su filiación política o con los tráfugas que dieron alcaldías ourensanas al PP "hace saltar la evidencia". El ex representante del PSOE informó además al ministerio público de que las contrataciones habrían incumplido la ley que obliga a las instituciones a realizar una oferta pública de empleo a través del Inem. "Si los hubiera contratado por el Inem daría igual que fueran todos del PP, pero no si se saltó este trámite", explicó Vega.

La iniciativa del ex representante del PSOE de acudir al fiscal con la lista de los contratados de Baltar ha ralentizado la denuncia judicial que el PSdeG anunció. Los socialistas amplían de momento el número de los "enchufados" con las aportaciones de los ciudadanos que colaboran ofreciendo nuevos datos a través de la página web creada por el PSOE, enchufadosppourense.blogspot.com.

La de las contrataciones no es la única investigación a la que se enfrenta Baltar. El presidente de la Diputación podría también tener que responder judicialmente por otra denuncia presentada por Vega, relativa al dinero que percibió de la institución provincial durante los años que fue senador (legalmente sólo se puede cobrar un sueldo; el del Senado es irrenunciable). Baltar se ha escudado en un escrito de la Secretaría de la Diputación que le autorizaría a percibir dietas de esta institución. La denuncia de Agustín Vega por la duplicidad de ingresos de Baltar se extiende a los también senadores del PP Isaac Vila y Amador Vázquez, además de al predecesor de Baltar en la institución, Victorino Núñez.

En el caso de Vila, que ahora ha vuelto al Senado cumpliendo el pacto de turnarse el escaño con Amador Vázquez, su cobro duplicado fue en su día amonestado por la comisión de incompatibilidades del Senado. Fue obligado a devolver 3.000 euros cobrados por dietas del Inorde (el instituto de desarrollo económico, que entonces presidía, dependiente de la Diputación). Vega espera que al haber incurrido en faltas y no en delito, los hechos no hayan prescrito, aunque sostiene que el fin que persigue con su denuncia es que devuelvan lo cobrado o, cuando menos, "por el escarnio público".

Agustín Vega afirmó ante el fiscal que los cuatro senadores del PP cobraron "ingentes cantidades irregulares de dinero" el tiempo que ocuparon escaño en la Cámara Alta. Vega mantuvo que mientras otros miembros del Senado del mismo periodo que los denunciados percibían 50.000 euros al año, ellos superaban los 100.000. La diferencia procedía, según el denunciante, del cobro de dietas de la Diputación, del Inorde y de los ayuntamientos.

Vega no pudo contestar, en su comparecencia, a la pregunta que ayer le formuló el fiscal sobre los motivos por los que el Senado abrió una investigación contra el cobro irregular del alcalde de Xinzo, Isaac Vila, y no del resto de los senadores ourensanos que supuestamente realizaron la misma práctica. "No lo sometieron a criterio pese a que yo denuncié en su día que cobraban de tres o cuatro instituciones", respondió.

(www.elpais.com, 07/04/10)

UN CONTRATADO DE BALTAR PADRE TRABAJA PARA BALTAR HIJO EN SU HORARIO LABORAL

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense y responsable del planeamiento anulado por ocho sentencias judiciales, Ricardo Campo Labrador, acude diariamente en horario de mañana a trabajar a la sede provincial del PP, pese a que tiene un puesto de trabajo en la Diputación en jornada matinal.

Campo, abogado de profesión y responsable, con otros, de los planos del PXOM que se expusieron al público ocultando el volumen de edificabilidad que tenían los documentos aprobados en el pleno del Ayuntamiento, fue premiado el año pasado por José Luis Baltar con un puesto de trabajo. Lo contrató como auxiliar administrativo en la Diputación.

En enero, el ex edil fue elegido, además, miembro de la ejecutiva del nuevo presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco, y ahora compatibiliza en la jornada de mañana ambos puestos, según aseguran fuentes del PP, que sostienen que acude a las 10.15 horas a la sede del partido en Ourense y la abandona en torno a la una de la tarde. Este diario ha podido contrastar los testimonios llamando a la sede provincial. Ricardo Campo matiza los hechos. Reconoce que acude por las mañanas a las dependencias del PP, aunque sostiene que lo hace "puntualmente" para "llevar algún papel" durante "sus horas libres" de la jornada que debe cumplir en la institución provincial, de ocho y media de la mañana a dos y media de la tarde.

El empleado de Baltar padre asegura dedicar "la jornada de la tarde" al partido, para ocuparse de los asuntos jurídicos y del proyecto para la dependencia que elabora la ejecutiva del nuevo PP de Ourense. Sostiene que no tiene tiempo libre entre su jornada en la Diputación, su labor como abogado y la dedicación al PP.

El PSOE denunció ayer una vez más el uso por Baltar de fondos públicos para contratar a cargos del PP, y destacó que han sido admitidos a las nuevas oposiciones de la Diputación la hija del alcalde de Celanova; el hijo del alcalde de Xinzo; el hermano de la alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras y la ex alcaldesa de Bande y diputada en Cortes Ana Belén Vázquez.

(www.elpais.com, 18/03/10)

BALTAR OFRECE EL SERVICIO JURÍDICO DE LA DIPUTACIÓN A LOS EMPLEADOS QUE DENUNCIEN A PACHI VÁZQUEZ

La difusión del listado de «enchufados» en la Diputación de Ourense viola la intimidad de las personas que están incluidas en la lista. Así lo cree el presidente de la institución, José Luis Baltar Pumar, que ofreció los servicios jurídicos de la entidad a los trabajadores que denuncien a Pachi Vázquez. El secretario general de los socialistas gallegos fue el encargado de anunciar la elaboración de ese listado. Son ya varios, según Baltar, los empleados afectados que le han informado de su intención de denunciar a Vázquez, de modo que los servicios jurídicos de la entidad se pondrán a su disposición para «aconsellar» y «analizar» sus casos.

El presidente provincial insistió ayer ante los medios de comunicación en que «as cousas na Deputación se fan ben». Dijo que algunos de los nombres que aparecen en el listado del PSOE son erróneos porque, o bien no trabajan en la institución -citó el caso de la ex concejala ourensana María José Barbosa-, o entraron en política después de conseguir trabajo en la entidad. Otros, como José Eugenio Galindo, ex alcalde de Nogueira, llegaron a trabajar antes de que Baltar asumiera la presidencia. El ex regidor, además, entró en la plantilla de la Diputación cuando aún era socialista.

Baltar cree que las críticas del secretario general de los socialistas gallegos están injustificadas y que solo tratan de desviar la atención tras el fichaje del ex número dos del PSOE en Ourense por el PP. «O señor Pachi Vázquez cada vez que ten un problema no seu partido dispara contra as contratacións da Deputación. Leva facendo isto vinte anos e ninguén lle fai caso. A proba é que o PP e o señor Baltar seguen gañando as eleccións nesta provincia ano tras ano», dijo el presidente.

El máximo responsable de la institución se plantea también presentar una querrela criminal contra Vázquez y dice que lo hará si sus servicios jurídicos así lo determinan. «Non é o mesmo dicir que hai contratos ilegais que dicir que hai unha trama de corrupción. A min paréceme que iso é moi grave», dijo.

BALTAR EMPLEA A 300 CARGOS DEL PP OURENSANO

BÁJATE LA LISTA COMPLETA DE LOS 300 AGRACIADOS

Al menos cuatro alcaldes y 58 concejales del PP de distintos municipios de Ourense trabajan en la Diputación de Ourense que preside el conservador José Luis Baltar. No son los únicos. Según la lista hecha pública hoy por el PSdeG-PSOE, al menos 298 personas vinculadas con la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, entre cargos electos del partido y familiares directos de estos (hijos, cónyuges, parejas, progenitores) "trabajan o han trabajado" en los últimos meses en el ente provincial que capitanea Baltar, padre y mentor del actual presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco.

De este modo, los regidores de Bande, Trasmiras, San Amaro y Rubiá comparten pagador, lo mismo que varios ediles de esos mismos municipios. Incluso el presidente de Novas Xeneracións, Roberto Ameijeiras, también concejal en O Carballiño, **cobra un sueldo del organismo provincial**.

El importe de los salarios de la Diputación de Ourense supera en varios millones a la partida destinada a inversiones y, según han denunciado los socialistas en reiteradas ocasiones, en el edificio del ente provincial ya no hay espacio físico para albergar a todo el personal con que cuenta en plantilla. Tanto es así que algunos los empleados **están cedidos a ayuntamientos de la provincia en manos del PP**. A modo de ejemplo, la Diputación, segundo empleador provincial, tras la empresa Coren, dispone de una biblioteca para investigadores, con 12 sillas y 10 bibliotecarios en plantilla y sólo el edificio de dos puertas que alberga el centro cultural de la ciudad, anexo a la Diputación, cuenta con 35 porteros.

Las ventajas de los asalariados de la Diputación no quedan ahí. Preocupado por la situación de crisis económica, Baltar habilitó una línea de ayudas destinadas a sufragar "hasta el 80% del valor de los seguros de los préstamos contratados para la adquisición de la primera vivienda de los trabajadores fijos".

Anticipos sin intereses

Anticipos de hasta 3.500 euros con un plazo de devolución de hasta en 36 meses sin intereses, ayuda escolar por cada hijo en edad escolar, un seguro de asistencia sanitaria integral, un plan de pensiones, 1.600 euros a la familia en caso de defunción, 1.500 de "premio a la constancia" por jubilarse a los 65 años o ayudas por familiares discapacitados, son sólo algunos ejemplos de los **múltiples beneficios sociales** de que disfrutaban los trabajadores de Baltar.

www.publico.es 14.03.10

EL PSOE TRASLADA A FISCALÍA UNA LISTA CON MÁS DE 200 "ENCHUFADOS" DEL PP EN LA DIPUTACIÓN

Manuel Vázquez afirmó ante la directiva socialista que "el clan Baltar, a través de una trama de corrupción organizada, usa el dinero público para contratar a familiares y cargos políticos del Partido Popular"

El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, anunció ayer en una reunión del comité de dirección y de la ejecutiva del partido que lidera que trasladarán al fiscal una relación con más de 200 "miembros del PP y familiares directos de cargos del partido" que están trabajando en la Diputación, o lo hicieron en los últimos meses. Vázquez justifica la medida, al entender que puede existir "delito", cuando alguien "monta una trama organizada para emplear dinero público en algo para lo que no está destinado".

El secretario provincial del PSOE, Raúl Fernández, también le entregará la lista, por petición de Vázquez, a todos los sindicatos, "por si ellos no lo saben", y al Ministerio de Trabajo, al que pretende "echarle una mano, diciéndole dónde están los contratos ilegales, para que vayan de frente a por ellos".

Como hace diez años, Manuel Vázquez denunció ante la militancia socialista que "el clan Baltar y el PP de Ourense, a través de una trama de corrupción organizada, usa dinero público de los ciudadanos para contratar y enchufar a sus familiares y a los cargos políticos del PP".

Vázquez relacionó el fichaje del ex vicesecretario provincial del PSOE, Eladio Fernández, con este tipo de prácticas, al sostener que “no ha sido un caso aislado” ni “una casualidad” que se pasara al PP. Reconoció que está apenado. “Me duele el corazón por lo que acaba de pasar, porque me parece que alguien aprovechó la debilidad de una persona y aprovechó, sin piedad, las debilidades humanas, al pensar que en política vale todo”.

El secretario general del PSdeG considera que a los ciudadanos “le da asco” lo que está haciendo el PP en Ourense. Atribuye la baja de Eladio Fernández a la “debilidad de un pobre hombre que ha doblado la rodilla”. Y advirtió al PP que “por cada uno que tumben, van aparecer veinte más”.

Por su parte, Raúl Fernández contempla la actuación de Baltar como “una burla”. Y sostiene que “la gota que ha colmado el vaso” fue el fichaje de Eladio Fernández. “Ni los ciudadanos de esta provincia ni la justicia pueden permitir que se siga invirtiendo dinero público para pagar favores particulares. No hay ningún caso en España que tenga la dimensión del de la Diputación de Ourense”, pese a lo que muchos de ellos están siendo investigados.

Manuel Vázquez puso a disposición de la militancia de su partido y del conjunto de los ciudadanos “la relación de cargos, hijos, nueras, concejales, alcaldes y cuñados que están usando el dinero público de la Diputación de Ourense para enriquecerse y para manipular y controlar esta provincia”.

El PSOE llevará el listado a todos los concellos y villas de la provincia, según anunció Vázquez, para que sepan que “cuando no hay prestaciones por dependencia, cuando no hay sanidad, cuando no hay educación es porque alguien está malversando los fondos públicos”, para el pago de favores políticos.

Invocando a su condición de ex conselleiro de Medio Ambiente, Vázquez insinuó que el PSdeG tiene que contratar “un plan de saneamiento, depuración y desinfección” de la Diputación de Ourense, para que la institución que preside José Luis Baltar deje de ser la “última escuela de caciques de España”.

Manuel Vázquez sostiene que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, “no es distinto de Baltar. Feijóo y Baltar se retroalimentan para conseguir un modelo absolutamente negativo para Galicia. Feijóo es cómplice de Baltar”, al que tiene “a su derecha”. Y acusó al presidente de la Xunta de “entregar Galicia al Vaticano, como si fuera una cruzada”, con motivo de su encuentro con el Papa y de la programación de su visita a esta comunidad autónoma.

Vázquez defiende la necesidad de que las diferencias que hay entre la militancia del PSOE queden en un segundo plano, con la finalidad de unirse al “clamor que existe en España para que echemos a estos, para desinfectar la Diputación de Ourense y para cerrar esa escuela de caciques”.

Recordó que el PP gobierna la Diputación “por dos diputados”, de los cuales uno corresponde a la circunscripción de Ourense, que “ganaron por 600 votos”, y el otro a las circunscripciones periféricas, por lo que sostiene que el PSOE tiene la presidencia de la institución “a tiro de piedra”.

Relación

En la lista de cargos electos del PP o familiares que trabajan o trabajaron en los últimos meses en la Diputación de Ourense –dada a conocer parcialmente hace más de un mes por Faro de Vigo– figuran Alfonsín Gómez, María José, hermana de una candidata de Cartelle; Álvarez Álvarez, José, concejal de Muíños; Álvarez Cerqueira, Santiago, nieto de un cargo relevante del PP de Entrimo; Álvarez García, Rubén, candidato en Muíños; Álvarez González, Dositeo, ex concejal de Nogueira Ramuín; Álvarez González, Eugenio, candidato de A Teixeira; Álvarez López, David, sobrino de una concejal de A Teixeira; Álvarez Lorenzo, José Ramón, hijo de un candidato de A Teixeira; Álvarez Rodríguez, Manuel, candidato de San Xoán de Río; Álvarez Sousa, María Celia, sobrina de la teniente de alcalde de Cartelle; Álvarez Vázquez, Jesús, candidato de Calvos de Randín; Ameijeiras Toro, Roberto, concejal de O Carballiño y presidente de Nuevas Generaciones; Antelo Santos, María Dolores, candidata de O Carballiño; Araujo Lemus, Víctor Manuel, concejal del Concello de Baltar; Arias Devesa, Manuel, candidato de Verea; Arias Devesa, Manuel, ex concejal de A Veiga.

Armada Pérez, José Antonio, alcalde Bande; Aydillo Astorga, Antonio, hermano de la nuera del presidente de la Diputación; Babarro Fernández, Manuel, hermano del candidato de Paderne; Baltazar González, Verónica, concejal de A Rúa; Barbosa Martín, María José, ex concejal de Ourense; Barrio López, Eva María, concejal de Riós; Batista Seara, José Antonio, cuñado de un concejal de Maceda;

Batista Seara, Josefa, cuñada de un concejal de Maceda; Batista Seara, Manuela, mujer de un concejal de Maceda; Batista Seara, Margarita, cuñada de un concejal de Maceda; Batista Seara, María Carmen, cuñada de un concejal de Maceda; Bizarro González, José Sobriño, concejal de Parada de Sil; Blanco Alonso, Ana Sofía, candidata de Quintela de Leirado; Blanco Iglesias, José, candidato de Coles; Blanco López, Elvira, hermana de un ex concejal de Castro Caldelas; Blanco Pérez, José Antonio, concejal de Esgos.

Boimorto Falcón, Anselmo, hermano de un concejal de Vilamarín; Caballero Vázquez, Levi Efrén, yerno del alcalde de Vilamarín; Cacharo Gosende, Francisco, hijo del ex-presidente Diputación de Lugo; Cádiz Rilo, Begoña, ex nuera del presidente de la Diputación de Ourense; Calviño García, Iria, hija de un ex concejal de Barbadás; Campo Labrador, Ricardo, ex concejal de Ourense; Candal Jarrín, Ignacio Santiago, hermano de la alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras; Carballo Bouzas, Bernardino, concejal de Baños de Molgas; Carballo Fernández, Samuel, candidato de A Teixeira; Carballo Sampil, Ramón, candidato de A Merca; Caride González, Pilar Monserrat, concejal de O Carballiño; Carpintero Vázquez, María Dolores, hija del ex alcalde de Cortegada; Carrajo, Rosa, de la ejecutiva del PP de Verín; Carreño González, Silvia, concejal de Parada de Sil; Carrera Carballo, Rosa, ex concejal de Maceda; Casal Enríquez, Carmen María, pareja del hijo del alcalde de Xinzo; Casas Cabido, Monserrat, candidata de Xunqueira de Ambía.

Casas Iglesias, Pilar, candidata de Maceda; Castiñeiras Rois, Carlos, ex presidenta de Nuevas Generaciones; Castro Castro, Alberto Jesús, candidato de Coles; Cerdeira Lorenzo, Manuel, concejal de O Irixo; Cibeira Rodríguez, José, ex concejal de Piñor; Cid Cid, Domingo, hermano de un concejal de Allariz; Cid Cid, Javier, candidato de Allariz; Cid Delgado Rubén, hermano de una candidata de Maceda; Cid Rodríguez, Ana Isabel, candidata de Celanova; Cid Rodríguez, Ángel, candidato de Sarreaus; Conde Seco, José Luis, hermano de un concejal de Cea; Conde Seco, María del Mar, concejal de Cea; Contreras, Sonia, ejecutiva del PP de Verín; Cortés Pacios, Miguel, hermano candidato de Nogueira de Ramuín; Corzo Rodríguez, Adolfo Vicente, hijo del alcalde de O Bolo; Costa García, Emilio José, concejal de Castrelo do Val; Costela López, Emilia, candidata de Castro Caldelas.

Cudeiro Mazaira, José Jesús, ex jefe del Servicio Provincial de Urbanismo; Dacal Pavón Lucía, concejal de Vilamarín; De la Iglesia Rodríguez, Ana María, candidata de Esgos; Delgado Garrido, Pío, candidato de Baños de Molgas; Diéguez Covelo, Juan Manuel, candidato de Cenlle; Diz Salgado, Esther, candidata de Monterrei; Domínguez Gómez, Alfredo, hermana del candidato de A Teixeira; Domínguez Gómez, Ramiro, concejal de A Teixeira; Donis Carbajales, José Antonio, hermano candidato de A Bola; Donis Carbajales, Ricardo, candidato A Bola; Dosantos Lago, César, candidato A Gudiña; Enríquez Feijóo, Juan Manuel, candidato Xinzo de Limia; Estévez Diéguez, Fermín Carlos, candidato Entrimo; Estévez Durán, Julia, candidata Ribadavia; Estévez González, Raúl, candidato Vilamarín; Estévez Rodríguez, Francisco Javier, candidato Baltar; Expósito Pérez, María Luz, sobrina ex concejal Ribadavia; Fariñas Álvarez, Elvira, mujer concejal Arnoia; Feijóo Méndez, Francisco Javier, hijo alcaldesa Sandiás; Fernández Álvarez, Corona, candidata Petín.

Fernández Barja, Camilo, concejal Manzaneda; Fernández Bouzo, José Enrique, candidato Baños de Molgas; Fernández Cabido, Francisco, hermano concejal de Xunqueira de Ambía; Fernández Dacal, Alberto, concejal de Vilar de Santos; Fernández de la Fuente, María del Carmen, candidata de Cea; Fernández Fernández, Gloria, mujer del alcalde de A Merca; Fernández Fernández, Juan Carlos, concejal de Ribadavia; Fernández Fernández, Juan José, hijo concejal de San Cibrao;

Fernández Fernández; José Luis, hijo miembro de la ejecutiva del PP de O Barco; Fernández Figueiral, Javier, candidato de Amoeiro; Fernández López, Esther, candidata de Pereiro de Aguiar; Fernández Moreiras, María Luisa, candidata Carballeda de Avia; Fernández Núñez, Manuel, candidato Rubiá; Fernández Pérez, Nieves, madre de una concejal de Parada de Sil; Fernández Prieto, Manuel, concejal de Toén.

Fernández Rodríguez, Cristina, ex delegada; Fernández Rodríguez, José Julio, candidato Nogueira de Ramuín; Fernández Veiga, Antonio, concejal de Xinzo; Fernández Veleiro, Alfredo, ex concejal de O Carballiño; Ferreira Vázquez, Jónatan, candidato Ourense; Ferreiro Chao, Ramón, candidato Leiro; Ferreiro Feijóo, Felipe, ex delegado; Ferreiro Fernández, Manuel, candidato Rairiz de Veiga; Formoso Coello, Francisco Javier, candidato Esgos; Formoso Montero, Emilio, candidato de Ourense; Gago Laza, Ana María, ejecutiva del PP de Verín; Galindo González, José Eugenio, ex alcalde Nogueira.

<http://www.farodevigo.es/galicia/2013/01/03/querellan-baltar-prevaricar-contratacion/734866.html>

BALTAR DICE QUE QUIERE SEGUIR HASTA EL 2015 EN LA DIPUTACIÓN PARA PACIFICAR EL PARTIDO

José Luis Baltar no se rinde. El veterano político ourensano anunció a bombo y platillo que se retiraba de la primera línea de batalla, no sin antes hacerse de rogar para tomar una decisión, pedir sucesivas prórrogas y confirmar su intención a no optar a la presidencia del PP en Ourense horas antes de que su hijo abriese al público su oficina electoral e iniciase el reparto de su propaganda y cartelería electoral para acceder al cargo que ocupaba su padre en el partido. Muchos vieron la puerta abierta para culminar la definitiva renovación del PP de Galicia y la erradicación de las baronías. Baltar incluso amagó con cumplir la aplazada promesa de recuperar el tiempo perdido y dedicar más horas a su familia renunciando también a la presidencia de la Diputación de Ourense si era menester.

Pero el ex alcalde de Nogueira de Ramuín maneja los tiempos y los hechos, y su olfato político le advierte de que el 38% de votos de Jiménez Morán en el último congreso para elegir al presidente del PP en la provincia de Ourense y el enconamiento de las posturas enfrentadas de los partidarios de José Manuel Baltar y de Jiménez Morán (o lo que es lo mismo, de José Luis Baltar y José Manuel Baltar y sus afines, por un lado, y el sector oficial en la línea de Núñez Feijoo y Compostela, por otro) no presagia nada bueno.

Y Baltar ha recurrido a sus mejores argumentos, clásicos por otra parte, para abrir la puerta a la sucesión de sí mismo. Las luchas internas en el seno del PP y su deseo de no fallarle a los «alcaldes e militantes que me están pedindo que continúe» son sus puntos de apoyo para esta «meditada» decisión.

En su discurso triunfal del 30 de enero, cuando resultó elegido presidente provincial del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco aseguró que su padre seguiría al frente de la Diputación si ese era su deseo. Y su padre, José Luis Baltar, fue dosificando sus mensajes al respecto en las últimas semanas: si cabía la posibilidad de continuar otros cuatro años, si será él quien reflote la economía de la Diputación de Ourense -como le espetó al portavoz del BNG, Xosé Manoel Fírvida, en el último pleno provincial- y que todavía sigue siendo «un activo importante no PP».

La Diputación presentaba ayer un encuentro internacional sobre la castaña y, al ser preguntado sobre su futuro, Baltar decidió que había llegado el momento de abrir el «ourizo» de su futuro político: confirmó que su intención es optar a seguir al frente de la Diputación de Ourense y que ha decidido mantenerse en primera línea de la política provincial «despois de ver as actuacións que houbo nas semanas previas á celebración do congreso provincial». Esta circunstancia, la cita congresual particularmente dura y crispada, ha hecho recapacitar a Baltar Pumar, que se ve «na obriga de estar aí para ver se son capaz de ir moderando a situación dalgunha maneira e rematar cos enfrontamentos que poida haber». El presidente de la Diputación ourensana explicó que rectificaba su intención inicial de retirarse para tratar de apaciguar los ánimos y reconducir la situación «porque temos que olvidarnos dos problemas e traballar xuntos de cara ás próximas eleccións municipais» y para atender la demanda de la mayoría de los alcaldes y militantes del PP «que mo están pedindo».

Baltar matizó que no es su intención restar protagonismo a su hijo y que las declaraciones fueron autorizadas «polo presidente provincial -su hijo-, porque cando un fai unhas declaracións deste tipo haille que pedir permiso ao presidente provincial». A pesar de las reiteradas llamadas realizadas, ayer fue imposible conocer la valoración de José Manuel Baltar sobre la decisión de su progenitor.

(www.lavozdeg Galicia.es, 09/03/10)

UN PERITAJE TRIPLICA EL PRECIO POR EL QUE BALTAR VENDIÓ UNA FINCA EN 2001

El valor real de la finca ourensana Santamarina casi triplica el precio por el que el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, la vendió en su día a la empresa Flager, SA, según la tasación realizada por un perito a petición de la Audiencia de Ourense.

En 2001, Baltar entregó a la inmobiliaria catalana, aunque con accionariado gallego, Flager 20 hectáreas de terreno propiedad de la Diputación en la parte trasera del complejo hospitalario ourensano y tasó en 8,4 millones de euros el precio de la parcela. Alarmados por lo "ridículo" del montante y por lo que consideraban un "auténtico pelotazo urbanístico" ya que se proyectaba la construcción de más de mil viviendas en la finca, PSOE y BNG recurrieron judicialmente la transacción, convencidos de que el precio

real multiplicaba por cuatro el de la venta. El colegio de arquitectos y peritos independientes avalaron en sus declaraciones judiciales las tesis de la oposición.

Siete años después, en abril de 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no sólo validó la operación realizada entre la inmobiliaria y la Diputación, sino que se mostró especialmente crítico con las valoraciones de PSOE, BNG y del colegio de arquitectos, que había tasado el precio real en 30 millones de euros. Y Baltar esgrimió su triunfo judicial destacando que evidenciaba su responsabilidad política.

Finalmente, el precio real de la finca se acerca a la valoración real de los arquitectos. La parcela ha sido tasada por un perito de la Audiencia de Ourense en 27,4 millones de euros, muy lejos de los 8,4 millones en que fue vendida en 2001. La Audiencia requirió el valor real para sacarla a subasta tras aceptar una reclamación de los antiguos herederos que demandaban a Flager el pago de los derechos de reversión.

La finca que Flager compró a la Diputación por 8,4 millones tiene 112.000 metros cuadrados edificables. El Ayuntamiento de Ourense acaba de vender por 2,8 millones mediante concurso, para construcción de vivienda pública, una parcela anexa de 9.000 metros cuadrados. "Acatamos en su momento la sentencia del TSXG", señala la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, pero matiza: "Siempre mantuvimos que el precio de la venta de esa propiedad pública era irrisorio".

Las enmiendas al urbanismo ourensano son constantes. Ayer, el Gobierno local aprobó una rebaja de 15.000 metros cuadrados en la edificabilidad concedida por el Gobierno de Manuel Cabezas a la empresa Xardín das Burgas que preveía construir un hotel-balneario en ese entorno. Cuando el PP accedió al Ayuntamiento ourensano, el planeamiento urbanístico concedía una edificabilidad de 3.000 metros cuadrados a la zona. El equipo de Cabezas elevó en 2000 la edificabilidad a 19.232 metros cuadrados.

(www.elpais.com, 05/03/10)

BALTAR RECIBIÓ MÁS DE 200 VOTOS DE EMPLEADOS DE LA DIPUTACIÓN

La victoria del presidente del PP ourensano se fraguó gracias al apoyo de los trabajadores temporales empleados por su padre

El pasado 30 de enero, José Manuel Baltar Blanco sucedió a su padre, José Luis Baltar Pumar, como presidente del PP de Ourense. Ante la mirada de los "cascos azules" enviados desde las sedes del PP gallego y español para garantizar la limpieza del cónclave, el hijo de Baltar se impuso con rotundidad a su oponente.

José Manuel Baltar vapuleó al rival de Rajoy y Feijóo, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez. Pero ahora se ha sabido que más de 200 de los delegados que lo auparon a la presidencia y vitorearon después su triunfo abucheando a los oponentes, tenían puestos de trabajo en la Diputación provincial de Ourense. La mayoría de esos votantes eran empleados temporales fichados por el padre del presidente electo. Además de estos dos centenares largos de trabajadores de la institución, asistieron al congreso como delegados de Baltar otros militantes del Partido Popular que, aunque no dependen de la institución provincial, tienen colocados en ella a sus familiares.

Es el caso de alguno de los nuevos miembros de su ejecutiva, como Ignacio Martín Amaro; o el ex presidente de la ONCE, José Mayo; o la representante de la federación vecinal Limiar, Mercedes Alcalá, o el ex delegado provincial de Medio Ambiente Agustín Prado Verdeal. La lista es larga. Uno de los casos más llamativos es el del teniente de alcalde de Cartelle, Jaime Sousa. No sólo ha encontrado él un puesto de trabajo en la Diputación como funcionario. La institución da empleo también a sus dos hermanos, a un tío, a un hijo, a la hija de su primera mujer y a la hija de su actual compañera. El congreso de la victoria de los Baltar, que puso el cortafuego a la era de triunfos de Feijóo, se fraguó con el respaldo en urna de 723 compromisarios, frente a los 433 de su oponente. De aquéllos, casi un tercio, más de 200, trabajan para la Diputación, mayoritariamente como eventuales. Apenas figuran una docena de funcionarios. El resto son contratados temporales, con la reedición de sus empleos pendiente de la decisión del presidente provincial, y personal laboral fijo. Abundan los que han conseguido ver renovado su puesto de trabajo anualmente desde 2007 hasta 2009. Los más afortunados, pocos, consiguieron convertirse en laborales fijos tras el rosario previo de contrataciones.

Del entramado de adhesiones tejido por Baltar padre a lo largo de sus dos décadas al frente del Partido Popular y de la Diputación dan cuenta las fidelidades que ha cosechado en algunos municipios de la provincia, en donde la práctica totalidad de delegados avalaron a su hijo.

De los 10 compromisarios que se postularon por el Ayuntamiento de Amoeiro, siete trabajan en la institución provincial, todos ellos con contratos renovados sucesivamente, excepto dos que son laborales fijos. En el municipio de Entrimo, de los cinco delegados al congreso, cuatro han tenido o tienen contrato en la Diputación y uno de ellos es funcionario. Y en Nogueira de Ramuín, Baltar Blanco contó con el apoyo de media docena de trabajadores, entre los que figura también un funcionario, contratados por su padre.

Paradigmático es el caso de Esgos, tierra natal del presidente de la Diputación, en donde gobierna su cuñado, Manuel Blanco, mientras que José Manuel Baltar Blanco ejerce la tenencia de alcaldía. Aquí se invierte la tendencia de la precariedad laboral. De los cuatro delegados al congreso contratados en la Diputación tres son funcionarios.

El Ayuntamiento de Porqueira, en donde Baltar padre captó en su día de las filas del PSOE a Susana Vázquez Dorado -la primera tráfuga española-, aportó seis compromisarios con empleo en la Diputación. Finalizado con éxito el congreso de la sucesión familiar, el presidente de la Diputación anunció que tocaba cerrar el grifo de las contrataciones, aunque en este mes ha anunciado nuevas oposiciones.

www.elpais.es 28.02.10

BALTAR CONVOCA OTRO CONCURSO PARA CUBRIR OCHO PUESTOS DE TRABAJO

Cinco días después de anunciar su intención de "cerrar el grifo de las contrataciones", a la vista del alto endeudamiento de la Diputación, José Luis Baltar ha vuelto a convocar nuevas plazas. El Boletín Oficial de la Provincia de ayer recogía las bases de contratación para ocho nuevos puestos de trabajo: un portero, un chofer operario de basuras, un peón agrícola, un ayudante de obras y servicios y dos técnicos especialistas de laboratorio. Salvo estos últimos, con categoría de personal funcionario interino, el resto serán contratados como personal laboral interino.

A estas convocatorias se suman las de otro técnico especialista de laboratorio y otro peón agrícola, ambos para el Inorde (Instituto Orensano de Desarrollo Económico) dependiente de la misma Diputación. Los ocho empleos que oferta la Diputación se concederán mediante concurso oposición y coinciden con un proceso de "funcionarización" (conversión en trabajadores fijos del personal eventual) iniciado la semana pasada en la institución, después de que Baltar contratase a otro centenar de personas durante el proceso precongresual del PP de Ourense.

Para hacer frente a los gastos del personal, el organismo provincial acudirá este año a un crédito en su presupuesto general. El endeudamiento de la Diputación alcanza los 90 millones de euros, frente a un presupuesto de 84,9 millones.

(www.elpais.com, 18/02/10)

BALTAR DICE QUE NO QUERÍA BENEFICIAR A SU HIJO AL CONTRATAR A DELEGADOS DEL PP

José Luis Baltar Pumar, presidente de la Diputación ourensana, no ve ninguna irregularidad en el hecho de que una de cada cuatro de las personas contratadas por la institución en las semanas previas al congreso provincial del PP fueran compromisarios o aspiraran a asumir esa responsabilidad de partido. El máximo mandatario de la entidad provincial, que no se había pronunciado hasta ahora sobre este asunto, explicó ayer que los veinte candidatos a delegados objeto de polémica fueron fichados en fechas cercanas al cónclave del PP porque es a principios de año cuando la institución dispone de fondos para renovar determinados contratos extinguidos al finalizar el anterior ejercicio. «Absolutamente ningún», según aseguró, fue contratado para garantizar el apoyo a la candidatura de su hijo, José Manuel Baltar Blanco, a la presidencia del PP ourensano, tal y como denuncia la oposición.

«Non ten absolutamente nada que ver unha cousa coa outra. Non é que se contraten agora porque fan ser compromisarios; é que hai xente que xa traballara na Deputación e rescindíuselle o contrato moito

antes de que houbera o congreso do PP», dijo José Luis Baltar, que calculó en un 90% el porcentaje de contratados en las últimas semanas que estarían en esa situación. El presidente de la institución provincial no quiso dar nombres ni referirse a casos concretos por respeto a los afectados, según afirmó.

Baltar quiso, además, eludir las críticas argumentando que para la Diputación trabajan también miembros de la candidatura que se enfrentó a la de su hijo, encabezada por Juan Manuel Jiménez Morán, y lamentó que esta circunstancia no haya sido tomada en cuenta entre quienes censuraron su actuación. «O que me estraña é que se fale só deses e non se fale de determinadas persoas que ían na outra lista. Hai señores da Deputación Provincial que son compromisarios e son votantes e que figuran na outra candidatura. ¿Por que ese interese de marcar a uns dun lado e dos outros non dicir absolutamente nada?», sentenció Baltar Pumar, que no precisó si las personas a las que se refería fueron o no renovadas en la institución provincial en semanas previas al congreso del Partido Popular.

José Luis Baltar restó importancia a la polémica por las contrataciones de la Diputación ourensana y la situó en el marco del debate político habitual en la institución. «O PSOE ten que dar caña. Cando hai eleccións contratamos a xente porque hai eleccións. Este ano, como non hai eleccións, contratamos porque hai o congreso provincial do PP», dijo.

(www.lavozdegalicia.es, 18/02/10)

BALTAR FIRMÓ EN TRES AÑOS 1.600 EMPLEOS EVENTUALES EN LA DIPUTACIÓN

En los últimos tres años, los tres electorales, José Luis Baltar inició una escalada de contrataciones en la Diputación. A la baja en respaldo electoral, el presidente provincial firmó más de 1.600 empleos eventuales y colocó al organismo que preside en el ranking de los que más personal tiene de España. Y resistió en las urnas el tirón de socialistas y nacionalistas.

La Diputación de Ourense (con 335.000 habitantes y en el puesto 39º de las 52 provincias españolas en población) ostenta, tras Barcelona (5,4 millones de habitantes y la segunda más poblada de España), el récord en número de empleados. El millar y medio largo de trabajadores contratados temporalmente están, en su práctica totalidad, vinculados al PP, aunque menos de la mitad (básicamente alcaldes, concejales, cargos orgánicos del partido y sus parientes) son fijos. La Diputación tiene en plantilla a 650 personas pero alcanza picos de empleo de más de 1.100 trabajadores en periodos preelectorales.

Ocurrió cuando Feijóo aspiraba a la presidencia de la Xunta. A finales de enero de 2009, Baltar admitió por escrito que en 2007 -hubo municipales- había contratado a 470 eventuales y en 2008 -en vísperas de las autonómicas- a otros 490. Entre ellos, 33 porteros para atender las 3 puertas de un centro cultural, 16 limpiadores para el Teatro Principal y 17 empleados para atender 15 caballos del centro ecuestre de Antela. "Nadie del PP protestó, pese a que se puso de manifiesto que el personal de la Diputación duplicaba al de las de A Coruña o Pontevedra aunque éstas ofertaban más servicios", sostiene la secretaria de organización de los socialistas ourensanos, María Quintas.

El secretario provincial del PSdeG, Raúl Fernández, destaca que Murcia o Málaga (cada una con 1,5 millones de habitantes), Alicante y Sevilla (con 1,9 millones) o Valencia (2,6 millones de habitantes) tienen diputaciones "con menor número de trabajadores que la de Ourense". En Valencia, la Diputación destinó en 2009 a personal 76,9 millones de euros de un presupuesto de 528,2 millones. Baltar gasta en Ourense 29,3 millones de euros en personal de un presupuesto de 84,9 millones.

Pese a un endeudamiento del 110%, Baltar mantuvo la espiral de las contrataciones hasta que tocó techo en el congreso del partido en que su hijo se jugaba la sucesión. El presidente acabó contratando en la Diputación sin informes técnicos a decenas de militantes del PP. Su hijo ganó y la táctica de Baltar padre escandalizó a los rivales apadrinados por Feijóo, aunque él "haya avalado siempre el clientelismo".

Quintas recuerda que el delegado de la Xunta y hombre de Feijóo en la provincia, Rogelio Martínez, "presidió durante estos 20 años los tribunales de oposiciones y las pruebas de acceso" por las que consiguieron empleos centenares de militantes del PP. "No sólo los de la boina, son docenas las personas vinculadas a Feijóo, Martínez y Jiménez que accedieron a trabajar en la Diputación por el mismo método". La socialista cita al ex delegado de Obras Públicas Elier Ojea, el alcalde de San Amaro o el concejal en Ourense Francisco Javier Rodríguez Nóvoa y su hermano.

(www.elpais.com, 16/02/10)

BALTAR DIO TRABAJO COMO PORTEROS Y PEONES A CANDIDATOS A DELEGADOS DEL PP

Ordenanzas, porteros, peones y auxiliares. Esas son las ocupaciones en la Diputación de Ourense de la mayoría de los afiliados del Partido Popular que fueron candidatos a compromisario y, por tanto, aspirantes a votar en el congreso en el que resultó vencedor José Manuel Baltar, hijo del presidente de la institución provincial.

Según la lista de contrataciones realizadas entre noviembre y enero facilitada por el organismo a instancias de la oposición -que denunció la firma masiva en fechas próximas a la cita congresual-, el departamento de Vías y Obras es el que concentra a un mayor número de afiliados del PP que tomaron parte en el proceso electoral. Es el caso del miembro de Novas Xeracións José Luis Rodríguez López, con un contrato de seis meses como peón de albañil. El mismo puesto, aunque durante menos tiempo, ocupan otros dos candidatos a compromisario que comparten departamento con otros dos, que ejercen de sereno y ayudante de taller respectivamente.

En el departamento de Cooperación Municipal trabaja el presidente del PP de O Carballiño, Guillermo Fernández Feijoo, contratado como gestor de la administración general. En la misma área, aunque como técnica de igualdad de oportunidades, trabaja la concejala en O Carballiño e integrante del comité ejecutivo de José Manuel Baltar, Pilar Caride. A Cooperación Municipal también están adscritos un agente de empleo y desarrollo local y un auxiliar de recaudación, candidatos a compromisario por la capital y O Barco, respectivamente.

En la Secretaría General de la Diputación de Ourense prestan sus servicios desde el 16 de enero tres afiliadas de la capital como auxiliar administrativa, auxiliar informática y agente de empleo y desarrollo local, con contratos de entre tres y seis meses.

Desde la oposición siempre se ha señalado al Centro Cultural de la Diputación como ejemplo paradigmático de la política de contratación de José Luis Baltar. En las semanas previas a la celebración del congreso del Partido Popular se contrató a una ordenanza por un período de medio año y a dos porteras, con contratos de seis meses. Según los últimos datos aportados por el Partido Socialista, en ese centro de trabajo hay once empleados fijos que ejercen de porteros y en los dos últimos años se materializaron las contrataciones de otros doce, más las correspondientes a diez ordenanzas y cuatro recepcionistas. Algo parecido ocurre en el Teatro Principal, que gestiona la Diputación, donde dos peones de mantenimiento firmaron en enero, días antes del congreso, para trabajar hasta el próximo mes de abril.

María del Pilar García Tizón, concejala en Cea, tiene un contrato de seis meses como agente de empleo y desarrollo local, dependiendo del Servizo de Aguas y Medio Ambiente. La lista se completa con otro peón, que trabaja en la finca O Reino, y con un ayudante de fotocomposición en la imprenta provincial.

(www.lavozdegalicia.es, 16/02/10)

BALTAR RECURRIÓ A UN CRÉDITO PARA CONTRATAR PERSONAL 15 DÍAS ANTES DEL CONGRESO DEL PP

Quince días antes del congreso que puso a su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar llenó los pasillos de la Diputación de candidatos a compromisarios, o parientes de éstos, y les firmó contratos de trabajo en la institución. La mayoría estaban ya empleados en las vísperas del cónclave. La urgencia llevó al presidente y padre del candidato José Manuel Baltar a firmar los contratos sin soporte técnico. El interventor, José María Baños, confirma ahora, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, que Baltar concedió los empleos "sin contar con informe expreso" de Intervención ni de Secretaría, aunque el técnico disculpa la práctica señalando que "no se consideran preceptivos" esos informes. Baños reconoce que los contratos de trabajo de esos días se realizaron con cargo "al crédito presupuestario" de 2010, que entró en vigor ese mismo mes.

Había dinero en las arcas provinciales para realizar las transacciones laborales porque la institución, acuciada por el recorte de las aportaciones del Estado, acudió a un crédito de 7,5 millones de euros -el de 2009 había sido de tres millones- de los que destinó "más de un millón" al capítulo de personal eventual, destaca el portavoz del grupo provincial del PSdeG y alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García. En opinión del socialista, la actuación de José Luis Baltar con las contrataciones durante el periodo previo al congreso "bordea la legalidad".

Cuando se hizo público que había firmado contratos a posibles compromisarios al congreso del PP, el presidente reconoció la evidencia pero la enmarcó en la "práctica habitual". "Siempre contrato a principios de año", señaló. Solía hacerlo en febrero, pero además, según los socialistas, los contratos tenían los avales correspondientes. "Técnicamente es ilegal lo que ha hecho", sostiene García, quien reconoce que "finalmente no ocurrirá nada" porque después "legalizará la situación". Para el PSOE lo más grave es que las contrataciones se han realizado "sin más criterio de selección que el que convino al presidente" y "sin tener en cuenta" los supuestos de mérito y capacidad.

Unos meses antes del congreso -el último cuatrimestre de 2009- Baltar firmó subvenciones nominativas, que tampoco informan los técnicos, a numerosos ayuntamientos de la provincia. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de ayer la práctica totalidad de las ayudas fueron en esta ocasión para municipios gobernados por alcaldes del PP afines a él. El BOP recoge también las subvenciones concedidas de la misma forma a asociaciones y colectivos. Entre otras, las ayudas fueron para fiestas gastronómicas y patronales (incluida, con 2.000 euros, una del huevo frito), para la canción misionera; para la asamblea ordinaria de los empresarios del polígono industrial -3.000 euros-; para un curso de ecografía; para una conferencia de David Meca (Nadando hacia el éxito, por 3.000 euros); para trajes de los integrantes de las bandas de música de algún municipio y para vestuario y decorados de una asociación de jubilados, también por 3.000 euros.

En medio de la tensión que vive el PP ourensano, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Enrique Poly Nóvoa - a quien el nuevo presidente llamó "desleal" por integrarse en el sector del candidato perdedor- se postuló ayer, contraviniendo a su nuevo jefe, como candidato a la alcaldía. "Me levanto y me acuesto en clave municipal", justificó Nóvoa.

Por su parte, el portavoz del PP de Galicia y número dos de la candidatura derrotada en el congreso de Ourense, Antonio Rodríguez Miranda, señaló ayer que, para poder ganar las próximas elecciones municipales, la formación necesitará "generosidad por parte de los ganadores y lealtad por la de los perdedores" de las elecciones internas. "Mi presidente es José Manuel Baltar y estoy a su disposición para lo que necesite", aseguró a continuación.

Las declaraciones de Miranda llegaron el mismo día en que Manuel Fraga, en un desayuno informativo en Madrid, calificó de "buena" la elección de Baltar, porque "las cosas siguen exactamente igual, independientemente de que haya ganado un bando u otro".

(www.elpais.com, 03/02/10)

LA CÚPULA DEL PP SE PLIEGA AL TRIUNFO DE BALTAR Y LE PIDE UNIDAD Y DIÁLOGO

Tras el revés de la victoria del clan de los Baltar en la pugna por el control del partido en Ourense, la dirección del PP gallego desplegó ayer declaraciones y gestos de conciliación para matizar las amenazas previas a la derrota de su candidato el pasado sábado. La línea de reencuentro con el baltarismo fue sancionada ayer en Madrid por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP gallego, en un almuerzo en el Club Siglo XXI, donde evitó cualquier crítica al nuevo presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar Blanco.

"A ningún demócrata puede preocuparle una victoria democrática. Estaría muy preocupado si se demostrase que en mi partido decide una sola persona. No es así, deciden los militantes. Aquí votaron 1.200 personas. Ahora el deber del nuevo presidente es unir a la militancia y ganar elecciones, de nada sirve ganar congresos si no se ganan elecciones.

Y para ganar es imprescindible unir al partido", afirmó Feijóo, para luego añadir: "Ahora hay un nuevo presidente del PP de Ourense. Es verdad que comparte los apellidos con el anterior, pero nadie está inhabilitado por compartir apellidos con otro político. Tenemos excelentes políticos hijos de políticos, sin salir de Madrid [en referencia a Alberto Ruiz-Gallardón]. Lo respetaré".

En A Coruña, el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, redobló sus llamamientos a recomponer la unidad entre los conservadores ourensanos. Sería "un error", alertó el número dos del PP, que el nuevo barón provincial excluyese a quienes votaron a su rival, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez.

"Con independencia de los órganos de dirección que conforme" Baltar y de los que apartó expresamente a sus adversarios, el nuevo presidente del PP ourensano, insistió Rueda, debe "contar con todo el partido", le hayan votado o no. "Todos deben trabajar en la misma dirección y creo que todos lo van a entender", deseó el secretario general del partido.

Sobre su intención expresada antes del congreso de que el relevo de cargos en Ourense se extienda a la Presidencia de la Diputación, Rueda afirma que sigue en pie aunque matizó que se trataría de "hablar" del asunto con el actual presidente, José Luis Baltar Pumar. "Se trata de reforzar al partido, no de otra cosa", arguyó el secretario general al admitir que el propio Baltar tendrá voz y voto en un proceso que, "en un clima de normalidad", se abrirá para decidir a los candidatos a las diputaciones para las municipales de 2011. El nuevo líder provincial en Ourense ya advirtió DE que su padre será el que decida si quiere o no seguir al frente de la Diputación. "Todos remamos en la misma dirección", remachó Rueda.

En Ourense aún supura la herida. El candidato de Feijóo, Jiménez Morán, perdedor del congreso, reclamaba ayer que se evite el revanchismo. "Quiero suponer que las cosas discurrirán por el cauce lógico, que no habrá revanchismo y que se tendrán en cuenta las alocuciones de Feijóo y de Baltar", llamando a la unidad. Asegura que está a disposición del nuevo presidente -"lo felicité en el congreso con un abrazo y me dijo que ya hablaríamos"- pero puntualiza que ni lo ha llamado. "Ni me importa", añadió.

Jiménez sale al paso de las declaraciones realizadas a este diario por Baltar Blanco relativas a su papel decisivo en la confección de las candidaturas a las municipales. El alcalde de Verín confía en repetir. "Pero bueno, él verá. Sólo faltaba que alguien viniera a desequilibrar los mejores resultados del PP en la provincia", advierte. En una entrevista en la Cadena Cope, su rival, el presidente del PP ourensano, José Manuel Baltar Blanco, afirmó que su mayoría en el congreso fue "súper absoluta" e insistió en que su padre, José Luis Baltar Pumar, seguirá en la Diputación "hasta que él quiera".

(www.elpais.com, 02/02/10)

FEIJÓO SE ESTRELLA CONTRA BALTAR

El hijo del barón logra el 62% de los votos frente a la dirección del partido - Rueda reclama unidad y el vencedor dice que no integrará a los oficialistas

José Luis Baltar atraviesa solo el Pazo de Os Remedios, busca a su mujer, Alicia Blanco, entre la media docena de pancartas de apoyo a su hijo, y concluye: "Ya está". Decenas de familiares y amigos se arrancan con vítores de "¡presidente, presidente!" el pabellón se contagia y aparece en escena el heredero, José Manuel, que baja por la escalerilla en medio de una atronadora ovación que hace imperceptible la entrada por una puerta lateral, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Baltar padre alza a su hijo en brazos frente a un enjambre de fotógrafos que retratan la instauración de una saga en Ourense. "Han perdido los traidores", grita una seguidora convencida. Los altavoces del pabellón precisan el resultado: 723 votos de Baltar Blanco, por 433 de Juan Manuel Jiménez Morán. Los observadores llegados desde las sedes de Madrid y Santiago para fiscalizar la votación escuchan y callan.

Alberto Núñez Feijóo supo ayer que la dinastía continúa en Ourense y que tiene un problema grave en la provincia que lo vio nacer. Su candidato preferido, a quien la dirección regional empujó a presentarse tras proporcionarle un equipo de campaña, apenas convenció al 38% de compromisarios. De poco le sirvió a Jiménez Morán arrimarse al presidente gallego, ni las declaraciones de Feijóo y Rueda en dos periódicos distintos el pasado jueves, llamando a renovar el partido. La intervención del propio presidente nacional, Mariano Rajoy, que esta misma semana llamó a capítulo a Baltar a Madrid no tuvo efecto. Y la traca final del aspirante oficialista -la filtración la misma víspera del congreso, de una candidatura que reservó el segundo puesto, tras Jiménez Morán, al *número tres* del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda, y dejó hueco para el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez- sólo añadió algo más de estrépito al fracaso. La apuesta de Feijóo, Rajoy y Rueda convenció exactamente al 36,05% de la militancia ourensana.

Pero la contundencia de la derrota no impidió al secretario general gallego reclamar "inteligencia" a la hora de "interpretar los resultados". La dirección del PP interpreta que con un 40% de contestación interna, los Baltar no deberían permitirse demasiadas alegrías. Pese a ello, Alfonso Rueda se esforzó en

cerrar las heridas de campaña. Admitió que algunas cosas no deberían haber pasado y pidió explícitamente un partido unido que garantice futuros éxitos electorales.

"Cerremos este día para la historia y trabajemos todos juntos", exhortó a los miembros de ambas candidaturas que compartían las primeras filas. Los rostros de todos ellos delataban a vencedores y vencidos. En las sillas del medio, exultantes, Baltar, padre e hijo... Mucho más escorados y cariacontecidos, dirigentes como Rodríguez Miranda, Celso Delgado, o Rogelio Martínez, muy tocados políticamente tras la votación de ayer. El sucesor de Rueda en el estrado, el presidente electo, Baltar Blanco, hizo como si no hubiera oído las llamadas a la unidad y ratificó su compromiso de construir un partido "de leales, de gente que no duda y que no siembra dudas". Demostró de paso que, por mucho que interese a la cúpula del PP, el antecedente de Cacharro Pardo no cuenta porque ni Lugo es Ourense, ni el apellido Baltar se jubila tan fácilmente.

El estreno en el cargo del nuevo presidente fue otro alegato a favor del galleguismo y de los intelectuales de la Xeración Nós, con evidentes puyas a sus superiores de Santiago y Madrid. "Llegó el tiempo de la imposición de abajo a arriba, en lugar del diseño de plástico", avisó de entrada. Luego invitó a su padre a seguir en la Diputación el tiempo que quiera, desoyendo a la dirección regional que pretende despedirlo también de las instituciones.

Pero la mayor carga de profundidad la colocó en el turno de agradecimientos. Tras saludar a "la familia", se acordó de su hija Elena, todavía adolescente. "Espero que nadie cercene tu libertad de presentarte", expuso en un mensaje directo a sus detractores internos del partido. "En Ourense pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos... nadie puede poner vetos a la democracia", continuó. Su intervención, trufada de ataques contra BNG y PSdeG para hacer ver que éstos son los verdaderos enemigos, sirvió además para marcar una cierta distancia respecto a su padre: "Nace un partido nuevo que conectará el pasado con una nueva forma de hacer política".

Cuando comprobó que la llamada a la unidad de Alfonso Rueda no había servido de mucho, el propio Feijóo la propuso a su manera. Evocó su propio ascenso a la presidencia del partido hace cuatro años y recordó a Baltar Blanco que sólo comprendería lo que él sintió entonces, cuando "desde la soledad de su despacho" reflexione sobre la responsabilidad de liderar "un partido unido donde haya sitio para todos", en su enésima llamada a una integración imposible de los dos bandos populares. Y más cuando el calendario marca que falta menos de un año para la campaña de los comicios municipales.

Feijóo había comenzado proclamando, que "este no es el partido de los caciques" y advirtió luego que "de nada valen ganar congresos si no se ganan elecciones". Empleó un tono gélido, más que frío, para saludar al vencedor, a quien no tardó en poner deberes. El presidente reclamó que el partido vuelva a la calle después de una campaña "viva" e incluso se propuso improvisar la fotografía de las portadas de hoy.

Cuando concluyó su intervención, impuso un posado a quienes no dejaron de descalificarse durante las últimas semanas. Pero las sonrisas forzadas de Baltar Blanco y Jiménez Morán deslucieron el retrato. La instantánea se quedó vieja sólo unos minutos después, cuando el nuevo presidente del PP ourensano subrayó ante los periodistas que en ningún caso integrará a sus rivales en el cónclave, tal y como le exige la dirección. "Seré coherente con lo que dije en campaña y formaré un equipo con las personas que hablaron en positivo", espetó. Palabra de Baltar II en el inicio de su mandato. La vieja pugna entre el sector de la boina y el del birrete, que muchos dieron por finiquitada antes de tiempo, entra en una nueva fase.

"OS DEBO TODO LO QUE SOY"

No lloró José Luis Baltar, pero estuvo roto en el que debería de haber sido su discurso de presentación del informe de gestión y fue en cambio un recorrido emocional por sus casi dos décadas de dedicación al partido. Con la voz cortada desde el minuto cero, el presidente saliente habló de la familia -de la suya y de la del PP- e incidió en la unidad de una organización a la que, detalló, le entregó "la etapa más dulce, próspera y victoriosa de su historia".

Baltar celebró el congreso de la sucesión vigilado por la dirección de su partido, que puso al número tres, Antonio Rodríguez Miranda, de vicepresidente de la ejecutiva de su rival. Pero apeló en todo momento a la unidad. "Por separado no somos nada", repitió. Empezado su discurso, el presidente saliente mandó un "agradecimiento especial" a los observadores enviados por las direcciones gallega y nacional para

controlar la limpieza de los votos. "Se van a ir convencidos de que aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", proclamó. Minutos después, la realidad lo contradecía: el presidente de la Mesa del congreso, el secretario general de Emigración, Santiago Camba, anunciaba que se habían presentado "duras impugnaciones".

Camba también amonestó a Baltar: "Le ruego que se ciña al informe de gestión", lo exhortó en medio del populista discurso. Pero Baltar dio rienda suelta a su emocional mitin: "¡Todo lo que soy os lo debo a vosotros, todo; siempre trabajé con la gente del pueblo!"

www.elpais.es 31.01.10

BALTAR LAMINA AL CANDIDATO DE RAJOY Y LEGA A SU HIJO EL PP DE OURENSE

El nuevo presidente anuncia que construirá "un partido de leales"

El veterano dirigente ourensano José Luis Baltar atraviesa solo el Pazo de Os Remedios, busca a su mujer, Alicia Blanco, entre la media docena de pancartas de apoyo a su hijo, y concluye: "Ya está". Familiares y amigos se arrancan con vítores de "¡presidente, presidente!", el pabellón se contagia y aparece en escena el heredero, José Manuel, en medio de una atronadora ovación que hace imperceptible la entrada, por una puerta lateral, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Baltar padre alza a su hijo en brazos en la foto que instaura el nacimiento de una saga en Ourense. "¡Han perdido los traidores!", grita una seguidora convencida.

- **El heredero invitó a su padre a seguir al frente de la Diputación**
- **Feijóo: "De nada vale ganar congresos si no se ganan elecciones"**

La megafonía precisa el resultado: 723 votos de Baltar Blanco, por 433 de su rival Juan Manuel Jiménez Morán. El PP de Ourense tiene nuevo presidente y es el hijo del hombre que ocupó el cargo durante los últimos 17 años. Los observadores enviados desde las sedes del PP de Madrid y Santiago para fiscalizar la votación callan.

Alberto Núñez Feijóo supo ayer que la dinastía de los Baltar se perpetúa en Ourense y que el problema que se le presenta en la provincia que lo vio nacer es más grave de lo que pensaba. Un lamparón en la impoluta trayectoria que lo devolvió a la Xunta en sólo cuatro años, tras suceder a Fraga.

Después de prometer en campaña que él mismo acabaría con el caciquismo "en un día", ordenó improvisar una candidatura para cerrar el paso a Baltar en Ourense, máximo exponente del clientelismo en el rural gallego, que gobierna esa diputación provincial desde hace dos décadas. El propósito del viejo barón de dictar testamento político a favor de su hijo había irritado por igual al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y a Feijóo.

Pero el candidato elegido por éstos para cortar la dinastía Baltar, Juan Manuel Jiménez Morán, apenas convenció al 38% de compromisarios ourensanos.

De poco le sirvió a Jiménez Morán el apoyo del presidente gallego, ni las declaraciones de Feijóo en dos periódicos regionales el pasado jueves, llamando a renovar el partido. La intervención del propio Rajoy, que esta semana llamó a capítulo a Baltar a Madrid, no tuvo efecto. Y la traca final del aspirante oficialista, que reservó el segundo puesto de la candidatura al número tres del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda, sólo añadió algo más de estrépito al fracaso. La apuesta de Feijóo y Rajoy convenció exactamente al 36,05% de la militancia ourensana.

La contundencia de la derrota no impidió al secretario general, Alfonso Rueda, reclamar "inteligencia" a la hora de "interpretar los resultados". Pero el presidente electo, Baltar Blanco, hizo como si no hubiera oído, y ratificó su compromiso de construir un partido "con leales y gente que no siembra dudas".

El estreno en el cargo del nuevo presidente fue un alegato a favor del galleguismo que tanto irrita al PP nacional, e incluyó puyas evidentes a sus superiores. "Llegó el tiempo de la imposición de abajo arriba, en lugar del diseño de plástico", avisó primero. Luego invitó a su padre a seguir en la Diputación el tiempo que quiera, desoyendo a la cúpula regional, que pretende despedir al viejo Baltar de la institución.

La mayor carga de profundidad la colocó en el turno de agradecimientos. Tras saludar a "la familia", se acordó de su hija Elena, todavía adolescente. "Espero que nadie cercene tu libertad de presentarte", un mensaje directo a los detractores internos que cuestionaron la sucesión dinástica. "En Ourense pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos", continuó.

Cuando comprobó que la llamada a la unidad de Alfonso Rueda no había servido de mucho, el propio Feijóo redundó en el mensaje. Evocó su propio ascenso a la presidencia del partido hace cuatro años y recordó a Baltar Blanco que sólo comprendería lo que él sintió entonces, cuando "desde la soledad de su despacho" reflexione sobre la responsabilidad de liderar "un partido unido donde haya sitio para todos". Fue su enésima y estéril llamada a la integración de dos bandos irreconciliables, temeroso de que la fractura interna vuelva a depararle otro disgusto en las municipales del próximo año.

Feijóo proclamó que "este no es el partido de los caciques" y advirtió al nuevo líder que "de nada valen ganar congresos si no se ganan elecciones". Una forma de pasar página sobre una campaña en la que su candidato no dejó pasar un día sin denunciar "el clientelismo y los favores" de la saga Baltar. El líder gallego empleó un tono gélido, más que frío, para saludar al vencedor y cuando concluyó su intervención, impuso un posado a quienes no dejaron de descalificarse durante las últimas semanas.

Pero las sonrisas forzadas de Baltar Blanco y Jiménez Morán deslucieron el retrato. La instantánea se quedó vieja sólo unos minutos después, cuando el nuevo presidente del PP ourensano subrayó ante los periodistas que en ningún caso integrará a sus rivales en el cónclave, tal y como le exige la dirección. "Seré coherente con lo que dije en campaña y formaré un equipo con las personas que hablaron en positivo". Palabra de Baltar II en el inicio de su mandato.

La vieja pugna entre el sector de la boina y el birrete (las alas rural y urbana del partido), que muchos dieron por finiquitada, estrena una nueva era.

www.elpais.es 31.01.10

EL PODER DE "LA BOINA" RETA A GÉNOVA

El ya ex presidente del Partido Popular de Ourense, José Luis Baltar Pumar, tiene una muletilla por la que se le identifica. "¡Feito!", que significa "¡Hecho!", y con la que contesta a las peticiones de cualquier interlocutor. Ha convertido los favores en su seña de identidad política, hasta el punto de reivindicarse como un "cacique bueno" y de emplear en la Diputación provincial, que sigue presidiendo, a cientos de alcaldes de su partido y familiares de éstos. Entre esos favores, uno de los más sonados fue el de contratar a 33 personas para atender la seguridad de tres puertas en el edificio cultural de la Diputación. Ayer los alcaldes votaron en considerable número en el congreso en el que resultó vencedor su hijo.

El PP de Baltar ha sido durante dos décadas el PP de "la boina": la representación del poder de los alcaldes rurales, sin los cuales tampoco se entendería la victoria de los populares en la Xunta.

Amparado en lo codiciado de sus votos, Baltar ha echado varios pulsos a la dirección autonómica y nacional. En 2003, puso en jaque la mayoría parlamentaria de Manuel Fraga mediante el encierro en un piso de Ourense de su hijo y otros cuatro diputados autonómicos. Hace apenas seis meses -con el congreso ya en perspectiva- intentó lanzar un órdago similar al actual presidente autonómico y líder del PP de Galicia, Núñez Feijóo, mediante la distribución de una carta, firmada por sus alcaldes, en la que reprochaban al presidente su "mal trato hacia Ourense". Esta misma semana desatendió las peticiones de Rajoy para pactar una lista de integración. Ayer, su hijo y sucesor proclamó su ouresanismo y reclamó de Feijóo y Rajoy "igualdad real y no de boquilla" para la provincia.

www.elpais.es 31.01.10

LA TENSIÓN SE DISPARA EN EL PP DE OURENSE TRAS INTERVENIR MARIANO RAJOY

A 48 horas del congreso provincial, la tensión alcanza máximas cotas en el PP ourensano. José Manuel Baltar Blanco desató ayer una espiral de descalificaciones contraviniendo todas las recomendaciones y evidenciando que, lejos de lograr su objetivo de achicar los titulares y rebajar la intensidad de la guerrilla interna, las llamadas a la paz realizadas por Mariano Rajoy y por la dirección del PP gallego surten el efecto contrario.

Baltar Blanco acudió ayer a la sede provincial cargado de avales (805, frente a los 407 de su rival, Juan Manuel Jiménez Morán) y de duras críticas. Incluso amagó con echar a su oponente del congreso tras comprobar que el candidato oficialista había entregado sus avales al gerente del partido en lugar de al comité de organización del congreso, "lo que es antiestatutario", motivo por el que registró una reclamación que, tras subir el tono entre los funcionarios de la sede provincial, acabó retirando.

Entre las denuncias de Baltar Blanco a la gestión de su rival como presidente del PP de Verín incluyó una sobre un supuesto fraude al advertir de que los ingresos del partido en esa comarca se realizan "a una cuenta con el NIF de Morán". Los oficialistas pusieron el grito en el cielo. Jiménez sentenció que Baltar "sólo pretende manchar" y reconoció la práctica como algo "generalizado" en todas las juntas locales del PP orensano. "Después se hacen extractos detallados de todo", precisó. Además, aseguró que la cuenta también está a nombre de la secretaria, por lo que es "como un documento público".

Baltar Blanco entró a la sede del partido digiriendo que habrá observadores en el congreso provincial y blandiendo en una mano las carpetas con los 805 avales y, en la otra, una más con 175. Justo los que, según asegura, Jiménez "obligó" a sus compromisarios a firmar por duplicado y que él podría anular dejando al oficialista sin apoyos suficientes para presentarse al congreso. Sólo tenía que mostrarlos, pero no lo hizo. "Quiero debatir con él", justificó.

Entre sus 805 avales se incluyen los de 85 de los 92 responsables locales del partido. Baltar Blanco se siente satisfecho del respaldo de los firmantes del "histórico manifiesto" de Santa Cruz de Arrabaldo. "Sólo uno viró" de bando, señaló para evidenciar que la fluctuación de los apoyos no será decisiva en el congreso. Y citó al "desleal": "Andrés Montesinos, el alcalde de Viana do Bolo". A cambio, se felicitó de contar con el apoyo del regidor de Beade, Senén Pousa -popular por las misas que celebra en honor a Franco- quien no firmó el manifiesto de Santa Cruz "por problemas personales".

Cuando compareció ante la prensa, Baltar Blanco acababa de saber que Génova había decidido enviar observadores al congreso de Ourense -lo mismo que, en un nuevo giro, la dirección del PP gallego- y elevó el tono de sus críticas.

Tras advertir de que finalmente está dispuesto a someterse a vigilancia -"que pongan las cámaras que quieran; no me opongo a ningún tipo de desembarco"; la del sábado será "la fiesta de la democracia", señaló- arremetió primero contra las "irregularidades" de Jiménez Morán y después contra los "desleales", entre quienes incluye a Enrique Poly Nóvoa, el portavoz del partido en Ourense a quien reconoció que llegó a ofrecer la candidatura a la alcaldía en las próximas municipales. Ahora, las tornas han cambiado: "Es injustificable la decisión que tomó en estas semanas", advirtió.

La lucha encarnizada por el poder provincial ha hecho mella en José Manuel Baltar. "Me sentí engañado, desilusionado", reconoció sus heridas para destacar, acto seguido, que pese a ello "aprendimos todos mucho", en esta campaña que finaliza en un cuerpo a cuerpo sin precedentes.

Pese a todo se siente ganador y piensa en su ejecutiva para el PP de Ourense en la que, por si había alguna duda, aclara que no incluirá a los citados "desleales". "No quiero en mi comité a nadie que hable mal del partido y que empiece a salir de su boca de todo", justificó su respuesta negativa a la petición que le han hecho los máximos dirigentes del PP nacional y gallego para confeccionar una lista de integración.

A última hora de ayer, se resolvió otro de los motivos de disputa en los últimos días, a favor de los Baltar. El presidente de la Diputación intervendrá ante el Congreso antes de que se vote. Sus rivales trataban de impedirlo, persuadidos de que un discurso de despedida "emocionado" de Baltar Pumar puede "ablandar" a los compromisarios.

(www.elpais.com, 29/01/10)

RAJOY, EN 2009: "BALTAR ES EL PP"

El congreso que elegirá mañana al nuevo presidente del PP de Ourense se celebrará con la presencia de observadores enviados por la dirección nacional para evitar que se cometan irregularidades. A tal punto ha llegado el cisma entre la candidatura de José Manuel Baltar Blanco, hijo del sempiterno presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, con los dirigentes regionales y nacionales del partido. Hace menos de un año, en febrero de 2009, la situación era bien distinta. Era época electoral y

el PP enterraba diferencias para recuperar el gobierno de la Xunta. "Baltar es el PP", llegó a decir Mariano Rajoy en un mitin celebrado en Rubiá, en una de sus maratónicas jornadas de campaña.

"No ha habido en todo el PP un proceso tan irregular como este", señalaba hace unas semanas Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín y el candidato al congreso orensano que patrocina la dirección gallega. Pese a que Feijóo insiste en que la pugna en Ourense es un ejemplo de la democracia interna de un "partido vivo", Jiménez y otros dirigentes censuran ahora los modos de un Baltar cuyas prácticas y tono en las dos décadas que lleva a cargo de la Diputación de Ourense son bien conocidos.

Durante la campaña electoral a las gallegas de 2009, Baltar llamó "maricón" a Manuel Vázquez, entonces conselleiro de Medio Ambiente y hoy líder del PSdeG. También insinuó que el candidato del BNG a la Xunta, Anxo Quintana, había maltrato a su ex esposa -una asunción que le costó una querrela y por la que tuvo que declarar ante el juez- y dejó entrever que tenía una relación con Teresa Táboas, a la sazón conselleira de Vivenda. De aquellas acusaciones, Feijóo sólo criticó las injurias a Vázquez, por las que pidió perdón, pero trató de explicar la actitud de Baltar. "A veces uno reacciona más como persona que como político", señaló. El dirigente orensano se excusó ante los "homosexuales" pero reiteró que no había dicho "ninguna mentira" al hablar de Vázquez.

El presidente de la Xunta ha sido tradicionalmente tibio en sus críticas a Baltar. Tras las elecciones generales de 2008, que revelaron un importante descenso de votos de su partido en Ourense, el líder del PP gallego anunció una "profunda" renovación del partido en la provincia. "Pensamos que José Luis Baltar es un presidente útil", puntualizó. Sus intentos posteriores por convencer al orensano de que se retirase o de sustraerle competencias han sido infructuosos. El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, apenas ha conseguido arañar protagonismo a un Baltar omnipresente.

En la memoria permanece el episodio de 2003, cuando cinco diputados orensanos se encerraron y amenazaron con romper el grupo parlamentario y dejar a la Xunta del PP en minoría si no se atendían las peticiones del ala rural del partido. Baltar impidió después encabezar la lista electoral por Ourense a un Núñez Feijóo que entonces era el delfín de Fraga.

El veterano político orensano llevaba desde antes de las comicios gallegos amagando con su retirada. Tras las elecciones y el intento del PP gallego de restar influencia a los líderes provinciales, Baltar cambió de idea. En Ourense se llegó a dar por hecho que se volvería a presentar, pero, el otoño pasado su hijo lanzó su candidatura erigiéndose en defensor del galleguismo.

El intento de conseguir una candidatura integradora in extremis ha fracasado, y aunque Baltar hijo pierda, su padre podrá seguir al frente de la Diputación al menos hasta las elecciones municipales. No se sabe si Rajoy participará en la campaña.

(www.elpais.com, 29/01/10)

LOS BALTAR IGNORAN A RAJOY Y MANTIENEN SU LISTA EN OURENSE

En su afán por dictar testamento político a favor de su hijo, el presidente de la Diputación y del PP en Ourense, José Luis Baltar, ha desairado a todo el escalafón de su partido: desde el secretario general, Alfonso Rueda, al presidente nacional, Mariano Rajoy, pasando por el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo. Su repentina visita a la calle Génova, el pasado martes, también acabó sin acuerdo, según informan fuentes de la dirección nacional del PP, y a cuatro días del congreso, la lista de integración que pretenden Rajoy y Feijóo sigue siendo una quimera.

El veterano dirigente rechazó en Madrid la misma oferta que ya le trasladó el presidente gallego la semana pasada: una candidatura única con su hijo como presidente que integre a tres de sus rivales. Ninguno de sus jefes ha logrado convencer a Baltar para que promueva la integración entre la lista de su hijo y la que encabeza el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, preferido del aparato para pilotar una nueva era en Ourense. Pero a tres días de la votación, el apellido que ha gobernado dos décadas la provincia está dispuesto a perpetuarse: José Manuel Baltar no deja de repetir que, sea cual sea el resultado, en ningún caso dará cobijo a su rival, que estos días le ha dedica duras acusaciones sobre caciquismo y prácticas irregulares.

La crisis abierta ha obligado a intervenir, sin éxito, primero a Feijóo, y hasta al propio Rajoy, quien en diciembre ya telefoneó al veterano dirigente orensano para que prorrogase su mandato y evitase el

cisma, y que este martes lo citó en Madrid para pactar una salida al cónclave. La cúpula del PP ha asumido ya que el hijo sucederá al padre pero trata de evitar la fractura del día después, a unas semanas de que el partido designe candidatos para las municipales. La batalla interna amenaza con dejar muchas cicatrices: en la capital Enrique Pol Noya, al que al menos públicamente apoyaban los Baltar para la alcaldía, se ha pasado al enemigo. Y en el entorno de Rueda y Feijóo están convencidos de que si resulta vencedor, Baltar Blanco intentará pasar factura a sus rivales cuando llegue el momento de elegir a los cabezas de cartel. En su lista negra figurarían nombres como los del portavoz del partido, Antonio Rodríguez Miranda, número uno en Allariz, o la esposa de éste, Josefa Rodríguez, candidata durante las pasadas elecciones en A Bola, así como algunos alcaldes que se han significado junto a Jiménez Morán.

Entretanto la dirección gallega sigue intentando pacificar la campaña y pide a los dos candidatos que rebajen la tensión. Mañana el comité organizador volverá a reunirse con los emisarios de Alfonso Rueda para ultimar el orden del día del congreso que ha propiciado una nueva polémica: el intento de Baltar de hacer público su informe de gestión antes de que los compromisarios voten. Sus enemigos internos temen que el veterano dirigente trame una despedida lacrimógena que conmueva a los indecisos, algo que pretenden evitar. Según publicó ayer Europa Press, después de que el aparato en Santiago hubiera desistido de mandar observadores al congreso del sábado, ahora es la dirección nacional la que amenaza con enviar técnicos a esa votación.

(www.elpais.com, 28/01/10)

EL LÍDER DEL PP CITA A BALTAR PARA EVITAR EL CISMA EN OURENSE

Ni Alberto Núñez Feijóo ni el resto de la dirección gallega han logrado atajar la grave crisis interna del PP de Ourense -donde el sempiterno barón, José Luis Baltar, quiere legar la presidencia a su hijo- y el problema ha alcanzado ya los despachos de la calle Génova.

El presidente gallego no sólo no ha logrado convencer a Baltar para que siguiera un tiempo más al frente de un partido donde ha mandado durante veinte años -y evitase así la incruenta batalla interna que se vive estos días- sino que el veterano dirigente sigue desafiando a la misma cúpula regional que le exigió neutralidad y ya no disimula su campaña a favor de su hijo José Manuel. El próximo sábado éste se verá las caras con un antiguo colaborador de su padre, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín desde hace dos décadas y preferido de Feijóo para la sucesión.

Así que Mariano Rajoy, que ya en diciembre telefoneó sin éxito a Baltar para que continuase como presidente del PP provincial, citó a última hora de ayer al dirigente ourensano en Madrid para evitar la dinastía o lograr al menos una lista de integración que evite la sangría de titulares.

Está en juego mucho más que un relevo generacional en el principal granero de votos de los populares, que en muchos ayuntamientos de esta circunscripción supera el 60% de sufragios. Es la reedición de la vieja pugna entre boinas y birretes (los sectores rural y urbano) que amenizó la vida orgánica del PP durante la última década.

En este contexto hay un antecedente que nadie olvida: el pulso que Baltar mantuvo con Fraga en 2003, cuando cinco diputados afines se encerraron en un piso y amenazaron con romper el grupo parlamentario y derrocar al Gobierno si no se atendían sus demandas. Aunque el equipo de Feijóo descarta un episodio así, la amenaza sigue latente: el baltarismo mantiene tres escaños y el PP sólo gobierna con uno de diferencia sobre PSOE y Bloque Nacionalista Galego.

(www.elpais.com, 27/01/10)

LA DIRECCIÓN DEL PP DA MARCHA ATRÁS Y RETIRA A SUS OBSERVADORES EN LA PUGNA DE OURENSE

La reunión convocada por el secretario de Organización del PPdeG, Alfonso Rueda, para garantizar un congreso pacífico en Ourense para suceder a Baltar se saldó con un encuentro de segunda. El candidato José Manuel Baltar Blanco, hijo del actual presidente ourensano del partido, dio plantón a la dirección gallega, muy molesto con su intención de intervenir en el congreso del sábado y envió a la reunión al diputado autonómico Rosendo Fernández y a un ex senador, Ignacio Martín Amaro. Rueda, por su parte, mandó a dos segundas espadas: Alejandro Gómez, coordinador de organización del PPdeG y

responsable de la intendencia en los mítines del partido, y al consejero de la CRTVG Higinio Meijide. Junto a ellos, dos representantes del comité de organización del cónclave, ambos baltaristas, y el candidato oficialista, Juan Manuel Jiménez.

Lo que se prometía como un encuentro decisivo para garantizar la limpieza del congreso se quedó en un compromiso de buenas prácticas por parte del comité de organización orensano, que accede a que se instalen cabinas y a que los compromisarios puedan llevar el voto desde sus casas. A cambio, Santiago se compromete a no intervenir en el proceso. La dirección gallega se da por satisfecha y la orensana también, "porque se garantiza que no vendrán a vigilarnos", destacó ayer el secretario del comité de organización orensano, Plácido Álvarez. "Todo es colaboración", puntualizó Álvarez tras la reunión a la que faltó Baltar Blanco. Pese a que desde Santiago se preveía la presencia en la reunión del candidato Baltar Blanco y se afirmaba que la presencia de observadores en el congreso no molestaría a nadie, el hijo del barón orensano del partido dejó claro unas horas antes del encuentro que enviaba a sus emisarios a la reunión a "escuchar" y a reclamar "que se tenga en cuenta" su escrito de denuncia sobre las "irregularidades" cometidas por su contrincante en la campaña. Y explicó los motivos del plantón: "Jiménez no ha hecho más que presentar quejas, y todas le fueron escuchadas, y yo sólo he presentado propuestas". Baltar aclaró además que "no es necesario ningún dispositivo especial para un congreso; la vigilancia sólo siembra dudas entre la militancia y no la puede entender un democrata".

Y aunque ahora el PPdeG intenta calmar los encendidos ánimos de la campaña dejando hacer al comité orensano, la guerra abierta entre los candidatos continúa a cinco días del congreso. Ayer por la mañana el candidato oficialista, Juan Manuel Jiménez, presentó al comité de organización del cónclave 407 avales (casi la mitad de los 1.212 compromisarios). No serán los últimos, advirtió, pero matizó con ironía que los presentaba ya "por si lo pierdo", incidiendo en el temor ya anunciado de que Baltar estaría intentando duplicar sus avales para invalidarlos.

Unas horas después Baltar Blanco lo acusaba a él de haberle "robado" avales: "Tengo en mi oficina del candidato 175 avales de personas a las que después de haberme firmado a mí las llamó él o su entorno para decirles: tienes que firmar esto". Baltar advierte de que podría presentar sus avales al comité de organización e invalidar esas 175 papeletas de Jiménez, pero no lo hará porque su contrincante "se quedaría sólo con 218 avales", con lo que no podría presentarse al congreso: "Yo lo quiero allí, para poder debatir con él".

En medio de la refriega, Baltar Blanco sigue proponiendo medidas encaminadas a hacer del PP de Ourense una isla en medio del PPdeG. Ayer compareció con el presidente de la Casa de Ourense en Buenos Aires, Alfredo Enríquez Badas, para anunciar que el PP orensano expedirá carnés específicos a los emigrantes que desean darse de alta en el partido. "Yo tuve que esperar 10 años por mi carné" del PP, destacó Baltar Blanco para asegurar que los del PP de Ourense se darán en "minutos".

Antes de iniciar la reunión para organizar el congreso la presidenta del comité, la baltarista Pilar Otilia López, recibió a Jiménez con una reprimenda por su "falta de ética" en la campaña.

(www.elpais.com, 26/01/10)

BALTAR LLEVA SU LUCHA HASTA EL FINAL PESE A LA PRESIÓN DE RAJOY Y FEIJÓO

Desde que asomó, en enero de 2006, a la cúpula del PP gallego para relevar a Fraga, nadie internamente había tosido a Alberto Núñez Feijóo. El líder jubiló a la vieja guardia, incluidos varios conselleiros del antiguo régimen que pretendían repetir en el Parlamento, viró el discurso político del partido hacia las tesis de Madrid sin que se inmutara el sector galleguista, y diseñó su Gobierno, obviando cualquier concesión a los barones territoriales. Con una militancia rendida -que ni soñaba con recuperar la Xunta tan pronto- y un jefe, Mariano Rajoy, eternamente agradecido por salvarle el cuello con su victoria, Feijóo se topa ahora, como ya le sucedió a Fraga, con José Luis Baltar. Que es tanto como decir con el PP de Ourense.

La batalla que libran las direcciones orensana y gallega tiene poco de ideológica: es una lucha por el control de la provincia, reedición de la pugna entre boinas y birretes que amenizó la vida orgánica del PP durante una década.

Esta vez estalló antes incluso de que el veterano dirigente anunciase su marcha. Baltar apuró los tiempos, retrasó el adiós que le exigía la dirección gallega hasta diciembre y cedió el testigo a su hijo dos

meses antes del congreso para no dejar margen a una hipotética alternativa. Así que Feijóo, que en campaña prometió "acabar con el caciquismo en un día" y profundizar en la renovación del partido, se vio obligado a pedirle a Baltar que se quedara. Lo hizo él personalmente porque el barón no reconoce a ningún otro interlocutor, se niega a tratar con el secretario general, Alfonso Rueda, del que está muy distanciado, y cree que el portavoz del partido, Antonio Rodríguez Miranda, también orensano, es un personaje irrelevante.

Feijóo ha sentado dos veces durante el último mes y medio a su mesa a Baltar para tratar de frenar la sucesión dinástica, consciente de que algunos alcaldes orensanos tragarían con una prórroga pero no con que Baltar dictase testamento político en favor de su hijo José Manuel.

La primera petición del presidente, el último día de noviembre, no hizo mella en el barón provincial, que se tomó un fin de semana para pensárselo y respondió con un no rotundo. "El problema de Ourense", como lo llaman eufemísticamente los dirigentes populares consultados, obligó entonces a intervenir al mismo presidente nacional, Mariano Rajoy, quien también telefoneó a Baltar para recomendarle que siguiera un tiempo más. Sin éxito. La decisión estaba tomada y el dirigente orensano, "después de escuchar a la familia", no sólo confirmó su marcha, sino que anunció ante cámaras y micrófonos que no se mantendría neutral en un proceso en el que participa su propio hijo.

En el cuartel general del PP en Santiago no se quedaron de brazos cruzados ante semejante declaración de guerra. Nadie duda en la organización que fueron las llamadas desde la sede regional las que empujaron a plantear una candidatura alternativa al alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, hasta hace un mes baltarista convencido y todavía miembro de la ejecutiva provincial que ahora él mismo promete regenerar. El PP gallego puso al servicio de Jiménez Morán a una asesora de prensa del equipo de Feijóo y la sede de la Xunta en Ourense acogió al menos una reunión de estrategia de campaña en la que además del delegado, Rogelio Martínez, estuvo presente el secretario general, Alfonso Rueda.

Desde hace semanas, el equipo de Feijóo ya no disimula que Morán es su candidato, al que el entorno de Baltar acusa de haber llevado demasiado lejos sus denuncias sobre supuestas prácticas irregulares de la Diputación de Ourense, muy similares a las que socialistas y nacionalistas hace años que vienen censurando.

La paz que ansiaba Feijóo, quien hace 15 días volvió a sugerir en otra comida a Baltar padre la posibilidad de fraguar una lista conjunta para atajar la hemorragia, es ya imposible. Así que, ante las constantes dudas que Jiménez Morán vierte sobre el proceso, la dirección regional, en una decisión sin precedentes, ha optado por enviar observadores "para garantizar la transparencia del congreso".

La fractura en la provincia es total y algunos miembros de la dirección gallega no ocultan su preocupación por lo que puede pasar el día después de las votaciones, que se celebran el próximo sábado. Asumen que Baltar Pumar sólo abandonará la Diputación si gana su hijo y admiten que los riesgos de una pugna con él son elevados, dados los antecedentes.

No hay dirigente del PP que no recuerde la amenaza que cinco diputados baltaristas llevaron a cabo contra Fraga en 2003, cuando se encerraron en un piso y amagaron con romper el grupo parlamentario y dejar a su Gobierno en minoría si no se atendían las reclamaciones de Ourense. Dos de ellos, el propio José Manuel Baltar y Miguel Santalices, siguen en el hemicycle, donde conservan escaños claves para el PP por su exigua mayoría de un diputado sobre la suma de PSdeG y Bloque.

Aunque el propio Baltar repite estos días que aquel órdago fue un error que no piensa repetir, la amenaza sigue latente. Sobre todo, después de que trascendiese una carta anónima que todo el partido le atribuye a él, que unos cuantos alcaldes afines al veterano político habían empezado a firmar y que calcaban algunas de las afrentas a la provincia denunciadas en la crisis de 2003, esta vez personalizadas en Feijóo. La operación interna para desgastar al presidente de la Xunta se frustró cuando ese documento vio la luz. Detrás de la protesta estaban la negativa de Feijóo a colocar como conselleiro a Baltar hijo, una vieja reivindicación de la dirección orensana, o el escaso peso de ésta en los nombramientos que la Xunta ha hecho en la provincia, incluido el de Rogelio Martínez, como superdelegado.

En la cúpula regional son pocos, pese a todo, los que creen que un episodio como el del piso pudiera repetirse ahora. Recuerdan que "fuera del PP hace mucho frío" y están convencidos de que el baltarismo

ha tomado nota de lo que le sucedió a uno de sus antiguos socios en el denominado sector de la boina, Francisco Cacharro Pardo, que acabó fuera del partido después de su pulso con Feijóo.

Aquella contienda dejó algunos efectos colaterales: el apoyo de Cacharro a las listas independientes de Terra Galega llevó al PP de Lugo a perder la Diputación y un puñado de alcaldías. En el entorno del presidente de la Xunta son legión quienes piensan que con la jubilación de Cacharro se empezaron a ganar las elecciones autonómicas. Pero ninguno quiere oír hablar de otra crisis que ponga en peligro la Diputación de Ourense, y para la campaña de las municipales apenas queda un año escaso.

(www.elpais.com, 25/01/10)

EL ÚLTIMO CACIQUE DESAFÍA A FEIJÓO

Baltar se enfrenta al PP gallego para legar a su hijo la presidencia de Ourense

José Luis Baltar manda desde hace 20 años en el PP de Ourense y nunca ha aceptado de buen grado las injerencias en su territorio. Lo sabe el presidente fundador, Manuel Fraga, que ya vio en 2003 cómo cinco diputados de esta provincia se atrincheraban en un piso bajo la amenaza de romper el grupo parlamentario y dejar a la Xunta del PP en minoría si no se atendían las peticiones del ala rural del partido. Los populares evitaron entonces la fractura, pero las luchas intestinas siguieron en las elecciones autonómicas de 2005 cuando Baltar dio un portazo al propio Alberto Núñez Feijóo para evitar que éste encabezase el cartel de su provincia. Alegó que necesitaba una mujer y colocó como candidata a una desconocida, Amparo González, que abandonó la política tras cuatro años inédita en el hemiciclo.

La dirección regional envía observadores al congreso para evitar irregularidades

Y ahora que Feijóo ha regresado a la Xunta ya como presidente, Baltar trata de sucederse a sí mismo, de instaurar una especie de dinastía en Ourense y ceder el liderazgo del PP a su hijo, José Manuel, vicepresidente del Parlamento gallego. Ni las llamadas de Feijóo, ni las de Mariano Rajoy lograron convencer en diciembre al eterno barón para que prorrogase sus dos décadas de mandato. Baltar hizo caso a su familia, anunció su jubilación y empezó a recabar apoyos entre los alcaldes para su vástago, ya que, según explica, los lazos de sangre le impiden garantizar esa independencia que Feijóo y la cúpula del PP gallego le exigen casi a diario. El conclave es ya una incruenta batalla entre las direcciones regional y ourensana, en la que el oponente de los Baltar y antiguo colaborador suyo, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, esgrime ahora como principal baza su cercanía a Núñez Feijóo.

El enfrentamiento interno ofrece titulares diarios: es habitual oír a Jiménez Morán refrendar denuncias sobre caciquismo y contrataciones irregulares idénticas a las que han aireado socialistas y nacionalistas durante estos 20 años de *baltarismo*. El propio Jiménez Morán ha pedido amparo a la dirección del PP gallego para que garantice la votación del próximo sábado en Ourense. En una decisión inaudita, el equipo de Núñez Feijóo anunció ayer que enviará observadores, una especie cascos azules, para garantizar la limpieza del congreso provincial.

www.elpais.es 24.01.10

FEIJÓO ENVÍA OBSERVADORES AL CONGRESO DEL PP ORENSANO

La dirección del PP gallego se ha involucrado ya en el congreso ourensano tras reconocer que tiene denuncias de los dos candidatos, José Manuel Baltar y Juan Manuel Jiménez Morán, que aspiran a presidir el partido en la provincia. El secretario general, Alfonso Rueda, ha enviado sendas cartas al comité organizador y a los dos aspirantes para citarlos a una reunión en la que espera que todas las partes garanticen la "transparencia" de la votación. Fuentes del PP confirman que Rueda pretende transmitir a los compromisarios que podrán votar "libremente, sin presiones" y acabar con "los titulares" que enfrentan a los dos sectores del partido.

La carta fue muy celebrada por el candidato oficialista. Jiménez Morán entiende que ésta evidencia que sus denuncias "fueron escuchadas" y expresa su satisfacción por que el PP "haya decidido intervenir para garantizar" el voto secreto, algo que, entiende, le "favorece". Asegura, además, que la dirección regional "despeja dudas" sobre la neutralidad y la "higiene democrática" del congreso.

El entusiasmo de Jiménez choca con el malestar de Baltar Blanco, quien tildó hace unos días de "surrealista" que el PP gallego "envíe" vigilantes al congreso. En el mismo sentido se expresó su padre, Baltar Pumar, quien advirtió de que si la dirección gallega intervenía, "responderá ante el PP de Ourense".

La decisión del PP no sólo obvia el malestar de los Baltar, sino que supone además el reconocimiento de las irregularidades de la campaña electoral.

www.elpais.es 24.01.10

FEIJÓO FRACASA EN SU INTENTO DE FORZAR UNA LISTA DE INTEGRACIÓN EN EL PP DE OURENSE

El último intento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cortar la hemorragia del partido en Ourense ha caído en saco roto. La petición que trasladó el lunes en un almuerzo con José Luis Baltar para que su hijo José Manuel y el otro candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, se integrasen en una lista ha sido rechazada por ambos. El alcalde de Verín, que esgrime como principal baza su cercanía a la dirección regional, desechó la propuesta de Feijóo y abogó por medir fuerzas en las urnas e integrar ya "como vencedor" a los representantes del baltarismo en la futura ejecutiva provincial. En eso coincide con su oponente, Baltar Blanco, quien en declaraciones a la Cadena SER, se negó a "defraudar a la gente que apostó por este proyecto desde el principio". "Espero llegar al día 30 con el referendo absoluto de los compromisarios", avanzó.

Y mientras la guerra del PP de Ourense es cada día más la del PP de Galicia. Ayer, la dirección gallega se mostró dispuesta a "tutelar" el cónclave provincial -atendiendo a las denuncias del oficialista Juan Manuel Jiménez- y desató con ello las iras de la dirección ourensana. El secretario del comité de organización del cónclave, el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, baltarista convencido, tildó de "auténtica vergüenza y espectáculo" el anuncio y amenazó con "mandarlos a paseo a todos". "Nadie duda de mi honorabilidad y si Santiago duda, yo también puedo dudar de ellos". "Hala, que le hagan la campaña a nuestros adversarios", sentenció "enfadadísimo".

Lejos de apaciguar los ánimos, el anuncio de la dirección regional los ha exaltado aún más. Los baltaristas, al frente del PP en la provincia, se sienten legitimados para organizar el congreso, aseguran que han sido "escrupulosos" atendiendo las demandas del oponente que ahora se presta a "analizar" el PP gallego e interpretan su decisión de intervenir no sólo como una afrenta personal, sino como una intromisión en su terreno.

La brecha entre las actuales direcciones del PP ourensano y gallego parece insalvable. Si el congreso lo tutela la dirección provincial, protestan los oficialistas, y si lo vigila la dirección autonómica, los baltaristas se enfadan. "A mí no me vigila nadie porque no me dejo", sentenció Álvarez al conocer la decisión de Santiago. Plácido Álvarez expresa su malestar por lo que considera que ha sido una "utilización" del trabajo de los miembros del comité organizador. "Hemos estado trabajando por amor al arte con jornadas que acababan a las dos de la mañana y ahora nos echan". "Que lo hagan muy bien, si nosotros no valemos".

Fuentes de la dirección autonómica aseguraron a este diario que con la decisión de mediar, pretenden garantizar "como sea" que los 1.212 compromisarios emitan sus votos "sin presiones y en secreto". La dirección regional respeta las competencias del comité de organización y el trabajo realizado, pero va a "estudiar" las quejas presentadas por Jiménez, quien en su escrito de amparo detalla actuaciones "irregulares" de los Baltar.

Aunque el secretario del comité de organización del congreso sostiene que el candidato oficialista "no puede tener quejas" porque le han "aceptado todo lo que planteó", Jiménez alude a lo ocurrido en la votación para elegir compromisarios de la capital que se celebró en la sede el día 13. "Baltar padre repartía papeletas y tenía una larga cola en su despacho, mientras que el hijo, y candidato, actuaba como interventor en una mesa", denuncia su rival y advierte de que "fue difícil" conseguir que abandonaran esas "irregularidades". Jiménez precisa que no duda de la honorabilidad de Álvarez, pero "como en la sede no se veló por la limpieza del voto", reclama "que se vele en el congreso, donde habrá cerca de 2.000 personas". "No me fío", concluye.

Su desconfianza procede también del visto bueno con que el comité de organización refrendó una elección de compromisarios, "miembros de candidaturas del BNG", celebrada en un bar de A Bola "fuera de plazo" mientras era rechazada la "votación oficial" celebrada en la sede del partido de ese municipio.

(www.elpais.com, 20/01/10)

BALTAR DESAFÍA A FEIJÓO PARA LEGAR A SU HIJO EL CONTROL DEL PP EN OURENSE

Si no quieres caldo, toma dos tazas. José Luis Baltar, el incombustible presidente del PP ourensano (y de la Diputación provincial), el último representante del sector de la boina (de origen rural) que durante años disputó el control del partido a los del birrete (educados en las ciudades, un grupo del que Mariano Rajoy fue durante décadas el máximo representante), abandona la presidencia del partido. Pero esta decisión, que en otras circunstancias haría las delicias del presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha convertido en todo un desafío.

Porque Baltar se va, pero sólo para que su silla la ocupe su propio hijo. Si el candidato de Feijóo, el alcalde de Verín, Juan Jiménez Morán, no lo remedia, José Manuel Baltar, el primogénito, se coronará el 30 de enero presidente del PP de Ourense. Y todo hace pensar que será así: hace pocos días, el 95% de los representantes locales del partido aclamó al heredero y dejó claro que existe poco margen para evitar la confirmación de la dinastía.

La estrategia de Baltar es consecuente con la biografía de un hombre al que propios y extraños consideran el último cacique. El próximo día 30 concluirán 33 años de actividad política ininterrumpida que el todavía presidente del PP ourensano, maestro de profesión, inició de la mano del franquismo convirtiéndose en 1976 en alcalde de Nogueira de Ramuín (2.500 habitantes).

Tenía 36 años y un instinto innato para hacer política en una provincia condicionada por un hábitat disperso y una economía rural muy sensible al reparto de dinero público que, especialmente en los años ochenta y noventa, fluyó mayoritariamente desde la Diputación de Ourense, en cuya presidencia vive encaramado desde 1990.

José Luis Baltar ha hecho de su éxito electoral el aval que le ha permitido no sólo sobrevivir a las embestidas de sus enemigos sino desafiar a quien tuviese la ocurrencia de oponerse a sus planes. Si ni siquiera se arrugó ante Manuel Fraga (en 2003, forzó una sublevación de diputados ourensanos que llegaron a encerrarse durante varios días en un piso amenazando la mayoría del PP en el Parlamento gallego), menos aún está dispuesto a hacerlo con Feijóo.

El presidente de la Xunta quería que el hombre fuerte de los conservadores ourensanos aplazase el relevo y tener así tiempo de preparar una transición que le asegurase el control del PP en la provincia, la única que no controla desde su victoria electoral en las autonómicas de 2009. Pero Baltar se negó. Su sentido del poder (y de la familia) están por encima de la obediencia debida.

No en vano, representa en Galicia lo más parecido a un conseguidor, alguien que ha hecho del intercambio de favores la pieza fundamental de su política. Con él como presidente, la diputación se ha convertido en el primer empleador de la provincia, sólo superada por las cooperativas Coren. La situación es tan grotesca como de dominio público: hasta 33 porteros ha llegado a tener en nómina para vigilar un edificio dedicado a exposiciones que sólo tiene dos puertas.

Poco importa que la deuda de la diputación roce su presupuesto anual o que su gasto de personal duplique el de otras corporaciones provinciales con el doble de recursos económicos. Si hijos y esposas y parientes de alcaldes del PP de la provincia viven de la diputación, ironizan sus enemigos, ¿por qué habría de importar que a Baltar le suceda su propio hijo?

(www.publico.es, 18/01/10)

LOS EMPLEADOS DE LA DIPUTACIÓN DECIDIRÁN EL FUTURO DEL PP DE OURENSE

Al próximo presidente del PP de Ourense lo elegirán los empleados de la Diputación. Al menos en una considerable proporción. El congreso provincial del día 30 será, además de un encuentro de la militancia del partido, un foro de decisión política para gran parte de los trabajadores de la institución que preside

José Luis Baltar, padre de José Manuel Baltar Blanco, que opta a sucederlo con el apoyo de sus empleados. La simbiosis entre el PP y la institución pública, en donde Baltar padre ha repartido puestos de trabajo durante casi dos décadas a más de 300 cargos electos de su partido o familiares directos de éstos, queda más que nunca de manifiesto.

Baltar ha estado haciendo campaña para su hijo y firmando contratos en la sede del organismo provincial a compromisarios al congreso. Dice que lo ha hecho por razones prácticas. "Cualquiera entiende que si está en su empresa y tiene que llamar a su casa y no tiene más que el teléfono de la empresa, nadie será tan ético ni tan moralista como para decir, no; este teléfono no, que tengo que coger el otro", justificó.

Por eso ha llamado desde la institución pública a los alcaldes que en aplastante mayoría se postularon para ir como compromisarios de su hijo al congreso y, apenas iniciada la campaña, se fotografiaron con él suscribiendo un manifiesto "orensanista" en Santa Cruz de Arrabaldo. Antes de eso, Baltar los había empleado -a ellos o a sus mujeres, hijos o nueras- en la Diputación. A algunos, con contratos temporales que renueva cada 3 o 6 meses. A otros los hizo fijos en las oposiciones que convocó el verano pasado. Hay familias enteras de cargos electos del PP, ahora compromisarios, con puesto de trabajo en la institución provincial.

El padre del candidato sostiene que no ha presionado a sus empleados para que apoyen a su hijo porque, dice, "no les eché en cara los favores". Sin embargo, los trabajadores-militantes han firmado los avales para su vástago en la mayoría de los pequeños municipios de la provincia.

De los compromisarios que aporta Amoeiro, tres trabajan en la Diputación y dos son parientes del alcalde. Rairiz de Veiga, Ramirás, San Cristobal de Cea, Cualedro, A Merca, Maceda o Montederramo, aportan cada uno de ellos al menos tres delegados al congreso que al mismo tiempo tienen empleo en la Diputación. Castro Caldelas lleva a dos trabajadores-compromisarios y Xunqueira de Espadafredo, a cuatro empleados en la Diputación en la lista de los cinco delegados que votarán por este municipio.

En Cartelle, cuatro delegados al congreso están vinculados también a la Diputación, como en A Peroxa. En Maside, dos de los cuatro que acudirán tienen también vínculo con la Diputación, como lo tienen cinco de Monterrei.

El caso de Esgos es aparte. Es la localidad natal del presidente de la Diputación y su hijo y candidato, Baltar Blanco, es ahí teniente de alcalde a las órdenes de su tío, Manuel Blanco. De los nueve compromisarios que aporta este municipio al congreso, cinco son familiares del presidente y los cuatro restantes están empleados en la institución provincial. En Castrelo de Miño sólo hay un compromisario con puesto de trabajo en la Diputación: fue contratado este mismo mes de enero.

San Cibrao das Viñas, gobernado por la suegra del diputado autonómico Rosendo Fernández (encargado de leer el manifiesto de Santa Cruz de Arrabaldo) aporta al congreso a la práctica totalidad de la familia de la regidora que tiene también a descendientes en la institución provincial.

Distinta es la situación en Quintela de Leirado. En este caso, la familia del alcalde (él mismo, sus dos hijos, sus dos nueras y sus cuñados) trabaja en la Mancomunidad de Celanova a la que en la comarca llaman "el Gran Hermano". Pero Baltar no sólo ha empleado a las familias de los alcaldes o portavoces del PP en su feudo de la provincia. Al menos medio centenar de los que se postularon como delegados al congreso en los distintos distritos de la ciudad trabajan también (ellos o sus hijos, yernos o nueras) en la Diputación.

No obstante, aunque éstos también le deben el empleo a Baltar, le dieron el respaldo al candidato oficialista en la votación en urna celebrada la semana pasada y dejaron prácticamente sin compromisarios por la ciudad al hijo del presidente.

El fin de semana, Baltar padre intentó (según denuncia su rival, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez) presionarlos para que rubricaran los avales para su vástago. Los llama "y se mete en las cocinas" y a quienes le contestan que ya han firmado para Jiménez los conmina a que "vuelvan a hacerlo" por su hijo. "Al haber duplicidad, los avales quedan invalidados y nosotros nos quedamos sin el respaldo que teníamos", sostienen alarmados los oficialistas. "Ya se demostró en la ciudad que en donde el voto es en urna, Baltar no gana", sostienen. Los afines a Jiménez disculpan a quienes sucumben a las

presiones: "Entendemos que acaben firmándole, porque con el trabajo no se juega", señalan los oficialistas.

(www.elpais.com, 18/01/10)

LOS RIVALES DE BALTAR PIDEN AL PP GALLEGO QUE GARANTICE LA LIMPIEZA DEL CONGRESO

El presidente de la Diputación justifica los contratos laborales con compromisarios

Arrecian las acusaciones de traición y juego sucio. En la enconada lucha por el poder del PP de Ourense, la sorpresa es la normalidad. El presidente saliente, José Luis Baltar, reconoció ayer que hacía campaña para su hijo desde la Diputación. También asumió que está firmando estos días contratos laborales del organismo público que preside a militantes y compromisarios. Lo encuentra normal: "Siempre hacemos contratos a principios de año y vienen a pedir las renovaciones", justificó. Además ve lógica su anunciada falta de neutralidad en el proceso electoral. Tras acusar de traición a militantes de su partido, sin dar nombres, el *barón* del PP de Ourense se aferró al capote que el día anterior le tendió Núñez Feijóo -tildó de "ejemplo de democracia" el proceso ourensano- y se erigió como "verdadero demócrata" dispuesto a "curar con *betadine*", a partir del día 30, las "heriditas" que pueda haber en las dos facciones.

- **"Dicen que le dan la de papeleta de Baltar y es la de la otra candidatura"**
- **"Curaré las heriditas con betadine después del día 30"**

Una hora después, el oficialista Juan Manuel Jiménez denunciaba las "actitudes antidemocráticas" de los Baltar, afirmaba que había enviado un escrito a la dirección regional del PP para que "ponga todos los medios" para velar por la limpieza del congreso y aludía a su condición de sanitario para destacar que "el betadine es muy bueno, pero hay cosas que no cura". Jiménez cree que en lugar de intervenir en la campaña, Baltar padre debería "haber ido al notario y firmar allí su herencia".

No hay tregua entre Baltar padre y Jiménez. Ayer también terció el candidato Baltar Blanco, quien compareció ante los medios para presentar nueva cartelería de campaña -ahora el lema es *Ourense*, *Nós*- y reivindicar la limpieza de su campaña "en positivo".

"Espero que el voto sea secreto, porque ya empiezan a decir que una persona de cada municipio controle a los suyos en el congreso", acusó Jiménez a los dos Baltar por la mañana. Por la tarde, Baltar hijo respondió: "Yo no hablo de rumores, ésa es la diferencia".

El primero en hablar ayer fue su padre. Tildó de "cruel" el reglamento del PP que ha permitido que "por dos votos" su hijo haya perdido los compromisarios de uno de los distritos de la ciudad. Después denunció "deserción" de algunos militantes que habían "trabajado con nosotros y tres días antes se apuntaron al otro lado" y acabó reprobando "las traiciones". "De eso me quejo, y de que se distribuyan papeletas engañando a la gente: les dicen que le dan la de Baltar y es la de la otra candidatura", protestó. Finalmente, tras asegurar que no cuestionaba el reglamento "porque fue pactado por todos", acabó planteando la necesidad de "organizar otras reglas del juego".

Las heridas son grandes. Los oficialistas pretenden anular las elecciones de A Bola (1.648 habitantes) que celebraron los baltaristas en un bar del pueblo y en las que participaron "candidatos que iban en las listas del BNG". El comité electoral avaló esa votación y anuló la que se celebró en la sede del partido "en tiempo y hora". Por su parte, los Baltar intentan tumbar la elección de los compromisarios de Nuevas Generaciones de la ciudad, que le aportó 16 compromisarios a Jiménez.

Pese a la refriega, unos y otros hablan de la unidad posterior al día 30, fecha del congreso. Jiménez aseguró ayer que las posturas "no son irreconciliables" y tendió una mano a sus rivales. "El PSOE no va a tener la satisfacción de la ruptura del PP" dijo, y aseguró que dejará "puestos vacantes" en su lista para que se puedan integrar después los miembros de "la otra candidatura" con vistas a ganar las municipales de 2001.

Horas después su rival rechazó la oferta. Principalmente, porque Baltar Blanco se da por ganador del congreso con "900 adhesiones de los 1.212" compromisarios "y no renuncio a conseguir más". Él no ofrece integración a los rivales porque no va a "defraudar a la gente que me apoya y a la que se va a

sumar". Sostiene que si gana, será con su lista y un respaldo del "80% al 90%", con lo que "no hay hueco" para los perdedores. Aunque da por hecha también la unidad posterior del PP. A partir del día 30, dice, "todos estaremos en un mismo partido y aumentaremos en 10 las 65 alcaldías" que el PP ostenta en la provincia.

www.elpais.es 16.01.10

EL HIJO DE BALTAR PIERDE EN LA CAPITAL OURENSANA EN LAS ELECCIONES DEL PP

La primera fase del complejo proceso para la elección de un sucesor de José Luis Baltar como presidente del PP ourensano finalizó la medianoche del miércoles con el recuento de los votos para elegir a los compromisarios que representarán a los diez municipios más poblados de la provincia en el congreso del próximo día 30. A juzgar por la sonrisa de Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, cuando asistió ayer por la mañana a la reunión de candidatos convocada para validar los resultados, la votación le ha sido satisfactoria.

No en vano, incluso su adversario, José Manuel Baltar -que no asistió al citado encuentro-, reconocía que Jiménez conseguiría el mínimo de avales necesario para competir con él por la presidencia del partido en Ourense. De hecho, en la capital, Jiménez obtuvo 174 compromisarios frente a los 27 que logró el hijo de Baltar, con lo que se hizo con cuatro de los cinco distritos.

La reunión celebrada ayer entre representantes de ambas candidaturas tenía como objetivo, además de comprobar el recuento, la elaboración del documento donde se recogerán esos avales. Solo esos apoyos por escrito serán válidos, aunque ambos aspirantes hacían ayer una estimación del respaldo que pueden obtener en este momento del proceso.

Los balances de Jiménez y de Baltar, sin embargo, son muy coincidentes. El hijo del actual presidente del PP ourensano calcula que tendrá el apoyo de 900 de los 1.212 compromisarios, es decir, un 75%. Muchos provienen de los seis ayuntamientos donde se impuso este miércoles: Barbadás, O Barco, O Carballiño, Celanova, Xinzo de Limia y Pereiro de Aguiar.

Jiménez Morán, por su parte, calcula que obtuvo en torno a 350. Entre ellos estarían los de Verín, Allariz y Ribadavia, más la capital. Su victoria se habría repetido también entre los militantes de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP.

Durante los próximos días ambos aspirantes deberán recoger como mínimo 244 avales para confirmarse como candidatos a la presidencia del partido. Vistos los cálculos realizados por sus respectivos equipos, ni Baltar Blanco ni Jiménez Morán tendrán problemas para reunir esos apoyos. Esta circunstancia ha sido considerada ya de por sí como un éxito por el alcalde de Verín, que había denunciado los intentos de su contrincante de copar los compromisarios para evitar un enfrentamiento en las urnas el próximo día 30.

Si los 900 compromisarios que dice tener de su lado el hijo del actual presidente votan por él, su victoria ese día en el congreso ya estaría asegurada. No obstante, Jiménez Morán relaciona esos apoyos con las presiones de la familia Baltar y cree que no se reproducirán en el cónclave gracias al voto secreto. Para asegurarse de que en ese momento no hay interferencias ni irregularidades pedirá a la dirección regional que vigile el proceso.

(www.lavozdegalicia.es, 15/01/10)

BALTAR FRACASA EN EL INTENTO DE CORTAR EL PASO A SU RIVAL EN EL CONGRESO

Los oficialistas respiran. Los primeros 15 intensos días de precampaña estuvieron encaminados, en el caso de los Baltar, a impedir que Jiménez pudiera llegar al congreso y, en el caso de éste, a asegurarse su presencia. El respaldo que el oficialista tuvo en la ciudad (ganó en cuatro de los cinco distritos) y su triunfo en Verín, Allariz -donde votó el número tres del PP, Antonio Rodríguez Miranda- y Ribadavia, lo metieron en el cónclave.

Baltar Blanco, que se reivindicó urbanita a última hora, se impuso sin embargo en los feudos de la provincia controlados por alcaldes o portavoces afines a su padre: Barbadás, Celanova, Xinzo, Pereiro,

O Carballiño y O Barco de Valdeorras. Pero su patinazo en la ciudad ha dejado sin acta de compromisaria a su madre y a históricos ex cargos del PP. La pérdida en la capital dejó fuera del congreso también a Gerardo Martínez y Celia Goyanes, los dos trabajadores de la secretaría personal del presidente de la Diputación que aspiraban a votar en el congreso.

Ahora empieza la campaña. Los candidatos comenzaron ayer a recoger los avales de los compromisarios electos, y ambos aspiran a arrebatarle delegados al rival. El proceso les dará a los aspirantes la medida del porcentaje de apoyos con el que parten para el congreso. Será, en cualquier caso, un tanto por ciento sólo teórico, porque el voto en el cónclave será en urna y ambos candidatos esperan que ahí se produzca el trasvase definitivo de una lista a otra.

Pese a la tensión, Baltar Blanco no se detiene. El hijo del barón orensano dedicó el primer día de la recta final de la campaña a la puesta de largo de su Instituto Orensano de Estudios Políticos y Sociales Atlántida, su seña de identidad galleguista. Para "poner en valor el orensanismo y el galleguismo" y para que "la voz de la sociedad sea escuchada", el hijo de Baltar contó con la colaboración del ex presidente de la Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro.

En el abarrotado centro cultural de la Diputación, con presencia de Baltar padre y otros familiares, de algún nacionalista como el ex director general de Cultura del bipartito Xosé Carlos Sierra y de numeroso público, Barreiro negó que su presencia en el acto fuera partidista. "Mi único partido es el gallego", precisó. Y ofreció su conferencia Da Xeración Nós a Gómez Franqueira, germen de los Centristas de Galicia de los que procede políticamente Baltar padre.

El presidente del instituto orensano ensalzó, por su parte, el pensamiento político galleguista como imprescindible para "la defensa de la identidad orensana". Baltar Blanco estuvo acompañado por la directiva del instituto que preside: el profesor Miguel Anxo Bastos; el escritor José Luis Casas; el presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense, Xan Rodríguez, y el licenciado en Filosofía César Fernández.

Mientras Baltar buscaba adhesiones con su apuesta galleguista, los oficialistas decidían si impugnaban las elecciones de compromisarios del Ayuntamiento de A Bola.

El pequeño municipio, de 1.500 habitantes, celebró las votaciones la semana pasada en la sede local pero, pese a que el comité electoral había certificado en tiempo y hora una única lista de compromisarios -afines a Jiménez-, un grupo de baltaristas decidió celebrar otra asamblea en un bar del pueblo y trasladar sus compromisarios electos al comité organizador, que los avaló también.

(www.elpais.com, 15/01/10)

BALTAR OFRECE EMPLEOS POR ESCRITO A DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP

En la decisiva jornada electoral para el futuro de su hijo y del PP orensano -la elección de los compromisarios de los municipios de más de 5.000 habitantes celebrada ayer- José Luis Baltar recibió por la mañana en la Diputación a una treintena de personas, entre ellos compromisarios y militantes con derecho a elegirlos, a quienes prometió empleos en el organismo público. Había quedado en llamarlos en febrero para contratarlos por seis meses (después van al paro, hasta que les vuelve a renovar el contrato si lo ve oportuno) pero adelantó la oferta a la jornada electoral y a la víspera, según ratificaron algunos de ellos, que aseguraron haber firmado el compromiso por escrito.

Ya por la tarde, se fue a la sede provincial del partido. Allí, mientras su hijo y candidato a sustituirlo se sentaba como interventor de la mesa en la que votaban en urna los afiliados, Baltar, con la foto del hijo-aspirante en la solapa y las papeletas con su candidatura en la mano, recibía a los que llegaban. El candidato alternativo, Juan Manuel Jiménez Morán, votaba en Verín, pero los suyos pusieron el grito en el cielo, tildaron de "espectáculo antidemocrático inaudito" la actitud de los Baltar y reclamaron al vástago del presidente saliente que abandonara su posición "antirreglamentaria". Como éste se negó, empezaron a buscar un notario para levantar acta de la "nueva irregularidad". Pero medió el comité electoral y conminó a los Baltar, padre e hijo, a que abandonaran sus discutidos puestos. La guerra entre las dos facciones del PP igualó ayer en tensión la jornada del día anterior, en la que se produjo un sonado altercado verbal entre Plácido Álvarez, presidente del comité electoral, alcalde de Muíños y baltarista, y el gerente del partido, Emilio Pascual, quien expresó su malestar por el proceso. Ayer por la mañana, tras la oferta de empleo en la Diputación, Baltar padre tuvo tiempo para acudir a la cadena Cope, en

donde asiduamente hace declaraciones. Esta vez le dio la vuelta a las reiteradas acusaciones de "juego sucio" que recibe de sus oponentes y aseguró que los de Juan Manuel Jiménez, el otro candidato, "amenazan y hacen chantajes".

Tras advertir de que los apoyos con que cuentan los oficialistas "son muy presionados", dio por ganador del congreso a su hijo, aún a expensas del reparto de compromisarios de ayer. Después arremetió contra el número tres del PP gallego, Rodríguez Miranda, por insinuar el apoyo de Feijóo a Jiménez. "Lo que era Miranda ya lo sabía yo desde hace mucho tiempo", dijo de su antiguo colaborador, de quien también cuestionó la "honestidad" de sus manifestaciones.

En medio de la tensión, el centro cultural Simeón, dependiente de la Diputación, informaba del respaldo que hoy ofrecerá el ex presidente de la Real Academia Galega (RAG) Xosé Ramón Barreiro al hijo de Baltar. Barreiro será el primer ponente del Instituto Orensano de Estudios Sociales y Políticos Atlántida, creado en esta campaña por Baltar Blanco como referente de los postulados "galleguistas".

Baltar Blanco cuenta entre sus compromisarios de la capital, además de su madre, Alicia Blanco, con varios ex alcaldes y ex responsables de urbanismo, como Ricardo Campo Labrador, autor del planeamiento declarado ilegal siete veces. En pequeños ayuntamientos tienen a familias enteras de compromisarios, como Cartelle: irán de delegados la alcaldesa y secretaria provincial del partido, Carmen Leyte; su marido, teniente de alcalde, su hijo y una sobrina contratada en la Diputación. Con todo, Jiménez se daba anoche por ganador del congreso.

(www.elpais.com, 14/01/10)

BALTAR USA MEDIOS DE LA DIPUTACIÓN PARA APOYAR LA CAMPAÑA DE SU HIJO

ales para garantizar la presencia de los candidatos en el congreso del PP de Ourense, el presidente de la Diputación y padre del candidato José Manuel Baltar Blanco, pone la institución provincial al servicio de la campaña de su hijo. Ayer recibió en las dependencias del organismo que preside a un considerable número de militantes y empleados, a quienes "entregó documentación para firmar", según trabajadores del organismo. Ante la sospecha de que pueda estar gestionando puestos de trabajo de la institución provincial a cambio de avales para su vástago, los dos grupos de oposición, PSOE y BNG, anunciaron que registrarán sendas preguntas para conocer todos los movimientos de contrataciones de la Diputación realizados a lo largo de este mes precongresual para los populares.

"Queremos que nos aclare si ayer firmó precontratos de la Diputación a los compromisarios del congreso", señalan los socialistas, que también reclaman información para saber si los militantes del PP acudieron a la Diputación a firmar avales. Tanto este grupo como el del BNG registrarán hoy sendos escritos reclamando la lista detallada de los contratados en este mes, para "cotejar los nombres" con los de los delegados al congreso.

El portavoz del PSdeG en la Diputación, Alfredo García, sostiene que el barón del PP orensano se ha servido de los empleos en la Diputación para "amarrar" los apoyos para su hijo en la lucha interna por el poder del PP en la provincia.

García alude al hecho de que el responsable de prensa de la institución provincial, contratado en calidad de "oficial de prensa" como personal laboral temporal en la última convocatoria de oposiciones de la Diputación, ejerce también como jefe de prensa de la campaña del hijo del presidente. "Es un espectáculo", sostiene García, y advierte de la "falta de ética" de los Baltar.

El portavoz del PSOE alude a las "décadas" de denuncia de su grupo sobre la política de contrataciones de la Diputación y afirma que ahora Baltar está haciendo "lo mismo" que hizo siempre, "sólo que en lugar de hacerlo por el PP lo hace por su hijo". El PSOE destaca que el candidato oficialista, Juan Manuel Jiménez Morán, tiene como jefa de campaña a una consejera en la CRTVG y responsable de comunicación del PP regional, para advertir de que en esta "guerra abierta" entre baltaristas y oficialistas, los populares están demostrando que sólo quiere "el poder por el poder y vale todo", sostiene.

Mientras la campaña llega a su ecuador, oficialistas y baltaristas medían ayer sus fuerzas en la ciudad de Ourense, la que mayor número de compromisarios aportará al congreso del día 30, del que saldrá elegido el sucesor de José Luis Baltar. Jiménez Morán hizo una demostración de fuerza en un acto presentado por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa. Cerca de 300

militantes de la capital arrojaron su opción. En las primeras filas, el número tres del PP gallego, Antonio Rodríguez Miranda; el ex conselleiro y ex presidente del PP de Ourense Tomás Pérez Vidal; los concejales del grupo municipal (con la excepción de Baltar padre y los dos ediles que acudieron al Manifiesto de Santa Cruz de Arrabaldo); la mitad de los diputados autonómicos y, desapercibido entre el público, el diputado en Cortes Celso Delgado. Jiménez cosechó los mayores aplausos de los asistentes cuando aseguró que es leal al presidente saliente, "pero no a toda su descendencia", y cuando reclamó un partido "con la participación de las bases" y no basado en el "absolutismo". A unos metros de allí, Baltar hacía lo mismo 15 minutos más tarde, aunque con menos público que su contrincante.

(www.elpais.com, 13/01/10)

CONTRA MIRANDA

Con la contienda interna cada día más crispada, y en la víspera ya de la recogida de avales de los municipios de más de 5.000 habitantes que hoy tendrá lugar, Baltar Blanco expresó ayer su malestar por unas recientes declaraciones del portavoz del PP, el ex baltarista Antonio Rodríguez Miranda. "Se pasó de frenada y derrapó" cuando calificó a Jiménez como "hombre de confianza" de Feijóo por formar parte del comité de dirección, señaló en declaraciones a la cadena Cope el candidato a la presidencia provincial.

En su opinión, Miranda utilizó una "dialéctica bastante atacable y flojita" para expresar el apoyo a Jiménez del presidente del partido. "Si Núñez Feijóo quiere apostar por un candidato, tiene toda la autoridad del mundo, legitimidad y es mayor de edad para decirlo", precisó. Sin embargo, volvió a reclamar la neutralidad del líder del PP: "Su situación como presidente del partido es garantizar que militantes y afiliados elijan a quien crean que mejor defenderá sus intereses". Baltar dio además una vuelta de tuerca a sus postulados y, frente a su habitual identificación con el rural, se reivindicó como urbanita. El hijo de Baltar se definió como el "único candidato vinculado a la ciudad".

(www.elpais.com, 13/01/10)

GUERRA DE AVALES ENTRE LOS CANDIDATOS AL PP DE OURENSE

Jiménez se atribuye el 42% de apoyos y Baltar, el 95%

La batalla por la dirección del PP de Ourense sube de tono. A falta aún de 20 días para la celebración del congreso del que saldrá el nuevo presidente provincial, los dos candidatos que confrontan por el poder del partido entran en una guerra de cifras sobre los apoyos recibidos el viernes, para garantizar su presencia en el cónclave, de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Mientras el oficialista Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, anunciaba su satisfacción por haber conseguido el "respaldo del 42% de los compromisarios" de esos municipios, José Manuel Baltar Blanco se proclamaba en Monterrei (Verín) vencedor del congreso con el "apoyo del 95%" de los mismos.

- El hijo del 'barón' del PP se proclama vencedor del congreso
- El número tres del PP gallego certifica la confianza de Feijóo en Jiménez

Paralelamente, el número tres del PP de Galicia, el portavoz parlamentario y ex *baltarista* Antonio Rodríguez Miranda, terciaba, en una entrevista en Europa Press, certificando la "confianza" en Jiménez del presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, aunque destacaba la "neutralidad" del líder del PP gallego en el proceso electoral ourensano.

"Más que satisfecho" se sentía ayer Jiménez Morán con los resultados de la selección de compromisarios de los pequeños municipios de la provincia, en donde el padre de su oponente, José Luis Baltar, tiene su feudo. Jiménez estimaba en un 42% los apoyos recibidos de los delegados al congreso elegidos el viernes, lo que, unido a la elección aún pendiente de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes -más próximos a la línea oficialista-, interpretaba como el augurio de un probable éxito en el congreso.

Pero unas horas después, el hijo de Baltar elegía la comarca de su contrincante para rebatir sus datos. En una "estimación a la baja", Baltar Blanco aseguraba contar con el 95% de apoyos de los pequeños concellos, "521 de los 551 compromisarios elegidos el viernes", a los que sumó el apoyo "masivo" de

Nuevas Generaciones "con 20 de los 23 elegidos" y los 83 compromisarios natos de los 93 que corresponden a estos pequeños municipios.

A falta de la elección de los grandes ayuntamientos, que será el día 13, Baltar Blanco se adjudicó ayer el apoyo de "624 de los 1.212 compromisarios". La suma de adhesiones le llevó a "agradecer este aluvión de confianza" que, según dijo, "determina" su "victoria" en el XV congreso del PP de Ourense.

Las cifras no cuadran. O alguno de los candidatos las infló, o los municipios no transmitieron fielmente el resultado de los apoyos obtenido por cada candidato en el recuento del viernes. La incógnita permanecerá hasta el día 13, cuando el comité electoral distribuya los avales en los que quedarán plasmados por escrito, y sin posibilidad de duplicidad de firmas, los apoyos de cada aspirante.

Pero los oficialistas creen ya que Baltar Blanco ha hecho trampas. El hijo del *barón* del PP ourensano reconocía ayer mismo tener sus adhesiones "por escrito", pese al acuerdo alcanzado entre él y su oponente ante la junta electoral de que no distribuirían hasta el día 13 el documento oficial de los avales con un texto pactado por ambos. Como Baltar Blanco comenzó a distribuir su propio escrito el lunes pasado, Jiménez denunció el hecho ante el comité electoral, que le "garantizó" que se anularían esos avales. El equipo del candidato oficialista daba ayer por hecho que los apoyos anunciados por el hijo de Baltar, al margen de la cifra, "no son válidos".

Ayer, al anunciar su recuento, Baltar Blanco aludía a la expectativa hecha pública el día anterior por su oponente de alcanzar el 35% de los respaldos. "Se olvidó de colocar una coma", destacó para señalar que Jiménez apenas había superado el 3,5%.

En medio de la cada vez más agria campaña, el ex *baltarista* Rodríguez Miranda destacaba que "Feijóo es claro y las personas en quien más confía están en su comité de dirección", en alusión a Jiménez, aunque destacando que "Baltar desempeña otros puestos de responsabilidad". Miranda instó a los delegados a "garantizar con sus avales" la presencia de los dos candidatos en el congreso y a votar olvidándose "de presiones, favores o prebendas". Además, pidió renovación para frenar "la pérdida de apoyos" en los últimos comicios sin mencionar que Baltar Blanco ha sido el responsable de la organización del partido. Él votará a "quien mejor pueda liderar la formación para recuperar el apoyo electoral".

www.elpais.es 10.01.10

DOS SECRETARIOS DE BALTAR OPTAN A DELEGADOS DEL CONGRESO DEL PP

Buena parte de los funcionarios de la Diputación de Ourense serán delegados en el congreso provincial del PP. El presidente, José Luis Baltar, no sólo hace campaña para ceder el liderazgo del partido a su hijo José Manuel, sino que cuenta con sus empleados como electores.

Los empleados de la Diputación no decantarán el congreso, dado que la mayoría son alcaldes, concejales o militantes en pequeños pueblos de la provincia y serán las poblaciones mayores -Ourense, Verín, Xinzo, O Carballiño y Ribadavia- las que decidan el resultado final dado que cuentan con más compromisarios. Para ello la junta local del PP de Ourense tuvo que plantear un recurso: Baltar había resuelto que todos los municipios tuvieran igual número de delegados.

Mientras Baltar padre aseguraba hace unos días que pedía el voto para su hijo pero no presionaba - "no echo en cara los favores"- al menos dos de los cuatro funcionarios que trabajan a su servicio, en la secretaría del presidente de la Diputación se han apuntado para ser elegidos compromisarios al congreso. Similar es la situación en el resto de las dependencias de la institución en donde Baltar ha contratado a lo largo de sus casi dos décadas como presidente alcaldes, concejales, militantes y a sus familiares.

La última vuelta de tuerca en la política de contratación tuvo lugar el pasado verano. Baltar convocó un nuevo proceso de oposiciones que acabaron blindando en sus puestos a hijos, nueras, yernos y esposas de regidores del PP. Ahora éstos votarán, junto con algunos tráfugas, en el congreso de "la renovación".

La secretaria de Política Municipal del PSdeG, Mar Barcón, acusó ayer al PP de evidenciar su "falta de respeto" al Pacto Antitransfuguismo, a la vista de la participación en el congreso ourensano de los

representantes de Trives y Calvos de Randín, a quienes Baltar aseguró en su día que expulsaría del partido. Barcón acusa a Rueda, Feijóo y a los presidentes provinciales del PP de, en lugar de apartar a los tráfugas "promoverlos" para después "premiarlos".

A última hora de ayer se realizaba el recuento de delegados en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El contrincante de Baltar, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, esperaba obtener en este primer proceso "al menos el 35%" de los compromisarios. El proceso se completará el próximo día 13 con la elección en los principales municipios.

www.elpais.es 09.01.10

DOS EXPULSADOS POR TRÁNSFUGAS SON DELEGADOS AL CONGRESO DEL PP ORENSANO

El alcalde de Trives y un edil de Calvos votará la elección del nuevo líder provincial

El PP orensano se servirá de los tráfugas teóricamente expulsados del partido para elegir a su próximo presidente provincial. El alcalde de Trives y el portavoz del grupo popular de Calvos de Randín, declarados tráfugas oficialmente, participarán en el cónclave convocado para el día 30 pese a que José Luis Baltar anunció en su día que acataría la decisión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitráfugismo y los expulsaría del partido.

El alcalde de Trives, Luis Álvarez, que accedió a la alcaldía a finales de 2008 mediante moción de censura pactada con dos disidentes del PSdeG, acudirá como "compromisario nato" al congreso orensano, según él mismo reconoció a este diario. Baltar padre, que ejercerá la presidencia provincial hasta que sea relevado el próximo día 30, anunció en diciembre de 2008 que Luis Álvarez y los tres concejales del PP que firmaron la moción que desbancó de la alcaldía al independiente Francisco José Fernández, serían "expedientados", a no ser, especificó entonces el barón del PP, "que ellos pidan directamente la baja antes de la expulsión". Cuando Baltar se comprometió a expulsar del partido a los concejales de Trives que le devolvieron una de las numerosas alcaldías perdidas en las municipales de 2007, lo hizo a regañadientes.

En el Ayuntamiento de Calvos de Randín, donde los ediles del PP se aliaron también a finales de 2008 con un tráfuga del PSOE para echar de la alcaldía al socialista Aquilino Valencia, la moción no prosperó porque una multitud lo impidió al bloquear la entrada al salón de sesiones. Sin embargo, el PP también anunció la expulsión de sus ediles en cumplimiento del Pacto Antitráfugismo. Contrariamente a lo que declaró, el *número uno* de los populares en este municipio, Antonio Rodríguez Alonso, también se ha apuntado para acudir como compromisario al congreso. El PP anunció que había expulsado a sus tráfugas, pero estos continúan participando en el partido. Rodríguez Alonso "hizo campaña como si nada" para el PP en las pasadas autonómicas, sostienen representantes de PSOE y BNG, quienes aseguran que, además, el edil participó como interventor para este partido el día en que se celebraron los comicios.

El edil no confirma ni desmiente. "No sé nada", responde tanto a la pregunta de si continua militando en el PP como a la de si acudirá como compromisario al congreso provincial. Fuentes del PP dan por hecha su asistencia ya que los dos candidatos pactaron que asistan como miembros natos los alcaldes y presidentes de las juntas locales.

La elección de los compromisarios al congreso es la pieza clave para los dos aspirantes a hacerse con la presidencia del partido. Esta tarde se elegirán los delegados de los municipios de menos de 5.000 habitantes (la representación recaerá en alcaldes y presidentes de las juntas locales) mientras que los del resto se decidirán el día 13.

Los dos candidatos, mientras, continuaban ayer su campaña. El hijo de Baltar acusó a sus adversarios de "embarrar el campo" con "descalificaciones" hacia él. "Allá cada quién", señaló acusando a su rival, el alcalde de Verín, Jiménez Morán, de incurrir en "catastrofismos" en lugar "hablar de propuestas".

La suya sobre el galleguismo, recogida en una entrevista en este diario en la que tildaba de "insultantes" los argumentos de una parte del PP sobre el idioma, es considerada por el PSdeG como la evidencia de la "traición" de Feijóo a la lengua de Galicia así como de su "falta de autoridad" en su propio partido. Los socialistas gallegos señalan que, a la vista de las declaraciones de Baltar Blanco, hay un sector en el PP

"incómodo con el Gobierno de Feijóo y con sus ataques a la lengua y cultura gallegas", motivo por el que piden al presidente de la Xunta que "recapacite".

www.elpais.es 08.01.10

LOS CRÍTICOS A BALTAR EXIGEN QUE SE ANULEN LOS AVALES RECOGIDOS POR LA LISTA DE SU HIJO

En la campaña a cara de perro que mantiene el PP de Ourense, el candidato José Manuel Baltar Blanco lleva la delantera. Y su oponente, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, cree que Baltar y su padre "cometen infracciones" con el objetivo de echarlo del congreso. "Les interesa llegar al día 30 con un solo candidato porque no podrán controlar los votos en urna, por muchas fotos y firmas que hayan forzado", asegura el contrincante de Baltar Blanco.

Jiménez sostiene que en los primeros días de campaña el otro aspirante y su padre, José Luis Baltar, presidente de la Diputación y saliente del PP ourensano, han incurrido en varias vulneraciones estatutarias. La primera, el reparto de compromisarios, ya impugnado, hecho por Baltar padre y que beneficiaba a su hijo. Tras ello, la "injerencia" del aún presidente provincial reclamando apoyos para su vástago.

Ayer, Jiménez alertó al comité organizador del congreso de nuevas faltas. Sostiene que los Baltar han incumplido el pacto sellado por los dos candidatos ante el secretario de la comisión de organización del cónclave, Plácido Álvarez, sobre el reglamento. Se comprometieron a consensuar con él el día 13 de enero el texto del documento en el que se recogerán los avales para el congreso "y Baltar ya empezó a distribuirlos".

Los candidatos -que ya tuvieron que ser avalados para poder ser aspirantes- deben obtener ahora cada uno de ellos la firma de al menos 244 de los compromisarios al congreso, el 20% del total. Tras la queja presentada ayer, Juan Manuel Jiménez Morán da por hecho que no valdrán los que ha recogido "antes de tiempo" Baltar Blanco.

La cuestión temporal es importante porque no se acepta la duplicidad de firmas, con lo que el hijo de Baltar llevaría una considerable ventaja en la carrera electoral. El candidato oficialista propondrá que los documentos vayan numerados para "evitar anulaciones" de última hora. "No vaya a ser que alguno firme dos veces y tengamos que repetirlo todo". En esta batalla por el poder del PP ourensano, el alcalde de Verín y candidato a presidente se enfrenta a la estructura tejida durante dos décadas por el padre de su oponente, José Luis Baltar. La batalla es de tal calibre que asegura que, "pese a las vulneraciones", no tiene intención de recurrir el proceso electoral, sino que lo quiere es "acabar cuanto antes". "Esto es horroroso, no tendría fuerzas para repetirlo", señala.

El candidato oficialista se sorprendió el pasado domingo con la foto del Manifiesto de Santa Cruz de Arrabaldo. Baltar Blanco posaba arropado por la práctica totalidad de los miembros del comité organizador del congreso encargado de velar por su neutralidad. El mismo comité que deberá sancionar las posibles infracciones del aspirante al que apoya.

El secretario de ese órgano mediador es también firmante del manifiesto. Jiménez Morán acudió ayer a él con la protesta por el incumplimiento de Baltar Blanco. "No tengo quejas del comité de organización; Plácido Álvarez me dio la razón en cuanto le comenté la infracción" de los avales, declaró el contrincante de Baltar.

Mientras Jiménez Morán se enfrenta a los problemas de intendencia derivados de los "incumplimientos" de su oponente y se entrevista con alcaldes y militantes en busca de apoyos que garanticen su presencia en el congreso, Baltar Blanco anuncia, en populosos actos públicos, iniciativas para el "nuevo PP de Ourense".

Primero presentó el Instituto Orensano de Estudios Sociales y Políticos Atlántida, presidido por él mismo y dedicado a la defensa de los "intereses sociales" de Ourense y al impulso del "pensamiento galeguista", que pretende retomar el espíritu de la Xeración Nós para crear una "Xeración Vós" adaptada al siglo XXI.

Ayer, mientras el candidato oficialista negociaba la invalidez de los avales conseguidos "sin juego limpio" por Baltar Blanco, éste presentaba en un acto en O Carballiño una Escuela de Verano del PP de Ourense sobre Derechos y Libertades.

www.elpais.es 05.01.10

BALTAR DESAFÍA AL PP Y APOYA A SU HIJO PARA SUCEDERLE EN OURENSE

Temeroso del conflicto que se le podría abrir en Ourense, donde José Luis Baltar manda en el partido desde hace dos décadas, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, había consentido una prórroga al sempiterno barón para ganar tiempo, programar un relevo calmado y cumplir así con sus anunciadas promesas de renovación. Pero Baltar, que cosecha en su provincia cotas de apoyo electoral de récord, a menudo por encima del 60%, eligió una vez más su camino. No opta a la reelección, para alfombrar así el camino a la presidencia provincial de su hijo José Manuel, vicepresidente del Parlamento gallego. Lo hizo tras consultar a los alcaldes, que en su mayoría le pidieron que siguiera.

Mandó más su esposa, Alicia Blanco, que desde hace años, según él mismo ha reconocido, le invita a dejar la política. Cuando comunicó su retirada a Feijóo, todo lo que le pidió el presidente regional fue que mantenga la neutralidad en el cónclave que se celebrará el 30 de enero.

Pero Baltar vuelve a decir no a su jefe de filas. En declaraciones a EL PAÍS, explica que la neutralidad pactada le obliga "como presidente del PP, no como padre". De hecho, admite que su papel en el proceso sucesor es así mucho más fácil: al presentarse su hijo, no tiene "necesidad" de explicar a los alcaldes a quién hay que apoyar. "No me lo preguntan, es mi hijo, no otro aspirante".

De hecho, el menor de los Baltar, José Manuel, es el mejor colocado para suceder a su progenitor primero en el PP de Ourense y luego en la Diputación. Ha cosechado más de 2.805 avales frente a los 132 reunidos por su oponente, Juan Jiménez Morán, alcalde de Verín, que en su presentación esgrimió su cercanía a Feijóo. Baltar padre vigila por si acaso y pide al presidente gallego que cumpla con la "neutralidad pactada".

www.elpais.es 23.12.09

"NO HACE FALTA DECIRLE A LOS ALCALDES QUE APOYEN A MI HIJO COMO SUCESOR"

Admite que el propio Feijóo le pidió seguir un tiempo para no abrir un conflicto en Ourense, pero ha decidido abandonar la presidencia del PP provincial tras dos décadas porque su cara está "muy vista" y después de escuchar a su familia, sobre todo a su esposa, Alicia Blanco. José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940), que en enero cumple 20 años como presidente de la Diputación, analiza en la primera entrevista tras anunciar la retirada, el proceso de su propia sucesión. Se siente "decepcionado en lo personal" con el alcalde de Verín, Juan Miguel Jiménez Morán, que se enfrenta a su hijo, José Manuel Baltar por liderar el partido. El sempiterno barón entiende que la dirección del PP le pida neutralidad "como presidente, no como padre", pero avisa que se ahorrará el trámite de recomendar a los alcaldes a quien apoyar porque ya saben quien es su hijo. Al repasar su trayectoria, Baltar reconoce el error que supuso amenazar a Fraga con romper el grupo parlamentario en 2003, y explica que lo hizo por "lealtad a Xosé Cuiña", el mismo que le habían presentado el propio Fraga y su antecesor en la Diputación de Ourense, Victorino Núñez.

Pregunta. ¿Por qué deja la presidencia del PP de Ourense?

Respuesta. Por dos razones: mi familia, sobre todo mi mujer que lleva tiempo suspirando para que deje la política y me dedique a la familia, cosa que no hice durante estos 41 años largos que llevo en política. Además quería romper un tópico: había gente que me veía agarrado al sillón, y, en el momento más dulce de mi carrera, al día siguiente de que todos los alcaldes del PP me piden por unanimidad que continúe, pues tomo la decisión de irme. Además creo que mi edad lo requiere, han de llegar caras nuevas al frente del partido y las instituciones. No quería marcharme a casa cuando ya vaya con bastón y no logre subir las escaleras, quiero estar en condiciones para disfrutar de una jubilación merecida.

P. ¿No quiere ser Fraga?

R. No dije eso, cada uno toma las decisiones que cree adecuadas. Hay gente que a mi edad quiere estar en el ojo del huracán de la política, yo no lo veo así pero todas las opiniones son respetables.**P.** ¿No es un desaire a los alcaldes que le piden que siga?

R. No, me dijeron que preferían que me quedase pero que entendían mis razones si me iba.

P. También le pidió Feijóo continuar y no le hizo caso.

R. Por supuesto. Dije al presidente que lo meditaría, que me halagaba su propuesta y al final por las razones que cito, le dije que me quedaba más tranquilo conmigo mismo si lo dejaba.

P. Feijóo aduce que pactaron neutralidad. Le resultará difícil.

R. Esa neutralidad la asumo como presidente del PP y será impecable, hay una comisión organizadora y no me inmiscuyo. Como padre, todo el mundo entenderá que apoyo a mi hijo. No soy distinto a otro ser humano. A quien predica otra filosofía, me gustaría ver cómo actuaría en mi caso.

P. ¿Pide el voto para su hijo?

R. No hace falta. No tengo necesidad. Los alcaldes no me preguntan a quien hay que apoyar. Si fueran otro, pero es mi hijo.

P. ¿Y la dirección regional mantiene la neutralidad?

R. Hasta ahora no tengo indicios para cuestionarlo. A lo largo de la campaña lo veré y si no hay neutralidad lo diré públicamente.

P. Jiménez Morán promete abrir las ventanas en Ourense.

R. Él estaba en mi equipo, siempre acepté sus consejos y si no se abrieron las ventanas sería porque tendría frío, si no se hubieran abierto más. Quien trabaja conmigo, sabe que tarda más en hacerse una propuesta, que yo en aceptarla. Los problemas que hubo en el PP de Ourense eran de quienes no querían hablarme.

P. ¿No es una candidatura más renovadora que la de su hijo?

R. Por edad, no, por tiempo en las instituciones, tampoco. Jiménez Morán estuvo en mi equipo desde que soy presidente del partido, fue propuesto para todos los cargos que deseó y en Verín siempre se hizo lo que él dijo.

P. Él lamenta su falta de medios: no tiene sede ni personal.

R. Tiene la sede provincial que es neutral y cualquiera puede utilizar. Yo ya no voy por allí.

P. Jiménez esgrime en su campaña su cercanía a Feijóo.

R. Creo que nadie debería explotar esa baza, flaco favor le hace a Feijóo porque da a entender que quiere implicar al presidente, que prometió neutralidad. No entiendo por qué Jiménez Morán pretende ser su candidato. Nosotros también somos cercanos a Feijóo, primero yo pero también mi hijo que es vicepresidente del Parlamento. Feijóo no merece que se le meta en campaña.

P. ¿Se corre el riesgo de que acabe siendo una lucha entre Feijóo y Baltar?

R. Exactamente, y calculo que ése no es el espíritu de la campaña ni de Feijóo, al que se le puede estar metiendo en un problema. Él tiene otras responsabilidades y ha garantizado neutralidad.

P. ¿Pretenden una dinastía?

R. La prueba de que no hay dinastía son las dos listas. La habría si yo pudiera decir quién es el presidente, pero los militantes son libres, el voto es secreto, y José Luis Baltar tiene un solo voto.

P. Deja traslucir cierta decepción con el alcalde de Verín.

R. Como presidente del PP, no tengo nada que reprocharle porque ejerció su derecho. A nivel personal ya no pienso igual.

P. ¿Puede haber pacto?

R. No voy a mediar ni a favor ni en contra. Son personas inteligentes y deben tomar decisiones.

P. Sus enemigos internos critican los contratos en la Diputación a familias del PP.

R. ¿Y esos mismos enemigos no tendrán familiares por aquí? Parece que las cosas un día valen y después no. Con eso no se ganan las elecciones, porque yo no vendo los favores, ni se los echo en cara a nadie, entre otras cosas porque no hay favores, son plazas conquistadas por merecimiento. Pagan con su competencia.

P. Pero la diputación está muy cargada de personal.

R. Hace misiones que no asumen otras. Me preguntó por qué recibimos tres veces menos presupuesto teniendo las mismas obligaciones. Gestionamos servicios directamente con brigadas cuando los demás externalizan trabajos. El personal de vías y obras es el 60% de plantilla. Y lo mismo para la recogida de residuos. Y hay gente contratada en programas europeos. Al hablar del personal hay que analizar todo esto.

P. ¿Dejará la Diputación?

R. Cuando el partido quiera, pero cuanto más pronto, mejor. El presidente de la Diputación lo debe decidir el partido aquí y en Santiago, estarán de acuerdo. Haré lo que convenga al PP.

P. Su momento más duro en 20 años fue la amenaza de romper el partido hecha a Fraga.

R. Es un episodio olvidado, entonces nos cegó la lealtad a una persona

[el fallecido Xosé Cuiña] que fue propiciada por el mismo Fraga y por Victorino Núñez que fueron quienes me lo presentaron como el hombre de futuro. Me dejé guiar por eso, no fue mi decisión más acertada pero al final no pasó nada. Fue un amago que hizo daño al partido, lo admito, pero peor fue lo que le hicieron a Fernández Albor en el Parlamento, nosotros amenazamos pero no dimos. Hubo arreglo.

P. ¿En qué PP está más cómodo: con Feijóo o con Fraga?

R. ¿Piensa que son distintos? Un líder sin respaldo no cambiaría nada. Los éxitos del PP de Fraga respondían a su comunión con el partido. Cuando se pensaba que el PP se rompería, hubo un congreso y llevamos al partido a la Xunta. Es cierto que hay ilusión y empuje, eso lo da la juventud.

P. ¿Pierde el PP galleguismo?

R. No, eso es patrimonio del pueblo, por muchos que algunos dirigentes lo llegaran a intentar, no se perdería. Lo que hay que fomentar es el cariño por la lengua, no el odio. Si se propicia eso a los nietos e hijos, no hay político que lo eche abajo. Pero también digo que no se puede imponer como un castigo o forzarlo. Yo le tengo amor a la lengua como signo de nuestra identidad que es.

P. ¿El PP urbano también?

R. El amor a la lengua hay que demostrarlo en la práctica. Yo puedo hablar castellano, pero ¡Cómo un gallego no puede amar su idioma! Me siento español como cualquiera pero más culto porque yo tengo dos idiomas.

P. ¿Promovió o conoció la carta de los alcaldes en las que se quejaban del trato de Feijóo?

R. No. Cuando me enteré, estaba redactada, no la había leído y cuando un alcalde me dijo que no firmaría le di la razón.

P. Dos décadas gestionando la Diputación y muchos ayuntamientos pero Ourense no despegó.

R. No tenemos medios para salir de esta situación. Debería ser la Xunta y el Gobierno central. Hay 20 provincias que necesitan una acción especial que ni PP ni PSOE hacen. Ourense precisa discriminación positiva y Feijóo empieza bien con el plan Impulsa Ourense que favorece a las empresas que se implanten aquí.

P. ¿Cuál es su fórmula para lograr esos resultados electorales?

R. Trabajo, trabajo, más trabajo y escuchar a la gente, que te vea por la calle, te aplauda y si te llama la atención, aguantar estoicamente porque el pueblo es soberano y cuando llegan las elecciones ajusta cuentas.

P. ¿En las municipales cuál es su candidato para Ourense?

R. Poly Nóvoa. No encuentro otro mejor. Si se me escucha en su momento, aunque ya no sea presidente provincial, apostaré por él y no daré mi brazo a torcer.

P. ¿Veinte años de mandato dan para arrepentirse de mucho?

R. No pude hacer por la provincia todo lo que quería en 1983.

P. ¿Qué es un cacique bueno?

R. ¡Qué político no es un cacique! Si se entiende como solucionar problemas, yo lo hago desinteresadamente y atiendo igual a las personas influyentes y a las que no lo son. Eso no es caciquismo y menos caciquismo malo.

P. ¿Cómo imagina su primer día fuera de la política?

R. No me levantaré a las seis, mi cuerpo no sufre estando en la cama hasta las nueve. Y luego me pondré a las órdenes de mi mujer, intentaremos viajar, ver a mis familiares, trabajar con la desbrozadora en la finca...

P. Con la desbrozadora, no con la rebarbadora, la de sus adversarios, a la que tanto temía...

R. (Risas). No, con esa no, a esa le sigo teniendo mucho miedo, te puede llevar por delante en cualquier momento.

www.elpais.es 23.12.09

EL RIVAL DE LOS BALTAR SE PRESENTA PARA "ABRIR LAS VENTANAS"

Hay batalla en el PP de Ourense. El alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, registró en el último día de plazo su candidatura a la presidencia del partido en la provincia. "El conformismo es el peor camino en política", justificó su decisión. Intentó presentarse en tono conciliador, "humilde, honesto y transparente", llamó a la unidad con su lema "Xuntos somos maioría" y expresó su "cariño" por Baltar padre. Pero también dejó claras sus discrepancias, y las del sector oficialista al que representa, con el hijo del barón y no disimuló su cercanía con el presidente del partido. "Tengo la ideología del PPdeG que lidera Feijóo, asumo su propuesta de renovación y me presento con el programa de las autonómicas: sería una locura que fuera distinto", marcó la diferencia con Baltar Blanco a quien no concedió ventaja: "Soy tan ourensanista y galleguista como él".

Con menos "parafernalia", la foto de las municipales empastada a última hora en el cartel de campaña y con bastantes menos avales que su rival (132 firmas conseguidas el fin de semana "sin salir de Verín", Jiménez anunció la pugna de los históricos del PP contra el intento de perpetuación del baltarismo. "Hay que abrir las ventanas" del partido, reclamó, y calificó su decisión como la más importante de su vida política. Después arremetió: "No propondré crear de escuelas de verano ni foros de opinión: sé por experiencia lo que pasa con eso; yo quiero agilidad y órganos no rimbombantes pero que funcionen".

Tras tildar de "escandaloso" el gasto en publicidad de su oponente aseguró que él sólo invertirá "en gasolina" para emular la campaña de las autonómicas de Feijóo que le llevó a la Xunta "contra todas las encuestas".

El alcalde de Verín esgrimió su amistad personal con Feijóo, a quien "le gustó" que concurriese en una lista pero advirtió de que el presidente de la Xunta mantendrá su neutralidad en el cónclave. Jiménez definió a Baltar Blanco como "un militante" igual que él, "aunque coordine el partido" y le recriminó las "ayudas que recibe". "Parece que no es él quien se presenta", aludió a su padre.

En su primer día como candidato, Jiménez avisó de que concurre para ganar: "No me gusta perder ni al tute", advirtió, y rechazó la única lista de integración que acepta Baltar Blanco, encabezando él la lista.

(www.elpais.com, 22/12/09)

EL ALCALDE DE VERÍN PLANTA CARA A LOS BALTAR EN OURENSE

Sin cartelería, sin "oficina del candidato", sin fotos tamaño pared de su imagen, sin presupuesto, e intentando reunir aún a media tarde de ayer los 75 avales necesarios, el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, plantará cara al baltarismo en el congreso provincial del PP convocado para el 30 de enero.

"Yo no tuve siete meses para preparar esto; decidí el sábado presentar la candidatura y tendré que recurrir a los amigos para que me echen una mano", explica Jiménez dos días después de que José Manuel Baltar Blanco acudiera con 2.805 firmas, en papel y soporte digital, a la sede provincial del partido mientras proclamaba el carácter histórico de su récord: el apoyo de 82 alcaldes y concejales de los 92 municipios de la provincia y del 95% de cargos públicos.

Unas horas antes de anunciar su decisión de presentar candidatura -ha convocado una rueda de prensa para hoy- Jiménez reconocía lo evidente: "Mi posición de salida es fastidiada".

El alcalde de Verín y consejero de CRTVG, a propuesta de la reicción del PP, cree que parte "en desventaja" frente a su competidor. Contra el despliegue Baltar Blanco, Jiménez reconoce que no dispone apenas de presupuesto. "Espero que algún amigo me pueda prestar una oficina" para la campaña, señalaba ayer, aunque reconocía que no será equiparable a la del hijo de Baltar, situada en un céntrico edificio de la capital. Asegura que de momento cuenta con "buenas ideas" para el futuro del partido y con un buen lema, que hoy desvelará.

La lista alternativa a la de los Baltar se ha fraguado a contrapelo. Los críticos al baltarismo confiaron -a lo largo de los dos meses transcurridos desde que el hijo anunció que se presentaría si no lo hacía su padre- en que las presiones de la dirección del partido en Galicia y Madrid frenarían el intento de sucesión dinástica.

Pero no fue así. Baltar padre no sólo no cedió al clamor, incluso de los más próximos a él, para frenar la candidatura de su hijo. El barón del PP pidió el respaldo para su vástago, presionó a concejales, según denunciaron algunos, e intentó darle a Baltar Blanco "ventaja" de salida igualando los compromisarios de los grandes ayuntamientos (en donde tiene mayoría de oponentes) con los de los pequeños, controlados por sus fieles.

Funcionarios de la Diputación -en donde Baltar padre ha empleado a familias enteras de concejales y alcaldes del PP, un buen número en las oposiciones de este verano- aseguran que la institución aportó gran parte de los casi 3.000 avales a la candidatura del hijo mientras éste y su padre insistían en reclamar neutralidad a Feijóo.

Pese a todo, Jiménez Morán cree que merece la pena el intento: "Una cosa son los avales y otra el voto secreto en el congreso".

(www.elpais.com, 21/12/09)

BALTAR BLANCO HACE ALARDE DE FUERZA Y PRESENTA 2.800 AVALES

"Es un movimiento popular imparable", proclama

"Este es un movimiento popular imparable", advirtió ayer José Manuel Baltar Blanco. Y desplegó sus fuerzas: 2.805 avales, el doble de los compromisarios que elegirán al próximo presidente del PP en el congreso provincial del 30 de enero. "Porque cerramos el recuento a las 14 horas, si no a estas alturas estaríamos hablando de más de 3.000", aclaró.

"Animo a Jiménez a que se presente", afirma sobre el alcalde de Verín

El hasta el momento único aspirante que se ha postulado para sustituir a José Luis Baltar acudió a media tarde a la sede del PP a registrar sus avales cargado no sólo de firmas (necesitaba 75), sino de récords. "Este dato supone un récord de avales presentados históricamente en Galicia por un candidato de cualquier fuerza política y a cualquier nivel territorial", destacó. Y abundó en el logro: "Incluido cualquier candidato autonómico o provincial". Después destacó que llevaba las firmas no sólo en papel, sino "por primera vez en España, que se tenga constancia, en formato electrónico, en un *pendrive*".

Tres días antes de que comience la campaña y tres después de haberse postulado, el hijo de Baltar asegura que ha conseguido los apoyos de 84 representantes (alcaldes y concejales) de los 92 ayuntamientos de la provincia y del 95% de cargos públicos del partido que no son alcaldes. Rehusó dar nombres. "Un momento como éste debe de ser de humildad, y no dejarse llevar por la arrogancia", precisó tras aludir al "caudal de confianza inmenso" que asegura percibir no sólo en el partido, sino "por la calle", por parte de gente "que no es militante" y que valora "un proyecto de muchísima utilidad para el futuro de la provincia".

El aspirante a la presidencia solicitó al partido comenzar su campaña el día 26 en Verín, gobernado por Manuel Jiménez Morán, el único de los críticos al baltarismo que reconoce que baraja presentar candidatura. "Animo a Jiménez a que se presente; estoy muy interesado en conocer su proyecto del partido y su diseño organizativo de futuro", reclamó.

Con el elevado número de avales registrados, Baltar Blanco considera "un tema menor" el recurso que la junta local ourensana planteó ante la ejecutiva gallega por considerar "antiestatutario" el reparto de compromisarios que hizo su padre y que según los militantes de la ciudad, le beneficia a él. "Estamos hablando de 18 o 20 compromisarios en detrimento de los ayuntamientos y a favor de la ciudad", minimizó la cuestión y aseguró que cuando su progenitor hizo el planteamiento en la junta directiva provincial "se aprobó sin intervenciones en contra y sin enmiendas".

"Agradecido" por el apoyo que dice recibir de la militancia, se mostró dispuesto a valorar la lista de integración si se la pidieran, pero con él de candidato a la presidencia. Renunciar al primer puesto "no sería integración, sino claudicación".

www.elpais.es 19.12.09

DERROTA DE LOS BALTAR EN EL PP DE LA CIUDAD DE OURENSE

José Manuel Baltar Blanco ha topado con su primer escollo en el camino hacia la presidencia del PP ourensano. Ayer, la junta local del partido en la ciudad de Ourense rechazó el reparto de compromisarios ideado por su padre, el presidente de la Diputación. Y lo hizo en votación a mano alzada y con los dos Baltar, hijo y padre, presentes. La directiva de la capital, con mayoría de críticos al baltarismo, había denunciado que el presidente provincial "beneficia" la opción de su hijo, el aspirante a la presidencia, con el reparto de compromisarios.

La junta provincial que preside Baltar padre decidió el lunes que cada ayuntamiento de la provincia participaría en el congreso con dos compromisarios, poniendo en pie de igualdad a los municipios con

mayor número de habitantes (en donde el control lo tienen los críticos al baltarismo) y a los más pequeños, controlados por el presidente.

(www.elpais.com, 18/12/09)

FEIJOO BUSCA UN CANDIDATO ALTERNATIVO A BALTAR PARA DIRIGIR EL PP OURENSANO

Nadie ha guardado luto por la renuncia de José Luis Baltar a dirigir el PP ourensano tras 18 años en el cargo. Los contactos precongresuales no han parado desde el momento en que el presidente provincial anunció su retirada. Alberto Núñez Feijoo ha movido ficha y está buscando un candidato alternativo al hijo de Baltar. Este, que se postuló para el cargo hace ya 64 días, tiene el trabajo más avanzado. Tiene incluso lema de campaña y ayer inauguró una oficina del candidato.

Por su parte, los hombres de confianza del presidente autonómico en la provincia de Ourense han iniciado los contactos para buscar apoyos a una candidatura que compita con la de José Manuel Baltar. De estos movimientos tiene constancia ya el aún presidente provincial, José Luis Baltar. «Sei que andan buscando xente pero en principio parece que non quere ninguén, que hai que forzar», manifestó el máximo responsable del partido en Ourense, que dijo respetar la iniciativa porque «reforza a idea de que aquí non hai ningunha dinastía nin nada».

El nombre de la persona que encabezaría ese proyecto se mantiene aún en secreto. Uno de los que más sonaba para medirse al vicepresidente del Parlamento mantenía ayer la incógnita. Se trata de Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, el municipio ourensano más poblado de los que gobierna el PP. Este decía que se trataba solo de rumores, pero ni confirma ni desmiente esa posibilidad.

Los contactos precongresuales también están sirviendo para abordar una posible integración de las dos corrientes. El propio Alberto Núñez Feijoo se ha puesto en contacto con José Manuel Baltar y afines a este último lo han hecho también con los hombres de confianza del presidente autonómico en Ourense. Por el momento esta posibilidad no ha fructificado y cobra fuerza la intención de presentar una candidatura alternativa a la de José Manuel Baltar. Este, preguntado ayer directamente por esa eventual integración, decía que aún no era el momento de hablar de listas: «Imos ver o día 21 ás oito da tarde [fecha en la que se cierra el plazo de presentación de candidatos] que persoas queren ser presidentes do partido e contan co mínimo de 75 avais recibidos que esixe o regulamento deste congreso».

Si finalmente no se llega a un acuerdo y la corriente crítica con José Manuel Baltar presenta un candidato, el elegido tendrá mucho recorrido que remontar al hijo del actual presidente provincial. Poco más de 24 horas después de conocerse la renuncia de José Luis Baltar, el vicepresidente del Parlamento inauguró una oficina del candidato en un céntrico local de la capital ourensana para recoger avales de los afiliados y presentó un decálogo de propuestas organizativas para el partido.

(www.lavozdegalicia.es, 17/12/09)

BALTAR DESAIRA A FEIJÓO Y POSTULA A SU HIJO PARA LIDERAR EL PP DE OURENSE

Recién cumplidos los 69 años, José Luis Baltar inicia el lento proceso de su retirada. "Empiezo la carrera para desaparecer de la política; es la decisión más difícil y no tiene vuelta atrás", aseguró ayer en la ansiada rueda de prensa convocada para desvelar su futuro. Mantuvo en secreto su decisión dos largos meses, desde que su hijo se postuló para optar a la presidencia del partido, en el caso de que no lo hiciera él, pero en cuanto ayer pisó la sede del PP no se contuvo ya. Apenas traspasaba el umbral de la puerta, espetó con ironía al grupo de militantes que se arremolinaban expectantes en el entorno: "¿Venís al entierro o qué?". Y en cuanto se sentó, fue al grano: "No me presento a las elecciones a presidente en el congreso del PP; si teníais alguna apuesta ya lo sabéis". Y aclaró: "Esta es una decisión personal, consultada, con sus pros y sus contras, y analizada concienzudamente; me costó mucho tomarla: me pedían que continuara", y se emocionó hasta el llanto.

El veterano barón del PP da por culminado su ciclo tras 18 años al frente del partido y de la Diputación de Ourense, pero centra la esperanza en su hijo que, si resulta elegido en el congreso del próximo 30 de enero, garantizará el baltarismo por un tiempo. Ayer, ante la prensa, lo defendió reconociendo la imposibilidad de mantenerse neutral en la pugna, si la llega a haber, por la presidencia: "Debo ser neutral, pero todos sabéis que soy quien soy y mis vínculos familiares no se pueden romper", dijo llanamente sobre su apoyo a la candidatura de su vástago, el vicepresidente primero del Parlamento

gallego, José Manuel Baltar Blanco. "Ya nadie me pregunta a quién apoyo: sería tan indiscreto que no contesto", remachó. Después, ensalzó su "valía" para rechazar que el clamor unánime que estos días le pedía que continuase ocultara, en realidad, el rechazo a la candidatura de su descendiente.

"Mi hijo tendrá derecho como los demás", apuntó. Y matizó: "Si fuera tonto, o disminuido físico o psíquico, con perdón para éstos, y no hubiera en donde enchufarlo... pero tiene su carrera y su destino final". "Sería inconstitucional vetarlo por el apellido", añadió.

Baltar no cree que en el partido -los críticos, los alcaldes afines a él y la junta directiva provincial, que le pidieron que no se fuera- no quieran a su hijo. "Preferimos que sigas tú, pero aceptamos lo que hagas", asegura que le dijeron. Pero en contra de "todo el mundo", el barón orensano decidió marcharse para "dar paso a la alternancia". Sostiene que la razón última fue una cuestión de edad. "Hay que dejar paso", apuntó. "Alguna vez tendrá que ser y cuanto antes, mejor". Y acto seguido reconoció también cierta dosis de revanchismo: "Quienes me querían acusar de perpetuarme en los cargos me piden ahora que me quede: pues ahora me voy, que quede claro que eran acusaciones partidistas".

Baltar no cree que su decisión vaya a provocar un cisma en el partido. "Tengo claro que no puede ser así si estamos en un partido de demócratas". De momento reconoce que sólo sabe de una candidatura, la de su hijo, y se jacta de haber "jugado limpio" porque no esperó "hasta el final" para anunciar su retirada. Asegura que habrá ruptura si alguien quiere que la haya: "Yo me pondré a disposición del que gane, si no me llaman tras el congreso, no estorbaré, pero si me necesitan, sí, porque seré del PP toda la vida".

Su despedida del partido empieza a ser también la de la Diputación. Quiere dejarla "para que haya verdadera renovación". Pero está dispuesto a hacer "lo que diga el partido".

Justo después de que se produjese su anuncio, Feijóo hizo llamar a su despacho en el Parlamento a José Manuel Baltar. Tres reunirse durante poco más de media hora, éste rehusó hacer declaraciones y convocó a los periodistas a una rueda de prensa que se celebrará hoy en Ourense.

(www.elpais.com, 16/12/09)

LOS ALCALDES DEL PP, REACIOS A APOYAR AL HIJO DE BALTAR

Tres días pidió Baltar, presidente del PP de Ourense, a Feijoo, presidente del PP de Galicia, para deshojar la margarita de su sucesión al frente de la organización que dirige desde 1991. Es el tiempo que necesita para consultar con los 60 alcaldes populares de la provincia. Las confesiones comenzaron ayer. Unas, telefónicas, y otras, personales. Seguirán durante el fin de semana para tener el balance preciso de apoyos antes de la reunión que el próximo lunes fijará el congreso del PP ourensano para el 30 de enero.

En estas 48 horas, José Luis Baltar intentará reclutar los respaldos necesarios para perpetuar el baltarismo en el poder a través de su hijo, José Manuel Baltar, hoy vicepresidente del Parlamento gallego. No le resultará fácil porque, según ayer reconocía uno de los alcaldes, «para el todo o que queira, pero para o seu fillo xa non nos pode comprometer». En tal tesitura se topará Baltar en una mayoría de conversaciones. Recibirá la gratitud de los cargos políticos a los que fue regando de prebendas (especialmente vía puestos de trabajo de la Diputación), y que le ofrecerán su apoyo para renovar un nuevo mandato. Pero ese no es el objetivo de Baltar. Ese sería el mal menor.

Su objetivo es ceder el poder a su hijo. Desde hace tres meses dos muletilas no abandonan sus bocas: «Si se presenta mi padre, yo no me presento», reitera el hijo; «hasta que fale con Feijoo non vou a tomar a decisión sobre si continuo ou non», remacha el padre. Y así mareando la perdiz sin que los meses de primarias del hijo le granjearan nuevos apoyos. El único peso que tiene en el PP de Ourense es el que le traslada su progenitor. Y el de este ya no es aquel que enarboló cuando puso contra las cuerdas al Gobierno de Fraga con el encierro de su hijo y cuatro diputados más en un piso. Ni tampoco el que exhibió cuando en vísperas de las autonómicas del 2005 le dijo a Feijoo, con la anuencia de Fraga, que en Ourense no había sitio para él en la candidatura del PP y que se buscara acomodo en la de Pontevedra.

El Baltar de ahora, con el contrapoder del delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, su hombre fiel durante 18 años en la vicepresidencia de la Diputación, es un Baltar con menos regalías a repartir. Y los alcaldes van a lo práctico. En la situación de penuria que viven los concellos, ¿cómo enfrentarse al poder de la

Xunta? ¿Cómo olvidar que el presidente del partido lo es también del Gobierno y que el secretario general es conselleiro de Presidencia? Esta realidad hace que los ecos que le llegan a Baltar no sean del estilo «o que ti digas» sino «pide para ti o que queiras, pero o do teu fillo non é este o momento».

Si Baltar repite habrá unanimidad. Si le da la alternativa a su vástago, habrá luchas intestinas y división en el otrora monolítico partido y, al final, resultará un Baltar ganador y un Feijoo perdedor, o viceversa.

(www.lavozdegalicia.es, 14/12/09)

BALTAR LLAMA A LOS ALCALDES PARA PEDIRLES QUE APOYEN A SU HIJO

Ni la recomendación de Feijóo ni lo que digan los alcaldes. El futuro político de José Luis Baltar, y en consecuencia el de su hijo, lo decidirá él mismo. O ambos. Tras el largo tiempo esperando por el encuentro con Feijóo que habría de despejar las dudas, Baltar se entrevistó el jueves con el líder gallego, escuchó una posición diferente a la suya y acabó pidiendo prórroga: tenía que consultar con los alcaldes.

Los llamó ayer y recibió el mensaje. La mayoría prefiere que quede él y no su hijo, "aunque hay opiniones para todos los gustos". Varios alcaldes, que prefirieron guardar el anonimato, confirmaron que Baltar les pidió apoyo expreso para su hijo, pese a que la víspera había pactado con Feijóo la neutralidad de las direcciones gallega y provincial.

"Todo el mundo sabe que soy yo quien tiene que decidir lo que voy a hacer", explicó ayer a preguntas de los periodistas. Tras reconocer que en las consultas que está realizando entre los regidores ha detectado que "la mayoría prefiere" que se quede él, acabó poniendo de manifiesto su deseo de despejar el camino a su hijo: "Físicamente estoy bien, pero psicológicamente estoy cansado", justificó.

El barón orensano ha quedado en la sombra durante los casi dos meses en que su hijo, el vicepresidente del Parlamento gallego, José Manuel Baltar Blanco, se fogueó en una intensa campaña orgánica y mediática. Alcaldes de la provincia consultados por este diario reconocen que Baltar Blanco les pidió el apoyo a su candidatura hace ya días, como lo reiteró ayer su padre. Pero la mayoría prefiere que continúe el actual presidente, sobre todo el reducido núcleo que ha estado esperando durante largos años darle su relevo tanto en el partido como en la Diputación y para quienes la candidatura del hijo supone el punto final a sus aspiraciones.

Mientras en el ámbito interno el presidente provincial vela por los intereses de su vástago, en sus declaraciones públicas alude a que hará lo mejor para el PP de Ourense, aunque reconoce que "lo mejor" es "siempre subjetivo". Su "personal" decisión será anunciada el martes, afirmó ayer ampliando el plazo del suspense. "No sabemos si el hecho de que haya un nuevo presidente en el PP puede ser un revulsivo que le dé un aire de modernidad al partido, beneficioso para las elecciones, o a lo mejor conviene no hacer cambios ahora porque es un momento delicado", confesó su indecisión. Después matizó: "Cada uno tenemos nuestra idea", aunque no expuso abiertamente la suya.

(www.elpais.com, 12/12/09)

DOS LISTAS DE CANDIDATOS 'OCULTOS' SE DISPUTARÁN LA SUCESIÓN DE BALTAR

El PP orensano se prepara para celebrar un congreso histórico. Por primera vez en dos décadas los militantes tienen ante sí un escenario inaudito: el baltarismo con Baltar, el baltarismo con otro Baltar o el fin del baltarismo. Pero el despliegue de posibilidades, anunciadas a bombo y platillo por ambos bandos, no tiene candidatos realmente postulados por ninguno. La estrategia es el despiste. Y la identidad de los aspirantes, un secreto. El puro disimulo: nadie dice nada.

El parlamentario José Manuel Baltar Blanco anunció hace ya casi dos meses que quiere suceder a su padre. Pero en vez de postularse hizo un amago. Calificó su decisión de presentar candidatura a la presidencia provincial del PP de "firme, contundente, inapelable, irrevocable, absolutamente meditada y razonada" y acto seguido se enmendó: renunciará si se presenta su padre.

En los 54 días transcurridos desde entonces, el presidente provincial se aferra a su secreto. El sábado pasado su hijo repitió la escena y reiteró la incógnita: no habla con su padre de política, asegura, pese a

ser el coordinador provincial del partido. Sus adversarios entienden el mensaje: Baltar padre sólo presentará su candidatura en el caso de que la crítica pudiera impedir el triunfo de su hijo. Y también callan.

Para romper el secreto de los Baltar y despejar la incógnita, el delegado provincial de la Xunta, Rogelio Martínez, que lidera al sector contrario, anunció la presentación de una candidatura alternativa cuando fracasó su propuesta de una lista integradora sin ningún Baltar al frente. Tampoco dio nombres. Ni siquiera estaría necesariamente encabezada por él.

El delegado provincial ha decidido emular la estrategia del despiste de los baltaristas. "No diremos quién es el candidato hasta el último minuto del último día", sostiene Martínez. "Así, a lo mejor por primera vez tenemos tres candidaturas para elegir en el congreso", apunta convencido de que de esta forma forzará al presidente provincial a destapar su juego. Creen que si ellos enseñaran ahora el suyo, Baltar, padre e hijo, decidirían la estrategia que les daría la victoria.

Baltar Blanco insiste en su órdago y reta a sus compañeros de partido a que se postulen de una vez con el pretexto de debatir con ellos. Pero no encuentra con quién: sus críticos no se dan por enterados.

Lo que está en juego no es la perpetuidad de José Luis Baltar al frente del PP orensano, sino mucho más: el futuro político de su hijo. Los antibaltaristas no presentarían alternativa si el padre fuera el candidato y no hubiera línea sucesoria abierta. El veterano barón del PP desea retirarse, pero no lo hará hasta dejar bien situado a su vástago.

Sus críticos lo comprenden: "¿Pero cómo no va a querer Baltar dejar colocado a su hijo si se ha pasado la vida colocando a los de los demás?".

(www.elpais.com, 08/12/09)

BALTAR BLANCO SE PREPARA PARA "COLIDERAR OURENSE" CON SU PADRE

José Manuel Baltar Blanco sigue decidido a encabezar el PP de Ourense en el caso de que no lo siga haciendo su padre, José Luis Baltar, presidente de la Diputación y del partido en la provincia. 52 días después de postularse como cabeza de una lista en el próximo congreso de los populares orensanos, insiste en retar a sus oponentes a que debatan con él y pide "altura de miras" para valorar su proyecto, sobre el que no aceptará "vetos". Asegura que si consigue la presidencia del PP "coliderará" la provincia con su padre.

Ayer, tras persistir en la incógnita sobre la decisión de su progenitor de presentarse o no ("en casa no hablamos de política", señala), el coordinador del PP orensano aseguró que el congreso será "democrático" aunque no aclaró si, como temen sus adversarios, los compromisarios serán elegidos desde la Diputación. En su opinión "a la gente no le importa cómo se eligen".

En su empeño por suceder a su padre en la presidencia del PP de Ourense, Baltar Blanco rechaza la propuesta de la lista de integración que le formuló el delegado de la Xunta, y cabeza visible de sus oponentes, Rogelio Martínez. "No quiero parches ni componendas", sostiene, tras destacar que no tiene sentido una lista de consenso "cuando no hay disenso". Y justifica: "Si hay otras opciones, me gustaría conocerlas. Tiempo tuvieron para formar una".

Aunque centrado en el congreso, Baltar Blanco no niega su interés por dar el salto a la presidencia de la Diputación. "Los objetivos políticos hay que fijarlos poco a poco", puntualiza. De momento destaca que el único escenario que se plantea es el de presidir el partido y continuar en el Parlamento gallego.

www.elpais.es 06.12.09

BALTAR BLANCO REHÚSA PACTAR LA CANDIDATURA AL PP DE OURENSE

El vicepresidente primero del Parlamento gallego, José Manuel Baltar Blanco, mantiene su intención de optar a la presidencia del PP de Ourense en sustitución de su padre, José Luis Baltar, en el congreso provincial previsto para el próximo mes de enero. Baltar Blanco declaró ayer a este periódico que en

ningún caso pactará una candidatura de consenso con los sectores críticos del partido en la provincia y reiteró que sólo se retiraría de la carrera en caso de que su padre decidiese optar a la reelección.

Uno de los propuestos para esa hipotética candidatura de consenso, el diputado autonómico Rosendo Fernández, descartó ayer rotundamente que tenga intención de presentarse. A pesar de todo, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, punta de lanza de los críticos a Baltar, insistió en que habrá candidatos alternativos.

(www.elpais.com, 25/11/09)

EL DELEGADO DE LA XUNTA EN OURENSE TRATA DE FRENAR AL HIJO DE BALTAR

Consenso para hacer frente a la sucesión del baltarismo. Ésta es la consigna en el PP de Ourense, dispuesto a ofrecer una candidatura de integración al hijo del presidente provincial, el vicepresidente del Parlamento gallego, José Manuel Baltar Blanco, único militante que se ha postulado hasta el momento para la presidencia del partido.

El delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Martínez, cree que prosperará una lista alternativa. Martínez se descarta para ese puesto pero está convencido de que la mejor opción sería el consenso: una candidatura de integración de los dos sectores enfrentados, encabezada por alguien próximo al presidente provincial y a su hijo. Y cita, como posible candidato, al diputado autonómico Rosendo Martínez (ilocalizable ayer para este diario), del núcleo duro del baltarismo. La propuesta pasaría por que en la ejecutiva que éste presidiera hubiese una amplia representación del partido "y nadie quedase excluido".

De momento, la opción es recibida con escepticismo en el sector del PP que encabeza Martínez. Destacados militantes la ven inviable. "Baltar Blanco se blindó", señalan, convencidos de que si fragua una lista nueva, el hijo se retirará y se presentará el padre, a quien nadie se atreve a hacer frente. Baltar y su hijo "dejaron todo atado", dicen los dirigentes populares consultados. En cualquier caso, los contrarios aceptarían la opción de Rosendo Fernández "con tal de que no se mantenga la línea sucesoria, algo que el PP ya no puede vender en ningún lado". Creen que con Baltar Blanco de número dos y una ejecutiva plural "y equilibrada", el partido podría iniciar la transición hacia "la normalidad", aunque insisten en que la opción de Rosendo Martínez dependerá "de lo que diga el presidente". "Ya veremos si apuesta por el partido o por su hijo".

Sin embargo reconocen que hay otras bazas que podrían inclinar a Baltar a aceptar la lista de consenso. Una de ellas, la garantía que "sin duda va a ofrecer" la ejecutiva gallega de que el congreso no estará organizado desde la Diputación; esto es, que no sea el presidente quien dirija el congreso al que se presenta su hijo designando a los compromisarios. El delegado de la Xunta en la provincia tiene la convicción de que la ejecutiva gallega garantizará un cónclave "limpio", dirigido por representantes consensuados, "no puede ser de otra manera".

Con la garantía de un congreso democrático, la otra baza que en opinión de los críticos a Baltar lo forzaría a aceptar la lista consensuada es la determinación de presentar candidatura alternativa para enfrentarla a la de Baltar Blanco y medir sus apoyos reales en la provincia. No descartan para ello la opción del portavoz del PP en el Parlamento, Antonio Rodríguez Miranda.

El sector contrario a Baltar está convencido de que "pese a los resortes institucionales y mediáticos" que utiliza su hijo "no tiene los mismos apoyos que su padre". Y alertan de que pueda repetirse con él el "síndrome Cuiña", que contaba con todos los apoyos para el congreso de la renovación para sustituir a Fraga y acabó retirándose de la carrera sin conseguir siquiera el de Baltar. Confían además en que las continuas comparecencias de Baltar Blanco (entrevistas recogidas en la prensa local con asociaciones vecinales, alcaldes, militantes y otros colectivos afines) supongan más "un desgaste" que su promoción porque "se empieza a ver quién es el que gobierna".

Mientras el congreso se pospone (de noviembre a enero) los alcaldes más fieles al presidente empiezan a reconocer en privado que no se sienten obligados a respaldar a Baltar Blanco. "Yo estoy en deuda con Baltar, no con su hijo", reconoce desde el anonimato uno de estos veteranos.

(www.elpais.com, 24/11/09)

FEIJÓO DA LIBERTAD A OURENSE SOBRE EL RELEVO DE BALTAR

La "misma independencia" que los cuatro candidatos reclamaron a Manuel Fraga en el congreso que resolvió la sucesión del presidente fundador del PP. Esa es la postura que la dirección regional del partido, con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá en el cónclave de Ourense que ahora busca relevar a otro histórico del partido, el sempiterno barón provincial José Luis Baltar. El hijo de éste, Xosé Manuel Baltar Blanco, vicepresidente de la Mesa del Parlamento, ha sido el primero en anunciar que presentará candidatura. Y el padre no ha tardado en consagrarlo como su "digno sucesor", en una entrevista el martes en la cadena Cope. Siempre que el propio José Luis Baltar decida no presentarse, una decisión que hoy por hoy no está tomada.

Feijóo garantizó ayer "su imparcialidad ante todos los congresos del partido", para que "cualquier militante, independientemente de su apellido, se pueda presentar". "Ganará el que tenga más votos", concluyó el presidente gallego, cerrando así la puerta a los críticos con Baltar en la provincia, que esperaban un gesto de la dirección regional para evitar que se consolide una dinastía al frente del partido en Ourense. Sus palabras permiten concluir, algo que confirma el entorno del presidente, que Feijóo no abrirá una guerra en Ourense para impedir que Baltar se suceda a sí mismo en la figura de su hijo, máxime cuando sus rivales, el sector urbanita, ni siquiera constituyen una alternativa organizada capaz de presentar un candidato a presidir el partido. Con todo, falta que Feijóo y Baltar mantengan la conversación definitiva para que éste último le comunique si sigue o lo deja. "Hoy por hoy, el presidente está más cerca de marcharse", explica uno de sus estrechos colaboradores en la Diputación.

El mensaje del líder del PP gallego ayer no pone trabas a esa despedida, si bien su apuesta por la neutralidad puede entenderse como un mensaje a Baltar para que mantenga distancias con la candidatura de su hijo. "Leí que Baltar apoyaría a ese posible candidato y a cualquier otro que se presente, yo desde luego apoyaré a todos", afirmó Feijóo. "El PP de Galicia manifiesta su independencia, rigor y neutralidad para que cualquier militante se pueda presentar a presidente en Ourense o cualquiera de los 315 ayuntamientos de Galicia ", prometió.

Fuentes de la dirección del Partido Popular en Galicia piden que no se dé por hecho que Baltar Blanco vaya a convertirse en el futuro líder del PP ourensano. Sostienen que el vicepresidente del Parlamento de momento sólo está calibrando las repercusiones de su hipotética candidatura encabezada por él.

(www.elpais.com, 22/10/09)

BALTAR AVISA A FEIJÓO DE QUE SÓLO ÉL DECIDIRÁ SI CONTINÚA AL FRENTE DEL PP ORENSANO

Baltar marca los tiempos. Y el futuro del PP ourensano no tiene otro apellido que el suyo. El presidente provincial dejó ayer claro en una entrevista en la cadena Cope que será él quien decida, un evidente recado al líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. Hasta que no se reúna con el presidente, no tomará la decisión sobre si presenta candidatura para seguir al frente del partido en su provincia. "Decidiré yo si me presento o no" al congreso provincial -para el que de momento sólo se ha postulado su hijo- advirtió tras encontrar "más virtudes que defectos" en su vástago al que considera "digno sucesor" para relevarlo en la presidencia.

El barón ourensano no se movió un ápice de la indefinición que maneja sobre su futuro. "No he tomado ninguna decisión, si la hubiera tomado ya, se lo habría comunicado al presidente", sentenció. Baltar se mostró dispuesto a "escuchar las razones del presidente para después decidir si es verdad la realidad que dice que hay que llevar a cabo". "Decido yo, pero también estoy dispuesto a escuchar lo que proponga el presidente" del PP.

Sus palabras evidencian la estrategia iniciada por el clan Baltar que ya apuntó el sector crítico de los populares ourensanos. El veterano político quiere retirarse, como lleva anunciando desde hace años, pero su entorno político da por hecho que no lo haría si cree que Feijóo está dispuesto a avalar una lista alternativa. En ese caso se plantearía continuar como referente en la provincia. Entretanto, se entretiene apoyando a su hijo. Y advierte a los alcaldes de que al día siguiente al congreso, todos han de "ponerse a disposición" del futuro líder para "ayudarle a llevar este barco".

Los críticos al presidente provincial han recibido el mensaje. Cada día que pasa desde que el hijo de Baltar, Xosé Manuel, se postuló dejando abierta la opción de su progenitor, ven más lejanas las opciones

de presentar alternativa. "Todo depende de Santiago, aquí nadie se va a quemar a lo bonzo", sostiene un representante de este sector.

Feijóo, mientras, sigue guardando silencio sobre el futuro del PP en Ourense.

(www.elpais.com, 21/10/09)

EL HIJO DE BALTAR SE POSTULA PARA SUCEDER A SU PADRE EN EL PP DE OURENSE

Solo, "aunque no en soledad", en un acto convocado por sorpresa y celebrado en un hotel de la ciudad "porque es una decisión personal", José Manuel Baltar Blanco, el hijo del presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, anunció su candidatura al congreso provincial del partido, que aún no tiene fecha. Baltar Blanco, de 42 años, definió su iniciativa como "firme, contundente, inapelable, irrevocable, absolutamente meditada y razonada y que conviene que la diga para atajar todo tipo de especulaciones y comentarios". "No tiene vuelta atrás", sentenció.

Pero acabó corrigiéndose y despejando la incógnita de su operación. "Sólo cambiará el escenario si el presidente provincial decide presentar su propia candidatura, cosa que, pueden creerme, yo desconozco", afirmó. "Si el señor Baltar decide presentarse, yo me retiro", insistió, dando con ello al anuncio de su candidatura un tinte de órdago al presidente del PP gallego, que tiene pendiente una entrevista con su padre para hablar sobre esta cuestión.

Baltar Blanco dijo ayer que mucha gente, incluido Núñez Feijóo, sabían de su "voluntad", pero ninguno de ellos conocía su "decisión" de presentar la candidatura para aspirar a presidir el partido en la provincia "en estos tiempos difíciles". "Son ustedes los primeros en saberlo y quienes transmitirán la noticia", incluso a su padre y al líder del partido en Galicia, aseguró a los periodistas.

José Manuel Baltar dijo que desconoce cuántos apoyos puede tener en Ourense, ni si contará con los mismos que sustentan a su progenitor, fundamentalmente los alcaldes, y ni siquiera si su padre intentará convencer a Feijóo de que su vástago es el mejor candidato posible. "Yo formo parte de un equipo liderado por José Luis Baltar y supongo que tendré los mismos respaldos" que él, acabó contestando, aunque matizó que "no estoy aquí para compararme con él ni para ganar por 20 o por 50". Y sobre la reacción de Feijóo a su candidatura, supone que "no hará una reflexión negativa; tiene que saludar que se presente cualquier afiliado con ganas de dirigir una organización".

Baltar Blanco ve clara la victoria (suya o de su padre). Sabe que sólo hay posibilidad de candidato alternativo si él se presenta y ayer retó a sus compañeros de partido a que se postulen y a debatir con ellos "en público o en privado, donde quieran". Pero ya adelantó que la junta provincial, controlada por el baltarismo, decidirá el número de compromisarios que asistirá al congreso en una combinación "entre el nivel de participación en las elecciones y el resultado de las mismas en cada municipio". Esto es, que quienes elegirán al próximo presidente provincial serán los alcaldes y concejales de los municipios que controla José Luis Baltar, la mayoría empleados -ellos y sus familiares- en la Diputación.

Si finalmente se presenta y gana el congreso, José Manuel Baltar reeditaré el baltarismo, aunque irá más allá en su defensa del galleguismo. "Para el PP de Ourense es incuestionable que el idioma oficial de Galicia es el gallego y yo estoy dispuesto a promocionarlo y a luchar por ello", señaló para reivindicar que eso forma parte del "ideario del PP de Galicia". En esta línea, expresó su complacencia con la manifestación convocada para el domingo en Santiago por la plataforma Queremos galego, aunque no asistirá a ella.

El precandidato justificó su decisión en su experiencia de "17 años de afiliado al PP" y en el ejercicio de diversos cargos orgánicos en la estructura provincial y más recientemente como miembro de la ejecutiva del PP de Galicia.

(www.elpais.com, 16/10/09)

JOSÉ MANUEL BALTAR SE POSTULA ANTE LOS ALCALDES PARA SUCEDER A SU PADRE AL FRENTE DEL PP OURENSANO

Lo saben los alcaldes del PP de la provincia y el propio Feijoo. José Manuel Baltar Blanco, el hijo del barón del PP ourensano, está decidido a formalizar su candidatura para suceder a su padre al frente del partido en el congreso que los populares deben celebrar antes del 31 de enero. La determinación del vicepresidente del Parlamento, que desde hace unas semanas preside en funciones la Cámara por la baja de Pilar Rojo, podría favorecer la continuidad del progenitor, si la dirección del PPdeG no encuentra candidato para contrarrestar a Baltar hijo, y opta por pedirle al padre que siga para ganar tiempo. En esa circunstancia, Baltar junior no formalizará su candidatura.

La situación es paradójica. El barón, consciente de las pretensiones del aparato del partido, ya ha planteado en numerosas ocasiones su disposición a dar un paso a un lado, aunque sin renunciar a dejarse querer. En esa tesitura, José Manuel Baltar no quiere dejar pasar la oportunidad de competir por el puesto en el único cónclave con miga de los tres que el PPdeG celebrará en las próximas semanas.

Pero las expectativas del diputado ourensano chocan con el criterio extendido en el equipo de Feijoo de que el relevo del padre por parte del hijo provocaría lecturas malévolas. El peso del apellido solaparía, en ese supuesto, la valoración objetiva de las facultades de Baltar Blanco para pilotar el partido. La dirección del PPdeG se ve, por tanto, obligada a buscar un mirlo blanco que, de momento, nadie acierta a divisar con nitidez.

En este escenario, Feijoo podría decantarse por dejar las cosas como están para madurar el relevo y no quemar a nadie en esa carrera. En favor de esa posibilidad juega un contexto en el que el líder popular no quiere alborotos, en un momento dulce en el que las heridas del pasado parecen suturadas y el partido afronta en su retorno a la Xunta el objetivo de afianzar el poder municipal que ha visto mermar desde las elecciones locales de 1999. Claro que con Feijoo no hay que descartar nada. Muchos pensaban que el presidente evitaría la afrenta de situar como superdelegado del Gobierno gallego en Ourense a Rogelio Martínez, y Feijoo optó precisamente por el candidato que Baltar nunca hubiera elegido.

El desenlace de la sucesión depende del resultado de las conversaciones entre Feijoo y el barón. También la propia fecha del congreso provincial. Aunque se maneja la primera quincena de diciembre, podría posponerse hasta enero. Con anterioridad, Barreiro renovará su liderazgo en el PP de Lugo el próximo día 31, y Louzán hará lo propio en Pontevedra un mes más tarde. Solo resta aclarar si en Ourense hay margen de cambio. Baltar Blanco ya ha movido su ficha.

(www.lavozdegalicia.es, 14/10/09)

BALTAR RATIFICA ANTE EL JUEZ LAS INSINUACIONES CONTRA ANXO QUINTANA

Serio y contenido. Así se mostró ayer el presidente provincial del PP, José Luis Baltar, en el juzgado de instrucción de Ourense adonde acudió a declarar, en la fase de diligencias previas, como imputado por un presunto delito de calumnias con publicidad contra el ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana. El ex líder del BNG y su ex pareja, la concejala nacionalista en Allariz Cristina Cid, presentaron una querrela criminal por las declaraciones que el dirigente del PP realizó en un mitin en Punxín durante la campaña de las pasadas autonómicas.

El presidente ourensano insinuó entonces ante auditorio y cámaras de televisión que existía maltrato conyugal del nacionalista hacia su ex pareja. "Pusimos al ratón a cuidar del queso", clamó entonces Baltar, en alusión a las competencias de Igualdade que ejercía Quintana. Ayer, ni él ni su abogado respondieron a las preguntas de los medios. "No voy a hacer declaraciones, no quiero juicios paralelos en los periódicos", reclamó. Pero ante el juez reconoció la evidencia (el abogado de los querellantes aportó el vídeo del mitin emitido por TVG) de la insinuación: "No hay derecho a que, con quien es el encargado de cuidar de las mujeres, se den los hechos que se dan. Algunos ya saben de lo que hablo: pusimos al ratón a cuidar del queso". Según fuentes próximas a Quintana, Baltar rechazó la posibilidad de celebrar un acto de conciliación.

No fueron las únicas insinuaciones sobre el ex líder del BNG. En el mismo mitin Baltar pidió al entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, la destitución de Quintana. Argumentó que tenía como vicepresidente "al frente del departamento de Igualdad y de la Mujer a alguien que es el primero en incumplir".

Ayer, ante el juez, Baltar intentó enmarcar las declaraciones en el ámbito de la batalla electoral, aunque meses más tarde, tras conocer el anuncio de la querella, ratificó la supuesta calumnia alegando que si se refirió a la vida privada de ambos fue porque "era vox pópuli": "Yo sólo me hice eco de los rumores que se decían por todo Allariz".

El letrado de Quintana, Xoán Antón Pérez Lema, considera importante que la querella criminal haya sido admitida a trámite y destaca que la ley prevé un aumento de la pena precisamente en el caso de que las calumnias se pronuncien en el marco de una campaña electoral, "ya que el alcance de su difusión es mayor". En la querella se recoge que Baltar atribuyó a Quintana un delito de violencia doméstica.

Si la justicia llegase a considerar probada la calumnia Del presidente del PP de Ourense, Baltar podría enfrentarse a una pena de cárcel de entre 15 y 24 meses. No ingresaría en prisión pero tendría que hacer frente a la accesoria de suspensión del derecho de sufragio universal, lo que le inhabilitaría para el ejercicio de cargo público durante una temporada.

(www.elpais.com, 02/10/09)

BALTAR AYUDA AL ALCALDE DE MELÓN ACUSADO DE PREVARICAR

El alcalde de Melón, Alberto Luis Pardellas, levantó un polideportivo sin licencia a 75 metros del monasterio de Santa María, Patrimonio Cultural de Galicia. Por el supuesto delito de prevaricación urbanística, la Fiscalía pide para el regidor nueve años de inhabilitación para cargos públicos y un año de cárcel, pero el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, ha decidido recompensarlo. La institución provincial financiará un nuevo polideportivo mientras el ilegal, sobre el que pesa una orden de derribo, sigue paralizado.

A la Diputación de Ourense, que arrastra un endeudamiento del 78% de su presupuesto y gasta en amortización e intereses de la deuda 6,1 millones, le han sobrado 4,3 millones de euros del presupuesto de 2008. Además, la institución provincial tiene un remanente de tesorería de 5,6 millones, que repartirá entre los municipios que gobiernan sus alcaldes (casi un millón de euros) y entre asociaciones culturales y deportivas (cerca de otro millón). Al Club Deportivo Ourense le dará 400.000 euros, según los dictámenes que hoy se presentarán al pleno.

Ahora Baltar concede 300.000 euros al Ayuntamiento de Melón para un polideportivo en Cruceiro Gordo. No es la primera vez que recompensa al alcalde de Melón. Pardellas se jacta de no cobrar impuesto de basuras a sus vecinos, aunque para hacer frente al servicio gratuito la Diputación le ha comprado un camión de recogida.

(www.elpais.com, 25/09/09)

FAMILIARES DE LOS ALCALDES MÁS FIELES A BALTAR SACAN PLAZA EN LA DIPUTACIÓN

Los alcaldes de Baltar ya han colocado a más familia. Las notas de las últimas oposiciones blindan laboralmente a hijos, nueras, yernos y esposas de regidores del PP ourensano. Los mismos entre quienes circuló el mes pasado, para ser firmada, una carta contra el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien los baltaristas reprochaban el reparto territorial de poderes y le exigían rectificación.

José Luis Baltar no pudo completar entonces su estrategia, según reconoció, al difundirse el escrito cuando apenas llevaba unos días en manos de los regidores. Sin embargo, el presidente ourensano ha visto cerrado el círculo de su táctica política con estas oposiciones. El acceso a la Diputación de los familiares de los alcaldes consolida la fortaleza interna del barón con vistas al congreso de octubre en donde el baltarismo, puesto contra las cuerdas por Feijóo -primero los apartó de los principales puestos de la lista, después prescindió de ellos para los cargos de relieve en la Xunta y finalmente designó a uno de sus principales oponentes como delegado territorial-, se juega el poder en Ourense y su supervivencia.

Las sospechas sobre la estrategia de Baltar llevó a las Xuventudes Socialistas a realizar una denuncia parodiada hace apenas diez días. Los jóvenes del PSOE representaron un número de magia a cargo del mentalista Toniño Blake. Éste metió en una urna el nombre de cuatro familiares de cargos del PP y tras pronunciar unas palabras mágicas selló la caja y les auguró el aprobado entre el centenar de aspirantes

al mismo puesto. Ayer abrieron la urna y quedó constancia de que el mago sólo había errado uno de los nombres. Un error "leve", dicen las Xuventudes, ya que la difusión alcanzada por los nombres de los parientes de cargos del PP que iban superando los primeros exámenes hizo que algunos de ellos optaran por retirarse del proceso. Otros, como el cuñado del hijo de Baltar, contratado como técnico de recursos humanos, del grupo A, recibió un suspenso para una plaza de auxiliar administrativo, del grupo C2.

El ilusionista Toniño sí acertó el nombre de Rubén Álvarez, hijo del alcalde de Muíños y nuevo vicepresidente de la Diputación, Plácido Álvarez; el de la compañera del hijo del alcalde de Xinzo, Isaac Vila; y el del ex concejal en Nogueira de Ramuín, Raúl Soto Martínez.

Junto a ellos consiguieron también plaza, en este caso de conserjes -sólo en el edificio cultural hay 33- el concejal del PP de Sarreaus Manuel Rodríguez Martínez y la mujer del alcalde de A Merca. El yerno del alcalde de Vilamarín y senador, Amador Vázquez, obtuvo plaza de técnico superior informático; y el hijo del ex alcalde de Vilamartín de Valdeorras y hermano de la actual alcaldesa, el empresario Ignacio Santiago Candal Jarrín, consiguió la de técnico en desarrollo local y recursos europeos.

El acceso de allegados a cargos populares a plazas de funcionarios en la Diputación de Ourense viene de lejos. Buena parte de los regidores del PP ourensano tienen ya colocados ahí a sus parientes cuando no a toda la familia. Es ilustrativo el caso del teniente de alcalde de Cartelle, Jaime Sousa. Primero consiguió colocarse él mismo; después accedieron sus dos hermanos José y Darío; más tarde, su hija Pamela, fruto de su primer matrimonio, y un poco después entró la hija de su actual pareja. Ahora se ha hecho con una nueva plaza su sobrina, Celia Álvarez Sousa.

La oposición está "harta" de denunciar y apela a la ciudadanía para que castigue estas prácticas en las urnas. El portavoz del PSOE Alfredo García advierte que si Feijóo no frena "este caciquismo" como dijo en campaña, será "cómplice".

Pese a las denuncias, Baltar no descansa. El jueves pasado, cuando la Diputación empezaba a hacer públicas las notas de los aprobados en estas oposiciones, el Boletín Oficial da Provincia publicaba las bases de selección de otras 11 plazas, entre ellas monitores de gaita, de canto-pandereta, de juegos populares y de percusión, así como tres agentes de desarrollo local.

(www.elpais.com, 21/07/09)

HIJOS DE ALCALDES DEL PP SUPERAN OTRAS OPOSICIONES DE BALTAR

Hijos y parientes de alcaldes del PP, además de familiares de Baltar y de reconocidos letrados y jueces de la provincia, copan las abultadas listas de aspirantes en las oposiciones que está celebrando la Diputación de Ourense. Su presidente, José Luis Baltar, sumará de esta forma nuevos funcionarios al más del millar que tiene ahora y que sitúan la institución a la cabeza de las diputaciones españolas en porcentaje de gasto en nóminas.

Las oposiciones finalizan esta semana, pero buena parte de los aspirantes vinculados al PP van superando las pruebas. De momento se ha hecho ya con plaza el hijo del ex alcalde de Vilamartín de Valdeorras y hermano de la actual alcaldesa, María Jesusa Candal Jarrín. El nuevo funcionario es presidente y administrador de empresas dedicadas al vino, a la asistencia a ancianos y a los servicios jurídicos. Su plaza es la única de técnico superior en desarrollo local y fondos europeos.

Pero la mayor parte de las calificadas en su día por Fraga como mentes "prominentes", para justificar que obtuvieran mejor calificación los hijos de cargos del PP que el resto de ciudadanos, se presentan a las plazas de las escalas más bajas de la institución, en las que no se exige título universitario. Hasta el punto de que la elección de seis funcionarios administrativos se presenta muy reñida. Tras la primera criba del examen de gallego quedaron 136 aspirantes, de los que 11 han superado la primera prueba. Al menos cuatro de ellos están vinculados al PP.

Entre los aprobados figuran un hermano de la nuera de Baltar, Antonio Aydillo, a quien el presidente provincial empleó ya este año en con un contrato de superior categoría, técnico en recursos humanos. Junto a él aprobaron las primeras pruebas para las plazas de administrativos la compañera del hijo del alcalde de Xinzo de Limia, Isaac Vila; un hijo del alcalde de Padrenda, Manuel Pérez Pereira, y un hijo del alcalde de Muíños y nuevo portavoz del PP en la diputación, Plácido Álvarez. Este último se estrenó

en el cargo la semana pasada defendiendo la negativa de su partido a aprobar una moción del BNG, que demandaba una lista baremada para las oposiciones.

José Antonio Rodríguez Ferreiro, alcalde de Os Blancos por el PP entre 1991 y 1999, cuando erigió en el pueblo un busto de José Luis Baltar, ingresó ayer en prisión para cumplir una condena de cinco años y tres meses por delitos de malversación de fondos públicos y falsificación documental.

01.07.09

BALTAR SE NIEGA A UN BAREMO PARA CONTRATAR AL PERSONAL

José Luis Baltar sólo amaga con hacerle oposición al PP en la trastienda. En los actos institucionales cierra filas como el que más con las tesis oficiales de su partido. Ayer, en el pleno de la Diputación, renunció al galleguismo que abandera entre los suyos y rechazó una moción del BNG contra la derogación, por la Xunta, del decreto del gallego. Los nacionalistas sacaron carteles con el lema "*eu amo o galego*" que motivaron al popular: "¡Yo también lo amo!", clamó. Presionado por la incongruencia de sus tesis, les advirtió: "Ya sé lo que quieren" (evidenciar la división interna del PP) y rechazó la propuesta.

También tuvo que lidiar con el PSOE por el documento que envió a sus alcaldes para que firmaran y forzar al presidente de la Xunta a darle mayores cuotas de poder. Los socialistas lo acorralaron. "Denos a nosotros esa carta, que se la firmamos sin ningún problema", le sugirió el portavoz del PSOE, Alfredo García, destacando la indecisión de los regidores del PP. Baltar salió del paso como pudo. "A ustedes no se la doy, que no tienen categoría", contestó.

Porteros y otros empleos

Pero el presidente no se mueve un milímetro de su política de personal. No vacila en contravenir la tesis de austeridad que predica Feijóo. Primero rechazó una moción del PSOE para crear una comisión de investigación de la "escandalosa" creación de empleos "que usa con tintes partidistas". Después, rechazó otra del BNG encaminada a incluir en las bases de contratación unas listas baremadas "como las del Sergas o las de Educación" con el consenso de los grupos y participación de los sindicatos "para que todo el mundo conozca sus posibilidades de acceder al puesto de trabajo".

Al nacionalista Xosé Manuel Fírvida le respondió el nuevo portavoz del PP (sustituye al *superdelegado*, Rogelio Martínez), Plácido Álvarez. "No tiene sentido aprobar lo que ya estamos haciendo", le espetó. Baltar, que se sintió personalmente aludido -"la moción está más dirigida a mí que al grupo", dijo- fue más explícito en la negativa. Reconoció su fastidio al preguntársele por los 33 porteros del edificio Simeón que atienden tres puertas. "Son necesarios", destacó, "no es una dictadura, hay trabajadores que descansan y tienen turnos". Y dejó clara su intención de seguir igual. "No hay que investigar nada; les doy los contratos y las explicaciones que me pidan, caso por caso, y les digo por qué unos se hacen de una forma, y otros de otra", zanjó.

www.elpais.es 27.06.09

BALTAR YA GASTA EL DOBLE EN PERSONAL QUE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

En la planta principal de la Diputación de Ourense, a unos metros del despacho del presidente, José Luis Baltar, un grupo de conserjes (dos sentados en una misma mesa y dos de pie, por falta de espacio) pasa sin gran cometido su jornada laboral. No hay documentos en las estanterías ni ordenadores a la vista. Uno de los bedeles traza garabatos imaginarios sobre la madera.

En el edificio Simeón, 33 porteros hacen turnos para atender las tres entradas del contenedor cultural que la institución dedica a sala de exposiciones.

Ambas estampas definen bien la política de personal de la Diputación de Ourense que preside el incombustible José Luis Baltar, a la que acuden diariamente más de mil personas (1.100 en este momento, según cálculos de la oposición) que perciben mensualmente de ella sus salarios. El porcentaje que dedica a pagar las nóminas, el 35% del presupuesto, es el doble de lo que gasta en el mismo capítulo la Diputación de A Coruña.

La principal fábrica en número de empleos en la provincia, tras Coren, arrastra una deuda que roza el límite legal (67,3 millones de euros de un presupuesto de 86 millones) aunque Baltar sigue contratando masivamente pese a la escasez de puestos y cometidos en interminables convocatorias de oposiciones.

Casi siempre en periodo electoral, las pruebas acaban favoreciendo a personas vinculadas a su propio partido o a su entorno familiar. La Diputación de Ourense destina a pagar a su personal el 35% de todo su presupuesto. El caso no tiene parangón en Galicia. El organismo que preside el todopoderoso Baltar gasta prácticamente el doble que la que preside el socialista Salvador Fernández Moreda en A Coruña (invierte en el mismo capítulo el 18,20% de sus fondos) y bastante más que la de Pontevedra, también con presidente del PP, que dedica un 20,72% a este apartado o la de Lugo, donde el bipartito emplea el 24,87% del presupuesto en pagar las nóminas.

La peculiar política de recursos humanos de la institución ourensana engulle uno de cada tres euros y por supuesto también la principal partida de gasto: 29,4 millones, incluido el del Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde).

Para encontrar un caso similar en España, hay que buscarlo en Castellón, el feudo de Carlos Fabra, donde la Diputación invierte una cifra similar en personal, 29 millones, pero dentro de unas cuentas, 170 millones, que duplican a las de su compañero de partido. Según el último censo actualizado en enero de 2008, la Diputación de Castellón atiende a 594.915 personas. La de Ourense, sólo a 336.099.

Pese a que Fabra es el paradigma del enchufismo (él mismo se ha jactado públicamente de no saber a cuánta gente emplea en una conversación telefónica grabada que revela los métodos clientelares de contratación que utiliza), la plantilla de la Diputación de Castellón, incluidos sus organismos autónomos y patronatos, es de 605 personas según consta en sus presupuestos de este año.

La Diputación de Ourense duplica esa cifra. Paga menos pero a mucha más gente. Aunque sólo 600 trabajadores son funcionarios, el resto es personal contratado que depende de sus oposiciones para conseguir un empleo definitivo. Esto es, según Bloque y PSdeG, lo que la diferencia del resto de diputaciones de España en donde las contrataciones "son puntuales".

En Ourense hijos, mujeres y parientes de alcaldes de la provincia, cuando no ellos mismos, trabajan para la Diputación. La "red clientelar" que sistemáticamente denuncia la oposición, es, a la vista de los presupuestos, la principal razón de ser de la institución. Al poco de llegar al Ayuntamiento de Ourense, el alcalde Francisco Rodríguez, descubrió con sorpresa que algunos de los empleados de la Diputación habían buscado acomodo en la casa consistorial, ante la falta de espacio en la Diputación. Como tampoco el Ayuntamiento tenía mesa para todos, idearon un sistema de sillas calientes. Y así, mientras unos ocupaban la oficina, otros aprovechaban para hacer recados.

El dinero que Baltar emplea en pagar nóminas supera casi en 7 millones la cantidad (22,8 millones) consignada en los presupuestos de este año a "inversiones reales". Así, las cosas hace muchos años que la Diputación de Ourense no anuncia una carretera nueva.

Sus cuadrillas, las que Baltar ofrece en los mítines a los paisanos para bachear todo lo que haga falta - siempre que voten al PP-, se emplean en lavar la cara a algunas carreteras secundarias. Al ritmo que acometen los trabajos, la oposición ha calculado que tardaría aproximadamente 110 años en parchear su red de infraestructuras.

Para planes provinciales, objetivo básico de las diputaciones (junto con el apoyo a los ayuntamientos más débiles), este año se ha destinado una partida exigua, de 5,2 millones de euros.

En lo que respecta a otro de los fines de estos organismos, el apoyo que ofrece a los ayuntamientos más pequeños sin capacidad para contratar personal es de 42.000 euros anuales a cada uno. La Diputación desembolsa el 37%, 16.000 euros los aporta el Ministerio para las Administraciones Públicas y los 9.500 restantes, cada municipio. El de Lobeira no pudo acceder este año al plan provincial. No disponía de los 9.500 euros necesarios.

No hay dinero para inversiones, pero Baltar reparte "sin control técnico y bajo su propio criterio", subvenciones a asociaciones y particulares por más de 2 millones de euros.

Los aspirantes a estas ayudas hacen cola un día a la semana en la antesala del despacho del presidente en espera de la dádiva. Es la jornada de más tarea para los conserjes que deben ordenar los turnos. Luego Baltar firma esas concesiones discrecionales "sin que el demandante presente un programa o figure en un registro de asociaciones", según denunció el BNG.

Subvención de 20.000 euros para un "velatorio"

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP.) del pasado 8 de mayo incluye las subvenciones nominativas que concedió el presidente José Luis Baltar en el primer trimestre del año. Lo mismo destina 70.000 euros para "gastos de funcionamiento" de una asociación de Barbadás llamada Música y Cultura de Galicia que gestiona un ex concejal del PP en ese concello, que subvenciona con 40.000 euros a la Asociación Down Ourense. La misma cantidad que ha decidido dar en este trimestre también para "gastos de funcionamiento" a Emprande Ourense, una entidad creada por un ex dirigente de Nuevas Generaciones del PP ourensano, Jorge Pumar, del círculo de amistades de su hijo, José Manuel Baltar Blanco, y contratado en el ayuntamiento de Coles, por supuesto con alcalde popular.

Entre las ayudas que decide Baltar personalmente figuran en este trimestre 20.000 euros para un "velatorio" en un pueblo de este mismo municipio; 60.000 euros para rehabilitar un edificio para centro social de un pueblo de Riós (con Gobierno del PP) o 46.504,65 euros para el local de una asociación de vecinos del pequeño pueblo de Vilela. Hay además ayudas a la Iglesia, a agrupaciones sociales y asilos de ancianos.

Esta política basada en la magnanimidad del presidente no tiene coste político para Baltar. Más bien al contrario, "cada vez que se hace público su caciquismo, en lugar de perjudicarlo le da más votos", reconocen en privado militantes del PP. "Cada día que me levanto sólo pienso en cómo podré ayudar a los demás", declaró el presidente en una ocasión, después de autodefinirse como un "cacique bueno".

Conserjes, limpiadores, y peones engrosan las ofertas de empleo. Son las plazas más demandadas. A las oposiciones que se están celebrando este mes hay 196 aspirantes para puestos de ordenanzas y 150 para peones. Sus discretos sueldos duplican la renta media de la provincia.

(www.elpais.com, 22/06/09)

BALTAR SE RETRACTA TRAS LA QUERELLA DE QUINTANA

La aseveración formulada en la pasada campaña de las autonómicas por el presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, "pusimos al ratón a cuidar del queso", en alusión directa al ex vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y pronunciada en el contexto de los malos tratos a las mujeres, le ha valido una querella criminal por calumnias e injurias graves con publicidad presentada por el político y su ex pareja, Cristina Cid. Ello le podría suponer una pena de prisión de 15 a 24 meses o multa.

Ayer, tras conocer la querella, Baltar dio un paso atrás. "Lo tiene claro si quiere resucitar metiéndose ahora conmigo", dijo inicialmente. De inmediato advirtió de que no cree que "sea material penal lo que se dice en un mitin" y, tras insistir en que él lo dijo "porque era vox populi", acabó afirmando que si lo que afirmó no es cierto, se retracta.

El 24 de febrero pasado en un mitin en Punxín, Baltar, tras repudiar la violencia machista, dijo: "El encargado de esto es Anxo Quintana, como dijo muy bien aquí Rosendo [Fernández] pero, claro, nosotros pusimos al ratón a cuidar del queso". Las palabras de Baltar se recogen literalmente en el texto de la querella presentada. Incluye también otras frases textuales de Baltar con las que atribuía al entonces responsable de Igualdade "serios problemas de convivencia" y pedía a Pérez Touriño que lo cesara.

La querella -en la que se cita como testigo a Rosendo Fernández- informa de que tanto en ese acto político como en otros del PP se repartió entre el público, y se difundió también a través de Internet, una fotografía que mostraba una puerta del garaje de la vivienda de Quintana en Allariz con una abolladura que el PP atribuyó "al comportamiento" de Quintana con su mujer. Rosendo Fernández aludió, según consta en la querella, a esa foto para tildar el daño en la puerta de "extraño accidente" y destacó que no se sabía "si hubo gente, mujeres por el medio y escapó, pero bueno, está el tema parado".

El abogado de Quintana entiende que Fernández anticipó el mensaje de Baltar introduciendo la referencia al supuesto accidente, lo que "prepara al auditorio para relacionar el mensaje que después proferirá Baltar con la vida privada de los querellantes y con los supuestos incidentes producidos en el desarrollo de la misma".

(www.elpais.com, 05/06/09)

BALTAR EMPLEA A 75 CANDIDATOS DEL PP EN LAS MUNICIPALES

El popular José Luis Baltar emplea en la Diputación de Ourense que preside a candidatos que, en su condición de líder del PP ourensano, sitúa en las listas electorales. El PSOE ha hecho recuento de los miembros de las listas de las elecciones municipales de 2007 con trabajo (fijo o temporal) en la institución provincial y le salen más de 75.

El PSOE irán al juzgado si detecta irregularidades en los contratos. "La Diputación no puede seguir pagando favores políticos", protestó ayer el secretario provincial del PSOE, Eladio Fernández. "El personal no cabe" en la sede provincial y "tienen que salir unos a tomar café para que puedan entrar otros", dice Fernández, quien añade que la institución emplea a más de 1.000 oureños (600 de ellos fijos) cuando empresas como Adolfo Domínguez tienen 600 trabajadores.

En la lista de los candidatos del PP que trabajan en la Diputación figuran Miguel Prado López, hijo del ex delegado provincial de Agricultura, Agustín Prado Verdeal (la hija se presenta a las oposiciones ahora convocadas); Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, concejal del PP de Ourense; y varios trabajadores que aspiran a hacerse con plaza fija en las oposiciones convocadas para este mes.

El PSOE denuncia que los integrantes de los tribunales que presiden las oposiciones (y conceden los puestos de trabajo) "son en su mayoría políticos". Aunque la ley establece que los miembros de los tribunales deben ser técnicos, los de la Diputación son políticos convertidos en técnicos por Baltar, según explicó ayer el dirigente del PSOE.

Entre los miembros del tribunal que decide quiénes obtendrán un puesto de trabajo en la Diputación se encuentran Valentín Pérez, alcalde de San Amaro; Miguel Ángel Rodríguez, concejal en Esgos; José Eugenio Galindo, ex alcalde de Nogueira de Ramuín; Carlos Castiñeiras, ex presidente de Nuevas Generaciones; Montserrat Rodríguez, esposa del portavoz del PP en O Carballiño; y José Luis Suárez, hijo del alcalde de Monterrei; y Francisco Cacharro Gosende, vinculado a UPyD e hijo del ex presidente de la Diputación de Lugo. Estos dos últimos obtuvieron en su día las dos notas más altas de la oposición que la Justicia mandó repetir porque Baltar había ordenado a los aspirantes, en contra de la ley, que pusieran sus nombres y apellidos encabezando el examen.

(www.elpais.com, 04/06/09)

BALTAR ANUNCIA QUE SU FAMILIA SEGUIRÁ UTILIZANDO EL CHÓFER DE LA DIPUTACIÓN

José Luis Baltar seguirá utilizando el chófer de la Diputación para los mismos fines particulares que hasta ahora. "Estoy actuando correctamente", advirtió ayer tras insistir en la necesidad de servirse de su "escorta" por razones de seguridad. El presidente del PP y de la Diputación de Ourense aseguró que tanto él como su familia están "amenazados" -pese a que las fuerzas de seguridad no tienen constancia - para justificar su traslado en el coche oficial a algunos mítines y que el chófer de la institución lleve a sus nietos al colegio. "Y seguirá haciéndolo, porque yo nunca le obligué", puntualizó. Afirmó además que el funcionario está a su servicio personal todo el día porque "es un asesor y no tiene horario" para protegerlo y destacó que le fue reforzada su seguridad tras las elecciones autonómicas.

El dirigente del PP pasó al ataque contra el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, quien el lunes le acusó de mantener una doble moral por criticar el uso del Falcon del Ejército por el presidente del Gobierno y utilizar él mismo con fines personales y partidistas los servicios de la institución ourensana. "Que me lleve al juzgado", retó el popular al nacionalista.

Antes, acusó a la ex vicepresidenta del Parlamento y actual diputada del BNG Tereixa Paz de "haber llevado en el coche oficial a su familia" a Xinzo en una ocasión con motivo de una inauguración; denunció de forma imprecisa que los representantes del BNG en el bipartito llevaban en el coche oficial a

gente "de dudosa personalidad" y advirtió que Pérez Bouza, cuando era diputado provincial, "estaba empadronado en Porqueira para poder cobrar más por desplazamientos".

La aseveración es "una mentira", replica el portavoz provincial del BNG, Xosé Manuel Fírvida: "La Diputación no paga desplazamientos, sino fijos por asistencia a plenos y comisiones, con lo que da exactamente igual la distancia a la que vivas", explica. Nacionalistas y socialistas consideran una huida hacia delante las justificaciones de Baltar sobre el uso personal de los recursos públicos. Recuerdan que abrió la sede de la Diputación la víspera de Reyes para que los mismos nietos que transporta el chófer oficial siguiesen desde allí la cabalgata. "Y eso no sería por razones de seguridad", sostiene la oposición.

Ante la insistencia en las amenazas de las que asegura que son objeto él y su familia, el BNG registrará varias preguntas en la Diputación para que explique "si está en un programa estatal de protección o si fue el chófer, al que le creó una plaza con sueldo de 47.000 euros, el que le hizo ese programa".

El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas (promotor de la campaña contra el lujo del bipartito y que aireó denuncias sobre el uso de coches oficiales por conselleiras para acudir a la peluquería y otros recados), permaneció ayer mudo. Siempre atento a los "desmanes del bipartito", Ruiz Rivas dijo no estar al tanto de si el chófer de la Diputación transporta a los nietos de Baltar como reconoció el propio presidente ourensano. "No sé si Baltar tiene nietos", se excusó.

(www.elpais.com, 03/06/09)

BALTAR USA AL CHÓFER DE LA DIPUTACIÓN PARA LLEVAR A SUS NIETOS AL COLEGIO

El presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, utiliza prácticamente a diario y en horario laboral al chófer de la institución provincial para tareas domésticas. El empleado provincial recoge habitualmente a los nietos del dirigente ourensano a la salida del colegio antes de las 13 horas. El funcionario conduce para esta labor un Audi de propiedad privada y espera en la puerta de un céntrico colegio religioso de la ciudad, ante la presencia de las dos abuelas de los menores, para trasladar a los nietos del presidente a su domicilio.

Baltar ha contratado como chófer para la presidencia de la institución provincial a un ex policía, como "asesor técnico de seguridad" de la institución. Aunque goza de despacho propio, su misión habitual es transportar al presidente, que le ha creado una plaza con sueldo de 47.273 euros anuales, según consta en los Presupuestos de la Diputación. Además de trabajos personales para el dirigente provincial, el funcionario conduce en campaña electoral el Audi oficial del presidente para acudir a los mítines de Baltar.

El BNG tomó fotos el domingo del coche oficial de la Diputación en las inmediaciones del mitin de Porqueira. "Utiliza el vehículo oficial con el chófer pagado por todos los ourensanos para ir a los mítines de la campaña electoral", denunció ayer el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. "Los cargos del PP tienen una doble vara de medir", advirtió en alusión al tema central de la campaña de Mariano Rajoy, basada en la denuncia de los desplazamientos de Zapatero a los mítines del PSOE en un Falcon del Ejército. "Aunque en el PP critican a los demás por hacerlo, Baltar no va en un Falcon porque no puede que, si no, ni lo dudaría", acusó Pérez Bouza.

El senador nacionalista advirtió que la electoral no es la única utilización que hace Baltar de los medios públicos. Bouza instó a Baltar a explicar estas actuaciones. "Y si no tiene justificación, que dimita", añadió.

La justificación no se hizo esperar. La Diputación divulgó un comunicado para dejar constancia de que "la institución" se ve en la "obligación de desmentir" al senador del BNG. El desmentido reconoce, sin embargo, que el chófer de la institución conduce el Audi oficial a los mítines, aunque matiza que el presidente ourensano no viaja en él, sino en su coche particular. "El técnico de seguridad de la institución acude en un vehículo oficial que dispone de inhibidor y siguiendo las recomendaciones precede o sigue al vehículo del señor Baltar", especifica la nota. Aclara, además, que este "técnico" recoge "efectivamente" a los niños en el colegio, pero matiza que lo hace "siguiendo las normas de seguridad" y utilizando para ello siempre coches particulares.

El desmentido pone de manifiesto que las mencionadas "normas de seguridad" que sigue el chófer de Baltar para recoger a sus nietos y para llevar el Audi oficial a los mítines "están avaladas por las recomendaciones expresas del técnico de seguridad adscrito a la Diputación", que no es otro que el propio chófer.

La Diputación justifica toda esta utilización a fin de garantizar la seguridad. "El señor Baltar dispone de seguridad institucional después de haber sido amenazado", dice la nota, en la que consta que Baltar dispone de actuaciones de seguridad específicas de la propia Policía Nacional, de inspección y de contravigilancia. Fuentes policíacas manifestaron a este periódico no tener constancia de que existan amenazas expresas contra el presidente provincial.

(www.elpais.com, 02/06/09)

BALTAR DA UNA PLAZA EN LA DIPUTACIÓN AL PERIODISTA QUE LE LLEVÓ LA CAMPAÑA

El presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, ha adjudicado la plaza del gabinete de prensa de este organismo al periodista contratado por el PP ourensano y responsable de su campaña electoral. El profesional que se ha hecho con el puesto, y que acreditó título de bachiller, superó en el concurso de méritos a un grupo de aspirantes que aportaron documentación de sus licenciaturas, experiencia profesional en diversos medios y, en algunos casos, máster y doctorado.

Pese a ello, el jefe de prensa del PP fue valorado con 12,35 puntos frente al 0,5 que recibió, por su currículum, una periodista con experiencia en medios de comunicación y en una consultoría, licenciatura, doctorado y máster. Cuando ésta pidió explicaciones sobre su nota en la Diputación, le contestaron que "lo que puntuaba era el bachiller y los meses de paro y no los extras" de su formación académica y profesional.

Baltar convocó la plaza para acceder al gabinete de prensa de la Diputación ourensana en vísperas del Carnaval y concedió un plazo de siete días, la mayoría festivos, para presentar la documentación. Pese a ello concurrieron ocho aspirantes. En las bases quedaba claro que el perfil del destinatario se adaptaba como un guante al del periodista del PP ourensano. "Estaban hechas a la medida" del contratado del PP, sostiene el portavoz del PSOE en la corporación provincial, Alfredo García, quien recuerda que "ésta no es una práctica aislada" sino que se enmarca en la política de convocatoria de empleo "poco transparente" del presidente provincial.

Sólo cuatro de los ocho candidatos llegaron a la fase final, en la que puntuaron los méritos (el bachiller y los meses de paro) que sólo tenía el empleado del PP. El Colegio de Xornalistas de Galicia presentó un recurso contra la convocatoria y la posterior adjudicación de la plaza. En su opinión, Baltar incurrió en "fraude de ley" ya que para el puesto que convocó "es necesario dirigir y coordinar actuaciones específicas que hacen necesario poseer una titulación acorde". El colegio anuncia que interpondrá denuncia judicial.

(www.elpais.com, 28/04/09)

BALTAR AÑADE MÁS EMPLEOS A LA CUENTA DE LA DIPUTACIÓN

Baltar continúa creando empleo en la Diputación, la empresa de la provincia con mayor número de trabajadores (cerca del millar) después de Coren. Apenas transcurridas unas semanas de las elecciones autonómicas, el presidente ha aumentado el número de contratados en el Simeón, el edificio cultural de la institución en el que ya colocó en los últimos dos años a 33 porteros para atender tres puertas operativas.

El PSOE sostiene que los porteros "actúan como agentes electorales". Los socialistas aseguran que al menos media docena de estos empleados de la institución asistieron a la junta electoral el pasado 1-M para participar en el recuento de los votos de la emigración. El director del centro cultural, Francisco González, cuestiona el dato y matiza que "es posible que haya ido alguno, pero se trata de un acto libre" y advierte que si acudieron lo hicieron, "desde luego, fuera de su jornada laboral".

Coincidiendo con la cita electoral de este año los empleos en la institución provincial experimentaron un nuevo impulso. Entre los meses de enero y febrero, el presidente firmó 290 contratos para los distintos departamentos de la Diputación. El Simeón, el noble edificio rehabilitado en 1997 por la Xunta de Galicia

con una inversión de 800 millones de pesetas para convertirlo en un "referente para que Ourense siga siendo la Atenas de Galicia", en palabras del entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, se ha convertido, según PSOE y BNG, en un "auténtico referente" pero "de la política clientelar del presidente".

La inversión inicial fue superada con continuas reformas de la Biblioteca. Al número de porteros empleados en el bajo del inmueble, se suman los del ático, que alberga la biblioteca (en realidad un archivo de bibliotecas cedidas por ilustres ourensanos). Fuentes de la institución sostienen que tras las elecciones autonómicas se incorporaron cinco más y elevan a 15 los empleados en este departamento. González sostiene desconocer el número de empleados en este archivo, que tiene su propio director "y funciona de forma autónoma", pero puntualiza que abre mañana y tarde.

El director de la llamada "biblioteca provincial", el sacerdote Enrique Bande, ha sido contratado este año como asesor de José Luis Baltar, cargo que compatibiliza con el de la gestión bibliográfica.

La biblioteca apenas recibe visitas, más allá de las de un reducido número de intelectuales interesados en el estudio de los autores que donaron sus bibliotecas personales para este archivo, según confirman fuentes de la institución. Entre las que custodia se encuentran las cedidas por Eduardo Blanco Amor, Xosé Ramón Fernández-Oxea, Alberto Vilanova, Álvarez Buylla, Álvaro de las Casas, José Pérez Ávila, Matilde Lloria, Benito Fernández, José González Paz y Manuel Albendea. Cuenta también con la colección completa de la revista La Zarpa y con un ejemplar del Theatrum Orbis Terrarum, y con originales de Oseira y del Santuario das Ermidas.

Durante los últimos años estuvieron empleadas temporalmente en este archivo las viudas o mujeres de conocidos empresarios y de diputados y alcaldes del Partido Popular.

(www.elpais.com, 30/03/09)

FAMILIARES, MILITANTES Y EL HIJO DE UN TRÁNSFUGA

La lista de contratados en los dos primeros meses de este año en las distintas áreas de la Diputación incluye a cargos y militantes del Partido Popular y también a familiares del propio presidente. Este año firmó un contrato a Antonio Aydillo, hermano de una de sus nueras, como técnico especialista en Recursos Humanos. Entre los militantes del PP contratados en lo que va de año figura la ex concejala de Educación durante los mandatos de Manuel Cabezas en el Ayuntamiento de Ourense, Belén Girón. La ex edil ha sido colocada como técnico medio en Desenvolvimento. También ha encontrado empleo el hijo del transfuga de Castro Caldelas que en 1996 entregó la alcaldía de ese municipio al PP.

Recientemente, el presidente provincial creó una oficina de recaudación provincial en Vilamartín de Valdeorras a la que ha trasladado al alcalde de la localidad próxima de Rubiá, Antonio Cao, con plaza en la única oficina que existía, en Ourense. La apertura de la nueva sede se produce después de que la oposición denunciara que el regidor sólo atendía la alcaldía y no acudía al puesto de la Diputación, pese a que cobraba por ambos empleos.

Aunque los trabajos que crea el presidente provincial son temporales, los contratados acaban en plantilla. Es el caso de sus dos ex nueras quienes, tras años de renovación de sus contratos temporales, se han convertido ya en funcionarias.

(www.elpais.com, 30/03/09)

BALTAR LLAMA "MARICÓN" AL CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE

Quintana: "Es un hooligan entregado a la difamación"

Tras las insidias personales contra Anxo Quintana, el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, cambió ayer el punto de mira. Y en mitin con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, escogió como objetivo al conselleiro de Medio Ambiente y cabeza de lista del PSdeG por Ourense, Manuel Vázquez, a quien llamó "maricón, sinvergüenza y miserable".

Baltar también monopolizó el discurso de Quintana, anoche en Ourense. El candidato del BNG personificó en él la "política rastrera" del PP y le acusó de estar detrás "de las difamaciones personales más asquerosas" sufridas por el candidato nacionalista. "Fraga se vengó de nosotros dejándonos aquí a Baltar", lamentó Quintana, en un mitin ante más de 2.000 personas. En la tierra de Baltar, encargado de las mayoría de los ataques personales contra Quintana de las últimas semanas, el aspirante nacionalista fue directo a por él. Le acusó de "pintarse la cara para dar miedo".

"Anda como alma en pena por los pueblos como un *hooligan*, entregado a la mentira y a la difamación", afirmó Quintana, en medio de un encendido ambiente, a propósito de Baltar, a quien redujo a la categoría de "enviado de Feijóo". "Quiere destruir incluso a las personas, llegando a los peores extremos de la difamación personal", le acusó, para añadir un mensaje al candidato del PP: "Que sepa Feijóo que no puede esconderse detrás de su empecinado de aquí".

Mientras, en otro lugar de la provincia de Ourense, Alberto Ruiz Gallardón no se quedó a los callos. Ni siquiera cerró el mitin en Melón, a 30 kilómetros de la capital provincial. Puso 15 minutos de su brillante oratoria al servicio del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dibujó un bipartito agotado y se propuso ayudar a socialistas y nacionalistas "para que no sigan sufriendo y vuelvan a la oposición de la que nunca debieron salir". El alcalde de Madrid elogió la "política al servicio de las personas" y a los partidos, el suyo, "con programas claros y que no insultan". Luego salió pitando a otro mitin en O Carballiño (Ourense).

Y entonces el barón ourensano, José Luis Baltar se quedó a gusto. Literalmente, no dudó en reconocerlo. Lo había anticipado: el suyo no es un discurso de ideas como el de Gallardón, sino "la caña". "Hoy toca PSOE", avanzó. Venía de denunciar en el juzgado al secretario provincial del PSOE y conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, por insinuar que el candidato destituido en Ourense, Luis Carrera Pásaro, le había condonado al dirigente popular una deuda de 900.000 euros cuando estaba al frente de un banco.

Baltar se arrancó: "Está obsesionado conmigo y yo no soy candidato, no me presento, ni siquiera soy mujer porque entonces entendería que me tuviera ganas, si tiene obsesión por mí tengo que decir que es maricón". "Miserable y sinvergüenza" fueron los siguientes calificativos y el modo en que Baltar interpreta la campaña limpia que Feijóo defiende cuando los micrófonos están abiertos.

Cierto que el acto no estaba diseñado para la caravana de periodistas que sigue al PP. Que no había cámaras y que los flashes escaseaban. Tampoco andaba por allí Feijóo, así que los populares recuperaron el estilo que siempre les acompañó en los mítines rurales. No faltó el camión del ayuntamiento de Melón y los operarios municipales en el montaje de sillas y escenario. Ni la furgoneta de Coren con 100 kilos de garbanzos "encargados por el alcalde" para repartir entre el público. La tarde acabó en fiesta, con vítores a Baltar. Los seguidores de éste en Celanova también animaron ayer la campaña repartiendo pasquines que atribuyen al bipartito la intención de expropiar fincas y pisos.

Por la noche, el Palacio de Congresos de Vigo acogió el mitin central del PP con una ausencia clamorosa. En lugar del presidente nacional, Mariano Rajoy, el PP subió al estrado al alcalde de Madrid. Entonces volvió la cantinela sobre el lujo, la utilización de fondos públicos -siempre del bipartito- y la campaña sin insultos que defienden los populares en los actos televisados.

Ante 3.500 personas, Feijóo prometió poner el 2 de marzo el cartel de "se vende" al coche de Touriño, comprar un Citroën y volcar todos sus esfuerzos en las 30.000 familias que viven de la automoción.

www.elpais.es 27.02.09

BALTAR VUELVE A CONVOCAR OPOSICIONES A LA DIPUTACIÓN EN PERÍODO ELECTORAL

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, vuelve a convocar oposiciones en periodo electoral. El Diario Oficial de Galicia del 30 de noviembre anunciaba la convocatoria de una nueva oferta de empleo público, mediante concurso oposición, para cubrir 56 puestos de plantilla en la institución ourensana, la que emplea a más personal de las de Galicia.

Según datos aportados por el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Fírvica, entre los meses de enero y octubre de este año, Baltar aumentó la plantilla con 23 personas más que accedieron a la institución como personal indefinido. Además, contrató hasta el mismo mes de octubre a 430 temporales

"de esos contratos de seis meses que va rotando". 2008 no fue, contra lo previsto, año electoral. Al término del mismo el presidente "convoca oposiciones a comienzos de 2009, coincidiendo con la cita con las urnas", apunta el diputado nacionalista.

Los 79 empleos fijos creados en estas convocatorias pasan a engrosar la plantilla de más de 700 trabajadores que tiene la Diputación de Ourense entre laborales fijos y eventuales. Socialistas y nacionalistas consideran que los contratados elevaban la cifra al millar a comienzos de este año. Ahora se suman los 430 de 2008.

Los presupuestos que el PP ha presentado para 2009, 86 millones de euros, evidencian el fuerte gasto en personal. La institución dedicará 28,2 millones de euros a pagar salarios (el 33% del presupuesto) de la Diputación y 1,2 millones más a los sueldos del Inorde (Instituto de Desarrollo Económico que depende de la misma institución). Para nóminas de la recién creada Sociedad Urbanística Provincial, que hasta ahora sólo cuenta con gerente, se destinan 130.000 euros. La cantidad que se dedica a las inversiones es más pequeña: 25,3 millones, un 30% del presupuesto. "Por más vueltas que le he dado a este borrador que nos han entregado, no consigo saber qué partida se dedica al personal eventual: no figura en ningún lado este concepto", señaló Fírida. En su lugar aparecen apartados consignados como "gratificaciones" y "gratificaciones especiales".

El BNG sostiene que entre los últimos contratados figuran, como en otras ocasiones, familiares de cargos del PP.

(www.elpais.com, 17/12/08)

BALTAR FIRMÓ UN CONVENIO EN URUGUAY SIN SOPORTE LEGAL

El convenio que José Luis Baltar firmó a finales de octubre en Montevideo, en el mismo escenario en el que acababa de dar un mitin del PP, por el que comprometió 15.000 euros de la Diputación para gastos de 11 ancianos del Hogar Español, "no cumple ningún trámite legal". El portavoz del PSOE en la Diputación, Alfredo García, denunció ayer que ese acuerdo supone "un claro abuso de poder" por parte del presidente provincial "ya que ni había informe de Intervención ni partida a la que cargar el dinero, ni se informó previamente a nadie".

"Baltar reconoció que le informaron allí mismo, en el mitin del PP, de la difícil situación de unos emigrantes y personalmente y obviando todos los trámites", decidió darles el dinero de la institución provincial. García señala que las explicaciones que Baltar ofreció la semana pasada en el pleno de la Diputación "eran falsas" y reitera que la representación de Baltar en los actos de la Diputación "tenía un fin partidista".

www.elpais.es 07.11.08

ALTAR FIRMÓ CONVENIOS DE LA DIPUTACIÓN EN DOS MÍTINES DEL PP EN LATINOAMÉRICA



Entre el 24 y el 28 de octubre el presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, se dio un baño de masas en Uruguay y Argentina en donde participó en mítines políticos y, sin bajar del escenario y con la cartelería del PP de fondo, firmó convenios institucionales comprometiendo fondos públicos de la Diputación. En esos actos de partido, según confirman asistentes a los mismos,

Baltar arremetió contra el actual gobierno de la Xunta por "olvidarse de sus paisanos en el exterior" e invocó el espíritu viajero de Manuel Fraga loando el esfuerzo de sus continuos viajes para visitar a la colectividad gallega.

En los días previos a la gira, el PP orensano envió a los centros de Buenos Aires y Montevideo visitados por la expedición orensana del PP sendos programas de actos en los que queda patente la fusión entre lo institucional, en representación de la Diputación, y lo partidista (los mítines del PP). El dirigente popular encabezó una extensa comitiva en la que, además de su esposa, viajaron la secretaria de organización del PP en la provincia y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte, y los regidores populares de Celanova, Verea y Melón, además de un concejal de Bande y el teniente alcalde de Quintela de Leirado.

Según el PSOE orensano, asistentes al mitin del PP celebrado en el centro gallego de Montevideo, en donde la comitiva congregó a más de un millar de personas, Baltar firmó "sin apearse del atril" en el que había pronunciado el discurso político, un convenio comprometiendo 15.000 euros de la institución provincial, prorrogables en sucesivas anualidades. Una partida que, según quedó allí claro, se destina a asumir el gasto generado por los 11 orensanos que residen en el Hogar Español de Ancianos, centro que depende del Ministerio de Trabajo de España.

En Buenos Aires, Baltar participó, entre otros actos, en una comida multitudinaria (asistieron más de 2.000 personas) celebrada en el centro Costa Salguero a la que, según los datos recabados entre los asistentes por los socialistas orensanos, "nadie tuvo que pagar nada".

En Argentina, el presidente de la Diputación firmó un segundo convenio, en este caso para "el desarrollo cultural, educativo y comunitario" con los intendentes municipales de Avellaneda y de Lomas de Zamora.

En la jornada del viernes 24, el programa de la comitiva orensana trufó actos institucionales, como la visita al Centro Gallego de Buenos Aires, a las 18.30, y de partido, como una reunión con la directiva del PP en Argentina a las 19,45 horas.

En el mencionado centro Costa Salgueiro de Buenos Aires, Baltar y sus alcaldes participaron el domingo 26 a las 12.15 horas en la Segunda Xuntanza de ourensáns en Buenos Aires. En ese caso, Baltar, que tenía asignada una intervención al término del evento, fue presentado en el programa como "presidente de la Diputación de Ourense".

La delegación orensana dedicó la jornada del lunes 27 a atender a la colectividad de la Casa de Ourense en Buenos Aires, según figura también en el programa oficial que especifica que esos actos estaban reservados "sólo a alcaldes". Baltar también criticó la política del bipartito en la emigración y prometió enviar el próximo febrero, en vísperas de las elecciones, a la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, así como pagar viajes de retorno a los orensanos de la diáspora.

El PSOE presentará una batería de preguntas sobre este viaje en el pleno de la Diputación convocado para hoy. Los socialistas quieren saber quién pagó los desplazamientos y algunos actos, como la comida del centro Costa Salguero.

(www.elpais.com, 31/10/08)

BALTAR DESTINA 17 EMPLEADOS A CUIDAR DE 15 CABALLOS

La Diputación de Ourense afronta la crisis económica "contratando personal para el centro ecuestre que posee en plena Lagoa de Antela, dedicado a la selectiva cría del caballo inglés" e invirtiendo en ella 1,2 millones de euros en este año. Según datos aportados por el portavoz del BNG en la institución provincial, Xosé Manuel Fírvida, 17 personas atienden a 15 caballos propiedad de la Diputación que se crían en las 138 hectáreas que ocupa el centro ecuestre de la finca de Antela. Entre el personal que cuida los animales figura el alcalde popular de Trasmiras, Emilio José Pazos y varios concejales del PP. Pero los de la institución provincial no son los únicos caballos que se crían ahí. **"Hay 40 más de una cuadra madrileña".**

Además, entre los 15 atribuidos a la Diputación figuran algunos que en realidad están en régimen de pupilaje; esto es, que la Diputación les ofrece cuadra, limpieza y mantenimiento "por el módico precio de 75 euros al mes". A cambio, la institución orensana se gasta 19.000 euros en el mantenimiento de cada

uno de ellos. "Saldría más barato mandarlos a un hotel de lujo en el Caribe", ironiza Fírvida, advirtiendo de que "la política del presidente provincial, José Luis Baltar, dista mucho de la doctrina de contención del gasto público que predicen Rajoy y Núñez Feijóo".

A los gastos de la crianza se añade el sueldo del gerente, el funcionario Gumersindo González, que percibe en torno a 60.000 euros anuales. Frente a la inversión de 1,2 millones, la venta de los potros "reporta a la Diputación unos beneficios de 186.999 euros", sostiene el BNG.

La Diputación de Ourense, sigue el diputado nacionalista, asume este coste en una finca "de gran potencialidad agrícola y ganadera" comprada en la década de los 70 al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario con el objetivo de destinarla al centro de investigación y asesoramiento a productores agrícolas. Pero de una extensión de 150 hectáreas, sólo dedica 16,5 al Instituto do Campo y a un pequeño aeródromo. Las 138 hectáreas restantes las ocupa el centro ecuestre, y el hipódromo está en una parcela de apenas 3,36 hectáreas. "El resto se dedica a la producción de hierba y forraje para los caballos".

Los diputados del BNG sostienen que el centro ecuestre de Antela se enclava en una comarca privilegiada para la explotación agrícola y aluden a la "inversión de cerca de seis millones de euros" que la Consellería de Medio Rural está realizando en el Plan de Regadío de A Limia. Esta comarca fue declarada Zona Especial de Interés Agrario y alberga la sede de uno de los principales Bancos de Terra. Los nacionalistas reclaman a Baltar que transfiera las 138 hectáreas al Banco de Terra de A Limia ya que se ahorraría 1,2 millones de euros e ingresaría 40.000 euros por el alquiler.

La finca de Antela no es la única que la Diputación dedicada a la cría del caballo inglés. Para el mismo fin invierte 400.000 euros en la finca del centro ecuestre de Vilamarín en la que da empleo a otras 14 personas.

Y todo esto, denuncian los nacionalistas, teniendo en cuenta que "Baltar alude constantemente a la falta de recursos económicos" de la institución para justificar la "ausencia de inversiones en las infraestructuras provinciales".

(www.elpais.com, 10/10/08)

UN PATRONATO DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE CONTRATA TRABAJOS A FAMILIARES DE DIRECTIVOS

La Diputación de Ourense contrata trabajo por "cantidades considerables" a empresas "afines al PP" y sin mediar concurso público. El portavoz del PSOE en la corporación, Alfredo García, denunció ayer que la institución ha gastado en combustible para su parque móvil más de 428.000 euros en los últimos cuatro años, todos ellos en la estación de servicio propiedad del teniente de alcalde de San Cibrao de Viñas, José Méndez (PP). Éste fue, previamente, el adjudicatario de un hotel con gasolinera en el polígono industrial ourensano, perteneciente a San Cibrao, tras rechazar el ayuntamiento ofertas de conocidas firmas.

Los socialistas sostienen que, también sin mediar concurso público, la institución pagó en los últimos ejercicios varias facturas por importe de 221.520 euros a la empresa de publicaciones Xosé Lois Vázquez e Nicole Carpentier SC.

Especialmente grave es para el PSOE que desde el Patronato Provincial de Turismo, dependiente del Instituto Orensano de Desarrollo Económico (Inorde), de la Diputación, se efectúen pagos a empresas como Tecnología Gallega y Comunicación, en la que "tienen una importante participación personas muy próximas a cargos del PP", lo que, según destaca García, "plantea serias dudas sobre la legalidad de la operación".

Tecnología Gallega y Comunicación está presidida por Luis Baños Campo, hermano del interventor de la Diputación, y figura como consejera delegada Lucía Rodríguez Pérez, hija del gerente del Inorde, organismo que firma el contrato. Constituida con un capital social de 4.000 euros, y con dos empleados en plantilla, realizó ventas en 2006, según datos del Registro Mercantil, por 454.897,34 euros. La empresa tiene como objetivo social la comercialización, venta y mantenimiento de material de telecomunicaciones, así como la producción y distribución de películas.

La denuncia de clientelismo de los socialistas se amplía a las oposiciones de la diputación. El también diputado socialista y alcalde de O Carballiño, Carlos Montes, denunció el proceso abierto para la convocatoria de una plaza de técnico superior en Desenvolvemento Local e Recursos Europeos. De momento, el primer examen sólo lo ha aprobado, con un 6,20, Montserrat Rodríguez, mujer del portavoz del PP en el Ayuntamiento de O Carballiño, Argimiro Marnotes. Los ocho restantes aspirantes no superaron el cero, salvo en un caso en que la nota fue de 0,10. Montserrat Rodríguez ya está contratada en la Diputación y el tribunal que la examina está integrado "por su actual jefe y por los hijos de alcaldes del PP". www.elpais.es 10.04.08

BALTAR : "SOY UN VALIENTE Y NO ABANDONO CUANDO LAS COSAS VAN MAL"

La empresa de la nuera del líder del PP realizó los actos clave de la campaña

El presidente del PP orensano, José Luis Baltar, ha dado su versión sobre la pérdida de respaldo electoral a su partido en la provincia. "Hubo falta de movilización, no se implicó suficientemente a la gente y no utilizamos a tope los recursos". En opinión del responsable del PP orensano el partido siguió "una rutina de 20 años" que no pudo hacer mucho por frenar lo que él mismo llama "el efecto Zapatero". Sus declaraciones ponen en evidencia al comité de organización electoral que preside su propio hijo, José Manuel Baltar Blanco, y que encargó la celebración de los actos electorales de Feijóo en la provincia a la empresa Melior Producciones, SL, dedicada a la "organización y gestión de toda clase de eventos", de la que es administradora y única socia su mujer, María José Caldelas, ex diputada autonómica del Partido Popular.

Ayer, contestando a preguntas de los periodistas, el presidente provincial reconoció el mal resultado electoral en la provincia, aunque a medida que pasan los días lo minimiza. "Me preocupa más no haber subido en votos -perdió 27.500 en la provincia- que haber perdido el tercer diputado", asegura mientras pone coto a quienes intentan pedir su cabeza. "Hemos abierto un periodo de reflexión para hacer un diagnóstico y si conviene la renovación se hará, pero lo decidiremos nosotros y no cuatro o cinco ni quien tenga interés", advierte.

El dirigente popular no teme que pueda correr la misma suerte que su amigo Francisco Cacharro en Lugo. "A Cacharro lo quitaron los militantes, no la dirección del partido, y eso hay que aceptarlo. Yo aquí no tengo ese problema y no me preocupa". Su tranquilidad obedece a la decisión unánime de los alcaldes de cerrar filas en torno a él. "Me llamaron todos y me dijeron: estamos contigo", destaca matizando que si su dimisión fuera la razón para que el PP arrancara, la pediría él. Pero, lejos de ello, suma los méritos: "No hubo ningún presidente del PP que estuviera más de cuatro años en el cargo, y yo llevo 17".

Baltar hizo de nuevo ayer gala de carácter: ***"No tengo apego ninguno al cargo, aunque sí al partido, y si no se me considera útil, seré el primero en quedar como militante". Luego explicó las razones por las que no dimite: "Yo soy un valiente y me amarga dejar el partido cuando las cosas no van bien".***

Pese a ello, el dirigente provincial del PP reconoce que tanto él como Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo tienen siempre sus cargos a disposición del partido. En el caso de Rajoy sostiene que "a lo mejor tiene él más ganas de que lo liberen del cargo". A Feijóo lo exime de responsabilidades: "Su caso nada tiene que ver con la posible dimisión de Rajoy: son cosas aisladas", y lanza un aviso a los fieles del presidente gallego destacando que "quienes le rodean" son "tan responsables como él de los éxitos o los fracasos".

Plegado al discurso de la línea dura del PP, Baltar destacó la "casualidad" de los atentados terroristas ocurridos días antes de éstas y las anteriores elecciones generales y afirmó que hubo "cosas raras" en ambos. Mientras se rendía homenaje en Madrid a las víctimas del 11-M, el presidente del PP de Ourense hacía su análisis: "La masacre ocurrida a tres días de los comicios de 2004 pretendía un cambio de signo en el Gobierno". Baltar acusó al PSOE de "utilizar todo lo que le puede servir para ganar las elecciones".

www.elpais.es 12.03.08

BALTAR: "MI CACIQUISMO PARECE RANCIO, PERO EL DEL PSOE Y EL BNG ES PEOR"

El líder del PP ourensano amenaza al bipartito con "sacar listas de los cajones"

El presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, reivindicó públicamente su papel de "precursor del caciquismo" gallego para denunciar el intento de emulación que están haciendo, en su opinión, socialistas y nacionalistas. "Mi caciquismo parece rancio, parece del siglo XVIII o XIX, pero ellos están creando el del siglo XXI, que es peor", sentenció.

Baltar, que compareció en conferencia de prensa para anunciar la celebración de unas jornadas de debate sobre el futuro de las diputaciones, asumió sin reparo alguno su cuestionada política de contratación de personal, su apoyo económico -a través de subvenciones de la Diputación- a los ayuntamientos del PP y la creación de una nueva categoría de personal de la institución, el *laboral indefinido*, cuestiones todas éstas que apenas unos minutos antes había denunciado el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Pérez Bouza. "Pues claro que sí", reconoció abiertamente ante las imputaciones, "pero porque todo es legal y porque los concellos del PP se cansan de peregrinar por la Xunta sin conseguir nada. Así que ante el sectarismo de la Xunta, la Diputación actúa como mecanismo corrector", explicó.

Sobre el caciquismo de nuevo cuño que imputa a PSdeG y BNG, fue explícito al denunciar que la Xunta -citó a las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente- utiliza el mismo sistema de contratación. "Me están legitimando", replicó para destacar a continuación que ambas formaciones políticas se hartaron de denunciar las fundaciones creadas por el PP y ahora "resulta que ellos montan chiringuitos, como Tragsa o Seagasa, para que hagan de intermediarias y les contraten al personal que ellos les indican y poder aparecer así limpios y puros, sin quemarse".

Embalado en la denuncia -"estoy mucho más cómodo ahora que hace dos años", aseguró aludiendo al papel de oposición del PP gallego- amenazó a quienes le acusan de seguir contratando personal en la diputación y de convocar nuevas oposiciones, las últimas fijadas para coincidir casi con las elecciones: "Si insisten, empiezo a sacar listas de los cajones; pero ahora ellos están callados, claro, ahora esas denuncias sólo las pueden hacer los periodistas".

Pero en cuestión de caciquismo, el presidente provincial del PP dejó claro que no admite lecciones. "Con sus actuaciones están legitimando todo lo que yo llevo hecho", insistió en referencia a socialistas y nacionalistas, "porque resulta que fui un precursor y, o copiaron todos o aprendieron en el mismo libro o fueron a la misma escuela", sentenció. Pero Baltar advirtió, al mismo tiempo, que en materia caciquismo "está ya todo inventado" y matizó que socialistas y nacionalistas "ni son más listos, ni son mejores políticos ni nada de nada". "Lo que pasa es que nosotros tenemos más vergüenza que ellos, porque hay cosas que no nos atrevemos a hacer", agregó. Finalmente retó a los socios del bipartito: "Que prediquen con el ejemplo" si quieren seguir denunciando su política en la Diputación, sobre la que lamenta incluso no haber ido más allá: "Fui bastante *parvo* en el tiempo que pasó, ¡pero es que creía que ellos eran más honrados!", justificó

www.elpais.es 14.12.07

BALTAR CONTRATÓ A 260 PERSONAS EN LA DIPUTACIÓN DURANTE LA PRECAMPAÑA

Cincuenta de los empleados se destinaron a ayuntamientos del PP

A comienzos de la campaña electoral de las municipales del pasado 27 de mayo, la Diputación de Ourense contrató a 260 personas. Estos empleos, de seis meses de duración, forman parte de una de las tandas de contratos que la institución realiza a lo largo del año, según señala la oposición, que ahora coteja el listado de nombres, facilitado por el presidente, José Luis Baltar, para saber cuántos son cargos del PP o familiares suyos.

Hacia finales de marzo y principios de abril, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, descolgó el teléfono y pidió al Inem trabajadores con determinado perfil para emplearles en la institución provincial. Así lo sostienen los diputados provinciales del BNG a la vista de que "ninguno de estos nuevos contratados figuraba en la lista de la Diputación que abre plazos de inscripción para cubrir vacantes y sustituciones". El portavoz del grupo nacionalista, Xosé Manuel Pérez Bouza, asegura "tajantemente" que el presidente provincial "se saltó la lista y contrató a quien le pareció" ya que "ninguno de los elegidos para el empleo figuraba en la relación" de inscritos en espera de trabajo de la institución.

También asegura Pérez Bouza, a la vista de la información, que 50 de los 260 nuevos empleados fueron repartidos por distintos consistorios de la provincia: "Pero no en comisión de servicios. El 99% fue destinado directamente a ayuntamientos que en ese momento estaban aún en manos del PP y sólo uno se destinó a O Carballiño, gobernado por el PSdeG". Los 210 contratados restantes engordaron el ya abultado ejército de trabajadores a los que da cobijo y sueldo la institución provincial "pero no tarea, ya que en su mayoría carecen de cometido".

El BNG ha solicitado ahora a Baltar la copia de los escritos sobre necesidades de personal que los ayuntamientos a los que fueron destinados los trabajadores remitieron a la Diputación. Un imposible, porque el propio Pérez Bouza señala que está seguro "de que no la hay". Y, al mismo tiempo, insta a CC OO -única representación sindical- a que "haga algo ya, o se disuelva".

Pero mientras Baltar aumentaba el personal de la Diputación y de algunos ayuntamientos, el Consello de Contas ponía de manifiesto en su informe de fiscalización el incumplimiento reiterado en la rendición de cuentas por parte de los consistorios orensanos. En el texto se hace constar que los éstos alegan "insuficiencia de medios" para llevar a cabo la tarea.

Ateniéndose al informe de Contas, el PSdeG ha registrado una moción reclamando el "incremento de apoyo de la Diputación" a los ayuntamientos de la provincia. El portavoz socialista, Alfredo García, argumenta que la asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios es prácticamente inexistente, cuando la Ley las señala "como una de las competencias irrenunciables de las diputaciones".

El Consello de Contas alerta de que en la asistencia económica no consta ninguna consulta de los consistorios, lo que "contrasta con las necesidades manifestadas" por éstos y en asistencia jurídica ha detectado expedientes incompletos e informes firmados por distintas personas de la unidad. Especial es el caso de la asistencia técnica. Aunque la Diputación asegura que cuenta con 45 personas para atenderla, no puede especificar cuántas ni cuáles apoyan a los ayuntamientos.

www.elpais.es 12.09.07

BALTAR DEJÓ EN EL AYUNTAMIENTO A DECENAS DE FUNCIONARIOS QUE NO CABEN EN LA DIPUTACIÓN

La política de contrataciones de la Diputación de Ourense estaba extendida por el Ayuntamiento. Varias decenas de personas contratadas como Agentes de Desarrollo Local (ADL) por la institución provincial fueron "transferidas" a la municipal ante la imposibilidad de encontrarles espacio en las dependencias del pazo provincial. Pero en el Ayuntamiento tampoco caben. El grupo de gobierno del PP ideó una fórmula para mantenerlos: la permanencia por turnos. Las sillas están siempre ocupadas, pero con distintos usuarios a lo largo de cada jornada.

Ahora, socialistas y nacionalistas, coligados en el gobierno local, se los encuentran por todas partes, no saben cuántos son ni tampoco qué hacer con ellos. "**¡Mientras pague Baltar...!**", señalan entre jocosos y resignados.

El nuevo grupo de gobierno no da crédito. Decenas de personas -de momento no pueden cuantificar el dato- ocupan plazas inexistentes en la institución local orensana. Todas ellas fueron contratadas como ADL por la Diputación y traspasadas al Ayuntamiento de la capital cuando ambos organismos estaban gobernados por el PP. Entre los contratados figuran personas vinculadas al PP e incluso algunos alcaldes electos de la provincia.

Pero la institución local, en la que el crecimiento de personal en los últimos meses ha sido notable -se celebraron dos procesos de oposiciones en los últimos cuatro meses, y las pruebas finalizaron un día antes de constituirse la nueva corporación- no tiene infraestructura suficiente para dar cabida a tanto empleado, por mucho que carezcan de cometido. Éste parece haber sido el motivo que llevó al anterior gobierno local a idear un sistema de *sillas calientes*. Varias personas ocupaban la misma plaza, pero en turnos horarios distintos. Fuentes del Ayuntamiento sostienen que, para organizar estos turnos, los usuarios dejaban su puesto vacante por espacio de unas horas "y se daban una vuelta por la ciudad; iban a tomar café o a hacer recados". Después regresaban y salían los otros.

El nuevo alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, expresa su sorpresa: "Vaya por el departamento que vaya, me encuentro a cuatro o cinco personas que dicen que son de la Diputación y

que no sé qué cometido tienen aquí". El alcalde ha pedido a los distintos departamentos municipales el dato exacto de los trabajadores transferidos por la institución provincial. "Pero no constan en ningún lado, así que aún no sé si son 40 ó 400", señala.

Para esclarecer el misterio de los trabajadores *fantasmas*, el regidor sostiene que, como último recurso, llamará mañana al jefe de Personal de la Diputación. "Más que nada para saber de qué dispongo, porque a lo mejor hay alguna lumbrera y nos conviene aprovecharla... gratis, claro", ironiza.

En la misma línea se expresa el teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal. El nacionalista hace recuento de los despachos "completamente vacíos" que les dejaron los concejales del PP. "En el mío había un perchero con dos paraguas, una estantería totalmente vacía, una lamparita de mesa y un folleto del aparcamiento subterráneo del Parque de San Lázaro aprobado por el PP y al que nos habíamos opuesto nosotros, supongo que para echármelo en cara". El despacho -que pertenecía al anterior edil de Infraestructuras- carecía de cualquier otro documento y ni siquiera tenía el ordenador. "Pero a cambio nos dejaron esto lleno de funcionarios y también de trabajadores que paga la Diputación; ¡estoy encantado; son gratis!", bromea el nacionalista. Como su socio de gobierno, Sánchez Vidal sostiene que, vaya por donde vaya, aparecen estos empleados que carecen de cometido específico. Tampoco él sabe cuántos son. "En Infraestructuras, ayer [por el jueves] había unos ocho o nueve", detalla.

Con malestar, pero también con resignación, han aceptado PSOE y BNG la herencia de funcionarios que el PP dejó colocados en el último momento. El alcalde lamenta que hasta el último día se hayan estado celebrando exámenes para dotar al Ayuntamiento de nuevo personal, en su mayoría vinculado al PP. "Y, aunque todos los puestos son igual de dignos, con las últimas oposiciones, celebradas incluso después de las elecciones del pasado 27-M, el PP cubrió 12 plazas de asesores jurídicos, arquitectos y otros funcionarios del grupo A, el de mayor nivel", que a partir de ahora ejercerán como técnicos asesores del nuevo gobierno local.

El ex concejal de Personal, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, del PP, confirma este hecho señalando que es "absolutamente legal" haber finalizado el proceso de exámenes con otro gobierno electo y advierte que su hermano, admitido para presentarse a la plaza de arquitecto, decidió finalmente no concurrir a la prueba en cuanto este periódico hizo público su parentesco. "Fue para no perjudicarme", alega.

Nóvoa -quien siendo concejal se hizo con una plaza de funcionario en la Diputación y tiene a varios familiares contratados en el Ayuntamiento, en donde ha sido hasta ahora responsable de Personal y presidente de los tribunales de las oposiciones- vaticina que no prosperará ninguna demanda contra su proceder. "No hemos hecho nada ilegal", sostiene.

A este respecto, el alcalde confía en que prospere el recurso presentado por la CIG contra la composición del tribunal -integrado por concejales del grupo de gobierno saliente- para que se desestime el proceso. "Desde luego", afirma, "es la primera vez en la historia que después de celebradas unas elecciones, y un día antes de que se constituya la nueva corporación, se celebran oposiciones" en una institución.

'Temporeros' recolocados en el pabellón de deportes

Los agentes de desarrollo local son la guinda del sistema de contrataciones de la Diputación. Al alto número de familiares de cargos del PP empleados en este organismo, se suman los eventuales ADL a los que la institución da trabajo, o al menos nómina, de año en año. "Son temporeros", señala un funcionario del organismo provincial, "y suele ser a partir de este mes, siempre en verano, cuando se hacen los contratos". Aunque el organismo provincial suele quedarse con un número indeterminado de ellos, "la mayor parte los cede a los ayuntamientos de la provincia de su propio signo político", que hasta ahora eran la mayoría. De esta forma, el presidente del PP "ha mantenido la red clientelar que le ha dado tantos réditos políticos", señala el funcionario.

El actual alcalde de Ourense -hasta ahora portavoz del PSdeG en la Diputación- ha reiterado su denuncia sobre el excedente de personal de la institución provincial. "Me consta que han mandado personal a todas partes y que los que no le cabían en ningún lado, porque no había ya sillas suficientes en la Diputación, Baltar los enviaba al Pabellón de Deportes, sin cometido específico", insiste.

Aunque en teoría los ADL son los profesionales, encargados de evaluar, proponer y ejecutar planes de desarrollo, los contratados por la Diputación de Ourense se destinan básicamente, según fuentes de la institución, a "brigadas de obras".

www.elpais.es 24.06.07

BALTAR EMPLEA EN LA DIPUTACIÓN A 300 CARGOS PÚBLICOS DEL PP Y FAMILIARES



El pasado mes de septiembre José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, inició un nuevo proceso de captación y remodelación de personal para la institución, que aún está en marcha. El 'Boletín Oficial de la Provincia (BOP)' de ese mes da cuenta de los nombramientos por parte de la presidencia de 46 plazas de "funcionarización" -ascenso de funcionarios- que "pasaron la correspondiente prueba selectiva", entre los que figura un importante número de afines al PP. **La Diputación ourensana da trabajo ya a más de 300 personas vinculadas al PP.**

En este mes de febrero han comenzado nuevas oposiciones para cubrir otras 96 plazas -15 del cuadro de funcionarios y 32 del laboral- a las que se presenta una larga lista de cargos y parientes del mismo partido. Y eso que el número de afines empleados en la institución provincial supera ya al de la plantilla de funcionarios.

La Diputación tiene 897 empleados, de los cuales sólo 238 son funcionarios (272 son personal laboral y 387 son temporales), lo que da cuenta del modelo de contratación y vuelta al paro que ha instaurado el titular de la institución "con clara estrategia electoralista", apostilla el portavoz socialista, Francisco Rodríguez. La operación es sencilla: "Contrata por tres meses a personas de determinado municipio que le interesan electoralmente; una vez conseguidas esas voluntades, las deja fuera y contrata por otros tres meses a nuevo personal. Así sucesivamente", explica Rodríguez.

Socialistas y nacionalistas llevan más de una década denunciando el "sistema clientelar" del que se sirve Baltar en la institución para hacerse fuerte en lo político. La Justicia les dio la razón en una ocasión, en 1999, obligando a repetir unas oposiciones.

Pasados ocho años, sin el colchón económico de la Xunta, Baltar se pertrecha en su feudo desafiando con la convocatoria de unas nuevas e igualmente polémicas oposiciones cuyos tribunales están integrados, paradójicamente, por algunos de aquellos hijos de dirigentes del PP que aprobaron las pruebas que la Justicia había obligado a repetir por irregulares.

Este nuevo proceso opositor, al que aspiran nuevos dirigentes y familiares del PP, ampliará en un centenar los empleos en la institución.

A primeros de este año entraron ya a trabajar en la Diputación en calidad de funcionarios nuevos amigos del presidente. La lista la integran dos administrativos, entre los que se encuentran Francisco Cougil, el que fuera *número dos* y brazo derecho de Antonio Troitiño -ex concejal del PSdeG que abandonó el partido y presentó a las pasadas elecciones municipales una lista independiente que frenó el avance de los socialistas en la ciudad- y Pamela Sousa, hija del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartelle. Junto a ellos, la *número seis* en la lista del Partido Popular de Sarreaus obtuvo una plaza de portera.

En lo que respecta a los contratados en los últimos meses, destacan igualmente los relacionados con el PP. Miguel Prado López, hijo del ex delegado provincial de la Consellería de Medio Ambiente, aprobó el primer ejercicio de la convocatoria de técnico auxiliar en Informática. Mientras se prepara para el nuevo examen, ha sido incluido ya en la lista que los populares presentarán a las elecciones en el Ayuntamiento de Toén.

Otros aspirantes a contrato de la Diputación son una concejala del PP en Nogueira de Ramuín, Marta María Pérez Rodríguez, y la concejala en Maside Raquel Casares.

Además de las oposiciones que se están celebrando estos días, el *Boletín Oficial de la Provincia* (BOP) del 28 de septiembre de 2006 da cuenta del proceso de "funcionarización"; esto es, nombramientos de personal ya funcionario para plazas incluidas en la oferta de empleo público del año 2005. En total, 42 funcionarios ascendidos. Entre los afortunados se cuentan la ex nuera del presidente y hasta ahora gerente del Teatro Principal, Olga Mojón, y el director del edificio cultural de la Diputación y jefe de prensa de Baltar, Francisco González, que consiguen sendas plazas de técnico superior en gestión cultural.

Las tres plazas de técnico especialista en gestión tributaria y recaudación se las reparten otro hijo del ex secretario y dos alcaldes del Partido Popular, los de San Amaro, Ernesto Pérez y el de Rubiá, Elías Rodríguez. De las dos plazas de auxiliar de administración general, una corresponde a Darío Sousa Seara, hijo del teniente de alcalde de Cartelle.

Nuevas Generaciones

A estos se suma el representante de Nuevas Generaciones, Carlos Castiñeiras, como técnico especialista en recursos humanos; dos hijos del ex secretario de la Diputación, uno como letrado y el otro como técnico especialista en gestión tributaria (estos comparten empresa con otro hermano y una cuñada). El portavoz socialista cree que estos son los últimos coletazos de Baltar. "Él es consciente ya de que está en la recta final", señala, "y está agradeciendo los servicios prestados, tirando la casa por la ventana".

NÓVOA DICE QUE NO SABÍA QUE FAMILIARES DEL PP COPAN LAS PLAZAS MUNICIPALES

Enrique Nóvoa, alcalde de Ourense y candidato del PP, declaró que "se enteró por la prensa" de la relación de aprobados vinculados a dirigentes provinciales del PP y personas influyentes de la ciudad en las oposiciones convocadas por la institución que preside. Pese a ello, Nóvoa sitúa ese número de aprobados "en no más de un 9%". El cálculo que ha hecho Nóvoa dista mucho del que hace la oposición. El portavoz y candidato socialista, Francisco Rodríguez, estima que "han aprobado estas oposiciones en torno a un 90% de personas vinculadas al PP, y esto es lo alarmante".

El regidor ourensano manifestó que los militantes y parientes de cargos del PP tienen tanto derecho como los demás a aprobar las oposiciones, consiguiendo plazas fijas en la institución. Respecto a los exámenes aún pendientes, que el grupo de gobierno intenta celebrar antes de las elecciones, Nóvoa hace un llamamiento a la calma señalando que si se presenta el hermano del concejal de Personal "naturalmente" no será éste quien presida el examen, sino otro concejal del grupo de gobierno.

Frente a las declaraciones del alcalde, los portavoces del PSdeG y del BNG manifestaron su preocupación por lo que el socialista, Francisco Rodríguez, tildó de "modelo de Baltar, vigente desde hace 20 años" aplicado a "la práctica totalidad de los ayuntamientos del PP en la provincia". Rodríguez sostiene que no es sólo que se apruebe a los familiares y amigos, "sino a los parientes de dirigentes del PP en toda la provincia y que ni siquiera pagan sus impuestos en esta ciudad".

"Modelo Baltar"

El "modelo Baltar" al que se refiere el concejal socialista es el de la política de contrataciones de la Diputación, donde, señala, "no se convocan plazas porque haya un estudio que demande personal específico, sino que se crean las plazas en función de los contratos comprometidos por el grupo gobernante". Hasta tal punto, explica, que "los funcionarios no caben ya en las dependencias de la Diputación y los van trasladando al pabellón municipal de deportes".

Mientras el portavoz del PSdeG manifestaba la imposibilidad de demandar judicialmente al PP por su política de contrataciones en el Ayuntamiento -"lo que hacen es un escándalo, pero ya se cuidan para que no sea ilegal"- el candidato del BNG reclamaba la intervención de oficio de la Fiscalía.

Tanto Sánchez Vidal como Francisco Rodríguez proponen "mirar hacia delante" y prometen un nuevo modelo de tribunales examinadores integrado por técnicos en cada materia y políticamente independientes, "como se hace ahora en las convocatorias de la Xunta", matizó el socialista. Sánchez Vidal lamenta que "tengamos que estar hablando de esto en lugar de hacerlo sobre infraestructuras". "Yo no tengo a nadie enchufado", afirma.

www.elpais.com, 24/04/07

EL GASTO EN PERSONAL TRIPLICA EL DINERO DEDICADO A INVERSIONES

La importancia empleadora de la Diputación provincial orensana se hace evidente, a ojos del Partido dos Socialistas de Galicia, haciendo un poco de estadística. La de Ourense, explican, es la diputación de Galicia con mayor plantilla de personal a pesar de que tiene un nivel de endeudamiento que roza el límite legal (se sitúa en 109%, cuando el máximo es del 110%) y lleva a cabo la menor inversión real por habitante.

"Es significativo que para gestionar los 9 millones de euros del presupuesto de este año para inversiones se destinen 26 millones a personal", destaca el portavoz del PSdeG.

El desorbitado número de personas cuyo salario depende de la Diputación (las corporaciones provinciales de A Coruña y Lugo tienen 700 trabajadores, la mayoría funcionarios, y la Pontevedra 605, de lo que sólo 13 son laborales) provoca situaciones "surrealistas, porque muchos trabajadores no tienen mesa, ni tarea encomendada.

La provincia de menor desarrollo industrial de Galicia pone sus ojos en la tabla de salvación laboral en que se ha convertido la Diputación. El control que sobre la institución ejerce el presidente provincial es de tal calibre que, paralelamente al incremento del personal temporal, los sindicatos han desaparecido de escena dejando el camino despejado a una asociación de trabajadores montada por el propio José Luis Baltar -él mismo pidió personalmente la firma a los empleados para constituir la- que desde entonces es dueña y señora de la representación laboral. Desde entonces, no han trascendido reivindicaciones ni conflictos en la institución.

Frente a esta representación, sobrevivía simbólicamente la central UGT con un único representante. Pero en el proceso electoral que ahora se desarrolla -los trabajadores elegirán a los representantes de su nuevo comité de empresa el próximo 2 de marzo- ya sólo será posible votar al **sindicato del jefe**. UGT ha colgado una nota en el tablón anunciando que sucumbe ante la imposibilidad de encontrar trabajadores para integrar la candidatura. "La Diputación es desde siempre, pero ahora más que nunca, una empresa particular del Partido Popular", sostiene Francisco Rodríguez.

www.elpais.es 18.02.07

EL LÍDER DEL PP DE OURENSE EMPLAZA A SUS ALCALDES A QUE "ROBEN LOS VOTOS A QUIEN SEA"

El presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, reunió a sus alcaldes en la noche del pasado jueves, poco antes del inicio de la campaña electoral, para exhortarles a **"buscar los votos donde sea, convencer a quien sea y robárselos a ellos o a quien sea"**. Baltar entregó a los 92 regidores que tiene el PP en la provincia una ficha en la que figura el número exacto de sufragios que les exige que consigan en las elecciones del próximo 19 de junio. Para la provincia completa, el cálculo del presidente del PP de Ourense es que su candidatura pueda recaudar 144.100 votos.

Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, que hace unos meses amenazó con abandonar el partido si la dirección nacional no respetaba su cuota territorial, está empeñado en batir el próximo 19 de junio sus poco frecuentes marcas electorales. No lo va a tener fácil. Desde 1993, en todos los comicios autonómicos ha superado ampliamente el 50%, una cota de la que no bajó siquiera en las generales de 2004, en las que el PP sufrió un fuerte retroceso en las ciudades gallegas. En las últimas autonómicas, Baltar se acercó al 55%.

Antes del comienzo de la campaña, tras un acto de presentación del programa electoral del PP al que asistió el vicepresidente primero de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, el líder de los populares de Ourense llamó a capítulo a sus alcaldes. "Podemos y somos capaces de conseguir más votos", les arengó Baltar. "Si teníamos 104.000, tenemos que conseguir 105.000. Si teníamos 118.000, hay que conseguir 119.000", reclamó.

Tras entregar a los regidores una ficha individualizada con el rendimiento electoral que se les exige, Baltar advirtió de que no tolerará excusas. "No me valen las disculpas de los votantes que murieron. Eso había que arreglarlo antes", explicó Baltar, quien aludió a la necesidad de reclutar para el partido apoyos de la gente joven antes de que lleguen los periodos electorales. Y a continuación espetó: "El que no hubiese hecho ese trabajito durante ese tiempo ahora tiene que arreglárselas para buscar los votos donde sea, convencer a quien sea y robárselos a ellos o a quien sea para conseguir los votos que tenemos que conseguir".

Sin la crudeza en la expresión de Baltar, los dirigentes del PP han comenzado la campaña animando a los suyos a multiplicarse en la búsqueda de apoyos. El candidato del PP a la Xunta, Manuel Fraga, advirtió ayer en un acto en Negreira (A Coruña), de que "no se puede desperdiciar ni un voto". "La obra de Galicia hay que hacerla con votos. Y 10 son el doble que cinco, y cinco son más que uno", enfatizó Fraga.

Fraga compartió ayer con Baltar el acto central de su primer día de campaña, un mitin en Xinzo de Limia (Ourense), uno de los feudos del presidente de la Diputación, en el que se reunieron más de 2.000 personas. El mitin se abrió con una consigna lanzada por megafonía que el público coreó: "¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!". En su intervención, Baltar admitió que había dicho a sus alcaldes: "Si no los tienes [los votos], róbalos". Pero el líder del PP de Ourense dio a entender que se le había malinterpretado: "Me quieren meter en Chirona por eso. No saben ni entender el lenguaje, por eso no entienden a los gallegos. En Ourense les vamos a dar una paliza de la que se van a acordar".

Los llamamientos a vencer a las encuestas son el mensaje más insistente de la dirección del PP. Ayer, se conoció un sondeo del Instituto Opina para la cadena SER, que apunta a que Fraga perderá la mayoría absoluta. Éste no quiso comentar la encuesta porque, dijo, la SER es "un medio hostil".

EL PSDEG TRASLADA A LA JUNTA ELECTORAL LAS PALABRAS DE BALTAR

La frase de José Luis Baltar sobre el "robo" de votos llevó ayer a Emilio Pérez Touriño, el candidato socialista, a pedirle que "recupere la calma" y a trasladar sus declaraciones a la Junta Electoral de Galicia por si pudieran ser objeto de un delito electoral. "Están nerviosos, están perdiendo las formas. Nos llaman locos, payasos. Están descalificando a los que no piensan como ellos. Y ahora esto. Ya que los dirigentes del PP no controlan lo que piensan, al menos podrían controlar lo que dicen. Porque no se puede pretender ganar a cualquier precio".

Touriño se mostró convencido de que los gallegos sabrán luchar contra quienes quieren controlar sus decisiones. "La ciudadanía madura no se va a dejar amedrentar. El voto será un castigo contra la intolerancia del PP. No se puede pretender ganar a cualquier precio. Que se comporten, que respeten. Nosotros haremos una campaña limpia, serena y tranquila", clamó el candidato en un mitin en Camariñas (A Coruña).

El secretario general del PSdeG, Ricardo Varela, se mostró convencido, después de las declaraciones de Baltar, de que los gallegos "no se van a dejar robar estas elecciones". Para Varela, el PP "ha desvelado su verdadera cara y su estrategia en los últimos 16 años". Varela exigió a Fraga que, si quiere demostrar que no comparte esta idea de Baltar, le pida su dimisión inmediata como presidente del PP de Ourense y que, además, reúna de nuevo a los alcaldes para rectificar sus palabras y pedirles que permitan el voto libre de todos los gallegos.

"Un producto de Fraga"

"Son prácticas que no nos sorprenden", declaró el candidato del Bloque Nacionalista Galego, Anxo Quintana, quien considera a José Luis Baltar "un producto de Fraga". El cabeza de lista del BNG acusó al presidente de la Xunta de "apadrinar la corrupción" y aspirar a perpetuar en esta época "prácticas de la Galicia del siglo XIX". Haciendo un juego con el lema de los populares, Quintana dijo que el eslogan del PP significa "más corrupción para el país de los baltares y los cacharros", en alusión a los dos barones provinciales de más peso del PP, los presidentes de las Diputaciones de Ourense y Lugo, José Luis Baltar y Francisco Cacharro Pardo.

Fuentes de la dirección de la campaña del BNG acusaron ayer al PP de "confundir" el partido con las instituciones, lo que identificaron como la causa de la "corrupción estructural" del PP. Los populares, agregaron, "usan las instituciones públicas como un coto privado" y otorgan a los ciudadanos "el tratamiento de súbditos"

Publicado en El País. 04.06.05

LOS REBELDES DEL PP DE OURENSE MANTIENEN FIRME SU AMENAZA DE ROMPER CON EL PARTIDO



Las Jóvenes promesas PPopulares

El futuro del PP y del Gobierno de Galicia pende del hilo sobre el que hoy se deslizarán dos hombres a punto de romper una amistad personal y una alianza política que duró 15 años. Para el presidente de la Xunta y fundador del PP, Manuel Fraga, será una cita casi dramática porque está en juego el modo en qué concluirá su vida política. Fraga tendrá que convencer a su interlocutor, el líder del PP de Ourense, José Luis Baltar, de que desista de abandonar el partido para fundar una nueva formación política regionalista.

Anoche, más allá de los mensajes optimistas que se transmitían desde algunos medios oficiales para minimizar el alcance mediático de la crisis, en la dirección del PP de Ourense aseguraban que se mantenían firmes en su pulso.

Sometido desde hace una semana a las presiones contrapuestas de los barones provinciales del PP gallego, que desean forzar una salida pactada, y a la voluntad de la dirección nacional del partido de no ceder ante los rebeldes, Fraga huyó durante el fin de semana del viciado aire que se respira estos días en Santiago. Pasó el viernes y el sábado de cacería en Palencia y ayer, a su regreso, reanudó los contactos políticos para preparar la reunión de hoy con Baltar, cuando termina el ultimátum del PP de Ourense. Baltar ya le había anunciado a Fraga el pasado lunes que se disponía a abandonar el partido porque consideraba que la dirección del PP y los aliados gallegos de su secretario general, Mariano Rajoy, le estaban arrinconando. Ante la insistencia de Fraga, el líder de los populares de Ourense y presidente de la Diputación Provincial concedió una semana de plazo antes de confirmar públicamente la escisión.

Fraga se reunió ayer por separado con sus dos vicepresidentes. Ambos, también por separado, habían mantenido en los últimos días contactos personales con Baltar. Los dos, nombrados hace tres semanas, no representan la misma línea política en el PP gallego. El primero, Alberto Núñez Feijoo, está plenamente identificado con la dirección nacional del partido y sus adversarios lo consideran el *hombre de Rajoy* en la crisis, en la que ha asumido un gran protagonismo. El segundo, Xosé Manuel Barreiro, es más proclive a un entendimiento con los barones provinciales, en cuyo entorno comenzó su carrera política, y ha actuado desde un segundo plano.

Según fuentes del PP de Ourense, las gestiones de Barreiro y Núñez Feijoo ante Baltar no ofrecieron resultado. La misma versión asegura que el encuentro con Núñez contribuyó a tensar más el clima. Mientras Baltar guarda silencio, en su entorno aseguran que su postura es firme, ya que piensa que Fraga no tendrá margen de maniobra para ofrecerle una satisfacción suficiente. Algunas fuentes de la Xunta y de la dirección del partido transmitían, por el contrario, que el acuerdo aún es posible y que a los rebeldes les están fallando los apoyos. Pero también en estos medios se hacían confesiones pesimistas desde el anonimato. La versión sí era coincidente al asegurar que la dirección del PP no está dispuesta a hacer más concesiones que garantizar la cuota territorial de Baltar y prometer que no habrá represalias.

El propio Rajoy, en una entrevista en *Abc*, advirtió ayer de que "el peor coste" para el PP no sería la ruptura sino "no hacer aquello que los ciudadanos perciban como serio".

(*) Publicado en la edición digital de El País.27.09.04

LA AMENAZA DE ESCISIÓN DEL PP DE OURENSE ABRE LA MAYOR CRISIS DEL GOBIERNO DE FRAGA

La decisión del presidente del PP en Ourense, Xosé Luis Baltar, de abandonar el partido junto a un grupo de cinco diputados ha abierto la crisis más grave en el Gobierno gallego desde los años 80. Fuentes del PP de Ourense han confirmado que Baltar comunicó anoche su marcha a Manuel Fraga, al que dijo que era irrevocable, aduciendo que no veía protegidos sus intereses en la Xunta. Las mismas fuentes han informado de que los diputados rebeldes han amenazado con crear otro partido, algo que pondría en serio peligro la mayoría del PP en el Parlamento gallego.

La Cámara gallega se compone de 75 escaños, de los que el PP actualmente ocupa 41, tres diputados por encima de la mayoría absoluta, establecida en 38. De consumarse la espantada, el partido de Manuel Fraga pasaría a tener 36 diputados y se vería privado de la mayoría.

El grupo de descontentos de Ourense critica el poder y la influencia -excesivos, en su opinión- del secretario general del PP, Mariano Rajoy, en el PP gallego. Este sector siempre ha apoyado al viejo rival de Rajoy en Galicia, el que fuera delfín de Fraga, Xosé Cuiña, que fue obligado a dimitir hace año y medio de la Xunta. La última remodelación del Gobierno gallego, coincidiendo con el anuncio de Fraga de optar a su quinto mandato, dió entrada a figuras próximas a Rajoy, como el vicepresidente primero, Alberto Núñez Feijoo, y dejó en un escalafón inferior al también vicepresidente José Manuel Berreiro, próximo a los barones provinciales que apoyaban a Cuiña.

"Un pacto de silencio"

Tras el encuentro de anoche, y a petición de Fraga, el presidente del PP de Ourense abrió un plazo de una semana para consumir su abandono, que asegura es irrevocable. En declaraciones, esta tarde, a los periodistas, Baltar ha confirmado la existencia de "un pacto de silencio hasta dentro de una semana", en la que ambos políticos volverán a reunirse, en un intento de dar "una segunda oportunidad" al Gobierno gallego, según Baltar.

Junto a éste, en principio, abandonarían la disciplina de partido otros diputados porque, según aseguran, no ven respaldados sus intereses. Tampoco se descarta que otros miembros del Parlamento gallego se sumen a la decisión ya en firme de Miguel Santalices, Roberto Castro, Xosé Manuel Baltar, hijo del líder provincial, María José Caldelas y Maximino Rodríguez.

El amago de escisión ha destapado una crisis de enorme gravedad. Aunque este grupo de diputados afirman que apoyarán las decisiones del PP en lo que resta de legislatura, ya están planteándose, según fuentes próximas, la posibilidad de crear un nuevo grupo político con el que concurrirían a las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2005. La espantada se interpreta como un jaque al presidente gallego, ya que el PP en Ourense suele obtener mayoría absoluta y es un importante bastión de los *populares*. El Partido Popular de Galicia gobierna en 75 ayuntamientos y, según las fuentes consultadas, 60 alcaldes respaldan al dirigente provincial, por lo que los críticos no perderían la mayoría absoluta en la Diputación de Orense.

"Una cena magnífica"

Xosé Manuel Baltar, líder del PP en Ourense y presidente de la Diputación provincial, comunicó anoche a Manuel Fraga su decisión en una cena que mantuvieron ambos en Santiago, en la que el titular de la Xunta intentó salvar sin éxito la escisión del partido. Pese a que la crisis ya estaba anunciada, Fraga ha insistido esta mañana en que la reunión de anoche había sido "magnífica" y que confiaba en "rematar bien" las negociaciones.

Al parecer, Manuel Fraga había ofrecido a los ourensanos libertad para confeccionar las listas en la provincia para las elecciones del próximo año, la destitución del secretario general del PPdeG, Jesús Palmou, y consensuar la nueva persona que ocuparía este cargo en su lugar.

Además, el presidente de la Xunta se comprometió a que el ex consejero Xosé Cuiña, fuertemente respaldado por los dirigentes del partido en Orense frente a lo que consideran intromisiones de Madrid, figurase en las listas de Pontevedra.

(*) Publicado en la edición digital de El País.21.09.04

Le di 33.000 euros en un sobre "

TRAYECTORIA DEL SUSODICHO

Nace en Meaño un 16 de agosto de 1958 .Como otros muchos gallegos a la edad de 14 años emigró a Frankfurt, donde ha trabajado 3 años en el sector de la siderurgia. De regreso a su tierra en 1978 fundó a empresa Hierros Santa Cruz. En 1990 creó la empresa Construcuatro, dedicada a la promoción y a la construcción. Hasta hace unos meses ha sido su consejero delegado de la empresa, de la cual posee el 33% de las acciones.

En octubre de 2007 la Consejería de Vivienda de la Junta de Galicia le abrió un expediente sancionador a dicha empresa, al haber "indicios suficiente de tener cobrado sobrepregios en viviendas protegidas. Sobrepregios que quedaron grabados en conversaciones ordenadas por el juzgado.

Su aterrizaje en las escuadras genovesas comenzaron en 1987, concurriendo a las elecciones municipales en Meaño por el PUM (Parroquias Unidas de Meaño), formación formada por un grupo de vecinos.

En 1997 fue elegido presidente de los genoveses de Sanxenxo, centro de operaciones de las vacaciones de Mariano, el estadista. En las elecciones municipales de 1999 fue elegido alcalde con mayoría absoluta, Cuatro años después, en mayo de 2003.

En julio de 2006 , da un nuevo paso y logra que Mariano le designe candidato a la alcaldía de Pontevedra. En diciembre de ese año, tras dejarlo en bancarrota, renunció a su cargo de alcalde de Sanxenxo.

El 27 de mayo de 2007 su candidatura ganó las elecciones municipales de Pontevedra con el 44,2% de los votos, consiguiendo 12 concejales, seguido por el candidato del BNG, que obtuvo 7 concejales y el 28% de los votos. El PSOE logró 6 ediles, pero ambos se aliaron e impidieron que el constructor Telmo se quedara sin alcaldía.

El 22 de mayo de 2011 repitió como candidato. Un pacto entre BNG y PSOE les dejó por segunda vez fuera del gobierno municipal.

Tras esta nueva derrota, Telmo anunció que no sería candidato a las elecciones municipales de 2015, y que continuaría al frente de los genoveses de Pontevedra, hasta que el partido le permita poner en marcha su sucesión. Meses después Mariano nuevamente tuvo a bien designarle número 4 de las listas al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Pontevedra. El 25 de marzo del 2012 abandona el puesto de portavoz municipal en el Ayuntamiento de Pontevedra para dedicarse a su escaño en el congreso y de paso supervisar sus negocios. Salvo error u omisión, es el diputado en el Congreso que declara más acciones , inmuebles y dinero en metálico.

En julio del 2011 el Tribunal Supremo declara ilegal un edificio construido por la promotora de la que era socio y que había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble. El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior. El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbiar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado". En Noviembre del 2011 el gobierno de Feijóo decidió " amnistiar " a Telmo y se ha archivado el expediente sancionador.

LA ALCALDESA DE SANXENXO SALE DEL JUZGADO IMPUTADA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO

Catalina González (PP) sostiene que no tiene "ninguna duda" sobre la legalidad de sus actos

Excargos de urbanismo de Sanxenxo se niegan a declarar

La alcaldesa de Sanxenxo (Pontevedra), Catalina González (PP), ha salido este mediodía de los juzgados de Cambados tras declarar ante el juez que investiga un caso de presunta corrupción urbanística con una imputación por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La regidora está implicada en un sumario en el que se investiga la concesión de varias licencias en el municipio desde 2006 y en el que también está acusada la secretaria general de Urbanismo de la Xunta y exgerente de Urbanismo de Sanxenxo, Encarnación Rivas. Rivas está imputada por prevaricación urbanística, aunque el instructor ha advertido que estudia añadir el delito de cohecho.

González ha asegurado no tener "ninguna duda" con respecto a la legalidad de sus actos, informa Europa Press. La regidora del PP ha contestado durante tres horas a las preguntas que le ha realizado el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados que instruye la causa. Tras prestar declaración, la regidora ha explicado que contestó a todas las preguntas realizadas por el juez Juan Manuel Hermo, "intentando aclarar todas ellas hasta donde yo tenía conocimiento", ha sostenido, para luego manifestar que está "tranquila y animada".

EL JUEZ IMPUTA A LA JEFA DE URBANISMO PREVARICACIÓN “QUE PUEDE SER COHECHO”

Rivas aprobó una licencia que luego dio pie a una orden judicial de derribo
Excargos de urbanismo de Sanxenxo se niegan a declarar

La secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, declaró ayer como imputada por un presunto delito de prevaricación urbanística en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sanxenxo en la que también están implicadas otras 12 personas, entre ellas la actual alcaldesa del municipio pontevedrés, la popular Catalina González. Aunque Rivas fue citada por una presunta prevaricación en su etapa de directora de la Gerencia de Urbanismo, entre 2004 y 2006, cuando era regidor Telmo Martín, el instructor ha advertido que esta acusación “podría dar lugar a un delito de cohecho”, según confirmaron fuentes judiciales a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La posible ampliación de la imputación de la que fue máxima responsable del urbanismo en Sanxenxo a un delito de cohecho viene a complicar aún más el caso que comenzó como una de tantas investigaciones que se han abierto en los juzgados de Cambados por supuestas ilegalidades urbanísticas contra políticos y técnicos que han desfilado por este ayuntamiento. El interrogatorio de la secretaria general de Urbanismo de la Xunta duró tres horas para aclarar, entre otras, las irregularidades apreciadas en la licencia concedida a la promotora Construcciones Balboa y Chan, SL, que levantó un bloque de viviendas en la calle Progreso de Sanxenxo y que supuestamente contó con todos los informes favorables de Rivas.

El edificio se construyó pero dio lugar a una denuncia y orden de derribo hace tres años que todavía no se ha ejecutado. La sentencia firme del TSXG, que confirmó una anterior de un juzgado de primera instancia de Pontevedra, ordenó en 2010 la demolición del edificio desestimando todos los recursos interpuestos por la promotora para intentar salvar el inmueble.

La licencia se concedió en 2006, meses antes de que Rivas abandonara la Gerencia de Urbanismo y después de encajar varias modificaciones por las que se le permitió a la promotora construir un edificio de dos bloques. Este permiso se otorgó pese a que uno de los inmuebles carecía de vial de acceso y el paso se tenía que hacer a través del otro bloque que da a la calle Progreso. La carencia y la posterior solución técnica del edificio fueron el centro del litigio que acabó en orden de derribo, ya que, según el fallo, incumplía las normas urbanísticas contempladas en el Plan General de Ordenación de Sanxenxo, cuya redacción estuvo dirigida también por Encarnación Rivas, licenciada en arquitectura.

La imputación de la secretaria general de Urbanismo sorprendió en medios políticos y del propio gobierno municipal en Sanxenxo, hacia el que se dirigían las denuncias de al menos cinco expedientes presentados en la Fiscalía y en los que se pone el acento en las presuntas arbitrariedades que presiden la concesión de licencias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no dudó ayer en expresar públicamente su confianza en su alto cargo imputada, aunque se afanó en puntualizar que “los directores generales no forman parte del Gobierno sino el presidente y los conselleiros”. Feijóo elogió la trayectoria de su jefa de Urbanismo. “Estaremos muy atentos a esa llamada [judicial] a la directora general, de la que tenemos el mejor concepto tanto en su labor anterior como en su actual etapa en el Gobierno gallego”, añadió el presidente.

Después de la secretaria general le tocó el turno en los juzgados a Soledad Leiro, exasesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo que abandonó este departamento municipal el pasado año, junto a otros cuatro técnicos que fueron destituidos por el Ayuntamiento por falta de trabajo. Mañana está previsto que declare la alcaldesa, Catalina González, en relación a otros tres expedientes urbanísticos denunciados en el juzgado de Cambados. La regidora, del PP, comparecerá ante el juez Juan Manuel Hermo en calidad de imputada por tres delitos: prevaricación, cohecho impropio y tráfico de influencias.

EL SUPREMO INVESTIGA A TELMO MARTÍN POR RECALIFICAR UNA FINCA DE SU EMPRESA

El tribunal decidirá si el diputado del PP delinquiró cuando era alcalde de Sanxenxo

La Sección Segunda del Tribunal Supremo investiga al diputado popular en el Congreso Telmo Martín por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Sanxenxo. La parcela fue vendida posteriormente por la promotora Construcuatro, de la que Martín era accionista, a otra empresa vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña y en ella se levantó una urbanización de viviendas de lujo.

Lo que comenzó como una denuncia presentada por una asociación de vecinos de Sanxenxo por delito ecológico —la urbanización ocupaba el espacio de servidumbre del regato de un río y provocaba continuas inundaciones— derivó seis años después en esta investigación. Telmo Martín ya no era regidor de Sanxenxo sino diputado en el Congreso y, por tanto, político aforado, lo que ha obligado a inhibirse al juzgado instructor de Cambados.

El caso que se incoó en 2006 estuvo salpicado por una serie de incidentes, como la paralización de la instrucción durante varios años después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra revocase el auto de archivo del juez de Cambados y ordenara ampliar las investigaciones que apuntaban al que fuera regidor de Sanxenxo. En aquel momento, Telmo Martín era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra. Se tardó tres años en reactivar el caso y, cuando por fin se hizo, las diligencias judiciales habían desaparecido del juzgado de Cambados. En mayo pasado, varios días después de celebrarse el auto de reconstrucción, un funcionario encontró los legajos en una estantería del archivo judicial donde se habían buscado sin éxito. Para entonces Telmo Martín ya había tomado posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados, logrado en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

El juzgado de Cambados remitió la causa al Tribunal Supremo después de apreciar indicios de la posible imputación del político, que se sustancian en un informe preliminar del Ministerio Fiscal. En junio, después de la reconstrucción de las diligencias, el juzgado solicitó varias pruebas documentales, cumpliendo así el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Supremo continuará ahora con la investigación que afecta al político aforado y en la que intervendrá como ponente el magistrado Carlos Granados, según indicaron fuentes judiciales. Mientras, el juzgado de Cambados seguirá instruyendo la causa por delito medioambiental que se abrió a instancias de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, la firma de la familia Cuiña que edificó la urbanización Illas Atlánticas.

El entonces juez de Cambados había acordado el archivo de la causa ambiental en 2008 porque los informes periciales del Seprona no fueron concluyentes para imputar a la promotora un delito contra los recursos naturales o el medio ambiente. En el recurso contra el auto de archivo, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, “alegando una situación de indefensión”, porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. El letrado de los vecinos también se quejó a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor “nuevos hechos” de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y por ello solicitaban nuevas pruebas.

Los “nuevos hechos” hacían referencia a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (en la que poseía el 33% de las acciones) a Construziona Galicia por 2,78 millones de euros, así como en la previa recalificación de la parcela por el Ayuntamiento que él presidía. La propiedad en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariada en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente.

La Sala, presidida por el magistrado Xosé Xoán Barreiro, estimó el recurso del colectivo vecinal y acordó la nulidad de las actuaciones a partir de la providencia con fecha 26 de agosto de 2007, a efecto de que el juzgado le diese traslado a las partes de las últimas diligencias practicadas para que pudieran conocerlas. En el mismo auto también ordenó que se iniciara la investigación que habían solicitado los vecinos “por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades penales” de Telmo Martín, hechos que se remontan a 2004. Sin embargo, desde el 9 de junio de 2009, cuando se dicta el auto, el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva para aclarar la actuación del entonces alcalde y luego se dio por perdida la causa. El fiscal del caso pidió su reconstrucción pero el proceso siguió paralizado, coincidiendo con el traslado del juez y de que el abogado de los vecinos fuese elegido concejal por el BNG en el Ayuntamiento de Pontevedra y no volviera a insistir en sus reclamaciones judiciales.

El Supremo se encargará ahora de para aclarar si Telmo Martín, que acumula varias denuncias por asuntos urbanísticos, ha incurrido en alguna actuación delictiva o si los hechos que se investigan ya han prescrito.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/galicia/1355503813_678733.html

LA XUNTA SE ENREDA CON TELMO MARTÍN

El pleito por el 'perdón' de tres millones a Construcuatro se basa en que el edificio de Silgar carece del preceptivo permiso sectorial del Gobierno gallego

Los únicos informes conocidos de técnicos de la Xunta sobre el edificio de Construcuatro en la playa de Silgar, en Sanxenxo, son los del expediente sancionador, y nadie ha cuestionado su rigor. A la empresa de Telmo Martín —alcalde entonces de la localidad—, según concluyó, le correspondía pagar una sanción de tres y pico millones de euros y reponer la legalidad urbanística. Luego irrumpieron como en comedia de enredo Cristina Paz-Curbera y Llovet, técnica de la Demarcación de Costas de Pontevedra, y Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca y ahora senador. López Veiga condonó aquella sanción con el aval de un informe de Paz-Curbera y aun exponiendo en su resolución que no era de su competencia concluir el expediente, que ya es enredo. Tuvieron que pasar cinco años para que el Tribunal Supremo lo desenredara.

En una sentencia de medio folio, el alto tribunal dictaminó en junio de 2011 que, efectivamente, por la cuantía de la sanción, solo el Consello de la Xunta podía retirar la multa al constructor y dirigente del PP. El expediente volvió, pues, al momento en que sus técnicos formularon la propuesta de sanción. El Consello de la Xunta de Feijóo, sin embargo, con nuevos "informes técnicos" que hurta al Parlamento, según afloró en su último debate, aprobó en septiembre "convalidar" el sobreseimiento que resolvió López Veiga —más enredo— y condonar así la sanción a Construcuatro.

"Fue una carallada", sostiene Paz-Curbera. Las esquinas de la fachada del edificio de Construcuatro, en primera línea de la playa de Silgar, distan 18,20 y 17,81 metros respectivamente de la línea del dominio público marítimo terrestre. Tendrían que estar a 20 metros, como ordena la Ley de Costas (1988) y lo hacían las normas subsidiarias del urbanismo local (1990). Pero el edificio creció sin que los vigilantes de Costas, contra lo habitual en otros casos, realizaran ningún informe sobre la obra, pese a lo visible y emblemático del lugar. Hasta que la asociación ecologista Salvemos Pontevedra denunció la infracción.

En Sanxenxo gobernaba Telmo Martín (1999-2007) y al enredo se suman los dos organismos hermanados con competencias en la disciplina urbanística del litoral, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Usos do Litoral, de la Consellería de Pesca. El primero lo dirigía José Antonio Rueda Crespo, padre del actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y su tía Paloma era la delegada de Pesca en Pontevedra. Esta coincidencia cobra relieve por el empeño personal del conselleiro Rueda en promover de nuevo a Paz-Curbera para la jefatura de Costas, que ya desempeñó después de su padre.

En la Demarcación de Costas Paz-Curbera es responsable desde 1999 del servicio de Dominio Público, cargo que compatibilizó con la jefatura provincial de Costas (2004-2009) y en el que no ha cesado tras recuncar en esa jefatura en abril pasado.

En Sanxenxo el deslinde de Costas comenzó en 1998 y 14 años después aún no ha concluído, lo que también contribuye a enredos. En la exposición inicial del plan general aprobado por el Ayuntamiento en 2003, por ejemplo, en los planos de la Dirección General de Costas la línea de protección partía en dos el chalet de la propia Paz-Curbera; en los definitivos del plan, sin embargo, lo salvan con una extraña parábola hasta el límite de la piscina.

En 2005, en el "informe aclaratorio" para López Veiga sobre el edificio de Silgar, Paz-Curbera alude a las arduas dificultades encontradas para fijar la línea de protección en la zona y atribuye a un hipotético "error de grafiado" de los propios planos de Costas la inducción a la infracción de Construcuatro. Pero en la tramitación del expediente sancionador, según técnicos de Costas consultados, no existe ningún acto ni resolución administrativa de Costas o de Usos do Litoral que, basándose en supuestos planos erróneos, determinara la infracción de la construcción. El "error" que descubre Paz-Curbera remite a que "en un primer momento" la línea se marcó, absurdamente, a 19 metros, distancia que, por lo demás, también invade el edificio.

Este enredo, con todo, a día de hoy se vuelve irrelevante. El Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite el contencioso de Salvemos Pontevedra contra el acuerdo de condonar la sanción a Construcuatro porque su edificio invade la zona de protección "careciendo de la preceptiva autorización sectorial de la Xunta", el quid de la cuestión, ya que Construcuatro ni siquiera llegó a pedirla. Por esta "carallada", en fin, "el pobre Telmo Martín" está siendo víctima de "una canallada", según Paz-Curbera, o de una "persecución inadmisibile" por parte de la oposición, según el conselleiro Agustín Hernández. Para enredar lo obvio.

Otra vara de medir para un vecino de Vigo

José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, "dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros". La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección del Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.

Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su "rectificación de un manifiesto error de hecho": el linde de protección en la zona de marismas, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.

Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El "error" fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.

DESAPARECEN DEL JUZGADO LAS DILIGENCIAS DE UN CASO CONTRA TELMO MARTÍN

- **La investigación abarca una recalificación a favor del entonces alcalde de Sanxenxo**
 - **La denuncia vecinal incluye otro presunto delito contra el medio ambiente**

Todo el soporte en papel de unas diligencias abiertas en 2006 en el juzgado número 2 de Cambados se ha esfumado. Son unos 200 folios de instrucción en torno a una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo, en Sanxenxo, contra la construcción de una urbanización de pisos de lujo, Illas Atlánticas, que promovió la empresa Construziona Galicia, SL y que sustanció el Seprona en un informe preliminar.

La denuncia se había judicializado por un supuesto delito contra el medio ambiente por parte de Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro de Política Territorial, José Cuiña. Pero meses después, la acusación particular amplió la denuncia por hechos que aparecían en la misma causa y que podrían derivar en la imputación del ahora diputado en el Congreso del PP Telmo Martín por presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y/o tráfico de influencias cuando era alcalde de Sanxenxo. En el punto de mira está de nuevo la empresa Construcuatro, de la que Martín poseía el 33% de las acciones, y que vendió los terrenos a la promotora Construziona por 2,78 millones.

La Audiencia impidió en 2009 que el juez cerrara el caso en falso

Desde junio de 2009 la causa sufrió un colapso. La absoluta paralización de las diligencias coincide en el tiempo con un auto de la Audiencia de Pontevedra en el que se revoca el archivo provisional que, a petición del fiscal, dictó el que fuera juez instructor, Juan Carlos Carballal y se le requiere que siga investigando, algo que no se hizo. Transcurridos tres años, las diligencias siguieron aparcadas,

desoyendo las indicaciones de la Audiencia, sin que se hubiera registrado ninguna nueva actuación judicial. Pero lo más llamativo es que tampoco la parte denunciante representada por el abogado Vicente García Legísima presentó queja o reclamación por ello. El letrado salió elegido concejal por el BNG en Pontevedra en las pasadas elecciones.

Nadie sabe desde hace cuánto tiempo estas diligencias se encuentran en paradero desconocido. Hay constancia de que el fiscal del caso encargado de los delitos urbanísticos, David Lafuente, advirtió el extravío de la causa a finales del pasado año. Luego el juez Carballal fue trasladado a Vigo en marzo y tomó posesión el nuevo titular, que fue informado de lo que estaba ocurriendo. Se comprobó que ni un solo papel de todo lo instruido pudo ser recuperado y que los legajos, sorprendentemente, están perdidos.

El ahora diputado del PP recalificó su terreno y lo vendió por 2,78 millones

La desaparición del procedimiento ha causado perplejidad en medios judiciales y de la fiscalía de Pontevedra consultados y nadie se ha atrevido a dar una explicación convincente de por qué unos documentos que tendrían que estar custodiados en el juzgado han acabado en paradero desconocido. Un hecho insólito que cobra mayor relevancia al tratarse de un caso que podría salpicar a un político y con un largo historial por denuncias urbanísticas, algunas finalmente archivadas. Pero, además, la deriva que tomó el procedimiento en la fase de instrucción apunta a un absoluto desinterés de todas las partes pese a las inequívocas consignas que dio la Audiencia de Pontevedra para que a la investigación no se le diera carpetazo.

La denuncia que presentaron en el juzgado los vecinos consideraba ilegal la construcción del edificio Illas Atlánticas porque los terrenos ocupaban el espacio de servidumbre del río Baltar. El juez llegó a paralizar las obras dos meses a raíz del informe del Seprona, aunque en agosto de 2008 decidió archivar el caso y desestimar la apelación de los vecinos.

La promoción, de lujo, la ejecutó una empresa de la familia de José Cuiña

El juez instructor alegó que “de lo actuado no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que había dado lugar a la formación de la causa”, una resolución que no cuestionó la Audiencia. Sin embargo, en su recurso de reforma el abogado de la acusación se quejó ante la Audiencia de que el archivo se había acordado sin que se les hubiese dado traslado de un informe de la Xunta y del resultado del exhorto remitido al juzgado de Vigo en el que se comunicaba que la bióloga designada como perito judicial no aceptaba el cargo. También alegó que el auto del juez desestimando el recurso de apelación no entraba a valorar un escrito presentado el 14 de diciembre de 2007 en el que se ponían en conocimiento del instructor y de la fiscalía “hechos nuevos de los que se tuvo noticia a través de las diligencias de instrucción que podrían derivar en responsabilidades penales” contra Martín y otras personas. Y ahí sí les dio la razón la Audiencia.

“Tiene razón la parte apelante al considerar que antes de dictarse el auto de sobreseimiento se le debió dar traslado de las últimas diligencias practicadas para que pudiera instruirse e interesar lo que a su derecho le conviniera, no compartiendo los argumentos de la resolución [del juez] debido a que la notificación de ésta, por fuerza, se tuvo que producir al menos simultáneamente a la del auto”, esgrime el 5 de junio de 2009 la Sección Segunda que preside el magistrado José Juan Barreiro Prado. La Sala considera que “se han infringido normas esenciales del procedimiento, derivándose de tal infracción una situación de indefensión para la parte denunciante”, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de archivo del juez.

Pero además, y en relación al escrito presentado en el que se aportan nuevas pruebas, la Audiencia le requiere al juzgado que siga investigando “por si de los mismos se derivasen responsabilidades penales, delitos de naturaleza distinta a los que dieron lugar a la incoación de las diligencias y sobre las que no se pronuncia el juez instructor”.

Polémica recalificación y venta de terrenos

Siendo alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín recalificó un humedal al borde de la duna de Baltar, unos terrenos en primera línea de playa que su empresa adquirió como rústicos y que pudo revender luego como urbanizables a la empresa de la familia Cuiña. En ellos se levanta hoy la urbanización Illas Atlánticas, cuya construcción motivó la apertura de las diligencias perdidas en Cambados.

Por las fincas inscritas como rústicas Construcuatro pagó 595.000 euros. Una vez calificadas como suelo urbano, en 2004 la empresa del alcalde las vendió por 2,78 millones de euros a la constructora de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del exconselleiro, donde construyeron 96 viviendas. La parcela está inventariada en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente y linda con los terrenos de la antigua fábrica de Conservas Peña, hoy también propiedad de Construziona y parte fundamental del solar de la urbanización.

La titularidad de los terrenos de la conservera Peña fue reclamada sin éxito en los tribunales por los vecinos. La finca pasó a manos de Conservas Portonovo, que en los noventa suscribió un convenio con el Ayuntamiento para recalificar el solar a condición de que instalaran la factoría en otra parcela y recuperaran a los trabajadores. Pero la empresa nunca cumplió su parte del trato.

En 1999 Telmo Martín accedió a la alcaldía de Sanxenxo y sucedió al frente de la agrupación local del PP a José Manuel Otero. Se inició la redacción del PXOM que finalmente recalificaría la parcela. Paralelamente, Construcuatro fue adquiriendo fincas junto a la conservera. Entonces, Otero, el antecesor de Martín al frente del PP, entró en el accionariado de la fábrica, amplió el objeto social de la empresa a la promoción inmobiliaria y se hizo con más suelo del que ahora ocupa la urbanización Illas Atlánticas. El asunto provocó una encendida pelea política que se cortó de cuajo. El entonces portavoz socialista, Pepe Aguín, presentó una moción para revocar la licencia municipal de Illas Atlánticas pero terminó retirándola para trabajar como gerente de Nauta, empresa municipal creada por Martín y que este presidió hasta que dejó la alcaldía

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336759277_118671.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/21/galicia/1340308568_939838.html

EL SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN COMETIÓ DELITO CUANDO ERA ALCALDE DE SANXENXO

El ahora diputado recalificó unos terrenos de su promotora que la empresa vendió luego como urbanizables

El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín.

La remisión de las diligencias al alto tribunal se produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.

Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra un año después.

En el recurso, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, "alegando una situación de indefensión" porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.

Causa reactivada en mayo

Casi tres años después de que la Audiencia de Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los legajos en un anaquelel del archivo donde se había inspeccionado varias veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo récord.

Aunque gracias a la aplicación informática Minerva las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través del abogado de los vecinos de Portonovo.

Antes de dictar el auto de inhibición a favor del Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha redactado su informe de conclusiones.

Se referían los vecinos a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en el catálogo de zonas húmedas de Galicia.

La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo transcurrido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/galicia/1339529166_870103.html

HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN

El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego

El Gobierno gallego empezando por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo. Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.

En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el municipio pontevedrés.

El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que, en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la resolución.

Rego recordó que la propuesta del funcionario instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la reposición de

la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín fue "a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la sentencia y habló de una "persecución inadmisibile a Martín". El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo es una cortina de humo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339617547_900287.html

AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA "PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dice que la Xunta actuó conforme a derecho con Construcuatro

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).

Dicho esto, interpelado por el diputado socialista Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5 millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisibile".

Todo ello, después de que el veterano parlamentario acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente". "Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamentado.

Finalmente, se ha interesado por el expediente de reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan". "Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de Barreiros.

"Hay que resolver y transparentar las normas urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo" Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será pobre de espíritu", ha ironizado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339610644_755303.html

LA JEFA DE COSTAS TACHA DE "CANALLADA" UNA SANCIÓN A LA EMPRESA DE TELMO MARTÍN

Paz Curbera, reincorporada a su cargo en abril tras abandonarlo en 2009, se sumó ayer a la tesis de la constructora conforme la cual el "pobre de Telmo" fue perseguido por su afiliación política

"Lo de Construcuatro fue una carallada, yo no quiero hablar de esto, porque fue una canallada", lanzó ayer Cristina Paz Curbera, jefa de la Demarcación de Costas de Pontevedra, respecto al proceso que llevó a la constructora de la que Telmo Martín es socio cerca de tener que afrontar una multa de tres millones de euros por invadir el dominio público con un edificio en primera línea del paseo de Silgar, en

Sanxenxo. Pese a que la Xunta del PP ha intercedido en dos ocasiones para evitar la sanción a la empresa, Paz Curbera, reincorporada a su cargo en abril tras abandonarlo en 2009, se sumó ayer a la tesis de la constructora conforme la cual el "pobre de Telmo" fue perseguido por su afiliación política.

"Se cebaron con él y no tenían razón", insistió la jefa provincial tras una visita a la delegación de la Xunta en Pontevedra. Allí ofreció una nueva interpretación sobre el origen del informe de deslinde firmado por ella tras el encargo del entonces conselleiro Enrique López Veiga para dar carpetazo —sin tener competencia para ello, como después rubricó el Supremo— a la propuesta de sanción de los técnicos de su propio departamento, los primeros en proponer la multa de tres millones a Construcuatro basándose en los planos. "Nos dimos cuenta por casualidad de que la casa estaba a 19 metros y no a 20. Metimos la pata los de Costas, la empresa que hizo el deslinde, que graficó mal la protección, yo lo tengo demostrado", aseguró.

La jefa de Costas adujo que todo el paseo de Silgar tiene el mismo problema que el edificio de Construcuatro, "pero claro, como es Telmo, todo el mundo contra el pobre Telmo. O el que fuera, da igual el alcalde que fuera". Dice la jefa de Costas que tal ilegalidad colectiva tendría fácil arreglo a través de un "estudio para la homogeneización de la fachada marítima".

El archivo decretado por López Veiga en 2005 lo levantó Salvemos Pontevedra en sucesivas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza y el Supremo. Este último remitió al Consello da Xunta —el verdadero competente para resolver— el expediente. El Gobierno de Feijóo reiteró el archivo el pasado noviembre. La asociación ecologista ha recurrido la decisión. También tiene pendiente otro pleito contra la propia Paz Curbera por una casa que esta construyó en Sanxenxo. La ONG entiende que está en zona de protección. Ella lo niega.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/05/galicia/1338929272_820317.html

TELMO MARTÍN: "ME SIENTO PERSEGUIDO POR RAZONES QUE SON MENTIRA"

El diputado asume la tesis de Louzán en su adiós al Ayuntamiento de Pontevedra

El exalcalde de Sanxenxo asegura que en los medios "se habla mucho"

Tras dos intentos frustrados de alcanzar la alcaldía, Telmo Martín finalizó ayer formalmente su etapa en la política local de Pontevedra con la renuncia a su acta de concejal en el pleno municipal. El exalcalde de Sanxenxo pasará a desempeñar en exclusiva su papel de diputado en el Congreso por el PP en medio de la polémica por la benevolencia de la Xunta con la empresa constructora de la que hasta el pasado diciembre fue consejero. "Me siento perseguido", aseguró respecto al asunto al término de la sesión.

La tesis de la persecución a Martín la enunció la semana pasada el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y a ella se ciñó el edil saliente ante las preguntas sobre el perdón de la Xunta a la multa de tres millones de euros a Construcuatro por invadir el dominio público en el edificio de Sanxenxo, en el que el propio Martín tiene un piso. "Quiero ratificar las palabras que dijo Louzán. Me siento perseguido por razones que son mentira, pero no me preocupa. Lo llevo dentro de lo que es la labor política y no me afecta", apuntó, y dijo confiar en que "en algún momento todo quedará claro". Martín no dio detalles sobre tales mentiras pero opuso, como ya hiciera en el caso de los cobros probados de sobrepagos ilegales en las viviendas de Construcuatro en Navia (Vigo), que nunca ha sido llamado a declarar por ningún juzgado y que en los medios "se habla mucho".

Lores y Louro agradecen a Martín su "trato exquisito"

Su despedida en el pleno se desarrolló con cordialidad. Los choques entre Martín y el alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, habían sido sonados en los cuatro años y medio en que compartieron asiento en la corporación, con un estallido final en enero del año pasado, también en un pleno, en el que el regidor le dedicó una ristra de epítetos poco amistosos: animal carroñero, vengativo, ruin, falso, cobarde y narcisista entre ellos. Aunque Lores se disculpó con posterioridad, las relaciones nunca fueron cordiales, hasta el punto de que nacionalistas y socialistas acordaron, hace ahora un año, aprobar una moción para reprobarlo como líder de la oposición. A pesar de eso, Martín se despidió agradeciendo a su rival político el "trato exquisito que tuvo siempre, al margen de los debates". "Le deseo

el mayor éxito como diputado y que sea feliz”, contestó Lores. “Si pone todas las mañías podrá ser un diputado útil para la provincia”, le espetó por su parte el portavoz del PSOE, Antón Louro.

Martín dijo sentirse orgulloso de su paso por la ciudad. “Es un orgullo haber contribuido desde 2007 a enderezar el rumbo de Pontevedra”, presumió, y señaló su aterrizaje en la ciudad del Lérez como un antes y un después en la política local. “La ciudad vivía de espaldas al río, y ahora se está viendo que tiene que ser el epicentro”. También señaló a su sustituto en la corporación, Jacobo Moreira. “El PP tiene un grupo muy cohesionado con un portavoz que lo va a hacer maravillosamente bien”, defendió.

Durante la etapa que ahora se cierra se operó también el cambio de postura del PP respecto a la permanencia de la fábrica de celulosas en la ría, que pasó a rechazar, y el nuevo hospital para la ciudad. Este último tema ocupó parte del pleno. El bipartito local acordó llevar ante el Tribunal Superior de Xustiza el decreto de incidencia supramunicipal de la obra, a la que PSOE y BNG han declarado la guerra por el modelo de financiación elegido para llevarla a cabo, basado en el sistema de colaboración público-privada. El pleito añadirá probablemente nuevos retrasos a una infraestructura estancada, con una dotación presupuestaria testimonial en las cuentas de la Xunta para 2012 y con el estudio para las expropiaciones todavía por presentar.

www.elpais.es 24.04.12

EL GOBIERNO ASCIENDE A LA FUNCIONARIA DEL INFORME EXCULPATORIO A CONSTRUCCUATRO

- La nueva jefa de Costas de Pontevedra posee un chalé frente al mar en zona protegida
- Paz Curbera firmó el plano que permitió archivar una multa de tres millones a Construccuatro

Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas en la provincia de Pontevedra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha desoído el fuerte rechazo que provocaba su nombramiento y, aunque con retraso, ha repuesto a la funcionaria en un cargo que ocupó entre 2005 y 2007. Paz Curbera es la autora del controvertido informe en el que se basó en 2005 el exconselleiro Enrique López Veiga y, recientemente, la Xunta de Feijóo, para perdonar una multa de tres millones de euros a Construccuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado el diputado del PP Telmo Martín.

Paz Curbera también es conocida por poseer un chalé frente al mar en zona de protección. La directora de la demarcación de Costas se construyó en 1999 la casa, de 450 metros cuadrados y sobre una finca de 2.500, sobre unos terrenos de Sanxenxo que las normas urbanísticas de la época calificaban de “suelo no urbanizable”. Pero Telmo Martín, a la sazón alcalde de esa localidad, aprovechó el Plan General de 2003 para recalificarlos como urbanizables y desplazar el límite de servidumbre de protección justo hasta la fachada del chalé. Para ello, obtuvo un informe favorable de la demarcación de Costas, en la que Paz ya ejercía como jefa del servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Dos años después, la intervención del Servicio de Costas resultó crucial para resolver uno de los principales problemas que se encontró Telmo Martín mientras compaginó la alcaldía con la actividad inmobiliaria. Un edificio que Construccuatro, de la que Martín poseía el 33%, edificó en la selecta playa de Silgar, en Sanxenxo, invadía dos metros la zona de servidumbre y contaba con un piso más de los permitidos. La Xunta le abrió un expediente que el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, archivó al aparecer un plano distinto aportado por Costas, en el que la invasión se reducía a un metro. La “discrepancia” entre planos justificó al archivo, lo que libró a la inmobiliaria de Martín de la demolición y de una multa de tres millones.

www.elpais.es 24.04.12

FEIJÓO ‘PERDONA’ UNA MULTA DE TRES MILLONES A LA FIRMA DE TELMO MARTÍN

La Xunta revocó la sanción propuesta por el técnico que instruyó el expediente

El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construccuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión

ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana.

La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos [Enrique López Veiga] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales. La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio. El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución [de López Veiga] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”.

La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción.

Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad.

El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la referencia pública del Consello

Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”.

Pero no se entiende por qué se grafieron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.

Por lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”.

Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”.

El edificio de seis plantas invade el dominio público de la playa de Silgar

Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo

La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobrepagos que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa.

Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal. Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros.

www.elpais.es 15.04.12

TELMO MARTÍN RENUNCIA COMO EDIL Y DEJARÁ DE LIDERAR EL PP EN PONTEVEDRA

Se da un tiempo para seguir de presidente local “hasta que el partido mande”

El portavoz del PP de Pontevedra y dos veces candidato a la alcaldía, Telmo Martín, abandonará su cargo en la corporación municipal tras el próximo pleno, según anunció ayer en rueda de prensa. Le sustituirá su número dos, Jacobo Moreira, que compatibilizará el puesto con el de diputado en el Parlamento autónomo. La salida de Martín, que continuará temporalmente “hasta que el partido mande” como líder oficial del PP local, la había avanzado él mismo la noche electoral del 22 de mayo de 2011, cuando el recuento de votos evidenció que el desmoronamiento del PSOE no le sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta que había rozado en 2007. Desde entonces había ido delegando funciones en sus compañeros de grupo, hasta llegar a ausentarse del pleno de los presupuestos para asistir al funeral de un compañero de partido.

Tras asegurarse un puesto de salida en la lista de los populares para el Congreso por la provincia de Pontevedra, Martín reconoció ayer que ambos cargos “son algo incompatibles”. “Seguiré trabajando por Pontevedra desde el Congreso, aunque habrá que esperar un poco por los proyectos porque lo que más preocupa a nivel nacional es la crisis”, admitió. Dijo sentirse “contento y orgulloso” de su paso por la ciudad del Lérez, de la que destacó la apuesta “que no tiene vuelta atrás” por la construcción del hospital único de Monte Carrasco, en el limbo presupuestario. En su haber está también el giro de 180 grados en la postura de los populares respecto a la ubicación de la fábrica de celulosas junto a la ría, que antes defendían y ahora repudian, o la polémica por el cobro de sobrepagos ilegales en viviendas públicas por parte de una constructora de la que era socio.

Fichaje de Feijóo

En los últimos meses de campaña trató sin éxito de reeditar a escala local la estrategia de desgaste del bipartito a cuenta de un pretendido exceso en el coste del mobiliario municipal, y llevó al juzgado a un concejal por una concesión irregular de obras en la que el juez vio una chapuza, pero no un delito. PSOE y BNG se aliaron para reprobarlo oficialmente en un pleno en abril. El fichaje de Martín fue una decisión personal del líder del PP gallego y hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En el verano de 2006, cansado de las guerras intestinas de los populares pontevedreses se fue a buscar a Sanxenxo, segunda residencia de destacados militantes de la ciudad, a un hombre hecho a sí mismo que había ganado reputación y contactos entre los veraneantes más ilustres de la villa.

El supuesto milagro económico de Sanxenxo propició que Feijóo decidiera ficharlo

Constructor y alcalde al mismo tiempo, Martín disfrutaba de la bonanza económica que el boom del ladrillo dejaba en licencias a las arcas municipales de su Ayuntamiento y también en la cuenta de resultados de la promotora de la que era socio y de su empresa de materiales de construcción. Fruto de esa época de las vacas gordas revocó la concesión del puerto deportivo de Sanxenxo a una empresa privada para que volviese a propiedad municipal. Aquel presunto milagro económico avaló su candidatura en Pontevedra ante Feijóo, pero el sector más tradicional de la ciudad nunca dejó de ver en él a un recién llegado. En su primer intento le faltaron unos cuantos centenares de votos para la mayoría

absoluta. Cuatro años más tarde, pinchada ya la burbuja inmobiliaria, ni siquiera fue ya primera fuerza en mayo de 2011.

www.elpais.es 26.03.2012

EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN

La *creatividad* administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble.

El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior.

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra.

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificial". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado".

www.elpais.es 11.08.11

SANXENXO GASTA 900.000 EUROS EN PLEITOS DESDE 2006

Un asesor de la Xunta y de infractores urbanísticos cobró 345.000 euros

El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado pie en los últimos años a que al Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés haya tenido que destinar una buena parte de sus fondos a afrontar gastos judiciales. Entre 2006 y 2009 las facturas municipales por pleitos y asesorías jurídicas alcanzaron los 900.000 euros, de los cuales más de la tercera parte corresponden a los gastos generados por la Xerencia de Urbanismo.

- ***El Ayuntamiento dice que los juicios vienen de la época de Telmo Martín***
- ***El gran beneficiado es José Luis Narbón, ex director de Urbanismo***

Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una constante fuente de ingresos para los despachos con los que habitualmente colabora el Gobierno local, según datos de la intervención municipal. Entre ellos, destaca el bufete de José Luis Narbón, ex director general de Urbanismo entre 1990 y 1997 a las órdenes de José Cuiña, a la sazón conselleiro de Ordenación do Territorio. Narbón, que ha vuelto a tener un papel destacado en el diseño de los planes urbanísticos del Gobierno autónomo

tras la vuelta del PP al poder en 2009, cobró unos 345.000 euros entre los pagos que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete, Urbagalex.

Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la hinchazón en las facturas es consecuencia directa de los pleitos suscitados a raíz de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la villa en 2003. Entonces aún era alcalde el constructor Telmo Martín, que se prepara ahora para su segundo asalto electoral al Gobierno de la capital provincial.

En los años a que se refieren los informes, los gastos municipales aumentaron progresivamente. En 2006 fueron 131.000 euros que subieron ligeramente al año siguiente hasta los 176.000, para dispararse en 2008 a los 327.000. El año pasado la factura se redujo un tanto, pero se mantuvo, con 267.000, por encima de los dos primeros.

Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por defender promociones inmobiliarias en A Guarda y Oia, siempre contra el criterio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tras la llegada de Agustín Hernández a la Consellería de Territorio, el departamento le encargó, en cambio, un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que recibirá 67.000 euros que la Xunta enmarca en los "trabajos previos" a la redacción de una nueva ley gallega del suelo.

Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a través de su empresa, arrojan una media de 86.500 euros al año entre 2006 y 2009. Se trata de una cantidad muy similar a la que recibirá este año - 84.600- a raíz de un convenio firmado el pasado marzo por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el abogado se compromete a ejercer las labores de asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general.

Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón fue contratado en 2007 por un periodo de tres años como asesor, un compromiso que se ratificó de nuevo este año. Este acuerdo, se limita a un sueldo mensual de 700 euros en su primera redacción y de 1.000 tras su renovación. Todos los demás abonos, insisten, son resultado de los pleitos que Narbón le llevó al Ayuntamiento.

www.elpais.es 20.12.10

LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

Medio Ambiente solicita nuevas pruebas que pueden cambiar el expediente

La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobrepagos en viviendas protegidas en Vigo, pero la sanción está lejos de hacerse efectiva. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, que abrió el proceso administrativo contra la promotora del líder del PP de Pontevedra, Telmo Martín, las diligencias se habían agotado y la sanción estaba lista para su ejecución. Construcuatro tendría que pagar una multa de un millón de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis años. Pero no será así de momento.

El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corroboró el pago de sobrepagos, aunque no se demostró la concurrencia de delitos-, la Xunta levantó la suspensión. Ahora bien, el departamento que dirige Agustín Hernández, amigo personal de Telmo Martín, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasarán e incluso podrían modificar los resultados del expediente.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del cambio de Gobierno en Galicia la existencia de infracción, consistente en la percepción de sobrepagos en un edificio de la urbanización viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia. Según los anteriores responsables de la consellería, sólo restaba comunicárselo a los afectados y ejecutar la sanción.

La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitará al juzgado el informe pericial emitido por el inspector de Hacienda, así como los documentos de contabilidad de la empresa, en los que se recogen los sobrepagos. Además, volverá a remitir el acuerdo de incoación del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisión supone la apertura de otro período de 15 días para la aportación de

documentación, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracción.

Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protección oficial" está tipificada en la ley como la más grave de las posibles infracciones. Después de la aportación de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrirá período de prueba", en el que incluirá las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La consellería incorporará como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".

Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá Medio Ambiente a redactar la propuesta de resolución. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, se trata de diligencias innecesarias que demorarán e incluso modificarán la tipificación de la infracción, con el objetivo de evitar la sanción a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo Martín posee el 33%, cobró sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta 33.000 euros más para no perder los pisos protegidos. Según el informe policial que encargó el juzgado, el dinero lo repartía la empresa con un intermediario.

A la espera de disculpas

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resolución considera que no hubo "coacción de relevancia penal", por lo que absolvió a los imputados. Lo justificó así; "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzgó el caso destacar la inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidación".

Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un interés político intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no cometí ningún delito: que lo digan", retó el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deberá afrontar el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial constató que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad.

www.elpais.es 29.03.10

HERNÁNDEZ REABRE EL EXPEDIENTE A TELMO MARTÍN POR SOBREPREGIOS EN VIGO

Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no le ha quedado otro remedio que tomar una decisión probablemente dolorosa: expedientar a su compañero de partido y amigo personal, Telmo Martín, por el presunto cobro de sobreprecios en viviendas sociales de Navia, en Vigo. Una vez confirmado el archivo de la causa judicial, al no encontrar la Audiencia Provincial de Pontevedra materia penal en el caso, la Xunta ha levantado la suspensión de la causa administrativa contra Construcuatro, que puede acabar en una multa de un millón de euros, la devolución de las comisiones ilegales y la inhabilitación para edificar vivienda protegida durante seis años.

Fue la Consellería de Vivenda, entonces dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, la que abrió en septiembre de 2007 el expediente a Construcuatro, la inmobiliaria que pertenece en un 33% al presidente local del Partido Popular de Pontevedra. La razón era la investigación abierta por un juzgado de Vigo, basada en las denuncias de 32 compradores de viviendas que pagaron hasta 33.000 euros de más para hacerse con los pisos protegidos. Pero las propias indagaciones judiciales, que pasaron después a la Audiencia Provincial, obligaron a Vivenda a "suspender" el expediente en julio de 2008.

A pesar de que el caso fue archivado en primera instancia, el anterior Gobierno vio en la investigación judicial un respaldo a favor de aplicar la máxima sanción a Construcuatro. Esta opinión se sustenta en que el auto incluía entre los hechos probados y avalados por las pruebas practicadas el cobro de sobreprecios, aunque descarta delitos penales por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño.

También el auto que dictó posteriormente la Audiencia Provincial constató que, aunque los sobrepregios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, sí aparecían en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Sin embargo, la resolución reza: "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". Y descarta "cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal".

Pero las consideraciones de tipo penal tendrán poca relevancia en el expediente administrativo, que se basa en si hubo o no sobrepregios, tal y como se desprende de la investigación judicial. Así, el informe policial encargado por el juzgado de instrucción señala que, de las conversaciones grabadas, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría unos 20.000 euros por la venta de cada piso". Esa cantidad, sumada a lo recabado por el intermediario, supondría un 20% del total del precio oficial de los pisos de Construcuatro en Navia, ubicados en el número 25 de la calle Teixugueira.

De concretarse las propuestas de sanciones, no sería la primera vez que la Administración autonómica multa a una inmobiliaria y le impide construir vivienda protegida. Ocurrió con la sociedad Vigolar, que también cobró sobrepregios en el mismo polígono vigués de Navia.

(www.elpais.com, 02/03/10)

CONSTRUCUATRO SE EXPONE A UNA MULTA MILLONARIA Y A 6 AÑOS DE INHABILITACIÓN

El juez ha dictado que en el cobro de sobrepregios en el polígono de viviendas de San Paio de Navia (Vigo) no existió delito penal por parte de Construcuatro, la promotora en la que participa como socio el ex alcalde de Sanxenxo Telmo Martín, pero en su sentencia considera probado que requirió a los denunciantes pagos en dinero negro. Vivenda entiende, en ese sentido, que el fallo bastará para resolver, cuando se cierre la vía judicial, el expediente sancionador que abrió en octubre del 2007 por las denuncias de 21 propietarios. De acuerdo con la ley en vigor, que tipifica el caso como infracción muy grave, la firma del actual presidente del PP en Pontevedra se expone a una multa que rondará los 2 millones de euros (entre la sanción y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas) y a seis años de inhabilitación para construir pisos protegidos.

El importe de la sanción procede de una estimación realizada a partir de las cantidades que Vivenda, y ahora también el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, considera indebidamente cobradas a los denunciantes. En principio, el expediente de la consellería afecta a 21 adjudicatarios, que pagaron entre 12.000 y 42.000 euros en dinero negro. Vivenda calcula que la constructora de Martín tendría que devolver unos 600.000 euros, que se sumarían a una sanción por el doble de esa cantidad (1,2 millones), con lo que el importe total se aproximaría a los 2 millones de euros.

El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas es consciente de que la inmobiliaria agotará la vía judicial, para defender sus intereses y también para ganar tiempo ante la aplicación del expediente sancionador por parte de Vivenda.

La consellería sostiene que este tipo de prácticas fraudulentas en el mercado de los pisos de precio tasado ya no es posible desde la puesta en marcha del Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, porque ahora es la propia Administración la que le comunica a las empresas constructoras la lista de adjudicatarios de las viviendas, lo que les impide exigir esos pagos.

Construcuatro se librará del endurecimiento del régimen sancionador que introducirá la futura Lei de Vivenda, que actualizará al marco en vigor desde el 2002. El proyecto de ley que la Xunta aprobó en julio, y que se encuentra en la recta final de su tramitación parlamentaria con la previsión de Vivenda de que la Cámara debata su aprobación en diciembre, eleva la sanción por infracciones graves de 60.001 euros a un millón. Y, en el caso concreto de «a percepción de sobrepregios, primas ou cantidades distintas ao prezo na transmisión ou arrendamento de vivendas protexidas», la nueva norma ampliará la multa que ahora es el doble de los pagos cobrados indebidamente hasta cinco veces ese importe.

En cambio, la próxima legislación no regulará la prohibición de que los cargos municipales puedan ejercer la promoción inmobiliaria, como pretendía la conselleira nacionalista con la inclusión de un artículo específico en el borrador inicial del texto. La propuesta de Táboas de que los alcaldes no

podrían compatibilizar esa función con actividades inmobiliarias en los municipios que gobiernan, una idea inspirada precisamente por la intención de evitar más casos como el de la promotora en la que participa el ex regidor de Sanxenxo, tuvo que ser retirada a instancia de la Consellería de Presidencia, que dirige el socialista Méndez Romeu, que alegó que esa pretensión colisionaba con la norma que regula la Administración local. En el texto enviado al Parlamento, la restricción inicial dejó paso a una cláusula descafeinada que se limita a incidir en el deber ético de los alcaldes

(www.lavozdegalicia.es, 27/11/08)

UNA SENTENCIA ACTIVA EL DERRIBO DE UN EDIFICIO DE TELMO MARTÍN EN SANXENXO

La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo. Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra.

La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento.

El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado.

El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.

El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial. (www.elpais.com, 28/02/08)

DOS AGENTES INCULPAN ANTE LA JUEZ A CONSTRUCUATRO POR SOBREPREGIOS

La promotora de Telmo Martín fijaba las cantidades y las recogía el día del pago

Construcuatro, la promotora inmobiliaria de la que es consejero delegado el dirigente del PP Telmo Martín, fijaba las cantidades (de 12.000 a 42.000 euros, en función de la planta a que perteneciera el piso comprado) y el mismo día en que era pagado el sobreprecio por el comprador, otro responsable de la empresa, José Manuel Torres, acudía a Vigo para hacerse con la cantidad que los clientes habían pagado en metálico, sin recibir ningún justificante.

Dos intermediarios, José Luis Veiga y Purificación Justo, confirmaron lo habitual de esa práctica en su declaración ante la juez que instruye el caso del cobro de sobreprecios por pisos protegidos edificadas por Construcuatro en el polígono vigués de Navia. A otro intermediario, Fernando Silva, le fue aplazada

su declaración tras aducir el miércoles su abogado que acababa de llegar de viaje y que no había podido estudiar las diligencias. Los tres y José Tilve, a quien se tomó declaración hace un año, habrían sido los intermediarios de Construcuatro en el cobro de los sobrepregios. Veiga y Silva son agentes inmobiliarios. Purificación Justo no está titulada, aunque ha mantenido relaciones profesionales con Construcuatro a través de una oficina propia que no está catalogada como inmobiliaria. Tilve, que ha negado sus tareas de intermediario contra notables evidencias, es un empleado de Citroën que creyó encontrar una oportunidad de negocio en sus gestiones para la constructora.

Por el cobro de los sobrepregios, Purificación Justo reconoció percibir para sí 600 euros de cada comprador. José Luis Veiga, a quien se permitió abandonar las dependencias del juzgado hurtando la presencia de periodistas, declaró no haber cobrado nada por esa gestión concreta, que enmarcó en el conjunto de otras que su agencia inmobiliaria realizaba para Construcuatro, en Navia y en otras promociones, por las que percibiría un 2% del precio de las ventas.

Algunos de los compradores reclamaron un recibo o una factura que certificara su pago en efectivo, ya que la recuperación del dinero se les señaló inviable. Construcuatro tenía para ellos respuesta.

"Que abandonen la vivienda", era la contestación que Construcuatro transmitía a los intermediarios para que se la hicieran saber a los compradores mosqueados.

Tanto Veiga como Justo declararon que interpretaban los sobrepregios marcados por Construcuatro como el pago de mejoras en los pisos, lo que Antonio Salceda, abogado de una veintena de afectados por los pagos, desmintió. "No sólo no se realizaron esas mejoras, sino que en muchos casos tampoco los materiales empleados en la construcción cumplen la memoria de calidad", afirmó Salceda. "También se ha dicho que las mejoras no se realizaban en el interior de las viviendas, sino en el exterior, en las fachadas, lo que resulta aun más absurdo", añadió.

Todos los procedimientos de cobro de los sobrepregios por parte de Construcuatro están sembrados de advertencias contra quienes los pagaron, bien directamente en sus oficinas de Pontevedra o a los intermediarios que seguían sus instrucciones. El "recaudador" de Construcuatro, Torres, prevenido sobre el momento en que el comprador iba a efectuar el pago, solía esperar en una cafetería hasta que el comprador abandonara las oficinas de los intermediarios, momento en que él acudía para recibir la cantidad pagada y cobrada siempre en metálico.

La empresa constructora ha presentado declaración en Hacienda del ingreso de los sobrepregios, según cree el abogado Antonio Salceda, que aún no ha podido comprobarlo. "En caso de que sea así", afirmó ayer, "la ha presentado después de abrirse el procedimiento judicial, con lo que evita incurrir en delito fiscal. Pero si tenemos en cuenta que a quienes reclamaban facturas o *recibís* no se les facilitaron, es muy probable que en esa misma gestión se hayan destruido pruebas sobre el caso", añadió.

El 'caso Construcuatro'

- Sobrepregios de entre 12.000 y 42.000 euros. Treinta clientes de Construcuatro admitieron haber pagado cantidades de dinero a varios intermediarios, que decían actuar en nombre de la promotora, para acceder a un piso protegido. Fuentes de la investigación cifran el fraude en 3 millones de euros.- Grabaciones judiciales. El juzgado de Instrucción número 2 de Vigo tiene en su poder dos grabaciones de voz que prueban el chantaje de un intermediario a dos clientes. La investigación de momento no ha derivado en imputaciones penales.- Pagos en Construcuatro. Varios compradores en el edificio Castela de Navia declararon ante la Consellería de Vivenda haber realizado pagos en las oficinas de la constructora, a la que la Xunta prevé sancionar con un millón de euros de multa. www.elpais.es 11.01.08

LA JUEZ INVESTIGA LA CONTABILIDAD DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Vigo tiene en su poder desde la pasada semana libros de contabilidad y declaraciones de IVA y del impuesto de sociedades de Construcuatro, **la promotora de la que es accionista y consejero delegado el presidente local del PP de Pontevedra**. La documentación fue solicitada por la jueza para indagar si hay algún rastro del presunto cobro de sobrepregios por viviendas de protección oficial que Construcuatro edificó en el polígono vigués de San Paio de Navia.

Según explicaron fuentes jurídicas, los 200 folios de documentación que está examinando la jueza se refieren a la liquidación de impuestos y las anotaciones contables correspondientes a la venta de pisos protegidos en el edificio del número 25 de la calle Teixugueiras de Navia. En ese inmueble, Construcuatro vendió 82 pisos protegidos. Varios propietarios denunciaron en su día, y posteriormente ratificaron ante la jueza y los inspectores de la Consellería de Vivenda, que intermediarios que decían actuar en nombre de la promotora de Telmo Martín les exigieron el pago de comisiones de entre 14.000 y 42.000 euros para acceder a los pisos, cuyo precio está oficialmente tasado.

Nuevas declaraciones

La jueza ha llamado a declarar para esta semana a tres de esos intermediarios, José Luis Veiga y Jesús Fernando Silva Portela, representantes de dos agencias inmobiliarias viguesas que gestionaron la venta de pisos, así como Purificación Justo Pérez. Veiga y Silva ya reconocieron ante la Consellería de Vivenda que se incrementó el precio de algunos pisos, pero lo atribuyeron a mejoras en los materiales. De un cuarto intermediario, José Tilve, hay conversaciones grabadas con autorización judicial en las que amenaza a los compradores con dejarles sin piso si no abonan un sobreprecio. En una de las conversaciones, Tilve ofrece a un cliente un número de cuenta bancaria de Construcuatro para que formalice el ingreso. Sin embargo, el intermediario ha negado los hechos en sus declaraciones a la Consellería de Vivenda, que tiene un expediente abierto a Construcuatro por este motivo. www.elpais.es 07.01.08

DOS AGENCIAS CULPAN A CONSTRUCUATRO POR COBRAR SOBREPREGIOS

Las comisiones se justificaban por mejoras en las viviendas protegidas

Junto al relato de los propietarios del edificio Castelao, en Vigo, y las cintas de las dos conversaciones grabadas con micrófono oculto a un intermediario que revelan la existencia de las comisiones ilegales, la causa abierta en el juzgado vigués contra la promotora Construcuatro por el cobro de sobreprecios en pisos protegidos contiene ya la versión que los responsables de las inmobiliarias Veiga y Silva -que participaron en la compraventa de los inmuebles- ofrecieron a la Consellería de Vivenda.

En las respuestas al cuestionario planteado por el instructor de la consellería, los propietarios de las dos agencias negaron haber percibido, ni siquiera reclamado, sobreprecios a cambio de vender las viviendas de protección oficial y trasladaron la responsabilidad a la promotora en la que **el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín**, figura como consejero delegado y copropietario. El primero en comparecer, José Luis Veiga Rodríguez, dueño de la inmobiliaria Veiga, señaló que los inmuebles, en cuyo traspaso negó haber participado, se vendían "al precio que fijan por metro cuadrado los planes estatales de vivienda". Dicho esto, Veiga admitió que "el importe de los pisos variaba en función de la altura", una práctica prohibida por la legislación que constituye al mismo tiempo una evidencia del cobro de comisiones ilegales en el edificio de San Paio de Navia.

No fue la única contradicción en su testimonio que han advertido los investigadores. A preguntas de los responsables de Vivenda, Veiga, a quien varios compradores habían identificado como la persona que les vendió los pisos, rechazó haber "prestado servicios a Construcuatro", si bien reconoció: "Algunas personas interesadas me pidieron que los recomendase a Construcuatro para que les vendiese los pisos". Según él mismo admite, ese trámite lo realizó ante el "señor Torres", en referencia a José Manuel Torres García, copropietario de la promotora y a quien al menos dos compradores acusan de haberles cobrado en mano distintas cantidades en dinero negro.

Según su relato, Veiga no percibió ni un euro por esa gestión. Tampoco cobró, según se deduce de sus palabras, por "prestar un despacho de su agencia para que Construcuatro pudiera cerrar las operaciones en Vigo sin obligar a sus clientes a desplazarse a la sede de su oficina en Pontevedra". Cuestionado sobre si en algún momento recibió dinero por encima del precio tasado, el propietario de la inmobiliaria Veiga señaló: "No lo hice pero me consta que algunos clientes solicitaban algunas mejoras y le pagaban [a Construcuatro] por ellas". La supuesta realización de obras no incluidas en la memoria es también el hilo argumental del segundo declarante.

En su testimonio en la consellería, que también figura en las diligencias judiciales, el representante de la agencia Silva eludió cualquier responsabilidad. Jesús Fernando Silva Portela, que se presentó como "agente de la propiedad inmobiliaria", asumió su papel como intermediario pero negó haber cobrado o exigido comisiones ilegales. "Construcuatro me pidió que actuara como mediador de unas viviendas que

tenían una mejoras muy buenas", señaló. Esa diferencia de calidades respecto a la memoria inicial fueron las que, según Silva, explicarían los sobreprecios, que él negó haber cobrado "porque ese tema se trataba directamente en Construcuatro".

Preguntado sobre el importe que solicitaba a los compradores, el representante de la inmobiliaria Silva respondió que "el que fijaba la ley". A continuación añadió un matiz significativo: "A todos los clientes les dije el precio oficial. No obstante les advertí que debían hablar con Construcuatro porque había mejoras que estaban a la vista cuyo pago debían negociar con ellos".

Silva negó haber recibido ningún sobre con dinero y señaló que eran los responsables de la promotora los que acudían a buscarlo a sus oficinas. "Yo no podía coger dinero sin firmar", concluye. Esta declaración contrasta con la de varios compradores de los pisos, quienes denunciaron que la promotora y una persona llamada "señor Veiga" ofrecieron camuflar las comisiones facilitando facturas falsas por obras no realizadas.

www.elpais.es 19.11.07

UN SOCIO DEL LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA COBRÓ EN MANO DINERO NEGRO

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao de Vigo han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de Vigo, según consta en la documentación que figura en las diligencias previas que instruye la titular del Juzgado número 2 de Vigo.

En sus testimonios algunos compradores reconocen haber "pagado dinero negro en mano a José Manuel Torres", copropietario de la empresa Construcuatro, junto al presidente del PP local de Pontevedra, Telmo Martín y a un tercer socio, Eugenio Sobral.

"Ingresé 18.000 euros a través de una transferencia bancaria a Construcuatro porque esa cantidad formaba parte del precio oficial del piso, pero los otros 33.000 euros [de la comisión ilegal] se los entregué en un sobre a José Manuel Torres de Construcuatro". Es una de las últimas declaraciones de compradores de viviendas en el edificio Castelao de Navia que la juez tiene sobre la mesa en la que se acusa a uno de los copropietarios de Construcuatro, José Manuel Torres García, de cobrar personalmente los sobreprecios a cambio de formalizar los contratos para los pisos de protección oficial.

El nombre de José Manuel Torres, propietario de un tercio de las acciones de la empresa constructora, aparece en otras dos declaraciones de los 24 compradores que han reconocido haber pagado sobreprecios, que la promotora les exigió como requisito indispensable para venderles el piso de protección oficial que se les había adjudicado. Según recoge el expediente abierto por la Consellería de Vivenda y que ya ha sido incorporado por la juez a las diligencias previas, otros dos vecinos del edificio Castelao aseguraron haber entregado en la inmobiliaria Silva -una de las dos, junto a la agencia Veiga, que actuaron de intermediarias de la empresa Construcuatro- 32.000 y 35.500 euros, respectivamente, en dinero negro. Ambos denunciantes afirmaron que fue el personal de la agencia quien les explicó que los pagos debían hacerse de ese modo, "porque así lo había decidido el señor Torres, apoderado de Construcuatro".

El resultado de los cuestionarios realizados por el departamento de Teresa Táboas a los propietarios de los pisos constituye, según fuentes cercanas a la investigación, la principal prueba del fraude, junto a las dos grabaciones autorizadas por la juez que desvelan el cobro de sobreprecios por parte de un tercer intermediario, P.T.

De la palabra de los compradores de los pisos que sí han querido hablar -casi la mitad de los 87 propietarios de viviendas en el edificio Castelao- se deriva que al menos 24 desembolsaron distintas cantidades en dinero B que oscilan entre los 12.000 y los 46.000 euros. Un porcentaje significativo reconoció los pagos, pero eludió detallar el importe y también el nombre de los intermediarios a los que les fueron entregados los sobres.

Un tercer grupo de compradores, aproximadamente la mitad, ha negado tajantemente el pago de sobreprecios. Fuentes próximas al caso no descartan que la empresa y los intermediarios hubieran liberado de las comisiones a una parte de compradores del edificio Castelao. Eso explicaría en parte el reducido número de denuncias (de momento sólo dos en la vía penal, aunque el abogado de la

acusación anuncia que pronto serán 30). A ellas hay que añadir los 24 escritos del expediente administrativo, también en manos de la juez, que instruyó la Consellería de Vivenda.

La documentación aportada por este departamento al juzgado detalla que la inmobiliaria viguesa Silva habría percibido al menos 167.000 euros en comisiones ilegales de manos de seis compradores de viviendas en el edificio Castelao. Otra agencia de la misma ciudad, Veiga, que también medió en el negocio, ingresó otros 70.000 euros en comisiones ilegales a cambio de vender tres pisos protegidos. Según figura en la documentación del juzgado, la promotora Construcuatro, bien en sus oficinas de Pontevedra o bien a través de sus empleados o cargos directivos, habría recibido directamente 90.000 euros además de un alto porcentaje de los cobros realizados por sus agentes.

www.elpais.es 22.10.07

"BILLETES EN BOLSAS PARA ENTREGAR EN UNA CAFETERÍA"

El dossier en poder de la juez que investiga el caso es un relatorio en primera persona firmado por 24 compradores de pisos protegidos en el que se exponen sobre los métodos utilizados por la promotora para percibir las comisiones ilegales y evidencia que el pago de sobreprecios fue en muchos casos la única salida para acceder a una vivienda en el edificio Castelao.

Tal y como dejaron patente las grabaciones de voz autorizadas por la juez cuyo contenido publicó este diario, en las que un intermediario exigía comisiones ilegales a dos clientes de la promotora, el expediente instruido por Vivenda constata amenazas y extorsiones por parte de las agencias que mediaron en la compraventa. Además pone al descubierto la connivencia entre dos inmobiliarias vigesas, Silva y Veiga, y Construcuatro a la hora de ejecutar el fraude. En uno de los escritos un propietario afirma haber escuchado de su vendedor la fórmula para repartir los 33.000 euros de la comisión: 18.000 para Construcuatro y 15.000 para el encargado de cerrar la venta.

El relato de otro comprador reconoce que acudió a una cafetería "con 19.300 euros en billetes metidos en una bolsa de plástico" que entregó a un intermediario y asegura que sólo unos minutos después ambos acudieron a las oficinas de Construcuatro en Pontevedra donde rubricaron los contratos. Un tercer cliente afirma haber abonado 31.500 euros de sobreprecio a la inmobiliaria Silva y añade que, previamente, el personal de Construcuatro en Pontevedra le corroboró que la agencia actuaba en representación de la promotora. www.elpais.es 22.10.07

"42.000 EUROS EN NEGRO"

En la misma agencia otro comprador se vio "obligado" a abonar "42.000 euros en B". "Me dijeron que si lo quería, bien, y que de lo contrario tenían 20 aspirantes en la lista", añade. Y hubo un cliente a quien se le reclamaron en el momento de la compra 12.000 euros como anticipo, que nunca figuraron en la contabilidad oficial. Además son legión los vecinos del edificio Castelao que admiten haber recibido negativas cada vez que solicitaron facturas de las cantidades entregadas.

Por este mismo caso, la Consellería de Vivenda propuso ya una sanción de un millón de euros a Construcuatro además de obligarle a devolver las cantidades cobradas al margen del valor de la vivienda pública y una inhabilitación por seis años para edificar pisos protegidos en Galicia. De momento, la vía administrativa y la judicial siguen caminos complementarios, si bien cualquier condena en los tribunales invalidaría la sanción propuesta por el Gobierno gallego. www.elpais.es 22.10.07

LA PROMOTORA INTENTÓ CAMUFLAR EL FRAUDE CON FACTURAS FALSAS DE OBRAS INEXISTENTES

Los tratos cerrados en la sede de Construcuatro y la entrega de las viviendas no impidieron que los intermediarios y la promotora siguiesen llamando a los compradores una vez ocupados los pisos. En junio, con la investigación judicial en marcha, los representantes de la constructora intentaron camuflar los sobreprecios. Así consta en el expediente que figura en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Me propusieron disfrazar los cobros con facturas de mobiliario y

mejoras en el piso que no habían hecho, y lo rechazé", asegura un propietario. El resto de declaraciones corroboran que no es un caso aislado.

Otro de los vecinos admite que tres meses después de firmar las escrituras, el gerente de la inmobiliaria, "el señor Veiga", le llamó para ofrecerle recibos de obras no acometidas en su piso para "camuflar" las comisiones ilegales. Los clientes que trataron con Construcuatro recibieron llamadas parecidas. Según sus testimonios, ninguno de ellos aceptó la propuesta. De confirmarse la existencia de facturas falsas los representantes de las inmobiliarias y Construcuatro estarían incurriendo en otro delito, falsificación de documentos, además de los supuestos de los que actualmente se les acusa, fraude fiscal y estafa.

www.elpais.es 22.10.07

TELMO Y LOS GENOVESES

Es casi imposible tener perspectiva serena sobre política y políticos, porque lo que hacen nos afecta a todos. Y eso sin contar con que España es un país terriblemente faccional, apasionado y partidista. Un faccionalismo de banderías, divisor, que en principio nos es extraño, pero que cada día la derecha de la madrileña calle Génova nos trae más a Galicia. Así que, implicados y obcecados, olvidamos completamente que los políticos son como los demás.

Es cierto, tienen ambición, pero ¿quién no la tiene? Todos ambicionamos conseguir un afecto, o retenerlo; conseguir un trabajo, un puesto, un reconocimiento... No son distintos a los demás mortales. Son personas con familia, amigos, sentimientos, perros y gatos... ¿Y, acaso, si los pinchásemos no sangrarían como cualquiera? En el juego de poder, los políticos son guerreros que luchan, pero los guerreros también sufren. Si recordamos eso podremos ver con perspectiva el sufrimiento de algunos políticos y así, comprendiendo al ser humano que va bajo la armadura violenta, los respetaremos más. No debemos desearle a un político lo que no deseamos para nosotros.

En ese sentido, aunque estemos en radical y absoluto desacuerdo con sus posturas políticas, aunque nos enfaden, debemos guardar cierta consideración para las carreras protagonizadas por Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijoo. A ambos les tocó una suerte semejante, aunque quizá tengan finales distintos: recibieron una herencia maldita. A ambos les fue prometida una herencia opulenta pero, luego de un proceso de discusión familiar lleno de incertidumbres, incidentes y litigios, y cuando finalmente llegó el momento de recibir la herencia, les fue arrebatada por alguien ajeno a la familia. Además, de la familia enemiga. Cómo no sentirse estafado, humillado y herido. Es muy difícil para cualquiera sobreponerse psicológicamente. ¿Cuántas personas en esa situación serían capaces de aceptarlo y reconocer a quien finalmente heredó como gobernante legítimo? Y ahí hay que ponerle un positivo al Núñez Feijoo: encajó algo tan duro de un modo pasable.

Pero eso no quita que su situación sea un verdadero tormento que sólo él conoce, atrapado entre lo viejo y lo nuevo, entre las ataduras de un pasado que no desaparece y la búsqueda de algún futuro posible. Ahí está Telmo Martín, un hombre joven que en realidad es un político viejo. Un resto de lo que fue el PP en Galicia, corrupción descarada, desvergonzada y sin límites. La más vieja Galicia, la que nos dejó en herencia tantos desastres y caos en todos los ámbitos, el urbanismo, Reganosa, la Cidade da Cultura, dos superpuertos adosados, la destrucción del natural..., que está costando tanto ordenar y racionalizar. medio natural, que está costando tanto ordenar y racionalizar.

El PP gallego nació de la victoria de Alianza Popular sobre la UCD, aquel intento frágil, fugaz y fracasado de civilizar a la derecha española. Aquella AP de Manuel Fraga se levantó sobre el apoyo de verdaderos campeones de la economía "informal", contra bando y marea: Terito, el Patriarca, Ligerio, Bea Gondar, Nené Barral...El fracaso y descomposición de la UCD gallega hizo que todos los conseguidores cayesen en la cazuela de Fraga Iribarne y, reunidas al fin todas las viejas estructuras heredadas del Régimen, resultó el PP gallego: una estructura densa y extensa que penetró el territorio y la sociedad, la economía, la ideología y hasta la imagería y los símbolos. Nuestra derecha no se levantó sobre una clase industrial o financiera, no sobre el empresariado industrial y financiero catalán o vasco, sino sobre un estadio económico anterior, aventureros sin escrúpulos que burlan las leyes para imponer su ley a sus vecinos.

Y para imponer sus precios. Leemos con pasmo que el señor Telmo Martín dice que lo que publicó este periódico, las pruebas de la extorsión a los compradores de viviendas sociales y del fraude fiscal es "el precio de estar en política". Ahora estamos conociendo que el precio de estar en política en esta derecha

gallega son los euros negros conseguidos con chantaje a las familias más humildes. Núñez Feijóo está emparedado entre la calle Génova y sus abanderados y el pasado, pero alguien debe dimitir, o él o Telmo.

Al Pacino protagonizó El precio del poder, al menos aquel personaje no disimulaba ni se metía en política. También protagonizó Atrapado por su pasado. Todo está en el cine.

www.elpais.es 14.10.07 SUSO DE TORO

VIVENDA ASEGURA QUE LA SANCIÓN A CONSTRUCUATRO SIGUE ADELANTE

La Consellería de Vivenda seguirá adelante con el expediente de sanción a la inmobiliaria Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, por presunto fraude en la venta de viviendas protegidas en el polígono vigués de Navia. El departamento de Teresa Táboas, que no ha recibido notificación del juzgado que investiga el caso para que lo archive, niega haber descartado la existencia de intermediarios en el presunto cobro de los sobreprecios.

La consellería no ha recibido notificación alguna del Juzgado número 2 de Vigo, que instruye el caso abierto por el presunto cobro de sobreprecios en la compraventa de vivienda protegida contra la promotora del edificio de Teixugueiras, 25 y contra dos agencias inmobiliarias viguesas. El departamento que dirige Táboas sigue adelante, por lo tanto, con el expediente de sanción, que fuentes de la consellería aseguran que desembocará en una multa de un millón de euros a la empresa de Telmo Martín, dadas las pruebas contra Construcuatro.

Vivenda cuenta para culminar el expediente con un plazo máximo de seis meses. La penal y la administrativa son dos vías complementarias "que se pueden llevar en paralelo" hasta que el juzgado califique los hechos, precisó ayer la consellería en un comunicado. La sanción, no obstante, no se podrá ejecutar hasta que se produzca la resolución judicial, dada la prioridad de la vía penal frente a la administrativa.

Pero mientras eso no ocurra, Vivenda seguirá trabajando en el expediente "con total normalidad". La consellería asegura mantener una "total colaboración con el juzgado de instrucción número 2 de Vigo", al que remitirá todo el expediente que obra en su poder. Pero niega el departamento que dirige Táboas que la juez haya solicitado ningún informe a la Delegación de Vivenda, y que desde esa consellería se remitiese contestación alguna al juzgado en la que se excluyera la existencia de intermediarios en la compraventa de pisos protegidos.

El comunicado de la consellería denuncia la existencia de "personas vinculadas a la denuncia judicial presentada por dos presuntos afectados" por el cobro de los sobreprecios, "que están más interesadas en entorpecer la labor" de la consellería "que en aclarar" el presunto fraude y sancionar a los responsables. En todo caso, el asunto "trasciende a los directamente afectados", incluidos los denunciantes, "porque se trata de viviendas construidas en suelo adquirido y urbanizado con recursos públicos".

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subrayó ayer la vertiente política del caso, e invitó al presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a "actuar en consecuencia". Tras presidir el Cosnello de la Xunta, Touriño aseguró confiar en la justicia, y añadió: "Iba a decir que también confío en que Feijóo actúe en consecuencia, pero la verdad es que tengo pocas esperanzas".

www.elpais.es 12.10.07

FEIJÓO DESVINCULA LOS NEGOCIOS DE TELMO MARTÍN DE SU ACTIVIDAD POLÍTICA

El presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer favorable a una "investigación sin límites" en el caso del presunto cobro de sobreprecios en vivienda protegida que realizó la promotora Construcuatro, de la que participa el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín. "Lo que me sorprende es que la Consellería de Vivenda esté tardando tanto tiempo, dado que los afectados llevan hablando desde hace tiempo", sostiene.

Feijóo no aclaró en qué podrían afectar las denuncias a Construcuatro a la política de vivienda del PP gallego e insistió en investigar primero "y luego hablar". "No estamos dispuestos a condenar a personas que de momento ni fueron imputados", contestó al ser preguntado sobre si su partido piensa iniciar una investigación interna sobre la posible implicación de Telmo Martín. A pesar de reclamar el pasado mes de septiembre la dimisión de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, por irregularidades denunciadas por el PP sobre la concesión de la Vía do Barbanza, el presidente del PP gallego considera "abrumadora" la diferencia a la hora de pedir responsabilidades a Martín. "Hay que plantearse qué tiene que ver como persona el señor Telmo Martín en este asunto, además de lo que tenga que ver la empresa en la que participa", argumentó. "Una cosa son las actuaciones en el ámbito político y otra cuestión son actuaciones en el ámbito mercantil".

El responsable del PP sostiene que el caso no afectará a la imagen del partido porque, explicó, cada vez que hay denuncias sobre un dirigente del PP quedan archivadas, "como en el caso concreto del presidente local de Pontevedra". "Cada vez que hubo denuncias el político ganó las elecciones limpiamente en las urnas", argumentó.

El secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, recriminó ayer a Feijóo que no haya adoptado ninguna medida con respecto a Martín. Varela asegura que, independientemente de las repercusiones de tipo judicial, "está perfectamente contrastado que hay un responsable político que tiene una empresa que cobró sobreprecios". "Esto tiene que tener una asunción de responsabilidades inmediatas tanto en el ámbito personal como en la organización del Partido Popular", subrayó. Varela sostiene que se está "ratificando" que el PP "es el primero de la fila para pedir responsabilidades y el último de la fila para asumirlas cuando le corresponde".

(www.elpais.com, 10/10/07)

TELMO MARTÍN: "ES EL PRECIO A PAGAR POR ESTAR EN POLÍTICA"

El PP sostiene que no tomará medidas internas ni entrará en "juicios paralelos"

El recién elegido presidente del Partido Popular en Pontevedra, Telmo Martín, se mostró ayer seguro de que "no hay nada de nada" respecto al presunto cobro de partidas en dinero negro en vivienda protegida que realizó la constructora Construcuatro, de la que es consejero delegado y posee el 33%. Martín sostiene que tiene que pasar "por este trance porque es el precio que hay que pagar por estar en política" y recalca que nada "saldrá a la luz" si no fuese socio de Construcuatro.

El presidente del PP pontevedrés aseguró "estar tranquilo y preparado para aguantar cualquier cosa" y que hablará cuando concluya el expediente anunciado ayer por la Consellería de Vivenda, según declaró ayer a Radio Pontevedra. Martín lamentó que se esté haciendo "un juicio paralelo de lo que va a ocurrir" y que no se respete la separación de poderes.

En la misma línea de defensa se situó el Partido Popular que, en palabras de su secretario general, Alfonso Rueda, indicó, preguntado si el PP tiene pensado tomar medidas al respecto, que el partido no apoya ni "hará juicios políticos paralelos" y de Telmo Martín "menos que nadie". Rueda recordó que el nuevo presidente -"elegido con el 98% de los votos" el pasado fin de semana- del PP en Pontevedra "ni siquiera está imputado y advirtió que "hay que dejar actuar a la justicia". "Telmo anunció que daría explicaciones en su momento", recalcó.

Desde la dirección nacional del PP, su secretario general, Ángel Acebes, se mostró "seguro" de que el partido en Galicia actuará "como siempre con absoluta diligencia y transparencia" ante cualquier denuncia.

El portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, indicó que este "escándalo de primera magnitud" apunta a que la Xunta "en la que estaba Feijóo" se encontraba rodeada de "señores de guante blanco". "Es un robo de los recursos públicos a las familias más necesitadas de un grupo de espabilados con información privilegiada", sostiene el portavoz del grupo socialista. "Por lo que se demuestra en la cinta había gente que utilizaba la política de vivienda para estafar", insistió y "con el nivel de relación entre Feijóo y Martín no cabe duda de que fuera un conocedor privilegiado". Rego recalcó que algunas tramas urbanísticas como la de Nigrán provienen de la provincia de Pontevedra "y del entorno de Rajoy, Feijóo, Telmo y Louzán".

Rego reclamó una explicación del entonces máximo responsable de la vivienda en Galicia y destacó como necesario que comience "a asumir alguna responsabilidad". "Va a ser difícil que Feijóo salga impune, porque ya van siendo muchas cosas", argumentó.

El grupo parlamentario del BNG acusó al PP de "tener varias varas de medir según si los casos afectan a un militante del PP o no". Carlos Aymerich, portavoz de los nacionalistas en el Parlamento, sostiene que no le "reclaman nada" al PP, con relación a la ausencia de medidas tomadas desde el partido conservador, "porque detrás de Telmo tendrían que ir muchos más. Algunos se retratan con las medidas que toman", concluyó.

Aymerich acusó a Feijóo de no actuar en este tipo de casos "que todos sabemos que pasan" mientras fue el responsable de la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la vivienda en Galicia.

EL PAÍS 9 OCT 2007

NOMBRADO CON EL RESPALDO DE RAJOY

Telmo Martín fue investido presidente del PP de Pontevedra el sábado después de obtener el 97% de los votos en el congreso local al que se presentó como único candidato. A su proclamación asistió el presidente nacional del partido, el pontevedrés Mariano Rajoy, que evitó pronunciarse sobre los escándalos que salpican a la empresa del dirigente pontevedrés.

www.elpais.es 09.10.07

" LLEVA EL DINERO 'B' A LA OFICINA DE LA EMPRESA "

La segunda de las cintas que recogen las negociaciones entre el intermediario que se encargaba de captar los clientes para Construcuatro y uno de sus compradores prueba que la promotora, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, ingresaba la mayor parte de las comisiones ilegales exigidas a cambio de vender viviendas de protección oficial en el edificio Castelao del barrio vigués de Navia.

Durante la conversación que fue grabada con la autorización de la juez y bajo supervisión de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, P.T., el mediador de Construcuatro, el mismo que aparecía en la primera de las cintas cuyo contenido transcribió ayer este diario, reconoce que más de un tercio de las comisiones ilegales iban a parar a su hijo. El intermediario percibió un importe de 32.000 euros en dinero negro, que, según sus palabras, se repartieron Construcuatro (20.000) y su hijo (12.000). El cliente tuvo que pagar otros 200 euros aparte en concepto de lámparas halógenas. Esta es la transcripción del contenido de la cinta de voz al que ha tenido acceso EL PAÍS y de la que se eliminan los datos personales del cliente y de la sucursal bancaria que tramitaba algunos pagos.

P.T. Buenos días.

Comprador. Buenos días, vengo del banco y aún tengo que ir al notario a firmar el préstamo.

P.T. ¿Cómo quedó el tema? ¿Tú cuál es el que quieres? ¿Quieres para adelante y arriba?

C. Yo quería el sexto, que es el que vi, pero bueno...

P.T. No, no... si... no se le puede hacer frente al sexto... ¿Yo te di los papeles esos?

C. Sí, me dio los precios y eso, con el sexto y la documentación que hay que aportar.

P.T. En el banco hay que tener cuidado de no hablar nada del dinero B.

C. Ah, nada, ¡claro!

P.T. Ni hacer comentarios, ni nombres de empresa, ni nada.

C. Ay, eso no, claro,

P.T. Porque a veces por una cosita de nada la vamos joder, que al final no queda en nada, pero es un rollo y se mete uno en un tinglado del carallo.

C. Sí, claro.

P.T. (Ruido de papeles). El sexto, el séptimo, compara la diferencia. Ahora los precios son todos más o menos igual.

C. Sí, el sexto es el que me dio a mí.

P.T. Sí, es que varía, mira, ves, el B tiene tres metros más.

C. Eso es lo de la documentación, que me volví loco para juntar todo eso, menos mal que el del banco me hizo un préstamo, que si no, no había forma.

P.T. Si, no es fácil. No es fácil

C. Le tuve que pedir un préstamo sin justificar nada.

P.T. Para comprar el despacho, para comprar los muebles

C. Pero ellos te piden factura, que yo no les presento nada, al final el del banco quiere justificarlo de alguna manera (...)

P.T. Hay diferencias así de precios de garaje, porque algunos tienen la bodega más grande, porque al hacer la división horizontal, designaron ellos y decidieron poner el lote completo.

C. Si, claro.

P.T. Esto es el precio del piso, la hipoteca serían 99.000 euros.

C. Si, casi 100.000. Hay que hacer la reserva este mes ya.

P.T. Me voy a enterar, porque yo sé que uno que fue allá.

C. A Pontevedra

P.T. Sí, uno que fue con la idea de hacer la reserva y de dar los 20.400 euros al firmar la compraventa.

C. Sí

P.T. Le dio 1.000 y el resto lo agregó a la hipoteca

C. ¿Los 20.000?

P.T. Si. A lo mejor a ti te interesaría...

C. Está bien que los 20.000 de la firma vayan con la hipoteca.

P.T. Me dijeron que había que negociarlo.

C. Yo tengo que pedir el 100%, ya hablé con él, presentando un aval no hay problema.

P.T. Porque esto si se hace ya el martes...

C. Hasta el jueves no podría, trabajo el miércoles.

P.T. Es igual. Quedo contigo el jueves por la tarde.

C. Porque después de entregar lo de la reserva ya avisarán para hacer lo próximo.

P.T. Si es así, se hace la firma del contrato y compraventa a la vez.

C. Yo, al banco los 20.000 euros ya los pedí con la hipoteca y en principio no hay problema.

P.T. Lo que urge es hacerlo cuanto antes. Te quedarías con el sexto.

C. Hombre, yo en principio sí. Vamos a hacer cuentas, a ver cómo nos sale. ¿Habló con su hijo?

P.T.: Sí, los 12.000.

C. ¿No hay forma de 10.000?

P.T. No. Bueno es que hay gente de palabra, me caíste simpático, muy formal pero el también tiene que hacer su vida.

C. ¿12.000? ¿Y el sexto, cuánto era para la empresa?

P.T. Ah! ¿El B?

C. Sí, el B. Mire ahí cuánto es.

P.T. A ver, 24.265.

C. ¿Subió el tema?

P.T. Y el tercero son 18.000.

C. Me quedo con el tercero, no me queda otra.

P.T. Son 2.000 euros que suben cada uno.

P.T. Fue lo que te dije, sube en dinero B 1.265 euros pero baja en A.

C. El problema es que éstos los puedo justificar en el banco y los otros no.

P.T. Yo te agencio el tercero.

C. Porque el sexto, en 20.000 ni de broma. ¿No?

P.T. ¿Y si consiguiese el cuarto?

C. ¿El cuarto por 20.000? Más 12.000 de su hijo, 32.000. Yo ahora junto 29.000. ¿Habría posibilidad de entregarle cuando el banco me pueda dar justificados los 3.000 restantes? Yo junté 29.000 entre la hipoteca, lo que me prestó hasta la señora del piso donde estoy de alquiler... porque eso después lo saco de la cuenta vivienda, ¿entiende?

P.T. Claro, ese problema lo tiene también mi hijo.

C. Porque ahora me hizo un préstamo puente y después puedo sacar de la cuenta vivienda.

P.T. Yo si te puedo...

C. ¿El cuarto, por 20.000? Y 12.000 para su hijo, yo se lo acepto ya, pero bueno le tengo que dar esos 3.000 euros, cuando pueda firmar la hipoteca.

P.T. Vamos a ver.

C. Vale

P.T. Además, el cuarto tiene halógenos. Son 200 euros más por unos halógenos que le puso el que se iba a quedar con él.

C. Le doy los 20.000 euros para la empresa y 8.000 para usted o los reparte a su manera y después los 4.000 cuando la hipoteca. Eso, yo le doy ahí, que esto es para la empresa, 20.000.

P.T. Sí porque a la empresa hay que...

C. Hay que dárselos.

P.T. No se puede...

C. O sea que a la empresa hay que darle los 20.000.

P.T. No se puede andar a jugar con...

C. Pues se los daría a usted.

P.T. Aunque se fíen de mí, pero no se fían de ti.

C. Claro

P.T. No te conocen de nada.

C. O sea que entonces, ¿haría eso, no? Si acepto, claro.

P.T. Mira, yo tengo posibilidades del cuarto, son 20.000 y reservo el cuarto.

C. Y quedamos el jueves.

P.T. Para allá hay que llevarle 20.300.

C. ¿Redondeamos en 20.000?

P.T. No, no, no.

C. 20.200, ¡joder! Es que no baja ni un céntimo.

P.T. Yo no voy a andar con rebajas. Tienen gente esperando

C. Pues yo el jueves llevaría lo de la empresa, más 8.000 para usted y los otros 4.000 cuando pueda sacar de la cuenta vivienda. Porque pedir más ya no pido, junté 19.000 entre la señora del piso, mi novia y 9.000 del banco que me hizo un préstamo, porque ya llegué allí desesperado.

P.T. Y yo, que te quité 3.000.

C. Claro, es que si no...

P.T. ¡Estás teniendo suerte, eh!

C. Si no, era imposible

P.T. Yo hice eso sin hablar con él para nada y mira él no está de acuerdo, pero bueno, como tiene que adaptarse a lo que yo...

C. Es que yo más ya no podía, fui al banco desesperado.

P.T. Sólo faltaba que fueras a atracarlo.

C. Sí. Tengo que atracar un banco para comprar un piso...

P.T. Lo que me tienes que pagar son los halógenos

C. Vale, ¿Cuánto es?

P.T. Doscientos. Es que yo tengo que dar el dinero al del piso.

C. Se los pago con los 4.000.

P.T. Y es una cosa buena, porque no tienes que andar escabichando ahí, haciendo obra.

C. Claro están puestos ya.

P.T. Están hechos.

C. Perfecto, me quedo con el cuarto así ya no doy más vueltas. Cuento con eso, 28.000. Estos dos son aparte y después, le doy 4.200, lo de los halógenos.

P.T. Allí no te hacen papeleo ninguno mientras no entregues los 2.000 y tal, tú le llevas para el en B, 20.265 euros en un sobre.

C. Eso es lo que le llevo, en efectivo tiene que ser, ¿no?, en billetes.

P.T. Sí,sí.

C. Vale, ¿ y en Pontevedra el sitio ese donde queda, es la oficina de ellos, de la empresa?

P.T. Sí, detrás del Gobierno Civil, casi enfrente del ayuntamiento.

C. El Ayuntamiento, sí, donde está la Alameda.La sede de Construcuatro en el primero piso del número 10 de la calle Prudencio Landín, detrás de la Subdelegación del Gobierno].

P.T. Bueno, yo voy contigo.

C. Usted va conmigo.

P.T. Además, solo no puedes ir, que no te conocen de nada.

C. Claro.

www.elpais.es 09.10.07

LA XUNTA MULTARÁ A LA PROMOTORA DEL LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA

Construcuatro deberá pagar un millón de euros y devolver los sobrepagos de los pisos

La Consejería de Vivienda de la Xunta sancionará a Construcuatro, la promotora en la que el recién nombrado presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, ejerce como consejero delegado, con una multa de al menos un millón de euros por cobrar sobrepagos en la venta de pisos protegidos. El expediente exige la devolución de las comisiones ilegales y podría conllevar la inhabilitación de la promotora para edificar viviendas protegidas durante seis años.

El Gobierno gallego ha propuesto una sanción mínima a Construcuatro de un millón de euros, además de obligar a la promotora a devolver las comisiones ilegales cobradas a los compradores por los 96 pisos de protección oficial edificadas en el barrio vigués de Navia, que de momento el Gobierno gallego cifra en otro millón de euros. El expediente sancionador de la Consejería de Vivienda tiene su origen en una denuncia de tres particulares que aseguraron haber sido coaccionados y amenazados por intermediarios de la promotora -de la que el presidente del PP de Pontevedra es consejero delegado- para reclamar entregas en dinero negro al margen del precio que la ley fija para las viviendas protegidas.

Después de entrevistar a la mayoría de residentes del edificio promovido por Construcuatro, la Xunta concluye que al menos 21 de los 95 propietarios pagaron comisiones ilegales que oscilan entre los 12.000 y los 42.000 euros. Según los declarantes, la entrega del dinero en B se efectuaba antes de firmar los contratos de compraventa y no constaba en la documentación que la constructora enviaba a la consejería.

Los 21 compradores aseguran haber sido obligados a pagar las comisiones bajo la amenaza de no venderles los pisos y añaden que Construcuatro se negó a entregar recibos de las cantidades aportadas. Además de proponer una multa mínima de un millón de euros, el expediente abierto por la Xunta solicita a Construcuatro la devolución de los 978.800 euros que sus clientes afirman haber abonado en dinero negro.

Esta cifra no incluye todos los sobrepagos cobrados, ya que muchos de los propietarios se han negado a concretar ante la consejería las cantidades abonadas en dinero negro. Fuentes de la Xunta han confirmado a EL PAÍS que la multa económica podría verse incrementada cuando hayan declarado todos los vecinos del edificio.

El Gobierno regional recuerda que el expediente sancionador podría concluir además con inhabilitación de la promotora para construir vivienda pública durante seis años, algo que ya ocurrió a la sociedad Vigolar, que también cobró sobrepagos en el mismo polígono.

El caso de Construcuatro lo estudia además el juzgado de Instrucción número 2 de Vigo donde ya se han presentado dos denuncias por la vía penal. El abogado que aglutina a una veintena de propietarios en el mismo edificio anunció ayer que a final de semana se personarán otros 20 afectados que acusan a Construcuatro de un doble delito de estafa y fraude fiscal.

El presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, aseguró ayer que las denuncias por los sobrepagos "son el precio que hay que pagar por estar en política" y añadió que "este caso no vería la luz" si él no fuese consejero delegado de Construcuatro.

www.elpais.es 09.10.07

" SI NO PAGAS 20.000 EUROS EN 'B' ESTE MES, OLVÍDATE DEL PISO"

Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas. Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes. **"Si no pagas este mes, olvídate del piso"**, advierte uno de los mediadores que también percibió 8.000 euros por la venta.

Las 24 denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo presentadas por clientes de la promotora Construcuatro se acompañan de una potente carga documental. La juez tiene la transcripción de dos conversaciones, grabadas bajo su consentimiento, que corroboran que la mayor parte del dinero negro cobrado a los compradores iba a la empresa en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y de la que posee el 33% de las acciones. El intermediario exige sobrepagos de entre 20.000 y 32.000 euros. En este último caso, explica que 24.000 euros eran para la promotora y 8.000 para él. Lo que sigue es el extracto de una de las conversaciones, entre P. T., el mediador, y uno de los compradores.

P. T. Esto corre prisa.

C. Ya, pero el del banco me dijo que este mes no se puede.

P. T. Si no puede ser este mes, luego olvídate del piso.

C. Son ellos, se me dijo que no se podía escriturar este mes.

P. T. Espera, vamos a ver deja de escriturar. Una cosa es escriturar y otra cosa es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú sabes lo que hay que hacer ahora?

C. Sí, supongo que entregar la pasta.

P. T. No es entregar la pasta solamente. Mira lo que hay que hacer es el contrato reserva y el contrato compraventa. (...) Mira, este es el precio del piso, lo que pueden dar de hipoteca más o menos, y queda esto, mil euros para la reserva y 2.400 en la firma de la compraventa.

C. ¿Y los 21.000 euros del B, los entregamos en Pontevedra?

P. T. Sí, los del B en Pontevedra. Eso voy yo contigo, tú no conoces, ni te conoce nadie.

C. Déjame un papel, quiero hacer una anotación.

P. T. Mira aquí tienes, qué datos quieres, este es el número de cuenta de Construcuatro en... [cita el nombre de una entidad bancaria y a continuación dicta los dígitos de la cuenta].

C. Vale. Este es de Construcuatro.

P. T. Sí, es de Construcuatro. Es donde hay que ingresar los 20.400 euros.

C. ¿Cómo hacemos la semana que viene? ¿Quedamos para ir a Pontevedra [a la sede de Construcuatro]?

P. T. Sí, yo voy a ir con mi hijo el martes.

C. Yo el martes no tendré la disponibilidad del dinero.

P. T. Si no tienes el dinero, ese día se puede hacer el contrato reserva con 1.000 euros. Y después ya se le entrega lo otro.

C. Estoy apurado de dinero.

P. T. Ya, tú y todos. Mi hijo también y tiene una cuenta de ahorro vivienda.

C. Si hubiera sabido antes lo de los 21.000 euros hubiera actuado de otra manera.

P. T. El problema del dinero es el problema de todos, lo tienes tú, mi hijo, el otro...

C. Yo el problema lo tengo cuando de un día para otro me dicen que hay que sacar de debajo de las piedras 22.000 euros. Yo cobro una nómina.

P. T. Tendrás que pedirlo.

C. Voy a ir al banco ahora.

P. T. No le hables del dinero en B para nada.

C. No, yo no le hablo del dinero en B, yo le digo que necesito ese dinero.

P. T. A ver si se puede arreglar la hipoteca. El asunto es el dinero B, sabes cuánto paga mi hijo en dinero B: 30.000 euros.

C. Es una barbaridad.

P. T. Sube 2.000 euros por cada altura. Ya te dije que los pisos iban a subir.

C. Me decías que iban a subir pero no de esta manera.

P. T. Hay un dinero que subió pero es baratísimo. Ayer estuve viendo otros de 35 millones y dos habitaciones.

C. Si eso ya lo hablamos.

P. T. Pues hay que molestar a los amigos y a los suegros, la familia está para ayudar.

(www.elpais.com, 08/10/07)

UN PROMOTOR HECHO A SÍ MISMO QUE SE COSTEÓ DE SU BOLSILLO LA CAMPAÑA ELECTORAL

"El corazón me pide hablar, pero la cabeza y los abogados me recomiendan que no lo haga". Esa frase lacónica es toda la explicación que ha ofrecido Telmo Martín después de que su empresa apareciese implicada en el cobro de comisiones ilegales. El escándalo de los sobreprecios es el último disgusto que el ladrillo ha propiciado al recién nombrado presidente del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, un político hecho a sí mismo y "sin cargas económicas", como acostumbra a repetir, que no halló problema para simultanear los cargos de consejero delegado en la promotora y el de alcalde en la localidad turística por excelencia de Galicia -Rajoy veranea allí desde niño- donde Construcuatro tenía importantes intereses urbanísticos. Martín fue elegido presidente, a pesar de que el asunto de los sobreprecios lleva ya un largo recorrido en los juzgados y los medios de comunicación.

Su álbum institucional incluye fotos junto al Rey, y otras personalidades habituales del Club Náutico de Sanxenxo. Tras ocho años como alcalde promotor, Martín, obtuvo un importante respaldo en Pontevedra, que le dejó a las puertas de la mayoría absoluta gracias a lo que los dirigentes del PP bautizaron como efecto Telmo. La campaña la pagó de su bolsillo. Durante su etapa de regidor, elaboró un Plan General que recalificó un humedal a la empresa en la que posee un 33%. "Siendo honrado todo se puede compatibilizar", responde a la pregunta por la confluencia de negocios y política.

(www.elpais.com, 08/10/07)

RAJOY RESPALDARÁ A TELMO MARTÍN COMO LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, asistirá el próximo sábado al congreso local del partido en Pontevedra, en un gesto de claro respaldo a la designación de Telmo Martín como nuevo líder local. Rajoy y el presidente regional del partido, Alberto Núñez Feijóo, estarán presentes, junto a 700 compromisarios, en una asamblea convocada expresamente para consagrar el liderazgo de Martín, ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra tras encabezar la lista de los populares en la ciudad en las elecciones municipales del pasado mayo.

En el congreso, que se celebrará bajo el lema Pontevedra ten futuro, se elegirá también un nuevo comité ejecutivo. La cita pontevedresa es la primera de una sucesión de congresos locales del PP en algunas de las principales ciudades gallegas.

Martín ya ejercía de hecho el liderazgo local del partido desde que logró ser la lista más votada en las elecciones municipales. Ahora asumirá la presidencia en plena controversia por la implicación de la empresa Construcuatro, de la que es consejero delegado, en el cobro de sobreprecios en dinero negro por la venta de viviendas de protección oficial en el barrio vigués de Navia. Martín no ha querido pronunciarse sobre el caso alegando que así se lo ha recomendado su abogado.

(www.elpais.com, 03/10/07)

TELMO MARTÍN CALLA SOBRE CONSTRUCUATRO "POR RECOMENDACIÓN DE LOS ABOGADOS"

La repercusión mediática derivada de las denuncias presentadas contra Construcuatro por el presunto cobro de sobrepregios en las viviendas de Protección Oficial de Navia (Vigo) obligó ayer al portavoz municipal del PP en Pontevedra y socio de la promotora, Telmo Martín, a comparecer ante los medios. "El corazón, sinceramente, me pediría hablar ahora mismo, pero la cabeza y los abogados me recomiendan que no lo haga", dijo.

Martín, quien no quiso confirmar si la empresa de la que es consejero delegado cobró comisiones ilegales a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en Vigo, recordó que en los últimos tres años ha sido objeto, en varias ocasiones, de "acusaciones muy graves" vinculadas también a Construcuatro y ya entonces se mantuvo "callado y muy tranquilito". "Tuve que aguantar estoicamente lo que se decía de mí durante todo un año", aseveró, "hasta que pudieron comprobar que era todo una falacia". Ahora, mantiene, "no hay nada de nada, son temas todos interesados y una estrategia".

El ex alcalde de Sanxenxo afirmó estar "tranquilo y seguro del resultado final de las investigaciones del juez", pero no será hasta que éstas concluyan cuando desvele "por qué salió esto en estos momentos y de dónde viene". El líder del PP pontevedrés, que posee el 33% del capital de Construcuatro, se resistió a entrar "en el fondo del asunto" porque, de este modo, "estaría siguiéndole el juego a quienes pretenden suplantar el papel que le corresponde a los jueces". Lo que no aclaró es a quiénes se refería, si a los medios de comunicación que se han hecho eco de la investigación que lleva a cabo la Consellería de Vivenda y el Juzgado número 2 de Vigo o a los más de 20 denunciados afectados por el presunto fraude. "Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y después tendremos tiempo de hablar", reiteró, ya que de haber tenido algún motivo de preocupación "no estaría ahora aquí y ya habría hablado hace días".

"Posición económica cómoda"

Para Telmo Martín "lo más importante es el honor, porque por encima de los partidos están los ciudadanos y eso en España se lleva muy mal". Y añadió que "la mayoría de los diputados son funcionarios" y que sería bueno para la democracia que esto cambiase, momento que aprovechó para destacar que Mariano Rajoy, líder del PP, "hizo muy bien en ganar la plaza de registrador de la propiedad para dedicarse a la política". "Un político como yo, que es empresario, primero tiene que ponerse en una situación económica cómoda para que no lo traguén, porque si no me comerían por todos lados. Ustedes imaginen que estuviera lleno de hipotecas y arruinado, tendría que andar a quitar", declaró.

"Lo triste de todo es que yo quería hablar de los 100 días de gobierno en Pontevedra, que es lo que les interesa a los ciudadanos", concluyó el portavoz del PP.

(www.elpais.com, 02/10/07)

CATALINA GONZÁLEZ: LA NUEVA JESÚS GIL DE LA POLÍTICA

Dicen de ella que es la nueva Jesús Gil de la política. Nada más ser elegida alcaldesa se puso un sueldo de casi 80.000 euros brutos anuales. En la actualidad está inmersa en un juicio por la construcción de más de 300 viviendas en la costa. Se llama Catalina González Bea y es alcaldesa por el Partido Popular de la localidad gallega de Sanxenxo. Según publica el semanario Interviú esta semana, la edil del Partido Popular es conocida, aparte de por sus más que dudosas decisiones en materia de Urbanismo, por ser comparada por los vecinos de la localidad gallega de Sanxenxo con la zarina rusa "Catalina la grande".

78.400 euros

Catalina González apenas lleva un año en el cargo. Fue designada sucesora por el anterior alcalde de la localidad gallega, Telmo Martín. En las pasadas elecciones autonómicas y municipales consiguió obtener mayoría absoluta en las urnas. Poco tiempo después se produjo el escándalo: Catalina se puso un sueldo de 78.400 euros brutos anuales.

Urbanizaciones

Aún así, y gracias a las presiones del Partido Popular regional, González se vio obligada a bajarse el sueldo a 64.000. Pero el verdadero problema no son los modos despóticos de los que González hace uso para gobernar, y ni siquiera su elevado salario; sino, que tal y como afirma el líder local del BNG, el verdadero problema es que la alcaldesa popular quiere llenar "Sanxenxo de urbanizaciones que lleguen

hasta
Sentido común

el

mar”.

“Quieren llenar Sanxenxo de urbanizaciones hasta el mar, sin sostenibilidad ni sentido común. Se ha aprobado la construcción de casi 3.000 viviendas en la línea de costa. Aquí están posicionadas todas las grandes constructoras” afirma para la revista Interviu el líder del BNG en Sanxenxo, Roberto Fernández Flores.

Impacto Ambiental

Hace poco más de un mes, la Xunta de Galicia, a través de Medio Ambiente, ha llevado al Ayuntamiento de Sanxenxo a los tribunales por no parar la construcción de 199 chalés en las playas de Montalvo y Major y 134 en la zona de Telleiro-Noalla. Aún así, y pese a que ninguno de estos proyectos contaban con ningún estudio previo de impacto ambiental, la alcaldesa ha decidido seguir adelante con la construcción de estas chalés.

Marbella

En definitiva, y lamentablemente, con actuaciones como estas, (y como la de construir un complejo de campos de golf en medio de 200.000 metros cuadrados de pinares y ríos), la alcaldesa del Partido Popular parece seguir trabajando para que su localidad sea comparada con Marbella y ella misma, con el ya fallecido Jesús Gil y Gil. (www.elplural.com, 02/10/07)

" ENTREGUÉ 30.000 EUROS EN NEGRO EN LA SEDE DE CONSTRUCUATRO A UN EMPLEADO "

"Unos días antes de escriturar la compra en el notario, me citaron en la sede de Construcuatro, en Pontevedra, para que entregara los 30.000 euros que habíamos apalabrado en una cita anterior, y así hicimos". Pedro Brites, un manipulador de pescado de 31 años, evoca el proceso que le llevó a pagar en negro la citada cantidad como condición para hacerse con el piso que había elegido, un noveno, del edificio Castelao, en el polígono vigués de Navia, construido por Construcuatro, empresa de la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33%. **"Como yo, todos"**, afirma.

El edificio Castelao fue el primero que se construyó en el polígono de Navia, donde está previsto edificar 8.000 viviendas protegidas. No ocupa la parcela que inicialmente le fue asignada a la constructora de Telmo Martín, en la que sólo podría construir 46 viviendas. Al estar ésta ocupada por una colonia gitana, cuyo desalojo se presentaba problemático, Construcuatro pudo ejercer sus derechos constructivos en la primera línea de la calle Teixugueiras, la principal del polígono. Aquí pudo ganar alturas y ampliar la promoción a 96 viviendas. Hace dos años que el edificio Castelao está acabado.

"Nos interesó el sitio y pasamos por la oficina de Construcuatro en Vigo. Allí nos metieron en la lista de peticionarios y quedaron en avisarnos con lo que fuera", recuerda Pedro Brites. "El año pasado nos llegaron rumores de que no les interesaba vender las viviendas, que iban a dedicar todo a alquiler".

En diciembre, sin embargo, Brites y su esposa reciben de Construcuatro aviso de que está abierto el proceso de venta. "De repente les entró mucha prisa. Nos dijeron que teníamos que formalizar la compra antes de fin de año, para entregarnos el piso en marzo, y a nosotros nos puso realmente contentos, porque pudimos elegir piso y el precio nos pareció excelente, 23,5 millones de pesetas".

Unos días después, "cuando ya estábamos con los dientes largos", Pedro Brites es convocado de nuevo a la sede pontevedresa de Construcuatro. "Me dicen que la Xunta no les deja vender a lo que les gustaría y que con el precio que nos han dado, la empresa pierde dinero, de manera que, si seguíamos interesados en el piso, tendríamos que aportar una cantidad a mayores y en negro". Exactamente, en su caso, novena planta y con mucha luz, serían 30.000 euros.

La tarifa en negro se fijaba en función de la planta en que se ubicara el piso -a más altura, más cantidad- y de la luz exterior que recibiera. Brites conoce algunos casos de vecinos que pagaron 41.000 euros, "pero creo que se debe a que pagaron no a la empresa, sino a intermediarios que aumentaron su parte".

El 26 de diciembre, unos días antes de escriturar la compraventa en el notario, Pedro Brites entregó sus 30.000 euros a un empleado de Construcuatro en la sede de la empresa en Pontevedra. "Pagamos

porque el piso sigue siendo barato para los precios de mercado en Vigo; en total estamos hablando de 30 millones de pesetas por 90 metros cuadrados, que no lo encuentras en ningún sitio de la ciudad".

Cuando en marzo pudieron ocupar la vivienda les decepcionó un poco. "Estaba sin los acabados, todo con el yeso y escayola a la vista, los armarios sin cajoneras..." La constructora no asumió mayor obra sobre lo ya realizado, ni en su casa ni en ninguna otra, y tampoco se ha prestado a subsanar deficiencias ostensibles en muchas viviendas, singularmente humedades, que ahora los compradores reclaman.

A Pedro Brites y su esposa volvió a encendérseles el piloto rojo en mayo. El mismo empleado de Construcuatro que le había atendido en las anteriores ocasiones, le citó a otra entrevista, pero esta vez no en las oficinas de la constructora, sino en el peaje de Pontevedra de la autopista AP-9. "Allí me dice que les han denunciado, pero que yo no tendré problema ya que 27.000 de mis 30.000 euros ya estaban blanqueados. ¡Y a mí, qué!, le digo. Pretendía que yo, si me llamaba el juez, declarara que los 30.000 euros eran para pagar mejoras en el piso, cuando ni siquiera nos arreglaban las humedades. Yo diría la verdad, eso le dije".

Nadie convocó ninguna reunión de comunidad: hay compradores vinculados a la constructora que actuarían de chivatos. Pero el buzoneo y otras prácticas semiclandestinas pusieron en danza a los vecinos. A las dos denuncias iniciales, que pusieron en marcha la investigación judicial, se sumaron otras dos, y los cuatro fueron quienes agitaron el cotarro. Ahora son 22 los denunciantes, "pero se sumarán más".

Sólo están sin vender los ocho áticos y hay bastantes pisos aún sin ocupar. Los denunciantes descartan la menor intencionalidad política en su proceder, aunque deploran las respuestas de Vivenda a sus demandas. Subrayan la precariedad económica de muchas de las familias que han pagado el sobreprecio. Brites, sin cargas familiares y la ayuda de su mujer, se siente un privilegiado: gana limpios 800 euros al mes y paga de hipoteca menos de 500 euros.

www.elpais.es 29.09.07

PONTEVEDRA : GRABACIONES AUTORIZADAS POR LA JUEZ PRUEBAN LOS COBROS ILEGALES DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN

Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio de Vigo. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que **Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. el fraude se cifra en 3 millones euros.**

El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.

De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.

El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único imputado en el proceso. El cobro de las comisiones fue exigido a las familias por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos realizados oscilaron entre los 19.000 y los

46.000 euros, si bien otros testigos han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados más de 60.000 euros, que no fueron abonados.

En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación. Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros, más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio, respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.

Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación de Pontevedra a principios de diciembre.

www.elpais.com, 28/09/07

GALLARDÓN AVALA A LOS CANDIDATOS DEL PP EN VIGO Y PONTEVEDRA

Corina Porro y Telmo Martín, modelos para el alcalde madrileño

Las analogías de Vigo hace tiempo que se decantan preferentemente como "la Barcelona de Galicia". Ayer fueron reventadas por la mayor proximidad, paralelismos y coincidencias con Madrid que Corina Porro y los dos Albertos que la escoltaron, Ruiz Gallardón y Núñez Feijóo, alcalde de Madrid y el presidente del PP gallego, respectivamente, glosaron con desparpajo. El cosmopolitismo de ambas, el compañerismo de sus policías locales, generado en el 11-M y reconocido en Vigo con la entrega a la de Madrid del Salacot de Honor y, en fin, la "más que afinidad, la identidad de propuestas con Corina", dijo Ruiz Gallardón.

La más concreta de la alcaldesa de Vigo remitió a "la movida" de los años ochenta: "Quiero pedirte, Alberto, que volvamos a revivir aquella experiencia a través de otro gran concierto, este verano en Vigo". Los madrileños están invitados ya "a conocer nuestro mar" ahora y al posible reencuentro de las dos ciudades en 2009 con motivo del Desafío Atlántico de Grandes Veleros.

La campaña de las municipales invade las calles viguesas "Creo que es mucho lo que podemos hacer", respondió Ruiz Gallardón, tras señalar que el futuro es de las ciudades y de las redes que establezcan entre ellas. En este contexto, "el liderazgo es fundamental", añadió, y el de Corina en Vigo, "un modelo".

Los dos Albertos se fueron luego a Pontevedra, donde los esperaba una comitiva de fuste: Telmo Martín, Rafael Louzán, Dolores Pan, Teresa Pedrosa, Pilar Rojo y Ana Pastor. Aquí la idea recurrente fue la del paralelismo existente entre el candidato popular, Telmo Martín, y el alcalde madrileño como políticos valientes, ambiciosos y arriesgados.

Telmo Martín señaló a Gallardón como "el ejemplo a seguir", máxime cuando la transformación del Manzanares y la M-30 promovida en Madrid es "muy similar al bulevar Lérez-Ría" que él propone para Pontevedra, pese a la incredulidad y escepticismo que ha suscitado. "Es fabuloso, absolutamente viable y realizable en los plazos fijados", sentenció Gallardón desde su "experiencia". "No hay que abandonar la utopía, sino gestionarla".

Luego se fueron todos a pasear, firmar autógrafos, tomar una caña, repartir saludos y a comer con representantes de la vida social y política de Pontevedra. En el almuerzo se proyectó un vídeo con los logros de Gallardón en Madrid.

www.elpais.es 10.02.07

LOS LUCRATIVOS NEGOCIOS DEL CANDIDATO DEL PP A PONTEVEDRA

El candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, multiplicó por 20 sus beneficios mientras estuvo al frente del ayuntamiento de Sanxenxo. La revista *Interviú* repasa la trayectoria de este político del PP, desde que era fontanero hasta convertirse en alcalde millonario. **Goza de la simpatía de Mariano Rajoy, que veranea en Sanxenxo**, donde su mujer tiene una casa. Martín administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros. El pasado 19 de enero Telmo Martín renunció a su cargo de alcalde de Sanxenxo, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra. Se va con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo y con muy poco suelo pendiente de recalificar. Las empresas adjudicatarias son, desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del **consejero valenciano del PP Juan Cotino**, ex director de la Policía y Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia.

Negocios con Cuiña

En Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo, en los años 2000 y 2004 la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fincas por 600.000 euros. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas, que sumaban 3.641 metros, eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo Martín se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa **Francisco Doblas**, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros.

De fontanero a alcalde millonario

Cuenta *Interviú* que a principios de los años setenta, Telmo Martín, se ganaba la vida como fontanero. Ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro, que ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. También ha crecido la empresa que montó en 1979 con su padre, Hierros Santa Cruz SL, sobre todo gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era **Francisco Álvarez Cascos**.

Las ventajas de ser del PP

El PP le invitó en 1999 para que formase parte de sus filas. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metro cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de **Xosé Cuiña**.

Constituye empresas siendo alcalde

Telmo constituyó algunas empresas más durante el ejercicio de su cargo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de euros. En Pontevedra, Construcuatro es la empresa que más construye.

www.elplural.com 06.02.07

DE FONTANERO A ALCALDE MILLONARIO

Ha renunciado a la alcaldía de Sanxenxo, donde poco queda por recalificar, para ser el candidato del PP a la de Pontevedra, donde su principal empresa constructora es la que más edifica. Telmo Martín, de orígenes humildes, administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros.

Los vecinos más antiguos de Meaño (Pontevedra) aún recuerdan a aquel paisano, tan buen mozo, de grandes ojos azules y cabellos rubios, montado en una moto Gilera, en la que transportaba sus aperos de fontanería. A principios de los años setenta, Telmo Martín González, nacido en 1958, se ganaba la vida como fontanero y acudía a clases nocturnas para obtener el graduado escolar. Así pasó la adolescencia el que años más tarde sería uno de los alcaldes gallegos más populares —el de Sanxenxo (Pontevedra) por el PP—, a la vez que brillante empresario. El pasado 19 de enero renunció a su cargo de alcalde, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra.

Se va, pero ha dejado el pastel bien repartido. Con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo —el doble de las existentes— no queda casi suelo para recalificar en la localidad. Las empresas adjudicatarias van desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la Policía. También le

ha tocado un pedazo del pastel a Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, antaño delfín de Manuel Fraga.

Con Cuiña ha hecho Telmo buenos negocios, como el de Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo. Allí, entre los años 2000 y 2004, la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fincas que sumaban 3.641 metros cuadrados, por 600.000 euros. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Xosé Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa Francisco Doblas Bermejo, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros. Según Juan Carlos Martínez, asesor de Martín, las fincas, en realidad, eran urbanizables desde 1990, y achaca al Registro el error en la calificación del suelo. Sea como fuere, lo cierto es que el que entonces era alcalde de Sanxenxo hizo un suculento negocio: su empresa ganó casi dos millones de euros en la operación.

Telmo Martín es de esa clase de regidores que, sin complejos, abiertamente, deciden no renunciar a su mayor fuente de ingresos, que en este caso –como en la mayoría– es la construcción; incluso ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro. Esta sociedad, que fue constituida en 1991, ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. En 2005 facturó 65.877.337 euros, mientras que en 1997 logró 9.149.828; en 2000 fueron 15.953.529, y en 2004 Construcuatro obtuvo unos ingresos de 27.725.978 euros.

Antes de ser alcalde, Telmo Martín, que ha declinado hacer declaraciones para este reportaje, ya era empresario, un pequeño empresario que iba haciéndose un sitio en los negocios relacionados con el mundo del hierro. A mediados de la década de los 70, el joven Telmo emigró a Alemania, donde trabajó como ferrallista, según indica su asesor, Juan Carlos Martínez. De vuelta a Galicia, con el oficio aprendido y con ansias de prosperar, montó en 1979, con su padre y con su tío, una fábrica de hierros, Hierros Santa Cruz SL, que ha sido el buque insignia de su trayectoria empresarial. Hierros Santa Cruz también ha crecido mientras su fundador era el alcalde de la turística localidad de Sanxenxo y, sobre todo, gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era Francisco Álvarez Cascos (2000-2004). Hierros Santa Cruz fue subcontratada para algunas de las más grandes obras de la época: ampliación del aeropuerto de Barajas y diversos tramos del tren de alta velocidad, entre ellos, uno en Galicia, lo que generó acusaciones de favoritismo. La sociedad de Telmo se defendió entonces, alegando que siempre había trabajado en las obras públicas. En las memorias anuales de cuentas de Hierros Santa Cruz Santiago SL, otra empresa administrada por Telmo, en el capítulo de Transacciones con el administrador único (retribuciones y préstamos que hace a la empresa o viceversa) figura: “Esta información no se facilita por ser susceptible de causar graves perjuicios”.

Las propiedades del alcalde

Aunque sus empresas más rentables ya existían antes de ser alcalde, Telmo se ha dedicado a constituir algunas más durante el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de euros.

Sanxenxo, al norte de la ría de Pontevedra, es conocida como la capital turística de Galicia. Con unos 17.000 habitantes censados, en verano se alcanzan hasta los 130.000. El censo oficial de viviendas de la localidad es de 12.000, de las que 7.000 son residencias estivales. El hasta hace poco alcalde de Sanxenxo posee, desde 2005, un ático con vistas al mar, en un exclusivo edificio, y en el puerto deportivo tiene un yate. En Pontevedra, de donde quiere ser alcalde, Construcuatro es la empresa que más construye. Allí posee tres viviendas en un edificio situado en una de las mejores zonas de la ciudad. En Málaga, donde Construcuatro ya ha levantado un residencial, es dueño de un ático y dos plazas de garaje. En la localidad pontevedresa de Meaño posee dos fincas rústicas, según el Registro de la Propiedad.

Un patrimonio considerable para un brillante hombre de negocios y un popular alcalde a la vez. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metros cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de Xosé Cuiña.

SanXenxo: La recalificación del verde al gris

Lo primero que hizo Telmo Martín cuando accedió a la alcaldía de Sanxenxo, en 1999, fue hacer un nuevo Plan de Ordenación Urbana, que en sólo dos años y medio quedó aprobado. Están previstas 13.000 nuevas viviendas –el doble de las existentes–, la mayoría adjudicadas ya a diferentes empresas. Uno de los que más construyen en Sanxenxo es Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol. Las constructoras Fadesa y Acciona también van a construir, en zonas privilegiadas. Un pequeño chalé adosado puede costar 600.000 euros. Sanxenxo es el municipio gallego con el suelo más caro de toda la autonomía. El hasta ahora alcalde ha sido denunciado por la asociación Salvemos Pontevedra por la operación de venta de unas parcelas de su empresa, Construcuatro, a Construziona, de Xosé Cuiña.

<http://www.interviu.es/reportajes/articulos/de-fontanero-a-alcalde-millonario> 05.02.07

TELMO MARTÍN : "SOY UN GANADOR"

Con la sonrisa grapada en la cara y entre las lágrimas de sus admiradores, Telmo Martín dejó ayer de ser el alcalde de Sanxenxo. A partir de ahora, para el mundo de la política pasará a ser en exclusiva el candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, con el que el partido de Rajoy y Feijóo aspira a remover al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores tras ocho años de mandato. Martín dijo adiós en un pleno de guante blanco, en el que los halagos le llegaron hasta de una oposición resuelta en la despedida a tender un puente de plata al ya ex alcalde y todavía promotor.

Por toda contestación encontró Martín las tímidas protestas de un grupo de opositores ataviados con camisetas de *Ronda Non*, en alusión al vial proyectado por Martín y tumbado por la Xunta. También encajó algún mandoble retórico, siempre amistoso, del portavoz del BNG, Roberto Fernández Lores, hermano de quien será el principal contrincante en Pontevedra del aspirante popular. No hubo alusiones a los negocios inmobiliarios de Construcuatro, la empresa de la que Martín posee el 33%, que ganó 2,78 millones de euros con tres fincas adquiridas, recalificadas y vendidas cuando ya estaba al frente del gobierno municipal de Sanxenxo.

Como es costumbre, Telmo Martín no ocultó su condición de empresario, aunque sí obvió las referencias al sector. Se permitió hacer gala de ella. "Soy un hombre emprendedor, trabajador y, sobre todo, ganador", se confesó en un discurso improvisado, ante las casi 100 personas que presenciaron el pleno que consagró su renuncia. Su abandono, decidido para centrar sus fuerzas políticas en la consecución de la alcaldía de Pontevedra, pone fin a siete años de mandato, su primera experiencia política, de la que afirmó haber aprendido "muchísimo".

Cuando llegó a la alcaldía de Sanxenxo, recordó, carecía de cualquier experiencia política. Pasado el tiempo, reconoció sentirse "mucho más realizado como persona y como político, pero también como empresario". De cómo la política enriqueció al promotor inmobiliario Telmo Martín no dio detalles, pero sí de la rapidez con que los alcaldes pueden viajar del cero al infinito: "Hablar con el Rey y, a los dos minutos, con el señor que pide una farola en su parroquia: eso sólo pasa en la Administración local".

La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, decidió que no era "el momento de una evaluación política", por lo que se limitó a agradecer la cordialidad del ahora candidato. Roberto Fernández Lores apuntó algún que otro "claroscuro" de la gestión de Telmo Martín, al que despidió tirando de refrán: **"Que tanta gloria lleves como paz nos dejas"**.

www.elpais.es 17.12.06

LA DIPUTACIÓN VENDIÓ EDIFICABILIDAD A TELMO MARTÍN A UN TERCIO DEL VALOR DE MERCADO

La Diputación de Pontevedra calculó en 1.900 euros el precio de venta del metro cuadrado construido en Portonovo (Sanxenxo), a través de un convenio del que se benefició una empresa del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP. Así se establece en el acuerdo firmado por Construcuatro con la institución provincial, por la que ésta traspasó los derechos de edificación de 1.460 metros cuadrados expropiados para un vial a cambio de 500.000 euros. Las inmobiliarias de Sanxenxo consultadas estiman en 6.000 euros el precio del metro construido en la zona.

El cálculo del precio final de la edificabilidad se fijó en un estudio de la Diputación que parte de un valor del metro cuadrado construido en 1.900 euros. Así, Construcuatro, de la que Telmo Martín posee el 33%, pudo recuperar la edificabilidad de la parcela expropiada a cambio de 499.451 euros. La Diputación ya

había ingresado 312.319 euros en la cuenta de Construcuatro en concepto de expropiación, por lo que la empresa de Martín se quedó con los derechos de edificación en esos 1.460 metros a cambio de 168.491 euros.

La expropiación afectaba a parte de una finca de 3.610 metros cuadrados que se integraron en el Polígono de Ejecución Integral 10, en Baltar, en primera línea de la playa de Portonovo, el mismo donde Construcuatro vendió por 2,78 millones de euros tres fincas adquiridas como rústicas y después recalificadas. El destinatario final de los terrenos fue en todos los casos Construziona, empresa de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del ex conselleiro José Cuiña.

El convenio entre la Diputación, que preside Rafael Louzán, del PP, y Construcuatro, culmina un proceso iniciado en 2001, cuando la entidad provincial notifica la expropiación al anterior propietario de la parcela, ex concejal del PP en Pontevedra, por 1.446 euros. Finalmente, el jurado de expropiación estableció un precio de 279.358 euros más intereses de demora, en una reunión a la que no asistió ningún representante de la Diputación, "a pesar de haber sido citado formalmente", según el acta. Seis meses después, Construcuatro se hacía con la finca por 480.810 euros, con el derecho a ingresar en su cuenta 312.319 a los que ascendió la expropiación con los intereses.

Antes de vender la finca a Construziona, la Diputación aprobó el convenio con la empresa de Telmo Martín por el que cede los derechos urbanísticos del terreno expropiado, a petición de Construcuatro, y que se traspasan al resto del terreno. El Servicio de Arquitectura cifró en casi medio millón de euros el precio del aprovechamiento urbanístico, "en base a los criterios de valoración aplicados a parcelas ubicadas en la misma zona". Esas parcelas eran de Construziona, a la que también expropió la Diputación para devolverle después la edificabilidad de 865 metros cuadrados a cambio de 344.953 euros.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ismael Rego, afirmó ayer que echa de menos una respuesta "contundente" del máximo responsable de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ante los reiterados casos de supuestas irregularidades urbanísticas en los que están inmersos alcaldes del Partido Popular, .

Rego entiende que el alcalde de Sanxenxo "ya debería estar en su casa", al trascender que recalificó un humedal y lo vendió en 2,78 millones de euros. "Son muchas casualidades las que van apareciendo", comentó Rego, quien lamentó la falta de una respuesta "contundente" por parte de Núñez Feijóo y consideró el caso de Sanxenxo una cuestión "muy seria y delicada" ante la que el PP, precisó, "tendría que dar ya una respuesta".www.elpais.es 15.12.06

EL ALCALDE DE SANXENXO RECALIFICA SU HUMEDAL Y LO VENDE POR 2,8 MILLONES

La política y los negocios forman una rentable combinación para la economía del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Lejos de interrumpir su actividad inmobiliaria en el Ayuntamiento que preside, el regidor municipal y candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra se ha visto favorecido por el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que recalificó y multiplicó el precio de fincas rústicas adquiridas por su empresa antes de que se aprobara el documento urbanístico, que después vendió por 2,78 millones de euros. Telmo Martín posee el 33% de Construcuatro, una inmobiliaria con una intensa actividad en el municipio de Sanxenxo, donde gobierna, y en el de Pontevedra, en el que aspira a hacerlo a partir del año próximo. Entre otras actividades desarrolladas en el Ayuntamiento que preside, Construcuatro adquirió entre noviembre de 2000 y febrero de 2004 tres fincas rústicas que el Plan General de Ordenación Municipal clasificó como suelo urbanizable, lo que le permitió venderlas una vez aprobado el nuevo planeamiento por 2,78 millones de euros. Diversas fuentes sitúan el precio de compra de las parcelas en torno a los 150.000 euros.

Las fincas están enclavadas en el humedal de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo), incluido en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la *Consellería* de Medio Ambiente. Su urbanización, actualmente en marcha, supondrá la construcción de un centenar de pisos de lujo en primera línea de la playa de Portonovo, en el que pasa por ser el municipio turístico con el precio del suelo más caro de Galicia. Una vez aprobado el Plan General, en febrero de 2003, la constructora vendió los terrenos por 2,4 millones de euros más IVA (2,78 millones, en total) a una empresa con apellidos célebres en el PP: Construziona, de Ramón y Eladio Cuiña Crespo, hermanos de José Cuiña, *conselleiro* de Política Territorial en la Xunta de Manuel Fraga.

Los movimientos para hacerse con las parcelas comenzaron en el año 2000, unos meses después de que Telmo Martín fuese investido alcalde. El 9 de noviembre de ese año, Construcuatro adquiría 1.767 metros cuadrados de terreno de labradío. El 21 de febrero de 2001, la empresa de la que el alcalde es consejero delegado compraba otra finca de "labradío, regadío e inculto" de 758 metros cuadrados. La última de las parcelas, obtenida el 13 de febrero de 2004, con el Plan General ya aprobado, son 1.113 metros cuadrados de suelo no edificable. El 2 de diciembre de ese mismo año, Construcuatro vendía las tres fincas a la empresa de los hermanos Cuiña, a la que el alcalde Telmo Martín le dio después licencia para promover el Polígono de Ejecución Integral (PEI) 10, en el que se integraron los solares.

Martín defendió ayer la compatibilidad de su cargo con los negocios inmobiliarios. "Siendo honrado, todo se puede compatibilizar. No veo ningún problema mientras se cumplan las exigencias de la ley", declaró. Frente a las fuentes que cifran en 150.000 euros el precio de compra de las tres parcelas, Martín aseguró por escrito a este periódico que pagó por ellas un precio de casi 600.000 euros (la cuarta parte del precio de venta), y agregó que fueron adquiridas en 1999, año en que Telmo Martín tomó posesión de su cargo. El alcalde sostiene que esas parcelas y las que las rodean "son suelo urbano desde 1990", cuando se aprobaron las normas subsidiarias de planeamiento. Dichas normas no llegaron a ejecutarse nunca. Respecto a la condición de suelo rústico que figura en la escritura de venta a Construcuatro, un portavoz del alcalde sentenció: "Esas son cosas de los notarios".

www.elpais.es 12.12.96

ariano y sus amigos constructores



Mariano con Telmo, su amigo del alma y sospechoso habitual

Salvo el locuaz monosabio de Javier Arenas, toda España y todas las embajadas saben que Mariano sigue en Sanxenxo sin dar ni palo al agua y tomando cervezas . Lo que quizá se conozca menos es que Mariano tiene un amigo del alma, como diría Camps, que se llama **Telmo Martín González**.

En su momento Telmo fue alcalde de Sanxenxo y hoy es, gracias a Mariano, Presidente de los genoveses originales y genuinos de la provincia de Pontevedra. Pero la gran vocación de Telmo, el amigo de Mariano, es ser constructor a tiempo completo. Tiene una constructura que se llama Construcuatro. Telmo , el amigo de Mariano, está metido en todo tipo de fangos judiciales por fijar sobrepuestos y por construcciones ilegales.



El edificio de Telmo , el de los toldos a pie de playa

La última de sus hazañas urbanísticas la ha declarado ilegal el Tribunal Supremo por listo y por construir a pie de playa sin hacer caso a la normativa de costas que con tanto interés también obvió el entonces ex Consejero genovés de Pesca y amigo del susodicho que a su vez es el amigo de Mariano.

En resumen, Mariano además de no pegar ni palo se rodea de los más granado de la provincia y comparte mesa y cartel con un tipo que es algo mas que un sospechoso habitual. Cosas de Mariano.

PD. Imaginate como estarían ya ladrando por las esquinas los Arena & Pons & Cospedal si, en vez de ser el protagonista de esta historia el veraneante tranquilo de Sanxenxo y candidato a Presidente del Gobierno , fueran ZP o Rubalcaba. Piensa mal y acertarás

os amigos de Mariano en Sanxenxo



Mariano con Telmo

Mariano aunque tiene propiedades a lo largo y ancho de la península , archipiélago canario incluido , sin suda, hay un lugar que le entusiasma de manera especial para ensayar su hobby preferido como es no pegar ni palo. Este lugar es Sanxenxo.

Además de casa propia en este municipio pontevedrés tiene un amigo que se llama Telmo Martín. Este amigo del alma y de cañas está por costumbre y tradición metido en todo tipo de pleitos urbanísticos. De hecho entra y sale de los juzgados como Pedro por su casa. Su constructora Construcato es sospechosa desde su constitución. Ha sido sancionada por la Xunta y es especialista en establecer sobre precios en viviendas sociales y recalificar humedales propios.

Telmo fue Alcalde de Sanxenxo y ahora quiere serlo de Pontevedra capital. Telmo fue Presidente de los genoveses de Pontevedra en su versión local. Y ahora como quien no quiere la cosa se publica que el Ayuntamiento donde veranea Mariano se gasta lo que no tiene en pagar abogados amigos para pleitos ante los tribunales que tiene su origen en el amigo de Mariano. Lo dicho Mariano tiene un amigo que cualquier día de estos le llama de testigo para constatar que es su amigo del alma y además constructor. Allí veranea Mariano

EL JUEZ INTERROGA DURANTE DOS HORAS AL JEFE DE PORTOS, ACUSADO DE PREVARICAR

Tras dos horas de interrogatorio, el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, se marchó ayer sonriente del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por haber aprobado una declaración de impacto ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo) cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga. Ese proyecto lo paralizó un juez en 2005 y tiene en contra dos sentencias de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Álvarez-Campana esgrimió en su defensa, según fuentes judiciales, el único documento que avala la legalidad de la planta: una resolución de la Comisión Europea de 2007 que no apreciaba infracciones del derecho comunitario. Y ello porque aceptaba los cambios presentados en el proyecto después de la salida de Álvarez-Campana del Gobierno, ya con el bipartito en el poder, que reducían considerablemente la afectación de la planta a la Red Natura.

"Estoy tranquilo", declaró al salir, si bien rechazó comentar los pormenores de su declaración. El fiscal especializado en Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, le acusa de actuar dejando de lado los criterios

ambientales para salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica". Álvarez-Campana prefirió ayer guardar silencio sobre una acusación de la que sí se defendió el mes pasado. Entonces aventuró que tanto el fiscal al querellarse como los magistrados del TSXG cuando anularon la declaración se habían equivocado por la complejidad de la normativa y el exceso de trabajo.

El escrito de la Comisión Europea, en el que también se escudan la Consellería do Mar y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llegó en respuesta a una denuncia de la asociación ecologista Adegá, que batalló desde el principio contra la piscifactoría y que no insistió en su reclamación administrativa porque el juez ya había paralizado las obras. La querella que se tramita ahora llegó, de hecho, tras una denuncia de Adegá a la fiscalía.

El colectivo trata ahora de sumarse a la querella como acusación popular, pero todavía no ha reunido los 10.000 euros que el juez Javier Míguez ha fijado como fianza. Fuentes de la investigación se muestran sorprendidas sobre lo elevado de la cuantía. En el proceso contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, la fianza exigida al sindicato Manos Limpias, único sostén de la querella, fue de 6.000 euros.

(www.elpais.com, 04/05/10)

FEIJÓO PIDE "CONTUNDENCIA" JUDICIAL PERO RATIFICA AL RESPONSABLE DE PORTOS

Con una denuncia de la fiscalía por prevaricación a su presidente de Portos por el procedimiento de autorización de un piscifactoría en un espacio protegido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está "tranquilo". Al mismo tiempo, pide "investigar a fondo y contundencia en cualquier denuncia que se presente, pero por supuesto preservando las garantías del Estado de derecho y de cualquier persona a defenderse".

José Manuel Álvarez-Campana era director general de Calidade e Avaliación Ambiental cuando, en 2005, el Gobierno de la Xunta en funciones del que era vicepresidente Feijóo autorizó 21 piscifactorías en la costa. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de tumbar una de ellas, la de Rinlo, en la mariña lucense, con dos sentencias firmes. Y Álvaro García Ortiz, fiscal especializado en la sentencia de Medio Ambiente, se ha querellado contra Álvarez-Campana por delitos de prevaricación medioambiental y urbanística por el modo en el que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta, que se iba a instalar sobre dos hábitats de carácter prioritario y otro de interés comunitario.

Feijóo, que contestó ayer sobre esta situación tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, se escudó en las actuaciones de la Unión Europea, que ampararon en su día las plantas. "Los hechos que conocemos sobre ese asunto y lo probado es que la denuncia se archivó por parte de las autoridades comunitarias. Creo que eso hay que ponerlo de manifiesto, si no perdemos un poco de vista la situación. Archivarón esa denuncia y avalaron la tramitación ambiental de esa planta. Si hay nuevas actuaciones que sigan adelante", afirmó. A pesar de eso, la sentencia del TSXG que anula la declaración de impacto ambiental es posterior e impedirá a la empresa Acuinor, SL, construir su piscifactoría en Rinlo. El argumento del presidente parece ignorar esta sentencia.

Feijóo cree, además, que no tendrá ninguna incidencia en los planes que tiene la Xunta para que se construyan más piscifactorías a lo largo de la costa gallega. "La administración de justicia tiene que dictar resoluciones conforme a derecho y nosotros lo que haremos es actuar en la acuicultura conforme a derecho. Es posible legalmente hacer plantas acuícolas en Red Natura; de hecho hay varias trabajando en ella. Vamos a cumplir la legislación europea. Si ahora hay un fiscal que considera que debe ponerla en conocimiento del juez, que lo haga, que cumpla con su obligación. Y nosotros cumpliremos con las nuestras", explicó el presidente gallego.

Pero el problema de la piscifactoría no es estar en la Red Natura, sino afectar a hábitats prioritarios dentro de ella, cosa que la UE no permite. De hecho, el fiscal describe en su denuncia que Álvarez-Campana trató de "impedir el control de las autoridades comunitarias". El ex director general de Calidade e Avaliación Ambiental defendió ante este periódico el "rigor" del permiso que anuló el tribunal gallego, y argumentó que "los jueces tienen mucho trabajo" y que "estos temas ambientales son complejíssimos".

(www.elpais.com, 09/04/10)

PORRO DECLARA DOS HORAS ANTE EL JUEZ POR EL RELLENO DE VIGO

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, confió ayer en que se resuelva "favorablemente" el caso del relleno del Areal, una obra que fue paralizada cautelarmente por un juzgado vigués, una decisión levantada de forma condicionada por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La ex alcaldesa de Vigo prestó declaración en el juzgado de instrucción número 6 de Vigo durante más de dos horas. En declaraciones a los medios, la presidenta del Puerto se mostró "satisfecha" de que se le diese la oportunidad de "poder presentar distintos informes de todas las actuaciones, desde el comienzo del expediente, de la mejora de la operatividad del muelle del Areal". Los informes aportados son de Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria de Vigo y de la Abogacía del Estado.

"Espero que ahora se resuelva favorablemente, para poder continuar las obras sin ningún problema", afirmó. Según explicó, su declaración, en presencia de la jueza, el fiscal y el representante de la Abogacía del Estado, sirvió para que ella pudiese "informar de toda la actuación del Puerto de Vigo" en relación con las obras de relleno del Areal.

Según recordó Porro, el Puerto de Vigo recurrió la paralización y, recientemente, se le ha permitido que pueda reanudar las obras, aunque condicionando esa posibilidad a que se entreguen nuevos informes avalados por el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Cedex). La Autoridad Portuaria se encuentra ahora a la espera del informe del Cedex para poder retomar los trabajos.

Por otra parte, Corina Porro informó de que la documentación que se ha entregado "ya estaba en el plan de empresa que se negoció en 2008". Asimismo, explicó que ayer se entregaron en el juzgado nuevos informes sobre obras realizadas "sin Plan de Utilización de Espacios y estando en vigor ya la Ley de Plan de utilización de Espacios Portuarios".

La ex alcaldesa de Vigo afirmó que se trata de obras "de toda índole" que suman inversiones de más de 360 millones de euros, y que incluyen la ampliación de Bouzas, actuaciones en algunas lonjas y obras en el puerto pesquero. El relleno de Bouzas, el más grande de Galicia, se realizó en una zona de gran valor marisquero y sin medidas de control ambiental.

(www.elpais.com, 09/04/10)

EL DIRECTOR DE PORTOS ACHACA A ERRORES JUDICIALES LA QUERELLA POR PREVARICACIÓN

Tiene en contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza y una denuncia del fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente por prevaricación medioambiental y urbanística, pero José Manuel Álvarez-Campana, director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga y actual presidente de Portos de Galicia, sostiene que la declaración de impacto ambiental que firmó y dio el visto bueno en 2005 a la piscifactoría de Rinlo, en Ribadeo, fue correcta y rigurosa. "Los jueces tienen mucho trabajo y estos temas ambientales son complejísimo, con una maraña de leyes locales, autonómicas, estatales y europeas", arguye para explicar las resoluciones en su contra. Con respecto a la querella, lo mismo: "Quiero creer que el fiscal tiene muchísimo trabajo", aventura.

Para Álvarez-Campana, las imputaciones del fiscal -que le acusa de imponer los criterios comerciales sobre los naturales cuando aprobó el documento- carecen de fundamento. "Me extrañaría mucho que hubiese planteado la demanda si hubiese hablado conmigo antes", sostiene. Aduce que la declaración de impacto ambiental que suscribió no autorizaba la construcción de la planta -ubicada en un espacio protegido por la Red Natura con hábitats prioritarios-. "Es un acto de trámite", asegura, y alega que la decisión final dependía de la Dirección Xeral de Recursos Mariños, que entonces comandaba Carmen Bouso Montero. También insiste en que su resolución llamaba a tener en cuenta las competencias de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que lideraba Javier Ruiz de Almirón. Según entiende, la declaración de impacto ambiental es un "informe de informes para que el que decida tenga todo en cuenta".

"El procedimiento se hizo siguiendo escrupulosamente los principios administrativos, normativos, técnicos y científicos", asevera. Si el tribunal la anuló lo hizo, a su juicio, porque se lió con la numerosa normativa aplicable. "A veces los jueces están en otros mundos más que en este derecho administrativo". Añade que la aplicación de un criterio "muy restrictivo" respecto a las actividades posibles en espacio de Red Natura hizo el resto.

Sobre el argumento central del fiscal, que se basa en que la declaración obvia las limitaciones de la normativa estatal y europea respecto a los proyectos en hábitats protegidos de Red Natura, el presidente de Portos niega su responsabilidad y apunta a Recursos Mariños como responsable de la autorización de la obra. "Yo ni siquiera era competente en gestión de espacios naturales". Insiste, además, en una denuncia de la asociación ecologista Adegas a la Comisión Europea contra la declaración, que Bruselas rechazó tras un proceso en el que recabó información de las propias instituciones. "Es curioso que el fiscal no la incluya en su escrito", apunta. Desde Adegas, Daniel Vispo apunta que la asociación desistió de recurrir la decisión después de que el juez paralizase las obras. "Ni siquiera mandamos los informes periciales del juzgado a Europa", recuerda.

El presidente de Portos entiende, además, que de los dos cargos que le imputa el fiscal, prevaricación medioambiental y urbanística, el segundo carece de razón de ser porque la declaración se emitió "sólo a efectos ambientales".

Utiliza una comparación para explicar su proceder. "Las declaraciones de impacto son en toda Europa casi siempre positivas pero condicionadas. Si fuese un semáforo, sería uno en naranja, con condiciones muy potentes", explica, y se muestra confiado en que obró con diligencia: "Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo. No tengo nada que ocultar, y estoy encantado de poder ponerlo de manifiesto".

(www.elpais.com, 08/04/10)

EL FISCAL ACUSA DE UN DOBLE DELITO DE PREVARICACIÓN AL PRESIDENTE DE PORTOS

Con las elecciones autonómicas de 2005 ya perdidas, al último Gobierno de Manuel Fraga, del que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente primero, le entraron las prisas por dejar listo su plan de acuicultura, que amparaba 21 piscifactorías en distintos lugares de la costa. Mientras PSdeG y Bloque negociaban ya el reparto de carteras de la coalición, la Xunta en funciones de Fraga y Feijóo aprobó el 29 de julio de 2005 ese proyecto que aquel Gobierno del PP consideró "estratégico para la economía gallega". Dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaban de tumbar uno de las plantas acuícolas más polémicas de aquel plan, la de Rinlo, en el entorno de As Catedrais, en la Mariña lucense, que contó además con el beneplácito del ayuntamiento socialista de Ribadeo. La empresa Acuínor, SL, ya no podrá construir allí su piscifactoría, después de que el TSXG haya anulado la preceptiva declaración de impacto ambiental. Y mucho menos después de que un segundo fallo invalidara aquel acuerdo de Fraga.

Pero las consecuencias jurídicas de autorizar una piscifactoría en un espacio protegido de la Red Natura con hábitats prioritarios pueden no terminar ahí. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, acaba de presentar una denuncia penal contra el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental, José Manuel Álvarez-Campana, por el modo en que tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta acuícola en 2005. Campana es ahora presidente de Portos de Galicia. El fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente, que parte de una denuncia previa del colectivo ecologista Adegas, atribuye a José Manuel Álvarez-Campana dos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación urbanística. En su denuncia, de nueve páginas, que ha presentado en los juzgados de instrucción de Santiago y que obra en poder de Adegas, el fiscal explica que en la zona de Ribadeo donde la Xunta de Manuel Fraga pretendía instalar la piscifactoría, el Inventario Nacional de Hábitats detecta dos de carácter prioritario y un tercero de interés comunitario.

No sólo eso. Subraya el ministerio público que toda esta información la tenía ya en 2005 la Consellería de Medio Ambiente, que dirigía entonces Xosé Manuel Barreiro. Según consta en el escrito enviado al juez, la "Administración Medioambiental es consciente no sólo de la condición de LIC/ZEPVN [Lugares de Interés Comunitario / Zonas de Especial Protección de Valores Naturales] de As Catedrais, su inclusión en Red Natura 2000, sino también de la presencia, en los terrenos sobre los que se autorizan las obras, de hábitats prioritarios y no prioritario".

El fiscal de Medio Ambiente cita el Real Decreto 1997/1995, coincidente con la directiva comunitaria sobre hábitats, para recordar que, para autorizar proyectos sobre terrenos afectados por la Red Natura donde se detectan hábitats prioritarios, "únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden".

El ministerio público va más lejos y concluye que la declaración de impacto ambiental firmada por el entonces director general de Calidade e Avaliación Ambiental intentó eludir los controles de la Unión Europea sobre estos espacios protegidos, con el objetivo de salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza económica".

Todo ello figura en el texto de la denuncia que estudia ya el juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega: "Con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias, pese a la constancia de que se trataba de un espacio protegido, así determinado en la directiva y en los inventarios, y por si ello fuera poco, consignado con un asterisco en el numeral que los identificaba, no consultó a la Comisión Europea, tal y como establece el punto 4 del artículo 6 de la directiva, la inmisión en este espacio protegido, pues la aprobación del proyecto no se refería a consideraciones relacionadas con la vida humana y la seguridad pública, ni a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, sino simplemente, la respuesta a intereses ajenos y de naturaleza económica".

La denuncia cita las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han anulado esa declaración de impacto ambiental y la autorización para la planta de Rinlo, y pide al juzgado que solicite a la Xunta el expediente completo sobre esta piscifactoría y tome declaración en calidad de imputado al actual presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, a quien atribuye los citados delitos de prevaricación medioambiental y urbanística. Portos es un ente adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

Ex concejal en A Coruña, la trayectoria política de Álvarez Campana siempre estuvo ligada a las siglas del Partido Popular. Con la Xunta de Manuel Fraga permaneció en el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental hasta que fue relevado en otoño de 2005 por el bipartito. Dio entonces el salto a la dirección de la Cámara minera, una patronal de empresas donde figuran representadas varias de las firmas energéticas con las que el propio Álvarez Campana había tratado en la Administración, desde el departamento que emitía los informes de impacto ambiental para canteras, minicentrales y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Sólo dejó la Cámara minera para concurrir a las elecciones autonómicas en las listas del PP en febrero de 2009. Con Feijóo de vuelta en la Xunta, recuperó su despacho en la Administración, ahora como presidente de Portos de Galicia.

(www.elpais.com, 07/04/10)

SANIDADE ELUDIÓ EL CONTROL LEGAL EN EL PAGO A LA PROMOTORA DE LA SEDE DEL PP

La auditoría que en febrero de 2006 debería validar la legalidad y transparencia de la compra de la sede de la fundación pública Fegas, según el PP, apunta en sentido contrario. La documentación que el conselleiro Alfonso Rueda entregó al Parlamento el pasado martes revela que, en efecto, el bipartito intentó sin éxito anular un contrato que comprometía sus presupuestos hasta 2009. Pero el informe de PriceWaterhouse no pasa por alto las "irregularidades" que presidieron la compra del inmueble, que se efectuó no sólo sin la preceptiva autorización de la Intervención Xeral de la Xunta, sino incluso entre advertencias de incumplimiento de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.

Del informe se desprende que el sobrepago de un millón de euros que pagó la fundación del Sergas en 2003 no es la única irregularidad que presidió la compra de su sede, que la oposición sospecha que sirvió para sufragar el local del Partido Popular. Mientras Fegas y PP sellaban sus acuerdos con un mismo promotor, el que se benefició del millón de euros adicionales, la fundación mantenía un tenso tira y afloja con la Intervención Xeral, que alertó de la inexistencia de un plan plurianual que sustentase el contrato, con obligaciones hasta 2009. El Fegas hizo caso omiso y elevó a público el acuerdo.

Esas son básicamente las incidencias que, desde la perspectiva de la tramitación del expediente, presidieron la compra de la sede del Sergas, y que la auditoría tacha de "errores, deficiencias e irregularidades". Aunque no encuentran motivos para anular el contrato, los auditores alertan de "las responsabilidades contables" en que pudo incurrir la fundación, ante "la ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral". De acuerdo con el informe, la Fegas ocultó primero a Economía la existencia de opciones de compra y desoyó después la advertencia de que estaba comprometiendo un gasto por más tiempo del autorizado por la ley.

La fundación de la Consellería de Sanidade remitió la documentación relativa a la compra el 7 de marzo de 2003, sólo cinco días antes de que el director de la Fegas, Javier Bouzada, y los responsables de la Sociedad Civil San Lázaro firmaran ante notario la primera versión del contrato. En esa comunicación "no

se hace referencia al coste de las opciones de compra", según recoge el informe. La información remitida a Economía citaba entre las ventajas de la opción elegida -un sistema mixto de adquisición y arrendamiento con opción de compra- la de favorecer una "adquisición inmediata" de parte de los locales en el año 2003 y un alquiler del resto, "sin mencionar en ningún momento la existencia de una opción de compra".

El 18 de marzo, la Fegas recibe un requerimiento de la Intervención Xeral en el que le solicita información respecto a "la verdadera naturaleza de la operación", con la remisión de los pliegos de condiciones y la explicación de la financiación de capital adicional. La fundación sanitaria contesta con una copia del pliego que rigió el concurso, al que sólo se presentó San Lázaro, promotor también de la anexa sede del PP, y de la modificación de presupuesto que permitió pagar al contado parte del precio.

El intercambio de oficios entre Fegas e Intervención concluye con una comunicación de Economía, en la que se deduce que "la verdadera naturaleza de la operación es una compra de inmovilizado con pago aplazado". La Intervención avisa de que la fundación "no tiene autorizada la operación de endeudamiento" para el primer ejercicio, el de 2003, por lo que debe pasar por el Consello de la Xunta.

Otra de las advertencias hace referencia al período de adjudicación de seis años, hasta 2009, "con la consiguiente asunción de obligaciones para los ejercicios futuros". Esa planificación "sólo tiene acogida" en un programa de financiación plurianual del que carece el expediente. La contratación "excede el número máximo de anualidades permitido" por la Ley de Régimen Financiero, avisó la Intervención Xeral, que alertó de la necesidad de seguir el procedimiento de autorización con carácter previo al expediente del gasto.

EL INTERCAMBIO

- 7-3-2003. La Fegas remite a Intervención una comunicación que no incluye las opciones de compra.
- 18-3-2003. Intervención pide aclaraciones sobre la verdadera naturaleza de la operación.
- Semana del 18 al 25. La Fegas remite nueva documentación.
- 25-3-2003. Intervención informa de que el contrato excede el máximo legal de anualidades y de que precisa de autorización previa.

(www.elpais.com, 12/11/09)

EL PSDEG LLEVA LA COMPRA DE LA SEDE DEL PP A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN



Será en los juzgados, y no en el Parlamento, donde se investigará el sobreprecio de un millón de euros en la compra de la sede de una fundación del Sergas por la Xunta de Fraga, y su relación con la

adquisición del local del PP en el mismo edificio, en las mismas fechas y al mismo promotor, también por un millón de euros. El Grupo Popular impuso ayer su mayoría para rechazar la creación de una comisión de investigación que apoyaron PSdeG y BNG, apelando entre otros argumentos a una auditoría encargada por el Gobierno bipartito que, en 2006, no encontró causa de nulidad en el contrato del Sergas. El mismo informe revela, en las primeras líneas de sus conclusiones, los "errores, deficiencias e irregularidades" de la operación.

Los socialistas replicaron a la negativa del PP a la investigación con el anuncio de que llevarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción, ante el "cúmulo de coincidencias" que les llevaron a sospechar que el PP "pagó su sede con fondos públicos de todos los gallegos", en palabras de la diputada del PSdeG Mar Barcón. La diputada recordó que, el 13 de marzo de 2003, el director del patronato de la fundación Fegas, dependiente de Sanidade, firmó ante notario con el promotor de la sede un contrato mixto de venta y opción de compra por 2.096.875 euros. Sólo 18 días después, ambas partes volvieron para efectuar una "corrección de errores" que encareció el coste hasta 3.073.879 euros. El sobreprecio coincide casi exactamente con el valor de la sede del PP, adquirida en las mismas fechas al mismo promotor inmobiliario. Un informe de Tinsa estimaba el valor en la época de la sede de la Fegas en 1.756.800 euros. "No puede ser una casualidad, y si lo es, tienen que demostrarlo", retó Barcón al PP.

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Ruiz Rivas, apeló a la hipoteca suscrita por el PP para justificar que el partido pagó su sede. Tanto Ruiz Rivas como después el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que compareció tras el debate de la comisión de investigación para informar al Pleno de la compra de la sede de la Fegas, admitieron los errores que encarecieron la operación. "Puede que no se diera toda la pulcritud administrativa, pero sí toda la pulcritud ética y política", sostuvo el portavoz popular. Rueda atribuyó las correcciones en el precio a "dos errores concatenados de un funcionario sin adscripción política", que fueron "rápidamente detectados y corregidos casi en tiempo real".

La defensa del PP se basó en dos argumentos. De una parte, contraatacó con otros contratos de la Xunta durante el Gobierno bipartito, entre ellos la sede de Sogama; según Rueda, con un sobrecoste de 200.000 euros. Y del otro, con el "retraso" de los socialistas en denunciar el caso. "La oposición quiere investigar al Gobierno anterior del anterior, fíjense si serán fariseos", acusó Ruiz Rivas. Rueda puso a disposición de los grupos parlamentarios documentación sobre los pagos efectuados por el PP para pagar su sede y la auditoría que encargó el bipartito sobre la operación.

En contra de lo afirmado en octubre por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el informe de PriceWaterhouse no concluye que el precio pagado se ajusta al de mercado. La auditoría revela, en cambio, "errores, deficiencias e irregularidades" en el expediente tramitado por la Fegas, aunque no encuentra causa de nulidad del contrato. Según un comunicado de la Consellería de Sanidade del 14 de octubre, el informe "confirma la transparencia en el proceso de adquisición de la sede".

"Sólo tenemos que averiguar cómo es posible que el PP comprase a la misma empresa y en el mismo edificio, y pague la mitad que la sanidad pública el mismo mes", señaló Mar Barcón. La diputada socialista descalificó las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, y subrayó que los ciudadanos "quieren saber si se pagó la sede del Partido Popular con el dinero de los gallegos". "Si no es así, demuéstrenlo en una comisión de investigación", añadió. Ana Luisa Bouza, del BNG, respaldó la petición, ante "los indicios de cosas graves". El PP respondió al anuncio de llevar el caso al fiscal con ironía. "Su estrategia es de una querrela cada mes, tienen mono de juzgado", sentenció el diputado Antonio Rodríguez Miranda.

(www.elpais.com, 11/11/09)

FEIJÓO DA POR YA INVESTIGADA LA COMPRA DE LA SEDE DEL PP

El mismo día que el PSdeG confirmó la solicitud de una comisión de investigación sobre la compra de la sede del PP, Feijóo anticipó su negativa a constituirla. Hacerlo ahora, después de que el bipartito "no encontrase nada" en cuatro años, es "perder el tiempo". Formalmente, el presidente de la Xunta y del PP dejó la decisión en manos del grupo parlamentario.

Los socialistas basaron su petición en la "evidente manipulación de documentación" por parte de la Xunta para desvincular la compra de la sede de una fundación del Sergas de la del PP, a pesar de la "coincidencia financiera y espacial" de ambas operaciones. Ante la negativa de Feijóo a comparecer en

el Parlamento para explicar la operación, el PSdeG está "en su obligación democrática" de reclamar la investigación.

Pero Feijóo apeló al paso de los socialistas por el Gobierno para concluir que no hubo tal relación. "Supongo que el PSOE investigó durante cuatro años una sede en la que estuvo durante ese tiempo", declaró, para añadir que es "una pérdida de tiempo investigar lo que ya investigaron sin encontrar nada".

La iniciativa de los socialistas será tramitada en la próxima junta de portavoces del Parlamento. En la petición, apelan a la "alarma social" que provoca el sobreprecio de un millón de euros que pagó la fundación por la sede, una cifra "semejante" a la que figura en las escrituras de la del PP.

(www.elpais.com, 22/10/09)

VÁZQUEZ EXIGE QUE LA CÁMARA INVESTIGUE LA SEDE DE LA FEGAS

El PSOE da cinco días de plazo a Feijóo para que comparezca en el Parlamento

O Feijóo da explicaciones en el Parlamento, o el PSdeG reclamará una comisión de investigación, con el objetivo de aclarar si la Xunta de Fraga pagó la sede del PP de Galicia. El líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, dio ayer al presidente de la Xunta un plazo de cinco días para aclarar "la sospecha evidente" de que el local de su partido "pudo ser obtenido con fondos públicos". De lo contrario, el PSOE propondrá el miércoles la investigación parlamentaria. El BNG adelantó que apoyará la medida.

El ex director de la Fegas asegura que la operación fue "beneficiosa"

El ultimátum se produce después de que Feijóo asegurara que "no hay nada" en la compra de la sede del Sergas. La Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas) pagó un sobreprecio de un millón de euros, la misma cantidad en que registró el PP su sede, anexa a la de la fundación y promovida por la misma inmobiliaria. La Fegas pagó 3,07 millones de euros, más 800.000 euros en obras de acondicionamiento encargadas a la misma empresa.

Con estos datos en la mano, a Vázquez le quedan pocas dudas: la Xunta "amañó un concurso público" para comprar la sede de la Fegas. El líder del PSdeG acusó "formalmente" a la Consellería de Sanidade por "intentar engañar" a los medios de comunicación, al enviar documentación parcial de las actas notariales. También negó que la auditoría que encargó el bipartito sobre la situación legal de la sede hiciera referencia alguna a su precio de mercado, como indicó Feijóo.

El director de la Fegas en la época en que se hizo la operación, Javier Bouzada, emitió ayer una nota en la que defiende la compra por "impecable y en extremo beneficiosa" para la Xunta. Bouzada apela al ahorro de 100.000 euros anuales en alquileres para justificar los 3,9 millones de euros gastados. Niega además cualquier vinculación entre esta compra y la del PP y apela a "un error" en la primera escritura para justificar la segunda, que encareció el precio. Bouzada anunció acciones legales contra los medios que divulgaron y recogieron la noticia.

El PP, mientras, comparó el precio pagado, excluidos los arreglos, con el que abonó Sogama por una sede próxima. Las cantidades son "simétricas", concluye, aunque según sus cuentas, la Fegas pagó 205 euros más por metro cuadrado en 2003 que Sogama en 2007, tras cuatro años de *boom* inmobiliario.

www.elpais.es 17.10.09

FEIJÓO AVALA LA COMPRA DE LA SEDE DE LA FEGAS POR 4 MILLONES

Feijóo avaló ayer con sus palabras la compra de la sede de la Fegas, la fundación del Sergas que en 2003 pactó un sobreprecio de un millón de euros con la misma inmobiliaria que construía el local del PP. Lejos de parecerle exagerado el gasto (3,9 millones, incluyendo el acondicionamiento), lo estimó "conforme a los precios de mercado".

El presidente de la Xunta obvió un informe de Tinsa que cifra en 1,7 millones de euros el precio de mercado, y citó en cambio una auditoría que encargó el Gobierno anterior con el fin de abortar la compra.

Según el único párrafo hecho público por Sanidade de ese informe, no había "causa de nulidad" de la operación, pero sí posibles "responsabilidades contables", por la "ausencia de tramitación del gasto indicada por la Intervención Xeral". Feijóo hizo una lectura distinta de la auditoría, que, según él, "confirma que la compra se efectuó conforme a los precios de mercado". El presidente de la Xunta criticó al bipartito por "no hacer público" el informe jurídico sobre la operación de compra, incrementada en un millón de euros 18 días después de ser firmada ante notario. Según Alberto Núñez Feijóo, esa auditoría avala el precio pagado. Pese a las reiteradas peticiones de este periódico, la Consellería de Sanidade no facilitó el documento al que aludió ayer Feijóo ni el pasaje en el que supuestamente se respalda el precio.

Según el informe de la consultoría Tinsa, la principal empresa de España en tasaciones inmobiliarias, el valor de la sede adquirida por la fundación del Sergas "a fecha de marzo de 2003", cuando se firmó el contrato ante notario, era de 1.756.800 euros. El informe, de 102 páginas, fue elaborado en enero de 2006 a instancias de la propia Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas). Incluso en esas fechas, tres años después de que se cerrara la compra, el precio de la sede, anexa a la del PP, era de 2.275.200 euros, casi un millón de euros menor que el pagado.

Para realizar su informe, Tinsa analizó el segmento del mercado inmobiliario de locales comparables, y se basó en informaciones concretas sobre transacciones reales y ofertas firmes. La consultora estimó asimismo los flujos de caja futuros, como diferencia entre los ingresos generados por los alquileres de los inmuebles, los gastos de gestión e impuestos y el valor de reversión.

A los 3,07 millones en que se cerró el contrato hay que añadir 800.000 euros que se gastó la Fegas en acondicionar el local, casi tanto como el precio en que registró el PP su sede (961.620 euros) ya habilitada. Toda la adaptación del inmueble del Sergas se encargó a la empresa que construyó su sede y la del Partido Popular, que hipotecó la suya por 1,1 millones de euros.

Feijóo se aferró a la auditoría interna para asegurar que "no hay nada". Y contraatacó: "Cuando no se cometen errores, las injurias e insidias no se pueden presentar como una forma de hacer política". Para intentar demostrar que no hay ninguna relación entre la compra de la sede de la fundación y la del PP - adquirida en las mismas fechas y escriturada en un valor similar al del sobreprecio que pagó el Fegas-, se refirió al Gobierno anterior. "Si el bipartito ocupó la sede sin advertir de sus irregularidades, sería un cómplice, ¿o buscó y no encontró?".

(www.elpais.com, 16/10/09)

EL SERGAS DIO CONTRATOS POR 800.000 EUROS A LA PROMOTORA DE LA SEDE DEL PP

La Xunta no se quedó en un simple sobreprecio. Si la modificación del contrato para comprar la sede de una fundación del Sergas elevó el coste en un millón de euros, que fue a parar al bolsillo del mismo promotor que construía el local del PP de Galicia, las facturas hicieron otro tanto. A lo largo de 2003 y 2004, la inmobiliaria remitió a la Consellería de Sanidade más de 140 facturas por 800.000 euros. El importe total del inmueble pasaba así de 3,07 millones de euros a casi 4 millones. Su precio de mercado era de 1,7 millones, según un informe de la consultora Tinsa.

Una vez construido el edificio, la fundación sanitaria fue encargando, siempre a la inmobiliaria que construyó su sede y la del PP, distintas obras de acondicionamiento para la primera. Todas ellas, por valor ligeramente inferior a los 90.000 euros, de forma que las licitaciones las tramitó directamente el director de la fundación, Javier Bouzada Romero, sin necesidad de elevar propuesta al patronato de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas). La empresa Kotlas cobró así, por ejemplo, 154.591 euros en obras de instalación eléctrica, divididas en tres facturas, además de otros 60.935 en iluminación.

La Fegas no reparó en gastos. Las facturas revelan el pago de 42.793 euros para cuadros de alimentación individuales, con tomas de ordenador y corriente, para los alumnos de la escuela. En tres bases para tapas de mesas de ordenadores y otras cuatro para el salón de actos, la inmobiliaria facturó 14.354 euros. Los gastos incluyen 5.656 euros en tomas de proyectores fluorescentes, 9.241 en azulejos de aseos, 27.437 en pantallas fluorescentes, 3.495 en barandillas y 3.616 en tres chapas con el anagrama de Fegas.

Sin embargo, unos meses antes, el 24 de abril de 2002, el director del Fegas reconocía ante el patronato que la escuela disponía en esos momentos "de material informático y de oficina de sobra". El acta de aquella reunión recogía la decisión de implantar la actividad docente en el Pazo de Congresos y Exposicións de Santiago, con un coste anual de 125.492 euros. La única inversión, sostenía Bouzada, consistiría en dividir con mamparas los 228 metros cuadrados del bloque D del Pazo para "estructurar las distintas oficinas". Seis meses más tarde, el 1 de octubre, Bouzada informaba de que "razones de tipo económico y de política local" hacían imposible el uso del Pazo de Congresos.

A esa reunión, el director de la Fegas se presentó con una alternativa: las condiciones de adquisición y financiación de un inmueble para construir la sede de la fundación. Javier Bouzada llevaba bajo el brazo las características de las instalaciones y el pliego de condiciones para la licitación del contrato, que incluían la ubicación en la propia zona de San Lázaro y una superficie en metros cuadrados coincidente con la que le ofertaba la inmobiliaria que construiría la sede del PP. Sólo esa compañía presentó oferta. El 11 de diciembre se le adjudicó el contrato.

"Fue un error al cortar y pegar"

Javier Bouzada, director de la Fegas durante la operación, atribuyó ayer las correcciones que elevaron el precio de la sede en un millón de euros al "error de un funcionario". Según Bouzada, ese trabajador empleó distintos borradores de contrato con la inmobiliaria que construyó la sede del PP. "A la hora de cortar y pegar para hacer el definitivo, se equivocó; es un error que ese funcionario asume", declaró.

Bouzada asegura que cuando cerró la operación desconocía que el PP se iba a instalar en el mismo edificio, y niega "haber hablado nunca ni conocer de nada a Jesús Palmou", entonces secretario general del PP. "Yo despachaba con el presidente en funciones del patronato", aclara. También sostiene que volvió al notario para dar cuenta de los errores, no sin advertir al patronato de la Fegas, sino "por mandato" de ese organismo, con el objetivo de subsanar las incorrecciones. Bouzada asegura que la operación fue "impecable" y atribuye el caso a que "el PSOE está cinco puntos por debajo del PP".

La Consellería de Sanidade defendió ayer la "transparencia" de la compra de la sede de la Fegas, y limitó a 79.846 euros la diferencia entre el primer contrato firmado ante notario y el rectificado 18 días después. En un comunicado, el departamento que dirige Pilar Farjas asume rectificaciones menores, pero concluye que el precio establecido en la primera visita al notario era de 2.994.034 euros. Esa cantidad sale de sumar la compra de una parte del inmueble (820.992 euros), el pago de alquileres del resto (1.248.883) y sus respectivas opciones de compra (924.158).

Lo que las reproducciones que acompañan la nota de la consellería no incluyen son los dos párrafos que establecen que las opciones de compra se entenderán abonadas con cargo a los alquileres, de forma que "no procederá, en el momento del ejercicio y materialización de la opción de compra por la Fegas, el abono de cantidad alguna". Sin esos 924.158 euros, el precio de la sede de Fegas saldría en 2,07 millones de euros, un millón menos del aceptado cuando fundación y promotora volvieron al notario.

(www.elpais.com, 14/10/09)

LA XUNTA DE FRAGA INFLÓ UN CONTRATO CON LA PROMOTORA DE LA SEDE DEL PP

Oficialmente, todo se debió a una simple "corrección de errores". Pero esos errores le costaron al erario público un millón de euros, al elevar el precio de la sede de una fundación de la Consellería de Sanidade de 2,07 millones a 3,07 millones de euros. Corría el año 2003, el mismo en que el PP de Galicia, entonces al frente de la Xunta, se hacía con su actual sede de San Lázaro, ubicada en el mismo edificio que la fundación de Sanidade. Las coincidencias no acaban ahí, ya que el promotor inmobiliario que se benefició de la corrección de los "errores" es el mismo que construyó el local del PP. El valor de escritura de la sede de los populares se corresponde con el sobreprecio abonado a la promotora.

En el plazo de 18 días, los representantes de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que depende de Sanidade, y de la inmobiliaria tuvieron que presentarse dos veces ante notario. La primera, para elevar a público un contrato privado mixto, de venta y alquiler con opción de compra, de acuerdo con unas condiciones supervisadas por el patronato de la fundación. Eso fue el 13 de marzo de 2003. El 31 del mismo mes, volvieron a la notaría para dar cuenta de varias incorrecciones. Se eliminó así, y sin dar cuenta al patronato, la exención de materializar abono alguno para ejercer la opción de compra. La operación se encarecía en 1.004.004 euros.

La sociedad vendedora mejoró así sustancialmente unas condiciones de venta que originalmente ya le eran muy favorables. Según un informe de la consultora Tinsa, el valor de tasación del inmueble a fecha de marzo de 2003 era de 1.756.800 euros, esto es, un 53% menos de lo finalmente acordado. La sede fue comprada por 3.073.879 euros sobre plano y sin acondicionar.

Entre una y otra visita al notario, el entonces director de la fundación, Javier Bouzada, eludió someter al criterio del patronato las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento y opción de compra, a pesar de que encarecían la operación en un 50%. Las correcciones afectaban de un lado a cálculos menores. Pero venían acompañadas de una carga de profundidad: la eliminación literal de dos párrafos, en los que se establecía que las cantidades ingresadas como alquiler eximían a la Fegas de realizar "el abono de cantidad alguna" en el momento de ejercer la opción de compra.

La sede de la fundación del Sergas ocupa todo el primer piso del edificio donde el PP tiene sus oficinas, y otros 128 metros cuadrados de la planta baja, contiguos al local de los populares. Su adquisición se realizó mediante un sistema mixto de venta y optativa, por el que la fundación se hizo con una parte de forma directa, en 2003, y el resto, ejercitando sucesivas opciones de compra en los años siguientes.

De acuerdo con las cláusulas rectificadas ante notario, 128 metros cuadrados de la planta baja y otros 320 del primer piso se cerraron por un precio de 820.992 euros. El pago de los alquileres entre 2004 y 2009 del resto de la sede, dos piezas de 440 metros cada una, ascendería a 1.248.883 euros, lo que arrojaba un precio final de 2.069.875 euros. Las correcciones supusieron una leve disminución de los alquileres, pero al incorporar una cláusula de opción de compra, el precio definitivo se elevó a 3.073.879 euros.

La entrega del inmueble a la fundación, cuyo patronato presidía el entonces conselleiro de Sanidade, José María Hernández Cochón, estaba establecida en el contrato el 1 de enero de 2004. El Partido Popular inscribió su sede en el registro de la propiedad tres semanas más tarde, el 22 de enero de ese mismo año. Su local, de 500 metros cuadrados, fue escriturado en 961.620 euros. El PP solicitó una hipoteca que le fue concedida por 1.111.872 euros, según consta en la escritura del 17 de diciembre de 2003.

El promotor fue el mismo: Sociedade Civil San Lázaro, una compañía participada por las empresas Gestinfor Inversores y Kotlas, S L.

Fuentes de la dirección del PP en aquella época sostienen que fue una operación inmobiliaria "clara y transparente" y que no hubo "ninguna conexión" con la compra que hizo la fundación sanitaria. "Si los de arriba [el Fegas] compraron más caro, que sean ellos los que den explicaciones", señalan. La compra la firmó el gerente del PP gallego, que se valió de un poder que expidió la dirección nacional del partido. Las mismas fuentes aseguran que el local del PP "se compró ya completamente acondicionado".

(www.elpais.com, 13/10/09)

UN PLIEGO DE CONDICIONES A LA MEDIDA

Todo ocurrió a velocidad de vértigo. El 1 de octubre de 2002, el patronato de la Fegas fue informado del fracaso de las negociaciones para instalarse en el Palacio de Congresos de Santiago, facultó al director a "realizar todas las actuaciones que posibiliten que la Fegas pueda tener una sede propia" y aprobó el pliego de condiciones para su adquisición. En un par de meses, el 11 de diciembre, la Sociedade Civil San Lázaro se hacía con el contrato.

San Lázaro fue la única promotora que presentó oferta. Claro que las condiciones no ayudaban a abrir el abanico. La adjudicataria las cumplía todas. Así, por ejemplo, la proximidad a las sedes de la Consellería de Sanidade y Sergas en San Lázaro. O de una conexión con la AP-9 (hay una a apenas 300 metros). Por supuesto, también contaba con "suficientes plazas de aparcamiento en el entorno", dada su cercanía al parking del estadio de fútbol del Compostela. No era necesario un edificio construido; bastaba con estar en obras. La elegida por la Fegas -y por el PP- cumplía todos esos requisitos, y hasta ofrecía una superficie (1.328 metros cuadrados) que encajaba como un guante en la demanda de "entre 1.100 y 1.400 metros cuadrados" que figuraba en el pliego.

Cronología

- 1-10-2002. La Fegas aprueba el pliego de condiciones de su sede.
- 11-12-2002. Adjudicación de la compra del inmueble.
- 13-3-2003. Inmobiliaria y Fegas firman ante notario por 2,07 millones de euros.
- 31-3-2003. Regresan al notario y rectifican el precio, que pasa a 3,07 millones.
- 1-1-2004. Plazo de entrega del inmueble a la fundación.
- 22-1-2004. El Partido Popular inscribe su sede por 961.620 euros.

(www.elpais.com, 13/10/09)

LA XUNTA DE FRAGA INFLÓ UN CONTRATO LA CONSTRUCTORA DE LA SEDE DEL PP

El Sergas pagó un millón de euros más por locales contiguos a los del partido

La Xunta de Fraga infló en 2003 en un millón de euros el precio que pagó por la sede para una fundación de la Consejería de Sanidad. El promotor que se benefició de la súbita mejora del contrato es el mismo que en esas fechas construía para el Partido Popular de Galicia su sede en Santiago, que comparte edificio con la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas). El local del PP fue registrado por un valor casi idéntico al sobreprecio pagado a la empresa inmobiliaria.

La Fegas y la promotora elevaron ante notario el 13 de marzo de 2003 un contrato mixto de venta y opción de compra que supondría un gasto final de 2.096.875 euros. Pero 18 días después, y sin mediar una reunión del patronato de la fundación, regresaron para "rectificar errores". Se introdujeron así cláusulas para hacer efectiva la opción de compra que encarecieron la operación hasta 3.073.879 euros. El valor de mercado era de casi la mitad: 1.756.800 euros, según un informe de tasación elaborado por Tinsa.

La adjudicación a la Sociedade Civil San Lázaro, constituida por las compañías Gestinfor Inversores y Kotlas, S. L, se produjo en diciembre de 2002, al resolver la Fegas una convocatoria que se había acordado sólo dos meses y medio antes y a la que no se presentaron más candidatas. En el pliego de condiciones se establecían requisitos como la proximidad a San Lázaro, donde se encuentran las sedes de Sanidad y del Sergas en Santiago. También se valoraba la existencia de plazas de aparcamiento. El edificio está junto al parking del estadio de fútbol del Compostela. Se admitía que estuviese en obras y se requerían unas dimensiones de "entre 1.100 y 1.400 metros cuadrados". El que construía la Sociedade Civil San Lázaro, en el edificio CNL, disponía exactamente de 1.328.

www.elpais.es 12.10.09

ABSUELTA LA MUJER ACUSADA DE INJURIAS POR LA DIRECTORA DE TRABAJO

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol absolvió ayer del delito de injurias que imputaba la directora general de Formación e Colocación de la Consellería de Trabajo, Ana María Díaz, a una antigua empleada de su familia. La alto cargo de la Xunta emprendió acciones legales contra la mujer, Dolores Seco, después de ser condenada por su despido improcedente, un fallo que Díaz nunca recurrió. Pero además de absolver a la trabajadora del delito de injurias que le imputaba la directora de Trabajo, el juez Alejandro Morán Llordén contradice el contenido de la sentencia firme que dictó el pasado mayo el Juzgado de lo Social número 3 de Ferrol y niega que Díaz despidiese a la mujer o la tuviese trabajando para ella como empleada doméstica.

Díaz ni se presentó al juicio por la demanda que presentó contra ella y su familia Dolores Seco, empleada sin contrato en el restaurante de los padres de la directora general y en el domicilio de un hermano suyo. Tampoco recurrió el fallo del juzgado de lo social, que concluyó que fue ella misma quien echó a la trabajadora y la condenó por despido improcedente.

Sólo después de que CIG airease el caso y la oposición reclamara su cese, Díaz abrió una batalla legal denunciando por injurias a la trabajadora. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había exigido a la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, que Díaz lograra otra resolución judicial para probar que ella no había despedido a una trabajadora sin contrato. La directora general presentó entonces una denuncia por injurias basándose en una declaración de la antigua empleada, recogida en este diario el 5 de septiembre, en la que Dolores Seco afirmaba que Díaz "no tiene vergüenza" por negarse a dimitir pese a la condena judicial.

El auto dictado ayer por el juez Morán exculpa a Seco y establece que sus palabras no fueron "un insulto sino un juicio de valor". Pero la sentencia, que el magistrado firmó ya el mismo día de la vista, va más allá del objeto de la demanda, entra a valorar los hechos ya juzgados en la sala de lo social y contradice la sentencia firme promulgada en mayo por el juez de lo social Eloy Hernández al concluir que Seco "no fue despedida por Ana María Díaz López".

Aunque no era el objeto del juicio, el fallo añade que la trabajadora "no fue empleada doméstica" de la directora general ni tiene vinculación legal con la sociedad civil que dirigen su padre y su hermano Infante. "Dolores Seco no ha sido empleada doméstica de Ana María Díaz López" reza la sentencia. El juzgado de lo social basó su condena a Díaz en que fue ella precisamente quien "puso fin a la doble relación laboral" que empleaba a Seco sin contrato en el restaurante familiar y en el domicilio de su hermano.

En la vista celebrada el pasado martes, tanto la directora general como su madre negaron la relación de Dolores Seco y su hija, Yolanda Seijas, con el negocio familiar pese a que dos sentencias inapelables así lo establecen. Recientemente, el hermano de la directora de Trabajo abonó 347.70 euros que adeudaba a Yolanda Seijas por su trabajo como planchadora en el bar y empleada doméstica de Ana María Díaz en enero de 2009.

(www.elpais.com, 03/12/09)

LA DIRECTORA DE TRABAJO PIDE UNA MULTA PARA LA MUJER A LA QUE ECHÓ

La directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, negó ayer ante un juez cualquier relación laboral con Dolores Seco, la trabajadora a la que despidió ilegalmente, según una sentencia firme dictada por el juzgado de lo Social número 2 de Ferrol. En un intento de lavar su imagen tras su condena por despido improcedente, esta alto cargo de la Xunta denunció a la ex empleada por injurias y se cerró en una defensa rocambolesca basada en la negación de su condena. En la demanda, Díaz López pide una multa de 120 euros para la mujer despedida.

La sala de Instrucción número 3 de Ferrol acogió ayer la vista por el juicio de faltas que enfrentó a la directora de Trabajo, Ana María Díaz, con la mujer a la que despidió, según prueba el fallo del juez. Por ella desfilaron durante dos horas media docena de testigos además de la denunciante, Ana Díaz, y la denunciada, Dolores Seco.

La directora general negó que la mujer trabajase durante seis meses en el restaurante que regentan su padre y su hermano, "hecho probado" en el fallo del juzgado de lo Social número 2 de Ferrol. Díaz López no lo recurrió entonces pero amenazó a la trabajadora con una querrela criminal que se quedó en denuncia por injurias. En el requerimiento notarial de septiembre, Ana Díaz tilda la sentencia de "errónea" y argumenta que está siendo utilizada para "socavar su honor, prestigio y actividad profesional". Acusa a la trabajadora de mentir en un juicio laboral al que ella misma no acudió, pese a estar citada, y en el que Dolores Seco no declaró porque ni siquiera fue interrogada, según fuentes de la defensa.

La condena le llegó a Ana María Díaz cuando ya era alto cargo de Trabajo. Tanto ella como su superior, Beatriz Mato, desoyeron las peticiones de dimisión de PSOE y Bloque, CIG y Comisiones Obreras. Tanto este departamento como el PP retorcieron primero el fallo, lo achacaron después a un error judicial y sólo al final acataron a regañadientes su contenido sin adoptar medida alguna sobre su alto cargo.

El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, respaldó desde su escaño la continuidad de la directora, si bien condicionó el futuro político de Ana María Díaz al resultado del juicio de ayer, pendiente de sentencia.

La directora de Trabajo sólo admite que esta mujer fue empleada doméstica de su hermano pero niega cualquier vinculación laboral de la trabajadora con el negocio familiar. Tanto la madre -que se presentó como una pensionista- como el hermano respaldaron esa tesis, contradiciendo las pruebas testificales y fotográficas presentadas y juzgadas meses atrás que situaban a Dolores Seco como empleada del restaurante que explota la familia de la directora general. "Queda claro que son ellos los que mienten", resumió el letrado de CIG, que representa a la trabajadora. Dos delegadas del sindicato testificaron que el lunes siguiente al despido se presentaron en el local buscando al propietario. Ambas declararon que fue Ana María Díaz quien salió a recibirlas y, tras presentarse como abogada, les comunicó que tanto Dolores como su hija Yolanda -las dos sin contrato- estaban despedidas.

Pertrechada tras sus abogados, la directora general rehusó ayer hacer declaraciones. Exige una multa de 20 días a razón de seis euros diarios para la trabajadora, a la que acusa de calumniarla. Una hora después del juicio, el jefe de gabinete de la conselleira de Trabajo, Miguel Tellado, llamó a esta

periodista cuestionando las informaciones publicadas por EL PAÍS, que tildó de "campaña lamentable y sin rigor", y para manifestar que "el juicio está ganado".

(www.elpais.com, 02/12/09)

LOS POPULARES DENUNCIAN UNA PERSECUCIÓN CONTRA LA ALTO CARGO DE TRABAJO CONDENADA

Cinco meses después de que un juzgado de Ferrol la condenase por despido improcedente y la señalase como la persona que echó a una trabajadora empleada sin contrato y sin Seguridad Social en un domicilio y una empresa familiar, Ana María Díaz López continúa ejerciendo como directora general de la Consellería de Trabajo. En el Parlamento, 72 diputados debatieron ayer durante casi una hora sobre si la alto cargo condenada debía seguir en la Xunta. La mayoría del PP, 37 votos, incluido el del presidente Alberto Núñez Feijóo, concluyó que sí. No se quedó en eso, el grupo parlamentario popular, a través del diputado Alberto Sueiro, denunció una "persecución" de PSOE y Bloque a la directora general para aumentar la "repercusión mediática" del caso. Habló de "cruzada, como las limpiezas de sangre de la Edad Media", y esgrimió que "los hechos", el despido de una trabajadora sin contrato, sucedieron antes de que Díaz López ingresase en la Xunta. La notificación de la condena la recibió, no obstante, cuando ya era parte del Gobierno.

En eso incidió la oposición. El diputado socialista José Tomé Roca preguntó si Trabajo ha abierto un expediente a la empresa familiar de Díaz López por emplear a personal sin contrato en un restaurante. No hubo respuesta por parte del PP. Sueiro se limitó a preguntar si socialistas y nacionalistas creen que un alto cargo del Gobierno no puede "tener un fallo en toda su vida" e invitó a ambos partidos a aplicar esa doctrina en los municipios donde gobiernan.

El listado de reproches de la oposición fue interminable. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, recriminó a los populares que mantengan como responsable del cumplimiento de la ley a alguien que la "ha vulnerado de forma flagrante". Tomé Roca apeló directamente al presidente de la Xunta cuando entraba en el hemiciclo: "Destituya a la directora general y reponga la transparencia en la Consellería de Trabajo". Sin éxito. Feijóo, como el resto de la bancada popular, apretó el botón rojo y desbarató la moción.

(www.elpais.com, 28/10/09)

TRABAJO MANTIENE A LA DIRECTORA CONDENADA POR SU "CAUDAL DE ILUSIÓN"

Si lo que pretendía la oposición era cobrarse algún cese por las polémicas que salpican a los altos cargos del nuevo Gobierno, la sesión parlamentaria de ayer demostró que PSdeG y Bloque pinchan en hueso. El líder socialista, Manuel Vázquez, y el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, saludaron ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole la dimisión de la directora general de Trabajo, Ana María Díaz López, a quien un juzgado condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien echó a una trabajadora empleada sin contrato en un domicilio y una empresa familiar.

Lo reclamaron ambos de pasada, mientras preguntaban al presidente en el Parlamento por su política social. Feijóo no entró al trapo. Ya por la tarde, tres conselleiros distintos despejaron sin demasiados aspavientos "los escándalos" que denunciaban la oposición y demostraron que las dimisiones las venderá caras el Gobierno del PP.

Con su desparpajo habitual, la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, defendió a su alta cargo condenada desviando la responsabilidad judicial hacia la familia de Díaz López, al tiempo que eximía a ésta de cualquier culpa tras el pago de la indemnización que fijó el juzgado. Para auxiliar a su colaboradora, Mato esgrimió ayer un razonamiento nuevo: "Sé que es la primera en llegar al trabajo y no voy a renunciar a ese caudal de ilusión". Zanjó así la exigencia del diputado socialista Xosé Tomé Roca, para que la consellería depure responsabilidades. En cada iniciativa parlamentaria, la oposición aludió a los problemas judiciales de Ana María Díaz. Mato ha decidido mantenerla en el cargo y de momento el presidente de la Xunta avala su continuidad.

Tampoco puso inconveniente el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, a las subvenciones de la Axencia Galega de Industrias Culturais cuando el hemiciclo abordó el caso Fasero. Otra interpelación de los

socialistas refrescó la cronología de los hechos: la Xunta designa al músico Juan Carlos Fasero director de Agadic el 3 de julio y 20 días más tarde la agencia aprueba su convocatoria de ayudas, que reserva tres partidas (en total 18.000 euros) para la empresa Zouma Producciones del propio Fasero. El 28 de ese mes, el director de Agadic opta por deshacerse de las participaciones en la sociedad.

Con un guión calcado al de su compañera de Trabajo, el titular de Cultura también optó por emprender una huida hacia adelante. Condicionó cualquier decisión sobre Fasero a que se pruebe alguna ilegalidad. "Si es así, este departamento depurará responsabilidades con toda firmeza", comprometió. No es previsible que el episodio acabe en los tribunales. De hecho, la oposición se centró en cuestionar la idoneidad de las ayudas, más teniendo en cuenta, vino a decir Concepción Burgo, que en una de las categorías sólo recibieron subvenciones seis empresas además de la de Fasero. Varela, que como presidente de Agadic, firmó esa resolución, adujo que Fasero cumplió con el plazo legal de un mes para deshacerse de la empresa. Aludió de forma confusa a que el registro mercantil cierra en agosto -todos los trámites Fasero los hizo en julio- y evitó valorar el fondo del caso.

A primera hora de la tarde por el hemiciclo había pasado también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Compareció en lugar del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien la oposición le pidió una rectificación sobre las acusaciones que vertió contra Política Territorial por la autovía del Barbanza en una querella archivada por el juez. El PP en la oposición acusó de prevaricar al Gobierno gallego. El máximo responsable de justicia del Gobierno obvió la resolución del juez - que concluyó que "no existe el menor indicio de delito"- y se centró en la exposición de hechos, que califica como "sorprendente y chocante" la adjudicación de la infraestructura.

Gondomar fue la última piedra para Rueda, quien expresó su "respeto a la autonomía local" ante la moción de censura por la que el PP recuperó el gobierno con el apoyo de tráfugas del PSdeG y un independiente. Rueda recordó que la moción es legal y obvió el pacto antitráfugismo.

(www.elpais.com, 10/09/09)

LA DIRECTORA DE TRABALLO AMENAZA CON UNA QUERELLA A LA MUJER QUE DESPIDIÓ

Díaz López conmina a su ex empleada a que se retracte de la declaración judicial

Fue condenada por el despido improcedente de una ayudante de cocina y empleada doméstica que trabajó sin contrato ni Seguridad Social. No se presentó en el juicio ni recurrió la sentencia. Sin embargo, Ana María Díaz López, la directora general de Formación y Colocación de la Xunta condenada en mayo por un juzgado ferrolano, no ha tenido reparos en remitir un requerimiento notarial a Dolores Seco, la mujer a la que despidió, para exigirle que rectifique. De lo contrario, advierte que interpondrá contra ella una querella criminal.

Díaz López acusa a su ex empleada de mentir en el juicio y la amenaza con emprender acciones penales a menos que se retracte "afirmando o negando" la existencia de una relación laboral entre ambas. Relación que el magistrado consideró un "hecho probado" en un fallo judicial que ya es firme, dado que no fue recurrido por las partes.

En un intento más por embrollar el caso y restar importancia a la sentencia, la alto cargo de la Xunta remitió el pasado miércoles un requerimiento notarial al domicilio de Dolores Seco y de su hija, Yolanda Seijas. Ambas trabajaron en la empresa familiar registrada a nombre de Edelmiro e Infante Díaz, padre y hermano de la directora de Trabajo, y fueron despedidas el mismo día. En el escrito notarial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Díaz López califica de "errónea" la sentencia que la "condena indebidamente". La directora de Formación e Colocación de la Xunta aduce "la falsa declaración en juicio" de la persona despedida. Argumenta que el fallo judicial está siendo utilizado para "socavar su honor, prestigio y actividad profesional" y le otorga un plazo de dos días antes de demandarla por la vía penal.

"No tiene vergüenza", manifestó ayer Dolores Seco, la mujer despedida, todavía "sorprendida y enfadada" por un escrito que interpreta "como una amenaza". "Ese requerimiento no tiene sentido ni lugar", tercian desde el sindicato CIG, que asesora legalmente a madre e hija. En su réplica, Dolores Seco se reafirma en lo que declaró ante el juez, ya que no hizo "ninguna declaración falsa".

"¿Cómo puede seguir en su cargo y hablar de honor cuando ella [Ana María Díaz] mintió e incluso negó que mi madre y yo trabajásemos allí?", se preguntaba ayer Yolanda Seijas, su ex empleada de hogar durante tres meses y medio. "Quiere echarle la culpa a su madre para agarrarse al puesto", añade.

Díaz López, por su parte, se limitó ayer a señalar que todo está en manos de sus abogados y rechazó hacer comentarios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió la continuidad de la directora en su cargo y el PP sigue amparándose primero en un "error judicial" que posteriormente rebajó a una mera confusión entre los nombres de Ana María Díaz López y su madre, Ana María López Rodríguez, que dirige la cocina del restaurante familiar donde trabajaron sin contrato Dolores Seco y su hija Yolanda como ayudante de cocina y planchadora. Además, madre e hija limpiaban en casa de Ana María Díaz y su hermano Infante. Todo, por 400 y 250 euros al mes.

Cese o dimisión

El secretario de Organización de la CIG en Ferrol, Francisco Cartelle, volvió a exigir ayer el cese o dimisión de la directora general de Formación y Colocación como "la única alternativa mínimamente digna" para zanjar la polémica e ironizó sobre una sentencia "firme y clara" en la que únicamente ven "confusión" la propia directora de Trabajo condenada, la Xunta y el PP. "El único error es tener a dos trabajadoras sin contrato ni Seguridad Social infringiendo la legalidad", sostiene Cartelle.

La próxima semana, el sindicato interpondrá dos nuevas demandas relacionadas con los despidos, por impagos y vacaciones, contra la sociedad de la familia Díaz López.

www.elpais.es 05.09.09

"NI DIMITÍ NI LA CONSELLEIRA ME HA PEDIDO QUE LO HAGA"

La directora general de Formación y Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López, compareció ayer para analizar los datos del paro y pronosticó un "otoño difícil" para la economía gallega. Es la alto cargo de Trabajo a quien un juez condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien despidió a una mujer empleada sin contrato y sin seguridad social en un restaurante y un domicilio familiar. La directora general mantiene su agenda en la Xunta, porque, según ella misma explicó ayer, considera "perfectamente compatible" la sentencia que la condena y sus responsabilidades políticas en la Consellería de Trabajo.

Díaz López defiende la tesis -esgrimida por la propia conselleira, Beatriz Mato, y por el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda- de que el juez confundió su nombre con el de su madre, titular del negocio de hostelería, cuando dictó sentencia sobre este caso. Sostiene esta tesis y niega entretanto que ella o el PP hablen de "errores judiciales". Ayer anunció que sus abogados trabajan ya para solicitar la revisión de un caso sobre el que pesa una sentencia firme con el ánimo de proteger su honor personal y familiar".

"Acato el fallo pero no lo comparto porque yo no despedí a nadie ni formo parte de esa sociedad mercantil", aseguró ayer la directora general en contra de lo que sustancia el auto.

En sus respuestas a la prensa admitió dos únicos errores: no haberse presentado al juicio en el que figuraba como parte demandada y no recurrir la sentencia condenatoria que recibió cuando ya había estrenado despacho en la Xunta. Por todo lo anterior, la alto cargo de Trabajo no ve necesario presentar la dimisión y negó también que alguien en el Gobierno se la hubiera pedido. "No me lo pidieron, la conselleira [Beatriz Mato] me ha demostrado estos días de muy diversas maneras toda su confianza".

¿Puso su cargo a disposición de la conselleira? "No", se limitó a señalar. Díaz López dejó sin responder si también se propone seguir en el cargo en el supuesto de que su petición de aclaración no sea atendida por el juez que dictó la condena.

Sí lamentó que el episodio lo aproveche la oposición como "arma arrojadiza para intentar desgastar a la Xunta", en referencia a la pregunta parlamentaria que el PSdeG hará el martes a la titular de Trabajo en el pleno del Parlamento.

Desde que se destapó la condena a la directora general, el Partido Popular, por boca de Antonio Rodríguez Miranda, y la consellería de Trabajo han ido alternando las versiones sobre este caso.

Primero partido y Gobierno trataron de negar que la condena afectara a la alto cargo y desviaron las culpas hacia la familia de Ana María Díaz López. Luego aseguraron que hubo una confusión de nombres en la redacción del fallo. El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la semana pasada a la directora general si bien no descartó pedir más información a Trabajo.

(www.pais.com, 03/09/09)

TRABALLO ESPERA QUE LA JUSTICIA "ACLARE" LA SENTENCIA QUE CONDENA A SU DIRECTORA

Mato avala la honestidad de la alto cargo que despidió a una mujer sin contrato

La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, aseguró ayer que tanto la Xunta como el PP esperan "una aclaración" de la sentencia que condena a la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, por despido improcedente después de el juez considerase probado que fue la alto cargo de Trabajo quien echó a una empleada que trabajaba sin contrato en un restaurante y un domicilio de su familia. La máxima autoridad en materia laboral del Gobierno gallego, confió en que "dentro de poco habrá una aclaración para que toda la sociedad tengan confianza en esta persona". Mato volvió a poner la mano en el fuego por "la profesionalidad y honestidad de la directora general desde antes incluso de que se incorporara a la consellería".

Una ex delegada del bipartito gastó en un mes 42.000 euros en Internet

La última versión de la Xunta -anticipada por el PP- es que el fallo judicial confunde a Ana María Díaz López con su madre, quien ni siquiera figura entre los demandados. Así lo aseguró el *número tres* del partido, Antonio Rodríguez Miranda, el viernes, quien apoyó su argumento en que entre ambas personas "sólo cambia un apellido". Miranda denunció además una "caza de brujas", sin apuntar quien estaría detrás de semejante operación. "No decimos que el juez se equivocó", matizó ayer la conselleira, quien pese a todo insistió en que esa aclaración debe llegar desde el juzgado.

Entretanto, la afectada, Ana María Díaz López, mantiene su silencio una semana después de que se conociera una sentencia que ya es firme al no haber sido recurrida por ninguna de las partes. Es precisamente la directora general condenada quien tiene la potestad de pedir al juez una aclaración si considera -como el PP y la propia Mato- que el juez confundió los nombres.

El fallo cita hasta tres veces explícitamente a Ana María Díaz López y en ningún momento alude a su madre. En los hechos probados menciona el trabajo que la denunciante desempeñaba en el domicilio del hermano de la alto cargo y certifica que "fue la hermana, quien la cesa en la relación laboral de empleada del hogar". La cita es textual, el juez habla de "la hermana" que sólo puede ser Ana María Díaz López.

La teoría sobre la confusión del juez es la última a la que se ha aferrado la consellería de Trabajo. Al conocer el fallo, la Consellería de Trabajo y el PP negaron primero que la sentencia condenase a su alto cargo y hicieron creer que sólo afectaba a una empresa de la que la alto cargo de la Xunta no formaba parte.

Dos días más tarde, la propia conselleira aceptó la condena de su directora general pero aludió a futuras sentencias que explicarían el caso. El PP llegó a hacer público otro fallo del juez sobre un caso distinto que condena a la familia de Díaz López por un segundo despido improcedente, pero que absuelve a la directora general, en esta ocasión porque la demanda se presentaba contra un despido en la empresa de la familia. Pese a que esta demandante, según quedó probado, también trabajaba como asistente para Ana María Díaz López, el fallo sólo alude al fin de la relación laboral en el restaurante, que era el objeto de la denuncia.

En su comparecencia ante los medios, la conselleira, confirmó "la sorpresa" que se llevó al llegar al Gobierno y encontrar una factura de 42.651 euros que, tal y como publicó ayer La Voz de Galicia, correspondía a descargas de internet realizadas por la delegada de Trabajo en A Coruña con el bipartito, María Debén. "Es una salvajada y una muestra más del despilfarro del bipartito como los coches y los despachos", criticó Mato.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Trabajo/espera/justicia/aclare/sentencia/condena/directora/elpepiatgal/20090823elpgal_7/Tes/

EL PP AFIRMA QUE EL JUEZ CONFUNDIÓ A LA DIRECTORA CONDENADA CON SU MADRE

La CIG pregunta si el alto cargo de Traballo sancionará ahora a su familia

El Partido Popular insistió ayer en su tenaz defensa de la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, condenada por despido improcedente en sentencia firme. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, alegó, durante una rueda de prensa en Santiago, que el juez propició "una confusión de nombres entre la madre de la directora general y la propia directora general" en la redacción de la sentencia. El fallo judicial, en cambio, considera demostrado que fue la alto cargo de Traballo quien personalmente puso fin a la relación laboral de la mujer empleada sin contrato y sin estar asegurada en un restaurante y un domicilio familiar. La madre de la directora general no figura, ni siquiera, como parte demandada en la denuncia que presentó la trabajadora.

"Sólo hace falta cambiar el orden de un apellido para que se dé esta confusión", insistió Miranda, quien todavía el miércoles había argumentado que la directora general de Traballo condenada no tenía "vínculo jurídico" con la empresa para la que trabajaba la empleada despedida, un bar propiedad de una sociedad registrada a nombre del padre y el hermano de la directora general, en cuya casa la mujer trabajaba también como empleada del hogar.

El portavoz del PP omitió, sin embargo, que la sentencia se refiere literalmente a Díaz López como "hermana" del responsable de la sociedad y la considera titular de la relación empresarial con la asistenta, puesto que fue la alto cargo de la Xunta quien la despidió verbalmente.

Miranda sacó a colación una segunda demanda por despido improcedente contra Díaz López, presentada por la hija de la primera demandante, y que en este caso sí absuelve a la directora de Colocación. En este caso, la empleada compaginaba el trabajo en el bar con la limpieza de la casa de Díaz López. El *número tres* del PP gallego entiende que esta segunda sentencia exime de responsabilidad a la alto cargo de Traballo por el primer caso, si bien el juez fundamenta esta absolución, que parte de una demanda distinta, en que la denuncia sólo alude al trabajo en el bar, y no al empleo en casa de la directora general.

La primera sentencia condenatoria la recibió Díaz López el 15 de junio, una semana después de tomar posesión de su cargo en la Xunta. Miranda alegó ayer que la alto cargo no recurrió porque "la empresa" acató la sentencia para "dar carpetazo al asunto".

El sindicato CIG que prestó asesoría legal a las dos trabajadoras, exig, que la Consellería de Traballo informe del expediente sancionador contra Díaz López al que insta el juez en la primera sentencia. El portavoz de la central nacionalista en Ferrol, Francisco Cartelle, se pregunta si será la propia directora general la que, de acuerdo con sus competencias, se encargue de resolverlo, "para continuar con esta situación surrealista".

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/PP/afirma/juez/confundio/directora/condenada/madre/elpepiautgal/20090822elpgal_10/Tes/

EL PSOE PEDIRÁ LA REPROBACIÓN DE LA CONSELLEIRA DE TRABALLO

El PSdeG elevó ayer el tiro y anunció que promoverá la reprobación de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, en el Parlamento si no destituye de forma fulminante a la directora de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López. Esta alto cargo de la Xunta fue condenada por despido improcedente en una sentencia que prueba que fue ella misma quien echó a una mujer empleada sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social como cocinera y asistenta en un bar y en un domicilio de su familia.

El diputado socialista José Tomé Roca instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a terciar "en este escándalo" y cumplir con la "regeneración democrática de la que tanto alardea". El parlamentario exigió la comparecencia de Mato en la Cámara para que explique "por qué considera honesta a una persona que vulnera los derechos de los trabajadores". Tomé defendió que Díaz López, está "inhabilitada" para hacer cumplir la ley y se preguntó qué ejemplo quiere dar la Xunta a los empresarios. Traballo volvió a defender la "honorabilidad" de su directora general y Comisiones Obreras, como ya había hecho CIG, exigió a Díaz López su renuncia al cargo.

PP Y TRABAJO MIENTEN SOBRE LA CONDENA A LA DIRECTORA GENERAL

Seis días de falsedades y tergiversaciones interesadas para mantener en su puesto a la directora general de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López, a quien el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha condenado por despido improcedente. La Consellería de Trabajo -primero a través de un comunicado y luego por boca de su titular, Beatriz Mato- y el PP han intentado durante la última semana manipular una sentencia firmada por el magistrado Eloy Hernández Lafuente, que considera probado que fue la alto cargo de la Xunta quien despidió a una mujer que trabajaba sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social, en un restaurante y en un domicilio de su familia.

En el último intento por falsear la realidad, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró ayer que "la sentencia afecta a una sociedad de la que esta mujer [Ana María Díaz López] ya no forma parte". "No sabemos", añadió Miranda, "qué responsabilidad tiene y por eso defenderemos su honorabilidad". El número 3 del PP gallego fue más allá y denunció "intereses por incriminar a esa mujer en una empresa con la que no tiene vínculo jurídico". El portavoz del PP invitó de paso a la prensa a comprobar esto último en el registro mercantil.

No es necesario. El auto del juez, con fecha 15 de mayo, es claro y no sólo culpa a la sociedad civil que gestiona el restaurante donde se empleaba la mujer, tal y como defiende Miranda, también condena de forma solidaria a las tres personas físicas: Ana María Díaz López, su padre y su hermano. A la alto cargo de Trabajo, el juez le atribuye la "titularidad empresarial sobre la empleada del hogar", por haber sido ella, según se probó en el juicio, quien despidió verbalmente a la mujer.

En los fundamentos de derecho, el auto vuelve a citar explícitamente a Ana María Díaz López como "una de las tres personas físicas que crearon la confusión jurídica y material de esas dos relaciones laborales [en el restaurante como cocinera y el domicilio familiar como asistenta] siendo beneficiarios y organizadores de ambas".

El empeño del PP y de la Consellería de Trabajo por embrollar el auto, llevó a la titular de este departamento, Beatriz Mato, a anunciar que nuevas sentencias ayudarían a explicar el caso. Lo único cierto es que el auto judicial es firme, dado que ni la directora general, ni ninguna otra de las partes ha recurrido la sentencia en los cinco días de plazo abierto por el juez. Entretanto, Díaz López sigue desempeñando un cargo entre cuyas funciones figura, según la web de la Xunta, velar por "el cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores y la potestad sancionadora en las materias relativas al empleo y desempleo".

LA DIRECTORA DE TRABAJO TIENE OTRA DENUNCIA DE UNA EMPLEADA SIN CONTRATO

CIG denuncia que otra mujer trabajó sin contrato para el alto cargo la Xunta

Mucho más que una defensa cerrada de un alto cargo a quien nombró hace unas cuantas semanas. La conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, no sólo respaldó ayer la continuidad en su puesto de la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, a quien el juzgado de lo Social número 2 de Ferrol acaba de condenar por despido improcedente.

- *Mato dice que otro fallo mostrará la honestidad de su subordinada*
- *La condena es firme dado que ninguna de las partes la recurrió*

El juez considera probado que fue la propia directora general de Trabajo quien dio la orden de echar a una empleada que trabajaba -sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social- en un domicilio y un restaurante de la familia. La sentencia, que no ha sido recurrida por ninguna de las partes, es firme. Pero insuficiente para la máxima responsable en materia laboral del Gobierno gallego. Con solemnísimos gestos, Beatriz Mato proclamó ayer su "plena confianza en la honestidad de esta persona [Ana María Díaz López] y en su responsabilidad no sólo desde que es directora de Formación, sino incluso antes". La

conselleira quiso respaldar así el papel que el alto cargo de la Xunta desempeñó en sus negocios familiares. "Sé que no hubo ninguna relación contractual entre esta persona y la demandante", concluyó.

En ese extremo Mato coincide con la sentencia que condena precisamente al alto cargo de Trabajo y a la sociedad civil que integran su padre y su hermano, por no haber firmado ningún contrato ni haber dado de alta en la Seguridad Social a una mujer que, según se probó con fotografías y testimonios, trabajaba por horas como cocinera en el restaurante y completaba la jornada de asistenta en un domicilio de la familia.

Pese a los reiterados intentos de la Xunta desde la semana pasada para enmarañar una decisión judicial firme, el auto es contundente y condena de forma solidaria a Ana María Díaz López por ser ella "quien cesa [a la trabajadora] en la relación laboral de empleada del hogar". También acusa a la directora general de Trabajo, junto al resto de personas físicas y la sociedad civil, de "crear confusión jurídica y material de esas dos relaciones laborales siendo beneficiarios y organizadores de ambas".

La claridad del fallo no impidió que Mato cerrase el intento de exculpar a su colaboradora con un anuncio trascendente: "Sé que esta afirmación que estoy haciendo en breve será una afirmación compartida por toda la ciudadanía". No explicó cómo ni por qué, dado que contra el auto no cabe recurso ante ninguna instancia judicial. Sorprendentemente, la conselleira anunció que "habrá otras sentencias que servirán para aclarar esta".

Ayer mismo el sindicato CIG adelantó que hay otras dos trabajadoras que han interpuesto demandas en los juzgados contra la misma alto cargo de la Xunta al que reclaman por "impago de salarios". La central nacionalista recordó además que, el pasado miércoles, la responsable de Formación y Colocación en el Gobierno gallego incumplió "su obligación legal" de acudir al acto de conciliación que como demandada tenía en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación que depende de Trabajo.

La denuncia, añade el sindicato nacionalista, es de una de estas dos trabajadoras, que también prestó servicios como empleada del hogar en casa de Ana María Díaz López, al tiempo que servía en la cocina del restaurante de su padre y hermano. Todo, como en el caso de la primera denuncia, sin estar contratada ni dada de alta en la Seguridad Social. También en este caso su despido fue declarado nulo.

CIG amplió ayer la exigencia de responsabilidades y, después de escuchar las explicaciones de Beatriz Mato, exigió también su dimisión como conselleira de Trabajo por haber respaldado a su subordinada. "No son las personas más indicadas para defender el cumplimiento de la ley", subraya el comunicado de la central nacionalista, que pide la intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que aplique su prometida "regeneración democrática". La semana pasada también el PSOE reclamó el cese de la directora general de Formación e Colocación de la Xunta.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/directora/Trabajo/tiene/denuncia/empleada/contrato/elpepiautgal/20090819elpgal_7/Tes/

LA 'NÚMERO DOS' DE MATO EXIGIÓ DIMISIONES POR UN CASO SIMILAR EN VICEPRESIDENCIA

ra fila del Museo Pedagógico de Galicia, la secretaria general de Familia e Benestar, Susana López Abella, ni siquiera pestañeó ayer cuando la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato, respaldó la continuidad de la directora general de Colocación e Formación de la Xunta. Ana María Díaz López, condenada por despido improcedente y a quien el juez atribuye en la sentencia el despido de una trabajadora sin contrato y que no estaba dada de alta en la Seguridad Social, seguirá así en su puesto.

Preguntada por el caso concreto, López Abella prefirió mantener silencio y aferrarse a las palabras de su jefa en la Xunta. "Ha hablado la conselleira y no tengo nada que añadir", respondió a este periódico. La actual *número dos* de Trabajo no siempre fue tan indulgente con los altos cargos de la Xunta. Ella misma, como portavoz de servicios sociales del PP en el Parlamento, exigió durante la pasada legislatura la dimisión de Antón Losada -entonces secretario general de Relacións Institucionais- a quien acusó sin pruebas de tener una empleada de hogar trabajando en casa sin contrato. En aquel momento, marzo de 2007, no medió sentencia alguna, ni siquiera hubo denuncia, lo que no impidió a López Abella reclamar insistentemente la dimisión de Losada.

"Estamos ante una situación que por grotesca no deja de ser muy grave", insistió entonces la diputada del PP, que además promovió una iniciativa parlamentaria en defensa de las asistentas del hogar. "No se entiende", añadía López Abella, "que se ponga el zorro a cuidar de las gallinas".

Su acusación, de la que se hicieron eco algunos medios a la derecha del PP, propició que Losada acusase a esta formación de ser un "partido basura, con portavoces basura que practica la política basura". Losada explicó que la empleada sólo acudía a su casa cuatro horas diarias y que por tanto no tenía ninguna obligación legal de hacerle contrato. López Abella negó ayer que hubiese relajado sus exigencias sobre la ética en el desempeño de los cargos públicos.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/numero/Mato/exigio/dimisiones/caso/similar/Vicepresidencia/elpepiau/gal/20090819elpgal_6/Tes/

LA COMISIÓN DE LA CIDADE DA CULTURA DICTAMINA LAS IRREGULARIDADES DEL PP

El improbable consenso en las conclusiones de la comisión que investiga la tramitación de la Cidade da Cultura en el Parlamento gallego se frustró definitivamente ayer en la votación de los dictámenes elaborados por los partidos. Como era previsible, los socios que apoyan al Gobierno impusieron el informe que denuncia irregularidades en la gestión del Ejecutivo Fraga en el monte Gaiás y propone enviar al fiscal las conclusiones de la investigación.

El texto deberá ser votado en un pleno extraordinario que se celebrará el 27 de diciembre. Ayer, en comisión, socialistas y nacionalistas sólo aceptaron una enmienda técnica del PP para corregir un error de redacción. El diputado del PP Ignacio López Chaves se afanó sin éxito en defender su proyecto de resolución que traslada la mayor parte de "irregularidades e ilegalidades" al bipartito, a pesar de que la nueva Xunta adjudicó contratos por seis millones de euros, frente a los 470 invertidos por los dos últimos gobiernos del PP. López Chaves se lamentó de que la Xunta actual no informase de cuánto costará reanudar los dos edificios paralizados por la Consellería de Cultura. Y acusó a BNG y PSOE de atacar al Consello de Contas con "la gran mentira de socialistas y nacionalistas". Es, afirmó, "un dictamen de parte" que va mucho más lejos que el organismo fiscalizador.

"Terreno irregular"

Este parlamentario está convencido de que el Consello de Contas no estaba denunciando "irregularidad alguna" cuando concluyó que el Gobierno de Fraga "abdicó de la gestión prudente de los recursos públicos". Ayer López Chaves volvió a superar la realidad cuando manifestó en sede parlamentaria que el informe de Contas sólo utilizaba el término irregular para "referirse a los desniveles del terreno" en el monte que alberga el macrocomplejo arquitectónico.

Los portavoces de PSdeg Xaquín Fernández Leiceaga, y Bloque, Carlos Aymerich, acusaron al diputado popular de embarrar el campo y le reprocharon su escasa colaboración en los trabajos de la ponencia parlamentaria. Los representantes socialistas y nacionalistas aguardaron que el trabajo riguroso de la comisión de investigación sirva para "arrojar luz" sobre la tramitación del proyecto arquitectónico y, sobre todo, para que los errores del pasado no vuelvan a repetirse en otras grandes obras de la Administración. Sus explicaciones no convencieron al parlamentario del PP, que acusó a los socios del bipartito de manipular el dictamen.

(www.elpais.com, 21/12/07)

PSdeG y BNG piden un informe sobre las incompatibilidades de Pérez Varela

PP, PSdeG y BNG mostraron ayer los argumentos que defenderán en el debate final de las conclusiones de la comisión que a lo largo de cuatro meses ha investigado la gestión de la Cidade da Cultura. Unos argumentos diametralmente opuestos que hacen prácticamente imposible alcanzar un acuerdo y que obligarán al Parlamento a aprobar un dictamen por mayoría que, previsiblemente, será el que ya han negociado el PSdeG y el BNG.

Juicio demoledor a la gestión del proyecto por el Gobierno de Fraga

El informe señala deficiencias en contratos y adjudicaciones

El informe pactado por socialistas y nacionalistas recoge y desarrolla, a lo largo de más de 40 páginas, la práctica totalidad de las conclusiones de la auditoría del Consello de Contas, que dio pie a la investigación parlamentaria. El proyecto de dictamen sintetiza en 12 puntos un juicio demoledor de la gestión del Gobierno de Manuel Fraga en relación con el proyecto.

Tras escuchar a los más de 30 comparecientes citados por la comisión de investigación y examinar los miles de documentos remitidos por la Xunta al Parlamento, PSdeG y BNG han decidido recomendar el envío del dictamen al Ministerio Fiscal, por si de su contenido se dedujese algún indicio de delito en la actuación de los últimos gobiernos del PP.

El documento en cuestión señala, entre otras cosas, las deficiencias de contratos y adjudicaciones relacionadas con el proyecto, así como el vínculo establecido por la fundación con empresas en cuyos órganos directivos figuran ex altos cargos de la Xunta.

Las recomendaciones propuestas por PSdeG y BNG incluyen la solicitud de copia de todas las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por el ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela en los registros correspondientes de la Xunta. También en relación con este ex miembro del Gobierno de Manuel Fraga, el documento en cuestión incluye una petición expresa a la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para que investigue si el que fuera titular de Cultura, que en la actualidad es miembros del Consejo de Administración del ente que gestiona la televisión y la radio autonómicas, está incurso en alguna clase de incompatibilidad en su calidad de administrador de una empresa dedicada, entre otras cosas, a la gestión de patrocinios.

Además de las referencias a la Fiscalía y a Pérez Varela, las recomendaciones incluyen propuestas destinadas a dificultar la reproducción, en el futuro, de irregularidades como las detectadas en la gestión de la Cidade da Cultura.

El documento propone medidas que aseguren la transparencia y el control en la realización de concursos arquitectónicos y una regulación de los Gobiernos en funciones para que no puedan tomar decisiones que comprometan la gestión de sus sucesores.

También recomienda una nueva regulación de las fundaciones y entes instrumentales de la Xunta para garantizar su control económico y financiero, así como que la planificación de grandes obras e infraestructuras públicas se lleve a cabo "cumpliendo de forma rigurosa los procedimientos establecidos en la legislación vigente".

El informe atribuye "a un sueño" del ex presidente Manuel Fraga, tal y como él mismo reconoció en su comparecencia en la comisión de investigación, la génesis de todo el proyecto, que se llevó a cabo de forma opaca, sin nada que justificase su necesidad.

"Un sueño del entonces presidente que no fue fruto de ningún proceso racional de estudio, reflexión y participación", que fue creciendo "impulsado por directrices políticas y partidarias carentes de racionalidad económica y administrativa, en especial a partir de las elecciones de 2001". La propuesta de socialistas y nacionalistas salió ayer de la ponencia sin el apoyo del PP, que ahora tratará de hacer valer sus puntos de vista a través de las enmiendas que presentarán en la comisión y presumiblemente también en el pleno del Parlamento. Los populares sostienen en su propuesta de conclusiones la limpieza de la gestión de los gobiernos del PP y tratan de apoyarla en que el informe del Consello de Contas no fijó responsabilidades contables ni penales.

El documento del PP no deduce ninguna conclusión de las numerosas irregularidades establecidas por el Consello de Contas. Lo más parecido a una autocrítica que figura en su propuesta de dictamen es un párrafo de cuatro líneas que reconoce que se produjo "un incremento de la cantidad calculada como inversión", que "debería haber sido calculada de forma más exacta".

El PP no ve nada malo en su gestión, pero sí en la de sus sucesores, aunque, paradójicamente, el dictamen que han redactado no propone remitir las conclusiones a la Fiscalía, a pesar de que hace acusaciones contra la Xunta actual mucho más graves que las que PSdeG y BNG dirigen al Gobierno anterior.

La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo sólo propone que el Consello de Contas examine la gestión de la Cidade da Cultura desde el cambio de Gobierno, a pesar de afirmar que la Xunta la está utilizando

"para crear una red clientelar contratando personas por razones ideológicas y de amistad" y adjudicando contratos a empresas "por proximidad política", todo ello con "el beneplácito del presidente Emilio Pérez Touriño". Este Gobierno, sostiene, infringe la normativa de contratación y desatiende los principios de publicidad y libre concurrencia.

Estas actuaciones, afirma el PP, tienen por único fin "convertir la Cidade da Cultura en una entidad de propaganda ideológica de la concepción cultural del Gobierno, en un instrumento creador de empleo para afiliados y simpatizantes y generador de trabajo para determinado tipo de empresas".

El PP afirma sin rodeos que el actual Gobierno "infringe sistemáticamente la ley" de forma "deliberada y consciente". Y, parafraseando uno de los principales reproches que el Consello de Contas hacía a la gestión de la Xunta durante el mandato del PP, aseguran que "existe una evidente abdicación de las responsabilidades de gestión correcta de los fondos públicos por parte de los actuales responsables políticos de la Cidade da Cultura".

El documento que defienden los populares va más allá de la gestión de la Xunta y extiende sus acusaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabiliza de haber interferido en el trabajo de redefinición de los contenidos con "una decisión irreflexiva" que constituyó "una muestra de frivolidad política". "La interferencia de Zapatero en la Cidade da Cultura", explica el PP, tiene por objeto "ocultar su política de paralización de las inversiones del Estado en infraestructuras y en el AVE".

Fondos y sanciones

A modo de conclusión final, el dictamen del PP recomienda sancionar a los conselleiros que oculten información al Parlamento o no remitan la documentación que se les solicite de las comisiones. También reclaman medidas legislativas para sancionar a la Xunta cuando no atienda los criterios de la Intervención General y solicita al Gobierno que sea más estricto en la selección del personal para puestos directivos en la Fundación Cidade da Cultura.

El PP reclama que la Xunta remita al Parlamento un informe sobre los nuevos contenidos, usos y proyectos de la Cidade da Cultura, así como sobre los costes derivados de la paralización de las obras durante el tiempo que el Gobierno dedicó a redefinir el complejo de edificios.

Por último, el PP pide que todos los partidos incluyan en sus programas electorales una petición de fondos estatales para el proyecto y sugiere que algunos conselleiros del actual Gobierno han incumplido la ley de incompatibilidades.

El consenso imposible

La posibilidad de que los partidos políticos pongan punto final a la tormenta política desatada en torno a la Cidade da Cultura cuando la comisión de investigación apruebe su dictamen quedó ayer descartada a la vista de las conclusiones, radicalmente opuestas, defendidas por el PP y los grupos que apoyan al actual Gobierno, PSdeG y BNG. La idea había sido planteada por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la intervención que cerró las comparecencias ante la comisión de investigación, con el fin de devolver al proyecto la credibilidad que necesita para convertirse en un complejo viable en términos culturales y económicos.

El PP se mostró de acuerdo, pero condicionó desde el principio cualquier posibilidad de consenso a que las conclusiones de la comisión de investigación exculpasen la gestión de los Gobiernos de Manuel Fraga, cuestionada por el Consello de Contas el pasado verano.

Fuentes de PSdeG y BNG dejaron claro que nunca aceptarán que el dictamen sacrifique "la verdad" sobre lo ocurrido para garantizar que el proyecto deje de ser objeto de polémica.

www.elpais.es 11.12.07

LA COMISIÓN DE LA CIDADE DA CULTURA SOLICITA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE PÉREZ VARELA

La comisión de investigación de la Cidade da Cultura quiere pasar de las palabras a los hechos. Un mes después de que socialistas y nacionalistas exigieran al ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela que explicara su patrimonio, ambos grupos han acordado solicitar las declaraciones de bienes del ahora miembro del consejo de administración de TVG. Culmina así el enfrentamiento escenificado en la comparecencia de Pérez Varela ante la comisión, el pasado 29 de octubre.

Pérez Varela entregó sobres con sus declaraciones de actividades y bienes a su paso por la Xunta y por el Parlamento. Las que interesan a los diputados de PSOE y BNG son las del registro del Gobierno gallego, del que Pérez Varela formó parte entre 2001 y 2005, momento en que se impulsó la Cidade da Cultura. La decisión de pedir la apertura de los sobres, de la que no existen precedentes en el Parlamento de Galicia, fue acordada esta semana por el socialista Xaquín Fernández Leiceaga y el nacionalista Carlos Aymerich, que la concretarán en la ponencia de la comisión, que se reunirá esta semana.

El ex conselleiro declaró ayer al conocer la noticia que está "hasta el gorro" de la investigación del Parlamento. "Esto ya me huele a muerto desde hace mucho; tengo más cosas que hacer que estar perdiendo tiempo con este tema", agregó Pérez Varela. El impulsor político del proyecto del monte Gaiás, en Santiago, agregó: "Todo lo mío lo tienen en los expedientes".

La petición, encaminada a aclarar las sospechas de enriquecimiento personal del ex conselleiro, deberá ser avalada por el pleno del Parlamento. Los grupos que sustentan al actual Gobierno gallego dudan sobre la conveniencia de contar con esa información antes de que la comisión emita su dictamen o solicitarla después, ya que en el primer caso podría retrasar la resolución de un trabajo que no quieren demorar más allá del mes de diciembre.

La comparecencia del ex conselleiro del PP ante la comisión derivó en una gran bronca con el portavoz del BNG, Carlos Aymerich. Pérez Varela llamó "miserable" al representante del Bloque cuando éste le atribuyó haber dicho que era millonario. Aymerich replicó tachando al ex responsable de Cultura de "delincuente".

En aquella sesión, socialistas y nacionalista exigieron al principal responsable político del proyecto de la Cidade da Cultura en el Gobierno de Fraga que explicase el origen del patrimonio. Pérez Varela se limitó a responder que sólo tiene una "modestísima empresa", de la que, afirmó, obtiene "pingües beneficios". Con esta expresión, el ex conselleiro quiso decir en realidad que los resultados de la empresa son modestos, algo de lo que se quiere cerciorar la comisión. Aymerich se refirió también a empresas participadas por ex altos cargos de la Xunta y citó la sociedad que Pérez Varela creó junto a su mujer nada más dejar el Gobierno, dedicada a "eventos culturales" y "nuevas tecnologías". www.elpais.es 01.12.07

LA FISCALÍA SOSPECHA QUE HUBO UNA ESTAFA EN LA CIDADE DA CULTURA

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001.

Hoy se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato nacionalista Convergencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras.

La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.

La denuncia fue archivada el pasado viernes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.

La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman.

Irregularidades

El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa.

"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%.

José Ramón Piñol llamaba ayer a la prudencia. Quizás consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para avivar el debate político en Galicia, insiste en que sólo se trata de saber por qué "no se acomoda la divergencia entre lo previsto y lo que se va a gastar al final". Y deja claro que, "si las actuaciones fueron de buena fe, no serían punibles".

Recuerda, eso sí, que "cualquier familia hace su presupuesto y puede haber un margen de error", pero el 300% le parece exagerado. El ex presidente Manuel Fraga y el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, comparecerán hoy ante la comisión del Parlamento de Galicia que investiga lo sucedido. Quizás sus palabras aporten más luz sobre el caso.

(www.publico.es, 07/11/07)

LA PIEDRA DE LA CIDADE DA CULTURA SE ELIGIÓ UN AÑO ANTES DE SALIR A CONCURSO

La familia Cuiña se hizo con las subcontratas más sustanciosas del Gaiás

La Fundación Cidade da Cultura encargó un informe sobre la colocación, en las cubiertas de los edificios que se construyen en el monte Gaiás, de la piedra cuarcita que se produce en la localidad lucense de Muras un año antes de que un concurso público decidiese adjudicarle el suministro de este material a una unión temporal de empresa participada por la sociedad Piedra Natural de Muras SL.

El informe en cuestión fue realizado en 2002 por la empresa Proesga, dedicada a la instalación de fachadas, y el concurso a favor de Piedra Natural de Muras se falló en el mes de julio de 2003.

La empresa tiene como administrador al ex alcalde popular de Ortigueira Antonio Campo y desde hace siete años explota sin licencia la denominada mina Angelita, de la que se extrae la cuarcita. Campo dimitió de su cargo el pasado 4 de octubre, apenas una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.

Por otra parte, **la empresa Inasus, pieza clave del grupo empresarial propiedad de la familia del ex conselleiro de Política Territorial José Cuiña destaca entre las sociedades que se beneficiaron de subcontratas en las obras de construcción de los edificios de la Cidade da Cultura.** Inasus obtuvo las subcontrataciones más sustanciosas del pastel del Gaiás: el 6,8% del edificio de servicios centrales (adjudicado a Necso-Copasa por 19,92 millones), el 13,25% de la Biblioteca (38,74 millones) y nada menos que el 19,29% del Museo de Historia (48,29 millones).

Sólo por su participación en las obras de construcción de estos tres edificios, para los que produjo y colocó en fachadas aluminio y vidrio, Inasus obtuvo contratos por un total de 15,7 millones de euros.

www.elpais.es 28.10.07

TRES CONTRATOS, TRES PARIENTES

Sólo tres profesionales firmaron con la Fundación Cidade da Cultura contratos de alta dirección en los tiempos del Ejecutivo Fraga. Y los tres tenían vínculos familiares de primer grado con altos cargos del PP. El arquitecto director de la oficina del proyecto, Alfredo Díaz Grande, está casado con Pilar Rojo, delegada provincial de Cultura en Pontevedra cuando su marido comenzó a colaborar con la fundación. El director gerente de la entidad, Ángel Currás, es hermano de Celso Currás, conselleiro de Educación (1996-2005). **El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, completa la nómina de altos cargos.**

La esposa de Grande, Pilar Rojo, sería nombrada máxima responsable autonómica de Cultura en 2003. Grande es el único de los tres altos directivos de la fundación que ya ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento gallego. Lo hizo la semana pasada. Aseguró no acordarse de muchas de las cosas que le preguntaron, incluida la fecha de su contratación y el monto de sus honorarios. Justificó sus olvidos aludiendo a la fecha de inicio de su colaboración con la Cidade da Cultura. Según su versión, desde 1999 asesoró el concurso internacional para la adjudicación del proyecto. Para el Consello de Contas, el puesto que ocupaba Grande tampoco hacía necesaria la celebración de un contrato de alta dirección. Según el informe, sólo el puesto de director gerente de la entidad precisaba tal vinculación laboral.

Los lazos de Currá

El director gerente de la fundación había sido biólogo antes que gestor, biólogo y docente durante 20 años. Ángel Currás, hermano del conselleiro de Educación, tomó posesión de su cargo en noviembre de 2000. Desde 1996 había sido director económico-administrativo del proyecto de capitalidad europea de Santiago. Si bien Currás ya era el máximo responsable de la fundación cuando Balboa fue contratado, el contrato del cuñado de Rajoy lo firmó personalmente Jesús Pérez Varela. www.elpais.es 23.10.07

UNA AUDITORÍA OFICIAL DESTAPA DESFASES MILLONARIOS Y TRATOS DE FAVOR EN 2003 Y 2004 - EL GOBIERNO AUTÓNOMO BENEFICIÓ A SOCIOS DE ALTOS CARGOS Y A EMPRESARIOS CERCANOS AL PP

Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobino o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa.

El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga.

El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de "abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos". Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó, por ejemplo, que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman.

Eisenman acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con "total libertad presupuestaria".

Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará "seis veces más" que los fondos bibliográficos.

El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana al PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto.

Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas.

En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida.

Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España.

EL CONSELLEIRO MAIOR DE CONTAS DICE QUE EL INFORME CONLLEVA "RESPONSABILIDADES"

El recién nombrado conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López, aseguró que el último informe fiscalizador de este órgano relativo al año 2004 "puede derivar en responsabilidades" para la administración anterior presidida por Manuel Fraga. López, que no formaba parte del órgano consultivo que redactó el dictamen, quiso diferenciar entre los "distintos niveles de incumplimientos" de la Xunta gobernada por el Partido Popular. "Los informes ponen de manifiesto ciertas irregularidades, pero no podemos hacer una iguala absoluta entre irregularidades -ya sean presupuestarias, de contratación o de eficacia del gasto- con actuaciones delictivas, aunque hay algunas que podrían derivar en responsabilidades, claro que sí", advirtió el conselleiro maior.

En una entrevista en la Cadena SER, el máximo responsable de la institución se felicitó por la acogida que ha tenido el informe y recordó que pese a "haber dado mucho que hablar", en esta ocasión se ha asumido como un "trabajo serio" porque "nadie ha intentado matar al mensajero".

López, que tomará posesión de su cargo en septiembre, afirmó que el Consello está "asentado y bien valorado", aunque admitió que la institución debería hacer un esfuerzo para que los informes publicados se acerquen al período de gobierno que es objeto de fiscalización. "Estoy seguro de que algo se pueden acortar los tiempos", apuntó, "pero los informes nunca podrán ser inmediatos". Explicó que las instituciones auditadas tienen un plazo de entre siete y diez meses después del cierre del ejercicio para presentar la documentación y que entonces comienza el trabajo del Consello de Contas que consiste en "borradores, análisis definitivos y publicación".

Cuando concluyen estos trámites, los organismos o gobiernos auditados deben todavía realizar alegaciones, por eso el informe final puede demorarse unos dos años. El conselleiro maior admitió como inevitable que las conclusiones sobre los dos últimos años de gestión de un gobierno lleguen cuando hayan pasado las elecciones y probablemente con un nuevo ejecutivo en el poder.

En cualquier caso, reiteró que el organismo que preside no es el "único control del gasto público" y apeló a los servicios de intervención de las distintas instituciones para garantizar "el alto nivel de control que hay sobre los medios públicos". Entre las disfunciones admitidas por Antonio López está además el bajo cumplimiento de rendición de cuentas de determinados responsables políticos. "Aunque no todos son casos de rebeldía e incumplimiento puro y duro, hay 88 ayuntamientos y entidades supramunicipales" que no presentan sus números al Consello.

El responsable de Contas certificó que existen "incumplimientos deliberados" y abogó por buscar fórmulas para colaborar con los pequeños municipios que carecen de medios personales y técnicos que le permitan "hacer frente a este deber".

López anticipó que apostará por el uso de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad del organismo y anunció cambios al frente de las distintas áreas de responsabilidad en el Consello de Contas.

www.elpais.es 16.08.07

LA CONTRATACIÓN DEL CUÑADO DE RAJOY COMENZÓ ANTES DE QUE SE INTERESARA POR EL PUESTO

El gobierno de Fraga tramitó la autorización de Manuel Fernández Balboa sin remitir ni el contrato ni el currículum del candidato

La administración Fraga había decidido contratar al cuñado de Rajoy como director económico de la ciudad de la cultura antes incluso de que éste se interesase por el puesto y sin disponer de su currículum

La Ley gallega obliga a la administración a contar con el visto bueno de sus departamentos de economía y presidencia para ese tipo de contratos. El gobierno de Fraga tramitó esa autorización sin remitir ni el contrato ni el currículum del candidato y ese visto bueno nunca llegó a formar parte del expediente que obra en los archivos de personal de la ciudad de la Cultura.

Fuentes del gobierno de Fraga conocedoras de las circunstancias que rodearon ese fichaje han señalado a esta emisora que quien lo impulsó sabía perfectamente quién era Manuel Fernández Balboa. El cuñado de Rajoy, a pesar de que su contratación estaba ya en marcha, se dirigió a la administración gallega.

Lo hizo por carta 4 días después del inicio de los trámites oficiales para su contratación. En esa misiva Fernández Balboa manifestaba su interés por el puesto y remitía su currículum resumido en poco más de medio folio y con errores ortográficos incluidos.

EL CUÑADO DE RAJOY NO EXPLICA POR QUÉ FUE NOMBRADO DIRECTOR FINANCIERO DE LA CIDADE DA CULTURA

Llegó al cargo de la institución durante el gobierno de Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia

Manuel Fernández Balboa, cuñado del presidente del PP, Mariano Rajoy, evitó hoy en el Parlamento de Galicia aclarar si su llegada a la Dirección Económica Financiera de la Fundación Cidade da Cultura en el año 2001, cuando ésta institución dependía del Gobierno de Manuel Fraga, tuvo algo que ver con su parentesco con el líder de la oposición. Balboa, que es hermano de la esposa de Rajoy, compareció ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión de este proyecto, cuyo presupuesto se triplicó durante el mandato del anterior Gobierno, hasta acercarse a los 400 millones de euros.

Oídos sordos

El cuñado de Rajoy hizo oídos sordos a las reiteradas preguntas de los portavoces del PSdeG y del BNG, Xaquín Fernández Leiceaga y Carlos Aymerich, respectivamente, sobre la relación entre su nombramiento y sus vínculos familiares, toda vez que cuando accedió al puesto apenas había hecho otra cosa que prestar servicios durante un año en una empresa de gestión de residuos. La única referencia que hizo a esta cuestión fue admitir que su nombramiento no se guió por los principios de publicidad y concurrencia sino por los de "mérito y capacidad".

El silencio del cuñado de Rajoy sigue el ejemplo del responsable de la coordinación del concurso internacional que decidió encargar a Peter Eisenman el proyecto de la Cidade da Cultura, **Alfredo Díaz Grande, marido de la diputada Pilar Rojo**, también miembro del círculo más íntimo de amigos del presidente del PP.

Díaz Grande aseguró la semana pasada en el Parlamento que no tenía memoria suficiente para explicar su contrato ni sus retribuciones y dejó sin respuesta todas las preguntas que le formularon los portavoces del PSdeG y del BNG. "No tengo más memoria para entrar en otras cosas", afirmó. "Han pasado ocho años y no me acuerdo de más historias". www.elpais.es 24.10.07

EL CUÑADO DE MARIANO

Manuel Fernández Balboa, sin experiencia profesional, **fue contratado por la Xunta del PP para dirigir las cuentas de la Fundación Cidade da Cultura, que arrastra un desfase del 300%.**

Además de un primo que le aconseja sobre cambio climático, Mariano Rajoy también tiene un cuñado. Y si no fuese por su breve paso por la delegación de una constructora en Pontevedra, la historia de Manuel Fernández Balboa sólo tendría parangón en Silicon Valley: habría pasado de ser becario a ocupar un puesto de dirección como gestor de las cuentas multimillonarias de una entidad pública.

Fernández Balboa, cuñado del líder de la oposición, firmó el 1 de marzo de 2001 un contrato como responsable económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Percibiría por su trabajo 42.000 euros al año. Tenía 29 años, un título universitario, un máster MBA en Marketing y una exigua experiencia profesional. Y se iba a ocupar de las finanzas del ente gestor de un proyecto cuyo presupuesto superaba en aquel momento los 108 millones de euros y que hoy acumula desviaciones superiores al 300%.

Fernández Balboa comparecerá hoy ante la comisión creada en el Parlamento de Galicia para investigar la evolución del proyecto de la Cidade da Cultura desde 2000 hasta hoy. Ideada en tiempos del Ejecutivo Fraga, la Cidade da Cultura es un espectacular complejo arquitectónico que, según sus impulsores, había de reubicar a Santiago y Galicia en el mapa cultural del mundo.

El "mausoleo de Fraga"

El proyecto inicial constaba de cinco edificios, entre ellos un palacio de la Ópera, un Museo de la Historia de Galicia o una impresionante mediateca. Socialistas y nacionalistas, entonces en la oposición, llegaron a calificar la infraestructura como "mausoleo de Fraga". Se trataba de un proyecto enorme. Su presupuesto de mantenimiento, una vez entre en funcionamiento -unos 50 millones de euros al año, se estima-, podría dejar hechas unos zorros las cuentas de la Consellería de Cultura. Pero el equipo del veterano político conservador aludía una y otra vez al cambio experimentado por Bilbao tras la construcción del museo Guggenheim. Y el proyecto salió adelante.

El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, envió el 27 de enero una carta a la Consellería de Cultura presentando su candidatura al puesto de director económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Adjuntaba a esa comunicación su currículum. Sólo habían transcurrido cuatro días desde el envío del contrato para su supervisión legal por parte de los organismos competentes en la administración. El informe fue positivo y el 1 de marzo se firmó el contrato. Las obras de la Cidade da Cultura habían comenzado dos semanas antes.

Sobre la revisión del contrato que después firmaría Fernández Balboa se ciernen ahora algunas dudas. El informe sobre la fundación presentado la semana pasada por el organismo fiscalizador de las cuentas públicas gallegas, el Consello de Contas, cuestiona su naturaleza. Asegura que el puesto de director económico-financiero no reunía "las características necesarias para configurar un supuesto de personal de alta dirección" como el que sirvió para contratar al cuñado de Rajoy.

El Consello de Contas también critica el hecho de que la fundación no contase con una relación de puestos de trabajo "con un contenido mínimo". Esa relación serviría para describir los puestos de trabajo, el modelo organizativo de la entidad, y los perfiles profesionales necesarios para contratar al personal. Nunca se hizo.

Desbarajuste presupuestario

Mientras tanto, la Cidade da Cultura comenzaba a convertirse en un problema económico y político. El presupuesto inicial era de 108 millones de euros. Seis años y medio después de que comenzasen las obras, se habla ya de más de 380 millones. El Consello de Contas, que inauguró las comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Galicia, ha sido muy crítico con el modelo de gestión del proyecto, cuyo autor es el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Lo vago del proyecto con el

que Eisenman se adjudicó el concurso para construir la Cidade da Cultura y el tipo de contrato establecido entre la Xunta y el arquitecto pudieron ser dos de las causas del desfase presupuestario. O eso se deduce, al menos, del informe elaborado por el Consello de Contas.

Cuando cumplió 32 años, el cuñado de Rajoy gestionaba ya las cuentas de una entidad cuyos activos superaban los 114 millones de euros. Corría ya 2004 y estaba a punto de comenzar su último año como alto directivo de la fundación. En septiembre de 2005, tras el cambio de Gobierno en Galicia, su contrato fue rescindido. Hoy cumple 36 años. Comenzará su aniversario compareciendo ante el Parlamento gallego.

www.elpublico.es 23.10.07

LA NOTICIA, TAL CUAL: RAJOY COLOCA BIEN A SUS AMIGOS (*)

Al ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, nadie en Pontevedra le discute los merecimientos de sus éxitos profesionales, que ya vienen de lejos. Es el hijo que todos los burgueses locales hubieran deseado tener, se dice en la ciudad. Desde que a los 28 años asumiera su primer cargo público, la presidencia de la Diputación provincial, Rajoy nunca se ha olvidado de sus amigos, una pandilla de impronta propia en esa típica capital de provincias. Muchos de ellos se han incorporado a su estela política sin otro aparente pedigrí que el de su amistad con el ahora ministro, y han accedido en los últimos meses a importantes cargos tanto en la Administración central como en la Xunta. El grupo de Rajoy ha logrado definición propia en la ciudad -siempre con el ministro como centro- a base de frecuentar los lugares de moda para tomar copas, los bailes del casino o la peña gastronómica masculina que ellos mismos han formado con la denominación Doble y Mitad, "porque comen el doble y pagan la mitad, ya que no llevan a las señoras", según se comenta en Pontevedra. Casi todos están ahora en política.

Francisco Villar, el *segundo* del ministro como secretario de Estado de Administración Pública que es, pertenece de antiguo al círculo íntimo de amistades de Rajoy. Médico cirujano general, entró en política cuando el actual ministro de Sanidad, José Manuel Romay -cuya sintonía con Rajoy se hace notoria-, le nombró delegado provincial de la sanidad autonómica en Pontevedra y luego, por un breve periodo, hasta que saltó a Madrid, director general del Servicio Galego de Saúde. Villar es, a su vez, primo del ex alcalde de la ciudad Francisco Cobián, que también llegó a ese cargo a propuesta de Rajoy y ahora figura como uno de los seis consejeros de la sociedad estatal Expo 98 de Lisboa.

Otro asiduo de la compañía de Rajoy es el recién nombrado presidente de la autoridad portuaria de Marín, Tomás Iribarren Fernández-Rogina, abogado por Deusto y concejal del PP en Pontevedra durante más de una década. Iribarren también fue diputado autonómico y secretario del Parlamento de Galicia. En la misma Cámara autonómica, un día antes de su designación como presidente del puerto pontevedrés, Iribarren confesó a un grupo de periodistas que no se sentía "capacitado" para desempeñar tal puesto.

Iribarren y Rajoy comparten su condición de concuñados del gobernador civil, Alejandro Millán Mon, un médico internista que ha accedido por vez primera a un cargo público. Un hermano de Millán está casado con una hermana del ministro. Los Millán Mon son a su vez parientes de Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, el ministro franquista que teorizó el ocaso de las ideologías. También es primo del gobernador actual de legado de Sanidad de la Xunta en Pontevedra, García-Borregón Millán. Los dos antecesores de éste en el cargo eran asimismo personas del círculo de amistades de Rajoy, el citado Francisco Villar y la médica generalista Ana Pastor, esposa del concejal del PP en la ciudad Benito Suárez Costa. Pastor figuró en el quinto puesto de la candidatura provincial popular en las últimas elecciones generales, pero inesperadamente no salió elegida. Fue compensada nombrándola directora general de Muface.

Otra mujer que ha accedido por vez primera a un cargo público en Pontevedra es Pilar Rojo, arquitecta de Hacienda y casada con Alfredo Díaz Grande, uno de los amigos más íntimos de Rajoy. El consejero de Cultura de la Xunta, Jesús Pérez Varela, la ha nombrado delegada de su departamento en la provincia.

El ministro de Administraciones Públicas promovió en su día dentro del partido la candidatura del actual alcalde de Pontevedra, Juan Luis Pedrosa, en dura pugna interna con el secretario general del PP gallego, Xosé Cuiña, que pretendía incluir a un hombre de su confianza. Una de las personas que frecuentan el entorno del alcalde y del ministro es Andrés Muntaner Pedrosa, un ingeniero que tampoco

había desempeñado cargo público alguno hasta su reciente nombramiento como director general de la empresa estatal Autopistas del Atlántico. Jaime Muntaner Pedrosa, hermano del anterior e inspector de Hacienda de profesión, ha sido designado casi al mismo tiempo delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia.

Al margen de las amistades de Rajoy, el Ministerio de Administraciones Públicas ha contratado en los últimos meses a familiares de dos miembros del Gobierno. Se trata de Teresa Alvarez Cascos, hija de un primo del vicepresidente del Gobierno y adscrita al departamento de Comunicación Social del ministerio, y de Ana Michavila Núñez, asesora del -gabinete de Rajoy y hermana del secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José María Michavila Núñez.

De las personas citadas, el ministro, a través de un portavoz ministerial, sólo reconoció a este diario mantener una amistad íntima con la delegada de Cultura de la Xunta en Pontevedra, Pilar Rojo. "Los demás son conocidos", añadió la mencionada fuente oficial. "Pero eso resulta lógico, dado que Pontevedra es una ciudad pequeña. Como asimismo parece lógico que un responsable público elija a personas conocidas para puestos de confianza".

(*) Publicado en El País.17.02.1997

L FISCAL DENUNCIA POR PREVARICACIÓN A DOS GOBIERNOS DEL PP EN ABEGONDO

El ex conselleiro Santiso, entre los imputados por urbanizar un monte protegido

La querella formulada por el fiscal especializado en delitos urbanísticos ante el Juzgado decano de Betanzos imputa a los dos últimos gobiernos del PP en Abegondo un delito de "prevaricación continuada" por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre los años 2002 y 2005. Se trata de la corporación que presidió el ex conselleiro de Agricultura y actual diputado autonómico del PP, José Antonio Santiso Miramontes, y la que encabezó su sucesor, Juan José Rocha Carro, actual alcalde independiente del municipio.

La denuncia del ministerio público acusa por el mismo motivo a los tres últimos arquitectos que trabajaron para el ayuntamiento coruñés: al actual, Manuel Cortón Muínelo, a su antecesora, Cristina Ballón López, y a Antonio Carro Núñez que ejerció a través de una asistencia técnica como aparejador municipal entre 1998 y 2003, así como a dos de sus colaboradores.

La querella del fiscal relata el procedimiento administrativo que permitió urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas donde ya se han construido medio centenar de viviendas unifamiliares en Limiñón, Os Valiños, Pedregal, Coto, parroquias todas del municipio de Abegondo. Según su querella, entre los años 2002 y 2007 "por parte de los denunciados se facilitó la construcción de numerosas viviendas unifamiliares, todas ellas en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal".

El objetivo de la trama consistía, según la denuncia, "en conceder licencias" para edificar construcciones para "usos incompatibles con el suelo en que se enclavaban las fincas, que según su calificación sólo podrían permitir "actividades agropecuarias".

La denuncia cuestiona los informes del arquitecto municipal, Antonio Carro Núñez, a favor de la parcelación en suelo rústico a lo largo de 2002 y la posterior aprobación de las licencias por parte del Gobierno del PP que presidía Santiso Miramontes.

A Santiso como al resto de los concejales le imputa el fiscal un delito de "prevaricación continuada", incluido su teniente de alcalde y actual regidor de Abegondo, Juan José Rocha Carro. De hecho, el hombre que dirige el Gobierno local (actualmente bajo las siglas de la Agrupación Progresista de Abegondo en coalición con BNG y PSOE) aparece doblemente imputado. Por su votación a favor en 2002 y por aprobar tres años después, ya como alcalde, proyectos urbanísticos reformados y segundas licencias que permitieron legalizar decenas de viviendas.

Permisos caducados

Esta última decisión la adoptaron Rocha y los ediles del PP que componían la Junta de Gobierno local de Abegondo en 2005 con el informe en contra de la secretaria municipal. Los arquitectos municipales no pusieron trabas a la operación.

En sus conclusiones, el ministerio público advierte de que los permisos concedidos en 2002 se encontraban caducados cuando tres años más tarde el Gobierno de Rocha pretendió legalizar las construcciones. Además, el fiscal duda de que los promotores que solicitaron las primeras licencias antes de vender fincas y permisos a segundos compradores, iniciasen las obras para las que pidieron permiso. El escrito desvela que su verdadero interés fue el de edificar sobre suelo rústico para venderlas y obtener beneficios económicos.

UEVA DENUNCIA POR LAS LISTAS DEL PP EN EL PAÍS VASCO

Ya son seis los vecinos de O Grove que han emprendido acciones judiciales contra responsables del PP que presuntamente falsificaron sus firmas y facilitaron sus DNI sin su consentimiento para incluirlos como voluntarios en las candidaturas de esta formación política en el País Vasco. Jesús Iglesias Gondar, funcionario del Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) del Ayuntamiento de O Grove, asegura en su denuncia que nunca firmó ninguna autorización para participar en el proceso electoral y que no es militante del PP.

Al igual que el resto de los denunciantes, también adscritos al mismo departamento municipal, este funcionario pide al juzgado que investigue los hechos "hasta obtener la condena a las responsabilidades penales y civiles" y que solicite a la Junta Electoral de Zona del municipio de Erandio, en cuyas listas fue incluido, la ficha donde aparece sus datos y falsificada su firma.

Iglesias supo que figuraba como voluntario cuando recibió la carta de agradecimiento de la presidenta del partido en Euskadi, María San Gil, fechada en San Sebastián el 29 de junio. En medios de la investigación se baraja que el número de afectados, sólo en O Grove, podría elevarse a 20.

De hecho, el ex alcalde de O Grove, Miguel Angel Pérez, imputado en esta causa, admitió en el juzgado que en la sede provincial del PP le habían confirmado que "había 12 o 13 voluntarios de O Grove ". La juez que instruye el sumario ya ha citado a los dos empleados del partido en Pontevedra que Pérez aludió en su declaración como conocedores de los ficheros de voluntarios y en calidad de testigos.

La investigación de la presunta falsificación, que conllevaría la comisión de un delito electoral, se centra en el personal del Grumir y entre los responsable locales del partido. También han sido imputados dos funcionarios municipales y el ex primer teniente de alcalde, de O Grove, Alexandre Aguín, la persona que, al parecer se encargó de tramitar las solicitudes.

Sin embargo las sospechas también se centran en la sede provincial, de donde salieron los listados en los que ya han aparecido otras dos voluntarias de A Illa de Arousa que no han denunciado. La juez ha pedido a Telefónica que identifique el teléfono del PP de Pontevedra para constatar envíos y recepción de documentos donde se acredita a los falsos voluntarios. (www.elpais.com, 06/09/07)

LA JUEZ INVESTIGA LA IMPLICACIÓN DEL PP DE PONTEVEDRA EN LOS FALSOS VOLUNTARIOS

La investigación de la juez de Cambados que instruye el caso de los falsos voluntarios que el PP presentó para completar sus candidaturas en Euskadi apunta hacia la sede provincial del partido en Pontevedra. Después de comprobar que el remite de uno de los faxes recibidos en el País Vasco se envió desde la oficina del PP pontevedrés, la juez ha solicitado a las juntas electorales de Vizcaya los impresos originales. La caligrafía de las copias examinadas constata que dos personas cumplimentaron todos los formularios en Pontevedra y Bilbao el 7 de marzo y el 18 abril.

La titular del juzgado de Cambados, Irene Roura, ha requerido a la empresa Telefónica para que identifique al propietario del número de fax 986 853193 desde el que se enviaron las solicitudes para la inscripción de candidatos del PP vasco a las elecciones municipales. Y en una providencia dictada el pasado viernes ha solicitado además a las juntas electorales de zona de Euskadi que remitan al juzgado la documentación oficial presuntamente manipulada que permitió la inscripción como candidatos del PP en las listas vascas de personas que no habían dado su consentimiento a esta formación política.

La instructora del caso ha adoptado esta decisión después de haber examinado los faxes remitidos desde las juntas electorales y de constatar, según fuentes próximas al caso, que los formularios fueron cumplimentados de forma manuscrita y por dos personas diferentes. En ellos se aprecia con claridad que una parte del impreso se cubrió en Pontevedra el 7 de marzo, fecha que coincide con la carátula del fax, y la otra con distinta caligrafía, se remató en Bilbao donde fue fechada el 18 de abril. Con estas revelaciones, la investigación judicial está desmontando la versión oficial que el PP elevó a la fiscalía a través de sendos informes firmados por su secretario general, Alfonso Rueda, y suscritos también por el secretario de Organización del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Diputación, José Juan Durán, y el ex alcalde de O Grove Miguel Ángel Pérez.

La explicación oficial de los dirigentes populares ha sido ya incorporada a las diligencias y choca con lo que ha explicado ante la juez el alcalde de O Grove en su declaración como imputado. El informe relata que las fichas con las solicitudes de los candidatos voluntarios no se cubrieron en la sede del PP de Pontevedra sino que "se recibieron por correo a través de los responsables locales y en otros casos fueron entregados en mano por ciudadanos anónimos o miembros del partido" a los que no identifica. Durán subraya además que "por motivos de confidencialidad y seguridad" el partido "no elabora un registro de entrada ni se guardan copias de las solicitudes" para las que el PP no exige la condición de afiliado, pero sí la firma del candidato voluntario y la fotocopia del DNI.

Hay muchos indicios, sin embargo, que apuntan a que la sede provincial guardó datos de los candidatos. Así se desprende del testimonio del ex alcalde de O Grove, que en su declaración judicial citó a dos funcionarios de la sede, "un tal Manuel y una tal Carmela", que, según él, le informaron después de que trascendieran los primeros casos de supuestas falsificaciones de que "eran 12 o 13" los afectados por el fraude, y llegaron a darle incluso algunos nombres y apellidos al ex regidor grovense. Los funcionarios ya han sido citados a declarar por la titular del juzgado.

Pérez confirmó que había hecho esa llamada a la sede provincial porque del PP de O Grove partió sólo la solicitud de la única voluntaria que sí prestó su consentimiento. Esta documentación, dijo, la llevó personalmente el coordinador de campaña y ex primer teniente de alcalde de O Grove, Alexandre Aguín, a las oficinas del partido en Pontevedra. El propio Aguín ofrecerá su versión en el juzgado esta mañana, tras ser llamado a declarar por la juez.

Fuentes próximas al caso no descartan nuevas citaciones que podrían incluir a algunos miembros de la dirección del PP de Pontevedra, entre ellos los autores del informe remitido a la Fiscalía. En las elecciones municipales del pasado mes de junio, el PP pontevedrés dobló al resto de provincias gallegas en número de voluntarios para completar las listas en aquellos municipios vascos donde la presión del entorno *abertzale* impide a la formación popular formalizar sus candidaturas. www.elpais.es 27.08.07

SOSPECHAS DE QUE EL FRAUDE ES TODAVÍA MAYOR

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que la verdadera magnitud de las prácticas fraudulentas para presentar sin su consentimiento a varios vecinos de O Grove y otras localidades pontevedresas como voluntarios para completar las candidaturas del PP en el País Vasco sólo se hubiese conocido si las irregularidades no hubiesen trascendido a los medios de comunicación.

Según esta hipótesis, el número de falsos voluntarios sería mucho mayor que el que de momento se conoce. Los investigadores sospechan que el PP de Euskadi dejó de enviar cartas de agradecimiento a los voluntarios gallegos cuando empezaron a trascender las primeras irregularidades. De hecho, el juzgado de Cambados ha recopilado información en los últimos días de un nuevo falso voluntario en la provincia de Pontevedra, y personas cercanas al caso calculan que podría haber ya una veintena de vecinos afectados sólo en el municipio de O Grove.

La identidad de este último perjudicado se añadirá a la lista que figura en poder de la titular del juzgado de Cambados y que amenaza con convertirse en una pesadilla para el Partido Popular de Pontevedra.

En la lista judicial no se incluyen, en cambio, los casos de dos vecinas de A Illa de Arousa. Una de ellas era militante del PP y pidió la baja cuando se enteró de que su nombre aparecía en una candidatura vasca. La otra es una funcionaria del centro hospitalario Príncipe Felipe, que al igual que su vecina tampoco ha presentado denuncia.

La constatación de que hay personas cuya identidad fue suplantada por el PP lejos del ayuntamiento de O Grove echa por tierra la teoría del presidente del PP pontevedrés, Rafael Louzán de que el caso del fraude en las listas de Euskadi "acaba y comienza" en ese municipio, algo que ha repetido hasta la saciedad desde que estalló el caso.

Esta semana cinco de los afectados de O Grove que sí judicializaron sus protestas prestarán declaración en Cambados. Todos están vinculados al Grupo Municipal de Intervención Rápida, de Protección Civil, y la mayoría sigue trabajando para el ayuntamiento. La jueza escuchará además a dos funcionarias de este servicio. Isabel Agrelo y Susana Otero, que declararán como imputadas y que, según fuentes de la investigación, habrían tenido acceso a los datos personales y a los documentos de identidad de los denunciantes www.elpais.es 27.08.07

EL EX ALCALDE DE O GROVE NIEGA AL JUEZ QUE DIESE NOMBRES AL PP VASCO



El ex alcalde de O Grove y presidente local del PP, Miguel Ángel Pérez, prestó declaración en el Juzgado número 2 de Cambados sobre la inclusión, sin su consentimiento, de doce vecinos de la villa en las listas del partido en el País Vasco. Durante algo más de hora y media, Pérez explicó a la juez su participación en el proceso para elaborar las listas. A ojos del fiscal, Eloy Rodríguez, su testimonio resultó "bastante convincente".

Las palabras del ex alcalde de O Grove constituyen el primer testimonio desde que se abrió la investigación judicial que estudia la comisión de un presunto delito electoral y otro de falsedad documental. "Ni yo ni nuestro partido en O Grove hicimos absolutamente nada", aseveró a la salida de los juzgados el ex regidor del PP, quien señaló que sólo se presentó "una persona voluntariamente" para completar las candidaturas vascas, y ésta "fue la solicitud que nosotros enviamos". Tras desvincularse de "cualquier otra cosa que haya llegado" a las sedes populares de aquella comunidad autónoma, reconoció que la inclusión de otras personas en las candidaturas fue "una manipulación evidente".

Menos contundente se mostró cuando se le preguntó si se había sentido respaldado por la directiva del PP. Se limitó a responder que no había tenido "ningún problema con el partido". Tampoco estos días, según reconoció, ha mantenido contacto alguno con el máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, de veraneo en Sanxenxo, quien el pasado sábado calificó el suceso como un "error" durante una visita a Vilagarcía de Arousa.

El líder del PP de O Grove reconoció que todos los indicios apuntan hacia los servicios de emergencias municipales, ya que buena parte de los afectados tuvieron algún tipo de vinculación laboral con este departamento, tal y como se refleja en las denuncias interpuestas. Es más, de la investigación interna que llevó a cabo el PP -y que fue entregada a la Fiscalía- se deduce que "hay dos bloques bien diferenciados": por un lado, trabajadores del Grumir y del Servicio de Extinción de Incendios y, por otro, miembros de una misma familia, algunos de ellos también relacionados con los servicios de emergencias.

En todo caso, Miguel Pérez, ex alcalde y presidente del PP local, evitó implicar a nadie porque, dice, le "faltan pruebas", y a pesar de que deberá ser la jueza quien dictamine su grado de implicación en este suceso, él elude cualquier responsabilidad sobre la falsificación de los datos personales.

"Aunque sí se circunscribe todo a nuestro ámbito: se da la circunstancia de que en ese momento yo era alcalde, buena parte de las personas que están implicadas en ese tema son empleados municipales y soy responsable del PP allí", aseveró Miguel Pérez. Con todo, reiteró su inocencia y aseguró que está "absolutamente tranquilo". "Ni como alcalde ni como responsable del Partido Popular de O Grove he tenido nada que ver con este asunto", declaró tras apuntar que ya le gustaría saber quién es el culpable. En su día, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido abriría una investigación sobre este caso y depuraría responsabilidades. www.elpais.es 21.08.07

RAJOY LAMENTA "EL ERROR" DE APUNTAR VECINOS DE O GROVE EN EL PP VASCO

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se refirió ayer a la inclusión, sin su consentimiento, de vecinos de O Grove en las listas del PP vasco. "Tengo que entender que ha sido un error y tengo que desear que no se vuelva a producir", dijo Rajoy en Vilagarcía. "No es algo de lo que nadie pueda enorgullecerse pero espero que las cosas se resuelvan con la mayor rapidez posible", declaró el presidente del PP. El caso se encuentra en manos del Juzgado de Cambados tras la presentación de, al menos, tres denuncias por parte de afectados. Rajoy estuvo acompañado en su periplo por la villa arousana por el presidente del partido en Pontevedra, Rafael Louzán, la diputada Pilar Rojo, el secretario gallego de Organización, Alfonso Rueda y el concejal Tomás Fole. El líder del PP calificó la visita a Vilagarcía como de preparación del programa electoral para las próximos comicios generales. Rajoy criticó al actual Gobierno gallego por dejar estancados temas, a su juicio, tan importantes como el plan de urbanismo de Vigo, "las áreas metropolitanas y el auditorio, por disputas entre ellos". Mariano Rajoy aseguró que si gana las elecciones generales desempolvará el denominado Plan Galicia elaborado por Aznar.

www.elpais.es 19.08.07

"QUIERO SABER QUIÉN VIOLÓ MI INTIMIDAD"

El secretario general del PP, Alfonso Rueda, confirmó que la formación ha trasladado a la Fiscalía de Pontevedra el resultado de una investigación interna a fin de que el fiscal jefe, César del Pozo, actúe en consecuencia "si lo considera oportuno". Las pesquisas se han realizado en base a los afectados, como el de una funcionaria del Ayuntamiento de O Grove que confía en que aparezca la persona que accedió a sus datos.

Una funcionaria del Ayuntamiento de O Grove, de 25 años, adscrita a los servicios de Protección Civil, presentó una denuncia contra la inclusión de su nombre en una lista del PP en un pueblo del País Vasco. A ésta se han sumado otras dos, la última la presentó a un ex operario municipal que trabajó en las brigadas contra incendios, según confirmó el concejal de personal, Xoán Lamelas.

Su caso es uno de los cuatro que se registraron entre el personal del Grupo Municipal de Intervención Rápida (GRUMIR) y el resto se sitúan en el entorno de una misma familia. La joven quiere mantenerse en el anonimato y en declaraciones a este diario afirmó: "Lo único que pretendo es saber quién violó mi intimidad y utilizó mis datos personales, por eso recurrí al juzgado".

A finales de junio recibió una carta, fechada en San Sebastián el día 21, que firmaba la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, y que expresaba su agradecimiento por haberse ofrecido como candidata. "Como no sabía de que se trataba, porque yo nunca estuve afiliada a ningún partido, es más, soy apolítica, llamé al teléfono que aparecía en la carta". En la sede donostiarra localizaron sus datos y explicaron que se trataba de un error. "Me aseguraron que no fui incluida en ninguna candidatura porque habían sobrado muchos voluntarios, pero que inmediatamente retiraban mi nombre de los ficheros del partido".

A los pocos días, Miguel Angel Pérez, presidente de la ejecutiva local del PP y ex alcalde de O Grove, se entrevistó con ella. "Me pidió disculpas y aseguró que no sabían como había podido ocurrir esto". La denunciante subrayó que confía en que aparezca la persona que "jugó con unos datos que tenían que estar protegidos".

En Cambados, la primera denuncia espera su trámite a que se determine qué juzgado instruirá el caso, probablemente, será el número 3. Para el fiscal jefe de Pontevedra, César del Pozo, actuar de oficio hubiera sido precipitado "porque la noticia críminis puede tener inexactitudes y hay que esperar a obtener los elementos suficientes, como es el caso de una denuncia, para actuar de forma razonable".

Del Pozo dijo que en ningún momento se sintió presionado para actuar de oficio, "porque sólo se debe intervenir en casos excepcionales, y si no lo hice fue por razones de prudencia y no de vagancia. A mí me preocupa, cómo lo haga y no cuándo lo haga". "Como fiscal, mi cometido es proteger a los ciudadanos, sean o no de un partido político, lo demás son cuestiones que no deben preocuparnos para determinar si ha habido o no un hecho delictivo", añadió el fiscal. www.elpais.es 28.07.07

EL ALCALDE DE O GROVE CREE QUE HAY MÁS FALSOS CANDIDATOS DEL PP

El número de candidatos de O Grove que fueron incluidos como voluntarios en las listas del PP en el País Vasco sin su consentimiento podría superar los nueve que ya se dan como seguros en medios

oficiales, todos ellos sin filiación política. Así lo avanzó ayer el alcalde de la localidad, José Cacabelos, que ha encargado al concejal de personal, Xoán Lamelas, la instrucción de una investigación interna para saber quién facilitó las identidades de los candidatos.

El alcalde de O Grove trata de averiguar si el responsable de facilitar las identidades de los falsos voluntarios en las listas del PP del País Vasco está adscrito a alguno de los servicios municipales, lo cual que supondría un quebrantamiento de la Ley de Protección de Datos y un hecho punible establecido en el Código Penal. "Tenemos sospechas de que hay más gente envuelta en esta manipulación pero creemos que el PP está presionando para que callen, porque ellos saben que esto es un auténtico escándalo político", declaró el alcalde.

"Por encima de las responsabilidades políticas está la vida de unos ciudadanos que tenemos la obligación de proteger y que unos cuantos irresponsables han puesto en peligro con esta chapuza al incluirles en unas listas electorales que están amenazadas por la banda terrorista ETA. Por eso es, sin duda, el hecho más grave que hayamos podido ver en política y de nuestra democracia", subrayó Cacabelos.

El alcalde grovense cree que ya tendrían que empezar a dimitir algunos responsables políticos. "Están tardando mucho las dimisiones que tienen que producirse cuanto antes y que a mi entender tendría que ser la del presidente local del partido, Miguel Ángel Pérez, y la del presidente provincial, Rafael Louzán. Mientras, Rajoy y Núñez descansan tan tranquilos, como si no fuesen responsables indirectos de esta vergonzosa manipulación".

Las primeras sospechas se centran en los servicios dependientes de Protección Civil del ayuntamiento donde trabajan 15 funcionarios, tres de ellos fijos; los restantes se incorporaron como temporales una semana antes de tomar posesión el actual gobierno tripartito por decisión del ex alcalde saliente, el popular Miguel Ángel Pérez. Al menos cuatro de los afectados guardan relación con el Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir).

Por el momento se han presentado las denuncias de dos mujeres, ajenas al Partido Popular, una de ellas adscrita al Grumir. La declaración judicial de ambas podría precipitar el interrogatorio en cadena de políticos y funcionarios municipales. El concejal de Izquierda Unida, Xoán Lamelas, encargado de investigar si los datos salieron o no del ayuntamiento, se reunió ayer con los cuatro funcionarios afectados en un primer contacto que se centró en ofrecerles apoyo y asesoramiento jurídico en el supuesto de que formulen una acusación conjunta.

www.elpais.es_ 27.07.07

LOS TRÁNSFUGAS DE GONDOMAR LEVANTAN LA PROHIBICIÓN DE CONSTRUIR

El gobierno de tráfugas de Gondomar ha descubierto la pólvora y ayer mismo, como prometió el sábado Alfonso de Lis, concejal de urbanismo, empezó a tender la mecha. "Gondomar dispone de un ordenamiento jurídico urbanístico", proclamó De Lis, para anunciar la "reviviscencia" de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1991, avalada por un informe jurídico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Este informe indica que, anulado un plan general, como sucedió con el de Gondomar en 2005, recobra su vigencia el planeamiento existente con anterioridad a la aprobación del plan anulado para evitar el vacío normativo.

En Gondomar no se conceden licencias urbanísticas desde 2005. El informe de la Xunta le permite afirmar ahora a De Lis que el Ayuntamiento podrá hacerlo en los 93 núcleos rurales y de población delimitados por los técnicos municipales en 1991. "En el núcleo urbano [las licencias] son más restrictivas", añadió, "ya que sólo podrán otorgarse dentro del suelo urbano consolidado" (con redes de servicios: saneamiento, electricidad, etcétera).

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente han precisado, por una parte, que el dictamen de la Secretaría Xeral se limita estrictamente a un análisis jurídico, sin que comporte "ningún permiso para nada ni decida lo que se puede o no contruir", ya que la concesión de licencias es competencia municipal. Por otra parte, las mismas fuentes contradicen a De Lis al sostener que "la normativa urbanística para los 93 núcleos delimitados será la más restrictiva".

En ellos, los técnicos municipales tendrán que combinar el contenido de las Normas Subsidiarias con los de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) y prevalecerá, entre ambas normativas, la que establezca las mayores restricciones.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió un informe favorable a la delimitación de esos 93 núcleos en 1995, cuando se tramitaba el plan general que el pleno municipal aprobó en 1997, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló en 2001 y, definitivamente, el Tribunal Supremo en 2005. Por una sola de las más de 700 licencias que el Ayuntamiento concedió de acuerdo a ese plan anulado fueron recientemente inhabilitados el alcalde, Carlos Silva (PP), y los concejales que formaban la Xunta de Gobierno Municipal.

Durante la elaboración de un nuevo plan general que reemplazara al anulado de 1997 fueron detenidos, en febrero de 2007, los concejales José Luis Mosquera, portavoz del gobierno local, y Alejandro Gómez, responsable de urbanismo, recientemente condenados ambos por cohecho: cobraron a promotores por establecer determinadas condiciones en los convenios urbanísticos que les afectaban. Fue entonces cuando se apodó el plan que se tramitaba como "el plan de la corrupción".

Ya en el actual mandato, que inició el BNG en el gobierno, la gestión del urbanismo local estaba sumida en un caos que paralizaba toda iniciativa. El gobierno nacionalista propuso entonces dos medidas para tratar de superarlo: tramitación de un nuevo plan general que espantara el fantasma del "de la corrupción" y, mientras, para superar la inacción urbanística, una delimitación de los núcleos en que hubiera más demanda de licencias para comenzar a concederlas: se delimitaron así cinco núcleos.

Pero ambas medidas precisaban la aprobación por el pleno municipal y los grupos popular y socialista no lo permitieron. El BNG hacía "una utilización abyecta del urbanismo", dijo el sábado De Lis. Ellos proponían rescatar "el plan de la corrupción", sin los convenios sospechosos de cohechos, y en 2008 votaron en contra de la delimitación de los núcleos atribuyendo favoritismos al BNG. Ahora los tráfugas tramitan un nuevo plan y, hasta su aprobación, revitalizan todos los núcleos delimitados

(www.elpais.com, 14/09/10)

MULTAS DE 742.500 EUROS PARA LOS TRES ACUSADOS POR LA TRAMA DE GONDOMAR

Los tres implicados en el caso de corrupción descubierto en Gondomar deberán pagar una multa de 742.500 euros en total por haber formado una trama para «enriquecerse» a cambio de favorecer y desarrollar desde el Ayuntamiento tres proyectos urbanísticos.

La sentencia dictada ayer por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo recalca la «gravedad de los hechos, por su trascendencia social, la entidad del daño a la función pública y por incumplir el deber de fidelidad al cargo» de los políticos implicados. Pero, pese a esa consideración, el juez concede una notable rebaja en las penas solicitadas por la Fiscalía, que inicialmente había reclamado en total una sanción de 4,7 millones de euros y la rebajó después a 1,25 por la autoinculpación y colaboración de parte de los imputados.

El fallo judicial considera probado que los entonces ediles de Urbanismo, Alejandro Gómez (del PP), y el de Cultura y portavoz del mismo partido, José Luis Mosquera, habían pedido dinero a tres promotoras a cambio de que el nuevo Plan Xeral de la villa posibilitase sus proyectos constructivos. En esa trama, el tribunal califica al arquitecto vigués Borja Ramilo, como «cómplice necesario» e intermediario en la petición de comisiones a las empresas, que ascendía a 540.000 euros.

Esa cantidad es la que el tribunal impone finalmente como sanción al edil de Urbanismo, que, como su compañero, abandonó el cargo al estallar el caso en febrero del 2007. Gómez Garrido, que nunca admitió su relación con la trama de extorsión, se enfrentaba a una petición de pena 1.080.000 euros, que ya había sido rebajada desde 1,92 millones en los que en un principio había calificado su delito el fiscal.

Por haber dado datos sobre dos cohechos más que no habían sido investigados, el edil de Cultura logró una reducción de pena del 93%, quedando esta establecida en 135.000 euros, como logró igualmente el arquitecto intermediario, al que se le aplicó una segunda rebaja hasta fijar su condena en 67.500 euros.

(www.lavozdegalicia.es, 09/09/10)

LOS CORRUPTOS DE GONDOMAR TIENEN QUE PAGAR 742.500 EUROS

El jurado popular ya les declaró el 4 de junio culpables de cohecho tras la vista pública que se celebró en junio pasado. Ahora, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo ha condenado a los ex concejales del PP en Gondomar José Luis Mosquera, de Cultura, y Alejandro Gómez, de Urbanismo, a penas de multa que suman 675.000 euros por tres delitos de cohecho, y de 67.500 euros al arquitecto Borja Ramilo, que actuó como intermediario.

El tribunal considera probado que los tres pidieron dinero a promotores a cambio de facilitar desarrollos urbanísticos en el plan general que se estaba tramitando.

Los hechos se desarrollaron durante el anterior mandato, con Carlos Silva (también del PP y expulsado en el actual de sus cargos públicos por falsedad documental) en la alcaldía, y fueron denunciados por un promotor, víctima de la extorsión, cuya actuación como gancho permitió la detención, el 14 de febrero de 2007, de los dos concejales, la pareja de uno de ellos (absuelta) y el arquitecto.

Mosquera y su novia recibieron en una céntrica cafetería de Vigo una primera entrega de 60.000 euros (del total de 180.000 que pensaban cobrar) sin sospechar que estaban siendo grabados con una cámara oculta que portaba el gancho y gestionaban agentes de la Guardia Civil.

Esa grabación y otras telefónicas que la precedieron fueron determinantes en el juicio, así como los testimonios de otros dos promotores, que finalmente admitieron haber sido solicitados para el cohecho por la misma cantidad de 180.000 euros. Mosquera declaró en el juicio que el dinero de esas extorsiones se destinaba a financiar la campaña electoral de los independientes de Move Gondomar (escindidos del grupo socialista) con los que el PP preveía pactar tras las elecciones municipales de 2007.

Otra parte de la extorsión, según Mosquera, se destinaba a apoyar la campaña del PP en la colonia gallega de Montevideo, aunque el ex concejal puntualizó que ni el partido ni el entonces alcalde, Carlos Silva, estaban al corriente de esos hechos.

El ex concejal de Cultura, que era el portavoz del Gobierno local, es condenado en la sentencia conocida ayer a pagar 135.000 euros y a una suspensión de cargo público por 15 meses (cinco por cada delito), mientras que la multa a su compañero de Gobierno, Alejandro Gómez, asciende a 540.000 euros (el montante de los tres cohechos) y a tres años de suspensión de cargo público. El arquitecto Ramilo, a 67.500 euros de multa y 15 meses de suspensión para ejercer en el ámbito de la Administración Pública.

El fiscal pedía, al inicio de la vista oral, 1,92 millones de euros de multa para cada ex concejal y seis años de inhabilitación, y 720.000 euros y 15 meses de inhabilitación para el arquitecto. Al admitir Mosquera y Ramilo su culpabilidad, el fiscal rebajó para ellos sus peticiones de pena, que también queda reflejada en la sentencia por la circunstancia atenuante de colaboración con la justicia.

El abogado Lorenzo Cuervo, defensor de Alejandro Gómez, confirmó ayer a Europa Press que recurrirá la sentencia, en la que "sorprende", dijo, que la mayor pena se haya impuesto "al único acusado que se defendió hasta el final, tras admitir los otros su culpa al ser capturados in fraganti".

(www.elpais.com, 09/09/10)

NO VAN A PRISIÓN PORQUE RECALIFICAR SUELO NO ES DELITO

La sentencia de la Audiencia Provincial condena a los dos ex concejales, José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, y al arquitecto Borja Ramilo por tres delitos de cohecho pasivo impropio, definido por el hecho de que "la autoridad o funcionario público solicita dádiva o presente o admite ofrecimiento para realizar un acto propio de su cargo" que aún no ha realizado.

La mera solicitud de esa dádiva o presente ya es delito, pero los supuestos cubiertos por el artículo 425 del Código Penal, que es el que se aplica en esta sentencia (y en la causa que pesa sobre el presidente valenciano, Francisco Camps, por los famosos trajes que no pagó), son los menos graves, aquellos, dice el fallo de Gondomar, "en los que el acto perseguido por el particular [la recalificación de unos terrenos] resulta conforme a Derecho". O, dicho de otro modo, una modalidad de cohecho en la que los concejales realizan actos propios de su cargo que no son constitutivos de delito ni injustos.

Un cohecho distinto sería cuando la dádiva o soborno se entrega o compromete para la comisión, por ejemplo, de un delito de homicidio. En el caso que nos ocupa la dádiva se dirige a recalificar urbanísticamente unos terrenos, "acto objetivamente conforme al ordenamiento jurídico" y que, por tanto, no es delito, sino que sólo podría llegar a ser constitutivo de una infracción administrativa. Por eso se le aplican solo penas de multa y no de prisión.

"Cuando el objeto del cohecho es un acto discrecional, obviamente el respeto del principio de imparcialidad queda cuestionado", afirma la sentencia, "pues el funcionario [en este caso los dos concejales] se sitúa en una posición parcial respecto a su futura decisión, con independencia de que ésta se vea o no afectada por la dádiva". En Gondomar, la dádiva determinó el acto de los dos ediles.

(www.elpais.com, 09/09/10)

LA JUSTICIA AVALA LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS QUE DESTAPARON LA TRAMA URBANÍSTICA DE GONDOMAR

La Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, considera válidas las escuchas policiales que sirven como prueba clave para acusar a dos concejales del PP de Gondomar, un arquitecto de Vigo y una amiga por supuestos cobros de comisiones ilegales en el 2007 a constructores a cambio de licencias urbanísticas.

Las cintas grabadas contenían una conversación entre un promotor que denunció el supuesto delito de cohecho y varios implicados que le pedían dinero a cambio de una licencia. La defensa falló hasta ahora en sus intentos de desacreditar la investigación. Insiste en que las grabaciones fueron efectuadas de forma ilegal y, por ello, reclama el archivo de la causa.

La resolución judicial rechaza el recurso de apelación presentado por los cuatro implicados, quienes reclamaban la anulación de las cintas, pero todavía no es firme porque estos han recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Si la sala no ve motivo para archivar la investigación, el juicio se celebrará dentro de unos meses en la Audiencia en Vigo mediante un jurado popular. Serán nueve ciudadanos de a pie, sin un especial conocimiento de las leyes, quienes decidirán si los cuatro encausados son inocentes o culpables de un delito de cohecho o corrupción.

La batalla legal por echar abajo las grabaciones se remonta al 2007, pero los tribunales vigueses siempre han confirmado la legalidad de las cintas. En marzo, los cuatro implicados presentaron sendos recursos en la Audiencia, a los que se adhirieron mutuamente, por lo que quedaron fusionados en uno solo. La respuesta de los magistrados vigueses es contundente pues sostiene que las cintas son válidas. Lo fundamenta en que el juez de instrucción que investigaba el caso dio validez con un auto a dichas actuaciones y también a la intervención telefónica que desarrolló la Guardia Civil.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 autorizó la grabación con micrófonos ocultos y una cámara de vídeo después de que un promotor denunciase una trama de cobro ilegal de comisiones. El supuesto cebo acudió a la cita a un despacho de un implicado para negociar la mordida y registró la conversación que ahora sirve como prueba. A la vez, la Policía Judicial siguió el rastro de las llamadas de los sospechosos.

En febrero del 2007, el promotor que era víctima de la supuesta trama de corrupción entregó 60.000 euros al concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y a su novia, Belén F., en la cafetería de un hotel de Vigo. Era un pago acordado por una licencia. La operación era seguida por la Policía Judicial, que entró en el local y arrestó de inmediato a la pareja.

Los otros dos implicados son el ex edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, que siempre se declaró inocente del delito de cohecho, y el arquitecto Borja R., como coautor necesario.

(www.lavozdegalicia.es, 28/04/09)

EL CASO GONDOMAR REVELA QUE SE PIDIÓ UN MILLÓN DE EUROS POR RECALIFICAR TRES FINCAS

El caso de la supuesta corrupción urbanística destapado la semana pasada en Gondomar afecta a más promociones inmobiliarias que la que dio origen a la denuncia presentada en la fiscalía viguesa el pasado mes de noviembre. Según pudo constatar ayer La Voz de Galicia, parte de los imputados habrían solicitado casi un millón de euros en total a cambio de recalificar tres parcelas del municipio para permitir construir en ellas a través de convenios urbanísticos alcanzados con el Ayuntamiento para tal fin.

Las declaraciones efectuadas por los cuatro imputados ante la jueza, y las pruebas documentales aportadas, principalmente la conocida grabación en vídeo hecha de manera secreta al concejal de Cultura, hacen concluir que parte de los protagonistas del caso habrían mantenido conversaciones con tres grupos de promotores distintos, a los que presuntamente les reclamaron en total el citado millón de euros. Además de los 45 millones de pesetas solicitados al autor de la denuncia (que finalmente fueron rebajados a 35 millones), a los implicados se les imputaría la petición de otros cien millones de pesetas por modificar la calificación de una segunda parcela de grandes dimensiones, y cerca de otros 35 millones de pesetas más por realizar la misma operación en una tercera finca.

Solamente el primer plazo del caso denunciado ante la fiscalía llegó a ser cobrado en una cafetería de Vigo la semana pasada por el edil José Luis Mosquera y su novia Belén Fernández. Las negociaciones y peticiones de fondos por las otras dos parcelas no habían dado fruto hasta el momento a pago alguno, por lo que hasta que se efectúe el escrito de calificaciones por parte del fiscal, tanto sobre Mosquera, como sobre Alejandro Gómez (edil de Urbanismo) y Borja Ramilo (arquitecto privado de Vigo) pesan dos delitos de cohecho en grado de tentativa, además del consumado que dio origen a las cuatro detenciones. Por ese pago deberá responder también la pareja sentimental del edil de Cultura gondomareño, que era quien llevaba consigo los 60.000 euros del pago de la mordida que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. La declaración de José Luis Mosquera ante la jueza ratifica en parte lo dicho en la grabación de vídeo secreta a la que fue sometido ante el empresario que hizo las veces de gancho. El edil independiente en las filas del PP aseguró a la magistrada que el dinero solicitado por realizar las tres operaciones iba a ser destinado a pagar gastos de campañas electorales de las próximas elecciones municipales.

Lo curioso del caso es que el PP local había diseñado una operación de renovación total de su lista en Gondomar, en la que sólo se mantendría en el cartel de los próximos comicios de mayo el actual alcalde, Carlos Silva. Mosquera aludió en su declaración que el PP y la formación independiente Move Gondomar serían los destinatarios del dinero. (La voz de Galicia, 22/02/07)

LOS DOS EDALES DEL PP DE GONDOMAR TENÍAN CONCERTADO COBRAR OTROS 150.000 EUROS

Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) y el arquitecto que fueron detenidos el pasado miércoles cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros habían concertado el pago de otros 150.000. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose. El PP decidió ayer marcar distancias y abrir expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas. Además, ha emplazado a ambos concejales a entregar sus actas.

Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) que fueron detenidos el pasado miércoles, junto a un arquitecto, cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 en dos plazos sucesivos. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de aumentar la edificabilidad de una parcela adquirida en el municipio por una empresa inmobiliaria. La dirección del PP gallego, que en un principio había descartado medidas contra los ediles, rectificó ayer y les exigió que renuncien a sus puestos en la corporación local.

El primer teniente de alcalde de Gondomar (municipio turístico de 13.000 habitantes lindante con Vigo) y responsable del área de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Mosquera Veleiro, junto al arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, fueron denunciados por el empleo de una empresa para la que gestionaba suelo y licencias urbanísticas.

La operación se gestó hace meses, cuando la inmobiliaria acudió al Ayuntamiento de Gondomar para proponer un convenio urbanístico que le permitiese aumentar la edificabilidad de una parcela. Según fuentes próximas a la investigación, la firma contactó, a través del arquitecto Ramilo Méndez, que actuaba como intermediario, con el concejal de Cultura, Mosquera Veleiro, quien exigió el pago de una cantidad próxima a 300.000 euros para introducir el convenio en el Plan General, que se encontraba en

fase de trámite. El edil Mosquera, según las fuentes consultadas, se comprometía a implicar en la operación al concejal de urbanismo.

Un empleado de la empresa pidió a sus superiores que le concedieran plenos poderes para negociar la operación y denunciar a los responsables municipales. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Vigo el pasado 27 de noviembre. Al día siguiente, las diligencias se trasladaron al juzgado, y la Guardia Civil puso en marcha la operación.

A través de intervenciones telefónicas y la constatación de otras pruebas documentales presentadas por el denunciante, la Guardia Civil siguió la pista a los detenidos el miércoles. Para no levantar sospechas, el primer pago de sobornos se concertó para el pasado miércoles por la tarde en la cafetería del hostel Galicia, en pleno centro de Vigo. La juez Eugenia Manzanares, a petición del fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, había firmado previamente las órdenes de detención comunicada para que la Guardia Civil los arrestase al término de la cita.

Agentes del instituto armado prepararon un dispositivo para controlar la entrega de dinero. La reunión estuvo a punto de frustrarse porque Mosquera Veleiro era reacio a acudir en persona. Finalmente, accedió y se presentó con su novia, Belén Fernández. Las fuentes consultadas indicaron que la mujer, aunque estaba al corriente de los pagos, no intervino directamente en la trama.

Después de constatar que los cerca de 60.000 euros que se habían acordado como pago "pasaban a las manos del concejal", ambos fueron detenidos. La Guardia Civil arrestó después en sus domicilios al concejal de urbanismo, Gómez Garrido, y al arquitecto que actuó de intermediario. Los tres, además, habían concertado otras dos entregas de dinero que se iban a realizar en los próximos días, una de 60.000 euros y otra de 90.000.

En un comunicado hecho público ayer, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recordó que "todos los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano". Los cuatro detenidos se encuentran en libertad con cargos, acusados de tres delitos de cohecho. El jueves, los principales dirigentes populares consideraban injustificada la detención de los concejales. Ayer, el PP marcó distancias y abrió expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas, y emplazó a los dos a entregar sus actas de concejal. La fiscalía, sobre cuyas intenciones sembró dudas el PP, replicó que le es "absolutamente indiferente" la ideología de los imputados. www.elpais.es 17.02.07

DOS EDALES DEL PP DETENIDOS EN PONTEVEDRA IBAN A RECIBIR UNA COMISIÓN DE 50.000 EUROS



Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratado por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.

La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitantes y cercana a Vigo.

El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó

un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.

En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.

Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.

La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.

Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".

Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.

El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".

Xosé Antón Araújo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araújo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.www.elpais.es 16.02.07

LA DIRECCIÓN DEL PP ARREMETE CONTRA LA FISCALÍA Y AFIRMA QUE NO TOMARÁ MEDIDAS

La dirección del Partido Popular de Galicia no adoptará de momento ninguna medida disciplinaria contra sus dos ediles detenidos en Gondomar acusados de cobrar comisiones ilegales. El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró que el partido no dispone de información suficiente para adoptar ninguna decisión sobre los dos ediles.

"Tenemos nuestro reglamento, y no me atrevo a decir ahora mismo que haya elementos suficientes para actuar", dijo Rueda, que anunció que en cuanto tenga más datos [el juez ha decretado el secreto de sumario] el partido tomará las decisiones oportunas. Desde el mismo momento en que se produjeron las detenciones, los dirigentes populares optaron por sembrar todas las dudas posibles sobre la actuación

de la fiscalía contra delitos urbanísticos. Lo hizo ayer en Santiago de Compostela el propio Rueda, que llegó a señalar: "Hay demasiadas actuaciones de los fiscales contra cargos públicos del PP".

Y poco después, en Silleda, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, añadió: "Me gustaría tener la misma confianza en los fiscales, pero lo cierto es que hay algunos que no están actuando con el rigor que merece el Estado de derecho". Pese a que fuentes de la investigación confirmaron que los dos ediles fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando trataban de efectuar cobros ilegales a un promotor inmobiliario, Feijóo pidió a los fiscales que actúen "con rigor y no por órdenes de sus superiores si no son estrictamente judiciales". Y les recomendó que no consideren como agravante de los delitos la militancia en el PP. Después de las críticas efectuadas, Feijóo aseguró: "Si alguien mete la mano, tiene que tener sus responsabilidades y que caiga sobre ellos el peso de la ley".

El último en censurar la actuación de la fiscalía en el caso de Gondomar fue el presidente del partido en Pontevedra y de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Después de insistir en su "respeto a la justicia", Louzán manifestó sus sospechas de que "puede haber en este caso intenciones de otro tipo más allá de buscar la verdad", y agregó que las formas empleadas por la Guardia Civil "no fueron las más adecuadas".

A pesar de pedir cautela hasta conocer los detalles de la operación, el político pontevedrés denunció que se le ha querido dar "un contexto mediático" a la operación, y añadió: "Una detención camino de las diez de la noche no es la forma más correcta de proceder contra dos personas públicas".www.elpais.es 16.02.07

URBANISMO PELIGROSO

Tres agresiones en menos de dos años. Aunque nadie puede identificar agresión con delitos urbanísticos, lo cierto es que los tres ediles del Bloque Nacionalista Galego que han sido agredidos en la comarca pontevedresa del Val Miñor habían denunciado, de un modo u otro, alguna irregularidad. Manuel Pereiro ni siquiera era ya edil cuando fue agredido. Pero como miembro de la Comunidad de Montes le extrañó encontrar en la parroquia de Vincios un relleno en una zona protegida. Pereiro tuvo tiempo de llamar al Seprona y de encontrarse de frente con el dueño de la empresa que estaba intentando edificar allí, quien, asegura, le dio una paliza. "El hombre que me agredió el 9 de febrero de 2006 ha ido a declarar hace sólo tres días, y, además, asegura que me inventé la paliza". Domingos Solla, concejal independiente por el BNG de Gondomar, a quien hace poco más de un año le quemaron dos coches y parte de su casa, no quiere mezclar el incidente con ningún tema urbanístico. Pide que se deje trabajar a la policía e insiste en que hasta ahora sólo ha tenido problemas y pocos apoyos. Al nacionalista de Nigrán David Giráldez le quemaron su coche a las once de la noche del 19 de noviembre de 2005. "Es la policía la que debe investigar, yo sólo sé que los seis meses anteriores al incendio estuve muy volcado en un par de temas de infracciones sobre el territorio. Uno de ellos fue una tala ilegal en Monteferro, en suelo rústico protegido, que, como yo sospechaba, se recalificó cuatro meses después en el Plan General".www.elpais.es 16.02.07

DETENIDOS DOS EDILES EN GONDOMAR POR PRESUNTO COBRO DE COMISIONES

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos concejales del gobierno de Gondomar, ambos del PP, y a la compañera sentimental de uno de ellos por el presunto cobro de comisiones ilegales por favores urbanísticos. El arresto se produjo por sorpresa en el momento en que efectuaban la transacción ilegal, según fuentes próximas a la investigación. Los ediles son el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro. La Guardia Civil se disponía anoche a detener a un arquitecto contratado por el Ayuntamiento.

La operación se desarrolló por orden de la Fiscalía contra delitos urbanísticos y medioambientales de Vigo, que imputa a los ediles un delito de cohecho. La Guardia Civil seguía desde hacía días los movimientos de los detenidos, y esperó hasta ayer para intervenir mientras efectuaban presuntamente el intercambio económico. "Los cogieron *in fraganti*, con las manos en la masa", declaró una fuente conocedora de la operación. La mujer arrestada es la compañera sentimental del edil de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro.

Los tres detenidos prestarán declaración en el juzgado número 6 de Vigo, después de pasar por el cuartel del instituto armado en Gondomar. Al cierre de esta edición, la Guardia Civil aún no había logrado

localizar al cuarto detenido, un arquitecto que presta habitualmente trabajos para el Ayuntamiento, informaron las citadas fuentes.

La operación cogió por sorpresa a todo el mundo en Gondomar, incluido el alcalde, Carlos Silva, del Partido Popular. Silva aseguró desconocer los detalles de la operación y los motivos por los que fueron arrestados los dos miembros de su equipo de gobierno. A primera hora de la tarde de ayer, el regidor municipal se había reunido con el concejal de Urbanismo, ajenos al seguimiento policial del que ambos Garrido estaban siendo objeto.

Hace sólo diez días que fue aprobado inicialmente el plan de urbanismo de la localidad entre fuertes críticas de los grupos de la oposición, socialistas y nacionalistas, que denunciaban, entre otras operaciones, la recalificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.

El urbanismo de Gondomar tiene abundantes frentes abiertos. Uno de ellos, un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmaba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en 1997. Y, como consecuencia de éste, la causa abierta por la concesión de 300 licencias con arreglo a ese plan con posterioridad a la anulación del planeamiento. La Dirección General de Urbanismo de la Xunta le dio un plazo de un mes al Ayuntamiento para que anulara las licencias, a lo que se opuso el alcalde.

Para amplios sectores de la localidad, el urbanismo está también en el trasfondo de las agresiones físicas sufridas por concejales de la oposición o la quema del coche del portavoz nacionalista en el ayuntamiento, David Giráldez, y el del representante de la formación nacionalista en la entidad local menor de Morgadáns, Domingos Solla. El ex concejal Manuel Pereiro también denunció haber sufrido una paliza. www.elpais.es 15.02.07

UN CONCEJAL DE OURENSE ES JUEZ Y PARTE EN UN 'PELOTAZO'

El concejal del PP de Ourense, José Luis Sousa, ha ocultado al Ayuntamiento su vinculación empresarial con la finca Santamarina de la que fue redactor del proyecto urbanístico, a través de su empresa de ingeniería, y en cuyo expediente intenta participar ahora desde la oposición.

La finca Santamarina es para PSOE y BNG uno de los mayores pelotazos urbanísticos del PP ourensano. Su venta por la Diputación a la empresa Flager, por un cuarto del precio de mercado según los técnicos, fue denunciada judicialmente por socialistas y nacionalistas.

Aunque el Tribunal Superior de Galicia avaló la operación, el nuevo gobierno local intenta modificarla restringiendo la edificabilidad (1.500 viviendas, un hotel y un centro comercial) para obtener mayores cesiones para vivienda de protección y equipamientos sociales.

La modificación del proyecto ha sido cuestionada por Sousa "quien de nuevo vuelve a confundir los intereses públicos con los privados", denuncian los socialistas de Ourense.

www.elpais.es 20.04.08

EL PP RATIFICA A UN ALCALDE GALLEGO CON TRES PROCESOS JUDICIALES POR DELITOS URBANÍSTICOS



El susodicho en su hábitat natural

La justicia se ha vuelto a cruzar en el camino del promotor inmobiliario y alcalde de Tui (Pontevedra), **Antonio Fernández Rocha**, del PP, para el que el fiscal pide ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Un juzgado de Pontevedra inició ayer la vista oral contra el regidor, sobre el que ya pesa **una condena de siete años de inhabilitación** pendiente de recurso, peticiones fiscales por otros 20 años y una larga lista de denuncias relacionadas con el urbanismo. El juicio coincide con la confirmación de Rocha por su partido como candidato a la alcaldía.

El presidente provincial del PP, Rafael Louzán, respaldó ayer al alcalde y lo ratificó como candidato. "Está haciendo una gran labor; es una persona muy contundente y de muchos principios que volverá a optar a la alcaldía", garantizó. Mientras, Fernández Rocha, cinco concejales de su equipo de Gobierno y dos técnicos municipales se sentaban en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, en la primera jornada de un juicio por presunta prevaricación urbanística, acusados de conceder licencia para construir un edificio en una zona protegida del casco viejo de Tui sin la preceptiva autorización de la Xunta. No terminan ahí los líos judiciales de Fernández Rocha. El pasado 24 de febrero, el mismo juzgado le condenaba a siete años de inhabilitación para ocupar un cargo público y a una multa de 6.000 euros como autor de tres delitos de prevaricación. La fiscalía pide 20 años de inhabilitación y tres de cárcel por un tercer caso de presunta prevaricación administrativa y medioambiental, pendiente de vista oral. El único alivio judicial para el alcalde tudesense en los últimos años llegó el pasado mes de abril, cuando el Tribunal Supremo anulaba la condena de la Audiencia Provincial de Pontevedra que lo apartaba durante ocho años de los cargos públicos, también por un delito urbanístico.

Negocios prósperos

En contraste con sus problemas con la justicia, los negocios han sido prósperos para Fernández Rocha desde que apeó de la alcaldía al que ahora es su partido mediante una moción de censura, en 1998. El entonces modesto contratista rural que eludía pequeños embargos a la Seguridad Social representa hoy la viva imagen del triunfador en el jugoso sector del ladrillo, con una relación directa o a través de su hijo con siete empresas inmobiliarias y constructoras que, según su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Capón Rey, han adquirido terrenos por valor de más de seis millones de euros.

Algunas de las compañías del alcalde y su hijo aparecen en los sumarios que se acumulan en los juzgados, como es el caso de Promociones Alcaró, beneficiada por una recalificación para más de 300 pisos en el denominado *caso Patazumba*. Desde que Fernández Rocha es alcalde, las normas urbanísticas de Tui han sido suspendidas por tres sucesivos consejeros autonómicos de Política Territorial, dos de ellos de su mismo partido: Xosé Cuiña y el ahora presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo. La actual consejera, María José Caride, del PSOE, suspendió el planeamiento y paralizó la concesión de licencias, al observar "graves irregularidades e incumplimientos" en el urbanismo tudense.

La trayectoria política de Fernández Rocha compite en sobresaltos con la judicial. Lugarteniente de Capón Rey desde 1991, cuatro años después se enfrentó a su líder a cuenta del Plan General de Urbanismo e intentó reemplazarlo como cabeza de lista del PP. Fracasó, pero Capón lo llevó en el segundo puesto de su lista y, en 1998, Rocha lo desbancó al liderar la rebelión de un grupo de escindidos. Como independiente, Rocha compitió con su antecesor en 1999, pero se quedó a un concejal de la mayoría absoluta. Antes de que se celebrara el primer pleno, un tráfuga del PP, después recompensado con una dedicación exclusiva, desequilibró la balanza a su favor. Pero fue a Capón a quien expulsó el PP de sus filas, con el argumento de su apoyo a una intrascendente moción de los nacionalistas. Rocha reingresó en el PP, con el que repetirá como candidato en mayo.

www.elpais.es 19.10.06

L FISCAL ACUSA AL 'POPULAR' CÉSAR AJA DE MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS



El susodicho con otro susodicho que responde al nombre de Acebes

El ex alcalde de Viveiro (Lugo) y actualmente senador del Partido Popular por Lugo, César Aja Mariño, será llamado a declarar en los juzgados de la mencionada localidad tras la denuncia presentada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Jesús Izaguirre, que sigue una investigación sobre los años de gestión popular en este Ayuntamiento. Junto a Aja Mariño, serán también llamados a declarar como imputados nueve ex concejales del PP que le acompañaron en el gobierno municipal en diversos mandatos. El ministerio fiscal entiende que Aja Mariño, Xusto Vázquez, Joaquín Gayoso, Guillermo Leal, Antonio Soya, Marta Pérez, Jesús Estévez, Rosario Canoura, Pablo García y Celestino García percibieron, entre los años 2000 y 2003, diversas cantidades de dinero en concepto de asistencia al Ayuntamiento o de sustitución del alcalde que no se atienen a lo establecido por ley.

En opinión del fiscal, dichos cobros podrían constituir un delito de malversación de fondos públicos. La cantidad global percibida indebidamente, según el fiscal, por los nueve concejales y el ex alcalde asciende a un total de 146.000 euros (más de veinticuatro millones de las antiguas pesetas), de los cuales algo más de 49.000 (más de ocho millones de pesetas) los habría cobrado el entonces regidor César Aja. La Fiscalía insta al Juzgado de Viveiro, ante el que presentó la denuncia, a que llame a declarar a César Aja y a todos los concejales en calidad de imputados, así como al interventor del

Ayuntamiento en el momento en que se produjeron los hechos, Fernando Martínez de Arriba, en calidad de testigo

CINCO MIL EUROS EN MARISCO

La Fiscalía de Lugo presentó también contra el ex regidor de Viveiro César Aja Mariño una querrela criminal por el pago de diversas facturas de marisco con la tarjeta Visa que tenía el Ayuntamiento como institución.

Según el fiscal, el ex alcalde viveirense habría pagado un total de 5.370 euros, casi 893.500 de las antiguas pesetas, con cargo a esta tarjeta por varios pedidos de marisco.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo entiende que estos pedidos serían para consumo particular, si bien en la denuncia se hace constar que en el reverso de las facturas se hiciera constar que se trataba de un gasto de atención protocolaria del consistorio de Viveiro

Por todo ello, entiende el ministerio público que podría existir un delito continuado de malversación de caudales públicos y de falsedad documental

(*) Publicado en El Correo Gallego. 17.01.05

14 DE SEPTIEMBRE 2004

EL SECRETARIO GENERAL DEL PP EN SANTIAGO GESTIONA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL CONSTRUIDAS POR LA XUNTA

Según ha sabido la Cadena Ser, el secretario general del PP en Santiago, David Pillado, gestiona a través de una de sus empresas más de 500 viviendas de protección oficial que la Xunta está construyendo en la capital gallega. El responsable de la adjudicación, el director general del suelo y la vivienda del Gobierno gallego forma parte de la candidatura de Pillado al congreso local del partido.

Son más de 500 viviendas que la Xunta está construyendo en Santiago por un valor superior a los 6.000 millones de pesetas. Prosunp S.L., la empresa del secretario general del PP en la capital, David Pillado, se ha hecho con la gestión de una de cada seis pisos protegidos que el Instituto Gallego de la Vivienda adjudica a través del ayuntamiento compostelano.

Por cada una de las viviendas Prosunp cobra entre un 5% y un 6% del valor del piso. Se da la circunstancia que el director de este organismo adjudicatario, el Instituto de la Vivienda, es también militante del Partido Popular y comparte candidatura con Pillado en el congreso local que debe elegir la dirección del partido.

El hijo de David Pillado figura como presidente de una de las cooperativas, Ponte Pereda, cuya gestión fue adjudicada a la empresa de su padre. Carlos Pillado Viña es dentista de profesión, concejal del PP en Santiago, es propietario de un Jaguar, y a pesar de esto, ha logrado ser adjudicatario de una vivienda de protección oficial, al igual que su hermano, Roberto Pillado Viña.

En el "Libro blanco del cooperativismo", la Xunta advierte que la protección oficial debe ser una alternativa al mercado inmobiliario convencional, reservado a personas y familias con ingresos modestos.

La Cadena Ser se ha puesto en contacto con David Pillado que niega cualquier irregularidad en la gestora inmobiliaria que promueve.